

DICCIONARIO
DE LA
ADMINISTRACION ESPAÑOLA,
PENINSULAR Y ULTRAMARINA:
COMPILACION ILUSTRADA

DE LA NOVISIMA LEGISLACION DE ESPAÑA EN TODOS LOS RAMOS DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA.

OBRA INDISPENSABLE

EN TODAS LAS OFICINAS DEL ESTADO Y DE LOS PARTICULARES:
PRINCIPALMENTE EN LAS CENTRALES DE LA ADMINISTRACION; EN LAS DE
LOS GOBIERNOS DE PROVINCIA; EN LAS SECRETARIAS DE LAS AUDIENCIAS Y JUZGADOS;
EN LAS DE LOS AYUNTAMIENTOS Y ALCALDIAS; Y EN LOS ESTUDIOS Y BIBLIOTECAS DE LOS SEÑORES
MAGISTRADOS, JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO
FISCAL, ABOGADOS, NOTARIOS Y DE CUANTOS DESEMPEÑAN AUTORIDAD Ó
FUNCIONES PÚBLICAS EN EL ÓRDEN JUDICIAL Y ADMINISTRATIVO.

POR

D. MARCELO MARTINEZ ALCUBILLA,
ABOGADO DE LOS ILUSTRES COLEGIOS DE MADRID, BURGOS Y VALLADOLID, É INDIVIDUO DE LA
SOCIEDAD ECONOMICA MATRITENSE.

SEGUNDA EDICION.

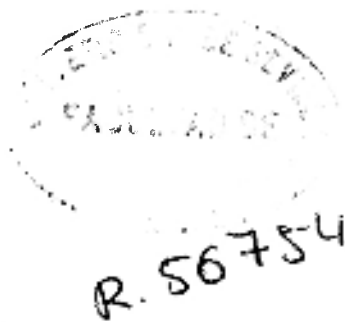
Comprende la definicion de todas las voces de la legislacion administrativa; un Repertorio razonado de las disposiciones del derecho civil; el texto de las leyes, Reales decretos, reglamentos é instrucciones vigentes sobre cada materia, hasta 1868; los puntos resueltos por la jurisprudencia del Consejo de Estado y Tribunal Supremo de Justicia; doctrinas, dictámenes, informes y otros datos sobre los mas importantes ramos de la Administracion etc., etc., y un esmerado indice cronológico general de toda la obra.

DEDICADA Á LA VILLA DE SAN JUAN DEL MONTE.

~~~~~  
**TOMO III.**  
~~~~~

MADRID, 1868.

Administracion, calle del Fomento, núm. 4 triplicado, cuarto 3.º



DICCIONARIO

DE LA

ADMINISTRACION ESPAÑOLA.

CAP

CAPELLAN. Todo clérigo ó eclesiástico, principalmente los que obtienen capellanía, y los que están encargados de la celebracion de la misa en alguna capilla ú oratorio.

CAPELLAN DE CORO. Cualquiera de los sacerdotes que hay en las iglesias catedrales y colegiadas, para asistir en el coro á los oficios y horas canónicas.

CAPELLAN DE EJÉRCITO. El eclesiástico que tiene á su cargo la cura de almas, en los cuerpos, plazas y hospitales militares. Los capellanes de ejército son verdaderos párrocos de los militares, y como tales tienen obligaciones y derechos análogos á los párrocos territoriales.

CAPELLAN DE HONOR. El que dice misa al Rey y demás personas reales en su oratorio privado y asiste á los Oficios divinos, á las horas canónicas y demás funciones de la capilla Real.

CAPELLAN DE LA ARMADA Ó DE MARINA. El eclesiástico que ejerce la cura de almas á bordo de los navios del Esta-

do. Deben, por consiguiente, llevar libros de nacidos, casados y muertos para hacer los asientos correspondientes en la misma forma que los párrocos.

CAPELLANÍA. Fundacion que tiene la carga de celebrar ó hacer celebrar anualmente cierto número de misas en determinada iglesia ó altar, conformándose á la voluntad del fundador. La capellanía es laical ó colativa.

Capellania laical es la instituida sin intervencion de la autoridad eclesiástica; no sirve de título para ordenarse y está únicamente obligado el poseedor á mandar celebrar, ó á celebrar si es clérigo, cierto número de misas, conforme á la fundacion. Las capellanias laicales ó *mercenarias* no están sujetas á la autoridad eclesiástica, que respecto de ellas no tiene otro derecho que investigar si están cumplidas las cargas; y este es uno de los caracteres que mas distinguen las referidas capellanias de las colativas. Se conocen con el nombre de *capellanias lai-*

cales, porque podían ser poseídas por legos, solteros ó casados, varones ó hembras, etc., segun la fundacion; y porque los bienes que las constituian conservaban su cualidad de temporales ó profanos. Se llaman tambien *memorias de misas*, porque el fundador las instituia con el fin de conservar su memoria por medio de las misas que han de celebrarse. Se llaman *legados pios* por acostumbrarse á fundar como manda ó legado. Y por último, se denominan *patronatos de legos*, porque sus poseedores se reputan como patronos que pueden nombrar sacerdote que celebre las misas, ó mandarlas celebrar sin necesidad de nombramiento. Las capellanías laicales están comprendidas en la ley de 11 de octubre de 1820 que declaró la desamortización civil.—V. VINCULACIONES.

Capellania colativa es la instituida con intervencion de la autoridad eclesiástica, y sirve de título de ordenacion. Llámase eclesiástica porque es á manera de beneficio eclesiástico, y es propio del obispo el conferirlas. Cuando en la fundacion se llama para su disfrute á parientes del fundador ó de las personas que señaló como tronco, la capellanía se llama *colativa familiar*; cuando no se llama á la posesion á individuos de familia determinada, sino que se faculta á los patronos para nombrar, entonces se llama *colativa simple ó gentilicia*. Aplicado tambien el principio de desamortización á las capellanías colativas, por la ley de 19 de agosto de 1841, vamos á insertar literalmente esta ley y las que con posterioridad se han dictado sobre tan importante asunto, inclusa la ley de 24 de junio de 1867, que contiene el convenio ó arreglo entre el Gobierno y la Santa Sede, debiendo anticipar que en el artículo 5.º de la ley de 15 de junio de 1866, se definen las capellanías colativas comprendidas en la de 19 de agosto de 1841.

Ley 6.ª, tit. 12, lib. 1.º Nov. Rec.

Por esta ley que es una resolucion de 20 de febrero de 1796, se declaró para evitar dudas, que las capellanías y cualesquiera otras fundaciones perpétuas se comprenden en el

R. D. de 28 de abril ó R. C. de 14 de mayo de 1789 (ley 12, tit. 17, lib. 10, Nov. Rec.) en que se prohibió fundar mayorazgos, cuya renta no excediese de 3,000 ducados, y aun excediendo sin preceder Real licencia, y declaró «nulas y de ningun valor ni efecto las vinculaciones y prohibiciones de enajenar que en adelante se hicieren sin la Real licencia, y con derecho á los parientes inmediatos del fundador ó testador (1) para reclamarlas y suceder libremente.....»

R. D. de 1.º febrero de 1815.

Suspende la provision de beneficios.

«.....He venido en mandar que por ahora y hasta nueva orden mia se suspenda la provision de todos los beneficios simples, préstamos enteros y medios pontificales, y toda otra pieza eclesiástica, de cualquiera denominacion que sea, que por costumbre, por tolerancia ó por otro título no se hubiese recibido por sus anteriores poseedores, y se hallen vacantes ó vacaren á mi Real presentacion, ó á la de los ordinarios, ú otros presenteros eclesiásticos; y que asimismo no se concedan mas pensiones sobre los obispados de la Peninsula é Islas adyacentes, porque mi voluntad es que con el producto de estas piezas eclesiásticas y el de la parte que reste cargar sobre las mitras, se provea á los importantes objetos que dejo manifestado. Tendríslo entendido etc.—En Palacio á 1.º de febrero de 1815.» (CL. t. 2.º, p. 85.)

R. D. de 1.º febrero de 1815.

Extracto.—Dispone que la Real Cámara de Castilla tome todas las medidas que dicte su celo y sabiduria para realizar los importantes objetos sobre supresion y reunion de capellanías y beneficios incógruos de que se hace mencion en el decreto que antecede. (CL. tomo 2.º, p. 87.)

R. O. de 12 diciembre de 1817.

Vacantes.—Que se exija media anualidad.

(Hac.) «Se ha enterado el Rey nuestro señor de lo expuesto por VV. SS. en 13 del pasado, sobre haberse procedido hasta ahora por ese establecimiento en concepto equivocado en la percepcion de las vacantes respec-

(1) Entiéndase limitado el derecho de los parientes para reclamar los bienes de las fundaciones nulas, en su caso y lugar, segun la legislacion vigente en punto á sucesiones, pues habiendo institucion de heredero universal, el derecho será de los herederos como que siempre quedan en la masa hereditaria los legados y mandas que hayan caducado. (Sent. del T. S. de 27 setiembre de 1845.)

tivas á capellanías y patronatos, y conformándose S. M. con el parecer de VV. SS. se ha servido determinar que solo se les exija la media anualidad con que únicamente están gravados por R. C. de 10 de febrero de 1805, devolviéndose á sus poseedores por derecho de sucesion, deducidos gastos, lo que hayan satisfecho mas allá de la citada media anualidad.—Lo comunico á VV. SS. de Real orden etc.—Palacio 12 de diciembre de 1817.» (CL. Apénd. p. 438.)

O. de la Reg. de 2 setiembre de 1823.

Deroga el decreto de las Cortes de 9 de noviembre de 1820.

(GRAC. Y JUST.) «A solicitud del vicario capitular del arzobispado sede vacante de la iglesia Metropolitana de Sevilla, ha tenido á bien la regencia del Reino mandar quede sin efecto el decreto expedido por las Cortes con fecha de 9 noviembre de 1820, reducido á la incorporacion al crédito público de todos los bienes raices, derechos y acciones de las capellanías vacantes y que vacaren que no fuesen de llamamiento familiar; é igualmente los de ermitas, santuarios, cofradías, hermandades, fundaciones y demás establecimientos piadosos.—Y lo traslado á V. de orden de S. A. etc.—Madrid 2 de setiembre de 1823.» (CL. t. 7, p. 105.)

R. O. de 15 junio de 1824.

Se dejen expeditas las facultades al juez colector.

(HAC.) «.....S. M..... se ha servido mandar que por ese Ministerio se comunique al referido Gobernador la orden mas terminante para que deje expeditas la autoridad y facultades que competen al juez colector de anualidades y vacantes, no solo respecto del beneficio de que se trata para el cobro de su anualidad por el arriendo ventajoso del colector, que es el que debe tener efecto hasta cubrir aquel derecho, sino tambien acerca de todas las vacantes de beneficios y capellanías, á excepcion de los curados, en que solo deben entender los ecónomos, con arreglo á la Real orden de 10 de abril de 1819.—De Real orden etc.—Madrid 15 de junio de 1824.» (CL. t. 8, p. 401.)

R. O. de 24 octubre de 1836.

(HAC.) Extracto.—Manda á los curas párrocos den noticia de las vacantes de capellanías que ocurran en sus iglesias. (CL. t. 21, p. 492.)

R. O. de 13 febrero de 1838.

(HAC. Y GOB.) «.....S. M..... se ha servido disponer:

1.º Que la Diputacion provincial de Madrid y las demás que están en su caso, dejen desde luego desembarazada la administracion de las memorias, obras pías, patronatos y capellanías, devolviendo á los curas párrocos y demás empleados de la amortizacion, los libros y papeles pertenecientes á estos establecimientos.....» (CL. t. 24, p. 69.)

R. O. de 26 marzo de 1839.

Mandando poner á disposicion de las Juntas diocesanas los rendimientos de mitras secuestradas, patronatos y capellanías que no sean de sangre. (CL. t. 25, p. 200.)

Ley de 19 agosto de 1841.

Adjudicacion de los bienes de capellanías colativas.

(GRAC. Y JUST.) «Doña Isabel II etc.

Artículo 1.º Los bienes de las capellanías colativas á cuyo goce estén llamadas ciertas y determinadas familias, se adjudicarán como de libre disposicion á los individuos de ellas en quienes concorra la circunstancia de preferente parentesco segun los llamamientos; pero sin diferencia de sexo, edad, condicion ni estado.

Art. 2.º En consecuencia de la anterior disposicion serán preferidos los parientes que con arreglo á la fundacion sean de mejor línea, y entre los de esta, aquel ó aquellos que fuesen de grado preferente. Cuando se hiciesen los llamamientos en general á los parientes, sin distinguir de líneas ni grados, serán preferidos los mas próximos á los fundadores ó á los que estos señalasen como tronco. (1)

Art. 3.º En los casos en que las fundaciones dispongan que alternen las líneas, se dividirán los bienes entre estas con entera igualdad, y la porcion que á cada una corresponda se adjudicará á los individuos existentes de ella en los términos que dispone el artículo antecedente.

Art. 4.º Cuando solo el patronato activo fuese familiar se adjudicarán tambien los bienes en concepto de libres á los parientes llamados á ejercerlo.

Art. 5.º Si en alguna fundacion se dispusiere de los bienes para el caso en que dejare de existir la capellanía, se cumplirá lo determinado en aquella.

Art. 6.º Las disposiciones que preceden tendrán toda su aplicacion á las capellanías

(1) En las capellanías no se sucede por derecho de representacion, y son de mejor derecho en una misma línea los parientes mas próximos. (T. S. Sent. de 19 abril de 1850.)

vacantes en la actualidad, y á las demás según fueren vacando.

Art. 7.º Los poseedores actuales continuarán gozando de las capellanías en el mismo concepto en que las obtuvieron, y con entera sujecion á las reglas de las fundaciones respectivas. Pero podrán en su caso usar del derecho que les corresponda en virtud de los anteriores artículos.

Art. 8.º Los pleitos que sobre capellanías colativas se hallen pendientes podrán continuar, y estas proveerse como tales, quedando los que lleguen á obtenerlas en el mismo caso que los actuales poseedores.

Art. 9.º Los parientes que conforme á los cuatro primeros artículos de esta ley ó las personas que con arreglo al 5.º tuviesen derecho á los bienes de capellanías que no se hallen vacantes, ó sobre las que penda litigio, podrán desde luego pedir que se les declare la propiedad de dichos bienes, sin perjuicio del usufructo que á los poseedores corresponde.

Art. 10. A los tribunales civiles ordinarios de los partidos en que radique la mayor parte de los bienes, corresponde hacer la aplicacion de los derechos que se declaran en esta ley.

Art. 11. La adjudicacion de los bienes se entenderá con la obligacion de cumplir, pero sin mancomunidad, las cargas civiles y eclesiásticas á que estaban afectos.—Por tanto, etc.—En Madrid á 19 de agosto de 1841.» (CL. t. 27, p. 549.)

O. de la Reg. de 14 marzo de 1843.

(HAC.) Extracto.—Declara comprendidos entre otros en la excepcion del párrafo 1.º del art. 6.º de la ley de 2 de setiembre de 1841 sobre venta de bienes del clero, los de capellanías ó fundacion de patronato familiar activo ó pasivo. (CL. t. 30, p. 128.)—

V. DESAMORTIZACION.

R. O. de 17 enero de 1847.

Cómo deben resolverse las reclamaciones de bienes de capellanías colativas.

(HAC.) «.....S. M. se ha servido resolver lo que sigue :

1.º Siempre que ocurra una reclamacion de bienes procedentes de capellanías colativas de patronato activo ó pasivo familiar, deberá instruirse inmediatamente un expediente gubernativo para declararlos ó no comprendidos en las excepciones consignadas en el art. 6.º de la ley de 2 de setiembre de 1841, ajustándose en su formacion al curso y trá-

mites prevenidos en la citada R. O. de 9 de febrero de 1842 (1).

2.º Las resoluciones definitivas que recaigan en estos expedientes no se ejecutoriarán hasta que no obtengan la aprobacion de la superioridad.

3.º En el caso de que esta sea favorable á los particulares reclamantes, deberán entregárseles todos los productos líquidos desde que ocurrió la vacante, salvas las deducciones que procedan de gastos necesarios para la conservacion de las fincas, administracion, recaudacion y demás indispensable. Lo mismo se hará cuando la declaracion sea favorable al Estado.

4.º Las providencias de los Juzgados de primera instancia no tienen fuerza ejecutiva, ni para declarar la excepcion de las fincas que reclamen, ni para decidir la inmediata entrega de sus productos; pero serán útiles para que, cuando una y otra deban verificarse, se haga á la persona legítima.—De R. O., etc.—Madrid 17 de enero de 1847.» (CL. t. 40, p. 96.)

R. O. de 29 julio de 1847.

(HAC.) Extracto.—Se dispuso se comunicara á las Audiencias territoriales y jueces de primera instancia «que en los expedientes sobre adjudicacion de capellanías de sangre á los parientes de los fundadores, se oiga á los promotores fiscales como representantes del Estado.» (CL. t. 41, p. 415.)

R. O. de 20 setiembre de 1847.

Sobre frutos de capellanías vacantes, etc.

(GRAC. Y JUST.) «Alcanzadas por algunas personas legas ante los Juzgados civiles de las Islas Canarias la propiedad de varias capellanías familiares de sangre con arreglo á la ley de 19 agosto de 1841, solicitaron se les entregasen los rendimientos del tiempo de la vacante, sobre lo cual se elevó consulta, é informada por el Ministerio de Hacienda y Junta gubernativa del S. T. de J., se resolvió: «Enterada S. M. del resultado de ambos informes, y considerando que los bienes afectos á las capellanías familiares de sangre tenían el carácter de espiritualizados hasta la ley de 19 agosto de 1841; que los individuos que han obtenido á su favor la declaracion de propiedad de los mismos bienes, en consecuencia de la citada ley, los han adquirido como secularizados por un título civil, el cual no puede darles derecho á los frutos producidos cuando los bienes se reputaban espiritualizados; y por último, que tales rendimien-

(1) Véase en DESAMORTIZACION.

tos tienen una aplicacion determinada segun las disposiciones vigentes, se ha dignado mandar que en observancia de la circular de 10 de enero de 1837, los RR. obispos y gobernadores de las diócesis entreguen en el Erario público los frutos de las capellanías colativas correspondientes al tiempo de sus últimas vacantes hasta el 19 de agosto de 1841 deducidas las cargas civiles y eclesiásticas, y que las personas á cuyo favor se hubiere declarado la propiedad de los mencionados bienes solo puedan exigir con igual deduccion de cargas las rentas posteriores á la promulgacion de la ley de 19 de agosto.—De Real orden, etc.—Madrid 20 de setiembre de 1847.» (CL. t. 42, p. 126.)

R. O. de 12 febrero de 1850.

Preveniciones á los fiscales sobre bienes de capellanías y patronatos.

(HAC.) «Por varias Reales órdenes está mandado que se dé audiencia á los fiscales y á los promotores en los pleitos que se sigan para adjudicar como libres los bienes que pertenecieron á capellanías y patronatos. Esta disposicion, como V. S. conoce, tiene por objeto evitar que, á pretexto de derechos no declarados en las fundaciones y de parentescos simulados, se prive al Fisco de bienes que en otro caso debieran corresponderle. Yo espero que V. S. y sus subordinados, á quienes se servirá hacer al intento las preveniciones oportunas, cuidarán como hasta ahora de examinar con el mas escrupuloso esmero los referidos pleitos, para conocer si los que aspiran á la adjudicacion de los bienes, tienen derecho á ellos por la fundacion, si están dentro del grado que para adquirirlos requieren las leyes, y si hay de dichos parentescos la prueba necesaria, sin descansar en las concesiones que acerca de esto se hagan recíprocamente los litigantes, porque en ellas puede haber amaños, que no deben pasar desapercibidos á los ojos del ministerio público. Cuando por consecuencia de las gestiones de V. S. se declare que los litigantes no tienen derecho á la adquisicion de los bienes, dará V. S. cuenta á la Direccion de lo Contencioso para resolver lo conveniente á los intereses del Fisco. La ley de 19 de agosto de 1841 dispone que la adjudicacion de los bienes de las capellanías se haga con la obligacion en los agraciados de cumplir las cargas de la fundacion. Hasta ahora el cumplimiento de esta obligacion no ha tenido mas garantía que la moralidad de las personas: preciso es asegurarlo de una manera conveniente, y para ello es

necesario que V. S. luego que recaiga ejecutoria á favor de cualquiera de los parientes, se sirva remitir nota de los bienes de la fundacion y de sus cargas eclesiásticas, como misas y aniversarios, á la Comision investigadora creada por R. D. de 12 de octubre del pasado, dando cuenta á la Direccion de lo Contencioso de haberlo ejecutado. Cuando en los pleitos á que se refieren las preveniciones anteriores, y en cualesquiera otros de igual ó parecida naturaleza, y en las causas de contrabando, defraudacion ó malversacion de empleados, en que se reclamen derechos ó intereses de grande importancia para la Hacienda, el fallo que cause ejecutoria no sea conforme á las pretensiones de V. S., se servirá remitir á la Direccion copias certificadas de su censura, del apuntamiento del relator y de la sentencia ejecutoria. Espero que V. S., al cumplir estas disposiciones, lo hará con el interés y celo que le tengo recomendado en mi comunicacion anterior.—Dios etc.—Madrid 12 de febrero de 1850.» (CL. t. 49, p. 263.)

R. O. de 1.º mayo de 1850.

Intervencion de los fiscales en pleitos de capellanías de sangre.

(HAC.) «..... S. M. se ha servido mandar que los referidos pleitos de capellanías de sangre, como en las de patronatos, se tenga por parte á los promotores fiscales y á los fiscales en las Audiencias; que se entiendan con ellos todas las diligencias y actuaciones, pero que los promotores no deduzcan pretension alguna hasta despues de publicadas las pruebas, en cuyo caso, si encontrasen que los litigantes no tienen derecho á los bienes de la fundacion, bien por los términos de esta, bien porque el parentesco alegado no esté comprobado, hagan la pretension que convenga á los intereses de la Hacienda, y de lo contrario devuelvan los autos sin oposicion, pero precediendo consulta con el fiscal de la Audiencia para que, en el caso de que el asunto termine en primera instancia, no quede solo decidido con la opinion del promotor. Que á los fiscales en las Audiencias se les comuniquen dichos pleitos despues que las partes hayan alegado, y antes de sentencia, y entonces, arreglándose á lo que queda dicho con respecto á los promotores, ejecuten lo mismo que á estos se previene con respecto á la oposicion que debe hacerse ó devolucion de los autos sin despacho.—De R. O. etc.—Madrid 1.º de mayo de 1850. (CL. t. 50, p. 4.)

R. O. de 7 octubre de 1850.

Cuándo deben reclamarse los bienes de capellanías de sangre ó familiares.

(HAC.) Enterada la Reina de «sobre si deberian reclamarse del clero los bienes pertenecientes á las capellanías de sangre y de libre presentacion que se le entregaron en 5 de diciembre de 1843, á consecuencia de la ley de 3 de abril del mismo año, y conformándose con el parecer de la Direccion de lo Contencioso de Hacienda pública, se ha servido resolver que no se haga por ahora novedad alguna en los bienes de las capellanías de que se trata, y que solo deben reclamarse del clero los pertenecientes á las de sangre ó familiares, cuando los interesados á quienes correspondan las hayan pedido y se hayan declarado exceptuados de la aplicacion al Estado.—De Real orden etc.—Madrid 7 de octubre de 1850.» (*CL. t. 51, p. 173.*)

R. O. de 20 mayo de 1851.

(HAC.) Extracto.—Los bienes de capellanías vacantes no exceptuados de la venta por la ley de 2 setiembre de 1841, corresponden al clero secular y deben entregársele. (*CL. t. 53, p. 169.*)—V. DESAMORTIZACION.

Concordato de 17 octubre de 1851.

Los artículos de este que pueden ser tomados en cuenta para resolver las dudas sobre capellanías colativas son los siguientes: el 41 en que se dice que la Iglesia tendrá el derecho de adquirir por cualquier título legítimo; el 43, que todo lo demás perteneciente á personas ó cosas eclesiásticas sobre lo que no se provee en los artículos anteriores será dirigido y administrado segun la disciplina de la Iglesia canónicamente vigente; el 44 por el que se declara quedar salvas é ilesas las Reales prerogativas de la Corona de España en conformidad á otros Convenios anteriores; y el 45 en que se dice que se tendrán por revocadas, en cuanto á él se oponen, las leyes, órdenes y decretos publicados hasta ahora de cualquier modo y forma en los dominios de España, debiendo regir el Concordato como tal ley.

R. D. de 30 abril de 1852.

Deroga la ley de 19 de agosto de 1841.

(GRAC. Y JUST.) «En vista de lo expuesto por varios diocesanos y fiscales de las Reales Audiencias acerca de la aplicacion del Concordato en lo relativo á capellanías colativas y fundaciones piadosas de patronato activo ó pasivo de sangre deseando quitar todo motivo de duda..... vengo en declarar lo siguiente:

Artículo 1.º Desde el dia 17 de octubre último, en que se publicó el Concordato como ley del Estado, se considerará derogada la ley de 19 de agosto 1841 relativa á capellanías colativas de patronato activo ó pasivo de sangre. De la misma manera y desde igual fecha se entenderán derogadas las disposiciones relativas á las fundaciones piadosas familiares.

Art. 2.º A su consecuencia quedan subsistentes las capellanías colativas de patronato activo ó pasivo de sangre, estén ó no actualmente vacantes, cuyos bienes no hayan sido adjudicados judicialmente á las familias respectivas, ó para cuya adjudicacion no pendiere juicio en ejecucion de la ley de 19 de agosto de 1841, y otras disposiciones, antes de dicho dia de 17 de octubre. Lo mismo se entenderá respecto á las fundaciones piadosas arriba mencionadas.

Art. 3.º Por lo tanto, se adjudicarán por los tribunales eclesiásticos y servirán de título de ordenacion las capellanías subsistentes segun los artículos anteriores siempre que sean cóngruas.

Art. 4.º Continuarán hasta su decision definitiva con arreglo á derecho los expedientes judiciales que pendian en los Juzgados de primera instancia y Reales Audiencias el citado dia 17 de octubre, cesando los juicios principiados con posterioridad.

Art. 5.º Si los sujetos á quienes se hayan adjudicado judicialmente los bienes de las capellanías hubieren sido ordenados, ó lo fueren en lo sucesivo á título de ellas, se entenderá que los interesados han renunciado al beneficio de la ley de 19 de agosto de 1841, observándose por lo tanto lo dispuesto en los arts. 1.º y 3.º de la presente declaracion. Lo mismo se entenderá respecto de las capellanías que hayan servido ó sirvieren de título de ordenacion á algun individuo de las familias entre quienes se hayan distribuido los bienes, siempre que presten á esto su consentimiento todos los interesados.

Art. 6.º El Ministro de Gracia y Justicia dará las instrucciones y disposiciones convenientes para la ejecucion del presente decreto.—Dado en Aranjuez á 30 de abril de 1852.» (*CL. t. 55, p. 656.*)

R. O. de 28 marzo de 1853.

Cumplimiento de exhortos.

(GRAC. Y JUST.) «....«Ha tenido á bien S. M. mandar, de conformidad con el parecer emitido por la Seccion de Gracia y Justicia del Consejo Real, que solo deberán ser cumplimentados los exhortos expedidos sobre la materia de que se trata, cuando pro-

cedan de expedientes judiciales incoados antes del 17 de octubre de 1851 en que se publicó el Concordato, quedando sin efecto todos los demás que no se hallen comprendidos en el caso citado.—De Real orden etc.—Madrid 28 de marzo de 1853.» (CL. t. 58, pág. 280.)

R. O. de 1.º junio de 1853.

Su adjudicacion cuando faltan opositores.

(HAC.) En virtud de consulta «acerca de si en los pleitos pendientes sobre adjudicacion, como libres, de los bienes de las capellanías colativas que deben continuar hasta su resolucíon definitiva, el ministerio fiscal debèria pretender que á falta de opositores de mejor derecho, se diese al Estado la posesion de los mencionados bienes en concepto de mostrencos, ó por el contrario, deberia solicitar quedasen en pié esas fundaciones... S. M. se ha dignado resolver..... que en los citados litigios pida V. S. en nombre del Estado, queden subsistentes las capellanías para que se adjudiquen á quien corresponda por los tribunales eclesiásticos, debiendo servir esta resolucíon de regla general para todos los demás casos de igual naturaleza que puedan presentarse.—De Real orden etc.—Madrid 1.º de junio de 1853.» (CL. t. 59, p. 143.)

R. O. de 1.º junio de 1853.

Sobre mejor derecho á bienes de una capellania.

(HAC.) Enterada S. M. de una consulta elevada sobre el indicado objeto «se ha dignado resolver, de acuerdo con la Direccion general de lo Contencioso, que continúe el ministerio fiscal deduciendo las oportunas pretensiones para que los citados bienes no se adjudiquen sino á los que prueben legalmente su derecho á los mismos; y que si ninguno de ellos se hallara en su caso, se limite el promotor de Salas á solicitar quede subsistente la capellania y no la adjudicacion de los citados bienes al Estado en calidad de mostrencos, pues seria oponerse al espíritu del Concordato y al R. D. de 30 de abril de 1852, siendo asimismo la voluntad de S. M. que esta resolucíon sirva de regla general para todos los demás casos de igual naturaleza que puedan ocurrir.—De Real orden etc.—Madrid 1.º de junio de 1853.» (CL. t. 59, p. 143.)

R. D. de 6 febrero de 1855.

Declara vigente la ley de 19 de agosto de 1841.

(GRAC. Y JUST.) «Teniendo en consideracion etc., vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Se declara en su fuerza y

vigor la ley de 19 de agosto de 1841 sobre capellanías de sangre, y las demás disposiciones relativas á fundaciones piadosas familiares que fueron derogadas por mi R. D. de 30 de abril de 1852.

Art. 2.º Se declaran legítimos los derechos adquiridos en virtud del citado Real decreto por sentencia definitiva, pronunciada ó que se pronuncie en los juicios incoados ante tribunal competente.—Dado en Palacio á 6 de febrero de 1855.» (CL. t. 64, página 177.)

Ley de 14 junio de 1856.

Aclara la de capellanías colativas de 1841.

«Doña Isabel II, etc.

Artículo 1.º Los individuos de preferente parentesco que con arreglo á la ley de 19 de agosto de 1841 tenian derecho á los bienes de capellanías colativas al tiempo de publicarse la misma ley, y hayan fallecido sin haber pedido la adjudicacion, le han trasmitido á sus herederos, quienes por tanto ocupan el mismo grado y lugar que sus causantes para la participacion de los bienes.

Art. 2.º Tambien tienen derecho á pedir la adjudicacion de los bienes de capellanías colativas los llamados por la fundacion y los herederos de los que teniendo aquel derecho fallecieron despues de la publicacion del decreto de 30 de abril de 1852 y antes del de 6 de febrero de 1855, en la misma forma que se previene en el artículo anterior; pero no tendrá lugar la entrega inmediata de los bienes, cuando la capellania ha servido de título para ascender á las órdenes mayores, en cuyo caso los capellanes serán considerados como usufructuarios hasta que obtengan otro beneficio eclesiástico, y si no lo tuvieren, durante su vida.

Art. 3.º Los interesados que no reclamasen la adjudicacion dentro de 20 años, contados desde la publicacion de la ley de 19 de agosto de 1841, perderán todo derecho, y se trasmitirá á los siguientes en grado que deberán ejercitarlo dentro del término de los cuatro años siguientes despues de los que los bienes de las capellanías se declaran comprendidos en la ley de 1.º de mayo de 1855 (1).

Art. 4.º Todas las adjudicaciones de bienes de capellanías colativas se entienden hechas sin perjuicio de tercero de mejor dere-

(1) Obsérvese que este artículo solo trata del caso en que los bienes no hayan sido aun reclamados por ningun pariente; al paso que el artículo 4.º habla del caso en que se haya ya verificado su reclamacion y adjudicacion. (T. S. sentencia de 21 de enero de 1865.)

cho á los mismos (1) que solamente podrá ejercitarle dentro de cuatro años á contar desde el día de la ejecucion (2).

Art. 5.º Se declaran como capellanías colativas de sangre comprendidas en ley de 19 de agosto de 1841 restablecida en 6 de febrero de 1855.

1.º Las fundaciones que poseen actualmente los eclesiásticos corporativa ó individualmente en concepto de prebendas ó beneficios, y las que como tales se hallen vacantes, siempre que los fundadores llamen á su disfrute á familias ó personas determinadas, ó que sean de patronato activo familiar, y no hubiesen sido comprendidas en las leyes de 2 de setiembre de 1841 y 1.º de mayo de 1855, ó de las leyes de desamortizacion civil.

2.º Las capellanías que han sido provistas á presentacion de los patronos despues de la publicacion del decreto de 6 de febrero de 1855.

3.º Las capellanías colativas de sangre que hayan provisto los Ordinarios en virtud de derecho de devolucion por providencia posterior al mismo decreto.

Art. 6.º Los individuos de las familias de los fundadores que estén llamados á la adjudicacion de los bienes de las capellanías de que se trata en el artículo anterior, pueden pedirla desde luego ante los tribunales ordinarios, únicos competentes para conocer en esta materia, sea cualquiera el motivo que en contrario se alegue, ó la incidencia que sobrevenga, con arreglo á lo prescrito en el artículo 10 de la ley de 19 de agosto de 1841.

Art. 7.º Cuando en las fundaciones que poseen las corporaciones ó cabildos eclesiásticos no hubiere llamamientos á familias ó personas determinadas, patronato activo familiar, los bienes de aquellas fundaciones se entienden comprendidos en la ley de 1.º de mayo de 1855, así como tambien lo están los adquiridos por las iglesias fuera de las escritu-

ras de fundacion, ó con posterioridad á estas y con fondos que no estuviesen consignados especialmente en la misma para este objeto.

Art. 8.º Se exceptúan del artículo anterior los beneficios y prebendas de los cabildos eclesiásticos que constituyen la cóngrua sustentacion de sus individuos durante la vida de estos, ó hasta que obtengan prebenda ú otro beneficio eclesiástico.—Madrid junio 14 de 1856.—Publíquese como ley.—Isabel.—Por tanto etc.—Madrid 15 de junio de 1856.» (CL. t. 68, p. 446.)

R. D. de 28 noviembre de 1856.

Suspende los efectos del de 5 de febrero de 1855.

«Artículo 1.º Se suspenden los efectos del R. D. de 5 de febrero de 1855; por el que se estableció la ley de 19 de agosto de 1841, sobre capellanías colativas de patronato familiar activo ó pasivo, y demás fundaciones piadosas de igual clase (1).

Art. 2.º Quedan en suspenso los juicios ó reclamaciones que pendan ante los tribunales civiles y eclesiásticos así respecto de la division ó secularizacion de los bienes comprendidos en dichas fundaciones y capellanías, como sobre el derecho á suceder en ellas, y hasta nueva providencia no se admitiran en lo sucesivo demandas de esta clase.—Dado en Palacio á 28 de noviembre de 1856.» (CL. t. 68, p. 296).—V. DESAMORTIZACION. VINCULACIONES, ETC.

Ley de 7 junio de 1867.

Autorizando al Gobierno para el arreglo de capellanías colativas y el de otras fundaciones piadosas.

(GRAC. Y JUST.) «Doña Isabel II, por la gracia de Dios, etc.

Artículo único. Se autoriza al Gobierno para formalizar, con intervencion de la Santa Sede, el arreglo definitivo de las capellanías colativas de sangre y otras fundaciones piadosas de la propia índole, conciliando, hasta donde sea posible, el bien de la Iglesia, el del Estado y el de las familias interesadas.

Por tanto, mandamos, etc.—Palacio 7 de junio de 1867.—Yo la Reina.—El Ministro de Gracia y Justicia, Lorenzo Arrazola.»

Ley de 24 junio de 1867.

Convenio con la Santa Sede que se publica como ley del Estado, sobre capellanías colativas de patronato familiar, memorias, obras pías y otras fundaciones análogas.

(GRAC. Y JUST.) Doña Isabel II, por la

(1) Este decreto no se refiere á las capellanías laicales (T. S. sentencia de 28 de diciembre de 1864.)

(1) Debe entenderse lo mismo de los que tienen igual derecho. (Sentencia de 13 de abril de 1863.)

(2) En sentencia de 13 de noviembre de 1865 consigna el Tribunal Supremo la doctrina de que la ejecucion en el lenguaje preciso y técnico ni puede ni debe confundirse con la adjudicacion, y que hay que atender á la ejecucion segun el tenor de este artículo; pero en otra posterior de 7 de abril de 1866 se establece que segun jurisprudencia admitida por el Tribunal Supremo, el término que señala este artículo debe empezar á correr desde la fecha de la adjudicacion.

En las adjudicaciones anteriores á la ley se cuenta el plazo desde la ley. (Sentencia de 30 de mayo de 1863.)

gracia de Dios y la Constitucion de la Monarquía, Reina de las Españas: á todos los que las presentes vieren, sabed:

Que para llevar á debido efecto cuanto en el Concordato de 1851, y Convenio de 1859 se dispone sobre capellanías colativas de sangre y otras fundaciones piadosas de la propia índole: y para poner un término, con utilidad de la Iglesia, del Estado y de las propias familias interesadas, á las dudas y perjudicial controversia, en esta parte sobrevenida, con ocasion de las leyes y disposiciones dictadas sobre el particular, por el M. R. Nuncio de Su Santidad en esta corte, D. Lorenzo Barili, Arzobispo de Tiana, y mi Ministro de Gracia y Justicia, se formalizó un proyecto de arreglo definitivo, que habia de someterse á la aprobacion pontificia, como lo fué por mi embajador, cerca de la Santa Sede, D. Luis José Sartorius, conde de San Luis: y cuyo arreglo y Convenio, aprobado por el correspondiente cambio de notas, y explicadas por el M. R. Nuncio las prevenciones de la aprobacion pontificia, es como sigue:

CONVENIO.

«Siendo ya de suma necesidad y conveniencia el arreglo definitivo de las capellanías colativas de sangre y otras fundaciones piadosas de la misma índole, al tenor de las solemnes disposiciones concordadas, leyes y Reales determinaciones, que deban tenerse presentes, los abajo firmados, Nuncio de Su Santidad en esta corte, y Ministro de Gracia y Justicia, hemos convenido en el siguiente proyecto de arreglo, que ha de someterse á la aprobacion pontificia:

Artículo 1.º Las familias, á quienes se hayan adjudicado ó se adjudiquen por Tribunal competente los bienes, derechos y acciones de capellanías colativas de patronato familiar, activo ó pasivo de *sangre*, reclamados antes del dia 17 de octubre de 1851, fecha de la publicacion del Concordato, como ley del Estado, redimirán, dentro del termino, y en el modo y forma que se disponga en la instruccion para la ejecucion del presente Convenio, al tenor del art. 23 del mismo, las cargas de carácter puramente eclesiástico, de cualquier clase, específicamente impuestas en la fundacion, y á que en todo caso, y como carga Real, son responsables los dichos bienes.

Art. 2.º Las familias asimismo, á quienes se hayan adjudicado, ó adjudicaren por estar pendiente su adjudicacion ante los Tribunales, los mencionados bienes, derechos y acciones, reclamados con posterioridad al Real decreto de 30 de abril de 1852, redimirán

igualmente las cargas de la propia índole y naturaleza, considerándose para este solo efecto, como carga eclesiástica, la cóngrua de ordenacion, establecida por las sinodales de la respectiva diócesis al tiempo de la fundacion.

Art. 3.º Se consideran completamente extinguidas las capellanías, de cuyos bienes tratan los dos artículos precedentes, y que hayan sido ó fueren adjudicados por los Tribunales á las familias, cuyo patronato, desapareciendo á peticion de las mismas la colectividad de bienes de que procedia, dejó de existir.

Art. 4.º Se declaran subsistentes, si bien con sujecion á las disposiciones del presente Convenio, las capellanías, cuyos bienes no hubiesen sido reclamados á la publicacion del R. D. de 28 de noviembre de 1856, y sobre las cuales, por consiguiente, no pende juicio ante los tribunales.

Art. 5.º Están obligados, de la manera prevenida en los arts. 1.º y 2.º, á redimir las cargas eclesiásticas de la propia índole y naturaleza:

Primero. Las familias, á quienes se hubieren adjudicado, como procedentes de verdadera capellanía de sangre, los bienes de una pieza, que constituia verdadero beneficio, aunque de patronato familiar, activo ó pasivo de *sangre*, cualquiera que fuere su título ó denominacion.

Segundo. Los poseedores de bienes eclesiásticos, vendidos por el Estado con sus cargas eclesiásticas.

Tercero. Las familias, á quienes se hayan adjudicado, ó adjudicaren, bajo cualquier concepto, bienes pertenecientes á obras pías, legados píos y patronatos laicales ó reales de legos, y otras fundaciones de la misma índole de patronato familiar, tambien activo ó pasivo, gravados con las mencionadas cargas.

Art. 6.º Sobre la antedicha obligacion de redimir las cargas corrientes, estarán tambien obligadas á satisfacer el importe de las misas, sufragios y demás obligaciones, vencidas y no cumplidas por culpa de los poseedores, las familias á quienes se hubieren adjudicado, ó adjudicaren por haber litigio pendiente, bienes de los designados en los artículos precedentes, incluso los pertenecientes á las capellanías que se declaran subsistentes en el art. 4.º

Art. 7.º Los poseedores de bienes de dominio particular exclusivo, gravados con cargas eclesiásticas, podrán tambien redimir las, si tal fuese su voluntad, bajo las propias reglas, que, respecto de los bienes comprendi-

dos en los artículos anteriores, se establecen; pero será en ellos obligatorio, en el modo y forma que para los otros casos se determina en el art. 6.º y demás referentes, satisfacer las obligaciones eclesiásticas vencidas y no cumplidas, toda vez que lo sea por culpa de los poseedores.

Art. 8.º La redencion de cargas, la conmutacion de rentas y el pago del importe de las obligaciones vencidas y no cumplidas todavía en los diversos casos que se expresan en los artículos precedentes, se verificará, entregando al respectivo diocesano títulos de la Deuda consolidada del 3 por 100, por todo su valor nominal, que se convertirán en inscripciones intrasferibles de la misma Deuda.

Art. 9.º El importe de las cargas corrientes se apreciará por los diocesanos en la forma legal correspondiente, y conforme á lo que se dispondrá en la instruccion, siempre que no esté determinado en la sentencia ejecutoria de adjudicacion, dictada anteriormente, que deberá cumplirse.

Respecto de las obligaciones vencidas y no cumplidas, los mismos diocesanos, despues de oír benignamente á los interesados determinarán equitativa, alzada y prudencialmente la cantidad, que por dicho concepto deba satisfacerse.

Art. 10. En los juicios pendientes en los tribunales civiles, que deberán continuar segun el estado que tenían al tiempo de la suspension decretada en 28 de noviembre de 1856, sobre adjudicacion de bienes de capellanías, de obras pías y otras fundaciones de su especie, gravadas con cargas eclesiásticas, se hará constar, con certificado del diocesano, antes de dictar sentencia, el importe de las cargas corrientes y la cantidad que para el cumplimiento de obligaciones, hasta aquí vencidas y no satisfechas prefijere el mismo diocesano.

En el caso de que la familia no entregue al diocesano los títulos correspondientes en el término, que por el juez se prefije, dispondrá este, antes de pronunciar auto definitivo, la enajenacion, con audiencia de los poseedores, de la parte indispensable de bienes, en pública licitacion, á pagar en Deuda consolidada del 3 por 100, por todo su valor nominal, adjudicando únicamente á la familia, como de libre disposicion, los demás bienes de la capellanía, obra pía ó fundacion piadosa, aplicando, en su caso, la disposicion del artículo 14.

Art. 11. Cuando dentro del término que se prefije en la instruccion, las familias, á las cuales hayan sido ya adjudicados judicialmente los bienes, no realizaren, por cualquier

causa, la redencion de las cargas, ó el pago del importe de las vencidas y no cumplidas por su culpa, el Gobierno adoptará las medidas conducentes para que ambos extremos tengan cumplido efecto sin demora, aplicándose al intento la parte necesaria de los bienes responsables, ya se encuentren estos en poder de la familia del fundador, ya estén, por cualquier título, en manos extrañas; sin perjuicio, en su caso, del derecho que pueda tener el poseedor actual de la finca contra su causadante.

Art. 12. La cógrua de ordenacion en las capellanías, á que se refiere el art. 4.º, será al menos, de 2,000 rs. Se declaran incógruas las que no produzcan esta renta anual líquida, la cual se fijará por el producto de los bienes en el último quinquenio, deduciendo la porcion que el diocesano, á petición de las familias y consideradas con equidad todas las circunstancias, creyese reservar con benignidad apostólica, á las mismas, cuya porcion en ningun caso podrá exceder de la cuarta parte de dicho producto.

Art. 13. Hecha esta deducción, las familias interesadas entregarán al diocesano los títulos necesarios de la Deuda consolidada del 3 por 100 por lo demás de dicha renta, cuyos títulos se convertirán en inscripciones intrasferibles de la propia deuda del Estado. Verificada la entrega de aquellos, los bienes de la capellanía corresponderán, en calidad de libres, á la respectiva familia.

Art. 14. Del mismo modo, cuando las familias hayan entregado al diocesano los títulos del 3 por 100, que se convertirán despues en títulos intrasferibles de la Deuda, corresponderán á aquellas en calidad de libres los bienes de las capellanías adjudicados, ó que se adjudicaren judicialmente, en virtud del presente Convenio, y todos los demás gravados con cargas eclesiásticas que se rediman, en conformidad á las disposiciones contenidas en los artículos 9.º y 10, entregando al diocesano los títulos necesarios al efecto.

Art. 15. Cuando los títulos del 3 por 100, entregados por la familia, produzcan al menos, una renta anual líquida de 2,000 rs., se constituirá sobre esta cógrua nueva capellanía en la iglesia en que anteriormente estuvo fundada la capellanía, de que procedan los títulos; y en su defecto, en otra iglesia del territorio, procurando el diocesano en cuanto sea posible, que se cumpla la voluntad del fundador; pudiendo, esto no obstante, por fines del mejor servicio de la iglesia, modificar ó conmutar, con autoridad apostólica, que al efecto se le confiere por el presente

Convenio, tanto respecto de este punto, como de todo lo demás susceptible de mejora, lo establecido en la fundacion.

Art. 16. Se formará en cada diócesis un *acervo pío* comun con los títulos de la Deuda consolidada del 3 por 100, procedentes de la redencion de cargas, del importe de las no cumplidas, ó de bienes de capellanías colativas incógruas, uniendo al intento dos ó mas, segun sea necesario para constituir una cógrua al menos de 2,000 rs., haciendo los llamamientos para el disfrute de ella entre las familias, que por las respectivas fundaciones tuviesen derecho, y estableciendo para el ejercicio del patronato activo los correspondientes turnos, habida consideracion en todo caso á la cantidad procedente de cada capellanía, y en la inteligencia de que ha de darse al diocesano el turno correspondiente en representacion de corporaciones ó de cargas eclesiásticas no existentes.

Y atendiendo á que por el presente Convenio se dá nueva forma á las capellanías colativas familiares, todavía existentes, y á las que de nuevo se establecen en subrogacion de las que, por efecto de las pasadas vicisitudes, han dejado de existir, el patronato meramente activo se ejercerá, eligiendo el patrono entre los propuestos en terna por el ordinario diocesano; y respecto del patronato pasivo, usará este de sus facultades, si el presentado no reuniese las circunstancias necesarias para cumplir lo dispuesto en el presente Convenio.

Art. 17. Estas capellanías se proveerán precisamente dentro del término canónico; serán incompatibles entre sí, y no podrán proveerse en menores de 14 años.

Los provistos en ellas deberán seguir la carrera eclesiástica en Seminario, ya sea en calidad de externos, ya de internos, ó como ordenase el diocesano, segun la abundancia ó escasez de medios al intento; y tambien estarán obligados precisamente á ascender á orden sacro, teniendo la edad canónica, so pena, en otro caso de declararse vacante la capellanía.

Los diocesanos determinarán las obligaciones, estudios y demás requisitos y cualidades, no expresadas en el presente Convenio, ó en la instruccion que ha de darse para su ejecucion, usando, en su caso, los mismos de las facultades apostólicas consignadas en los arts. 15 y 21.

Art. 18. Tambien se formará en cada diócesis otro *acervo pío* comun, con los títulos de la Deuda consolidada, procedentes de las obligaciones consignadas en el art. 5.º; en la parte á ellas aplicable del 6.º, y en su caso

tambien con lo correspondiente á virtud de lo dispuesto en el art. 7.º

Además harán parte de este *acervo pío* comun las inscripciones, que el Gobierno debe entregar:

Primero: en compensacion de los bienes de las capellanías colativas de patronato particular eclesiástico, ó de derecho comun eclesiástico, y de que el Estado se incautó. Unas y otras capellanías quedan extinguidas, y de libre disposicion del Estado dichos bienes.

Segundo: en igual compensacion de los bienes de capellanías patronadas, de que, estando á la sazón vigentes, se incautó el Estado, bajo cualquier título y concepto que sea.

Y tercero: por títulos de diversas clases de Deuda del Estado, procedentes de cargas eclesiásticas, de obras pías y otras fundaciones de su clase, establecidas en corporaciones eclesiásticas, hoy no existentes, cuyo patronato pertenece actualmente á los prelados en representacion de dichas corporaciones.

Los diocesanos fundarán con dichas inscripciones el número de capellanías, título de ordenacion, que sean posibles, no bajando de 2.000 rs. la cógrua de cada una.

Estas capellanías serán provistas exclusivamente por los mismos diocesanos, observándose, en cuanto sean aplicables, las reglas establecidas en el art. 16, respecto de las nuevas capellanías familiares; pero dándose en todo caso preferencia á los seminaristas adelantados en su carrera, y mas sobresalientes en cualidades y costumbres que carezcan de otro título de ordenacion para ascender al sacerdocio.

Art. 19. Los capellanes de las nuevas capellanías, tanto familiares, como de libre nombramiento de los diocesanos, estarán adscritos á una iglesia parroquial, y tendrán en cuanto sea compatible con las obligaciones especiales de la capellanía, la de auxiliar al párroco, sin perjuicio de que el diocesano pueda destinarlos al servicio que estime conducente, con tal que se puedan cumplir en la iglesia, en que esté situada la capellanía, dichas obligaciones especiales.

Hasta tanto que el capellan pueda levantar por sí mismo las cargas de la capellanía, dispondrá el diocesano lo conveniente para que tengan cumplido efecto, designando el cumplimiento, con la parte de estipendio que ha de satisfacerse de la renta de la capellanía.

Art. 20. Los pleitos sobre adjudicacion de capellanías, que pendian en los Tribunales eclesiásticos, y fueron suspendidos en 1856, continuarán su curso, segun el estado que entonces tenian.

Art. 21. En todo aquello que, para la eje-

cucion de este Convenio, no bastare el derecho propio de los diocesanos, obrarán estos en concepto de delegados de la Santa Sede, á cuyo fin la misma les autoriza competentemente, y tambien para que, como sus encargados especiales, procedan á la ejecucion de este Convenio en los territorios exentos, enclavados en su diócesis.

Además de esto, Su Santidad, en todo lo que pueda ser necesario, extiende la benigna sanacion, contenida en el art. 42 del Concordato de 1854, á los bienes, á que se refiere el presente Convenio.

Art. 22. No son objeto de este Convenio, por su índole especial, las comunidades de beneficiados de las diócesis de la corona de Aragon, en las cuales no se hará novedad hasta el arreglo parroquial; ó bien, que entre ambas potestades se celebre acerca de ellas otro Convenio especial: pero los bienes, censos y demás derechos reales, que constituyen su dotacion, se conmutarán en la forma que prescribe el Convenio de 25 de agosto de 1859, adicional al Concordato de 1854, en inscripciones intrasferibles de la Deuda consolidada de 3 por 100, que se entregarán á la respectiva comunidad á que pertenecen los bienes.

No lo son tampoco las piezas de patronato familiar, activo ó pasivo de sangre, fundadas en otras diócesis, que, por la índole y naturaleza de sus cargos y obligaciones constituyen verdaderos beneficios parroquiales, hayan ó no formado sus obtentores cabildo benéfical; y aunque se hubieren denominado capellanías, y los beneficiados se hayan titulado capellanes; porque, en conformidad á la Real cédula de ruego y encargo de 3 de enero de 1854, ha de disponerse lo conveniente sobre el particular en el plan parroquial de la respectiva diócesis.

Art. 23. Con intervencion del Nuncio Apostólico cerca de Su Majestad Católica, al cual la Santa Sede delega, al efecto, todas las facultades necesarias, se dictarán la correspondiente instruccion y disposiciones reglamentarias convenientes para el desenvolvimiento y ejecucion del presente Convenio, se resolverán las dudas, y se removerán los obstáculos, que impidieren que el mismo tenga, en todas sus partes, el mas exacto y puntual cumplimiento.—Madrid 16 de junio de 1867.—Lorenzo Arrazola.—Lorenzo, Arzobispo de Tiana.»

Por tanto, en vista de las razones expuestas por mi Ministro de Gracia y Justicia, de acuerdo con el parecer del Consejo de Ministros, en uso de la autoriza-

cion dada á mi Gobierno por las leyes de 4 de noviembre de 1859 y 7 del presente mes, con asentimiento tambien del M. R. Nuncio de Su Santidad,

Vengo en proveer el presente decreto con fuerza de ley, que como tal se observará en el Reino; y mando á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demás autoridades, asi civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que la guarden, cumplan y ejecuten, y la hagan guardar y ejecutar en todas sus partes.—Dado en Palacio á veinticuatro de junio de mil ochocientos sesenta y siete.—Yo la Reina.—El Ministro de Gracia y Justicia, Lorenzo Arrazola. (CL. t. 97, pág. 1187.)

R. D. de 25 junio de 1867.

Aprobando la instruccion para la ejecucion del Convenio con la Santa Sede ó ley de 24 del mismo mes.

(GRAC. Y JUST.) «Conformándome con lo propuesto por mi Ministro de Gracia y Justicia, de acuerdo con el parecer del Consejo de Ministros.

Vengo en aprobar la instruccion formada, con intervencion del M. R. Nuncio Apostólico, para la ejecucion del Convenio referente á capellanías colativas de sangre, y otras fundaciones piadosas de la propia índole, celebrado con la Santa Sede y publicado por mi Real decreto, con fuerza de ley, fecha de ayer.—Dado en Palacio á 25 de junio de 1867.—Está rubricado de la Real mano.—El Ministro de Gracia y Justicia, Lorenzo Arrazola.

Instruccion acordada en todo lo procedente, con el M. R. Nuncio Apostólico, y aprobada por S. M. la Reina (Q. D. G.), para la ejecucion del Convenio celebrado con la Santa Sede y publicado como ley del Estado por R. D. de 24 de junio de 1867, sobre las capellanías colativas de patronato familiar, memorias, obras pías y otras fundaciones análogas, y puntos conexos con las mismas materias.

CAPITULO PRIMERO.

Disposiciones preliminares.

Artículo 1.º A la mayor brevedad posible, no debiendo exceder de tres meses, despues de la publicacion de la ley en la *Gaceta oficial*, los jueces de primera instancia remitirán de oficio á los prelados diocesanos, á que pertenezca el pueblo en que estén sitas las

Parroquias, ya sean de la jurisdiccion ordinaria, ya exenta, los siguientes estados: primero, de las capellanías y beneficios de toda clase, de patronato familiar, activo ó pasivo de *sangre*, cuyos bienes hayan sido adjudicados á los parientes, en virtud de la ley de 19 de agosto de 1841, ó de cualquiera otra, que deberá citarse; expresando la iglesia, título, clase, é índole de la fundacion, las personas á quienes se hubiere hecho la adjudicacion; la vecindad de ellas, y la fecha del auto definitivo: segundo, de las memorias, obras pías y toda clase de fundacion piadosa familiar, gravada con cargas eclesiásticas, y cuyos bienes hubieren sido adjudicados á los patronos, expresando donde radicaba la fundacion, nombres y vecindad de las personas á quienes se hubiese hecho la adjudicacion y fecha del auto definitivo: tercero, de los negocios pendientes de capellanías y beneficios, con separacion de los que existan todavía en el Juzgado, de los que se hallen en las Audiencias, fecha de la demanda y su estado actual: cuarto, y lo mismo respecto de los negocios pendientes sobre memorias y toda clase de fundaciones piadosas, á que se refiere el número segundo de este artículo.

Las Audiencias remitirán tambien á los diocesanos nota de los negocios expresados en los dos números precedentes, que pendan en el tribunal, con expresion del estado en que se encuentran.

Art. 2.º La Direccion general de la Deuda pública, previa la correspondiente instruccion del Ministro de Hacienda, formará igualmente y remitirá al respectivo diocesano, á la brevedad posible, nota de los créditos satisfechos: primero, á los patronos de capellanías y beneficios familiares, ó á sus causa-habientes por bienes que se hubieren adjudicado á los primeros: segundo, á los patronos, ó causa-habientes, de memorias y fundaciones piadosas de toda clase, gravadas con cargas meramente eclesiásticas.

Art. 3.º Además, las Audiencias territoriales, los jueces de primera instancia, las autoridades y oficinas de todas clases, suministrarán, de oficio y sin demora, á los diocesanos las noticias y datos necesarios, que estos reclamaren para llenar su cometido.

Art. 4.º Los diocesanos, siempre que lo estimen conveniente, podrán delegar sin causar gastos á los interesados, en una comision, ó en persona de su confianza, la instruccion de los expedientes de toda clase y naturaleza, reservándose la solucion definitiva, ó su aprobacion.

En el *Boletín oficial* de la provincia, y en el eclesiástico donde le hubiere, se publica-

rán estos nombramientos para noticia de los interesados, y á fin de que sea reconocida su personalidad en las oficinas de todas clases, cuando quiera que hiciesen alguna reclamacion, ó pidieren datos y noticias para llenar su cometido.

Los diocesanos señalarán una módica retribucion por su trabajo á sus delegados. Aquella, y los gastos de oficina indispensables, se satisfarán de los fondos de los *acer-vos píos* que crea el Convenio.

Art. 5.º Por cargas de carácter puramente eclesiástico, de que tratan el primero y otros varios artículos del Convenio, se entiende todo gravámen impuesto sobre bienes de cualquiera clase que sean, para la celebracion de misas, aniversarios, festividades, y en general para actos religiosos ó de devocion en iglesia, santuario, capilla, oratorio ó en cualquiera otro puesto público.

Art. 6.º Los diocesanos, al tenor del artículo 21 del Convenio, podrán reducir, como lo estimen mas equitativo, las cargas meramente eclesiásticas, y tambien lo correspondiente á la congrua sinodal, título de ordenacion, que segun el art. 2.º del mismo Convenio, por la especialidad de los casos, tiene la consideracion de carga eclesiástica.

Art. 7.º Siendo puramente prudencial y discrecional la reduccion de cargas, y de mera benignidad apostólica, atendidas las circunstancias de la respectiva familia, la apreciacion de la parte de bienes, dejados á esta en su caso por el art. 12 del convenio, los diocesanos procederán gubernativamente en esta materia, sin que haya lugar á recurso en justicia, y si solo el de pura revision ante el mismo prelado en la propia forma.

Art. 8.º Habiendo circunstancias especiales, obstáculos y dificultades para ejecutar cualquiera de las disposiciones contenidas en el Convenio y en esta instruccion, el diocesano lo hará presente al Ministro de Gracia y Justicia, para que en uso de la facultad que se concede por el art. 23 del Convenio, se resuelva lo mas conveniente y equitativo con acuerdo del M. R. Nuncio de Su Santidad.

Art. 9.º Los diocesanos, bien sea por medida general, bien en casos particulares, habiendo circunstancias especiales que lo justifiquen, podrán prorogar, segun lo estimen conveniente, los plazos, que en esta instruccion se señalen, tanto para reclamar, como para hacer en su caso entrega de los créditos del Estado, y todo otro que se prefiere, cuyas resoluciones se publicarán en el *Boletín oficial* de la provincia y en el eclesiástico.

Art. 10. Las publicaciones que se hagan en los *Boletines oficiales* por disposicion del diocesano ó de su delegado, se considerarán de oficio.

CAPITULO II.

De las capellanías adjudicadas, ó cuya adjudicacion se pidió por las familias antes del 28 de noviembre de 1856.

Art. 11. Los diocesanos dictarán y publicarán en el *Boletín oficial* de la provincia auto general, en la correspondiente forma canónica, declarando, en conformidad á lo dispuesto en el art. 3.º del Convenio, extinguídos los patronatos y capellanías á que se refieren los dos primeros artículos del propio Convenio.

Art. 12. Los Tribunales, así civiles como eclesiásticos acordarán en su respectivo caso lo que proceda, para terminar lo mas pronto posible los pleitos pendientes.

En los primeros, el Ministerio fiscal, prescindiendo de todo lo que no sea pertinente, procurará se evite toda dilacion innecesaria, y en cuanto de su accion dependa, el despacho de estos negocios con la preferencia que corresponda, pidiendo se declare desierta la demanda, apelacion ó súplica, si no fuese promovido el curso del pleito por los interesados dentro del término legal correspondiente.

Los promotores fiscales no dejarán de apelar de la sentencia de adjudicacion, dando inmediatamente conocimiento al fiscal de la Audiencia, para que resuelva lo conveniente.

El Ministerio fiscal cuidará tambien muy particularmente de que no se confundan con las capellanías colativas familiares, á las cuales es solamente aplicable la ley de 19 de agosto de 1841, los verdaderos beneficios de patronato familiar, activo ó pasivo, apelando en su caso los promotores fiscales, y promoviendo recurso de casacion en interés del Estado los fiscales de las Audiencias.

Art. 13. En el término de cuatro meses, contados desde la publicacion de la ley en el *Boletín oficial* de la provincia de su domicilio, los parientes de los fundadores ó sus causa-habientes, á quienes han sido ya adjudicados los bienes de las capellanías ó beneficios, cuya posesion les fué dada en su tiempo, presentarán al diocesano copia auténtica del auto definitivo, y una nota bastante expresiva: 1.º de las fincas, derechos y acciones que á cada interesado hubieren sido adjudicadas, con expresion de los títulos de la Deuda del Estado, que, á reclamacion suya, le hubiese

entregado la Direccion de la Deuda pública: 2.º de las cargas impuestas sobre cada finca, incluidas las de los bienes que han sido subrogadas por Deuda pública; ó declaracion de no haberse hecho específicamente, sino en globo, sobre los bienes de la fundacion: 3.º de las cargas vencidas, y no satisfechas, desde la toma de posesion de los bienes, ó recibo de dichos títulos de la Deuda, expresando las causas que hubiese habido para ello, y proponiendo la cantidad alzada que estén dispuestos á satisfacer para esta sagrada obligacion.

Cada finca será exclusivamente responsable de la parte de cargas que sobre ella pesaba, y lo será con la generalidad de sus bienes; de las correspondientes á las fincas subrogadas en aquellos títulos, la persona que los recibió.

De los descubiertos por tiempos anteriores á la toma de posesion de los bienes, ó al recibo de los títulos de la Deuda del Estado, serán responsables los capellanes beneficiados que los hubiesen disfrutado, los administradores ó detentadores de los mismos bienes, y en su caso el Estado por el tiempo que hubiese estado incautado de ellos.

Los diocesanos acordarán lo que proceda respecto de dichas personas responsables.

Art. 14. Los que, aunque hayan sido patronos legítimos, tengan en su poder bienes, no adjudicados con arreglo á la legislacion entonces vigente, deberán hacer manifestacion de ellos en el término y modo expresados en el artículo precedente, para disfrutar de las ventajas concedidas á las familias, se pena en otro caso de lo que pueda corresponder con arreglo á las leyes.

Art. 15. Pasados los términos sin presentar á los diocesanos los datos y manifestaciones, á que se refieren los artículos precedentes, los mismos diocesanos formarán de oficio expediente instructivo, señalando nuevo plazo y citando á los interesados por el *Boletín oficial* de la provincia, con la prevencion de que se procederá en su caso, sin su intervencion, á determinar las cargas, bajo los conceptos de que cada uno de los interesados deba responder, despues de hechas las deducciones, si así fuese equitativo, parándoles el perjuicio que hubiese lugar.

Art. 16. Cuando en la sentencia ya cumplida, no se hubiesen prefijado las cargas, ó su importe á metálico, correspondientes á cada finca, como tampoco el descubierto por las atrasadas no cumplidas, de que los mismos bienes deban ser responsables, se hará lo que faltare en el expediente instructivo, con audiencia de los interesados, ó sin ella en su caso, segun lo ya dispuesto.

Art. 17. De la apreciacion de las cargas de la capellanía ó beneficio, hecha por el diocesano, podrá acudirse al Tribunal eclesiástico con las apelaciones correspondientes, salvo siempre lo dispuesto en el art. 7.º de esta instruccion.

Art. 18. Fijado definitivamente el importe anual de las cargas, y el de las atrasadas, no cumplidas, los interesados entregarán en los plazos que se fijan en el artículo siguiente, dónde y cómo el diocesano dispusiere, los títulos necesarios de la Deuda consolidada del 3 por 100, para hacer una renta igual al importe de la carga anual y la cantidad á que ascendieren las otras cargas; ó en metálico, solo en los casos que se expresarán en el artículo siguiente.

Art. 19. La entrega de los títulos se verificará en cuatro plazos: el primero, de una cuarta parte en el término de dos meses, y los restantes de cuatro en cuatro meses cada uno; dándose respecto de estos últimos, pagarés si el diocesano lo prefiriese, ú otorgándole la correspondiente escritura á satisfaccion del mismo.

A los que anticipasen los plazos, si á ello asintiese el diocesano, se les abonará un 3 por 100. Además se hará otro abono igual á los que, no existiendo la escritura de imposicion del censo ó gravámen, se presten voluntariamente á su redencion.

Cuando la renta anual corriente, que debe redimir una misina persona, no pueda representarse por el título menor de la Deuda consolidada del 3 por 100, se pagará en metálico la cantidad necesaria para que, unida con otras, pueda constituirse la renta igual á la carga, en dicha Deuda consolidada. Lo mismo se verificará respecto de las cargas atrasadas no cumplidas.

Art. 20. No verificándose en su respectivo plazo la entrega de los títulos, el diocesano lo pondrá en conocimiento del Ministerio de Gracia y Justicia, á fin de que se ordene al promotor fiscal del Juzgado, que hubiese entendido en los autos, promueva la ejecucion contra las fincas responsables, con arreglo á lo dispuesto en el art. 14 del Convenio, á fin de que se haga efectivo el pago, al tenor de lo prevenido en el artículo precedente.

Verificado el total pago de la redencion, se librará á los interesados el correspondiente documento, para que se cancele la hipoteca sobre los bienes, y queden estos libres de ella.

El modo de levantar las cargas, hasta que lo dicho tenga efecto, se acordará por el diocesano con audiencia de los interesados.

TOMO III.

Art. 21. Hasta tanto que se cumplan las prescripciones de los artículos siguientes, que se refieren á los negocios pendientes ante los Tribunales civiles, se suspenderá el dar la posesion de los bienes adjudicados á los interesados, que todavía no hubiesen entrado en ella.

Art. 22. Tan luego como los autos pendientes se hallen en estado, el juez señalará á los interesados el término en que deben presentar los datos y hacer al diocesano las manifestaciones que procediesen, al tenor del art. 13; en la inteligencia que, de no verificarlo, el mismo diocesano procederá á formar de oficio el oportuno expediente instructivo: remitiendo al intento el juez al diocesano los autos, ó los datos que este pidiese.

Art. 23. Presentada en autos la certificacion del diocesano, de que trata el art. 10 del Convenio, el juez procederá á lo que corresponda, con arreglo á lo dispuesto en el propio artículo; suspendiéndose, sin embargo, la entrega de los bienes adjudicados á las familias, hasta tanto que se cumpla lo establecido en los arts. 18 y 19, que son aplicables al objeto del presente: debiendo otorgarse á satisfaccion del juez, con las cláusulas correspondientes, la escritura, de que habla el último de dichos artículos, y consultando previamente al diocesano, por si prefiriese á la escritura los pagarés.

Art. 24. Cuando haya de procederse á la venta de bienes en pública licitacion, se tendrá presente, para fijar el tipo de la subasta, lo dispuesto en el art. 19.

Art. 25. Cualquiera que sea el importe de aquellos, las escrituras y sus copias se extenderán en papel del sello noveno, y no se devengarán derechos de trasmision de propiedad, por sustituirse en papel del Estado los bienes afectos á las cargas, de que se trata: ni el Registro de la Propiedad mas derechos de inscripcion que los establecidos para negocios de menor cuantía.

CAPÍTULO III.

De los patronatos laicales ó reales de legos, memorias, obras pias y otras fundaciones de la misma indole, de patronato familiar, activo ó pasivo, gravados con cargas puramente eclesiásticas; y de las de esta misma indole que afectan á bienes de dominio particular exclusivo, ó vendidos por el Estado con este gravámen, de que tratan los arts. 5.º y 7.º del Convenio.

Art. 26. Las familias que estén en posesion de los bienes adjudicados, ó sobre los

que penda juicio, pertenecientes á memorias y fundaciones pías de todas clases ó á patronato laical ó real de legos, gravados con cargas meramente eclesiásticas, deberán hacer al diocesano las manifestaciones documentadas, que en su caso respectivo procedan, al tenor de los arts. 13 y 22 de la presente instruccion.

Art. 27. Los poseedores de bienes, que el Estado ha vendido, ó vendiese, con la obligacion de levantar las cargas, puramente de carácter eclesiástico, á que están afectos, deberán hacer al diocesano, en el término de cuatro meses, con toda la especificacion conveniente, declaracion de aquellas, su índole, naturaleza, objeto é iglesia en que debieran cumplirse; expresando al propio tiempo las vencidas y no satisfechas desde la toma de posesion de la finca, y la cantidad que están dispuestos á satisfacer para cumplir tan sagrada obligacion.

Art. 28. Los poseedores de bienes de dominio particular exclusivo, que en uso de la facultad que les concede el art. 7.º del Convenio, quieran redimir las cargas ó gravámenes, de carácter puramente eclesiástico, deberán acudir al diocesano con los documentos correspondientes, en dicho término de cuatro meses, haciendo igual manifestacion á la indicada en el artículo anterior, respecto de las cargas atrasadas, cuya redencion, segun el artículo citado del Convenio, es obligatoria.

Art. 29. Las disposiciones de los capítulos anteriores, referentes á la fijacion, graduacion y apreciacion de las cargas y al modo, forma y plazos en que ha de verificarse el pago, son aplicables de la misma manera á los particulares del presente capítulo.

CAPITULO IV.

De las capellanías declaradas subsistentes por el art. 4.º del Convenio y del acervo pio comun de que tratan los arts. 16 al 18 del mismo Convenio.

Art. 30. Se consideran comprendidas en las disposiciones del art. 4.º del Convenio si las familias no hubieren reclamado judicialmente los bienes, las capellanías cuyo disfrute se dejó á los capellanes, que á la sazón las poseían, y en el cual han de continuar hasta que canónicamente vacuen.

Art. 31. Los capellanes, que actualmente están en posesion de las capellanías existentes, y los que las obtuvieren por consecuencia de los juicios pendientes en los Tribunales eclesiásticos, continuarán tambien en el disfrute de su renta hasta la vacante;

pero esto no será obstáculo para que, instruido el expediente oportuno, segun mas adelante se dirá, se determine lo que proceda; y que en el caso de ser incóngrua, se decrete desde luego la union á otra, aunque sin llevarlo á efecto hasta que se verifique la vacante canónicamente.

Art. 32. Si por la fundacion ó disposiciones canónicas vigentes, el capellan, que disfrute las rentas de alguna capellanía extinguida ó existente, estuviese obligado á ascender á *orden sacro* y en su dia al presbiterado, y no lo hubiese verificado, teniendo la respectiva edad para ello, el diocesano le prefiará el término, dentro del cual deba verificarlo, declarando caso contrario la vacante en la correspondiente forma canónica.

Tambien se instruirá expediente canónico, si existiesen otras causas legales, por las cuales el poseedor de la capellanía deba perderla con arreglo á derecho.

Art. 33. Se declaran en caso de excepcion por su índole y naturaleza, formen ó no cuerpo sus individuos, y sean ó no colativas, las capellanías de patronato activo familiar, fundadas en capillas de iglesia metropolitana, sufragánea, colegial ó parroquial, en que yacen los restos mortales, existen sepulcros, ó porque convenga conservar la memoria de familias ilustres.

El diocesano, con audiencia instructiva de los mismos patronos, procederá á su arreglo para que, al propio tiempo que se perpetúa la memoria de los fundadores, presten á la iglesia, y sobre todo en su caso al ministerio parroquial, el mejor servicio posible. En todo caso estarán obligados los patronos á conmutar en títulos intrasferibles del 3 por 100 consolidado la renta por todo su valor, que deben satisfacer, ó que anualmente produzcan los bienes pertenecientes á la capilla.

Art. 34. Los diocesanos, atendidas todas las circunstancias de su respectiva diócesis, formarán el oportuno expediente instructivo, con audiencia de los encargados del patronato activo y de los interesados en el pasivo, señalando el plazo que estimen conveniente, dentro del cual los mismos patronos, capellanes y administradores de los bienes de las capellanías, fundadas en iglesia del territorio de la misma diócesis, cualquiera que sea la jurisdiccion á que hubieren pertenecido ó actualmente pertenezcan, deban presentar las fundaciones y documentos necesarios para establecer el quinquenio, que previene el artículo 12 del Convenio, y que será el del año de 1862 á 1866, ambos inclusive. Y para formar juicio en todo lo demás, en consonancia con los particulares que deben resolverse

con arreglo á lo dispuesto en el mismo Convenio, los diocesanos tendrán muy presente lo que se previene en el art. 13 de esta instrucción, y especialmente al final del núm. 1.º y en el 2.º del propio artículo.

Art. 35. Terminado el expediente instructivo, el diocesano señalará; 1.º la renta líquida, deducidas las cargas que no sean de índole puramente eclesiástica, y demás que en tales casos procedan, durante el quinquenio prefijado: 2.º declarará si la capellanía es congrua ó incongrua, segun el tipo señalado en el art. 12 del Convenio, deducción hecha además de la expresada en el número anterior, de la porción del producto que, con arreglo á lo dispuesto en dicho art. 12, creyese equitativo el mismo diocesano deber dejar á la familia del fundador, no excediendo nunca, segun allí se dispone, de la cuarta parte de dicho producto.

Art. 36. Si los interesados no convinieren extrajudicial y amigablemente en lo tocante á su derecho á los bienes, ó en la parte alicuota correspondiente á cada uno de ellos, podrán acudir al Juzgado de primera instancia, á que pertenezca la parroquia en que esté fundada la capellanía, para que, con arreglo á la legislación observada antes del Concordato, se determine acerca del derecho de los interesados, y en su caso se fije la parte alicuota de la renta que deba convertirse en inscripciones intrasferibles.

Si la controversia promovida por los interesados se limitara á la renta del quinquenio, señalada gubernativamente por el diocesano, la acción se deducirá ante el Tribunal eclesiástico, segun lo establecido en el art. 17 de esta instrucción.

Una vez fijado judicial ó extrajudicialmente el derecho, renta del quinquenio y la parte alicuota correspondiente á cada interesado, verificarán estos, en el tiempo, modo y forma establecidos en el cap. 2.º de la presente instrucción, la entrega de los títulos de la Deuda consolidada del 3 por 100, que produzcan la renta líquida prefijada para la capellanía.

Siendo la capellanía de mero patronato activo, ó en el caso de que no lo soliciten los interesados ó llamados al goce y disfrute de la misma, el patrono familiar, pues los copatronos, que no fuesen de la familia, no tienen derecho á los bienes, deberá verificar dicha entrega de los títulos de la Deuda del Estado, en el tiempo y segun lo demás dispuesto en el párrafo anterior.

Art. 37. Si el patrono, ó los llamados al disfrute en su caso, no efectuaren la conmutación, se enajenarán, previa disposición del diocesano, en pública subasta por el juez de

primera instancia del partido, indicado en el párrafo 1 del artículo precedente, los bienes necesarios para cubrir la cantidad, teniendo presente para la subasta la renta señalada á los mismos bienes; pero sin comprender la porción dejada á las familias por benignidad apostólica, con arreglo al art. 35 de este capítulo.

Art. 38. Si la capellanía fuese congrua, el diocesano, con audiencia del patrono, determinará la iglesia, en que debe establecerse la capellanía, si no existiese la en que primitivamente fué fundada, ó si por el mejor servicio de los fieles, ó mas eficaz auxilio al ministerio parroquial, conviniese la traslación á otra parroquia, santuario, ó capilla, usando para ello de la delegación apostólica, consignada en los arts. 15 y 21 del Convenio. Además, en uso de las propias facultades, introducirán los diocesanos en la fundación, con audiencia instructiva de los patronos, todo lo que consideren provechoso al mejor servicio de la iglesia, y para que las capellanías llenen cumplidamente los elevados objetos, que las supremas potestades se han propuesto en el Convenio.

Procurará el diocesano que entre dichas obligaciones sea una de ellas, siempre que ser pudiere, la celebracion de misa de alba en los dias de precepto en los pueblos agrícolas, y de las llamadas de hora ó de punto, acomodado á los usos y costumbres de la generalidad de las gentes, en las poblaciones aglomeradas de otra clase; ya sea en la parroquia en que esté fundada la capellanía, ya en cualquiera otra, que conviniera mas, dentro de la misma población.

El diocesano dictará ante notario, y en papel de oficio, el correspondiente auto canónico, que á los efectos correspondientes se unirá á la primitiva fundación de la capellanía, debiendo extenderse en el propio sello la copia original, que ha de archivarse en la parroquia del territorio en que se fundare.

Art. 39. Las rentas de las capellanías, que se declaren incongruas por auto dictado en la forma prevenida en el párrafo anterior, pertenecerán al *acervo pio* comun de que trata el art. 16 del Convenio.

El diocesano, oyendo instructivamente á los patronos, procederá á decretar la union de dos ó mas de la propia clase, segun sea necesario para constituir una congrua anual de 2,000 rs., á lo menos, llamando para el disfrute de ella á los que por las respectivas fundaciones tuvieren derecho y estableciendo para el ejercicio del patronato activo, los turnos correspondientes, segun lo dispuesto en dicho art. 16 del Convenio. La nueva cape-

llanía se establecerá en la parroquia, santuario, ermita ó capilla, que los diocesanos crean mas á propósito para la mayor comodidad y mejor servicio de los fieles.

Además de las mejoras que, en uso de la delegacion apostólica, crean conveniente hacer en las fundaciones de las capellanías unidas, y de expresar en el auto lo terminantemente dispuesto en los arts. 17 y 19 del Convenio, se consignarán tambien los estudios y los demás requisitos, calidades y obligaciones, que los diocesanos estimen oportunas, teniendo presente las indicaciones hechas en el artículo precedente respecto de la celebracion de misa de alba en las poblaciones agrícolas, y de las llamadas de hora ó de punto en las de otra clase.

Al auto que provean los diocesanos, se agregarán las fundaciones y demás documentos pertenecientes á las capellanías unidas, observándose lo que respecto de las declaradas cóngruas, se dispone en el pár. 3.º del artículo 38.

Art. 40. Hasta tanto que tenga cumplido efecto la commutacion de los bienes, continuarán en la administracion de los mismos los capellanes ó personas, á quienes por la fundacion correspondiere.

No obstante lo dispuesto en la fundacion, en uso de la delegacion apostólica, los diocesanos podrán siempre que lo creyeren conveniente, nombrar con todas las garantías debidas un administrador general de los bienes de las capellanías actualmente vacantes, ó bien encargar con la misma garantía la de cada capellanía, esté ó no vacante, á persona de su confianza, habiendo justo fundamento para ello.

Art. 41. Las inscripciones intrasferibles se pondrán en cabeza de la capellanía, á que se le apliquen y estarán siempre á disposicion del diocesano, quien determinará el punto, modo y forma de su conservacion, haciendo entregar oportunamente para su cobranza á los capellanes el cupon que corresponda.

En caso de vacante, el excedente que hubiere, despues de pagar al ecónomo, que el mismo diocesano nombrará para levantar las cargas, y el importe de los gastos abonables, se aplicara, parte á aumentar la cóngrua de la capellanía adquiriendo nuevas inscripciones intrasferibles y asimismo la parte que estimen conveniente los diocesanos, al fondo de reserva.

Art. 42. Cuando el patronato sea meramente activo, el patrono presentará de entre los que el diocesano proponga libremente en terna, por ahora; y de entre los aprobados

en los exámenes periódicos, de que habla el artículo 18 del R. D. de 15 de febrero último, luego que lo allí establecido llegue á plantearse.

Art. 43. Si para fundar nueva capellanía, fuese necesario reunir el residuo de muchas de tan corta valía, que sea difícil establecer turno en el patronato pasivo, el patrono á quien tocara la presentacion, podrá hacer esta en cualquiera de los llamados al disfrute por la nueva fundacion.

Art. 44. En adelante se procederá instructivamente en los expedientes de presentacion, causándose á los interesados el menor gasto posible.

Art. 45. Los que se sintieren agraviados podrán deducir, dentro del término, que al intento prelijase el diocesano, el recurso correspondiente ante el Tribunal eclesiástico. Este decidirá sumariamente, con las apelaciones á que hubiere lugar, hasta la decision final por el Tribunal de la Rota, el cual tambien conocerá sumariamente, salvo el caso previsto en el art. 7.º de esta Instruccion.

Art. 46. En adelante, toda fundacion de capellanía colativa, de patronato activo y pasivo familiar, ha de hacerse con arreglo á las bases esenciales, consignadas en el Convenio para las actualmente existentes.

CAPITULO V.

Del acervo pío comun para fundar capellanías de libre nombramiento de los diocesanos.

Art. 47. Además de los fondos que pertenecen á este *acervo pío comun*, segun el art. 18 del Convenio, los diocesanos agregarán á él la parte, todavia disponible, de los títulos de toda clase de Deuda del Estado, que en representacion de corporaciones, que han dejado de existir, les han sido, ó fueren entregados por la Direccion de la Deuda pública para levantar las cargas, meramente eclesiásticas, á que estaban afectos los bienes de que dichos títulos procedian.

Art. 48. Siguiendo el espíritu de los artículos 39 y 45 del Concordato y lo establecido en el Convenio adicional de 25 de agosto de 1859, se tratará amigablemente entre el Gobierno de S. M. y el M. R. Nuncio Apostólico, para establecer prudencial y alzadamente lo que proceda, respecto de los particulares á que se refieren los diversos números del párrafo segundo, art. 18 del presente Convenio.

Una vez acordado el número de inscripciones intrasferibles, que por dichos conceptos ha de entregar el Gobierno de S. M.,

se destinará al *acervo pío* de que se trata, la parte correspondiente á cada diócesis.

Art. 49. De la misma manera se tratará con el Gobierno respecto de las cargas puramente eclesiásticas, que gravaban los bienes de los establecimientos de Beneficencia ó Instrucción pública y otros análogos, á fin de que se ponga á disposicion del respectivo diocesano el correspondiente número de instrucciones intrasferibles, que en representacion de sus bienes se han entregado ó entregaren á los mismos establecimientos.

Art. 50. Tambien corresponde á este *acervo pío*: primero, la mitad del importe, que por razon de cargas, puramente eclesiásticas, se hayan abonado por la Direccion de la Deuda á las familias, á quienes se hubiesen adjudicado los bienes, derechos y acciones de las capellanías ó beneficios, que no correspondan á las comunidades de beneficiados coadjutores de la antigua corona de Aragon: segundo, todo el importe que por el mismo concepto de cargas puramente eclesiásticas, se hubiese abonado ó abonase á las familias, á quienes se han adjudicado ó adjudicaren los bienes, derechos y acciones de memorias, obras pías y cualquiera otra fundacion piadosa familiar de toda clase y denominacion; y tercero, la parte que el diocesano crea conveniente destinar de la cantidad alzada, que con arreglo á lo dispuesto en el art. 41 del Convenio adicional de 25 de agosto de 1859, debe satisfacer el Gobierno en inscripciones intrasferibles, por razon de las cargas eclesiásticas, á que estaban afectos los bienes vendidos como libres, y los sujetos á conmutacion segun el mismo Convenio; siendo las cargas de aquellas que no deban cumplirse por los cabildos metropolitanos, sufragáneos, colegiales ó capillas Reales, en cuerpo, ó por los respectivos párrocos y sus coadjutores.

Los diocesanos procurarán concertarse con los interesados, usando de toda la posible benignidad; y si ocurriesen dificultades, orillar estas; conviniendo en una cantidad alzada prudencial y equitativa, que se satisfará en títulos de la Deuda consolidada del 3 por 100 por todo su valor nominal.

Art. 51. Tan luego como se reciba número suficiente de inscripciones intrasferibles, los diocesanos fundarán la correspondiente capellanía, dando la preferencia para establecerla á las iglesias ó parroquias, en que la necesidad fué mas apremiante; teniendo presentes las disposiciones análogas que le sean aplicables del capítulo precedente.

Art. 52. La ereccion se hará en la forma canónica correspondiente y con preferencia,

en cuanto ser pueda, en parroquia de mas de 500 almas, que no le corresponda coadjutor, y que por circunstancias especiales necesite otro eclesiástico, además del párroco, segun lo dispuesto en la base 19 de la Real cédula de ruego y encargo, de 3 de enero de 1854, ó bien en santuario, ermita ó parroquia situada convenientemente para que el capellan pueda auxiliar, caso de necesidad á los párrocos limítrofes.

Se expresarán en el auto, que se dictare, todas las circunstancias y requisitos que en los aspirantes deben concurrir, y las obligaciones que el Convenio exige en sus obtentores, con las demás que los diocesanos estimen convenientes, en uso de la facultad que el mismo Convenio les concede.

Art. 53. Este auto hará las veces de fundacion, y de él se sacará copia para archivarla é insertarla en el correspondiente libro de la parroquia, reservándose en el archivo episcopal el expediente original de cada fundacion. El auto y las copias se extenderán en papel del sello de oficio.

Art. 54. Las inscripciones intrasferibles se pondrán en nombre de la fundacion, á que se aplicaren los títulos de la Deuda, observándose lo dispuesto en el art. 41 del capítulo anterior para las capellanías de patronato familiar.

CAPITULO VI.

De las comunidades de beneficiados coadjutores de las diócesis de la antigua corona de Aragon, de que trata el art. 22 del Convenio.

Art. 55. Los prelados de las diócesis de la antigua corona de Aragon remitirán á la mayor brevedad posible al Ministerio de Gracia y Justicia, para el uso correspondiente, nota debidamente circunstanciada: primero, de los bienes, derechos y acciones, de que todavía se hallen en posesion las comunidades de beneficiados coadjutores: segundo, de los que se haya incautado el Estado de esta misma procedencia, y su fecha, expresando si existen ó no reclamaciones pendientes, fecha de ellas, y dependencia del Estado en que existan los expedientes de reclamacion.

Art. 56. La entrega al Estado, á la cual deberá preceder la cesion canónica del diocesano, de los bienes existentes todavía en poder de las comunidades, no se verificará hasta tanto que se fije, con intervencion y acuerdo de la correspondiente Administracion de propiedades del Estado, la renta, que actualmente produce cada finca ó censo, y en su consecuencia se expidan á favor de las

propias comunidades las correspondientes inscripciones intrasferibles de la Deuda consolidada del 3 por 100, para hacer una renta igual á la prefijada, que se entregarán al mismo prelado.

Art. 57. Antes de anunciarse por el Estado la venta de los bienes de dichas comunidades, que todavía conserva el mismo Gobierno en su poder sin enajenar, se expedirán las inscripciones intrasferibles correspondientes.

Art. 58. Se expedirán también inscripciones de la propia clase para hacer una renta, igual á la que producen al tiempo que el Estado se incautó de los bienes, derechos y acciones, ya enajenados por el mismo Estado, fijándose prudencial y alzadamente en su caso aquella renta. A este fin harán los diocesanos, por conducto del Ministerio de Gracia y Justicia, la reclamación debida, háyase ó no hecho anteriormente, y exista ó no expediente en su razón.

Art. 59. Los mismos diocesanos harán directamente las reclamaciones oportunas á los patronos, á quienes se adjudicó parte de los bienes de la comunidad, ó los particulares del beneficio, si los hubiese tenido, caso de no cumplir ellos mismos lo dispuesto en el capítulo 2.º; en la inteligencia de que por falta de tal cumplimiento, además de las cargas específicas, meramente eclesiásticas, se han de considerar como tales para este solo efecto, en razón á sus diversas obligaciones, como miembros de la comunidad, el importe de la cóngrua sinodal de ordenación.

Art. 60. Verificada que sea la reorganización de las comunidades, ó cabildos de beneficiados coadjutores, con arreglo á lo dispuesto en el art. 11 del R. D. de 15 de febrero último, los diocesanos ordenarán la traslación á otra parroquia de los ecónomos coadjutores, que actualmente perciben dotación del Estado, y que han de cesar en este cargo por deber desempeñarlo la comunidad de beneficiados coadjutores.

Art. 61. Hasta que tenga efecto la reorganización indicada, solo se proveerán en economato las coadjutorías, actualmente existentes, ó que se establezcan en el arreglo parroquial.

Art. 62. Las inscripciones intrasferibles en que se subrogan los bienes, derechos y acciones de las comunidades, se inscribirán á nombre de las mismas, y se entregarán á los diocesanos, para que dispongan su custodia y conservación por las propias comunidades, ó de la manera que estimen mas conveniente; en cuyo último caso deberán entre-

garse oportunamente á la respectiva comunidad los cupones para su cobro.

CAPÍTULO VII Y ÚLTIMO.

De la expedición y custodia de las inscripciones intrasferibles.

Art. 63. Reunidos los títulos de la Deuda pública, y antes de darse por terminada la fundación de la capellanía, dispondrá el diocesano la remisión de los mismos, con las formalidades debidas para evitar toda contingencia á la Dirección de la Deuda, si en ella no estuviesen ya depositados; expresando en todo caso, con los correspondientes detalles, la capellanía, tanto de patronato familiar, como de libre fundación, á cuyo nombre hayan de formalizarse las inscripciones intrasferibles.

La Dirección de la Deuda remitirá dichas inscripciones al Ministerio de Gracia y Justicia, el cual las pasará al diocesano; y este acordará el depósito y custodia de ellas en el punto que crea mas seguro.—Madrid 25 junio de 1867.—Arrazola. (CL. t. 97, p. 4207.)

Al principio de este artículo dejamos ya definidas las capellanías colativas, las laicales, las memorias de misas, legados píos etc. Hemos compilado despues la ley de 19 de agosto de 1841, sobre adjudicación, en concepto de libres, de los bienes de capellanías colativas familiares, el R. D. de 30 abril de 1852 declarando derogada la ley de 1841, el Real decreto de 6 de febrero de 1855 declarando de nuevo en su fuerza y vigor la ley citada, la ley de 15 de junio de 1856 aclaratoria de la anterior, el R. D. de 28 de noviembre de 1856 suspendiendo de nuevo los efectos del de 6 de febrero de 1855, y últimamente la ley de 24 de junio de 1867 que contiene el Convenio con la Santa Sede, sobre arreglo definitivo de las capellanías colativas de sangre y otras fundaciones piadosas de la misma índole, con la instrucción de 25 del mismo mes, acordada, en todo lo procedente, con el M. R. Nuncio Apostólico, para la ejecución del Convenio.

La ley última ha venido, pues, á poner término á la situación anómala en que estaba el asunto de capellanías, creando otra en que se toman en cuenta las fases distintas por que ha pasado desde el 19 de agosto de 1841.

Hay, pues, según esta ley, capellanías extinguidas, y capellanías que se declaran subsistentes. *Se consideran completamente extinguidas* aquellas cuyos bienes hayan sido ó fuesen adjudicados por los tribunales á las familias, estando pendiente su adjudicación, reclamada antes de 17 de octubre de 1851 y desde el R. D. de 30 de abril de 1852 hasta el de 28 de noviembre de 1856. Desapareciendo aquí la colectividad de bienes de la fundación deja consiguientemente de existir el patronato familiar, y así se declarará por los diocesanos, quedando las familias á quienes se hayan adjudicado ó se adjudicaren los bienes, obligadas á la redención de las cargas como se previene, según los casos, en los arts. 1.º, 2.º, 5.º, 6.º, 14 y otros de la ley ó Convenio, y 5.º, 6.º, 7.º, 15 y siguientes de la instrucción.

Se declaran *subsistentes*, si bien con sujeción á las disposiciones del Convenio, las capellanías cuyos bienes no hubieren sido reclamados á la publicación del R. D. de 28 de noviembre de 1856, y sobre las cuales por consiguiente no pende juicio en los tribunales. No quiere decir esto que continuarán amortizados los bienes raíces que las constituían, sino solo que subsistirán las capellanías y el patronato correspondiente convirtiéndose el producto de los bienes, salva la parte ó porción que se reserva á las familias, en inscripciones intrasferibles de la Deuda del Estado, todo con arreglo á los arts. 4.º, 12, 30 y siguientes de la instrucción.

Entre las capellanías que quedan subsistentes, distingue la ley de 1867, las *cóngruas* ó que tienen suficiente cóngrua de ordenación, cuyo minimum se fija en 2000 rs., y las *incóngruas* que no produzcan dicha renta. El producto de los bienes en uno y otro caso, no es para las familias sino en la porción limitada que con arreglo al art. 12 señale el diocesano. Tiene, pues, por objeto esta clasificación, lo que bien claro dicen los artículos 13 y siguientes del mismo Convenio y el 38 39 y otros de la instrucción. Es decir que resultando cóngruas

las capellanías, seguirán estas servidas por su capellan y seguirá consiguientemente el patronato familiar con arreglo á la fundación y al Convenio: y resultando incóngruas el producto se lleva á la formación del acervo pío de que habla el art. 16 del Convenio para el fin que allí se dice. De este acervo pío trata también la instrucción en su cap. IV y se destina según se ve en el art. 39 de la misma á la unión de dos ó mas capellanías incóngruas para constituir una cóngrua de cada 2000 rs. á lo menos, llamando para su disfrute á los que por las respectivas fundaciones tuvieren derecho y estableciendo al efecto los turnos, correspondientes según allí se ve.

Pero hay otro acervo pío que es objeto del art. 18 del Convenio, cuyos fondos son destinados á fundar capellanías de libre nombramiento de los diocesanos, en la forma que dice el cap. 5.º de la instrucción.

Difícil sería que pudiéramos abrazar en estas breves líneas de resumen la importante doctrina contenida en la legislación sobre capellanías, y toda vez que está textualmente inserta, á ella nos remitimos para no extralimitarnos tampoco de nuestro propósito.

Indicaremos no obstante y para concluir, que así en la ley ó Convenio de 1867 como en la instrucción para su cumplimiento se habla de la *redención forzosa* de ciertas *cargas* de carácter puramente eclesiástico, aunque no sean de capellanías colativas de sangre ó familiares. Trata de ellas el art. 5.º de la misma ley y el cap. 3.º de la instrucción; extendiéndose á los patronatos laicales ó reales de legos, memorias, obras pías y otras fundaciones de la misma índole. Y trata también, y conviene tenerlo muy presente, de la *redención á voluntad* de las cargas del mismo carácter que gravan bienes de dominio particular exclusivo.

Véanse pues las disposiciones aludidas, y lo que decimos en el artículo BENEFICIO: CARGAS PIADOSAS: MAYORAZGOS: OBRAS PIAS y PATRONATOS etc. á donde nos remitimos.

CAPILLA. Oratorio privado autorizado por el prelado con determinadas circunstancias y condiciones.

CAPILLA DE LOS REOS de pena capital. Se llama así el oratorio que hay en las cárceles para asistir con los auxilios espirituales á los sentenciados al último suplicio, desde el momento en que se les notifica la sentencia. Se mandaron crear estas capillas por pragmática de 27 de marzo de 1569.

R. O. de 1.º julio de 1864.

Limitando la entrada á ciertas personas.

(GOB.) «Habiéndose observado en algunas ocasiones la censurable costumbre de que los reos condenados á la última pena y puestos en capilla sean objeto de una curiosidad inconveniente que les retrae del recogimiento con que deben prepararse cristianamente para la muerte; y con el objeto de que el tiempo concedido á los mismos reos con tan piadoso fin produzca los resultados para que fué establecido, sin privarles por eso de la asistencia y consuelo que les son necesarios en tan críticos momentos, la Reina (Q. D. G.) se ha servido disponer, que solamente puedan entrar en las capillas de los reos condenados á muerte, además del alcaide y los celadores ó inspectora y celadora, si fuese en cárcel de mujeres, que aquel juzgue absolutamente necesarios, el capellan del establecimiento, el párroco del distrito donde este se halle situado, y dos sacerdotes mas, designados por el reo, ó en su defecto por el vicario eclesiástico del partido; los magistrados, ministerio fiscal, juez y escribano que hayan intervenido en el proceso y el alguacil del Juzgado, el abogado defensor y el procurador del reo; los individuos de la hermandad de la Paz y Caridad en número de 12, entregando previamente su presidente al alcaide una lista en que consten sus nombres, y no pudiendo permanecer nunca en la capilla mas de dos, excepto cuando tenga lugar el acto de la admision del reo en la hermandad, y haga la distribucion que de la parte de limosnas le está permitido en las constituciones de la misma, las personas á quienes el reo llame, previo el permiso de la Sala sentenciadora ó del juez, ó aquellas cuya presentacion en la capilla consideren dichos funcionarios ser de evidente utilidad ó justicia, y el presidente y vocal eclesiástico de la Junta auxiliar de cárceles.

Es asimismo la voluntad de S. M. quede absolutamente prohibida la entrada en la capilla de cualesquiera otra clase de personas que no estén comprendidas en las ya mencio-

nadas, quedando responsables los alcaides del cumplimiento de estas disposiciones.—De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y efectos consiguientes; debiendo advertirle traslade esta disposicion á la mayor brevedad á quienes corresponda, dando parte á este Ministerio de haberlo efectuado.—Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 1.º de julio de 1864.—Cánovas.—Sr. Gobernador de la provincia de.....» (CL. t. 92, p. 43.)

CAPILLA REAL. Hablan de ella y de los medios de proceder á su redotacion y conocimiento de los fondos de su dote la ley 1.ª y arts. 7 y 10 de la 2.ª y notas 1.ª y 2.ª, tit. XXIV, lib. I, Nov. Rec.

CAPITACION. Repartimiento de tributos ó impuestos que se hace por cabezas.—V. CONTRIBUCIONES.

CAPITAL. El caudal ó conjunto de bienes que alguno posee. Cantidad de dinero que produce rédito.—V. INTERÉS DEL DINERO.

Tambien se llama *capital* á la cabeza de un estado, de una provincia, de un partido, distrito, municipio etc. En este sentido.—V. DIVISION TERRITORIAL.

CAPITALIZAR. La accion de reducir á capital el importe de una renta, canon, rédito, ó pension.—En el comercio, la agregacion de los intereses al capital, de modo que de ambas cantidades se forma uno nuevo.

CAPITAN. Empleo en la milicia que manda una compañía de soldados.—Jefe militar: en este sentido se dice capitán general de ejército; general; autoridad militar de distrito.

CAPITAN DE FRAGATA. Oficial de la Armada, cuya graduacion corresponde á la de teniente coronel en el ejército.

CAPITAN DE NAVE. La persona que tiene á su cargo la direccion y gobierno de una embarcacion destinada al comercio marítimo. El Código de Comercio determina extensamente los requisitos para ser capitán de nave y sus obligaciones y responsabilidad como puede verse consultando el Código de Comercio, en sus arts. 593, 618 á 630, todos los de la seccion «de los capitanes» 634 á 686, 689, 699, 753 y otros de las secciones sobre transporte marítimo, averías, seguros etc.

CAPITAN DE NAVIO. Oficial de la Armada cuya graduacion corresponde á la de coronel en el ejército.

CAPITAN DE PUERTO. La autoridad que tiene á su cargo la policia, gobierno y direccion de un puerto, toma nota de las embarcaciones que en él entran y salen, provee á sus peticiones, etc. Esta autoridad es generalmente un oficial de la Armada nacional, mas ó menos graduado segun la importancia del puerto, con inmediata subordinacion al Capitan general del departamento marítimo respectivo. Las obligaciones del capitan de puerto se determinan en los arts. 6.º y siguientes del tratado 5.º, tit. VII de las Ordenanzas navales y 598, párrafo 6.º y 646 y 651 del Código de Comercio.

CAPITANÍAS GENERALES. Llámense así los distritos militares en que está dividido el territorio español, á cargo cada uno de ellos de un jefe militar en la clase de generales, de un segundo, de la clase de mariscales de campo etc. con su secretaría y oficinas correspondientes para la direccion y despacho de los negocios. —V. AUTORIDAD MILITAR: AUDITOR: DIVISION TERRITORIAL: JURISDICCION MILITAR, ETC.: DEPARTAMENTO MARÍTIMO.

CAPITULACIONES MATRIMONIALES. Concierto entre los que tienen tratado contraer matrimonio, y en su caso, sus padres, parientes, tutores y otras personas sobre todo lo relativo á la celebracion del matrimonio y á las aportaciones de bienes. En las capitulaciones pueden hacerse los esposos la promesa formal de casarse, pueden prometer los padres etc. las donaciones propter nupcias, la dote, las arras y los regalos esponsalicios; y cuando los contrayentes son menores se hace constar tambien la licencia que necesitan para contraer matrimonio. Es recomendable el otorgamiento de escritura de capitulaciones, y refundir en ella cuando pueda ser las de las donaciones, porque ahorra gastos y la duplicidad de escrituras. —V. DONACIONES: MATRIMONIO.

CAPÍTULO. El cabildo de eclesiásticos de alguna iglesia catedral ó colegial. En las órdenes militares, la Junta de caballos y demás vocales que se reunen para

poner el hábito á algun caballero nuevo, ó para tratar de asuntos de la órden.

CARABINEROS (Cuerpo de). El Cuerpo de carabineros del reino fué creado como instituto militar por R. D. de 9 de marzo de 1829 bajo la designacion de *costas y fronteras*, y reconstituido en la propia forma con la actual denominacion por R. D. de 11 de noviembre de 1842; y por otro de 26 de setiembre de 1865 se dispone que se divida en dos secciones, denominándose la una *Carabineros del Reino* y la otra *Carabineros veteranos*. Se compone de treinta y dos comandancias, de ellas una para la córte. Cada comandancia se divide en compañías, ascendiendo el número total de estas á noventa y ocho, y diez escuadrones de caballería. Dependiente de las mismas comandancias se halla el resguardo de puertos con su marinería y buques.

R. D. de 9 marzo de 1829.

Extracto.—Determina el establecimiento y organizacion del Cuerpo de carabineros de costas y fronteras. (*CL. t. 14, pág. 75.*)

R. D. de 25 noviembre de 1834.

Extracto.—Se refunden en uno los dos Cuerpos del resguardo terrestre con la denominacion de Cuerpo de carabineros de Real Hacienda. (*CL. t. 19, pág. 455.*)

R. O. de 18 setiembre de 1839.

Extracto.—Disponia pudiese la Direccion trasladar de una provincia á otra á los individuos del reguardo y que se observase la Real órden que dispone no puedan contraer matrimonio, ni se admitan casados. (*CL. t. 25, pág. 450.*)

O. del Reg. de 16 junio de 1842.

Los oficiales solo usen la graduacion que les compete.

(GUERRA.) «Habiendo dado cuenta á S. A. el Regente del Reino de la controversia ocurrida entre el Comandante general de Cádiz y el comandante de carabineros de Hacienda pública de la misma plaza, que pretende usar el distintivo de coronel de ejército, y oida tambien la Junta general de inspectores, se ha servido S. A. resolver: Que dicho comandante de carabineros no use aquella divisa de coronel, pues no presenta Real despacho que le autorice á ello. Que los oficiales de carabineros no lleven otras graduaciones que las que por sus empleos les competen. Y

que aquellos que las tengan superiores personalmente no las usen sino con el uniforme de retirados.—De orden de S. A. etc.—Madrid 16 de junio de 1842.» (CL. t. 28, pág. 282.)

R. O. de 22 agosto de 1842.

Circunstancias que deben tener.

(HAC.) Extracto.—«He determinado que los pretendientes á las referidas plazas renuncian en lo sucesivo las cualidades siguientes: No tener menos de 19 años de edad, ni mas de 35 si han servido en el ejército, y de 30 si proceden de la clase de paisanos; que sean solteros, de buena conducta; que no tengan ningún impedimento físico ni moral, que sepan leer y escribir, especialmente los últimos, y de acreditada adhesión á las instituciones que rigen.....» (CL. t. 29, p. 218.)

R. O. de 11 noviembre de 1842.

Extracto.—Contiene el reglamento para la organizacion y servicio del Cuerpo de carabineros, que no insertamos para dar lugar al de 31 de enero de 1854.

Circ. de la Insp. de 3 mayo de 1847.

No sean conducidos á la cárcel pública.

Extracto.—«La habitud subsistente de que por cualquier delito que cometa un carabiniere haya de ser conducido á la cárcel pública es necesario que desaparezca. Por lo tanto prevengo á V. que de modo alguno ponga en dichos establecimientos á los carabineros, como no sea en un caso urgente y en pueblo en que no haya otro local á propósito y sea necesario asegurar la persona del delincuente, pero aun esto en calidad de retencion.....» Tambien se dispone se establezca en la capital con este objeto un cuartelillo seguro. (CL. t. 41, p. 18.)

Circ. de la Insp. de 17 febrero de 1848.

Sobre retiros y jubilaciones.

Extracto.—Dispone que los jefes y oficiales al retirarse del servicio tendrán la libre facultad de solicitar retiro ó jubilacion, justificando hallarse en edad que no baje de 50 años, ó haciendo constar su absoluta imposibilidad para continuar en el servicio activo. (CL. t. 43, p. 97.)

R. O. de 15 mayo de 1848.

Su dependencia.

(HAC.) Extracto.—«Artículo 1.º El Cuerpo de carabineros del reino dependerá del Ministerio de la Guerra en su organizacion y disciplina, y del Ministerio de Hacienda en todo lo que diga relacion al servicio. Cada uno de

estos Ministerios formará el reglamento concerniente á la parte que les corresponda.

Art. 2.º Tendrá este Cuerpo por exclusivo objeto el resguardo de las rentas públicas, bajo la dependencia del Ministerio de Hacienda y de sus delegados en las provincias, destinándose toda su fuerza á cubrir una sola línea en las costas y fronteras del Reino.....»

Continúa en otros once artículos estableciendo reglas para el servicio y dictando reglas para las aduanas. (CL. t. 44, p. 44.)

R. O. de 7 febrero de 1849.

A quién deben acompañar para cumplimentar á otras autoridades.

(GUERRA.) Extracto.—Habiéndose impedido por el intendente de rentas de la provincia de Santander, que los jefes y oficiales del Cuerpo de carabineros acompañasen al Comandante general para cumplimentar al Obispo de la diócesis, se resolvió: «que el Comandante general de Santander debió presidir en aquel acto á toda la oficialidad que se encontraba en dicha plaza, cualquiera que fuese el instituto militar de que dependiere; siendo al mismo tiempo la voluntad de S. M. que así se verifique siempre que en cualquier otro punto ocurra igual caso.» (CL. t. 46, p. 123.)

R. D. de 18 marzo de 1850.

Extracto.—Contiene el reglamento para el servicio del Cuerpo, que no insertamos por ser posterior el de 31 de enero de 1854.

R. O. de 16 julio de 1850.

Atribuciones sobre reconocimientos.

(HAC.) Extracto.—Dispone que «la fuerza de carabineros destinada al servicio interior ó exterior de una aduana está obligada á obedecer en lo relativo á dicho servicio las prevenciones del administrador, el cual responderá de ellas ante sus respectivos superiores.»

Que este determine el local en que hayan de hacerse los reconocimientos, y se considere como parte de la aduana aun cuando esté fuera del edificio de ella.

Que las denuncias de los efectos solo tendrán lugar antes de haberse presentado estos en dichos puntos ó despues de haber salido de ellos, y siempre deben ser firmadas y bajo la responsabilidad que contrae el denunciador.

Que «el resguardo no podrá proceder por sí al reconocimiento por sospechas de fraude ó contrabando de ningún bulto cerrado, sino que lo presentará en la Administracion de

rentas del pueblo inmediato al lugar de la detencion.» (CL. t. 50, p. 615.)

R. O. de 12 marzo de 1852.

(Hac.) Extracto.—Establece reglas simplificando las formalidades establecidas en la sustanciacion de los expedientes sobre construccion y reparacion de casetas, cuarteles etc. (CL. t. 55, p. 452.)

R. O. de 6 abril de 1852.

Que obedezcan las órdenes de los Gobernadores.

(Hac.) Extracto.—«S. M. ha tenido á bien mandar que esa Inspeccion general prevenga á los jefes de las comandancias de carabineros obedezcan y cumplan las disposiciones que los Gobernadores adopten, así respecto á la custodia de caudales, como en lo relativo á cualquier otro servicio extraordinario que la urgencia de las circunstancias exija, si bien dichas autoridades deberán cuidar de distraer lo menos posible del objeto principal de su institucion á la fuerza de carabineros.—De Real orden etc.—Madrid 6 de abril de 1852.» (CL. t. 55, p. 603.)

R. O. de 22 junio de 1852.

En cuanto á su instituto dependen de los Gobernadores.

(Hac.) «Exmo. Sr.: La Reina (que Dios guarde) se ha enterado de lo expuesto por V. E. en su comunicacion de 25 de mayo último respecto á la necesidad de que se prevenga á los empleados de Hacienda deben entenderse con los comandantes de carabineros, por conducto de los respectivos Gobernadores de provincia, y no directamente, como en algunos casos lo verifican, haciéndoles prevenciones relativas á la colocacion de la fuerza de su mando; y teniendo en consideracion los conflictos en que por este medio puede ponerse á aquellos jefes, S. M. se ha servido declarar que el Cuerpo de carabineros del reino depende inmediatamente en lo concerniente al servicio de su instituto de los Gobernadores de provincia, y no de ningun otro empleado de Hacienda.—De Real orden etc.—Madrid 22 de junio de 1852.» (CL. t. 56, p. 229.)

R. D. de 31 enero de 1854.

Reglamento del Cuerpo etc.

(Hac.) «Conformándome con lo que me ha expuesto el Ministro de Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Ministros, vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Quedan suprimidos el Cuerpo de aduaneros, el resguardo especial de sa-

les y las rondas volantes de Cataluña, conocidas con el nombre de parrots.

Art. 2.º El servicio que prestaban estos Cuerpos para la represion del contrabando y fraude se hará en lo sucesivo por el de carabineros del Reino.

Art. 3.º Tendrá este Cuerpo un aumento de 3,680 hombres en el personal de infantería para atender á los servicios de su instituto y á la creacion de los torreros de costas, acordada en R. O. de 4 de octubre 1851. Los individuos que componen en la actualidad los Cuerpos suprimidos por el art. 1.º de este decreto, quedan refundidos en el de carabineros, siempre que reunan las circunstancias prevenidas en su reglamento y deseen continuar en el mismo.

Art. 4.º El Cuerpo de carabineros del Reino depende del Ministerio de la Guerra en cuanto á su organizacion personal y material y disciplina, y del de Hacienda en todo lo concerniente al servicio especial para que fué instituido y al percibo de haberes.

Art. 5.º Los individuos del Cuerpo de carabineros serán sin embargo Juzgados por los tribunales de Hacienda en los delitos de contrabando y defraudacion. El Ministro de Hacienda, ó los Gobernadores de provincia á quienes delegue sus facultades en las instrucciones, podrán tambien suspenderlos del servicio cuando faltan á su deber en el cumplimiento de las obligaciones especiales que les impongan los reglamentos de Hacienda.

Art. 6.º El Ministro de Hacienda dictará los reglamentos é instrucciones convenientes para determinar la forma en que el Cuerpo de carabineros ha de prestar su servicio en el interior del Reino y en las fronteras, en las fábricas de sales, en los espumeros, en las aduanas, muelles, bahías y puertos.

Art. 7.º Los Gobernadores de provincia podrán disponer de la fuerza de carabineros para la conservacion del orden público cuando las circunstancias lo requieran.—Dado en Palacio á 31 de enero de 1854.» (CL. t. 61, pág. 135.)

REGLAMENTO

QUE S. M. LA REINA SE HA DIGNADO APROBAR PARA EL SERVICIO DEL CUERPO DE CARABINEROS DEL REINO.

CAPÍTULO PRIMERO.

Objeto y dependencia de la institucion.

Artículo 1.º El Cuerpo de carabineros del Reino es una fuerza organizada militarmente bajo la direccion de una Inspeccion general. El objeto de esta fuerza es impedir y apre-

hender el contrabando y el fraude en las fronteras y costas de la Península é islas adyacentes, y vigilar las fábricas de sal, sea cualquiera el punto en que estén situadas.

Art. 2.º El Cuerpo de carabineros depende:

1.º Del Ministerio de la Guerra en cuanto á la organizacion, disciplina y material.

2.º Del Ministerio de Hacienda en todo lo relativo al objeto del servicio para que ha sido creado y al percibo de los haberes.

3.º De la autoridad militar exclusivamente cuando la provincia fuese declarada en estado excepcional.

Art. 3.º La dependencia del Ministerio de la Guerra se especificará en el reglamento que se forme por el mismo Ministerio. La dependencia del Ministerio de Hacienda es la que se explica en el presente reglamento.

Art. 4.º El Ministerio de Hacienda comunicará directamente al Inspector general y á los jefes que de él dependan, las órdenes relativas al servicio que debe prestar el Cuerpo de carabineros.

Art. 5.º El Ministerio de Hacienda podrá suspender del ejercicio de sus funciones á cualquiera jefe ó subalterno de esta fuerza en las provincias, dando conocimiento de la suspension al Inspector general del Cuerpo para los efectos correspondientes.

En caso necesario el propio Ministerio pasará la comunicacion oportuna al de la Guerra, á fin de que por los trámites ordinarios proceda á la separacion del jefe ó subalterno que hubiese sido objeto de esta medida, segun la gravedad del caso.

Art. 6.º Podrá asimismo proponer el Ministerio de Hacienda al de la Guerra la traslacion de cualquiera jefe ó subalterno desde una provincia á otra, siempre que así lo exija el bien del servicio, y por el último de dichos Ministerios se comunicarán directamente al Inspector general las órdenes para su cumplimiento.

Art. 7.º El Inspector general del Cuerpo de carabineros del Reino, asi como el Director general de Aduanas y Aranceles, adoptarán por sí las medidas que juzguen oportunas, siempre que estén en las atribuciones de los mismos: en otro caso propondrán á S. M. por el Ministerio de Hacienda lo que creyeran conveniente.

Art. 8.º La fuerza de carabineros del Reino se distribuirá en toda la extension de las provincias de costas y fronteras de la Península é islas adyacentes, segun y en la forma que se determinó en Rs. Decrs. de 14 de junio de 1850, y 30 de marzo de 1852.

Art. 9.º De la fuerza de Carabineros se

destinará la que se considere necesaria para la vigilancia de las salinas, sea cualquiera el punto del Reino é islas adyacentes en que estén situadas.

Art. 10. La distribucion de la fuerza de carabineros por provincias, y número de individuos que han de destinarse á las salinas, se propondrá por el inspector al Ministerio de Hacienda para su aprobacion ó rectificacion.

Art. 11. Una vez aprobada la distribucion no podrá alterarse sin que lo acuerde el Ministerio de Hacienda.

Art. 12. Los puestos que han de ocupar los carabineros son de dos clases: fijos y movibles. El Gobernador de la provincia, oido el parecer de los administradores de Hacienda pública y Aduanas, así como el del jefe del distrito y comandancia, propondrá los puntos donde deben establecerse los fijos al Ministerio de Hacienda, por el cual, oido el Inspector general del Cuerpo, se resolverá lo conveniente. Una vez establecidos los puestos fijos, no podrán ser variados sino en virtud de Real orden, comunicada por el Ministerio de Hacienda. Los puestos movibles los establecerá el Gobernador á propuesta del jefe de la comandancia, oyendo para ello á los referidos administradores.

El Inspector general del Cuerpo determinará el relevo de los puestos fijos y movibles dentro de cada comandancia con la frecuencia que considere conveniente, procurando que ningun oficial ni individuo de tropa se estacione mas de tres meses en punto determinado.

Art. 13. El Gobernador de la provincia podrá prevenir al comandante de carabineros destine una parte de fuerza situada en puesto fijo para que cubra un servicio accidental: pero ni en este ni en otro caso alguno en que disponga del servicio de los carabineros, podrá mezclarse en las operaciones y movimientos militares que hayan de hacerse para la ejecucion del servicio.

Art. 14. Los Gobernadores de provincia podrán suspender interinamente del ejercicio de sus funciones á cualquier jefe ó subalterno de la fuerza de carabineros cuando por su apatia ú otra causa se entorpezca el servicio á que están destinados, dando conocimiento de la suspension al Ministerio de Hacienda y al Inspector general del Cuerpo, á quien se pasarán las diligencias que se instruyan ó los datos en que se funde aquella medida.

Art. 15. Los administradores de aduanas y Hacienda pública, bajo su responsabilidad, podrán en sus respectivas demarcaciones prevenir á la fuerza de carabineros que se apli-

que á un servicio urgente é imprevisto, dando cuenta instantánea al Gobernador.

Art. 16. Ninguna autoridad ni funcionario público podrá tener con el título de ordenanza ni otro alguno al servicio especial de sus oficinas, ó al suyo particular, á ningun individuo del Cuerpo de carabineros.

Art. 17. Los Gobernadores de provincia presidirán la junta mensual, que han de celebrar con asistencia de los administradores de Hacienda pública y aduanas y el comandante de carabineros; y en ella conferenciarán sobre el servicio hecho por los carabineros en el mes anterior, y resultados obtenidos en los valores de las rentas, levantando acta con las observaciones que les sugiera su celo, de la cual remitirán copia al Ministerio de Hacienda y á la Inspeccion general de carabineros.

CAPITULO II.

Obligaciones de los carabineros.

Art. 18. Todo individuo del Cuerpo de carabineros está obligado á obedecer y auxiliar al Gobernador de la provincia y á los administradores de Hacienda pública y aduanas, y no es por tanto responsable de sus actos obedeciendo á la autoridad y funcionarios expresados.

Art. 19. Cuando alguna autoridad de las que los individuos del Cuerpo de carabineros están obligados á obedecer, dictase alguna disposicion que estos conceptuaren improcedente, la cumplirán sin embargo, dando cuenta en seguida á la autoridad superior á quien corresponda, pudiendo no obstante significarlo antes, en el caso de que no se atrase el servicio á que fueron destinados, para la providencia de remedio que resulte procedente.

Art. 20. Todo individuo del Cuerpo de carabineros que tenga noticia ó presuncion de la existencia de géneros de fraude ó contrabando, ó de que va á verificarse su introduccion, está obligado á dar el oportuno aviso á su jefe inmediato; y cuando la noticia llegue al jefe de la fuerza, bien por este ó por otro conducto, la comunicará sin dilacion á la autoridad mas próxima de Hacienda.

Art. 21. La fuerza de carabineros destinada á una provincia no podrá pasar al territorio de otra sino en los casos siguientes:

1.º Cuando así convenga para la aprehension de los reos y efectos que á su vista hayan pasado la línea, en cuyo caso dará conocimiento al puesto ó fuerza mas inmediata para que acuda á suplir su falta del modo que

le sea posible. Los destacamentos de puestos fijos que hubieren emprendido la persecucion del contrabando, deberán regresar á ellos tan luego como encuentren un puesto movable ó partida volante que pueda continuarla.

2.º Cuando recibiere orden de la autoridad competente para el reconocimiento de algun edificio ó finca rústica cercada que se halle fuera de la zona.

Art. 22. Las partidas de carabineros que estén prestando servicio en puestos fijos ó móviles, no podrán separarse del territorio en que deban efectuar el servicio sin orden de la autoridad competente, á no ser que vayan persiguiendo géneros de contrabando ó fraude, en cuyo caso darán aviso á la fuerza mas inmediata, para que no quede enteramente desatendido el servicio encargado á la fuerza que va en seguimiento de los defraudadores ó contrabandistas.

Art. 23. Los jefes y oficiales de carabineros pueden, dentro del territorio á que estén destinados, visitar las Administraciones subalternas, tercenas y estancos, y reconocer las tiendas-lonjas, posadas y cualquier edificio ó finca rústica cercada en los casos y en la forma que se halle establecida por las disposiciones que rijan en la materia.

Art. 24. Los que estén mandando alguna fuerza de carabineros no permitirán que durante la noche circulen dentro de la zona las mercaderías ó efectos extranjeros, y las de prohibida exportacion ó sujetas á altos derechos, á no ser que el transporte de dichos artículos se verifique en las diligencias galeras ó mensajerías sujetas á itinerarios fijados de antemano y con las guías correspondientes.

Art. 25. Los oficiales, en el distrito de su demarcacion, instruirán las primeras diligencias contra los reos de contrabando ó defraudacion, enviando en seguida á las autoridades correspondientes las referidas diligencias, reos y efectos aprehendidos, para los fines que previene el R. D. de 20 de junio de 1852.

Art. 26. Sin perjuicio de la formacion de las diligencias de que trata el artículo anterior, deberán los oficiales, sargentos ó cabos de carabineros que hagan alguna aprehension de contrabando, dar parte instantáneamente al jefe de la comandancia, expresando las circunstancias del hecho, y el número de carruajes, caballerías, bultos y reos aprehendidos. El jefe de la comandancia remitirá este parte, á la hora de haberlo recibido, al Gobernador de la provincia.

CAPITULO III.

Servicio de los carabineros en las aduanas marítimas y terrestres, muelles y bahías.

Art. 27. La fuerza que se destine al servicio de las aduanas marítimas y terrestres y al de los muelles y bahías, obedecerá las órdenes del administrador de aduanas respectivo.

Art. 28. La clase de servicio que ha de prestar dicha fuerza se arreglará estrictamente á lo que determina la instrucción de aduanas y aranceles de 3 de marzo de 1852 para los aduaneros.

Art. 29. El oficial de carabineros del punto en que esté situada la aduana, y en la capital el jefe de la comandancia, presenciarrán de oficio, como delegados del Gobernador, los reconocimientos, adeudos y demás operaciones de la aduana, bien se verifiquen dentro de ella ó en el muelle; y sin perjuicio de llamar la atención del administrador en el acto, si notare alguna falta en el servicio, dará parte á aquella autoridad para la providencia que corresponda.

Art. 30. En ningún caso podrá el jefe de carabineros exigir que se interrumpa el despacho de las mercaderías de aduanas; pero será un deber suyo vigilar que no se extraigan ni retiren por los dueños, consignatarios ó sus agentes, aun después de despachadas si no acreditan documentalmente haber satisfecho el adeudo, sin mas excepción que los objetos que no estan sujetos al pago de derechos.

Art. 31. En el caso de que el comandante ó jefe de carabineros del punto en que está la aduana tuviese contidencia ó sospecha de que cualquiera bulto que se introduce en los almacenes de la misma contiene géneros de contrabando ó dobles bultos con el fin de defraudar á la Hacienda, reclamará del administrador que se pese, precinte y selle en el acto, debiendo en consecuencia citarse al expresado jefe para que concorra al reconocimiento el día en que haya de verificarse. Si resultase en este acto la existencia de contrabando ó fraude, obtendrá el jefe ó oficial de carabineros una parte como los demás funcionarios que asistan de oficio.

CAPITULO IV.

Servicio de los carabineros en las salinas.

Art. 32. La fuerza de carabineros que se destine á las fábricas de sal dependerá inmediatamente del administrador de las mismas

en lo concerniente al servicio que deben desempeñar.

Art. 33. Dicha fuerza se dividirá en dos secciones, una fija y otra volante: la primera vigilará todas las pertenencias de la fábrica y espumeros inmediatos, y la segunda reconocerá con frecuencia los salobrales que haya en la provincia, impidiendo el fraude y contrabando de sal.

Art. 34. El administrador ó jefe de la fábrica podrá ocupar á los carabineros en la destrucción de los manantiales salados, y en mezclar sus aguas para hacerlas inservibles, dejando en los puntos de imposición uno ó mas individuos para su custodia. Cuando ocurran estos trabajos se les facilitarán espuelas, palas y azadas, y cualquier otro útil que necesiten.

CAPITULO V.

Prevenciones generales.

Art. 35. Se prohíbe á los individuos del Cuerpo de carabineros:

1.^o Mantener relaciones de amistad ó de confianza con personas sospechosas en concepto de contrabandistas ó defraudadores.

2.^o Comerciar, traficar ó admitir regalos de persona alguna por tolerar ó hacer gracia en el desempeño de sus deberes.

3.^o Concurrir á tabernas, casas de juego ó de mala nota.—Madrid 31 de enero de 1854.»

R. O. de 8 octubre de 1857.

Sobre recargo de servicio.

(GUERRA.) Extracto.—En consulta «acerca de si la R. O. de 10 de agosto último que prohíbe el que á los individuos se les imponga el castigo de servir en otro Cuerpo que aquel á que pertenece, deroga la de 31 de diciembre de 1855 destinando á los Cuerpos de Ultramar á los que, procedentes del Cuerpo de carabineros, merezcan por sus delitos ó faltas un recargo de servicio con el cual lleguen á cumplir cuatro ó mas años de obligatoria permanencia en las islas, si fuesen solteros ó viudos sin hijos y no excediesen de 30 años de edad;..... S. M. se ha servido resolver que esta disposición no ha sido destruida por los efectos de aquella, ni tampoco altera en lo mas mínimo los que en virtud de la R. O. de 8 de julio de 1843 rigen para con los desertores de primera vez, á los cuales se les impone el mismo castigo.—De Real orden etc.—Madrid 8 de octubre de 1857.» (CL. t. 74, p. 34.)

R. O. 12 enero de 1864.

Conocimiento en el quebrantamiento de consigna y la connivencia en el contrabando: declaracion del desafuero.

(GUERRA.) «Enterada la Reina (Q. D. G.) del expediente promovido con motivo de una competencia entre el Juzgado especial de Hacienda de la ciudad de Málaga y el de la Capitanía general de Granada á consecuencia de una causa criminal instruida por la jurisdiccion militar contra un jefe y varios carabineros por connivencia en un alijo de contrabando que ocurrió en la demarcacion del distrito de la expresada comandancia, como asimismo de la consulta que V. E. dirigió á este Ministerio exponiendo que el quebrantamiento de la consigna y la connivencia de los carabineros en cualquier acto de defraudacion no deben reputarse como delitos de contrabando, sino como puramente militares, porque cuando el desembarco ó pase de los géneros de ilícito comercio se verifica por el punto que debieran vigilar incurren en la pena del centinela que abandona el puesto y no cumple la consigna, siendo la defraudacion que pueda cometerse una circunstancia agravante de la comision del mismo delito, pero que no varia su carácter militar; S. M., de conformidad con lo expuesto por el Consejo de Estado en pleno, se ha servido resolver:

1.º Que constituyendo la connivencia un delito especial, principal, corresponde su conocimiento á la jurisdiccion de Hacienda, con arreglo á la legislacion vigente.

2.º Que la declaracion previa del desafuero en los delitos de fraude para someter á ella á los carabineros culpables del mismo, y consignada en el art. 96 del reglamento militar del Cuerpo de carabineros publicado en 1856, aun cuando sea por delitos de fraude, queda derogada, toda vez que su supresion no afecta inmediata y directamente al fuero completo de guerra de que gozan sus individuos.

3.º Que atendido el doble carácter del enunciado Cuerpo de carabineros militar y administrativo, y por lo tanto la dualidad de deberes y de responsabilidades á que están sometidos; la necesidad de conservar la disciplina; la separacion que puede hacerse de los actos sucesivos en la comision de un delito; la de pertenecer ambos á distintas jurisdicciones; la conveniencia de evitar que ninguno quede impune, y la consideracion de que estimándolos separadamente, ni se turba el orden de las jurisdicciones ni se divide la continuidad de la causa; connivencia y el quebrantamiento de la consigna por los carabi-

neros, cuando tengan por objeto la perpetracion del delito de contrabando, son dos hechos punibles que constituyen dos delitos separados y distintos.

Y 4.º Que en vista de lo prevenido en la R. O. de 25 de enero de 1845, con el fin de evitar conflictos jurisdiccionales, deben formarse en semejantes casos dos sumarias distintas por cada una de las dos jurisdicciones de Guerra y Hacienda, la una en calificacion de la conducta militar de los carabineros para la averiguacion y castigo del quebrantamiento de la consigna, y la otra por la jurisdiccion de Hacienda por delito de connivencia, considerándose al culpable como militar y como agente de la Administracion, remitiéndose al efecto á ambos Juzgados los respectivos testimonios.»—De Real orden, comunicada por dicho Sr. Ministro, lo trasladado á V. E. para su conocimiento y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 12 de enero de 1864.—Señor.....» (CL. t. 91, p. 25.)

R. O. de 21 febrero de 1865.

Sobre castigos de faltas.

(GUERRA.) Disponiendo que los castigos de uno y dos meses de prision por las faltas de embriaguez, contraer deudas, dormir fuera del cuartel y demás que señaló la Real orden de 5 de noviembre de 1779 que cometan los individuos del Cuerpo de carabineros, corresponde imponerlos al Inspector general del mismo con arreglo al art. 89 del reglamento militar del Cuerpo de 25 de octubre de 1856, siempre que no se hubiese formado para su imposicion sumaria judicial, pues en este caso el sobreseimiento ó resolucion corresponde al Capitan general del distrito, segun lo dispuesto en las Reales órdenes de 4 de noviembre de 1846, 29 de mayo de 1848 y 31 de enero de 1851. (CL. t. 93, p. 175.)

R. D. de 26 Setiembre de 1865.

Dividiendo el Cuerpo de carabineros en dos secciones de carabineros del Reino una, y de carabineros veteranos la otra, que sustituirá al resguardo de consumos: Facultades de los Gobernadores de provincia.

(HAC.) «Atendiendo á las razones que me ha expuesto el Ministro de Hacienda, de acuerdo con el parecer de mi Consejo de Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º El Cuerpo de carabineros del Reino se dividirá en dos secciones, denominándose la una *carabineros del Reino*, y la otra *carabineros veteranos*.

Art. 2.º Los carabineros del Reino ejer-

serán la vigilancia de las costas y fronteras en la forma prevenida por la legislación vigente. La Sección de carabineros veteranos se compondrá de los individuos del Cuerpo de carabineros que tengan mejores notas, y prestará exclusivamente el servicio especial á que se le destina en los puertos, muelles, bahías, puntos de descarga y de reconocimiento, en los fieltos, puertas y portillos, en el recinto de aduanas terrestres y marítimas, y en los rálidos de las poblaciones en que la Hacienda pública administra los derechos de consumos.

Art. 3.º La Sección de carabineros veteranos tendrán la misma organización militar que el Cuerpo de que forma parte con la dotación de jefes y oficiales que se juzguen necesarios, y desempeñará el servicio especial que se le encomiende á las órdenes de los Gobernadores civiles, y por delegación de estos á las de los administradores de aduanas, y de los de Hacienda pública ó de los especiales de consumos, cuyas órdenes serán transmitidas por los inmediatos jefes militares del Cuerpo responsable de la ejecución.

Art. 4.º Los Gobernadores de las provincias podrán por sí, ó bien oyendo á los administradores encargados de las rentas de aduanas y consumos, suspender en el ejercicio de sus funciones á los carabineros veteranos, dando parte en el acto al jefe militar mas inmediato del Cuerpo para la determinación que gubernativamente ó con arreglo á ordenanza haya lugar, sin perjuicio de que la Administración de Hacienda conozca en su día en la parte que le corresponda respecto á la falta ó delito cometido.

Art. 5.º El Ministro de la Guerra dispondrá que la Inspección general de carabineros cubra las vacantes en la Sección de veteranos con los individuos de mejores notas.

Art. 6.º Los Ministerios de la Guerra y de Hacienda fijarán la fuerza de que ha de componerse la Sección de carabineros veteranos, cuyo presupuesto de gastos se cubrirá con una parte del asignado al Cuerpo y con el crédito concedido al resguardo especial de consumos.

Art. 7.º Para plantear lo que se dispone en este Real decreto se procederá desde luego á poner en práctica el servicio de aduanas, limitando el de consumos por vía de ensayo al de las capitales que el Gobierno juzgue conveniente por su importancia, extendiéndose despues á los demás puntos de España con las modificaciones que la experiencia aconseje.

Art. 8.º Quedan derogadas todas las disposiciones anteriores que se opongan al cum-

plimiento de la presente, debiendo procederse desde luego á la formación del reglamento correspondiente.—Dado en San Ildefonso á 26 de setiembre de 1865.—Está rubricado de la Real mano.—El Ministro de Hacienda, Manuel Alonso Martínez. (*CL. tomo 94, p. 570.*)

R. O. de 4 octubre de 1865.

(GUERRA.) Dictando reglas para llenar las vacantes de tropa del Cuerpo; se establece:

1.º Que se consulte la voluntad de los individuos de los batallones provinciales, que reuniendo las condiciones reglamentarias, quieran pasar al Cuerpo de carabineros, con la ventaja de que puedan verificarlo los casados, en el número que V. E. juzgue conveniente.

2.º Que para la entrega y demás formalidades que origine el pase de dichos individuos, se ponga V. E. de acuerdo con el Director general de infantería, á fin de subsanar cuantas dudas puedan presentarse.

3.º Que á los licenciados del ejército que tengan buenas notas y robustez suficiente, se les admita tambien en el Cuerpo de carabineros, aun cuando hayan contraído matrimonio despues de separados del servicio; y por último, que á los individuos del instituto que sirven en clase de soldados y cabos se les conceda licencia para contraer matrimonio, siempre que con su haber, premio y cruces reúnan paga de sargento, quedando por lo tanto modificado el art. 17 del reglamento militar del Cuerpo, así como las Rs. Ords. de 3 de diciembre de 1857 y 2 de mayo de 1862.—De la de S. M. etc.—Madrid 4 de octubre de 1865. (*CL. t. 94, p. 601.*)

R. D. de 12 noviembre de 1865.

Distribución de comisos: Que se verifique á luego de ultimado el expediente de comiso en la vía administrativa.

(HAC.) «Artículo 1.º Desde la publicación del presente decreto será distribuida entre la fuerza del resguardo la parte que le corresponda del valor de los géneros que aprehenda, en el momento que se últime el expediente de comiso en la vía administrativa.

Art. 2.º En todas las aprehensiones que verifique el Cuerpo de carabineros fuera de los puntos de reconocimiento, despues de segregada la parte correspondiente á la Hacienda, la del denunciador si le hubiere, y los demás gastos de que trata el art. 526 de las ordenanzas de aduanas, se harán solo las participaciones siguientes:

1.º Dos partes para el jefe aprehensor, sea cual fuese su clase y categoría.

2.º Una parte para el jefe de la comandancia, distribuible según disponga la Inspección general del Cuerpo, entre aquel y los demás jefes que tengan mando y representación en la provincia y distrito correspondientes al punto donde se haya verificado la presa.

Y 3.º Una parte para cada uno de los demás individuos que personalmente hayan concurrido al acto material de la aprehensión.

Art. 3.º Se descontará el 4 por 100 de todas las cantidades que deban percibir los individuos del resguardo de carabineros, de consumos y de sal por aprehensiones de géneros, en los casos de fraude y contrabando, verificadas fuera de los puntos de reconocimiento y que ocasionen procedimiento administrativo judicial. Dicho descuento ingresará en el Tesoro público en concepto de depósito, formando un fondo de reserva, destinado á la devolución del importe de las presas que declaren improcedentes los Tribunales de Justicia.

Art. 4.º Si la experiencia acreditase que el 4 por 100 que fija el artículo anterior no es suficiente para cubrir las devoluciones que acuerden los tribunales ordinarios, se aumentará el descuento en la proporción necesaria para satisfacer aquellas obligaciones.—Dado en San Ildefonso á 12 de noviembre de 1865.—Está rubricado de la Real mano.—El Ministro de Hacienda, Manuel Alonso Martínez.» (CL. t. 94, p. 786.)

El anterior decreto tuvo por objeto evitar el retraso con que se verificaba la distribución de comisos entre los carabineros del Reino y resguardo de consumos y sales, pues se esperaba á que recayese sentencia ejecutoria, en las causas criminales, matando así el estímulo eficaz para la persecución del contrabando y fraude.

R. D. de 22 marzo de 1867.

La Sección de veteranos prestará su servicio en donde exprese, y estableciendo un resguardo especial de consumos.

(HAC.) «Artículo 1.º La Sección de carabineros veteranos que, como parte del Cuerpo de carabineros del Reino, fué creada por mi R. D. de 26 de setiembre de 1865, prestará el servicio especial de su instituto en los puertos, muelles, bahías, puntos de descarga y de reconocimiento, y en los recintos de las aduanas terrestres y marítimas.

Art. 2.º Para el servicio que con arreglo

Tomo III.

al art. 2.º del expresado decreto presta esta fuerza en los radios de las poblaciones en que la Hacienda pública administra los derechos de consumos, en los fieltos, puertas, portillos y demás puntos de reconocimiento de las especies sujetas al referido impuesto, se establece un resguardo especial de consumos, cuya organización se ajustará al reglamento que he tenido á bien aprobar con esta fecha.—Dado en Palacio á 22 de marzo de 1867.» (CL. t. 97, p. 582.)

El reglamento que se cita en el anterior decreto se inserta en RESGUARDO ESPECIAL DE CONSUMOS, á donde nos remitimos así como á CONTRABANDO Y FRAUDE: HACIENDA PÚBLICA: JURISDICCION DE HACIENDA, ETC.

CÁRCEL. Edificio público destinado á la retención de las personas sometidas á la acción de la justicia ó reputadas culpables de delito ó de falta en su caso. En el artículo PRISIONES pueden consultarse las disposiciones sobre cárceles, y véanse además ARRESTO, ALCAIDE.

CÁRCEL DE CORONA. Cárcel que suele haber en todas las diócesis para personas eclesiásticas cuando son juzgadas por la jurisdicción eclesiástica. No habiendo cárcel de corona, y aun habiéndola, algunas veces, por consideración á la calidad del reo, suele señalarse la casa de este por cárcel, ó es encerrado en algún convento ó colegio. Cuando los eclesiásticos son juzgados por la jurisdicción temporal son llevados á las cárceles comunes, salvo también las consideraciones debidas al sexo y dignidad de las personas.—V. PRISIONES.

CARCELAJE. Los derechos que con arreglo á los aranceles cobran los alcaides de los presos que no sean pobres ni sean absueltos de su pago. Sobre este particular debe consultarse el artículo ALCAIDE, ordenanzas de las Audiencias, los aranceles judiciales, y el art. 21 de la ley de prisiones de 26 de junio de 1849.—V. PRISIONES.

CARDENAL. Dignidad que sigue inmediatamente á la del Papa en la jerarquía eclesiástica.

CAREO. Confrontación, ó comparecencia ante el juez de los testigos u otras personas que han declarado en causa criminal y no están conformes sobre la cer-

teza de algun hecho ó sus circunstancias, con el fin de averiguar mejor la verdad.

CARGA. Lo mismo que tributo, pecho, gravámen, imposicion ó cánón que afecta á una cosa ó persona, ó á los vecinos de un pueblo, ó á los súbditos de una nacion ó al pueblo ó á la nacion misma. En este sentido decimos, y véanse, CARGAS DE JUSTICIA, CARGAS PÚBLICAS, CARGAS CONCEJILES, CARGAS ESPIRITUALES, ETC., ETC.

CARGA DE APOSENTO. V. APOSENTO.

CARGA Y DESCARGA. Hay dos impuestos establecidos en nuestros puertos como en retribucion del servicio que se presta á los buques, facilitándoles las operaciones del comercio, ó bien los medios de entrar y permanecer cómodamente en las bahías. Estos derechos son los de carga y descarga y el de fondeadero. El primero se paga en los puertos en que tiene lugar la carga ó descarga en proporcion á las cantidades en que se verifica; y el de fondeadero se paga en un solo puerto que es el primero en que se devenga.—V. FONDEADERO, y en AGUAS el art. 13 de la ley de 3 de agosto de 1866.

CARGARÉME. Documento, equivalente á un recibo, en que las oficinas donde se recaudan fondos hacen constar haber ingresado en ellas alguna cantidad con las formalidades que estén prevenidas.—V. CONTABILIDAD.

CARGAS DE JUSTICIA. Se conocen con este nombre las obligaciones del Estado ó del Tesoro comprendidas en una seccion especial del presupuesto de gastos. Para dar mejor idea de lo que se entiende por *cargas de justicia*, copiaremos á la letra de cualquiera de nuestras leyes de presupuestos la seccion dedicada á dichas cargas. Hé aquí de la ley de 2 de diciembre de 1852. Dice:

SECCION 13.^a—*Presupuesto de las cargas de justicia.*—Capítulo único.

1	Oficios enajenados.....	938,368
2	Derechos enajenados.....	6.461,121
3	Recompensas por salinas..	584,675
4	Asignaciones censuales sobre terrenos propios del Estado.....	247,318

5	Asignaciones censuales sobre arbitrios ó derechos del Estado.....	928,554
6	Rentas decimales... ..	130,000
7	Recompensas por servicios.....	943,529
8	Asignaciones á corporaciones municipales....	312,393
9	Censos y pensiones afectas á fincas del Estado..	375,847
10	Rentas vitalicias.....	1.500,000
Rs. vn.....		12.421,805

Lo que importan las cargas de justicia, segun el presupuesto para 1868-1869 es lo siguiente:

1. ^o	Oficios y derechos enajenados.....	673.553
2. ^o	Recompensas por salinas..	38.237
3. ^o	Asignaciones censuales sobre terrenos y derechos del Estado.....	150.455
4. ^o	Rentas decimales.....	13.000
5. ^o	Recompensas por derechos, rentas y servicios.....	302.024
6. ^o	Asignaciones á corporaciones municipales.....	1.039
7. ^o	Censos y pensiones afectas á fincas del Estado.....	9.857
8. ^o	Rentas vitalicias.....	86.120
9. ^o	Condonaciones.....	180.000
Escudos.....		1.454.285

Dada una idea de lo que se conoce en nuestra legislacion de Hacienda por *cargas de justicia*, hé aquí ahora las disposiciones dictadas sobre esta materia, muy enlazada como se deja ver con los artículos CRÉDITOS CONTRA EL ESTADO: OFICIOS ENAJENADOS, y algunos otros que deberán consultarse.

Ley de 23 mayo de 1845.

«Art. 16. De los productos del derecho de consumo se satisfará á los dueños de alcabalas y cientos enajenados de la Hacienda pública la cantidad que resulte haberles correspondido en el año comun del último quinquenio. Este abono continuará haciéndose mientras no se acuerde otro medio de indemnizacion.»

Circ. de 9 mayo de 1846.

Reglas para el pago á los dueños de alcabalas y cientos.

(DIR. GEN. DEL T. P.) Extracto.—Con este objeto se previno lo siguiente:

«1.º Con arreglo al art. 16 del presupuesto de ingresos vigente debe satisfacerse anualmente á los dueños de alcabalas y cientos enajenados de la corona lo que resulte haberles correspondido en el año común del último quinquenio.

2.º La cantidad que á este respecto hayan de percibir en cada mes, cuidarán las oficinas de incluirle en los presupuestos como una carga de justicia, á fin de que la Contaduría general del Reino pueda tenerla presente al formar las notas de aquella clase de atenciones.

3.º El pago de lo devengado por los referidos participes con anterioridad al 1.º de julio de 1844, y de lo que desde dicha fecha dejó de satisfacerse hasta fin de diciembre de 1845, por haberse entregado indebidamente lo que les correspondía al Banco español de San Fernando por cuenta de sus servicios, no puede acordarse por esta Direccion sin que lo determine el Ministerio de Hacienda, al que deben dirigir los interesados las reclamaciones que les convenga.» (CL. t. 37, p. 248.)

R. O. de 13 agosto de 1846.

Alcabalas anteriores á 1845: posteriores.

(Hac.) Para satisfacer alcabalas enajenadas que se debían á su dueño se mandó lo siguiente:

«1.º Que con arreglo á la ley de presupuestos de 23 de mayo del año último, se paguen las referidas alcabalas á los participes en ellas desde 1.º de enero de 1845 en adelante, usando los intendentes de la autorizacion que les confiere el art. 17 de la instruccion de 5 de enero último, formada para llevar á efecto el contrato con el Banco español de San Fernando.

2.º Que respecto al abono de las alcabalas anteriores al 1.º de enero del precitado año de 1845, estando dispuesto por el artículo 2.º de la R. O. de 21 de setiembre de 1841, y la de 31 de octubre de 1844 que la ratifica, que los créditos de los participes de alcabalas enajenadas se admitan en pagos de lanzas, medias anatas y contribuciones atrasadas hasta fin de diciembre de 1840, se ample este plazo hasta fin de igual mes de 1844; haciendo extensiva la compensacion á los censos que están al cargo de la Administra-

cion general de bienes nacionales, y que contra sí tengan dichos participes.

Y 3.º Que se aplace el reintegro á los mencionados participes de los créditos que resultan á su favor, anteriores al 1.º de enero de 1845, despues de hecha la compensacion, para cuando el Gobierno determine el modo y forma de atender á estos y otros acreedores que puedan considerarse de privilegiada naturaleza.—De Real orden etc.—Madrid 13 de agosto de 1846.» (CL. t. 38, p. 170.)

Ley de 20 febrero de 1850.

(Hac.) Extracto.—Aprueba los presupuestos para el año 1850, que dicen en su «Art. 10. Asimismo presentará anualmente el Gobierno á las Cortes nota de las *cargas de justicia* que dentro del mismo año se hubieren reconocido; sin que pueda proceder á satisfacerlas hasta que se le conceda el competente crédito.» (CL. t. 49, p. 332.)

R. O. de 4 marzo de 1851.

(Hac.) «La Reina.... ha tenido á bien mandar, de acuerdo con su Consejo de Ministros, que los documentos y expedientes que existan en esa Direccion se pasen á la del Tesoro; y que los que se hallen instruidos para reconocer alguna nueva *carga de justicia*, ó que se instruyan en lo sucesivo, se remitan á medida que se complete su instruccion, para que por este Ministerio pueda cumplirse lo prevenido en el art. 10 de la ley de presupuestos de 1850.—De Real orden etc.—Madrid 4 de marzo de 1851.» (CL. t. 52, pág. 316.)

R. O. de 23 octubre de 1852.

Pase este negociado á la Direccion de lo contencioso.

(Hac.) Extracto.—«La Reina.... ha tenido á bien mandar que los documentos y expedientes que existen en ella (la Direccion del Tesoro) pasen á la de lo contencioso para que por ella se instruyan y propongan las resoluciones que procedan, quedando en adelante radicado en ella este negociado.—De Real orden etc.—Madrid 23 de octubre de 1852.» (CL. t. 57, p. 390.)

R. D. de 29 diciembre de 1854.

Por este decreto (V. HACIENDA PÚBLICA) se suprimió la Direccion general de lo contencioso, y se encomendaron á la del Tesoro los negocios relativos al reconocimiento y pago de las cargas de justicia.

Ley de 29 abril de 1855.

Nuevo reconocimiento y clasificacion.

(Hac.) «Doña Isabel II etc., sabed que las

Córtes constituyentes han decretado y Nos sancionado lo siguiente:

Artículo 1.º Todas las cargas de justicia consignadas por el Gobierno en el presupuesto de gastos del corriente año quedan sometidas al nuevo reconocimiento y clasificacion que hará de ellas la Direccion general del Tesoro intervenida é inspeccionada por una comision permanente de siete señores diputados elegidos por las Córtes.

Art. 2.º El reconocimiento y clasificacion se verificarán en el plazo de ocho meses desde la publicacion de esta ley, dentro del cual el Gobierno señalará á los interesados el que juzgue bastante para la presentacion de documentos.

Art. 3.º El Gobierno presentará á las Córtes con la posible brevedad un proyecto de ley para liquidar y convertir los créditos, cuya naturaleza lo consienta, en títulos de la Deuda pública, segun sus clases y condiciones.

Art. 4.º Las cantidades consignadas en los nueve primeros capitulos de la seccion cuarta del presupuesto de gastos, para 1855, importantes 13.585,733 rs. vn. con destino á cargas de justicia, serán satisfechas por el Tesoro hasta el día en que se expidan á los interesados los respectivos títulos de la Deuda pública, sin perjuicio del resultado que ofrezca el reconocimiento de que trata el artículo 1.º—Por tanto etc.—Aranjuez 29 de abril de 1855.» (*CL. t. 64, p. 459.*)

R. O. de 30 mayo de 1855.

Plazos para presentar documentos para su reconocimiento y clasificacion.

(Hac.) Extracto.—Por esta Real órden se señala el término irrevocable de tres meses en que los partícipes de cargas de justicia, deben presentar en la Direccion del Tesoro público los documentos necesarios para justificar su derecho en el nuevo reconocimiento y clasificacion que la comete la ley de 29 de abril último; los documentos que dentro del referido plazo presentarán los particulares, son:

«Los comprendidos en el art. 1.º por oficios y derechos enajenados de la Corona; los títulos originales primitivos de la egresion; la cédula de confirmacion del último reinado en que la hayan obtenido, con declaracion de no haber adquirido otra posterior, y certificacion de la Direccion de la Deuda pública, expresiva de no haberse satisfecho el capital y réditos por su Tesorería en este siglo.

Los del art. 2.º la cédula de concesion de la recompensa por salinas.

Los del art. 3.º y 7.º las escrituras de im-

posicion de los censos, é igual certificacion de no haberse redimido en la Deuda pública.

Los pensionistas que figuran en el art. 7.º, así como los incluidos en los arts. 5.º, 6.º y 9.º, presentarán copia fehaciente de las órdenes ó títulos de concesion.

Se exceptúan solo aquellos que tuvieren presentados estos documentos anteriormente, debiendo no obstante entregar los que falten de los mencionados.

Si por esa Direccion fuere necesario alguno otro para la mejor tramitacion, se exigirá oficialmente de los interesados, señalándoles el término de quince días, pasados los cuales seguirán su curso los expedientes como si no existiere el reclamado.» (*CL. t. 63, p. 458.*)

R. O. de 2 junio de 1855.

Expedientes para el reconocimiento y clasificacion.

(Hac.) Considerando la necesidad de fijar las reglas que se han de seguir para el cumplimiento de la ley de 29 de abril, tanto en la tramitacion de los expedientes, como en las relaciones que se han de unir á la misma, se dictan las siguientes:

«1.ª La Direccion del Tesoro examinará nuevamente los expedientes que en ella radican, relativos á cargas de justicia, y los títulos de pertenencia en que funden sus derechos los interesados, y con el dictámen de la seccion los pasará á la Asesoría general, que emitirá el suyo á la mayor brevedad posible.

2.ª Con vista de ambos el Director del Tesoro declarará caducada ó subsistente la carga de justicia de que se trata, pasándolo todo á la comision de señores diputados, la cual acordará su conformidad, ampliacion de instruccion ó discordancia, fundando esta última con las razones que crea oportunas, y elevando en este caso el expediente á este Ministerio para la resolucion oportuna.

3.ª Si por resultados del exámen estuviesen acordes en la caducidad de la carga de justicia la Direccion del Tesoro y la Comision de señores diputados, cesará de pagarse desde luego la carga de justicia, dando conocimiento de oficio al interesado en ella de la resolucion con copia de los dictámenes contrarios en que esta se hubiese fundado para acudir en queja á S. M., y si la Reina se conformase con el fallo de la Direccion del Tesoro, podrá acudir el interesado en queja al Tribunal contencioso-administrativo.

4.ª Si la Comision del Congreso propusiese la ampliacion del expediente, se evacuarán los nuevos trámites que la misma proponga, y hecho así resolverá el Director del Tesoro, pasándose de nuevo á la comision el expediente para su conformidad ó disyuntiva.

5.^a Concluida la revision de las correspondientes á cada uno de los nueve artículos de los que comprende el presupuesto en su seccion quarta, y sin esperar la de los demás, la Direccion del Tesoro, en union con la comision de señores diputados, pondrá en Conocimiento de S. M. las que hayan declarado subsistentes, formulando su opinion acerca de si deben convertirse en Deuda del Estado, ó seguir como hasta el dia siéndolo del Tesoro.

6.^a Declarada subsistente una carga, se devolverán los títulos originales á su dueño, quedando copias fehacientes en el expediente; pero si se declara caducada se reclamarán del interesado, caso de no existir mas que en testimonio, para taladrarlos, quedando por de ningun valor.

7.^a Para que la Direccion pueda cumplir el cometido de la ley en el plazo que esta le señala, se abstendrá de reconocer ninguna carga nuevamente reclamada, admitiendo no obstante las reclamaciones que se la hagan para que á los interesados no les perjudique la prescripcion que les impone la ley de contabilidad.

8.^a Esto no obstante, y en cumplimiento del R. D. de 29 de diciembre del año último, la Asesoría general pasará á la Direccion del Tesoro con la brevedad posible cuantos títulos de pertenencia se hayan presentado en la suprimida Direccion de lo contencioso en virtud de la R. O. de 23 de octubre de 1852, y disposiciones que la misma adoptó para su cumplimiento.—Lo que de Real orden etc.—Madrid 2 de junio de 1855. (CL. t. 65, página 226.)

Ley de 14 abril de 1856.

Autoriza el presupuesto general del Estado, y entre las disposiciones que forman parte integrante de ella contiene lo siguiente:

SECCION 4.^a—Cargas de justicia.

«1.^a Si por consecuencia de la liquidacion que se está practicando no resultare la reduccion ó conversion en Deuda pública de los 8.020,508 rs. que en los diez y ocho meses se rebajan en esta seccion, se autoriza al Gobierno para que satisfaga la diferencia, considerando su importe como parte integrante de este presupuesto.

2.^a Las cargas de justicia que á virtud, del nuevo reconocimiento y clasificacion que se está practicando en cumplimiento de la ley de 29 de abril de 1855, carezcan de títulos legítimos ó hayan caducado, dejarán de satisfacerse por el Tesoro público desde que recaiga la declaracion de la Comision reviso-

ra de señores diputados creada por la expresada ley, sin perjuicio de los recursos que los interesados tengan á bien entablar.» (CL. t. 68, p. 80.)

R. O. de 1.º febrero de 1858.

Regulariza el pago de cargas por rentas vitalicias.

(HAC.) «..... S. M.... se ha servido, respetando el derecho que en lo principal puedan tener los interesados en dichas rentas, y con el solo objeto de regularizar este servicio, adoptar las disposiciones siguientes:

1.^a Que desde luego se dé de baja en nómina á los perceptores en rentas vitalicias que no se hayan presentado á cobrar sus respectivas rentas en los tres últimos semestres.

2.^a Excluir de igual manera á los que no se presenten á cobrar ó no llenen alguno ó algunos de los requisitos exigidos para el pago dentro del mes en que se abra este, y no obtengan rehabilitacion de la Contaduría respectiva en los dos meses siguientes al finalizar aquel.

3.^a Que pasado dicho período sin obtenerla de la mencionada Contaduría no puedan ser incluidos nuevamente en nómina sin orden expresa de la Direccion general del Tesoro.

Y 4.^a Que en la primera quincena del mes subsiguiente, ó sea el cuarto desde el en que se abrió el pago, se dé á esa oficina general por la Contaduría de Hacienda pública de la provincia noticia circunstanciada de los partícipes excluidos, á tenor de las ante dichas reglas.—De Real orden etc.—Madrid 1.º de febrero de 1858.» (CL. t. 75, p. 165.)

R. O. de 9 abril de 1859.

A quién compete conservar los documentos de cargas de justicia.

(HAC.) Extracto.—Resolviendo un expediente instruido con este motivo, S. M. «se ha dignado resolver que á las Contadurías, en el doble concepto de estar encargadas del archivo y de llevar las cuentas individuales de los partícipes de las rentas, corresponde el conservar y custodiar los expedientes y documentos de las cargas de justicia, sin perjuicio de que los administradores hagan uso de ellos, en la forma puesta en práctica con todos los que están archivados, cuando los necesitaren para consultarlos ó fueren llamados á emitir sobre ellos su opinion.» (CL. t. 78, p. 373.)

Ley de presup. de 22 mayo de 1859.

«Art. 9.º La revision y reconocimiento de cargas de justicia determinadas por la ley de 29 de abril de 1855, se hará en lo sucesivo

por una Junta compuesta del director del Tesoro, presidente; del asesor general; del segundo jefe de la Direccion del Tesoro, y de dos de los co-asesores del Ministerio de Hacienda.

La Junta aplicará la legislacion especial que corresponda en cada caso y fundará sus declaraciones en los hechos que resulten justificados, consultándolas al Ministro de Hacienda, quien resolverá oyendo á la Seccion de Hacienda del Consejo de Estado, dándose la debida publicidad á estas determinaciones.

Si se declarase la caducidad, podrán los interesados alzarse, por la vía contenciosa, caso de proceder segun las disposiciones vigentes.»

Jurisprudencia.

Es tan importante la jurisprudencia establecida por las Reales órdenes confirmando ó no los acuerdos de la junta revisora de cargas de justicia, que no podemos dispensarnos de darla toda la latitud que ven nuestros lectores á continuacion.

R. D.-S. de 2 febrero de 1862.

I. Indemnizacion de alcabalas. (Pleito).—La indemnizacion acordada por la ley de 29 de abril de 1855, y la de presupuestos de 1856 y seis primeros meses de 1857, en favor de los pueblos que tenian el derecho de cobrar alcabalas etc., no se extiende á aquellos cuyo privilegio consistia en no pagarlas. Limitándose, sin embargo, la ley á mandar que cese el pago de las cargas de justicia que carezcan de título ó hayan caducado, no procede el reintegro de las cantidades ya satisfechas en tal concepto. (*Sentencia del Consejo de Estado de 2 febrero de 1862.*)

R. D.-S. de 23 octubre de 1862.

II.—Están caducados los créditos denominados *juros* cuya capitalizacion no se hubiese solicitado dentro del plazo señalado conforme al art. 39 del Regl. de 17 de octubre de 1851.

La anterior declaracion se hizo por *R. D.-S. de 23 de octubre de 1862*, desestimando una demanda del colegio de Santa Isabel de esta Corte contra la Administracion general, sobre que se pagase como carga de justicia un cuento

de maravedís de renta perteneciente á dicho colegio, y se reformase al efecto la Real orden que declaró la caducidad de dicho crédito por ser un juro y no haberse solicitado la capitalizacion oportunamente, conforme al art. 39 del Regl. de 17 de octubre de 1851.—**V. DEUDA.**

R. O. de 25 febrero de 1863.

III.—Cuando el Estado concurre al otorgamiento de una escritura, lo hace como persona jurídica y queda ligado como un particular cualquiera, é igual sucede cuando representa una personalidad civil como una comunidad religiosa suprimida. La prescripcion establecida en el art. 18 de la ley de contabilidad no es aplicable á los capitales de cargas de justicia, pero sí á las anualidades devengadas.

(HAC.) «He dado cuenta á la Reina (que Dios guarde) del expediente instruido á consecuencia de la consulta hecha por esa Direccion general relativa á la interpretacion que debia darse al art. 18 de la ley de contabilidad de 20 de febrero de 1850 respecto de las obligaciones denominadas cargas de justicia, con motivo de haber reclamado el conde del Valle de San Juan y D. Francisco Melgarejo el pago de los atrasos de los ascensos, importantes 2,200 rs. 50 cénts. anuales, que en aquel concepto les fueron reconocidos por *R. O. de 22 de mayo de 1861.*

En su vista, y considerando que las cargas de justicia proceden en su mayor parte de títulos de carácter puramente civil, de derechos reales, reconocidos y consignados en documentos tan solemnes como una escritura pública ú otro documento análogo:

Considerando que si en estos casos el Estado concurrió á su otorgamiento ó reconoció el derecho allí consignado, lo hizo como una persona jurídica y quedó ligado como un particular cualquiera:

Considerando que aunque el Estado no haya contratado directamente, como sucede en las cargas de justicia que proceden de una obligacion contraida por las comunidades religiosas extinguidas ó por cualquiera corporacion de cuyos bienes ha dispuesto, su condicion es igual, porque en estos casos no representa mas que una personalidad civil, y lo que en ellos califica la obligacion es el origen y naturaleza del título que constituye la carga de justicia, el derecho que asiste al acreedor que, como todos los que provengan de acciones ú obligaciones puramente civiles, se hallan bajo la garantia de las leyes comunes:

Considerando que la circunstancia de que en lugar de un particular ó de una corporacion sea el Estado deudor, no afecta al dere-

cho del reclamante, sino á la forma y á la autoridad que gubernativamente decide su reclamacion:

Considerando que estos derechos ya reconocidos y consignados en los contratos ó títulos respectivos de que procede la obligacion no necesitan nuevo reconocimiento ni se derivan de servicios públicos:

Considerando que en rigor de derecho no puede entenderse como el verdadero reconocimiento de una obligacion ya existente, la declaracion de subsistencia que en estos expedientes se hace, sino mas bien como un trámite exigido por la ley para garantir los intereses públicos, para disipar las dudas que se habian suscitado sobre la legitimidad de algunas de esas obligaciones y abrigar el convencimiento de que la única que figura en el capítulo de cargas de justicia, y que pesa sobre el Tesoro, es un gravámen legítimo y valedero, y justos los títulos en que se funda:

Considerando que tampoco puede sostenerse que tal gravámen procede de servicios públicos, porque no merece semejante calificación la constitucion de un censo ó la indemnizacion concedida y en equivalencia del derecho ó de la cosa de que el Estado se aprovechó, que es en su mayor parte el origen de las obligaciones de que se trata:

Considerando que por las circunstancias indicadas no es aplicable á los capitales de cargas de justicia la prescripcion establecida en el art. 18 de la ley de contabilidad, lo cual se refiere á créditos procedentes de servicios que es necesario reconocer y liquidar, y de ningun modo á derechos puramente civiles que se hallan bajo la salvaguardia de la legislacion comun, con arreglo á la cual deben resolverse las cuestiones que sobre el particular puedan suscitarse:

Considerando que no militan iguales razones para exceptuar de la prescripcion establecida en dicho artículo á los réditos ó pensiones anuales que se satisfacen por las cargas de justicia, por cuanto se hallan en el mismo caso que todas las obligaciones ó servicios que se comprenden anualmente en los presupuestos:

Considerando finalmente, que los réditos de los censos en que consiste la carga de justicia que ha dado lugar á la consulta de que va hecho mérito, fueron satisfechos al conde del Valle de San Juan y D. Francisco Melgarejo hasta 1849, y suspendido el pago en dicha época solicitaron á principios del año siguiente que aquel continuara, cuya reclamacion fué estimada en R. O. de 22 de mayo de 1861, y por lo tanto no se ha interrumpido respecto de los interesados una prescripcion que no

habia existido ni puede existir mediante á haber comenzado las gestiones desde el momento en que cesó el pago de los réditos:

S. M., de conformidad con el dictámen emitido sobre el particular por las secciones de Hacienda y Gracia y Justicia del Consejo de Estado y lo expuesto por esa Direccion general, se ha servido resolver:

1.º Que el art. 18 de la ley de contabilidad de 20 de febrero de 1850 no es aplicable á los capitales de las cargas de justicia, debiendo decidirse las cuestiones que sobre prescripcion puedan ocurrir acerca de los mismos con arreglo á la legislacion comun.

2.º Que respecto á las anualidades anteriores á 1850, á la Junta de la deuda pública corresponde determinar lo que proceda con sujecion á lo dispuesto en los arts. 4.º y 9.º de la ley de 3 de agosto de 1851, y el 3.º, 5.º y 25 del reglamento publicado para su ejecucion.

3.º Y por último, que es aplicable el referido art. 18 de la ley de contabilidad á las anualidades devengadas desde 1.º de enero de 1850 en adelante que hayan dejado de satisfacerse en el período fijado en el mismo por causas imputables á los respectivos acreedores.—De Real orden etc.—Madrid 25 de febrero de 1863. (CL. t. 89, p. 144.)

R. O. de 10 marzo de 1863.

IV.—Recompensas por salinas incorporadas á la Hacienda por causa de utilidad pública.

(HAC.) Vista la cédula original expedida por el Rey D. Felipe V en Balsain á 6 de agosto de 1723, de la que resulta que incorporadas á la Hacienda las salinas de Navazo y Alfolí de la sal de Sierrayegua, situadas en el partido de Osuna, se señaló al patronato fundado por el licenciado D. Juan Labado y Rangel, al que pertenecian, la cantidad anual de 900 rs. de situado en equivalencia de sus productos:

» Vista la justificacion presentada y practicada por Doña Agustina Pedrosa, con citacion del administrador de las salinas, de la que parece que por sentencia del Juzgado de Campillos se le adjudicó en posesion y propiedad el citado patronato como quinta nieta de una hermana del fundador:

» Vista la ley del 29 de abril de 1855, y el art. 9.º de la ley de presupuestos de 1859.

» Considerando que siendo los 900 rs. de que se deja hecho mérito la indemnizacion señalada al poseedor del patronato fundado por el licenciado Labado y Rangel, cuando por causa de utilidad pública se incorporaron á la Hacienda las salinas, procede la carga de justicia de título oneroso:

»Considerando que el Estado se halla obligado á satisfacerla mientras no la redima, lo que no consta se haya verificado;

»S. M., se ha servido confirmar el acuerdo de la Junta de revision y reconocimiento de cargas de justicia, por el que se declara subsistente la de que se trata.»

R. O. de 24 marzo de 1863.

V.—Censos afectos á portazgos etc.

Despues de exponerse minuciosamente los antecedentes del asunto, que son en resumen: 1.º haber tomado la *Sociedad Riojana* 1.000.000 de rs. con destino á obras públicas de caminos y puentes, con la garantía de los arbitrios que el Gobierno la concedió; 2.º haber cesado la referida sociedad, por consecuencia de lo dispuesto en la R. O. de 20 de abril de 1836, en la administracion de fondo y direccion de los caminos que la estaba encomendada, encargándose de la primera la Diputacion provincial, y de la segunda la Direccion general de caminos; 3.º resultar que en 1836, cuando la Diputacion provincial se hizo cargo de la administracion de la *Sociedad Riojana*, figuraban entre los créditos contra la misma, el referido capital de 1.000.000, y sus 30.000 rs. de réditos; y 4.º que lo mismo sucedia cuando dicha Diputacion cesó en 1.º de enero de 1861 de recaudar los productos de portazgos.

Reclamado por D. Ramon de Llano por sí y en nombre de los demás herederos de D. Manuel Ramon de Yandiola, el pago de dichos réditos, se ha instruido expediente en el que acreditados documentalmente los referidos hechos ha recaído la siguiente resolucion:

«Vista la R. O. de 28 de enero de 1862 comunicada por el Ministerio de Fomento al de Hacienda, remitiendo al mismo este expediente para su resolucion como carga de justicia, en cuya Real orden se consigna que á virtud de lo dispuesto en la ley de 22 de julio de 1857 se encargó la Administracion pública de los portazgos, pontazgos y barcajes que antes recaudaban las corporaciones provinciales ó municipales:

«Visto el art. 24 de la mencionada ley (tomo 2.º p. 893.)

»Vista la ley de 29 de abril de 1855:

»Considerando que se halla debidamente

justificada la constitucion del censo de que se trata en favor de D. Andrés Ibarra, así como su reconocimiento en 1836 á favor de los actuales reclamantes:

»Considerando que por no haberse redimido dicho censo fueron satisfechos sus réditos por la citada sociedad hasta su extincion, y despues por la Diputacion provincial de Logroño hasta fin de 1860:

»Considerando que al incautarse el Estado de los portazgos, pontazgos y barcajes que primero recaudó la mencionada *Sociedad Riojana*, y luego la Diputacion provincial de Logroño, reconoció la obligacion de satisfacer los gravámenes hipotecarios impuestos sobre aquellos productos, y por lo tanto es evidente la que tiene el Tesoro de pagar los réditos de este censo:

»S. M., conformándose, etc., ha tenido á bien confirmar el acuerdo de la Junta de revision y reconocimiento de cargas de justicia, por el que se declara como tal el censo de 1.000.000 de rs. de capital impuesto en la suprimida *Sociedad Riojana* de que va hecho mérito, y mandar á la vez que se incluyan en el presupuesto general de gastos del Estado, con cargo al capítulo correspondiente, los 30.000 rs. vn. anuales que deben satisfacerse por réditos de dicho censo; pero sin proceder á su pago hasta que se llene el requisito exigido por el art. 10 de la ley de 20 de febrero de 1850, y el reclamante D. Ramon de Llano y Yandiola acredite previamente por su parte su cualidad de heredero de D. Manuel Ramon de Yandiola.—De Real orden, etc.—Madrid 24 de marzo de 1863.»

R. O. de 24 marzo de 1863.

VI.—Asignaciones censuales sobre arbitrios de los Consulados de comercio suprimidos.

(HAC.) «.....Visto el testimonio de la escritura otorgada en Sevilla á 1.º de setiembre de 1637, por la cual el prior y cónsules de la universidad de cargadores de Indias vendieron á Bartolomé Gomez del Castillo, por juro de heredad para él y sus sucesores, 1.000 ducados de renta en cada año del derecho de 1 por 100 que percibia el Consulado de todos los efectos que entraban en la aduana por mar y tierra y salian por mar, en precio de 20.000 ducados de plata doble que dicha corporacion recibió del comprador, hipotecando á la seguridad del contrato los bienes y rentas del Consulado, y especialmente el derecho referido del 1 por 100; todo en conformidad á la facultad Real que tenia el mismo Consulado de enajenar en todo ó en parte el expresado derecho en favor de las personas

que adelantasen capitales con objeto de cubrir el servicio de 300.000 ducados hecho á la Corona:

»Visto otro testimonio de la escritura otorgada á 19 de abril de 1638:

»Visto el R. D. de 7 de octubre de 1847, por el cual se suprimieron los Consulados de comercio y se establecieron las Juntas que hoy existen, en cuyo art. 21 se ordenó que no se comprendieran en los presupuestos provinciales los gastos de las escuelas de comercio ni las cargas de justicia de los Consulados, sino que se satisfarían por el Estado en equivalencia de los antiguos arbitrios refundidos en el 6 por 100 de importacion que con tal objeto se cobraba en todas las aduanas del Reino:

»Vista la Real orden expedida por el Ministerio de la Gobernacion, con presencia del expediente instruido en el mismo en 20 de marzo de 1857, por la que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 21 del Real decreto referido, se mandó reconocer al patronato fundado por Bartolomé Gomez del Castillo en el castillo de las Guardas los censos que el fundador impuso sobre los derechos que percibia el Consulado de Sevilla, y que se le pagaran los réditos de los mismos:

»Vista la Real orden expedida por el Ministerio de Hacienda de 28 de julio de 1862 declarando, entre otras cosas, la excepcion de incorporacion al Estado de los capitales impuestos por Bartolomé Gomez del Castillo en el Consulado de Sevilla:

»Vistos el art. 10 de la ley de presupuestos de 1850, la ley de 29 de abril de 1855 mandando proceder al reconocimiento y clasificacion de las cargas de justicia, y el art. 9.º de la de presupuestos de 1859 estableciendo la forma de ejecutarla.

»Considerando que, no habiéndose devuelto los capitales que de Bartolomé Gomez del Castillo recibió el Consulado de Sevilla, está subsistente la obligacion de satisfacer sus réditos que este contrajo por las escrituras de 1.º de setiembre de 1637 y 19 de abril de 1638:

»Considerando que en esa obligacion sucedió el Estado por haber suprimido el arbitrio que constituía la hipoteca de los capitales, y haberse apropiado los demás bienes del Consulado de Sevilla al declararle disuelto:

»Considerando que así se halla establecido como medida general en el art. 21 del Real decreto de 7 de octubre de 1847, y con relacion al caso concreto de este expediente en la Real orden expedida por el Ministerio de la Gobernacion en 20 de marzo de 1857:

»Considerando finalmente, que esta carga

de justicia es idéntica en su origen y forma de constitucion á la que se satisface al marqués de Guadalcázar y herederos de D. José Lopez Pedrajas, que figura al núm. 75, artículo 3.º, cap. 1, seccion 4.ª del presupuesto de gastos, y fué declarada subsistente por R. O. de 19 de febrero de 1862;

S. M., conformándose etc., se ha servido confirmar el acuerdo de la Junta revisora de cargas de justicia, por el que se reconoce como tal á favor del patronato fundado por Bartolomé Gomez del Castillo en el castillo de las Guardas la renta anual de 1.500 ducados, ó sea 16.500 rs. vn....»

R. O. de 13 junio de 1863.

VII.—Censo impuesto sobre el suprimido oficio de de Prebostad de Bilbao.

(Hac.) Por esta Real orden, con vista de varios documentos, de la ley de 29 de abril de 1855, del art. 9.º de la ley de presupuestos de 1859, de la R. O. de 11 de abril del mismo año, de la regla 2.ª de la de 30 de mayo de 1855, etc., se confirma el acuerdo de la Junta de revision y reconocimiento de cargas de justicia, por el que se declara como tal la renta anual de 2.858 rs. 74 cénts. que D. Blas de la Quintana tiene derecho á percibir como réditos del capital de censo de que en la actualidad es poseedor, impuesto sobre el suprimido oficio de Prebostad de la villa de Bilbao, en que se subrogó el Estado; y se manda á la vez, en su consecuencia, que á su tiempo se incluya dicha obligacion en la seccion correspondiente del presupuesto, luego que, de conformidad con lo determinado por el art. 10 de la ley de presupuestos de 1850, se reclame y obtenga de las Cortes el crédito necesario para su pago. (Gac. 30 junio.)

R. O. de 16 junio de 1863.

VIII.—No se reconocen como cargas de justicia las obligaciones entre comunidades suprimidas.

(Hac.) «Se declara que *no procede* el reconocimiento, en concepto de carga de justicia, de la pension anual de 1,560 reales que reclaman las religiosas de Santa Rosa de Zaragoza, en compensacion de ciertas misas que segun escrituras de 6 de julio de 1753, 23 de mayo de 1789 y 19 de noviembre del mismo año, se comprometió á celebrar en su iglesia la comunidad de dominicos de San Ildefonso de la misma ciudad, mediante las cantidades que al efecto percibió. Esta resolucion se dicta con vista de la ley de

29 de abril de 1855 y art. 9.º de la de presupuestos de 1859.

«Considerando que al incorporarse al Estado por las leyes de 1836 los bienes del clero regular reunió la cualidad de acreedor y de deudor, consolidándose en el mismo los derechos y obligaciones de las comunidades de religiosas de Santa Rosa y de dominicos de San Ildefonso, y por consiguiente cesó de derecho la accion civil que la primera tenia contra la segunda.»

A la vez se dispone «que de esta determinacion se dé conocimiento al Ministerio de Gracia y Justicia, á los fines que corresponda con arreglo al Convenio últimamente celebrado con la Santa Sede.»

R. O. de 5 febrero de 1864.

IX.—Son cargas de justicia los censos constituidos sobre fincas de los suprimidos conventos que fueron incorporados al Estado, y vendidos por esta en concepto de libres. Sobre las anualidades anteriores á 1850 corresponde resolver á la Junta de la Deuda pública.

(HAC.) «Ilmo. Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del expediente instruido por esa Direccion en cumplimiento de la ley de 29 de abril de 1855 para llevar á efecto el reconocimiento, en concepto de carga de justicia, de un censo importante 118 rs. 13 mrs. anuales, que reclama D. José Gil y Roigé.

En su consecuencia:

Vista la copia expedida en forma de la escritura otorgada en la ciudad de Reus á 20 de agosto de 1761, de la que consta que el reverendo Juan Torres impuso, sobre los bienes de la comunidad de religiosos Carmelitas descalzos del convento de San Rafael de la villa de Selva, un censo de 118 rs. 13 mrs. de réditos anuales; correspondiente al capital de 3,946 rs. 22 mrs., á favor de la capellanía familiar que se habia de fundar en el convento de Carmelitas descalzos de la misma villa, segun lo dispuesto por D. Jaime Virgili, y que la referida comunidad se obligó á pagar al Torres como obtentor de dicha capellanía y sus sucesores, hipotecando al efecto todos sus bienes:

Visto el testimonio de los autos seguidos en el Juzgado de Reus, del cual aparece, que por providencia de 5 de octubre de 1842, que causó ejecutoria, fueron adjudicados como libres á D. José Gil y Roigé, los bienes de la citada capellanía, fundada bajo la invocacion de Nuestra Señora del Pilar, y que entre sus dotaciones se halla la del referido censo:

Vista la comunicacion de 30 de julio de

1861 de la Administracion de propiedades y derechos del Estado, de la cual resulta: que este se habia incautado, como únicos bienes procedentes de los padres Carmelitas de la Selva, del convento de estos y de un huerto sito en aquel término; que el primero fué cedido en 1843 al Ayuntamiento de la misma villa para objetos de utilidad pública, y el segundo se vendió en 3 de diciembre de 1841, como libre de todo gravámen, en la cantidad de 106,000 rs., que fué satisfecha en los plazos fijados, y que no parece se hubieran abonado por aquella Administracion, ni por el clero, los réditos del censo de que se trata:

Vista la solicitud que sobre dichos réditos deduce tambien el D. José Gil y Roigé, y la liquidacion practicada por la referida Administracion, en la que se incluyen todos los vencidos desde el año 1835:

Vista la R. O. de 21 de marzo del año próximo pasado de 1863, por la que se declara exceptuada de la incorporacion al Estado de la expresada capellanía:

Vista la ley de 29 de abril de 1855, mandando proceder al reconocimiento y clasificacion de las cargas de justicia, y el art. 9.º de la de presupuestos de 1859, estableciendo la forma en que ha de verificarse:

Considerando que D. José Gil y Roigé ha justificado debidamente la imposicion del censo á favor de la capellanía fundada por don Jaime Virgili, y su derecho á los bienes de esta en virtud del auto que causó ejecutoria, dictado por el juez competente y en juicio en que estuvo representada la Hacienda pública:

Considerando que el Estado ha cedido y vendido como libres las fincas del convento de San Rafael de la Selva, afecta á dicho gravámen; y que no constando haya este sido redimido, es evidente su obligacion á responder del mismo:

Considerando que segun la jurisprudencia establecida por las Rs. Ords. de 6 de abril y 22 de mayo de 1861, 22 de febrero de 1862, y 15 de junio del año próximo pasado, procede el reconocer como carga de justicia la del expresado censo, por hallarse constituido sobre fincas incorporadas al Estado, y vendidas por este en anteriores épocas en concepto de libres.

Considerando que los réditos que se adeuden legítimamente desde 1.º de enero de 1850 deben incluirse en el presupuesto de gastos del Estado, y no abonarse hasta obtener el competente crédito, segun lo determinado en el art. 10 de la ley de presupuestos de dicho año; y que en cuanto á los anteriores, ó sea los devengados y no satisfechos hasta fin de 1849, á la Junta de la Deuda públi-

ca es á la que corresponde resolver lo que proceda, con sujeción á lo dispuesto en la ley de 3 de agosto de 1851 y en el reglamento publicado para su ejecucion:

S. M., conformándose con los dictámenes emitidos sobre el particular por la Sección de Hacienda del Consejo de Estado, esa Dirección y la Asesoría general de este Ministerio, se ha servido confirmar el acuerdo de la Junta de revision y reconocimiento de cargas de justicia, por el que se reconoce como tal la renta anual de 118 rs. 39 cénts. á favor de D. José Gil y Roigé, y mandar asimismo que á su tiempo se incluya dicha obligacion en el presupuesto de gastos del Estado, con la suma necesaria para el pago de la anualidad corriente y demás que resulten adeudarse desde 1850 inclusive, sin que pueda procederse á satisfacerlas mientras no se obtenga el crédito legislativo correspondiente: y que respecto á las cantidades vencidas hasta fin 1849, se remita el expediente en su día á la Junta de la Deuda pública para que, con arreglo á sus atribuciones, resuelva lo que proceda.—De Real orden, etc.—Madrid 5 de febrero de 1864.—Trúpita.» (*Gaceta* 15 de id.)

R. O. de 24 febrero de 1864.

X.—Reconociendo la renta anual correspondiente á las alcabalas de Tudela, adquiridas á título oneroso.

(HAC.) «He dado cuenta á la Reina (que Dios guarde) del expediente promovido por el conde de Robres en solicitud de que se reconozca como carga de justicia la renta anual de 12,410 rs. 98 cénts. por las alcabalas de la villa de Tudela de Duero, en la provincia de Valladolid.

En su consecuencia:

«Vista la Real carta de privilegio, expedida en Madrid por el Rey de D. Felipe IV á 25 de agosto de 1661, aprobando la venta hecha á D. Andrés de Sarriá de las alcabalas pertenecientes á la Hacienda en la villa de Tudela de Duero en precio de 17.373,940 maravedís en moneda de plata, que consta satisfizo el comprador al Tesoro segun la carta de pago que se inserta en el mismo privilegio:

Vista la Real cédula expedida por el Rey D. Carlos II en el Buen Retiro á 4 de noviembre de 1683, de la que resulta que á consecuencia del juicio de tanteo incoado por la villa de Tudela, y en virtud de providencia del Consejo de Hacienda, D. Juan de Sarriá, hijo del D. Andrés y sucesor en sus derechos y obligaciones, entregó al Tesoro 5.757,776 maravedís de vellon como aumento de precio de las referidas alcabalas:

Vista otra Real cédula expedida por el Rey

D. Felipe V en Madrid á 4 de abril de 1713, declarando exceptuadas de la incorporacion acordada como medida general las alcabas de que se trata:

Vista la copia de la liquidacion formada por las oficinas de Hacienda de Valladolid en 27 de noviembre de 1845 á los partícipes de alcabalas de la misma, en la que figura el conde de Robres por la cantidad que reclama:

Vista la certificacion expedida en 7 de noviembre de 1863 por la Administracion de Hacienda pública de Valladolid, en virtud de orden del Gobernador de la provincia, y previa citacion del promotor fiscal de Hacienda, por la que con referencia á los libros existentes en aquella Administracion de las cuentas abiertas á los perceptores de alcabalas desde el año 1829 al de 1844, ambos inclusive, se comprueba la certeza de la liquidacion antes mencionada:

Visto el art. 16 de la ley de presupuestos de 1845, por el cual etc.

Vista la ley de 29 de abril de 1855.

Considerando que resulta justificada la adquisicion de las alcabalas de la villa de Tudela de Duero por título de compra, cuyo precio ingresó en el Tesoro:

Considerando que tambien lo está la cantidad percibida por el sucesor del comprador durante el quinquenio anterior al año de 1845, y que por tanto no existe duda respecto de la legitimidad é importe de esta carga de justicia;

S. M., conformándose con los dictámenes que sobre el particular han emitido la Sección de Hacienda del Consejo de Estado, esa Dirección y la Asesoría general de este Ministerio, se ha servido confirmar el acuerdo de la Junta de revision y reconocimiento de cargas de justicia, por el que se reconoce como tal á favor del conde de Robres la renta de 12,410 rs. 98 cénts. ánuos que le corresponden percibir por las alcabalas de la villa de Tudela de Duero, para cuyo pago y el de los atrasos resultantes desde 1852 deberá previamente solicitarse el oportuno crédito legislativo en la forma que previene el art. 10 de la ley de presupuestos de 20 de febrero de 1850.»

R. O. de 2 enero de 1865.

XI.—Censos afectos á fincas compradas por el Estado con dicha carga.

Por esta Real orden se confirma el acuerdo de la Junta de revision y reconocimiento de cargas de justicia por el que se reconoce como tal la renta ánuo de 4.500 rs. á favor de doña Josefa y doña

Dolores Teijeiro, dueñas del capital que constituye el censo impuesto sobre unas fincas que con dicha carga compró el Estado en 1858 con destino á palacio arzobispal de Valladolid.

Considerando que los documentos unidos al expediente prueban de una manera indubitada la imposición del censo de 150.000 rs. de capital y 4.500 de réditos anuales sobre las fincas adquiridas por el Estado con destino á palacio arzobispal de Valladolid, y el derecho que tienen al mismo doña Josefa y doña Dolores Teijeiro y Tapia en las porciones que respectivamente representan y les fueron adjudicadas por fallecimiento de su padre el marqués de Villasante:

Considerando que el Estado al adquirir dichas fincas contrajo la obligación de reconocer y pagar los gravámenes á que estaban afectas, en cuyo cumplimiento ha satisfecho los réditos del expresado censo hasta el año de 1861, en que por acuerdo de las Cortes se eliminaron del presupuesto del Ministerio de Gracia y Justicia:

Considerando que los réditos expresados no pueden imputarse al clero en su dotación, y que las asignaciones de los prelados se hallan exentas de todo descuento por razón de los palacios ó casas que habitan, conforme á lo prescrito en el citado Convenio y Concordato.

Y considerando que no consta se haya reducido el censo ni indemnización en otra forma al acreedor.

R. O. de 17 abril de 1865.

XII.—Censos á cargo de fincas de comunidades.

Se dicta igual resolución que hemos visto por la R. O. de 5 febrero 1854 (núm. IX), y se reconoce como carga de justicia una pensión anual de 33 rs. 89 cénts procedente de finca incorporada al Estado y vendida como del clero regular antes de la ley de 1.º de mayo de 1855 con vista de las de 29 de abril de 1855 y 25 mayo de 1859, y de las Rs. Ords. de 6 de abril y 22 de mayo de 1861, de 22 y 26 de febrero de 1862 y 13 de junio de 1863, por las cuales se reconocen como cargas de justicia aquellas que afectaban á las fincas incorporadas al Estado y vendidas por este en anteriores épocas en concepto de libres.

R. O. de 23 abril de 1865.

XIII.—Alcabalas concedidas graciosamente. Se declara la caducidad de una procedente de alcabalas segregadas de la corona graciosamente á favor de señores jurisdiccionales siendo aplicables á este caso las leyes recopiladas sobre reversion, y las de señores.

(HAC.) He dado cuenta á la Reina (que

Dios guarde) del expediente instruido por esa Dirección, en cumplimiento de la ley de 29 de abril de 1855, para la revisión de la carga de justicia de 4.273 rs. 45 cénts. ánuos que en equivalencia de las alcabalas del pueblo de Valdeverdeja, provincia de Toledo, percibe la condesa del Montijo, y forma parte de la de 31.815 rs. 80 cénts., que figura al núm. 563, art. 1.º, capítulo 1.º, sección 4.ª del presupuesto de gastos vigente.

En su consecuencia:

Vista la Real carta de privilegio escrita en pergamino y librada en Valladolid á 16 de noviembre de 1429, según la cual el Rey Don Juan II hizo merced y donación perpétua á Pedro de Stúñiga, su justicia mayor y de su Consejo, de varias villas y lugares, entre estos el de Valdeverdeja, con sus casas, fortalezas, términos, vasallos, jurisdicción civil y criminal, mero y misto imperio, fueros, rentas, martiniegas, alcabalas y cualesquiera tributos y derechos inherentes al señorío de los indicados pueblos, excepto las mineras de oro y plata que reservaba á la Corona:

Vista la Real cédula de confirmación librada en San Lorenzo á 15 de octubre de 1752 por el Rey Don Fernando VI, en la que se relacionan varios privilegios otorgados á los antecesores del conde de Miranda, enumerándose entre ellos el de que se trata, y además se hace mérito de otra cédula de confirmación de los mismos, expedida por el Rey Don Felipe V en 22 de noviembre de 1709, por la cual se declaran preservados de la incorporación á la corona las alcabalas, tercias y demás derechos de que gozaba el conde en las referidas villas y lugares.

Vistas las leyes 8.ª y 9.ª, tit. VIII, libro VII de la Nov. Recop., en las cuales se consigna el principio de que debía recuperar la corona todo lo enajenado de la misma sin justo y efectivo precio, ó cuando en las ventas ó contratos hubiera intervenido lesión:

Vistas las leyes 10 y 11 del mismo título y libro, por las que se declara que las excepciones de incorporación y las cédulas de confirmación de oficios y derechos enajenados de la corona, especialmente de alcabalas y mercedes enriqueñas, no daban á sus poseedores mayor derecho que el que tenían en virtud de los títulos primitivos:

Visto el decreto de las Cortes de 6 de agosto de 1811 y la ley de 3 de mayo de 1823, restablecidos en 2 de febrero de 1837, y la ley de 26 de agosto de este último año, determinando la abolición de los señorios jurisdiccionales, las prestaciones reales y personales anejas é inherentes á los mismos y los privilegios de igual origen, que los señorios

territoriales y solariegos quedaran en la clase de los demás derechos de propiedad particular, si no eran de aquellos que por su naturaleza debian incorporarse á la nacion, ó de los en que no se habian cumplido las condiciones con que se concedieron: que para este efecto se presentasen los títulos de adquisicion, ó bien la ejecutoria obtenida en el caso de haber sufrido el juicio de incorporacion; y que los poseedores de dichas prerogativas por título oneroso serian reintegrados del capital que resultase de los títulos de adquisicion, así como á los que lo fueron por recompensa de grandes servicios reconocidos, se les indemnizaria en la forma que designase el Gobierno consultándolo con las Cortes:

Visto el R. D. de 30 de mayo de 1817, por el que fueron abolidas las alcabalas y otros derechos enajenados de la Corona, mandándose que en adelante los dueños particulares percibieran su valor computándole por el año comun de un quinquenio:

Vista la ley de presupuestos de 23 de mayo de 1845, por la cual se refundieron las alcabalas y demás rentas provinciales en la contribucion de consumos, y se dispuso que de los productos de esta se abonará á los dueños de alcabalas y cientos enajenados de la Hacienda pública la cantidad que resultara haberles correspondido en el año comun del último quinquenio:

Vista la ley de 29 de abril de 1855, prescribiendo el reconocimiento y clasificacion de todas las cargas de justicia:

Visto el art. 9.º de la ley de presupuestos del año 1859, por el cual se determina que la revision y reconocimiento de dichas cargas se verifique en lo sucesivo por la Junta que establece, y que esta deberá aplicar la legislacion especial que corresponda en cada caso, y fundar sus declaraciones en los hechos que resulten justificativos:

Vista la Real orden inserta en la *Gaceta* de 17 de marzo de 1862, dictada á consulta de la Seccion de Hacienda del Consejo de Estado, por la que se declara caducada la carga de justicia que en equivalencia de las alcabalas de San Pedro de la Tarce percibia la condesa del Montijo: (Véase el núm. XXI.)

Visto el R. D. de 15 de febrero de 1862 expedido como resolucion final en el pleito entre el Ayuntamiento de Fuencaliente y la Administracion del Estado, por el cual se reconoce que en las declaraciones de caducidad de las cargas de justicia no debe determinarse el reintegro de lo percibido en este concepto por los interesados, sino únicamente la casacion en lo sucesivo del pago de aquellas:

Considerando que las alcabalas segregadas

de la Corona en favor de los señorios jurisdiccionales lo fueron siempre en el concepto de privilegio concedido á estos, ya por gracia ó liberalidad de los soberanos, ya por título oneroso, y ya por recompensa de grandes servicios:

Considerando que habiéndose acordado la reversion á aquella de todo lo enajenado de la misma sin justo y efectivo precio; que las cédulas de confirmacion no dieran á sus poseedores mas derecho que el que tuviesen en virtud de los títulos primitivos: y que las prerogativas señoriales fueran incorporadas á la nacion, indemnizándose tan solo las obtenidas por título oneroso ó en remuneracion de grandes servicios; no puede reconocerse en los señores jurisdiccionales derecho alguno á las alcabalas que les fueran concedidas graciosamente; ó bien sea al reintegro de su importe, por haber variado la forma de la percepcion de esta renta y la del pago á los partícipes:

Considerando que las leyes de la Novísima Recopilacion y las de señorios que así lo determinan, citadas anteriormente, no han sido derogadas, y constituyen la legislacion especial que debe aplicarse al caso concreto de que se trata, con arreglo á lo establecido en el art. 9.º de la ley de presupuestos de 1859:

Considerando que al prescribirse la nueva forma de la percepcion y pago de las alcabalas en el R. D. de 1817 y en la ley de presupuestos de 1845, se reconoce tambien el principio de no ser indemnizables las obtenidas á título gracioso, puesto que se ordena que la satisfaccion se verifique á los dueños de las que hubieran sido enajenadas de la Hacienda pública:

Considerando que la revision de las cargas de justicia prevenida en la referida ley de 1855, supone asimismo la necesidad de que los perceptores lo fueran en virtud de títulos legítimos, y que tratándose de derechos enajenados de la Corona procedieran de causa onerosa y remuneratoria, en conformidad á las enunciadas disposiciones:

Considerando que en la citada R. O. de 17 de marzo de 1862 se corrobora dicha doctrina, la cual ha sostenido últimamente el Consejo de Estado al informar en otro expediente de igual naturaleza promovido á instancia del Ayuntamiento de Sotillo:

Considerando, por último, que las alcabalas del pueblo de Valdeverdeja fueron concedidas á Pedro Stúñiga, causante de la condesa del Montijo, por título meramente gracioso que las confirmaciones no han podido dar á esta donacion de la Corona el derecho de que carece para que se la estime indemnizable; y

que la devolucion de lo percibido por este concepto no corresponde, segun lo determinado en dicho R. D. de 15 de febrero de 1862; S. M. conformándose con los dictámenes que acerca del particular han emitido la Sección de Hacienda del Consejo de Estado, esa Direccion y la Asesoría general de este Ministerio, se ha servido confirmar el acuerdo de la Junta de revision y reconocimiento de cargas de justicia, por el que se declara caducada la de que se trata.—De Real orden etc.—Madrid 25 de abril de 1865.—Castro.—Sr.....» (*Gaceta* 16 mayo.)

R. O. de 26 abril de 1865.

XIV.—Alcabalas.—Es abonable á un Ayuntamiento la renta anual procedente de las alcabalas de su concejo que compró á Felipe III. Regla general sobre la liquidacion á los partícipes de aquellas.

(HAC.) He dado cuenta á la Reina (que Dios guarde) del expediente instruido por esa Direccion general, para llevar á efecto la revision de la carga de justicia de 5.290 rs. 21 céntimos ánuos, que bajo el núm. 372, artículo 1.º, cap. VI, de la seccion 4.ª del presupuesto vigente figura á favor del Ayuntamiento de Polán, como partícipe de las alcabalas del lugar de su nombre en la provincia de Toledo:

En su consecuencia:

Visto el privilegio original expedido en esta corte por el Sr. D. Felipe III á 28 de agosto de 1614, en el que se inserta una Real carta de venta del propio monarca, por la que enajenó al concejo, justicia y regimiento del dicho lugar de Polán las alcabalas del mismo pueblo: en precio de 2.025.300 maravedís.

Vista la Real cédula de confirmacion dada por la Reina Gobernadora, su fecha 22 de junio de 1710, por la que aprobando y ratificando en favor del concejo de Polán, el privilegio y carta de venta de 1614, declaró á la vez exceptuadas las predichas alcabalas del decreto de incorporacion y valimiento.

Visto el decreto de las Cortes de 6 de agosto de 1811, por el que se mandaron incorporar á la nacion todas las alcabalas enajenadas de la corona, devolviendo el precio de egresion á aquellos que las hubieren adquirido por título oneroso:

Vista la ley de presupuestos del año de 1845, por cuyo art. 16 se dispuso que de los productos del derecho de consumos se satisficiera á los dueños de alcabalas y cientos enajenados de la Hacienda pública, ínterin se les indemnizaba definitivamente, la cantidad que resultase haberles correspondido en el año comun del último quinquenio:

Vista la ley de 29 de abril de 1859 y el artículo 9.º de la de presupuestos de 1859:

Considerando que por el mérito que ofrece el Real privilegio de 28 de agosto de 1614, es un hecho evidente que el Ayuntamiento del lugar de Polán adquirió las alcabalas de su concejo de la majestad del señor D. Felipe III, mediante la entrega que para ello hizo del precio en que fueron estimadas:

Considerando que por el carácter esencialmente oneroso de la enajenacion fué esta confirmada y exceptuada de la incorporacion y valimiento por Real cédula de 22 de junio de 1710:

Considerando que no habiendo sido devuelto el precio de egresion, ni indemnizado de otra manera el Ayuntamiento de Polán, subsiste por parte del Estado la obligacion de satisfacer anualmente á dicha municipalidad la renta de que queda hecha referencia.

Considerando que apurados los medios de investigacion sobre el paradero de los comprobantes que sirvieron de base á las liquidaciones practicadas á esta clase de partícipes, en cumplimiento de lo mandado por el ya citado art. 16 de la ley de presupuestos de 1845, sin que hayan podido ser habidos, esta circunstancia no puede estimarse como bastante y justa para que con perjuicio de los interesados siga por mas tiempo en suspenso la resolucion definitiva de esta clase de reclamaciones:

S. M., conformándose con los dictámenes emitidos sobre el particular por la Sección de Hacienda del Consejo de Estado, esa Direccion y la Asesoría general de este Ministerio, ha tenido á bien confirmar el acuerdo de la Junta de revision y reconocimiento de cargas de justicia, por el que se declara subsistente la de que se trata; y mandar á la vez que para la justificacion del total importe de la renta anual en los expedientes de naturaleza análoga, sirva de pauta el resultado que ofrezca la liquidacion que por la Administracion de Hacienda de la respectiva provincia se practicará á cada partícipe, en cumplimiento de lo que se determinó por el art. 16 de la ley de presupuestos de 1845, sin perjuicio de que, con relacion al caso actual, como á los demás de su clase, se continúe gestionando para hallar los documentos comprobantes de dichas liquidaciones y rectificar las diferencias que pudieran resultar. De Real orden, etc.—Madrid 26 de abril de 1865.—Castro.—Sr. Director general del Tesoro. (*Gac.* 15 junio.)

XV. Por otra R. O. de 5 de junio de 1866 se declaró subsistente una que perciben los propios de Villameriel por

el concepto de alcabalas, por haber sido segregadas de la Corona á título oneroso, y no haber sido reintegrado dicho pueblo del precio de egresion.

R. O. de 26 abril de 1865.

XVI.—Alcabalas adquiridas á título gracioso.

Se declara por esta Real orden caducada una renta de 4.358 rs. 74 céntimos ánuos que á título de participe de las alcabalas de los pueblos El Gordo, Puebla de Naciados, Berrocalejo, Talavera la Vieja y el Bohonal, provincia de Cáceres, percibió la condesa del Montijo, y figuraba al núm. 106, art. 1.º, capítulo único, seccion 4.ª del presupuesto de gastos del Estado, siendo los fundamentos de esta resolucion enteramente iguales á la de 25 de abril, núm. XIII.

XVII.—Por otra Real orden de la misma fecha, se declara tambien caducada otra renta procedente de las alcabalas del pueblo de Candelera adquiridas á título gratuito, que asimismo percibia la condesa del Montijo; por los mismos fundamentos legales que la anterior. (*Gaceta* 13 junio.)

R. O. de 10 de noviembre de 1865.

XVIII.—Las alcabalas segregadas de la Corona á título gracioso y enajenadas despues en virtud de facultad Real á un tercero de quien las tanteó un Ayuntamiento son indemnizables como carga de justicia.

(Hac.) «He dado cuenta á la Reina (que Dios guarde) del expediente instruido por esa Direccion, en cumplimiento de la ley de 29 de abril de 1855, para llevar á efecto la revision de la carga de justicia de 830 escudos 606 milésimas que figura al núm 95, art. 1.º, capítulo 1.º, seccion 4.ª del presupuesto de gastos del Estado, y percibe el Ayuntamiento de Sotillo en la provincia de Búrgos.

En su consecuencia:

Vistas las copias impresas de los privilegios expedidos por el Rey D. Felipe III en 11 de noviembre de 1599 y 31 de enero de 1607 por los que en remuneracion de los muchos servicios que D. Francisco Gomez Sandoval y sus antecesores habian prestado, le hizo merced del ducado de Lerma y sus villas, lugares y tierra, con sus prédios y derechos, tercias y alcabalas, facultándole para que pudiesen amayorazgarle:

Vista la cédula expedida por el mismo Rey D. Felipe III, en 28 de abril de 1603, facul-

tando al duque de Lerma y sus sucesores para que pudiera nombrar ejecutores para la cobranza y administracion de las alcabalas y tercias, y demás derechos que poseia en los lugares y villas que se mencionan, entre las que se halla la villa de Gumiel de Mercado:

Visto el testimonio de la Real cédula de confirmacion librada por el Rey Don Felipe V en 14 de enero de 1720 á favor del duque de Medinaceli, sucesor del de Lerma, exceptuando de la incorporacion á la Corona las tercias y alcabalas del lugar de Sotillo que parece habia sido aldea de la villa de Gumiel de Mercado, comprendida en los títulos anteriores:

Vista la Real cédula original de Don Carlos III, expedida en 16 de setiembre de 1760, por la que se aprobó y confirmó la venta que de la villa de Sotillo, sus rentas, tercias y alcabalas y demás derechos que le correspondian, hizo el duque de Medinaceli en favor del marqués de Iturbietta por la cantidad de un millon de reales que recibió el primero para beneficiar los demás bienes de su mayorazgo:

Vista la Real carta ejecutoria del Consejo de Castilla librada en 13 de febrero de 1761, de la que resulta que la villa de Sotillo interpuso demanda de tanteo á la jurisdiccion, alcabalas y demás derechos enajenados por el duque de Medinaceli al marqués de Iturbietta: que citado y emplazado éste, se mostró parte en los autos, y despues de algunas actuaciones, manifestó conformidad con la demanda, siempre que la villa de Sotillo le pagara el millon de reales que él habia satisfecho al duque de Medinaceli y demás gastos que le habian ocurrido: que en electo la mencionada villa pagó al marqués de Iturbietta el millon de reales que habia este dado al duque de Medinaceli, y además una cantidad alzada en que se convinieron por los otros gastos hechos por el marqués, y que en su consecuencia el Consejo declaró que los mencionados derechos correspondian á la villa de Sotillo, á quien se dió posesion judicial de ellos, en virtud de la Real provision del mismo Consejo en 14 de febrero de 1761:

Vista la Real cédula de confirmacion del Rey Don Fernando VII, fecha 14 de junio de 1817 á favor de la mencionada villa de Sotillo de las alcabalas, tercias y demás derechos que disfruta, de la que consta satisfizo el derecho de valimiento:

Vistas las leyes 8.ª y 9.ª del lib. IX, tit. VIII de la Nov. Recop., por las que el Rey Don Carlos II mandó reconocer todo lo que se habia enajenado de la Corona, y que se recobre sin resarcimiento lo que se hallase ha-

ber sido conseguido graciosamente ó sin justo y efectivo precio.

Visto el R. D. de 30 mayo de 1817 y la ley de presupuestos de 1845, que convirtieron los derechos de alcabalas en rentas á dinero, y consignaron su importe sobre los ingresos del Estado:

Vista la ley de 29 de abril de 1855 mandando proceder al reconocimiento y clasificacion de todas las cargas de justicia, y el art. 9.º de la de presupuestos de 1859 estableciendo la forma en que debe verificarse:

Visto el acuerdo de la Junta revisora de las cargas de justicia de 20 de junio de 1861 y el informe de la mayoría de la Seccion de Hacienda del Consejo de Estado, evacuado en 22 de marzo de 1862, que opinaban por la caducidad de esta obligacion:

Visto el informe del Consejo de Estado en pleno de 1.º de febrero del corriente año de 1865, que así como la minoria de la Seccion de Hacienda, opina por la subsistencia de esta carga:

Considerando que no puede desconocerse la legalidad de la enajenacion por el duque de Medinaceli; puesto que poseyendo las alcabalas en virtud de un título legal, cual era la donacion del Monarca, pudo verificar sobre las mismas los contratos que considerase convenientes, máxime impetrando la Real aprobacion, como se ha verificado respecto de las alcabalas de que se trata:

Considerando que la villa de Sotillo venia percibiendo dichas alcabalas mas de un siglo en virtud del título de compra, prévia la entrega del precio estipulado, cuya enajenacion se confirmó últimamente por el Rey Don Fernando VII, y percibiendo además el Estado los derechos de valimiento y demás servicios impuestos á estas enajenaciones; S. M. de conformidad con lo informado sobre el particular por el Consejo de Estado en pleno, declara subsistente la carga de justicia de que se trata.—De Real orden etc.—Madrid 10 de noviembre de 1865.—Alonso Martinez.—Señor Director general del Tesoro público.» (*Gaceta 27 noviembre.*)

R. O. de 13 febrero de 1866.

XIX.—Mandando abonar una, y los réditos que no hayan prescrito con arreglo á la ley de contabilidad

Por esta Real orden se reconoce como carga de justicia una renta anual de 197 escudos 50 milésimas á favor de la condesa de Ibangrande, en equivalencia de los productos del servicio ordinario y extraordinario y 15 al millar de la villa de Pinto, que dió á sus antecesores en empeño de juro al quitar el Rey D. Cár-

los II y en su nombre la Reina Gobernadora Doña Mariana de Austria y los del Consejo y Contaduría mayor de Hacienda, en 1.875.888 maravedis de plata, segun consta de la Real carta de privilegio. La referida condesa ha acreditado en el expediente que desde el 11 de enero de 1830 está en posesion de dicho título que la dá la personalidad, y que desde entonces vino cobrando dicha renta hasta 1843.

Se citan en la resolucion la ley de 29 de abril de 1855, la R. O. de 30 de mayo del mismo año, el art. 10 de la ley de presupuestos de 20 de febrero 1850, y el 9.º de la de 1859, prescribiendo reglas para la revision, reconocimiento y pago de las cargas de justicia. Hé aqui el considerando último con la resolucion:

«Considerando que la condesa de Ibangrande ha justificado cumplidamente su personalidad como poseedora de los referidos mayorazgos, y por lo tanto el derecho que le asiste al cobro de la pretendida renta y á las que por razon de atrasos no hayan prescrito con arreglo á lo establecido en el art. 18 de la ley de contabilidad y en la R. O. de 25 de febrero de 1863 (1); S. M., conformándose con los dictámenes que sobre el particular han emitido la Seccion de Hacienda del Consejo de Estado, esa Direccion y la Asesoría general de este Ministerio, se ha servido confirmar el acuerdo de la Junta revisora de cargas de justicia, por el que se reconoce como tal á favor de la condesa de Ibangrande la renta anual de 197 escudos 50 milésimas que tiene derecho á percibir en equivalencia de los productos del servicio ordinario y extraordinario y 15 al millar de la villa de Pinto; debiendo incluirse dicha cantidad con las que correspondan por atrasos en el presupuesto de obligaciones generales del Estado, sin procederse á su abono hasta que se obtenga el competente crédito legislativo.—De Real orden etc.—Madrid 13 de febrero de 1866.—Alonso Martinez.» (*Gaceta 14 marzo.*)

R. O. de 14 febrero de 1866.

XX.—*Donaciones Reales*, declarando caducada una que por razon de alcabalas percibia la condesa del Montijo como procedente de concesion graciosa ó de pura merced, sin carácter alguno oneroso.—Los servicios de mayordomia y camareria palaciega no bastan á justificar donaciones á perpetuidad de rentas de la Corona.

(HAC.) «He dado cuenta á la Reina (que

(1) Es la inserta en la pág. 38 con el número III.

Dios guarde) del expediente instruido por esa Direccion en cumplimiento de la ley de 29 de abril de 1855 para llevar á efecto la revision de la carga de justicia de 992 escudos 854 milésimas anuales que por razon de las alcabalas de Casarrubios del Monte, Venta de la Retamosa y Valmojados, provincia de Toledo, percibe la condesa del Montijo, y forma parte de la de 5,181 escudos, 580 milésimas que figura al núm. 563, art. 1.º, capítulo I, seccion 4.ª del presupuesto de gastos vigente.

En su consecuencia:

Visto el privilegio otorgado por los Reyes Católicos en 22 de enero de 1474, con los siguientes que están literalmente consignados en la ejecutoria del Consejo de Hacienda de fecha 16 de diciembre de 1687:

Vista la exposicion y renuncia firmada por la Princesa á 25 de febrero de 1479, en la que acatando los muchos, buenos y dilatados servicios que Gonzalo Chacon, su mayordomo y contador mayor, y Clara Albarnaez, su camarera mayor, le habian hecho y hacian cada dia, queria renunciar y traspasar, como por la presente renunciaba y traspaba en ellos los 40.000 mrs. que por su vida tenia situados y tasados en las alcabalas de Casarrubios y su tierra para que los gozasen ambos ó cada uno de ellos desde aquel dia en adelante, para que en todas sus vidas de ellos y de cada uno de ellos, de la misma manera y con las mismas facultades con que ella los disfrutaba, concluyendo en suplicar que la merced de por vida se convirtiere en merced perpétua y por juro de heredad:

Vista á su continuacion la resolucion del Rey haciendo saber á sus contadores mayores que su voluntad era que los 40.000 mrs. que Gonzalo Chacon y su mujer Clara Arbarnaez «dimitian é tienen por merced en cada un año para en todas sus vidas, que las hayan é tengan de mí por merced en cada un año por juro de heredad para siempre jamás, para sí y sus sucesores.»

Vista la ley 9.ª, tit. VIII, lib. VII de la Nov. Recop., en que se consigna el principio de que la Corona debia recuperar todo lo enajenado de la misma sin título y efectivo precio:

Vistas varias cláusulas del testamento con que falleció el Sr. D. Carlos II:

Vistas las leyes 10 y 11 del mismo título y libro, en que se declaró que ni las cédulas de exencion ni incorporacion, ni las confirmaciones concedidas á los poseedores de oficios enajenados, especialmente de alcabalas, daban á estas mas validez que la que tenian en virtud de los títulos primitivos:

Tomo III.

Visto el Real decreto inserto en la *Gaceta* de 17 de marzo de 1862 declarando, á consulta del Consejo de Estado, caducada la carga de justicia que en equivalencia de las alcabalas del pueblo de Tarce cobraba la Condesa del Montijo desde 1635:

Vista la ley de 29 de abril de 1855:

Visto el informe de la Asesoría general de este Ministerio, y el acuerdo de la Junta revisora, conformes en que se declare caducada esta carga de justicia, y las razones en que se fundan:

Vistos los informes de la mayoría y minoría de la Seccion de Hacienda del Consejo de Estado, proponiendo la primera la caducidad de dicha carga, y la segunda que se declare subsistente:

- Visto lo informado por el Consejo en pleno opinando de conformidad con la Asesoría, la Junta revisora y la mayoría de la seccion de Hacienda del Consejo:

Considerando que esta concesion de alcabalas, que no se presenta original, era en su origen un mero juro de por vida, situado en Casarrubios del Monte, el que posteriormente y á instancia de la Princesa se mandó testar de los libros de mercedes vitalicias, y situarlo como juro perpétuo.....

Considerando que esta concesion, tanto cuando era de por vida, como despues de perpetuada, era de pura merced y graciosa, sin precio alguno que la hiciese indemnizable, y que esa misma cualidad y carácter conserva despues de la ejecutoria:

Considerando que esta, que ha sido ganada en 1687, no puede neutralizar los efectos de la ley 9.ª, tit. VIII, lib. VII de la Nov. Recop. dictada en 25 de enero de 1695, por lo que se mandó recuperar para la Corona todo lo enajenado sin justo y efectivo precio, ni las prescripciones de las dos siguientes publicadas en 1711 y 1742 para los mismos efectos:

Considerando que las alcabalas eran un impuesto y renta del Estado, el que cuando se abolieron se subrogó en un equivalente á dinero que los interesados habian de cobrar con nombre de cargas de justicia ínterin no se resolvía sobre su reincorporacion á la Corona:

Considerando que esta procede siempre, con solo la diferencia de que debe verificarse sin retribucion cuando sin ella la concedió la Corona, y mediante una justa indemnizacion cuando fueron adquiridas por precio efectivo; que la de que se trata aparece concedida por méritos y servicios que ni se expresan ni designan, y cuya importancia y utilidad es hoy por lo mismo imposible calificar:

Considerando como meramente y de pura

merced, sin carácter alguno oneroso, todas aquellas en las que los poseedores no acrediten con presentacion del título primitivo de egresion haberlas obtenido por justo y efectivo precio, y que en este caso se hallan las de que se trata, adquiridas por servicios domésticos, sin precio ni desembolso alguno, y por consiguiente sin circunstancias que justifiquen la indemnizacion:

Considerando que el Sr. D. Carlos II, siguiendo el impulso dado por sus antecesores á la reincorporacion á la Corona de todo cuanto de ella por las calamidades de los tiempos se habia desmembrado, consignó en su testamento las mas terminantes prescripciones al efecto, revocando, y anulando, y dando por de ningun valor ni efecto la tolerancia, cualquiera disimulacion, permiso ó licencia que hubiese concedido é concediere, sin que pudiera aprovechar cualquiera trascurso de tiempo, aunque fuese tal que no hubiere memoria de hombre en contrario, y siempre quedase á la Corona el derecho claro y expedito, y pudieran sus sucesores reincorporar á la misma y Patrimonio Real las alcabalas, tercias, pechos y derechos como quiera á él pertenecientes como cosa aneja á la Corona, y de que no habia podido, ni podia, ni podría apartarse por tolerancia alguna:

Considerando que estos servicios de mayordomía y camarería palaciega, por importantes y útiles que se les supongan, nunca lo son tanto que basten á justificar donaciones á perpetuidad de rentas de la Corona, prohibidas siempre en la de Castilla, rechazadas por el espíritu del siglo, incompatibles con la legislacion actual y con los derechos de la nacion:

Considerando que los títulos de confirmacion y las exenciones de incorporacion, cualesquiera que sean sus cláusulas, no atribuyen á los poseedores mas derechos que los que por los primitivos les corresponden, ni disminuyen, ni rebajan los que al Fisco pertenecen para insistir en la incorporacion ó en la caducidad en su caso:

S. M., conformándose con los dictámenes emitidos sobre el particular por la Asesoría general de este Ministerio, esa Direccion, la mayoría de la Seccion de Hacienda del Consejo de Estado y el mismo Consejo en pleno, se ha servido confirmar el acuerdo de la Junta de revision y reconocimiento de cargas de justicia de 2 de junio de 1862, por el que se declara caducada la de que se trata, y que por tanto se elimine del presupuesto del Estado.—De Real orden etc.—Madrid 14 de febrero de 1866.—Alonso Martinez. (*Gaceta* 19 marzo.)

XXI.—La Real orden (no Real decreto) de 28 de enero de 1862, que se inserta en la *Gaceta* de 17 de marzo de aquel año, declarando caducada la carga de justicia que percibia la condesa del Montijo por equivalencia de las alcabalas de S. Pedro de Tarce, está fundada en las leyes 8.^a á la 11, tít. VIII, lib. VII de la Nov. Rec., en que se consigna el principio de que debe recuperar la Corona lo enajenado de la misma sin justo y efectivo precio, y que las confirmaciones no dan á los poseedores mas derechos que los que tuvieron por los títulos primitivos de egresion; en el decreto de las Cortes de 6 de agosto de 1811, declarando abolidos los señorios jurisdiccionales, y con derecho á indemnizacion los que los hubieran adquirido por título oneroso; en la ley de 29 de abril de 1855 y en el art. 9.^o de la de presupuestos de 1859.

La misma doctrina se halla consignada por el Consejo de Estado en los Reales decretos-sentencias de 17 de marzo y 4 de abril de 1864.

R. O. de 23 abril de 1866.

XXII.—*Prescription*.—Declarando la caducidad de un censo por haber prescrito la accion para reclamar el capital y réditos con arreglo á la ley 63 de Toro y á la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo.

(Hac.) Expediente instruido en la Direccion del Tesoro por D. Bernardino, D. Ramon y doña Dolores Saenz Izquierdo, para que se reconozca como carga de justicia un capital de cerca de 15,000 ducados de plata doble, sobre bienes de un convento de la provincia de Logroño, y se satisfagan anualmente sus réditos con las pensiones atrasadas. Solicitaron los Izquierdos como herederos del último poseedor de un vínculo fundado en 1673, formando parte de él dicho censo, y probaban la constitucion de este en 1668 con una escritura segunda copia. La Junta de revision y reconocimiento de cargas de justicia, acordó la caducidad del derecho al capital y réditos, y por R. O. de 23 de abril se confirma este acuerdo en estos términos:

«Vista la ley de 29 de abril de 1855, la Real orden de 30 de mayo siguiente, y el art. 9.^o de la ley de presupuestos de 1859, determinando la revision y reconocimiento de las cargas de justicia y forma de verificarlo.

Vistas las leyes 1.^a, 2.^a, 3.^a y 4.^a, tít. XVI, libro X de la Nov. Rec., previniendo como

indispensable requisito la toma de razon en el oficio de hipotecas de las escrituras de imposiciones de censos.

Vista la ley 63 de Toro, ó sea la 5.^a, título VIII, lib. XI de la Nov. Rec., disponiendo prescriba á los 30 años la accion Real hipotecaria.

Vistas las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia de 24 de enero y 9 de marzo de 1863, publicadas en las *Gacetas* de 30 y 14 del respectivo mes, desestimando la imprescriptibilidad de los capitales de censos.

Vista la R. O. de 25 de febrero de 1863, recaída en el expediente promovido por el conde del Valle de San Juan, y consulta á que dió márgen sobre inteligencia del art. 18 de la ley de contabilidad, resolviendo que las cuestiones de prescripcion de los capitales de las cargas de justicia se decidieran con arreglo á la legislacion comun.

»Considerando que del censo de que se trata no consta se tomase razon en la Contaduría de hipotecas, y que esta falta, por mas que se estime subsanable, hace presumir que debió ser redimido, demostrándolo tambien así el hecho de no resultar se hubieran pagado ó reclamado sus réditos con anterioridad á la época en que fué incoado este expediente:

»Considerando que de los documentos traídos al mismo no aparece que el referido censo constituyera parte de los bienes asignados por los contadores de la testamentaria del general D. Pedro Saenz Izquierdo, al mayorazgo fundado por el mismo, y por consiguiente que tampoco resulta esclarecido el derecho que solicitan los interesados en este expediente como herederos del último poseedor de dicho vínculo:

»Considerando que por parte de estos ó de sus causantes no resulta que hayan percibido los réditos del expresado censo, ni deducido reclamacion alguna durante el largo período de mas de 30 años, y por lo tanto que ha trascurrido con exceso el plazo marcado por la ley para estinar prescrita la accion ó derecho que en todo caso pudiera asistirlos:

»Y considerando que la prescriptibilidad de los capitales de censo, fundada en las citadas disposiciones legales, se halla en la actualidad reconocida por dichas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia y otras que forman jurisprudencia;

»S. M., conformándose con los dictámenes sobre el particular emitidos por la Seccion de Hacienda del Consejo de Estado, esa Direccion y la Asesoria general de este Ministerio, se ha servido confirmar el acuerdo de la Junta de revision y reconocimiento de cargas de

justicia, por el que se declara que no existen méritos para el reconocimiento del repetido censo como carga de justicia, y que procede la caducidad de derecho de los interesados al capital y réditos del mismo.—De Real orden, etc.—Madrid 23 de abril de 1866.—Alonso Martinez.» (*Gac.* 10 mayo.)

R. O. de 14 mayo de 1866.

XXIII.—Declarando caducada una procedente de alcabalas por haberse adquirido á título gracioso. Señorios. Mercedes enriqueñas. Reversion á la Corona.

(Hac.) Por esta Real orden se declara caducada una carga de justicia de 2.188 escudos 289 milésimas á favor del duque de Escalona, duquesa de Uceda y duque de Frias por el equivalente de las alcabalas consignadas en la villa de Escalona y lugares de su tierra que han disfrutado los sucesores desde el reinado de Doña Isabel I, de D. Diego Lopez Pacheco, marqués de Villena. Hé aquí los términos en que está concebida la resolucion:

«Vistas las leyes 8.^a, 9.^a, 10 y 11, tit. VIII, lib. VII de la Nov. Rec., por las que se establece el principio de que la Corona debia recuperar todo lo enajenado de la misma sin justo y efectivo precio, y se declara además que las excepciones de incorporacion y las cédulas de confirmacion, especialmente de alcabalas y mercedes enriqueñas, no dan á sus poseedores mas derecho que el que tengan en virtud de los títulos primitivos, ni suplen los defectos de que puedan adolecer los mismos:

Visto el decreto de las Cortes de 6 de agosto de 1811, y la ley de 3 de mayo de 1823, restablecidos en 2 de febrero de 1837, como así bien la ley de 26 de agosto de este último año, determinando la abolicion de los señorios jurisdiccionales, las prestaciones Reales y personales inherentes á los mismos, y los privilegios de igual origen, como tambien la indemnizacion de los que hubieran sido adquiridos por título oneroso ó en recompensa de grandes servicios reconocidos:

Visto el R. D. de 30 de mayo de 1817 y la ley de presupuestos de 23 de mayo de 1845, convirtiendo las alcabalas en renta á dinero, consignando su importe en la contribucion de consumos, y mandando abonar á los dueños de las enajenadas de la Hacienda pública la cantidad que resultase haberles correspondido en el año comun del último quinquenio:

Vista la ley de 29 de abril de 1855, las

Rs. Órds. de 30 de mayo y 2 de junio del mismo año, y las leyes de presupuestos de 1836 y 1839, prescribiendo la revision de las cargas de justicia, la forma en que ha de verificarse y los documentos que han de presentar los interesados:

Considerando que las alcabalas de la villa de Escalona y lugares de su tierra no consta fueran adquiridas á título oneroso ó en recompensa de grandes servicios por el marqués de Villena, causante del actual partícipe, sino por merced ó gracia del Soberano, segun se infiere de la Concordia de que queda hecho mérito, celebrada con los Reyes católicos, por la cual fué confirmado el marqués en los derechos y rentas pertenecientes al señorío de la expresada villa, del cual habia gozado antes:

Considerando que ni la referida Concordia ni la cédula de confirmacion del Sr. D. Felipe V han podido conferir al partícipe mas derecho que el que tuviera en virtud del primitivo título de egresion; y que no habiéndose presentado este, no hay términos hábiles de que pueda reconocérsele ni aun como acreedor legitimo de dichas alcabalas por título gracioso:

Considerando que tampoco se ha presentado el original de la Concordia, sino un testimonio simple de la misma; y que si bien aparece de su contexto que las alcabalas de Escalona quedaban del marqués de Villena, no consta que este pudiera hacer suyos sus productos, por cuanto la mayor parte de ellos se la reservó la Corona, con el derecho de descontar su importe de la suma que debería percibir el marqués en equivalencia de los que disfrutaba en la villa de Chinchilla que habia cedido á aquellos monarcas:

Considerando que la parte de dichos productos, reservada al marqués de Villena con las demás rentas pertenecientes á la villa de Escalona para el caso de la renuncia de la misma, no puede estimarse mas que como una concesion graciosa y dependiente además del señorío de la expresada villa, en el cual, como queda dicho, fué confirmado el marqués por la ante citada Concordia:

Considerando, por último, que al abolirse los señoríos jurisdiccionales y los privilegios de origen idéntico solo se reconocieron indemnizables los derechos ó egresiones de la Corona efectuadas á título oneroso ó remuneratorio de grandes servicios reconocidos;

S. M., conformándose con lo en su razon expuesto por la Seccion de Hacienda del Consejo de Estado, esa Direccion y la Asesoría general de este Ministerio, ha tenido á bien

confirmar el acuerdo de la Junta de revision y reconocimiento de cargas de justicia, por el que se declara caducada la de que viene haciéndose referencia.—De Real órden etc.—Madrid 14 de mayo de 1866.» (*Gaceta* 30 mayo.)

R. O. de 5 junio de 1866.

XXIV.—Se declara la caducidad de una que percibia el conde de Miranda en concepto de partícipe de alcabalas por no haberse presentado el título primitivo de egresion.

(HAC.) He dado cuenta á la Reina (que Dios guarde) del expediente instruido por esa Direccion, en cumplimiento de la ley de 29 de abril de 1855, para llevar á efecto la revision de la carga de justicia de 1.458 escudos 939 milésimas que percibe la condesa del Montijo, y figura en el presupuesto de gastos vigente al núm. 466, art. 1.º, cap. I, seccion 4.ª, á nombre del conde de Miranda, bajo el concepto de partícipe de alcabalas.

En su consecuencia:

Vista la sentencia dictada y pronunciada por los Reyes Católicos en Martin-Muñoz de las Posadas á 6 de febrero de 1487 ante su secretario D. Fernando Alvarez, por la que, con presencia de los documentos presentados y alegaciones hechas de una parte por Don García Alvarez de Toledo, duque de Alva, y de la otra por D. Pedro de Zúñiga, conde de Miranda, sin pleito ni forma de proceso, se declaró pertenecer á este y se le adjudicó la villa de Miranda, con su fortaleza, tierra, señorío, jurisdiccion civil y criminal alta y baja, mero y misto imperio, y con todas sus rentas, pechos y derechos, para sí y sus herederos ó sucesores, imponiéndose al duque de Alva perpétuo silencio para que en ningún tiempo pudiera demandar dicha villa ni los demás derechos expresados; cuyo documento resulta ser original y aparece escrito en una hoja suelta de papel comun:

Vista la Real cédula de confirmacion expedida en San Lorenzo á 15 de octubre de 1752 por el Rey D. Fernando VI, comprensiva de otra librada en 22 de noviembre de 1709 por el Rey D. Felipe V, en la que se hace mérito de varios privilegios otorgados á los antecesores del conde de Miranda, y de la referida sentencia ó carta ejecutoria, por la cual se dice le fué reconocido su derecho á la enunciada villa, los lugares de su tierra, alcabalas, tercias y demás rentas pertenecientes á la misma, de todo lo que se le dió posesion en 17 de febrero de 1487; resultando que en vista de los servicios que habia acreditado el conde respectivamente á la con-

cesion de la villa de Iscar, y en consideracion á los documentos presentados por el mismo; á que todos los indicados privilegios se le habian concedido por los singulares y grandes servicios que su casa habia hecho, y especialmente á la circunstancia de no haberse causado novedad en ellos á consecuencia de las declaratorias promulgadas en las Cortes de Toledo por los Reyes Católicos en 1480, fué confirmado en el goce de los enunciados derechos, los cuales se declararon preservados del decreto de incorporacion:

Vistas las leyes 8.^a, 9.^a, 10 y 11, tít. VIII, lib. VII de la Nov. Recop., prescribiendo que demandaran los fiscales todo lo enajenado de la Corona sin justo y efectivo precio; y que por las cédulas de confirmacion, especialmente de alcabalas y mercedes enriqueñas, no se entendiese que habian adquirido sus poseedores mas derecho que el que tenian en virtud de los títulos primitivos:

Visto el decreto de las Cortes de 6 de agosto de 1811, y la ley de 3 de mayo de 1823, restablecidos en 2 de febrero de 1837, y la ley de 26 de agosto de este último año, declarando abolidos los señoríos jurisdiccionales, las prestaciones anejas á los mismos y los privilegios de igual origen, y con derecho á ser indemnizados los que hubiesen adquirido á título oneroso ó en recompensa de grandes servicios reconocidos:

Vista la ley de presupuestos de 23 de mayo de 1845 refundiendo las alcabalas y demás rentas provinciales en la contribucion de consumos, y disponiendo que de los productos de esta se abone á los dueños de las enajenadas de la Hacienda pública la cantidad que resulte haberles correspondido en el año común del último quinquenio:

Vistas las leyes de 29 de abril de 1855 y de presupuestos de 1859 determinando la revision de las cargas de justicia y la forma en que ha de verificarse:

Vista la R. O. de 30 de mayo de 1855, fijando el plazo de tres meses para que los dueños de oficios y derechos enajenados de la Corona presentaran los títulos originales y primitivos de adquisicion y las cédulas de confirmacion del último reinado:

Vista la R. O. de 28 de febrero de 1862, publicada en la *Gaceta* de 17 de marzo del mismo año, por la que se declaró caducada la carga de justicia referente á las alcabalas de San Pedro de la Tarce:

Considerando que la carta ejecutoria obtenida por el conde de Miranda en el año de 1487, si bien acreditaba en cierto modo su derecho al señorío de la villa del nombre de su título, no así el que pueda corresponderle

á las alcabalas de la misma, porque ni de ellas se hace mérito en el expresado documento, ni de su contexto se infiere que con las demás rentas del señorío se le hubiesen adjudicado aquellas, que no deben estimarse como anejas ó inherentes al mismo:

Considerando que las referencias que de dichas alcabalas se hacen en las cédulas de confirmacion al relacionarse la expresada ejecutoria, á mas de no hallarse conformes con esta, no pueden ser debidamente apreciadas por no haberse presentado el título primitivo de egresion:

Considerando que la falta de este documento no puede estimarse suplida con las indicadas cédulas, porque no confiriendo estas al conde mas derecho que el que tuviese en virtud del título primitivo, con arreglo á lo determinado en las citadas leyes de la Nov. Recop., no es posible decidir cuál sea el que le corresponda sin tener á la vista el expresado dato, y mas cuando de él se hace caso omiso en las referidas cédulas:

Considerando que las indicaciones de esta respecto á los grandes servicios prestados por la casa del conde para obtener los derechos ó privilegios en cuyo goce fué confirmado, no son bastantes para que, prescindiendo del título de egresion, se estimen como reconocidos y aplicables á la concesion de las alcabalas de que se trata cuando solo resultan detallados los hechos referentes á otra de las mercedes que le fueron otorgadas:

Considerando que no habiéndose acreditado en debida forma la adquisicion de las referidas alcabalas á título oneroso ó remuneratorio de grandes servicios reconocidos no procede su indemnizacion, en conformidad á lo dispuesto en las enunciadas leyes sobre señoríos y en la de presupuestos de 1845:

Y considerando que por razones un tanto análogas á las expresadas fué declarada insubsistente la carga de justicia que por las alcabalas de San Pedro de la Tarce percibía la misma partícipe interesada en las que motivan este expediente, segun aparece de la citada R. O. de 28 de febrero de 1862:

S. M., conformándose con los dictámenes que sobre el particular han emitido la Seccion de Hacienda del Consejo de Estado, esa Direccion y la Asesoría general de este Ministerio, se ha servido confirmar el acuerdo de la Junta de revision y reconocimiento de cargas de justicia, por el que se declara caducada la de que se trata.—De Real órden etc.—Madrid 5 de junio de 1866.—Cánovas.—Sr. Director general del Tesoro público.» (*Gac.* 21 junio.)

R. O. de 13 junio de 1866.

XXV.—No procede reconocer como carga de justicia la que percibía la villa de Jijon procedente de arbitrios para la conservacion del muelle, por proceder de un acto graciable de la Corona y haber hecho suya el Estado la obligacion de conservar todos los puertos.

(Hac.) Por Real carta librada por S. M. y los de su Consejo en 27 de enero de 1774 se concedió á la villa de Jijon la facultad de cobrar ciertos derechos de determinados artículos, aplicando su importe á la conservacion y aumento del puerto y muelle de la misma, y cometiéndolo á una Junta la administracion, recaudacion é inversion de aquellos arbitrios. Publicado el R. D. de 17 de diciembre de 1851 por el que se mandó que la administracion y servicio de los puertos de la Península é Islas adyacentes corriesen á cargo del Ministerio de Fomento, reduciendo á los dos impuestos denominados de fondeadero y de carga y descarga todos los arbitrios establecidos en dichos puertos, y dictando reglas para su exaccion: y publicado el reglamento de 30 de enero para su ejecucion se ha considerado caducada esta asignacion, y así se declara por R. O. de 13 de junio:

«Considerando que los arbitrios concedidos á la Junta conservadora del muelle de Jijon, y la asignacion anual de 12,000 rs. que en su equivalencia le fué otorgada posteriormente, no reconocen por fundamento ningun título oneroso, sino un acto graciable de la Corona, motivado en la necesidad de las obras á que debian destinarse aquellos fondos:

Considerando que el Estado ha hecho suya la obligacion de conservar todos los puertos del Reino, disponiendo que la administracion y servicio de los mismos corra á cargo del Ministerio de Fomento; y que hallándose consignada en los presupuestos de este último la cantidad indispensable para sufragar los gastos de construccion y reparacion de aquellos, no es posible legalmente la aplicacion de otros fondos á dicho objeto, ni menos la inclusion de estos en los presupuestos de diverso Ministerio:

Y considerando que determinadas especialmente las obras del puerto de Jijon y las cantidades con que el Estado habia de contribuir á las mismas, no hay razon alguna que legitime el pago de la asignacion de que se trata como carga de justicia.» (*Gaceta* 27 junio.)

R. O. de 17 noviembre de 1866.

XXVI.—Alcabalas cedidas en empeño de juro al quitar. Se reconoce á un pueblo su derecho á percibir la renta equivalente á las alcabalas de la misma, por no haber sido devuelto el precio de egresion etc.

(Hac.) «He dado cuenta á la Reina (que Dios guarde) del expediente instruido por esa Direccion, en cumplimiento de la ley de 29 de abril de 1855, para llevar á efecto la revision de la carga de justicia de 333 escudos 809 milésimas que figura en el presupuesto de gastos del Estado al núm. 94, artículo 1.º, capítulo XI, seccion 4.ª, y percibe el Ayuntamiento de Vadocondes, provincia de Búrgos, por las alcabalas de la misma villa.

En su consecuencia:

Vista la Real carta de privilegio, escrita en pergamino y librada por D. Felipe IV y los de su Consejo y Contaduría mayor de Hacienda en Madrid á 30 de mayo de 1623, confirmando y aprobando la de venta que se inserta, dada por D. Felipe III en San Lorenzo á 19 de setiembre de 1620, por la que fueron cedidas en empeño de juro al quitar las alcabalas y tercias de la villa de Vadocondes al concejo, justicia y regimiento de la misma, en precio de 6.788,250 maravedis que ingresaron en la Tesorería general, y sin cargo de situado las primeras:

Vista la Real cédula de D. Felipe V, expedida en esta Corte á 31 de diciembre de 1709, confirmando á la citada villa en la propiedad de aquellos derechos, y declarándolos preservados del decreto de incorporacion:

Vistas las notas consignadas al pié de los referidos documentos por la Direccion general de la deuda en 4 de junio de 1855, expresivas de hallarse indemnizada la villa de las tercias que le correspondian:

Vista la ley de presupuestos de 1845, en cuyo art. 16 se prescribe que de los productos de la contribucion de consumos se abone á los dueños de las alcabalas enajenadas de la Hacienda pública la cantidad que resulte haberles correspondido en el año comun del último quinquenio ínterin no se acuerde otro medio de indemnizacion:

Vistas las leyes de 29 de abril de 1855 y de presupuestos de 1859 disponiendo la revision de las cargas de justicia, y que se aplique en cada caso la legislacion especial que corresponda:

Considerando que los títulos relacionados demuestran legalmente el dominio de la villa de Vadocondes en las alcabalas de la misma, y el derecho que le asiste á continuar percibiendo la renta que en su equivalencia le está asignada:

Considerando que no ha sido devuelto el precio de egresion ni indemnizado en otra forma el partícipe, y que la cuota por que figura en los presupuestos es la que le corresponde, segun todo resulta acreditado en el expediente;

S. M., conformándose con los dictámenes que sobre el particular han emitido la Seccion de Hacienda del Consejo de Estado, esa Direccion y la Asesoría general de este Ministerio, se ha servido confirmar el acuerdo de la Junta de revision y reconocimiento de cargas de justicia, por el que se declara subsistente la de que se trata.—De Real orden etc.—Madrid 17 de noviembre de 1866.—Barzanallana.—Sr. Director general del Tesoro público.» (*Gac.* 4 diciembre.)

R. O. de 20 enero de 1867.

XXVII.—*Indemnizacion de portazgos.*—Se declara subsistente una carga de justicia y que las pensiones obtenidas en sustitucion de derechos cedidos al Estado por via de transaccion ó convenio celebrado con el mismo, deben estimarse como adquiridas á título oneroso.

(HAC.) «He dado cuenta á la Reina (que Dios guarde) del expediente instruido por esa Direccion, en cumplimiento de la ley de 29 de abril de 1855, para llevar á efecto la revision de la carga de justicia de 140 escudos anuales que figura á favor del duque de Montellano en el presupuesto de obligaciones generales del Estado al núm. 24, art. 1.º, capítulo I de la seccion 4.ª por indemnizacion de los portazgos de Andújar y Marmolejo.

En su consecuencia:

Vista la Real cédula de confirmacion expedida por D. Juan II en el Real de Palenzuela á 4 de diciembre de 1451 de la merced que su hijo D. Enrique IV, siendo Príncipe de Asturias, hizo á Gonzalo de Avila, su maestresala, del portazgo de la ciudad de Andújar, su tierra y términos, para sí, sus herederos y sucesores, en recompensa de los servicios que le habia prestado:

Vista la Real cédula librada por los Reyes Católicos D. Fernando y Doña Isabel en 16 de marzo de 1477 confirmando la anterior:

Visto el privilegio rodado, expedido por los enunciados Reyes D. Fernando V y Doña Isabel I, con los ricos hombres y prelados del Reino en 26 de junio de 1478, confirmando y aprobando la merced que por su cédula librada en Sevilla á 7 de abril del mismo año hicieron á Gonzalo de Avila, su maestresala y consejero, del portazgo de Andújar y su tierra con otros bienes, facultándole para que de ellos y demás que hubiese pudiera fundar mayorazgo á favor de su hijo Andrés

Vazquez de Avila y sus sucesores, y aumentase en las armas de su linaje un leon coronado de las Reales; todo en recompensa del importante servicio que prestó en tiempo de D. Enrique IV conquistando de los moros la ciudad y peñon de Gibraltar con un corto número de españoles que sacó de Jerez de la Frontera, de donde era corregidor y capitán:

Vista la Real cédula expedida por D. Felipe V en el Buen-Retiro á 5 de junio de 1708, con presencia de los referidos privilegios y de una ejecutoria de la Chancillería de Granada de 26 de mayo de 1587, obtenida por Doña Teresa Valderrábano Dávila en pleito con el lugar de Marmolejo sobre la paga de su portazgo, confirmando en su virtud al duque de Montellano y sus sucesores en el mayorazgo fundado por Gonzalo de Avila en la propiedad y posesion de los mencionados portazgos, los cuales se declaran preservados del decreto de incorporacion á la Corona:

Vista la carta-oficio de los directores de las rentas de correos y caminos, dirigida al duque de Montellano en 7 de noviembre de 1797, participándole que por decreto de 29 de octubre último se habia dignado S. M. aprobar el convenio tratado con aquella Direccion, acerca de la recompensa del portazgo inmediato á Andújar, mandando quedase este refundido en el que se hallaba establecido por S. M. en dicha ciudad, y que de sus fondos se dieran perpétuamente al duque y á sus sucesores en el mayorazgo á que pertenecia aquel la cantidad de 1400 reales anuales, estimándose por este hecho extinguido el privilegio de concesion del referido portazgo:

Visto el informe de esa Direccion general, en el que se manifiesta no constar de las relaciones remitidas por la Junta de la Deuda pública que la obligacion de que se trata haya sido redimida en forma alguna:

Vista la ley 17, tít. XX, lib. VI de la Novísima Recopilacion, ó sea la Real orden de D. Carlos IV de 29 de noviembre de 1796, y la circular del Consejo de 3 de enero del 97, declarando por punto general que no se cobrarán mas derechos de portazgos ni otro alguno de esta clase en las carreteras generales que los impuestos por S. M. para la conservacion y reparacion de las mismas; y que los que tuviesen privilegio para semejantes exacciones lo presentasen original en el Juzgado de Correos y Caminos, para que examinada su calidad se tratara de la recompensa que mereciese:

Visto el decreto de las Cortes de 6 de agos-

to de 1811, restablecido en 2 de febrero de 1837, sobre abolición de los señoríos y los privilegios de igual origen, declarando indemnizables los obtenidos á título oneroso ó en recompensa de grandes servicios reconocidos:

Visto el R. D. de 12 de mayo de 1837, determinando se tuviesen por caducadas todas las pensiones que no se hubieran obtenido á título oneroso ó por servicios personales al Estado de conocida importancia y utilidad, ó por los demás medios que establece:

Vistas la ley de 29 de abril de 1855, la R. O. de 30 de mayo del mismo año, y la ley de presupuestos de 1859, acordando la revisión de las cargas de justicia, la forma en que ha de verificarse, y que se aplique en cada caso la legislación especial que corresponda:

Visto el Real decreto-sentencia del Consejo de 4 de abril de 1864, y la R. O. de 16 de julio de 1865 recaída en el expediente de revisión de la carga de justicia que percibe el duque de San Carlos, sancionando la doctrina legal de que las pensiones obtenidas en sustitución de derechos cedidos al Estado por vía de transacción ó convenio celebrado con el mismo deben estimarse como adquiridas á título oneroso, no obstante procedan de origen gracioso:

Considerando que la merced del portazgo de Andújar, su tierra y términos, hecha en favor de Gonzalo de Avila y confirmada en los duques de Montellano, como sucesores en el mayorazgo fundado por aquel, no puede ser calificada de puramente graciosa, sino remuneratoria de los importantes servicios que se expresan en los enunciados títulos:

Considerando que la existencia de estos sería bastante para que al poseedor de aquel derecho se le indemnizase de su importe, con arreglo á lo determinado en la ley que acordó su supresión y en las referentes á la abolición de los señoríos y clasificación de pensiones que por analogía le serían aplicables:

Considerando que el actual duque de Montellano, como poseedor del referido mayorazgo, no funda hoy exclusivamente su derecho á la carga de justicia de que se trata en los expresados títulos, sino en el convenio que uno de sus antecesores celebró con el Estado, en virtud del cual, y por la cesión á este de los derechos del portazgo pertenecientes á aquel, se le concedió en su equivalencia la renta anual que figura á su favor en los presupuestos:

Considerando que esta renta ó pensión debe estimarse como obtenida á título oneroso,

y comprendida por lo tanto entre las declaradas subsistentes por la ley de 12 de mayo de 1837, en atención á la jurisprudencia establecida por el citado R. D. de 4 de abril de 1864 y la R. O. de 16 de julio de 1865, cuya doctrina ha sostenido el Consejo de Estado en otros casos análogos:

Y considerando que este participe no ha sido reintegrado ó indemnizado en otra forma del capital correspondiente á esta carga:

S. M., conformándose con los dictámenes emitidos sobre el particular por la Sección de Hacienda del Consejo de Estado, esa Dirección y la Asesoría general de este Ministerio, se ha servido confirmar el acuerdo de la Junta de revisión y reconocimiento de cargas de justicia, por el que se declara subsistente la de que se trata.—De Real orden etc.—Madrid 20 de enero de 1867.—Barzanallana.—Señor Director general del Tesoro. (*Gaceta 4 febrero.*)

R. O. de 14 mayo de 1867.

XXVIII.—Se declara que no procede reconocer la pensión para una capellanía instituida para el culto y servicio de un monasterio, por deber figurar en el presupuesto la dotación, etc.

(Hac.) «He dado cuenta á la Reina (que Dios guarde) del expediente instruido por esa Dirección en cumplimiento de la ley de 29 de abril de 1855, para llevar á efecto el reconocimiento en concepto de carga de justicia de la pensión anual de 480 escudos que solicita y se habian satisfecho al capellan-vicario de las monjas de Sancti Spiritus de Puente la Reina, en la provincia de Navarra.

En su consecuencia:

Visto el testimonio expedido en 23 de abril de 1843 con referencia al testamento otorgado por el doctor D. Fernando Gonzalez, canónigo electo de la iglesia y casa Real de Roncesvalles, en Pamplona, á 5 de enero de 1621, cuyo documento se encuentra en un libro titulado *Capellanías del convento de religiosas de Sancti Spiritus de la villa de Puente la Reina*, del cual consta que por una de sus cláusulas dispuso el Gonzalez que de los censos que le pertenecían se dieran 3.000 ducados á la priora y monjas del monasterio citado, para que con ellos y sus réditos se erigiera y dotara una capellanía con el nombre de vicaría, imponiendo al que la sirviera la obligación de decir misa todos los días, y ejercer como vicario de las monjas todos los actos parroquiales que le correspondiesen, debiendo disfrutar de los réditos de los expresados censos, importantes en aquella época 150 ducados, y entenderse perpétua la capellanía, aunque sin hacerse

colacion ni canónica institucion de ella: que por otras cláusulas confirió el patronato perpétuo de la misma á la priora y consiliarias del monasterio, las cuales en uso de sus prerrogativas deberian hacer el nombramiento de capellan y vicario en la persona que tuvieran á bien, con tal que fuera presbítero secular de buena fama; encargando, por último, á sus testamentarios y albaceas que á su fallecimiento entregasen al monasterio y priora de él las cartas censales de los 3.000 ducados, para que ejecutasen y cumplieran esta fundacion:

Vista la copia literal de la escritura pública otorgada por la priora y consiliarias del referido convento en 22 de abril de 1834, nombrando y presentando al presbítero D. Gregorio Perez como capellan y vicario del monasterio, con la dotacion anual de 300 pesos navarros, ó sea 4.800 rs. vn., de que habian gozado sus antecesores; expidiéndosele por el obispado de Pamplona el oportuno título y conferiéndole la posesion:

Vistas las reclamaciones del capellan vicario en 1843 para que se le abonase la pension anual que le correspondia, con mas las atrasadas que se le adeudaban desde el año 1837 en que el Estado se incautó de los bienes de la comunidad, cuyo expediente fué resuelto por la Administracion general de bienes nacionales en 17 de abril de 1844, reconociéndose aquella pension como carga de justicia afecta á los bienes del referido convento, acordándose su abono para lo sucesivo y el de los atrasos en la forma que se expresa: que bajo este concepto continuó satisfaciéndose esta obligacion á los capellanes, pasando en el año 1852 á ser cargo del presupuesto eclesiástico, que siguió levantándola hasta 1860:

Vista la Real orden dictada por el citado Ministerio de Gracia y Justicia en 10 de julio de 1860, participando al de Hacienda que la dotacion de 4.800 rs. ánuos que á favor del capellan citado venia figurando en las cuentas de la administracion diocesana de Pamplona, era una carga de justicia debidamente reconocida, y que en tal concepto se sirviese disponer se la comprendiese en el presupuesto de su Ministerio, verificándose su pago directamente por el Tesoro público desde 1.º de enero de 1861, en que dejaria de practicarse por cuenta de aquel otro presupuesto, cuyo cumplimiento fué recordado por otra Real orden del propio Ministerio de 17 de enero de 1866:

Visto lo informado por esa Direccion, Asesoría general de este Ministerio y el acuerdo de la Junta de revision y reconocimiento de

cargas de justicia, así como lo expuesto por la Seccion de Hacienda del Consejo de Estado:

Vistos los arts. 20 y 36 del R. D. de 8 de marzo de 1836, y el 20 de la ley de 29 de julio de 1837, aplicando á la Real Caja de Amortizacion para la extincion de la Deuda pública todos los bienes, derechos y acciones de las casas de comunidad de ambos sexos, así suprimidas como subsistentes, y al pago de las pensiones de los regulares, las rentas de las capellanías colativas vacantes y que vacasen en lo sucesivo, excepto las de sangre ó patronato pasivo de familia, y las que estuviesen aplicadas á la dotacion de curatos incógruos:

Visto el art. 3.º de la ley de 11 de julio de 1856, declarando comprendidos entre los bienes del clero, para su venta por el Estado, todos los pertenecientes ó que se hallaran disfrutando los individuos ó corporaciones eclesiásticas, cualquiera que fuese su nombre, origen ó cláusula de su fundacion, excepto las capellanías colativas de sangre ó los patronatos de igual naturaleza:

Vistos los arts. 11 y 13 del Convenio celebrado con la Santa Sede, publicado como ley en 4 de abril de 1860, por el primero de los cuales se obliga el Gobierno á satisfacer á la Iglesia una cantidad alzada que guarde proporcion con las cargas impuestas sobre los bienes vendidos, ó los que se le cedian por virtud de este Convenio, para llevar á efecto la permutacion acordada en el mismo, debiendo nombrarse una Comision mista que reconociese dichas cargas, y propusiera la cantidad que por razon de ellas habia de satisfacer el Estado; y por el segundo se obliga tambien á proveer á la dotacion de capellanes, sacristanes y culto de las iglesias religiosas de cada diócesis:

Vista la ley de 29 de abril de 1855, y el artículo 9.º de la de presupuestos de 1859, disponiendo la revision de las cargas de justicia, la forma en que ha de verificarse, y que se aplique en cada caso la legislacion especial que corresponda:

Considerando que la capellania de que se trata fué instituida para el culto y servicio del monasterio de Sancti Spiritus, religiosas de Puente la Reina, no puede estimarse colativa familiar, ni el patronato de la misma de sangre ó gentilicia: que en este supuesto fueron comprendidos los bienes de su dotacion como eclesiásticos entre los demás del clero que las leyes desamortizadoras declararon de propiedad de la nacion, quedando despues sujetos á la permutacion acordada con la Santa Sede:

Considerando que el Estado al hacer suyos dichos bienes, contrajo la obligacion de le-

vantar las cargas civiles y eclesiásticas que pesaran sobre los mismos, confirmando así con respecto á las últimas en el Convenio celebrado con Su Santidad, publicado como ley en 1860:

Considerando que todo lo relativo al cumplimiento de este pertenece y es de la exclusiva competencia del Ministerio de Gracia y Justicia, en cuyo presupuesto ha debido y debe figurar la dotacion del capellan vicario del referido monasterio, por no ser exceptuables los bienes de la capellanía afectos al pago de la que le fué asignada en la fundacion:

Considerando que por igual razon de no ser esta capellanía de las exceptuadas por la ley, deben satisfacerse sus obligaciones de misas ó cargas piadosas en la forma prevenida en el citado Convenio, comprendiéndose su importe en la cantidad alzada que el Gobierno ha de abonar á la Iglesia:

Y considerando que la declaracion hecha por la Administracion general de Bienes nacionales en el año 1844 y la Real orden dictada por el Ministerio de Gracia y Justicia en 10 de julio de 1860, no han podido causar estado en cuanto al reconocimiento de dicha pension como carga de justicia, porque solo al de Hacienda incumbe decidir, previas ciertas formalidades, sobre el reconocimiento, subsistencia ó caducidad de esta clase de obligaciones, con arreglo á lo determinado en la ley de 29 de abril de 1855 y demás disposiciones vigentes:

S. M., conformándose con los dictámenes emitidos sobre el particular por la Seccion de Hacienda del Consejo de Estado y Asesoria general de este Ministerio, se ha servido confirmar el acuerdo de la Junta de revision y reconocimiento de cargas de justicia, por el que declara no procede reconocer como tal la pension que motiva este expediente, siendo á la vez la voluntad de S. M. que con remision de los antecedentes se comuniquen esta resolucion al Ministerio de Gracia y Justicia á los efectos oportunos.—De Real orden, etc.—Madrid 14 de mayo de 1867.—Barzanallana.—Sr. Director general del Tesoro público. (*Gac.* 25 mayo.)

R. O. de 18 diciembre de 1867.

XXIX.—Otra resolucion análoga y fundada en la anterior se dictó por R. O. de 18 de diciembre de 1867, declarando subsistente la carga de justicia, que por razon de alcabalas percibe el Ayuntamiento de Tórtoles, no obstante haberse propuesto tambien su caducidad por la Direccion, Asesoria generales y Junta

revisora. Hé aquí sustancialmente esta resolucion.

(HAC.)«Vistos los informes de esa Direccion, Asesoria general y Junta revisora de cargas de justicia, proponiendo la caducidad de la relativa al Ayuntamiento de Tórtoles, atendido el origen gracioso de la concesion, y que el precio satisfecho por el municipio lo habia sido, no al Estado, sino á un tercero, del cual podria reclamar su devolucion:

Vistos los arts. 7.º y 16 de la ley de presupuestos de 1845, etc.

Vislas las leyes de 29 de abril de 1855 y de presupuestos de 1859, etc.

Vista la R. O. de 10 de noviembre de 1865, declarando subsistente la carga de justicia que percibia el Ayuntamiento de Sotillo por las alcabalas del pueblo de su nombre, de conformidad con lo propuesto por el Consejo de Estado en pleno:

Vistas las diligencias oficiales practicadas últimamente, por las que se acredita no haber sido reintegrado el Ayuntamiento de Tórtoles del precio en que adquirió sus alcabalas, ni indemnizado en otra forma, así como tambien que la cuota que le está asignada en los presupuestos es la que le corresponde percibir con arreglo á lo determinado en el artículo 16 de la ley de 23 de mayo de 1845:

Considerando que las alcabalas de la villa de Tórtoles se encuentran en idénticas circunstancias que las de Sotillo, pues ambas pertenecian á la jurisdiccion de Gumiel de Mercado y las obtuvo de la Corona á título gracioso el duque de Lerma; ambas fueron enajenadas por este á un tercero en virtud de facultad Real, y ambas las adquirieron despues por el tanto los Ayuntamientos respectivos, conservándolas en propiedad y posesion por el espacio de mas de un siglo:

Considerando que es un principio inconcuso de derecho que donde hay una misma razon debe existir y aplicarse la misma disposicion legislativa:

Considerando por ello que estimadas indemnizables las alcabalas de Sotillo, deben serlo tambien las de Tórtoles: S. M., conformándose con el dictámen que acerca del particular ha emitido la Seccion de Hacienda del Consejo de Estado, se ha servido declarar subsistente la carga de justicia de que se trata.—De Real orden etc.—Madrid 18 de diciembre de 1867.—Barzanallana.»

La importante legislacion sobre cargas de justicia está principalmente contenida en las leyes de presupuestos de 1845, 1850, 1856 y 1859, en la ley espe-

cial de 29 de abril de 1855, y en la Real orden de 30 de mayo del mismo año, todas las que con otras quedan insertas.

Pero aparte de las disposiciones legislativas, conviene mucho consultar con detenimiento la jurisprudencia que establecen las decisiones ministeriales, dictadas con vista en cada caso de un minucioso expediente instructivo, y oyendo el dictámen de corporaciones que ilustran convenientemente el asunto y contribuyen al acierto en las resoluciones.

Algunas de las principales dificultades que ocurrieron están ya decididas. Respecto á las alcabalas, por ejemplo, las hay adquiridas primitivamente á título oneroso, las hay cedidas graciosamente, y las hay que habiendo sido cedidas por gracia, el adquirente las enajenó despues á un tercero á título oneroso y fué confirmada la enajenacion. En el primer caso procede al reconocimiento, en el segundo la caducidad, y en el tercero tambien el reconocimiento. Hé aquí en resúmen los puntos para su fácil consulta.

Alcabalas. Las decisiones núms. I, X, XI, XIV y XV se refieren á casos en que por haber sido adquiridas á título oneroso se acuerda el reconocimiento. Las decisiones XIII, XVI, XVII, XX y XXIII declaran la caducidad por ser á título gratuito su adquisicion. Las decisiones núms. XVIII y XXIX, se refieren á alcabalas cedidas primitivamente á título de gracia, y que luego compraron los pueblos ó un tercero, en cuyo caso no estuvieron acordes los pareceres y prevaleció el del reconocimiento.

Arbitrios suprimidos. Si los arbitrios han sido un acto graciable de la Corona, no hay derecho á indemnizacion; decision núm. XXV. Si han sido otorgados á título oneroso procede el reconocimiento; decision núm. VI.

Capellanías de monasterios; véase el núm. XXVIII.

Censos; sobre los afectos á portazgos, véase el núm. V; sobre arbitrios de los Consulados, el VI; sobre oficios suprimidos, el VII, y sobre los que gravaron fincas de conventos que se enajenaron indebidamente los núms. IX, XI y XII.

Donaciones y mercedes reales. Consúltese las mismas decisiones citadas en alcabalas graciosas, ó los núms. XX, XXI y XXIII.

Falta de título primitivo; véase el número XXIV.

Juros. Caducidad de aquellos cuya capitalizacion no se reclamó oportunamente; núm. II.

Obligaciones entre dos ó mas comunidades suprimidas; núm. VIII.

Portazgos; núms. V y XXVII.

Prescripcion. Se aplica la doctrina de prescripcion á los censos etc., decisiones núms. III y XXII.

Recompensas por salinas; núm. IV.

Reversion á la Corona: doctrina sobre este particular; decision núm. XXIII.

Servicio de 15 al millar; núm. XIX.

Además vemos consignada la importante doctrina de que el Estado, cuando concurre al otorgamiento de una escritura lo hace como persona jurídica, y queda ligado como un particular cualquiera; lo cual sucede asimismo cuando representa una personalidad civil como una comunidad suprimida, segun puede verse en el núm. III, decision de 25 de febrero de 1863.

CARGAS PIADOSAS. Llamamos así en general las instituidas en favor de alguna iglesia, memoria, obra pía ó establecimiento de beneficencia ó enseñanza. Todas estas cargas ya espirituales, ya temporales, se declararon en estado de redencion por la ley de 23 de mayo de 1856, á cuyo efecto se dictó una instruccion en 8 de julio del mismo año; pero por R. D. de 30 de diciembre se suspendió el cumplimiento de dicha ley.

Hoy, segun la ley de 24 de junio de 1867, en que se contiene el Convenio con la Santa Sede (V. CAPELLANÍAS) son redimibles *forzosamente* las cargas de carácter puramente eclesiástico, de cualquier clase, que gravan los bienes de las capellanías colativas de sangre adjudicadas ó que se adjudicaren, sea cualquiera su título ó denominacion; las que gravan los bienes eclesiásticos vendidos por el Estado con sus cargas eclesiásticas, y las que igualmente gravan los bienes de

obras pías, legados píos y patronatos laicales ó reales de legos ú otras fundaciones de la misma índole de patronato familiar activo ó pasivo. (Arts. 1.º al 6.º)

Son tambien redimibles, pero no forzosamente, *ó si solo cuando tal fuere la voluntad de los poseedores* las cargas puramente eclesiásticas que gravan los bienes de dominio particular exclusivo, sometiéndose en este caso los que quieran redimirlos á las reglas establecidas en el referido Convenio y en la instruccion para su ejecucion. (Art. 7.º)

Por cargas de carácter puramente eclesiástico se entiende, segun el art. 7.º de la instruccion de 23 de junio, todo gravámen impuesto sobre bienes de cualquiera clase que sean, para la celebracion de misas, aniversarios, festividades y en general para actos religiosos ó de devocion en iglesia, santuario, capilla, oratorio ó en cualquier otro puesto público.

Refiriéndonos, pues, al citado artículo CAPELLANÍAS, en donde textualmente se insertan el Convenio ó ley de 24 de junio de 1867 y la instruccion publicada para su cumplimiento con las demás leyes y disposiciones sobre la materia, hé aquí las que se han dictado relativamente á ciertas cargas y prestaciones que por el mero derecho de patronato se satisfacian á algunos conventos.

Ley de 21 junio de 1842.

Extingue las que se satisfacian á iglesias y conventos.

(HAC.) «Doña Isabel II, etc., y en su Real nombre D. Baldomero Espartero, etc., sabed: Que las Cortes han decretado y Nos sancionamos lo siguiente:

Artículo 1.º Se declaran extinguidas las cargas y prestaciones en metálico ó en especie que por el mero derecho de patronato se satisfacian á iglesias ó conventos suprimidos, en que los patronos no pueden ya gozar de las regalías ó preeminencias que por tal concepto les eran debidas.

Art. 2.º Del mismo modo queda extinguida la obligacion de contribuir al Estado con las cantidades en especie ó en metálico con que estaban gravadas en favor de los conventos algunas fincas de particulares, que sin tener la calidad de patronos, debian contribuir con ellas para la manutencion de las comunidades.—Por tanto etc.—En Madrid

á 21 de junio de 1842.» (CL. t. 28, página 291.)

R. O. de 15 febrero de 1844.

Sobre lo mismo.

«Enterada la Reina del expediente promovido por D. José de Tiedra, vecino de Toro, pidiendo que se le exima de pagar los 450 rs. con que anualmente contribuia al convento de Santa Clara de la misma ciudad, como poseedor en la actualidad de los bienes que renunció doña Maria de Tiedra y Morales al tomar el velo de religiosa, en favor de su hermano don Félix, ha tenido á bien S. M. declarar, de conformidad con lo propuesto por V. S. en 14 de abril último, y por el asesor de las Superintendencia, que los referidos bienes están exentos de esta carga como comprendidos en el art. 2.º de la ley de 21 de junio de 1842; y por punto general, que no se hallan en este caso los censos y memorias á que se refiere la consulta del intendente de Granada, fecha 1.º de octubre de 1842, y con que están gravadas en favor de los conventos algunas fincas particulares, sin tener la calidad de patronos; porque la ley no ha extinguido otras cargas que las que compensaban el mero derecho de patronato cuando no puede ser ejercido por supresion de las comunidades, y las impuestas voluntariamente y para la manutencion de las mismas comunidades suprimidas.—De Real orden, etc.—Madrid 15 de febrero de 1844.—(CL. t. 32, pág. 286.)

Jurisprudencia.

Las cargas espirituales que afectaban á fincas del clero están comprendidas en el art. 11 del Convenio adicional con la Santa Sede de 23 de agosto de 1859, contenido en la ley de 4 de abril de 1860. El cabildo catedral de Lérida reclama ante el Consejo de Estado que se revoque una R. O. de 13 junio de 1862, que desestimando la solicitud del mismo cabildo de que se le abonasen las rentas de las fincas de Remolins que le pertenecieron y estaban afectas á la celebracion de aniversarios, dispuso que los abonos á que el cabildo se considerase con derecho, estaban comprendidos en el artículo 11 del Convenio celebrado con la Santa Sede. Impugnada la demanda por el fiscal, y vistos principalmente los artículos 38 y 40 del Concordato de 16 de

marzo de 1851 (1), y el 4.º, 5.º, 7.º, 10 y 11 del Convenio adicional de 25 de agosto de 1859 (2), se absuelve á la Administracion de la demanda y se confirma la Real órden reclamada por sentencia de 16 de abril de 1866.

«Considerando que los bienes de que se trata están comprendidos en el art. 38 del Concordato del 51, y en el 4.º y 5.º del Convenio adicional del 59, habiendo quedado en virtud de sus estipulaciones en la propiedad de la Iglesia, y en el disfrute y administracion del clero:

Considerando que por el Concordato se mandó imputar su importe líquido, ó deducidas cargas, en la dotacion del clero, y por el Convenio se estableció esta misma imputacion, pero extendiéndola al importe total de estos bienes; resultando de aquí la necesidad de atender por separado á las cargas con la adopcion de un temperamento adecuado á este fin:

Considerando que este temperamento se adoptó en efecto en el art. 11 del Convenio adicional, asignando una cantidad alzada que debia fijarse de comun acuerdo de ambas potestades:

Considerando que mi Gobierno, sin olvidar tan solemnes estipulaciones, que son leyes en la materia, no podia disponer otra cosa que lo que dispuso en la Real órden impugnada por parte del cabildo, señalando el artículo 11 del Convenio adicional como única solucion legal de la cuestion por aquel planteada:

Considerando, en fin, que no se ha acreditado por parte del cabildo que el conjunto de los bienes, objeto de su reclamacion, constituyese una institucion piadosa y familiar, comprendida como tal en el aplazamiento estipulado en el art. 10 del Convenio.» (*Gaceta* 20 junio.)

CARGAS PÚBLICAS. Así como los miembros ó ciudadanos de una nacion disfrutaban por el hecho de serlo de ciertas ventajas y garantías, así tambien están sujetos á ciertas cargas. Las contribuciones son cargas públicas; es carga pública el servicio militar, el de alojamientos y bagajes, lo es la obligacion de ser tutor y

curador, depositario etc., ó el ser individuo de ciertas corporaciones, como concejal y diputado provincial etc. No es posible que reunamos aquí la legislacion relativa á todas las cargas públicas referidas que reservamos para sus respectivos lugares.

CARGAS VECINALES. Cargas vecinales y cargas concejiles son para nosotros una misma cosa, las mismas cargas públicas limitadas á los habitantes de los respectivos municipios, ó á los que en su territorio poseen ó cultivan bienes, segun su distinta naturaleza. Tambien debemos remitirnos sobre esta materia á los artículos AGRADOS: ALCALDES Y AYUNTAMIENTOS: BAGAJES: CONTRIBUCIONES, etc., etc.; pero queremos deslindar en este lugar quiénes son los obligados á sufrir los *impuestos puramente municipales y provinciales*, que es lo que se determina en las disposiciones siguientes:

R. O. de 12 noviembre de 1830.

Reciprocidad de las cargas y derechos vecinales. Hacendados forasteros.

(HAC.) Se autorizó un repartimiento vecinal y se mandó: . . . «que los hacendados forasteros que no reciben de los pueblos donde existen sus haciendas ninguno de los beneficios que disfrutaban los vecinos, ni son considerados como tales para sus aprovechamientos, no sean contribuyentes para las cargas municipales de ellos, á excepcion de aquellos casos en que con la competente autorizacion recaigan los repartos sobre impuestos hechos á las fincas de los ausentes.—De Real órden etc.—Madrid 12 de noviembre de 1830.» (*CL. t.* 15, p. 410.)

R. O. de 8 enero de 1839.

Sobre lo mismo que la anterior.

(GOB.) «S. M. la Reina Gobernadora en vista de varias reclamaciones de algunos propietarios, quejándose de los repartos en dinero que se les hacen en varios pueblos en concepto de hacendados forasteros para cubrir las atenciones municipales de los mismos, sin embargo de no tener vecindad en ellos, ni disfrutar de los aprovechamientos ó beneficios de vecino, se ha servido resolver con presencia de lo dispuesto sobre este asunto en R. O. de 12 de noviembre de 1830, que en los repartimientos vecinales que hagan los pueblos con autorizacion competente para

(1) Contenido en la ley de 17 de octubre de 1851.

(2) Idem en la ley de 4 de abril de 1865, insertas en CONCORDATO.

cubrir sus cargas municipales, en lo que no alcancen los productos de sus propios y arbitrios, *no se comprenda á los hacendados forasteros que tengan dadas sus tierras ó propiedades á partido ó en arrendamiento; pero si, cuando tengan casa abierta con dependientes y labor*, aunque no residan en los pueblos en que radiquen sus haciendas y en la parte proporcional á los consumos.—Dios etc.—Madrid 8 de enero de 1839.» (CL. t. 25, pág. 19.)

R. D. de 23 mayo de 1845.

Este decreto véase en CONTRIBUCION DE INMUEBLES: su art. 9 eximió de los recargos municipales á los propietarios que residen fuera del pueblo, siempre que el objeto ú objetos á que se apliquen no interesen á la conservación ó mejora de sus líneas.

R. O. de 20 febrero de 1846.

Sobre si los hacendados forasteros pueden eximirse de las cargas renunciando los aprovechamientos.

(GOB.) «Consultado este Ministerio sobre si los Ayuntamientos pueden obligar á los hacendados forasteros á contribuir á los repartimientos para gastos vecinales, ó si es facultativo en dichos hacendados el eximirse de tales cargas renunciando á los aprovechamientos comunes, se ha servido S. M. resolver, con vista de la R. O. de 8 de enero de 1839, que no pueden excluir los Ayuntamientos de los repartimientos vecinales, ni por consiguiente de los aprovechamientos y disfrutes comunes, á los hacendados forasteros que tengan casa abierta con dependientes y labor, aunque no residan en los pueblos donde radiquen sus haciendas; ni es facultativo en los hacendados forasteros eximirse de tales impuestos renunciando á los goces y aprovechamientos comunes, mientras tengan casa abierta con labor y dependientes en ella; pero que no deben ser comprendidos en los repartimientos vecinales cuando tengan dadas sus tierras ó propiedades á partido ó en arrendamiento, pues entonces el detentador ó arrendatario es el que debe pagar el impuesto y disfrutar los aprovechamientos comunes, porque semejante contribucion es personal por su naturaleza.—De Real orden etc.—Madrid 20 de febrero de 1846.» (CL. t. 36, p. 366.)

R. I. de 8 junio de 1847.

Esta instruccion se halla integra en el artículo PRESUPUESTOS MUNICIPALES. El art. 26 de la misma se refiere al art. 9 del R. D. de 23 de mayo de 1845, y con arreglo al mismo

manda distribuir los recargos municipales, á la vez que sobre los vecinos, sobre los hacendados y propietarios forasteros que tengan casa abierta en el pueblo con dependientes, artefactos ó labor de su cuenta. El 63 sujeta á todos los contribuyentes sin distincion á los recargos para los presupuestos provinciales.

R. O. de 3 octubre de 1849.

Los hacendados forasteros que cultivan por sí, si no tienen casa abierta, solo están sujetos á los recargos municipales como cultivadores y colonos.

(GOB.) «Se ha enterado la Reina (Q. D. G.) del expediente instruido á consecuencia de una exposicion del Ayuntamiento de Huotor de la Vega, en solicitud de que se declaren sujetos á los repartimientos municipales los hacendados forasteros que labran los terrenos de su propiedad, comprendidos dentro del término jurisdiccional de aquel pueblo. Y teniendo S. M. presentes las disposiciones generales dictadas en este particular, y lo informado últimamente acerca del mismo por el Consejo Real, se ha servido resolver que los hacendados forasteros que cultivan sus haciendas en término de Huotor sin tener casa abierta en este pueblo, no están obligados á contribuir á sus gastos municipales sino en calidad de cultivadores y como colonos, y no por la renta que les corresponda como propietarios.—De Real orden etc.—Madrid 3 de octubre de 1849.» (CL. t. 48, p. 111.)

R. O. de 9 noviembre de 1849.

Los hacendados forasteros con casa abierta, etc., están sujetos á las mismas cargas municipales que los vecinos.

«El señor Ministro de la Gobernacion del Reino dice con esta fecha al Jefe político de Tarragona lo que sigue:

«He dado cuenta á S. M. la Reina (que Dios guarde) del expediente promovido por Miguel Vallvé, vecino de Vallinoll en solicitud de que se reforme la providencia acordada por ese Gobierno político contra el reclamante, con motivo de haberse negado á prestar el servicio de bagajes en el pueblo de Secuita en donde tiene casa abierta y con labor. Resulta de este expediente que en vista de lo expuesto, el Alcalde de Secuita exigió al interesado la multa é indemnizacion de daños y perjuicios, con arreglo al sistema establecido por la Diputacion provincial, embargando y vendiendo algunos bienes de Vallvé, el cual acudió en queja á ese Gobierno político: que considerando que el interesado no reclamó en tiempo oportuno la exclusion de sus caballerías y carros del padron de bagajes de Secuita, y que prestaba dicho

servicio en el pueblo de que era vecino, acordó se le devolviese la multa y el valor de los efectos vendidos, abonando no obstante el valor del carro que cubrió el servicio en vez del de Vallvé, y resolviendo al propio tiempo que este no prestase dicho servicio mas que en el pueblo de que era vecino. Enterada S. M. y teniendo presente que si la R. O. de 20 de febrero de 1846 establece que los Ayuntamientos no pueden excluir del repartimiento para gastos vecinales, ni de los aprovechamientos y disfrutes comunes á los hacendados forasteros que tengan casa abierta con dependientes y labor, debe deducirse como consecuencia natural de esta disposicion que los hacendados forasteros, así como gozan en los pueblos de que no son vecinos de los aprovechamientos comunales, deben tambien sufrir las cargas vecinales; S. M. conformándose con el dictámen emitido sobre este asunto por las Secciones de Guerra y Gobernacion del Consejo Real, se ha servido aprobar el acuerdo de V. S. en la parte relativa á la devolucion del valor de los efectos vendidos, deducido no obstante el importe del carro que prestó el servicio de que se trata; resolviendo al propio tiempo que en tanto que Vallvé tenga casa abierta y con labor en Seúña se le considere obligado á cubrir este gravámen en dicho pueblo, sin perjuicio de las cargas que como vecino le puedan corresponder en Vallmoll; y que esta resolucion sirva de regla general en todos los casos de igual naturaleza que en lo sucesivo puedan ocurrir.—De órden de S. M. etc.—Madrid 9 de noviembre de 1849.» (CL. t. 48, pág. 318.)

R. O. de 31 agosto de 1856.

Las paguen los forasteros segun la utilidad que reporten.

(Hac.) Ilmo. Sr.: La Reina (Q. D. G.) se ha enterado de las comunicaciones que han dirigido á este Ministerio la Diputacion provincial de Sevilla y varios Ayuntamientos de las Baleares, pidiendo que se comprendan en los repartimientos de la derrama á todos los hacendados forasteros por los perjuicios que, de no hacerse así, se causarán á los vecinos de los pueblos en que se adopte este medio para hacer efectivos los cupos.

En su vista, y considerando:

1.º Que por el párrafo 2.º del art. 25 de la ley de 16 de abril último se exceptúan de los repartimientos de los cupos de la derrama, entre otros, á los hacendados forasteros sin casa abierta:

2.º Que estos son los que determina el

párrafo 2.º del art. 52 de la Real instruccion de la antedicha fecha:

3.º Que al tenor del párrafo 3.º del mismo artículo no se comprenden en los repartos á los referidos hacendados por las tierras que tengan dadas en arrendamiento, sino por las que cultivan ó llevan por sí mismos, pero en el concepto de hacerlo por medio de dependientes con domicilio en el pueblo.

4.º Que siendo la derrama un equivalente de los consumos, pues que los cupos son el 50 por 100 de los productos de dicha contribucion en el año comun del trienio de 1851 á 1853, no debe sujetarse á su pago á quien no consuma artículo alguno:

5.º Que no los consumen los hacendados que no tienen casa abierta en los pueblos donde radican sus fincas, ni los que las cultivan desde otros en que se hallan sus caseríos y aperos, ni los que han dado las suyas en aparcería, pues que los aparceros que las explotan no son dependientes de los propietarios, en cuyo solo caso se les debe comprender en el repartimiento:

6.º Que mandándose en el art. 26 de la ley que los recargos para cubrir los gastos provinciales ó municipales se comprendan en los medios que se propongan para realizar la derrama, haciendo las distinciones oportunas, puede muy bien haber contribuyentes que no deban satisfacer los cupos para el Tesoro, pero sí los recargos de interés comun:

7.º Que cuando estos ó parte de ellos se apliquen á un objeto que interese de algun modo á la conservacion de las fincas de los hacendados forasteros, es justo que estos contribuyan á su pago proporcionalmente:

Por todas estas razones S. M., conformándose con lo propuesto por esa Direccion general, se ha servido mandar:

Primero. Que con arreglo á los arts. 25 de la ley de presupuestos y 52 de la Real instruccion de 16 de abril último, se excluyan de los repartimientos de los cupos de la derrama para el Tesoro á los hacendados forasteros que no tengan casa abierta en los pueblos en que aquellos se ejecuten.

Segundo. Que esto, no obstante, se les comprenda para el pago de los recargos municipales y provinciales en la parte que sea justa, segun la mayor utilidad que del presupuesto de gastos ó alguna de sus partidas reporten evidentemente las fincas que posean en otros pueblos.

Y tercero. Que el señalamiento de las cuotas lo haga la Junta pericial con arreglo á la instruccion y art. 26 de la ley.—De Real órden etc.—Madrid 31 agosto de 1856.» (CL. t. 69, p. 428.)

R. D. de 15 diciembre de 1856.

Este decreto es el relativo á la contribucion de consumos, en donde se hallará. Su art. 10 excluye de los repartimientos de dicha contribucion á los simples jornaleros, y á los hacendados forasteros que no tengan casa abierta en el pueblo ó su término jurisdiccional con artefactos ó labor de su cuenta.

R. I. de 24 diciembre de 1856.

Es la instruccion de consumos, para la ejecucion del Real decreto anterior. Su artículo 218 hablando de los repartimientos dice que se excluya de ellos á los hacendados forasteros sin casa abierta, entendiéndose por tal la que está constante ó habitualmente habitada por el forastero ó sus dependientes, que se hallen avecindados ó domiciliados en el pueblo, y siendo vecinos de otro por los consumos que hagan en el de labranza.

R. O. de 13 setiembre de 1857.

Es sobre *arbitrios* municipales y se halla inserta en **PRESUPUESTOS MUNICIPALES**. Su artículo 17 dice así:

Art. 17. «Los forasteros contribuirán, lo mismo que los vecinos, á los recargos para atenciones provinciales.

A los destinados á presupuestos municipales contribuirán tambien siempre, pero pagando solo la tercera parte de cuota individual que les corresponda á los vecinos.»

R. O. de 3 julio de 1863.

(GUERRA.) «Enterada la Reina (Q. D. G.) del oficio de V. E., fecha 24 de febrero último, remitiendo copias de los que le han dirigido los primeros comandantes de los batallones provinciales de Vich y Jaen dando conocimiento el primero de que los soldados del mismo Cuerpo Jaime Balaot, Manuel Turrell y Gabriel Mangenat han sido apremiados por el Alcalde de Senmaná imponiéndoles 10 rs. de multa si no pagan ocho jornales para la recomposicion de caminos, y manifestando el segundo que la misma autoridad del pueblo de Cuevas de San Márcos, en la provincia de Málaga, emplea á los milicianos provinciales de dicho pueblo en hacer el servicio de patrullas, sin ser este extensivo á los demás vecinos, teniendo en cuenta lo que terminantemente se previene en el art. 60 de la ley orgánica de milicias provinciales, y asimismo que los individuos referidos no debieron ser empleados en el servicio de patrullas ni en el de trabajos de caminos vecinales por autoridades extrañas á su instituto, se ha servido resolver, de conformidad con lo in-

formado por las Secciones de Guerra y Marina, Gobernacion y Fomento del Consejo de Estado en acordada de 19 de junio próximo pasado, se reitere á las autoridades civiles la estricta observancia de lo que en el artículo y ley citados se previene, debiendo devolverse á los soldados del batallon provincial de Vich de que se trata la multa que les fué impuesta por el Alcalde de Senmaná, si la hubiesen satisfecho.—De Real orden etc.—Madrid 3 de julio de 1863.» (*Gac.* 22 julio.)

Instr. de 1.º julio de 1864.

Dictada esta instruccion con motivo de la reforma introducida en la contribucion de consumos, el art. 221 establece que no sean comprendidos en los repartimientos los hacendados forasteros que no tengan casa abierta *mantenida á su costa*; pero que si habitasen en sus haciendas con sus familias ó criados por mas de 30 dias, en cada año se les impondrá la cuota que corresponda al tiempo que las ocupen.

Ley de 26 de julio de 1867.

Esta ley que reformó la de 30 de enero de 1856 para el reemplazo del ejército (V. *QUINTAS*) establece en su art. 4.º que los individuos de la segunda reserva ó reserva sedentaria, gozarán del fuero comun ú ordinario en todos conceptos, *participando á la vez de los derechos y deberes de los demás españoles.*

Vamos á decir dos palabras sobre las disposiciones que son objeto de este artículo.

Con el art. 17 de la R. O. de 15 de setiembre de 1857, parece que se quiso poner término á las dificultades que este asunto ofrece; pero no se acertó en nuestro concepto, y quedaron en pié y nacieron otras.

Se dice en él, en primer lugar, que «los forasteros contribuirán lo mismo que los vecinos á los recargos para atenciones provinciales,» y este punto no ofrecia ya ninguna duda, pues se halla de acuerdo exactamente con lo que ya estaba prevenido en el art. 63 de la Real instruccion de 8 de junio de 1847.

Ofrécela sí el relativo á los recargos destinados á presupuestos *municipales*, á los cuales dice contribuirán tambien siempre los *forasteros*, aunque pagando solo la tercera parte de cuota individual

que les corresponda á los vecinos. Como se vé, no se hace distincion alguna de impuestos, ni se hace tampoco de forasteros, y la distincion era indispensable, pues en la práctica se tocan dificultades para resolver si la regla es aplicable lo mismo á los recargos sobre las contribuciones directas que á los que gravan el impuesto de consumos; y mas indispensable todavía para saber si ha sido el objeto de la misma regla que no se haga diferencia entre forasteros con casa abierta y dependientes, ó labor, artefactos ó granjerías, y los que no tienen casa abierta. Estas dudas surgen de considerar aisladamente el artículo en cuestion, como lo hacen algunos, y por eso es necesario consultar reunidas las demás disposiciones dictadas sobre la materia, de cuyo modo se forma la opinion de que no es pasada todavía la oportunidad desu aplicacion. Nosotros así lo creemos, y atendiendo á su contenido, y conciliando entre sí sus disposiciones, no podemos menos de considerar que están en distinto caso los hacendados forasteros con casa abierta que los que no la tienen y que los que tienen dadas en arriendo sus fincas. Diremos brevemente el caso en que á nuestro entender se encuentra cada una de estas clases.

Hacendados forasteros con casa abierta.—Los hacendados forasteros que tengan casa abierta con dependientes, ó labor, ó artefactos ó granjerías, aunque no residan en los pueblos donde radican sus haciendas etc. están sujetos á todos los recargos, por territorial, por subsidio en su caso, y por consumos, y aun á las cargas de bagajes, alojamientos, conduccion de presos etc. como cualquier otro vecino, pues realmente existe en este caso una semi-vecindad, siquiera esté representada por el mayordomo, administrador, criado ó dependiente que haga cabeza de la casa, teniendo por la misma razon derecho á los aprovechamientos vecinales.

Hacendados forasteros sin casa abierta.—Estos cuando cultivan por sí sus fincas ó otras que lleven en arrendamiento, están obligados á contribuir á

los gastos *municipales* en calidad de cultivadores ó como colonos, ó sea por la parte de utilidad que se considere al cultivo (R. O. de 30 octubre de 1849 conforme con el art. 9.º del R. D. de 23 de mayo de 1845), y además por la tercera parte de lo que se grave á la renta ó se impute á la propiedad en equivalencia de aquella (R. O. de 15 de setiembre de 1857, art. 17). Respecto á los recargos *provinciales* ya hemos visto que los hacendados forasteros contribuyen sin distincion como los vecinos.

En cuanto á consumos, les exceptuó de los repartimientos el R. D. de 15 de diciembre de 1856 y la Real instruccion de 26 del mismo mes y año, hoy en parte la de 1.º de julio de 1864; y creemos que no ha sido la mente de la R. O. de 15 de setiembre de 1857 hacer novedad en este punto.

Hacendados forasteros que tienen dadas sus fincas en arrendamiento.—Aunque á estos los eximia de los repartimientos vecinales la R. O. de 20 de febrero de 1846, deben hoy considerarse comprendidos en la de 15 de setiembre de 1857, y señalárseles con arreglo á la misma la tercera parte de cuota individual que corresponda á los vecinos, cuyo resultado se obtiene sirviendo de base la tercera parte de la renta ó utilidad que se les impute.—Para los gastos provinciales ya hemos dicho que contribuyen todos los hacendados forasteros.

Tal es en nuestro concepto la inteligencia que debe darse á la R. O. de 15 de setiembre de 1857, armonizada con las demás insertas.

CARNERAJE. Antiguo impuesto equivalente ó análogo al de *montazgo* en Castilla que se exigia en Aragon, no precisamente á los carneros, sino á todos los ganados gruesos y menudos. *Martinez* en su librería de jueces, t. 8, página 275, hace mencion de un privilegio concedido por D. Pedro IV de Aragon en 1381 para cobrar el derecho llamado *carneragium*, á todos los ganados gruesos y menudos que pasaren por el lugar de Jaz y los de Rompesacos, Javierre de Trasierra, Sarsamacuello, sus praderas y

términos, privilegio que fué confirmado y ratificado 1771. Consistía el derecho de *carneraje* en un carnero de bajada y otro de subida de cualquiera rebaño hasta mil cabezas etc. Hoy este impuesto está abolido.—V. MONTAZGO.

CARRERAS.—V. ENSEÑANZA: ESCUELAS: FACULTADES: INSTRUCCION PÚBLICA.

CARRERA DIPLOMÁTICA. Esta carrera se compone de las categorías que se determinan en el R. D. de 27 de febrero de 1851, y los estudios para ingresar en ella son los que establece el de 6 de noviembre de 1865. En los artículos EMBAJADOR y CUERPO DIPLOMÁTICO se trata este asunto.

CARRERA-JURIDICO-POLITICO-MILITAR. Véase AUDITOR y JURISDICCION MILITAR ORDINARIA, en cuyo artículo están comprendidos el R. D. de 22 de diciembre de 1852 que reformó los Juzgados militares y otros varios.

La ley de presupuestos de 22 de mayo de 1859, disposicion 4.^a de las contenidas en el del Ministerio de la Guerra establece que *«se respetan los derechos adquiridos en sus actuales clases para optar á la situacion de reemplazo por los individuos que pertenezcan á las carreras politico-juridico-militares»* añadiendo que: *«los que desde la promulgacion de esta ley ingresen en ellas no tendrán este derecho.»* Para el cumplimiento de lo dispuesto en dicha ley se han dictado las medidas conducentes que es conveniente conocer. Son:

R. O. de 25 mayo de 1859.

Reglas para el establecimiento de la situacion de reemplazo.

(GUERRA.) «...Se ha servido S. M. mandar.

1.^o Queda restablecida la situacion de reemplazo para los individuos que están en la actualidad separados transitoriamente del servicio activo en las clases siguientes: empleados de la Secretaría de este Ministerio; en el Tribunal Supremo de Guerra y Marina y de la extinguida Junta de gobierno del Monte-pío militar: funcionarios de la carrera jurídico-militar, y jefes y oficiales de Administracion y de Sanidad y Veterinaria militar.

2.^o A los individuos de estas mismas clases que en lo sucesivo sean separados transitoriamente del servicio activo, se les declara-

rá la misma situacion de reemplazo y los derechos que les corresponden en sus actuales empleos conforme á las disposiciones de la antes citada ley, hayan ó no ascendido á empleo ó clase superior.

3.^o Que la expresada situacion de reemplazo se continúe entendiendo en armonía con la de los jefes y oficiales del ejército, y de consiguiente con igualdad de goces para los efectos de clasificacion de derechos pasivos.

4.^o Que sean alta en las nóminas de reemplazo de junio próximo todos los individuos de dichas clases que se encuentran hoy en situacion de cesantes á consecuencia de lo prevenido en las Rs. Ords. de 28 de diciembre de 1858 y 6 de abril próximo pasado, cuyas órdenes y las dictadas en su consecuencia quedan anuladas.

5.^o Que sean dados igualmente de alta en la clase de personal de reemplazo de este Ministerio, siempre que así lo soliciten, los empleados de la Secretaría del mismo que en vez de pasar á la situacion de cesantes optaron por volver á continuar sus servicios al arma ó cuerpo de que procedían, dándoseles igualmente de alta en la nómina respectiva, á medida que V. E. reciba las Reales órdenes individuales que oportunamente le serán comunicadas.

6.^o Que los empleados que á consecuencia de lo dispuesto en la regla anterior vuelvan á pertenecer á la clase de reemplazo de esta Secretaria, sean dados de baja definitiva en el arma ó cuerpo á que en la actualidad correspondan, pues solo deben depender en lo sucesivo del Ministerio de la Guerra.

7.^o Que el abono de haberes en las clases de reemplazo sea desde 1.^o de enero último, reclamándose y satisfaciéndose por adicionales, y mediante la oportuna justificacion, las diferencias de haber á que acrediten los interesados tener derecho.

8.^o Que se dé conocimiento de esta resolucion al Ministerio de Hacienda y á la Junta de clases pasivas, á fin de que expidan las órdenes é instrucciones convenientes, para que desde 1.^o de junio próximo venidero no se acrediten ni satisfagan haberes á los individuos de las clases político y jurídico-militares que hoy están en situacion de cesantes.—De Real orden etc.—Madrid 25 de mayo de 1859.» (CL. t. 80, p. 350).

Ley de 22 mayo de 1859.

Limita el derecho á la situacion de reemplazo.....

Es la de presupuestos para el año 1859 Y entre las disposiciones contenidas en el de 1.^a Guerra dice así la 4.^a «Se respetan los dere-

chos adquiridos, en sus actuales clases, para optar á la situacion de reemplazo, por los individuos que pertenezcan á las carreras politico-jurídico-militares. Los que desde la promulgacion de esta ley ingresen en ellas no tendrán este derecho.»

R. O. de 30 mayo de 1859.

Se declara que solo tienen derecho á ingresar en la situacion de reemplazo los individuos de las carreras politico y jurídico-militares que ya han pertenecido á ella á consecuencia de la R. O. de 7 de febrero de 1856 (1), y los que desde dicha fecha á la de la ley de 22 del actual hubiesen ingresado en las citadas carreras; quedando por consiguiente excluidos los individuos procedentes de las mismas que en épocas anteriores tenian la situacion de cesantes y los que ingresen ó hubiesen ingresado en ellas con posterioridad á la fecha de la precitada ley. (CL. t. 80, p. 366).

R. O. de 20 enero de 1862.

(GUERRA.) «La Reina..... ha tenido á bien declarar por punto general que en las vacantes é interinidades de todos los cargos de la carrera jurídico-militar, á falta de funcionarios en situacion de reemplazo con goce de sueldo, ó sin él en situacion pasiva, se dé preferencia á los aspirantes que lo soliciten, con predileccion de los de primera clase ó que han prestado servicios en dicha carrera, á los de segunda, y á su antigüedad en el orden de los escalafones.—De Real orden etc.—Madrid 20 de enero de 1862.» (CL. tomo 87, p. 81.)

R. O. de 18 junio de 1862.

(GUERRA.) «.....La Reina (Q. D. G.) se ha servido disponer que cesen en sus respectivos destinos pasando á situacion de reemplazo..... los fiscales y secretarios de causas de las Capitanías generales. Es asimismo la voluntad de S. M. que los referidos cargos sean desempeñados por los jefes y oficiales de estados mayores de plaza, y en caso de urgencia por los comandantes fiscales de los regimientos que se hallen de guarnicion en los distritos respectivos.» (CL. tomo 87, p. 737.)

R. O. de 24 marzo de 1863.

(GUERRA.) Se dispone «como regla general y para lo sucesivo, que á los individuos de la carrera jurídico-militar cesantes ó de reemplazo que fueren nombrados para desempeñar interinamente un cargo de su cla-

se, ó superior á ella, se les haga el abono durante la expresada interinidad de los cuatro quintos del sueldo que por sus respectivos empleados les corresponda, como por regla general está prevenido para todas las comisiones activas del servicio, en cuya situacion deberá considerárseles, y con cargo al capítulo correspondiente á dichas comisiones activas.» (Gac. 18 abril.)

CARRERA MILITAR.—V. EJÉRCITO.

CARRETERAS.—V. CAMINOS: CAMINOS VECINALES: CAMINOS ORDINARIOS Ó CARRETERAS.

CARRETERÍA.—V. CABAÑA REAL DE CARRETERÍA.

CARROS FÚNEBRES.—Véase en CEMENTERIOS la R. O. de 2 de julio de 1867, resolviendo una cuestion suscitada entre el prelado de la diócesis y el Ayuntamiento de Santander sobre instalacion de carros fúnebres.

CARRUAJES PÚBLICOS. Trata el título XIV, lib. VI de la Nov. Rec. del uso de sillas de manos, coches y literas, estando sus leyes en completo desuso. Prohibian los bordados, brocados, flecaduras de puntas, de borlilla, campanilla y redecilla en las sillas de manos y coches; prohibian tambien andar en coche alquilado ó con caballos prestados ó con mas de cuatro, siendo en todo caso necesaria licencia del Rey para usarle ó para enajenarle; y se llevaron todavia mucho mas allá las prohibiciones con los que podian usar coches, que no eran dueños de disponer de él para sus amigos y parientes, no siendo de los que vivian y comian de ordinario en su casa y á su costa. Hoy, pues, todos los que quieran se hallan facultados para gastar coche, de la clase que mas les acomode, y para disponer de él como de cualquiera otro objeto de su propiedad. Lo único que aqui advertiremos es que, segun el Código penal, se castigan como faltas la infraccion de los reglamentos relativos á carruajes y correrlos dentro de las poblaciones con peligro de las personas (1).

Reg. de policia de 20 febrero de 1824.

(Extracto.)—El capítulo XIII del regla-

(1) No se ha publicado.

(1) Párrafo 2.º, art. 484; id. 7.º del 494; idem 14 del 495.

mento de policía de Madrid trata de los carruajes públicos. Dispone entre otras cosas que nadie pueda tener carruajes de alquiler sean de plaza ó de camino sin licencia del Superintendente general, pagando la retribucion que determina: que se forme un registro de todos los referidos carruajes, y que estos lleven en la parte exterior de su testera el número del registro, todo bajo las penas establecidas en los arts. 147 á 149 del mismo reglamento.

Iguales disposiciones contiene el cap. XIV del reglamento de policía para las provincias de la misma fecha que el anterior. (No se hallan en la Coleccion legislativa ó de decretos.)

R. O. de 7 octubre de 1848.

Preferencias en asientos.

(GOB.) «En vista de una exposicion del director de la compañía de diligencias-postas generales, motivada por un suceso que recientemente ha tenido lugar con el administrador de dicha compañía, en la ciudad de Valencia, ha tenido á bien S. M. mandar se prevenga á V. S. como de su Real orden lo ejecuto, que los jefes militares cuando no viajen por asuntos del servicio público no tienen preferencia alguna sobre los particulares para ocupar los asientos de los carruajes de aquella empresa, y mucho menos cuando los billetes estén ya vendidos.—Madrid 7 de octubre de 1848.» (CL. t. 45, p. 199.)

Circ. de 25 agosto de 1854.

La Direccion general de Obras públicas encargó por esta circular á los ingenieros jefes de los distritos, que cuando ocurran vuelcos de carruajes, procuren que se verifique una escrupulosa investigacion de las causas que los hayan producido, para que adopten las medidas que les parezcan oportunas. (CL. tomo 62, p. 347.)

R. D. de 13 mayo de 1857.

Aprobando el reglamento para el servicio de los carruajes destinados á la conduccion de viajeros.

«Conformándome con lo propuesto por el Ministro de la Gobernacion, de acuerdo con la Seccion de Gobernacion y Fomento del Consejo Real, vengo en aprobar el adjunto reglamento para el servicio de los carruajes destinados á la conduccion de viajeros.—Dado en Palacio á 13 de mayo de 1857.

Reglamento PARA EL SERVICIO DE LOS CARRUAJES DESTINADOS Á LA CONDUCCION DE VIAJEROS.

Artículo 1.º No podrá destinarse en lo

sucesivo carruaje alguno á la conduccion de viajeros sin que preceda licencia del Gobernador de la provincia en que esté domiciliada la empresa.

Art. 2.º Luego que esta lo solicite dispondrá el Gobernador que un perito, asistido por un inspector especial de vigilancia en Madrid, ó por un inspector ó comisario en las demás capitales, ó un delegado de la misma autoridad superior civil en las poblaciones subalternas, reconozca el carruaje para cerciorarse de que está construido con solidez y ofrece las condiciones necesarias para la seguridad y comodidad de los viajeros; debiendo tener presente al hacer el reconocimiento:

1.º Que el máximo de la altura desde el suelo hasta lo mas elevado de la vaca, ha de ser de tres metros en los carruajes de cuatro ruedas, pudiendo aumentarse con 10 centímetros si tienen cabriolé, y de dos metros 60 centímetros en los de dos ruedas.

2.º Que entre la parte anterior y superior del carruaje y la banqueta del cupé deberá haber una distancia de 35 centímetros.

3.º Que cada asiento debe tener por lo menos una anchura de 48 centímetros; que este mismo espacio ha de mediar entre las arquillas, y que la altura de estas, incluso el almohadon, no puede exceder de 40 centímetros.

4.º Que desde el pesebron hasta el tejadillo ha de medirse un metro y 40 centímetros.

5.º Que la berlina y el interior han de tener una portezuela á cada lado, con su correspondiente estribo.

6.º Que los ejes han de ser de hierro forjado, empanados y de buena calidad.

Y 7.º Que los carruajes no han de tener secretos.

Art. 3.º El perito extenderá una certificacion en que conste la altura, largo y ancho del carruaje, las dimensiones de todas sus piezas, la materia de que están construidas, los asientos que puede contener cómodamente y los límites y forma que para evitar vuelcos debe darse á la carga, la cual ha de regularse por el número de viajeros que admita el coche y caballerías que lo arrastren; declarando bajo su responsabilidad si, segun las reglas del arte, puede aquel destinarse sin peligro al servicio del público. El inspector ó comisario autorizará con su firma el certificado.

Los derechos que devengue el perito serán de cuenta de la empresa, la cual podrá tambien nombrar otro que en su representacion asista al reconocimiento.

Art. 4.º El Gobernador, con presencia del resultado del reconocimiento, concederá ó negará la licencia, y en el primer caso remitirá á las autoridades superiores civiles de todas las provincias que debe recorrer el carruaje, copia textual de la certificacion expedida por el perito, con expresion del número del carruaje, para que puedan disponer su comprobacion cuando lo estimen conveniente. De todas estas licencias se llevarán registros circunstanciados en los Gobiernos de provincia.

Art. 5.º Los carruajes pertenecientes á una empresa tendrán una numeracion correlativa, y en ambos lados llevarán escrito en parte visible el nombre de aquella y el número del coche en caracteres de 20 centímetros.

Art. 6.º Las empresas se sujetarán á las condiciones que se les impongan en la licencia, segun la declaracion del perito, por lo tocante al número de asientos que puedan admitir y á la forma y límites de la carga.

Art. 7.º En ningun caso se permitirá que se pongan objetos fuera de la caja, ni que esta sobresalga de la caja mas que lo precisamente necesario en los carruajes cuya estructura lo exija y dentro de los límites prefijados por el perito.

Art. 8.º Todo carruaje público destinado á la conduccion de pasajeros de un punto á otro del Reino llevará precisamente torno, plancha y ata-ruedas. Tendrá tambien en la parte posterior un aparato destinado á contenerlo cuando haya necesidad de hacer alto en las subidas.

Art. 9.º En la parte mas elevada y anterior de los carruajes tendrán un farol de reberbero, que deberá estar encendido desde el anochecer hasta que amanezca.

Art. 10. Los asientos estarán numerados: no se admitirá en las localidades mayor número de personas de las que les estén designadas. Las empresas fijarán con anticipacion las reglas y precio que han de regir para la admision de niños (1).

(1) Aclarando los artículos 10 y 35 de este reglamento, se dispuso por Real orden de 27 de noviembre de 1858, con presencia de los artículos 495 y 505 del Código penal:

1.º Que cuando un carruaje público conduzca viajeros en cualquier puesto que no sea de los numerados se imponga á cada uno de ellos la pena de cuatro duros y otra igual á la empresa, entendiéndose en este sentido el artículo 35 del reglamento de 13 de mayo de 1857.

2.º Que se haga bajar del carruaje á los mismos viajeros.

3.º Que el Gobernador, el Alcalde ó los

Art. 11. Ni en las administraciones, ni en medio del camino podrán admitirse pasajeros que no presenten la cédula de vecindad correspondiente.

Art. 12. Las administraciones llevarán un registro en que consten los nombres y destino de los viajeros y los bultos que se conducen en cada expedicion ó viaje.

Art. 13. Los conductores y mayoresales llevarán una hoja de ruta con iguales asientos y anotarán en ella los viajeros que recibían en el camino.

Art. 14. En los billetes que se entreguen á los viajeros se expresarán con claridad y precision los derechos y obligaciones que les correspondan.

Art. 15. Los que habiendo tomado uno ó mas asientos observasen que faltan cristales en las ventanillas, ó notaren algun otro defecto de esta especie, podrán reclamar que se corrija, y las empresas estarán obligadas á verificarlo en el acto. Los desperfectos ocasionados en el tránsito, serán subsanados en el primer punto de parada en que sea posible á costa de la empresa ó del que los hubiere ocasionado.

Art. 16. En todas las administraciones estarán fijados á la vista del público cuadros en que consten detallada y explícitamente los precios de las localidades para los pueblos de las carreteras, los puntos de parada, su duracion y la de los relevos de tiros y el tiempo que ha de correr cada uno de estos.

Art. 17. No podrán alterarse los precios de las localidades sin anunciarlo con la anticipacion de 20 dias al menos por medio de los periódicos y de avisos fijados con igual anticipacion en las administraciones.

Art. 18. Tampoco podrán los conductores ó mayoresales detener los carruajes en los puntos de parada mas ni menos tiempo del que esté anunciado, á no exigirlo circunstancias graves é imprevistas.

guardias civiles que hubiesen descubierto la infraccion den aviso por el medio mas pronto, el telégrafo, si le hay, ó el correo, á las autoridades del tránsito que haya de recorrer el carruaje, para que le vigilen con especial cuidado é impongan las mismas penas cuantas veces la falta se repita.

4.º Que se hagan públicas por medio de los periódicos oficiales las multas que se impongan á las empresas.

Y 5.º Que V. S. cuide de que se cumplan estas disposiciones por sus dependientes con la mayor exactitud en la parte que á cada uno corresponda, castigando con rigor los casos de complicidad ó encubrimiento que ocurriesen, ó dando cuenta al Gobierno cuando para ello fuese necesaria su intervencion.»

Art. 19. Las empresas darán aviso anticipado á los Gobernadores y á los comandantes de la Guardia civil de las provincias de la línea, de las variaciones que hicieren en las horas de entrada y salida de los carruajes, á fin de que puedan adoptarse las medidas convenientes para la seguridad de los viajeros.

Art. 20. Los carruajes que hagan el servicio de una misma línea, no podrán adelantarse unos á otros sino cuando los que caminaban primero se detengan para mudar tiros ó con cualquier otro objeto.

Art. 21. Queda prohibido que los delanteros hagan el servicio por mas de 24 horas seguidas (1).

Art. 22. Se prohíbe igualmente que se admitan para este ejercicio mozos menores de 16 años.

Art. 23. No podrán las empresas admitir mayores ó delanteros sin que estos acrediten su buena vida ó costumbres por medio de certificados del Alcalde ó empleados de vigilancia de su domicilio, si los hubiere. Dichos documentos deberán conservarse por las empresas para los fines que puedan convenir.

Art. 24. Tampoco podrán destinarse al servicio de los carruajes públicos caballerías que no estén domadas y acostumbradas al tiro.

Art. 25. Se prohíbe á los mayores y delanteros que abandonen simultáneamente sus asientos ú ocupen otros distintos de los que le están señalados, así como el salirse con los carruajes fuera de la carretera.

Art. 26. Solo á las personas encargadas de la conduccion del carruaje se les permitirá situarse en el pescante. Exceptúanse los guardias civiles de servicio en los caminos, que podrán colocarse al lado del conductor, cuando fuere preciso.

Art. 27. En todo carruaje público deben admitirse los guardias civiles de servicio en las carreteras, siempre que hubiere asientos desocupados y cuando á juicio de los mismos lo exija la seguridad de los viajeros.

Art. 28. Siempre que se encuentren dos carruajes, tomarán la derecha cediéndose la izquierda y dejándose libre respectivamente la mitad de la carretera á lo menos.

Art. 29. Siempre que fuere robado ó se haya intentado robar un carruaje, el encargado principal de su conduccion lo pondrá en conocimiento de la primera pareja de la Guardia civil ó del primer puesto de esta fuerza que hubiere en la carretera, sin perjuicio de dar parte al Alcalde de la poblacion mas inmediata.

Art. 30. Ni las empresas ni los conductores podrán llevar en los carruajes cantidades de dinero ó efectos públicos que excedan de 20.000 rs. sin ponerlo, cuando menos con 24 horas de anticipacion, en conocimiento del jefe de la Guardia civil ó de la autoridad gubernativa.

Art. 31. En todas las administraciones y en los puntos de parada que designen los Gobernadores de provincia, habrá cuadernos foliados y rubricados por el Alcalde á disposicion de los viajeros para que puedan anotar las quejas que tuvieren de las empresas ó sus dependientes. Las autoridades locales, los empleados de vigilancia y los guardias civiles examinarán los expresados cuadernos, y transmitirán á la superioridad sus observaciones.

Art. 32. Los peritos que falten á la exactitud en las certificaciones de reconocimiento ocultando ó disimulando los defectos de los carruajes, ú omitiendo alguna de las reglas que deben observarse para que la carga por su volúmen, peso ó colocacion no ocasione vuelcos, serán puestos á disposicion de los tribunales, á fin de que sean juzgados con arreglo al Código penal.

Art. 33. Cuando un carruaje nuevo, ó que pueda considerarse como nuevo, se pudiese en camino sin que preceda la licencia de la autoridad, será detenido al terminar su viaje y remitido á costa de la empresa al domicilio de esta, único punto en que pueden hacerse los reconocimientos periciales, sin que se le permita llevar carga ni pasajeros, á cuyo efecto se colocarán en él dos guardias civiles. La empresa satisfará además la multa de 80 reales que le impondrá el Gobernador de la provincia en que se verifique la detencion.

Art. 34. La admision de pasajeros sin la correspondiente cédula de vecindad, será castigada con la multa de 80 reales, salvo los procedimientos que correspondan cuando la persona admitida fuere sospechosa ó esté reclamada por los tribunales ó autoridades.

Art. 35. Las demás infracciones de este reglamento serán castigadas gubernativamen-

(1) Por R. O. de 26 de noviembre de 1859 se mandó que..... «Cuando los carruajes destinados á la conduccion de viajeros sean arrastrados por seis caballerías, enganchadas dos en lanza y una en potencia y las otras tres en bolea no se exija que vayan con delantero; pero que se obligue á las empresas á ponerlo siempre que las caballerías vayan dos en lanza, dos en bolea y dos delante, ó por regla general, cuando sean tres ó mas en reata.» También se ordenó «que las infracciones de esta disposicion se corrijan con la multa de medio á cuatro duros.» (CL. t. 82, p. 335.)

te por los Gobernadores de las provincias ó los Alcaldes de los pueblos con multas que no bajen de 10 reales ni excedan de 80, las cuales serán satisfechas por el administrador mas inmediato cuando recaigan sobre la empresa, ó en su defecto por el conductor, quien tendrá derecho al reintegro cuando la contravencion no hubiere sido cometida por el mismo (1).

Art. 36. Además serán responsables las empresas y sus dependientes, de los perjuicios ocasionados á particulares con las referidas infracciones.

Art. 37. En todas las administraciones de carruajes públicos habrá un ejemplar de este reglamento, del cual deben estar provistos igualmente los conductores, que tendrán obligacion de exhibirlo á los viajeros siempre que les requieran para ello.

Art. 38. El inspector especial de vigilancia encargado en Madrid de este servicio, y un inspector ó comisario en las capitales de provincia, asistirán por sí mismos, y en caso de imposibilidad por medio de sus dependientes, á la hora y puntos de salida y llegada de los carruajes para enterarse de las quejas de los viajeros y de la manera en que se cumple lo mandado.

Art. 39. Los mismos empleados examinarán escrupulosamente los carruajes antiguos, y si hubiere alguno que por su estado ó construccion no ofrezca seguridad ó adolezca de defectos cuya correccion sea necesaria, lo pondrán en conocimiento del Gobernador, quien dispondrá que se proceda sin demora al reconocimiento y á lo demás que correspondia.

Art. 40. Los Gobernadores de las provincias, los Alcaldes, los empleados de vigilancia, y la Guardia civil cuidarán con especial esmero de la observancia de este reglamento.—Aprobado por S. M. en Real decreto de esta fecha.—Madrid 13 de mayo de 1857.—Nocedal. (CL. t. 72, p. 256.)

R. O. de 18 de junio de 1857.

Se aprueba la siguiente

Instruccion que deberá observar la Guardia civil, á fin de cooperar á que se cumpla el reglamento para el servicio de carruajes públicos destinados á la conduccion de viajeros, aprobado por S. M. en Real decreto de 13 de mayo último.

Artículo 1.º La Guardia civil cuidará de la ejecucion del reglamento para el servicio

de los carruajes destinados á la conduccion de viajeros.

1.º Disponiendo por sí lo que corresponda en los casos que se determinan en esta instruccion.

2.º Dando conocimiento á las autoridades de las infracciones que se cometan en aquellos casos y de lo que en su consecuencia hubiere ejecutado, así como de las demás que notare, para que puedan ser debidamente corregidas.

Art. 2.º La Guardia civil obrará por sí en los casos y en la forma siguiente:

1.º Siempre que observare que un carruaje lleva objetos fuera de la vaca, hará que se descarguen, si aquel estuviese en poblado, y si se hallase en despoblado dispondrá que esta operacion se verifique en el primer pueblo ó administracion en que hiciere parada.

2.º Cuando bajen los coches una pendiente sin hacer uso de la plancha ó del torno, obligará al mayoral á que cumpla lo prevenido.

3.º Tambien obligará á los mayores á que enciendan el farol una vez anochecido, en caso de que no cumplan lo dispuesto en el art. 9.º del reglamento.

4.º Cuando notare ó se le hiciere notar por la empresa ó por los viajeros algun defecto en los carruajes hará que se subsane en el primer punto que fuere posible, solicitando la intervencion de la autoridad en caso de que los obligados á pagar su coste se negasen á ello.

5.º Si observare ó se le hiciere observar que en cualquier punto se enganchan caballerías sin domar ó no acostumbradas al tiro, dispondrán bajo su responsabilidad que se desenganchen.

6.º No permitirá que bajo el pretexto de subir cuestas ú otro alguno, dejen el mayoral, zagal ó delantero los puestos que les están asignados, ni se coloquen en otros diferentes, toda vez que debe ir siempre uno en el pescante, y el delantero en la caballería correspondiente.

7.º Obligará á los mayores á que vuelvan á la carretera siempre que hubieren sacado el carruaje de ella, á no ser que motivos suficientes les hayan obligado á dejarla.

8.º No permitirá que á la salida de los pueblos suba persona alguna á la delantera, pescante ó vaca.

9.º Impedirá que un carruaje adelante al que le precede, si este no se hallare detenido.

10.º Cuando en cualquier carruaje público encontrare viajeros que carezcan de cédulas de vecindad, ó militares sin pasaportes, procederá en la forma prevenida para estos casos.

(1) Véase la nota al art. 10.

Art. 3.º De las infracciones á que se refiere el artículo anterior, se dará cuenta al comandante de provincia, y conocimiento al Inspector general del Cuerpo. El primero dará tambien parte al Gobernador de la provincia. En los partes se expresará con especial cuidado la empresa á que corresponda el carruaje, el número de este, el nombre del mayoral, y el sitio y día en que se cometió ó notó la falta.

Art. 4.º En los mismos términos se dará parte de todas las demás infracciones del reglamento, no mencionadas en el art. 2.º, y respecto de las cuales las funciones de la Guardia civil son de mera vigilancia.

Art. 5.º Los comandantes de provincia, de seccion, de línea y de puesto, y las parejas de servicio en la carretera, están obligados á vigilar para que se lleve á ejecución el reglamento.

Art. 6.º Para este objeto solicitarán los comandantes de provincia, de los Gobernadores, que les faciliten noticia circunstanciada de las licencias que se expidan para el uso de los carruajes que nuevamente se destinen al servicio, con expresion de las líneas que deben recorrer, á fin de comunicarlas á los comandantes de línea y puestos.

Art. 7.º Como medio tambien de cumplir los deberes que corresponden á la Guardia civil en esta materia, cuidará:

1.º De examinar si los carruajes llevan escrito el nombre de la empresa y el número que les corresponde, una vez trascurrido el plazo que para cumplimiento del artículo 5.º del reglamento les hubiesen señalado los Gobernadores de provincia.

2.º De observar si los mismos llevan torno, plancha y ata-ruedas.

3.º De pedir á los mayoresales las hojas de ruta y examinarlas y confrontarlas.

4.º De averiguar si en las administraciones existen las tablillas ó registros de que habla el art. 16 del reglamento.

5.º De poner en conocimiento de quien corresponda los casos en que las empresas cambien las horas de salida de los coches, sin dar el aviso anticipado que prescribe el artículo 19.

6.º De investigar si los delanteros hacen el servicio por mas de veinticuatro horas seguidas, ó si no llegan á la edad de 16 años.

7.º De examinar si en las administraciones, y en poder de los mayoresales existen ejemplares del reglamento.

Y 8.º De examinar tambien los cuadernos á que se refiere el art. 31, para transmitir á la superioridad sus observaciones.

Los comandantes de seccion y de línea re-

correrán una vez al mes, cuando menos, las administraciones para hacer este exámen y ver si se cumplen los arts. 12 y 16 del mismo reglamento.

Art. 8.º Solo cuando por circunstancias especiales lo aconseje la seguridad de los viajeros, podrán los guardias civiles subir á los carruajes. En este caso, uno de ellos ocupará un asiento en la delantera ó pescante, al lado del conductor, y el otro se situará en el cupé. En este ó en la rotonda, si hubiese puestos desocupados, podrá colocarse la pareja, evitando situarse en la berlina y en el interior. En todas ocasiones procurarán que las armas no causen desperfectos en el coche. —Aprobada por S. M. en Real orden de esta fecha.—Madrid 18 de junio de 1857.» (CL. t. 72, p. 469.)

R. O. de 27 junio de 1857.

Se dijo de Real orden al Inspector de la Guardia civil para aclarar el párrafo 7.º del art. 2.º de la instruccion de 18 junio «que cuando en los caminos se hacen recargos ó cualquiera obra de reparacion, se demarca el paraje por donde deben marchar los carruajes, segun lo dispuesto en el art. 10 de la ordenanza para la conservacion y policia de las carreteras generales: de manera que solo podrá considerarse como *motivo suficiente* para salirse de ellas, el haberse inutilizado á causa de hundimiento, inundacion ú otro accidente ocurrido tan de pronto que llegue el coche al punto del suceso antes que los encargados de la reparacion hayan podido presentarse y señalar la direccion que aquel debiera seguir.» (CL. t. 72, p. 498.)

Las Rs. Ords. de 27 de noviembre de 1858 y de 26 del mismo mes de 1859, se hallan por nota al art. 10 y 21.

R. O. de 13 mayo de 1859.

«La Reina (Q. D. G.) se ha servido mandar que, además de hacer públicas por medio de los periódicos oficiales las multas que imponga V. S. á las empresas de diligencias para corregir las infracciones del Regl. de 13 de mayo de 1857, segun se mandó en R. O. de 27 de noviembre de 1858, disponga V. S. que se inserten en los mismos las penas pecuniarias que por iguales infracciones se apliquen á los administradores, mayoresales ú otros dependientes de las mismas empresas así como á los viajeros.—De Real orden etc.» (*Boletín oficial de Huesca de 17 abril de 1863.*)

R. O. de 13 octubre de 1859.

«En algunos puntos del Reino se han concedido permisos para que determinadas per-

sonas ocuparan asientos en los pescantes de los carruajes destinados á la conduccion de viajeros. Enterada la Reina (Q. D. G.) se ha servido mandar que se recuerde á los Gobernadores de provincia el art. 26 del reglamento aprobado por S. M. en R. D. de 13 de mayo de 1857, llamando la atencion de las mismas autoridades sobre la circunstancia de que ningun funcionario público, por elevada que sea una categoría, tiene facultades para dispensar el cumplimiento de las órdenes de S. M.—De Real orden etc.» (*Bol. of. de Huesca de 17 abril de 1863.*)

R. O. de 9 de abril de 1863.

Observancia del reglamento: Nuevas disposiciones: Sobre vuelcos: correcciones etc.

(Gov.) «.....La Reina (Q. D. G.) ha tenido á bien resolver que, consagrand V. S. un especial cuidado á este importante servicio, procure con todo rigor y sin consideracion de ningun género el exacto cumplimiento de las prescripciones del mencionado reglamento; en la inteligencia de que le será á V. S. exigida la consiguiente responsabilidad si por descuido ó falta de celo se diese lugar en esa provincia á los excesos de cuya correccion se trata. Es asimismo la voluntad de S. M. que para el mejor desempeño de su cometido tenga V. S. en cuenta lo siguiente:

1.º El regl. de 13 de mayo de 1857 es aplicable á toda clase de carruajes destinados á la conduccion de viajeros, sea cual fuere su denominacion, estructura y clase de carreteras que recorran.

2.º Les peritos que han de proceder al reconocimiento de los carruajes, con arreglo á lo que dispone el art. 2.º del citado reglamento, tendrán mucho cuidado, al extender la certificacion á que se refiere el art. 3.º, de expresar con la mayor claridad y de manera que no ofrezca ningun género de duda la condicion relativa á la forma y límites que ha de darse á la carga que se permita al carruaje, á fin de que en cualquiera circunstancia sea fácil la comprobacion y se eviten las principales causas de los vuelcos.

3.º Se ejercerá sobre los peritos la mayor vigilancia, procediendo contra ellos sin consideracion alguna en el caso expresado en el art. 32 del mismo reglamento.

4.º Se atenderá tambien con muy especial cuidado al exacto cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 12, 13, 14, 16, 31 y 37, á fin de que, tanto los viajeros como los agentes de la autoridad, tengan siempre medios fáciles de obtener los datos necesarios para sus respectivas gestiones.

5.º Se vigilará mucho el cumplimiento

del art. 20, así como el de la R. O. de 14 de abril de 1859 (1), cuyas disposiciones son de la mayor importancia para evitar desgracias.

6.º Además de lo dispuesto en el art. 29, siempre que ocurriese un siniestro se instruirá una sumaria por la autoridad local del pueblo mas inmediato, procediendo con la mayor brevedad en estas diligencias para no causar perjuicio con la detencion de los viajeros, y las actuaciones serán remitidas al Juzgado correspondiente ó al Gobernador de la provincia, segun el caso.

7.º Para la aplicacion del art. 35 del reglamento se estará á lo dispuesto en la Real orden circular de 27 de noviembre de 1858, teniendo presente que si bien las contravenciones á lo mandado en aquel no deben penarse sino con arreglo al mismo, dado el caso de que la falta que se cometa traspase los límites del reglamento, entonces deberá la autoridad superior de la provincia castigarla gubernativamente con todo el rigor que le permiten sus atribuciones.

8.º Se dará la mayor publicidad á las correcciones que se impongan en los términos que marcan las Rs. Ords. de 27 de noviembre de 1858 y 13 de mayo de 1859.

9.º El cumplimiento de lo prevenido en los arts. 38 y 39 del reglamento es tambien de la mayor importancia, y por consiguiente no debe consentirse el mas mínimo descuido á los encargados de prestar el servicio á que dichos artículos se refieren.—De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y fines que se indican; encargándole que dé publicidad á estas disposiciones y que á su vez inculque á las autoridades locales, empleados de vigilancia y guardia civil la mas escrupulosa exactitud y el mas riguroso celo en el desempeño de este servicio.—Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 9 de abril de 1863.»—Vaamonde. (*Gaceta 6 mayo.*)

R. O. de 1.º julio de 1863.

(Gov.) «La Reina (Q. D. G.) se ha servido mandar se advierta á V. S. que los derechos que devenguen los peritos nombrados para reconocer el límite y forma de la carga y demás condiciones de los carruajes públicos destinados á la conduccion de viajeros, deben de ser satisfechos en los términos prescritos en el pár. 2.º del art. 3.º del Regl. de 13 de mayo de 1857; y habiendo ocurrido dudas sobre el mismo particular á algunos otros Gobernadores, ha dispuesto S. M. se circule la anterior resolucion, como de Rea

(1) No conocemos esta Real orden.

orden comunicada por el Sr. Ministro de la Gobernacion lo efectúo, á fin de que V. S. pueda tenerlo presente en caso análogo.» (*Boletín oficial de Orense, núm. 126.*)

CARTA. En su acepcion mas genérica, es papel escrito y cerrado con oblea ó lacre, ó sin cerrar tambien, que sirve de comunicacion entre dos personas.

La conduccion de la correspondencia es derecho exclusivo del ramo de correos, y ningun particular puede ocuparse en ella, no siendo con recado y abierta. La correspondencia no puede interceptarse por el Gobierno, ni por los administradores del ramo, ni por los demás empleados, ni por particulares sin incurrir en delito; ni tampoco puede abrirse sino por la persona á quien va dirigida, salvo en casos graves por la autoridad pública, segun se dispone en las Rs. Ords. de 23 de marzo de 1844, 5 del mismo mes de 1845, y 20 tambien de marzo de 1846, que se hallarán en el artículo CORREOS.

CARTA DESAFORADA. La que altera alguna exencion, fuero ó privilegio. La provision expedida contra justicia.

CARTA DE DOTE. Lo mismo que escritura de dote.—V. DOTE.

CARTA EJECUTORIA. El despacho ó testimonio que se libra por un tribunal á la parte vencedora en un pleito. Los escribanos de Cámara para el despacho de estas cartas deberán atenerse á lo dispuesto en el art. 8.º del R. D. de 5 de enero de 1844.

CARTA FORERA. En una de sus acepciones es privilegio ó despacho Real atribuyendo jurisdiccion.

CARTA DE GRACIA. Lo mismo que carta forera. Tambien en algunas provincias como en Aragon equivale al pacto de retroventa.

CARTA GEOGRÁFICA. Siendo notoria la necesidad de una carta itineraria de la Península, tan exacta como sea posible para poder consultarla con provecho en las muchas ocasiones que lo exige el servicio de obras públicas y el de otros varios ramos de la Administracion, se creó por R. O. de 3 de octubre de 1853 una Comision para formarla.

CARTA DE NATURALEZA. La Real cédula ó despacho por el que se concede á un extranjero el derecho de naturaleza en España, en consideracion á sus talentos, á sus servicios ó á su industria beneficosa al pais. Los extranjeros que hayan obtenido carta de naturaleza son reputados españoles. (*Art. 1.º Const. de 1845 y 2.º del R. D. de 17 de noviembre de 1852.*)

CARTA ÓRDEN. Comunicacion oficial concebida en estilo preceptivo aunque atento, que dirigen los tribunales y jueces á sus subordinados para hacer saber algun proveido ó practicar alguna diligencia. (*Art. 18 del reglamento de los Juzgados de 1.º mayo de 1844, inserto en JUSTICIA.*)

CARTA ÓRDEN DE CRÉDITO. Aquella en que se previene á un corresponsal franquee al portador ó á determinada persona lo que necesitase ó cantidad determinada por cuenta del que la suscribe. (*Cód. de Com. arts. 574 á 579 y 672 y 673.*)

CARTA DE PAGO Y LASTO. Cuando el fiador paga en nombre del deudor, puede y debe pedir que el acreedor le ceda sus acciones y derechos, principalmente cuando tenia algun privilegio ó hipoteca; aunque sin esta cosion podrá en su propio nombre pedirle cuanto hubiere pagado y gastado por razon de la fianza. Esto es lo que se llama otorgar carta de pago y lasto.—V. FIANZAS.

CARTA PLOMADA. Diploma, privilegio autorizado con sello de plomo con las armas reales impresas en él para autorizar la gracia ó merced que en él se dispensa. Se habla de estas cartas en las leyes del tit. XVIII de la Part. 3.^a

CARTA PUEBLA. Con este nombre son conocidas las escrituras en que se consignaban las donaciones de pueblos, lugares y tierras, que en tiempo de la conquista se hacian á favor de los nuevos pobladores. Las cartas pueblas contenian de una manera breve las cláusulas y condiciones de la donacion ó sea los conciertos con los nuevos colonos, la contribucion que estos debian pagar y los términos con que debian ejecutarlo.

CARTEROS. Empleados subalternos de correos encargados de distribuir á domicilio la correspondencia.—V. en CORREOS el tít. XXII de las ordenanzas, y la R. O. de 9 de julio de 1861.

CARTULARIOS. Entre los romanos equivalían á nuestros archiveros. También se dá este nombre á los escribanos porque actúan en las causas y otorgan las escrituras que antiguamente se llamaban *cartas*. — En otra acepción los *cartularios* son los papeles ó registros de apeos de las iglesias, donde se hallan los contratos de compra, venta y cambio, los privilegios, inmunidades, exenciones y demás documentos. Bueno es observar, dice un escritor, que los cartularios son posteriores á la mayor parte de los actos contenidos en ellos, y que solo se hicieron por conservarlos íntegros. También es de advertir que en muchas compilaciones de cartularios se hallan piezas evidentemente falsas, lo que puede descubrirse comparándolos con los documentos originales.

CASACION. (RECURSOS DE). En los negocios civiles, véanse los arts. 76 y 1.010 á 1.102 de la Ley de Enjuiciamiento.— En los negocios de Hacienda véanse los artículos 96 y siguientes del R. D. de 20 de junio de 1852 en el artículo HACIENDA PÚBLICA.

CASA. Edificio hecho para habitar: conjunto de hijos y domésticos que componen una familia. En el artículo ALLANAMIENTO DE MORADA, t. 1.º, pág. 402, hemos hecho ver los grandes respetos que se deben a la casa ó morada de los ciudadanos, los casos en que puede la autoridad ordenar el allanamiento y las formalidades con que debe procederse en tan delicado asunto. Y en ARRENDAMIENTO, t. 1.º, pág. 511, hallará el lector la ley sobre arrendamiento de casas y edificios urbanos.—V. EDIFICIO: POLICÍA URBANA: SOLARES.

CASA DE AYUNTAMIENTO. Ennoblézcanse las ciudades y villas, en tener casas grandes y bien fechas en que fagan sus Ayuntamientos y concejos y en que se ayunten las justicias y regidores etc. Así dice la ley 1.ª, tít. II, lib. VII de

la Nov. Rec. que dispuso á la vez se construyeran en donde no las hubiera. Véase con otras en ALCALDES y AYUNTAMIENTOS.

CASA DE CONTRATACION DE INDIAS. Cierta tribunal que entendía en los negocios pertenecientes al comercio y tráfico de las Indias.

CASA EXCUSADA. Llamábase así la que en cada parroquia estaba exenta de llevar sus diezmos al acervo comun, pues en vez de pagarlos á la iglesia los entregaba á la Real Hacienda.

CASA FUERTE. Ordinariamente se llamaron así las casas solariegas propias de los hijos-dalgo, cercadas de almenas, baluartes y otros géneros de fortificaciones para la mejor defensa contra los moros y otros contrarios: denominábanse casas fuertes en contraposición de las *llanas* que eran las que los pecheros fabricaban en los campos sin defensa ni fortaleza.

CASAS DE BENEFICENCIA. Se enumeran entre estas casas las de maternidad las de expósitos, huérfanos y desamparados, las de misericordia, socorro y refugio y las de dementes, sobre las cuales remitimos al artículo BENEFICENCIA PÚBLICA.

CASAS DE CORRECCION.—V. PRESIDIOS Y CASAS DE CORRECCION.

CASAS DE LAVADO Y BAÑOS PARA POBRES. Por R. D. de 15 junio de 1853 se ordenó la creación en Madrid, de una casa de lavado y baños para pobres, á cuyo efecto se nombró una Junta que estudiase y propusiese todo lo referente al local y á las obras, con encargo de que desempeñase á la mayor brevedad su cometido. Sin desistir el Gobierno de su propósito, por R. D. de 21 de setiembre del mismo año suprimió la Junta que se había creado, y confirió la comisión que esta tenía al Alcalde-Corregidor de Madrid; pero no sabemos que se haya dado un solo paso en un asunto que consideramos de importancia por lo mucho que la limpieza en las familias pobres, puede contribuir á mantener en buen estado la salud pública.—Por R. O. de 9 de setiembre del mismo año 1853 se aprobó también el establecimiento de

dos casas de baños y lavadero en Toledo; una para los pobres y la otra para los presidiarios.—V. **BENEFICENCIA.**

CASAS DE HUÉSPEDES. Sobre el establecimiento de estas casas, posadas, fondas etc. se han dictado oportunas disposiciones por la siguiente

R. O. de 27 noviembre de 1858.

«A fin de que las autoridades puedan ejercer la debida vigilancia sobre los establecimientos en que se reciben huéspedes, la Reina (Q. D. G.) se ha servido mandar que se observen las disposiciones siguientes:

1.^a No podrán abrirse en punto alguno del Reino posadas públicas, casas de huéspedes, hosterías, fondas ni cualesquiera otros establecimientos de la misma especie, sin obtener antes la competente licencia del ramo de vigilancia, que se renovará anualmente.

2.^a Los dueños de dichos establecimientos tienen las obligaciones siguientes:

Primera. Llevar un registro foliado y rubricado por el encargado del ramo de vigilancia del distrito, en que se inscriban, por orden alfabético de apellidos, las personas que lleguen á sus casas, con expresion de sus nombres de pila, el año, mes y dias de su entrada, el lugar de donde vienen, aquel á que se dirigen, y su ocupacion ó ejercicio. Al márgen de cada partida se pondrá, cuando se vayan los huéspedes, una nota en que se exprese el dia de su salida y el pueblo ó casa adonde han dicho que pasan.

Segunda. Dos partes diarios de lo que resulte de dichos registros, y con arreglo á lo que disponga el Gobernador de la provincia, al inspector, comisario ó celador de su respectiva demarcacion, ó al Alcalde del pueblo en donde no existan aquellos empleados.

Tercera. Exhibir los expresados registros, siempre que á ello fueren requeridos, á las autoridades, empleados de vigilancia ó Guardias civiles.

Cuarta. Impedir que los huéspedes se ocupen en juegos prohibidos, tengan armas para cuyo uso no estén autorizados ó turben el reposo de sus compañeros.

Y quinta. Tener á la puerta de su establecimiento, ó en sus balcones ó ventanas, la tablilla ó señal que indique la naturaleza de él, con arreglo á la costumbre de cada pueblo.

3.^a Cuidará V. S. de que los Alcaldes, comisarios ó celadores, segun la organizacion que en cada punto tenga el ramo de vi-

gilancia, lleven un libro en que anoten todas las posadas, casas de huéspedes etc. que hubiere en su demarcacion, el dia en que se concediere licencia para abrirlas, y la conducta observada por el dueño ó encargado del establecimiento.

4.^a Dispondrá V. S. que sean revisados mensualmente los registros de los mencionados establecimientos, ó con mas frecuencia si hubiere motivo para ello exigiendo que se le dé parte de cuanto á consecuencia del exámen hecho resulte digno de llamar su atencion.

5.^a Los infractores de las precedentes disposiciones están sujetos á las penas pecuniarias establecidas en el párrafo quinto del art. 495 del Código penal, que V. S. podrá imponer gubernativamente con arreglo á la disposicion 2.^a del R. D. de 18 de mayo de 1853.

Y 6.^a Tomará V. S. las medidas convenientes para que se forme en su Secretaria una estadística general de todos los establecimientos destinados á recibir huéspedes.—De Real orden etc.—Madrid 27 de noviembre de 1858.—Posada Herrera.» (*CL. t. 78, pág. 181.*)

CASAS DE MONEDA.—V. MONEDA.

CASAS DE PRÉSTAMO sobre prendas. Véase el tit. XIV, cap. VI, lib. II del Código penal, y **PRESTAMISTA.**

CASAS DE VACAS, CABRERÍAS. La salud pública exigia ya que se tomase alguna medida para prevenir los inconvenientes que pueden ofrecer las casas de vacas, ovejas, burras de leche y cabrerías, cuando no se observan en ellas las reglas de higiene y policia que se recomiendan para conservar sanos los ganados, y para que la leche reuna las condiciones de sanidad apetecibles. El Reglamento publicado por R. O. de 8 de agosto de 1867 ha proveido á esto y vamos á limitarnos á insertarle remitiéndonos en lo demas al artículo **ABASTOS.**

R. O. de 8 agosto de 1867.

Aprobando el adjunto reglamento á que deben subordinarse los establecimientos de vacas, burras, cabras y ovejas para la expendicion ó suministro de leche.

(Gob.) *Beneficencia y Sanidad.*—Negociado 4.^o—«Deseando S. M. la Reina (Q. D. G.) regularizar el servicio de establecimientos de casas de vacas y demás que con ellos tienen analogía, al propio tiempo que aten-

der á los principios de higiene; y habiendo oido sobre el particular á los Consejos de Estado y de Sanidad, se ha servido aprobar el siguiente reglamento, y disponer su insercion en la *Gaceta* con objeto de que rija en las provincias del Reino desde la fecha de su publicacion, encargando á los Gobernadores de las mismas que le den publicidad por medio de los *Boletines oficiales*.—Madrid 8 de agosto de 1867.—Gonzalez Brabo.

Reglamento á que deben subordinarse los ESTABLECIMIENTOS DE VACAS, BURRAS, CABRAS Y OVEJAS.

CAPÍTULO PRIMERO.

Reglas que han de observarse en la concesion de licencias para abrir un establecimiento.

Artículo 1.º No podrán en lo sucesivo abrirse casas de vacas ni cabrerías para la expendicion ó suministro de leche, en poblaciones que lleguen á 4,000 habitantes, sin licencia del Alcalde.

Art. 2.º A la solicitud en que se pida al Alcalde la licencia de que habla el artículo anterior, se acompañará:

1.º Un doble plano del establecimiento en proyecto, ó construido ya, en el cual se designen todas las dependencias que deberá tener, con la capacidad y demás circunstancias de cada una; y

2.º Una memoria descriptiva, tambien doble, en que se acredite que el establecimiento proyectado reúne todas las condiciones exigidas en este reglamento, y se exprese de un modo terminante el número máximo de animales que en él ha de haber.

El arquitecto que forme el plano y escriba la memoria, quedará sometido á la accion de los tribunales si resultase haber faltado á la verdad en alguno de estos documentos.

Art. 3.º Para que el Alcalde resuelva con el debido conocimiento, remitirá primero el expediente á informe del arquitecto municipal, y luego al de la Junta municipal de Sanidad, á fin de que manifiesten lo que se les ofrezca y parezca.

Art. 4.º Si faltare alguna de las condiciones exigidas en este reglamento, ó hubiere necesidad de modificar el proyecto presentado, la autoridad municipal no expedirá la licencia hasta despues de haber hecho las modificaciones convenientes.

Art. 5.º Al expedir la licencia se entregará al interesado uno de los dos ejemplares del plano y de la memoria que presentó para que se sujete y atenga á ellos con todo rigor.

Y si alguna vez creyera oportuno variarlo

estando ya las obras comenzadas, deberá obtener autorizacion al efecto; siguiendo, cuando la variacion sea de alguna importancia, los propios trámites que para conceder la licencia.

Art. 6.º No se concederá licencia al abrir esta clase de establecimientos por mas tiempo que el de diez años, durante cuyo plazo será considerada esta licencia como un título de propiedad para todo lo que no se oponga á las leyes.

Art. 7.º La falta de cumplimiento de lo preceptuado en el presente reglamento, producirá la anulacion de la licencia, segun previene el art. 39.

Art. 8.º Aunque no se prohíbe por ahora la apertura de estos establecimientos en el interior de las grandes poblaciones, procurarán no obstante las autoridades municipales favorecer indirectamente su instalacion en las afueras ó en los arrabales.

En cada concesion se hará constar el número máximo de vacas ó cabras que pueda contener el establecimiento. El dueño de este queda obligado á presentar al respectivo subdelegado del ramo una copia certificada de la concesion, y un plano del citado establecimiento. Queda obligado igualmente á colocar en un cuadro, á la vista del público y en el mismo establecimiento, los expresados documentos visados por el subdelegado del distrito.

CAPÍTULO II.

Condiciones que han de reunir las casas de vacas y las cabrerías.

Art. 9.º Solamente podrán establecerse casas de vacas y cabrerías en edificios que se hallen situados en plazas y plazuelas, en calles cuya anchura no baje de ocho metros, ó en cualquiera otro sitio igualmente espacioso, ventilado y salubre.

Art. 10. No se establecerán en lugares bajos con relacion á los circunvecinos; en sitios húmedos; en edificios que carezcan de patios ú otros espacios descubiertos, cuya capacidad sea menor de la señalada en el artículo siguiente; en las cercanías de otros establecimientos insalubres ó incómodos; donde escaseen la ventilacion y la luz, ó falta de un modo permanente el agua necesaria para conservar un perfecto estado de aseo.

Art. 11. Los establos de las vaquerías y cabrerías que dentro de las poblaciones se establezcan, han de estar situados en crujías interiores con luces á un patio, jardín ú otro paraje descubierto que no baje de 100

metros superficiales si las casas que le circunscriben tienen piso tercero, de 75 si no tuviesen mas que piso segundo, y de 50 si fueren á la malicia.

Art. 12. Tendrán los establos de tres á cuatro metros al menos de elevacion, cuatro metros de ancho desde el pesebre hasta la pared opuesta, y dos metros de frente como espacio reservado á cada vaca.

Art. 13. Nunca podrán contener mas de 20 vacas ó 50 cabras. Se dispondrán de tal suerte que corresponda á cada vaca el espacio mínimo de 28 metros cúbicos y ocho á cada cabra.

Art. 14. Estará el pavimento cubierto de losa bien labrada y sentada para que forme una superficie igual y unida, y tendrá el conveniente declive hacia el sitio donde hayan de confluir y ser absorbidas las aguas.

Art. 15. Habrá en este punto un platillo de absorbadero que las dé paso sin detencion alguna á la tarjea, la cual ha de hallarse dispuesta de un modo que corran libremente las aguas á la alcantarilla, ó vayan á verterse á un lugar apartado del establecimiento.

Art. 16. El techo será á cielo raso, y las paredes estarán cubiertas hasta la altura mínima de dos metros con azulejos, cemento ó cal hidráulica, ú otra materia que evite la humedad y facilite la limpieza.

Art. 17. Habrá ventanas en número proporcionado á la extension de los establos, con suficiente hueco ó luz, y dispuestas de manera que puedan abrirse ó cerrarse mas ó menos completamente, segun lo exijan las circunstancias.

Art. 18. Cuando sea posible por no haber encima piso habitado ni poderse originar molestias á los vecinos, se abrirán postigos en la techumbre, se establecerán chimeneas que pongan en comunicacion la atmósfera interna con la externa, ó se establecerá la ventilacion artificial que parezca mas conveniente.

Art. 19. Habrá en fin, á ser posible, uno ó mas grifos situados en puestos oportunos, que suministren el agua necesaria para hacer la limpieza.

Art. 20. Tanto las casas de vacas como las cabrerías, tendrán un establo reservado para las reses enfermas, en el aislamiento debido y con buenas condiciones de salubridad.

Art. 21. En las capitales en que exista un lazareto para animales, serán conducidas á él desde luego cuantas reses se hallen enfermas.

Art. 22. Habrá asimismo en estos establecimientos, graneros, pajeras y yerberas bien acondicionadas para la conservacion de las sustancias alimenticias.

CAPÍTULO III.

Régimen del ganado y disposiciones de salubridad.

Art. 23. Siendo muy necesario á la par que conveniente el ejercicio moderado y cómodo para la salud y vida de las reses, se dará á estas paseos alternados y á horas oportunas; designándose al efecto en los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril las diez de la mañana á las tres de la tarde, y en los restantes por las madrugadas hasta las ocho de la mañana y por las tardes desde las seis en adelante sin que puedan dejar para el servicio del público mas que dos vacas los de las primeras, y cuatro cabras los de las últimas.

Art. 24. No harán las vacas ni las cabras uso de otros alimentos que de los granos, semillas y paja de las gramíneas y leguminosas, de salvado, heno, trébol, alfalfa, raices y demás que en cada país se acostumbra; todo en las proporciones debidas para que su salud no sufra la menor alteracion, cuidándose con especial esmero que estos alimentos se hallen perfectamente conservados.

Art. 25. Se prohíbe como peligroso é inconveniente el uso de la cebada fermentada procedente de las fábricas de cerveza, el de los residuos de las fábricas de almidon y el de las verduras comunes y sus despojos.

Art. 26. Las aguas que el ganado beba han de ser corrientes, dulces, limpias é inodoras.

Art. 27. No podrán darse aguas de pozo, á no ser que, previamente analizadas á costa de los interesados, resulten saludables.

Art. 28. Se mantendrán los establos bien ventilados y en el estado mas perfecto de limpieza, sacando de ellos diariamente el estiércol en los meses de mayo, junio, julio, agosto y setiembre, y cada dos dias en los restantes; lavando otras tantas veces el pavimento con agua clara; cuidando de que el curso de la orina y del agua que para la limpieza se emplea sea fácil y completo, y empleando, en fin, fumigaciones y otros desinfectantes cuando se conceptuen necesarios.

Art. 29. El estiércol que se retire de los establos se ha de sacar seguidamente de la poblacion, en carros ó de aquella manera que tenga la autoridad municipal determi-

nado sin que se permita jamás su acumulacion en grandes ni pequeñas cantidades.

Art. 30. Habrá en el centro de todos los establos ó cuadras en que encierre el ganado un termómetro, y se sostendrá la temperatura entre los 20 y 28 grados Reaumur.

Art. 31. Harán los dueños de las casas de vacas que un veterinario reconozca su ganado una vez al menos cada 15 días; y si enfermase alguna res, la apartarán de las otras, llevándola al establo correspondiente ó al lazareto para ganados si existe en la capital.

Art. 32. El resultado de este reconocimiento se consignará por escrito por dicho funcionario, y con el V.º B.º del subdelegado se colocará en un cuadro que para este servicio figurará al lado del plano y licencia. Los propietarios de los establecimientos presentarán al día siguiente de verificarse el reconocimiento indicado al subdelegado del distrito (si no es este funcionario el que le ha hecho) el certificado del veterinario, en el cual estampará el enterado ó V.º B.º, y cubierta esta formalidad se colocará en el cuadro de que habla el párrafo anterior.

Art. 33. Cuando resultare del reconocimiento facultativo que alguna res se halla padeciendo enfermedad contagiosa ó grave, la sacarán los dueños sin tardanza de la poblacion, bien sea para curarla en lugar aislado y oportuno ó en el citado lazareto, bien para darla muerte si así lo prefiriesen. En este caso deberá el veterinario que le reconozca dar parte á la autoridad respectiva de la aparicion de la enfermedad sospechosa.

Art. 34. Los animales muertos de estas enfermedades deberán ser quemados.

Art. 35. Queda prohibida la venta de la leche de toda res enferma, por ser una sustancia nociva á la salud, y los contraventores sujetos por tanto al castigo que impone el art. 482 del Código penal.

Art. 36. Queda asimismo prohibida como siempre la venta de leche sofisticada, procediendo contra el culpable con la mayor severidad, sin perjuicio de publicar su nombre y su delito en los periódicos oficiales, y de estamparlo sobre la puerta de su establecimiento y en el punto de la venta.

Art. 37. El Alcalde hará por sí ó por medio de sus subdelegados y agentes las visitas que estime oportuno á las casas de vacas y á las cabrerías para reconocer si se cumplen con toda fidelidad las prescripciones de este reglamento.

Art. 38. Cuando alguna falta leve encontrare, sobre imponer el castigo que proceda, amonestará de palabra á los contraventores

y cómplices; mas si fuere la falta grave ó la desobediencia muy repetida, les apercibirá, por escrito, sin perjuicio de anunciar en los periódicos oficiales el nombre ó título del establecimiento, el de los que hayan concurrido á ocultar ó cometer la falta, clase de esta y el castigo impuesto.

Art. 39. Cuando no hayan bastado tres de estos apercibimientos para conseguir la enmienda, anulará el Alcalde la licencia, segun previene el art. 7.º, y mandará cerrar el establecimiento, imposibilitando que se abra otro, á cuyo efecto se anunciará en los periódicos oficiales y se comunicará por el Gobernador al subdelegado.

Art. 40. Siempre que la autoridad municipal lo juzgue necesario para que la informen de las condiciones de salubridad de un establecimiento, podrá disponer que le reconozcan los subdelegados de Sanidad, médico y veterinario; y si estimase oportuno adquirir conocimiento del estado de salud de los animales, podrá valerse de este último funcionario.

Art. 41. Los subdelegados de Sanidad tienen derecho á girar cuantas visitas consideren necesarias á estos establecimientos, de acuerdo con lo prevenido en el capítulo segundo del reglamento para las Subdelegaciones de 24 de julio de 1848.

CAPITULO IV.

Disposiciones transitorias.

Art. 42. En el improrogable término de dos meses, que ha de contarse desde la publicacion de este reglamento, se acomodarán á sus disposiciones las casas de vacas y las cabrerías establecidas ahora con la debida autorizacion en las poblaciones de mas de 4.000 habitantes.

Art. 43. Los establecimientos que se hayan abierto sin licencia previa de la autoridad correspondiente se cerrarán pasado un mes si no la obtuvieran antes, de conformidad con este reglamento.

Art. 44. Las ordenanzas municipales ahora vigentes en la poblaciones que cuentan 4.000 ó mas habitantes se acomodarán á este reglamento en cuanto á las casas de vacas y á las cabrerías concierne. Y las autoridades municipales de las poblaciones de menor vecindario acomodarán á él en lo posible sus bandos y reglamentos de policía.

Art. 45. Los Gobernadores de las provincias remitirán á fin de cada año á la Direccion general de Beneficencia y Sanidad un estado de todos los establecimientos de este género, consignando los de nueva creacion

y los antiguos, capacidad, número de re-
ses, situación, etc.

Art. 46. Este reglamento es aplicable á los establecimientos de burras de leche y á las casas de ovejas, que se considerarán respectivamente en análogas circunstancias que las casas de vacas y las cabrerías.» (CL. t. 98, pág. 278.)

CASERIA.—V. **BALDIOS**, en cuyo artículo se comprende la ley de 11 de julio de 1866 sobre fomento de la población rural, el reglamento de 12 agosto de 1867 para su ejecución y las demás disposiciones sobre esta importante materia. Estando en prensa este pliego se ha publicado la *ley de 3 de junio de 1868* (Gaceta del 9) en que se recopilan las disposiciones sobre fomento de la agricultura, contenidas en las leyes de 8 de enero y 23 de mayo de 1845, R. D. de esta última fecha y leyes de 24 de junio de 1849, 21 de noviembre de 1855, y 11 de julio y 3 de agosto de 1866, quedando derogadas sus prescripciones en cuanto se hallasen en contradicción con la presente. Se inserta esta importante ley en el Apéndice 1.º como toda la legislación del corriente año 1868.

CASTELLANÍA. En lo antiguo era el territorio de un castillo: la jurisdicción del mismo.

CASTELLANO. Llamóse así al Alcaide ó Gobernador de un castillo. También cierta moneda de oro antigua.

CASTIGOS GUBERNATIVOS. Pueden imponerlos los Alcaldes y los Gobernadores de provincia en los casos y con las formalidades que se determinan en el R. D. de 18 de mayo de 1853, en el art. 505 del Código penal, y en las leyes de 8 de enero de 1845 y 25 de setiembre de 1863, reformadas en 21 y 22 de octubre de 1866.—V. **ALCALDES Y AYUNTAMIENTOS: AUTORIZACION PARA PROCESAR: FALTAS: GOBIERNO Y ADMINISTRACION DE LAS PROVINCIAS.**

CASTILLAJE Ó CASTILLERÍA. Tributo que se pagaba al señor de un castillo al paso por su territorio, por la obligación que tenía de atender á la seguridad de los caminos.

CASTILLO. Esta palabra derivada de *castrum castellum*, significa un edificio

fortificado situado por lo comun en alguna altura. Durante la larga y penosa guerra de la reconquista, fueron muchos los que se construyeron en España, y su multiplicidad, dice perfectamente un escritor, dió denominación clásica y gloriosa á una de sus provincias, que otra emuló despues resultando las dos Castillas. En tiempo del feudalismo, castillos que en su origen fueron uno de los mas poderosos elementos de nuestra gloriosa reconquista, vinieron á convertirse, con otros que se hacian de nuevo, en alcázares de tiranos y en guaridas de bandidos, pues desde ellos, varones ambiciosos y crueles ejercian una opresión terrible sobre los pobres aldeanos y sobre los viajeros á quienes aprehendian, convirtiéndose en foragidos, para exigirles despues el rescate.

Nuestras leyes de las Partidas y las recopiladas hablan de los castillos: de cómo deben ser guardados é abastecidos é defendidos con ardimiento (leyes del tit. XVIII, Part. 3.ª), de que deben ser mantenidos y reparados del mismo modo que las fuentes y caminos de las villas y lugares, y de que no puedan ser destruidos sin Real licencia ni se provean las alcaldías de los arruinados, etc., etc. (*Ley 20, tit. XXXII, Part. 3.ª, y tit. I, lib. VII, Nov. Rec.*) Hoy sobre todo lo relativo á los antiguos castillos.—V. **ANTIGÜEDADES Y MONUMENTOS HISTÓRICOS.**

CASTRADORES.—V. **ALBÉITARES Y VETERINARIOS** al fin de la parte doctrinal, y las disposiciones que se citan.

CASTRAR. CASTRACION. (Delito.) Se castiga en el art. 341 del Código penal.

CASTRENSE. Lo perteneciente al ejército ó bien al estado ó profesion militar. Así se dice **CURA CASTRENSE, PECULIO CASTRENSE** etc.

CATASTRO. Libro ó registro que contiene la cantidad, calidad y estimación de los bienes que posee cada vecino, ó sea el valor de las fincas y de los productos de las tierras y de la industria. En el año 1575, el maestro Pedro Esquivel, cronista de Carlos V, y catedrático de matemáticas en Alcalá, recorrió de órden de Felipe II la Península para

hacer una exacta descripción de sus pueblos, pero la muerte cortó los progresos de una obra tan interesante. Al mismo tiempo, el Gobierno pidió á todos los pueblos una razón exacta de su origen, vecindario y productos, cuyas contestaciones se recogieron en gruesos volúmenes que en 1804 existían en la biblioteca del Escorial. Después se han hecho esfuerzos por el Gobierno para averiguar el verdadero estado de la población, de la agricultura, de las fábricas y del comercio, según veremos en **CONTRIBUCION TERRITORIAL: ESTADÍSTICA: POBLACION**, etc.

CATASTRO DE CATALUÑA. Renta que desde principios del siglo XVIII se estableció en la Corona de Aragón equivalente á las provinciales de Castilla, y recaía sobre todos los bienes, ganancias mercantiles y jornales, á razón de un 10 por 100 en los primeros y 8 $\frac{1}{2}$ en los demás. Por los arts. 5.º y 7.º de la ley de presupuestos de 23 de mayo de 1843 se refundió este impuesto, parte en la contribución territorial, y parte en la de consumos.

CATEDRAL.—V. CONCORDATO: IGLESIAS.

CAUCE. Zanja, canal ó acequia artificial por donde se conducen las aguas para riegos, ó para que sirvan de motor para artefactos ó cualquiera clase de empresa. Cuando estos cauces atraviesan la vía pública, están obligados sus dueños á dejarla expedita por medio de puentes, ó pontones, de modo que resulte cubierta la parte de cauce que corta la vía, con la latitud y solidez necesarias para los usos á que por su naturaleza esté la misma destinada, y en la forma conveniente para evitar que en las crecidas del río revasen á ella las aguas. Es doctrina establecida por el Consejo Real (hoy de Estado) en Real decreto-sentencia de 9 de febrero de 1853: á saber.

El Ayuntamiento de Mozoncillo (Segovia) impuso al dueño de un molino harinero la obligación de recomponer y conservar en buen estado un puente llamado de Rodelga, que da paso al cauce de dicho molino. Seguido expediente

gubernativo á instancia del dueño de este, y desestimada su oposición al acuerdo del Ayuntamiento, propuso demanda ante el Consejo provincial; la cual, seguidos sus trámites, fué fallada por dicho Consejo, declarando que el dueño del molino no estaba obligado á componer el puente. Apelada esta providencia por el Ayuntamiento, el Consejo Real, adonde se elevó el pleito, citando la ley 7.ª, tit. XXIX de la Part. 3.ª, según la que no se pierden por tiempo las casas, ni los caminos, ni las dehesas, ni los ejidos, ni los otros lugares semejantes que son del comun del pueblo, revocó la sentencia del Consejo provincial por la suya de 9 de febrero de 1853 en los términos siguientes:

«Considerando que son hechos confesados en la prueba por el demandante:

Primero. Que el cauce por el cual conduce á su molino las aguas del río Piron, fué construido después que este varió su curso del antiguo álveo.

Segundo. Que dicho cauce corta el tránsito recto de los viajeros y de los labradores de Mozoncillo para los pueblos y tierras situadas al otro lado del mismo.

Considerando que si por concesión expresa ó por aquiescencia de la Administración activa se consintió al dueño del molino atravesar con dicho cauce la vía pública, va siempre entendida la obligación de dejarla expedita y desembarazada de todo obstáculo y entorpecimiento á juicio de la autoridad administrativa, sin que contra este derecho de la Administración ni para la ocupación de la vía pública tenga jamás lugar la prescripción, según la citada ley de Partida:

Considerando que si para conseguir este objeto sería innecesario é injusto extender el gravámen á conservar siempre un puente capaz de facilitar el paso á todas las aguas del río Piron, como se verificaba en lo antiguo por debajo del Rodelga, es indispensable y de toda justicia que el dueño del molino que aprovecha exclusivamente el cauce, tenga cubierta la parte de él que corta la vía pública, con la latitud y solidez necesarias para los usos á que por su naturaleza esté la misma destinada, y en la forma conveniente para evitar que en las crecidas del río rebasen á ella las aguas:

Oído mi Consejo Real etc., vengo en declarar que Pablo Merino, como dueño del molino del Lago, está obligado á cubrir y

conservar cubierto á sus expensas, con la seguridad y altura suficiente á juicio de la Administracion, el cauce que conduce á dicho molino las aguas extraídas del rio Piron, en la parte que aquel atraviesa ó atravesare la via pública que de Mozoncillo se dirige á Turégano, Sepúlveda y otros pueblos y haciendas á la parte opuesta del mismo cauce, dejando expedita dicha via para los usos á que esté destinada segun su naturaleza; y que mientras no lo verifique está igualmente obligado á reparar y conservar en estado de seguridad el puente de Rodelga, único medio existente hoy para conseguir el mismo objeto; y en mandar que Pablo Merino satisfaga las cantidades que en virtud de la sentencia del inferior y de su auto de 3 de diciembre último para su ejecucion, le hubiesen sido devueltas de las que se le habian exigido para reparaciones anteriores de dicho puente, y lo acordado.»—Dado en Palacio á 9 de febrero de 1853.

En el artículo ALVEO hemos expuesto la doctrina de la ley de 3 agosto de 1866, relativamente á los cauces *naturales* de los rios y arroyos, de las aguas pluviales y de los lagos y charcas. Aparte de lo que allí decimos, y de lo que reservamos para el artículo SERVIDUMBRE DE ACUEDUCTO, indicaremos aquí, como lugar mas oportuno, que segun la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de 9 de junio de 1865, los cauces ó acequias por donde se conducen las aguas que sirven de motor á cualquier clase de maquinaria, no pertenecen á los dueños de los artefactos en cuyo beneficio se hayan construido ó abierto mientras no se pruebe legalmente; y no existiendo esta prueba, solo les corresponde la servidumbre de acueducto con sus consecuencias, ó sea con el derecho de impedir que los poseedores ribereños la disminuyan el caudal de agua que necesitan para el ejercicio de aquellos.

CAUCION. «Seguramiento que el deudor ha de hacer al señor del debdo, dándole fiadores valiosos, ó peños.» (ley 10, tít. XXXIII, Part. 7.^a)—V. FIANZA.

CAUCION JURATORIA. La promesa que uno hace voluntariamente ó por mandato judicial de cumplir lo que se le ha ordenado. Suele exigirse tratándose de

cosas de poca entidad, ó cuando la parte no puede dar fiador ni prenda.

CAUCION. (Pena). Lo que es esta pena, su duracion, etc., véase en los arts. 24, 26 y 43 del Código penal.

CAUSA CRIMINAL.—V. CÓDIGO PENAL.

CITACION: JUSTICIA: PROCEDIMIENTO PENAL.

CAZA Y PESCA. Las ordenanzas vigentes en el ramo de caza y pesca son hoy las publicadas por R. D. de 3 de mayo de 1834 con algunas modificaciones establecidas por consecuencia de la ley de 8 de junio de 1813, restablecida en 6 de setiembre de 1856, y por la de 13 de setiembre de 1837. El título 30, lib. VII de la Nov. Rec. estaba exclusivamente dedicado á la *caza y pesca*; pero sus disposiciones han tenido entrada en las referidas ordenanzas de 1834, á las cuales debemos por lo mismo atenernos. Veamos el contenido de estas y de las demás leyes indicadas que las modifican en algunos puntos.

R. D. de 3 mayo de 1834.

Se deslindan los derechos del propietario y del público sobre la caza y la pesca.

(FOM.) Por mi R. D. de 20 de noviembre del año último tuve á bien nombrar una Comision que, examinando bajo todos aspectos los derechos de los propietarios y del público sobre pesca y caza, y las ordenanzas vigentes en la materia, me propusiese por el Ministerio de Fomento general del Reino de vuestro interino cargo, un proyecto de ley con la cual se cortaran embarazos y dificultades, y se concillasen todos los derechos y todos los intereses. Cumplió la Comision, y oido el dictámen del Consejo de Gobierno y del de Ministros, en nombre de mi muy cara y amada hija la Reina doña Isabel II, he venido en resolver y mandar se guarden y cumplan las disposiciones siguientes:

TITULO PRIMERO.

DE LA CAZA EN TIERRAS DE PROPIEDAD PARTICULAR.

1.º Los dueños particulares de las tierras lo son tambien de cazar en ellas libremente en cualquier tiempo del año, sin traba ni sujecion á regla alguna.

2.º En los mismos términos, y con la misma amplitud, podrán cazar en las tierras de particulares los que no sean sus dueños con licencia de estos por escrito.

3.º Cuando el dueño de las tierras dé licencia para cazar en ellas, y la licencia para hacerlo con la expresada amplitud no conste por escrito, el cazador estará sujeto á las restricciones de ordenanza que se expresarán en adelante para los baldíos.

4.º Se podrá cazar sin licencia de los dueños, pero con sujeción á las indicadas restricciones de ordenanza en las tierras abiertas de propiedad particular que no estén labradas ó que estén de rastrojo.

5.º Los arrendatarios de las tierras de propiedad particular tendrán en orden á la caza las facultades que estipulen con los dueños.

6.º No se podrá cazar en tierras ajenas de propiedad particular, sino en los casos y en los términos expresados en los cuatro artículos precedentes.

7.º La caza que cayere del aire en tierra de propiedad, ó entrase en ella despues de herida, pertenece al dueño ó arrendatario de la tierra y no al cazador, conforme á lo dispuesto en la ley 17, tít. XXVIII de la 3.ª Partida.

8.º Los que con el objeto de cazar violasen y saltasen los cercados de tierras de propiedad particular, pagarán además de los daños que causaren, incluso el valor de la caza que matasen ó cogiesen, que debe ser para el dueño ó arrendatario, en su caso las costas del procedimiento si lo hay, y además 20 rs. vn. por la primera vez, 30 por la segunda y 40 por la tercera.

TÍTULO II.

DE LA CAZA EN TIERRAS DE PROPIOS Y BALDÍOS.

9.º En las tierras que no sean de propiedad particular se prohíbe cazar, por lo tocante á las provincias de Alava, Avila, Burgos, Coruña, Guipúzcoa, Huesca, Leon, Logroño, Lugo, Navarra, Orense, Oviedo, Palencia, Ponvedra, Salamanca, Santander, Segovia, Soria, Valladolid, Vizcaya y Zamora desde 1.º de abril hasta 1.º de setiembre. Y en lo demás del Reino, incluidas las Islas Baleares y Canarias desde 1.º de marzo hasta 1.º de agosto.

10. Se prohíbe asimismo cazar durante todo el año en los días de nieve y los llamados de fortuna, á excepcion del caso que se expresará en el título IV.

11. Se prohíbe cazar en todo tiempo con hurones, lazos, perchas, redes y reclamos machos. De esta regla general se exceptúan las codornices y demás aves de paso, respecto de las cuales se permite cazarlas du-

rante el tiempo de su tránsito, aunque sea con redes y reclamos.

12. Los Ayuntamientos podrán arrendar, con aprobacion del subdelegado de la provincia, la caza en las tierras de propios de los pueblos; y los arrendatarios podrán dar licencia á los demás para que cacen; pero unos y otros lo harán con sujeción á las restricciones que se expresan en este título.

13. Los que cacen en tierras de propios arrendadas sin tener licencia del arrendatario, ó faltando á las restricciones de la ordenanza, pagarán en uno y otro caso al arrendatario el valor de la caza que mataren ó cogieren, y además 20 rs. la primera vez, 30 la segunda y 40 la tercera. La mitad de esta multa será para el arrendatario, y la mitad para el fondo destinado al exterminio de animales dañinos de que se hablará en el título IV.

14. En los montes y baldíos que no pertenezcan á propios, podrán cazar los vecinos del pueblo respectivo, con sujeción á las reglas y restricciones establecidas en este título. Las justicias podrán dar licencia para lo mismo á los forasteros.

15. Se permite cazar, con sujeción á las restricciones contenidas en este decreto, en los montes, baldíos y tierras de propios que no estén arrendados, á los que obtengan licencia del subdelegado de la provincia.

16. Estas licencias se concederán por escrito, previo el informe de la justicia ú otro que se estime conveniente. Los vecinos pagarán por la licencia anual para cazar en el término jurisdiccional de sus pueblos respectivos, 10 rs.: el doble los que la obtengan para cazar en toda la provincia; y el cuádruplo los cazadores de profesion, los cuales se entenderá que la tienen para toda la provincia.

17. Los productos de esta tarifa quedan afectos especialmente al pago de las recompensas por la extincion de animales dañinos, de que se hablará en el tít. IV.

18. No se permite por regla general cazar hasta la distancia de 500 varas, contadas desde las últimas casas de los pueblos, para evitar los peligros de personas y de incendios.

TÍTULO III.

DE LA CAZA DE PALOMAS.

19. Las palomas campesinas están comprendidas en las demás aves que puedan cazar con sujeción á las reglas prescritas.

20. No podrá tirarse á las palomas domésticas ajenas sino á la distancia de 1000

varas de sus palomares. Los infractores pagarán al dueño el valor de la caza, y además pagarán á la justicia 20 rs. por la primera vez, 30 por la segunda y 40 por la tercera, siendo la mitad de esta multa para el dueño, y la otra mitad para el fondo que se dirá en el tít. IV.

21. Los dueños de palomares tendrán obligación de tenerlos cerrados durante los meses de octubre y noviembre, para evitar el daño que puedan ocasionar las palomas en la sementera. Los infractores además del daño, si lo hubiere, pagarán 100 rs. de multa por la primera vez, 150 por la segunda y 200 por la tercera.

22. La misma obligación y bajo las mismas penas tendrán los dueños de palomares durante la recolección de las mieses desde 15 de julio hasta 15 de agosto.

23. Si por razón de la diferencia de los climas conviniese señalar plazos diversos de los fijados anteriormente para el cerramiento de palomares en las dos épocas expresadas, ó en alguna de ellas, podrá hacerlo la justicia del pueblo, siempre que el plazo respectivo no exceda de dos meses, avisándolo con anticipación para gobierno de los dueños de palomares.

24. Durante las dos épocas expresadas de recolección y de sementera, será libre tirar á las palomas domésticas á cualquiera distancia fuera del pueblo, aunque sea dentro de las 1000 varas señaladas arriba, siempre que en este último caso se tire con las espaldas vueltas al palomar.

TITULO IV.

DE LA CAZA DE ANIMALES DAÑINOS.

25. Será libre la caza de animales dañinos, á saber: lobos, zorras, garduñas, gatos monteses, tejones y turones en las tierras abiertas de propios, en las baldías y en las rastrojeras no cercadas de propiedad particular, durante todo el año, incluso los días de nieve y los llamados de fortuna.

26. No se permite en ninguna clase de tierras abiertas, aunque estén amojonadas, cazar con cepos, trampas, ni otros ningunos armadijos de que pueda resultar perjuicio á los pasajeros ó animales domésticos. Los infractores pagarán además del daño y las costas, 40 rs. de multa por la primera vez, 60 por la segunda y 80 por la tercera.

27. En las tierras cercadas, sean de propios ó de particulares, no se permite la caza de animales dañinos sin licencia de los dueños ó arrendatarios.

28. Los dueños y arrendatarios de tier-

ras cercadas, y no otros, podrán poner en ellas cepos ú otras cualesquier especie de trampas y armadijos para coger ó matar animales dañinos, en cuyo caso estarán obligados á poner y mantener en paraje visible un padron con el aviso para que nadie pueda alegar ignorancia.

29. Para fomentar el esterminio de los animales dañinos se pagarán á las personas que los presenten muertos, por cada lobo 40 rs., 60 por cada loba, y 80 si está preñada, y 20 rs. por cada lobezno; la mitad respectivamente por cada zorro, zorra ó zorrillo, y la cuarta parte también respectivamente por las garduñas y demás animales menores arriba expresados, tanto machos como hembras y sus crias.

30. Los que tengan derecho á las precedentes recompensas presentarán á la justicia el animal ó animales muertos, y la justicia les entregará la cantidad correspondiente bajo recibo.

31. Estos recibos, junto con las colas y orejas de los lobos y zorras, y las pieles de las garduñas y demás animales arriba expresados, serán los documentos que han de presentar las justicias en la capital de provincia para justificar en sus cuentas los artículos de esta clase, que no se les abonarán sin ambos requisitos.

32. Para el pago de las expresadas recompensas en los pueblos queda asignada la mitad de las penas pecuniarias impuestas á los infractores de todas las disposiciones contenidas en los artículos anteriores, incluso las relativas á palomares, como asimismo la mitad de las que se cobren por cualquiera infracción de las que se expresan en los siguientes títulos sobre la pesca.

33. Si el importe de la mitad de dichas penas no alcanzare á cubrir el de las recompensas, los cazadores podrán reclamarlas en la oficina general de propios de la provincia, presentando certificación de la justicia junto con los despojos ó pieles de los animales.

34. Si de la mitad de las penas sobrase para pagar las recompensas, el resto se agregará á la masa de arbitrios comunales del pueblo.

35. Se prohíben las batidas comunales de los pueblos bajo ningún pretexto, incluso el del esterminio de animales dañinos; dejando este cuidado al interés particular de los cazadores.

TITULO V.

DE LA PESCA.

36. Los dueños particulares de estan-

ques, lagunas ó ebarcas que se hallen en tierras cercadas están autorizados, en virtud del derecho de propiedad para pescar en ellos durante todo el año sin sujeción á regla alguna. Se entienden por tierras cercadas en este título y en todos los demás del presente decreto las que lo estén enteramente, y no á medias ó aportilladas, de suerte que no puedan entrar en ellas las caballerías.

37. Los dueños podrán en virtud del mismo derecho de propiedad comunicar estas facultades á sus arrendatarios en los términos que entre ellos se estipule.

38. Se prohíbe á los dueños particulares y arrendatarios de estanques y lagunas que se hallen en tierras abiertas, aunque estén amojonadas, pescar en ellas envenenando ó inficionando de cualquier modo el agua, de suerte que pueda perjudicar á las personas ó á los animales domésticos transeúntes que la bebiere.

39. Si las lagunas y aguas estancadas lindasen con tierras de varios dueños particulares, podrá cada cual pescar desde su orilla con sujeción á las reglas generales establecidas; pero poniéndose los dueños de común acuerdo podrán pescar con arreglo á los tres artículos precedentes, como si fuera uno solo el dueño.

40. En las aguas corrientes á que sirven de linde tierras de propiedad particular, podrán los dueños de estas pescar desde la orilla hasta la mitad del corriente con sujeción á las restricciones de ordenanza. Y nadie podrá hacerlo sin su licencia.

41. En las aguas corrientes, cuyas riberas pertenecen á propios, podrán los Ayuntamientos arrendar la pesca con la aprobación del subdelegado de la provincia, y los arrendatarios podrán dar á otros licencia para pescar, pero todos estarán sujetos á las restricciones expresadas.

42. En las aguas corrientes, cuyas orillas pertenezcan á baldíos, ó á propios, en el acto de no estar arrendada la pesca, se declara esta libre hasta la mitad de la corriente para todos los vecinos del pueblo á cuyo término pertenezcan las orillas, y no á los de otros pueblos, aunque tengan comunidad de pastos. Las justicias podrán dar licencia para pescar á los forasteros; pero tanto estos como los vecinos estarán sujetos á las restricciones designadas.

43. En los ríos y canales navegables se ha de entender que las facultades de los dueños y arrendadores, expresadas en los tres artículos precedentes han de ser sin perjuicio de la navegación y de las servidum-

bres á que con motivo y á beneficio de ella están sujetas las tierras riberiegas.

44. En los canales de navegación y de riego, como asimismo en los cauces y acequias para molinos ú otros establecimientos industriales ó de placer, se observarán las mismas reglas establecidas anteriormente según la calidad de las orillas á no ser que haya costumbre ó contrato en contrario.

TITULO VI.

DE LAS RESTRICCIONES DE LA PESCA.

45. Se prohíbe pescar envenenando ó inficionando las aguas en ningún caso fuera del de ser estancadas y estar enclavadas en tierras cercadas de propiedad particular. Los infractores, además de los daños y costas, pagarán 40 rs. por la primera vez, 60 por la segunda y 80 por la tercera.

46. Se prohíbe asimismo pescar con redes ó nasas cuyas mallas tengan menos de una pulgada castellana ó el duodécimo de un pie en cuadro, fuera de los estanques ó lagunas que sean de un solo dueño particular, el cual podrá hacerlo de cualquier modo.

47. Desde 1.º de marzo hasta último de julio se prohíbe pescar no siendo con la caña ó anzuelo, lo cual se permite en cualquier tiempo del año.

TITULO VII.

DE LA EJECUCION DE ESTE REGLAMENTO.

48. El modo de proceder de las justicias en materias de caza y pesca será por regla general gubernativo.

49. Los procedimientos tendrán lugar: 1.º por queja de parte agraviada: 2.º de oficio: 3.º por denuncia de guardia jurado ó de cualquier individuo del Ayuntamiento: 4.º por denuncia de cualquier vecino, siendo caso de aguas inficionadas ó de cepos armados fuera de cercado.

50. El Alcalde hará comparacer al presunto infractor, y comprobado el hecho, exigirá de él la multa, el valor de la caza y del daño cuando lo haya, dando á estas cantidades el destino que se ha prescrito en el presente decreto.

51. Cuando se proceda por queja de parte agraviada, si resulta ser cierto el hecho, y hubiera daño, el Alcalde procurará que los interesados transijan en cuanto al daño, sin perjuicio de cobrar la multa; y si no se avinieren, decidirá gubernativamente en las causas de menor cuantía, dejando que las otras sigan el curso judicial que les corresponda; pero satisfaciendo antes el reo la mi-

tad de la multa destinada al fondo del art. 31 para la persecucion de animales dañinos.

52. Las infracciones de que se trata en este decreto prescribirán á los 30 dias en los casos de aguas maleficiadas ó de cepos y armadijos fuera de cercado, y en todos los demás á 20 dias. Pasados estos plazos, las justicias no podrán proceder de oficio, ni admitirán queja ni denuncia alguna.

TITULO VIII.

DE LAS PENAS DE LOS INFRACTORES.

53. La pena general por las infracciones de este reglamento, cuando en él no se expresa otra cosa, será además del daño y costas, si las hubiere, 20 rs. por la primera vez, 30 por la segunda y 40 por la tercera. Si todavía se repitiese el delito, la justicia consultará al subdelegado de Fomento de la provincia sobre la pena que convenga.

54. Los padres y los tutores son responsables de las infracciones cometidas por sus hijos de menor edad y por los pupilos.

55. Quedan derogadas todas las ordenanzas y reglamentos anteriores en cuanto se opongán al presente decreto.

Tendréislo entendido, y dispondreis lo necesario á su cumplimiento.—Está rubricado de la Real mano.—Aranjuez 3 de mayo de 1834. (CL. t. 19, p. 236.)

R. O. de 26 mayo de 1834.

(INTERIOR.) Extracto.—Se dejó en suspenso la ejecucion de los arts. 16 y 17 del Real decreto anterior, «sin perjuicio de que tengan puntual observancia cuando hayan cesado los motivos que hoy lo impiden» y se mandó «que en su consecuencia continúe la policia expidiendo las licencias para caza y pesca con la misma retribucion establecida en sus reglamentos vigentes (1) aplicando á sus fondos el producto como hasta aquí: y que por la presentacion de animales dañinos muertos se hagan los abonos establecidos antes del expresado Real decreto en las mismas cantidades y por los mismos fondos sobre que estaban señalados.»

Ley de 2 setiembre de 1837.

Esta ley restableció la de señoríos de 6 de agosto de 1811, cuyo art. 7.º abolió los privilegios exclusivos, privativos y prohibitivos que tengan origen de señorío, como son los de caza y pesca etc.—V. EN SEÑORÍOS.

(1) Véanse en ARMAS, t. 1.º, págs. 482 y 483 los capítulos del reglamento de policia de 24 de febrero de 1824.

Ley de 13 setiembre de 1837.

Se declara que el disfrute de caza y pesca corresponde privativamente á los dueños de terrenos.

«Artículo único. El disfrute de caza y pesca en los montes y terrenos de que trata el art. 3.º del decreto de 14 de enero de 1812 sobre abolicion de las ordenanzas de montes y plantíos, ó en otros que estuvieren cerrados ó acotados, corresponde privativamente á los dueños y nadie podrá cazar ni pescar en ellos sin su prévio permiso, ó de quien sus veces hiciere.» (CL. t. 23, p. 179.)

R. O. de 25 noviembre de 1847.

Es importantísima, en cuanto aclara la inteligencia de las palabras *cerrados y acotados* con motivo de una cuestion sobre caza. Se halla en el artículo ACOTAMIENTO.

Ley de 9 julio de 1856 (1).

Sobre privilegios privativos.... de caza y pesca.

«Artículo 1.º En virtud de lo dispuesto en los arts. 7.º y 8.º de la ley de 6 de agosto de 1811, confirmada por la de 13 de julio de 1813, y 3 de mayo de 1823, restablecidas por decreto de las Cortes en 20 de enero de 1837, declarando abolidos los privilegios llamados privativos y prohibitivos en materia de caza y pesca, que tengan origen de señorío, el Gobierno dictará las disposiciones oportunas para que se hagan efectivos á los pueblos y particulares los beneficios de las citadas leyes, sin perjuicio de la indemnizacion á que tengan derecho, con arreglo á las mismas los que se crean agraviados.

Art. 2.º Cuidará igualmente el Gobierno de la puntual observancia del R. D. de 3 de mayo de 1834, que prescribe la policia y demas reglas para el ejercicio de la caza y pesca, tanto por los pueblos como por los particulares, ínterin no se prescribieren otras.

Art. 3.º El conocimiento de los incidentes á que diere lugar la observancia ó inobservancia de lo prevenido en el artículo anterior, corresponde á las autoridades gubernativas, salvo en sus casos los recursos contencioso-administrativos y los que por su índole correspondan á los Tribunales.

Art. 4.º Quedan reservadas al conocimiento de la jurisdiccion ordinaria las cuestiones que, segun las leyes de 1811, 1813 y 1823, corresponden á la misma en esta materia.—Palacio á 9 de julio de 1856.»

(1) Aprobada por las Cortes en 30 junio: sancionada en 5 julio: refrendada en 9 julio.

R. O. de 16 enero de 1865.

Declarando los deberes de la Guardia civil de denunciar las infracciones que se cometan en terrenos abiertos como auxiliar de la autoridad; pero sin mezclarse en sus resoluciones.

(Gob.) Por este Ministerio se dice con fecha de hoy al Director general de la Guardia civil lo que sigue:

La Seccion de Gobernacion y Fomento del Consejo de Estado á quien se pasó á informe el expediente promovido por V. E. consultando las reglas á que han de atenerse los individuos de la fuerza de su mando en punto á leyes de caza, manifestó á este Ministerio con fecha 17 de octubre del año último lo que sigue:

Excmo. Sr.: Por R. O. de 9 de setiembre próximo pasado se remite á informe de esta Seccion el expediente promovido por el Director general de la Guardia civil para que se declare cuáles son las obligaciones de los guardias respecto del cumplimiento de la ley para el ejercicio de la caza en terrenos abiertos.

Resultando del expediente que el comandante de la Guardia civil de la provincia de Tarragona se dirigió al expresado Director consultando el modo de entender los deberes que el reglamento de la Guardia civil impone á sus individuos para que hagan observar las disposiciones que rigen acerca de la caza y que el mismo comandante dió posteriormente cuenta de la resolucion tomada por el Gobernador de Tarragona en conformidad del art. 1.º de la referida ley, mandando devolver á Antonio Virgili las redes y huron que le fueron recogidos por la Guardia civil al denunciarle, con cuyo motivo se promovió la consulta.

Teniendo presente que la ley de 4 de mayo de 1834, única que rige en esta materia establece que los dueños de las tierras lo son tambien de cazar libremente en ellas en cualquier tiempo del año sin traba ni sujecion á regla alguna; que de este derecho puede usar otra persona con licencia del dueño y que salva esta excepcion no es permitido á nadie infringir las disposiciones vigentes acerca de la caza.

Teniendo presente que creado el Cuerpo de la Guardia civil y aprobado el reglamento para su servicio se consignó en su art. 30, párrafo 3.º la obligacion de los guardias de hacer observar las disposiciones de la ley de caza.

Considerando que la ley ya citada determinó la diferencia entre terrenos acotados y terrenos abiertos, distinguiendo el derecho

del dueño de cazar en sus heredades cuando quiera y como quiera y la libre facultad de cazar con sujecion á lo mandado.

Considerando que la repetida ley no está derogada ni limitada por otra ley alguna hallándose por tanto vigente en todas sus partes.

Y considerando que el reglamento del Cuerpo de la Guardia civil impone á sus individuos el deber de hacer cumplir las leyes.

La Seccion es de parecer que el Cuerpo de la Guardia civil cumple con su deber al denunciar las infracciones de la caza que se cometan en los terrenos abiertos; y que la autoridad competente está dentro de sus atribuciones resolviendo del modo que sea justo acerca de las infracciones que se le denuncian; pues que estando reducidas las facultades de la fuerza de que se trata á las de mera auxiliar de la autoridad no debe mezclarse en las resoluciones de esta, ni le es lícito calificarlas.

Y habiéndose dignado S. M. conformarse con el preinserto dictámen, de Real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento y efectos correspondientes. De la propia Real orden lo traslado á V. S. para los mismos fines y con objeto de que esta resolucion sirva de regla general en hechos análogos. (*Bol. of. de Lérida de 17 de febrero.*)

Resumen de las disposiciones contenidas en este artículo.

Caza en tierras de propiedad particular, tit. I, R. D. de 3 agosto de 1834, ley de 13 de setiembre de 1837 y Real orden de 16 de enero de 1865.

Caza en tierras de propios y baldíos; tit. II (arts. 9 á 18).

Caza de palomas; tit. III (arts. 19 á 24).

Caza de animales dañinos; tit. IV de idem, (arts. 25 á 35).

Caza en dias de nieve; art. 10, ordenanza.

Caza con hurones, lazos etc.; art. 11, ordenanza.

Caza en la zona de 500 varas del pueblo; art. 18, ordenanza.

Modo de proceder en materias de caza, tit. VII (arts. 48 á 52).

Penas; tit. VIII (arts. 53 á 55).

Padres y tutores: su responsabilidad por las infracciones de los hijos; art. 54.

Pesca; tit. V (arts. 36 á 44), restricciones de id. tit. VI.

Insertas las ordenanzas y demás disposiciones vigentes sobre caza, vamos á tratar especialmente de dos puntos que son importantes: 1.º del derecho que tienen los dueños de heredades ó fincas rústicas, de cazar en ellas libremente; y 2.º del que igualmente tienen de impedir que otros cacen en ellas.

I. «Los dueños particulares de tierras lo son tambien de cazar en ellas libremente en cualquier tiempo del año, *sin traba ni sujecion á regla alguna.*» Esto es lo que á la letra dice el art. 1.º del reglamento de caza y pesca, ó sea del R. D. de 3 de mayo de 1834. Al reconocer el legislador este derecho en el propietario, lo ha hecho con palabras tan terminantes y absolutas, que en nuestro concepto no pueden suscitarse con razon dudas de ningun género sobre este importante punto. *En cualquier tiempo del año sin traba ni sujecion á regla alguna*, tanto quiere decir en su buen sentido, como sin necesidad de licencia, en todos los meses y dias del año, aunque sean en los de nieve y los llamados de fortuna, ó con hurones, lazos, perchas, redes y reclamos machos. Podrá ser que esta inteligencia que damos al art. 1.º del reglamento no sea acertada; pero cuanto mas meditamos sobre sus palabras, cuanto mas nos hacemos cargo del método y estructura del reglamento, mas nos persuadimos de que no ha podido ser otra la intencion del legislador.

En efecto, en el tit. I se trata *de la caza en tierras de propiedad particular*, y es de advertirse, además del precepto del art. 1.º, que ninguna traba se pone, ninguna regla se dá para su ejercicio á los dueños de las mismas.

En el tit. II se trata ya *de la caza en tierras de propios y baldios*, y en él es donde se prescribe la prohibicion de cazar en ciertos meses del año, y en los dias de nieve y llamados de fortuna, y con hurones, lazos, perchas, redes y reclamos machos, así como tambien la necesidad de obtener licencia. No pueden por lo mismo hacerse extensivos estos requisitos á los dueños que cazan en sus propias heredades sin desconocer la le-

tra y el espíritu de la ley, y sin escatimar al propietario derechos que en toda legislacion no pueden menos de ser muy respetados como lo son tambien en la nuestra.

De la licencia de uso de armas en su caso no se pueden excusar los que cacen en sus propias heredades, pues la de uso es distinta de la que se requiere para cazar, y no ha podido ser el ánimo de la ley llevar tan allá las concesiones.

II. Aunque el art. 4.º del citado decreto dispuso que se pueda cazar sin licencia de los dueños, pero con sujecion á las restricciones de ordenanza que establecen para los baldíos, en las tierras abiertas de propiedad particular, que no estén labradas ó que estén de rastrojo, esta disposicion, nada conciliable con los derechos de propiedad bien entendidos, se halla ya derogada, así por el restablecimiento de la ley de 8 de junio de 1813, como por la publicacion de la de 13 de setiembre de 1837, que en nuestro sentir no dejan lugar á la duda.

La citada ley de 1813, restablecida en 6 de setiembre de 1836, declaró cerradas y acotadas todas las dehesas heredades y demás tierras de cualquiera clase pertenecientes á dominio particular. La de 13 de setiembre de 1837 dice textualmente que «el disfrute de caza y pesca en los montes y terrenos de que trata el art. 3.º del decreto de 14 de enero de 1812 sobre abolicion de las ordenanzas de montes y plantíos, *ó en otros que estuvieren cerrados ó acotados*, corresponde privativamente á los dueños y nadie podrá cazar ni pescar en ellos sin previo permiso ó de quien sus veces hiciere.»

Quedó, pues, sin efecto por esta ley el art. 4.º del decreto de 1834, y el 3.º á que se refiere del de 14 de enero de 1812, que por cierto no era justo, ni se armonizaba con los legítimos derechos del propietario. Toda la dificultad estaria ahora en saber cuáles deben entenderse terrenos acotados; pero habiendo llenado éste vacío el art. 1.º de la ley de 1813 (V. ACOTAMIENTO), claro es que por el se resuelve toda la dificultad, no

siendo permitido por lo tanto cazar en montes y tierras ajenas de propiedad particular, puesto que todas se consideran cerradas y acotadas, á no ser con licencia ó aquiescencia del dueño ó de quien sus veces haga; y esto por mas que la costumbre sea en contrario; porque semejante costumbre debe considerarse abusiva, y no tiene ni puede tener otra autoridad que la que la dá la tolerancia de los dueños particulares de los terrenos, los cuales pueden resistirla ó contradecirla, como pueden resistir y contradecir que otro entre en sus heredades á aprovecharse del trigo que siembran (1).

Este es nuestro sentir sobre una materia de suyo importante por los abusos á que ha dado lugar y á que dará todavía, mientras el cazador se crea revestido de un derecho que le concedian, aunque con restricciones, el art. 4.º del reglamento de caza de 3 de mayo de 1834, y el 3.º del decreto de 1812, pero que han quedado completamente abolidos, en cuanto al punto referido, por las leyes de que hemos hecho mérito, las cuales han tenido por principal objeto proteger el derecho de propiedad y reparar los muchos agravios que habia sufrido.

—V. PESCA.

CÉDULA. En su acepcion genérica es, segun el Diccionario de la Academia, un «pedazo de papel ó pergamino escrito ó para escribir en él alguna cosa.» A la palabra *cédula* se adiciona otra determinativa de su acepcion especial, y en este sentido se dice *cédula de notificacion*, *cédula Real*, *cédula de vecindad*, *cédula de banco* etc. sobre lo cual véanse los respectivos artículos BANCO: NOTIFICACION, etc. y los siguientes.

CÉDULA ANTE DIEM. Esta última palabra determina aquí que la *cédula* de que se trata es de citacion un dia antes á una persona ó varias para tratar de un asunto.

CÉDULA REAL (ó Real *cédula*.) Despacho que el Rey expedia ó el Consejo á su nombre, tomando ó circulando al-

guna ley, decreto ó providencia general, ú otorgando alguna gracia ó merced. No hay una jurisprudencia cierta á que atenerse, dice el Sr. Colmeiro, para distinguir los caracteres de las disposiciones que emanan del poder ejecutivo, y para señalar con precision rigurosa qué actos administrativos exigen esta ó la otra forma. Y esto que en nuestro derecho público actual es una verdad que no pudo ocultarse á tan entendido escritor, lo es doblemente respecto de los tiempos anteriores al sistema constitucional. Nosotros hemos procurado estudiar la verdadera razon de publicarse unas veces las leyes por medio de pragmáticas, otras por medio de Reales cédulas etc. y las circunstancias ó caracteres que distinguen aquellas de estas; y no hemos conseguido formar un juicio acabado sobre este punto. Diremos, sin embargo, que las *pragmáticas sanciones*, nombre que en un principio se dió á los decretos de los Reyes, dictados á consecuencia de las peticiones del Reino en Córtes, se han seguido usando despues hasta nuestros dias, indistintamente que las cédulas Reales, para la promulgacion de todas las resoluciones graves con carácter de ley que tenian por objeto remediar algun exceso; daño ó abuso que hubiese en el Estado, ó para cualquier otro asunto de grande interés público. De modo que nosotros no encontramos una diferencia sustancial en el fondo entre las Reales cédulas y las pragmáticas-sanciones de nuestros dias, ni en la fórmula tampoco; pues en unas y en otras, para revestir de solemnidad á lo en ellas contenido, se anteponia el nombre del Monarca, como se hace hoy para las leyes y sentencias del Consejo de Estado, añadiendo además sus titulos, expresando haberse dado cuenta en el Consejo y haberse acordado su cumplimiento y la cláusula de que se guarde, cumpla y ejecute por los infantes, prelados, duques, marqueses, condes, ricos-hombres, priores, comendadores de las órdenes, alcaides de los castillos, casas fuertes y llanas, y por los del Consejo, presiden-

(1) Corrobora mas nuestra opinion la importante Real orden de 25 de noviembre de 1847, inserta en el art. ACOTAMIENTO, t. 1.º p. 114.

tes y odores de las Chancillerías y Audiencias, Alcaldes etc., etc., concluyen con la firma de S. M.

Además de las Reales cédulas indicadas para asuntos de interés público, se conocían, y todavía subsisten hoy, otras para el otorgamiento de gracias ó privilegios especiales.—V. LEYES.

CÉDULA DE VECINDAD. Documento que ha sustituido á las cartas de seguridad y pasaportes, y que se distribuye á todas las personas para acreditar su vecindad é identificar su persona. Las disposiciones que rigen en esta materia son las siguientes:

R. D. de 15 febrero de 1854.

Suprimiendo los pasaportes y pases, y que se expidan cédulas de vecindad.

(Gov.) «En vista de las razones que me ha expuesto mi Ministro de la Gobernación, de conformidad con el parecer del Consejo de Ministros, vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Se suprimen desde 1.º de mayo del presente año los pasaportes y demás documentos que actualmente se expiden á los viajeros y vecinos de los pueblos para transitar de un punto á otro dentro de la Península é islas adyacentes.

Art. 2.º A principio de cada año la autoridad correspondiente facilitará á los padres ó cabezas de familia una cédula de vecindad para sí, y otra para cada uno de los demás individuos de su familia con arreglo al padron. Todo viajero deberá caminar provisto de este documento sin necesidad de presentarlo á nadie como no le sea pedido en nombre de la autoridad, en cuyo caso está obligado á exhibirlo. Los criados necesitarán cédula separada, que se les dará en virtud de reclamación del amo si están sirviendo, y si no lo están en vista de su padron respectivo.

Art. 3.º Cada padre ó cabeza de familia pagará un real de vellón por las cédulas que necesite para sí y demás individuos de su familia, cualquiera que sea su número. Se exceptúa de este pago los pobres de solemnidad, los peregrinos, los braceros que no tengan mas medio de subsistencia que el jornal diario, los obreros que estén en el mismo caso, y las viudas y huérfanos que no posean mas que su pensión, si esta no pasa de 1,500 rs.

Art. 4.º A los extranjeros transeúntes les servirán sus pasaportes de cédula de vecindad.

Art. 5.º Las cédulas se repartirán á domicilio á todo el que estuviere empadrona-

do, haciéndose este servicio por los dependientes de la autoridad, los cuales recogerán en el acto su importe y la nota que deberán dar los cabezas familia, con arreglo al padron, para los efectos que en el art. 2.º se previenen. Estas cédulas se renovarán en el mes de enero de cada año, repartiéndose de la misma manera que queda expresado.

Art. 6.º La falta de cédula de vecindad será causa legal para la detención del omiso y para la imposición de las multas ó penas en que á tenor de las disposiciones vigentes incurre el que carece de padron en los pueblos donde reside, y de pasaporte en los viajes que emprende.

Art. 7.º Quedan subsistentes los pasaportes para el extranjero y Ultramar.

Art. 8.º El Ministro de la Gobernación comunicará inmediatamente á los Gobernadores de provincia y demás autoridades á quienes corresponda, las instrucciones necesarias para el mejor y mas exacto cumplimiento de este mi Real decreto.—Dado en Palacio á 15 de febrero de 1854. (CL. t. 61, pág. 240.)

R. O. de 23 febrero de 1854.

Militares. No son extensivas á ellos las cédulas de vecindad.

(GUERRA.) Extracto.—Se declara que el R. D. de 15 del mismo mes «no tiene conexión alguna con el ramo de Guerra.» (CL. t. 61, p. 266.)

R. O. de 1.º abril de 1854.

Reglas para llevar á efecto el R. D. de 15 de febrero.

Para llevar á debido efecto las disposiciones del R. D. de 15 de febrero próximo pasado, sobre supresión de pasaportes ó institución de cédulas de vecindad, la Reina (que Dios guarde) se ha servido disponer que se observen las reglas y prevenciones siguientes:

1.ª Habrá cuatro clases de cédulas: de pago para las cabezas de familia; gratis para los exceptuados en el art. 3.º de dicho Real decreto; gratis igualmente para personas que no sean cabezas de familia; y por último, de pago para sirvientes.

2.ª Las de la clase primera se destinan á las personas acomodadas, cabezas de familia; las de segunda, á los cabezas de familia que sean pobres de solemnidad, peregrinos, braceros y obreros, sin otro medio de subsistencia que el jornal; viudas y huérfanos que no posean mas que su pensión, si esta no excede de 1.500 rs.; las de tercera clase sirven indistintamente para todos los que de diez y seis años arriba, vivan bajo la dependencia

del cabeza de familia; y la cuarta exclusivamente para los sirvientes.

3.^a El 1.º de mayo próximo venidero, y despues el 1.º de enero de cada año, repartirán estas cédulas á domicilio; por sí ó por medio de sus dependientes, los comisarios de vigilancia donde se hallen establecidos, y los Alcaldes en los demás pueblos, teniendo cuidado de que á presencia de los delegados de la autoridad firme en el sitio correspondiente el cabeza de familia todas las cédulas que se expidan con su garantía.

4.^a Estas cédulas serán impresas con arreglo á modelo, y en todas ellas constará el nombre y apellidos paterno y materno del interesado; su estado, profesion, ocupacion ó empleo, calle, casa y cuarto en que viviere ó la denominacion de su vivienda si morase en alquería, caserío, venta ó paraje aislado, y por último, el distrito municipal y provincia á que pertenezca. El cabeza de familia firmará su cédula y las de todas las personas que están bajo su dependencia, y el Alcalde ó comisario que expidiese estos documentos los autorizará con su firma y sello.

5.^a Los encargados del despacho de las cédulas recogerán en él acto su importe, y serán responsables de él ante el Alcalde ó comisario que los hubiese comisionado para este servicio: estos últimos funcionarios se entenderán directamente con los depositarios de los Gobiernos de provincia, á quienes harán entrega de la recaudacion en la época que por el Gobernador se designen.

6.^a No puede concederse cédula de vecindad á los que no estén empadronados ó no cuenten con la anuencia de los padres ó cabezas de familia.

7.^a Los Gobernadores de provincia podrán negar ó recoger en casos especiales las cédulas de vecindad.

Cuando las autoridades inferiores creyeren necesario ó conveniente negar ó recoger la cédula á una persona empadronada lo harán dando cuenta inmediatamente de esta medida al Gobernador de la provincia con exposicion de motivos para su aprobacion.

8.^a Al verificar el repartimiento de las cédulas ó en cualquier tiempo los cabezas de familia entregarán una nota de los sirvientes

para quienes reclamen cédulas de vecindad.

9.^a Las personas que en 1.º de mayo próximo venidero residieren fuera del pueblo de su vecindad, serán provistas de cédulas con arreglo á su pasaporte y á la condicion social en que se hallaren constituidas. En estas cédulas se expresará por una nota que son interinas, y serán válidas únicamente hasta que los interesados lleguen al pueblo en que estén avecindados donde se les canjeará por la que les corresponda, con arreglo á su clase y circunstancias.

10. Toda persona que llegue á un pueblo sin cédula de vecindad y á los tres dias en la corte, y á los dos en los demás puntos, no se presente el Alcalde ó comisario á explicar satisfactoriamente esta falta, será detenida y considerada como vago, á no ser que dos vecinos honrados y bien acomodados respondan de su conducta, y de que en un término prudencial ha de justificar su procedencia.

11. Los que perdieren la cédula de vecindad fuera del punto de su habitual residencia, no podrán obtenerla en el tránsito sino mediante la fianza de dos vecinos del pueblo, honrados y acomodados. La cédula que en tal caso se expidiese será siempre de pago, y válida tan solo para el viaje.

12. Los Gobernadores de las provincias recordarán á los padres y cabezas de familia la obligacion en que están de dar parte al Alcalde ó comisario á las veinticuatro horas de las mudanzas de domicilio que verifiquen cualesquiera de los individuos que están bajo su dependencia, encareciendo el cumplimiento de esta obligacion nunca tan precisa como cuando la exactitud de los padrones ha de ser la principal medida de vigilancia. En las papeletas que pasen á la autoridad los padres ó cabeza de familia en cumplimiento de lo prescrito en el párrafo anterior, se expresará el nombre y apellido del que llega al pueblo ó sale de él, y el punto de donde viene ó á donde se dirige.

13. Los Alcaldes y comisarios llevarán un registro de cédulas de vecindad con arreglo al adjunto modelo.—Lo que de órden etc.—Madrid 1.º de abril de 1854. (CL. t. 61, p. 25.)

Modelo que se cita.

AÑO DE 185

DISTRITO MUNICIPAL DE

REGISTRO DE CEDULAS DE VECINDAD.

Provincia de

Comisaria ó celaduria de

Número.	Clase de la cédula 1. ^a , 2. ^a , 3. ^a ó 4. ^a	Apellidos paterno y materno.	Nombre.	Estado.	Ocupacion. ó modo de vivir.	Calle ó sitio en que habita.	Número y cuarto de la casa.	Cabeza de familia.	Fecha de la cédula			Observaciones.
									Día.	Mes.	Año.	

R. O. de 6 enero de 1857.

Se distribuyan las cédulas y se castigue gubernativamente á los que viajan sin dicho documento.

La Reina (Q. D. G.) se ha dignado resolver que V. S. cuide de que se distribuyan las cédulas de vecindad en esa provincia en los términos que está mandado, y que castigue gubernativamente y dentro del círculo de sus atribuciones á todos los que viajen sin dicho documento, ó eludan de cualquier modo el cumplimiento de la obligación en que se hallan de proveerse de él.—De R. O. etc.—Madrid 6 de enero de 1857. (CL t. 71, p. 15.)

R. O. de 15 enero de 1857.

(MARINA.) «La Reina (Q. D. G.) se ha dignado declarar que todos los individuos de Marina, incluso los matriculados de mar, están exentos de recibir las cédulas de vecindad de que trata el Real decreto de 15 de febrero de 1854.» (CL t. 71, p. 75.)

R. O. de 22 enero de 1857.

Matriculados de mar.

«... S. M. se ha dignado resolver... que organizados militarmente los tercios navales, y siendo por consiguiente militares todos los matriculados, necesitan estos para viajar obtener licencia y pasaporte de las autoridades de Marina á quienes están subordinados.» (CL t. 71, p. 78.)

R. O. de 23 junio de 1857.

Extranjeros en España.

(GOB.) He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del expediente instruido en este Ministerio con motivo de haberse dirigido por embajador de Francia á la Secretaría de Estado una nota en que se hacia referencia de la queja dada por el Sr. Lacazett, súbdito francés residente en Oviedo, de resultados de haberle obligado las autoridades á aceptar una cédula de vecindad. Enterada S. M. y considerando: 1.º que el art. 7.º del Real decreto de 17 de noviembre de 1852 sobre extranjería previene que ningun extranjero viaje por el Reino con pasaporte de la legacion ó consulado de su nacion, sino cuando ingrese en el territorio español ó cuando salga del mismo; 2.º que por el art. 17 del mismo decreto se declara que los extranjeros así avecindados como transeuntes tendrán derecho á transitar con libertad en el territorio de España, sujetándose á las reglas establecidas por las leyes para los súbditos españoles, así como á los reglamentos de policía; 3.º que por el Real decreto de 15 de febrero de 1854 se abolicieron los pasaportes para viajar por el interior, sustituyéndolos con las cédulas de vecindad; y 4.º que estas cédulas sirven para identificar las personas dentro y fuera de las poblaciones y tienen otros objetos relacionados con el órden público; se ha dignado resolver se diga á los Gobernadores de las provincias que

los extranjeros domiciliados en España están obligados á recibir dichos documentos. Al mismo tiempo, deseando S. M. que los términos en que están impresas las referidas cédulas no den lugar á dudas y reclamaciones ha tenido á bien mandar que V. S. prevenga lo conveniente para que al expedirlas á los extranjeros ya sean de pago ó ya gratis, segun corresponda, se borre la palabra *vecindad* y se escriba sobre ella *residencia*, poniendo al respaldo una nota en que se salve la enmienda y se exprese la nacionalidad del interesado y llevando registro especial de las que, despues de llenar las formalidades establecidas, se entiendan con estas circunstancias.—De R. O. etc.—Madrid 23 de junio de 1857.—Nocedal. (*Boletín Ofi. de Toledo*, de 27 de julio, núm. 102.)

R. O. de 19 noviembre de 1858.

Distribucion de cédulas. Que las firmen los interesados.

Dispúsose por esta Real orden, que se hiciese en el inmediato enero la distribucion de cédulas y «que al hacerse la distribucion se cuide de que el cabeza de familia firme su cédula y las de todas las personas que están bajo su dependencia, en el lugar al efecto señalado.»

Se adoptaron otras medidas para publicidad de lo dispuesto en las Reales órdenes anteriores, y concluye ordenando, que la Guardia civil y los empleados de vigilancia exijan á los viajeros la presentacion de las cédulas, advirtiéndolo á los que en los primeros dias carezcan de ellas y no infundan sospecha, la obligacion en que están de adquirirlas, y desplegando sucesivamente mayor rigor á medida que sean mas conocidas estas disposiciones hasta pasar de la imposicion de la multa que corresponda, á la detencion de los omisos que no acrediten su procedencia y ofrezcan las necesarias garantías.» (*CL. tomo 78, p. 141.*)

R. O. de 7 diciembre de 1858.

Cédulas para mujeres casadas: para hijos de familia procesados etc.

(Gob.) «He dado cuenta á la Reina (que Dios guarde) de la comunicacion de V. E. de 1.º del corriente en que al acusar el recibo de la R. O. de 19 de noviembre próximo pasado, propone la adopcion de varias medidas con el objeto de evitar los inconvenientes que ofrece la manera en que se distribuyen las cédulas de vecindad: Enterada S. M. se ha servido mandar que, sin perjuicio de lo que oportunamente se resuelva respecto de la nueva forma que convenga dar á los ex-

presados documentos, se observen desde luego las prescripciones siguientes:

1.ª En las cédulas de vecindad pertenecientes á las mujeres casadas, se hará constar el nombre de sus maridos.

2.ª En las correspondientes á personas que no sean cabezas de familia, se pondrá al respaldo la firma del interesado ó nota en que se exprese que no sabe escribir, sin que por esto deje de suscribirla el padre de familia en el lugar correspondiente.

3.ª V. E. y los Alcaldes de los pueblos podrán, segun lo dispuesto en la regla 7.ª de la R. O. circular de 1.º de abril de 1854, negar ó recoger en casos especiales las cédulas de vecindad, debiendo las autoridades locales, cuando lo verifiquen, dar cuenta inmediatamente á V. E. con exposicion de motivos para su aprobacion. Esta facultad trae consigo la de limitar á un tiempo dado las cédulas que se expidan á los que, teniendo malos antecedentes, justifiquen hallarse en la precision de obtener aquel documento. V. E. podrá además respaldar las cédulas de los que deban ser objeto de la atencion de las autoridades, y dar á las de los puntos á que se dirijan, los avisos convenientes, con cuyo fin deben llevarse registros especiales.

4.ª No se concederá cédula de vecindad á los que no cuenten con la anuencia de los padres ó cabezas de familia, con arreglo á lo mandado en la prevencion 6.ª de la citada circular de 1.º de abril de 1854.

Y 5.ª Tampoco se concederá á los que en virtud de disposicion ó sentencia de los Tribunales, deban residir en punto determinado hasta que legalmente vuelvan al ejercicio de sus derechos, ni á los refugiados políticos que solo pueden viajar con un pase especial, previa la correspondiente autorizacion, segun lo dispuesto en circular de 12 junio de este año.—De Real orden, etc.—Madrid 7 de diciembre de 1858.

R. O. de 14 setiembre de 1859.

Nuevas advertencias para la distribucion de cédulas: prohibicion de facilitarlas á los que expresa el art. 10.

(Gob.) «Habiéndose dispuesto que las cédulas de vecindad tengan en lo sucesivo la forma que V. S. observará por los ejemplares adjuntos, la Reina (Q. D. G.) se ha servido mandar:

1.º Que V. S. pida á la Administracion de la fábrica del sello el número de dichos documentos que considere necesario, haciéndolo con la anticipacion conveniente para que en enero de 1860, sin falta alguna, puedan distribuirse á domicilio en todos los pueblos de la provincia.

2.º Que para hacer este pedido tenga V. S. presente el vecindario de cada población según el censo últimamente formado, y los demás datos estadísticos que estime conveniente consultar.

3.º Que adopte V. S. las medidas oportunas para que los Alcaldes, inspectores ó comisarios de vigilancia formen, antes de proceder á la distribución, cuadernos cosidos por la margen izquierda, con separación de clases y numerando las cédulas, de suerte que cada una de ellas lleve el mismo número á continuación de las palabras *Talon número* que se hallan dos veces repetidas en los citados documentos; advirtiendo que cuando estos sean muchos, podrán distribuirse en varios cuadernos; pero la numeración habrá de ser siempre correlativa, de modo que si la última cédula del primer cuaderno tiene el número ciento la primera del segundo deberá llevar el ciento y uno.

4.º Que advierta V. S. á los Alcaldes y empleados de vigilancia, que al tiempo de entregar cada cédula á los vecinos, deben cortarla separadamente por la parte que dice en letras mayúsculas enlazadas *Vigilancia pública* por medio del renglón y formando ondulaciones. En la parte que queda adherida al cuaderno y en donde dice *Cédula á favor de*, escribirán el nombre del interesado.

5.º Que advierta asimismo á los expresados funcionarios, que una vez cortadas todas las hojas de cada cuaderno, han de entregar, bajo su responsabilidad y mediante recibo, en ese Gobierno de provincia, la parte ó fracción del mismo cuaderno que hubiere quedado, expresándose en la cubierta el pueblo, distrito ó inspección á que pertenezca, con el objeto de que se conserve cuidadosamente en el archivo.

6.º Que les prescriba igualmente que en la primera casilla del registro que debe llevarse con arreglo á la prevención 13 de la R. O. de 1.º de abril de 1854, ha de constar el número que tiene la cédula en el cuaderno talonario, sin alterar por ningún concepto esta numeración.

7.º Que cuando alguno de los que deban recibir cédulas de sirvientes, no fuere bastante conocido del que las expida, exija este la firma de un fiador, la cual deberá ponerse á la izquierda, de la del Alcalde, inspector ó comisario.

8.º Que recuerde V. S., por medio del *Boletín oficial*, cuanto está prevenido respecto de la expedición de cédulas de vecindad, responsabilidad de las personas que carezcan de ellas, y facultad en las autoridades

de negarlas, recogerlas, respaldarlas ó limitar su duración en los casos previstos en las disposiciones vigentes.

9.º Que al mismo tiempo haga V. S. entender á los encargados de distribuirlas, que la prohibición de facilitarlas á los que, en virtud de sentencia de los Tribunales, deben residir en un punto determinado, y á los refugiados políticos, abraza también á los desertores de los ejércitos extranjeros.

Y 10.º Que cuide V. S., bajo su responsabilidad, de que nadie viaje sin cédula, procediendo para conseguirlo, en la forma que se previno en la circular de este Ministerio de 19 de noviembre del año próximo pasado.—De Real orden, etc.—Madrid 14 de setiembre de 1859.»

R. O. de 17 julio de 1861.

No se den cédulas á los mozos sujetos á quintas.

Por esta Real orden á la vez que se declaró obligatorio á todos los mozos de 20 á 30 años ausentes de sus provincias el proveerse de certificado en que conste hallarse libres del servicio militar, expedido en la forma que allí se dice (V. QUINTAS) se establece lo siguiente:

Art. 11. Se prohíbe desde ahora á todas las autoridades del Reino expedir cédulas de vecindad á los mozos de 20 á 30 años que no acrediten previamente, por medio de las certificaciones requeridas en el art. 3.º, haber cubierto la obligación del servicio militar, ó estar libres de ella por cualquier concepto al tiempo de expedirse la cédula.

Art. 12. En todas las cédulas que en adelante se faciliten á los mozos de la edad indicada se expresará, antes de la firma del que las expida, haber presentado el portador dicha certificación de libertad.

Art. 13. Las cédulas que no tengan este requisito se considerarán nulas y de ningún valor ni efecto, trascurrido el plazo de dos meses que se señala en el art. 3.º (1).

Ley de presupuestos 29 junio de 1867.

Alteración de los precios de las cédulas....

Art. 15. Se autoriza al Gobierno de S. M. para que organice el servicio de la vigilancia pública de conformidad á las prescripciones de la ley vigente de orden público con el aumento de personal y material necesario, y creando para cubrir este gasto cédulas de vecindad en el número y á los precios que juzgue mas conveniente; de suerte que el producto de estas, prescindiendo del se-

(1) Véase también en QUINTAS la R. O. de 29 de noviembre de 1861.

ñalado en el presupuesto de ingresos de 1867-68, cubra el gasto total del mismo servicio.

R. O. de 8 julio de 1867.

No se obligue á sacar cédula de vecindad á los retirados.

(GUERRA.) «El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al Capitan general de Andalucía lo siguiente:—He dado cuenta á la Reina (que Dios guarde) del escrito que V. E. dirigió á este Ministerio con fecha 4 de junio próximo pasado, consultando si la clase de retirados debe ó no proveerse de la cédula de vecindad. Enterada S. M., y considerando que los referidos retirados con fuero militar no pueden viajar sin hallarse provistos del correspondiente pasaporte militar, y que no tienen dependencia alguna de la autoridad civil, se ha servido resolver que no se les obligue á que tengan cédula de vecindad.—De Real orden etc.» (*Bol. of. de la Coruña, núm. 23.*)

Resumen de las disposiciones de este artículo.

Cédulas para cabezas de familia; Real orden de 1.º de abril de 1854.

Cédulas para personas que no son cabezas de familia; Rs. Ords. de 9 de noviembre y 7 de diciembre de 1858, reglas 2.ª y 4.ª

Cédulas para penados etc.; R. O. de 7 de diciembre de 1858, regla 5.ª

Cédulas para refugiados políticos; Real orden de 7 de diciembre de 1858, regla 5.ª

Cédulas á mozos sujetos á quintas; R. O. de 17 de junio de 1861.

Cédulas á retirados; R. O. de 8 de julio de 1867.

Cédulas á desertores de los ejércitos extranjeros; R. O. de 14 de diciembre de 1859, art. 9.º

Cédulas para militares y marinos; R. O. de 23 de febrero 1854, y 15 y 22 de enero de 1857.

Cédulas para extranjeros transeuntes, etc.; R. D. de 15 de febrero de 1854, art. 4.º

Cédulas para extranjeros domiciliados; R. O. de 23 de junio de 1857.

Cédulas para mujeres casadas; Real orden de 7 de diciembre de 1858

A quiénes se puede negar ó recoger ó respaldar la cédula de vecindad; disposiciones 6.ª y 7.ª, R. O. de 1.º de

abril de 1854; prescripcion 3.ª, R. O. de 7 de diciembre de 1858.

Clases de cédulas; R. O. de 1.º de abril de 1854, regla 1.ª

Detencion de los que no tienen cédula; R. D. de 15 de febrero de 1854; art. 6.º, regla 10, R. O. de 1.º de abril de 1854.

Penas de los que viajan sin cédula; regla 10, R. O. de 1.º de abril de 1854; R. O. de 6 de enero de 1857; R. O. de 19 de noviembre de 1858.

CELADORES. Funcionarios subalternos encargados de la policía y buen orden en algun ramo de la Administracion.

Por una R. O. de 27 de enero de 1846 (*V. ALCALDES Y AYUNTAMIENTOS, t. 1.º pág. 348*) se declaró que la continuacion de Alcaldes de barrio, celadores y otros agentes de local denominacion que se conocian en algunas parroquias ó aldeas, no se oponia á la Ley municipal, y se dictaron reglas para su nombramiento. Sin embargo, como puede verse en *ALCALDE DE BARRIO (t. 1.º, p. 197)* otra R. O. de 21 de julio de 1849 declaró lo contrario.

Se han conocido además entre nosotros celadores del campo, de caminos, de montes, de policía, etc., pero todos estos funcionarios han sido sustituidos por otros de distinta denominacion como veremos en **MONTES: PERSONAL SUBALTERNO DE OBRAS PÚBLICAS: POLICÍA: VIGILANCIA.**

CELIBATO. El estado del hombre ó mujer que vive sin casarse. Los legisladores, los moralistas, los economistas, todos están de acuerdo en reprobar el celibato, considerándole unos como un manantial de corrupcion, y otros como contrario al progreso de la poblacion y á la prosperidad de los Estados.

Nuestras leyes tratando de fomentar los matrimonios, han venido concediendo á los recién casados ciertos privilegios, y entre ellos la exencion de quintas, y de las cargas y oficios concejiles; (*pragmática de 1623, ley 7, tit. II, libro X, Nco. Rec.*); pero estos privilegios ya no subsisten, y si bien no abogaremos por ellos, si diremos que, aparte si

se quiere de la razon económica, la razon moral es por sí sola bastante para que, mas ó menos directamente, se reprima el celibato voluntario, gérmen de infinitos vicios y de la corrupcion de las costumbres públicas.

¿Mas, cómo desentendernos de la razon económica? El matrimonio dice perfectamente un filósofo hace al hombre mas laborioso, y le une mas íntimamente á su país: el padre de familia es semejante á un árbol robusto que se agarra y arraiga en la tierra con muchas y profundas raices; al contrario que el celibato cuyo efecto es disolver y aniquilar el interés público, reconcentrar al hombre en sí mismo, hacerle egoista é inspirarle indiferencia para con los demás.—V. MATRIMONIO: POBLACION.

CEMENTERIOS Y CADÁVERES. Cementerio es un lugar consagrado, donde se entierran los cuerpos ó cadáveres de los fieles. La legislacion ha tenido que ocuparse de los cementerios considerándolos bajo el punto de vista de la higiene y salubridad pública, y por eso ha prohibido, por regla general, los enterramientos en las iglesias, y prescrito la construccion fuera de poblado de aquellos asilos de la muerte. Hé aquí las disposiciones que sobre tan importante asunto se han dictado.

Leyes de las Partidas.

La ley 4.^a, tit. XIII, Part. 1.^a dice que cementerio es «el lugar donde se sotierren los muertos e se tornan los cuerpos dellos en ceniza» y que los deben señalar los Obispos, etc.

La 11 del mismo titulo manda que en las iglesias no se entierren mas que ciertas y determinadas personas, como los Reyes y sus hijos, los Obispos y otras personas de virtud y santidad.

Leyes de la Nov. Rec.

Restablece la doctrina de la Iglesia en el uso y construccion de cementerios.

Ley 1.^a, tit. III, lib. I. «1. He tenido á bien resolver y mandar que se observen las disposiciones canónicas, de que soy protector, para el restablecimiento de la disciplina de la Iglesia, en el uso y construccion de cementerios, segun lo mandado en el Ritual romano, y en la ley 11, tit. XIII, Part. 1.^a,

cuya regla y excepciones quiero se sigan por ahora, con la prevencion de que las personas de virtud ó santidad, cuyos cadáveres podrán enterrarse en las iglesias segun la misma ley, hayan de ser aquellas por cuya muerte deban los Ordinarios eclesiásticos formar procesos de virtudes y milagros, ó depositar sus cadáveres conforme á las decisiones eclesiásticas; y los que podrán sepultarse, por haber escogido sepulturas, hayan de ser únicamente los que ya las tengan propias al tiempo de expedirse esta cédula.

2. Para que todo se ejecute con la prudencia y buen orden que deseo en beneficio de la salud pública de mis súbditos, decoro de los templos y consuelo de las familias cuyos individuos se hayan de enterrar en los cementerios, se pondrán de acuerdo con los prelados eclesiásticos los corregidores, como delegados míos y del Consejo en todo el distrito de sus partidos, procurando llevar por partes esta importante materia, comenzando por los lugares en que haya ó hubiere habido epidemias, ó estuviesen mas expuestos á ellas, siguiendo por los mas populosos y por las parroquias de mayores feligresías en que sean mas frecuentes los entierros y continuando despues por los demás.

3. Se harán los cementerios fuera de las poblaciones, siempre que no hubiere dificultad invencible ó grandes anchuras dentro de ellas, en sitios ventilados é inmediatos á las parroquias, y distantes de las casas de los vecinos; y se aprovecharán para capillas de los mismos cementerios las ermitas que existan fuera de los pueblos, como se ha empezado á practicar en algunos con buen suceso.

4. La construccion de los cementerios se ejecutará á la menor costa posible, bajo el plan ó diseño que harán formar los curas de acuerdo con el corregidor del partido, que cuidará de estimularlos, y expondrá al prelado su dictámen en los casos en que haya variedad ó contradiccion, para que se resuelva lo conveniente.

5. Con lo que resolviere ó resultase se procederá á las obras necesarias, costeándose de los caudales de fábrica de las iglesias, si los hubiere; y lo que faltare se prorateará entre los partícipes en diezmos, incluidas mis Reales tercias, Excusado y fondo pio de pobres, ayudando tambien los caudales públicos con mitad ó tercera parte del gasto, segun su estado, y con los terrenos en que se haya de construir el cementerio, si fueren concejiles ó de propios.

6. Los fiscales del Consejo se encargarán en esta parte de la mas exacta y arre-

glada ejecucion, y me darán cuenta de tiempo en tiempo de lo que se vaya adelantando, haciendo uso con los Prelados y corregidores del reglamento del cementerio del Real Sitio de San Ildefonso, hecho con acuerdo del Ordinario eclesiástico en lo que sea adaptable, para allanar dificultades y resolver las dudas que puedan ocurrir en otros pueblos.» (*Real cédula de 3 abril de 1787.*)

Derechos de rotura. Clases de sepulturas etc.

Reglamento del cementerio del Real sitio de San Ildefonso, de 9 de febrero de 1785. Es el que se cita en la regla 6.^a de la ley anterior, y se manda tener presente para allanar dificultades y resolver las dudas que pueden ocurrir en otros pueblos. Contiene, entre otras disposiciones de ningun interés general, las siguientes que creemos le tienen:

6.^a «No se hará novedad en el pago y cantidad de derechos que con motivo de entierros se han satisfecho hasta ahora.

7.^a A fin de no perjudicar á la parroquia en los derechos de rotura que en ella se han hecho hasta aquí, se señalarán en el cementerio otras tantas clases como habia en ella.

8.^a Para el depósito que ocurra de cadáveres por algun tiempo, se construirán seis nichos y quedarán reservados en el cementerio.

9.^a Unido á este se haga un hosario, donde se vayan depositando los huesos que resultarán en el discurso del tiempo; y cuando haya una porcion competente, se diga un oficio general por las almas de todos los fieles á quienes pertenecieren, y se les dé sepultura eclesiástica en lugar cómodo del mismo cementerio.» (*Nota 2.^a á la ley 1.^a, tit. III, lib. I, Nov. Recop. ya inserta*) (1).

Ley 2.^a, título y libro citados. (Suplemento á la Nov. Recop.) «...Se declara que no pueden las personas ó comunidades eclesiásticas, así regulares como seculares, sean de la clase que fueren, establecer para su uso cementerios distintos de los que se construyan en los respectivos pueblos para el enterramiento de los cadáveres de todo el vecindario, aunque se debe observar lo que se prescribe en el art. 5.^o de la de 28

de junio, y que en los pueblos que tienen ya cementerios provisionales debe hacerse en estos el enterramiento de todos los cadáveres, sin excepcion alguna de estado, condicion ó sexo, hasta que se establezcan los permanentes.» (*Circular de 17 octubre de 1805.*)

Por notas á las dos leyes anteriores del suplemento á la *Nov. Recop.*, se hace mérito de las siguientes Reales órdenes:

Prevencion y encargo á los eclesiásticos.

Real orden de 17 de mayo de 1804, circulada en 24 de id. En la catedral de Málaga se dió sepultura al cadáver de un prebendado, no obstante las reclamaciones de la Junta de Sanidad al dean de la misma iglesia para que lo hiciese fuera de poblado.... «Enterrado el Rey de ello, ha sido muy de su desagrado la conducta que ha tenido el dean resistiendo se sacase de la iglesia el referido cadáver; y para que no se repitan semejantes ejemplares, tan perjudiciales á la salud pública, me manda S. M. decir á V. S. I. que reprenda al expresado dean por este exceso; y ha resuelto al mismo tiempo que si los eclesiásticos seculares ó regulares se opusiesen á las providencias de la Sanidad, resistiendo el enterramiento de sus individuos ó cualquiera otra persona en los lugares destinados al intento, se proceda por la justicia á la extraccion de dichos cadáveres, guardando el decoro debido á los santos templos y lugares religiosos; lo que V. S. I. podrá comunicar á sus súbditos para evitar desavenencias y que llegue el caso preciso de usar de la fuerza» (1).

Alteracion de los derechos de entierro.

Circular del Consejo de 18 abril de 1806 dirigida á todos los Ordinarios eclesiásticos. «Con motivo de haber representado el Corregidor y Ayuntamiento de la villa de Sísante que concluido ya su cementerio, se hallaban con el tropiezo de que el cura párroco pretendia aumentar los derechos actuales por razon del mayor trabajo que suponía producirle la conduccion de cadáveres al cementerio y su enterramiento recargando un ducado por cada uno y nombrando un sepulturero con cinco reales por cada difunto, se acordó que todos los Ordinarios eclesiásticos

(1) Para los que gusten consultar textualmente este reglamento, advertimos que se halla en las páginas 11 y 12, t. 10 de la *Librería de jueces* de D. Manuel Silvestre Martínez. Las disposiciones 6.^a á la 9.^a arriba insertas están tomadas literalmente de la nota que se cita.

(1) Aunque se hace mérito de esta Real orden en la nota 3.^a á la ley 2.^a, tit. III, lib. I, suplemento á la *Nov. Recop.*, es mas en extracto. La parte textual la hemos tomado del *Prontuario de Reales resoluciones* de D. Severo Aguirre, t. 10, p. 50.

siésticos con presencia de lo representado informasen lo que se les ofreciera, teniendo en consideración las circunstancias locales de los cementerios, manifestando lo que juzgasen en razon de los sepultureros que se hubiesen de encargar de la conduccion y enterramiento en el modo decente y acomodado al uso observado hasta ahora, y expresando como debería quedar la asignación de derechos del cura, tenientes y demás ministros de la iglesia por la conduccion de los cadáveres al cementerio.» (*Nota 2 al tit. y libro cit. Suplem. á N. R.*)

Profundidad de sepulturas. Mondas.

Ley 5.^a, tit. XL, lib. VII. Contiene reglas sobre la policia de la salud pública en la corte; y la 2.^a dispuso que interin se construian los cementerios rurales, se cuidase de que los cadáveres se enterrasen con la profundidad conveniente, y que las mondas se hiciesen en las horas, estaciones y estado de la atmósfera menos expuestos á propagar los miasmas que despiden los cadáveres y sus despojos. (*R. C. 15 de noviembre de 1796.*)

Circular de 26 abril de 1804.

Se mandó activar la construccion de cementerios como estaba prevenido, para remediar los funestos efectos que estaba produciendo el enterramiento en las iglesias y por el respeto y veneracion debidos á la casa de Dios. (*Nota 4.^a á la ley 1.^a, tit. III, lib. I que queda inserta.*)

Circular de 28 de junio de 1804.

Reglas para la construccion de cementerios

Ley 1.^a, tit. III, lib. I Suplemento. Para activar en todo el Reino la construccion de cementerios fuera de los muros de los pueblos, con la eficacia que corresponde á su importancia se mandaron observar las reglas siguientes:

«1.^a Promoverán los corregidores estos utilísimos establecimientos en todo el distrito de sus partidos, poniéndose de acuerdo con los RR. Obispos, y procurando se realicen con preferencia en las ciudades ó villas capitales, pueblos en que haya ó hubiere habido epidemias, ó que estén mas expuestos á ellas y en aquellas parroquias en que se reconozca que es mayor la urgencia por el número de parroquianos, corto recinto de las iglesias y otras circunstancias.

2.^a Se deben construir los cementerios fuera de las poblaciones, y á la distancia conveniente de estas, en parajes bien ventilados y cuyo terreno por su calidad sea el mas á propósito para absorber los miasmas pútridos, y facilitar la pronta consuncion dis-

cacion de los cadáveres, evitando aun el mas remoto riesgo de filtracion ó comunicacion con las aguas potables del vecindario: y como el exámen de estas circunstancias pende de conocimientos científicos, deberá preceder un reconocimiento exacto del terreno que parezca proporcionado, practicado por profesor ó profesores de medicina acreditados.

3.^a Si resultase del informe de estos que concurren las calidades correspondientes en el terreno ó terrenos elegidos; se formarán por arquitecto aprobado donde le hubiere, y en defecto por el maestro de obras ó alarife de mas confianza del pueblo, el conveniente plano, y el cálculo prudencial de la cantidad á que podrá ascender la ejecucion, teniendo presente en primer lugar que los cementerios deberán estar cercados en la altura que sea suficiente para impedir que puedan entrar en ellos personas ó bestias capaces de causar alguna profanacion opuesta al honor con que deben ser tratados los cadáveres; pero descubiertos en la parte en que se han de hacer los enterramientos: y en segundo que su recinto debe ser de tal extension que no solo puedan enterrarse los cadáveres que resulten en un año comun, deducido de un quinquenio, y calculado de manera que colocándose dos cadáveres en cada sepultura pueda dárseles el tiempo de tres años para su consuncion ó desecacion, sino que quede además algun terreno sobrante para ocurrencias extraordinarias.

4.^a Se aprovecharán para capillas de los cementerios las ermitas situadas fuera de los pueblos, segun se previno en el capítulo 3.^o de la R. C. de 3 de abril de 1787. Si no se pudiera verificar ó porque no existan ó porque no lo permitan su situacion y demás circunstancias, convendrá se construyan á lo menos en los pueblos principales, y en que haya proporcion de fondos, é igualmente hosarios para el desahogo y limpieza de los cementerios, y habitaciones para los capellanes y sepultureros; pero ni deberán considerarse de necesidad estas obras, ni retardarse con ocasion de ellas la construccion de cementerios; pues en los pueblos cortos, donde no sea fácil proporcionar fondos para capilla, hosario y dichas habitaciones, ó donde no se tenga por oportuno establecerlas bastará por ahora que cercándose hasta la altura conveniente los cementerios, se coloque una cruz en medio de ellos.

5.^a Para que se guarde el honor debido á los sacerdotes, y para que conforme al espíritu de la Iglesia, no se confundan con los demás los cadáveres de los párvulos, se destinarán sepulturas privativas, ó unos pequeños

recintos separados para unos y otros: se podrán tambien construir sepulturas de distincion, ya para preservar en ellas los derechos que tengan adquiridos algunas personas ó familias en las iglesias parroquiales ó conventuales, ya para que se puedan conceder á otras que aspiren á este honor, pagando lo que se estime justo.

6.^a Se ejecutarán estas obras con los fondos señalados en el capítulo 5.^o de dicha Real cédula de 3 de abril de 1787, observando en ellas la mayor moderacion, y la forma que sea mas capaz de conciliar la economía en el coste con el decoro exterior aunque sencillo y sério, de estos religiosos establecimientos.

7.^a Luego que se hayan reconocido y elegido los terrenos, fijado el número de cementerios que se conceptúen necesarios en cada poblacion, y formado los planos y cálculos de su coste, se hará todo presente al señor Ministro comisionado con la debida instruccion para su aprobacion ó providencias que estime convenientes. Las acordará igualmente para que se realicen los fondos necesarios: para arbitrar algun medio extraordinario, en el caso que no sean suficientes los designados en la expresada Real cédula, ó en el de que, por no hallarse estos expeditos, convenga usar con calidad de reintegro de algunos otros de que se pueda disponer interinamente y en todos los demás casos y puntos en que por su gravedad, dudas que ocurran ó por otras circunstancias, deba intervenir su autoridad. El mismo señor Ministro estimará tambien si en alguna villa ó lugar de poblacion dispersa se podrá permitir que se establezca el cementerio dentro de su recinto comun, en paraje bastantemente distante de las habitaciones del vecindario, y en que concurren además las otras circunstancias que son necesarias para que se logren cumplidamente los objetos á que se dirigen estos importantes establecimientos.»

R. O. de 6 octubre de 1806.

Se dictó á instancias del Cardenal Arzobispo de Toledo, permitiendo que sean enterados en sus catedrales los MM. RR. Arzobispos y RR. Obispos.

Posteriores á la Nov. Recop.

R. D. de 19 abril, ó Real cédula de 19 mayo de 1818.

«...Mando que de aquí en adelante á todos los cadáveres de las religiosas profesas de los conventos de estos mis Reinos, sin ex-

ceptuar ninguno, se les dé sepultura eclesiástica dentro de su misma clausura.—Palacio á 19 de abril de 1818.» (*Inserto en Céd. de 19 mayo. CL. t. 5, p. 220.*)

R. O. de 22 noviembre de 1828.

Que se faciliten noticias sobre cementerios.

(GRAC. Y JUST.) «El Rey nuestro señor se ha servido tomar en consideracion las observaciones expuestas por V. I. en 30 de octubre de este año, que le ha trasmitido el Ministro del Consejo Real D. Rafael Paz y Fuertes con motivo de cierto expediente, de las cuales resultan los inconvenientes que se han presentado hasta ahora para el establecimiento de cementerios, segun lo prevenido en la Real cédula de 3 de abril de 1787 y otras soberanas resoluciones: el abandono con que muchos corregidores han procedido en el particular, pues que son mas los pueblos que carecen de cementerios generales contruidos con arreglo á las Reales determinaciones, que los en que se hallan establecidos, contentándose algunos con los provisionales que se han erigido, que en la mayor parte son mas expuestos y mas perjudiciales á la salud pública que la continuacion de los enterramientos en las iglesias, á cuyo abandono contribuyen los pretextos de falta de fondos con que costear las obras por las excusas de los partícipes de los diezmos, de los encargados de los caudales públicos, de los párrocos del territorio de las órdenes militares, y de varias personas, que disfrutando distintos fueros, causan entorpecimientos y contestaciones dilatorias. Enterado el Rey nuestro señor de todos los expresados particulares, y á fin de que desaparezcan unos obstáculos que tan dolorosos é irremediables perjuicios pueden ocasionar á sus pueblos de cuya felicidad es una de las principales partes la seguridad de la salud pública, al propio tiempo que se aumenta el decoro de los templos; se ha dignado mandar, conformándose con el dictámen de V. I. y de dicho Magistrado, que ninguna autoridad, corporacion ó persona se excuse á pretexto de empleado de propios y arbitrios, ó de pertenecer al territorio de las órdenes, ó á cualquiera dependencia no sujeto al Consejo Real, de dar al Ministro comisionado las noticias que exija, poner libros y documentos de manifiesto, franquear testimonios ó certificaciones y cumplir sus órdenes, sin necesidad de que se oficie á los jefes de quien dependen, para que así se evite la falta de ejecucion del establecimiento de cementerios de que tanto se necesita, y que se ha declarado de urgente necesidad para pre-

caver las epidemias á que en su defecto hay exposicion.—De órden del Rey nuestro señor lo comunico á V. I. para que el Consejo disponga su cumplimiento etc.—Palacio 22 de noviembre de 1828.» (*CL. t. 13, p. 378.*)

R. O. de 3 agosto de 1830.

Que se costeen de fondos de las fábricas para las que son los productos etc.

(Hac.) «Enterado el Rey nuestro señor del expediente instruido á consecuencia de las contestaciones que han mediado entre el M. R. Arzobispo de Granada y el Corregidor y Ayuntamiento de dicha capital sobre la construccion de un cementerio, á cuya obra se pretende que contribuyan los fondos de propios; S. M., conformándose con lo expuesto por V. I. en 16 de junio último, se ha servido mandar que se lleven á efecto las Rs. Ords. de 13 de enero y 17 de julio de 1807, y la de 20 de enero de 1808 que se citan en este expediente, en las que se designan los fondos de fábrica y Junta decimal como responsables á costear las obras de que se trata, á que se agrega además el que se utiliza el ramo de fabrica de iglesias de aquella ciudad de lo que se contribuye por el terreno de las sepulturas á razon de 75 rs. que percibe por cada cuerpo de aquella vasta poblacion.—De Real órden etc.—Madrid 8 de agosto de 1830.» (*CL. t. 17, p. 256.*)

R. O. de 20 febrero de 1831.

Lo mismo que la anterior.

(Hac.) «Enterado el Rey nuestro señor de lo expuesto por V. I. en 14 de diciembre último acerca de las contestaciones que han mediado entre el Corregidor de Antequera que ha dispuesto la construccion de un cementerio, y la Junta de propios que ha contribuido con 10,000 rs. de los fondos del ramo, se ha servido S. M. resolver que no han debido gravarse los propios de Antequera con unos gastos que no les corresponde conforme á lo mandado por R. O. de 8 de agosto último sobre la construccion del cementerio de Granada para que se lleven á efecto las de 13 de enero y 17 de julio de 1808, en las que se designan los fondos de fábrica y Junta decimal como responsables á costear estas obras; y es la soberana voluntad de S. M. que á la Junta de propios de Antequera se le exija por el proceder arbitrario de sus individuos en la entrega de la citada suma la responsabilidad en que ha incurrido.—De Real órden etc.—Madrid 20 de febrero de 1831.» (*CL. t. 17, p. 256.*)

R. O. de 13 noviembre de 1831.

Cementerios para súbditos ingleses.

(ESTADO.) Habiendo dado cuenta al Rey, nuestro señor de una reclamacion del representante británico, pidiendo un terreno en la Coruña para cementerio de los súbditos de su nacion; que se señalen tambien otros en todos los puntos de residencia de los cónsules ingleses, y que se le manifieste la voluntad de S. M. en cuanto á cercar el que su Gobierno ha comprado en esta corte con igual objeto; se ha servido S. M. resolver, conformándose con el dictámen de su Consejo de Sres. Ministros, que no hay inconveniente en conceder dichos terrenos, pudiéndolos adquirir los ingleses de los particulares, y cercarlos, con tal que se observen las formalidades prevenidas, á saber; que se cierren con tapia, sin iglesia, capilla ni otra señal de templo, ni culto público ni privado, y que bajo la misma condicion podrán hacer uso del terreno que tienen comprado en esta corte, poniéndose sobre todo, de acuerdo con las autoridades locales, á las que se deberán hacer las prevenciones oportunas.—De Real órden etc.—Madrid 13 de noviembre de 1831.» (*CL. t. 16, p. 319.*)

R. O. de 14 noviembre de 1832.

Renueva la disposicion de la de 8 de agosto de 1830.

(Hac.) «He dado cuenta á la Reina nuestra señora de lo que V. I. ha expuesto en 22 de setiembre último acerca de la Real órden que se le comunicó con fecha 8 de julio de este año, en que se inserta la que se dirigió al intendente de Salamanca, relativa á que en la construccion de cementerios se observe en cuanto á los fondos obligados á ella lo dispuesto en el art. 5.º de la ley 1.ª, tit. III, lib. 1 de la Nov. Recop., haciendo presente V. I. que la expresada Real órden se halla en contradiccion con las de 8 de agosto de 1830 y 20 de febrero de 1831, por las cuales se relevaron á los fondos de propios de contribuir al coste de semejantes obras; y enterada S. M. ha tenido á bien resolver se diga á V. I. que por las citadas Reales órdenes de 8 de agosto de 1830 y 20 de febrero de 1831, se mandó que se lleven á efecto las de 13 de enero y 17 de julio de 1807, y la de 20 de enero de 1808, por las que se hacen responsables los fondos de fábrica y junta decimal para costear las obras de cementerios, sobre lo cual nada en contrario se ha prevenido por la mencionada Real órden de 8 de julio último, respecto á que en ella se dice únicamente que en el art. 5.º de la referida ley se designan cuáles son los fon-

dos que deben contribuir para la construcción de cementerios, que aunque es cierto que en el mismo art. 5.º se señalan en último caso los fondos públicos, también lo es que debe entenderse según su estado, como allí se previene; y que siendo este el de no poder atender á sus mas precisas obligaciones, como repetidamente lo ha expuesto V. I., no ha tenido ni tiene por objeto la Real orden de 8 de julio el de hacer prevalecer el enunciado art. 5.º en la parte que trata de los fondos públicos, sino en punto á los términos en que debe procederse cuando se trata de fondos para el objeto de que se hace mencion, mediante á que no se habia tenido presente el acordarse el repartimiento vecinal de treinta mil reales, cuya aprobacion solicitó el intendente; y por consiguiente que quedan vigentes las Rs. Ords. de 8 de agosto de 1830 y 20 de febrero de 1831 relativas á la construcción de cementerios de Granada y Antequera.—De Real orden etc.—Madrid 14 de noviembre de 1832.» (*Coleccion legislativa t. 17, p. 255.*)

R. O. de 2 junio de 1833.

Reencarga la construcción de cementerios.

(Fom.) «Con motivo de haber recurrido al Ministerio de mi cargo los diputados de la parroquia de Santa Eulalia en la ciudad de Segovia, solicitando se llevasen á puro y debido efecto las repetidas Reales órdenes expedidas en diferentes épocas, que prohiben dar sepultura á los cadáveres en los templos, y manifestando que las referidas Reales órdenes no se cumplian en aquella ciudad, á pesar de haberse construido en ella un cementerio; se sirvió S. M. mandar que su Consejo Real consultase sobre dicha solicitud, extendiéndose á manifestar el estado en que se hallaba la construcción de cementerios en todas las provincias del Reino; cuántos eran los pueblos que los tenían y los que carecian de ellos, y si en algunos de aquellos que los tenían se toleraba todavía ó se disimulaba que los cadáveres se enterrasen en las iglesias; qué providencias convendría adoptar para cortar este abuso donde existiese, y qué disposiciones debian darse para llevar adelante, en todos los pueblos donde fuese practicable, la construcción de cementerios, venciendo las dificultades que la hubiesen entorpecido con detrimento de la salud pública é inobservancia de las leyes.

Con fecha de 30 de abril último evacuó el Consejo la consulta que se le habia pedido; y conformándose S. M. con su dictámen en todo lo sustancial; se ha servido resolver lo siguiente:

1.º Los intendentes de las provincias, valiéndose de los Corregidores, Alcaldes mayores y Ayuntamientos, dispondrán que en todas las poblaciones en que se hallen construidos cementerios se proceda desde luego al enterramiento de los cadáveres en ellos, sin condescendencia ni disimulo.

2.º Los mismos intendentes, y las autoridades municipales por conducto de aquellos, darán cuenta en el término de un mes al Ministerio de mi cargo de los pueblos en que haya cementerios construidos, y de su estado.

3.º Respecto á los pueblos donde no los haya los mismos intendentes, obrando de acuerdo con los prelados eclesiásticos, cuidarán de que se dé principio desde luego á su construcción á costa de los fondos de las fábricas de las iglesias, que son los primeros obligados á ello.

4.º Donde se haya alegado ó se alegue no existir fondos suficientes para ello en las fábricas, se deberá acreditar esta falta ó insuficiencia en debida forma, no bastando la mera enunciativa de ella.

5.º En defecto de fondos de fábricas se echará mano de los propios en aquellos pueblos que á juicio de la Direccion del ramo puedan soportar este gravámen; y si fuese preciso en algunos pueblos destinar algun terreno concejil ó de propios para el local del cementerio, podrá hacerse, previa la aprobacion de S. M. á propuesta de la Direccion de propios.

6.º Donde no haya fondos de fábricas ni de propios con que concurrir á este gasto, las autoridades locales, por conducto de las de sus respectivas provincias, propondrán los medios que conceptúen mas adecuados para atender á tan importante objeto.

7.º S. M. espera del celo de los prelados y autoridades eclesiásticas, que en union con las civiles, cooperarán eficazmente á la mas pronta y perfecta ejecucion de unas obras en que se interesan la salud pública, el respeto y decoro de los templos, y la observancia de las leyes y órdenes expedidas sobre la materia.

Lo que comunico á V. S. de Real orden para su inteligencia y cumplimiento en la parte que le toca, y con la misma fecha lo traslado al R. Obispo de esa diócesis y á la Direccion general de propios.—Dios etc.—Madrid 2 de junio de 1833.» (*CL. t. 18, página 131.*)

R. D. de 30 noviembre de 1833.

Es la instruccion para los subdelegados de Fomento inserta en GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

CIÓN DE LAS PROVINCIAS. El art. 30 es el relativo á cementerios, y en el (véase) se encarga la práctica de la buena policía en los mismos.

R. O. de 13 febrero de 1834.

(FOM.) Se reencarga el cumplimiento de lo mandado en 2 de junio de 1833 sobre construcción de cementerios.

R. O. de 30 octubre de 1835.

Cementerios para las religiosas.

(INTERIOR.) Se mandó llevar á efecto lo prevenido en la Real cédula de 10 de mayo de 1818, bajo las reglas siguientes:

1.^a Que hayan de sepultarse los cadáveres de las religiosas precisamente en los atrios ó huertos de los monasterios ó conventos, señalándose en ellos para este destino un paraje, con prohibición de que pueda hacerse en los coros bajos y en las iglesias.

2.^a Que los Gobernadores civiles reconozcan los huertos y atrios asegurándose de su ventilación y demás requisitos necesarios antes de prestar su aprobación para la inhumación en ellos.

3.^a Que los cadáveres de las religiosas que fallecieron en monasterios ó conventos en que no haya huerto ó atrio ventilado donde sepultarlos, se conduzcan á los cementerios públicos, en los cuales se demarcará el lugar que pareciese mas á propósito.

4.^a Que los Gobernadores civiles, asociados de un regidor y del síndico procurador general, reconozcan todos los monasterios y conventos de religiosas de las capitales para asegurarse de la existencia en ellos de huertos ó lugares proporcionados para el enterramiento, prohibiendo desde luego que este se verifique en otra parte.

Y 5.^a Que en los pueblos subalternos de la capital den comision los Gobernadores civiles al sugeto que tuvieren por oportuno, para que en union con un regidor y el síndico procurador general ejecute la visita con el objeto indicado.—De Real orden etc.—Madrid 30 de octubre de 1835.» (CL. t. 20 pág. 510.)

R. O. de 27 marzo de 1845.

Contenia disposiciones sobre el modo de hacer las exhumaciones y traslaciones de cadáveres, pero fueron expresamente derogadas por la R. O. de 19 de marzo de 1848 que á la vez ha dictado otras.

R. O. de 21 febrero de 1846.

Fijaba los honorarios de los facultativos por el reconocimiento de cadáveres en las exhumaciones, pero ha sido derogada esta

Real orden por la de 19 marzo de 1848 que dice como sigue:

R. O. de 19 marzo de 1848.

Exhumaciones y traslaciones de cadáveres.

(Gob.) «El Jefe político de Madrid, en 16 de noviembre último, propuso como conveniente la modificación de algunas de las disposiciones contenidas en las Rs. Ords. de 27 de marzo de 1845 y 21 de febrero de 1846, relativas á la exhumación y traslación de cadáveres de un cementerio á otro, ó panteon particular; y tomando S. M. la Reina en consideración los respetables motivos que, por lo general, mueven á solicitar semejantes traslaciones con objeto de conciliar aquellos con las precauciones que al mismo tiempo exige la conservación de la salud pública, se dignó oír en el particular el dictámen del Consejo de Sanidad del Reino, y de conformidad con lo que este ha expuesto, se ha servido dictar las reglas siguientes:

1.^a No podrá verificarse la exhumación y traslación de cadáveres sin licencia expresa del Jefe político de la provincia donde se hallen sepultados.

2.^a No se permitirá la traslación de cadáveres mas que á cementerio ó panteon particular.

3.^a Se prohíbe la exhumación y traslación de cadáveres antes de haber trascurrido dos años desde la inhumación.

4.^a Para verificar la exhumación dentro del tiempo de dos á cinco años, despues de sepultado un cadáver, ha de preceder á la licencia del Jefe político: 1.^o el permiso de la autoridad eclesiástica, y 2.^o un reconocimiento facultativo, por el cual conste que la traslación no puede perjudicar á la salud pública.

5.^a Este reconocimiento será practicado por dos profesores de la ciencia de curar, y su nombramiento corresponde al Jefe político.

6.^a Los profesores nombrados han de ser precisamente doctores en medicina ó individuos de la Academia de medicina y cirugía de la provincia, cuando los cadáveres que hayan de exhumarse estén en el cementerio de la capital donde aquella tenga su residencia. Si la exhumación se hubiere de hacer en pueblos donde no haya doctores, el Jefe político nombrará los que juzgue mas convenientes.

7.^a Las certificaciones que han de dar los profesores nombrados, serán individuales: en caso de discordia, se nombrará un tercero.

8.^a Despues de cinco años de estar se-

pultado un cadáver, el Jefe político puede ordenar su exhumación y traslación de la manera y con los requisitos que estime mas oportunos, disponiendo que, en todos los casos, se haga con la decencia y respeto debidos, dando conocimiento al de la provincia donde el cadáver haya de trasladarse, y obteniendo previamente el asentimiento de la autoridad eclesiástica.

9.^a Los cadáveres embalsamados podrán exhumarse en cualquier tiempo, y sin necesidad del reconocimiento facultativo que establece la regla 4.^a

10. Las solicitudes para trasladar á España cadáveres que hayan sido sepultados en país extranjero, ó vice-versa, se dirigirán á S. M. por conducto de este Ministerio, acreditándose en ellas previamente la circunstancia de hallarse embalsamados, ó la de que, haciendo mas de dos años que fueron sepultados, se encuentran ya en estado de completa desecación.

11. Todos los gastos que ocasionen los actos de exhumación serán de cuenta de los interesados.

12. Los honorarios que ha de devengar cada profesor por el acto del reconocimiento y certificación correspondiente, serán de 160 rs. vn. en Madrid, y 120 en los demás pueblos del Reino. El Jefe político elevará esta suma á lo que estime oportuno, en razon á la distancia que hubieren de recorrer los profesores nombrados, cuando el reconocimiento se haga en pueblo diferente de aquel en que estén domiciliados.

13. Se reducirán los honorarios á la mitad de lo establecido en la regla anterior, siempre que se hiciere á un mismo tiempo el reconocimiento de dos ó mas cadáveres.

14. Quedan derogadas todas las disposiciones contenidas en las Rs. Ords. de 27 de marzo de 1845 y 21 de febrero de 1846.—De la de S. M. etc.—Madrid 19 de marzo de 1848.» (CL. t. 43, p. 306.)

R. O. de 12 mayo de 1849.

Panteones particulares. Obispos, etc.

(Gov.) «De varios expedientes instruidos en el Ministerio de mi cargo, resulta que en algunos puntos existe todavía notable propension, así á inhumar los cadáveres, como á trasladar sus restos á cementerios ó panteones particulares situados dentro del poblado, y con el objeto de prevenir los abusos á que semejante tendencia pudiera dar lugar, con detrimento de la salud pública, la Reina (Q. D. G.), oído el parecer del Consejo de Sanidad, y conforme con su dictámen, se ha servido resolver:

1.^o Que continúe indefinida la prohibición de enterrar los cadáveres, y de trasladar y colocar sus restos en las iglesias, panteones ó cementerios que estuvieren dentro de poblado.

2.^o Que el permiso concedido por la regla 2.^a de la R. O. circular de 19 de marzo de 1848 para trasladar cadáveres á cementerio ó panteon particular, se entiendan, si estos se hallan situados fuera de las poblaciones.

Y 3.^o Que solo queden vigentes las excepciones que en favor de los MM. RR. Arzobispos, RR. Obispos y religiosas establecieron las Rs. Ords. de 6 de octubre de 1806, 13 de febrero de 1807 y 30 de octubre de 1835. De la de S. M. etc.—Madrid 12 de mayo de 1849. (CL. t. 47, p. 45.)

R. O. de 20 setiembre de 1849.

Prohíbe las exequias de cuerpo presente.

(Gov.) Enterada la Reina (Q. D. G.) de una exposicion que, en 30 de enero último, dirigió al Ministerio de Gracia y Justicia el R. Obispo de Mallorca, haciendo presente la conveniencia de que en aquella diócesis se establezca la práctica de conducir los cadáveres á las iglesias por el tiempo necesario para celebrar las exequias de cuerpo presente, conforme al rito católico, se dignó S. M. oír el parecer del Consejo de Sanidad, y conformándose con lo que esta corporacion le ha expuesto en 8 de agosto próximo, se ha servido desestimar la indicada solicitud, mandando que V. S., bajo su responsabilidad, no consienta en esa provincia una práctica que puede considerarse abusiva, supuesto que se halla reconocido que no impide á los beneficios de las exequias la ausencia del cadáver en cuyo auxilio se celebren, siendo así que su presencia en los templos puede, en el mayor número de casos, ser perjudicial á la salud pública. S. M. quiere tambien que de esta regla general queden exceptuados los M. RR. Arzobispos y RR. Obispos, los cuales gozan del privilegio de poder ser enterrados en sus respectivas catedrales.—De Real orden, etc.—Madrid 20 de setiembre de 1849. (CL. t. 48, p. 52.)

Es notable la contradicción que ha sufrido la disposicion contenida en la Real orden anterior como puede verse por la de 30 de noviembre del mismo año, la de 28 de agosto de 1855, 11 de abril de 1856 y 13 de febrero de 1857.

R. O. de 30 noviembre de 1849.

Suspende la ejecucion de la anterior.

(GOB.) «Vista la comunicacion de V. S., fecha 24 del que espira, en que manifiesta la oposicion que por los curas párrocos de la ciudad de Santiago, apoyada por el M. R. Arzobispo de la diócesis, se ha hecho al cumplimiento de la R. O. circular de 20 setiembre último, en que se prohibió la conduccion á los templos de los cadáveres para la celebracion de las exequias de cuerpo presente, la Reina (Q. D. G.) se ha servido resolver que suspenda V. S. la ejecucion de la Real orden citada hasta que se le comuniquen nuevas instrucciones, á consecuencia de un informe que en 24 de este mismo mes se ha pedido á las Secciones de Gracia y Justicia y de Gobernacion del Consejo Real, por efecto de otras consultas hechas sobre el mismo asunto, para lo cual se le pasa tambien la citada comunicacion de V. S., y copias que la acompañan.—De Real orden, etc.—Madrid 30 de noviembre de 1849.» (CL. t. 48, página 533.)

R. O. de 28 agosto de 1850.

Sobre construccion de cementerios en Madrid.

(GOB.) Visto el expediente instruido á instancia de los hermanos de la archicofradía del Santísimo Sacramento de la parroquia de San Lorenzo de esta corte, en solicitud de permiso para construir un cementerio particular en un terreno que los mismos han adquirido en las afueras de la puerta de Atocha, al lado del Norte y colindante con los cementerios de San Nicolás de Bari y San Sebastian; oido el parecer del Consejo de Sanidad, y de conformidad con lo que ha expuesto en 2 del actual, S. M. la Reina ha tenido á bien desestimar la solicitud indicada, mandando que para lo sucesivo se observen en la concesion de semejantes permisos las reglas siguientes, propuestas por el Ayuntamiento de esta capital, en su informe de 12 de febrero último, y aprobadas tambien por el indicado Consejo.

1.^a No se expedirán en lo sucesivo licencias, ni se consentirá el establecimiento de ningun campo-santo en sitio que, por la parte del Norte, no esté situado á 1,500 varas de las puertas ó límites de la poblacion de Madrid.

2.^a Tampoco se expedirán en el cuartel del Sur para los que hayan de construirse á la parte acá del rio Manzanares.

3.^a Designado ya un punto en la parte alta y baja para la formacion de los camposantos, los que se construyan en lo sucesivo

habrán de verificarlo en las inmediaciones de los mismos.

4.^a Reuniendo las circunstancias expresadas los conocidos por el de San Isidro y San Justo, esta parte y sus inmediaciones quedan designadas para los que hayan de construirse en la parte baja ó del Sur.

5.^a y última. Hallándose dentro de las reglas establecidas en la 1.^a del campo-santo que se está construyendo en el camino de Amaniel, perteneciente á la Sacramental de San Martin y San Ildefonso, este sitio y los inmediatos quedan designados para los que hayan de establecerse en la parte Norte.

Por último, es la voluntad de S. M. que si la ya referida sacramental insiste en su deseo de construir el cementerio, proceda á la adquisicion de un nuevo terreno en la zona establecida en las reglas anteriores, pudiendo entonces solicitar nuevo permiso para la ejecucion.

Lo que traslado á V. E. de Real orden comunicada por el expresado Sr. Ministro, para los efectos correspondientes. Dios, etc.—Madrid 28 de agosto de 1850.—El subsecretario, Juan de la Cruz Osés.—Señor vicepresidente del Consejo de Sanidad.

R. O. de 30 enero de 1851.

Exhumaciones: traslaciones de cadáveres en el interior de los cementerios. Mondas de huesos.

(GOB.) «Habiendo consultado el Gobernador de la provincia de Málaga acerca de las reglas que hayan de observarse para verificar dentro de los cementerios exhumacion y traslacion de cadáveres de un punto á otro, así como tambien para las mondas de los huesos; oido el parecer del Consejo de Sanidad y conformándose con lo que ha expuesto en 3 de agosto último, ha tenido á bien S. M. la Reina dictar las disposiciones siguientes:

1.^a Se prohiben las mondas ó limpieas generales de los cementerios.

2.^a No podrán ser trasladados los cadáveres de un punto á otro, dentro de un mismo cementerio, antes de trascurridos cinco años de la inhumacion, sino en el tiempo y con los requisitos que determina la R. O. de 19 de marzo de 1848 para la exhumacion desde un punto cualquiera de cementerio general á cementerio ó panteon particular.

3.^a Por consecuencia, las limpieas de los cementerios serán parciales, y limitadas exclusivamente á los cadáveres que lleven cinco años desde su enterramiento.

4.^a Los Gobernadores de provincia podrán modificar el tiempo prescrito en la disposicion anterior, respecto de aquellos cementerios cuya capacidad no sea proporcio-

na al número de defunciones anuales de la respectiva población.

5.^a La traslación de huesos enteramente secos á los hosarios puede hacerse en cualquier tiempo.

6.^a No es necesaria la intervencion de facultativos para la ejecucion de estas operaciones en los casos que determinan las disposiciones 3.^a, 4.^a y 5.^a

7.^a y última. Para todo lo que sea relativo á la traslación de cadáveres desde un punto cualquiera á cementerio ó panteon particular, se cumplirá estrictamente lo establecido en Rs. Ords. de 19 de marzo de 1848 y 12 de mayo de 1849, salvas las modificaciones que se establezcan á consecuencia del informe pedido por el Consejo de Sanidad en 9 del actual sobre esta materia.—De R. O. etc.—Madrid 30 de enero de 1851. (CL. t. 52, página 130.)

R. O. de 31 agosto de 1853.

Aclara la de 30 enero de 1851.

(GOB.) Extracto.—Se resuelve una nueva consulta del Gobernador de Málaga sobre la inteligencia de las reglas de la R. O. de 30 de enero de 1851, declarando que cuando la reducida capacidad de los cementerios fuerza á los Gobernadores á usar de la facultad que les concede la regla 4.^a «puede hacerse la exhumacion de los cadáveres sin la intervencion de facultativos; pero en tales casos habrán de exhumarse necesariamente aquellos cadáveres que lleven mas tiempo sepultados, y parcialmente, esto es uno por uno, á medida que haya necesidad de ello para dar sepultura á otros»; pero los «Gobernadores, en tales casos, deberán sin embargo adoptar aquellas disposiciones que juzguen mas convenientes para evitar los peligros que las exhumaciones anticipadas ocasionan, ya sean impidiendo que se formen nichos en los cementerios muy reducidos, ya haciendo que todos los cadáveres se sepulten en la tierra, ya haciendo que se aumente la extension de los cementerios, ó en fin, procurando la construccion de otros mas capaces y con todas las condiciones debidas.» Y á la vez se manifestaba la extrañeza de que una capital de la importancia de Málaga no tuviese mas que un cementerio y esté sin las condiciones higiénicas necesarias, por lo que se encargó al Gobernador que llamase la atencion de la municipalidad para que se ocupase de la construccion de otro nuevo cementerio. (CL. t. 59, p. 356.)

R. O. de 12 diciembre de 1853.

Se exija para el entierro de todo cadáver certificación de facultativo.

(GOB.) «En vista de las diferentes quejas producidas una con motivo de darse sepultura á diferentes cadáveres sin el correspondiente certificado facultativo, segun se previene en R. O. circular de 1.^o de diciembre de 1837... (1) la Reina (Q. D. G.) se ha servido resolver prevenga á V. S.... que disponga lo conveniente para que en la provincia de su mando se dé el mas puntual y exacto cumplimiento á lo dispuesto en la referida soberana resolucion.—Dios etc.—Madrid 12 de diciembre de 1853. (CL. t. 60, pág. 442.)

R. O. de 18 abril de 1855.

Exacciones en las parroquias por traslaciones de cadáveres.

(GRAC. Y JUST.) «La frecuencia con que ya por voluntad de los testadores, ya por disposicion de las familias respectivas, son conducidos los cadáveres para su inhumacion á puntos distintos y á veces lejanos del en que ocurriera el fallecimiento, y los cuantiosos gastos á que dichas traslaciones han dado lugar, por vía de derechos á favor de las iglesias parroquiales cuyo territorio cruzan, han llamado la atencion de S. M. la Reina (Q. D. G.) é impulsado su Real ánimo á disponer que desde luego cesen semejantes exacciones, sean cualesquiera su nombre y aplicacion, excepto siempre el caso en que al finado se hicieran exequias en los pueblos del tránsito.—De Real orden etc.—Madrid 18 de abril de 1855.» (CL. t. 64, p. 428.)

Ley de 29 abril de 1855.

Enterramiento de los que mueren fuera de la comunión católica.

(GRAC. Y JUST.) «ART. 1.^o En todas las poblaciones, donde la necesidad lo exija á juicio del Gobierno, se permitirá construir cementerios adonde sean conducidos, depositados y sepultados, con el respeto debido á los restos humanos, los cadáveres de los que mueran fuera de la comunión católica.

ART. 2.^o En aquellas poblaciones que no tengan los cementerios especiales á que se

(1) Se halla inserta en la pág. 650 del tomo 2.^o Dice que en las partidas de defunciones se exprese «la enfermedad que causó el fallecimiento, segun la certificación del facultativo, sin la cual no podrá darse sepultura al cadáver, debiendo dicho documento extenderse gratis y en papel comun.

refiere el artículo anterior, los Alcaldes y Ayuntamientos cuidarán, bajo su mas estrecha responsabilidad, de que los cadáveres de los que mueran fuera de la comunión católica sean enterrados con el decoro debido á los restos humanos, tomando las precauciones convenientes para evitar toda profanación.—Por tanto mandamos etc.—Aranjuez á 29 abril de 1855.» (CL. t. 64, p. 456.)

R. O. de 28 agosto de 1855.

Prohibe de nuevo los funerales de cuerpo presente.

(GOB.) «Nada mas perjudicial á la salud pública que la exposicion de los cadáveres en las iglesias. Cuantos de la higiene pública se han ocupado, todos han prescrito como una de las medidas sanitarias mas importantes la prohibicion de conducir los cadáveres á los templos; la descomposicion subsiguiente á la muerte produce miasmas nocivos, que aspiradas por los fieles concurrentes, son origen de las enfermedades mas graves. La exactitud de estas observaciones ha sido reconocida en todas épocas.—El Sr. D. Carlos IV en 1801 expidió un decreto prohibiendo los funerales de cuerpo presente; y si bien las preocupaciones y el orgullo que se arrastra mas allá del sepulcro la relegó al olvido, un esfuerzo de demostracion de las buenas medidas sanitarias la reprodujo en 20 de setiembre de 1849.

Por no haberse exigido con firmeza la responsabilidad que en esta última Real disposicion se imponia á los Gobernadores que consintiesen una práctica, que bien puede calificarse de abusiva, volvieron los funerales de cuerpo presente; y si en todo tiempo dañosa la expresada práctica, el perjuicio se eleva al grado máximo considerado el estado sanitario del pais y la influencia que en el ánimo opera la vista de los cadáveres. Absurdo, inconcebible es que cuando se prescriben las fumigaciones y todos los desinfectantes para purificar la atmósfera de la habitacion donde ha ocurrido un caso de epidemia, se permita conducir los cadáveres de los epidemizados á los templos, lugar en general de escasa ventilacion, y mas si se compara con el número de personas que en ellos se reúnen.

Penetrada S. M. la Reina (Q. D. G.) de la verdad de las consideraciones expuestas y de que las exequias de cuerpo presente son una manifiesta infraccion de los Reales mandatos, se ha servido prohibir el expresado acto, haciendo responsables á los Gobernadores de las provincias de la menor relajacion que en el particular consientan.—De Real ór-

den etc.—Madrid 28 de agosto de 1855.» (CL. t. 65, p. 741)

R. O. de 16 abril de 1856.

Sobre depósitos de cadáveres en capillas.

(GOB.) «.....Se ha servido mandar S. M. que se permita el depósito de cadáveres por solo el tiempo que la ciencia aconseja y que es compatible con la salud pública, en capillas independientes de las iglesias, en épocas normales ó en que no asija al país alguna epidemia, siempre que las capillas se hallen enteramente separadas de los templos, que no estén habilitadas para el culto, ni por otro motivo tengan entrada en ellas los fieles, y que se observen con todo rigor las precauciones higiénicas de ventilacion y purificacion.....» (CL. t. 68. p. 57.)

R. O. de 13 febrero de 1857.

Funerales de cuerpo presente.

(GRAC. Y JUST.) «Enterada la Reina (Q. D. G.) de las exposiciones que la han dirigido varios prelados, para que se permitan las exequias de cuerpo presente segun la práctica religiosa sancionada por la Iglesia desde los primeros siglos; oido el Consejo de Sanidad, conformándose con el parecer de las secciones de Gracia y Justicia y Gobernacion del Consejo Real, y de acuerdo con el Ministro de Gracia y Justicia, se ha dignado S. M. mandar que la R. O. de 20 de setiembre de 1849 prohibiendo las exequias de cuerpo presente, solo tenga valor y efecto cuando haya epidemias declaradas por la autoridad, y cuando los facultativos, al dar el parte de la defuncion, expresen que el cadáver no se encuentra en estado de ser conducido á la iglesia para que se le recen de cuerpo presente las preces que marca el Ritual Romano, cuya circunstancia no omitirán en ningun caso en que proceda, bajo su responsabilidad.—De Real órden, etc.—Madrid 13 de febrero de 1857.» (CL. t. 71, pag. 165.)

R. O. de 22 abril de 1857.

No se lean discursos, etc., en los entierros.

(GOB.) Se comunica á los Gobernadores civiles una Real órden expedida por Gracia y Justicia..... en la cual se previene á los Obispos que adopten las disposiciones convenientes á fin de que en los cementerios comprendidos en el término de sus diócesis, al hacerse los entierros se digan solo las preces y oraciones piadosamente establecidas por la Iglesia, y se evite con el mayor celo que se pronuncien y lean discursos ó composiciones poéticas, se hagan demostraciones de

ningun género contrarias á la disciplina eclesiástica, ó se ejecute acto alguno de carácter profano, ajeno del respeto que se debe á los lugares consagrados por la religion católica, impetrando para ello en caso necesario, el cumplimiento y eficaz apoyo de las autoridades civiles.

R. O. de 19 junio de 1857.

Sobre traslaciones de cadáveres.

(GOB.) «Deseando la Reina (Q. D. G.) evitar de una vez los conflictos que ocasiona la diversa inteligencia dada por los Gobernadores de provincia á la R. O. de 19 de marzo de 1848 en lo relativo á traslaciones de cadáveres, se ha servido resolver que en lo sucesivo se dirijan á S. M., por conducto de este Ministerio, las solicitudes para trasladar cadáveres de una á otra provincia, reservándose tan solo á los Gobernadores la facultad de acordar dichas traslaciones cuando hayan de verificarse dentro de la provincia de su respectivo mando.—De Real orden, etc.—Madrid 19 de junio de 1857. (CL. t. 72, p. 480.)

R. O. de 16 julio de 1857.

(GOB.) Previene á los Gobernadores que no den curso á solicitudes sobre autorizaciones para enterrar en las iglesias ó extramuros de los pueblos, y que se esté á lo terminantemente prescrito en la R. O. de 12 de mayo de 1849. (CL. t. 73, p. 64.)

R. O. de 26 noviembre de 1857.

(GOB.) «Se ha enterado la Reina (Q. D. G.) con profundo sentimiento de que, á pesar de las reiteradas disposiciones dictadas hasta el día, aun hay en España 2.655 pueblos que carecen de cementerio, lo cual es tanto mas de extrañar en este país eminentemente católico, en cuanto á que esos venerandos asilos, consagrados por la religion, son á la vez garantía segura de pública salubridad. Y deseando S. M. poner remedio á esta falta, se ha servido mandar con fecha de hoy, que adoptando V. S. dentro de sus facultades las medidas mas eficaces, procure que en el menor término posible se construya, cuando menos, un cercado fuera de cada poblacion con destino á cementerio, previa aprobacion por quien corresponda del presupuesto y obras que al efecto se propongan por los respectivos Ayuntamientos.»

R. O. de 13 julio de 1860.

(HAC.) Declara que las adquisiciones de terrenos en los cementerios para construir panteones ó sepulturas de familia no están

sujetas al derecho de hipotecas. (CL. t. 84, pag. 77.)

R. O. de 18 marzo de 1861.

A quien corresponde conservar las llaves de los cementerios.

(GOB.) «En el expediente relativo á si las llaves del cementerio de Bestabal provincia de Granada, deben estar depositadas en poder del Alcalde ó del cura párroco de la expresada villa, las Secciones de Estado y Gracia y Justicia, de Gobernacion y Fomento del Consejo de Estado con fecha 5 del mes último han informado lo siguiente:

Excmo. Sr.: Estas Secciones han examinado el expediente instruido con motivo de las contestaciones que han mediado entre el M. R. Arzobispo y el Gobernador de Granada sobre si corresponde al cura párroco ó al Alcalde de Bestabal conservar las llaves del cementerio de la misma villa. Siempre es sensible todo conflicto entre las autoridades, pero sube esto de punto cuando no existe ninguna razon fundada para ello. Esto es cabalmente lo que sucede en el asunto que ha motivado el expediente sobre que han de emitir su informe las secciones. Desde los primeros tiempos del Cristianismo han sido considerados los cementerios como lugares sagrados y por consiguiente han tenido los privilegios y prerogativas de tales. Eran consagrados, por los Obispos con las ceremonias que para el efecto establece el Ritual Romano, del mismo modo que se hacia para consagrar las iglesias. Y á tal punto llegó la paridad, que se estableció la necesidad de la reconciliacion de estos asilos de muerte, si por acaso eran profanados. De aquí procedieron los privilegios de que han estado en posesion los cementerios de servir de lugares de asilo, de estar exentos del comercio humano é incapacitados para ser objeto de lucro ó negociacion, de no poderse juzgar en ellos pleitos de seglares y otras prerogativas semejantes. Y no podia suceder otra cosa, porque los fieles mientras viven, pertenecen á la sociedad civil; desde que mueren, sus restos pertenecen á la Iglesia que les recibe y conduce al cementerio con las plegarias y oraciones de los difuntos, y les dá sepultura bendecida como parte de la comunión de la Iglesia en que vivieron. De aquí ha procedido la parte tan principal que la autoridad eclesiástica ha tenido siempre en todo cuanto se ha referido á cementerios, que se han considerado como una parte integrante de las iglesias parroquiales. Ambos derechos el canónico y el civil están conformes en esto. Y para que resulte mas si cabe el carácter

de lugar sagrado que los cementerios tienen, considérense con sus cruces y signos de la religion repartidos por todas partes, con la concurrencia de fieles que á ellos asiste, con el recogimiento que el lugar inspira, con el sentimiento religioso que por todas partes se difunde, con las oraciones que por el eterno descanso de los muertos se escuchan.

Si se examina la direccion y administracion de los cementerios, se verá que por la ley 4.^a, tít. XIII, Part. 4.^a correspondia á los Obispos señalarlos, fijar su extension y amojonarlos. D. Carlos III por cédula de 3 de abril de 1787, que es la ley 1.^a, tít. III de la Nov. Recop., restableciendo la disciplina de la Iglesia en el uso y construccion de cementerios segun el Ritual Romano, dispuso que esta se verificase á la menor costa posible, bajo el plan ó diseño que harian formar los curas de acuerdo con el Corregidor del partido, costeándose los gastos de los caudales de fábricas de las iglesias si los hubiere, prorrateándose lo que faltase entre los partícipes en diezmos, ayudando tambien los caudales públicos.

Por la R. O. de 2 de junio de 1833, encargándose la construccion de cementerios en todos los pueblos se ordenó que donde se alegase y probase que las fábricas de las iglesias no tienen fondos para construirlos, se eche mano de los de propios donde puedan soportar esta gravámen; y si tampoco estos existen, los Ayuntamientos propongan los medios que consideren mas adecuados para tan importante objeto. Se ve, pues, con que especial cuidado han tratado las leyes de poner de manifiesto la intervencion que se ha concedido á las autoridades eclesiásticas y á las iglesias en este particular, ya concediéndolas el tomar la iniciativa, ya presentando los fondos municipales como obligados en primer término á costear estas obras. Es consecuencia natural y lógica de esto que la custodia de los cementerios esté cometida á las autoridades eclesiásticas, cuya primera intervencion siempre ha sido reconocida por las leyes, y no debe ser obstáculo para ello el que un cementerio haya sido construido con fondos municipales, porque no por eso se habrá cambiado la esencia del lugar, puesto que desde el momento en que haya sido consagrado pertenece á los bienes de la Iglesia inalienables. Muchas iglesias hay construidas con fondos de los pueblos y de que son patronos los Ayuntamientos; sin embargo, á ninguno se le ocurrió la pretension de tener en su poder las llaves que corresponden al párroco. Téngase presente además que en el caso particular á que se refiere el

expediente, ni siquiera se han tomado el Alcalde de Bestabal y Gobernador de la provincia la molestia de acreditar que el cementerio de este pueblo ha sido construido á expensas de los bienes de propios.

Si se consultan los antecedentes que sobre asuntos análogos existen en el Consejo, se verá que cuantas consultas se han evacuado lo han sido en este sentido. En un expediente promovido con motivo de cuestiones suscitadas entre el Ayuntamiento de Palencia, que amplió el cementerio con fondos de propios y construyó una capilla, y el Obispo de la diócesis, sobre exaccion de los derechos de sepultura, las Secciones de Gracia y Justicia y Gobernacion informaron en 23 de octubre de 1847 que no habia podido nunca ponerse en duda el carácter eclesiástico del cementerio de Palencia, pues la circunstancia de que una parte habia sido costeada por fondos municipales, ni alteraba su naturaleza, ni era mas que el cumplimiento de la ley 1.^a, tít. III, lib. I de la Nov. Rec., debiendo considerarse como cosa religiosa sujeta á la autoridad del Ordinario. Formóse despues un reglamento de mútuo acuerdo entre ambas autoridades, y habiendo sido oídas para su aprobacion las mencionadas Secciones, en 24 de junio de 1849 informaron que debia aprobarse; y partiendo del principio que los cementerios deben considerarse como dependencias eclesiásticas, se estableció en el art. 24 del expresado reglamento que el capellan nombrado por el Ayuntamiento, aprobado por el Obispo, y revocable por este *ad nutum* tendria la llave del cementerio, entregándosela de dia al sepulturero. En el expediente instruido con motivo de la denegacion de sepultura eclesiástica al cadáver de Martín de Laserna, en Villaverde de Trucios, provincia de Santander, dispuso el Gobernador que el párroco entregase la llave del cementerio al Alcalde: y oídas las mismas Secciones de Gracia y Justicia y Gobernacion, al informar sobre el fondo de la cuestion, lo hicieron tambien manifestando que se obligase al Alcalde á que inmediatamente devolviese dicha llave al párroco que era á quien correspondia tenerla.

No por esto se priva á la Administracion de la justa intervencion que debe tener en los cementerios en todo lo que se refiere á su policia y régimen en cuanto tiene relacion con la salud. Desde las leyes de Partida hasta las disposiciones mas recientes, se ha reconocido esta intervencion para que por nadie sea disputada. Las autoridades administrativas pueden y deben examinar los cementerios para ver si se cumple con las

prescripciones legales acerca de las sepulturas; celar cuidadosamente para que se construyan donde no las haya, ejerciendo una policía severa no solo en que para su construcción se guarden las reglas al efecto establecidas, sino tambien en los depósitos de cadáveres, entierros y exhumaciones.

Es cuanto se refiere á cementerios *mixti-fori*; pero cada una de las autoridades que intervienen en el asunto tiene terminantemente deslindadas sus atribuciones de modo que puedan ejercerlas sin lastimarse. Siempre que las autoridades locales tengan que entrar en los cementerios para cumplir con su cometido pueden hacerlo, y el párroco ó quien en su nombre tenga la llave deberá franquearla inmediatamente, de modo que el servicio público pueda llenarse sin retraso y sin obstáculo alguno.

Opinan las Secciones puede servirse V. E. consultar á S. M. que al cura párroco y no al Alcalde de Bestabal corresponde tener las llaves del cementerio de dicha villa, con la obligacion de facilitarlas á dicho Alcalde ó á cualquier delegado en su nombre siempre que las pidan para el ejercicio de su cometido.

Y habiéndose servido resolver S. M., de acuerdo con el preinserto informe, de su Real orden lo comunico á V. S. como regla general para lo sucesivo.—Madrid 18 de marzo de 1861.» (CL. t. 85, p. 654.)

R. O. de 29 octubre de 1861.

Jurisdiccion en materia de enterramientos de cadáveres.

(Gob.) «He dado cuenta á S. M. la Reina (Q. D. G.) del expediente instruido en este Ministerio á consecuencia del enterramiento verificado en el cementerio de la Escala, provincia de Gerona, del cadáver de Rafael Puig, del cual resulta:

1.º Que el expresado Puig, segun comunicacion del Ilmo. Sr. Obispo de Gerona, que obra en dicho expediente, se resistió y negó obstinadamente á recibir los Santos Sacramentos hasta su postrer instante, muriendo por lo mismo impenitente y fuera del gremio de nuestra Santa Madre la Iglesia.

2.º Que privado el cadáver de Puig de la sepultura eclesiástica por dicha autoridad, como consecuencia natural de su impenitencia, y dispuesta la inhumacion en lugar contiguo al cementerio, si ya no habia alguno destinado para los desgraciados que mueren de tal manera, el Alcalde de la Escala se resistió á cumplir las órdenes del prelado, comunicadas verbalmente y en forma solemne por el párroco de dicho pueblo, el cual, re-

vestido de los ornamentos sacerdotales, y puesto en la puerta del sagrado recinto de los muertos, protestó contra este desafuero, retirándose al fin luego que adquirió la persuasion de la inutilidad de sus exhortaciones.

3.º La sepultura verificada violentamente dentro del mismo por orden y con presencia del Alcalde.

4.º El entredicho fulminado por la autoridad eclesiástica contra el citado cementerio, en el cual desde entonces no se dá sepultura eclesiástica al cadáver de ningun católico.

5.º La exhumacion de dicho cadáver, reclamada por el Ilmo. Sr. Obispo de Gerona para proceder á la reconciliacion de aquel lugar sagrado:

Y 6.º La resolucion negativa del Gobernador á la peticion del citado prelado, y la destitucion del Alcalde de la Escala acordada por aquella autoridad.

Enterada S. M. de cuantos extremos abraza este expediente, y considerando que la censurable conducta observada por dicho Alcalde ha sido causa de un conflicto con las autoridades eclesiásticas á que nunca debió darse lugar: considerando asimismo que el Concordato vigente celebrado en 1851 con la Santa Sede dice en su art. 4.º refiriéndose á asuntos eclesiásticos: «*Que en todas las demás cosas que pertenecen al derecho y ejercicios de la autoridad eclesiástica, los Obispos y el clero dependiente de ellos gozarán de la plena libertad que establecen los sagrados cánones:*» considerando que el objeto de la R. O. de 19 de marzo de 1848, relativa á la exhumacion y traslacion de cadáveres de un cementerio á otro etc., fué impedir las frecuentes é inmotivadas exhumaciones y traslacion de cadáveres, y de ninguna manera el de poner obstáculos á la accion de la justicia eclesiástica ni civil; y considerando, por último, que con las censuras que han recaído en dicho cementerio se irrogan infinitos perjuicios á los vecinos de la Escala, que tienen que llevar sus muertos al del pueblo de Ampurias, viéndose así separados de las sagradas cenizas de sus padres, hermanos é hijos, ha tenido por conveniente resolver, despues de haber oido al Consejo de Estado, que se deje expedita la jurisdiccion del diocesano en el caso de que se trata y en todos los demás que ocurran de igual naturaleza, llevando á efecto la exhumacion del cadáver de Rafael Puig, previas las precauciones higiénicas que requiera el estado del difunto; y aprobar la conducta seguida por V. S. y la destitucion del citado Alcalde de la Escala.—De orden de

S. M. etc.—Madrid 29 de octubre de 1861.»
(*CL. t. 86, p. 411.*)

R. O. de 19 abril de 1862.

La autoridad en materia de cementerios.

(ULTRAMAR.) «Vista la carta de V. E.... en que da cuenta del expediente promovido por el Ayuntamiento de esa capital (La Habana) para construir por su cuenta un cementerio general en la misma, y pide se declinan las atribuciones que á las autoridades civil y eclesiástica correspondan en la construcción, reparación y entretimiento de los cementerios; la Reina (Q. D. G.), de conformidad con lo manifestado por el Consejo de Estado en pleno, se ha servido resolver:

1.^o Que el cementerio en cuestion se lleve á efecto por el Rdo. Obispo con los fondos que dice tener reunidos para ello, sin tocar á los públicos y sin gravamen alguno del vecindario, todo sin perjuicio de que la autoridad civil tenga la intervencion que le corresponde, así en la eleccion del local como en lo demás que toque á la salubridad pública.

2.^o Que la administracion de los productos del cementerio corresponde á la autoridad eclesiástica sin perjuicio de las atribuciones de V. E. como Vice-Real Patrono en la fijacion y revision de tarifas, á fin de que estas sean siempre beneficiosas al vecindario, si los productos, como parece natural, fuesen superiores á la conservacion de las fábricas y demás gastos.

Y 3.^o Que para uniformar las disposiciones que deban regir en los sucesivos en materia de construcción de cementerios, administracion de sus fondos, y cuantos particulares puedan ser á ellos referentes, forme V. E. expediente en que oiga á las corporaciones y oficinas que crea conveniente, al M. Rdo. Arzobispo de Cuba y Rdo. Obispo de esa ciudad, y al Consejo de Administracion, remitiéndole en seguida con su informe para la oportuna resolucion.—De Real orden lo digo etc.—Madrid 19 de abril de 1862.
(*CL. t. 87, p. 350.*)

R. O. de 19 setiembre de 1865.

Reencargando el cumplimiento de la de 11 de abril de 1866, sobre su depósito.

(GOB.) Habiendo hecho presente á S. M. la Reina (Q. D. G.) que si la celebracion de exequias de cuerpo presente es en ciertas circunstancias nociva á la salud pública, la práctica establecida de depositar los cadáveres en las iglesias ofrece mayores peligros y es mas perniciosa que aquella, por lo que la Administracion ha adoptado frecuentemente

medidas para prever y conjurar los males que dicha práctica pudiera producir, se ha servido S. M. disponer que se observen con todo rigor las prescripciones contenidas en la R. O. de 11 de abril de 1856.—De la de S. M. etc.—Madrid 19 de setiembre de 1865.
—Posada Herrera. (*Gac. 29 setiembre.*)

R. O. de 2 julio de 1867.

Resolviendo un expediente sobre instalacion de carros fúnebres en Santander para conducir los cadáveres al cementerio, en que hay oposicion del R. Obispo. —A la autoridad civil corresponde reglamentar sobre esta materia en lo que se refiere al orden público, á la salubridad y bienestar de los pueblos; á la eclesiástica la observancia de los ritos y ceremonias establecidas en sufragio de los difuntos.

(GOB.) *Beneficencia y Sanidad.*—*Negociado 4.^o*—El Sr. Ministro de la Gobernacion dice con esta fecha al Gobernador de la provincia de Santander lo que sigue:

«Remitido á informe del Consejo de Estado el expediente relativo á la instalacion en esa capital de los carros fúnebres para conducir los cadáveres al cementerio, aquella Corporacion ha consultado lo siguiente:

«Excmo. Sr.: Estas Secciones han examinado el adjunto expediente instruido á instancia de D. Galo Gautier sobre que se le ampare en el derecho que tiene adquirido como contratista en Santander del servicio de carruajes fúnebres para conducir los cadáveres al cementerio.

Aunque en el expediente mencionado hay algunos extremos relacionados con el motivo que da origen á la queja, este es sin embargo en realidad el único sometido á consulta, y sobre el cual por lo tanto ha de recaer el dictámen de las Secciones. Puede reducirse á breves palabras. Creyendo el Ayuntamiento de la citada ciudad que era de reconocida utilidad y conveniencia la innovacion que proyectaba hacia tiempo, relativa á la conduccion de los cadáveres al cementerio, valiéndose de carros fúnebres, como de antiguo se practica en otras capitales del Reino, trató de ponerla en planta, si bien no le fué posible al pronto realizarlo por haber presentado graves dificultades las condiciones especiales de la poblacion que, falta de carruajes de servicio público y de caballerías destinadas al arrastre y trasporte, no suministraban para el caso los elementos que abundan en otros pueblos. Con motivo de este aplazamiento el R. Obispo antecesor del actual, en comunicacion de 6 de marzo de 1858, dirigida al Alcalde, le decia, entre otras cosas, con tono de reconvencion: «El mejor medio de excusar aun á los tales en lo posible un espectáculo tan poco agradable co-

»mo de suyo necesario y aun saludable para todos (aludía al hecho de llevar en una sola vez dos ó mas cadáveres) sería sin duda el transporte en coche ó carruaje mortuario, é cual se usa ya en poblaciones numerosas, como Madrid, Valencia, Valladolid, Pamplona y otras. Lo que en ellas se obtiene sin gasto notable y aun con ganancia, podría igualmente lograrse en Santander; y he sentido que no se llevase adelante el pensamiento que de hacerlo así se tuvo antes de ahora, según me informaron. »Donde no faltan hábiles especuladores para otras empresas lucrativas, creo que con un poco más de celo y diligencia se facilitaría el mismo buen resultado que en otras partes.»

En vista de tal excitación redobló el Ayuntamiento sus gestiones; pero tampoco le fué dado por mucho tiempo hacerlas productivas. Variaron, por fin, las circunstancias; y contando con probabilidades de éxito para la contratación del servicio, pudo entablar el expediente de creación de carros fúnebres, formando el reglamento y bases de la contratación que en 9 de febrero de 1865 aprobó el Gobernador de la provincia. Con más de un mes de antelación anuncióse la subasta en el *Boletín oficial* y en los periódicos locales, y celebrada que fué se adjudicó el remate á D. Galo Gautier; pero desde el día en que debía plantearse el servicio surgió la oposición del R. Obispo actual, y como consecuencia la de los cuatro sacerdotes que tiene encargados en economato de la cura de almas en la parroquia de la ciudad. Considerando perjudicados sus derechos con tal oposición, alzóse en queja el reclamante, apoyado por el favorable parecer del Gobernador de la provincia; y pedido informe al citado R. Obispo, este lo evacuó en 30 de enero último manifestando, entre otras cosas, que para la innovación de que se trata no se contó en manera alguna con su autoridad como era necesario, pues solo tuvo noticia de ella por medio de un cartel impreso en que se fijaban los precios de conducción; que su antecesor solo había hecho una indicación, obligado tal vez por el conflicto y aprieto en que le imponía la Alcaldía al exponerle el estado de alarma y espanto en que se hallaba la población; y por último que para el acto religioso de la conducción de cadáveres la Iglesia tiene determinados los ritos contenidos en el Ritual romano, en los cuales ni al mismo Obispo es permitido hacer alteraciones, como cosa reservada á Su Santidad y á la sagrada Congregación correspondiente.

Por la ligera reseña que acaba de trazarse se ve que la cuestión debatida en el expediente parece de índole grave por dimanar de un conflicto ocurrido entre la potestad civil y la eclesiástica, cuyos límites y jurisdicción, si bien fáciles de deslindar en teoría científica, son difíciles de señalar en la esfera práctica sin menoscabo de ninguna de ambas. Pero examinada detenidamente, se viene á conocer que no existe verdadero conflicto; pues aun resolviendo á favor del reclamante ni se concede á la autoridad civil más atribuciones que las que tiene, ni á la eclesiástica se la despoja de las que le corresponden. Es indudable que á la primera toca reglamentar respecto de la materia sobre que versa la actual controversia cuanto sea procedente, ya para la conservación del orden público, ya para la salubridad y bienestar de los pueblos; á la vez que compete á la segunda velar por la observancia de los ritos y ceremonias de la Religión establecidos en sufragio de los difuntos, y para edificación y consuelo de los vivos. En tal supuesto, y concretando los principios al caso práctico, el Ayuntamiento de Santander, representante de sus administrados, pudo pensar en la innovación de los carros mortuarios por creer que así satisfacía una necesidad relacionada con los intereses cuya tutela le está encomendada, siempre que al llevar á cabo su pensamiento no tratase de alterar ó suprimir ritos religiosos propios de la conducción y entierro de los cadáveres. Del mismo modo el R. Obispo usa de un derecho y cumple con un deber tratando de conservar los mencionados ritos ordenados por la Iglesia, si bien no por eso puede disminuir las atribuciones que en la materia propia de su competencia incumben á la autoridad municipal. Ahora bien: ¿se puede decir que con la instalación de los carros fúnebres se menoscaba la integridad de las atribuciones de la autoridad eclesiástica? Seguramente no; pues del mismo modo que llevándose en hombros los cadáveres se pueden cumplir las ceremonias religiosas, conduciéndolos en los carros mencionados.

Si por escasez de eclesiásticos ó por otro motivo cualquiera no es posible acompañar á todos con la cruz parroquial, y observar en los entierros las solemnidades religiosas establecidas en el Ritual romano, deberá atenderse á llenar dicha necesidad por el medio que se crea oportuno; pero no combatiendo una reforma que sin lastimar la piedad solamente se concreta á la materialidad del modo con que se verifica la conducción. Hubiera sido de desear que entre el Ayunta-

miento de Santander y el actual R. Obispo de la diócesis hubiera mediado ántes de la reforma un entero acuerdo; pero tambien merece tenerse en cuenta que si bien la municipalidad faltó á un deber de consideracion no avisando á dicho prelado la ejecucion de un proyecto, en este hallaba tácitamente aprobado y hasta recomendado por el antecesor en la Sede, al paso que es sensible que despues de tantos anuncios oficiales que llevaban consigo una completa publicidad aguardase dicho prelado á interponer su veto cuando ya se habian creado respetables derechos particulares al amparo de una subasta legal. Pero tal falta de acuerdo prévio se concreta únicamente al R. Obispo de hoy, no á la autoridad eclesiástica en general, pues con el consentimiento del predecesor se puso en práctica la innovacion, y por lo tanto no resulta de lo acordado por el Ayuntamiento ningún vicio que anule lo hecho aunque sí procede advertir á la corporacion que hubiera sido de desear que para obrar con la debida armonia participara oportunamente al prelado que el servicio de que se trata se hallaba en vias de ejecucion.

En apoyo de este juicio, y por consiguiente en pro de la peticion de D. Galo Gautier, existe tambien una de las leyes vigentes del Reino. La 1.^a, tit. III, lib. I de la Novísima Recopilacion, dictada para el establecimiento de la disciplina de la Iglesia en el uso y construccion de cementerios segun el Ritual romano establece en su párrafo sexto, que se haga uso del reglamento del cementerio del Real Sitio de San Ildefonso, hecho con acuerdo del Ordinario eclesiástico, en lo que sea adaptable para allanar dificultades y resolver dudas que puedan ocurrir en otros pueblos; y el art. 2.^o de dicho reglamento, inserto en la nota 2.^a de la misma ley, dice entre otras cosas que «se tendrán en las parroquias unas andas con una caja cubierta y puesta sobre ruedas que puedan llevar una ó dos caballerías, y se enviarán á la casa mortuoria siempre que se pidan.» Por consiguiente, la instalacion de los coches mortuorios no es una innovacion peligrosa ni ilegal; de donde se deduce que carece de fundamento la oposicion suscitada por el prelado de Santander en lo que estrictamente se refiere al modo de la conduccion.

Si la ley así lo ha consentido, la práctica constante observada en Madrid y otras varias capitales del Reino justifica igualmente lo hecho por el Ayuntamiento de Santander. Sabido es que en dichos puntos se encuentra establecida la forma de conduccion de cadáveres por medio de carruajes mortuorios, y

que no ya particulares, sino corporaciones religiosas, tienen á su cargo semejante servicio, del que se valen las familias mas piadosas, con excepcion de las que carecen de todo medio de fortuna. Pues bien: si la Autoridad eclesiástica representada en diversos prelados ha autorizado por su parte la creacion de dichos carruajes en gran número de poblaciones del Reino, parece injusto que á otra del mismo se niegue en particular la reforma, estableciendo una desigualdad irritante; y además, si esto sucediera por considerarse justa la negativa, tal resolucion implicaría una censura de los prelados que para aquella dieron su consentimiento, y se inferiría en rigor lógico que tambien procedia hacer desaparecer los carros fúnebres en las ciudades donde fueron establecidos.

Si, pues, la reforma planteada por el Ayuntamiento de Santander no menoscaba el ejercicio espiritual de la Autoridad eclesiástica; si lejos de ser ilegal está fundada en una ley; si tiene en su apoyo la costumbre observada en otras capitales con el consentimiento de RR. Obispos y M. RR. Arzobispos; y si en otro concepto muy atendible, al amparo de dicha reforma se han creado intereses particulares respetables en la personalidad del rematante del servicio, quien ha tenido que hacer esfuerzos y desembolsos que no deben ser ilusorios; de todo se deduce que procede resolver esta controversia á favor de la municipalidad, y por lo tanto en pro de los derechos adquiridos por el exponente.

Resumiendo lo expuesto, las Secciones opinan:

1.^o Que se debe sostener á D. Galo Gautier en el goce de los derechos que como contratista del servicio de carruajes fúnebres haya adquirido con la adjudicacion del remate, haciendo que cese la oposicion suscitada por el R. Obispo de Santander.

2.^o Que procede advertir al Ayuntamiento que hubiera sido de desear que para obrar con la debida armonia participara oportunamente al prelado que el servicio de que se trata se hallaba en vias de ejecucion.»

Y habiéndose dignado S. M. resolver de conformidad con el preinserto dictámen; de Real orden lo digo á V. S. para los efectos correspondientes.»

Lo que de la propia Real orden, comunicada por el expresado señor Ministro, se publica en la *Gaceta* para que sirva de jurisprudencia en casos análogos.—Madrid 2 de julio de 1867.—El Subsecretario, Juan Valero y Soto. (*Gac.* 18 julio.)

R. O. de 6 agosto de 1867.

Recomendando la exacta observancia de las disposiciones vigentes sobre inhumaciones.

(Gob.) «A pesar de que está terminantemente prohibido por la R. O. de 16 de julio de 1857, confirmando lo ya dicho en disposiciones anteriores, y especialmente en 12 de mayo de 1849, la inhumacion ó traslacion de cadáveres á iglesias, panteones ó cementerios que se hallen dentro de poblado, es lo cierto que desacatando estas Reales disposiciones, hay autoridades que siguen ordenando inhumaciones en cementerios de hospitales que se hallan dentro de las poblaciones. Con objeto, pues, de que tenga cumplimiento lo dispuesto por S. M., y de que las medidas de salubridad y salvacion general se respeten con beneficio de los mismos pueblos, la Reina (Q. D. G.) recomienda á V. S. muy especialmente la perfecta observancia de lo mandado, por ser este asunto de la única y exclusiva competencia de las autoridades civiles, y al que la alta Administracion consagra un especialísimo interés.—De Real orden etc.—Madrid 6 de agosto de 1867.—Gonzalez Brabo.» (*Gaceta 18 agosto.*)

R. O. de 19 noviembre de 1867.

Recordando á los Gobernadores la puntual observancia de las disposiciones sobre inhumacion de cadáveres.

(Gob.) «En 6 de agosto último se dijo á V. S. por este Ministerio lo siguiente:

«A pesar de que está terminantemente prohibido por la R. O. de 16 de julio de 1857, confirmando lo ya dicho en disposiciones anteriores y especialmente en 12 de mayo de 1849, la inhumacion ó traslacion de cadáveres á iglesias, panteones ó cementerios que se hallan dentro de poblado, es lo cierto que, desacatando estas Reales disposiciones, hay autoridades que siguen ordenando inhumaciones en cementerios de hospitales que se hallan dentro de las poblaciones. Con objeto, pues, de que tenga cumplimiento lo dispuesto por S. M. y de que las medidas de salubridad y salvacion general se respeten con beneficio de los mismos pueblos, la Reina (Q. D. G.) recomienda á V. S. muy especialmente la perfecta observancia de lo mandado; por ser este asunto de la única y exclusiva competencia de las autoridades civiles y al que la alta Administracion consagra un especialísimo interés.»

Lo que de orden de S. M. reproduzco á V. S., encargándole dé cuenta de cuantos cementerios se hallen en esa provincia dentro de poblado, y de las medidas que haya

Tomo III.

adoptado ó adopte para corregir este estado de cosas.—Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 19 de noviembre de 1867.—Gonzalez Brabo. (*Gaceta 22 noviembre.*)

Jurisprudencia y parte doctrinal.

Cuestiones sobre cementerios; enterramientos; denegacion de sepultura eclesiástica.

Diremos luego por conclusion de este artículo nuestro parecer sobre lo que es objeto del mismo, ó sea algo sobre construccion de cementerios, sobre policia en los mismos, enterramientos, derechos de sepultura etc. Ante todo parécenos conveniente insertar importantes dictámenes del Consejo de Estado y resoluciones dictadas en cuestiones entre la autoridad civil y la eclesiástica, por lo mucho que ilustran este asunto.

I.

Cuestion entre el Ayuntamiento de Palencia y el Prelado de la diócesis.—Reglamento de su cementerio.

El Ayuntamiento de Palencia habia hecho gastos de alguna consideracion ampliando el cementerio y construyendo tambien á sus expensas una capilla en el mismo; y como las miras del prelado eran distintas de las de aquella corporacion sobre la clasificacion del cementerio y aplicacion de los derechos de sepulturas, fué preciso que el Gobierno llegase á conocer en las respectivas reclamaciones. Oyóse al Consejo Real y al Vicario eclesiástico de Madrid, y con su dictámen se mandó formar y se formó, de acuerdo por ambas autoridades, un reglamento que se aprobó por S. M. con el cual se terminaron todas las diferencias.

Hé aquí el reglamento aludido que podrán consultar con provecho nuestros lectores.

Reglamento para la direccion, cuidado y conservacion del cementerio de la ciudad de Palencia, aprobado por S. M. en 9 de noviembre de 1849.

TITULO PRIMERO.

— DEL CAPELLAN Y SUS OBLIGACIONES.

Art. 1.º Habrá un capellan nombrado

por el Ayuntamiento, y aprobado por el Reverendo Obispo ó su provisor, cuyo nombramiento será revocable *ad nutum* por la autoridad eclesiástica.

Art. 2.º El capellan será dotado con la gratificación anual de cien ducados, que cobrará por trimestres de los fondos del cementerio.

Art. 3.º El capellan cuidará inmediatamente del cementerio y su capilla, y de que el sepulturero cumpla las obligaciones que abajo se expresarán.

Art. 4.º El nombramiento de capellan se entenderá sin irrogar perjuicio alguno á los derechos parroquiales de las iglesias y curas de la ciudad de Palencia, pudiendo celebrar misas rezadas y responsear en la capilla y cementerio, segun la piedad de los fieles lo solicitare; pero para el ejercicio de otro acto religioso, sea el que fuere, habrá de obtener previamente licencia de la autoridad eclesiástica.

Art. 5.º Los cadáveres serán conducidos al cementerio en la forma acostumbrada, debiendo acompañarlos el cura párroco ó un delegado suyo. Si los cadáveres fuesen de pobres de solemnidad, no llevará derecho alguno; mas si no lo fueren, pagarán por este acompañamiento, cuando lo verifique el párroco ó un delegado suyo con su sacristan en hábito de calle con estola, 8 rs.

Cuando lo verifique el párroco ó un delegado suyo y su sacristan con capa pluvial y cruz alta, 24 rs.

Cuando lo verifique el párroco con dos ministros con capas, 80 rs.

Art. 6.º En la capilla del cementerio habrá los ornamentos y recados necesarios para celebrar, bajo la custodia é inventario que tendrá el capellan; y si algun sacerdote fuese á celebrar la Santa misa, se los facilitará, siendo de cuenta de este llevar cera, vino, oblata y quien le ayude.

Art. 7.º Además del cuidado inmediato de la capilla y cementerio, y que el sepulturero cumpla con las obligaciones que se le marcarán, tendrá el capellan en su poder un plano comprensivo de la division del cementerio con la numeracion de sus sepulturas.

Art. 8.º Tendrá asimismo un libro que, enteramente conforme á dicho plano y numeracion de sepulturas y nichos, exprese el dia, número de la sepultura ó nicho ocupado, y por quién, con objeto de saber la época en que podrán volver á abrirse, y de dar mensualmente al Ayuntamiento los estados de que habla el art. 14.

TITULO II.

DEL SEPULTURERO Y SUS OBLIGACIONES.

Art. 9.º Habrá un sepulturero nombrado por el Ayuntamiento de entre los casados ó viudos que se mostraren pretendientes, quien á su religiosa honradez deberá reunir todas aquellas cualidades que garanticen el desempeño de las obligaciones que se van á expresar:

1.ª Antes de abrir una sepultura pedirá al capellan le designe la que corresponde en turno, segun la numeracion establecida.

2.ª Toda sepultura tendrá de profundidad por lo menos cuatro piés y medio, tres de ancho, y seis y medio de largo, sin poderse enterrar en ella mas que un cadáver.

3.ª Al colocar los cadáveres en sepultura ó nicho, los tratará con el respeto que corresponde; siendo de su cargo, despues de colocado el cadáver, si lo fuere en nicho, cerrarlo con ladrillo bien cocido y con buena mezcla de cal y arena, y lucirlo con yeso de modo que quede perfectamente liso y unido; y si en sepultura, cubrirlo con una capa de cal para su mas pronta consuncion, y oprimir completamente la tierra hasta igualarla con la superficie. Si los interesados quisieren colocar alguna losa sepulcral, inspeccionará si en su fijacion se observa lo que queda prevenido acerca del cerramiento de nichos.

4.ª No permitirá á persona alguna hacer rayas ni figuras en la pared ó frontis de los nichos, dando cuenta, caso de contravencion, al Alcalde para la providencia oportuna.

5.ª Cuidará de que en la superficie del cementerio no aparezca descubierto hueso alguno humano; que las divisiones ó calles se conserven aseadas y limpias; y que si se colocaren algunos árboles correspondientes á la gravedad de tan santo lugar, los preserve, cuide y riegue para su fomento.

6.ª Será de cuenta del sepulturero tener corrientes pala, azadon, paleta y llana, de que necesariamente ha de usar para el cumplimiento de sus anteriores obligaciones; hará tambien en los nichos y en el cementerio aquellos reparos triviales que estén á su alcance, para los que el Ayuntamiento le proporcionará los elementos necesarios.

7.ª El sepulturero nunca podrá alterar el modo y orden del enterramiento establecido; estará á las inmediatas órdenes del capellan; y si faltare á sus obligaciones, ya en la parte religiosa, ya en la de policía, el capellan lo pondrá en conocimiento de las autoridades eclesiásticas en el primer caso, ó

del Alcalde en el segundo, para que le corrijan, conminen ó separen de su oficio, segun que su reincidencia lo mereciere.

8.^a Por todos estos trabajos, con inclusion de la cal para los objetos referidos, gozará el sepulturero de la asignacion de 6 rs. diarios, cobrados mensualmente de los fondos del cementerio, siendo de la cuenta del Ayuntamiento el pago de los fondos auxiliares que le señale.

TITULO III.

DE LOS FONDOS DEL CEMENTERIO.

Art. 10. Los fondos del cementerio consistirán:

1.^o En lo que al Ayuntamiento le sea abonado anualmente en el presupuesto para este efecto.

2.^o En las dos terceras partes de los derechos sepulturales que devenguen los enterramientos, sea en panteones, nichos, sepulturas con lápida ó sin ella, quedando la otra tercera parte de dichos derechos sepulturales en beneficio de las respectivas fábricas.

Art. 11. El Ayuntamiento administrará dichos fondos como tuviere por conveniente, siendo de su cuenta el pago de la gratificacion del capellan; la del sepulturero y todos los gastos de la capilla, hosario y cementerio.

Art. 12. Los interesados satisfarán los derechos de sepultura á los respectivos párrocos, al mismo tiempo que lo hagan de los parroquiales, dándoles recibo por separado de unos y otros, expresando en el segundo la distribucion de ellos conforme á este reglamento.

Art. 13. Los párrocos entregarán al Ayuntamiento mensualmente una relacion de los finados, acompañando nota expresiva de las cantidades que hubiesen entrado en su poder por derechos sepulturales. La corporacion municipal podrá disponer en el momento, por medio de libramiento de las dos terceras partes de los expresados derechos.

Art. 14. Para salvar toda equivocacion, é identificar los derechos sepulturales de cualquiera clase devengados mensualmente en cada parroquia, el capellan del cementerio pasará tambien al Ayuntamiento, á fin de mes, otra noticia expresiva de los sepultados de cada parroquia, indicando si lo han sido en nicho, panteon, en sepultura comun ó con lápida, con caja ó sin ella, ó por pobres.

TITULO IV.

DIVISION DE CEMENTERIOS Y CLASIFICACION DE DERECHOS SEPULTURALES.

Art. 15. El cementerio será comun para todos, sin mas distincion de sitios que los de sepulturas, nichos, panteones y hosario.

Art. 16. Todo nicho ó sepultura susceptible de un solo cadáver, no podrá ser ocupado por otro hasta que sean trascurridos cinco años completos.

Art. 17. Para que haya la debida uniformidad, queda á cargo del Ayuntamiento la construccion de los nichos, cuyo importe será abonado previamente al mismo Ayuntamiento por los interesados del que haya de enterrarse, en la forma que abajo se dirá:

1.^o Un nicho susceptible de una sola caja, cuya ocupacion dure cinco años, devengará al Ayuntamiento 80 rs. por el importe de la construccion.

2.^o Un nicho susceptible de una sola caja, que quiera perpetuarse en una familia; devengará, por derecho de construccion al Ayuntamiento, en una sola vez, 120 rs.

3.^o Un nicho susceptible de cuatro cajas, que quiera en igual forma perpetuarse en una familia, devengará á favor del Ayuntamiento, por importe de construccion, y de una sola vez 400 rs.

Art. 18. La construccion de un panteon de familia se hará á sus expensas; el diseño deberá ser aprobado por el arquitecto del Ayuntamiento, y pagará por una vez 3,000 reales, y 24, además, por cada uno que en él fuere sepultado.

La adquisicion de un nicho de familia, susceptible de cuatro cajas, devengará de una vez 800 rs., y 24 por cada uno que en él fuere sepultado.

Si fuere susceptible de una sola caja, la adquisicion devengará 200 rs., con mas 24 por cada cadáver que en él fuere sepultado.

La familia que obtenga á perpetuidad una sepultura en el plano del cementerio, tendrá obligacion de poner la lápida que la cubra totalmente, y satisfará por la adquisicion 80 rs., y 20 mas por cada cadáver que en la misma fuere sepultado de cinco en cinco años.

El enterramiento del cadáver en un nicho, devengará 24 rs., y 20 si fuere párvulo que no pase de siete años.

El enterramiento en sepultura comun, siendo de adulto, devengará 20 rs. con caja y 12 sin ella; y siendo de párvulo, 16 rs. con caja y 6 sin ella.

El hospital seguirá contribuyendo por los

que fallecieren en él con la cuota que hasta ahora ha pagado por cada uno, que son 2 reales; pero los que en él muriesen dejando algunos bienes, y fuesen enterrados con caja ó sin ella, seguirán la suerte de los demás, y la tercera parte de lo devengado pertenecerá á la iglesia de su parroquialidad.

Art. 19. La perpetuidad en las familias de un panteon, nicho ó sepultura con lápida, se concederá por la autoridad eclesiástica y civil.

TITULO V.

DISPOSICIONES GENERALES.

Art. 20. Ningun cadáver podrá ser enterrado sin que, con arreglo á las leyes y reales disposiciones vigentes, preceda el certificado de defuncion expedido por el facultativo, ó el correspondiente mandato judicial.

Art. 21. Tampoco podrá hacerse el enterramiento hasta que hayan pasado, á lo menos 36 horas, desde el fallecimiento en los casos ordinarios, y 48 en las muertes repentinas.

Art. 22. No se hará por ningun título exhumacion alguna de cadáver, aunque sea para cambiar de localidad dentro del cementerio, sin que fuere concedida por la autoridad eclesiástica, en conformidad á lo que dispone el derecho; y si esta exhumacion hubiere de ser para ser trasladado el cadáver fuera del cementerio, se observará lo prevenido en la Real orden circular de 19 de marzo de 1848.

Art. 23. No se fijará ninguna inscripcion en panteon, nicho ó lápida, sin que fuere visada previamente por la autoridad eclesiástica, la cual examinará si las que se hallan fijadas hasta el presente necesitan ó no alguna modificacion.

Art. 24. La llave del cementerio estará en poder del capellan, quien la entregará por el dia al sepulturero.

Art. 25. Cuando hubiere de hacerse algun reparo en el cementerio, ya sea ordinario, ya extraordinario, el capellan dará aviso al señor Alcalde constitucional, para que, como presidente del Ayuntamiento que administra los fondos del cementerio, dé parte á quien tuviere por conveniente para que lo efectúe; y lo mismo hará el capellan cuando se concluya la cal y demás materiales necesarios.

Art. 26. Se entenderá pobre de solemnidad, para no devengar derechos sepulturales, el que fuere honrado por la parroquia con funerales de pobre; el que habiendo sido

muerto á mano airada fuere mandado sepultar de oficio; y el mendigo transeunte que falleciese en esta ciudad.—Madrid 9 de noviembre de 1849.—Aprobado por S. M.—San Luis.

—V. DERECHOS PARROQUIALES: FUNERALES: SEPULTURAS.

II.

Construccion de panteones.

En la Real cédula de 3 de enero de 1854, dictando reglas para la demarcacion y arreglo de parroquias, se encargaba entre otras cosas á los MM. RR. Arzobispos, RR. Obispos y vicarios capitulares Sede vacante de las iglesias de España que refrenaran el abuso «que especialmente en la corte y grandes poblaciones, se va introduciendo en los cementerios, por imitar costumbres no muy laudables ni conformes con la creencia y culto católico, en las costosas sepulturas y sus adornos, y otras profanas demostraciones del lujo de las familias, mas bien que del sincero dolor por sus difuntos y deseo del eterno descanso de sus almas.»

Fundándose en este encargo el reverendo Obispo de Santander, pidió al Gobierno que prohibiese la construccion de panteones particulares en los cementerios. El Sr. Ministro de la Gobernacion pasó el asunto á informe del Consejo de Estado, y evacuado por las Secciones de Gracia y Justicia y Gobernacion del mismo Consejo, se remitió el expediente como de su competencia al Ministerio de Gracia y Justicia, por el cual fué resuelto de conformidad con el referido informe que dice asi:

«CONSEJO DE ESTADO.—SECCIONES DE GOBERNACION Y FOMENTO, Y ESTADO Y GRACIA Y JUSTICIA.—EXCMO. SR.: En cumplimiento de la R. O. de 11 de noviembre último, estas Secciones han examinado la comunicacion del R. Obispo de Santander, relativa á la ereccion de panteones particulares en los cementerios, remitida á este Ministerio del digno cargo de V. E., de Real orden comunicada por el de Gracia y Justicia.

Resulta, que el diocesano de Santander, fundándose en la base 11 de la Real instruccion de 3 de enero de 1854, que se le dirigió para llevar á efecto el arreglo parroquial pre-

venido por el art. 34 del último Concordato, solicita se prohiba la construccion de panteones particulares en los cementerios, permitiéndolo únicamente cuando se trate de bienhechores de la Iglesia ó del pueblo. Esta es en resúmen la solicitud del Obispo. Las Secciones, en su vista, convienen con el reverendo prelado en que, á veces, la ereccion de mausoleos solo tiene por objeto hacer ostentacion de las riquezas y satisfacer la vanidad, tan impropia de aquellos lugares, en los que debe reinar la modestia y humilde igualdad de nuestra sacrosanta religion; pero tampoco pueden desconocer que en otros casos no se construyen por orgullo y pompa, sino por rendir un merecido tributo á las virtudes, á los servicios ó al talento del difunto, ó para tributar un recuerdo á la memoria del padre, del hijo ó de la esposa queridos. En estos casos, la Administracion no puede impedirlo, ni seria conveniente que tal hiciese; y como hay grave dificultad en apreciar la causa ó motivo por que se levanta el mausoleo, por eso á juicio de las Secciones no debe estimarse la pretension de que se trata.

Es verdad que la base 11 de la mencionada Real instruccion recomienda á los Obispos que en sus respectivas diócesis desaraiguen la costumbre que en algunas poblaciones se va introduciendo de construir esta clase de monumentos; pero en sentir de las Secciones, aquella base no es una prescripcion absoluta; es tan solo un consejo para que por medio de la persuasion y haciendo uso de los medios mas bien morales que coercitivos que el clero tiene á su alcance en la predicacion, en las pláticas doctrinales, en las amonestaciones familiares, y hasta con el ejemplo, encamine los espíritus del pueblo cristiano á que prescinda, en las construcciones funerarias, de las pompas y ostentacion de la vanidad mundana, que por otra parte no pueden nunca reglarse de una manera tan determinada que permitan fijar norma y apreciacion anticipada; razon, sin duda, por la que la Real instruccion citada no consignó la prohibicion en una forma general y absoluta, limitándose por el contrario á una recomendacion mas de prudencia que de precepto. Además, no pueden impedirse estas construcciones, porque siendo un acto de interés privado, el Gobierno debe dejar á los particulares en libertad completa, sin que por esto se entienda que abdica la justa y necesaria intervencion que le corresponde para prohibir que destinen sus capitales á objetos contrarios á las leyes ó prohibidos por estas, lo cual se remedia en cuanto á las construc-

ciones de mausoleos, obligando á los interesados á que los planos del decorado de las obras se sometan á la aprobacion de la autoridad eclesiástica respectiva, que seguramente no permitirá en ellos adornos contrarios á las creencias y al culto católico, ni prohibirá que en estas obras se inviertan las cantidades que los particulares juzguen necesarias. Mejor seria que las sumas destinadas á este fin se empleasen en objetos piadosos, tales como donativos al culto, sufragios etc., que es lo que pretende el Obispo; pero esto necesariamente tiene que dejarse al prudente arbitrio de los particulares, y por lo mismo el Gobierno se halla imposibilitado para ordenarlo, y caso de hacerlo, sus disposiciones producirian resultados contrarios á los que desea el prelado de Santander, omitiendo las Secciones su demostracion, barto manifiesta para que sea menester someterla á la ilustrada consideracion de V. E.

Así opinan las Secciones en cuanto á la prohibicion referida; pero no concluirán sin hacer presente á V. E. que, á su juicio, la resolucion del asunto no compete al Ministerio de la Gobernacion, y por lo tanto podiera devolverse el oficio del Obispo al Ministerio de Gracia y Justicia, acompañando copia de este informe, si mereciese la aprobacion de S. M., para que en su vista se determine por dicho Ministerio lo que crea conveniente.—V. E. sin embargo propondrá á S. M. lo que como siempre estime mas acertado.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 8 de febrero de 1859.»

Tal fué el dictámen del Consejo de Estado, con el que se conformó S. M. como aparece por la R. O. de 12 de abril de 1859, que se comunicó por el Ministerio de Gracia y Justicia al de la Gobernacion, y despues por este en 5 de mayo á los señores Gobernadores de las provincias. Hé aquí la Real orden:

«En vista del expediente instruido en este Ministerio, con motivo de una comunicacion elevada por el R. Obispo de Santander, relativa á la ereccion de panteones particulares en los cementerios, S. M. la Reina (Q. D. G.) ha tenido á bien resolver, de conformidad con la consulta de las Secciones de Gracia y Justicia y Gobernacion del Consejo de Estado que fué remitida por el Ministerio del digno cargo de V. E. á este de Gracia y Justicia con fecha 4 de marzo último.—De Real orden, etc.» (1).

(1) Ni esta Real orden ni la consulta del Consejo de Estado se hallan en la Coleccion

III.

Sepultura eclesiástica.

Consulta del Consejo de Estado con lo que procede en caso de denegacion.

La privacion de la sepultura eclesiástica es una pena gravísima que solo debe imponerse por motivos muy calificados y en juicio contradictorio. No pueden imponerla por sí los párrocos; no pueden imponerla tampoco gubernativamente los diocesanos; y aun alguna vez cuando se impone en forma, suele todavía sobresalir un exceso de celo poco conveniente para los intereses de la misma Iglesia. Los Gobernadores, y los Alcaldes sus delegados, cuando ocurren casos de tal naturaleza tienen deberes que cumplir; y no siendo posible enumerarlos, para salvar las dificultades que en cada caso especial se ofrezcan, nada mas prudente que consultar los antecedentes oficiales sobre casos análogos y la jurisprudencia que respectivamente se haya ido estableciendo con sus resoluciones. Por eso nosotros, aunque no hemos hallado en la *Gaceta oficial*, ni en la Coleccion legislativa, la importante consulta del Consejo de Estado que ponemos á continuacion, creemos hacer un servicio incluyéndola en esta compilacion, segun se ha publicado oficialmente en un *Boletín* de provincia por el Gobernador civil de la misma, á quien se comunicó por R. O. de 6 de octubre de 1859.

La doctrina que contiene es de suma importancia, y los señores Gobernadores y los Alcaldes podrán apelar á ella mas de una vez con provecho, para salvar las dificultades que les ocurran. Hé aquí, pues, este importante documento:

«Remitido á informe de las Secciones reunidas de Gobernacion, Fomento, Estado y Gracia y Justicia del Consejo de Estado, el expediente instruido á consecuencia de haberse negado en el Concejo de Cangas de Onís la sepultura eclesiástica al cadáver de Bárbara Alvarez, con fecha 15 de julio últi-

legislativa, ni tampoco en la *Gaceta*; pero fué inserta en algun *Boletín* de provincia, y nosotros la tomamos del de Pontevedra, número 65 de 1.º de junio de 1859.

mo, lo han evacuado en los términos siguientes:

«Excmo. Sr.: Cumpliendo estas Secciones con lo que se las previene en Real orden fechada en 26 de marzo último, relativa á la comunicacion del Ministerio de Gracia y Justicia, en la cual manifiesta el R. Obispo de Oviedo las causas de no haberse dado sepultura eclesiástica en Cangas de Onís á Bárbara Alvarez, á fin de que este Consejo informe en Secciones de Gracia y Justicia y Gobernacion, lo que se le ofrezca y parezca acerca de la medida general que pudiera adoptarse para dar interinamente sepultura á los cadáveres que las autoridades eclesiásticas sometan á entredicho.

Dos son las cuestiones que aparecen en esta Real disposicion, una de derecho canónico y de disciplina general de la Iglesia, y otra de policia sanitaria y de higiene pública.

Si no se hubiera remitido á ambas Secciones la comunicacion original del prelado, parece que no estaban llamadas á emitir su parecer sino sobre una simple cuestion de policia sanitaria; mas teniendo presente aquella circunstancia y la gravedad del hecho, que adquiere un carácter mas determinado por haber aprobado el R. Obispo la conducta del ecónomo, procederán aquellas por lo tanto á su mas detenido exámen. En la comunicacion adjunta dice el R. Obispo al Ministro de Gracia y Justicia, que precisado á informar en virtud de Real orden sobre el hecho denunciado por la prensa periódica, ocurrido en la parroquia de Mamia, próxima á Cangas de Onís, en la que se hallaba depositado hacia doscientas ocho horas el cadáver de una mujer, por haberse negado el párroco á darle sepultura, y no atreverse tampoco á hacerlo el Alcalde, por mas que en union del médico y cirujano dispuso se le condujera á la Iglesia. Asegura el prelado ser cierto el hecho en la parte relativa á haberse negado el cura ecónomo de Santa Eulalia de Mamia en el concejo de Cangas de Onís á dar sepultura eclesiástica al cadáver de Doña Bárbara Alvarez que falleció sin recibir los Sacramentos y que el ecónomo obró por no haber la difunta, á pesar de sus repetidas exhortaciones, cumplido con el precepto de la confesion y comunión pascual en muchos años que la desgraciada pasó entregada al vicio de la embriaguez, lo que la produjo la muerte.

El ecónomo dió cuenta del hecho y de su conducta al prelado, y este remitió al arcipreste del partido, comision para que recibiera una informacion testifical sobre los hechos manifestados por el ecónomo.

En ella se justificaron y tuvo el sentimiento, dice, de aprobar la conducta del ecónomo, declarando que al dicho cadáver no podía darse sepultura eclesiástica, y mandando que se pasará oficio al Gobernador de la provincia, á fin de que se sirviera dictar las órdenes oportunas para que se le enterrase en un lugar decente sin pompa ni ceremonia eclesiástica de ninguna clase. Que de la providencia gubernativa que dictó no se alzaron de ella por la vía, contenciosa los herederos de la difunta que se creyesen lastimados por aquella, dictada en una informacion sumaria.

Hasta aquí los hechos; mas ahora las Secciones, reconociendo como reconocen, que son aquellos del dominio-exclusivo de la potestad eclesiástica, examinarán, sin embargo, la doctrina proclamada en los Concilios y sostenida por los tratadistas, relativa á la privacion de sepultura eclesiástica, no al entredicho, en cuyo caso no nos hallamos actualmente, sin embargo de calificarse así, pues sabido es que el entredicho es la prohibicion de participar de ciertos actos del culto, conservando no obstante la union con la comunidad; pena eclesiástica de la que se abusó en la edad media y á la que se sujetó á pueblos enteros y aun á reinos.

La privacion de sepultura eclesiástica es una pena muy grave que solo puede imponerse por los prelados eclesiásticos. Estos nunca pueden proceder gubernativamente cuando se trate de imponer las penas que privan para siempre de los derechos de la sociedad cristiana.

La privacion de sepultura como segregacion de la comunión y grey cristiana, corresponde á la pena de excomunion menor, y no puede por lo tanto imponerse sino por el prelado bajo las prescripciones señaladas por las decretales. Así, pues, el prelado debe ser el único juez que imponga esta pena, no gubernativa sino canónicamente; y no debe dejarse su aplicacion á los párrocos ecónomos, pues segun los cánones y Concilio de Trento, los párrocos no tienen mas atribuciones que las de administrar los Sacramentos, la de instruir á sus feligreses en la ley divina y la de vigilar el cumplimiento de los deberes de todos los acólitos y servidores de la Iglesia.

Algunas sinodales determinan que los párrocos procedan con suma prudencia y gran discrecion á aplicarla preventivamente, dando cuenta á su prelado para que este, prévio exámen, la fulmine en la forma legal y canónica; mas ¿corresponde esta atribucion á las que les señala el Concilio de Trento? ¿No es de temer como ha acontecido en este caso, el uso poco prudente y discreto de tan grave

censura aplicada por un cura ecónomo, clausura en lo general no muy ilustrada? El Santo Concilio de Trento teniendo presente esto mismo en la sesion 23, cánón 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 señaló las causas fijas y determinadas para imponerse la pena de excomunion, y todas las que especificó son relativas á los que niegan abiertamente la creencia del dogma y á la potestad de la consagracion, confesion y predicacion. La razon que tuvo para ello fué el abuso que en épocas dadas se hizo por algunos prelados poco discretos, de las censuras mayores de la Iglesia.

Como el espíritu verdadero de esta es la amorosa caridad y la inagotable piedad, los padres del Concilio estatuyeron que fuera preciso para imponer dichas censuras la rebelion abierta contra la doctrina dogmática de la Iglesia, el hecho de reprobarla, escarnecerla y despreciarla públicamente.

Es cierto que los cánones del Concilio Lateranense 4.^o prescribieron la exclusion del lugar sagrado, motivada en la impenitencia á la hora de la muerte, ó bien en la falta de cumplimiento de los mandamientos de la Iglesia; mas por ser demasiado lato este principio y mas lata aun su aplicacion, los padres del Concilio de Trento lo reformaron, y declararon tan sábia doctrina, que es conforme con el espíritu de mansedumbre y de divina caridad de Evangelio.

La comunión cristiana parece, pues, que no debe rechazar de su seno sino al hereje, al réprobo, al que se pone voluntaria y premeditadamente fuera de su grey.

¿Hállase en este caso la desdichada mujer que ha dado lugar por su fallecimiento y prohibicion de sepultura cristiana á tan deplorable acontecimiento?

Las Secciones creen que no, y lo propio acontece al referido prelado, pues en su comunicacion atribuye al vicio de la embriaguez, la única causa de no frecuentar los sacramentos, y en cuyo deplorable estado fué sorprendida por la muerte. ¿Pudo, pues, tener ánimo libre y determinado para no admitirlos, para rechazarlos, para ponerse voluntariamente fuera de la comunidad cristiana? ¿La indolencia ó tibieza religiosa, la embriaguez de los sentidos, son causas de excomunion?

Tambien reconoce el R. Obispo que tan grave pena fué impuesta gubernativamente, en vista de una sumaria informacion, no teniendo quizás presente lo que prescriben las decretales y el art. 9.^o de la Constitucion de la Monarquía, que declara que ningun español puede ser procesado ni sentenciado sino por tribunal competente, en la forma que

prescriban las leyes. Mas á las Secciones no las incumbe por ahora sino reseñar el hecho y la doctrina, á fin de que por el Ministerio de Gracia y Justicia se dicten las disposiciones que crea mas conformes con el espíritu del Evangelio y el del siglo en que vivimos y que se hacen cada dia mas necesarias. Esto mismo se expuso en la consulta elevada al Ministerio de Gracia y Justicia por el Consejo Real en 2 de setiembre de 1851, con motivo de un hecho análogo á este, ocurrido en la diócesis de Jaca, en la que se significó lo siguiente:

«El Consejo al mismo tiempo, deseando prevenir todos los casos y teniendo presente que podrian sobrevenir circunstancias graves, en las cuales pudiera verse la autoridad eclesiástica precisada á hacer uso de la facultad concedida por los cánones en toda su plenitud, y con la mira de evitar conflictos desagradables y contrarios al espíritu de armonía que debe reinar entre las autoridades de las dos potestades civil y eclesiástica, así como tambien todo daño en la salubridad pública, que pudiera ser comprometida por cualquier tardanza en la inhumacion, fácil por otra parte de prevenir en cualquier caso, ha creído que debe proponer á V. E. se comunique orden á los Gobernadores de las provincias para que procuren por todos los medios que les sugiera su celo, no se niegue la sepultura en los cementerios por leves causas, evitando los conflictos con la autoridad eclesiástica en cuanto sea posible; pero que si los medios de conciliacion no fuesen bastantes y un párroco negase la sepultura eclesiástica á un cadáver, se hayan de dirigir los interesados al prelado de la diócesis, á fin de que instruyendo el oportuno expediente tome la resolucion que estime justa: que entre tanto se proceda en el término acostumbrado á dar sepultura al cadáver en un lugar que reúna las condiciones apetecibles al efecto, sin perjuicio de que si instruido el expediente mencionado recayese sentencia favorable, se proceda á la exhumacion y traslacion á sagrado con las precauciones que marcan las disposiciones vigentes, dejando en estos casos libre y expedita la acción de la autoridad eclesiástica, sin perjuicio de que eleven sus quejas y reclamaciones al Gobierno de S. M. cuando creyesen que aquellas se hubiesen excedido del límite de sus atribuciones. Asimismo cree el Consejo que, atendida la frecuencia con que ocurren casos de esta naturaleza, convendria que se circulase por la vía reservada esta medida como regla general y con insercion del presente dictámen. Por lo tanto, si

este parecer fué adoptado por S. M. y circulado por la vía reservada, queda señalado como medida ó regla general para evitar ó aminorar en lo posible casos que la Seccion se lisonjea en reconocer que no serán frecuentes en una nacion esencialmente cristiana como la nuestra.»

Sin embargo, el Consejo Real volvió á ocuparse en virtud de R. O., fecha 4 de mayo de 1858, comunicada á la Seccion de Gracia y Justicia por el Ministerio de aquel ramo, de otro acontecimiento de la misma naturaleza, ocurrido en el pueblo de Torija, diócesis de Toledo, y propuso al Ministerio de Gracia y Justicia que teniendo presentes los antecedentes relativos á aquel suceso elevase su parecer con copia literal de la consulta de 2 de setiembre de 1851.

Así, pues, las Secciones creen que respecto al punto canónico, debe reproducir cuanto se expuso en 2 de setiembre de 1851, y lo que se manifiesta al presente, á fin de evitar que los prelados por causas leves y no prescritas en el Santo Concilio de Trento, fulminen las censuras de la Iglesia por un exceso de celo poco prudente y discreto que puede ocasionar males muy graves á la misma.

Mas la R. O. de 26 de marzo de 1858 previene además que las Secciones informen lo que se las ofrezca y parezca acerca de la medida general que pudiera adoptarse para dar interinamente sepultura á los cadáveres á que la autoridad eclesiástica niegue la sepultura cristiana.

Como cuestion de policia sanitaria, higiene y salubridad pública, es como juzgan deber igualmente tratarse; así se acordó que convenia previamente tenerse presente el parecer del Consejo de Sanidad tan competente en esta materia.

Este con fecha 19 de octubre de 1858, dice: «Hecha cargo del asunto la seccion 1.^a no puede menos de reconocer, como advirtió sin duda la mencionada Seccion del Consejo de Estado, que una vez inhumado un cadáver y despues que ha trascurrido tiempo suficiente para que entre en putrefaccion, ofrece su exhumacion formales peligros para la salud pública, sobre todo cuando ese cadáver putrefacto ha de conducirse á un campo santo para inhumarse de nuevo.

Hállase tan bien comprobada y tan generalmente reconocida la calidad deletérea de las emanaciones cadavéricas; son tantos los hechos de enfermedades graves y hasta de epidémicas que han tenido por origen las exhumaciones de los restos cadavéricos, que considera ocioso emitir aquí doctrinas ni

ejemplos para probarlo una vez mas, sobre todo cuando el convencimiento es tan general que se extiende hasta el vulgo.

Fuera, pues, una disposicion claramente contraria á las mejor sentadas reglas higiénicas, la de exhumar un cadáver, provisionalmente sepultado, para trasladarle al lugar sagrado y hacer una nueva inhumacion.

Por lo tanto, supuesta la necesidad indispensable de sepultar luego que pasan veinticuatro horas desde que ocurrió el fallecimiento, los cadáveres de aquellas personas que las autoridades eclesiásticas sometan á entredicho, es la Seccion de dictámen que aun cuando este se levante por el prelado correspondiente, no se haga la exhumacion hasta que se cumpla el tiempo y se llenen las condiciones que determina la R. O. de 19 de marzo de 1858.

Las Secciones no pueden menos de reconocer los sanos principios que aconseja la ciencia y que el Consejo de Sanidad expone en su razonado informe; así, pues, tomando en consideracion tan útil como provechosa doctrina, nada les queda que añadir sino la necesidad, la conveniencia y la obligacion en que se halla la gobernacion del Estado de mirar y procurar ante todo por la conservacion de la salud pública.

Teniendo presentes tan sólidos principios, no puede tomarse en cuenta lo que propone el R. Obispo de Oviedo, relativo á exhumar el cadáver luego que pronuncie el fallo favorable y á darle sepultura cristiana en el cementerio, lo que podria producir los males que se indican, y que es forzoso evitar por medio de la saludable medida que prescribe la ley y á cuyo exstricto cumplimiento deberá estarse.

Escogitaráse, sin embargo, un medio que concilie en lo posible el respeto que merece la honra cristiana de un finado con el que se debe á la ley de exhumacion de cadáveres.

Las Secciones son por lo tanto de parecer que se prevenga á los Gobernadores de las provincias que en casos análogos á este, los Alcaldes dispongan el entierro preventivamente, en lugar decente contiguo al cementerio y cercado aunque no sagrado, cuando sin riesgo de la salud pública no pueda esperarse la resolucion definitiva del prelado; mas llevada ya á cabo la inhumacion, si el diocesano declara el derecho de sepultura cristiana en favor del fallecido, deberá sin embargo estarse á lo prescrito para la exhumacion en R. O. de 27 de marzo de 1845, á fin de evitar los males que pudieran sobrevenir á la salud é higiene pública.

Pero como la censura impuesta es una

pena eclesiástica sumamente grave que afecta la honra cristiana del fallecido y su familia, y le priva á aquel del beneficio de las preces de la Iglesia, seria justo y conveniente que se publicara en la parroquia el primer dia festivo la absolucion del prelado, y este mandara que en ella se hiciese inmediatamente el funeral, mucho mas si fuera pobre el fallecido, y que se recitarán las preces y responsos y se aplicaran por su eterno descanso segun el ritual. Así se conciliaria el respeto que merece la honra de los finados y la obligacion de conservar la salud pública á que está atendida la Gobernacion del Estado.

En esta forma se podria contestar al Ministerio de Gracia y Justicia si V. E. lo juzga oportuno, á fin de que resolviera sobre este particular lo que crea mas conveniente y en respuesta á su comunicacion de 19 de marzo de 1858.»

Y habiéndose dignado acordar S. M. de conformidad con el preinserto dictámen consultado de su Real orden lo traslado á V. S. como *regla general* para la resolucion de casos análogos.»

(Se comunicó al Sr. Gobernador de la Coruña por R. O. de 6 de octubre de 1859.) (Bol. of. de 16 de noviembre, núm. 271.)

IV.

Otro dictámen emitido por el fiscal de la Cámara del Real patronato sobre caso de denegacion de sepultura eclesiástica.

Tambien este documento es notable é importantísimo al objeto de ilustrar el asunto sobre que versa, siendo grande la autoridad del jurisconsulto que la suscribe y la que tiene por ser la opinion del ministro fiscal de un alto cuerpo de la Gobernacion del Estado. Dice así:

«El ministro fiscal dice: Que por el Ministerio de Gracia y Justicia se pide con urgencia informe á la Cámara con motivo de una comunicacion del Ministerio de la Gobernacion del Reino, remitiendo un expediente en que aparece el párroco de..... diócesis de..... se negó á dar sepultura eclesiástica al cadáver de D. B. L. C.

Ante todas cosas, conviene fijar con claridad y precision los hechos tales como constan en el expediente. D. B. L. C. falleció el dia 23 del último febrero, segun dice el Alcalde de..... en comunicacion que en el mismo dia dirigió al Gobernador de la provincia. En ella dice, que cuando se participó al párroco el fallecimiento, contestó que no podia dar sepultura eclesiástica al finado sin

permiso del diocesano, y que igual contestacion dió de palabra al que le entregó un oficio que el mismo Alcalde le dirigió acerca del particular. Añadía que las razones en que podría fundarse el párroco eran que hacía años que D. B. L. C. no cumplía con los preceptos de la Iglesia, y que como podía suceder que el prelado confirmase la denegacion de sepultura, consultaba al Gobernador, esperando su resolucion que seria muy conducente, para evitar que los numerosos parientes del difunto, que son los principales de la villa, se conceitaran contra el cura produciendo funestos resultados. El Gobernador con fecha del 25 contestó al Alcalde que si al recibo de la orden no hubiese tenido lugar el enterramiento, invitará al párroco en nombre de su superior autoridad á que lo hiciera; pero en el caso poco probable de persistir en la negativa, dispusiera que sin demora se verificara el enterramiento en el sitio en que lo reciben los demás fieles, y que si por un lamentable incidente lo hubiese sido en otro lugar, se exhumara el cadáver con las formalidades necesarias y se trasladará al cementerio comun. Ordenaba al propio tiempo el Gobernador al Alcalde que en el caso de insistir el párroco en su negativa, instruyera y remitiera el oportuno expediente gubernativo en que se consignaran y justificaran los hechos.

Con la misma fecha se dirigió el Gobernador al R. Obispo de.... trasladándole el oficio del Alcalde y la contestacion que le daba, añadiendo que confiaba en su ilustracion y sentimientos religiosos que diera al insólito proceder del párroco de.... la apreciacion que merecia, no solo en sí misma, sino por la deplorable trascendencia que podian tener hechos de esta naturaleza; en concepto, de que si bien prevenia la formacion de un expediente gubernativo para el esclarecimiento de los hechos, no por esta circunstancia excluia la reparacion pastoral que competia al prelado y que siendo satisfactoria miraria como el único remedio.

El prelado el dia 26 contestó á la comunicacion de que acaba de hacerse referencia, remitiendo copias de la comunicacion que habia recibido con fecha 23 del cura de.... y la contestacion que en el dia siguiente 24 le habia dado. La comunicacion del párroco decia que se habia puesto en su noticia por el Alcalde el fallecimiento de D. B. L. C., sin decir cuándo ni de qué manera, pues nadie entraba en su casa; que en los 22 años que residia él en la villa no habia el finado dado muestras ningunas de cristiano, porque ni habia asistido á la iglesia, ni habia cumplido

con el precepto pascual, y que era público que estaba siempre vertiendo doctrinas impías e irreligiosas, segun todo el pueblo deponia unánimemente. Concluia diciendo que por lo manifestado y muchísimo mas que pudiera añadir, nada podia resolver en cuanto á entierro y sepultura eclesiástica hasta que el prelado decidiera sobre el particular. La contestacion que dió el diocesano á esta comunicacion fué que siempre que el cura le hubiese amonestado alguna vez á cumplir con los deberes de cristiano, y por otra parte no le constara que antes de morir hubiese dado señales de arrepentimiento y manifestado deseos de recibir los Santos Sacramentos como cristiano, se estaba en el caso de negarle la supultura eclesiástica, *pues la Iglesia solo concede este derecho á los que mueren como hijos suyos*. En la citada comunicacion de 26 de febrero concluia el prelado diciendo al Gobernador, que el párroco de.... no podia obrar de otra manera, y que él tomaba sobre sí la responsabilidad como de cualquier otro incidente de la misma naturaleza que pudiera ocurrir, como ocurririan con mayor frecuencia si el ministerio pastoral fuera contrariado en vez de ser protegido por las autoridades públicas.

Con fecha del 25 el Alcalde de.... ofició de nuevo al Gobernador de la provincia, diciendo que extrajudicialmente sabia la negativa del diocesano, y que por esta causa ó por otra los parientes del difunto le reclamaban el cadáver para sepultarle en una finca de los mismos y erigir en ella un monumento que sirviera de sepulcro á la parentela que le costaba, con un epitafio alusivo por ahora á las reconocidas virtudes del primero que lo iba á ocupar. Añadía el Alcalde que como medida sanitaria se habia trasladado el cadáver á una casa de campo á corta distancia del pueblo, y pedia instrucciones por ser este un caso enteramente nuevo.

El Gobernador de la provincia en una luminosa comunicacion fechada en 28 de febrero contesta á la que el diocesano le dirigió en el dia 26; en ella defendia y sostenia sus providencias con copia de razones, y se reservaba poner en conocimiento del Gobierno este negocio si el Obispo insistia en su negativa.

En el mismo dia 28 ordenó el Gobernador al Alcalde que si no habia llevado á efecto lo que le habia prevenido en la comunicacion primera que le dirigió en el 25, lo verificase desde luego.

La conducta del Gobernador está aprobada por Real orden de ayer.

Estos son los antecedentes extractados

con fidelidad en la parte que es interesante para la fijacion exacta de los hechos.

El fiscal, antes de emitir su dictámen acerca de la conducta observada respectivamente por el R. Obispo de..... por el Gobernador de la provincia de..... y por el Alcalde y párroco de..... cree que debe fijar los principios que han de servir de regla para la resolucion. Y siente mucho tener que despachar este negocio con la urgencia que reclama el Gobierno de S. M., porque así no podrá dar al dictámen la extension que deseara, y que seria conveniente en punto de tanta gravedad.

El Gobernador de..... en su comunicacion dirigida al diocesano de..... en el dia 28 de febrero, comunicacion que bien merece ser leida, porque trata con tino las cuestiones á que da lugar este desgraciadísimo expediente, reconoce de buen grado que corresponde á la autoridad eclesiástica, decidir si un cadáver debe ó no recibir sepultura en lugar sagrado. Esto en el terreno del derecho constituido no puede ponerse en duda, y solo en el terreno del derecho constituido, es como el fiscal considerará la cuestion, porque no es llamado á dar su dictámen bajo un aspecto diferente. Ni la aprobacion de la base eclesiástica para la futura Constitucion puede ser obstáculo á considerar la cuestion de esta manera, porque sin entrar por ahora en semejante examen, basta decir que los hechos de que se trata tuvieron lugar antes de aprobarse la base, para que se convenga en que ninguna influencia debe tener en la resolucion el expediente.

Pero en el supuesto de ser la concesion ó negacion de sepultura eclesiástica un derecho propio de la Iglesia, ¿debe permanecer la potestad temporal desarmada y obligada á presenciar impasiblemente los abusos que las autoridades eclesiásticas pueden cometer? No cree el fiscal que haya un solo hombre de buena fé que se atreva á contestar afirmativamente á semejante pregunta.

No es un derecho, es un deber de la potestad temporal defender y proteger á los ciudadanos de los abusos cometidos por las autoridades eclesiásticas. Así dicen los escritores regnicolas mas piadosos y autorizados, que no puede desprenderse el Gobierno de esta regalía sin renunciar á una parte de su independencia, sin dividir el imperio, y sin faltar á su obligacion mas esencial. Los recursos de fuerza, los recursos de proteccion no tienen otro fundamento. Y no hay acto abusivo de un eclesiástico de que no pueda libertarse el perjudicado: por el recurso de fuerza si se trata de providencias dimanadas

de la jurisdiccion contenciosa; por el recurso de proteccion, si se trata de providencias gubernativas, contra las que tambien ha sido lícito entablar recursos de fuerza. Ofenderia la ilustracion de la Cámara si me detuviera mas acerca de este punto.

El Rey, pues, por medio de sus Tribunales y altos funcionarios, ó excitado, ó *motu proprio* en los negocios en que se interesa el bien público, puede corregir los abusos cometidos por los eclesiásticos, velando por el cumplimiento de las leyes y de los cánones de que no en vano es protectora la Corona.

Sentado esto, veamos cuál es el derecho respecto á la sepultura de los que fallecen sin haber cumplido con sus deberes de cristianos.

Dos causas son las que expresó el párroco de..... en su comunicacion de 23 de febrero. Era la primera, la no asistencia de B. L. C. á la iglesia y la falta de cumplimiento con el precepto pascual por espacio de muchos años: la segunda consistia en atribuirle verter doctrinas impías é irreligiosas. Preseindiendo de la vaguedad de esta denuncia, porque denuncia y no otra cosa es la que hizo el párroco, basta al propósito del que suscribe decir que no hay ningun canon ni ninguna ley, en virtud de la cual el que vierte tales doctrinas deba ser privado de la sepultura eclesiástica, para que solo quede subsistente la primera causa. Aun de esta solo queda la de no recibir los Sacramentos; que es la única de que hablan las disposiciones de la Iglesia.

Examinemos este punto. Por muchos siglos no ostentó la Iglesia el rigor que prevaleció despues con los que estaban separados de su seno. En las leyes del Código *repetitæ prælectionis* encontramos una atribuida al emperador Marciano, que dice: *Hæretici legitimo modo, ut cæteri sepeliuntur*.

Cuando en el Concilio IV lateranense se ordenó que los fieles confesaran al menos una vez al año y recibieran la Eucaristía por la Pascua, se excomulgó á los que faltaran á este precepto: *alioquin et vivens ab ingressu ecclesiæ arceatur, et moriens christianâ careat sepulturâ*. Pero en el mismo canon se ordenaba que esta disposicion se publicara frecuentemente en las iglesias para que no pudiera alegarse su ignorancia; cosa que no se sabe se verificara en.....

Esto es todo lo que en el particular nos dice el derecho canónico: el civil es mucho mas escaso, ó por mejor decir del todo deficiente, pues á pesar de que las leyes de Partida toman diferentes disposiciones del derecho canónico respecto á la privacion de

sepultura, nada dicen de los que omiten recibir los Sacramentos.

En vista de esto podrá preguntarse: ¿esta vigente en España el cánón que niega la sepultura eclesiástica á los que no cumplen con el precepto pascual? Muchos son desgraciadamente los que en la afirmativa debieran ser de esta manera castigados, y pocos felizmente los escándalos que presenciarnos semejantes al que ha promovido este expediente. Hé aquí una prueba de que los RR. Obispos han caminado con tino en esta materia delicada, conociendo sin duda los gravísimos inconvenientes con que se iba á tropezar. El fiscal puede decir que á pesar de ser varias las causas, por las cuales segun los cánones y las antiguas leyes se puede privar de la sepultura eclesiástica, no las ha visto reducidas á práctica, ni sabe que se haya disputado respecto de enterramiento de los usureros, clase de hombres muy abundantes ahora, ni de los monjes que tenían peculio, ni de los toreros, ni de los duelistas, ni de los ladrones y salteadores que murieron en su crimen. Respecto á los suicidas de que habla el Gobernador de..., una ficción piadosa los considera como locos, y hasta ahora han sido y son llevados á los cementerios en donde descansan con sus hermanos que han muerto en la comunión de la Iglesia.

Véase, pues, si hay justos motivos para dudar si el cánón del Concilio lateranense se halla en observancia en España, y si no es mas legal, mas conforme con nuestra disciplina, con nuestras costumbres y con nuestras tradiciones, seguir teniendo la prudente tolerancia que los celosísimos prelados de la Iglesia española han acostumbrado á usar en esta clase de materias.

Y esto es muy conforme al espíritu de la Iglesia que, llena de dulzura, no propende á abrumar de aflicción á familias inocentes, ni considera que á la muerte se hallan separados de su seno los hijos que, aunque extraviados, han podido tener un momento de contrición en los últimos de su vida. ¿Y qué prelado se atreve, y menos con la ligereza que se ha hecho en el presente caso, á considerar como separado de la Iglesia, como réprobo, como condenado á las penas del infierno á uno que recibió el bautismo, y que despues se separó del cumplimiento de sus deberes, pero sin entrar en otra religion y sin hacer abjuración solemne de la católica? ¿Quién á escudriñar de este modo los altos juicios de Dios? De seguro que si el R. Obispo de..... hubiera reflexionado sobre este punto, habria procedido de manera diferente.

Pero supongamos por un momento que el cánón del Concilio lateranense esté vigente en España; supóngase que sin inconveniente alguno puede ejecutarse; que el prelado ha recibido del cielo el don de saber si el pecador hizo ó no en los últimos momentos de la vida un acto de contrición, ¿podrá hacerse lo que en este caso se ha practicado? El ministro fiscal no lo cree: siguiendo las buenas doctrinas canónicas sostiene que los prelados eclesiásticos no pueden imponer gubernativamente penas que priven para siempre de los derechos de la sociedad cristiana, que para eso hay vía contenciosa, que en ella han de quedar francos á las partes los recursos de fuerza, y que de este modo viene la sociedad civil en auxilio de sus súbditos cuando no se guarda la ritualidad de los juicios y se les atropella injustamente.

Y si entramos en la misma cuestión ¿qué triste idea se forma de todo este negocio? Al R. Obispo le bastó que un párroco hiciera una denuncia para pronunciar el mas terrible de los fallos que pronuncia la Iglesia; se olvidó de que no habia amonestado á C., y que no sabia tampoco si lo habia hecho el párroco; no tuvo en cuenta que sin audiencia lanzaba una pena terrible; no reparó que con justicia se le podia hacer el cargo de que se ensangrentaba con las cenizas de uno á quien no habia procurado sacar de sus errores y de su mal camino durante la vida. Si el R. Obispo hubiera considerado todas estas cosas, si hubiera tomado en cuenta que su precipitada resolución imponia una nota infamante á toda una familia, si hubiera parado la atención en las consecuencias probables de lo que hacia, de seguro que se hubiera abstenido de paso tan impremeditado y tan poco disculpable. Y de notar es que en la misma comunicacion en que el párroco daba cuenta del caso y pedia instrucciones, decia con candidez que no sabia cuándo ni cómo C. habia muerto, porque nadie entraba en la casa; es decir, que ignoraba si habia muerto contrito, si deseaba ó no recibir los auxilios de la Iglesia, si queria reconciliarse con ella, si daba muestras de piedad y arrepentimiento. Y el prelado que nada de esto sabia, pronunciaba implícitamente una excomunion condicional; por inducciones inferia que el finado se habia querido separar de la Iglesia; hablaba de sus doctrinas irregulares sin saber cuáles eran, y si estaban bien ó mal calificadas por el párroco, apreciacion bien sospechosa para este ministerio; incluia entre las causas para privar de sepultura algunas que no son canónicas, y en lugar de ordenar en su caso que constan-

do haber muerto en la impiedad, se le negase la sepultura, decía que esto se hiciese mientras no constare que antes de morir había dado señales de arrepentimiento. Basta lo dicho para que la Cámara se convenza de la irregular conducta observada por el reverendo Obispo de..... en todo este negocio, sin que de su contestación al Gobernador de la provincia pueda inferirse nada en su disculpa.

La conducta del párroco es asimismo bien poco prudente; grande responsabilidad ante Dios ha contraído, si oportunamente no procuró con su influencia paternal traer á mejor camino á su feligrés á quien creía tan extraviado. Y de presumir es que no lo hiciera, cuando nada dijo al diocesano en su tantas veces mencionada comunicacion. El párroco es el que con su indiscrecion ha comprometido principalmente al prelado.

Respecto al Alcalde y Gobernador, necesario es decir en honor de la verdad que han comprendido perfectamente sus deberes. El último ha dado pruebas de tacto, de saber y de firmeza en este negocio delicado: digna es su conducta de la aprobacion que el Gobierno se ha apresurado á dar.

Réstame solo, en virtud de lo expuesto, manifestar como creo que debe terminar este expediente. De suponer es, que D. B. L. C. habrá sido enterrado en el cementerio con los demás fieles en justa obediencia de las disposiciones del Gobernador de la provincia. Si no lo fuere, lo primero es que se cumpla lo que acordó, á cuyo efecto si fuere necesario, debe ir el Gobernador á ejecutarlo.

De presumir es tambien que en vista de la comunicacion última del Gobernador al diocesano, este habrá desistido por su parte. Bajo tal supuesto, el fiscal cree que bastará que se le haga una severa amonestacion por conducto del Ministerio de Gracia y Justicia. Pero si no hubiere desistido, si aun continuase en el mal camino comenzado, cree el fiscal que el Gobierno en vista de lo que ocurra ó haya ocurrido debe reservarse la adopcion de otras medidas más eficaces.

Al párroco convendrá tambien que se le haga una demostracion parecida por medio del Gobernador de la provincia.

Por último, para evitar la reproduccion de hechos semejantes, que pueden tomar mayores proporciones que este, seria conducente indicar al Gobierno la conveniencia de dar una circular con el carácter de reservada á los prelados para que por medios conciliadores y prudentes procuren evitar la repetición de conflictos como este. La Cámara, sin embargo lo dicho, acordará como siempre lo

que mejor estime.—Madrid 3 de marzo de 1855.»—Gomez de la Serna.

V.

Necesidad de medidas generales para su policia, conservacion y designacion de sepulturas.

Carecemos de reglamentos administrativos sobre materias de grande importancia; pero la relativa á cementerios es la que mas urgentemente reclama la preferente atencion del Gobierno.

En todos los pueblos, ó en casi todos por lo menos, se han construido estos asilos de la muerte; pero se han construido de muy mala manera, muchos con carácter provisional, en medio de mil conflictos sobre los fondos con que debian costearse las obras, y descuidándolos despues de tal modo que causa lástima el estado de abandono en que los tiene la generalidad de los pueblos, ¡Como si no fueran ellos el sagrado depósito de las cenizas de nuestros padres! ¡Como si no estuvieran destinados á serlo tambien de las nuestras, y de las de nuestros hijos queridos, y de las de mil y mil generaciones que se sucederán!!!

Estudiando nosotros la causa de tanta y tan extraña indiferencia por parte de los pueblos, creemos haberla encontrado en esa interinidad de muchos cementerios, y en la falta de iniciativa y de resolucion por parte del Gobierno, para asegurar á las municipalidades la propiedad ó el condominio por lo menos de aquellos á que hayan contribuido con sus fondos. Todo lo que ha hecho está reducido á prohibir que se hagan enterramientos en los templos y á encargar que se construyan cementerios; y esto lo ha conseguido, porque bueno ó malo, pequeño ó grande, con buenas ó con malas condiciones higiénicas, la verdad es que cada pueblo ha dado razon de tener el suyo.

Natural era, sin embargo, que tomando en cuenta el legislador la muy notable circunstancia de haberse costeados algunos con fondos de las fábricas, otros con fondos municipales y otros con fondos mistos, y atendiendo tambien á que

muchas familias habian adquirido la propiedad de supulturas en los templos, hubiese dictado disposiciones oportunas para arreglar de una manera conveniente estos y otros puntos que hoy son objeto de frecuentes controversias; pero se encerró en el silencio y este produjo las dudas, y á las dudas siguieron los conflictos, y de todo provino esa indiferencia y ese abandono de que nos lamentamos, hasta tal punto que muchos Alcaldes no se creen obligados á velar por la conservacion del orden y de la salubridad, y de todo lo relativo á las inhumaciones y exhumaciones y policia de las sepulturas, á la vez que los párrocos no se cuidan tampoco de otra cosa que de cobrar los derechos de aquellas, disputando á veces palmo á palmo, si han de ser tantos ó cuantos y guardándoselos íntegros, sin consideracion á que los cementerios necesitan policia y reparos, y sin consideracion tampoco á que los fondos municipales contribuyesen ó no á las obras de los mismos.

No se crea que lo que decimos en general de un inmenso número de cementerios de las villas y poblaciones rurales, queremos decirlo tambien de los de Madrid y otras capitales de provincia, donde los reglamentos municipales, trabajados algunos de ellos en medio de las dificultades que ofrecia la oposicion del clero, han venido á suplir la falta de reglamentos generales y de disposiciones legislativas. Los cementerios de las sacramentales de Madrid, los de Barcelona, Valladolid, Búrgos, y en general de todas las capitales de provincia, son dignos de la cultura del siglo y del decoro y veneracion con que deben mirarse los restos mortales del hombre; pero en la gran mayoría de las villas de España, repetimos que causa lástima tanto olvido y tan incalificable abandono, á que debe ponerse pronto y eficaz remedio.

No pretendemos nosotros que se lleve el lujo y se despliegue ostentoso aparato en los cementerios y en las sepulturas; lo que si queremos es que desaparezca la fealdad de ese cuadro, que se construyan cementerios modestos,

pero decorosos, dignos del objeto á que están destinados, y que nos inspiren veneracion y culto; queremos que se fijen reglas precisas y terminantes para que desaparezcan las frecuentes contiendas de los párrocos con la autoridad municipal y con los feligreses, sobre la exaccion de derechos de sepulturas y sobre otros puntos; y queremos, por último, que sea mas rigida, mas vigilante y esmerada la policia de los cementerios, porque el buen orden y la salubridad así lo exigen (1).

Pero no lo confiemos todo á lo que el Gobierno pueda disponer, ni esperemos á tanto. Las municipalidades pueden y deben iniciar todas las mejoras que sean convenientes en tan importante asunto. Si el cementerio que tiene un pueblo es pequeño, ensancharlo: si la situacion ó el terreno no reúnen las mejores condiciones higiénicas, acordar la construccion de otro: si se observa que la autoridad no tiene la intervencion debida en los enterramientos, corregir desde luego este descuido: si hay abusos en la exaccion de derechos á los fieles, acordar que se hagan las reclamaciones oportunas, y no desfallecer hasta que desaparezcan aquellos (2). Y si por último faltan reglas de buen orden, porque cada cual hace las hoyas donde se le antoja sin consultar la antigüedad de la anterior inhumacion etc. etc., establecer formalidades para que cese tan funesta costumbre.

VI.

Haciéndonos cargo de la R. O. de 25 de noviembre de 1857 en el número de *El Consultor* correspondiente al 16

(1) Mientras no se dicten otras mas terminantes, tener presentes las contenidas en las leyes recopiladas, sobre la parte higiénica, derechos de rotura y de entierro, clases de sepulturas etc

(2) En muchas parroquias, ó no hay arancel de derechos parroquiales, ó no es tan arreglado como debiera serlo, ó no se observa. La formacion de aranceles parroquiales ó su reforma no es materia exclusiva de la autoridad eclesiástica, pues tiene y debe tener tambien intervencion la autoridad civil, segun dijimos en la pág. 136 de la coleccion de *El Consultor* de 1857.

de diciembre del mismo año decíamos:

En la parte oficial de este número habrán visto nuestros lectores la R. O. de 25 de noviembre último expedida por el Ministerio de la Gobernación, en la cual, bajo el supuesto de que hay todavía 2.655 pueblos que carecen de cementerio, y deseando poner remedio á esta falta, se previene á los Gobernadores que adopten dentro de sus facultades las medidas mas eficaces para que en el menor término posible se construya, cuando menos, para aquel objeto un lugar cercado fuera de las poblaciones, previa la aprobacion competente del presupuesto y obras que al efecto se propongan por los respectivos Ayuntamientos.

Nosotros no desconocemos la notoria conveniencia de la disposicion contenida en la indicada Real orden, urgentemente reclamada por la pública salubridad en todos los pueblos á que se refiere, que con descrédito de la Administración han permanecido indiferentes hasta el dia en tan importante asunto; pero atendidos los términos en que está concebida, y teniendo en cuenta las necesidades de este servicio, no podemos menos de lamentarnos de que la medida adoptada haya sido tan incompleta, dando lugar á que sigan como hasta aqui nuestros cementerios en el lastimoso estado de abandono en que los tienen, sin culpa suya, la generalidad de los pueblos.

Sin quererlo ni presumirlo siquiera, porque esto seria hacer un agravio á la notoria ilustracion del señor Ministro que la refrenda, siéntase en la Real orden de que nos ocupamos un precedente funesto. El Gobierno solo exige en ella, se dá por contento, con que en los 2.655 pueblos se construya un lugar cercado fuera de la poblacion con destino á cementerio; y una buena Administración no puede ni debe satisfacerse con esto; y aun satisfaciéndose respecto de los indicados pueblos por ser acaso pequeñas aldeas y escasos recursos, no debió tampoco consignarlo en una Real-orden que vé la luz pública en la *Gaceta*.

Decimos que se ha sentado un mal precedente y que no estamos muy de acuerdo con el contenido de la Real orden, y es así en efecto. A una Administración ilustrada no la basta que en 43.601 pueblos se haya construido cementerio, como no la debe bastar tampoco que se construya en los 2.655 restantes (1). Por el contrario debe procurar, debe exigir que los construidos y los que se construyan reúnan todas las condiciones higiénicas que sean necesarias para la salubridad pública; debe procurar á la vez que aunque modestos, mas ó menos, segun los casos y circunstancias de cada localidad, sean siempre decorosos y dignos del objeto á que están destinados, de modo que inspiren veneracion y culto; debe dictar todas las reglas que reclama el buen orden de los enterramientos; y debe, por último, resolver lo conveniente sobre su propiedad y sobre los derechos de sepulturas, por lo que esto interesa á la conservación de aquellos lugares, por lo que interesa tambien á su buena policia interior, y por lo que afecta al derecho de los pueblos y al de los particulares.

Lo que hoy está pasando en muchas parroquias, el Gobierno debe saberlo mejor que nosotros. Hay ciertas familias que tenían adquirida la propiedad de sepultura en las iglesias, y creyéndose todavía con algun derecho á ellas producen á cada paso protestas y reclamaciones (2). Hay ciertos pueblos que se niegan á pagar los derechos de rompimien-

(1) En la R. O. de 22 de noviembre de 1830 se lamentaba el Gobierno de que tan malas eran las condiciones higiénicas de muchos nuevos cementerios, que resultaban todavía mas perjudiciales á la salud pública los enterramientos en ellos que en las mismas iglesias. Y estamos en gran parte conformes con esta asercion.

(2) Y las producen en muchos casos con razon, pues creemos que la construccion de cementerios, al menos cuando se han hecho con fondos de las iglesias, no han podido perjudicar los derechos de las familias, y esto mismo se deduce de las disposiciones 6.^a y 7.^a del reglamento del Real sitio de San Ildefonso que se cita en la ley 1.^a, tit. III, lib. I de la Novísima Recopilacion inserta con el reglamento en la pág. 28.

tos, fundándose en que el cementerio se ha construido á sus expensas, y que nada tiene que ver el párroco en lo relativo al mismo (1). Es general tambien en muchos Alcaldes, y esto no lo extrañamos, el no saber que están obligados á velar por la conservacion del orden y de la salubridad y de todo lo relativo á inhumaciones y policía de los cementerios y de las sepulturas. Es, por último, muy frecuente que los párrocos no se cuiden tampoco de otra cosa que de cobrar los derechos de rompimientos ó sepulturas con arreglo á los antiguos aranceles, ó haciendo otros nuevos la autoridad eclesiástica por sí y ante sí sin el concurso de la temporal, llevando su desprendimiento hasta el punto de no destinar ni la mas pequeña parte á policía y reparos, ensanche y mejoras del cementerio; y esto aunque los fondos municipales contribuyesen ó no á la construccion de los mismos.

Es fiel traslado el cuadro que acabamos de trazar, de lo que está pasando en gran número de pueblos, y una Administracion celosa é ilustrada no debe consentir con su silencio que semejante estado continúe por mas tiempo. Por eso hemos hallado incompleta é inconveniente la R. O. de 23 de noviembre.

CENA DE AUSENCIA Y PRESENCIA. En el gobierno antiguo de Aragon llevaba este nombre la contribucion de 6 sueldos y 6 dineros (3 rs. con 6 mrs.) que pagaba cada vecino, cabeza de familia, para la manutencion del Monarca. (Diccionario de Canga.) Es una de las prestaciones abolidas por la legislacion de señorios.

CENCERRADAS. Sin detenernos á definir la cencerrada, porque no cabe dificultad en su acepcion, solo diremos, que el Código penal en el núm. 14 del artículo 485, y en el 2.º del 493, castiga no solo á los que las promueven, excitan, y dirigen *en ofensa del alguna persona ó del sosiego de las poblaciones*, sino hasta

á los que simplemente toman parte en ellas. Se han considerado injuriosas por una parte, y ocasion de desórdenes al mismo tiempo. Carlos III quiso cortar de raíz el abuso introducido en la Corte, de dar cencerradas á los viudos y viudas que contraigan segundos matrimonios, y obviar los alborotos, escándalos, quimeras y desgracias; y las prohibía bajo la pena de 100 ducados y cuatro años de presidio. Hoy son simplemente una falta, y es de notar que la sancion de los artículos citados se extiende no solo á las cencerradas á viudos y viudas, sino á cualquiera otra en ofensa de alguna persona ó del sosiego de las poblaciones.

CENSATARIO.—V. CENSO. (contrato.)

CENSO. Palabra derivada de *censeo* que significa contar, describir, valuar. En este sentido se dice: *censo de poblacion*, *censo de riqueza*. Tambien significa un contrato, en virtud del cual existe el derecho de cobrar cierto rédito ó pension anual del dueño ó poseedor de una cosa inmueble.

CENSO (contrato). Derecho de percibir en virtud de contrato, ó de disposicion testamentaria etc. cierto cánon pension ó rédito anual del dueño ó poseedor de una cosa inmueble. Se llama *censatario* el que paga el rédito ó pension, y *censualista* el que la percibe. Hay tres especies de censos, que son:

Censo enfiteutico ó enfiteusis. Este consiste en el derecho de exigir de otro cierto cánon ó rédito anual por haberle trasferido para siempre ó para largo tiempo el dominio útil de una finca ó cosa raiz. El censualista ó quien percibe el cánon anual se llama *dueño directo*, y el que la paga *dueño útil ó enfiteuta*. Este censo fué de grande uso en lo antiguo, estableciéndose principalmente sobre terrenos incultos, con el fin de que el trabajo y la industria del enfiteuta los mejorase haciéndolos productivos.

Corresponde al dueño directo: 1.º El derecho de cobrar el cánon ánuo, cayendo en comiso la cosa para el mismo si no se le paga en tres años. 2.º El de quedarse con la finca por el mismo precio cuando la venda el enfiteuta, cuyo dere-

(1) Tambien es un error: la ley no ha querido perjudicar á las parroquias en los derechos de rotura, segun se ve por la disposicion 7.ª del reglamento citado.

cho se llama de *fadiga* ó *tanteo*. 3.º El de cobrar por *laudemio* ó *luismo* el 2 por 100 del precio de la venta que debe pagar el nuevo poseedor.—V. LAUDEMIO.

Corresponde al enfiteuta, como dueño útil que es de la cosa acensuada, percibir los productos de la misma, variarla de forma, imponer sobre ella gravámenes, censos, servidumbres, disponer de ella por testamento y darla en dote á sus hijas sin adeudar laudemio, y venderla también con conocimiento del dueño directo. La naturaleza ordinaria de este censo es la perpetuidad, y así debe considerarse cuando no se exprese tiempo.

Muy semejantes á los censos enfiteuticos son los *foros* tan comunes en Galicia y Asturias, y aun en otras provincias de España.—V. FORO.

Censo reservativo. Consiste en transferir el dominio pleno de una finca ó cosa inmueble reservándose el derecho de percibir una pension anual en frutos ó dinero de la persona que la recibe ó de cualquiera otra que la esté poseyendo. Parece este censo el enfiteutico, pero se diferencia no obstante en mucho, puesto que en el reservativo adquiere el censatario el pleno dominio y no hay laudemios ni tanteos, ni incurre en comiso, aunque no pague el cánón etc. si bien podrá ser apremiado á ello bajo la responsabilidad de la hipoteca.

Censo consignativo. Este es de muy distinta naturaleza que los anteriores. Consiste en la adquisicion de un capital bajo la garantia de una finca ó cosa inmueble, sujetándola al gravámen de un cánón ó pension anual. Este censo es semejante en sus efectos á un contrato hipotecario, si bien se diferencia en mucho de él. El censatario conserva el pleno dominio de la finca gravada, y claro es que puede por lo mismo enajenarla sin mas limitacion que manifestar el comprador los gravámenes que tiene.

Reconocimiento de censos y pago de réditos. Todo censualista tiene derecho á que el nuevo poseedor de la finca sobre que está impuesto el censo renueve la obligacion del primitivo censatario, pudiendo, si no se presta, ser com-

pelido á ello en juicio, así como al pago de sus réditos. La escritura de reconocimiento sólo acredita que el censo no está redimido.

Para el cobro de los réditos puede emplearse la vía ejecutiva por los de los últimos nueve años, y si se debieren mas se pedirán en juicio ordinario segun su entidad. Cuando el dominio útil de un predio ó finca se haya dividido entre muchos, lo cual es muy frecuente, puede el dueño directo obligarles á proratear entre sí el cánón, nombrando recaudador ó cabezalero de ellos al mayor porcionero que cobra de los demás y hará al dueño el pago íntegro.

Dimision de la cosa censada. El censatario puede librarse del gravámen del censo, sea reservativo ó consignativo y de la obligacion de reconocerlo y de pagar sus réditos, dimitiendo la cosa censada á favor del censualista, dimision que está obligado á admitir este, si bien con la justa reserva de su derecho en caso de desperfectos abusivos. (*Tribunal Supremo sentencias de 20 de enero de 1859, 29 de diciembre de 1864 y 6 de abril de 1866*)

Prescripcion de capitales de censos. Los capitales de censos al quitar, han dicho los autores, que nunca prescriben y que solo se prescriben los réditos; pero no es sólida esta doctrina, pues el Tribunal Supremo en sentencias de 24 de enero y 9 de marzo de 1863, ha consignado bien explícitamente la de que la accion real hipotecaria que compete al censualista, queda prescrita cuando transcurre mas tiempo que el señalado en la ley 5.ª, tít. VIII, lib. XI de la Novísima Recopilacion (63 de Toro), sin que por parte de aquel se haya deducido reclamacion alguna. Esta misma doctrina ha servido también de fundamento á la R. O. de 23 de abril de 1866 para desestimar el reconocimiento de un censo como carga de justicia.—V. CARGAS DE JUSTICIA: PRESCRIPCION.

Division y reduccion de los censos. Tratan de este asunto los arts. 383 al 388 de la Ley hipotecaria y conceden lo mismo al censatario que al censualista

el derecho de exigir la division y reduccion del gravámen impuesto sobre diferentes bienes con un censo ó hipoteca voluntaria. La division se hará entre los que basten para responder de un triplo del capital, por escritura pública, de acuerdo mútuo entre los interesados, ó por el juez en juicio ordinario, conforme á lo prevenido en los referidos artículos.

Redencion de los censos. Hoy se pueden redimir todos los censos, aunque se hayan constituido con carácter de perpetuidad. Dispúsose así por la ley 24, tit. XV, lib. X de la Nov. Recop., y aunque fué derogada por Real cédula de 3 de agosto de 1818, la de señorios de 3 de mayo de 1823, restablecida por la de 2 de febrero de 1837, lo dispuso de nuevo de una manera terminante respecto de toda clase de censos. Las reglas para la redencion son las establecidas en los arts. 4.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º y 12 de la citada ley recopilada, en donde se dice la manera de capitalizarlos para dicho objeto (1). El principio de la redencion debe considerarse establecido á favor del censatario, y de consiguiente, este podrá compeler judicialmente al censualista para que le otorgue la redencion, pero no el censualista al censatario para que la haga.

Art. 9.º, ley 3 de mayo de 1823.

«Así los laudemios como las pensiones y cualesquiera otras prestaciones anuales de dinero ó frutos que deban subsistir en los enfiteusis referidos, sean de señorio ó alodiales, se podrán redimir como cualesquiera censos perpétuos, bajo las reglas prescritas en los arts. 4.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º y 12 de la R. C. de 17 de enero de 1805 (ley 24, título XV, lib. X, Nov. Rec.); pero con la circunstancia de que la redencion, se podrá ejecutar por terceras partes á voluntad del enfiteuta, y que se ha de hacer en dinero ó como concierten entre sí los interesados, entregándose al dueño el capital redimido, ó dejándolo á su libre disposicion.»

Arts. 4.º al 8.º y 12, ley 24, tit. XV, lib. X, Nov. Rec.

4.º Las redenciones de los censos al qui-

tar, perpétuos, y demás cargas en que su dueño no tenga mas derecho que á percibir el tributo ó pension en los plazos estipulados, se harán por el capital que resulte de las escrituras de imposicion.

5.º Cuando en estas no se expresare, se formará con arreglo á la práctica que rija en cada pueblo por ley, estatuto, ordenanza ó costumbre generalmente recibida, procediéndose, en el caso de no haberla en el pueblo, por la que gobernare en la cabeza de partido, y en su defecto, por la de la capital de la provincia ó reino.

6.º En las redenciones de los censos enfiteuticos en que el poseedor de la finca solo tenga el dominio útil, correspondiendo el directo al dueño de la carga, se tendrá presente en primer lugar si los poseedores de ambos dominios hubiesen estipulado la estimacion que deba darse al capital del cánon, y al de los demás derechos dominicales, conocidos en las provincias con los respectivos nombres de licencia, fadiga, tanteo, laudemio, luismo, comiso ó cualquier otro, ó convenido entre sí las reglas, por las cuales deba procederse á la estimacion referida; y en tal caso se observarán puntualmente estos convenios.

7.º Si no hubiere tales pactos, se formarán los capitales por el valor que en cada pueblo, partido ó provincia se dé por la misma ley, estatuto ó práctica al cánon enfiteutico, y á los derechos expresados.

8.º Finalmente, á falta de convenios particulares y de práctica constante, se procederá á la redencion, consignando por el cánon un capital regulado á razon de 1 por 100, y 66 y dos tercios al millar, y por derecho de laudemio, la cantidad que en el espacio de 25 años sea capaz de ređituar al 3 por 100, otra igual al importe de una cincuentena del valor de la finca, rebajadas las cargas á que esté sujeta, ó lo que es lo mismo, 2 y 2 tercios por 100 de su precio líquido.

12. Cuando los réditos, tributos ó pensiones de las cargas que se redimieren se pagaren ó cumplieren en granos ú otra especie que no sea dinero, se formará el capital por el valor que hayan tenido los respectivos frutos en un año comun del quinquenio anterior á la redencion, excluyendo los extraordinarios estériles como los dos últimos.—V. SEÑORÍOS.

Consúltense además en HIPOTECA los arts. 149 á 153 de la Ley hipotecaria.

Jurisprudencia.

Además de la doctrina de jurisprudencia.

(1) Véase íntegra esta ley en el artículo SEÑORÍOS.

dencia que dejamos consignada en el fondo de este artículo y por notas, hé aquí algunos otros puntos de notable interés.

Sentencia de 20 de enero de 1859.

I.—Dimision de la cosa censida.—Declarando el Tribunal Supremo por esta sentencia, haber lugar á la casacion, y casando y anulando la dictada por la Sala 3.^a de la Audiencia de esta corte, en pleito promovido por la Real Casa y patrimonio de S. M. sobre que se declarase válida la dimision de un censo, se establece en los considerandos la siguiente doctrina:

«Que es doctrina legal inconcusa, enseñada constantemente en España y recibida sin contradiccion, que el censatario puede librarse del gravámen del censo y de la obligacion de reconocerlo y de satisfacer sus réditos, dimitiendo la cosa censida; estando por consiguiente el censalista obligado á admitirla, si bien con la justa reserva de su derecho en el caso de desperfectos abusivos:

»Que esta doctrina se halla apoyada por la ley 8.^a, tit. XV, lib. X de la Nov. Rec. y aun sirve de fundamento á sus disposiciones:

»Que la mencionada ley afude á todos los censos redimibles y al quitar, lo mismo á los consignativos que á los reservativos, y además lo explica así la siguiente, 9.^a del mismo título y libro.»

Sentencia de 26 de setiembre de 1860.

II.—Los réditos de censos pueden consignarse en granos ú otra especie que no sea metálico.—Declara el Tribunal Supremo haber lugar al recurso de casacion, y casa y anula una sentencia de la Audiencia de la Coruña en pleito sobre nulidad de unas escrituras de venta ó censo de unos ferrados de trigo, renta en saco, estableciendo como fundamento que en Galicia está autorizado por la costumbre el contrato especial llamado *de venta de rentas en saco*, y la siguiente doctrina general:

«Que la costumbre há poderio de desatar el fuero antiguo, si fuere fecho antes que ella, con arreglo á la ley 6.^a, tit. II, Partida 1.^a citada en el recurso, y que el fuero antiguo alegado en la demanda es la ley 3.^a, tit. XV, lib. X de la Nov. Rec. promulgada en 1534, que prohíbe la consignacion de

prestaciones en especie, que no sean dinero:

»Además que la ley 22, tit. XV, lib. X, Nov. Rec. en sus párrafos 1.^o y 10 y en el 12 la 24 del mismo título y libro, promulgadas en 1801 y 1805..... reconocen implícitamente la derogacion por la costumbre de la ley anteriormente citada, al declarar que pueden pagarse los réditos ó tributos en granos ú otra especie que no sea dinero.

»Que por tanto, la Sala no dando á las escrituras de que se trata la fuerza legal que en sí tienen y alterando en su esencia y en su forma los contratos que autorizan ha infringido las mencionadas leyes, 6.^a, tit. II, Partida 1.^a, y 22 y 24, tit. XV, lib. X de la Nov. Rec..... (CL. t. de 1860, p. 549.)

Sent. de 28 octubre de 1862.

III.—Contribucion sobre los censos.—El pacto estipulado y consignado en la escritura de imposicion de un censo con anterioridad á la ley de 23 de mayo de 1845, de que el censalista habia de percibir las pensiones íntegramente, y libres de todo pecho, ó tributo real, ó concejil que pudiera imponerse en lo sucesivo, es lícito siempre y arreglado á las leyes que entonces regian, sin que haya variado de naturaleza por virtud de las disposiciones posteriores.

Tal es la doctrina que establece el T. S. en la referida sentencia, declarando no haber lugar á la casacion de la dictada por la Audiencia de Sevilla, condenando al conde de Montijo á pagar á D. José Diaz Aranda los réditos de un censo sin ningun género de deduccion ni descuento por razon de contribucion, no habiéndose infringido por lo tanto las leyes y disposiciones citadas en el recurso, que entre otras son la R. O. de 11 de setiembre de 1850, la circular de 4 de abril de 1851; la declaracion 16 de la ley de 23 de mayo de 1845, y la base 1.^a, letra A de la misma, segun la cual, y su número 5.^o, están sujetos al pago de la contribucion de inmuebles los censos, tributos, cánones enfiteúticos, foros, subforos, pensiones y cualquiera otra imposicion perpétua, temporal ó redimible, establecida sobre los mismos bienes. (CL. t. de 1862, p. 800.)

Sent. de 9 noviembre de 1863.

IV.—En sentido inverso hé aquí otro

caso en que, á falta de pacto expreso, se establece la doctrina de que *el pago de las pensiones censuales debe hacerse con deducción de la contribucion de inmuebles*. Promovido pleito por D. Jacinto Piera, en el Juzgado de San Beltran de Barcelona, contra D. José Nolla, con la pretension de que se declarase debia este de pagarle las pensiones de un censo de su propiedad, sin descuento alguno de contribuciones, como expuso el demandado en el juicio de conciliacion, sustanciado por sus trámites, dictó sentencia el juez inferior, que revocó la Sala segunda de la Audiencia de dicha ciudad, declarando que don José Nolla tenia derecho, al pagar á don Jacinto Piera las pensiones del censo de 13 libras anuales que prestaba por razon de la casa que poseia en el pueblo de Sarriá, á hacer el descuento del tanto por ciento á que ascendian las contribuciones que se le habian impuesto por la misma finca.

El demandante interpuso recurso de casacion, citando entre otras leyes el R. D. de 23 de mayo de 1845, segun el que la contribucion de inmuebles gravita *pura y simplemente sobre los productos del suelo y de la riqueza pecuaria*, sin consideracion á que los primeros sean ó no gravados con algun censo; el reglamento aprobado por R. D. de 18 de diciembre de 1846, corroborando lo en el anterior dispuesto, sin otra baja que la cuarta parte de los alquileres; el contenido literal del pacto de la escritura, en que se estableció el censo de 16 de agosto de 1779, porque ínterin que este impone al enfiteuta la obligacion de pagar las contribuciones correspondientes al terreno y á las casas, la sentencia dice que únicamente se le impuso la correspondiente al terreno; la doctrina legal de que la confesion de parte produce prueba plena; la jurisprudencia establecida por los Tribunales, contraria en un todo á lo resuelto en esta sentencia, y finalmente la ley 5.^a, tit. XXII, Part. 3.^a, y el art. 61 de la Ley de Enjuiciamiento civil. Y el Tribunal Supremo desestimó el recurso por

sent. de 9 de noviembre, consignando como fundamento la doctrina siguiente:

«Considerando que la obligacion constituida por la escritura de 16 de agosto de 1779 de pagar el enfiteuta, además de la pension de 13 libras anuales, el Real Catastro que por el trozo de tierra dado en establecimiento ó casas que en él se edificasen correspondiera satisfacer, se refiere únicamente á la contribucion con que el mismo terreno y casas estuviesen gravados ó se gravasen en lo sucesivo, no á la que se impusiese sobre la pension, porque así se consigna con palabras terminantes, ni la expresion genérica *sin daño ni costas del otorgante*, puede dar lugar á otra inteligencia, ni mucho menos significar un pacto especial:

»Considerando que si pudiera haber alguna duda sobre la inteligencia del contrato, desaparece, ya se atiende á la manera en que venia satisfaciéndose esta clase de impuestos, para los cuales se llevaban dos distintos libros en la oficina correspondiente; uno referente á las fincas, y el otro á los censos ó pensiones, exigiéndose directamente el tributo á los respectivos perceptores, como se verificó hasta 1845 del que correspondia á la de autos, ya á la circunstancia de haberse entendido así el convenio por los mismos interesados, cobrando siempre el cánón con el correspondiente descuento, como por el recurrente en concepto entonces de apoderado; y que por lo tanto no se infringe por la sentencia el contrato:

»Y considerando que no es exacto, como se pretende por el recurrente, que el Real decreto de 23 de mayo de 1845 establezca que la contribucion de inmuebles gravita *pura y simplemente sobre los productos del suelo*, sin consideracion á que este sea ó no gravado con algun censo, sino antes por el contrario, su principio fundamental es que cada uno contribuya en proporcion de las utilidades que reporte de la materia imponible, y declarado el censo en este concepto bien inmueble, la cuota con que se le grava es independiente de la impuesta al producto líquido de la finca á que esté afecto, sin que la circunstancia de exigirse directamente del propietario varíe su naturaleza, puesto que al mismo tiempo consigna la facultad de descontar al censualista lo que hubiese satisfecho correspondiente á la pension ó censo, á no haber pacto especial en contrario que, como legítimo, seria eficaz, porque si se diese otra inteligencia al R. D. y al regl. de 18 de diciembre de 1846, equivaldria á declararse libres de contribucion los censos, y á

que no es una verdad el art. 2.º, párrafo 5.º del referido Real decreto, é ilusorio lo prevenido en los arts. 54 y 55 del mismo, sin que por tanto hayan sido infringidos aquellos por la sentencia.» (*Gac. 13 noviembre de 1863.*)

Sentencia de 26 de febrero de 1867.

V.—Con arreglo á las leyes 3.ª, título XIV, Part. 1.ª, y 28, tit. VIII, Partida 5.ª, los censos se constituyen legítimamente cuando se consignan en escritura pública; y según doctrina de jurisprudencia admitida por el T. S., puede también comprobarse su legitimidad por la posesión inmemorial que equivale á suficiente título. (*Sentencia citada.*)

Sentencia de 14 de mayo de 1867.

VI.—¿Son prescriptibles en Aragón? Este importante punto no se decide de una manera terminante, pero se establece que aun siéndolo, habiéndose hecho varias cabrevaciones de un censo en distintas épocas y últimamente en 1834 sin contradicción, se ha interrumpido y no ha podido tener lugar la prescripción con arreglo á la ley 29, tit. XXIX, Partida 3.ª (*Sentencia de 14 de mayo de 1867, pág. 333.*)

Sentencia de 27 de enero de 1865.

VII.—El auto en que se manda pagar pensiones de un censo sin haber precedido un juicio formal sobre la existencia ó inexistencia del mismo censo no puede considerarse como ejecutorio para el pago de pensiones sucesivas; ni tampoco puede decirse que se ha confesado el censo por el simple allanamiento al pago en épocas anteriores. En tal caso la sentencia que declara obligado al censalista á presentar la escritura de imposición ó reconocimiento del censo para los pagos sucesivos no contraría la cosa juzgada, ni infringe las leyes relativas á los juicios pronunciados en contra de otros finidos y dados por conocimiento. (*Sentencia de 27 de enero de 1865 sobre cancelación.*)

CENSOS DESAMORTIZADOS. Los censos enfiteúticos, consignativos y reservativos, los de población, los treudos, foros, los conocidos con el nombre de

carta de gracia, y todo capital, cánon, renta, ó prestación de naturaleza análoga pertenecientes al Estado y á manos muertas de carácter civil, están declarados en redención y venta por las leyes de 1.º de mayo de 1855, 27 de febrero de 1856, 11 de marzo de 1859 y 15 de junio de 1866, que pueden consultarse en DESAMORTIZACION con las demás disposiciones sobre este asunto. La redención puede verificarse hasta el acto de la subasta, que tenga lugar para la venta de los mismos censos, debiendo suspenderse el remate, si se solicitare la redención antes de haberse terminado.

CENSO DE POBLACION DE GRANADA (ó RENTA DE POBLACION DE GRANADA). La renta consistente en el producto de un módico cánon con que se dieron á los nuevos pobladores en el reino de Granada las tierras y edificios confiscados á los moros que se sublevaron, faltando á la capitulación con que se conquistó aquel reino. En el presupuesto de ingresos del Estado de 1835, figura esta renta por valor de 797,315 rs., y ya en el de 1845, por efecto sin duda de las redenciones verificadas descende á 520,000 rs.

Por R. D. de 6 de diciembre de 1797 (*ley 19, tit. XV, lib. X, Nov. Rec.*) se permitió la redención de este censo á todos los propietarios de tierras, casas y fincas gravadas con el mismo, pagando á la Real Hacienda los capitales bajo las reglas que en él se prescriben. Después las Cortes de 1820 decretaron también su abolición, pero quedó luego sin efecto esta medida. Las disposiciones que después se han dictado sobre este asunto autorizando la redención son las siguientes:

La ley de presupuestos de 1835 que autorizó al Gobierno para que por los medios que no perjudicaran á los intereses generales del Estado facilitase la redención del censo de población de Granada.

La ley de 14 de agosto de 1841 que facultó ya á los censatarios de los «conocidos en el antiguo reino de Granada con las denominaciones de Suelos,

Suertes, Abices y Abuela que componen la renta llamada censo de poblacion de Granada» para verificar su redencion al 3 por 100 en papel de la Deuda y en la misma proporcion y plazos que se señala en el art. 3.º de la ley de 31 de mayo de 1837.

Las Rs. Ords. de 20 de noviembre de 1845, 21 de mayo de 1847 y 29 de noviembre de 1849 que fueron sucesivamente ampliando los plazos de la redencion.

Y la R. O. de 21 de junio de 1850 que amplió de nuevo el plazo para la redencion, y dispuso que desde 1.º de enero de 1851 se hiciera cargo de los no redimidos la Direccion de fincas del Estado para proceder en su caso á la enajenacion.

Ultimamente, estos censos están comprendidos en la ley de desamortizaciou de 1.º de mayo de 1855, y hace expresa mencion de ellos el art. 1.º de la ley de 11 de marzo de 1859 sobre redencion, y venta en su caso, de los censos pertenecientes al Estado y demás desamortizados.—V. DESAMORTIZACION.

CENSO ESTADÍSTICO DE RIQUEZA. Dáse este nombre á la reunion de datos que sirven para conocer y apreciar los elementos de la riqueza.—V. CATASTRO: CONTRIBUCION TERRITORIAL: ESTADÍSTICA DE LA RIQUEZA.

CENSO ESTADÍSTICO DE LA POBLACION. De la misma manera que llamamos *censo de la riqueza* á la reunion de los datos convenientes para apreciar los elementos de la de un pueblo, así tambien se llama censo de poblacion á la reunion de los datos que demuestran el estado de la poblacion, la suma aritmética á que asciende, la clasificacion de las partes distintas que constituyen esta masa, sus recíprocas relaciones, su auge ó su decadencia, etc.

En los artículos ESTADÍSTICA y POBLACION se hallará el complemento de este, pues aquí es solo nuestro ánimo indicar que el censo vigente se mandó formar en R. D. de 14 de marzo de 1857 por empadronamiento nominal y simultáneo de todos los habitantes, y hecho con

arreglo á disposiciones que al efecto se dictaron, fué aprobado y publicado con carácter oficial por otro R. D. de 30 setiembre de 1858, mandándose que sirviera en todos los actos y para todos los usos de aplicacion en los diferentes ramos de la Administracion pública desde 1.º de enero de 1859; de modo que desde dicho dia ni rige el general de 1846 para la aplicacion de la ley electoral, ni otros que se han usado en las dependencias de Hacienda. Otro censo se formó en 1860.

CENSOR. Del latin *censor* que cuenta, empadrona, clasifica, juzga, aprecia. Cargo público, ó académico, ó de alguna sociedad que emite su juicio sobre algun asunto.—V. IMPRENTA: LIBROS: PERIÓDICOS: SOCIEDADES ECÓNICAS: TEATROS.

CENTÍMETRO. La centésima parte de un metro.—V. METRO: MEDIDAS Y PESOS.

CENTRALIZACION ADMINISTRATIVA. Los autores de la Enciclopedia de Derecho y Administracion creen conveniente y necesaria la centralizacion en lo político, ó sea respecto de los intereses generales del país, porque ningun Gobierno, dicen, puede abdicar la direccion é inspeccion que le corresponde sobre dichos intereses; pero consideran á la vez inconveniente la centralizacion en lo administrativo, porque si la autoridad central no evita en lo posible el mezclarse de un modo directo en los intereses puramente locales ó particulares, pierde su prestigio y desciende del rango que ocupa en gobernar al de administrar. Desgraciadamente nuestra legislacion administrativa peca de excesivamente centralizadora, habiéndose dejado sentir con ella gravísimos inconvenientes reconocidos por los mismos hombres políticos que la plantearon hallándose en el poder. Esta confesion, que es muy elocuente, puede verse en el preámbulo á un R. D. de 16 de febrero de 1853, del cual hemos reproducido lo mas esencial en el párrafo 8.º del artículo ALCALDES Y AYUNTAMIENTOS, pág. 391 del tomo 1.º

CENTRALIZACION DE FONDOS.—V. HACIENDA PÚBLICA.

CERCA. CERCADO. Heredad rodeada de vallado, tapias ú otra cosa para su resguardo. Hay una notable diferencia entre cercado y acotado, como puede verse en el artículo ACOTAMIENTO, recomendando á la vez el informe de la pág. 125 del t. 1.º

CEREALES. De Ceres, diosa de las mieses, se llaman cereales las sustancias ó frutos farináceos, como el trigo, la cebada, el centeno y la avena.—V. GRANOS y HARINAS (comercio de).

CEREMONIAL. El libro ó tabla en que están escritas las ceremonias que se deben observar en ciertos actos públicos, ó en los religiosos.

CERRAMIENTO DE HEREDADES.—Véase ACOTAMIENTO.

CERTIFICACION: CERTIFICADO. Instrumento público ó privado en que se asegura, afirma ó dá por cierta alguna cosa. Entre el significado de las voces certificar y testimoniar ó dar fé hay jurídicamente notable diferencia. Certifican los meros secretarios de cualquiera corporacion y las personas que ejercen alguna autoridad ó cargo, con referencia á libros, actas, documentos que existen en las secretarías, archivos ú oficinas, etc., ó á algun acto que ante ellos se ha autorizado; pero solo *dan fé* ó testimonio, los funcionarios que tienen fé pública.—V. VISTO BUENO.

CERTIFICADOS DE CONDUCTA: (Contiendas de competencia.) No habiendo disposicion que encargue á la autoridad administrativa el castigo del retardo en dar certificado de conducta, no pueden los Gobernadores suscitar competencias cuando se procede contra Alcaldes por hechos de esta naturaleza. Así lo establece el Consejo de Estado en el siguiente caso:

Presentada denuncia contra el Alcalde de Rubielos altos, ante el juez de la Motilla del Palancar, por un vecino del mismo pueblo, por no haberle facilitado una certificacion de buena conducta que le tenia pedida, hecho que constituia un abuso comprendido en los arts. 300 y 301 del Código penal; instruidas las diligencias del sumario y hecho embargo

de bienes á dicho Alcalde, acudió este al Gobernador de la provincia (Cuenca) pidiéndole proteccion y amparo, en cuya virtud requirió al juez de inhibicion, fundado en el art. 76 de la ley de 8 de enero de 1845 y en el núm. 1.º del art. 3.º del Real decreto de 4 de junio de 1847; el juez sostuvo la competencia alegando que á la autoridad judicial está reservada la averiguacion de los delitos. El Consejo de Estado, vistos los arts. 76 de la ley de 8 de enero de 1845, los 300 y 301 del Código penal, y el número 1.º del art. 3.º del Real decreto de 4 de junio de 1847, que prohíbe á los Gobernadores, suscitar cuestion de competencia en los juicios criminales, á no ser que el castigo del delito ó falta haya sido reservado por la ley á los funcionarios de la Administracion, ó cuando en virtud de la misma ley debe decidirse por la autoridad administrativa alguna cuestion previa, de la que dependa el fallo que los Tribunales hayan de pronunciar, declaró estar mal formada y no haber lugar á decidirla:

«Considerando que no cabe en el presente caso ninguna de las excepciones del citado núm. 1.º del art. 3.º del R. D. de 4 de junio de 1847, porque no hay disposicion que encargue á la autoridad administrativa el castigo del retardo en dar certificado de conducta, ni cuestion previa de la que dependa el fallo de los Tribunales, por mas que estos hayan de obtener la correspondiente autorizacion para procesar al Alcalde.» (*Decis. de 1.º febrero de 1864.—Gac. de 25 febrero.*)

CESANTE: CESANTÍA. Es esta la situacion pasiva del empleado público sin ejercicio del empleo, y tambien se dá este nombre á la pension ó haber á que el mismo tiene derecho por tal concepto.—V. CLASES PASIVAS EMPLEADOS: JUBILACIONES y CESANTÍAS, etc.

CESION. El traspaso que uno hace á favor de otro de un crédito, derecho ó accion que tiene contra un tercero. Puede hacerse por venta, donacion, legado, dacion en pago ó por cualquiera otro titulo legitimo. No debe confundirse la cesion con la renuncia; por la primera se transmite un derecho propio á otro, y la renuncia consiste en desprenderse en-

teramente de él. Las cesiones de bienes entre comerciantes se entienden siempre quiebras (arts. 1176 y 1177 del Código de Comercio).—V. CONCURSO DE ACREEDORES: DONACION: ENAJENACION EN FRAUDE DE ACREEDORES.

CETRO. Vara corta de oro ú otra materia de que usan Emperadores y Reyes por insignia de su dignidad, ó de autoridad soberana.

CIEGOS. En los ciegos hay que considerar los deberes de la beneficencia pública respecto de los que carecen de medios de subsistencia, los cuales son admitidos segun nuestras leyes en los establecimientos generales del Estado (V. BENEFICENCIA); y además su aptitud para el ejercicio de los derechos civiles y políticos y su incapacidad para el desempeño de cargos públicos. Por regla general gozan los ciegos de todos los derechos civiles y políticos; y si se les han restringido en algun caso, es atendiendo á su propio provecho, razon por la que no pueden otorgar testamento cerrado, y el abierto no vale sino hecho ante cinco testigos con escribano; ni pueden ser tampoco testigos en los testamentos. En cuanto á la incapacidad para el desempeño de cargos públicos, la tienen expresa por la ley para ser abogados y jueces, y se supone tambien para otros cargos semejantes por impedimento físico. Es de todos modos indudable que no pueden ser jueces de paz, ni Alcaldes, porque ejerciendo funciones judiciales les alcanza la incapacidad general de los jueces, y que aun no teniéndose para otros por incapaces pueden excusarse legítimamente de admitirlos.

CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES. Una de las seis facultades establecidas por la vigente Ley de Instrucción pública de 9 de setiembre de 1857. (Artículos 31, 34, 35, 136 de dicha ley, y 34 al 37 del R. D. de 23 de setiembre del mismo año).—V. INSTRUCCION PÚBLICA Y ACADEMIAS.

CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS.—(Véase ACADEMIA DE.)

CIENTOS. Tributo hoy abolido que se comprendia en el general conocido por

rentas provinciales, y consistia en el 4 por 100 de las cosas que se vendian y pagaban alcabala. Se conoció tambien esta contribucion con el nombre de *los cuatro unos*, porque en 1636 consistió en el 1 por 100, despues en 1642 se aumentó otro uno, en 1656 otro, y otro por último en 1665.—V. ALCABALA: CARGAS DE JUSTICIA: DERECHOS ENAJENADOS: MILLONES.

CIFRA.—V. ABREVIATURA.

CILLA. Granero, troje ó panera en donde se reunian los diezmos de una parroquia: el mismo acervo decimal.

CINCO POR CIENTO de arbitrios municipales. Uno de los arbitrios consignados para la extincion de la Deuda pública. Fué suprimido por la ley de 16 de abril de 1856.

CIRCULACION INTERIOR DE MERCADERÍAS.—V. COMERCIO: CONTRABANDO Y DEFRAUDACION: RENTA DE ADUANAS.

CIRUJANO: CIRUGIA.—V. MEDICINA Y CIRUGIA: MÉDICOS Y CIRUJANOS: CURANDERO

CITACION. La accion de citar. Llamamiento judicial para algun juicio ó acto ó diligencia ó trámite del mismo, hecho en la forma requerida por la ley. La ley habla de notificaciones, de citaciones y de emplazamientos, y son tres cosas que no deben confundirse.

Es *emplazamiento* el primer llamamiento que se hace al demandado para que venga al juicio (arts. 227 á 235 y 1137 de la Ley de Enj. civil), ó á los procuradores de los litigantes para que en caso de apelacion comparezcan ante el Tribunal Superior (arts. 335 y 336, 659 y otros); ó si se interpone recurso de casacion para que se personen ante el Tribunal Supremo (arts. 1033 y 1034.) El emplazamiento debe hacerse por regla general al mismo contra quien se dirige la demanda, como principal ó á veces como apoderado, sin perjuicio de discutir la personalidad, si se promoviese cuestion. Sobre emplazamiento á los pueblos y Ayuntamientos, corporaciones y otras personas jurídicas, véase PERSONALIDAD EN JUICIO.

La *citacion* es equivalente en cierto modo á emplazamiento, ó mas bien todo

emplazamiento es una verdadera citacion; pero la citacion que tiene indudablemente esta acepcion genérica, significa, segun la ley, llamamiento para un trámite importante del juicio; y así se exige que preceda para la práctica de toda diligencia de prueba, menos para la confesion en juicio y reconocimiento de libros y papeles de los litigantes (artículo 278), siendo su omision motivo de casacion; y para oír sentencia (arts. 329, 345, 860, 959, 1004, 1050 y otros) siendo igualmente su falta motivo de casacion. Algunas veces usa la ley indistintamente las palabras citacion y emplazamiento, y así dice tratando de los juicios verbales, (art. 1167), que se cite al demandado para la comparecencia.

Notificacion. Esta voz tiene todavía una acepcion mas genérica, y significa el acto mismo de hacer saber una providencia, cualquiera que esta sea, aunque no envuelva la idea de citacion, convocatoria, ni llamamiento, ó aunque tengan este objeto. Toda notificacion debe hacerse en la forma prevenida por la ley de 4 de junio de 1837 y por los arts. 21 á 24 de la Ley de Enjuiciamiento civil.

Si la citacion á audiencia y llamamiento al juicio es requisito indispensable en lo civil, de tal modo que no puede darse juicio contra otro «*non seyendo emplazado primeramente que lo viniese á oír*» (ley 12, tít. XXII, Partida 3.^a) lo es con doble motivo en lo penal, y está expresamente consignado en el art. 12 del reglamento provisional, que á nadie pueda imponerse pena alguna sin que antes sea oído y juzgado con arreglo á derecho por el juez ó tribunal que la ley tenga establecido.

Jurisprudencia.

El Tribunal Supremo ha establecido en distintos fallos la siguiente doctrina:

1.^o Que uno de los efectos atribuidos á la citacion por la ley 13, tít. VII, Part. 3.^a es el de anular la enajenacion de la cosa objeto de la demanda, cuando el demandado la enajena despues del emplazamiento (*Sent. 13 junio de 1854.*)

2.^o Que cuando son dos ó mas los

que tienen personalidad en un juicio, á todos debe citarse ó emplazarse siendo su omision causa de nulidad (*Sent. de 20 de junio de 1866.*)

3.^o Que son innecesarios la citacion y emplazamiento cuando el interesado se presenta espontáneamente en juicio, segun repetidamente lo tiene declarado (*Sents. de 18 de setiembre de 1867, y 22 de abril de 1856.*)

4.^o Que la falta de citacion para una diligencia de prueba no autoriza la casacion si habiendo podido reclamarse no se hizo en tiempo.

Y 5.^o Que la Ley de Enjuiciamiento civil no requiere la citacion para sentencia en las cuestiones jurídicas promovidas por declaratoria (*Sent. de 6 de diciembre de 1860.*)—V. EMPLAZAMIENTO: NOTIFICACION: PROCURADOR, y en ENJUICIAMIENTO CIVIL, los artículos citados de la Ley.

CITACION DE EVICION.—V. EVICION y SANEAMIENTO.

CITACION PARA DECLARAR.—V. DECLARACION JUDICIAL: TESTIGOS.

CITACION POR EDICTOS. La Ley de Enj. civil habla de la citacion por edictos en los arts. 231, 1183, 1190 y 1191.—V. EDICTOS Y PREGONES.

CITACION POR PLEITO RETARDADO. Es la que tiene por objeto llamar á la continuacion ó prosecucion de un juicio ó pleito interrumpido ó suspendido por un tiempo considerable á los que eran partes en él ó á su causa-habientes.—Véase PLEITO RETARDADO.

CIUDAD. La ley 6.^a, tít. XXXIII, Partida 7.^a dice «que do quier que sea fallado este nombre *cibdat*, que se entiende todo aquel lugar que es cercado de los muros con los arrabales et los edificios que se tienen con ellos. El Diccionario de la Academia define la ciudad «*poblacion comunmente grande que goza de mayores preeminencias que las villas.*» Algunas, añade, son cabezas de reino ó provincia, y otras tienen este título por privilegio. En la Nov. Rec. hallamos muchas leyes que nos hablan del gobierno de las ciudades, villas y lugares, y de los privilegios y costumbres de

los pueblos etc.; pero no hemos dado hasta ahora con una sola que deslinde las preeminencias de las ciudades, y la ley orgánica de los Ayuntamientos tampoco establece nada sobre este punto. ¿Cuáles son, pues, esas preeminencias? ¿Las tienen hoy, ó es un simple título honorífico el de ciudad? No es posible dar una contestacion satisfactoria á estas preguntas; pero algo debemos decir sobre este asunto y nos remitimos á DISTRITO MUNICIPAL: VILLA: LUGAR.

CIUDADANÍA. La cualidad y el derecho de ciudadano.

CIUDADANO. El que goza de los derechos de una ciudad, ó de una nacion ó Estado.—Véase CONSTITUCION: NATURAL: LEZA.

CLASES PASIVAS. Dáse este nombre á los individuos que dependen del Tesoro público cobrando alguna cantidad por razon de cesantia, jubilacion, pension ó retiro.

Mientras carezcamos de una buena ley sobre las circunstancias que deben reunir los empleados públicos; mientras no se dicten las disposiciones convenientes para regularizar la provision de empleos; mientras sea tan precaria su situacion por falta de estabilidad etc., será indudablemente necesario y equitativo, nosotros lo reconocemos así, el sistema de cesantías y jubilaciones; pero no dejará por eso de ser á la vez una verdadera calamidad para la nacion.

No es nuestro objeto entrar en consideraciones sobre este asunto, ni el plan de esta obra lo requiere tampoco; bástanos decir que lejos de irse poco á poco extinguiendo ó aminorando el gran número de individuos que componen las clases pasivas, y de reducirse la excesiva cantidad que es necesario consignar para sus haberes en el presupuesto del Estado, asusta el aumento que en pocos años ha experimentado la partida destinada á este objeto, de tal modo que si así continúan las cosas, no ha de bastar dentro de poco para cubrir sus exigencias ni la mitad del pingüe producto de todas las propiedades, contribuciones y rentas públicas.

Es, pues, una cosa muy cómoda la de poder quitar y poner empleados sin sujecion á regla alguna, pero es un sistema que trae consigo entre otros males de mayor trascendencia, que no es esta ocasion de exponer, el de hacer insostenible el presupuesto de las clases pasivas, como todos los Ministerios desde 1835 acá lo vienen reconociendo ¿Y cuándo se pondrá remedio?

Pero no es lo peor para el Estado la carga anual de 160 millones de reales que importan los haberes de las clases pasivas; es mucho mas grave y trascendental á nuestros ojos el mal que trae consigo ese sistema funesto de las cesantías que nunca se acaban, y de las jubilaciones y pensiones inmotivadas. Este mal es urgente combatirlo; es, como si dijéramos, el germen fecundo de ese cáncer de la sociedad conocido con el nombre de *empleomania*, cuyo desarrollo se fomenta con esas distinciones innecesarias de los que desempeñan cargos públicos, con esos privilegios odiosos de que se revisten, con ese inconveniente estímulo que de tantos modos se ofrece á los jóvenes, y les alienta á mirar como único norte de sus aspiraciones la carrera de empleado.

Y no es, que creamos que sea esta carrera de gran provecho y porvenir, y que por eso se descuiden otras, no; consideramos el mal como realmente es en sí; y por eso vemos con dolor que se desdeñen los estudios agrícolas y de los ramos industriales, que darian mas positivos resultados al interés individual y al fomento de nuestra pública riqueza, para pensar exclusivamente en escalar altos puestos, para pensar cuando los ocupan en otros mas elevados, para no ocuparse muchos sino de ganar, de cualquier modo que sea, años de servicio, y para estar siempre soñando con un buen sueldo regulador. Seamos ingénuos; á esto aspiran sin descanso no pocos empleados y sus familias, aun á costa de su dignidad, de vergonzosas humillaciones y de indecorosas veleidades políticas.

Hé aquí, nos decimos muchas veces, como los Gobiernos lejos de combatir

con mano firme la empleomanía, la están inconsideradamente fomentando. Hay, sin poderlo poner en duda, empleados muy dignos, laboriosos, ilustrados, y en todos conceptos muy distinguidos; respéteseles y atiéndaseles como es debido. Pero dése al mismo tiempo su merecido á esos otros empleados ineptos que deben exclusivamente al favor el puesto que ocupan, que nada trabajan, ó solo sirven de estorbo en las oficinas, que tal vez no asisten á ellas sino el día de firmar la nómina, y que no obstante solo piensan en encaramarse á los mas altos puestos.... dejando atrás á los que hemos dicho son laboriosos y entendidos.... ¿Cómo, pues, á los que así se conducen hemos de mirarles con la consideracion que á los demás? ¿Con qué derecho ha de ser en todo caso mas atendida esta clase de servidores del país, que lo es cualquiera otra, la del labrador, la del industrial, la del comerciante? Si tan penosa es la carrera de empleado público, ¿por qué ese vértigo de todos por ser todos empleados? ¿Por qué tantos memoriales y tantos esfuerzos y tantas humillaciones para lograrlo?

En resúmen, los derechos pasivos de los empleados públicos tal como están constituidos no solo no nos parecen justos sino que los consideramos contrarios á la economía política y á toda equidad. Las clases pasivas son un mal para el presupuesto del que absorben cerca de doscientos millones de reales, que dedicados á canales de riego, á caminos y á otras empresas útiles ó de público interés, harían variar en muy pocos años el aspecto de este país de suelo privilegiado; pero á la vez que son un mal en sí, son tambien concausas de otro mal mucho mas grave, del mal de la empleomanía, que es una verdadera demencia, del desden hácia las clases productoras, del desaliento que se advierte en todos para dedicarse á empresas útiles que reclama con afán el estado de atraso de nuestra agricultura, de la ganadería, de la industria fabril y de todos los ramos de la produccion nacional.

En el artículo JUBILACIONES Y CESAN-

tías se hallará la legislacion vigente sobre el asunto de este artículo.

CLÁUSULA. Una disposicion particular que hace parte de un documento. En este sentido los contratos, los testamentos etc. tienen sus cláusulas que á veces son como condiciones, modificaciones ó aclaraciones de lo establecido. —V. CONDICIONES: CONTRATOS: OBLIGACIONES: TESTAMENTOS. En el lenguaje forense son conocidas con nombres propios algunas cláusulas; y así se dice:

Cláusula derogatoria ó ad cautelam: la que suele ponerse alguna vez en los testamentos declarando *à priori* nulos los que se otorguen despues, á no emplear una manera señalada de revocacion. V.—TESTAMENTO CON CLÁUSULA AD CAUTELAM.

Cláusula de constituto: esta suele ponerse en la venta ó donacion de una finca, cuando el donador ó vendedor se reserva el usufructo por algun tiempo ó por vida, y es su efecto trasferir la posesion civil al comprador ó donatario, en cuyo nombre y no en el suyo propio declara el vendedor ó donador poseer la cosa.

Cláusula irritante: es la que se pone en algunas escrituras para que no surta efecto lo que se hiciere en contra de lo estipulado, con la fórmula «*so pena de nulidad*» ó «*siendo nulo cuanto en contrario se hiciere*». Cuando lo que se anula es la convencion misma, si se hiciere algo en contra de ella, la cláusula se llama resolutoria, como decimos en CONDICIONES, y en ACCIONES RESCISORIAS Y RESOLUTORIAS.

Cláusula penal: es la que suele ponerse en algunos contratos ó testamentos, para el que no cumple lo estipulado ó lo ordenado por el testador etc. etc.

CLÉRIGO: CLERO. Clérigo es todo varón que en virtud de órdenes mayores ó menores está dedicado al servicio del altar y culto divino. Bajo la enunciativa de *Clero* se entiende todo el estado eclesiástico en general. Quisiéramos haber tratado aquí todo lo relativo á este importante asunto, como lugar mas propio, pero lo reservamos para los artícu-

los ECLESIÁSTICOS, CONCORDATO y otros allí citados.

COACCION. La fuerza ó violencia que se hace á alguna persona para precisarla á que diga ó ejecute alguna cosa. Las coacciones que constituyen delito se pe- nan en los artículos 417 al 421, del Có- digo penal, en el 430, y en su caso si son simples amenazas, en el núm. 5.º, art. 484, núm. 12 del 485, y núm. 10 del 494. En los contratos la coaccion su- pone falta de consentimiento libre. Véase CONTRATOS. En las causas criminales no debe emplearse tampoco medio alguno de coaccion en las declaraciones de los procesados y testigos.—V. JUSTICIA (artí- culos 7.º y 8.º del reglamento provisio- nal) y TORMENTO.

COADJUTOR. La persona que oficial- mente ayuda ó auxilia á otro en el des- empeño de su cargo. El clérigo que está unido á un prelado, ó á otro beneficia- do para ayudarle á desempeñar las fun- ciones anejas á su prelación ó á otro cual- quier beneficio. Y los tenientes en ane- jo dependientes de cura propio.

Sobre coadjutores eclesiásticos remi- timos á nuestros lectores al artículo CON- cordatos debiendo consultar los artícu- los 5.º, 26 y 33 del de 1851, el R. D. de 21 de noviembre del mismo año, el de 30 de abril de 1852. Véase también CURA PÁRROCO.

COARTADA. Voz que se usa en el foro con el verbo probar. *Probar la coarta- da* es, pues, hacer constar que el pre- sunto reo de un delito ó acusado co- mo tal, estuvo ausente del paraje en que se cometió el delito, en el día, hora y momento en que tuvo lugar su perpe- tración.

COBRANZA DE CONTRIBUCIONES.—Véa- se APREMIOS: CONTRIBUCION TERRITO- RIAL, etc.

COCHES. V. CARRUAJES PÚBLICOS: CONTRIBUCION: CONTRIBUCION SOBRE CAR- RUAJES Y CABALLERÍAS.

CODICILO. Es una disposición de úl- tima voluntad que suele tener por ob- jeto suplir, variar ó reformar alguna parte del testamento. En los codicilos dice la ley 3.ª de Toro (2.ª, tit. XVIII,

lib. X de la Nov. Recop.) «intervenga la misma solemnidad que se requiere en el testamento nuncupativo ó abierto.» Cuando se otorguen cerrados deberán guardarse las solemnidades del testa- mento cerrado. Es decir que hoy no hay diferencia sustancial entre testamen- to y codicilo, y que en rigor han des- aparecido estos de nuestro tecnicismo jurídico, pudiendo hacerse por el codi- cilo lo mismo que por el testamento, sin restriccion alguna, conforme lo tiene ya consignado el Tribunal Supremo.

Hé aquí un fallo muy terminante.

Sent. de 21 de junio de 1867.

Las hijas y herederas de Doña Manue- la Blanco, en pleito que esta entabló contra Doña Francisca Travieso sobre nulidad de un codicilo y petición de herencia, interpusieron recurso de casa- cion contra la sentencia absolutoria de la Audiencia de la Coruña, pues soste- niendo que no podía haberse hecho en codicilo la sustitucion de heredero, ci- taban principalmente como infringidas las leyes 2.ª, tit. XII, Part. 6.ª y 8.ª, tit. III de la misma Partida. El Tribu- nal Supremo, Sala 1.ª, Seccion 2.ª de- clara no haber lugar al recurso por sen- tencia de 21 de junio de 1867.

«Considerando que las leyes 1.ª y 2.ª, tit. XVIII, lib. X de la Nov. Recop., al man- dar la una, entre otras cosas, que el testa- mento valga aunque el testador no haya he- cho heredero alguno, y la otra que en los codicilos intervenga la misma solemnidad que se requiere en el testamento nuncupativo ó abierto, vinieron á modificar esencialmen- te lo que disponian las leyes de Partida en este punto, haciendo cesar por consecuen- cia las restricciones que las mismas tenian establecido respecto á los codicilos por no subsistir ya la razon de diferencia que los distinguía de los testamentos y por la índole y el espíritu propio de la reforma, segun lo ha declarado ya este Supremo Tribunal an- tes de ahora;

Y que la sentencia, al absolver de la de- manda en que se pedía la nulidad ó revoca- cion de la institucion de heredero hecha en codicilo, no ha infringido la ley 2.ª, tit. XII, de la Partida 6.ª, ni la 8.ª, tit. III, de la misma Partida que se citan en el recurso.» (Gac. 28 junio de 1867.)

La misma doctrina, en efecto, tenia ya consignada el Tribunal Supremo en sentencia de 27 de junio de 1864 y es, ni mas ni menos, la misma nuestra, que expusimos en la primera edicion de esta obra, tomo III, pág. 116.

CODIFICACION. Del verbo *facio* (hacer) y de la voz *codex* (código): codificación es la formación de códigos, pero con sujecion á los principios de la ciencia de la legislación.

Reconocida en España desde nuestras Cortes de Cádiz la necesidad de formar buenos Códigos, todos cuantos Gobiernos se han sucedido en el poder han dedicado algun tanto su atencion á este importantísimo asunto; y aunque todavía no hayamos llegado al término deseado, tenemos ya desde 1830 el *Código de Comercio* y la *Ley de Enjuiciamiento mercantil*, de cuya reforma se trata en la actualidad; desde 1848 el *Código penal* modificado en 1850; y desde 1855 la *Ley de Enjuiciamiento civil*. Solo nos falta la *Ley orgánica de los Tribunales* tan necesaria é indispensable como base de la *de Enjuiciamiento criminal* de que tambien carecemos, y nos falta igualmente el *Código civil*, cuyo proyecto dió terminado la Comision de codificación en 1851, sin que desde entonces se haya pensado seriamente en su aprobacion y sancion.— Véase **CÓDIGO**: **CÓDIGO CIVIL**, etc.

CÓDIGO. Cuerpo ó coleccion de leyes de un Estado. Por antonomasia se entiende el que se hizo de orden de Justiniano, coleccionando las Constituciones de los emperadores romanos.

Nuestros códigos ó colecciones de leyes principales son el Fuero Juzgo, el Fuero viejo de Castilla, el Fuero real y leyes del Estilo, las siete Partidas, el Ordenamiento de Alcalá, el Ordenamiento Real, las Leyes de Toro, la Recopilacion, las Ordenanzas de Bilbao, el Código de Comercio, el Código penal y la Ley de Enjuiciamiento civil.

Es un principio de todos sabido que la ley posterior deroga la anterior, y como consecuencia del mismo, el orden

gradual segun el cual son obligatorias nuestras leyes, es el siguiente:

1.º Los códigos y leyes posteriores á la Nov. Rec., prefiriendo las de fecha mas moderna á las que la tengan mas antigua.

2.º La *Novísima Recopilacion*, sancionada por Real cédula de 15 de julio de 1805, con el *Suplemento* que aparece al final de la misma, agregado en virtud de Real cédula de 15 de enero de 1808, con varias leyes por el mismo orden de títulos y libros.

3.º El Fuero Juzgo, el Fuero Real y los Fueros municipales.

4.º Las siete Partidas.

En una acepcion mas concreta no se entiende por *Código* cualquiera coleccion legal, sino la que es resultado de la nueva ciencia de la *codificación*, y que comprende un conjunto homogéneo de disposiciones ó artículos bien clasificados sobre cualquiera ramo ó materia, como hoy el Código penal, el de comercio, la Ley de Enjuiciamiento civil etc.—

V. DERECHO: ENJUICIAMIENTO CIVIL: ESPÉCULO: FUEROS MUNICIPALES: FUEROS PROVINCIALES: FUERO JUZGO: FUERO VIEJO DE CASTILLA: FUERO REAL: LEYES DE TORO: NUEVA RECOMPILACION: NOVÍSIMA RECOMPILACION: PARTIDAS: COLECCION LEGISLATIVA: LEY etc.

CÓDIGO CIVIL. Aunque como dejamos dicho en el artículo **Código** tenemos muchas antiguas colecciones de leyes, carecemos todavía de un *Código civil*; no obstante haberse publicado en 1851 un proyecto del mismo formado por la Comision que se nombró al efecto por R. D. de 11 de setiembre de 1846, y antes tambien por otra nombrada en 19 de agosto de 1843. A propósito de esto se nos ocurre preguntar: ¿No han vuelto á pensar los Sres. Ministros de Gracia y Justicia en la necesidad, en la conveniencia de la reforma de nuestra legislación civil? ¿Tan grandes son las dificultades que ofrece el planteamiento de dicho Código, que no hay en España, entre los políticos y jurisconsultos mas profundos, quien pueda proponer los medios de vencerlas, ya por medio de modificado-

nes que en el proyecto deban introducirse, ya si no con las disposiciones transitorias, que naturalmente han de ser precisas para llevar adelante una reforma de tanta importancia? Así parece que lo dá á entender el Gobierno, cuando á la vez que confiesa la urgente necesidad del Código civil en los Reales decretos de 21 de febrero de 1855, 1.º de octubre de 1856, R. O. de 23 de agosto de 1858, y en otras disposiciones anteriores desde la de 19 de agosto de 1843, se mantiene tan inactivo y deja pasar inútilmente los años sin empeñarse en que se vean resultados.

Pero no, no es de ningún modo cierto que para el desempeño de tan difíciles trabajos carezcamos de hombres muy capaces y competentes, como lo son y mucho los eminentes jurisconsultos que componen la actual Comision y los que han compuesto las anteriores; sino que creemos que el vicio está en la organizacion de la Comision. ¿Cómo, pues, han de ir tan adelante los trabajos de la codificacion, si el Gobierno no se muestra tan exigente como debiera, si los dignos jurisconsultos que la tienen á su cargo, no se ocupan en ella con toda preferencia, si la roban lo mejor del tiempo para otras tareas profesionales, ó para el desempeño de cargos públicos de suma importancia, de cuyo ejercicio no están dispensados? Invoquemos, si es que algo pueden valer, el ejemplo de la Comision que redactó el Código de comercio vigente y la Ley de Enjuiciamiento mercantil. Un año poco mas bastó para presentar concluido el primero, y mucho menos empleó todavía en la confeccion de la segunda.—V. Código

CÓDIGO DE COMERCIO. La jurisprudencia mercantil de España se hallaba reducida antes de la publicacion del Código de comercio á las ordenanzas particulares otorgadas á los Consulados para su organizacion y régimen interior, careciéndose de leyes generales que determinasen las obligaciones y derechos que proceden en los actos de comercio, de que resultaba confusion é incertidumbre para los comerciantes y traficantes, y

para los Tribunales y jueces llamados á conocer en los pleitos mercantiles. Para poner término á esta situacion se creó en 11 de enero de 1828 una Comision que formulase un proyecto de Código de comercio; trabajo que dió terminado en poco mas de un año, de tal modo, que en 30 de mayo de 1830 fué decretado y sancionado, mandándose despues por R. D. de 5 de octubre del mismo año que en atencion á estar ya terminada la impresion, comenzase á regir desde 1.º de enero de 1830, con derogacion de todas las leyes, reglamentos y ordenanzas, tanto generales como particulares, que anteriormente se observaban sobre asuntos mercantiles.

Arregladas por dicho Código las relaciones del comercio, determinadas las formas y efectos de los contratos, era tambien indispensable proveer al buen órden de su aplicacion, estableciendo como se indicó en el art. 1219 de aquel un sistema de procedimientos que conciliase la celeridad de los trámites y la economía de sus expensas con las formalidades indispensables para asegurar el acierto en las sentencias; y esta necesidad se llenó bien pronto sancionando en 24 de julio de 1830 la *Ley de Enjuiciamiento sobre los negocios y causas de comercio* que se imprimió tambien á parte formando un tomo de 188 páginas

Esta legislacion es la vigente en el dia, salvo en algunos puntos sobre los cuales se han dictado medidas parciales, y no obstante que su revision se ha considerado ya de todo punto como una necesidad por todos reconocida, y reclamada por la opinion y que por Real decreto de 8 de agosto de 1855 se creó una numerosa Comision que se encargase de este trabajo, hoy despues de cinco años, todavia no sabemos que se haya dado un solo paso en el asunto..... cuando en poco mas de uno llenó su no menos difícil cometido la nombrada de 1828 para la formacion del Código.

Reservándonos para sus artículos correspondientes exponer la legislacion posterior al Código sobre ciertas materias

del mismo véase ACEPTACION: AGENTES DE BOLSA Ó DE CAMBIO: AVERÍA: BANCO: BOLSA DE COMERCIO: ENJUICIAMIENTO MERCANTIL: LETRA DE CAMBIO: SOCIEDADES MERCANTILES etc. etc.

CÓDIGO MILITAR.—V. ORDENANZAS MILITARES.

CÓDIGO PENAL. Nuestra legislación penal se contiene hoy en el Código publicado en virtud de la ley de 19 de marzo de 1848, y reformado conforme á los Reales decretos de 7 y 8 de junio de 1850, habiéndose hecho en dicho año la segunda edicion, que es la vigente, en la que se coordinaron y rectificaron las aclaraciones y adiciones contenidas en Reales órdenes y decretos publicados por el Gobierno en uso de la autorizacion dada al mismo. La edicion vigente del Código penal, precedida de la citada ley de 19 de marzo de 1848 y de las demás disposiciones de que se ha hecho mérito, es como sigue:

LEY

de 19 de marzo de 1848.

Doña Isabel II, por la gracia de Dios y la Constitucion de la Monarquía española, Reina de las Españas, á todos los que las presente vieren y entendieren, sabed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente:

Artículo 1.º El proyecto de Código penal presentado por el Gobierno, y la Ley provisional que para su aplicacion le acompaña, se publicarán desde luego y se observarán como ley en la Península é islas adyacentes desde el dia que señale el Gobierno dentro de los cuatro meses siguientes á la fecha de la sancion Real.

Art. 2.º El Gobierno propondrá á las Cortes dentro de tres años, ó antes si lo estimare conveniente, las reformas ó mejoras que deban hacerse en el Código, acompañando las observaciones que anualmente por lo menos deberán dirigirse los Tribunales.

Art. 3.º El Gobierno hará por sí cualquiera reforma, si fuere urgente, dando cuenta á las Cortes tan pronto como sea posible.

Art. 4.º El Gobierno adoptará las disposiciones convenientes para la ejecucion de esta ley.

Por tanto mandamos, etc.—Palacio á 19 de marzo de 1848.

R. D. de 19 marzo de 1848.

Por este decreto se mandó observar el Código penal como ley, en la Península é islas adyacentes, desde el dia 1.º de julio de aquel año.

R. O. de 9 junio de 1850.

Por esta Real órden se mandó hacer una segunda edicion del Código penal y de la Ley provisional dictada para su ejecucion.

R. D. de 30 junio de 1850.

«Al tenor de lo dispuesto en la Real determinacion del 9 del corriente, el Código penal y la Ley provisional dictada para su ejecucion quedan refundidos; y la numeracion, artículos y reglas de los mismos, coordinados, modificados ó rectificados segun se manifiesta en la presente edicion reformada, que se declara la única oficial y legal para todos los efectos de justicia.....»

CÓDIGO PENAL.



LIBRO PRIMERO.

Disposiciones generales sobre los delitos y faltas, las personas responsables y las penas.

TÍTULO I.

DE LOS DELITOS Y FALTAS, Y DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE EXIMEN DE RESPONSABILIDAD CRIMINAL, LA ATENUAN Ó LA AGRAVAN.

CAPITULO I.

De los delitos y faltas.

Artículo 1.º Es delito ó falta toda accion ú omision voluntaria penada por la ley.

Las acciones ú omisiones penadas por la ley se reputan siempre voluntarias, á no ser que conste lo contrario.

El que ejecutare voluntariamente el hecho, será responsable de él, é incurrirá en la pena que la ley señale, aunque el mal recaiga sobre persona distinta de aquella á quien se proponia ofender (1).

(1) Al disponer este artículo que las acciones ú omisiones penadas por la ley se reputan siempre voluntarias, á no ser que conste lo contrario, entendemos que no fué su objeto dejar tan importante punto á la discrecion y arbitrio de los jueces, sino establecer el prin-

Art. 2.º No serán castigados otros actos ú omisiones que los que la ley con anterioridad haya calificado de delitos ó faltas.

En el caso de que un Tribunal tenga conocimiento de algun hecho que estime digno de represion y no se halle penado por la ley, se abstendrá de todo procedimiento sobre él, y expondrá al Gobierno las razones que le asistan para creer que debiera ser objeto de sancion penal.

Del mismo modo acudirá al Gobierno exponiendo lo conveniente, sin perjuicio de ejecutar desde luego la sentencia, cuando de la rigurosa aplicacion de las disposiciones del Código resultare notablemente excesiva la pena, atendidos el grado de malicia y el daño causado por el delito (2).

Art. 3.º Son punibles, no solo el delito consumado, sino el frustrado y la tentativa.

Hay delito frustrado cuando el culpable, á pesar de haber hecho cuanto estaba de su parte para consumarlo, no logra su mal propósito por causas independientes de su voluntad.

Hay tentativa cuando el culpable da principio á la ejecucion del delito directamente por hechos exteriores, y no prosigue en ella por cualquiera causa ó accidente que no sea su propio y voluntario desistimiento.

Art. 4.º Son tambien punibles la conspiracion y la proposicion para cometer un delito.

La conspiracion existe cuando dos ó mas personas se conciertan para la ejecucion del delito.

La proposicion se verifica cuando el que ha resuelto cometer un delito propone su ejecucion á otra ú otras personas.

Exime de toda pena el desistimiento de la conspiracion ó proposicion para cometer un delito, dando parte y revelando á la autoridad pública el plan y sus circunstancias antes de haber comenzado el procedimiento (3).

Art. 8.º Viene á desenvolver, fijando uno por uno todos los casos que eximen de responsabilidad. Fuera de estos casos no hallamos ni uno solo que, *legalmente*, produzca el efecto de eximir de responsabilidad criminal al autor de un hecho cualquiera, calificado de delito ó falta. Esta debe ser la inteligencia de ambos artículos 1.º y 8.º

(2) Véase la nota al art. 19, y en el Apéndice á este Código, la R. O. de 14 de abril de 1866.

(3) En el primitivo Código solo eran punibles la conspiracion y la proposicion para cometer un delito en los casos en que la ley los castigaba especialmente. La inconveniente novedad que ofrece hoy la redaccion de este artículo es sin disputa uno de los mayores lunares que tiene nuestro Código. Medítese sé-

Art. 5.º Las faltas solo se castigan cuando han sido consumadas.

Art. 6.º Se reputan delitos graves los que la ley castiga con penas afflictivas.

Se reputan delitos menos graves los que la ley reprime con penas correccionales.

Son faltas las infracciones á que la ley señala penas leves.

Art. 7.º No están sujetos á las disposiciones de este Código los delitos militares, los de imprenta, los de contrabando, los que se cometen en contravencion á las leyes sanitarias, ni los demás que estuvieren penados por leyes especiales (4).

riamente sobre este punto, sobre lo que se dispone en el último párrafo del mismo artículo, sobre lo que ordena el último tambien del 62, y los hombres versados en la ciencia no podrán menos de deducir las mas tristes consecuencias. No es posible, pues, considerar por regla general penables la conspiracion y la proposicion, sin poner en gran peligro la inocencia; no es posible dejar de borrar el último párrafo de este artículo que parece escrito para dar pábulo á la inmoralidad, para facilitar las acusaciones injustas, para autorizar la formacion de procesos basados sobre la simple palabra de algun malvado, sin hecho ostensible que constituya la menor señal del delito; no es posible, por último, que continúe viva la disposicion del segundo párrafo del art. 62, tan relacionado con el presente, el cual en multitud de casos viene á dar por resultado el castigo de la simple conspiracion con la misma pena que el delito consumado.

(4) *Delitos no sujetos á las disposiciones del Código.*—Dice el art. 7.º de una manera muy vaga, que no están sujetos á las disposiciones de este Código, entre otros delitos que expresa, *los demás que estuvieren penados por leyes especiales.* ¿Y cuáles son estos delitos? El legislador ha debido expresar una por una las leyes á que se refiere, y así nos evitaria dudas. De otro modo desaparece ó está en continuo peligro la integridad del Código... Estas remisiones vagas é indeterminadas que algunas veces se hacen en los cuerpos del derecho, dice Benthan, bastan por sí solas para viciar la bondad de un Código, porque todo lo que no se halla en el cuerpo de la misma ley no es ley. «Reúnanse, dice, dos cantidades, una finita y otra infinita, y la suma de ellas sera infinita; esta es una demostracion matemática.»

Pero indicaremos, siquiera sea someramente, las principales, sino todas las leyes especiales que rigen sobre materia penal.

Contrabando.—Los delitos de contrabando y de defraudacion á la Hacienda, no sujetos á las disposiciones del Código penal, son y han sido mucho tiempo hace, objeto peculiar de la legislacion fiscal. Están definidos y clasificados en los arts. 17 al 20 del R. D. de junio de 1852 que, derogando la ley penal de 3 de ma-

CAPITULO II.

De las circunstancias que eximen de responsabilidad criminal.

Art. 8.º Están exentos de responsabilidad criminal:

1.º El loco ó demente, á no ser que haya obrado en un intervalo de razon.

Cuando el loco ó demente hubiere ejecutado un hecho que la ley califique de delito grave, el Tribunal decretará su reclusion en uno de los hospitales destinados á los enfermos de aquella clase, del cual no podrá salir sin previa autorizacion del mismo Tribunal.

En otro caso será entregado á su familia bajo fianza de custodia; y no presentándola, se observará lo dispuesto en el párrafo anterior.

2.º El menor de 9 años.

3.º El mayor de 9 años y menor de 15, á no ser que haya obrado con discernimiento.

El Tribunal hará declaracion expresa sobre este punto para imponerle pena, ó declararlo irresponsable.

4.º El que obra en defensa de su persona ó derechos siempre que concurran las circunstancias siguientes:

Primera. Agresion ilegítima.

Segunda. Necesidad racional del medio empleado para impelerla ó repelerla.

yo de 1830, ha venido á designar de una mas clara y precisa, los actos que propia y esencialmente constituyen dichos delitos, y á establecer un órden de procedimiento sencillo que concilia las justas exigencias de los encausados con la eficaz represion del tráfico ilícito. Véase el decreto citado y toda la legislacion sobre esta materia en el artículo CONTRABANDO y DEFRAUDACION.

Delitos electorales.—Hay una ley especial de 22 de junio de 1864, que se inserta en su lugar.—V. DELITOS ELECTORALES.

Delitos militares.—En la disposicion 1.ª de las transitorias de este Código, se dice cuáles deben reputarse delitos y faltas militares.

Faltas de que pueden conocer las autoridades administrativas.—Véase el art. 505, y el artículo FALTAS, en su lugar de este Diccionario.

Imprenta.—Se definen y clasifican los delitos de imprenta en el R. D. de 7 de marzo de 1867.—V. IMPRENTA.

Leyes sanitarias.—Las contravenciones á las leyes sanitarias no están sujetas á las disposiciones del Código penal. Así lo dispone este artículo. Hay que estar por lo mismo, hoy, á lo prevenido en la Ley de Sanidad de 28 de noviembre de 1855 (arts. 81 á 89), y en las Ordenanzas de farmacia, en que se contie-

Tercera. Falta de provocacion suficiente por parte del que se defiende.

5.º El que obra en defensa de la persona ó derechos de sus ascendientes, descendientes, cónyuge ó hermanos, de los afines en los mismos grados y de sus consanguíneos hasta el cuarto civil, siempre que concurran la primera y segunda circunstancias prescritas en el número anterior, y la de que en caso de haber precedido provocacion de parte del acometido, no tuviere participacion en ella el defensor.

6.º El que obra en defensa de la persona ó derechos de un extraño, siempre que concurran la primera y segunda circunstancias prescritas en el núm. 4.º, y la de que el defensor no sea impulsado por venganza, resentimiento ú otro motivo ilegítimo.

7.º El que para evitar un mal ejecuta un hecho que produzca daño en la propiedad ajena, siempre que concurran las circunstancias siguientes:

Primera. Realidad del mal que se trate de evitar

Segunda. Que sea mayor que el causado para evitarlo.

Tercera. Que no haya otro medio practicable y menos perjudicial para impedirlo.

8.º El que en ocasion de ejecutar un acto lícito con la debida diligencia, causa un mal por mero accidente sin la menor culpa ni intencion de causarlo.

nen muy importantes medidas de salud pública. El art. 73 de estas ordenanzas quiere que se promueva de oficio y por la *via judicial* el castigo de las infracciones que constituyan delito ó falta prevenidos en las leyes sanitarias ó en el Código penal, teniendo presente lo que este dispone en sus arts. 7.º, 253, 254, 255, 256, núms. 4.º y 9.º del 485, y números 6.º, 7.º y 8.º del 486; y por la *via gubernativa* las infracciones de las mismas Ordenanzas no expresas en el Código, castigándolas con reprension privada ó pública multa de 5 á 15 duros y arresto de 1 á 15 dias.—V. FARMACIA: SANIDAD.

Montes.—No es aplicable el Código penal á los delitos y contravenciones, en montes públicos, y rige por consiguiente la parte penal de las Ordenanzas de 1833 cómo y en la forma que determina el Real decreto-reglamento de 17 de mayo de 1865, tit. IX, que se inserta en MONTES.

Orden público.—En su lugar correspondiente de este Diccionario, véase el Real decreto con fuerza de ley de 20 de marzo de 1867.

Propiedad literaria é industrial.—Véase el art. 457 y su nota.

Reuniones públicas, etc.—Véanse los artículos 211, 212 y su nota.

- 9.^o El que obra violentado por una fuerza irresistible.
10. El que obra impulsado por miedo insuperable de un mal mayor.
11. El que obra en cumplimiento de un deber ó en el ejercicio legítimo de un derecho, autoridad, oficio ó cargo.
12. El que obra en virtud de obediencia debida.
13. El que incurre en alguna omision, hallándose impedido por causa legítima ó insuperable (5).

CAPÍTULO III.

De las circunstancias que atenúan la responsabilidad criminal.

Art. 9.^o Son circunstancias atenuantes (6).

- 1.^a Las expresadas en el capítulo anterior, cuando no concurren todos los requisitos necesarios para eximir de responsabilidad en sus respectivos casos.
 - 2.^a La de ser el culpable menor de 18 años.
 - 3.^a La de no haber tenido el delincuente intencion de causar todo el mal que produjo.
 - 4.^a La de haber precedido inmediatamente provocacion ó amenaza de parte del ofendido.
 - 5.^a La de haberse ejecutado el hecho en vindicacion próxima de una ofensa grave causada al autor, sus ascendientes, descendientes, cónyuge, hermanos ó afines en los mismos grados.
 - 6.^a La de ejecutar el hecho en estado de embriaguez, cuando esta no fuere habitual ó posterior al proyecto de cometer el delito.
- Se reputa habitual un hecho cuando se ejecuta tres veces ó mas, con intervalo á lo menos de 24 horas entre uno y otro acto.
- 7.^a La de obrar por estímulos tan poderosos que naturalmente hayan producido arrebato y obcecacion.
 - 8.^a Y últimamente, cualquiera otra circunstancia de igual entidad y análoga á las anteriores (7).

(5) Sobre todos los números de este artículo es necesario tener muy presente la circunstancia primera del art. 9.^o y lo dispuesto en el 73. El núm. 8.^o tiene además una relacion muy íntima con el art. 71 y con el núm. 5.^o del 493, el núm. 3.^o con el art. 72. Véase además la nota al art. 1.^o

(6) Sobre la circunstancia 1.^a de este artículo debe advertirse la relacion que tiene con el art. 73. La 2.^a hay que compararla con el núm. 3.^o del art. 8.^o, y mucho mas con el último párrafo del art. 72. Consúltese además los artículos 67 al 75.

(7) Declarando el Tribunal Supremo haber

CAPÍTULO IV.

De las circunstancias que agravan la responsabilidad criminal.

Art. 10. Son circunstancias agravantes:

- 1.^a Ser el agraviado ascendiente, descendiente, cónyuge, hermano ó afin en los mismos grados del ofensor (8).
 - 2.^a Ejecutar el hecho con alevosía, entendiéndose que la hay cuando se obra á traicion ó sobre seguro.
 - 3.^a Cometer el delito mediando precio, recompensa ó promesa.
 - 4.^a Ejecutarlo por medio de inundacion, incendio ó veneno.
 - 5.^a Aumentar deliberadamente el mal del delito, causando otros males innecesarios para su ejecucion.
 - 6.^a Obrar con premeditacion conocida.
 - 7.^a Emplear astucia, fraude ó disfraz.
 - 8.^a Abusar de superioridad, ó emplear medio que debilite la defensa.
 - 9.^a Abusar de confianza.
 10. Prevalerse del carácter público que tenga el culpable.
 11. Ejecutar el delito como medio de perpetrar otro.
 12. Emplear medios ó concurrir circunstancias que añadan la ignominia á los efectos propios del hecho.
 13. Cometer el delito con ocasion de incendio, naufragio ú otra calamidad ó desgracia.
 14. Ejecutarlo con auxilio de gente armada ó de personas que aseguren ó proporcionen la impunidad.
 15. Ejecutarlo de noche ó en despoblado.
- Esta circunstancias la tomarán en consideracion los Tribunales segun la naturaleza y accidentes del delito.
16. Ejecutarlo en desprecio ó con ofensa de la autoridad pública.
 17. Haber sido castigado el culpable anteriormente por delito á que la ley señale igual ó mayor pena.

lugar á un recurso de casacion en una causa sobre defraudacion á la Hacienda, establece la doctrina de que no pueden calificarse de circunstancias atenuantes la falta de perjuicio á la Hacienda, ni la buena conducta anterior del reo, porque no son de las consignadas específicamente en este artículo ni de igual entidad ni análogas á estas. (*Sent. 25 abril 1864.*) — Véase además el artículo ASILO, en el tomo 1.^o pág. 523.

(8) Sin mas que comparar esta circunstancia 1.^a con el art. 479, se ve que no es agravante en todos los casos. Es por lo contrario, en los que allí se dice motivo de exencion.

18. Ser reincidente de delito de la misma especie.

19. Cometer el delito en lugar sagrado, inmune, ó en donde la autoridad pública se halle ejerciendo sus funciones.

20. Ejecutar el hecho con ofensa ó desprecio del respeto que por la dignidad, edad ó sexo mereciere el ofendido, ó en su morada cuando él no haya provocado el suceso.

21. Ejecutarlo por medio de fractura ó escalamiento de lugar cerrado.

22. Ejecutarlo haciendo uso de *armas prohibidas* por los reglamentos (9).

23. Y últimamente, cualquiera otra circunstancia de igual entidad y análoga á las anteriores.

TITULO II.

DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LOS DELITOS Y FALTAS.

CAPITULO PRIMERO.

De las personas responsables criminalmente de los delitos y faltas.

Art. 11. Son responsables criminalmente de los delitos y faltas:

- 1.º Los autores.
- 2.º Los cómplices.
- 3.º Los encubridores.

Art. 12. Se consideran autores:

- 1.º Los que inmediatamente toman parte en la ejecucion del hecho.
- 2.º Los que fuerzan ó inducen directamente á otros á ejecutarlo.
- 3.º Los que cooperan á la ejecucion del hecho por un acto sin el cual no se hubiera efectuado.

Art. 13. Son cómplices los que no hallándose comprendidos en el artículo anterior, cooperan á la ejecucion del hecho por actos anteriores ó simultáneos.

Art. 14. Son encubridores los que con conocimiento de la perpetracion del delito, sin haber tenido participacion en él como autores ni como cómplices, intervienen con posterioridad á su ejecucion de alguno de los modos siguientes:

- 1.º Aprovechándose por sí mismos, ó auxiliando á los delincuentes para que se aprovechen de los efectos del delito.
- 2.º Ocultando ó inutilizando el cuerpo,

(9) Sobre armas prohibidas hay que estar hoy á las leyes del tít. XIX, lib. XII de la Novísima Recopilacion, y principalmente á la 19, que resume las prohibiciones de las anteriores. — V. ARMAS, tomo 1.º, pág. 481.

los efectos ó instrumentos del delito para impedir su descubrimiento.

3.º Albergando, ocultando ó proporcionando la fuga al culpable, siempre que concurra alguna de las circunstancias siguientes:

Primera. La de intervenir abuso de funciones públicas de parte del encubridor.

Segunda. La de ser el delincuente reo de regicidio, de parricidio ó de homicidio cometido con alguna de las circunstancias designadas en el número 1.º del art. 333, ó reo conocidamente habitual de otro delito.

Están exentos de las penas impuestas á los encubridores, los que lo sean de sus ascendientes, descendientes, cónyuges, hermanos ó afines en los mismos grados, con sola la excepcion de los que se hallan comprendidos en el número 1.º de este artículo.

CAPITULO II.

De las personas responsables civilmente de los delitos y faltas (10).

Art. 15. Toda persona, responsable criminalmente de un delito ó falta, lo es tambien civilmente.

Art. 16. La exencion de responsabilidad criminal declarada en los núms. 1.º, 2.º, 3.º, 7.º y 10 del art. 8.º, no comprende la de la responsabilidad civil, la cual se hará efectiva con sujecion á las reglas siguientes:

1.ª En el caso del núm. 1.º son responsables civilmente por los hechos que ejecuten los locos ó dementes, las personas que los tengan bajo su guarda legal, á no hacer constar que no hubo por su parte culpa ni negligencia.

No habiendo guardador legal, responderá con sus bienes el mismo loco ó demente, salvo el beneficio de competencia en la forma que establece el Código civil.

2.ª En los casos de los núms. 2.º y 3.º responderán con sus propios bienes los menores de 15 años que ejecuten el hecho penado por la ley.

Si no tuvieran bienes, responderán sus padres ó guardadores en la forma expresada en la regla 1.ª

3.ª En el caso del núm. 7.º son responsables civilmente las personas en cuyo favor se haya precavido el mal á proporcion del beneficio que hubieren reportado.

Los Tribunales señalarán, segun su prudente arbitrio, la cuota proporcional de que cada interesado deba responder.

(10) Aquí solo se trata de las personas civilmente responsables. Lo que es la responsabilidad civil lo dice despues el tít. IV, arts. 143 á 123.

Cuando no sean equitativamente asignables, ni aun por aproximacion, las personas responsables ó sus cuotas respectivas, ó cuando la responsabilidad se extienda al Estado ó á la mayor parte de una poblacion, y en todo caso siempre que el daño se hubiere causado con intervencion de la autoridad, se hará la indemnizacion en la forma que establezcan las leyes ó reglamentos especiales.

4.^a En el caso del núm. 10 responderán principalmente los que hubieren causado el miedo, y subsidiariamente y en defecto de ellos, los que hubieren ejecutado el hecho.

Art. 17. Son tambien responsables civilmente, en defecto de los que lo sean criminalmente, los posaderos, taberneros ó personas que estén al frente de establecimientos semejantes, por los delitos que se cometieren dentro de ellos, siempre que por su parte intervenga infraccion de los reglamentos de policia.

Son además responsables subsidiariamente los posaderos de la restitution de los efectos robados ó hurtados dentro de sus casas á los que se hospedaren en ellas, ó de su indemnizacion, siempre que estos hubieren dado anticipadamente conocimiento al mismo posadero, ó á sus dependientes, del depósito de aquellos efectos en la posada. Esta responsabilidad no tendrá lugar en caso de robo con violencia, ó intimidacion en las personas, á no ser ejecutado por los dependientes del posadero.

Art. 18. La responsabilidad subsidiaria que se establece en el artículo anterior, será tambien extensiva á los amos, maestros y personas dedicadas á cualquier género de industria, por los delitos ó faltas en que incurran sus criados, discípulos, oficiales, aprendices ó dependientes *en el desempeño de su obligacion ó servicio* (11).

(11) *Responsabilidad civil subsidiaria.*—Es necesario fijarse bien en las palabras del art. 18 del Código, para no darle una interpretacion violenta. La responsabilidad subsidiaria de que trata ha de ser «*por las faltas cometidas en el desempeño de su obligacion ó servicio.*» Un criado de labranza infringiendo las ordenanzas, va al monte por leña; trata el guarda de prenderle, y aquel con el hacha le mata alevosamente. Suponiendo que el amo le tolerase, le mandase que fuese al monte y que cortase leña, con infraccion de los reglamentos, el amo, á pesar de todo, no podrá ser condenado á la responsabilidad subsidiaria de que trata el art. 18 por el delito de homicidio que cometió su criado. Esta condenacion seria injusta, seria hasta inícuu.

En la Audiencia de Búrgos tenemos noticia de un caso enteramente igual al que ponemos por ejemplo; el juez inferior condenó al amo á

TITULO III.

DE LAS PENAS.

CAPITULO I.

De las penas en general.

Art. 19. No será castigado ningun delito, ni las faltas de que solo pueden conocer los Tribunales, con pena que no se halle establecida previamente por ley, ordenanza ó mandato de autoridad á la cual estuviere concedida esta facultad (12 y 13).

Art. 20. Siempre que la ley modere la pena señalada á un delito ó falta, y se publicare aquella antes de pronunciarse el fallo que cause ejecutoria contra reos del mismo delito ó falta, disfrutarán estos del beneficio de la ley.

Art. 21. El perdon de la parte ofendida no extingue la accion penal: extinguirá solo la responsabilidad civil en cuanto al interés del condonante, si este lo renunciare expresamente.

Lo dispuesto en este artículo no se entiende respecto á los delitos que no pueden ser perseguidos sin prévia denuncia ó consentimiento del agraviado.

Art. 22. No se reputan penas la restriccion de la libertad de los procesados, la separacion ó suspension de los empleados públicos, acordada por las autoridades gubernativas en uso de sus atribuciones, ó por los Tribunales durante el proceso, ó para instruirlo, ni las multas y demás correcciones

la responsabilidad subsidiaria; pero la Audiencia revocó tan injusta condenacion. Otra cosa sería si la causa de la condena hubiere sido por los daños que el criado hiciera en el monte; entonces á no dudarlo, habria sido aplicable la disposicion del art. 18.

(12) *De que solo pueden conocer los Tribunales;* véase el art. 505.

(13) *La ley penal no tiene efecto retroactivo sino en beneficio del reo.*—Este principio de eterna justicia está sancionado en nuestro Código por los arts. 2.^o, 19 y 20. Ningun hecho puede considerarse delito si la ley con anterioridad no lo ha calificado como tal; ninguna pena puede tampoco imponerse que no sea la establecida previamente para castigar el hecho de que se trate, salvo cuando sea mas benefica al reo. Esto, y lo dispuesto en el último párrafo del artículo 2.^o, dá bastantemente á entender que la ley quiere limitar el arbitrio del juzgador hasta el punto de consentir que se ponga en ejecucion una pena que en algun caso resulte notablemente excesiva por la rigurosa aplicacion de las disposiciones del Código, sin perjuicio de acudir al Gobierno exponiendo lo conveniente.

que los superiores impongan á sus subordinados y *administrados* en uso de su jurisdiccion disciplinal ó *atribuciones gubernativas* (44 y 15).

Art. 23. La ley no reconoce pena alguna infamante.

CAPITULO II.

De la clasificación de las penas.

Art. 24. Las penas que pueden imponerse con arreglo á este Código y sus diferentes clases, son las que comprende la siguiente:

Escala general.

Penas afflictivas.

Muerte.
Cadena perpétua.
Reclusion perpétua.
Relegacion perpétua.
Extrañamiento perpétuo.
Cadena temporal.
Reclusion temporal.
Relegacion temporal.
Extrañamiento temporal.

(14) La facultad de suspender á los Alcaldes y otros funcionarios administrativos, ¿es peculiar de los Gobernadores ó corresponde tambien á la autoridad judicial? Esta cuestion ha sido resuelta por el Consejo de Estado en sus decisiones de 2 de Febrero de 1859 y 4 de igual mes de 1863, insertas en el artículo **ALCALDES Y AYUNTAMIENTOS**, párrafo 6.º, pág. 389.

(15) *La jurisdiccion penal reside exclusivamente en los Tribunales.*—El art. 77 de la siempre sabia instruccion para los subdelegados de Fomento publicada por Real decreto de 30 de noviembre de 1833, dice así:

«Una ley especial fijará las penas que han de imponerse á los contraventores de las disposiciones administrativas, y el modo con que las autoridades del ramo *deben solicitar de los jueces respectivos* la aplicacion de ellas. Entre tanto servirá de regla que los agentes de la Administracion *no pueden por sí aplicar otras que las multas* determinadas en los reglamentos, en los casos y por las cantidades que ellos señalar.»

De acuerdo con tan sabia y previsora disposicion, poco conocida y peor aplicada, nuestro primitivo Código penal de 1848 negaba á la Administracion la facultad de imponer penas, como exclusiva de los Tribunales, debiendo los Alcaldes castigar todas las faltas comprendidas en el libro III de dicho Código con el carácter de jueces, y observando las formalidades establecidas en la Ley provisional.

Tan importante mejora tropezó, como todas, con los inconvenientes de la rutina, y bien pronto asomó esta su cabeza y se colocó sobre

Presidio mayor.
Prision mayor.
Confinamiento mayor.
Inhabilitacion absoluta perpétua.
Inhabilitacion especial { cargo público, derecho político, profesion ú oficio.
perpétua para algun
Inhabilitacion tempo- { cargos públicos dere-
ral absoluta para. . } chos políticos.
Inhabilitacion especial { cargo, derecho, pro-
temporal para. . . . } fesion ú oficio.
Presidio menor.
Prision menor.
Confinamiento menor.

Penas correccionales

Presidio correccional.
Prision correccional.
Destierro.
Sujecion á la vigilancia de la autoridad.
Represion pública.
Suspension de. { cargo público, derecho poli-
tico, profesion ú oficio.
Arresto mayor,
Penas leves.
Arresto menor.
Represion privada.

la ley, hasta el punto de haberla hecho retractarse en los arts. 22 y 505 del Código reformado, en que volvió á darse á los agentes de la Administracion la facultad de corregir gubernativamente las faltas en los casos en que su represion les esté encomendada por las mismas leyes.

Nosotros examinamos detenidamente esta reforma en 1850, y la desaprobamos como inconveniente; ya porque creíamos que solo conducia al desórden y á la anarquía en el castigo de las faltas, produciendo además innumerables conflictos entre las autoridades administrativas y los Tribunales; ya porque estábamos persuadidos de que se extralimitaba la competencia de la Administracion con mengua de los atributos de la justicia; ya porque en nuestro entender se entronizaba la arbitrariedad y el capricho en los que ejercen funciones públicas, y ya, por último, porque no se determinaban las faltas que podian castigarse gubernativamente y las que exigian las formas tutelares de la justicia.

El tiempo y los sucesos vinieron á confirmar nuestros temores: el libro III del Código penal llegó á ser bien pronto una letra muerta; los conflictos que estaban á la órden del día se multiplicaron cada vez mas; se aumentó la confusion y el desórden, y el Gobierno mismo tuvo que reconocer su error modificando lo dispuesto en el art. 505 del Código, por medio de las reglas que estableció en el importante *R. D. de 18 de mayo de 1853*, en las cuales se deslindan las faltas que pueden castigarse gubernativamente, y las que exigen las formalidades del juicio.—(Véase el art. 505 y su nota.)

Penas comunes á las tres clases anteriores.

Multa.

Caucion.

Penas accesorias.

Argolla.

Degradacion.

Interdiccion civil.

Pérdida ó comiso de los instrumentos y efectos del delito.

Resarcimiento de gastos ocasionados por el juicio.

Pago de costas procesales.

Art. 25. Las penas de in-
habilitacion y sus-
suspension para.

{	cargos públicos,
{	derechos po-
{	líticos, profe-
{	sion ú oficio,

son accesorias en los casos en que no imponiéndolas especialmente la ley, declara que otras penas las llevan consigo.

Las de resarcimiento de gastos ocasionados por el juicio y pago de costas procesales, se entienden impuestas por la ley á los autores de todo delito ó falta, y á sus cómplices, encubridores y demás personas legalmente responsables.

CAPÍTULO III.*De la duracion y efecto de las penas.***SECCION PRIMERA.***Duracion de las penas.*

Art. 26. Las penas de cadena, reclusion, relegacion y extrañamiento temporales duran de doce á veinte años.

Las de presidio, prision y confinamiento mayores, duran de siete á doce años.

Las de inhabilitacion absoluta é inhabilitacion especial temporales, duran de tres á ocho años.

Las de presidio, prision y confinamiento menores, duran de cuatro á seis años.

Las de presidio y prision correccionales y destierro, duran de siete meses á tres años.

La de sujecion á la vigilancia de la autoridad, dura de siete meses á tres años.

La de suspension, dura de un mes á dos años.

La de arresto mayor, dura de uno á seis meses.

La de arresto menor, dura de uno á quince dias.

La de caucion, dura el tiempo que determinen los Tribunales.

Los términos que designan el tiempo desde el cual y hasta el cual dura la pena, se computan ambos inclusive.

Art. 27. Lo dispuesto en el artículo an-

terior no tiene lugar respecto de las penas que se imponen como accesorias de otras; en cuyo caso tendrán las penas accesorias la duracion que respectivamente se halle determinada por la ley.

Art. 28. La duracion de las penas temporales empezará á contarse desde el dia en que la sentencia condenatoria quede ejecutoriada, lo cual en las penas personales se entenderá si el reo quedare desde luego en poder de la autoridad, y si no, desde que se presentare ó fuere aprehendido.

Si se hubiere interpuesto recurso de nulidad ó de casacion, y por consecuencia de él se redujere la pena, se contará la duracion de esta desde que se haya publicado la sentencia anulada ó casada.

SECCION SEGUNDA.*Efectos de las penas segun su naturaleza respectiva.*

Art. 29. Los que hayan sufrido las penas de argolla ó degradacion, no pueden ser rehabilitados sino por una ley especial, aunque obtengan indulto de las penas principales.

Art. 30. La pena de la inhabilitacion absoluta perpétua produce:

1.º La privacion de todos los honores y de los cargos y empleos públicos que tuviere el penado, aunque sean de eleccion popular.

2.º La privacion de todos los derechos políticos, activos y pasivos.

3.º La incapacidad para obtener los cargos, empleos, derechos y honores mencionados.

4.º La pérdida de todo derecho á jubilacion, cesantía ú otra pension por los empleos que hubiere servido con anterioridad, sin perjuicio de la alimenticia que el Gobierno podrá concederle por servicios eminentes.

No se comprenden en esta disposicion los derechos ya adquiridos al tiempo de la condena por la viuda ó hijos del penado (46).

Art. 31. La pena de inhabilitacion absoluta temporal para cargos públicos ó derechos políticos, produce en el penado:

1.º La privacion de todos los honores y de los empleos y cargos públicos, aunque sean de eleccion popular.

2.º La privacion de todos los derechos políticos, activos y pasivos, durante el tiempo de la condena.

3.º La incapacidad para obtener los em-

(46) Sobre este artículo y demás que hablan de la pena de inhabilitacion, véase la nota al art. 114.

pleos, cargos, derechos y honores mencionados, igualmente por el tiempo de la condena.

Art. 32. La inhabilitacion especial perpétua para cargos públicos, produce:

1.º La privacion del cargo ó empleo sobre que recae, y de los honores anejos á él.

2.º La incapacidad de obtener otros en la misma carrera.

Art. 33. La inhabilitacion especial perpétua para derechos políticos priva perpétuamente de la capacidad de ejercer los derechos sobre que recae.

Art. 34. La inhabilitacion especial temporal para cargo público produce:

1.º La privacion del cargo ó empleo sobre que recae, y de los honores anejos á él.

2.º La incapacidad de obtener otros en la misma carrera durante el tiempo de la condena.

Art. 35. La inhabilitacion especial temporal para derechos políticos produce la incapacidad para ejercer los derechos sobre que recae por el tiempo de la condena.

Art. 36. La suspension de un cargo público inhabilita para su ejercicio, y para obtener otro en la misma carrera por el tiempo de la condena.

Art. 37. La suspension de derechos políticos inhabilita igualmente para su ejercicio durante el tiempo de la condena.

Art. 38. Cuando la pena de inhabilitacion en cualquiera de sus grados y la de suspension recaigan en personas eclesiásticas, se limitarán sus efectos á los cargos, derechos y honores que no tengan por la Iglesia. Los eclesiásticos incurso en dichas penas quedarán impedidos en todo el tiempo de su duracion para ejercer en el Reino la jurisdiccion eclesiástica, la cura de almas y el ministerio de la predicacion, y para percibir las rentas eclesiásticas, salva la congrua.

Art. 39. La inhabilitacion perpétua especial para profesion ú oficio priva al penado perpétuamente de la facultad de ejercerlos. La temporal le priva igualmente por el tiempo de la condena.

Art. 40. La suspension de profesion ú oficio produce los mismos efectos que la inhabilitacion temporal durante el tiempo de la condena.

Art. 41. La interdicción civil priva al penado, mientras la está sufriendo, del derecho de patria potestad, de la autoridad marital, de la administracion de sus bienes, y del derecho de disponer de ellos por actos entre vivos. Exceptúanse los casos en que la ley limita determinadamente sus efectos.

Art. 42. La sujecion á la vigilancia de

la autoridad produce en el penado las obligaciones siguientes:

1.ª Fijar su domicilio y dar cuenta de él á la autoridad inmediatamente encargada de su vigilancia, no pudiendo cambiarlo sin conocimiento y permiso de la misma autoridad, dado por escrito.

2.ª Observar las reglas de inspeccion que aquella le prefije.

3.ª Adoptar oficio, arte, industria ó profesion, si no tuviere medios propios y conocidos de subsistencia.

Siempre que un penado quede bajo la vigilancia de la autoridad, se dará conocimiento de ello al Gobierno (17).

Art. 43. La pena de caucion produce en el penado la obligacion de presentar un fiador abonado que responda de que aquel no ejecutará el mal que se trate de precaver, y se obligue á satisfacer, si lo causare, la cantidad que haya fijado el Tribunal en la sentencia.

El Tribunal determinará, segun su prudente arbitrio, la duracion de la fianza.

Si no la diere el penado, incurrirá en la pena de arresto menor.

Art. 44. Los sentenciados á las penas de inhabilitacion para cargos públicos, derechos políticos, profesion ú oficio, perpétua ó temporalmente, pueden ser rehabilitados en la forma que determine la ley, salvo lo dispuesto en el art. 29 para los casos de que en él se trata (18).

Art. 45. La gracia de indulto no produce la rehabilitacion para el ejercicio de los cargos públicos y derechos políticos, ni exime de la sujecion á la vigilancia de la autoridad, si en el indulto no se concediere especialmente la rehabilitacion ó exencion en la forma que se prescriba en el Código de procedimientos (19).

(17) Sobre la sujecion á la vigilancia véanse la R. O. de 28 de noviembre de 1849, el art. 40 del R. D. de 14 de diciembre de 1855, y el 8.º y 9.º de la ley de 18 de julio de 1866.

(18) La inhabilitacion como la suspension son penas cuyos efectos se determinan expresamente en este Código. Cuando son temporales, dicen sus arts. 31, 34, 35, 36, 37, 39 y 40, que su duracion se limita al tiempo de la condena, y siendo así la rehabilitacion de que habla este artículo (44), debe entenderse, como su letra y su espiritu lo dicen, respecto de la perpétua; ó cuando de la temporal mientras dure el tiempo de la condena. Concluido el tiempo, la pena no existe ya, y creemos por lo tanto que la rehabilitacion es innecesaria.

(19) Sobre concesion de indultos, sus efectos, etc.; véase el R. D. de 7 de diciembre de 1866 en INDULTOS.

Art. 46. En todos los casos en que segun derecho procede la condenacion de costas, se hará tambien la de los gastos ocasionados por el juicio á que se refieren aquellos (20).

Art. 47. La tasacion de costas comprenderá únicamente el abono de derechos é indemnizaciones que consistan en cantidades fijas é inalterables por hallarse anticipadamente determinadas por las leyes, decretos ó Reales órdenes: las indemnizaciones y derechos que no se hallen en este caso corresponden á los gastos del juicio.

El importe de estos se fijará por el Tribunal, previa audiencia de parte (21).

Los honorarios de los *promotores fiscales* se comprenderán en los gastos del juicio, mientras la ley no establezca otra cosa sobre la forma de dotacion de estos empleados (22).

Art. 48. En el caso de que los bienes del culpable no sean bastantes para cubrir todas las responsabilidades pecuniarias, se satisfarán estas por el orden siguiente:

1.º La reparacion del daño causado é indemnizacion de perjuicios.

2.º El resarcimiento de los gastos ocasionados por el juicio.

3.º Las costas procesales.

4.º La multa.

Art. 49. Si el sentenciado no tuviere bienes para satisfacer las responsabilidades pecuniarias comprendidas en los núms. 1.º, 2.º y 4.º del artículo anterior, sufrirá la pena de prision correccional, por vía de sustitucion y apremio, regulándose á medio duro por cada dia de prision, pero sin que esta pueda exceder nunca de dos años.

El sentenciado á pena de cuatro años de

prision, ú otra mas grave, no sufrirá este apremio (23).

SECCION TERCERA.

Penas que llevan consigo otras accesorias.

Art. 50. La pena de muerte, cuando no se ejecute por haber sido indultado el reo, lleva consigo las de inhabilitacion absoluta perpétua y sujecion de aquel á la vigilancia de la autoridad por el tiempo de su vida.

Art. 51. Las penas de argolla y degradacion civil, llevan consigo las de inhabilitacion absoluta perpétua y sujecion á la vigilancia de la autoridad durante la vida de los penados.

Art. 52. La pena de cadena perpétua lleva consigo las siguientes:

1.ª Argolla en el caso de imponerse la pena de cadena perpétua á un co-reo del que haya sido condenado á la pena de muerte por cualquiera de los delitos de traicion, regicidio, parricidio, robo ó muerte alevosa, ó ejecutada por precio, recompensa, ó promesa.

Esta pena no tendrá efecto cuando el que haya de sufrirla sera oscendiente, descendiente, cónyuge, hermano del reo sentenciado á muerte, mayor de sesenta años, ó mujer.

2.ª Degradacion en el caso de que la

(23) *La prision como sustitucion y apremio.*—El art. 49 quiere que los sentenciados que no tuvieran bienes para satisfacer las responsabilidades pecuniarias de los núms. 1.º, 2.º y 4.º sufran la pena de prision correccional *por via de sustitucion y apremio*. Hé aquí unas dudas. ¿Se debe proceder de oficio en todos los casos de este artículo? Sufrida la prision que por insolvencia se determina como sustitucion y apremio, ¿subsistirá todavía á favor del agraviado la accion civil contra el reo, si este llega después á mejorar de fortuna?

Sobre la primera, parece que de oficio solo deberia ejecutarse la sustitucion y apremio respecto de la multa, y no en cuanto á la reparacion del daño causado é indemnizacion de perjuicios, como puntos de interés privado en los que debe proceder peticion de parte; pero la práctica tiene establecido lo contrario, y se hace sufrir al reo la prision por sustitucion y apremio por razon del daño causado y perjuicios, á no ser que espontáneamente comparezca el agraviado y haga constar que perdona al reo ó le dispensa la indemnizacion.

Respecto de la segunda, si hay razon para que subsista en este caso la accion civil para reclamar cuando se quiera la restitution, igual debe haberla en cuanto á la indicada reparacion é indemnizacion de perjuicios, si el reo llega á mejorar de fortuna, pues aunque hemos visto sostener lo contrario, á nosotros no nos parece jus-

(20) Además de este artículo y de los tres que siguen, deben tenerse muy presentes sobre costas y gastos del juicio las reglas 54 á la 54 de la Ley provisional. Tambien debemos recordar lo dispuesto en R. O. de 5 de mayo de 1863, segun la que en toda causa criminal en que las costas y gastos del juicio se declaren de oficio, los escribanos y demás funcionarios de la Administracion de justicia no tienen derecho á percibir los que hayan devengado en las actuaciones que se practiquen á instancia del ministerio fiscal ó del procesado, y lo mismo los abogados y procuradores, cuando sean nombrados de oficio para la defensa de los procesados.

(21) Véase la nota anterior.

(22) Por R. O. de 27 de diciembre de 1851, se dispuso ya que los jueces y promotores cesasen de percibir los derechos que les estaban asignados en los aranceles, cualquiera que sea su clase, denominacion y motivo.

pena principal de cadena perpétua fuere im-
puesta á un empleado público por abuso co-
metido en el ejercicio de su cargo.

3.^a La interdiccion civil.

4.^a Inhabilitacion perpétua absoluta.

5.^a Sujecion á la vigilancia de la autoridad
durante la vida del penado, en el caso de ha-
ber obtenido indulto de la pena principal.

Art. 53. La pena de reclusion perpétua
lleva consigo las expresadas en los núme-
ros 4.^o y 5.^o del artículo anterior.

Art. 54. Las penas de relegacion perpé-
tua y extrañamiento perpétuo llevan consi-
go las siguientes:

1.^a Inhabilitacion absoluta perpétua para
cargos públicos y derechos políticos.

2.^a Sujecion á la vigilancia de la autori-
dad por el tiempo de la vida de los penados,
aunque obtuvieren indulto de la pena prin-
cipal.

Art. 55. La pena de cadena temporal lle-
va consigo las siguientes:

1.^a Interdiccion civil del penado durante
la condena.

2.^a Inhabilitacion absoluta perpétua para
cargos ó derechos políticos, y sujecion á la
vigilancia de la autoridad durante aquel mis-
mo tiempo y otro tanto mas, que empezará á
contarse desde el cumplimiento de la con-
dena.

Art. 56. La pena de presidio mayor lle-
va consigo las siguientes:

to que en último resultado vengán á recaer so-
bre la persona ofendida las consecuencias de
una pena especial que la ley ha establecido en
su beneficio.

No obstante esto, en R. O. de 17 de setiembre
de 1881 se dijo al señor fiscal de la Audiencia de
Valladolid lo siguiente:

•Del informe evacuado por la Sala extraordi-
naria de esa Audiencia en vacaciones acerca de
la instancia de Joaquin Escudero Fernandez, en
solicitud del indulto, resulta que así por el juez
de primera instancia, como por la Sala que dic-
tó la ejecutoria, se le condenó al pago de la
multa, costas y gastos del juicio para cuandome-
jorase de fortuna, previniendo sufriese en defecto
de pago, con arreglo al art. 49 del Código, la
prision correccional equivalente. Y teniendo pre-
sente S. M. que la condenacion á responsabili-
dades pecuniarias para cuando los reos mejoren
de fortuna, no pueden conciliarse con el man-
dato de que en caso de insolvencia sufran la pri-
sion correccional por vía de sustitucion y apre-
mio, prevenida en el artículo citado, se ha ser-
vido mandar que V. S. procure, por todos los
medios que estén á su alcance, no se dicten sen-
tencias en asuntos criminales en los términos
indicados.

Bien meditada esta Real resolucion, no cree-
mos que se oponga á la doctrina que dejamos
sentada.

1.^a Inhabilitacion absoluta perpétua del
penado para cargos públicos.

2.^a Sujecion á la vigilancia de la autori-
dad por igual tiempo al de la condena prin-
cipal, que empezará á contarse desde el cum-
plimiento de la misma.

Art. 57. Las penas de reclusion, relega-
cion y extrañamiento temporales, presidio
menor y correccional y confinamiento ma-
yor, llevan consigo las de inhabilitacion ab-
soluta de los penados para cargos y derechos
políticos, y sujecion á la vigilancia de la au-
toridad durante el tiempo de su condena y
otro tanto mas, que empezará á contarse des-
de el cumplimiento de aquella.

Art. 58. Las penas de prision mayor, me-
nor y correccional, confinamiento menor y
destierro, llevan consigo la de suspension de
todo cargo y derecho político del penado du-
rante el tiempo de la condena.

Art. 59. Toda pena que se imponga por
un delito, lleva consigo la pérdida de los efec-
tos que de él provengan y de los instrumen-
tos con que se ejecute.

Los unos y los otros serán decomisados, á
no ser que pertenezcan á un tercero no res-
ponsable del delito.

CAPITULO IV.

De la aplicacion de las penas.

SECCION PRIMERA.

*Reglas para la aplicacion de las penas á los
autores de delito consumado, de delito frus-
trado y tentativa, y á los cómplices y en-
cubridores.*

Art. 60. A los autores de un delito ó fal-
ta se impondrá la pena que para el delito ó
falta que hayan cometido se halle señalada
por la ley.

Siempre que la ley señala generalmente la
pena de un delito, se entiende que la impone
al delito consumado.

Art. 61. A los autores de un delito frus-
trado se impondrá la pena inmediatamente
inferior en grado á la señalada por la ley para
el delito.

Art. 62. A los autores de tentativa de
delito se impondrá la pena inferior en dos
grados á la señalada por la ley para el delito.

La conspiracion para cometer un delito se
castigará como tentativa; la proposicion para
el mismo fin con una pena inferior en dos
grados á la anterior, salvo aquellos casos en
que la conspiracion y la proposicion tengan
señalada mayor pena por artículos especia-
les del Código.

Art. 63. A los cómplices se impondrá la

pena inferior en un grado á la correspondiente á los autores del delito.

Art. 64. A los encubridores se impondrá la pena inferior en dos grados á la correspondiente á los autores del delito.

Exceptúanse de esta regla los encubridores comprendidos en el núm. 3.º del art. 14, en quienes concurra la circunstancia primera del mismo número, á los cuales se impondrá la pena de inhabilitacion perpétua especial, si el delincuente encubierto fuere reo de delito grave, y la de inhabilitacion especial temporal si lo fuere de delito menos grave.

Art. 65. Las disposiciones generales contenidas en los cuatro artículos precedentes no tienen lugar en los casos en que el delito frustrado, la tentativa, la complicidad ó el encubrimiento se hallan especialmente penados por la ley.

Art. 66. Para graduar las penas que en conformidad á los arts. 61, 62, 63 y 64 corresponde imponer á los autores de delito frustrado ó tentativa, y á los cómplices y encubridores, se observarán las reglas siguientes:

1.ª Cuando la pena señalada al delito sea una sola é indivisible, la correspondiente á los autores de delito frustrado y á los cómplices de delito consumado es la inmediatamente inferior, sea esta divisible ó indivisible; y la correspondiente á los autores de tentativa de delito y á los encubridores, es la inferior en dos grados, la cual se impondrá en su grado mínimo, medio ó máximo, según las circunstancias.

2.ª Cuando la pena señalada al delito sea una pena compuesta de dos indivisibles, la correspondiente á los autores del delito frus-

trado y á los cómplices del delito consumado, se compondrá de la pena mas baja de aquellas y de los grados máximo y medio de la inferior; y la correspondiente á los autores de tentativa y á los encubridores será la misma pena inferior en su grado mínimo, y la inmediata siguiente en sus grados máximo y medio.

3.ª Cuando la pena señalada al delito sea una pena compuesta de dos indivisibles y el grado máximo de otra divisible, la correspondiente á los autores del delito frustrado y á los cómplices del delito consumado, es la última de aquellas tres penas en toda su extension; y la correspondiente á los autores de tentativa y á los encubridores del delito, es la inmediata inferior igualmente en toda su extension.

4.ª Cuando la pena señalada al delito sea una sola divisible, la correspondiente á los autores del delito frustrado y á los cómplices del delito consumado es la inmediatamente inferior y la correspondiente á los autores de tentativa y á los encubridores la inferior en dos grados.

5.ª Cuando la pena señalada al delito sea una pena compuesta de tres divisibles, la correspondiente á los autores de delito frustrado y á los cómplices de delito consumado, se compondrá de las dos mas bajas de aquellas y de la inmediatamente inferior; y la correspondiente á los autores de tentativa y á los encubridores, se compondrá de la mas baja de aquellas y de las dos inferiores en grado (24).

(24) Véase la nota á las escalas graduales del art. 79.

NOTA.—APLICACION PRACTICA DE LAS REGLAS PRECEDENTES.

PENA señalada para el delito.	PENA correspondiente al autor del delito frustrado y cómplices de delito consumado.	PENA correspondiente al autor de tentativa y el encu- bridor.
1.º CASO..... Muerte.....	Cadena perpétua.....	Cadena temporal.
2.º CASO..... { Cadena perpétua á muerte.....	{ Cadena temporal en su grado medio á cadena perpétua.....	{ Presidio mayor en su grado medio á cadena temporal en su grado mínimo.
3.º CASO..... { Cadena temporal en su grado máximo á muerte.....	{ Cadena temporal.....	Presidio mayor.
4.º CASO..... Cadena temporal.....	Presidio mayor.....	Presidio menor.
5.º CASO..... { Presidio menor á cadena temporal.....	{ Presidio correccional á presidio mayor....	{ Arresto mayor á presidio menor.

SECCION SEGUNDA.

Reglas para la aplicacion de las penas en consideracion á las circunstancias atenuantes ó agravantes.

Art. 67. Las circunstancias atenuantes ó agravantes se tomarán en consideracion para disminuir ó aumentar la pena en los casos y conforme á las reglas que se prescriben en esta seccion.

Art. 68. No producen el efecto de aumentar la pena las circunstancias agravantes que por sí mismas constituyan un delito especialmente penado por la ley, ó que esta haya expresado al describirlo y penarlo.

Tampoco lo producen aquellas circunstancias agravantes de tal manera inherentes al delito, que sin la concurrencia de ellas no pueda cometerse.

Art. 69. Las circunstancias agravantes ó atenuantes que consistan en la disposicion moral del delincuente, en sus relaciones particulares con el ofendido, ó en otra causa personal, servirán para agravar ó atenuar la responsabilidad de solo aquellos autores, cómplices ó encubridores en quienes concurran.

Las que consistan en la ejecucion material del hecho ó en los medios empleados para realizarlo, servirán para agravar ó atenuar la responsabilidad únicamente de los que tuvieron conocimiento de ellas en el momento de la accion ó de su cooperacion para el delito.

Art. 70. En los casos en que la ley señala una sola pena indivisible, la aplicarán los Tribunales en consideracion á las circunstancias atenuantes ó agravantes que concurran en el hecho.

Cuando la ley señale una pena compuesta de dos indivisibles, los Tribunales impondrán la mayor, á no ser que concurra alguna circunstancia atenuante.

Se exceptúan de estas disposiciones los casos de que se trata en los tres artículos siguientes (25).

Art. 71. Cuando no concurran todos los requisitos que se exigen en el caso del número 8.º del art. 8.º para eximir de respon-

sabilidad, se observará lo dispuesto en el artículo 480.

Art. 72. Al menor de 15 años, mayor de 9, que no esté exento de responsabilidad por haber declarado el Tribunal que obró con discernimiento, se le impondrá una pena discrecional, pero siempre inferior en dos grados por lo menos á la señalada por la ley al delito que hubiere cometido.

Al mayor de 15 años y menor de 18 se aplicará siempre en el grado que corresponda la pena inmediatamente inferior á la señalada por la ley.

Art. 73. Se aplicará asimismo la pena inmediatamente inferior á la señalada por la ley cuando el hecho no fuere del todo excusable por falta de alguno de los requisitos que se exigen para eximir de responsabilidad criminal en los respectivos casos de que se trata en el art. 8.º, siempre que concurra el mayor número de ellos, imponiéndola en el grado que los Tribunales estimen correspondiente, atendido el número y entidad de los requisitos que falten ó concurran.

Esta disposicion se entiende sin perjuicio de la contenida en el art. 71.

Art. 74. En los casos en que la pena señalada por la ley contenga tres grados, bien sea una sola pena divisible, bien sea compuesta de tres distintas, cada una de las cuales forma un grado con arreglo á lo prevenido en los arts. 83 y 84, los Tribunales observarán para la aplicacion de la pena, segun haya ó no circunstancias atenuantes ó agravantes, las reglas siguientes:

1.ª Cuando en el hecho no concurrieren circunstancias agravantes ni atenuantes, impondrán la pena señalada por la ley en su grado medio.

2.ª Cuando concurriere solo alguna circunstancia atenuante, la impondrán en el grado mínimo.

3.ª Cuando concurriere solo alguna circunstancia agravante, la impondrán en el grado máximo.

4.ª Cuando concurrieren circunstancias atenuantes y agravantes, las compensarán racionalmente para la designacion de la pena, graduando el valor de unas y otras.

5.ª Cuando sean dos ó mas, y muy calificadas las circunstancias atenuantes, y no concurra ninguna agravante, los Tribunales impondrán la pena inmediatamente inferior á la señalada por la ley en el grado que estimen correspondiente, segun el número y entidad de dichas circunstancias.

6.ª Cualquiera que sea el número y entidad de las circunstancias agravantes, los Tribunales no podrán imponer pena mayor

(25) No se crea sin embargo, que los arts. 71, 72 y 73 son una mera excepcion de lo dispuesto en el 70, como algunos han entendido: muy al contrario, sus disposiciones son tambien reglas generales aplicables en todos los casos, lo mismo cuando la ley señala una sola pena indivisible, que cuando señala una compuesta de dos indivisibles, ó bien cualquiera de las divisibles de tres grados.

que la designada por la ley en su grado máximo.

7.º Dentro de los límites de cada grado, los Tribunales determinarán la cuantía de la pena en consideracion al número y entidad de las circunstancias agravantes y atenuantes, y á la mayor ó menor extension del mal producido por el delito,

Art. 75. En la aplicacion de las multas, los Tribunales podrán recorrer toda la extension en que la ley les permite imponerlas, consultando para determinar en cada caso su cuantía, no solo las circunstancias atenuantes y agravantes del hecho, sino principalmente el caudal ó facultades del culpable.

SECCION TERCERA.

Disposiciones comunes á las dos secciones anteriores.

Art. 76. Al culpable de dos ó mas delitos ó faltas se le impondrán todas las penas correspondientes á las diversas infracciones, sin perjuicio en el primer caso de lo dispuesto en el pár. 3.º del art. 2.º

El sentenciado cumplirá todas sus condenas simultáneamente, siendo posible. Cuando no lo fuere, ó si de ello hubiere de resultar ilusoria alguna de las penas, las sufrirá en orden sucesivo, principiando por las mas graves, ó sean las mas altas en la escala general, excepto las de extrañamiento, confinamiento y destierro, las cuales se ejecutarán despues de haber cumplido cualquiera otra pena de las comprendidas en las escalas graduales núms. 1.º y 2.º

Art. 77. La disposicion del artículo anterior no es aplicable en el caso de que un solo hecho constituya dos ó mas delitos, ó cuando el uno de ellos sea medio necesario para cometer el otro.

En estos casos solo se impondrá la pena correspondiente al delito mas grave, aplicándola en su grado máximo.

Art. 78. Siempre que los Tribunales impongan una pena que lleve consigo otras por disposicion de la ley, segun lo que se prescribe en la seccion tercera del capítulo anterior, condenarán tambien expresamente al reo en estas últimas.

Art. 79. En los casos en que la ley señala una pena inferior ó superior en uno ó mas grados á otra determinada, se observarán para su graduacion las reglas prescritas en el art. 66.

La pena inferior ó superior se tomará de la escala gradual en que se halle comprendida la pena determinada.

Cuando haya de aplicarse una pena supe-

rior á la de arresto mayor, se tomará de la escala en que se hallen comprendidas las penas señaladas para los delitos mas graves de la misma especie que el castigado con arresto mayor.

Los Tribunales en estos casos atenderán para hacer la aplicacion de la pena inferior ó superior á las siguientes

Escalas graduales.

ESCALA NÚMERO 1.º

Grados.

- 1.º Muerte.
- 2.º Cadena perpétua.
- 3.º Cadena temporal.
- 4.º Presidio mayor.
- 5.º Presidio menor.
- 6.º Presidio correccional.
- 7.º Arresto mayor.

ESCALA NÚMERO 2.º

Grados.

- 1.º Reclusion perpétua.
- 2.º Reclusion temporal.
- 3.º Prision mayor.
- 4.º Prision menor.
- 5.º Prision correccional.
- 6.º Arresto mayor.

ESCALA NÚMERO 3.º

Grados.

- 1.º Relegacion perpétua.
- 2.º Extrañamiento perpétuo.
- 3.º Relegacion temporal.
- 4.º Extrañamiento temporal.
- 5.º Confinamiento mayor.
- 6.º Confinamiento menor.
- 7.º Destierro.
- 8.º Sujecion á la vigilancia de la autoridad.
- 9.º Represion pública.
10. Caucion de conducta.

ESCALA NÚMERO 4.º

Grados.

- | | | |
|--|---------------|---|
| 1.º Inhabilitacion absoluta perpétua para... | Cargos. . . | { Derechos políticos. |
| 2.º Inhabilitacion especial perpétua para... | | |
| | Cargo público | { Derechos políticos, profesion ú oficio. |
| | | |

3.º Inhabilitacion especial tem- poral para...	Cargo público	Derechos políticos, profesion u oficio.
4.º Suspension de algun.	Cargo público	Derecho político, profesion u oficio.

Art. 80. En los casos en que la ley señala una pena superior á otra determinada, sin designar especialmente la que se deba imponer, si no hubiere pena superior en la escala gradual respectiva, ó la pena superior fuere la de muerte, se impondrá la de cadena perpétua.

Art. 81. Cuando sea necesario elevar la inhabilitacion absoluta perpétua á otro grado superior, se agravará la inhabilitacion con la prision menor.

Cuando haya de pasarse de aquella pena á otra inferior, se impondrá la de inhabilitacion absoluta temporal y de esta se bajará á la suspension.

Art. 82. La multa se considerará como la pena inmediatamente inferior á la última de todas las escalas graduales.

Cuando sea necesario elevar esta pena ó bajarla á otros grados, se aumentará para cada grado superior una cuarta parte sobre el máximo de la multa determinada, y se rebajará otro tanto del mínimo para cada grado inferior.

Los Tribunales que puedan aplicar penas leves, podrán imponer multas hasta 15 duros.

Los que tengan jurisdiccion para aplicar penas correccionales, podrán imponerlas hasta 300 duros.

Los que sean competentes para aplicar penas aflictivas, podrán imponerlas en toda su extension.

Igual regla se seguirá respecto de las multas que no consistan en cantidad fija, sino proporcional.

En los casos de que trata el presente artículo, la prision por vía de apremio establecida en el 49 no podrá pasar nunca por lo respectivo á la multa de 30 dias (26).

(26) Los párrs. 3.º, 4.º y 5.º del art. 82 son para nosotros los de mas dudosa inteligencia.

Art. 83. En las penas divisibles, el período legal de su duracion se entiende distribuido en tres partes iguales que forman los tres grados, mínimo, medio y máximo (27).

El tiempo que comprende cada grado es el que se designa en la siguiente

Previénese por ellos en efecto, que los Tribunales que están facultados para aplicar penas leves, podrán imponer multas hasta 15 duros; los que tienen jurisdiccion para aplicar penas correccionales, podrán imponerlas hasta 300 duros; y los que son competentes para aplicar penas aflictivas podrán imponerlas en toda su extension, ¿Cuál ha sido el objeto que se ha propuesto el legislador con estas disposiciones? ¿Es por ventura el de clasificar las multas en general por razon de su cuantía? Si ese ha sido su objeto, no podrá menos de convenirse en la inoportunidad del lugar en que se hace tal declaracion: esto deberia consignarse en el artículo 24, que de clasificacion de penas trata; lo demás, es introducir la confusion, y faltar á las reglas de buen orden y método. Por otra parte, la multa, cuando se impone conjunta ó alternativamente con otras penas, debe participar y seguir la naturaleza de estas, segun ya tenemos dicho en la pregunta 20; y cuando se impone sola, nunca debe tener otro carácter que el de pena correccional, ó el de pena leve. Repugna en verdad que se llame á la multa pena aflictiva. Así dice, hablando de este artículo, el Sr. Montero Hidalgo, ilustrado autor del *Informe-contestacion á las 46 preguntas del interrogatorio sobre el Código penal*.

Sin embargo, nosotros creemos, y así lo venimos consignando en todas las anteriores ediciones que todos los párrafos de este artículo deben interpretarse por lo que se dice en el 1.º que habla solo de la multa, como la pena inmediatamente inferior á la última de todas las escalas graduales. De otro modo, sus disposiciones no guardarian consonancia con otras muchas del Código; los párs. 3.º y 6.º, por ejemplo, se hallarian en completa contradiccion con el art. 489, segun el que hay casos en que pueden los Alcaldes imponer en juicio verbal 75 duros de multa.

(27) La pena de multa no se halla comprendida en este artículo por lo dispuesto en el 85. Respecto de las demás penas, la disposicion de esta parte del art. 83 está terminante, y mucho mas con la demostracion de la tabla que le acompaña; pero no bastaba á evitar dudas, y por eso se añadió en la reforma de 1850 el párrafo que sigue á la tabla, y el segundo del art. 84 que son en cierto modo la modificacion de la regla absoluta de dicho primer párrafo.

TABLA DEMOSTRATIVA

DE LA DURACION DE LAS PENAS DIVISIBLES Y DE CADA UNO DE SUS GRADOS.

PENAS.	TIEMPO que comprende toda la pena.	TIEMPO que comprende el gra- do mínimo.	TIEMPO que comprende el gra- do medio.	TIEMPO que comprende el gra- do máximo.
Cadena, reclusion, relegacion, extraña- miento.....	De 12 á 20 años.....	De 12 á 14 años.....	De 15 á 17 años.....	De 18 á 20 años.
Presidio, prision, confinamiento.....	De 7 á 12 años.	De 7 á 8 años.....	De 9 á 10 años.....	De 11 á 12 años.
Inhabilitacion absoluta, inhabilitacion especial.....	De 3 á 8 años.....	De 3 á 4 años.....	De 5 á 6 años.....	De 7 á 8 años.
Suspension.	Dos años.....	De 1 á 8 meses.	De 9 á 16 meses.....	De 17 á 24 meses.
Presidio, prision, confinamiento.....	De 4 á 6 años.....	De 4 años á 4 y 8 meses.....	De 4 años y 9 meses á 5 años y 4 meses.	De 5 años y 5 meses á 6 años.
Presidio correccional.....	De 7 á 36 meses.....	De 7 á 16 meses....	De 17 á 26 meses....	De 27 á 36 meses.
Prision				
Destierro.....				
Sujecion á la vigilancia de la Autoridad.	De 7 á 36 meses.....	De 7 á 16 meses. ...	De 17 á 26 meses....	De 27 á 36 meses.
Arresto mayor.....	De 1 á 6 meses.	De 1 á 2 meses.....	De 3 á 4 meses.....	De 5 á 6 meses.
Arresto menor.	De 1 á 15 dias.	De 1 á 5 dias.....	De 6 á 10 dias.....	De 11 á 15 dias.

Cuando hubiere que hacer subdivisiones en los grados de la tabla anterior, los Tribunales aplicarán discrecionalmente la pena en cuanto á aquellas, dentro de los límites prefijados por la ley.

Art. 84. En los casos en que la ley señale una pena compuesta de tres distintas, cada una de estas forma un grado de penalidad, la mas leve de ellas el mínimo, la siguiente el medio, y la mas grave el máximo.

Cuando la señal en una forma no prevista especialmente en este libro primero, la aplicarán los Tribunales, guardando la posible armonía dentro de los límites que se prefijen, y del modo que se prevenga por las disposiciones generales del Código.

Art. 85. Lo dispuesto en el art. 83 no tiene aplicacion á la pena de multa. La graduacion de la cuantía en que haya de imponerse dentro de los límites que la ley señale, se hará con arreglo á lo que se prescribe en el art. 75.

CAPITULO V.

De la ejecucion de las penas y de su cumplimiento.

SECCION PRIMERA.

Disposiciones generales.

Art. 86. No podrá ejecutarse pena alguna sino en virtud de sentencia ejecutoriada.

Art. 87. Tampoco puede ser ejecutada pena alguna en otra forma que la prescrita por la ley ni con otras circunstancias ó accidentes que los expresados en su texto.

Se observará tambien, además de lo que dispone la ley, lo que se determine en los reglamentos especiales para el gobierno de los establecimientos en que deben cumplirse las penas acerca de la naturaleza, tiempo y demás circunstancias de los trabajos, relaciones de los penados con otras personas, socorros que puedan recibir, y régimen alimenticio.

Los reglamentos dispondrán la separacion de sexos en establecimientos distintos, ó por lo menos en departamentos diferentes.

Art. 88. Los delincuentes que despues del delito cayeren en estado de locura ó demencia, no sufrirán ninguna pena, ni se les notificará la sentencia en que se les imponga hasta que recobren la razon, observándose lo que para este caso se determine en el Código de procedimientos.

El que perdiere la razon despues de la sentencia en que se le imponga pena afflictiva, será constituido en observacion dentro de la misma cárcel; y cuando definitivamente sea declarado demente, se le trasladará á un

hospital, donde se le colocará en una habitacion solitaria.

Si en la sentencia se impusiere una pena menor, el Tribunal podrá acordar que el loco ó demente sea entregado á su familia bajo fianza de custodia, y de tenerlo á disposicion del mismo Tribunal, ó que se le recluya en un hospital segun lo estimare.

En cualquier tiempo que el demente recobre el juicio, se ejecutará la sentencia.

Estas disposiciones se observarán tambien cuando la locura ó demencia sobrevengan hallándose el sentenciado cumpliendo la condena (28).

SECCION SEGUNDA.

Penas principales (29).

Art. 89. La pena de muerte se ejecutará en garrote sobre un tablado.

La ejecucion se verificará de dia y con publicidad en el lugar generalmente destinado para este efecto, ó en el que el Tribunal determine cuando haya causas especiales para ello (30).

Esta pena no se ejecutará en dias de fiesta religiosa ó nacional.

(28) En R. O. de 13 de enero de 1864 se establecen las formalidades que deben observarse para la declaracion de la demencia en los penados, á los efectos de este artículo.

(29) Además de las disposiciones transitorias que siguen al art. 506 de este Código, deben tenerse presentes sobre *cumplimientos de condenas* los artículos 7 al 9 y 23 al 26 de la ley de prisiones de 26 de julio de 1849, y tambien el R. D. de 26 de marzo de 1852, la R. O. de 4 de enero de 1854, el R. D. de 14 de diciembre de 1853, y la ley de 18 de julio de 1866.—V. PRESIDIOS.

(30) Por R. O. de 4 de junio, circulada en 18 de agosto de 1849 se dispuso que cuando la jurisdiccion militar imponga la pena de muerte en garrote vil, sea la misma la que lleve á ejecucion la sentencia, sin otro requisito que el de dar aviso á la Audiencia territorial para que ponga á su disposicion el ejecutor de la justicia con los instrumentos necesarios para llevar á efecto las penas.

Por otra R. O. de 8 de julio de 1863, circulada en 31 del mismo mes, se dispuso que cuando un juez de primera instancia reciba ejecutoria de una sentencia, debe ponerlo en conocimiento de la autoridad superior civil del punto en que se halle, señalando dia y hora de la ejecucion; y que á esta autoridad corresponde pedir á la superior militar del mismo el auxilio que considere necesario, así como indicar, si lo creyese oportuno, las instrucciones particulares que deba observar la tropa mientras dure el acto á que se destina, no teniendo relacion con la ordenanza.—V. EJECUCION DE PENA CAPITAL.

Art. 90. El sentenciado á la pena de muerte será conducido al patíbulo con hoga negra, en caballera ó carro.

El pregonero publicará en alta voz la sentencia en los parajes del tránsito que el juez señale.

Art. 91. El regicida y el parricida serán conducidos al patíbulo con hoga amarilla y un birrete del mismo color, una y otro con manchas encarnadas.

Art. 92. El cadáver del ejecutado quedará expuesto en el patíbulo hasta una hora antes de oscurecer, en la que será sepultado, entregándolo á sus parientes ó amigos para este efecto, si lo solicitaren. El entierro no podrá hacerse con pompa.

Art. 93. No se ejecutará la pena de muerte en la mujer que se halle en cinta, ni se le notificará la sentencia en que se le imponga, hasta que hayan pasado cuarenta días después del alumbramiento.

Art. 94. La pena de cadena perpétua se sufrirá en cualquiera de los puntos designados á este objeto en Africa, Canarias ó Ultramar.

Art. 95. La pena de cadena temporal se sufrirá en uno de los arsenales de marina, ó en obras de fortificación, caminos y canales dentro de la Península é Islas adyacentes.

Art. 96. Los sentenciados á cadena temporal ó perpétua trabajarán en beneficio del Estado, llevarán siempre una cadena al pié pendiente de la cintura, ó asida á la de otro penado; se emplearán en trabajos duros y penosos, y no recibirán auxilio alguno de fuera del establecimiento.

Sin embargo, cuando el Tribunal, consultando la edad, salud, estado ó cualquiera otras circunstancias personales del delincuente, creyere que este debe sufrir la pena en trabajos interiores del establecimiento lo expresará así en la sentencia.

Art. 97. Los sentenciados á cadena temporal ó perpétua no podrán ser destinados á obras de particulares, ni á las públicas, que se ejecuten por empresas ó contratas con el Gobierno.

Art. 98. El condenado á cadena temporal ó perpétua que tuviere antes de la sentencia 60 años de edad, sufrirá la condena en una casa de presidio mayor. Si los cumpliere estando ya sentenciado, se le trasladará á dicha casa presidio, en la que permanecerá durante el tiempo prefijado en la sentencia.

Art. 99. Las mujeres que fueren sentenciadas á cadena temporal ó perpétua, cumplirán su condena en una casa de presidio mayor de las destinadas para las personas de su sexo.

Art. 100. La reclusion perpétua se sufrirá en un establecimiento situado dentro ó fuera de la Península, y en todo caso lejano del domicilio del penado.

Todos los condenados á esta pena están sujetos á trabajo forzoso en beneficio del Estado dentro del recinto del establecimiento. El trabajo, disciplina, traje y régimen alimenticio serán uniformes.

Art. 101. La reclusion temporal se cumplirá en la misma forma que la reclusion perpétua, pero dentro de la Península é Islas Baleares ó Canarias (34).

Art. 102. Las penas de relegación perpetua y temporal se cumplirán en Ultramar en los puntos para ello destinados por el Gobierno (32).

Los relegados podrán dedicarse libremente bajo la vigilancia de la autoridad, á su profesión ú oficio dentro del radio á que se extiendan los límites del establecimiento penal.

Art. 103. El sentenciado á extrañamiento será expulsado del territorio español para siempre, si fuere perpétuo; y si fuere temporal, por el tiempo de la condena.

Art. 104. Las penas de presidio se cumplirán en los establecimientos destinados para ello, los cuales deberán estar situados: para el presidio mayor, dentro de la Península é Islas Baleares ó Canarias; para el menor, dentro del territorio de la Audiencia que lo imponga; y para el correccional, dentro de la provincia en que tuviere su domicilio el penado, y en su defecto en la que hubiere cometido el delito.

Los condenados á presidio estarán sujetos á trabajo forzoso dentro de los límites del establecimiento en que sufran la pena.

Art. 105. El producto del trabajo de los presidiarios será destinado:

1.º Para hacer efectiva la responsabilidad civil de aquellos, proveniente del delito.

2.º Para indemnizar al establecimiento de los gastos que ocasionen.

3.º Para proporcionales alguna ventaja ó alivio durante su detención, si lo merecieren; y para formarles un fondo de reserva que se les entregará á su salida del presidio.

Art. 106. La pena de prision se cumplirá en los establecimientos destinados para ello, los cuales deberán estar situados: para la mayor, dentro de la Península é Islas Baleares ó Canarias; para la menor, dentro del territorio de la Audiencia que la imponga; y

(34) O de nuestras posesiones de Africa, segun el art. 2.º ley de 18 de julio de 1866,

(32) O en alguna de nuestras posesiones de Africa. Art. 3.º de la ley de 18 de julio de 1866.

para la correccional, dentro de la provincia en que el penado tuviere su domicilio, y en su defecto en la que hubiere cometido el delito.

Los condenados á prision no podrán salir del establecimiento en que la sufran durante el tiempo de su condena, y se ocuparán para su propio beneficio en trabajos de su eleccion, siempre que sean compatibles con la disciplina reglamentaria.

Estarán sin embargo sujetos forzosamente á los trabajos del establecimiento hasta hacer efectivas las responsabilidades señaladas en los números 1.º y 2.º del artículo anterior; tambien lo estarán los que no tengan oficio ó modo de vivir conocido y honesto.

Art. 107. Los sentenciados á confinamiento mayor serán conducidos á un pueblo ó distrito situado en las Islas Baleares ó Canarias, ó á un punto aislado de la Península, en el cual permanecerán en plena libertad bajo la vigilancia de la autoridad.

Los que fueren útiles por su edad, salud y buena conducta, podrán ser destinados por el Gobierno al servicio militar si fueren solteros, y no tuvieren medios con que subsistir.

Art. 108. El sentenciado á confinamiento menor residirá precisamente en el punto que se le señale en la condena, del cual no podrá salir durante esta sin permiso del Gobierno por justa causa.

El lugar del confinamiento distará al menos diez leguas del en que se hubiere cometido el delito, y del de la anterior residencia del sentenciado.

El confinado estará sujeto á la vigilancia de la autoridad.

Art. 109. El sentenciado á destierro quedará privado de entrar en el punto ó puntos que se designen en la sentencia y en el rádio que en la misma se señale, el cual comprenderá una distancia de cinco leguas al menos y quince á lo mas del punto designado.

Art. 110. El sentenciado á repreusion pública la recibirá personalmente en audiencia del Tribunal, á puerta abierta.

El sentenciado á repreusion privada la recibirá personalmente en audiencia del Tribunal ó Juzgado, á presencia del escribano y á puerta cerrada.

Art. 111. El arresto mayor se sufrirá en la casa pública destinada á este fin en las cabezas de partido.

Lo dispuesto en los párrafos 2.º y 3.º del art. 106, es aplicable en sus casos respectivos á los condenados á esta pena.

Art. 112. El arresto menor se sufrirá en las casas del Ayuntamiento ú otras del público, ó en las del mismo penado cuando así se

determine en la sentencia, sin poder salir de ellas en todo el tiempo de la condena.

SECCION TERCERA.

Penas accesorias.

Art. 113. El sentenciado á la pena de argolla precederá al reo ó reos de pena capital conducido en caballería y suficientemente asegurado.

Al llegar al lugar del suplicio se le colocará en un asiento sobre el cadalso, en el que permanecerá mientras dure la ejecucion, asido á un madero por una argolla que se le pondrá al cuello.

Art. 114. El sentenciado á degradacion será despojado por un alguacil, en audiencia pública del Tribunal, del uniforme, traje oficial, insignias y condecoraciones que tuviere.

El despojo se hara á la voz del presidente, que lo ordenará con esta fórmula: «Despojad á (el nombre del sentenciado) de sus insignias y condecoraciones, de cuyo uso la ley le declara indigno: la ley le degrada por haberse él degradado á sí mismo» (33).

TITULO IV.

DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL.

Art. 115. La responsabilidad civil esta-

(33) Sobre degradacion de eclesiásticos, téngase presente lo que disponen los arts. 5.º y 6.º del R. D. de 17 de octubre de 1835 que establece el modo de proceder los jueces y Tribunales en las causas contra eclesiásticos por delitos atroces y graves. Puede verse en nuestra *Revista de los Tribunales* de Búrgos, anuario de 1852, pág. 98, el acto de degradacion del regicida don Martin Merino por la autoridad eclesiástica.

Respecto á *degradacion militar*, deberán observarse las formalidades que tiene establecidas la Ordenanza general en el tit. IX, tratado 8.º; y si solo se trata de la privacion de empleo, grados y condecoraciones, las que previene la R. O. de 29 de junio de 1858, circulada por Gracia y Justicia en 23 de mayo de 1863, en la que se resuelve que siempre que los jefes y oficiales del ejército en actividad ó retirados sean desaforados y juzgados por los Tribunales ordinarios, si se les impone alguna pena que lleve consigo la privacion de empleo, grados y condecoraciones, se observe la formalidad de pasar un jefe que nombrará el Capitan general del distrito donde resida el oficial penado á presenciar el acto, que practicará el juez de la causa, de recogerle los Reales despachos, títulos y diplomas militares que tuviere, los cuales por conducto del mismo Capitan general se remitirán al Ministerio de la Guerra para su cancelacion; debiendo preceder para ello el envío por la Audiencia al Capitan general, de certificacion que contenga la parte condenatoria del fallo ejecutivo.....

blecida en el cap. II, tít. II de este libro, comprende:

- 1.º La restitution.
- 2.º La reparacion del daño causado.
- 3.º La indemnizacion de perjuicios.

Art. 116. La restitution deberá hacerse de la misma cosa siempre que sea posible, con abono de deterioros ó menoscabos á regulacion del Tribunal.

Se hará la restitution, aunque la cosa se halle en poder de un tercero y este la haya adquirido por medio legal, salva su repeticion contra quien le corresponda.

Esta disposicion no es aplicable en el caso de que el tercero haya prescrito la cosa, con arreglo á lo establecido por las leyes civiles.

Art. 117. La reparacion se hará valorándose la entidad del daño á regulacion del Tribunal, atendido el precio natural de la cosa, siempre que fuere posible, y el de afeccion del agraviado.

Art. 118. La indemnizacion de perjuicios comprende, no solo los que se causen al agraviado, sino tambien los que se hayan irrogado por razon del delito á su familia ó á un tercero.

Los Tribunales regularán el importe de esta indemnizacion en los mismos términos prevenidos para la reparacion del daño en el artículo precedente (34).

Art. 119. La obligacion de restituir, reparar el daño ó indemnizar los perjuicios, se trasmite á los herederos del responsable.

La accion para repetir la restitution, reparacion ó indemnizacion, se trasmite igualmente á los herederos del perjudicado.

Art. 120. En el caso de ser dos ó mas los responsables civilmente de un delito ó falta, los Tribunales señalarán la cuota de que deba responder cada uno.

Art. 121. Sin embargo de lo dispuesto en el artículo anterior, los autores de un delito ó falta son siempre mancomunadamente responsables por sus respectivas cuotas.

Los autores de un delito son además responsables por las de los cómplices y encubridores, salva la repeticion recíproca entre

los mismos por sus responsabilidades respectivas.

Los cómplices de un delito son mancomunadamente responsables entre sí y subsidiariamente por las cuotas de los autores y encubridores. Esto mismo se observará en su caso para con los últimos relativamente á sus cuotas y las de los autores y cómplices del mismo delito.

Art. 122. El que por título lucrativo participe de los efectos de un delito ó falta, está obligado al resarcimiento hasta la cuantía en que hubiere participado.

Art. 123. La ley especial determinará los casos y forma en que el Estado ha de indemnizar al agraviado por un delito ó falta, cuando los autores y demás responsables carecieren de medios para hacer la indemnizacion.

TITULO V.

DE LAS PENAS EN QUE INCURREN LOS QUE QUEBRANTAN LAS SENTENCIAS, Y LOS QUE DURANTE UNA CONDENA DELINQUEN DE NUEVO.

CAPITULO I.

De las penas en que incurren los que quebrantan las sentencias.

Art. 124. Los sentenciados que quebranten su condena, serán castigados con las penas que respectivamente se designan en las reglas siguientes:

1.ª El sentenciado á cadena perpétua cumplirá esta condena, haciéndole sufrir las mayores privaciones que autoricen los reglamentos, y destinándole á los trabajos mas penosos.

2.ª El sentenciado á reclusion perpétua cumplirá su condena llevando una cadena de seguridad por el tiempo de dos á seis años.

3.ª El relegado perpétuamente será condenado á reclusion perpétua, la cual cumplirá en el mismo punto de la relegacion.

4.ª El extrañado perpétuamente del Reino será condenado á relegacion perpétua.

5.ª El sentenciado á cadena ó reclusion temporales, presidio, prision ó arresto, sufrirá un recargo de la misma pena por el tiempo de la sexta á la cuarta parte de la duracion de su primitiva condena (35).

(35) El delito de quebrantamiento de condena comprendido en este artículo, queda sujeto á la jurisdiccion ordinaria, y está derogada la Ordenanza general de presidios en lo concerniente á las recargas que imponia á los confinados incurso en este delito. (R. O. de 17 de febrero de 1851, circulada en 12 de marzo por Gracia y Justicia, y varias decisiones de competencias por el Trib. Supremo.)—V. PRESIDIOS.

(34) Los jueces y Tribunales deben fijar expresamente la cantidad de la indemnizacion, sin la excusa de que es difícil graduarla. Un juez del territorio de la Audiencia de Burgos se concretó á decir en una causa que *condenaba al reo á la indemnizacion irregular en concepto del Tribunal*. La Audiencia al determinar como debia en su fallo el importe de dicha indemnizacion, encargó muy acertadamente al indicado juez que en lo sucesivo cumpliera con lo que se prescribe en este artículo.

6.^a Los sentenciados á extrañamiento ó relegacion temporales serán condenados á prision correccional, y cumplida esta condena, extinguirán la anterior.

Los relegados sufrirán la prision en el punto de la relegacion.

7.^a Los sentenciados á confinamiento mayor ó menor serán condenados á prision correccional, imponiéndose á los primeros del grado medio al máximo, y á los segundos del mínimo al medio; y cumplidas estas condenas, extinguirán la de confinamiento.

8.^a El desterrado será condenado á confinamiento por el tiempo del destierro.

9.^a El inhabilitado para cargo, derechos políticos, profesion ú oficio, que los obtuviere ó ejerciere, cuando el hecho no constituya un delito especial, será condenado al arresto mayor y multa de 20 á 200 duros.

10.^a El suspenso de cargo, derechos políticos, profesion ú oficio que los ejerciere, sufrirá un recargo por igual tiempo al de su primitiva condena, y una multa de 40 á 400 duros.

11.^a El sometido á la vigilancia de la autoridad que faltare á las reglas que debe observar, será condenado al arresto mayor.

CAPITULO II.

De las penas en que incurrén los que durante una condena delinquen de nuevo.

Art. 125. Los que despues de haber sido condenados por ejecutoria cometieren algun delito ó falta durante el tiempo de su condena, bien hallándose cumpliéndola, ó bien habiéndola quebrantado, serán castigados con las penas que respectivamente se designan en las reglas siguientes:

1.^a El sentenciado á cadena perpétua que cometiere otro delito á que la ley señale la pena de cadena perpétua á muerte, será castigado con esta última.

Si el delito en que incurriere tuviere señalada la pena de cadena temporal en su grado máximo á muerte, será juzgado segun las disposiciones generales de este Código.

Si cometiere delito á que la ley señale cadena perpétua ú otra menor, cumplirá su primitiva condena haciéndosele sufrir las mayores privaciones que autoricen los reglamentos, y destinándosele á los trabajos mas duros y penosos.

2.^a Al sentenciado á reclusion ó relegacion perpétua, que cometiere delito á que la ley señale pena de cadena perpétua, se impondrá esta en la forma que se prescribe en el párrafo 3.^o de la regla anterior.

Si cometiere delito á que la ley señale pena de reclusion ó relegacion perpétuas, se le impondrá la pena de cadena perpétua.

3.^a El sentenciado á reclusion perpétua que cometiere un delito á que la ley señale pena menor que las referidas en las reglas anteriores, será condenado á cadena perpétua, si la pena del nuevo delito fuere la de cadena temporal, en otro caso cumplirá su primitiva condena, haciéndole sufrir las mayores privaciones que determinen los reglamentos.

4.^a En todos los demás casos no comprendidos en las reglas anteriores, el sentenciado á cualquiera pena que cometa otro delito ó falta, será condenado en la pena señalada por la ley á la nueva falta ó delito en su grado máximo, debiendo cumplir esta condena y la primitiva por el orden que en la sentencia prefije el Tribunal, de conformidad con las reglas prescritas en el art. 76 para el caso de imponerse varias penas á un mismo delincuente.

TITULO VI (36).

DE LA PRESCRIPCION DE LAS PENAS.

Art. 126. Las penas impuestas por sentencia que cause ejecutoria se prescriben:

Las de muerte y cadena perpétua á los 20 años.

Las demás penas afflictivas á los 15 años.

Las penas correccionales á los 10 años.

Las penas leves á los 5 años.

El término de la prescripcion se cuenta desde que se notifique la sentencia que cause la ejecutoria en que se imponga la pena respectiva.

Art. 127. Para que tenga lugar la prescripcion se necesita que el sentenciado durante el término de ella no haya cometido delito alguno ni se haya ausentado de la Península é Islas adyacentes.

(36) Este título trata solo de la prescripcion de las penas y nada dice de la prescripcion de la acción penal, por reservarlo sin duda para el Código de procedimientos.—Segun la ley 5.^a, título VII, Part. 7.^a; el delito de falsedad puede acusarse hasta los 20 años. El de adulterio, solo dentro de 5 años; ó de 60 dias, contados desde el divorcio, si ha tenido lugar; y las injurias dentro de un año y no más. (Leyes 3 y 4, título XVII, Part. 7.^a; y 22, tit. IX, part. 7.^a) Segun la ley 3.^a, tit. II, lib. X, del Fuero Juzgo y 4.^a, tit. XI, lib. II, del Fuero Real, los pleitos criminales no demandados ni determinados en 30 años, no pueden serlo despues, por im- pedirlo este tiempo.

LIBRO SEGUNDO.

Delitos y sus penas.

TITULO I.

DELITOS CONTRA LA RELIGION (37).

Art. 128. La tentativa para abolir ó variar en España la religion católica, apostólica, romana, será castigada con las penas de reclusion temporal y extrañamiento perpétuo, si el culpable se hallare constituido en autoridad pública y cometiere el delito abusando de ella.

No concurriendo estas circunstancias, la pena será la de prision mayor; y en caso de reincidencia, la de extrañamiento perpétuo.

Art. 129. El que celebre actos públicos de un culto que no sea el de la religion católica, apostólica, romana, será castigado con la pena de extrañamiento temporal.

Art. 130. Serán castigados con la pena de prision correccional:

1.º El que inculcare públicamente la inobservancia de los preceptos religiosos.

2.º El que con igual publicidad se mofare de alguno de los Misterios ó Sacramentos de la Iglesia, ó de otra manera excitare á su desprecio.

3.º El que habiendo propalado doctrinas ó máximas contrarias al dogma católico, persistiere en publicarlas despues de haber sido condenadas por la autoridad eclesiástica.

El reincidente en estos delitos será castigado con el extrañamiento temporal.

Art. 131. El que hollare, arrojar al suelo, ó de otra manera profanare las sagradas formas de la Eucaristia, será castigado con la pena de reclusion temporal.

Art. 132. El que con el fin de escarnecer la religion hollare ó profanare imágenes, vasos sagrados ú otros objetos destinados al culto, será castigado con la pena de prision mayor.

Art. 133. El que con palabras ó hechos escarneciére públicamente alguno de los ritos ó prácticas de la religion, si lo hiciere en el templo ó en cualquier acto del culto, será castigado con una multa de 20 á 200 duros y el arresto mayor.

En otro caso se le impondrá una multa de 15 á 150 duros y el arresto menor.

Art. 134. El que maltratare de obra á un ministro de la religion cuando se halle ejerciendo las funciones de su ministerio, será castigado con la pena de prision mayor.

(37) Véase en su lugar de este Diccinario el artículo DELITOS CONTRA LA RELIGION.

El que le ofendiere en iguales circunstancias con palabras ó ademanes, será castigado con la pena superior en un grado á la que corresponda por la injuria irrogada.

Art. 135. Los que por medio de violencia, desórden ó escándalo, impidieren ó turbaren el ejercicio del culto público dentro ó fuera del templo, serán castigados con la pena de prision correccional.

En caso de reincidencia lo serán con la de prision menor.

Art. 136. El español que apostatare públicamente de la religion católica, apostólica, romana, será castigado con la pena de extrañamiento perpétuo.

Esta pena cesará desde el momento en que vuelva al gremio de la Iglesia.

Art. 137. A todos los que cometieren los delitos de que se trata en los artículos anteriores, se impondrá además de las penas en ellos señaladas, la de inhabilitacion perpétua para toda profesion ó cargo de enseñanza.

Art. 138. El que exhumare cadáveres humanos, los mutilare ó profanare de cualquier otra manera, será castigado con la pena de prision correccional.

TITULO II.

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD EXTERIOR DEL ESTADO.

CAPITULO PRIMERO.

Delitos de traicion.

Art. 139. La tentativa para destruir la independencia ó la integridad del Estado, será castigada con la pena de muerte (38).

Art. 140. El español que indujere á una potencia extranjera á declarar guerra á España, ó se concertare con ella para el mismo fin, será castigado con la pena de muerte, si llegare á declararse la guerra, y en otro caso con la de cadena perpétua.

Art. 141. El español que tomare las armas contra su patria bajo banderas enemigas, será castigado con la pena de cadena temporal en su grado máximo á la de muerte.

Art. 142. Se impondrá tambien la pena de cadena temporal en su grado máximo á la de muerte:

1.º Al que facilitare al enemigo la entrada en el Reino, el progreso de sus armas ó la

(38) Téngase muy presente en este artículo, en el 128 y en todos los demás casos en que se penan especialmente la tentativa, la conspiracion y la proposicion, que para calificarlas deberá atenderse á lo prescrito en los arts. 3.º, 4.º y 62.

toma de una plaza, puesto militar, buque del Estado, ó almacenes de boca ó guerra del mismo.

La tentativa de estos delitos se castigará con la misma pena que su consumacion:

2.º Al que suministrarle á las tropas de una potencia enemiga caudales, armas, embarcaciones, efectos ó municiones de boca ó guerra, ú otros medios directos para hostilizar á España.

3.º Al que suministrarle al enemigo planos de fortalezas ó terrenos, documentos ó noticias que conduzcan directamente al propio fin de hostilizar á España.

4.º Al que en tiempo de guerra impidiere que las tropas nacionales reciban los auxilios expresados el número 2.º ó los datos ó noticias indicados en el número 3.º

5.º Al que sedujere tropa española, ó que se halle al servicio de España, para que se pase á las filas enemigas, ó deserte de sus banderas estando en campaña.

6.º Al que reclutare en España gente para el servicio de las armas de una potencia enemiga.

Art. 143. La conspiracion para cualquiera de los delitos expresados en los artículos anteriores se castigará con la pena de presidio mayor.

La proposicion para los mismos delitos será castigada con la de presidio correccional.

Art. 144. El que comunicare ó revelare directa ó indirectamente al enemigo documentos ó negociaciones reservadas de que tuviere noticia por razon de su oficio, ó por algun medio reprobado, incurrirá en la pena de cadena temporal en su grado máximo á la de muerte.

Si hubiere adquirido los documentos ó las noticias de las negociaciones por otro medio, será castigado con la pena de presidio menor, á no ser que la revelacion ó comunicacion se halle comprendida en el número 3.º del artículo 142.

CAPITULO II.

Delitos que comprometen la paz ó la independencia del Estado.

Art. 145. El que sin los requisitos que prescriben las leyes ejecutare en el Reino bulas, breves, rescriptos ó despachos de la corte pontificia, ó les diere curso, ó los publicare, será castigado con las penas de prision correccional y multa de 300 á 3,000 duros.

Si el delincuente fuere eclesiástico, la pena será la de extrañamiento temporal, y ne-

caso de reincidencia, la de extrañamiento perpétuo (39).

Art. 146. El que ejecutare, introdujere ó publicare en el Reino cualquiera orden, disposicion ó documento de un Gobierno extranjero, que ofenda la independencia ó seguridad del Estado, será castigado con las penas de prision menor y multa de 50 á 500 duros, á no ser que de este delito se sigan directamente otros mas graves, en cuyo caso será penado como autor de ellos.

Art. 147. En el caso de cometerse cualquiera de los delitos de que se trata en los dos artículos anteriores por un empleado del Gobierno abusando de su oficio, se le impondrá, además de las penas señaladas en ellos, la de inhabilitacion absoluta perpétua.

Art. 148. El que con actos no autorizados competentemente provocare ó diere motivo á una declaracion de guerra contra España por parte de otra potencia, ó expusiere á los españoles á experimentar vejaciones ó represalias en sus personas ó en sus bienes, será castigado con la pena de prision mayor; y si fuere empleado público, con la de reclusion temporal.

Art. 149. Se impondrá la pena de reclusion temporal al que violare tregua ó armisticio acordado entre la nacion española y otra enemiga, ó sea entre sus fuerzas beligerantes de mar ó tierra.

Art. 150. El que en desempeño de un cargo público comprometiére la dignidad, la fé ó los intereses de la nacion española, será castigado con las penas de prision mayor é inhabilitacion perpétua para el cargo que ejerciere.

Art. 151. El que sin autorizacion legítima levantara tropas en el Reino para el servicio de una potencia extranjera, ó destinare buques al corso, cualquiera que sea el objeto que se proponga ó la nacion á que intente hostilizar, será castigado con las penas de prision mayor y multa de 500 á 5,000 duros.

Art. 152. El que en tiempo de guerra tuviere correspondencia con país enemigo, ú ocupado por sus tropas, será castigado:

1.º Con la pena de prision mayor, si la

(39) Nuestras leyes exigen que se presenten al Gobierno y obtengan el pase ó *exequatur* del mismo, antes de su publicacion y uso, todas las bulas, breves, rescriptos y despachos de la curia romana, en cuanto no se opongan á las regalías, concordatos, costumbres, leyes y derechos de la nacion, ó no induzcan en ella novedades perjudiciales, etc. (Leyes 9.ª y 14, tit. III, lib. II, Nov. Rec., y Rs. Ords. de 3 enero de 1835 y 19 abril de 1841).—V. BULAS.

correspondencia se siguiere en cifras ó signos convencionales.

2.º Con la de prision correccional, si se siguiere en la forma comun, y el Gobierno la hubiere prohibido.

3.º Con la de reclusion temporal, si en ella se dieren avisos ó noticias de que pueda aprovecharse el enemigo, cualquiera que sea la forma de la correspondencia y aunque no hubiere precedido prohibicion del Gobierno.

Si el culpable se propusiere servir al enemigo con sus avisos ó noticias, se observará lo dispuesto en el art. 142.

Art. 153. El español culpable de tentativa para pasar á país enemigo, cuando lo hubiere prohibido el Gobierno será castigado con las penas de prision correccional y multa de 30 á 300 duros.

CAPITULO III.

Delitos contra el derecho de gentes.

Art. 154. El que matare á un monarca extranjero residente en España, será castigado con la pena de muerte.

Cualquiera otro atentado de hecho contra su persona se castigará con la pena de cadena temporal.

Art. 155. El que violare la inmunidad personal ó el domicilio de una persona Real extranjera residente en España, ó de un representante de otra potencia, será castigado con la pena de prision correccional.

Art. 156. El delito de piratería cometido contra españoles ó súbditos de otra nacion que no se halle en guerra con España, será castigado con la pena de cadena temporal en su grado máximo á la de muerte.

Art. 157. Incurrirán en la pena de cadena perpétua á muerte los que cometan el delito de que se trata en el artículo anterior:

1.º Siempre que hubieren apresado alguna embarcacion al abordaje ó haciéndola fuego.

2.º Siempre que el delito fuere acompañado de homicidio ó de alguna de las lesiones designadas en los arts. 341 y 342.

3.º Siempre que fuere acompañado de cualquiera de los atentados contra la honestedad, señalados en el cap. II del tit. X de este libro.

4.º Siempre que los piratas hayan dejado algunas personas sin medios de salvarse.

5.º En todo caso el capitán ó patron piratas.

Art. 158. Las disposiciones de los dos artículos anteriores son aplicables al que entregare á piratas la embarcacion á cuyo bordo fuere.

Art. 159. El que residiendo en los dominios españoles traficase con piratas conocidos, será castigado como su cómplice.

TITULO III.

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO Y EL ÓRDEN PÚBLICO (40).

CAPITULO I.

Delitos de la lesa majestad.

Art. 160. El reo de tentativa contra la vida ó persona del Rey ó inmediato sucesor á la Corona, incurrirá en la pena de muerte.

Art. 161. La conspiracion para perpetrar el delito de que se trata en el artículo anterior será castigada con la pena de cadena temporal.

Art. 162. La proposicion para cometer el delito de que se trata en el art. 160 se castigará con la pena de presidio mayor.

Art. 163. El que teniendo noticia de una conspiracion contra la vida del Rey ó inmediato sucesor á la Corona, no la revelare en el término de veinticuatro horas á la autoridad, será castigado con la prision correccional.

No se comprenden en esta disposicion los ascendientes, descendientes, cónyuges, hermanos ó afines en los mismos grados del conspirador.

Art. 164. El que injuriare al Rey ó inmediato sucesor á la Corona en su presencia, será castigado con la pena de cadena temporal.

Si los injuriare por escrito y con publicidad fuera de su presencia, incurrirá en las penas de prision mayor, y multa de 100 á 1,000 duros.

Las injurias cometidas en cualquiera otra

(40) Véase en su lugar correspondiente de este Diccionario (en ORDEN PÚBLICO) la Ley sobre orden público de 20 de marzo de 1867.

Esta ley no define especialmente los delitos y faltas de que es objeto, sino que de una manera genérica califica como delito ó falta contra el orden público, *toda manifestacion pública que ofenda á la Religion, á la Moral, á la Monarquía, á la Constitucion, á la Dinastía reinante, á los Cuerpos Colegisladores y al respeto debido á las leyes, ó que considerados el lugar y las circunstancias en que se realice, produzca escándalo, agitacion, bullicio, asonada ó conato de motin, ó que pueda ocasionar relajacion de la disciplina del ejército.* Define lo que es propósito frustrado y tentativa de los delitos contra el orden público, y los considera cometidos ya en estado normal, ya en estado de alarma, ya en estado de guerra, cuyas tres situaciones se deslindan cuidadosamente.

forma serán penadas con la prision menor, si fueren graves, y con la correccional, si fueren leves (41).

Art. 165. Los delitos de que se trata en los anteriores artículos de este capítulo, cometidos contra el Regente ó Regentes del Reino, padre, madre ó consorte del Rey, Reina viuda ó Infantes de España, serán castigados con las penas inferiores en un grado á las señaladas en ellos, á no ser que la merezcan mayor por otras disposiciones de este Código.

El homicidio consumado ó frustrado de cualquiera de las personas mencionadas en el párrafo anterior, se castigará con la pena de muerte.

Art. 166. La invasion violenta en la morada del Rey, Reina, inmediato sucesor á la Corona, ó Regente del Reino, será castigada con la pena de cadena temporal.

CAPITULO II.

Delitos de rebelion y sedicion.

SECCION PRIMERA.

Rebelion (42).

Art. 167. Son reos de rebelion los que se alzan públicamente y en abierta hostilidad contra el Gobierno para cualquiera de los objetos siguientes:

1.º Destronar al Rey ó privarle de su libertad personal.

2.º Variar el órden legítimo de sucesion á la Corona, ó impedir que se encargue del Gobierno del Reino aquel á quien corresponda.

3.º Deponer al Regente ó á la Regencia del Reino, ó privarles de su libertad personal.

4.º Usar y ejercer por sí, ó despojar al Rey, Regente ó Regencia del Reino de las prerogativas que la Constitucion les concede, ó coartarles la libertad en su ejercicio.

5.º Sustraer el Reino ó parte de él, ó algun cuerpo de tropas de tierra ó de mar, de la obediencia al supremo Gobierno.

6.º Usar y ejercer por sí, ó despojar á

(41) Téngase muy en cuenta para calificar las injurias lo dispuesto en los arts. 379 y 380; y cuídese tambien mucho de no confundir este delito con la falta que castiga el núm. 4.º del artículo 484.

(42) En las causas de rebelion y sedicion, ó sea por conspiraciones ó maquinaciones directas contra la Constitucion, etc., se procede con arreglo á la ley de 17-25 de abril de 1824, y de 20 de marzo de 1867 sobre órden público; pero las penas son las de este Código. — V. ORDEN PÚBLICO.

los Ministros de la Corona de sus facultades constitucionales, ó impedirles ó coartarles su libre ejercicio.

7.º Impedir la celebracion de las elecciones para diputados á Córtes en todo el Reino, ó la reunion legítima de las mismas.

8.º Disolver las Córtes, ó impedir la deliberacion de alguno de los Cuerpos colegisladores, ó arrancarles alguna resolucion.

Art. 168. Los que induciendo y determinando á los rebeldes hubieren promovido ó sostuvieren la rebelion, y los caudillos principales de esta, sufrirán la pena de muerte.

Art. 169. Los que ejercieren un mando subalterno en la rebelion, serán castigados con la pena de cadena perpétua á la de muerte.

1.º Si fueren personas constituidas actualmente en autoridad civil ó eclesiástica, ó si hubiere habido combate entre los rebeldes con la fuerza pública fiel al Gobierno, ó entre unos ciudadanos contra otros, ó si hubieren causado estragos que hayan puesto en peligro la vida de la personas.

2.º Si sacaren gente, exigieren contribuciones, ó distrajeren los caudales públicos de su legítima inversion.

En cualquier otro caso serán castigados con la pena de cadena temporal en su grado máximo á la de muerte, en cuya pena incurrirán tambien los que toquen ó manden tocar campanas ó cualquiera otro instrumento para excitar á la rebelion, y los que para el mismo fin dirigieren á la muchedumbre sermones, arengas, pastorales ú otro género de discursos ó impresos, si la rebelion llegare á consumarse, á no ser que merecieren la calificacion de promovedores.

Art. 170. Los meros ejecutores de la rebelion serán castigados con la pena de cadena temporal á la de muerte.

Art. 171. En el caso de que la rebelion no hubiere llegado á organizarse con jefes conocidos, se reputará que lo son los que de hecho dirijan á los demás ó lleven la voz por ellos, ó firmen los recibos ú otros escritos expedidos á su nombre, ó ejerzan otros actos semejantes en representacion de los demás.

Art. 172. Serán castigados como rebeldes, con la pena de relegacion perpétua, los que sin alzarse contra el Gobierno cometieren por astucia ó por cualquier otro medio alguno de los delitos comprendidos en cualquiera de los ocho números del art. 167.

Art. 173. La conspiracion para el delito de rebelion será castigada con la pena de prision mayor.

La proposicion se castigará con la prision correccional.

SECCION SEGUNDA.

Sedicion (43).

Art. 171. Son reos de sedicion los que se alzan públicamente para cualquiera de los objetos siguientes:

1.º Impedir la promulgacion ó la ejecucion de las leyes ó la libre celebracion de las elecciones populares en alguna Junta electoral.

2.º Impedir á cualquiera autoridad el libre ejercicio de sus funciones ó el cumplimiento de sus providencias administrativas ó judiciales.

3.º Ejercer algun acto de odio ó de venganza en la persona ó bienes de alguna autoridad, ó de sus agentes, ó de alguna clase de ciudadanos, ó en las pertenencias del Estado, ó de alguna corporacion pública.

Art. 175. Los que induciendo y determinando á los sediciosos hubieren promovido ó sostuvieren la sedicion, y los caudillos principales de esta, serán castigados:

1.º Los que ejerzan autoridad civil ó eclesiástica, con la pena de cadena perpétua si se hubieren apoderado de caudales ú otros bienes públicos ó de particulares, y con la de reclusion perpétua en otro caso.

2.º Los que no ejercieren autoridad, con la de cadena temporal si se hubieren apoderado de los caudales ó bienes de que se habla en el número anterior, y con la reclusion temporal en otro caso.

Art. 176. Lo dispuesto en el art. 171 es aplicable al caso de sedicion, cuando esta no hubiere llegado á organizarse con jefes conocidos.

Art. 177. Los que intervinieren en la sedicion de cualquiera de los modos expresados en el párrafo 4.º del art. 169, serán castigados con la pena de prision mayor, si no merecieren ser calificados de promovedores.

Art. 178. Los meros ejecutores de sedicion serán castigados con la pena de confinamiento menor.

Art. 179. En el caso de que la sedicion no hubiere llegado á agravarse hasta el punto de embarazar de un modo sensible el ejercicio de la autoridad pública, y no hubiere tampoco ocasionado la perpetracion de otro delito grave, serán juzgados los sediciosos con arreglo á lo dispuesto en el art. 182.

Art. 180. La conspiracion para el delito de sedicion será castigada con la pena de prision correccional.

La proposicion se castigará con las penas de sujecion á la vigilancia de la autoridad y caucion.

SECCION TERCERA.

Disposiciones comunes á las dos secciones anteriores.

Art. 181. Luego que se manifiesten la rebellion ó sedicion, la autoridad gubernativa intimará hasta dos veces á los sublevados que inmediatamente se disuelvan y retiren, dejando pasar entre una y otra intimacion el tiempo necesario para ello.

Si los sublevados no se retiraren inmediatamente despues de la segunda intimacion, la autoridad hará uso de la fuerza pública para disolverlos.

Las intimaciones se harán mandando ondear al frente de los sublevados la bandera nacional, si fuere de dia; y si fuere de noche, requiriendo la retirada á toque de tambor, clarín ú otro instrumento á propósito.

Si las circunstancias no permitieren hacer uso de los medios indicados, se ejecutarán las intimaciones por otros, procurando siempre la mayor publicidad.

No serán necesarias respectivamente la primera ó la segunda intimacion desde el momento en que los rebeldes ó sediciosos rompieren el fuego.

Art. 182. Cuando los rebeldes ó sediciosos se disolvieren ó sometieren á la autoridad legítima antes de las intimaciones ó á consecuencia de ellas, quedarán exentos de toda pena los meros ejecutores de cualquiera de aquellos delitos, y tambien los sediciosos comprendidos en el art. 175, si no fuesen empleados públicos.

Los Tribunales en este caso rebajarán á los demás culpables de uno á dos grados las penas señaladas en las dos secciones anteriores.

Art. 183. Los que sedujeren tropas para cometer el delito de rebellion, serán castigados con la pena de reclusion perpétua.

Los que la sedujeren para el de sedicion, serán castigados con la pena de reclusion temporal.

La seduccion para la simple desercion será castigada en los autores con la pena de arresto mayor en su grado mínimo, y la misma se impondrá á los cómplices y encubridores.

Lo dispuesto en los dos primeros párrafos de este artículo se entiende para el caso en que los seductores no se hallen comprendidos en el núm. 5.º del art. 167.

Si llegaren á tener efecto la rebellion ó sedicion, los seductores se reputarán promove-

dores, y respectivamente comprendidos en los arts. 168 y 175 (44).

Art. 184. Los delitos particulares cometidos en una rebelion ó sedicion, ó con motivo de ellas, serán castigados respectivamente segun las disposiciones de este Código.

Cuando no puedan descubrirse los autores, serán penados como tales los jefes principales de la rebelion ó sedicion.

Art. 185. A los eclesiásticos y empleados públicos que cometieren algunos delitos de que se trata en las dos secciones anteriores, se impondrá en su grado máximo la pena que les corresponda segun su culpabilidad, y además la de inhabilitacion absoluta perpétua. Esta disposicion no tendrá lugar en el caso de ser aplicables las de los arts. 168 y 175.

Art. 186. Las autoridades de nombramiento directo del Gobierno que no hubieren resistido la rebelion ó sedicion por todos los medios que estuvieren á su alcance, sufrirán la pena de prision mayor é inhabilitacion perpétua absoluta.

Las que no fueren de nombramiento directo del Gobierno sufrirán la de confinamiento mayor é inhabilitacion perpétua absoluta.

Art. 187. Los empleados que continúen desempeñando sus cargos bajo el mando de los alzados, ó que sin habérseles admitido la renuncia de su empleo lo abandonaren cuando haya peligro de rebelion ó sedicion, incurrirán en la pena de suspension á la de inhabilitacion perpétua especial.

Art. 188. Los que aceptaren empleos de los rebeldes ó sediciosos serán castigados con la pena de inhabilitacion absoluta temporal para cargos públicos.

CAPITULO III.

De los atentados y desacatos contra la autoridad y de otros desórdenes públicos.

Art. 189. Cometén atentado contra la autoridad:

1.º Los que, sin alzarse públicamente emplean fuerza ó intimidacion para alguno de los objetos señalados en los delitos de rebelion y sedicion.

2.º Los que acometen ó resisten con violencia, ó emplean fuerza ó intimidacion contra la autoridad pública ó sus agentes, cuando aquella ó estos ejercieren las funciones de su cargo, y tambien cuando no las ejer-

cieren, siempre que sean conocidos ó se anuncien como tales.

Art. 190. Los atentados comprendidos en el artículo anterior serán castigados con la pena de prision menor en su grado medio á prision mayor en el mismo grado y multa de 50 á 500 duros, siempre que concurra alguna de las circunstancias siguientes:

1.ª Si la agresion se verifica á mano armada.

2.ª Si los reos fueren funcionarios públicos.

3.ª Si los delincuentes pusieren manos en la autoridad, ó en las personas que acudieren á su auxilio.

4.ª Si por consecuencia de la coaccion la autoridad hubiere accedido á las exigencias de los delincuentes.

Sin estas circunstancias la pena será la de prision correccional en su grado medio á prision menor en el mismo grado y multa de 30 á 300 duros.

Si los reos fueren reincidentes, la pena en el primer caso será la de prision menor en su grado máximo á prision mayor y multa de 50 á 500 duros, y en el segundo la de prision correccional en su grado máximo á prision menor y multa de 30 á 300 duros.

Art. 191. El que de hecho ó de palabra injuriare gravemente á alguno de los Cuerpos colegisladores hallándose en sesion, ó á alguna de sus Comisiones en los actos públicos en que los representan, será castigado con la pena de prision mayor.

Cuando las injurias fueren menos graves, la pena será la de arresto mayor á prision correccional.

Art. 192. Cometén desacato contra las autoridades:

1.º Los que perturban gravemente el órden de las sesiones en los Cuerpos colegisladores, y los que injurian, insultan ó amenazan en los mismos actos á algun diputado ó senador.

2.º Los que calumnian, injurian, insultan ó amenazan:

Primero. A un senador ó diputado por las opiniones manifestadas en el Senado ó Congreso.

Segundo. A los Ministros de la Corona ó á otra autoridad en el ejercicio de sus cargos.

Tercero. A un superior suyo con ocasion de sus funciones.

En todos estos casos la provocacion, al duelo, aunque sea privada ó embozada, se reputará amenaza grave para todos los efectos de este artículo.

Art. 193. Si el desacato consiste en ca-

(44) Este artículo está en suspenso por ahora en virtud de lo dispuesto por R. D. de 30 de octubre de 1848 que se inserta despues.

lunnia, ó el insulto, injuria ó amenaza de que habla el artículo precedente fuere grave, el delincuente sufrirá la pena de prision correccional en su grado medio á prision menor en igual grado y multa de 20 á 200 duros.

Si fuere menos grave, la pena será la de arresto mayor en su grado máximo á prision correccional en su grado mínimo y multa de 10 á 100 duros.

Si los reos fueren reincidentes, la pena en el primer caso será la de prision correccional en su grado máximo á prision menor en el mismo grado, y multa de 20 á 200 duros; y en el segundo la de prision correccional á prision menor en su grado mínimo y multa de 10 á 100 duros.

Art. 194. Para todos los efectos de las disposiciones penales respecto de los que cometen atentado ó desacato contra la autoridad ó funcionarios públicos, se entiende que ejercen aquella constantemente los Ministros de la Corona y las autoridades de funciones permanentes ó llamadas á ejercerlas en todo caso y circunstancias.

Entiéndese tambien ofendida la autoridad en ejercicio de sus funciones cuando tuvieren lugar el atentado ó desacato con ocasion de ellas, ó por razon de su cargo.

Art. 195. El que con violencia ó con fines contrarios á la Constitucion ú otro motivo reprobado impidiere á un senador ó diputado asistir á las Cortes, sufrirá la pena de prision correccional.

Art. 196. Los que causaren tumulto ó turbaren gravemente el orden en la audiencia de un Tribunal ó Juzgado, en los actos públicos propios de cualquiera autoridad, en algun colegio electoral (45), en espectáculos públicos, ó solemnidad, ó reunion numerosa, serán castigados, segun la gravedad del delito, con la pena de arresto mayor á prision correccional y multa de 20 á 200 duros.

Art. 197. Los que turbaren gravemente el orden público para causar injuria ú otro mal á alguna persona particular ó con cualquier otro fin reprobado, incurrirán en la pena de arresto mayor á prision correccional.

Si este delito tuviere por objeto impedir á alguna persona el ejercicio de sus derechos políticos, se impondrá además al culpable

la inhabilitacion temporal para el ejercicio del mismo derecho.

Art. 198. El que diere gritos provocativos de rebelion ó sedicion en un lugar público, y el que con igual fin ejecutare alguno de los actos expresados en el párrafo 4.º del art. 169, será castigado con la pena de prision menor.

Art. 199. El que cometiere alguna falsedad en cualquiera de los actos de elecciones para diputados de la nacion, será castigado con las penas de prision menor, multa de 100 á 1,000 duros é inhabilitacion temporal para el ejercicio del derecho electoral.

Esta disposicion es aplicable á los culpables de cohecho en la votacion para dicho cargo.

Cuando estos delitos se cometieren en cualquiera otra eleccion popular, se impondrán las penas de arresto mayor y multa de 10 á 100 duros é inhabilitacion temporal para el ejercicio del derecho electoral.

Art. 200. El que penetrare armado en un colegio electoral ó en cualquiera junta dispuesta por la ley para las elecciones populares, será castigado con una multa de 50 á 500 duros é inhabilitacion temporal del derecho electoral.

Art. 201. En el caso de hallarse constituido en autoridad civil ó eclesiástica el que cometiere los delitos expresados en este capítulo, será castigado con el máximo de la respectiva pena y con la de inhabilitacion perpétua especial á la de inhabilitacion absoluta perpétua.

Art. 202. Los eclesiásticos que en el ejercicio de su ministerio provocaren á la ejecucion de cualquiera de los delitos comprendidos en este capítulo, serán castigados con la pena de destierro, si sus provocaciones no surtieren efecto, y con la de confinamiento menor si lo produjeran.

Art. 203. Los que destruyeren ó deterioraren pinturas, estatuas ú otro monumento público de utilidad ú ornato, serán castigados con la pena de prision correccional (46).

Art. 204. Los que estrajeran de las cárceles ó de establecimientos penales á alguna persona detenida en ellos, ó le proporcionaren la evasion, serán castigados con las mismas penas señaladas en el art. 276, segun el caso respectivo, si emplearen la violencia ó el soborno, y con pena inferior en un grado si se valieren de otros medios.

Si la extraccion ó evasion de los detenidos

(45) Sobre lo dispuesto en este artículo y en los siguientes al 203, téngase presente la ley de 22 de junio de 1864, estableciendo la penalidad y reglas de procedimientos para las falsedades, coacciones y otros abusos en las elecciones. Se inserta en el artículo DELITOS ELECTORALES.

(46) No confundir este delito con la falta que castiga el párrafo 2.º del art. 485. Véase el artículo 5.º del R. D. de 22 de setiembre de 1848, en el *Apéndice*.

se verifcare fuera de dichos establecimientos, violentando ó sorprendiendo á los encargados de conducirlos, se aplicarán las mismas penas en su grado mínimo.

Art. 205. Los que acometieren á un conductor de la correspondencia pública para interceptarla ó detenerla, ó para apoderarse de ella, ó de cualquier modo inutilizarla, serán castigados, si interviniere violencia, con la pena de prision menor en su grado máximo á presidio mayor: en otro caso, con la de presidio menor en su grado mínimo al medio.

Art. 206. Las disposiciones del presente capítulo no son aplicables en el caso de que los hechos que por ellas se reprimen deban ser calificados de rebelion ó sedicion.

CAPITULO IV.

De las asociaciones ilícitas.

SECCION PRIMERA.

Sociedades secretas.

Art. 207. Son sociedades secretas:

1.º Aquellas cuyos individuos se imponen con juramento ó sin él la obligacion de ocultar á la autoridad pública el objeto de sus reuniones ó su organizacion interior.

2.º Los que en la correspondencia con sus individuos ó con otras asociaciones se valen de cifras, geroglíficos ú otros signos misteriosos.

Art. 208. Los que desempeñaren mando ó presidencia ó hubieren recibido grados superiores en una sociedad secreta, y los que prestaren para ella las casas que poseen, administran ó habitan, serán castigados con la pena de prision mayor.

Los demás afiliados con la de prision menor, y unos y otros con la de inhabilitacion perpétua absoluta.

Art. 209. Se eximirán de las penas señaladas en el artículo anterior, y serán condenados únicamente en la de caucion, los individuos de una sociedad secreta, cualquiera que haya sido su categoría, que se exponen ante la autoridad, declarando á esta lo que supieren del objeto y planes de la asociacion.

La autoridad, al recibir la declaracion, no podrá hacerles pregunta alguna acerca de las personas que componen la sociedad.

Art. 210. Si constare que una sociedad secreta tiene por objeto alguno de los delitos comprendidos en los capítulos I y II de este título, sufrirán los jefes y asociados las penas señaladas respectivamente á los conspiradores por los mismos delitos.

Cuando tenga por objeto la perpetracion de cualquiera otro delito, la pena será la señalada á los autores de tentativa para los afiliados, y la de delito frustrado para los jefes de las sociedades (47).

SECCION SEGUNDA.

De las demás asociaciones ilícitas.

Art. 211. Es tambien ilícita toda asociacion de mas de veinte personas que se reuna diariamente, ó en dias señalados; para tratar de asuntos religiosos, literarios, ó de cualquiera otra clase, siempre que no se haya formado con el consentimiento de la autoridad pública, ó se faltare á las condiciones que esta le hubiere fijado.

Art. 212. La asociacion de que trata el artículo anterior será disuelta, y sus directores, jefes ó administradores serán castigados con la multa de 20 á 200 duros: y en caso de reincidencia con la de arresto mayor y doble multa.

En las mismas penas incurrirán los que prestaren para la asociacion las casas que posean, administren ó habiten (47).

TITULO IV.

DE LAS FALSEDADES.

CAPITULO I.

De la falsificacion de sellos y marcas.

SECCION PRIMERA.

De la falsificacion de la firma ó estampilla real sello del Estado y firma de los Ministros.

Art. 213. El que falsificare la firma ó estampilla del Rey ó del Regente del Reino, el sello del Estado, ó la firma de los Ministros de la Corona, será castigado con la pena de cadena temporal en grado medio á cadena perpétua.

SECCION SEGUNDA.

Falsificacion de los demás sellos públicos.

Art. 214. La falsificacion de los sellos usados por cualquiera autoridad ú oficina pública será castigada con las penas de presidio menor y multa de 20 á 200 duros.

Art. 215. La falsificacion de las marcas de los fieles contrastes será castigada con la pena de presidio mayor y multa de 50 á 500 duros.

(47) Sobre reuniones públicas véase la ley de 22 de junio de 1864, estableciendo requisitos y formalidades para su celebracion, y la manera de disolverlas en su caso, penalidad, etc., etc. en REUNIONES PÚBLICAS.

Art. 216. La falsificacion de los sellos, marcas y contraseñas de que se use en las oficinas del Estado para identificar cualquier objeto ó para asegurar el pago de impuestos, será castigada con la pena de prision menor y multa de 100 á 1,000 duros.

SECCION TERCERA.

Falsificacion de marcas y sellos de particulares.

Art. 217. La falsificacion de los sellos, marcas y contraseñas que usen los establecimientos de industria ó de comercio, será castigada con las penas de prision menor y multa de 50 á 500 duros (48).

CAPITULO II.

De la falsificacion de moneda.

Art. 218. El que fabrique, introduzca ó expendia moneda falsa de especie que tenga curso legal en el Reino, y sea de un valor inferior á la legítima, será castigado con las penas de cadena temporal en su grado medio á cadena perpétua, y multa de 500 á 5,000 duros, si la moneda falsa fuere de oro ó plata, y con las de presidio mayor y multa de 50 á 500 duros si fuere de vellón.

Art. 219. El que cercenare moneda legítima, será castigado con las penas de presidio mayor y multa de 50 á 500 duros, si la moneda fuere de oro ó plata; y con la de presidio correccional y multa de 20 á 200 duros, si fuere de vellón.

El que introdujere ó expendiere la moneda cercenada incurrirá en las mismas penas.

Art. 220. El que fabricare, introdujere ó expendiere en el Reino moneda falsa que tenga en él curso legal, y sea del valor de la legítima, será castigado con las penas de presidio menor y multa de 500 á 5,000 duros.

Art. 221. El que falsificare, introdujere ó expendiere en el Reino moneda falsa de especie que no tenga en él curso legal, será castigado con las penas de presidio menor, y multa de 200 á 2,000 duros.

Art. 222. El que habiendo recibido de buena fé moneda falsa, la expendiere despues de constarle su falsedad, será castigado, siempre que la expedicion excediere de 15 duros, con la multa del tanto al triplo del valor de la moneda.

(48) Para la aplicacion de este artículo debe consultarse lo dispuesto en el R. D. de 20 de noviembre de 1850, inserto en MARGAS EN LOS PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA.

CAPITULO III.

De la falsificacion de billetes de Banco, documentos de crédito del Estado y papel sellado.

Art. 223. El que introdujere ó expendiere falsos títulos de la Deuda pública al portador, billetes del Tesoro ó de cualquier Banco erigido con autorizacion del Gobierno, y el que los falsificare, serán castigados con las penas de cadena temporal en su grado medio á la de cadena perpétua y multa de 500 á 5,000 duros.

Art. 224. El que falsificare papel sellado, inscripciones ó títulos de la Deuda pública, libranzas del Tesoro, billetes de loterías ó cualquier otro documento de crédito ó de valores del Estado, será castigado con las penas de cadena temporal y multa de 500 á 5,000 duros.

En la misma pena incurrirán los introductores y expendedores.

Art. 225. El que habiendo adquirido de buena fé los títulos ó efectos de que se trata en los dos artículos anteriores, los expendiere despues con conocimiento de su falsedad, será castigado con la multa del tanto al triplo del valor del documento, no pudiendo bajar nunca de 50 duros.

CAPITULO IV.

De la falsificacion de documentos.

SECCION PRIMERA.

De la falsificacion de documentos públicos u oficiales y de comercio.

Art. 226. Será castigado con las penas de cadena temporal y multa de 100 á 1,000 duros el eclesiástico ó empleado público que abusando de su oficio cometiere falsedad:

1.º Contrahaciendo ó fingiendo letra, firma ó rúbrica.

2.º Suponiendo en un acto la intervencion de personas que no la han tenido.

3.º Atribuyendo á las que han intervenido en él declaraciones ó manifestaciones diferentes de las que hubieren hecho.

4.º Faltando á la verdad en la narracion de los hechos.

5.º Alterando las fechas verdaderas.

6.º Haciendo en documento verdadero cualquiera alteracion ó intercalacion que varíe su sentido.

7.º Dando copia en forma fehaciente de un documento supuesto, ó manifestando en ella cosa contraria ó diferente de lo que contenga el verdadero original.

8.º Ocultando en perjuicio del Estado ó de un particular cualquier documento oficial.

Art. 227. El particular que cometiere en documento público ú oficial, ó en letras de cambio ú otra clase de documentos mercantiles, alguna de las falsedades designadas en el artículo anterior, será castigado con las penas de presidio mayor y multa de 100 á 1,000 duros.

SECCION SEGUNDA.

De la falsificacion de documentos privados.

Art. 228. El que con perjuicio de tercero ó con ánimo de causárselo cometiere en documento privado alguna de las falsedades designadas en el art. 226, será castigado con las penas de prision menor y multa de 100 á 1,000 duros.

SECCION TERCERA.

De la falsificacion de pasaportes y certificados.

Art. 229. El empleado público que expidiere un pasaporte bajo nombre supuesto, ó lo diere en blanco, será castigado con las penas de prision menor é inhabilitacion temporal absoluta.

Esta disposicion no es aplicable al caso en que el empleado por justas causas comunicadas al superior respectivo expidiere el pasaporte en la forma expresada en el párrafo anterior.

Art. 230. El que hiciere un pasaporte falso será castigado con las penas de prision correccional y multa de 10 á 100 duros.

Las mismas penas se impondrán al que en un pasaporte verdadero mudare el nombre de la persona á cuyo favor se halle expedido: ó de la autoridad que lo expidiere, ó que altere en él alguna otra circunstancia esencial.

Art. 231. El que hiciere uso del pasaporte de que se trata en el artículo anterior, será castigado con la multa de 10 á 100 duros.

En la misma pena incurrirán los que hicieren uso de un pasaporte verdadero expedido á favor de otra persona.

Art. 232. El facultativo que librare certificacion falsa de enfermedad ó lesion con el fin de eximir á una persona de algun servicio público, será castigado con las penas de prision correccional y multa de 20 á 200 duros.

Art. 233. El empleado público que librare certificacion falsa de méritos ó servicios, de buena conducta, de pobreza ó de otras circunstancias semejantes de recomendacion,

será castigado con las penas de suspension de oficio y multa de 10 á 100 duros.

Art. 234. El que falsificare un documento de la clase designada en los dos artículos anteriores, será castigado con las penas de arresto mayor y multa de 5 á 50 duros.

Esta disposicion es aplicable al que usare con el mismo fin de los documentos falsos.

CAPITULO V.

Disposiciones comunes á los capitulos anteriores.

Art. 235. El que fabricare ó introdujere cuños, sellos, marcas, ó cualquiera otra clase de útiles é instrumentos destinados conocidamente á la falsificacion de que se trata en los capítulos precedentes de este título, será castigado con las mismas penas pecuniarias y con las personales inmediatamente inferiores en grado á las señaladas á los falsificadores.

Art. 236. El que tuviere en su poder cualquiera de los útiles ó instrumentos de que se habla en el artículo anterior, y no diere descargo suficiente sobre su adquisicion ó conservacion, será castigado con las mismas penas pecuniarias y las personales inferiores en dos grados á las correspondientes á la falsificacion para que aquellos fueren propios.

Art. 237. El empleado que para ejecutar cualquiera falsificacion en perjuicio del Estado, de una corporacion ó de un particular de quien dependa, hiciere uso de los útiles ó instrumentos legítimos que le estuvieren confiados, incurrirá en las mismas penas pecuniarias y en las personales inmediatamente superiores en grado que correspondan á la falsedad cometida, imponiéndole siempre además la de inhabilitacion perpétua absoluta.

Art. 238. Cuando sea estimable el lucro que hubieren reportado ó se hubieren propuesto los reos de falsificacion penados en este título, se les impondrá una multa del tanto al triplo del lucro, á no ser que el máximo de ella sea menor que el mínimo de la señalada al delito, en cuyo caso se les aplicará esta.

Art. 239. Los culpables de las falsificaciones penadas en este título que se delataren á la autoridad antes de haberse comenzado el procedimiento y revelaren las circunstancias del delito, quedarán exentos de pena, salvo la de sujecion á la vigilancia que podrán imponerles los Tribunales.

Para gozar de la exencion de este artículo en los casos de falsificacion de moneda y de cualquiera clase de documento de crédito del

Estado ó Bancos autorizados por el Gobierno, será además necesario que la delacion se verifique antes de la emision de moneda ó documentos.

En los demás casos tambien es precisa la circunstancia de que la falsificacion no haya causado perjuicio á tercero, ó que se haya indemnizado á este cumplidamente.

Art. 240. Los Tribunales rebajarán de uno á dos grados la pena, imponiéndola en el que estimen conveniente, y conmutarán la de presidio en prision en todos los casos de que trata el capítulo anterior, cuando la falsedad no ocasionare perjuicio efectivo y considerable á tercero, ni hubiere producido grave escándalo.

CAPITULO VI.

Del falso testimonio y de la acusacion y denuncias calumniosas.

Art. 241. El que en causa criminal sobre delito grave diere falso testimonio, será castigado:

1.º Con la pena impuesta al acusado, si este la hubiere sufrido por el testimonio falso.

2.º Con la inmediatamente inferior si no la hubiere sufrido.

3.º Con la inferior en dos grados á la correspondiente al delito imputado, si no hubiere recaido sentencia ejecutoriada, ó esta hubiere sido absolutoria.

4.º Con las de presidio mayor y multa de 50 á 500 duros, cuando sean menores las señaladas en los números precedentes, ó no puedan ejecutarse en la persona del falso testigo.

Art. 242. El falso testimonio dado en causa sobre delito menos grave será castigado con las penas de presidio menor y multa de 20 á 200 duros.

Si fuere sobre falta, se castigará con presidio correccional en su grado mínimo y multa de 10 á 100 duros.

Art. 243. El falso testimonio dado á favor del reo, será castigado con las penas de presidio correccional y multa de 20 á 200 duros, si la causa fuere por delito; y con las de arresto mayor y multa de 10 á 100 duros, si la causa fuere por falta.

Art. 244. El falso testimonio en causa civil será castigado con las penas de presidio correccional y multa de 50 á 500 duros.

Si el valor de la demanda no ascendiere á 50 duros, las penas serán las de arresto mayor y multa de 10 á 100 duros.

Art. 245. Las penas de los artículos precedentes son aplicables á los peritos que declararen falsamente en juicio.

Art. 246. Siempre que la declaracion falsa del testigo ó perito fuere dada mediante cohecho, las penas serán las inmediatas superiores en grado á las respectivamente designadas en los artículos anteriores, imponiéndose además la multa del tanto al triple del valor de la promesa ó dádiva.

Esta última será decomisada cuando hubiere llegado á entregarse al sobornado.

Art. 247. Cuando el testigo ó perito sin faltar sustancialmente á la verdad, la alteren con reticencias ó inexactitudes, las penas serán:

1.º Multa de 20 á 200 duros, si la falsedad recayere en causa sobre delito.

2.º De 10 á 100 duros, si recayere sobre falta ó negocio civil.

Art. 248. La acusacion ó denuncia que hubieren sido declaradas calumniosas por sentencia ejecutoriada, serán castigadas con las penas de prision menor cuando versaren sobre un delito grave; con las de prision correccional si fuere sobre delitos menos graves, y con las de arresto mayor si se tratare de una falta, imponiéndose además en todo caso una multa de 50 á 500 duros.

Art. 249. El que presentare á sabiendas testigos ó documentos falsos en juicio, será castigado como reo de falso testimonio.

CAPITULO VII.

De la usurpacion de funciones, calidad y nombres supuestos.

Art. 250. El que usurpare carácter que habilite para la administracion de Sacramentos y ejerciere actos propios de él, será castigado con la pena de presidio mayor.

Si la usurpacion fuere del carácter de diácono ó subdiácono, la pena será la de presidio correccional.

Art. 251. El que se fingiere autoridad, empleado público ó profesor de una facultad que requiera título, y ejerciere actos propios de dicha profesion ó cargos, será castigado en el primer caso con la pena de prision menor; en el segundo y tercero con la de prision correccional (49).

Art. 252. El simple uso del hábito, insignias ó uniforme propios del estado clerical ó de un cargo público, será castigado con arresto mayor y multa de 10 á 100 duros (50).

(49) Ejercer sin título actos de una profesion que lo exija, es solo falta (art. 485, pár. 4.º) La diferencia que existe entre dicha disposicion y la de este artículo, está en que aquí se exige además el fingirse profesor.

(50) Procúrese no confundir la disposicion de este artículo con la del núm. 5.º del artículo 485.

TITULO V.

DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA (51).

Art. 253. El que sin hallarse competente-mente autorizado elaborare sustancias noci-vas á la salud ó productos químicos que pue-dan causar grandes estragos, para expend-erlos, ó los despachare ó vendiere ó comer-ciare con ellos, será castigado con las penas de arresto mayor y multa de 50 á 500 duros.

Art. 254. El que hallándose autorizado para el tráfico de sustancias que puedan ser nocivas á la salud ó productos químicos de la clase expresada en el artículo anterior, los despachare ó suministrarle sin cumplir con las formalidades prescritas en los reglamen-tos respectivos, será castigado con las penas de arresto mayor y multa de 10 á 100 duros.

Art. 255. Los boticarios que despacha-ren medicamentos deteriorados, ó sustituye-ren unos por otros, haciéndolo de una mane-ra nociva á la salud, serán castigados con las penas de prision correccional y multa de 20 á 200 duros.

Art. 256. Las disposiciones de los dos ar-tículos anteriores son aplicables á los que trafiquen con las sustancias ó productos ex-presados en ellos, y á los dependientes de los boticarios cuando fueren los culpables.

Art. 257. El que con cualquiera mezcla nociva á la salud alterare las bebidas ó com-estibles destinados al consumo público, se-rá castigado con las penas de prision correc-cional y multa de 10 á 100 duros.

TITULO VI.

DE LA VAGANCIA Y MENDICIDAD.

Art. 258. Son vagos los que no poseen bienes ó rentas, ni ejercen habitualmente profesion, arte u oficio, ni tienen empleo, des-tino, industria, ocupacion lícita, ó algun otro medio legítimo y conocido de subsistencia,

(51) Sobre las disposiciones de este título es necesario tener presentes las que siguen

Para el art. 253, el núm. 9.º del art. 485 y el 16 del art. 495.

Para el 254, el núm. 6.º del 486.

Para el 255, el núm. 7.º del 486.

Respecto del art. 253, la única circunstancia que hace diferenciar el delito que castiga de la falta, está en *hacerse de una manera nociva á la salud*.

En cuanto al art. 257, debemos advertir que puede tener gran relacion con el 344.

aun cuando sean casados y con domicilio fijo (52).

Art. 259. El vago será castigado con las penas de arresto mayor á prision correccio-nal en su grado mínimo, y de sujecion á la vigilancia de la autoridad por el tiempo de un año, y con las de prision correccional y dos años de vigilancia si reincidiere.

Art. 260. Los vagos que varían frecuen-temente de residencia sin autorizacion com-petente, y los que frecuentan las casas de juego, serán castigados con las penas de pri-

(52) Por la *ley de 27 de marzo de 1868*, se ha dado nueva redaccion á este artículo, y se hacen otras modificaciones sobre penalidad y procedimiento. Dice así textualmente esta ley:

«Doña Isabel II, etc.

Art. 1.º El art. 258 del Código penal será sustituido por el que sigue:

Son vagos los varones, aun cuando estén casa-dos y tengan domicilio fijo, que se hallen en cualquiera de los casos siguientes:

Primero. Los que no poseen bienes ó rentas, no ejercen profesion, ni tienen destino, indus-tria, arte ú oficio, ó algun otro medio legítimo y conocido de subsistencia.

Segundo. Los que teniendo oficio, ejercicio, profesion ó industria y siendo estos los únicos medios de atender á su subsistencia, no traba-jan habitualmente pudiendo hacerlo.

Tercero. Los que con algun recurso, pero in-suficiente para subsistir, concurren de ordinario á casas de juego ú otros lugares sospechosos, sin dedicarse habitualmente á ocupaciones lícitas.

Art. 2.º El delito de vagancia se castigará con las penas establecidas en el tít. VI, lib. II del Código penal.

La concurrencia á las casas de juego ú otros lugares sospechosos no se considerará circuns-tancia agravante para los efectos del art. 260 del Código penal, respecto de los vagos definidos en el párrafo 3.º del artículo anterior.

El vago menor de 18 años será castigado con la pena de sujecion á la vigilancia de la Auto-ridad por el término de un año, cuando no me-rezca otro mas grave.

Art. 3.º El procedimiento en las causas que se formen por el delito de vagancia se ajustará á lo prevenido en el cap. II, tít. V de la Ley de órden público de 20 de marzo de 1867; pero se-rán suficientes tres magistrados para la vista de estas causas en segunda instancia.

Para que haya sentencia bastará dos votos conformes de tres magistrados, si fuere confir-matoria; siendo revocatoria, se necesitan tres votos conformes de los magistrados que consti-tuyan mayoría.

En las causas sobre vagancia, que sean del conocimiento de la Sala cuarta de la Audiencia de Madrid, en única instancia, continuará, por ahora, observándose el procedimiento especial para ella establecido.

Portanto: mandamos, etc.—Palacio 27 de mar-zo de 1868. (*Gac. 28 marzo.*)

sion correccional y dos años de sujecion á la vigilancia de la autoridad.

Art. 261. El vago á quien se aprehendiere disfrazado ó en traje que no le fuere habitual, ó pertrechado de ganzúas ú otros instrumentos ó armas que infundan conocida sospecha, será condenado á las penas de prision correccional en su grado máximo y tres años de sujecion á la vigilancia de la autoridad.

Iguales penas se impondrán al vago que intentare penetrar en casa, habitacion ó lugar cerrado, sin motivo que lo excuse.

Art. 262. En cualquier tiempo que el vago á quien se hubieren impuesto las penas de arresto y sujecion á la vigilancia de la autoridad, diere fianza de aplicacion y buena conducta, será relevado del cumplimiento de su condena.

La fianza consistirá en la cantidad que fijen los Tribunales en la sentencia, no bajando de 50 duros ni excediendo de 250, la cual se depositará en un banco público.

Esta fianza durará dos años. El fiador tendrá derecho á pedir en cualquier tiempo su cancelacion y la devolucion de la cantidad depositada, con tal que presente á la autoridad competente la persona del vago para que cumpla ó extinga su condena.

Art. 263. El que sin la debida licencia pidiera habitualmente limosna, será condenado con las penas de arresto mayor y sujecion á la vigilancia de la autoridad por tiempo de un año.

Cuando el mendigo no pudiese proporcionarse el sustento con su trabajo, ó fuere menor de 14 años, la autoridad adoptará las disposiciones que prescriban los reglamentos (53).

(53) Peligrosísima y sobre todo poco conveniente nos parece la penalidad del art. 263. El Código castiga como es justo el robo, el hurto, la estafa y todos los demás delitos que atacan mas menos directamente á la propiedad, y prohíbe y castiga tambien el hábito de pedir limosna sin la licencia conveniente, licencia que en algunos casos nada significa, y que en otros es bochornosa para ciertos desgraciados. Además las leyes de policía y de beneficencia dejan grandes vacíos en lo que es objeto de ellas, sin que el Gobierno se apresure á llenarlos como debiera hacerlo con esquisito cuidado. ¿Cuál debe ser pues el resultado de la disposicion de este artículo, que considerando delito el pedir habitualmente limosna, le castiga con el arresto mayor y sujecion á la vigilancia de la autoridad.?

Medítelo bien el legislador. El que tiene hambre, el que necesita pan para su desgraciada esposa y para sus tiernos é inocentes hijos, busca instintivamente el medio de satisfacer estas apremiantes necesidades. Ciérranse las puertas á la

Art. 264. La disposicion del pár. 1.º del artículo anterior es aplicable al que bajo un motivo falso obtuviere licencia para pedir limosna ó continuare pidiéndola despues de haber cesado la causa por que la obtuvo.

Art. 265. El mendigo en quien concurra cualquiera de las circunstancias expresadas en el art. 261, será castigado con las penas señaladas en él.

Art. 266. La disposicion del art. 262 es aplicable á los mendigos comprendidos en los arts. 263 y 264.

TITULO VII.

DE LOS JUEGOS Y RIFAS.

Art. 267. Los banqueros y dueños de casas de juego de suerte, envite ó azar, y los empresarios y expendedores de billetes de rifas no autorizadas, serán castigados con la pena de arresto mayor y multa de 20 á 200 duros; y en caso de reincidencia, con la de prision correccional en su grado mínimo al medio y doble multa.

Los jugadores que concurrieren á las casas referidas, con la de arresto mayor en su grado mínimo ó multa de 10 á 100 duros: en caso de reincidencia, con la de arresto mayor y doble multa.

El dinero y efectos puestos en juego, los muebles de la habitacion y los instrumentos, objetos y útiles destinados al juego ó rifa, caerán en comiso (54).

Art. 268. Los que en el juego usaren de medios fraudulentos para asegurar la suerte, serán castigados como estafadores.

caridad pública, y veremos multiplicarse los robos y todos los demás delitos contra la propiedad. Séamos, pues, prudentes; y puesto que ya tenemos tanto adelantado con la completa inobservancia de la disposicion contenida en el artículo 263, contentémonos con penar la verdadera vagancia como se hace en el art. 258 y siguientes, y ni deshonremos la pobreza, ni demos lugar á los grandes inconvenientes que hemos dicho tanto son de temerse y lamentarse.—V. BENEFICENCIA.

(54) La ley y reglamento para el gobierno y administracion de las provincias, señalan taxativamente las faltas que los Gobernadores pueden castigar con multas; y no expresándose entre ellas los juegos prohibidos, su repression es, por consiguiente, privativa de los Tribunales de justicia. La citada ley y reglamento han derogado la R. O. de 25 mayo de 1853 y el R. D. de 18 del mismo mes y año en lo que puedan oponérseles. (Decision del Consejo de Estado, 7 mayo de 1866, inserta en la *Gaceta* del 15).—Véase además en su lugar de este Diccionario, JUEGOS PROHIBIDOS.

TÍTULO VIII.

DE LOS DELITOS DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS EN EL EJERCICIO DE SUS CARGOS.

CAPÍTULO I.

Prevaricación.

Art. 269. El juez que á sabiendas dictare sentencia definitiva manifiestamente injusta, incurrirá:

1.º En la pena de inhabilitacion perpétua absoluta si la sentencia fuere condenatoria en causa criminal por delito; y además en la misma pena impuesta por la sentencia, si esta se hubiere ejecutado, y en la inferior en un grado á la señalada por la ley si la sentencia fuere inapelable y absolutoria en causa por delito grave.

2.º En la de inhabilitacion perpétua especial en cualquier otro caso.

Art. 270. El empleado público que á sabiendas y con manifiesta injusticia dictare ó consultare providencia ó resolucion en negocio contencioso-administrativo ó meramente administrativo, incurrirá en la pena de inhabilitacion perpétua especial.

Art. 271. El empleado público que faltando á las obligaciones de su oficio, dejare maliciosamente de promover la persecucion y castigo de los delincuentes, incurrirá en la pena de inhabilitacion perpétua especial.

Art. 272. El juez que maliciosamente se negare á juzgar, so pretexto de oscuridad, insuficiencia ó silencio de la ley, será castigado con la pena de suspension.

Esta disposicion se entiende sin perjuicio de las contenidas en el art. 2.º

En la misma pena incurrirá el juez culpable de retardo malicioso en la administracion de justicia.

Art. 273. El abogado ó procurador que con abuso malicioso de su oficio perjudicare á su cliente, ó descubriere sus secretos, será castigado segun la gravedad del perjuicio que causare, con las penas de suspension á la de inhabilitacion perpétua especial, y multa de 50 á 500 duros.

Art. 274. El abogado ó procurador que habiendo llegado á tomar la defensa de una parte, defendiere despues sin su consentimiento á la contraria en el mismo negocio, será castigado con las penas de inhabilitacion especial temporal y multa de 20 á 200 duros.

Art. 275. Las disposiciones de este capítulo son aplicables en sus respectivos casos á los asesores, árbitros, arbitradores y peritos.

CAPÍTULO II.

Infidelidad en la custodia de presos.

Art. 276. El empleado público culpable de connivencia en la evasion de un preso cuya conduccion ó custodia le estuviere confiada, será castigado:

1.º En el caso de que el fugitivo se hallare condenado por ejecutoria en alguna pena, con la inferior en dos grados y la de inhabilitacion perpétua especial.

2.º En la pena inferior en tres grados á la señalada por la ley al delito por el cual se halle procesado el fugitivo, si no se le hubiere condenado por ejecutoria, y en la de inhabilitacion especial temporal.

Art. 277. El particular que hallándose encargado de la conduccion ó custodia de un preso ó detenido, cometiere alguno de los delitos expresados en el artículo precedente, será castigado con las penas inmediatamente inferiores en grado á las señaladas al empleado público.

CAPÍTULO III.

Infidelidad en la custodia de documentos.

Art. 278. El eclesiástico ó empleado público que sustraiga ó destruya documentos ó papeles que le estuvieren confiados por razon de su cargo, será castigado:

1.º Con las penas de prision mayor y multa de 50 á 500 duros, siempre que del hecho resulte grave daño de tercero ó de la causa pública.

2.º Con la de prision correccional y multa de 20 á 200 duros, cuando no concurrieren aquellas circunstancias.

En uno y otro caso se impondrá además la pena de inhabilitacion perpétua especial.

Art. 279. El empleado público que teniendo á su cargo la custodia de papeles ó efectos sellados por la autoridad, quebrantare los sellos ó consintiere su quebrantamiento, será castigado con las penas de prision correccional, inhabilitacion perpétua especial, y multa de 50 á 500 duros.

Art. 280. El empleado público que abriere ó consintiere abrir sin la autorizacion competente papeles ó documentos cerrados, cuya custodia le estuviere confiada, incurrirá en las penas de arresto mayor, inhabilitacion temporal especial, y multa de 25 á 250 duros.

Art. 281. Las penas designadas en los tres artículos anteriores son aplicables á los particulares encargados accidentalmente del despacho ó custodia de documentos ó pape-

les por comision del Gobierno, ó de los empleados á quienes hubieren sido confiados aquellos por razon de su cargo.

CAPITULO IV.

Violacion de secretos.

Art. 282. El empleado público que revelare los secretos de que tenga conocimiento por razon de su oficio, será castigado con las penas de suspension y multa de 10 á 100 duros.

Si de la revelacion resultare grave daño para la causa pública, las penas serán: inhabilitacion absoluta perpétua, prision mayor y multa de 50 á 500 duros.

Art. 283. El empleado público que abusando de su cargo cometiere el delito de ocupar ó intervenir los papeles, ó abrir ó interceptar la correspondencia de otro, será castigado con las penas de inhabilitacion especial temporal, prision correccional y multa de 10 á 100 duros.

Si la interceptacion ó apertura fuere de pliegos oficiales, la pena será de inhabilitacion especial perpétua, prision correccional y multa de 50 á 500 duros.

Art. 284. El empleado público que sabiendo por razon de su cargo los secretos de un particular, los descubriere, incurrirá en las penas de suspension, arresto mayor, y multa de 10 á 100 duros.

En estas mismas penas incurrirán los que ejerciendo alguna de las profesiones que requieren título, revelaren los secretos que por razon de ella se les hubieren confiado.

CAPITULO V.

Resistencia y desobediencia.

Art. 285. Los que desobedecieren gravemente á la autoridad ó á sus agentes en asunto del servicio público, serán castigados con la pena de arresto mayor á prision correccional y multa de 20 á 200 duros.

Art. 286. El empleado público que se negare abiertamente á obedecer las órdenes de sus superiores, incurrirá en las penas de inhabilitacion perpétua especial y arresto mayor.

Art. 287. El empleado que habiendo suspendido con cualquier motivo la ejecucion de las órdenes de sus superiores, las desobedeciere despues que aquellos hubieren desaprobado la suspension, sufrirá la pena de inhabilitacion perpétua especial y prision correccional.

CAPITULO VI.

Denegacion de auxilio y abandono de destino.

Art. 288. El empleado público que requerido por la autoridad competente, no preste la debida cooperacion para la administracion de justicia ú otro servicio público, será penado con la suspension de oficio y multa de 10 á 100 duros.

Si de su omision resultare grave daño para la causa pública ó á un tercero, las penas serán las de inhabilitacion perpétua especial y multa de 20 á 200 duros.

Art. 289. El empleado que sin habersele admitido la renuncia de su destino, lo abandonar con daño de la causa pública, será castigado con la pena de suspension á inhabilitacion temporal para cargo ú oficio.

Esta disposicion ha de entenderse sin perjuicio de la que comprende el art. 187.

CAPITULO VII.

Nombramientos ilegales.

Art. 290. El empleado público que á sabiendas propusiere ó nombrare para cargo público á persona en quien no concurren los requisitos legales, será castigado con las penas de suspension y multa de 10 á 100 duros.

CAPITULO VIII.

Abusos contra particulares.

Art. 291. El empleado público que arrogándose facultades judiciales, impusiere algun castigo equivalente á pena personal, incurrirá:

1.º En la de inhabilitacion temporal especial del cargo que ejerza á la absoluta para el cargo público, si el castigo impuesto fuere equivalente á una pena afflictiva.

2.º En la de suspension á inhabilitacion temporal especial, si fuere equivalente á una pena correccional.

3.º En la de suspension, si fuere equivalente á una pena leve.

Art. 292. Si la pena arbitrariamente impuesta se hubiere ejecutado, además de las determinadas en el artículo anterior, se aplicará al empleado culpable la de la misma especie y en el mismo grado.

No habiéndose ejecutado la pena, se le aplicará la inmediatamente inferior en grado, si aquella no hubiere tenido efecto por causa independiente de su voluntad; y si no lo hubiere tenido por revocacion espontánea del

mismo empleado, incurrirá este únicamente en las penas del artículo anterior.

Art. 293. Cuando la pena arbitrariamente impuesta fuere pecuniaria, el empleado culpable será castigado:

1.º Con las de inhabilitacion especial temporal y multa del tanto al triplo, si la pena por él impuesta se hubiere ejecutado.

2.º Con las de suspension del grado medio al máximo y multa de la mitad al tanto, si no se hubiere ejecutado por causa independiente de su voluntad.

3.º Con la de suspension en el grado mínimo, si no se hubiere ejecutado por revocacion espontánea del mismo empleado.

Art. 294. El empleado público que en el arresto ó formacion de causa contra un senador ó diputado á Cortes no guardare la forma prescrita en la Constitucion, incurrirá en la pena de inhabilitacion temporal especial (55).

Art. 295. Serán castigados con las penas de suspension y multa de 5 á 50 duros.

1.º El empleado público que ordenare ó ejecutare ilegalmente ó con incompetencia manifiesta la detencion de una persona.

2.º El juez que no ponga en libertad al preso cuya soltura proceda.

3.º El alcaide de cárcel ó jefe de establecimiento penal que recibiere en ellos en concepto de presa ó detenida á una persona sin los requisitos prevenidos por la ley.

4.º El alcaide ó cualquier empleado público que ocultaren á la autoridad un preso que deban presentarle.

5.º Todo empleado público que no diere el debido cumplimiento á un mandato de soltura librado por la autoridad competente, ó retuviere en los establecimientos penales al sentenciado que ha extinguido su condena.

Cuando la persona que incurriere en alguno de los delitos de que se trata en este artículo, no gozare sueldo fijo del Estado, incurrirá además en la pena de arresto mayor á destierro.

Igual agravacion aplicarán los Tribunales cuando la prision ó detencion arbitraria excediere de ocho dias, sin perjuicio de lo que

para en su caso previene el art. 297 (56).

Art. 296. Las disposiciones del artículo anterior son aplicables:

1.º A los jueces que decretaren ó prolongaren indebidamente la incomunicacion de un preso.

2.º Al alcaide que sin mandato de la autoridad competente tuviere incomunicado ó en prision distinta de la que corresponda á un preso ó sentenciado.

3.º Al alcaide ó jefe del establecimiento penal que impusiere á los presos ó sentenciados privaciones indebidas, ó usare con ellos de un rigor innecesario.

4.º Al empleado público que negare á un detenido, ó á quien le represente, certificacion ó testimonio de su detencion, ó sin motivo legítimo dejare de dar curso á cualquiera solicitud relativa á su libertad.

5.º Al empleado público que teniendo á su cargo la policía administrativa ó judicial, y sabedor de cualquiera detencion arbitraria, dejare de dar parte á la autoridad superior competente, ó de practicar las diligencias que deba en este caso.

6.º Al empleado público que no recibiere declaracion al detenido ó no le hiciere saber la causa de su detencion dentro del término prefijado por las leyes.

Art. 297. El empleado público culpable de los abusos designados en los núms. 1.º, 4.º y 5.º del artículo anterior, y en el 5.º del 295, será castigado con las penas de inhabilitacion temporal y multa de 50 á 500 duros, cuando por efecto del abuso se prolongare la detencion por mas de dos meses.

Art. 298. El empleado público que arbitrariamente pusiere á un preso ó detenido en otro lugar que no sea la cárcel ó establecimiento señalado al efecto, será castigado con la multa de 10 á 100 duros.

Art. 299. El empleado público que abusando de su oficio allanare la casa de cualquiera persona, á no ser en los casos y en la forma que prescriban las leyes, será castigado con las penas de suspension y multa de 10 á 100 duros.

Art. 300. El empleado público que desempeñando un acto del servicio cometiere cualquiera vejacion injusta contra las personas, ó usare de apremios ilegítimos ó inne-

(55) Se exige la prévia resolucion y permiso del Senado ó del Congreso para procesar ó arrestar respectivamente á un senador ó diputado, á no ser hallados *in fraganti*, ó cuando estén cerradas las Cortes, pero en estos casos debe darse cuenta lo mas pronto posible al respectivo Cuerpo para su conocimiento y resolucion. (Artículo 41 de la Const. de 1845.) V. CONSTITUCION.

(56) Sobre los distintos números de este artículo y de los siguientes sobre prision, detencion, incomunicacion, etc.; ténganse presentes las reglas 25 á la 37 de la Ley provisional y sus notas: sobre la responsabilidad de los alcaides, etc., los arts. 67 al 72 del reglamento de los Juzgados, y el 14 al 22 de la ley de prisiones.— V. ARRESTO: ALCAIDE: PRISION:

cesarios para el desempeño del servicio respectivo, será castigado con las penas de suspension y multa de 10 á 100 duros.

Todo empleado público del orden administrativo que retardare ó negare á los particulares la proteccion ó servicio que deba dispensarles segun las leyes y reglamentos, incurrirá en la pena de suspension y multa de 10 á 100 duros.

Art. 301. El empleado público que arbitrariamente rehusare dar certificacion ó testimonio, ó impidiere la presentacion ó el curso de una solicitud, será castigado con multa de 10 á 100 duros.

Si el testimonio, certificacion ó solicitud versaren sobre un abuso cometido por el mismo empleado, la multa será de 20 á 200 duros.

Art. 302. El empleado público que solicitar á una mujer que tenga pretensiones pendientes de su resolucion, será castigado con la pena de inhabilitacion temporal especial.

Art. 303. El alcaide que solicitar á una mujer sujeta á su guarda, será castigado con la pena de prision menor.

Si la solicitada fuere esposa, hija, madre, hermana ó afin en los mismos grados de persona que tuviere bajo su guarda, la pena será prision correccional.

En todo caso incurrirá además en la de inhabilitacion perpétua especial.

CAPITULO IX.

Abusos de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones (57).

Art. 304. El eclesiástico que en sermon, discurso, edicto, pastoral ú otro documento á que diere publicidad, censurare como contrarias á la religion cualquiera ley, decreto, órden, disposicion ó providencia de la autoridad pública, será castigado con la pena de destierro.

(57) Otros abusos de los eclesiásticos se castigan tambien especialmente en varios artículos del Código.—El art. 185 señala la pena que ha de imponerse cuando son reos de sedicion ó rebelion; el 202 castiga á los que en el ejercicio de su ministerio provocaren á la ejecucion de los atentados y desacatos contra la autoridad, y de otros desórdenes públicos expresados en el mismo capitulo; el 226 determina la pena contra los mismos cuando abusaron de su oficio cometieren falsedad; el 278 la que les corresponde por la destruccion ó sustraccion de documentos ó papeles que les estuvieren confiados por razon de su cargo, y el 403 castiga á los que autorizaren matrimonios prohibidos por la ley civil ó con impedimentos canónicos.

Art. 305. El eclesiástico que requerido por el Tribunal competente rehusare remitirle los autos pedidos por la decision de un recurso de fuerza interpuesto, ó alzar las censuras ó la fuerza, será castigado con la pena de inhabilitacion temporal.

La reincidencia se castigará con la de inhabilitacion perpétua especial (58).

Art. 306. Las penas señaladas en los capítulos precedentes de este título á los delitos que cometan los empleados públicos en el ejercicio de sus cargos, se impondrán á los eclesiásticos que abusen de la jurisdiccion ó autoridad que ejerzan, en cuanto sean aplicables.

CAPITULO X.

Usurpacion de atribuciones.

Art. 307. El empleado público que dictare reglamentos ó disposiciones generales, excediéndose de sus atribuciones, será castigado con la pena de suspension.

Art. 308. El juez que se arrogare atribuciones propias de las autoridades administrativas, ó impidiere á estas el ejercicio legítimo de las suyas, será castigado con la pena de suspension.

En la misma pena incurrirá todo empleado del orden administrativo que se arrogare atribuciones judiciales, ó impidiere la ejecucion de una providencia ó decision dictada por juez competente.

Art. 309. El empleado público que legalmente requerido de inhibicion continuare procediendo antes que se decida la contienda, será castigado con una multa de 20 á 200 duros (59).

(58) Téngase presente el art. 1410 de la Ley de Enjuiciamiento civil, para la mejor aplicacion de este artículo.

(9) Sobre competencias entre las autoridades judiciales en materia penal, rige la inst. de 19 de abril de 1813, y así lo ha considerado el Tribunal Supremo al decidir una en 4 de setiembre de 1858. Cuando la competencia es entre las autoridades judiciales y las administrativas, deben observarse las disposiciones del reglamento para la ejecucion de la ley de Gobiernos de provincia de 25 de setiembre de 1863. Por regla general está prohibido á los Gobernadores suscitar contiendas de competencia en materia criminal, y solo cuando *taxativamente* haya encargado la ley á los funcionarios de la Administracion el castigo del delito ó falta, ó cuando haya alguna cuestion previa administrativa, sin la cual no pueda fallarse el juicio criminal, podrán fundadamente suscitarse. (Art. 54 del regl. de 25 de setiembre de 1863.)—V. JURISDICCION ADMINISTRATIVA.

CAPITULO XI.

Prolongacion y anticipacion indebidas de funciones públicas.

Art. 310. El empleado público que continuare ejerciendo su empleo, cargo ó comision despues que debiere cesar conforme á las leyes, reglamentos ó disposiciones especiales de su ramo respectivo, será castigado con las penas de inhabilitacion temporal en su grado mínimo y multa de 10 á 100 duros.

Art. 311. El que entrare á desempeñar un empleo ó cargo público sin haber prestado en debida forma el juramento ó fianzas requeridas por las leyes, quedará suspenso del empleo ó cargo hasta que cumpla con las formalidades respectivas, é incurrirá en la multa de 5 á 50 duros.

Art. 312. El empleado culpable de cualquiera de los delitos penados en los dos artículos anteriores, y que hubiere percibido algunos derechos ó emolumentos por razon de su cargo ó comision, será además condenado á restituirlos con la multa del 10 al 50 por 100 de su importe.

CAPITULO XII.

Disposicion general á los capitulos precedentes de este titulo.

Art. 313. El empleado público que en el ejercicio de su cargo cometiere algun abuso que no esté penado especialmente en los capítulos precedentes de este titulo, incurrirá en una multa de 20 á 200 duros, cuando el daño causado por el abuso no fuere estimable, y del 20 al 100 por 100 de su valor cuando lo fuere; pero nunca bajará de 20 duros.

CAPITULO XIII.

Cohecho.

Art. 314. El empleado público que por dádiva ó promesa cometiere alguno de los delitos expresados en los capítulos precedentes de este titulo, además de las penas en ellos designadas, incurrirá en las de inhabilitacion absoluta perpétua y multa de la mitad al tanto de la dádiva ó promesa aceptada.

En la misma multa y en la pena de inhabilitacion especial temporal incurrirá el empleado público que por dádiva ó promesa ejecutare ú omitiere cualquier acto lícito ó debido, propio de su cargo.

El empleado público que admitiere regalos que le fueren presentados en considera-

cion á su oficio, será castigado por este solo hecho con la reprension pública, y en caso de reincidencia, con la de inhabilitacion especial.

Lo dispuesto en este artículo es aplicable á los asesores, árbitros, arbitradores y peritos (60).

Art. 315. En el caso de que el delito cometido por dádiva ó promesa se halle comprendido en el art. 313, será castigado con las penas de inhabilitacion especial temporal y la misma multa.

Art. 316. El sobornante será castigado con las penas correspondientes en los casos respectivos á los cómplices, excepto las de inhabilitacion ó suspension.

Cuando el soborno mediere en causa criminal á favor del reo por parte de su cónyuge, ó de algun ascendiente, descendiente, hermano ó afin en los mismos grados, solo se impondrá al sobornante una multa igual al valor de la dádiva ó promesa.

Art. 317. En todo caso caerán las dádivas en comiso.

CAPITULO XIV.

Malversacion de caudales públicos.

Art. 318. El empleado público que teniendo á su cargo caudales ó efectos públicos, los sustrajere ó consintiere que otro los sustraiga, será castigado:

1.º Con la pena de arresto mayor, si la sustraccion no excediere de 10 duros.

2.º Con la de prision menor, si excediere de 10 y no pasare de 500.

3.º Con la de prision mayor, si excediere de 500 y no pasare de 10.000.

4.º Con la de cadena temporal, si excediere de 10.000

En todos los casos con la de inhabilitacion perpétua absoluta.

(60) Hasta para ejecutar un acto lícito debido está justamente prohibido á los empleados públicos el recibir dádivas ó aceptar promesas; hasta la simple admision de regalos se considera delito, cuando se les hace en consideracion á su cargo; y lo mismo deberá ser cuando se hagan á sus esposas ó hijos, siempre que se conozca hay el objeto de defraudar la disposicion penal. Los empleados públicos deben ser probos sobre todo, y por severa que sea la ley en las diferentes disposiciones de este capítulo, creemos que lo es con razon; que es harto vergonzoso el que un empleado reciba dádivas, etc., y son tambien harto graves los delitos comprendidos en todo el titulo, aun sin la circunstancia del cohecho que les hace tan repugnantes y odiosos.

Art. 319. El empleado que con daño ó entorpecimiento del servicio público aplicare á usos propios ó ajenos los caudales ó efectos puestos á su cargo, será castigado con las penas de inhabilitacion especial temporal y multa de 10 al 50 por 100 de la cantidad que hubiere sustraído.

No verificándose el reintegro, se le impondrán las penas señaladas en el artículo precedente.

Si el uso indebido de los fondos fuere sin daño ni entorpecimiento del servicio público, incurrirá en las penas de suspension y multa del 5 al 25 por 100 de la cantidad sustraída.

Art. 320. El empleado público que diere á los caudales ó efectos que administre una aplicacion pública diferente de aquella á que estuvieren destinados, incurrirá en las penas de inhabilitacion temporal y multa del 5 al 50 por 100 de la cantidad distraída, si de ello resultare daño ó entorpecimiento del servicio á que estuvieren consignados; y en la de suspension si no resultare daño ó entorpecimiento.

Art. 321. El empleado público que debiendo hacer un pago como tenedor de fondos del Estado no lo hiciere, será castigado con las penas de suspension y multa del 5 al 25 por 100 de la cantidad no satisfecha.

Esta disposicion es aplicable al empleado público que requerido con orden de autoridad competente, rehusare hacer entrega de una cosa puesta bajo su custodia ó administracion.

La multa se graduará en este caso por el valor de la cosa, y no podrá bajar de 10 duros.

Art. 322. Las disposiciones de este capítulo son extensivas al que se halle encargado por cualquier concepto de fondos, rentas ó efectos provinciales ó municipales, ó pertenecientes á un establecimiento de instruccion ó beneficencia, y á los administradores ó depositarios de caudales embargados, secuestrados ó depositados por autoridad pública, aunque pertenezcan á particulares.

CAPITULO XV.

Fraudes y exacciones ilegales.

Art. 323. El empleado público que interviniendo por razon de su cargo en alguna comision de suministros, contratas, ajustes ó liquidaciones de efectos ó haberes públicos, se concertare con los interesados ó especuladores, ó usare de cualquier otro artificio para defraudar al Estado, incurrirá en las

penas de presidio correccional é inhabilitacion perpétua especial.

Art. 324. El empleado público que directa ó indirectamente se interesare en cualquiera clase de contrato ó operacion en que deba intervenir por razon de su cargo, será castigado con las penas de inhabilitacion temporal especial y multa del 10 al 50 por 100 del valor del interés que hubiere tomado en el negocio.

Esta disposicion es aplicable á los peritos, árbitros y contadores particulares respecto de los bienes ó cosas en cuya tasacion, adjudicacion ó particion intervinieren, y á los tutores, curadores y albaceas, respecto de los pertenecientes á sus pupilos ó testamentarios.

Art. 325. El empleado público que abusando de su cargo, cometiere alguno de los delitos expresados en el cap. V, lit. XIV, de este libro, incurrirá además de las penas allí señaladas, en la de inhabilitacion perpétua especial.

Art. 326. El empleado público que sin autorizacion competente impusiere una contribucion ó arbitrio, ó hiciere cualquiera otra exaccion con destino al servicio público, será castigado con las penas de suspension y multa del 5 al 25 por 100 de la cantidad exigida.

Cuando la exaccion hubiere sido resistida por el contribuyente como ilegal, y se hiciere efectiva empleando la fuerza pública, las penas serán inhabilitacion temporal especial y multa del 10 al 50 por 100 (61).

Art. 327. Si el empleado cometiere en provecho propio las exacciones expresadas en el artículo anterior, será castigado con arreglo á lo dispuesto en el art. 318.

Art. 328. El empleado público que exigiere directa ó indirectamente mayores derechos que los que le estén señalados por razon de su cargo, será castigado con una multa del duplo al cuádruplo de la cantidad exigida.

El culpable habitual de este delito incurrirá además en la pena de inhabilitacion temporal.

CAPITULO XVI.

Negociaciones prohibidas á los empleados.

Art. 329. Los jueces, los empleados en el ministerio fiscal, los jefes militares, gubernativos ó económicos de una provincia ó

(61) La exaccion de multas en metálico constituye delito segun repetidas decisiones del Consejo de Estado.—V. AUTORIZACION PARA PROCESAR: MULTAS.

distrito, que durante el ejercicio de sus cargos se mezclaren directa ó indirectamente en operaciones de ágio, tráfico ó granjería dentro de los límites de su jurisdicción ó mando, sobre objetos que no fueren productos de sus bienes propios, serán castigados con las penas de suspension y multa de 50 á 500 duros.

Esta disposicion no es aplicable á los que impusieren sus fondos en acciones de Banco ó de cualquiera empresa ó compañía, con tal que no ejerzan en ellas cargo ni intervencion directa, administrativa ó económica.

Art. 330. No están comprendidos en las disposiciones del artículo anterior los empleados en el ministerio fiscal á quienes esté permitido el ejercicio de la abogacía, los jueces de los Tribunales de Comercio, ni los Alcaldes.

CAPITULO XVII.

Disposicion general.

Art. 331. Para los efectos de este título se reputa empleado todo el que desempeña un cargo público, aunque no sea de Real nombramiento, ni reciba sueldo del Estado (62).

TITULO IX.

DELITOS CONTRA LAS PERSONAS.

CAPITULO I.

Homicidio.

Art. 332. El que mate á su padre, madre ó hijo, sean legítimos, ilegítimos ó adoptivos, ó á cualquier otro de sus ascendientes ó descendientes legítimos ó á su cónyuge, será castigado como parricida:

1.º Con la pena de muerte si concurriere la circunstancia de premeditacion conocida, ó la de ensañamiento, aumentando deliberadamente el dolor del ofendido.

2.º Con la pena de cadena perpétua á la

(62) Se dice por los Sres. Zuñiga y Castro y Orozco en su Código reformado, que respecto de este artículo no debe olvidarse lo que dispone el 6.º del R. D. de 22 de setiembre de 1848, sobre que «definido una vez en el Código un delito, cualidad ó circunstancia, siempre que el mismo Código hablare de aquel ó de estas, se entenderán definidos en los propios términos.» Sin embargo de lo mucho que respeto la opinion de dichos señores, creo que la disposicion del presente artículo debe entenderse sola y exclusivamente para los efectos de este título, pues que así lo dice el mismo bien terminantemente.

de muerte si no concurriere ninguna de las dos circunstancias expresadas en el número anterior.

Art. 333. El que mate á otro, y no esté comprendido en el artículo anterior, será castigado:

1.º Con la pena de cadena perpétua á la de muerte, si lo ejecutare con alguna de las circunstancias siguientes:

Primera. Con alevosía.

Segunda. Por precio ó promesa remuneratoria.

Tercera. Por medio de inundacion, incendio ó veneno.

Cuarta. Con premeditacion conocida.

Quinta. Con ensañamiento, aumentando deliberada é inhumanamente el dolor del ofendido.

2.º Con la pena de reclusion temporal en cualquier otro caso.

Art. 334. En el caso de cometerse un homicidio en riña ó pelea, y de no constar el autor de la muerte, pero si los que causaren lesiones graves, se impondrá á todos estos la pena de prision mayor.

No constando tampoco los que causaron lesiones graves al ofendido, se impondrá á todos los que hubieren ejercido violencias en su persona la de prision menor.

Art. 335. El que prestare auxilio á otro para que se suicide, será castigado con la pena de prision mayor; si le prestare hasta el punto de ejecutar él mismo la muerte, será castigado con la pena de reclusion temporal en su grado mínimo.

CAPITULO II.

Del infanticidio.

Art. 336. La madre que por ocultar su deshonra matare al hijo que no haya cumplido tres dias, será castigada con la pena de prision menor. Los abuelos maternos que para ocultar la deshonra de la madre cometieren este delito, con la de prision mayor.

Fuera de estos casos, el que matare á un recién nacido incurrirá en las penas del homicidio.

CAPITULO III.

Aborto (63).

Art. 337. El que de propósito causare un aborto será castigado:

1.º Con la pena de reclusion temporal, si ejerciere violencia en la persona de la mujer embarazada.

(63) Véase en su lugar de este Diccionario el artículo DELITO FRUSTRADO.

2.º Con la de prision mayor si, aunque no la ejerza, obrare sin consentimiento de la mujer.

3.º Con la de prision menor si la mujer lo consintiere.

Art. 338. Será castigado con prision correccional el aborto ocasionado violentamente, cuando no haya habido propósito de causarlo.

Art. 339. La mujer que causare su aborto ó consintiere que otra persona se le cause, será castigada con prision menor.

Si la hiciere para ocultar su deshonra, incurrirá en la pena de prision correccional.

Art. 340. El facultativo que abusando de su arte causare el aborto ó cooperare á él, incurrirá respectivamente en su grado máximo en las penas señaladas en el art. 337.

CAPITULO IV.

Lesiones corporales.

Art. 341. El que de propósito castrare á otro será castigado con la pena de cadena temporal en su grado máximo á la de muerte.

Art. 342. Cualquiera otra mutilacion ejecutada igualmente de propósito, se castigará con la pena de cadena temporal (64).

Art. 343. El que hiriere, golpear ó maltratase de obra á otro, será castigado como reo de lesiones graves:

1.ª Con la pena de prision mayor si de resultas de las lesiones quedare el ofendido demente, inútil para el trabajo, inapotente, impedido de algun miembro, ó notablemente deforme.

2.º Con la de prision correccional si las lesiones produjeran al ofendido enfermedad ó incapacidad para trabajar por mas de treinta dias.

Si el hecho se ejecutare contra alguna de las personas que menciona el art. 332, ó con alguna de las circunstancias señaladas en el núm. 1.º del art. 333, las penas serán la de cadena temporal en el caso del núm. 1.º de este artículo, y la de presidio menor en el del núm. 2.º del mismo.

Art. 344. Las penas del artículo anterior son aplicables respectivamente al que sin ánimo de matar causare á otro alguna de las lesiones graves, administrándole á sabiendas sustancias ó bebidas nocivas, ó abusando de su credulidad ó flaqueza de espíritu.

Art. 345. Las lesiones no comprendidas en los artículos precedentes que produzcan

al ofendido inutilidad para el trabajo por cinco dias ó mas, ó necesidad de la asistencia de facultativo por igual tiempo, se reputan menos graves, y serán penadas con el arresto mayor, el destierro, ó multa de 20 á 200 duros, segun el prudente arbitrio de los Tribunales.

Cuando la lesion menos grave se causare con intencion manifesta de injuriar ó con circunstancias ignominiosas, se impondrán conjuntamente el destierro y la multa.

Art. 346. Las lesiones menos graves inferidas á padres, ascendientes, tutores, curadores, sacerdotes, maestros ó personas constituidas en dignidad ó autoridad pública, serán castigadas siempre con prision correccional.

Art. 347. Si resultaren lesiones en una riña ó pelea, y no constare su autor, se impondrán las penas inmediatamente inferiores en grado al que aparezca haber causado alguna al ofendido (65).

CAPITULO V.

Disposicion general.

Art. 348. El marido que sorprendiendo en adulterio á su mujer matare en el acto á esta ó al adúltero, ó les causare algunas de las lesiones graves, será castigado con la pena de destierro.

Si les causare lesiones de otra clase, quedará exento de pena.

Estas reglas son aplicables en iguales circunstancias á los padres respecto de sus hijas menores de 23 años y sus corruptores, mientras aquellas vivieren en la casa paterna.

El beneficio de este artículo no aprovecha á los que hubieren promovido ó facilitado la prostitucion de sus mujeres ó hijas.

CAPITULO VI.

Del duelo.

Art. 349. La autoridad que tuviere noticia de estarse concertando un duelo, procederá á la detencion del provocador y á la del retado, si este hubiere aceptado el desafio, y no los pondrán en libertad hasta que ofrezcan bajo palabra de honor desistir de su propósito.

El que faltando deslealmente á su palabra provocare de nuevo á su adversario, será castigado con las penas de inhabilitacion tem-

(64) Cuando la mutilacion es voluntaria con objeto de librarse del servicio militar, se castiga en los términos que expresa el art. 160 de la ley para el reemplazo del ejército.

(65) Cuidar mucho de no confundir las lesiones que castiga este capítulo con las que se califican de faltas en el art. 484, núm. 4.º, y en el 485, núm. 11.

poral absoluta para cargos públicos y confinamiento menor.

El que aceptare el duelo en el mismo caso, será castigado con la de destierro.

Art. 350. El que matare en duelo á su adversario, será castigado con la pena de prision mayor.

Si le causare las lesiones señaladas en el número 1.º del art. 343, con la de prision menor.

En cualquiera otro caso se impondrá á los combatientes la pena de arresto mayor, aunque no resulten lesiones.

Art. 351. En lugar de las penas señaladas en el artículo anterior, se impondrán la de confinamiento menor en caso de homicidio, la de destierro en el de lesiones comprendidas en el núm. 1.º del art. 343, y la de 10 á 100 duros de multa en los demás casos:

1.º Al provocado á desafío que se batiere por no haber obtenido de su adversario explicacion de los motivos del duelo.

2.º Al desafiado que se batiere por haber desechado su adversario las explicaciones suficientes ó satisfaccion decorosa del agravio inferido.

3.º Al injuriado que se batiere por no haber podido obtener del ofensor la explicacion suficiente ó satisfaccion decorosa que le hubiera pedido.

Art. 352. Las penas señaladas en el artículo 350 se aplicarán en su grado máximo:

1.º Al que provocare el duelo sin explicar á su adversario los motivos si este lo exigiere.

2.º Al que habiéndolo provocado, aunque fuere con causa, desechare las explicaciones suficientes ó la satisfaccion decorosa que le haya ofrecido su adversario.

3.º Al que habiendo hecho á su adversario cualquiera injuria, se negare á darle explicaciones suficientes ó satisfaccion decorosa.

Art. 353. El que incitare á otro á provocar ó aceptar un duelo, será castigado respectivamente con las penas señaladas en el art. 350, si el duelo se lleva á efecto.

Art. 354. El que denostare ó desacreditare públicamente á otro por haber rehusado un duelo, incurrirá en las penas señaladas para las injurias graves.

Art. 355. Los padrinos de un duelo del que resulten muerte ó lesiones, serán respectivamente castigados como autores de aquellos delitos con premeditacion si hubieren promovido el duelo, ó usado cualquier género de alevosía en su ejecucion ó en el arreglo de sus condiciones.

Como cómplices de los mismos delitos, si lo hubieren concertado á muerte con ventaja conocida de alguno de los combatientes.

Incurrirán en las penas de arresto mayor y multa de 50 á 500 duros, si no hubieren hecho cuanto estuvo de su parte para conciliar los ánimos, ó no procuraren concertar las condiciones del duelo de la manera menos peligrosa posible para la vida de los combatientes.

Art. 356. El duelo que se verificare sin la asistencia de dos ó mas padrinos mayores de edad por cada parte, y sin que estos hayan elegido las armas y arreglado todas las demás condiciones, se castigará:

1.º Con prision correccional, no resultando muerte ó lesiones.

2.º Con las penas generales de este Código, si resultaren; pero nunca podrá bajarse de la prision correccional.

Art. 357. Se impondrán tambien las penas generales de este Código, y además la de inhabilitacion absoluta temporal:

1.º Al que provocare ó diere causa á un desafío proponiéndose un interés pecuniario ó un objeto inmoral.

2.º Al combatiente que cometiere la alevosía de faltar á las condiciones concertadas por los padrinos.

TITULO X.

DELITOS CONTRA LA HONESTIDAD.

CAPITULO I.

Adulterio (66).

Art. 358. El adulterio será castigado con la pena de prision menor.

Cometen adulterio la mujer casada que yace con varon que no sea su marido, y el que yace con ella sabiendo que es casada, aunque despues se declare nulo el matrimonio.

Art. 359. No se impondrá pena por delito de adulterio, sino en virtud de querella del marido agraviado.

Este no podrá deducirla sino contra ambos culpables, si uno y otro vivieren, y nunca si hubiere consentido el adulterio, ó perdonado á cualquiera de ellos.

Art. 360. El marido podrá en cualquier tiempo remitir la pena impuesta á su consorte, volviendo á reunirse con ella.

En este caso se tendrá tambien por remitida la pena al adúltero.

Art. 361. La ejecutoria en causa de divorcio por adulterio surtirá sus efectos ple-

namente en lo penal cuando fuere absoluta.

Si fuere condenatoria, será necesario nuevo juicio para la imposición de las penas.

Art. 362. El marido que tuviere manceba dentro de la casa conyugal ó fuera de ella con escándalo, será castigado con la pena de prision correccional.

La manceba será castigada con la de destierro.

Lo dispuesto en los arts. 339 y 360 es aplicable al caso de que se trata en el presente.

CAPITULO II.

Violacion.

Art. 363. La violacion de una mujer será castigada con la pena de cadena temporal.

Se comete violacion yaciendo con la mujer en cualquiera de los casos siguientes:

1.º Cuando se usa de fuerza ó intimidacion.

2.º Cuando la mujer se halle privada de razon ó de sentido por cualquiera causa.

3.º Cuando sea menor de 12 años cumplidos, aunque no concurra ninguna de las circunstancias expresadas en los dos números anteriores.

Art. 364. El que abusare deshonestamente de persona de uno ú otro sexo, concurriendo cualquiera de las circunstancias expresadas en el artículo anterior, será castigado segun la gravedad del hecho con la pena de prision correccional á prision menor.

Art. 365. Serán castigados con la pena de arresto mayor á prision correccional y reprension pública los que de cualquier modo ofendieren el pudor ó las buenas costumbres con hechos de grave escándalo ó trascendencia no comprendidos expresamente en otros artículos de este Código.

En caso de reincidencia, con la de prision correccional á prision menor y reprension pública.

CAPITULO III.

Del estupro y corrupcion de menores.

Art. 366. El estupro de una dencella mayor de 12 años, y menor de 23, cometida por autoridad pública, sacerdote, criado, doméstico, tutor, maestro ó encargado por cualquier título de la educacion ó guarda de la estuprada, se castigará con la pena de prision menor.

En la misma pena incurrirá el que cometiére estupro con su hermana ó descendiente, aunque sea mayor de 23 años.

El estupro cometido por cualquiera otra

persona interviniendo engaño, se castigará con la pena de prision correccional.

Cualquiera otro abuso deshonesto cometido por las mismas personas y en iguales circunstancias, será castigado con la prision correccional.

Art. 367. El que habitualmente ó con abuso de autoridad ó confianza promoviére ó facilitare la prostitucion ó corrupcion de menores de edad, para satisfacer los deseos de otro, será castigado con la pena de prision correccional.

CAPITULO IV.

Rapto.

Art. 368. El rapto de una mujer ejecutado contra su voluntad y con miras deshonestas, será castigado con la pena de cadena temporal.

En todo caso se impondrá la misma pena si la robada fuere menor de 12 años.

Art. 369. El rapto de una doncella menor de 23 años y mayor de 12, ejecutado con su anuencia, será castigado con la pena de prision menor.

Art. 370. Los reos de delito de rapto que no dieren razon del paradero de la persona robada, ó explicacion satisfactoria sobre su muerte ó desaparicion, serán castigados con la pena de cadena perpétua.

CAPITULO V.

Disposiciones comunes á los tres capitulos precedentes.

Art. 371. No puede procederse por causa de estupro sino á instancia de la agraviada ó de su tutor, padres ó abuelos.

Para proceder en las causas de violacion y en las de rapto ejecutado con miras deshonestas, bastará la denuncia de la persona interesada, de sus padres, abuelos ó tutores, aunque no formalicen instancia.

Si la persona agraviada careciese por su edad ó estado moral de personalidad para estar en juicio, y fuere además de todo punto desvalida, careciendo de padres, abuelos, hermanos, tutor ó curador que denuncien, podrán verificarlo el procurador síndico ó el fiscal por fama pública.

En todos los casos del presente artículo el ofensor se libra de la pena, casándose con la ofendida, cesando el procedimiento en cualquier estado de él en que lo verifique (67).

(67) «En las causas en que la ley no admite sino la acusacion privada no se consultan las sentencias con la Audiencia, cuando ninguna de las partes apela. (R. O. de 8 de abril de 1863, inserta en el Apéndice).

Art. 372. Los reos de violacion, estupro ó raptó serán tambien condenados por vía de indemnizacion:

1.º A dotar á la ofendida si fuere soltera ó viuda.

2.º A reconocer la prole, si la calidad de su origen no le impidiere.

3.º En todo caso á mantener la prole.

Art. 373. Los ascendientes, tutores, curadores, maestros y cualesquiera personas que con abuso de autoridad ó encargo cooperaren como cómplices á la perpetracion de los delitos comprendidos en los tres capítulos precedentes, serán penados como autores.

Los maestros ó encargados en cualquier manera de la educacion ó direccion de la juventud, serán además condenados á la inhabilitacion perpétua especial.

Art. 374. Los comprendidos en el artículo precedente y cualesquiera otros reos de corrupcion de menores en interés de tercero, serán condenados en las penas de interdiccion del derecho de ejercer la tutela y ser miembros del consejo de familia, y de sujecion á la vigilancia de la autoridad por el tiempo que los Tribunales determinen.

TITULO XI.

DE LOS DELITOS CONTRA EL HONOR.

CAPITULO I.

Calumnia.

Art. 375. Es calumnia la falsa imputacion de un delito de los que dan lugar á procedimientos de oficio.

Art. 376. La calumnia propagada por escrito y con publicidad se castigará:

1.º Con las penas de prision correccional y multa de 100 á 1,000 duros, cuando se imputare un delito grave.

2.º Con las de arresto mayor y multa de 50 á 500 duros, si se imputare un delito menos grave.

Art. 377. No propagándose la calumnia con publicidad y por escrito, será castigada:

1.º Con las penas de arresto mayor en su grado máximo y multa de 50 á 500 duros, cuando se imputare un delito grave.

2.º Con el arresto mayor en su grado mínimo y multa de 20 á 200 duros, cuando se imputare un delito menos grave.

Art. 378. El acusado de calumnia quedará exento de toda pena, probando el hecho criminal que hubiere imputado.

La sentencia en que se declare la calum-

nia se publicará en los periódicos oficiales, si el calumniado lo pidiere (68).

CAPITULO II.

Injurias (69).

Art. 379. Es injuria toda expresion proferida ó accion ejecutada en deshonra, descrédito ó menosprecio de otra persona (70).

Art. 380. Son injurias graves:

1.º La imputacion de un delito de los que no dan lugar á procedimiento de oficio.

2.º La de un vicio ó falta de moralidad, cuyas consecuencias puedan perjudicar considerablemente la fama, crédito ó interés del agraviado.

3.º Las injurias que por su naturaleza, ocasion ó circunstancias fueren tenidas en el concepto público por afrentosas.

4.º Las que racionalmente merezcan la calificacion de graves, atendido el estado, dignidad y circunstancias del ofendido y del ofensor.

Art. 381. Las injurias graves hechas por escrito y con publicidad, serán castigadas con la pena de destierro en su grado medio al máximo, y multa de 50 á 500 duros.

No concurriendo aquellas circunstancias, se castigarán con las penas de destierro en su grado mínimo al medio, y multa de 10 á 100 duros.

Art. 382. Las injurias leves serán castigadas con las penas de arresto mayor en su grado mínimo y multa de 20 á 200 duros, cuando fueren hechas por escrito y con publicidad.

No concurriendo estas circunstancias, se penarán como faltas (71).

Art. 383. Al acusado de injuria no se admitirá prueba sobre la verdad de las imputaciones, sino cuando estas fueren dirigidas contra empleados públicos sobre hechos concernientes al ejercicio de su cargo.

(68) Véanse los arts. 241 al 248 que tratan del falso testimonio y de la acusacion y denuncia calumniosa.

(69) Las injurias al Rey ó inmediato sucesor á la corona se castigan en el art. 164; las hechas al Regente ó Regentes del Reino, padre, madre ó consorte del Rey, Reina viuda ó Infantes de España, en el 165.

Las causadas á los Cuerpos legisladores, hallándose en sesion, etc., se penan en el art. 191; las causadas por las opiniones emitidas en el Senado ó Congreso, en el 192.

(70) Entiéndase cuando no constituya calumnia, pues atendido lo dispuesto en el art. 378, no son árbitros las partes de prescindir de la calificacion legal.

(71) Véase el art. 493, pár. 4.º

En este caso será absuelto el acusado si probare la verdad de las imputaciones.

CAPITULO III.

Disposiciones generales.

Art. 384. Se comete el delito de calumnia ó injuria, no solo manifestamente, sino por medio de alegorías, caricaturas, emblemas ó alusiones.

Art. 385. La calumnia y la injuria se reputarán hechas por escrito y con publicidad, cuando se propagaren por medio de papeles impresos, litografiados ó grabados; por carteles ó pasquines fijados en los sitios públicos; ó por papeles manuscritos comunicados á mas de diez personas.

Art. 386. El acusado de calumnia ó injuria encubierta ó equívoca, que rehusare dar en juicio explicacion satisfactoria acerca de ellas, será castigado como reo de calumnia ó injuria manifiesta.

Art. 387. Los editores de los periódicos en que se hubieren propagado las calumnias ó injurias, insertarán en ellos dentro del término que señalen las leyes, ó el Tribunal en su defecto, la satisfaccion ó sentencia condenatoria, si lo reclamare el ofendido.

Art. 388. Podrán ejercitar la accion de calumnia ó injuria los ascendientes, descendientes, cónyuge y hermanos del difunto agraviado, siempre que la calumnia ó injuria trascendiere á ellos, y en todo caso el heredero.

Art. 389. Procederá asimismo la accion de calumnia ó injuria cuando se hayan hecho por medio de publicaciones en país extranjero.

Art. 390. Nadie podrá deducir accion de calumnia ó injuria causadas en juicio, sin previa licencia del juez ó Tribunal que de él conociere (72).

Art. 391. Nadie será penado por calumnia ó injuria sino á querrela de la parte ofendida, salvo cuando la ofensa se dirija contra la autoridad pública, corporaciones, ó clases determinadas del Estado.

El culpable de injuria ó de calumnia contra particulares quedará relevado de la

pena impuesta mediando perdon de la parte ofendida.

Para los efectos de este artículo se reputan autoridad los Soberanos y Príncipes de naciones amigas ó aliadas, los agentes diplomáticos de las mismas, y los extranjeros con carácter público que, segun los tratados, convenios ó prácticas, debieren comprenderse en esta disposicion.

Para proceder en los casos expresados en el párrafo anterior ha de preceder excitacion especial del Gobierno.

TITULO XII.

DE LOS DELITOS CONTRA EL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS.

CAPITULO I.

Suposicion de partos y usurpaciones del estado civil.

Art. 392. La suposicion de parto y la sustitucion de un niño por otro, serán castigadas con las penas de presidio mayor y multa de 50 á 500 duros.

Las mismas penas se impondrán al que ocultare ó expusiere un hijo legitimo con ánimo de hacerle perder su estado civil.

Art. 393. El facultativo ó empleado público que abusando de su profesion ó cargo cooperare á la ejecucion de alguno de los delitos expresados en el artículo anterior, incurrirá en las penas del mismo, y además en la de inhabilitacion temporal especial.

Art. 394. El que usurpare el estado civil de otro, será castigado con la pena de presidio mayor.

CAPITULO II.

Celebracion de matrimonios ilegales.

Art. 395. El que contrajere segundo ó ulterior matrimonio sin hallarse legitimamente disuelto el anterior, será castigado con la pena de prision mayor.

En igual pena incurrirá el que contrajere matrimonio estando ordenado *in sacris*, ó ligado con voto solemne de castidad.

Art. 396. El que con algun otro impedimento dirimente no dispensable por la Iglesia, contrajere matrimonio, será castigado con la pena de prision menor.

Art. 397. El que contrajere matrimonio mediando algun impedimento dispensable por la Iglesia, será castigado con una multa de 10 á 100 duros.

Si por culpa suya no revalidare el matrimonio previa dispensa en el término que los Tribunales designen, será castigado con la

(72) La facultad concedida á los Tribunales para otorgar ó no licencia para demandar de injuria ó calumnia por hechos imputados en juicio, es puramente discrecional sin ulterior recurso, y en tal concepto deben limitarse á concederla ó á negarla sencillamente y sin fundarse en consideraciones que agraven la imputacion. (Doctrina del Consejo de Estado en un Real decreto-sentencia 16 agosto 1866.)

pena de prision menor, de la cual quedará relevado cuando quiera que se revalide el matrimonio.

Art. 398. El que en un matrimonio ilegal, pero válido segun las disposiciones de la Iglesia, hiciere intervenir al párroco por sorpresa ó engaño, será castigado con la pena de prision correccional.

Si le hiciere intervenir con violencia ó intimidacion, será castigado con la pena de prision menor.

Art. 399. El menor que contrajere matrimonio sin el consentimiento de sus padres, ó de las personas que para el efecto hagan sus veces, será castigado con prision correccional (73).

La pena será de arresto mayor si las personas expresadas aprobaren el matrimonio despues de contraido.

Art. 400. La viuda que casare antes de los 301 dias desde la muerte de su marido, ó antes de su alumbramiento si hubiere quedado en cinta, incurrirá en las penas de arresto mayor y multa de 20 á 200 duros.

En la misma pena incurrirá la mujer cuyo matrimonio se hubiere declarado nulo si casare antes de su alumbramiento ó de haberse cumplido 301 dias despues de su separacion legal (74).

Art. 401. El adoptante que sin prévia dispensa civil contrajere matrimonio con sus hijos ó descendientes adoptivos, será castigado con la pena de arresto mayor.

Art. 402. El tutor ó curador que antes de la aprobacion legal de sus cuentas contrajere matrimonio ó prestare su consentimiento para que lo contraigan sus hijos ó descendientes con la persona que tuviere ó hubiere tenido en guarda, será castigado con las penas de prision correccional y multa de 100 á 1,000 duros.

Art. 403. El eclesiástico que autorizare matrimonio prohibido por la ley civil, ó para el cual haya algun impedimento canónico no dispensable, será castigado con las penas de

confinamiento menor y multa de 50 á 500 duros.

Si el impedimento fuere dispensable, las penas serán destierro y multa de 20 á 200 duros.

En uno y otro caso se le condenará por vía de indemnizacion de perjuicios al abono de los costos de la dispensa mancomunadamente con el cónyuge doloso.

Si hubiere habido buena fé por parte de ambos contrayentes, será condenado por el todo.

Art. 404. En todos los casos de este capítulo, el contrayente doloso será condenado á dotar, segun su posibilidad, á la mujer que hubiere contraido matrimonio de buena fé.

TITULO XIII.

DE LOS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y SEGURIDAD.

CAPITULO I.

Detenciones ilegales.

Art. 405. El que encerrare ó detuviere á otro privándole de su libertad, será castigado con la pena de prision mayor.

En la misma pena incurrirá el que proporcionare lugar para la ejecucion del delito.

Si el culpable diere libertad al encerrado ó detenido dentro de los tres dias de su detencion, sin haber logrado el objeto que se propusiera, ni haberse comenzado el procedimiento, las penas serán las de prision correccional y multa de 20 á 200 duros (75).

Art. 406. El delito de que se trata en el artículo anterior será castigado con la pena de reclusion temporal:

1.º Si el encierro ó detencion hubieren durado mas de veinte dias.

2.º Si se hubieren ejecutado con simulacion de autoridad pública.

3.º Si se hubieren causado lesiones graves á la persona encerrada ó detenida, ó se la hubiere amenazado de muerte.

Art. 407. El que fuera de los casos permitidos por la ley aprehendiere á una persona para presentarla á la autoridad, será castigado con las penas de arresto menor y multa de 5 á 50 duros (76).

(73) No se concibe que este delito pueda ser perseguido sino á instancia ó por denuncia del mismo padre ó de las demás personas que conforme á la ley deben prestar el consentimiento.

(74) Sabemos que en el territorio de la Audiencia de Burgos fué procesada una infeliz por lo dispuesto en este artículo; tambien lo fué el párroco que autorizó el matrimonio. Ambos procedieron con buena fé, pues ni la viuda ni el cura sabian que incurrían en delito. Bueno fuera que disposiciones como esta se hiciesen conocer de una manera mas pública, para que llegasen á noticia de todos

(75) Cuando la detencion ilegal se comete por empleados públicos, hay que estar á lo que se dispone en el tit. VIII, principalmente en los arts. 294 al 298.

(76) Los casos á que se refiere este artículo se expresan en la regla 26 de la Ley provisional para la aplicacion de este Código, y la manera de hacerse la detencion en la 28

CAPITULO II.

Sustraccion de menores.

Art. 408. La sustraccion de un menor de siete años será castigada con la pena de cadena temporal.

Art. 409. En la misma pena incurrirá el que hallándose encargado de la persona de un menor no lo presentare á sus padres ó guardadores, ni diere explicacion satisfactoria acerca de su desaparicion.

Art. 410. El que indujere á un menor de edad, pero mayor de siete años, á que abandone la casa de sus padres, tutores ó encargados de su persona, será castigado con las penas de arresto mayor y multa de 20 á 200 duros.

CAPITULO III.

Abandono de niños.

Art. 411. El abandono de un niño menor de siete años será castigado con las penas de arresto mayor y multa de 10 á 100 duros.

Cuando por las circunstancias del abandono se hubiere puesto en peligro la vida de un niño, será castigado el culpable con la pena de prision correccional á no ser que el hecho constituya otro delito mas grave (77).

Art. 412. El que teniendo á su cargo la crianza ó educacion de un menor lo entregare á un establecimiento público, ó á otra persona sin la anuencia de la que se lo hubiere confiado, ó de la autoridad en su defecto, será castigado con una multa de 20 á 200 duros.

CAPITULO IV.

Disposicion comun á los tres capitulos precedentes.

Art. 413. El que detuviere ilegalmente á cualquiera persona, ó sustrajere un niño menor de siete años, y no diere razon de su paradero, ó acreditare haberlo dejado en libertad, será castigado con la pena de cadena perpétua.

En la misma pena incurrirá el que abandonare un niño menor de siete años, y no acreditare que lo dejó abandonado sin haber cometido otro delito.

(77) El no recoger ó entregar á su familia, ó depositar en lugar seguro á un menor de siete años á quien se encuentre perdido ó abandonado, es falta, segun el párrafo 11 del art. 486.

CAPITULO V.

Allanamiento de morada.

Art. 414. El que entrare en morada ajena contra la voluntad de su morador será castigado con arresto mayor y multa de 10 á 100 duros.

Si el hecho se ejecutare con violencia ó intimidacion, las penas serán prision correccional y multa de 10 á 100 duros (78).

Art. 415. La disposicion del articulo anterior no es aplicable al que entra en la morada ajena para evitar un mal grave á sí mismo, á los moradores, ó á un tercero, ni al que lo hace para prestar algun servicio á la humanidad ó la justicia.

Art. 416. Lo dispuesto en este capítulo no tiene aplicacion respecto de los cafés, tabernas, posadas y demás casas públicas, mientras estuvieren abiertas.

CAPITULO VI.

De las amenazas y coacciones (79).

Art. 417. El que amenazare á otro con causar al mismo ó á su familia en sus personas, honra ó propiedad un mal que constituya delito, será castigado:

1.º Con la pena inmediatamente inferior en grado á la señalada por la ley al delito con que amenazare, si se hubiere hecho la amenaza exigiendo una cantidad ó imponiendo cualquiera otra condicion ilícita, y el culpable hubiere conseguido su propósito, y con la pena inferior en dos grados si no lo hubiere conseguido.

La pena se impondrá en su grado máximo si las amenazas se hicieron por escrito ó por medio de emisario.

2.º Con las penas de arresto mayor y multa de 10 á 100 duros si la amenaza no fuere condicional.

Art. 418. Las amenazas de un mal que no constituya delito, hechas en la forma expresada en el número 1.º del artículo anterior, serán castigadas con la pena de arresto mayor.

Art. 419. En todos los casos de los dos artículos anteriores, se podrá condenar además al amenazador á dar caucion de no ofender al amenazado, y en su defecto á la pena

(78) El allanamiento cometido por empleado público abusando de autoridad se castiga en el art. 299.

(79) Sobre las amenazas hechas á un diputado ó senador etc., véase el núm. 1.º del art. 192.— Hay otras amenazas que se castigan como falta en el núm. 5.º del art. 484, en el 12 del 485 y en el 16 del 494.

de sujecion á la vigilancia de la autoridad.

Art. 420. El que sin estar legítimamente autorizado impidiere á otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, ó le compeliere á ejecutar lo que no quiera, sea justo ó injusto, será castigado con las penas de arresto mayor y multa de 5 á 50 duros (80).

Art. 421. El que con violencia se apodere de una cosa perteneciente á su deudor para hacerse pago con ella, será castigado con las penas de arresto menor y una multa equivalente al valor de la cosa; pero que en ningun caso bajará de 15 duros.

CAPITULO VII.

Descubrimiento y revelacion de secretos.

Art. 422. El que para descubrir los secretos de otro se apoderare de sus papeles ó cartas, y divulgare aquellos, será castigado con las penas de prision correccional y multa de 20 á 200 duros.

Si no los divulgare, las penas serán arresto mayor y multa de 10 á 100 duros (81).

Esta disposicion no es aplicable á los maridos, padres, tutores ó quienes hagan sus veces, en cuanto á los papeles ó cartas de sus mujeres, hijos ó menores que se hallen bajo su dependencia.

Art. 423. El administrador, dependiente ó criado que en tal concepto supiere los secretos de su principal y los divulgare, será castigado con las penas de arresto mayor y multa de 20 á 200 duros.

Art. 424. El encargado, empleado ú obrero de una fábrica ú otro establecimiento industrial que con perjuicio del dueño descubriere los secretos de su industria, será castigado con las penas de prision correccional y multa de 10 á 100 duros.

TITULO XIV.

DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD.

CAPITULO I.

De los robos.

SECCION PRIMERA.

Del robo con violencia en las personas (82).

Art. 425. El culpable de robo con vio-

(80) Consultar lo dispuesto en el art. 430.

(81) Cuando este delito se cometa por empleado público abusando de su cargo, hay que estar á lo dispuesto en el art. 283, teniendo presentes del mismo modo el 282 y 284.—El descubrimiento de secretos de un litigante hecha por su abogado ó procurador se castiga en el artículo 273.

(82) Aunque en lo relativo á las penas para

lencia ó intimidacion en las personas, será castigado con la pena de cadena perpétua á la de muerte:

1.º Cuando con motivo ú ocasion del robo resultare homicidio.

2.º Cuando fuere acompañado de violacion ó mutilacion causada de propósito.

3.º Cuando se cometiere en despoblado y en cuadrilla, si con motivo ú ocasion de este delito se causare alguna de las lesiones penadas en el núm. 1.º del art. 343, ó el robado fuere detenido bajo rescate ó por mas de un día.

4.º En todo caso, el jefe de la cuadrilla armada total ó parcialmente.

Hay cuadrilla cuando concurren á un robo mas de tres malhechores.

Art. 426. Cuando en el robo concurren alguna de las circunstancias señaladas en el núm. 3.º del artículo anterior, y no se hubiere cometido en despoblado y en cuadrilla, será castigado el culpable con la pena de cadena temporal en su grado medio á cadena perpétua.

Art. 427. Fuera de los casos expresados en los artículos precedentes, el robo ejecutado con violencia ó intimidacion graves en las personas, se castigará con la pena de cadena temporal: cuando no hubiere gravedad en la violencia ó intimidacion, la pena será la de presidio mayor.

Art. 428. Los malhechores presentes á la ejecucion de un robo en despoblado y en cuadrilla, serán castigados como autores de cualquiera de los atentados cometidos por ella, si no constare que procuraron impedirlos.

Se presume haber estado presente á los atentados cometidos por una cuadrilla el malhechor que anda habitualmente en ella, salvo la prueba en contrario.

Art. 429. La tentativa de robo, acompañada de cualquiera de los delitos expresados en el art. 425, será castigada como el robo consumado.

Art. 430. El que para defraudar á otro le obligare con violencia ó intimidacion á suscribir, otorgar ó entregar una escritura pública ó documento, será castigado como culpable de robo con las penas respectivamente señaladas en este capítulo.

toda clase de robos, rigen las disposiciones de este Código, el *procedimiento* en los casos de robo en cuadrilla, ya en despoblado, ya en poblado, es determinado en la ley de 27-28 de abril de 1821.

SECCION SEGUNDA.

Del robo con fuerza en las cosas (83).

Art. 431. Los malhechore que llevando armas robaren en iglesia ó lugar sagrado, incurrirán en la pena de presidio mayor en su grado medio á cadena temporal en igual grado, si cometieren el delito:

1.º Con escalamiento.

Hay escalamiento cuando se entra por una vía que no sea la destinada al efecto.

2.º Con rompimiento de pared ó techo, ó fractura de puertas ó ventanas.

3.º Haciendo uso de llaves falsas, ganzúas ú otros instrumentos semejantes para entrar en el lugar del robo.

4.º Introduciéndose en el lugar del robo á favor de nombres supuestos ó simulacion de autoridad.

5.º En despoblado y en cuadrilla.

En caso de reincidencia, serán castigados con la pena de cadena temporal en su grado medio máximo.

En las mismas penas incurrirán respectivamente los que con iguales circunstancias robaren en lugar habitado.

Cuando en este último caso no mediare reincidencia y el valor de los objetos robados no llegare á 100 duros, la pena será la de presidio mayor.

Art. 432. Los que sin armas robaren en iglesia ó lugar habitado con alguna de las circunstancias del artículo anterior, serán castigados con la pena de presidio menor en su grado máximo á presidio mayor en su grado medio (84).

Art. 433. El robo cometido con armas ó sin ellas en lugar no habitado, se castigará con la pena de presidio menor en su grado máximo á presidio mayor en su grado medio, siempre que concorra alguna de las circunstancias siguientes:

1.ª Escalamiento:

2.ª Rompimiento de paredes, techos, puertas ó ventanas.

3.ª Fractura de puertas interiores, armarios, arcas ú otra clase de muebles ú objetos cerrados ó sellados.

4.ª La de haber hecho uso de llaves falsas, ganzúas ú otros instrumentos semejantes para entrar en el lugar del robo.

Art. 434. En los casos del artículo ante-

rior, se bajará en un grado la pena respectivamente señalada, cuando el valor del robo no excediere de 100 duros, á no ser que con él se causare la ruina del ofendido.

El robo que no excediere de 5 duros se castigará con presidio correccional.

Art. 435. En los casos de los dos artículos anteriores, el robo de objetos destinados al culto, cometidos en lugar sagrado ó en acto religioso, será castigado con pena de presidio mayor.

CAPITULO II.

De los hurtos.

Art. 436. El que tuviere en su poder llaves falsas, ganzúas ú otros instrumentos destinados conocidamente para ejecutar el delito de robo, y no diere descargo suficiente sobre su adquisicion ó conservacion, será castigado con la pena de presidio correccional.

En igual pena incurrirán los que fabriquen ó expendan dichos instrumentos.

Art. 437. Son reos de hurto:

1.º Los que con ánimo de lucrarse, y sin violencia ó intimidacion en las personas ni fuerza en las cosas, toman las cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño.

2.º Los que con ánimo de lucrarse negaren haber recibido dinero ú otra cosa mueble que se les hubiere entregado en préstamo, depósito ó por otro título que obligue á devolucion ó restitution.

3.º Los dañadores que sustraigan ó utilicen los frutos ú objetos del daño causado, cualquiera que sea su importancia, salvo los casos previstos en los artículos 487 y 489, en los números 22, 24 y 26 del artículo 495 y en los artículos 496 y 498.

Art. 438. Los reos de hurto serán castigados:

1.º Con la pena de presidio menor, si el valor de la cosa hurtada excediere de 500 duros.

2.º Con pena de presidio correccional, si no excediere de 500 duros y pasare de 5.

3.º Con arresto mayor á presidio correccional en su grado mínimo si no excediere de 5 duros.

Art. 439. El hurto se castigará con las penas inmediatamente superiores en grado á las respectivamente señaladas en el artículo anterior:

1.º Si fuere de cosas destinadas al culto, y se cometiere en lugar sagrado ó en acto religioso.

2.º Si fuere doméstico, ó interviniere grave abuso de confianza.

3.º Si el reo fuere reincidente en la misma ó semejante especie de delito.

(83) Véase la nota anterior.

(84) «Es y se entiende *lugar habitado* el que sirve de morada á una persona, aunque el morador falte de él accidental y momentáneamente. (R. O. de 13 de enero de 1864).

CAPITULO III.

De la usurpacion.

Art. 440. Al que con violencia en las personas ocupare una cosa inmueble ó usurpare un derecho real de ajena pertenencia, se impondrá además de las penas en que incurra por las violencias que causare, una multa del 50 al 100 por 100 de la utilidad que haya reportado, no bajando nunca de 20 duros.

Si la utilidad no fuere estimable, se impondrá la multa de 20 á 200 duros.

Art. 441. En el caso del artículo anterior, si el delito se cometiere sin violencia en las personas, la multa será del 25 al 50 por 100, no bajando nunca de 15 duros.

Si la utilidad no fuere estimable, se impondrá una multa de 15 á 100 duros.

Art. 442. El que destruyere ó alterare términos ó lindes de los pueblos ó heredades, ó cualquiera clase de señales destinadas á fijar los límites de predios contiguos, será castigado con una multa del 50 al 100 por 100 de la utilidad que haya reportado ó debido reportar por ellos.

Si no fuere estimable la utilidad, se le impondrá una multa de 20 á 200 duros.

CAPITULO IV.

Defraudaciones.

SECCION PRIMERA.

Alzamiento, quiebra é insolvencia punibles.

Art. 443. El que se alzare con sus bienes en perjuicio de sus acreedores, será castigado:

1.º Con la pena de presidio mayor, si fuere persona dedicada habitualmente al comercio.

2.º Con la de presidio menor si no lo fuere.

Art. 444. El quebrado que fuere declarado en el caso de insolvencia fraudulenta con arreglo al Código de comercio, será castigado con la pena de presidio menor.

Art. 445. El quebrado que fuere declarado en el caso de insolvencia culpable por alguno de los motivos que se designan en el art. 1005 del Código de comercio, será castigado con la pena de prision correccional.

Art. 446. En los casos de los dos artículos precedentes, si la pérdida ocasionada á los acreedores no llegare al 40 por 100 de sus respectivos créditos, se impondrán al quebrado las penas inmediatamente inferiores en grado á las señaladas en dichos artículos.

Cuando la pérdida exceda de 40 por 100, se impondrán en su grado máximo las penas señaladas en los dos mencionados artículos.

Art. 447. Las penas señaladas en los tres artículos anteriores, son aplicables á los comerciantes, aunque no estén matriculados, si ejercen habitualmente el comercio.

Art. 448. El deudor no dedicado al comercio que se constituya en insolvencia por ocultacion ó enajenacion maliciosa de sus bienes, será castigado:

1.º Con la pena de arresto mayor si la deuda excede de 5 duros y no pasa de 100.

2.º Con la de prision correccional si excediere de 100 duros.

SECCION SEGUNDA.

Estafas y otros engaños.

Art. 449. El que defraudare á otro en la sustancia, cantidad ó calidad de las cosas que le entregare en virtud de un título obligatorio, será castigado:

1.º Con la pena de arresto mayor si la defraudacion no excediere de 20 duros.

2.º Con la de prision correccional excediendo de 20 duros y no pasando de 500.

3.º Con la de prision menor excediendo de 500 duros.

Art. 450. Incurrirá en las penas del artículo anterior el que defraudare á otros usando de nombre fingido, atribuyéndose poder, influencia ó cualidades supuestas, aparentando bienes, crédito, comision, empresa ó negociaciones imaginarias, ó valiéndose de cualquier otro engaño semejante que no sea de los expresados en los arts. 251 y 252 (85).

Art. 451. Las penas señaladas en el artículo 449 se impondrán en su grado máximo:

1.º A los plateros y joyeros que cometen defraudacion alterando en su calidad, ley ó peso, los objetos relativos á su arte ó comercio.

2.º A los traficantes que defraudaren usando de pesos ó medidas falsas en el despacho de los objetos de su tráfico.

3.º A los que defraudaren con pretexto de supuestas remuneraciones á empleados públicos, sin perjuicio de la accion de calumnia que á estos corresponda (86).

(85) Ocultar su verdadero nombre y apellido á la autoridad ó persona que tenga derecho á exigir que lo manifieste, es falta, segun el párf. 9.º del art. 494

(86) La simple tenencia de medidas ó pesos falsos, y el uso de los no contrastados por parte de los traficantes son faltas, segun los párf. 1.º y 2.º del art. 484. Ver tambien el R. D. de 22 de setiembre de 1848.

Art. 452. Son aplicables las penas señaladas en el art. 449:

1.º A los que en perjuicio de otro se apropiaren ó distrajeren dinero, efectos ó cualquiera otra cosa mueble que hubieren recibido en depósito, comision ó administracion, ó por otro título que produzca obligacion de entregarla ó devolverla.

2.º A los que cometieren alguna defraudacion abusando de firma de otro en blanco, y extendiendo con ella algun documento en perjuicio del mismo ó de un tercero.

3.º A los que defraudaren haciendo suscribir á otro con engaño algun documento.

4.º A los que en el juego se valieren de fraude para asegurar la suerte.

Las penas se impondrán en su grado máximo en el caso de depósito miserable ó necesario (87).

Art. 453. Son tambien aplicables las penas señaladas en el art. 449 á los que cometieren defraudacion, sustrayendo, ocultando ó inutilizando en todo ó en parte algun proceso, expediente, documento ú otro papel de cualquiera clase.

Cuando se cometiere el mismo delito sin ánimo de defraudar, se impondrá á sus autores una multa de 20 á 200 duros.

Art. 454. Los delitos expresados en los cinco artículos anteriores serán castigados con la pena respectivamente superior en un grado si los culpables fueren reincidentes en el mismo ó semejante especie de delito.

Art. 455. El que fingiéndose dueño de una cosa la enajenare, arrendare gravare, ó empeñare, será castigado con una multa del tanto al triplo del importe del perjuicio que hubiere irrogado.

En la misma pena incurrirá el que dispusiere de una cosa como libre sabiendo que estaba gravada.

Art. 456. Incurrirán en las penas señaladas en el artículo precedente:

1.º El dueño de una cosa mueble que la sustrajere de quien la tenga legítimamente en su poder con perjuicio del mismo ó de un tercero.

2.º El que otorgare en perjuicio de otro un contrato simulado.

Art. 457. Incurrirán asimismo en las penas señaladas en el art. 455, los que cometieren alguna defraudacion de la propiedad literaria ó industrial.

Los ejemplares, máquinas ú objetos contrahechos, introducidos ó expendidos fraudulentamente, se aplicarán al perjudicado, y tambien las láminas ó utensilios empleados

para la ejecucion del fraude, cuando solo pudiesen usarse para cometerle.

Si no pudiesen tener efecto esta disposicion, se impondrá al culpable la multa del duplo del valor de la defraudacion, que se aplicará al perjudicado (88).

Art. 458. El que abusando de la impericia ó pasiones de un menor le hiciere otorgar en su perjuicio alguna obligacion, descargo ó trasmision de derecho por razon de préstamo de dinero, créditos ú otra cosa mueble, bien aparezca el préstamo claramente, bien se haya encubierto bajo otra forma, será castigado con las penas de arresto mayor y multa del 10 al 50 por 100 del valor de la obligacion que hubiere otorgado el menor.

Art. 459. El que defraudare ó perjudicare á otro usando de cualquier engaño que no se halle expresado en los artículos anteriores de esta seccion, será castigado con una multa del tanto al duplo del perjuicio que irrogare: en caso de reincidencia, con la del duplo y arresto mayor en su grado medio al máximo (89).

CAPITULO V.

De las maquinaciones para alterar el precio de las cosas.

Art. 460. Los que solicitaren dádiva ó promesa para no tomar parte en una subasta pública, y los que intentaren alejar de ella á los postores por medio de amenazas, dádivas, promesas ó cualquier otro artificio con el fin de alterar el precio del remate, serán castigados con una multa del 10 al 50 por 100 del valor de la cosa subastada, á no merecerla mayor por la amenaza ú otros medios que emplearen.

Art. 461. Los que se coligaren con el fin de encarecer ó abaratar abusivamente el precio del trabajo, ó regular sus condiciones, serán castigados siempre que la coligacion hubiere comenzado á ejecutarse, con

(88) Sobre propiedad literaria debe tenerse presente la ley de 40 de junio de 1847, inserta en *Propiedad literaria*. Allí se establecen los derechos de los autores, su duracion y efectos, y se señalan las penas en que incurren los defraudadores.

Sobre propiedad industrial deben consultarse el R. D. de 20 de noviembre de 1850 que se refiere á las defraudaciones de marcas y distintivos de fábricas y productos industriales y el R. D. de 27 de marzo de 1826 sobre privilegios de industria.

(89) No confundir este delito con la falta que castiga la segunda parte del art. 482.

las penas de arresto mayor y multa de 10 á 100 duros.

Si la coligacion se formare en una poblacion menor de 10,000 almas, las penas serán arresto menor y multa de 5 á 50 duros.

Las penas se impondrán en ambos casos en su grado máximo á los jefes y promovedores de la coligacion, y á los que para asegurar su éxito emplearen violencias ó amenazas, á no ser que por ellas merecieren mayor pena.

Art. 462. Los que esparciendo falsos rumores ó usando de cualquier otro artificio consiguieren alterar los precios naturales que resultarian de la libre concurrencia en las mercancías, acciones, rentas públicas ó privadas, ó cualesquiera otras cosas que fueren objeto de contratacion, serán castigados con las penas de arresto mayor y multa de 100 á 1,000 duros.

Art. 463. Cuando el fraude expresado en el artículo anterior recayere sobre mantenimientos ú otros objetos de primera necesidad, además de las penas señaladas en el mismo, se impondrá la del comiso de los géneros que fueren objeto del fraude.

Para la imposicion de estas penas bastará que la coligacion haya comenzado á ejecutarse.

CAPITULO VI.

De las casas de préstamos sobre prendas.

Art. 464. El que sin licencia de la autoridad se dedicare habitualmente á prestar sobre prendas ú otras seguridades, será castigado con la multa de 20 á 200 duros.

Art. 465. Será castigado con la multa de 100 á 1,000 duros el que hallándose dedicado con licencia ó sin ella á la industria de que se habla en el artículo anterior, no llevare libros con la debida formalidad, asentando en ellos sin claros ni entrerenglonados las cantidades prestadas, los plazos ó intereses; los nombres y domicilio de los que las reciban, la naturaleza, calidad y valor de los objetos dados en prenda, y las demás circunstancias que exijan los reglamentos (90).

Las cantidades prestadas caerán en comiso.

Art. 466. El prestamista que no diere resguardo de la prenda ó seguridad recibida, será castigado con una multa del duplo al quintuplo de su valor, y la cantidad que hubiere prestado caerá en comiso.

(90) Aunque no conocemos reglamento especial sobre el asunto de este capítulo, se vé bien que sus disposiciones son de suyo, además de penales, reglamentarias de precisa observancia.

CAPITULO VII.

Del incendio y otros estragos.

Art. 467. El incendio será castigado con la pena de cadena perpétua á la de muerte:

1.º Cuando se ejecutare en cualquier edificio, buque ó lugar habitados.

2.º Cuando se ejecutare en arsenal, astillero, almacén de pólvora, parque de artillería ó archivo general del Estado.

Art. 468. Se castigará el incendio con la pena de cadena temporal:

1.º Cuando se ejecutare en cualquier edificio ó lugar destinado á servir de morada, que no estuviere actualmente habitado.

2.º Cuando se ejecutare dentro de poblado, aun cuando fuere en un edificio ó lugar no destinado ordinariamente á la habitacion.

3.º Cuando se ejecutare en mieses, pastos, montes ó plantíos.

Art. 469. El incendio de objetos no comprendidos en los dos artículos anteriores será castigado:

1.º Con la pena de presidio correccional, no excediendo de 10 duros el daño causado á tercero.

2.º Con la pena de presidio menor, pasando de 10 y no excediendo de 500 duros.

3.º Con la de presidio mayor excediendo de 500 duros.

Art. 470. En caso de aplicarse el incendio á chozas, pajar ó cobertizos deshabitados, ó á cualquier otro objeto cuyo valor no excediere de 50 duros, en tiempo y con circunstancias que manifiestamente excluyan todo peligro de propagacion, el culpable no incurrirá en las penas señaladas en este capítulo, pero sí en las que mereciere por el daño que causare con arreglo á las disposiciones del capítulo siguiente.

Art. 471. Incurrirán respectivamente en las penas de este capítulo los que causen estragos por medio de sumersion ó varamiento de nave, inundacion, explosion de una mina ó máquina de vapor, y en general por la aplicacion de cualquier otro agente ó medio de destruccion tan poderoso como los expresados.

Art. 472. El que fuere aprehendido con mecha ó preparativo conocidamente dispuesto para incendiar ó causar alguno de los estragos expresados en este capítulo, será castigado con la pena de presidio menor.

Art. 473. El culpable de incendio ó estragos no se eximirá de las penas impuestas en este capítulo, aunque para cometer el delito hubiere incendiado ó destruido bienes de su pertenencia.

CAPITULO VIII.

De los daños.

Art. 474. Son reos de daño, y están sujetos á las penas de este capítulo, los que en la propiedad ajena causaren alguno que no se halle comprendido en el anterior.

Art. 475. Serán castigados con la pena de prision menor los que causaren daño cuyo importe exceda de 500 duros:

1.º Con la mira de impedir el libre ejercicio de la autoridad ó en venganza de sus determinaciones, bien se cometiere el delito contra empleados públicos, bien contra particulares que como testigos ó de cualquiera otra manera hayan contribuido ó puedan contribuir á la ejecucion ó aplicacion de las leyes.

2.º Produciendo por cualquier medio, infeccion ó contagio en ganados.

3.º Empleando sustancias venenosas ó corrosivas.

4.º En cuadrilla y en despoblado.

5.º En un archivo ó registro.

6.º En puentes, caminos, paseos ú otros objetos de uso público ó comunal.

7.º Arruinando al perjudicado.

Art. 476. El que con alguna de las circunstancias expresadas en el artículo anterior causare daño cuyo importe exceda de 5 duros, pero que no pase de 500, será castigado con la pena de prision correccional.

Art. 477. El incendio ó destruccion de papeles ó documentos cuyo valor fuere estimable, se castigará con arreglo á las disposiciones de este capítulo.

Si no fuere estimable, con las penas de prision correccional y multa de 50 á 500 duros.

Lo dispuesto en este artículo se entiende cuando el hecho no constituya otro delito mas grave.

Art. 478. Los daños no comprendidos en los artículos anteriores cuyo importe pase de 10 duros, serán castigados con la multa del tanto al triplo de la cuantía á que ascendieren, no bajando nunca de 15 duros.

Esta determinacion no es aplicable á los daños causados por el ganado, y los demás que deben calificarse de faltas con arreglo á lo que se establece en el lib. III.

Las disposiciones del presente capítulo solo tendrán lugar cuando al hecho, considerado como delito, no corresponda mayor pena al tenor de lo determinado en el art. 437 (91).

(91) Hay que distinguir los daños que se comprenden en todo este capítulo de los que

CAPITULO IX.

Disposiciones generales.

Art. 479. Están exentos de responsabilidad criminal y sujetos únicamente á la civil por los hurtos, defraudaciones, ó daños que reciprocamente se causaren:

1.º Los cónyuges, ascendientes y descendientes ó afines en la misma línea.

2.º El consorte viudo respecto de las cosas de la pertenencia de su difunto cónyuge, mientras no hayan pasado á poder de otro.

3.º Los hermanos y cuñados si vivieren juntos.

La excepcion de este artículo no es aplicable á los extraños que participen del delito.

TITULO XV.

DE LA IMPRUDENCIA TEMERARIA.

Art. 480. El que por imprudencia temeraria ejecutare un hecho, que si mediase malicia constituiria un delito grave, será castigado con la prision correccional; y con el arresto mayor de uno á tres meses, si constituyera un delito menos grave.

Estas mismas penas se impondrán respectivamente al que con infraccion de los reglamentos cometiere un delito por simple imprudencia ó negligencia.

En la aplicacion de estas penas procederán los Tribunales segun su prudente arbitrio, sin sujetarse á las reglas prescritas en el art. 74.

Lo dispuesto en el presente artículo no tendrá lugar cuando la pena señalada al delito sea menor que las contenidas en el párrafo 1.º del mismo, en cuyo caso los Tribunales aplicarán la inmediata á la que corresponda en el grado que estimen conveniente (92).

por no llegar á cinco duros, se califican como faltas, que son los siguientes:

Los causados en monumentos de ornato y utilidad pública, en paseos, parques, arboledas, etc., se castigan en los núms. 2.º, y 3.º del art. 485.

Destruyendo choza, albergue, vallado, etc., en el núm. 13 del mismo artículo.

En aguas de otro, aprovechándolas ó distrayéndolas de su curso, en los arts. 489 y 498.

En montes y arboledas, en los arts. 490, 491 y 499 y los causados por ganados, en los artículos 487, 488, 496 y 497.—V. MONTES.

—Los causados por otros medios: en el artículo 492.

(92) Cuando la imprudencia es simple, sin infraccion de los reglamentos, se castiga como falta por el párrafo 5.º del art. 493.

LIBRO TERCERO.

De las faltas (93).

TITULO PRIMERO.

Art. 481. Serán castigados con las penas de arresto de uno á diez dias, multa de 3 á 15 duros y reprension:

1.º El que blasfemare públicamente de Dios, de la Virgen, de los Santos ó de las cosas sagradas.

2.º El que en la misma forma con dichos, con hechos ó por medio de estampas, dibujos ó figuras cometiere irreverencia contra las cosas sagradas ó contra los dogmas de la religion sin llegar al escarnio de que habla el art. 133 (94).

3.º Los que en menor escala que la determinada en dicho artículo cometieren simple irreverencia en los templos ó á las puertas de ellos, y los que en las mismas inquieten, denuesten ó zahieran á los fieles que concurren á los actos religiosos.

4.º El que públicamente maldijere al Rey, ó con otras expresiones cometiere desacato contra su sagrada persona.

(93) Las faltas pueden clasificarse de este modo:

Faltas contra la religion: núms. 1, 2 y 3 del art. 481.

—*Contra las personas;* núms. 1 al 7, artículo 483; 4, 5 y 6, art. 484; 11 y 12, art. 485; 11 y 12, art. 486; 2 y 4, art. 493; 10, art. 494.

—*Contra la propiedad;* núms. 1 y 2 de la 2.ª parte, art. 482; 1, 2 y 7, art. 484; 13, art. 485; 1, 2, 3 y 4, art. 487; arts. 488 á 492; 21 á 25, arts. 495 y 496; y 2 del 499.

—*Contra las buenas costumbres y la moral;* núms. 1 y 2, art. 482, y 12, art. 495.

—*Contra el orden público;* núm. 4, art. 481; 14, art. 485; 4 y 5, art. 486; art. 493; 16, artículo 494.

—*Contra los bandos de policia, leyes y reglamentos especiales;* núm. 3, art. 484; 1, 2, 3, 6, 7, 8 y 9, art. 485; 1, 2, 3, 6 á 10, art. 486; 3, art. 493; 4, 5, 7 y 8, art. 494; 2, 5, 7, 10, 11, 13 al 20, 26 y 27, art. 495.

—*Varias;* núms. 4, 5 y 10, art. 485; 5, art. 493; 2, 3 y 9, art. 494; 1, 3, 4, 6, 8 y 9, art. 495.

(94) Esta disposicion no es aplicable al hecho de trabajar en dias festivos, ni existe en el Código disposicion expresa aplicable á esta falta, pudiendo por lo tanto castigarse gubernativamente los Alcaldes. (R. D. de 28 de diciembre de 1864 decidiendo á favor de la Administracion la competencia entre el Gobernador de Valladolid y el Juez de Villalon.)

Art. 482. Incurren en las penas de uno á cinco dias de arresto de 1 á 10 duros de multa y reprension:

1.º Los que públicamente ofendieren al pudor con acciones ó dichos deshonestos.

2.º El que exponga al público, y el que, con publicidad ó sin ella, expendá estampas, dibujos ó figuras que ofendan al pudor y á las buenas costumbres.

Los jueces y Tribunales calificarán prudencialmente cuando hay publicidad en los casos del presente artículo y del anterior segun las circunstancias del lugar, tiempo y personas y escándalo producido por la falta.

Incurre tambien en la pena del artículo anterior:

1.º El que defraudare al público en la venta de mantenimientos, ya sea en calidad, ya en cantidad, por valor que no exceda de 5 duros. En este último caso se impondrá alternativamente el arresto ó la multa, y siempre la reprension: en el de reincidencia se aplicarán conjuntamente estas tres penas (95).

2.º El traficante á quien se aprehendieren mantenimientos que no tengan el peso, medida ó calidad que corresponda.

Art. 483. Serán castigados con las penas de tres á quince dias de arresto y reprension:

1.º El marido que maltratare á su mujer no causándola lesiones de la comprendidas en el núm. 4.º del art. 484, y la mujer des-

(95) El Consejo Real decidiendo (R. D. de 1.º mayo de 1850) una competencia entre el intendente de rentas de Cádiz y el Alcalde de aquella capital sobre conocimiento del hecho que el Regidor de mercados le habia denunciado consistente en haber hallado faltas de peso las porciones de sal que los freidores de pescado habian comprado en el alfolí, vino á declarar con vista de los arts. 22, 482, núm. 1.º del segundo período, y 484 núm. 1.º del Código penal, que correspondia á la Administracion el conocimiento, porque ni la sal se reputa como mantenimiento, ni los agentes oficiales que tiene la Hacienda para su venta, se consideran tampoco traficantes. Respetando nosotros esta decision, que nunca consideramos acertada en los términos con que fué dictada, debemos hacer mérito de otra para nosotros de mas solidez, con que se resolvió que el uso de medidas falsas para la expendicion de sal en el estanco público constituye una falta de las penadas en el libro III de dicho Código, y que por lo mismo al Alcalde compete su conocimiento con apelacion al juez de primera instancia, aunque el estanquero gozaba además fuero militar por ser cabo del batallon provincial de Albacete. Esta decision es del Tribunal Supremo de Justicia, dictada en 14 de abril de 1860, y confirma mas y mas la doctrina de que en materia de faltas penadas en el Código no se reconocen fueros privilegiados.

obediente á su marido que le provocare ó injuriare.

2.º El cónyuge que escandalizare en sus discusiones domésticas, despues de haber sido amonestado por la autoridad.

3.º Los padres de familia que abandonen á sus hijos, no procurándoles la educacion que permiten y requieren su clase y facultades.

4.º Los hijos de familia que falten al respeto y sumision debida á sus padres.

5.º Los pupilos que cometen igual falta hácia sus tutores.

6.º Los subordinados del órden civil respecto de sus jefes y superiores cuando el hecho no tuviere señalada mayor pena por este Código ó leyes especiales.

7.º Los particulares respecto de cualquier funcionario revestido de autoridad pública, aun cuando no sea en ejercicio de sus funciones, con tal que en este caso se anuncie ó dé á conocer como tal.

En los casos de que habla el presente artículo y los dos precedentes, la reprension será privada.

Ar. 484. Serán castigados con las penas de arresto de cinco á quince dias y multa de 5 á 15 duros:

1.º Los traficantes que tuvieren medidas ó pesos falsos, aunque con ellos no hubieren defraudado (93).

2.º Los que usaren en su tráfico medidas ó pesos no contrastados.

3.º Los que en la exposicion de niños quebrantaren los reglamentos.

4.º Los que causaren lesion que impida al ofendido trabajar de uno á cuatro dias, ó haga indispensable la asistencia del facultativo por el mismo tiempo (94).

5.º Los que amenazaren á otros con armas blancas ó de fuego, y los que riñendo con otros las sacaren, como no sea con motivo justo.

6.º Los que corrieren carruajes ó caballerías con peligro de las personas, haciéndolo de noche ó en paraje concurrido.

7.º Los que con violencia entraren á cazar ó pescar en lugar cercado ó vedado.

Art. 485. Se castigarán con la pena de

arresto de cinco á quince dias, ó una multa de 5 á 15 duros:

1.º Los que en caminos públicos, calles, plazas, ferias ó sitios semejantes de reunion, establecieren rifas ó juegos de envite ó azar.

Lo dispuesto en este número se entiende sin perjuicio de lo determinado para casos de mayor gravedad, al prudente juicio de los Tribunales, en el art. 267.

2.º Los que apedrearen, mancharen ó deterioraren estátuas, pinturas ú otros monumentos de ornato ó utilidad pública, aunque pertenezcan á particulares.

3.º Los que causaren daño que no exceda de 5 duros en paseos, parques, arboledas ú otros sitios de recreo ó esparcimientos de las poblaciones, ó en objetos de pública utilidad.

Lo dispuesto en este número y en el anterior se entiende sin perjuicio de lo determinado para su caso en el art. 437.

4.º Los que ejercieren sin título actos de una profesion que lo exija (95).

5.º Los que usaren de cruces ú otras condecoraciones ó distintivos que no les correspondan.

6.º Los que infringieren las reglas higiénicas ó de salubridad acordadas por la autoridad en tiempo de epidemia ó contagio.

7.º Los que infringieren los reglamentos sanitarios sobre epidemias de animales, extirpacion de langosta ú otra plaga semejante.

8.º Los que infringieren los reglamentos de policia en lo concerniente á mujeres públicas.

9.º Los que despacharen medicamentos sin autorizacion competente.

10. Los facultativos que notando en una persona ó en un cadáver señales de envenenamiento ó de otro delito grave, no dieren parte á la autoridad oportunamente.

11. Los que causaren lesiones con palo, piedra ú otro cuerpo extraño, cuando las lesiones no impidan trabajar ni hagan indispensable la asistencia del facultativo.

12. El que de palabra y en el calor de la ira amenazare á otro con causarle un mal que constituya delito, y se mostrare luego arrepentido.

13. Los que destruyeren ó destrozaren choza, albergue, cerca, vallado ú otra defensa de heredad ajena, no excediendo el daño de 5 duros.

14. Los que excitaren ó dirigieren cerradas ú otras reuniones tumultuosas en

(93) Téngase presente el art. 482 y su nota; y si la defraudacion excede de 5 duros, el 481.

(94) Sobre esta falta y sobre la del núm. 41 del art. 485, como en todos los demás hechos que son delitos ó faltas segun su mayor ó menor entidad ó tiempo, deben procurar los Alcaldes ponerse á cubierto con la declaracion explícita y terminante de los facultativos ó peritos, haciendo que firmen el acta.

(95) V. CURANDEROS ó intrusos en la ciencia de curar, y TÍTULOS PROFESIONALES.

ofensa de alguna persona ó del sosiego de las poblaciones.

Art. 486. Serán castigados con una multa de 5 á 15 duros:

1.º Los que faltando á las órdenes de la autoridad descuidaren reparar ó demoler edificios ruinosos.

2.º Los que infringieren las reglas de seguridad concernientes al depósito de materiales y apertura de pozos ó excavaciones.

3.º Los que dieren espectáculos públicos sin licencia de la autoridad, ó traspasaran la que se les hubiere concedido.

4.º Los que por quebrantar los reglamentos sobre espectáculos públicos ocasionaren algun desórden.

5.º Los que asistiendo á un espectáculo público provocaren algun desórden ó tomaran parte en él.

6.º Los farmacéuticos que despacharen medicamentos en virtud de recetas que no se hallen debidamente autorizadas.

7.º Los farmacéuticos que despacharen medicamentos de mala calidad ó sustituyeren unos por otros.

8.º Los que abrieren establecimientos sin licencia de la autoridad cuando sea necesaria.

9.º Los dueños ó encargados de fondas, cafés, confiterías ú otros establecimientos en que se despachen comestibles ó bebidas, que faltaren á los reglamentos de policía relativos á la conservacion ó uso de vasijas ó útiles destinados para el servicio.

10. Los que infringieren los reglamentos ó disposiciones de la autoridad sobre la custodia de materias inflamables ó corrosivas, ó productos químicos que puedan causar estragos.

11. Los que encontrando perdido ó abandonado un menor de siete años, no lo entregaren á su familia ó no lo recogieren ó depositaren en lugar seguro, dando cuenta á la autoridad en los dos últimos casos.

12. Los que no socorrieren ó auxiliaren á una persona que encontraren en desamparo herida, maltratada ó en peligro de perecer, cuando pudieren hacerlo sin detrimento propio.

Art. 487. El dueño de ganados que entraren en heredad ajena, y causaren daño que exceda de 2 duros, será castigado con la multa, por cada cabeza de ganado:

1.º De 3 á 9 rs. si fuere vacuno.

2.º De 2 á 6 si fuere caballar, mular ó asnal.

3.º De 1 á 3 si fuere cabrío y la heredad tuviere arbolado.

4.º Del tanto del daño á un tercio mas si fuere lanar, ó de otra especie no comprendida en los números anteriores.

Esto mismo se observará si el ganado fuere cabrío y la heredad no tuviere arbolado (96).

Art. 488. Por el simple hecho de entrar en sitio vedado ó heredad ajena, cuando no sea permitido, veinte ó mas cabezas de ganado, se impondrá al dueño de estas una multa equivalente á la mitad de la determinada en el artículo anterior.

En el caso del núm. 4.º del artículo anterior, se observará lo dispuesto en el 496, cualquiera que sea el número de cabezas de ganado (96).

Art. 489. El que aprovechando aguas de otro, ó distrayéndolas de su curso causare daño que exceda de 2 duros y no pase de 25, será castigado con la multa del tanto al triplo del daño causado.

Art. 490. El que cortare árboles en heredad ajena causando daño que no exceda de 25 duros, será castigado con una multa desde el tanto al triplo del daño.

Art. 491. El que entrare en monte ajeno, y, sin talar árboles, cortare ramaje ó hiciere leña causando daño que exceda de 2 duros y no pase de 25, será castigado con una multa desde la mitad al duplo del daño causado.

Art. 492. El que por otros medios que los señalados en los artículos precedentes causare daño en bienes de otro que no exceda de 10 duros, será castigado con la multa del tanto al duplo del daño causado.

Lo dispuesto en este artículo y en los dos precedentes se entiende sin perjuicio de lo determinado para su caso en el 437.

Art. 493. Serán castigados con el arresto de uno á cuatro días y la reprension:

1.º El que en rondas ú otros esparcimientos nocturnos alterare el sosiego público desobedeciendo á la autoridad.

2.º El que tome parte en cencerradas ú otras reuniones ofensivas á alguna persona, no estando comprendido en el número 14 del art. 485.

3.º El que apagare el alumbrado público ó del exterior de los edificios, ó el de los portales ó escaleras de los mismos.

4.º El que injuriare á otro livianamente de obra ó de palabra.

5.º El que por simple imprudencia ó por negligencia, sin cometer infraccion de los reglamentos, causare un mal que, si mediase malicia, constituiria delito.

Art. 494. Serán castigados con el arresto

to de uno á cuatro dias ó una multa de 1 á 4 duros:

1.º El que contraviniere á las reglas que la autoridad dictare para conservar el órden público ó evitar que se altere.

2.º El que pudiendo sin detrimento propio prestar á la autoridad el auxilio que reclamare en casos de incendio, inundacion, naufragio ú otra calamidad, se negare á ello.

3.º El que faltare á la obediencia debida á la autoridad, dejando de cumplir las órdenes particulares que esta le dictare, en todos aquellos casos en que la desobediencia no tenga señalada mayor pena por este Código ó leyes especiales.

4.º El que infringiere los reglamentos relativos á la quema de montes, rastrojeras ú otros productos de la tierra.

5.º El que contraviniere á las reglas establecidas para evitar la propagacion del fuego en máquinas de vapor, caleras, hornos ú otros lugares semejantes.

6.º El que disparare arma de fuego, cohete, petardo ú otro proyectil dentro de poblacion.

7.º El que corriere carruajes ó caballerías dentro de una poblacion, no siendo en los casos previstos en el núm. 6.º del art. 484.

8.º El que infringiere las reglas de policía dirigidas á asegurar el abastecimiento de los pueblos.

9.º El que ocultare su verdadero nombre y apellido á la autoridad ó persona que tenga derecho á exigir que lo manifieste.

10. El que amenazare á otro de palabra con causarle un mal que no constituya delito.

Art. 495. Incurrirá en la multa de medio duro á cuatro.

1.º El que teniendo obligacion de presentar al párroco un recién nacido para su bautismo no lo hiciere dentro del término de la ley.

2.º El que no diere los partes de defuncion contravinendo á la ley ó reglamentos.

3.º El facultativo que no diere conocimiento á la autoridad cuando por el ejercicio de su profesion entendiere haberse cometido un delito menos grave.

4.º El que se negare á recibir en pago moneda legítima y admisible.

5.º El que infringiere las reglas de policía relativas á posadas, fondas, cafés, tabernas y otros establecimientos públicos (97).

6.º El que con objeto de lucro interpretar sueños, hiciere pronósticos ó adivina-

ciones, ó abusare de la credulidad de otra manera semejante.

7.º El que faltare á las reglas establecidas para el alumbrado público donde este servicio se haga por particulares.

8.º El encargado de la guarda de un loco ó demente que le dejare vagar por sitios públicos sin la debida vigilancia.

9.º El dueño de un animal feroz ó dañino que le dejare suelto ó en disposicion de causar mal.

10. El que escandalizare con su embriaguez.

11. El que saliere de máscara en tiempo no permitido, ó de una manera contraria á los reglamentos.

12. El que se bañare quebrantando las reglas de decencia ó de seguridad establecidas por la autoridad.

13. El que construyere chimeneas, estufas ú hornos en infracción de los reglamentos, ó dejare de limpiarlos ó cuidarlos con peligro de incendio.

14. El que infringiere los reglamentos relativos á carruajes públicos ó de particulares.

15. El que arrojaré animales muertos en sitios vedados ó quebrantando las reglas de policía.

16. El que infringiere las reglas de policía en la elaboracion de objetos fétidos ó insalubres ó los arrojaré á las calles.

17. El que arrojaré escombros en lugares públicos contravinendo á las reglas de policía.

18. El que tuviere en balcones, ventanas, azoteas ú otros puntos exteriores de su casa, liestos ú otros objetos, con infraccion de las reglas de policía.

19. El que arrojaré á la calle por balcones, ventanas ó por cualquiera otra parte agua ú objetos que puedan causar daño.

20. El que tirare piedras ú otros objetos arrojadizos en parajes públicos con riesgo de los transeuntes, ó lo hiciere á las casas ó edificios en perjuicio de los mismos, ó con peligro de las personas.

21. El que entrare en heredad ajena para coger frutos y comerlos en el acto.

22. El que entrare con carruaje, caballerías ó animales dañinos en heredades plantadas ó sembradas.

23. El que entrare en heredad ajena para aprovechar el espigueo ú otros restos de cosechas.

24. El que entrare en heredad ajena cerrada ó cercada.

25. El que entrare sin violencia á cazar ó pescar en sitio vedado ó cerrado.

26. El que infringiere las ordenanzas de caza ó pesca en el modo ó tiempo de ejecutar una ú otra.

27. El que contraviniere á las disposiciones de los reglamentos, ordenanzas ó costumbres locales de policía urbana ó rural no comprendidos en este Código.

Art. 496. El dueño de ganados que entraren en heredad ajena, y causaren daño que no pasen de 2 duros, será castigado con una multa con arreglo á la escala del artículo 487 en su grado mínimo.

En caso de reincidencia, se impondrá el grado medio, á no intervenir circunstancia atenuante.

Art. 497. El dueño de ganados que entraren en heredad ajena sin causar daño, pero no siendo permitido, cuando no lleguen á 20 cabezas, será castigado con la multa de medio duro á cuatro (98).

Art. 498. El que aprovechando aguas de otro ó distrayéndolas de su curso, causare daño que no exceda de 2 duros, será castigado con una multa del tanto al duplo del daño causado.

Art. 499. El que entrare en monte ajeno, y sin talar árboles, cortare ramaje ó hiciere leña causando daño que no exceda de 2 duros, será castigado con una multa desde la mitad al tanto del daño causado.

Siendo reincidente, la multa será de la mitad al duplo del daño.

Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo determinado para su caso en el 437.

TITULO II.

DISPOSICIONES COMUNES Á LAS FALTAS.

Art. 500. En la aplicacion de las penas de los dos títulos anteriores procederán los Tribunales segun su prudente arbitrio dentro de los límites de cada una, atendiendo á las circunstancias del caso.

Art. 501. Los cómplices en las faltas serán castigados con la misma pena que los autores en su grado mínimo.

Art. 502. Caerán siempre en comiso:

1.º Las armas que llevare el ofensor al cometer un daño ó inferir una injuria, si las hubiere mostrado.

2.º Las bebidas y comestibles falsificados, adulterados ó pervertidos, siendo nocivos.

3.º Los efectos falsificados, adulterados ó averiados que se expendieren como legítimos ó buenos.

4.º Los comestibles en que se defraudare al público en cantidad ó calidad.

5.º Las medidas ó pesos falsos.

6.º Los enseres que sirvan para juegos ó rifas.

7.º Los efectos que se empleen para adivinaciones ú otros engaños semejantes.

Art. 503. El comiso de los instrumentos y efectos de las faltas expresados en el artículo anterior, lo decretarán los Tribunales á su prudente arbitrio, segun los casos y circunstancias.

Art. 504. Los penados con multa que fueren insolventes serán castigados con un dia de arresto por cada duro de que deban responder.

Cuando la responsabilidad no llegare á un duro, serán castigados sin embargo con un dia de arresto.

Por las otras responsabilidades pecuniarias en favor del tercero, serán castigados con un dia de arresto por cada medio duro.

Art. 505. En las ordenanzas municipales y demás reglamentos generales ó particulares de la Administracion que se publicaren en lo sucesivo, no se establecerán mayores penas que las señaladas en este libro, aun cuando hayan de imponerse en virtud de atribuciones gubernativas, á no ser que se determine otra cosa por leyes especiales.

Conforme á este principio, las disposiciones de este libro no excluyen ni limitan las atribuciones que por las leyes de 8 de enero, 2 de abril de 1845, y cualesquiera otras especiales competan á los agentes de la Administracion para dictar bandos de policía y buen gobierno, y para corregir gubernativamente las faltas en los casos en que su represion les esté encomendada por las mismas leyes (99).

(99) Este artículo ha sido modificado por las importantes reglas establecidas en el R. D. de 18 de mayo de 1853 y por las disposiciones de la ley para el gobierno y administracion de las provincias de 25 de setiembre de 1863.—Segun estas disposiciones combinadas los Alcaldes pueden castigar, ya gubernativamente ya en juicio, *ateniéndose al limite* de este art. 505 del Código las faltas que en el mismo tienen señalada la pena de multa, ó reprension y multa. Si la multa estuviere establecida en Ordenanza ó Reglamento vigente anterior al Código, en este caso no tendrán que atenerse al limite del art. 505 y sí al del 75 de la Ley municipal. Esto en cuanto á los Alcaldes y respecto de la multa.

En cuanto á los Gobernadores, la ley de 25 de setiembre de 1863, modificada en 21 de octubre de 1866, señala taxativamente las faltas

(93) Véase DAÑOS DE GANADOS.

DISPOSICION FINAL.

Art. 506. Quedan derogadas todas las leyes penales generales anteriores á la promulgacion de este Código, salvo las relativas á los delitos no sujetos á las disposiciones del mismo con arreglo á lo prescrito en el artículo 7.º

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

Mientras no se crearen los establecimientos penales necesarios para el cumplimiento de las penas señaladas en este Código, se observarán las reglas siguientes:

1.ª Para la ejecucion de lo dispuesto en el art. 7.º, mientras no se determina otra cosa, se reputan delitos militares los delitos y faltas que hasta la publicacion del Código han merecido aquel concepto por el tenor de las ordenanzas del ejército y armada, adiciones y aclaraciones á las mismas, y por la jurisprudencia general: no haciéndose por ahora novedad en cuanto á los casos reconocidos de desafuero.

2.ª Las mujeres sentenciadas á las penas de cadena, reclusion, presidio ó prision, cumplirán su condena en los establecimientos que en la actualidad sirven exclusivamente para la reclusion de las personas de su sexo, y se procurará reunir en edificios separados, ó por lo menos en departamentos diferentes, las sentenciadas á cada una de las diversas clases de penas.

3.ª Los sentenciados á presidio mayor y menor podrán ser destinados por ahora á unos mismos establecimientos aunque se hallen situados fuera del territorio de la Audiencia que imponga la pena, con tal que estén en la Península, ó en las Islas Baleares ó Canarias.

4.ª Los sentenciados á prision mayor ó menor podrán igualmente reunirse en un mismo establecimiento situado dentro de la Península ó en las Islas Baleares ó Canarias.

5.ª Los sentenciados á presidio y prision correccional podrán tambien ser destinados á un mismo establecimiento situado en la provincia de su domicilio, ó en una de las mas inmediatas, y se cuidará de colocarlos en departamentos diferentes.

6.ª Los sentenciados á arresto mayor, que segun la disposicion del art. 411 deban sujetarse al trabajo, cumplirán su condena, conforme á lo prevenido en la regla anterior,

que los Gobernadores pueden castigar con multa (núm. 3.º del art. 10 y 5.º del 11, ley; y 27 y 28, reg.); y no les faculta para imponer el arresto.

Tratamos mas detenidamente este asunto en los artículos ARRESTO: FALTAS: MULTAS.

en el mismo departamento que los sentenciados á prision correccional.

No tendrá lugar esta disposicion respecto de las mujeres, las cuales sufrirán el arresto en la cárcel ó edificio público destinado á este efecto en la capital de partido, dedicándose á las labores propias de su sexo.

LEY PROVISIONAL REFORMADA

prescribiendo reglas para la aplicacion de las disposiciones del Código penal (100).

Por ahora, y hasta que se publiquen el Código de procedimientos y la ley constitutiva de los Tribunales se observarán en la aplicacion de las disposiciones del Código penal las reglas siguientes:

1.ª Los Alcaldes y sus Tenientes en sus respectivas demarcaciones, conocerán en juicio verbal de las faltas de que trata el libro III del Código penal.

A este fin llevarán en papel de oficio un libro foliado y rubricado en todas sus hojas, en el cual se extenderá un acta de cada juicio, que deberá contener el nombre y domicilio del reo, denunciador y testigos, y el resumen de lo que cada uno de ellos hubiere expuesto ó declarado.

El acta será firmada por todas las personas que intervinieren en el juicio y pudieren hacerlo (101).

(100) Las reglas 1.ª á la 24 versan principalmente sobre *juicios de faltas*. La 25 y siguientes hasta la 37 sobre *prision* y sus incidencias. Desde la 38 á la 57 se dictan disposiciones generales sobre varios trámites y formalidades del procedimiento, ampliadas despues por los Rs. Ds. de 18 de mayo, 30 de setiembre y 9 de octubre de 1853 y 26 de mayo de 1854 que con otras se insertan en el Apéndice.

—Téngase presente que para los delitos contra el orden público hay establecido un procedimiento especial por la ley de orden público.

(101) Segun esta regla y la 56, los Alcaldes y sus Tenientes son en sus respectivos pueblos, demarcaciones ó cuarteles los únicos competentes para conocer en la primera instancia de los juicios sobre faltas. Consiguientemente, ante ellos están obligados á comparecer, siendo citados, lo mismo los militares que los eclesiásticos y cuantos gocen de fuero privilegiado, y aun los extranjeros domiciliados y transeúntes. Respecto de estos últimos así lo dispone terminantemente el párrafo 6.º del art. 6.º del Real decreto sobre extranjería de 17 de noviembre de 1852, y respecto de los aforados la jurisprudencia del Tribunal Supremo lo tiene así establecido incontrovertiblemente, con multitud de casos de competencia, como puede verse por las decisiones de 3 de diciembre de 1853.

2.^a En las veinticuatro horas siguientes dictará el Alcalde la sentencia, que será notificada á las partes, haciéndola constar en el libro de que trata la regla anterior, así como las notificaciones.

3.^a Los Alcaldes y sus Tenientes no admitirán en estos juicios ningun género de escritos, ni permitirán informes orales de letrados.

4.^a Si por la no comparecencia de un testigo ó por otro motivo justo, no fuere posible terminar el juicio en un solo acto, se continuará al siguiente día, extendiéndose en cada uno de ellos el acta correspondiente que firmarán los que hubieren concurrido.

El Alcalde en este caso dictará sentencia del modo prevenido en la regla 2.^a

5.^a Los Alcaldes-corregidores, como autoridades puramente gubernativas y políticas, no tienen jurisdiccion para conocer de las faltas ni de los juicios de paz.

6.^a Para hacer compatibles el uso de la jurisdiccion y las funciones gubernativas, donde haya Alcaldes y Tenientes de Alcalde, los primeros no tendrán distrito judicial especial, conociendo solo de las faltas á prevención con los Tenientes cuando las atenciones de gobierno se lo permitan.

7.^a Cuando no convengan entre sí las demarcaciones municipales y judiciales, siendo desigual por lo tanto el número de los Tenientes y el de los Juzgados de primera instancia, si el de los primeros fuere mayor, conocerán todos los Tenientes, y si menor solo los que hubiere, observándose en ambos casos, y en el de la regla 6.^a en cuanto á la intervencion fiscal y á las apelaciones, lo dispuesto sobre estos puntos en la R. O. de 1.^o de julio de 1848 (102).

8.^a Los juicios sobre faltas se celebrarán por ante escribano ó notario, si los hubiere: en otro caso, conforme á la práctica general, intervendrá fiel de fechos.

9.^a Los jueces de primera instancia cuidarán de que los Alcaldes y Tenientes de Alcalde en sus respectivos partidos judiciales,

persigan las faltas que se cometan en ellos, y cuyo conocimiento les atribuye esta ley.

10. Las multas que en asuntos judiciales impongan los Alcaldes y tenientes de Alcalde, ingresarán en el fondo de penas de Cámara en igual forma que las impuestas por los Juzgados y Tribunales superiores (103).

11. De la sentencia que dieren los Alcaldes no habrá lugar ó otro recurso que el de apelacion para ante el juez de primera instancia del partido.

12. Si se interpusiere apelacion por cualquiera de las partes, la admitirá el Alcalde siempre que fuere introducida en los tres dias siguientes al de su notificacion; y sin mas formalidad pasará al juez una copia testimoniada del acta y la sentencia, haciendo citar y emplazar antes á las partes para que dentro del término de diez dias acudan á usar de su derecho.

A continuacion de la copia testimoniada se pondrá nota de haberse admitido la apelacion, y se extenderá la diligencia de emplazamiento.

13. Al dia siguiente de haberse concluido el término del emplazamiento, el juez señalará dia para la vista, acordando en el mismo acto que por el escribano se ponga de manifiesto el expediente á las partes por el término de cuarenta y ocho horas.

Acto continuo de la vista el juez dictará sentencia, la cual causará ejecutoria.

14. En la instancia de apelacion ante el juez del partido, no se admitirán nuevas pruebas á las partes. Celebrada la vista con arreglo á la disposicion anterior, se dictará sentencia; y archivándose el expediente en el juzgado se remitirá al Alcalde testimonio de ella para su ejecucion.

15. La sentencia del juez de primera instancia es ejecutoria, y no há lugar despues de ella á otro recurso que el de responsabilidad, con arreglo á las leyes, ante la Audiencia del territorio contra el juez, el Alcalde y sus Tenientes.

16. Cuando el acusado fuere absuelto, lo será sin costas ni género alguno de derechos.

17. Tampoco podrán imponérsele si en el acto del juicio, reconociendo la falta, se sometiere á la pena señalada por el Código.

18. En la primera instancia de los juicios verbales no excederán las costas, en ningun caso, de lo que importe la cuarta parte de la multa que se impusiere al acusado.

(103) Hoy todas las multas se recaudan en el papel creado al efecto por R. O. de 14 de abril de 1848, y segun se determina en los arts. 58 al 64 del R. D. de 12 de setiembre de 1861.—
V. PAPEL SELLADO.

3 de marzo y 13 y 19 de mayo de 1854, 12 de mayo de 1868 y otras. Esta jurisprudencia está conforme con la ley 4.^a, tit. XXXII, lib. VII de la Nov. Recop., y con la R. O. de 6 de octubre de 1819, segun las cuales en todo lo relativo á la observancia de bandos de policía, no vale el fuero de guerra ni aun para la exaccion de multas. Véase además la nota al art. 482, y Juicio DE FALTAS.

(102) Además de la R. O. de 1.^o de julio de 1848 que se cita, son tambien muy del caso la de 26 de setiembre de 1851 y de 4 de octubre de 1855 que se insertan en el Apéndice.

19. Si en la instancia de apelacion se modificare la pena atenuándola, no se hará aumento alguno en la cantidad de las costas; si se confirmare la sentencia ó agravare la pena, podrá aquella aumentarse hasta el equivalente á la tercera parte de la multa impuesta.

20. Los jueces de primera instancia, los Alcaldes y sus Tenientes no devengan derechos en los juicios sobre faltas. Los escribanos de las alcaldías cuidarán de distribuir en la debida proporcion entre los demás funcionarios que los devengan, la cantidad impuesta por condenacion de costas, y de remitir al Juzgado de apelacion la parte que lo corresponda (104).

21. Las diligencias que se practiquen para determinar si el hecho punible es falta ó delito, se reputarán encaminadas á fijar la competencia, y por tanto las costas y gastos se entenderán de oficio.

22. En los juicios sobre faltas ejercerán el ministerio fiscal:

Primero. Los promotores en las segundas instancias, y en las primeras en los pueblos de su residencia.

Segundo. Los procuradores síndicos en primera instancia en su respectiva demarcacion, si no residiera en ella el promotor.

23. El promotor fiscal cuidará, bajo su responsabilidad, de que se repriman las faltas, y de que no se califiquen de tales los delitos, y denunciará la morosidad y abusos que advirtiere.

24. En los primeros quince dias de enero de cada año, remitirán los Alcaldes al juzgado del partido, por conducto del promotor, los libros de actas de que trata la regla 1.^a

El promotor los pasará con el visto bueno al juez á fin de que este los mande archivar, á no ser que advirtiere haberse cometido algun abuso, en cuyo caso hará la reclamacion conveniente.

25. Para proceder á la prision de una persona, es preciso que el delito que se le atribuya tenga señalada una pena mas grave que la de confinamiento menor ó arresto mayor, segun las escalas graduales del artículo 79 (105).

Exceptúase de esta disposicion el delito de vagancia, respecto del que siempre habrá

lugar á la prision, cualquiera que sea la pena señalada por el Código.

Exceptúase igualmente la prision por vía de sustitucion ó apremio, una vez impuesta esta pena.

26. Cualquiera persona puede detener y entregar en la cárcel, á disposicion del juez competente, á los reos cogidos *in fraganti*, á los que tengan contra si un mandamiento de prision, á los que se hubieren fugado de la cárcel ó de algun establecimiento penal, á los que yendo presos se fugaren, y á los que fueren sorprendidos con efectos que cono- cidamente procedan de un delito.

27. Los jueces y Tribunales, y las autoridades y sus agentes están obligados á detener ó mandar detener á las personas que, segun fundados indicios, fueren reos de delitos de cuya perpetracion tuvieran conocimiento.

Lo mismo deberán hacer con los responsables de faltas si fueren personas desconocidas,

28. Todo el que detuviere á una persona tiene la obligacion de conducirla ó hacerla conducir inmediatamente á la cárcel, entregando al alcaide una cédula firmada en que exprese el motivo de la detencion.

Si no supiere escribir, firmará la cédula el alcaide con dos testigos.

En casos de suma urgencia bastará que las autoridades ó sus agentes cumplan con la mencionada obligacion en el término preciso de dos dias.

29. La autoridad gubernativa ó agente de la misma que detuvieren á una persona, la pondrán á disposicion del Tribunal competente dentro de veinticuatro horas.

Cuando por una causa irremediable no se pudiese verificar así, se manifestarán por escrito al juez ó Tribunal las razones que hayan mediado para ello; pero nunca podrá el detenido permanecer á disposicion de dicha autoridad por mas de tres dias sin que la misma incurra en responsabilidad (106).

30. A las veinticuatro horas de haberse puesto al detenido á disposicion del juez competente, deberá decretarse su prision ó soltura.

En los casos en que así no fuere posible por la complicacion de los hechos, por el número de los procesados ó por otro grave motivo, que deberá hacerse constar en el

(104) Véase lo que dejamos dicho en ARANCEL de los escribanos y FIELES DE FECHOS EN LOS JUICIOS DE FALTAS, tomo I, pág. 489.

(105) Modificada esta regla por el R. D. de 30 setiembre de 1853, y por el art. 78 de la ley de orden público.—V. tambien ARRESTO.

(106) Conforme la última parte de esta regla con el art. 41 de la ley para el gobierno y administracion de las provincias de 25 de setiembre de 1863, y con la R. O. de 26 de abril de 1851.—V. el artículo ARRESTO.

proceso, se podrá ampliar por dicho juez la detencion hasta tres dias.

Pasado este término, se decretará precisamente la prision ó soltura.

31. Cuando hubiere motivo racionalmente fundado para creer á una persona culpable de delito que merezca pena mas grave que las expresadas en la regla 25, decretará el juez la prision en auto motivado, y expedirá mandamiento por escrito.

32. Los alcaides de las cárceles no podrán recibir en clase de presa á ninguna persona sin mandamiento por escrito del juez de la causa.

Tampoco podrán recibir á ninguna persona en clase de detenida, sino con las formalidades prescritas en la regla 28.

Los alcaides darán inmediatamente cuenta de la detencion al juez de primera instancia, y donde haya mas de uno al decano ó al que hiciere veces de tal.

33. La incomunicacion de un reo preso se decretará por el juez cuando para ello asista justa causa, la cual se expresará en el auto, y no podrá pasar de veinte dias continuados, sin perjuicio de decretarla de nuevo en la misma forma cuando convenga.

Las autoridades que tienen facultad de detener, tienen tambien la de incomunicar por el tiempo de la detencion.

34. En los delitos á que el Código señale prision correccional ó presidio de igual clase, permanecerá el reo en libertad, al prudente arbitrio del juez, segun las circunstancias del hecho, si diere fianza de 100 á 500 duros depositados en el Banco Español de San Fernando, ó de 500 á 2,000 duros en fincas bajo la responsabilidad del escribano que otorgue la escritura (107).

35. Se exceptúan de lo dispuesto en la regla precedente y en la 25 los delitos de robo, hurto y estafa, y los de atentado y desacato contra la autoridad, en los cuales habrá lugar siempre á la prision del reo, y será efectiva, cualquiera que sea la pena que merezca.

Permanecerán tambien en prision los reos de lesiones graves ó menos graves, mientras no resulte la sanidad del ofendido (108).

36. En cualquier estado de la causa en que, recibida la declaracion indagatoria, aparezca la inocencia del preso ó detenido, se decretará de oficio y sin costas su libertad.

(107) Véase el citado decreto de 30 de setiembre de 1853, que modifica esta regla.

(108) Está modificada esta regla por el artículo 5.º del repetido decreto de 30 de setiembre de 1853.

Tambien se concederá esta de oficio aunque no aparezca la inocencia del procesado en los casos previstos en las reglas 25 y 34, y bajo las fianzas y en la forma prevenida en esta última (109).

37. Los autos de prision y sus incidencias son apelables en un solo efecto. Luego que se interponga el recurso, el juez de la causa remitirá al Tribunal Superior inmediato testimonio en relacion, sin omitir, bajo su responsabilidad, ninguna circunstancia importante del proceso, sea en favor ó en contra del reo.

El Tribunal Superior fallará, previo dictámen fiscal, y si no se hubiere recibido aun la confesion al encausado, sin audiencia pública. De la decision que recaiga no habrá lugar á súplica.

38. Si en la acusacion se pidiere la imposicion de alguna de las penas correccionales, y el reo se conformare, el juez la aplicará sin mas trámites, si la conceptúa justa, y consultará el fallo con el Tribunal Superior, remitiendo original el proceso.

Lo propio verificará si estimando necesaria alguna variacion en la pena pedida, que no altere esencialmente su naturaleza correccional, la parte se conformare con ella.

39. Si el Tribunal Superior confirmare la sentencia consultada, ó si haciendo en ella alguna variacion no esencial, al tenor de lo dispuesto en la regla anterior se conformare el acusado, se llevará aquella desde luego á ejecucion (110).

40. Si el Tribunal Superior, previa audiencia ó dictámen por escrito del fiscal de S. M., no estuviere conforme con la pena impuesta de conformidad del procesado, se devolverá la causa para que se siga por los trámites ordinarios.

41. En los Tribunales Superiores habrá en cada causa un ministro ponente, cuyo cargo turnará entre todos por orden de antigüedad, á excepcion de los presidentes de Sala, quienes prestarán este servicio en la suya respectiva en uno de cada tres turnos con los magistrados de la misma.

El ponente cotejará el apuntamiento del

(109) Y sobreseyendo desde luego respecto á él con la declaracion de que el procedimiento no le pare perjuicio en su reputacion, conforme al art. 11 y regla 4.ª del 51 del reglamento provisional.

(110) El primer trámite en la Audiencia es siempre el pase al fiscal para que emita su dictámen por escrito; y sin formacion de apuntamiento, previa citacion, se proceda á la vista. (Art. 5.º del R. D. 26 mayo de 1854 inserto en el Apéndice).

relator con el proceso, y pondrá en aquel su nota de conformidad.

Propondrá asimismo el ponente á la Sala las providencias que deban fundarse, y los puntos del hecho y del derecho sobre que haya de recaer la votacion en los fallos, redactándolos con arreglo á lo acordado por la Sala (111).

42. El número de cinco magistrados es únicamente necesario:

1.^o Para ver y fallar aquellos procesos en que el juez inferior haya impuesto, ó pedido el fiscal de la Audiencia, la pena de muerte ó alguna de las perpétuas.

2.^o Cuando la Sala crea que el reo merece alguna de dichas penas, aunque el juez inferior no la haya impuesto ni pedido el fiscal de S. M.

3.^o Para ver y fallar las causas contra los jueces inferiores del territorio.

43. El término para dictar sentencia, señalado á las Audiencias por el reglamento provisional de administracion de justicia, se amplía á veinte dias en toda clase de procesos.

44. Los Tribunales y jueces fundarán las sentencias definitivas, exponiendo clara y concisamente el hecho, y citando el artículo ó artículos del Código penal de que se haga aplicacion.

45. En el caso de que, examinadas las pruebas y graduado su valor, adquirieren los Tribunales el convencimiento de la criminalidad del acusado, segun las reglas ordinarias de la crítica racional, pero no encontraren la evidencia moral que requiere la ley 12, tit. XIV de la Part. 3.^a, impondrán en su grado mínimo la pena señalada en el Código. Si esta fuere una sola indivisible, ó se compusiese de dos igualmente indivisibles, los Tribunales procederán con sujecion á lo que disponen las reglas 1.^a y 2.^a del art. 66 respecto de los autores del delito frustrado y cómplices del delito consumado.

46. En los delitos á que la ley imponga penas correccionales no habrá lugar á suplica, sea confirmatoria ó revocatoria la sentencia de vista.

Tampoco la habrá aunque se trate de penas afflictivas, cuando la divergencia entre el fallo del juez inferior y el de la Audiencia no consista en lo sustancial de la pena, sino en las acesorias ó incidencias de menos importancia, á juicio del Tribunal.

Se exceptúa el caso en que la sentencia de vista imponga la pena de muerte, pues en-

tonces procederá la súplica, siempre que aquella no sea conforme de toda conformidad á la de primera instancia.

47. Lo establecido en las reglas precedentes se entenderá sin perjuicio de lo que se dispusiere en leyes especiales acerca de las facultades y atribuciones de las autoridades gubernativas.

48. Conforme al principio consignado en el art. 20 del Código penal, se sobreseerá en las causas pendientes sobre hechos no penados por el mismo, no imponiendo á los reos otra pena que las costas procesales en los casos en que procediese dicha condena. Los jueces inferiores consultarán el sobreseimiento con la Audiencia del territorio.

49. Las causas pendientes sobre hechos anteriores, que el nuevo Código califica de faltas, se fallarán desde luego sin mas trámites, en el estado en que se encuentren. Los jueces inferiores consultarán con la Audiencia el fallo que dictaren.

50. En los casos consultivos expresados en las dos reglas anteriores, las Salas de justicia pasarán los autos al fiscal, y no procediendo el sobreseimiento ó la decision de plano al tenor de lo dispuesto en la regla anterior, se devolverá la causa al inferior para que la siga, sustancie y determine conforme á la legislacion vigente.

51. En los casos á que se refiere el art. 46 del Código penal, la parte que hubiere obtenido la ejecutoria, pedirá en un mismo escrito la tasacion de costas y la apreciacion de los gastos del juicio. Aquella se verificará por el tasador general, ó el que haga sus veces, con sujecion rigorosa al principio asentado en el art. 47 del Código, y sobre ella recaerá el fallo de aprobacion.

52. No comprendiéndose en la denominacion de costas sino los derechos é indemnizaciones que consistan en cantidades inalterables, como los de arancel, el reintegro del papel sellado y otros semejantes al tenor de lo dispuesto en el mencionado art. 47 del Código, no podrá pedirse reduccion de la cantidad legítima á que asciendan, pero sí decirse de abuso; y el Tribunal, ya de oficio, ya á peticion fiscal ó de parte, podrá excluir las ocasionadas por diligencias innecesarias ó maliciosamente dilatorias.

53. Para la apreciacion de gastos, la parte presentará con el escrito una cuenta razonada y documentada.

Los honorarios de los abogados, promotores fiscales ú otras personas ó corporaciones facultativas se anotarán en ella por las cantidades que los mismos hubieren asentado al pié de sus escritos ó dictámenes, sin

(111) Véanse en el Apéndice, las Reales órdenes de 12 de marzo de 1852, y 19 de febrero de 1856.

perjuicio de reduccion; los gastos que resulten de recibos, por el tenor de estos, y todos los demás que la parte creyere justo reclamar, y que no puedan acreditarse en la forma dicha, por relacion jurada.

54. De la cuenta de gastos y de la tasacion de costas se comunicará traslado á la parte condenada al pago; de su respuesta se comunicará asimismo traslado á la contraria y al fiscal por su órden y sin mas trámites, salvo juicio ó dictámen de peritos, si la Sala lo creyere indispensable para determinar los gastos, se dictará providencia aprobando la tasacion de costas en lo que fuese legítima, y fijando la cantidad de aquellos que hubiere de abonarse, hecha la reduccion justa y oportuna, encaminada siempre al fin de reprimir todo género de abusos.

Esta providencia es ejecutiva, pero será notificada á todos aquellos á quienes perjudique, los cuales suplicando en forma, serán oídos en justicia. La determinacion que en este caso recayere, y para la cual será tambien oído el ministerio fiscal, causará ejecutoria.

Si hubiere méritos para alguna declaracion penal por abuso, al tenor de lo prevenido en el artículo 328 del Código u otras disposiciones del mismo, á reclamacion de parte ó de oficio, volverán los autos al fiscal para que en virtud de su ministerio, ó coadyuvando en el primer caso, pida lo conveniente. De la providencia que recaiga habrá lugar á súplica.

55 En los recursos de fuerza, los Tribunales reales acomodarán el lenguaje de las provisiones á que aquellos den lugar á las disposiciones del Código, no conminando con penas no establecidas en el mismo, y oyendo siempre al fiscal.

En su consecuencia, no siendo obedecida y cumplida la primera Real provision, se librará sobrecarta conminatoria, recordando las penas en que incurrer, segun el Código, los eclesiásticos que no cumplen las disposiciones de los Tribunales civiles cuando están obligados á ello.

Si tampoco fuere obedecida, se expedirá tercera provision ó sobrecarta agravatoria, conminando, á término dado, con la formacion de causa; y si trascurrido este continuase la resistencia, el Tribunal Real procederá á la formacion de aquella respecto de los sometidos á su jurisdiccion, y en cuanto á los que no lo estén, remitirá el tanto de culpa al Tribunal competente.

56 No obstante cualquier indicacion que se haga el Código sobre diversidad de fueros, no se entiende por ello prejuzgada ni

resuelta cuestion alguna en este punto, debiendo, por lo mismo atenerse los Tribunales á la legislacion actual hasta tanto que terminantemente se decida otra cosa.

Exceptuase de lo dicho lo dispuesto en las reglas 1.^a y 11 respecto de la jurisdiccion de los Alcaldes y tenientes sobre faltas.

A pesar de todo lo dispuesto en las dos reglas citadas, no se entenderá por ello derogada la facultad de los respectivos Tribunales para conocer sobre faltas, cuando estas son incidentes del delito principal.

57. Quedan en su fuerza y vigor las leyes que actualmente rigen sobre el procedimiento en cuanto no se opongan á las presentes reglas.

APÉNDICE.

Comprendemos en el Apéndice varias Reales órdenes y decretos no incorporados algunos en la edicion del Código penal y de la Ley provisional dictada para su ejecucion. Son los siguientes:

R. O. de 1.º julio de 1848.

Resolviendo las dudas que ha ofrecido la ley provisional cuando no es igual en una poblacion el número de Alcaldías ó Tenencias al de Juzgados de primera instancia.

«Artículo 1.º Aun cuando el número de Alcaldías y Tenencias sea en algunas poblaciones mayor que el de los Juzgados de primera instancia, todos los Alcaldes y Tenientes de Alcalde en su caso ejercerán en sus respectivas demarcaciones la jurisdiccion que les atribuye la regla 1.ª de la ley antes mencionada.

Art. 2.º Cuando la demarcacion de una Alcaldía se extienda sobre dos ó mas distritos judiciales, intervendrá en el juicio verbal sobre faltas el promotor del Juzgado en cuyo distrito se hubieren cometido aquellas.

Art. 3.º Las apelaciones de que habla la Ley provisional se interpondrán, siguiendo el mismo principio, para ante el juez de primera instancia en cuyo distrito se haya cometido la falta, aun cuando la mayor parte de la demarcacion del Alcalde ó Teniente de Alcalde corresponda á otro distrito judicial.—Madrid 1.º de julio de 1848.—Arrazola.»

R. D. de 22 setiembre de 1848.

Resolviendo varias dudas ocurridas en la aplicacion del Código, en sus referencias á reglamentos, á disposiciones del Código civil, á determinada ley ó legislacion, etc., etc.

«Artículo 1.º Siempre que el Código penal se refiere á disposiciones de reglamentos,

como en la circunstancia 22 del art. 10, si estos forman el todo ó parte de alguna ley anterior, regirán como tales hasta que se publiquen otros, conforme á lo que se dispone en la nota segunda de la ley 11, tit. II, lib. III de la Nov. Recop.

Art. 2.º Cuando el Código se refiere á reglamentos que hayan de publicarse, relativos á objetos sobre los cuales no se hubiere determinado en leyes ú otros reglamentos anteriores, mientras aquellos no se publiquen, los Tribunales no harán innovacion alguna, considerándose las disposiciones del Código en esta parte como un beneficio que la ley promete conceder mas adelante.

Art. 3.º Siempre que el Código penal se refiere á disposiciones del Código civil hasta tanto que este se publique, se entenderán las referencias á la legislacion civil actual, y en su defecto á lo que se halle establecido por la jurisprudencia general conforme á lo que se previene en la ley 6.ª, tit. II, Partida 1.ª Si tampoco hubiese jurisprudencia fija sobre el caso se entenderá consignada la disposicion del Código para cuando la ley establezca lo conveniente.

Art. 4.º Cuando el Código se refiere á determinada ley ó á la legislacion en general, se entiende la referencia á la misma ley ó legislacion, tal como la jurisprudencia y la costumbre la han interpretado ó entendido, siguiendo el principio de que la costumbre en España tiene fuerza de ley, aun contra esta misma en ciertos casos segun lo dispone la 6.ª del tit. II, Partida 1.ª ya citada.

Art. 5.º Cuando el Código penare un hecho que, por ser susceptible de diferentes grados de culpabilidad segun su extension ó efectos, le califica de delito y de falta, los Tribunales, para su persecucion y aplicacion de las penas respectivas, consultarán la extension ó efectos en cada caso, procediendo segun sus resultados. A esta clase de hechos corresponden las disposiciones contenidas en el art. 200 y en el núm. 2.º del 485 del Código, en los cuales se castiga el deterioro de estatuas, pinturas ú otros objetos de artes como delito y como falta, teniendo presente que la extension de que es susceptible el hecho exige esa latitud; y conforme á lo dispuesto en el art. 476, será delito aquel si el deterioro excede de 5 duros, y falta si no excede de esta cantidad.

Art. 6.º Definido una vez en el Código un delito, cualidad ó circunstancia, siempre que el mismo Código hablare de aquel ó de estas, se entenderán definidos en los propios términos.

Art. 7.º Cuando el Código señala una pena que consiste en la pérdida de un derecho no concedido aun por la ley, tal como el de pertenecer al consejo de familia, los Tribunales, en los casos que ocurran, la impondrán segun el Código la señala en consideracion á que cuando el derecho se conceda, no deberán disfrutar de él los que sabedores de la penalidad cometieren el delito á que se impone la pena.

Art. 8.º El Ministro de Gracia y Justicia dará cuenta á las Córtes del presente decreto en la próxima legislatura.—Dado en Palacio á 22 de setiembre de 1848.

R. D. de 29 setiembre de 1848.

Es sobre jurisdiccion de los Cónsules y Vice-cónsules en el extranjero, y se halla inserto en CÓNsULES Y VICE-CÓNsULES.

R. D. de 27 octubre de 1848.

Sobre tribunales de aguas. No se entienden suprimidos por el Código.

«En vista de las razones que de acuerdo con la comision de Códigos me ha dirigido el Ministro de Gracia y Justicia, vengo en declarar, que ni por el nuevo Código penal, ni por la Ley provisional dada para su ejecucion, se entiendan suprimidos los Juzgados privativos de riego de Valencia, Murcia y cualesquier otros puntos donde se hallen establecidos ó se establecieren, los cuales deberán continuar como hasta aqui limitados á la policia de las aguas y al conocimiento de las cuestiones de hecho entre los inmediatamente interesados en el riego, conforme al artículo 7.º del R. D. de 10 de junio del año próximo pasado; debiendo observarse en las ordenanzas y reglamentos que se publicaren en lo sucesivo lo dispuesto sobre el particular en el art. 505 del Código penal.—Dado en Palacio á 27 de octubre de 1848, etc.

R. D. de 30 octubre de 1848.

Dejando en suspenso el art. 183 del Código.

«....Vengo en decretar que hasta la publicacion de la ley orgánica de Tribunales, quede en suspenso lo dispuesto en el art. 183 del Código penal; y en su consecuencia, siempre que los Tribunales militares hubieren de juzgar por virtud del fuero de atraccion á los paisanos que se hicieren reos de los delitos expresados en el citado art. 183 del Código, les impondrán las penas de la ordenanza y leyes militares, como se practicaba hasta aquí.—Dado en Palacio á 30 de octubre de 1848, etc.»

R. O. de 26 abril de 1851.

Sobre arrestos por la policía.

«De conformidad con lo propuesto por el Consejo Real, la Reina ha tenido á bien resolver que se recuerde á los Gobernadores de provincia la puntual observancia del art. 22 de la Real cédula de 19 de agosto de 1827, que no está derogado, y en el cual se previene que las personas arrestadas por la policía, sea cual fuere la causa, serán entregadas á los Tribunales y jueces de sus respectivos fueros en el término de tres dias ó mas tardar.—Madrid 26 de abril de 1851, etc.»

R. O. de 26 setiembre de 1851.

Sobre jurisdiccion de los Alcaldes en su respectiva demarcacion en donde las haya, y á prevención en donde no.

«Artículo 1.º En las poblaciones ó distritos municipales en que cada Alcalde ó Teniente de Alcalde tenga designada una demarcacion determinada, cada uno de ellos ejercerá la jurisdiccion judicial ordinaria en el recinto de su demarcacion, sin poder delegarla, observándose en su caso lo dispuesto en la R. O. de 1.º de julio de 1848.

En donde no existan estas demarcaciones, los Alcaldes ó sus Tenientes ejercerán á prevención todos los actos de la jurisdiccion ordinaria que les corresponde.

Art. 2.º Sin embargo de lo dispuesto en el artículo anterior, la delegacion hecha á los Alcaldes por los jueces en virtud de lo dispuesto en el art. 34 del reglamento provisional para la administracion de justicia, se entiende dirigida igualmente á los Tenientes de Alcalde, á no ser que expresamente se contraiga á la persona del Alcalde; y en consecuencia podrá el Alcalde ordenar que se entienda el despacho con el Teniente á quien corresponda, segun el turno riguroso que deberá establecerse.»

Rs. Ords. de 12 marzo de 1852 y 19 de febrero de 1856.

Sobre pase de las causas á los ministros ponentes.

Se mandó por R. O. de 12 de marzo de 1852 que «cuando se haya declarado conclusa la causa, y despues de hechas, si fueren de hacer, por el relator las adiciones convenientes al apuntamiento, es cuando debe pasar el proceso al ministro ponente para el cumplimiento de su encargo.» Y por la de 19 de febrero de 1856 se previno que sin perjuicio de lo dispuesto en la de 12 de marzo para el efecto de que pueda notarse por el ponente cualquiera defecto que contenga la sustanciacion y sea reparable antes de la

Tomo III.

vista, pasen de nuevo los procesos, despues de celebrada esta, á los magistrados ponentes, para que estos propongan á la Sala los puntos de hecho y de derecho sobre que hayan de recaer los fallos.

R. D. de 26 marzo de 1852.

Es sobre cumplimiento de condenas y se halla inserto en **PRESIDIOS y ESTABLECIMIENTOS PENALES.**

R. D. de 18 mayo de 1853.

Resolviendo qué faltas pueden castigarse gubernativamente, y cuáles exigen las formalidades del juicio.—Se halla inserta en **FALTAS.**

R. D. de 9 octubre de 1853.

Sobre abono del tiempo de prision.

«Art. 1.º A los reos que en lo sucesivo fueren sentenciados á penas correccionales, se les abonará para el cumplimiento de sus condenas la mitad del tiempo que hubiesen permanecido presos, quedando á su favor cualquiera fraccion de dias que resulte en la rebaja.

Este beneficio será extensivo á los sentenciados á prision por vía de sustitucion y apremio para el pago de multas.

Art. 2.º No podrán gozar de la Real gracia otorgada por este decreto.

1.º Los reincidentes en la misma especie de delito.

2.º Los que por cualquiera otro delito hayan sido condenados á pena igual ó superior á la que nuevamente se les imponga.

3.º Los reos ausentes que llamados en legal forma no se hubiesen presentado voluntariamente.

4.º Los reos de robo, hurto y estafa que exceda de 5 duros.

5.º Los reos de robo, hurto y estafa que no exceda de 5 duros, en quienes concurren circunstancias notables de agravacion.

Art. 3.º Los Tribunales harán aplicacion de las anteriores disposiciones al final de las sentencias, que habrán de dictar con sujecion al Código y ley provisional; y los fiscales las tendrán presentes para exponer lo que convenga en sus censuras.—Dado en palacio á 9 de octubre de 1853, etc.»

R. D. de 30 setiembre de 1853.

Declarando cuándo procede el auto de prision, y los casos en que es admisible la fianza...

Art. 1.º No se decretarán desde luego autos de prision por los jueces y Tribunales en las causas en que se persiga delito que merezca pena inferior á las de presidio, pri-

sion y confinamiento mayores, según el orden establecido en el art. 24 del Código penal.

Lo mismo se practicará en las causas sobre los delitos de falsificación de que tratan los arts. 226 y 227 del propio Código, cualquiera que sea la penalidad que les corresponda, con tal que el hecho no haya tenido un objeto de lucro, ni ocasionado perjuicio á tercero.

Art. 2.º En todas las causas por delito de penalidad superior á la de arresto mayor, se mandará que el procesado dé la fianza prevenida en la ley provisional para la aplicación del Código, y de cárcel segura si fuese notoriamente pobre.

Será fiador suficiente en este último caso, todo español de buena conducta y avecinado dentro del territorio del Tribunal ó Juzgado, que esté en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos, y venga pagando con un año de anterioridad una contribucion directa de 100 rs, anuales sobre bienes inmuebles de su propiedad personal ó de 200 por razon de subsidio.

Art. 3.º La fianza consistente en metálico ó líneas prestada por un tercero, solo será responsable á las resultas del juicio, en el caso de fuga ó ausencia del procesado.

Art. 4.º Si los procesados de que trata el art. 2.º no habilitasen en el acto de ser requeridos las fianzas convenientes, serán reducidos preventivamente á prision; de la que saldrán luego que la presenten.

Art. 5.º Se exceptúan de las disposiciones de los anteriores artículos, y serán constituidos desde luego en prision, en los casos en que así proceda, según la ley:

1.º Los reos de robo, hurto, estafa, vagancia, atentado de cualquiera clase contra la autoridad y desacato grave á la misma.

2.º Los reos de lesiones calificadas de peligrosas, interin no desaparezca completamente el peligro.

Art. 6.º En las causas sobre delitos á que corresponda pena de arresto mayor ú otra inferior, cometidos por personas notoriamente sospechosas, ó sin arraigo, familia, ni establecimiento fijo, podrán exigir los jueces y Tribunales que los reos se les presenten periódicamente, ó decretar cualquier otro género de medidas de inspeccion y vigilancia para evitar su ausencia. Cualquiera infraccion de parte de los reos hará procedente el auto de prision, ó la fianza en su defecto.

Art. 7.º En cumplimiento de la ley de 19 de marzo de 1848, el Ministro de Gracia y Justicia dará cuenta á las Córtes del presente decreto en la próxima legislatura.—Dado en Palacio á 30 de setiembre de 1853, etc.»

R. O. de 4 enero de 1854.

Sobre la pena de prision correccional.

Se mandó por esta Real orden que los reos condenados á arresto mayor sujetos á trabajo forzoso, y los que deben sufrir la prision correccional por vía de sustitucion y apremio «por tiempo tan escaso que haya de consumirse probablemente en su traslacion al punto donde deban sufrir estas penas, las extingan en las cárceles de las cabezas de partido en los términos prevenidos por el Código para los condenados á la pena de arresto mayor sin trabajo forzoso; sin perjuicio de que por el Gobierno se adopten las disposiciones convenientes para sujetarlos al mismo en la forma que fuese posible según los casos y circunstancias; y que cuando los jueces acuerden la extincion de la pena en la forma referida, den cuenta de su resolucion á las Audiencias respectivas.»

R. D. de 26 mayo de 1854.

Aboliendo la confesion con cargos, haciendo otras reformas en el procedimiento contra reos ausentes, causas de conspiracion, correccionales y de vagos, y dictando otras disposiciones sobre defensa por pobre, juramento, exhortos, visitas de cárceles, notificaciones y estados de papel reintegrado.

«Artículo 1.º A ningun procesado se recibirá confesion con cargos, sin perjuicio de que se le puedan recibir cuantas declaraciones estime el juez convenientes.

Art. 2.º En las causas contra reos ausentes no se ratificarán en el término de prueba los testigos del sumario, sino cuando lo soliciten el ministerio fiscal ó el acusador particular.

Art. 3.º Fallada en primera instancia una causa en rebeldía, y remitida en consulta á la Audiencia territorial, la Sala á quien corresponda, omitiendo la formacion de apuntamiento, la pasará al fiscal para que emita su dictámen por escrito, y si no se creyere necesaria la ampliacion del sumario, se dictará sentencia, previa citacion para vista, en cuyo acto hará el relator relacion verbal del proceso.

Art. 4.º En los procesos que se sustancian con arreglo á la ley de 17 de abril de 1821, no se acordarán por los jueces, para el acto del juicio público, otras ratificaciones de testigos del sumario que las que pidan las partes expresamente.

Art. 5.º Remitidas por el juez de primera instancia al Tribunal superior las causas á que se refiere la regla 38 de la Ley provisional para la aplicacion del Código penal, la sala á que corresponda las pasará al fiscal para que emita su dictámen por escrito; y sin

mas trámites ni formacion de apuntamiento por el relator, previo señalamiento, se procederá á la vista, en la cual hará aquel funcionario relacion verbal del proceso.

Art. 6.º El ministerio fiscal podrá hacer su acusacion por escrito en las causas de vagos en segunda instancia, sin necesidad de asistir á extrados.

Art. 7.º Cuando se dude si los procesados son ó no pobres, exigirá el juez al Alcalde del domicilio una certificacion, en que bajo su responsabilidad conste dicho extremo. Sin embargo, podrán practicarse á instancia fiscal ó de parte las diligencias que con este objeto crean pertinentes los Tribunales.

Art. 8.º Declarado pobre un litigante en primera instancia, seguirá disfrutando del beneficio que la ley le concede, sin mas justificacion, en todas las ulteriores instancias, á menos que la parte contraria, el ministerio fiscal ó el administrador de rentas hicieren oposicion por haber mejorado aquel de fortuna.

Art. 9.º En las causas criminales no harán las partes en sus escritos juramento alguno.

Art. 10. Los exhortos que se despachen de oficio, se dirigirán y devolverán por conducto del promotor fiscal ó fiscal del Juzgado ó Tribunal donde deban diligenciarse. Los promotores fiscales y los fiscales de S. M. llevarán un libro en que anoten su recibo y devolucion, é interpondrán su ministerio cuantas veces sea necesario para activar su curso.

Art. 11. La semana en que se haga *visita general de cárceles*, segun lo dispuesto en el art. 17 del reglamento provisional para la administracion de justicia, se omitirá la ordinaria del sábado.

Art. 12. Los jueces de primera instancia dejarán de remitir á las audiencias á fin de cada año las *listas de las causas* principia-
das y fenecidas durante él; pero continuarán formando con la mayor exactitud y bajo su responsabilidad los estados mensuales, que remitirán á los expresados Tribunales, donde se conservarán enlegajados con el orden y clasificacion convenientes.

Art. 13. Los escribanos de Cámara no darán á los fiscales mas *copias de las providencias* que se les notifiquen que las prevenidas en el art. 90 de las ordenanzas de las audiencias.

Art. 14. Los escribanos de Cámara remitirán tan solamente á las oficinas de Hacienda al fin del año un *estado del papel de oficio y pobres reintegrado*, segun el Real

decreto de 8 de agosto de 1851, con expresion de las causas y Juzgados á que pertenece el reintegro.» (CL. t. 62, p. 81.)

R. O. de 4 octubre de 1855.

Juicios de faltas: Competencia cuando el Alcalde y todos los concejales están impedidos de conocer....

(GRAC. Y JUST.) He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la exposicion de ese Tribunal referente á la consulta que le elevó el juez de primera instancia de Olmedo, acerca de quién debe conocer de los juicios de faltas en los pueblos en que el Alcalde y demás individuos del Ayuntamiento están legalmente impedidos de intervenir en ellos como jueces; y S. M., atendida la analogia que con el caso consultado tiene lo dispuesto en el art. 28 del reglamento provisional para la administracion de justicia, de acuerdo con su fiscal, se ha servido resolver que en los juicios de faltas en que no puede funcionar legítimamente ninguno de los concejales designados por la Ley provisional, se celebren ante el Alcalde del pueblo mas cercano, con tal que sea de la comprension del mismo partido judicial, cuyo juez letrado lo es de segunda y última instancia en esta clase de asuntos.—De Real orden etc.—Madrid 4 de octubre de 1855.—Fuente Andrés.—Sr..... (CL. t. 66, p. 190.)

R. D. de 14 diciembre de 1855.

Sobre cumplimiento de las condenas.

Se halla inserto en PRESIDIOS Y ESTABLECIMIENTOS PENALES.

R. O. de 8 abril de 1863.

Que no se consulten las sentencias en causas en que solo se admite la acusacion privada.

(GRAC. Y JUST.) El Tribunal Supremo de Justicia, despues de haber hecho una extensa informacion sobre la práctica que se observa en las distintas Audiencias del Reino en varios puntos de la jurisprudencia criminal, y de haber oido el dictámen de dichos Tribunales superiores, eleva á S. M. la consulta que se refiere á los particulares siguientes:

1.º Si en las causas de estupro y demás delitos que no pueden perseguirse de oficio, y si únicamente á instancia de parte, deben consultar los jueces de primera instancia con la audiencia del territorio en el fallo definitivo; ó si omitiendo siempre ó en algun caso dicha consulta, cuándo deberán considerar como pasada en autoridad de cosa juzgada su sentencia, en el supuesto de que ninguna de las partes haya apelado dentro del término legal.

2.º Si en las causas criminales deberá notificarse personalmente á los procesados la

sentencia de segunda instancia, ya sea absolutoria, ya condenatoria; y en caso afirmativo, desde cuándo principiará á contarse el término para interponer la súplica en los casos en que proceda, si desde el día de la notificación al procurador, ó desde el en que hubiere sido hecha á la parte.

Y 3.º Si en las causas sobre delitos que puedan ser castigados con penas correccionales ó afflictivas, segun sean simples ó calificadas, cuando las partes acusadoras los califican de un modo y el Tribunal de otro, ¿qué calificación es la que sirve de base para determinar si procede ó no la súplica, la que se hace en las querellas ó acusaciones, ó la que se hace en la sentencia?

Y considerando la Reina (Q. D. G.) que es de urgente necesidad uniformar el procedimiento criminal en todos los tribunales del fuero comun, segun se solicita por el Supremo de Justicia, de acuerdo con lo propuesto por el mismo se ha servido resolver.

1.º Que en las causas en que la ley no admite sino la acusacion privada no se consulten las sentencias con la audiencia cuando ninguna de las partes apela, llevándose aquellas á efecto como ejecutorias legalmente.

2.º Que la legalidad existente, reconocida y repetidamente declarada, es que las sentencias de las segundas instancias, como no sean por si mismas ejecutorias, no deben notificarse personalmente á las partes, sino á sus procuradores, haciéndose únicamente á aquellas cuando sean ejecutorias para su cumplimiento y ejecucion; aprovechándose sin embargo, y perjudicándoseles respectivamente la notificación hecha al procurador para todos los efectos legales.

3.º Que la base y único criterio legal para determinar la procedencia de las terceras instancias, de acuerdo con la regla 46 de la ley provisional para la aplicacion del Código penal, es la sentencia que se pronuncie, bien por si sola en aquellas causas en que la calificación del delito, declarando que este es menos grave, pone término á las mismas, bien comparándola con la del inferior en aquellas en que la clase y calidad de la conformidad ó discordancia de una y otra determina la procedencia ó improcedencia de la tercera instancia.—De Real orden etc.—Madrid 8 de abril de 1863.» (*Gac.* 10 *id.*)

R. O. de 24 abril de 1863.

Es sobre si se entiende cumplida una condena de presidio extinguiendo en la carcel el tiempo de su duracion.—Se halla en *PRESTIPOS*, así como otras sobre el mismo asunto.

R. O. de 26 junio de 1863.

Estableciendo que la parte penal de las ordenanzas forma parte de la excepcion contenida en el art. 7.º del Código penal, y que este rige solo y exclusivamente para castigar los delitos que se cometan en los montes de dominio particular.—V. MONTES.

R. O. de 13 enero de 1864.

Formalidades que deben preceder á la declaracion de demencia de los penados.

(GRAC. Y JUST.) El Sr. Ministro de Gracia y Justicia dice con esta fecha al de la Gobernacion lo siguiente:

«Excmo. Sr.: He dado cuenta á la Reina (que Dios guarde) de la Real orden que, con fecha 12 de octubre último, comunicó V. E. á este Ministerio, consultando qué formalidades deberán preceder á la declaracion de la denuncia (1) en los penados para los efectos del art. 88 del Código penal, y de que modo deben dictar los Tribunales sentenciadores la confirmacion de esta denuncia.

En su virtud, y atendiendo á que dichas formalidades no pueden ser otras que las mismas que se requieren para absolver ó condenar á un procesado; á que del mismo modo que se prueba la locura ó demencia del que cometió un delito para declararle exento de responsabilidad criminal, debe probarse y decidirse lo que le exime del cumplimiento de la condena impuesta, ha tenido á bien mandar S. M., de conformidad con lo propuesto por el Tribunal Supremo de Justicia, se diga á V. E., como de su Real orden lo ejecuto, que para hacer la declaracion de que se trata se observen las disposiciones siguientes:

1.ª Los confinados que se suponga en estado de dementes serán constituidos en observacion, instruyéndose al efecto por la comandancia del presidio en que aquellos se encuentren un expediente informativo de los hechos y motivos que hayan dado lugar á la sospecha de la demencia, en el que se consigne el primer juicio ó la certificacion de dos facultativos, por lo menos, que los hayan examinado y observado.

2.ª Consignada así la gravedad de la sospecha; el comandante del presidio dará cuenta inmediatamente, con copia literal del expediente instruido, al regente de la Audiencia de que procedan los confinados, sin perjuicio de ponerlo en conocimiento de la Direccion general de Establecimientos penales.

(1) Debe leerse *demencia* por mas que no hayamos querido alterar el texto de la *Gaceta* que dice y repite denuncia.

3.^a El regente de la Audiencia pasará aquel expediente á la Sala de justicia sentenciadora, la cual, con preferencia, oirá al fiscal y al acusador particular de la causa, si le hubiere, hasta la última instancia, y dándose intervencion y audiencia al defensor del penado, ó nombrándosele de oficio para este caso si no le tuviere, acordará la instruccion mas ámplia y formal de los hechos, y el estado físico y moral de los pacientes, por los mismos medios legales de prueba que se hubiesen empleado si el incidente ocurriera durante el seguimiento de la causa; comisionando al efecto al Juez de primera instancia del partido en que se hallen los confinados, por conducto del regente del territorio de la Audiencia, para que puedan vigilar el cumplimiento.

4.^a Y últimamente, sustanciado este incidente en juicio contradictorio, si hubiese oposicion, y en forma ordinaria si no la hubiese, y despues de oir las declaraciones juradas de los peritos en el arte de curar; y en su caso de la Academia de Medicina y Cirugía, se dictará el fallo que proceda de si há ó no lugar á declarar la demencia, el cual se comunicará al comandante del presidio para la traslacion del penado demente al establecimiento de beneficencia que corresponda y su colocacion en la habitacion solitaria que previene el citado art. 88 del Código penal vigente; todo sin perjuicio de cumplir con lo que en el mismo artículo se dispone, si en cualquier tiempo el demente recobrase su juicio.»—De Real órden etc.—Madrid 13 de enero de 1864. (*Gac. del 20*)

R. O. de 13 enero de 1864.

Declarando lo que debe entenderse por lugar habitado en la aplicacion del Código.

(GRAC. Y JUST.) «He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del expediente instruido en este Ministerio con motivo de la consulta elevada por ese Tribunal acerca de lo que debe entenderse por lugar habitado en la aplicacion del Código penal al delito de robo. En su virtud, y atendiendo á la conveniencia y aun necesidad de uniformar en punto tan importante las diversas prácticas que en los Tribunales del Reino y hasta en las diversas Salas de los mismos se observa en su calificacion; considerando que ningun artículo del Código, fuera de los 432 y 433, objeto de la cuestion, es bastante para determinar su verdadero sentido, por cuya razon hay que encerrarse para resolver la dificultad dentro de la letra y el espíritu de la ley; considerando que las expresiones indicadas se refieren á uno de los fenómenos mas or-

dinarios de la vida civil: que las leyes hechas para todos se han de suponer escritas en estilo vulgar, salvo lo que, por ser de exclusivo dominio de la ciencia tenga un tecnicismo propio: considerando que lo que generalmente se entiende por lugar habitado es aquel que tiene habitantes ó moradores, ora se hallen estos en su albergue, ora en la calle, y no habitado cuando aquellos levantan la casa; y por último, que una vez definido lo que es lugar habitado, no puede ofrecer dificultades al juzgador la calificacion de los robos cometidos en dependencias que forman cuerpos en el edificio que habite una persona ó familia, ó en mansiones de puro recreo, fuera de las épocas en que residen en ellas sus dueños ó en otras circunstancias excepcionales; S. M., oido el parecer del Tribunal Supremo de Justicia, y de conformidad con lo expuesto por el mismo, ha tenido á bien resolver que es y se entiende lugar habitado aquel que sirve de morada á una persona, aun cuando el morador falte de él accidental y momentáneamente.»—De Real órden, etc.—Madrid 13 de enero de 1864. (*Gac. del 20*.)

Ley de 22 junio de 1864.

Estableciendo la penalidad y reglas de procedimiento para las falsedades, coacciones y otros abusos en las elecciones de diputados á Cortes y provinciales.—Se halla inserta en DELITOS ELECTORALES.

Ley de 22 junio de 1864.

Estableciendo requisitos y formalidades para la celebracion de reuniones publicas, procesiones cívicas y religiosas y reuniones electorales.—Se halla inserta en REUNIONES PÚBLICAS É ILÍCITAS.

R. D. de 17 mayo de 1855.

Por este decreto se publicó el reglamento para la ejecucion de la ley de montes de 24 de mayo de 1863. El título XI trata de la policia de los montes públicos, y es necesario consultarle en todo lo relativo á la penalidad de los delitos é infracciones de las ordenanzas de montes.—V. MONTES.

R. O. de 14 abril de 1866.

Sobre el art. 2.^o del Código, rebaja ó conmutacion de penas.

(GRAC. Y JUST.) La Reina (Q. D. G.) ha tenido á bien mandar que cuando las Salas de Justicia de las Audiencias expongan lo conveniente con arreglo á lo prescrito en el párrafo último del art. 2.^o del Código pe-

nal, propongan siempre, no solo la rebaja ó conmutacion de pena que á su juicio proceda en el caso objeto de la exposicion, sino el grado y extension en que deba comprenderse, debiendo al mismo tiempo acompañar á la exposicion copia certificada de la sentencia que haya dado ocasion á la consulta.—De Real órden lo digo á V. S. para su inteligencia y efectos correspondientes, debiendo acusar su recibo.—Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 14 de abril de 1866.—Calderon y Collantes.—Sr. Regente de la Audiencia de Albacete.

Ley de 18 julio de 1866.

Disponiendo cómo han de sufrirse las penas de cadena y reclusion temporales, presidio y vigilancia de la autoridad, se halla en PRESIDIOS.

Ley de 20 marzo de 1867.

Trata esta ley, declarada tal, por la de 17 de mayo del mismo año, de los delitos contra el órden público, y es necesario consultarla, no solo en cuanto define aunque de una manera genérica los referidos delitos, segun dejamos dicho en la nota á la pág. 166, en cuanto establece un procedimiento especial en las causas de esta naturaleza.—Se halla inserta en ORDEN PÚBLICO.

Ley de 27 marzo de 1868.

Se reforma el art. 258 del Código. Queda inserta por nota al mismo.

Inserto el Código penal cuyas disposiciones son de constante y general aplicacion, reproduciríamos aquí gustosos el juicio que en su día hicimos de tan importante obra y los artículos dedicados á examinar críticamente la reforma verificada en 1850; pero el deseo de no alargar demasiado este artículo y de no salirnos de nuestro plan, nos hace desistir de esta idea (1). De lo que no podemos excusarnos es de dar el índice sistemático y formar un repertorio alfabético

co para facilitar así doblemente la busca y consulta de sus disposiciones á los casos que ocurran. Hé aquí:

INDICE.

LEY de 19 de marzo de 1848, mandando que se publique como ley el proyecto del Código penal; p. 143.

Real decreto de igual fecha, disponiendo que empiece á regir el Código desde 1.º de julio de 1848.

Real órden de 9 de junio de 1850, mandando hacer segunda edicion.

Real decreto de 30 de junio de 1850, disponiendo la observancia de la segunda edicion reformada.

Libro primero.

DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LOS DELITOS Y FALTAS, LAS PERSONAS RESPONSABLES Y LAS PENAS.

TITULO I.—De los delitos y faltas, y de las circunstancias que eximen de responsabilidad criminal, la atenúan ó la agravan; arts. 1.º al 10.

Cap. I.—De los delitos y faltas; arts. 1.º al 7.º

Cap. II.—De las circunstancias que eximen de responsabilidad criminal; art. 8.º

Cap. III.—De las circunstancias que atenúan la responsabilidad criminal; art. 9.º

Cap. IV.—De las circunstancias que agravan la responsabilidad criminal; art. 10.

TITULO II.—De las personas responsables de los delitos y faltas; arts. 11 al 18.

Cap. I.—De las personas responsables criminalmente de los delitos y faltas; artículos 11 al 14.

Cap. II.—De las personas responsables civilmente de los delitos y faltas; arts. 15 al 18.

TITULO III.—De las penas; arts. 19 al 144.

Cap. I.—De las penas en general; arts. 19 al 23.

Cap. II.—De la clasificacion de las penas; arts. 24 y 25.

Cap. III.—De la duracion y efecto de las penas; arts. 26 al 59.—Sec. 1.ª—Duración de las penas; arts. 26 al 28.—Sec.

(1) A la reforma del Código de 1848, dedicamos en la *Revista de los Tribunales y de la Administracion*, segundo semestre de 1850, una série de artículos. En el primero, pág. 6, nos lamentábamos de la reforma misma y de cómo se hizo, porque con ella degeneró la admirable obra de nuestro Código. «El Código penal de hoy, decíamos, no es ya, ni la sombra del Código de 1848; es á nuestro modo de ver una obra enteramente nueva aunque fundada sobre las

ruinas y con los escombros de la antigua.» Por mas que veamos su forma exterior primitiva, añadíamos; ¡qué importa si ha sido minada en lo mas hondo de sus cimientos!

En el segundo artículo y sucesivos indicamos uno por uno los inconvenientes de la reforma de sus disposiciones mas fundamentales, ó sea de las que sirven de base á la penalidad de todos los delitos, demostrando prácticamente aquellos inconvenientes.

cion 2.^a—Efectos de las penas segun su naturaleza respectiva; arts. 29 al 49.—Sec. 3.^a—Penas que llevan consigo otras accesorias; arts. 50 al 59.

Cap. IV.—De la aplicacion de las penas; articulos 60 al 85.—Sec. 1.^a—Reglas para la aplicacion de las penas á los autores de delito consumado, de delito frustrado y tentativa, y á los cómplices y encubridores; arts. 60 al 66.—Sec. 2.^a—Reglas para la aplicacion de las penas en consideracion á las circunstancias atenuantes ó agravantes; arts. 67 al 75.—Seccion 3.^a—Disposiciones comunes á las dos secciones anteriores; arts. 76 al 85.

Cap. V.—De la ejecucion de las penas y de su cumplimiento; arts. 86 al 114.—Seccion 1.^a—Disposiciones generales; articulos 86 al 88.—Sec. 2.^a—Penas principales; arts. 89 al 112.—Sec. 3.^a—Penas accesorias; arts. 113 y 114.

TITULO IV.—*De la responsabilidad civil*; arts. 115 al 123.

TITULO V.—*De las penas en que incurren los que quebrantan las sentencias, y los que durante una condena delinquen de nuevo*; arts. 124 y 125.

Cap. I.—De las penas en que incurren los que quebrantan las sentencias; art. 124.

Cap. II.—De las penas en que incurren los que durante una condena delinquen de nuevo; art. 125.

TITULO VI.—*De la prescripcion de las penas*; arts. 126 y 127.

Libro segundo.

DELITOS Y SUS PENAS.

TITULO I.—*Delitos contra la religion*; articulos 128 al 138.

TITULO II.—*Delitos contra la seguridad exterior del Estado*; arts. 139 al 159.

Cap. I.—Delitos de traicion; arts. 139 al 144.

Cap. II.—Delitos que comprometen la paz ó la independencia del Estado; arts. 145 al 153.

Cap. III.—Delitos contra el derecho de gentes; arts. 154 al 159.

TITULO III.—*Delitos contra la seguridad interior del Estado y el orden público*; arts. 160 al 212.

Cap. I.—Delitos de lesa Majestad; arts. 160 al 166.

Cap. II.—Delitos de rebelion y sedicion; articulos 167 al 188.—Sec. 1.^a—Rebelion; arts. 167 al 173.—Sec. 2.^a—Sedicion; arts. 174 al 180.—Sec. 3.^a—Disposiciones comunes á las dos secciones anteriores; arts. 181 al 188.

Cap. III.—De los atentados y desacatos contra la autoridad, y de otros desórdenes públicos; arts. 189 al 206.

Cap. IV.—De las asociaciones ilícitas; articulo 207 al 212.—Secc. 1.^a—Sociedades secretas; arts. 207 al 210.—Secc. 2.^a—De las demás asociaciones ilícitas; arts. 211 y 212.

TITULO IV.—*De las falsedades*; arts. 213 al 252.

Cap. I.—De la falsificacion de sellos y marcas; arts. 213 al 217.—Secc. 1.^a—De la falsificacion de la firma ó estampilla Real, sello del Estado y firma de los Ministros; art. 213.—Secc. 2.^a—Falsificacion de los demás sellos públicos; arts. 214 al 216.—Secc. 3.^a—Falsificacion de marcas y sellos de particulares; art. 217.

Cap. II.—De la falsificacion de moneda; articulos 218 al 222.

Cap. III.—De la falsificacion de billetes de Banco, documentos de créditos del Estado y papel sellado; arts. 223 al 225.

Cap. IV.—De la falsificacion de documentos; arts. 226 al 234.—Secc. 1.^a—De la falsificacion de documentos públicos ó oficiales y de comercio; arts. 226 y 227.—Secc. 2.^a—De la falsificacion de documentos privados; art. 228.—Secc. 3.^a—De la falsificacion de pasaportes y certificados; arts. 229 al 234.

Cap. V.—Disposiciones comunes á los capítulos anteriores; arts. 235 al 240.

Cap. VI.—Del falso testimonio, y de la acusacion y denuncia calumniosas; arts. 241 al 249.

Cap. VII.—De la usurpacion de funciones, calidad y nombres supuestos; arts. 250 al 252.

TITULO V.—*Delitos contra la salud pública*; arts. 253 al 257.

TITULO VI.—*De la vagancia y mendicidad*; arts. 258 al 266.

TITULO VII.—*De los juegos y rifas*; arts. 267 y 268.

TITULO VIII.—*De los delitos de los empleados públicos en el ejercicio de sus cargos*; arts. 269 al 331.

Cap. I.—Prevaricacion; arts. 269 al 275.

Cap. II.—Infidelidad en la custodia de presos; arts. 276 y 277.

Cap. III.—Infidelidad en la custodia de documentos; arts. 278 al 281.

Cap. IV.—Violacion de secretos; arts. 282 al 284.

Cap. V.—Resistencia y desobediencia; articulos 285 al 287.

Cap. VI.—Denegacion de auxilio y abandono de destino; arts. 288 y 289.

Cap. VII.—Nombramientos ilegales; art. 290.
 Cap. VIII.—Abusos contra particulares; artículos 291 al 303.
 Cap. IX.—Abusos de los eclesiásticos en el ejercicio de sus funciones; arts. 304 al 306.
 Cap. X.—Usurpacion de atribuciones; artículos 307 al 309.
 Cap. XI.—Prolongacion y anticipacion indebidas de funciones públicas; arts. 310 al 312.
 Cap. XII.—Disposicion general á los capítulos precedentes de este título; art. 313.
 Cap. XIII.—Cohecho; arts. 314 al 317.
 Cap. XIV.—Malversacion de caudales públicos; arts. 318 al 322.
 Cap. XV.—Fraudes y exacciones ilegales; arts. 323 al 328.
 Cap. XVI.—Negociaciones prohibidas á los empleados; arts. 329 y 330.
 Cap. XVII.—Disposicion general; art. 331.
 TÍTULO IX.—*Delitos contra las personas*; arts. 332 al 357.
 Cap. I.—Homicidio; arts. 332 al 335.
 Cap. II.—Del infanticidio; art. 336.
 Cap. III.—Abortos; arts. 337 al 340.
 Cap. IV.—Lesiones corporales; arts. 341 al 347.
 Cap. V.—Disposicion general; art. 338.
 Cap. VI.—Del duelo; arts. 349 al 357.
 TÍTULO X.—*Delitos contra la honestidad*; arts. 358 al 374.
 Cap. I.—Adulterio; arts. 358 al 362.
 Cap. II.—Violacion; arts. 363 al 365.
 Cap. III.—Del estupro y corrupcion de menores; arts. 366 y 367.
 Cap. IV.—Rapto; arts. 368 al 370.
 Cap. V.—Disposiciones comunes á los tres capítulos precedentes; arts. 371 al 374.
 TÍTULO XI.—*De los delitos contra el honor*; arts. 375 al 391.
 Cap. I.—Calumnia; arts. 375 al 378.
 Cap. II.—Injurias; arts. 379 al 383.
 Cap. III.—Disposiciones generales; arts. 384 al 391.
 TÍTULO XII.—*De los delitos contra el estado civil de las personas*; arts. 392 al 404.
 Cap. I.—Suposicion de partos y usurpaciones del estado civil; arts. 392 al 394.
 Cap. II.—Celebracion de matrimonios ilegales; arts. 395 al 404.
 TÍTULO XIII.—*De los delitos contra la libertad y seguridad*; arts. 405 al 424.
 Cap. I.—Detenciones ilegales; artículos 405 al 407.
 Cap. II.—Sustraccion de menores; artículos 408 al 410.
 Cap. III.—Abandono de niños; arts. 411 y 412.

Cap. IV.—Disposicion comun á los tres capítulos precedentes; art. 413.
 Cap. V.—Allanamiento de morada; arts. 414 al 416.
 Cap. VI.—De las amenazas y coacciones; arts. 417 al 421.
 Cap. VII.—Descubrimiento y revelacion de secretos; arts. 422 al 424.
 TÍTULO XIV.—*Delitos contra la propiedad*; arts. 425 al 479.
 Cap. I.—De los robos; arts. 425 al 435.—Secc. 1.^a—Del robo con violencia en las personas; arts. 425 al 430.—Secc. 2.^a—Del robo con fuerza en las cosas; arts. 431 al 435.
 Cap. II.—De los hurtos; arts. 436 al 439.
 Cap. III.—De la usurpacion; arts. 440 al 442.
 Cap. IV.—Defraudaciones; arts. 443 al 459.—Secc. 1.^a—Alzamiento, quiebra é insolvencia punible; arts. 433 al 448.—Seccion 2.^a—Estafas y otros engaños; artículos 449 al 459.
 Cap. V.—De las maquinaciones para alterar el precio de las cosas; arts. 460 al 463.
 Cap. VI.—De las casas de préstamos sobre prendas; arts. 464 al 466.
 Cap. VII.—Del incendio y otros estragos; arts. 467 al 473.
 Cap. VIII.—De los daños; arts. 474 al 478.
 Cap. IX.—Disposiciones generales; artículo 479.
 TÍTULO XV.—*De la imprudencia temeraria*; art. 480.

Libro tercero.

DE LAS FALTAS.

TÍTULO I.—Arts. 481 al 499.
 TÍTULO II.—Disposiciones comunes á las faltas; arts. 500 al 505.
 DISPOSICION FINAL.—Art. 506.
 DISPOSICIONES TRANSITORIAS.
 LEY provisional reformada prescribiendo reglas para la aplicacion de las disposiciones del Código penal; pág. 202.
 APENDICE. Reales decretos y órdenes no incorporados en el texto del Código penal y de la Ley provisional dictada para su ejecucion, pág. 207.

Si el índice sistemático del Código ayuda al estudio de sus importantes disposiciones, el indicador alfabético es para la consulta diaria doblemente útil porque la facilita notablemente en un documento de tal magnitud é importancia. Veamos.

Repertorio alfabético.

Abandono de niños: arts. 411, 412 y 413.—
De destino; 289 (1).
Abogados; revelacion de secretos; 284.
Aborto (causado de propósito); 337 á 340.
Abusos de los eclesiásticos; 302 y siguientes;
—De los empleados contra particulares, 291 á 303 y 313.
—En elecciones de diputados á Cortes y provinciales; 196 á 200 y ley 22 junio de 1866.
Accion penal.—No la extingue el perdon de la parte en los delitos que se persiguen de oficio; 21.
—Sobre su prescripcion; nota á la p. 163.
Actos públicos.—Turbar gravemente el orden en ellos; 196.
Acusacion ó denuncia; pena de la calumnia; 248 y 249.
Adivinaciones y otros abusos de credulidad; núm. 6.º, art. 495.
Adulterio y amancebamiento; 358 á 362.
Alcaldes y tenientes.—Su jurisdiccion en materia de faltas. Ley provisional reglas 1.ª á la 24 y 56; R. O. 1.º de julio de 1848; y de 26 setiembre de 1851.
Alcaldes corregidores.—No tienen jurisdiccion para conocer de las faltas; regla 5.ª
Alzamiento, quiebra é insolvencia punibles; 443 al 448.
Allanamiento de morada; 414 á 416, y 299.
—Id. de la del Rey; 166.
Amenazas y coacciones personales; 417 á 421; núm. 5.º art. 484; núm. 12, art. 485, y núm. 10, art. 494.
Apoderamiento, con violencia, de cosa del deudor, etc.; 421.
Apostasia, 136 y 137.
Arbolado.—V. Daños.
Archiveros.—Infidelidad en la custodia de documentos; 278 á 281.
Argolla (Pena de); 24, 29, 51, 52, y 113.
Armas.—Véase la circunstancia 22, art. 10, y núm. 6.º, art. 494.
Arresto mayor (Pena); 24, 26 y 111.
—*menor* (Pena); 24, 26 y 112.
Asociaciones ilícitas.—Sociedades secretas, 207 á 210; otras sociedades ilícitas; 211 y 212.—V. Reuniones.
Atentados contra la autoridad y desacatos, y otros desórdenes públicos; 189 y sigs.
Autores de delito consumado.—Su responsabilidad, etc., 11, 12, 60 y 121.—De delito frustrado; 3.º, 61, 65 y 66.

Autoridad.—Simple desobediencia, falta de respeto, etc., considerados como faltas; núm. 7. art. 483; núm. 1.º, 486 y números 2.º, 3.º y 9.º, art. 494.—V. Atentados.
Bañarse quebrantando las reglas de decencia y seguridad, etc., núm. 12, 495.
Bigamia; 395 y siguientes.
Blasfemia; núm. 1.º, art. 481.
Bulas.—Ejecutar ilegalmente bulas, breves, rescriptos, etc., 145 y su nota.
Cadáveres (delitos de exhumacion y mutilacion de, etc.); 138.
Cadena (pena de) perpétua; 24, 52, 94, 96 á 99; disposicion 2.ª de las transitorias.—Temporal; 24, 26, 28, 55, 95, 96 á 99; disposicion 2.ª de las transitorias.
Calumnia.—Lo que es; penas, etc.; 375 á 378, y 384 á 391.—V. Acusacion.
Cargos públicos.—Prolongar ó anticipar ilegalmente su ejercicio; 310 á 312.
Castigos arbitrarios.—Pena del que los impone, etc.; 291, 292 y siguientes.
Caucion.—Lo que es esta pena, su duracion, etc.; 24, 26 y 43.
Causas: contra reos ausentes: R. D. de 26 de mayo de 1854.
—De conspiracion: ratificacion de castigos, etc., art. 4.º, R. D. de 26 de mayo de 1854.
—Correccionales: procedimiento, etc.: regla 38 de la Ley provisional y art. 5.º del Real decreto de 26 de mayo de 1854.—De vagos; art. 6.º R. D. 26 mayo de 1854.
—En que la ley no admite sino la acusacion privada; 359, 360, 371, 388, 391 y 21.—En estas causas no se consultan las sentencias cuando ninguna de las partes apela; art. 1.º de la R. O. de 8 de abril de 1863.
Caza y pesca (Infracciones en materia de); núm. 7.º, art. 484; 25 y 26, art. 495.
Cencerradas; núm. 14, art. 485, y 2.º artículo 493. Ver tambien el 197.
Circunstancias agravantes.—Cuáles son etc. 10, 67, 68, 70 á 74, y regla 4.ª del 125.—Atenuantes; 9, 67, 69 á 74.—Que eximen de responsabilidad; 8.º y 479.
Coacciones personales.—V. Amenazas.
Código civil.—Aplicacion del penal cuando se refiere á disposiciones del civil; art 3.º del R. D. de 21 de setiembre de 1848.
Cohecho.—Abuso ú omision de empleado por dádiva ó promesa; 314 á 317.
Coligaciones.—Para encarecer ó abaratar abusivamente el precio de las cosas; 461.
Comiso.—En casos de delito; 24 y 59.—En las faltas; 502 y 503.
Cómplices.—Quiénes lo son, etc.; 11, 13, 63, 65 y 66.—De faltas; 501.
Confesion con cargos.—Su abolicion; ar-

(1) Entiéndase que estos números se refieren á los artículos del Código, aun cuando no se exprese. Cuando se citan reglas, entiéndanse de la Ley provisional. Los decretos y órdenes citados están en el Apéndice al Código.

- título 1.º del R. D. de 26 de mayo de 1854. *Confinamiento* mayor; 24, 26, 28 y 107.—Menor: 24, 26, 28 y 107.
- Conspiración* para cometer un delito; 4.º y 62.
- Contiendas de competencia*; entre dos ó mas jueces, nota al art. 309.—Entre la autoridad judicial y las administrativas, nota al mismo artículo.
- Contrabando*; nota al art. 7.º
- Contratos simulados* en perjuicio de tercero; 456.
- Correspondencia* (Intercepcion ó apertura de); 283.
- Corrupcion* de menores; 366 y 367.
- Costas y gastos del juicio*; 46 á 49; reglas 51 á 54 de la Ley provisional, y R. O. de 5 de mayo de 1863.
- Costumbres*.—Ofensas graves al pudor y á las costumbres; 365.—Mas leves; números 1.º y 2.º, art. 482; núm. 8.º, art. 485 y 12, art. 495.
- Cuadrilla* (Robos en); 425, 426 á 428.
- Culto*.—Turbar su ejercicio, etc.; 429 y 435.
- Curadores*.—Cosas que les están prohibidas; 324 y 402.—Su responsabilidad civil; 45.
- Daños y perjuicios* (Reparacion de) 48, 49, 115 y siguientes.
- Daño* (Delitos de); 474 al 478 y 479.—Faltas: núms. 2.º, 3.º y 13 del art. 485, y artículos 487, 488, 490, 492, 496, 497, 498 y 499.
- Daños en montes* públicos. Cuando su importe exceda de 1,000 escudos, conocen de ellos los Tribunales de justicia con arreglo á las prescripciones del Código penal. Hasta dicha suma, corresponde el castigo á la Administracion, como y en la forma que determina el tít. IX del Real decreto reglamento de 17 de mayo de 1855, inserto en MONTES.
- Defensa por pobre*; arts. 7.º y 8.º del Real decreto de 26 de mayo de 1854.
- Defraudaciones*, estafas, engaños punibles; 443 á 459 y 479; núms. 1.º y 2.º de la 2.ª parte del art. 482.
- Degradacion*; 24, 29, 51, 52 y 114; de eclesiásticos y militar; nota el art. 114.
- Delito y falta*.—Apreciacion de los hechos que son susceptibles de diferentes grados de culpabilidad; art. 5.º, R. D. de 22 de setiembre de 1848.—Su definicion, division, etc.; 1.º á 7.º
- Delitos cometidos de nuevo* durante una condena; 125.
- Delitos electorales*; 496 á 500.
- Delitos militares*.—Disposicion 1.ª de las transitorias del Código, y art. 7.º
- Delitos* no sujetos á las disposiciones del Código: 7.º y su nota.
- Demarcaciones municipales*.—R. O. de 1.º de julio de 1848 y 26 setiembre de 1854.
- Demencia* despues del delito y despues de la sentencia; 88, y R. O. de 13 de enero de 1864.
- Denegacion* de auxilio á la autoridad; 288.
- Denuncia calumniosa* (V. Acusacion y)
- Derecho de gentes*.—Atentados contra monarcas extranjeros ó sus representantes: Piratería, etc.; 454 á 459.
- Desacatos* contra la autoridad y desórdenes públicos; 189 y siguientes.—Contra el Rey, núm. 4.º, art. 481.
- Desobediencia* grave á la autoridad; 285.—Por el inferior á su superior jerárquico; 286 y 287.
- Destierro*; 24, 58, 109.
- Destruccion* ó alteracion de mojones ó señales destinadas á fijar los términos de los pueblos ó prédios; 442.
- Detencion* ilegal de personas.—Por particulares; 405 á 407 y 413.—V. Abusos.
- Documentos* (Infidelidad en la custodia de); 278 á 281.
- Duelo* ó desafio; 349 á 357.
- Eclesiásticos*.—(V. Abusos de los)
- Edad*.—Su influencia en la atenuacion ó agravacion de las penas; 8, 9, 16 y 72.
- Elecciones populares*; 196 á 200.
- Empeño de cosa ajena*, finjiéndose dueño; 456.
- Empleados públicos*.—Delitos en el ejercicio de sus cargos, etc.; 269 á 330.—Quiénes se reputan empleados para los efectos de la ley; 331.
- Encubridores de delito*.—Quiénes son; su pena, etc.; 11, 14, 64 á 66.
- Estado* (delitos contra la paz ó la independencia del); 145 á 153
- Estado civil* de las personas.—Suposicion de partos y usurpaciones del estado civil; 392 á 394.
- Estados mensuales* de causas; art. 12, Real decreto de 26 de mayo de 1854.
- Estafas* y otros engaños; 449 á 459.
- Estupro*; 366 y 371 á 374.—V. Causas.
- Exacciones ilegales*.—Por empleados: 323 á 325.
- Exequatur*.—Sobre ejecucion de bulas, breves, etc., sin los requisitos legales; 145 y su nota.
- Exhortos*. Modo de despacharse los de oficio; art. 10 del R. D. de 26 de mayo de 1854.
- Exhumacion* de cadáveres humanos, etc.; 138.
- Exposicion de niños*, quebrantando los reglamentos; 484, núm. 3.

Extrañamiento perpétuo; 24, 54 y 103.—
Temporal; 24, 26, 28, 57 y 103.

Facultativos.—Abusos de profesion; 232, 340 y 393; núm. 10, art. 485, y 3.º, artículo 495.

Falsedades en elecciones populares: 199 á 201.—De la firma ó estampilla del Rey; 213.—De sellos públicos; 214 y 215.—De marcas ó sellos particulares; 217.—De moneda; 218 á 222.—De billetes de Banco, papel del Estado y sellado; 223 á 225.—De documentos públicos, oficiales y de comercio; 226 y 227.—De documentos privados; 228.—De pasaportes y certificados; 229 á 234.—Disposiciones comunes; 235 á 240.

Falso testimonio; 241 á 249.

Faltas; lib. 3.º, (arts. 481 á 505.—Exclusiva competencia de la jurisdiccion ordinaria para el castigo de las comprendidas en el Código penal; nota al art. 482, reglas 1.ª y 56 de la Ley provisional, y nota á la regla 1.ª de id.

Farmacéuticos, núms. 6.º y 7.º, art. 486.

Fianza carcelera y de cárcel segura; reglas 34 y 35 de la Ley provisional y R. D. de 30 de setiembre de 1863.

Fingirse autoridad, etc.; 250 á 252; número 4.º, art. 485.

Fraudes y exacciones ilegales, por empleados; 323 á 325.

Fueros.—No se hace novedad, salvo en lo relativo á faltas; regla 56 y nota.

Fuga de presos; connivencia; 204, 276 y 277.

Heridas.—V. Lesiones.

Homicidio (con circunstancias mas ó menos graves): 332 á 335 y 348.—V. Infanticidio.

Hurtos.—436 á 439 y 479.

Imprenta (delitos de); 7 y su nota.

Imprudencia temeraria; 480 y 493, núm. 5.º

Incendios etc.; 467 á 473.—V. Daños: número 10, art. 486; 2.º, 4.º y 5.º, artículo 494; y 13, art. 495.

Indemnización de perjuicios. Lo que comprende, su regulacion, accion para reclamar, etc.; 118 y siguientes y su nota.

Indulto. Sus efectos, etc.; 45 y 50 y nota.

Infamia.—No hay penas infamantes; artículo 23.

Infanticidio, ó muerte de un recién nacido, 336.

Infidelidad en la custodia de documentos; 278 á 281.

Inhabilitacion (Pena de); 24, 25, 26, 30 á 35, 38, 39, 44 y 124.—Efectos de la inhabilitacion y suspension; nota al art. 44.

Injurias; 379 á 391 y núm. 4.º del art. 493.—Siendo al Rey; 164 y 165.—Siendo á los Cuerpos colegisladores; 191 y 192.—Sobre la concesion de licencia para perse-

guir las causadas en juicio; 390 y nota.—V. Causas.

Insolvencia punible.—V. Quiebra.

Interdiccion civil—Lo que es, etc.; 24, 41, 52 á 55.

Juegos prohibidos: casas, jugadores; 267 y 268; núm. 1.º, art. 485 y nota.

Juicios de faltas: competencia, formalidades, fueros etc.; reglas 1.ª á la 25 y 56 de la Ley provisional y notas..

Juramento: no se haga en los escritos; Real decreto de 26 de mayo de 1854.

Jurisdiccion penal.—Reside exclusivamente en los Tribunales; nota 15 al art. 22.

Lesá Majestad (Delito de); 160 á 166.

Lesiones corporales.—Castrar, mutilar, herir, golpear, maltratar de obra; 341 á 347 y 348; núm. 4.º, art. 484, y 11, artículo 485.

Leyes sanitarias; 7.º y su nota con los demás artículos allí citados.

Líndes de los pueblos y heredades.—(Véase Destrucion de).

Listas de causas (suprimidas); art. 12 del R. D. de 26 de mayo de 1854.

Lugar habitado.—Lo que por tal se entiende; R. O. de 13 de enero de 1864.

Llaves falsas, ganzúas; etc. 431.

Malversacion de caudales públicos; 318 á 322.

Manceba de hombre casado, con escándalo; 362.

Maquinaciones contra el precio de las cosas; 460 á 464.

Marcas industriales; 217 y su nota; 457 y su nota.

Matrimonios ilegales: pena del bigamo; 395.

—Del ordenado in sacris ó ligado con voto solemne de castidad; 395.—Del que tiene impedimento canónico; 396.—Del en que interviene el párroco por sorpresa ó con engaño; 398.—Del menor sin consentimiento paterno; 399.—De la viuda antes de los 301 dias de viudez, ó antes del alumbramiento, si quedare en cinta; 400.

—Del tutor ó curador y de sus hijas etc. con la menor; 402.—Del adoptante con hija adoptiva; 401.—Eclesiásticos culpables etc.; 403.

Medicamentos deteriorados, etc., etc.; 255; núm. 9.º, art. 485, y 6.º y 7 art. 486.

Mendicidad.—Pedir habitualmente limosna sin licencia de la autoridad, etc.; 263 á 266, y su nota.

Menor.—Abuso de su impericia ó pasiones, haciéndole otorgar alguna obligacion, descargo, etc., etc.; 458.—V. Matrimonios: Sustraccion: Circunstancia atenuante: Abandono de niños, etc.

- Monarcas extranjeros.*—V. Derecho de gentes.
- Moneda* (falsificacion de, etc.); 218 á 222.—Rehusar la legítima; núm. 4.º, art. 495.
- Montes* (delitos en); 7 y nota.
- Muerte* (pena de); sus efectos, ejecucion, etc.; 24, 50, 78, 89 á 94.
- Muerte.*—Cuando la jurisdiccion militar imponga la pena de muerte en garrote, á ella le toca la ejecucion, etc.; nota al art. 89.—Sobre reclamacion de fuerza armada, que auxilie para la ejecucion; nota al art. 89.
- Mujeres.*—Cumplimiento de sus condenas; 93, 99 y disposicion 2.ª de las transitorias.
- Multas* (pena de); 22, 24, 48, 49, 75, 82 y 85.—V. Faltas: Alcaldes.
- Mutilacion*; 138 y 341 á 348 y su nota.
- Negociaciones prohibidas á los empleados*; 329 y 330.
- Niños.*—V. Abandono: Exposicion de.....
- Nombramientos ilegales* (proponerlos ó hacerlos); art. 290.
- Notificacion de sentencias*; art. 2.º R. O. de 8 de abril de 1863, p. 211.
- Orden público.*—V. Atentados: desacatos: Piratería: Rebelion: Sedicion; 160 y sigs.
- Parricida*; 91 y 332.
- Pasaportes falsos*, etc.; 229 al 231.
- Pastores.*—V. Daños.
- Penas en general*; 19 á 23, 86 á 88 y 505.—Su clasificacion; 24 y 25.—Su duracion; 26 á 28 y 83.—Sus efectos; 29 á 49.—Accesorias que llevan consigo; 50 á 59 y 78.—Su aplicacion; 60 á 85.—Escalas graduales; 79 y siguientes.—Su ejecucion; 86 á 114; disposiciones transitorias.
- Personas responsables criminalmente*; 11 y 14.—Idem civilmente; 15 á 18 y 115 á 123.
- Piratería*; 156 á 159.
- Policia sanitaria.*—Alterar bebidas, etc., con mezclas nocivas á la salud; 257.—V. Salud pública.
- Presos.*—V. Fuga.
- Presidio mayor*; 24, 26, 28, 56 y 104.—Idem menor correccional.—Los mismos.
- Prestamistas*; 464 á 466.
- Prevaricacion de jueces*, empleados públicos, abogados y procuradores, asesores, árbitros, etc.; 269 á 275.
- Prescripcion de las penas*: cuando tiene lugar; 126 y 127.
- Prision y arresto.*—Casos en que tiene lugar, reglas 25 á la 37 de la Ley provis. y R. D. de 30 de setiembre de 1853.—Abono en algunos casos de la mitad de la prision sufrida, etc., R. D. de 9 de octubre de 1853.
- Prision mayor*; 24, 26, 28, 58 y 106.—Idem menor y correccional, los mismos, y R. O. 4 de enero de 1854.—Idem por vía de sustitucion y apremio; 49, 106, R. O. de 4 de enero de 1854.
- Prisiones ilegales*; 295 á 298.—V. Detencion.
- Procesiones cívicas.*—V. Reuniones públicas.
- Procuradores síndicos.*—Ejercen el ministerio fiscal, regla 22.
- Profanacion de las sagradas formas de la Eucaristía, imágenes, etc.*; 131 y 132.
- Propiedad* (Delitos contra la).—V. Robos: Hurtos: Usurpacion: Defraudaciones:
- Propiedad literaria é industrial* (Delito de defraudacion de la); 457 y nota al mismo.
- Proposicion para cometer un delito*; 4.º y 62.
- Providencias gubernativas.*—V. Faltas.
- Quebrantamiento de condenas*; 124.
- Quiebra é insolvencia punibles*; 443 á 449.
- Rapto de mujer*; 368 á 370, y 372 á 374.
- Rebelion*; 167 á 173 y 181 á 188.
- Reclusion perpétua*; 24, 53 y 100, regla 2.ª adicional.—Temporal; id. y art. 2.º
- Recursos de fuerza*; conminaciones, etc., regla 55 de la Ley provisional.
- Regicidio*; 160 á 166.
- Reglamentos*; Aplicacion del Código cuando se refiere á sus disposiciones, arts. 1.º y 2.º del R. D. de 22 setiembre de 1848.
- Rehabilitacion en derechos, cargos, etc.*, perdidos en virtud de pena; 29, 44 y 45.
- Relegacion perpétua*; 24, 54 y 102.—Temporal; 24, 26, 28, 57 y 102.
- Religion* (Delitos contra la); 128 á 138.
- Reo de muerte.*—V. Muerte.
- Reprension pública*; 24 y 110.—Privada; los mismos.
- Resistencia y desobediencia*; 285 á 287.
- Reuniones públicas.*—Ley de 22 de junio de 1864; nota al art. 210.
- Rifas no autorizadas*; 267, núm. 1.º, art. 485.
- Robos*; 425 á 437.
- Sal* (Defraudacion en la venta de la); 482 y nota al mismo.
- Salud pública* (Elaboracion ó venta de sustancias nocivas á la), etc.; 253 á 257.—Medicamentos deteriorados, etc.; 255.
- Secretos* (Violacion de); 282 á 284 y 306. Por los que ejercen profesion, etc.; 284.—Por particulares, criados, etc.; 422 á 424.
- Sedicion*; 174 á 188.
- Seducion de tropas*, etc.; 183.—Para los delitos de rebelion, sedicion ó simple desercion, 183.
- Sentencias.*—V. Notificacion.
- Soborno.*—V. Cohecho.
- Sobreseimiento*; regla 36 á 50.

Sociedades secretas.—V. Asociaciones.

Soltura de presos; 204.

Subastas (Fraudes en las); maquinando alterar el precio de las cosas, etc.; 460.

Suposición de partos.—V. Estado civil.—De nombres.—V. Usurpacion.

Suspension de empleados públicos: cuándo no se reputa pena; 22.

Sustraccion de menores; 408 á 410 y 413.

Tentativa de delitos; 3, 62, 65 y 66.—Para abolir en España la religion católica; 128.

Tercera instancia.—Base para determinar su procedencia; regla 46 de la Ley provisional y art. 3.º de la R. O. de 8 de abril de 1863.

Traicion y tentativa contra la independencia é integridad del Estado; 139 á 144.

Tumultos.—V. Orden público.

Tutores.—Cosas que les están prohibidas: 324 y 402.

Usurpacion de funciones, calidad y nombres supuestos, etc.; 250 á 252 y núm. 4.º; art. 485.—De atribuciones; 307 á 309; —De cosa inmueble ó de un derecho real; 440 á 442.—V. Estado civil.

Vagancia; 258 á 262 y su nota.

Vejaciones injustas; 300.

Venganzas; art. 475.

Vigilancia de la autoridad (pena de); 24, 25, 42, 43, 50, 52, 53, 54, 56 y 57.

Violacion ó fuerza á mujer; 363 y 372 á 374.

Violencias; 420 y 421.

Visitas de cárceles; art. 11. R. D. de 26 de mayo de 1854.

—V. DELITOS: FALTAS: FUERO: PRESIDIO.

COFRADÍAS Y OTRAS ASOCIACIONES PIADOSAS. Llámense cofradías las asociaciones que se forman competentemente autorizadas para un fin religioso ó para obras de piedad. Para que su establecimiento sea legítimo han de ser autorizadas con aprobacion del Gobierno y del obispo diocesano, sin cuyos requisitos deben impedir las bajo su responsabilidad las justicias de los pueblos, conforme á la ley 6.ª, tít. II, lib. I y ley 12, tít. XII, lib. XII, Nov. Rec.—Segun lo que se desprende de esta última ley, se han conocido en España otras asociaciones gremiales ó políticas sin fin ú objeto religioso, cometándose con este motivo grandes abusos á que se quiso poner remedio, exigiendo para su establecimiento autorizacion expresa del Gobierno dada en toda forma, y previniendo á las justicias que no consientan ni

tolerar las que carezcan de la autorizacion Hé aquí las disposiciones dictadas sobre este asunto.

Ley 12, tít. XII, lib. XII, Nov. Rec. (1).

«..... Revocamos todas y cualesquier cofradías y cabildos que desde el año 64 acá se han hecho en..... nuestros reinos, salvo las que han sido hechas y despues acá se hubieren hecho solamente para causas pías y espirituales, y precediendo nuestra licencia y autoridad del prelado, y que de aquí adelante no se hagan otras, salvo en la manera susodicha, so grandes penas. Y otrosí defendemos y mandamos, que en las..... hechas hasta el año de 64, no se habiendo hecho como dicho es.... que no se junten ni alleguen los.... cofrades de ellas, antes..... las deshagan y revoquen por ante el escribano públicamente cada y cuando por la justicia ordinaria..... les fuere mandado ó fueren requeridos por cualquier vecino, donde so pena que, cualquier que lo contrario hiciere, muera por ello, y..... sus bienes..... sean confiscados para nuestra cámara y fisco:.....»

Ley 13, tít. y lib. citados.

«..... Las cofradías que hay en estos reinos de oficiales se deshagan y no las haya de aquí adelante aunque estén por Nos confirmadas.» (Año 1552.)

Ley 6.ª, tít. II, lib. I.

«Mando, que á consecuencia de lo dispuesto en la ley 13, tít. XII, lib. XII todas las cofradías de oficiales ó gremios se extingan; encargando muy particularmente á las Juntas de caridad, que se erijan en las cabezas de Obispado ó de partidos ó provincias, las conmuten ó sustituyan en montes píos, y acopios de materias para las artes y oficios, que faciliten las manufacturas y trabajos á los artesanos, fomentando la industria popular.

Que las cofradías erigidas sin autoridad real ni eclesiástica queden tambien abolidas por defecto de autoridad legítima en su fundacion, segun lo prevenido en la ley 12 del mismo título y libro, destinando su fondo ó caudal al propio objeto que el de las gremiales.

Que las aprobadas por la jurisdiccion real y eclesiástica sobre materias ó cosas espirituales ó piadosas puedan subsistir, refor-

(1) D. Enrique IV en Toledo año de 1462 pet. 36 y Sta. María de Nieva año 1473, pet. 31, y D. Carlos I en Madrid, año de 1534, pet. 29.

mando los excesos, gastos superfluos y cualesquiera otro desorden, y prescribiendo nuevas ordenanzas, que se remitan al Consejo para su exámen y aprobacion.

Que las Sacramentales subsistan tambien por el sagrado objeto de su instituto, y necesidad de auxiliar á las parroquias; con tal que, si no se hallaren aprobadas por las jurisdicciones real y eclesiástica, se aprueben, arreglándose antes las ordenanzas convenientes con aprobacion del Consejo, trasladándolas todas, y fijándolas en las iglesias parroquiales;

Y últimamente, que las cofradías que se hallen actualmente toleradas con solo la autoridad del Ordinario, aunque atendido el literal contexto de la citada ley 12 se debian declarar abolidas, por no haber intervenido el Real asenso en su ereccion, con todo será bien cometerlas al nuevo exámen de las Juntas de caridad, para que procuren reunir las á las Sacramentales de parroquias, destinando á socorro de los pobres el caudal ó fondo de las que se deban suprimir.

Y para obviar iguales contravenciones en lo sucesivo y renovar la observancia de las leyes del Reino en esta parte, prohibo por punto general la fundacion ó ereccion de cofradías, congregaciones ó hermandades, en que no intervenga la aprobacion real y eclesiástica::: y mando que se expida la Real cédula correspondiente á conseguir la reforma, extincion y respectivo arreglo de las cofradías erigidas en las provincias y diócesis del Reino é islas adyacentes; y que se comunique á los Ordinarios eclesiásticos y exentos órdenes circulares, para que procedan de acuerdo con las Juntas generales de caridad y magistrados seculares, en asuntos de tanta gravedad é importancia.» (*Año de 1783.*)

Resolucion de 9 de mayo de 1778.

Aparece por nota á la ley anterior y dice textualmente:

«Por resolucion á consulta del Consejo de 9 de mayo de 1778 se sirvió S. M. aprobar una instruccion formada para el gobierno y direccion de la Junta general de caridad establecida en Madrid, removiendo dudas por medio de los sólidos principios adoptados en ella, y para que pudiese ser modelo en el resto del Reino, compuesta de 21 capítulos, de los cuales los cuatro últimos respectivos á cofradías son del tenor siguiente:

En cuanto á cofradías ó están fundadas conforme á la ley 3, tít. XIV, lib. VIII de la Recopilacion ó no (1).

XVIII.—En el caso de no estar fundadas conforme á la citada ley, como cuerpos ilícitos, á la autoridad pública pertenece abolirlas: basta la material inspeccion de faltarles los debidos requisitos en su origen ilegal; y este es uno de los encargos de la Junta, agregando sus haberes á los pobres con preferencia en el socorro á los individuos existentes de tales cofradías que deben abolirse por esta causa.

XIX.—Si están fundadas con la debida autorizacion real y eclesiástica conforme á las leyes, el concurso de ambas autoridades reunido en la Junta de caridad puede y debe suprimir las superfluas, pues de él depende su tolerancia ó abolicion, y esta se hace precisa cuando son muchas y su multiplicidad distrae á los fieles de las parroquias y les empobrece con muchas exacciones.

XX.—Esta abolicion aumentará la concurrencia de los fieles á su parroquia, y librará á los vasallos de un peso intolerable, haciéndose pobres muchas familias con las comilonas y gastos superfluos que hacen en estas cofradías, especialmente cuando llegan á ser oficiales en ellas, en que suele sobresalir la vanidad mas que la devocion; de manera que con ella lograrán los vecinos de Madrid y su jurisdiccion tanto auxilio, como si se les remitiesen todos los tributos; y es á la verdad un socorro de los mayores que se pueda dar á estas familias, libertándolas de caer en pobreza, y poniéndolas en estado de dar socorros para alivio de los pobres.

XXI.—No se han de comprender en esta generalidad, las Sacramentales, por haberlas preservado el Consejo al tiempo de erigir la Junta; aunque no se ha de confundir la devocion con la vanidad en gastos superfluos.»

O. del Regente de 18 noviembre de 1844.

Que cesen las que no estén autorizadas por el Gobierno.

(GRAC. Y JUST.) «El Regente del Reino ha tomado en consideracion lo expuesto por varias autoridades acerca del abuso que en muchos puntos del Reino se hace de las cofradías y asociaciones formadas bajo la advocacion de algun nombre sagrado ó otro objeto piadoso, sin haber obtenido la autorizacion legal competente, y aun con manifiesta tendencia á menguar el respeto debido á las leyes, rebajando los vínculos de obediencia para con el Gobierno que la nacion se ha dado.

Ya de muy antiguo los legisladores españoles habian previsto este exceso, y para contenerle dictaron disposiciones severas que se hallan vigentes en la actualidad, com-

(1) Es la ley 12, tít. XII, lib. XII Nov. Rec.

prendidas en la Nov. Rec. Estas providencias son aplicables á los casos denunciados ahora, y por tanto es obligacion de todas las autoridades velar por su exacto cumplimiento, disponiendo que cesen desde luego todas las cofradías y cualesquiera otras asociaciones religiosas, ya originarias de España ó ya del extranjero, que no hubiesen obtenido la autorizacion del Gobierno. Para este fin se ha servido mandar S. A. que se recuerde á las autoridades, así judiciales como gubernativas, lo dispuesto en las leyes 6.^a, tít. II, libro I, y 12, tít. XII, lib. XIII de la Novísima Recopilacion, que son relativas á la materia. —De orden de S. A. etc.—Madrid 18 de noviembre de 1841.» (CL. t. 27, p. 793.)

R. O. de 8 febrero de 1842.

Sobre disolucion de las cofradías ilegales.

(GRAC. Y JUST.) No siendo posible al Gobierno en sus muchas y graves atenciones revisar los estatutos y constituciones de las innumerables cofradías fundadas en casi todas las iglesias de la Monarquía, y mucho menos conocer la inmediata utilidad que la conservacion de algunas puede traer á las poblaciones en que se hallan, se ha servido S. A. el Regente del Reino mandar, que los prelados diocesanos, de acuerdo con los Jefes políticos de las respectivas provincias en que estén enclavadas las diócesis, propongan á este Ministerio las cofradías que deban suprimirse; teniendo en consideracion que únicamente se han de conservar aquellas que sean conformes á las disposiciones canónicas y civiles que rigen en la materia, pudiendo entre tanto ambas autoridades permitir la continuacion de aquellas que estimen necesarias y convenientes por su institucion y piadosos objetos, y que no sean contrarias á lo dispuesto en uno y otro derecho.—De orden de S. A. etc.—Madrid 8 de febrero de 1842. (CL. t. 28, p. 52.)

R. D. de 17 abril de 1854.

(GRAC. Y JUST.) Estando dispuesto por la ley 12, tít. XII, lib. XII de la Nov. Rec. y por la 6.^a, tít. II, lib. I de la misma que las cofradías ó hermandades erigidas sin la autorizacion competente sean disueltas, la Reina (Q. D. G.) se ha servido mandar que en el término de un mes remita V. S. á este Ministerio una nota de las que en esa diócesis se encuentran en este caso para resolver lo conveniente en justa observancia de la ley.—De Real orden etc.—Madrid 17 de abril de 1854.—Sr. Obispo de..... (CL. t. 61, p. 521.)

R. O. de 23 noviembre de 1854.

(GRAC. Y JUST.) «Por las leyes del Reino y repetidas Reales disposiciones, se halla prevenido desde muy antiguo, y últimamente por la R. O. de 17 de abril de este año, que no se consienta ni tolere que en las iglesias se establezca ni funcione ninguna cofradía ni otra asociacion ni congregacion piadosa, cuyos estatutos no hubiesen merecido previamente la aprobacion de S. M. y obtenido la Real cédula que al efecto se expide con las formalidades de costumbre. De las noticias reunidas recientemente en este Ministerio, aparece no obstante que sin tales requisitos funcionan en algunos pueblos diferentes congregaciones de este género, y queriendo la Reina (Q. D. G.) que sin excusa alguna se cumpla y lleve á efecto cual corresponde cuanto en la materia previenen las indicadas disposiciones, se ha servido S. M. mandar:

1.^o Que los Prelados y Ordinarios diocesanos remitan con toda brevedad al Ministerio de mi cargo, un estado circunstanciado de todas las congregaciones piadosas que legítimamente establecidas existen en todas y cada una de las parroquias de sus respectivas diócesis, expresando en las diferentes casillas, segun el orden que se indica, el nombre de la provincia civil, el del pueblo y el de la parroquia en que se halla establecida cada congregacion, el título y la advocacion de esta misma, la fecha de la Real cédula de la aprobacion de sus estatutos (de los cuales se acompañará con la contestacion un ejemplar impreso, puesto que segun se ordena en las Reales cédulas respectivas de aprobacion, deben tenerlos en aquella forma), y el número de congregantes ó individuos que en el dia pertenecen á cada congregacion. Tambien se manifestará si cada una de estas funciona regularmente con arreglo á sus estatutos, ó si por el contrario no funciona, por qué razon y desde qué época.

2.^o Es la voluntad de S. M. que los Ordinarios diocesanos hagan las prevenciones mas terminantes y precisas á los curas párrocos de sus diócesis, á fin de que bajo su inmediata y mas estrecha responsabilidad prohiban desde luego en sus iglesias el ejercicio de cualquier acto propio de congregacion á todas aquellas que no estén legítimamente establecidas, ó que no cumplan las prescripciones de sus respectivos estatutos, y las condiciones de la Real cédula de su aprobacion, ó que no hubiesen obtenido esta; dando cuenta al diocesano para lo que procediese.

3.^o Que los Gobernadores civiles vigilen

el exacto cumplimiento de lo prevenido en el artículo anterior; dando parte á este Ministerio.» (*Bol. of. de Granada, núm. 152.*)

R. D. de 15 febrero de 1867.

Véanse los arts. 24 al 27 de este decreto, y tambien el 23 de la Real cédula de 3 de enero de 1854 en el artículo CURAS PÁRROCOS.

Tan grande llegó á ser el abuso de las cofradías, y tan inmenso su número, que el ilustre Campomanes en sus Discursos sobre el fomento de la industria popular y sobre escuelas patrióticas, no pudo menos de alzar su ilustrada voz contra ellas. Decía que eran muchas las fundadas contra las leyes y que podían dar un caudal considerable para enseñar y mantener á los pobres, en vez de convertir sus fondos y contribuciones ilegales en comilonas y otros gastos superfluos ó viciosos en gran parte. Entonces se trataba en el Consejo de reducirlas y darlas este y otros destinos útiles, y se dictaron á poco en efecto la resolución de 9 de mayo de 1788 y la que es hoy ley 6.^a, tit. II, lib. I de la Novísima Recopilación (1).

Hoy además de dichas leyes y de las disposiciones que quedan insertas, es necesario tener en cuenta lo dispuesto en la Real cédula de 3 de enero de 1854 y en el R. D. de 15 de febrero de 1867, ambos sobre arreglo parroquial. La Real cédula establece en el art. 23 que las cofradías en debida forma establecidas en las parroquias y sus anejos estén sujetas á los párrocos en todo lo concerniente al tiempo y modo de celebrar las funciones religiosas, sin perjuicio de lo que respecto de su régimen interior prevengan sus estatutos legítimamente aprobados. Y el decreto de 1867 reconoce la necesidad de establecer bases generales para la organización de estas asociaciones, estando entre tanto á las constituciones ó estatutos de cada una, cuya aprobacion, segun dejamos dicho, corresponde al Gobierno.

(1) Existían en la Península el año 1770 segun las noticias recogidas por el Consejo de de Castilla, 25927 cofradías, y sus gastos anuales ascendían á 11.687,618 rs.

COHECHO. Delito en que incurren los empleados y toda clase de funcionarios públicos, haciendo ó dejando de hacer algo lícito ó ilícito mediante dádiva ó promesa, ó recibiendo regalos que se les hicieren en consideración á su oficio. Además de los funcionarios incurren tambien en dicho delito los sobornantes. (Arts. 314 al 317 y el 331 del Código penal.)

COLACION DE BENEFICIO. Es la concesión de un beneficio hecha canónicamente por el que tiene poder para ello á un clérigo capaz de poseerlo. Es propio y exclusivo de los Obispos dar la colación ó institución canónicas de las dignidades, canongías, y beneficios de todas clases, segun se dispone en el Real decreto de 5 de noviembre de 1852 inserto en CONCORDATOS.—V. tambien BENEFICIO: CAPELLANÍA, etc.

COLACION DE BIENES. El acto en virtud del cual los descendientes llevan á la masa comun de la herencia de su padre ó ascendiente, los bienes que de él han recibido para que contándoseles como parte de su legítima se haga la división con la debida igualdad, sin perjudicar á las legítimas de los demás herederos.—V. PARTICIONES DE HERENCIAS.

COLADA. Equivalente en algunas provincias á *paso ó tránsito* para los ganados entre dos términos ó pueblos.—Véase CAÑADAS.

COLECCION LEGISLATIVA. Llámase así la coleccion de leyes, Reales decretos y órdenes, reglamentos, instrucciones y circulares del Gobierno y de las Direcciones generales, y los fallos del Consejo de Estado y Tribunal Supremo de Justicia. Se mandó formar con este nombre por R. O. de 6 de marzo de 1846, pero es continuacion de la llamada *de decretos*, que se viene publicando desde 1814. Se han dictado varias resoluciones para mejorar esta publicacion oficial, pero falta mucho para que llegue á ser lo que es conveniente, segun hicimos ver en la introduccion de este DICCIONARIO.

R. O. de 6 marzo de 1846.

(GRAC. Y JUST.) Manda que desde 1.^o de año de la fecha se publique por el Ministerio

de Gracia y Justicia la *Coleccion legislativa de España*, en lugar de la de decretos, bajo las bases que establece que no se transcriben por haber sido reformada en 6 de junio de 1856. (CL. t. 36, p. 425.)

R. D. de 6 junio de 1856.

Medidas para la publicacion de la Coleccion legislativa.

(GRAC. Y JUST.) «Artículo 1.º Cada uno de los Ministerios pasará al de Gracia y Justicia, inmediatamente despues de su expedicion, copia por duplicado de todas las leyes, reglamentos, instrucciones, decretos y Reales órdenes de interés general, provincial ó municipal correspondientes á sus ramos respectivos, haciéndolo desde luego de las expedidas desde 1.º de enero del corriente año hasta la fecha de este decreto que no se hayan publicado en la *Gaceta* oficial.

Lo mismo observarán con sus circulares cada una de las autoridades y Cuerpos centrales facultados para expedirlas, y tambien el Tribunal Supremo de Justicia y el Contencioso-administrativo con las decisiones y sentencias motivadas sobre asuntos de su competencia:

Art. 2.º Cuando en alguno de los Ministerios ó Cuerpos centrales no se hubiese expedido en todo un mes disposicion alguna de las que comprende el artículo anterior, se pasará al de Gracia y Justicia, el dia 1.º del siguiente, una nota que así lo exprese para que sirva de comprobante en el negociado que tiene á su cargo la publicacion de la *Coleccion legislativa*.

Art. 3.º Los oficiales encargados en cada una de las Secretarías del despacho y en las dependencias centrales de la remision de las notas y copias de que tratan los artículos anteriores, serán responsables de toda demora ú omision en que incurran, á cuyo efecto se dará parte á sus respectivos jefes tan luego como se note la falta.

Art. 4.º En el Ministerio de Gracia y Justicia se llevará un registro de todos los documentos que deban insertarse en la *Coleccion legislativa*, ordenándolos y numerándolos si fuere posible por fechas.

Se foliarán los libros que se destinen á este registro, y por el Ministerio de Gracia y Justicia se rubricarán los fóllos primero y último de cada uno de ellos, y todos los intermedios por el subsecretario del mismo Ministerio; adoptándose además las formalidades que se estimen oportunas para asegurar la integridad y autenticidad de los documentos expresados.

Art. 5.º De todos los que se reunan en

Tomo III.

cada mes, se pasará á la imprenta un ejemplar autorizado con el sello del dicho Ministerio.

Art. 6.º En cada uno de estos documentos se pondrá, por el negociado que entiende en la publicacion el epígrafe y numeracion que corresponda, remitiéndolos á la imprenta sin demora para que se proceda á su impresion desde luego con sujecion á las siguientes prevenciones:

1.ª Se colocarán los documentos en la *Coleccion* por el órden que indique su número respectivo, expresándose este.

2.ª En la márgen superior de las páginas de la izquierda se indicará el trimestre á que los números contenidos en las mismas pertenezcan, y en igual sitio de las de la derecha el año.

3.ª Al principio de cada uno de estos números se expresará el dia y mes de su fecha, el de su publicacion y el epígrafe que corresponda.

4.ª La *Coleccion legislativa de España* se imprimirá ó repartirá por números ó entregas mensuales.

5.ª Los de cada trimestre se reunirán en uno ó mas tomos, iguales en tamaño á los publicados hasta el dia.

Art. 7.º Cada uno de los tomos llevará dos índices, el uno cronológico y el otro alfabético. En aquel se clasificarán las disposiciones por Ministerios, dando el primer lugar á las leyes, el segundo á las disposiciones del Gobierno y el tercero á las circulares de las Autoridades y Cuerpos centrales.

Despues de los índices se colocarán por separado y por órden de fechas, las decisiones y sentencias del Tribunal Supremo de Justicia y las del Contencioso-administrativo.

Art. 8.º En el mes siguiente á la terminacion de cada tomo, se reunirán los documentos aun no comunicados que les correspondan, si algunos hubiere, y se incluirán en él por suplemento.

Art. 9.º Se procederá desde luego á la refundicion de los índices cronológicos y alfabéticos de los tomos correspondientes á los diez años que lleva de publicacion la *Coleccion legislativa*, y reduciéndolos á uno solo, se imprimirán por separado para que formen en los sucesivos en su clase una serie de tomos distintos de los que la *Coleccion* abraza.

De diez en diez años se practicará la misma operacion con los índices de los tomos que se publiquen en dichos períodos.

Art. 10. La imprenta remitirá al negociado respectivo del Ministerio de Gracia y Justicia los ejemplares que el Gobierno prefije de los números de la coleccion impresos

en los primeros quince días de cada mes para su inmediata distribución.

Art. 11. La fecha de la publicación de las leyes en la *Gaceta* es la única que debe tenerse presente para la aplicación de las mismas y para sus citas oficiales.

Art. 12. La *Colección legislativa de España* se declara propiedad del Estado, oficial y única auténtica, y se prohíbe la publicación de otra cualquiera.

Art. 13. Ningún periódico podrá conservar ni tomar el carácter ni la denominación de oficial, excepto la *Gaceta*, los *Boletines* de los Ministerios y los de los Gobiernos de provincia.—Dado en Palacio á 6 de junio de 1856. (CL. L. 68, p. 390.)

La *Colección de decretos* desde 1814 á 1845 inclusive consta de 45 tomos; y continuando la misma numeración la *Colección legislativa*, llegamos á fin de 1867 al tomo 98.—Además de estos 98 tomos, hay otros 10 de las épocas constitucionales de 1810 y 1820 y tres apéndices y muchos tomos de *Colección de sentencias y decisiones del Consejo de Estado y del Tribunal Supremo de Justicia*.

En la introducción á esta obra página III del tomo I hemos expuesto el «*Plan de una reforma importante en la publicación de las disposiciones legislativas*» y creemos que es muy necesario hacer algo para salir del caos. Lo contrario es complicar las leyes como dice un economista para sujetarlas después á las interpretaciones y comentarios de los juristas; o buscar una enfermedad para necesitar de médico.

COLECTOR DE EXPOLIOS Y VACANTES.

—V. EXPOLIOS.

COLEGIO DE ABOGADOS.—V. ABOGADO:

en cuyo artículo se halla cuidadosamente compilada la legislación vigente en la materia, incluso los estatutos de los colegios.

COLEGIOS DE SEGUNDA ENSEÑANZA.

Hállase en el artículo INSTRUCCIÓN PÚBLICA reunida toda la legislación vigente sobre este ramo; la ley de 1857, el reglamento vigente de segunda enseñanza, el de universidades y el general, así como los respectivos programas de estudios.

CÓLERA MORBO.—V. EPIDEMIAS, en

cuyo artículo se inserta la recopilación de las instrucciones que deben observar los Gobernadores de provincias y las autoridades locales para prevenir el desarrollo de epidemias ó minorar sus efectos.

COLMENARES.—V. ABEJAS.

COLONIAS AGRÍCOLAS. La ley de 21 de noviembre de 1855 protegiendo el establecimiento de colonias agrícolas ó nuevas poblaciones para reducir á cultivo terrenos baldíos y realengos del Estado etc., se halla inserta en el artículo BALDÍOS, t. 2.º p. 600.

COLUSION. Criminal inteligencia entre dos ó mas para lograr un objeto con perjuicio de otro, ó con el designio de encubrir un fraude, etc. La palabra colusion no envuelve la idea concreta de un delito determinado, sino que es una enunciativa genérica, de dolo, de falsedad, de estafa, de defraudación, de prevaricación ó de cohecho, según los casos y circunstancias que en ellos concurren de personas y cosas.

COLLAR. Insignia y distintivo de la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia. Hay dos collares, ó sea un *gran collar* de oro esmaltado para los actos mas solemnes, y un *collar chico* para el uso diario, ambos con los atributos de la justicia, y pendiente la medalla que usa la alta magistratura.

El gran collar consta de 18 eslabones esmaltados, y 16 unidos, y dos sueltos; nueve contienen en su centro un libro, atravesado por una espada con esta inscripción *Justicia y Ley*; y los restantes contienen también en su centro un peso, un haz de mimbres (las fascas romanas) y una hacha; en la parte inferior pende otro eslabon, formado por dos culebras esmaltadas de verde; en el centro un ojo con una ráfaga, de las cuales pende un escudo de armas reales. Pesa 18 onzas, dos ochavas, tres tomines, es de ley de 22 quilates, y su valor intrínseco y hechura es de 60,000 reales.

El *collar chico*, para el uso diario, se compone de una medalla de oro con las armas de España, esmaltadas en el anverso, y en el reverso la palabra y atri-

butos de justicia, tambien esmaltadas; de una corona de oro ésmaltada, unida á la parte superior de la medalla, y de un collar de oro y esmalte azul que se une á dicha corona.

Ambos collares son propiedad del Estado y se transmiten á los sucesores de la Presidencia.—V. INSIGNIAS DE LA MAGISTRATURA.

COMADRE. La mujer que tiene al niño *bautizando* en la pila bautismal.—

V. PARENTESCO. Tambien se dice comadre la mujer que tiene por oficio asistir á los partos, ó prestar su auxilio pericial á las parturientas.—V. PARTERAS ó MATRONAS.

COMANDA. En Aragon es la escritura pública de depósito de efectos ó dinero, quedando el comandatario obligado á devolverlos cuando sean pedidos. Siendo el depósito gratuito no puede pactarse rédito; pero ha solido hacerse el fraude de establecer la comanda á plazo fijo, y así se embebia el rédito en el capital.

COMANDANTE. Aunque la enunciativa de comandante es genérica para todo el que manda, y en su acepcion militar para todo el que manda un cuerpo de ejército ó una porcion de tropa, su significacion concreta es la de jefe de batallon ó escuadron. Comandante de armas es el que tiene el mando de una plaza, y comandante general el jefe superior militar de una provincia.—Véase AUTORIDADES MILITARES: EJÉRCITO: DIVISION TERRITORIAL.

COMANDITA. Sociedad mercantil contrahida entre varias personas de las cuales una ó mas ponen su dinero y las otras su trabajo ó industria en lugar de fondos.—V. SOCIEDADES.

COMERCIANTE. En rigor se llama comerciante al que teniendo la capacidad legal ha sido inscrito en la matrícula de comerciante para dedicarse habitualmente al comercio, en el cual debe figurar su posicion política. Estos están obligados á las prescripciones del Código de comercio y sujetos por lo tanto á los Tribunales especiales del ramo, en todo lo que tenga relacion con su vida

mercantil. En sentido mas lato y vulgarmente se dá el nombre de comerciante á todo el que se dedica á comprar y vender, aunque no esté inscrito en la matrícula de los comerciantes. Unos y otros se dividen en comerciantes al por mayor y comerciantes al por menor, y todos deben satisfacer las cuotas que por el subsidio industrial segun la clase de comercio á que se dedique respectivamente corresponda.

Los comerciantes propriamente dichos deben llevar los libros que marca el Código de comercio, en los cuales no pueden hacerse pesquisas sino en muy determinados casos, haciendo fé los mismos en los juicios, si están redactados con las formalidades que prescribe el referido Código.

COMERCIO. La negociacion ó tráfico que se hace comprando, vendiendo ó permutando unas cosas con otras, sean frutos, artefactos, letras de cambio, etc. Se llama comercio *terrestre* el que se hace por tierra; *marítimo* el que se verifica por mar; *interior* el que se hace entre los pueblos ó provincias de una misma nacion, en el cual se comprende el de *cabotaje* que es el que se hace entre puertos de la nacion, solamente permitido á los buques de construccion, propiedad y tripulacion españolas, salvo que la mercancía sea carbon de piedra, en cuyo caso puede hacerse tambien en bandera extranjera. De *importacion* se llama el que se hace trayendo á nuestro país mercancías extranjeras, y de *exportacion* por el contrario llevando las nuestras á país extranjero.

Como agente de la riqueza, el comercio mantiene la comunicacion entre el productor y el consumidor, aproxima las regiones mas lejanas y aumenta las riquezas del estado, trayendo de otros países los productos que necesita en cambio de los suyos excedentes á su consumo. Prospera el comercio, dice el Sr. Canga, aumentando cuanto se pueda la extension del *mercado*, y entran como agentes los canales, los ferro-carriles, los buenos caminos generales y vecinales, la navegacion del mar y de los

rios; los alivios de las cargas y gavelas, la libertad para emplear los capitales, las letras de cambio, las monedas y la economía del tiempo.

COMERCIO DE BUHONERÍA. Se llama *buhonería* la tienda portátil ó que el dueño lleva colgada de los hombros compuesta de chucherías ó baratijas de poca monta, como botones, agujas, cintas, peines, alfileres, y aun lienzo, paños etc.

Sobre el ejercicio de la buhonería, hay que tener en cuenta la libertad de industria decretada por el art. 8.º de la ley de 8 de junio de 1813 (V. en ACOTAMIENTO, t. 1.º, pág. 106) y la prohibición de establecer puestos públicos con la exclusiva como no sea, para la venta al por menor del vino, aguardiente, aceite y carnes, y solo en ciertos pueblos y previa la autorizacion competente, segun hemos dicho en el artículo ABASTOS, t. 1.º, págs. 23 á 41.

Las disposiciones que directamente sobre este asunto ha publicado el Gobierno son de tenerse en cuenta para evitar abusos. Dicen así:

R. O. de 12 abril de 1843.

(HAC.) «El Regente del Reino, enterado del expediente promovido por varios comerciantes de Málaga solicitando no se tolere la expendición de géneros por los vendedores ambulantes, por los perjuicios que irrogan al comercio establecido en puestos fijos, con local abierto y sujeto á las contribuciones públicas, se ha servido declarar S. A. que resuelto como está por el Ministerio de la Gobernación de la Península que se deje libre y expedita la venta por las calles á dichos vendedores ambulantes, se inculque á las autoridades de Hacienda la obligación de vigilar que aquellos paguen el subsidio y otra cualquiera contribucion legalmente establecida, así como al Gobierno político compete disponer que los vendedores ambulantes, para ejercer su profesion, deben sacar la oportuna licencia expedida por el mismo.—De órden de S. A. lo comunico á V. S. para su inteligencia y efectos correspondientes en el concepto de que se traslada esta disposicion con esta fecha al Sr. Ministro de la Gobernación de la Península para su conocimiento y fines convenientes.—Dios, etc.—Madrid

12 de abril de 1843. (*C. del Cast. t. 11, página 104.*)

R. O. de 23 julio de 1850.

(COM., INST. Y O. P.) «El ejercicio en la buhonería, ó sea la facultad de vender por las calles géneros de lícito comercio en puestos ambulantes, á pesar de estar autorizado por las leyes que rigen, la Administración económica del Reino ha encontrado en diversas provincias dificultades y obstáculos que, al paso que quebrantan la unidad administrativa, contrariaban la libertad de la industria sancionada por nuestra legislación con menoscabo de los ingresos del Tesoro público. Son varias las disposiciones que antes de ahora se dictaron sobre esta materia, ya por el Ministerio de Hacienda, ya por el de la Gobernación del Reino; pero no guardando entre sí la necesaria armonía, fueron causa de conflictos entre las autoridades de las provincias y de la diversidad de aplicación que sobre esta parte importante de nuestro tráfico interior tiene la legislación económica, que debe ser una y de una misma manera aplicada en todos los puntos del Reino.

Enterada, pues, de todo S. M. la Reina (Q. D. G.), y considerando que sancionada por nuestra legislación la libertad de la industria, es lícito á cualquiera dedicarse á comprar y vender en los términos que considere mas ventajosos á sus intereses, siempre que en ello se conforme á lo que las leyes dispongan sobre el particular:

Considerando que reconocida por el actual sistema tributario, como lo estaba por el antiguo, la libertad del ejercicio de la buhonería, es necesario y urgente que la ejecución de aquellas disposiciones legales sea uniforme en todas las provincias del Reino:

Y considerando, por último, que esta necesaria uniformidad es hoy mas fácil de conseguir, reuniendo los Gobernadores de las provincias todas las facultades administrativas y económicas, divididas antes entre los Intendentes y los Jefes políticos; oído el Consejo Real, se ha servido declarar libre en todo el Reino la venta de lienzo, paños y efectos de buhonería en puestos ambulantes por las calles, en los términos prevenidos por las Rs. Ords. de 26 de noviembre de 1842 y 12 de abril de 1843, siendo al mismo tiempo la voluntad de S. M. que se prevenga á V. S., como de su Real órden lo ejecuto, que bajo ningun pretexto consienta que se ponga el menor obstáculo al ejercicio de esta industria, siempre que los que á ella se dedican llenen los requisitos prevenidos por las

leyes y disposiciones vigentes.—De Real orden, etc.—Madrid 23 de julio de 1850.» (CL. t. 50, p. 658.)

Que no se opongan obstáculos á la venta de lienzos, paños y efectos de buhonería en puestos ambulantes por las calles, siempre que los que se dediquen á esta industria llenen los requisitos prevenidos por las leyes y disposiciones vigentes, es lo que acertadamente se manda en las anteriores Reales órdenes. Y como las leyes no exigen otros requisitos que la matrícula industrial y el pago corriente de la cuota impuesta, á los que se hallen en este caso, lejos de ponerles obstáculos, debe protegérseles en el ejercicio de su industria.—V. CONTRIBUCION INDUSTRIAL. RENTAS DE ADUANAS.

COMERCIO DE CEREALES.—V. GRANOS Y HARINAS.

COMERCIO DE OBJETOS DE COMER, BEBER Y ARDER.—V. ABASTOS.

COMERCIO DE GRANOS.—V. GRANOS Y HARINAS.

COMERCIO DE VINOS.—V. VINOS.

COMICIO (comitium.) Lugar en la plaza romana donde se hacian las asambleas del pueblo; estaba cubierto este sitio, y en él habia una tribuna para arengar, llamada *Rostra*.

COMICIOS. Asambleas ó Juntas del pueblo en Roma para elegir sus magistrados y tratar de los negocios públicos. Habia comicios por curias (*comitia curiata*), comicios por centurias (*comitia centuriata*), y comicios por tribus. (Adam. Antigüedades romanas.)

COMISARIO. El que tiene poder ó facultad de otro para ejecutar alguna orden ó entender en algun negocio.

COMISARIO TESTAMENTARIO. Aquel á quien comete alguno la facultad de hacer testamento en su nombre.—V. TESTAMENTO POR COMISARIO.

COMISARIO DE GUERRA. Funcionario encargado de fiscalizar é intervenir las operaciones de la gestion y contabilidad de la Hacienda militar.—V. EJÉRCITO (*Administracion militar*.) REVISTAS ADMINISTRATIVAS.

COMISARIO GENERAL DE CRUZADA. Funcionario ó dignidad eclesiástica en-

cargado de la administracion de los fondos de la Bula de Cruzada. Fué suprimido este cargo por R. D. de 6 de abril de 1851.—V. CRUZADA.

COMISARIO DE VIGILANCIA. Empleado del Gobierno encargado del ramo de proteccion y seguridad pública. Hoy se denomina Inspector de vigilancia.—V. VIGILANCIA.

COMISARIOS REALES. Las personas nombradas de Real orden para tomar parte en los trabajos de los Cuerpos Colegisladores para sostener los proyectos de ley.—V. CONSTITUCION.

COMISION. Facultad, encargo que se da á alguna persona para hacer alguna cosa. El número de individuos nombrados para entender en algun negocio, preparar un trabajo y examinar ó dilucidar alguna cuestion.

COMISION DE APREMIO.—V. APREMIOS: CONTRIBUCIONES.

COMISIONES RÉGIAS DE AGRICULTURA.—V. AGRICULTURA.

COMISION CENTRAL DE LIQUIDACION y cobranza de atrasos de rentas y contribuciones. Fué creada por Real decreto de 6 de setiembre de 1850 y suprimida por otro de 22 de abril de 1853, en el que se dispuso á la vez que las Direcciones respectivas vuelvan á ejercer en los ramos de su respectivo cargo las funciones que le competian en la liquidacion, cobranza, formalizacion, compensacion y declaracion de insolvencia de los atrasos hasta fin de 1849.—Véase COMPENSACIONES: HACIENDA.

COMISION DE CÓDIGOS.—V. CODIFICACION: CÓDIGO CIVIL.

COMISIONES INVESTIGADORAS DE MEMORIAS ETC.—V. MEMORIAS: ANIVERSARIOS y OBRAS PÍAS.

COMISIONES MILITARES. Estos terribles Tribunales fueron establecidos por R. O. de 13 de enero de 1824, y conocian ejecutiva y sumariamente de los delitos políticos, que en aquella época lo eran los actos mas indiferentes, si su autor era conocido ó tildado como liberal. Por R. O. de 26 de agosto de 1828 se mandaron cesar estos Tribunales, de nuevo restablecidos en 18 de marzo de

1831 para morir definitivamente en 29 de julio de 1834.

COMISO. Pena de perdimiento de alguna cosa, ó del género en que se trafica con infraccion de las leyes fiscales, ó de las caballerías, carruajes ó buques donde se trasportan ó hallaren efectos de contrabando, en ciertos casos, ó de los instrumentos que provengan de un delito ó falta, ó de los instrumentos con que se ejecuta.

Sobre el comiso que tiene lugar por razon de algun delito ó falta remitimos á nuestros lectores á los arts. 59, 502 y 503 del Código penal, que íntegro se halla inserto en este tomo.

En cuanto al que tiene lugar por razon de contrabando y fraude hay que estar á lo ordenado en el R. D. de 20 de junio de 1852, en la instruccion sobre consumos de 1.º de julio de 1864 y en el cap. XI de la instruccion de aduanas de 10 de setiembre de 1857, cuyas disposiciones se insertan en el artículo CONTRABANDO y DEFRAUDACION, y en CONTRIBUCION DE CONSUMOS. Allí podrán nuestros lectores consultar las dudas que les ocurran sobre imposicion, venta y distribucion de comisos; y sobre todo, las mas frecuentes que ocurren sobre la participacion que se dá en ellos á los empleados de aduanas y consumos, á la fuerza de carabineros ó del ejército, ó del resguardo, á los Alcaldes, alguaciles y escribanos, y á los particulares mismos.

COMISORIO.—V. COMPRA-VENTA § III, y PACTO COMISORIO.

COMODATO. Es un contrato de uso muy frecuente. Consiste en entregar á otro *gratuitamente* una cosa que no se consume por el primer uso para que la utilice por algun tiempo y despues la devuelva. Es, pues, comodato el préstamo que se hace de un caballo, de un coche, de un libro etc. cuando no media precio, pues mediando este seria alquiler. El que dá la cosa en comodato se llama *comodante*, y el que la recibe *comodatario*, este queda obligado á cuidar mucho la cosa, á servirse de ella solo para el uso para que se le ha dado,

y á devolverla en el buen estado en que la recibió, salvo si se perdiese ó empeorase sin su culpa, para lo cual en ciertos casos siempre es bueno proveerse de un certificado que así lo acredite (Leyes 2.ª, 3.ª, 7.ª, 8.ª, 9.ª, tit. II, Partida 3.ª—V. CONTRATOS.

COMPADRE. El que saca de pila á un hijo ó hija de otro, ó es padrino de él en la confirmacion.—V. PADRINO. PARENTESCO.

COMPANÍA. Contrato que consiste en poner dos ó mas sus bienes ó industria con el objeto de hacer alguna ganancia, la cual se distribuirá en la forma convenida. Se perfecciona por el consentimiento de los contrayentes, con arreglo á lo dispuesto en la ley 1.ª, tit. X, Partida 3.ª, y consiguientemente puede ser justificado no solamente por documentos públicos ó privados sino tambien por los demás medios de prueba que el derecho reconoce. (*Sent. de 11 de enero de 1865.*)

Los socios quedan obligados á cumplir las condiciones estipuladas. Se disuelve la compañía por la muerte de algun socio, salvo pacto en contrario, y por los demás medios indicados en la palabra *Contratos*.

COMPANÍA MERCANTIL. Hay que estar á lo dispuesto en el Código de comercio y en otras muchas disposiciones, principalmente en la ley de 28 de enero de 1848, reglamento de la misma fecha para su ejecucion, y en la de igual dia y mes de 1856, segun veremos en SOCIEDADES MERCANTILES.

COMPANÍA DE JESUS. Por pragmática sancion de 2 de abril de 1767 (ley 3.ª, tit. XXVI, lib. I, de la Novísima Recopilacion) fueron extrañados de todos los dominios de España, Indias, Islas Filipinas y adyacentes los regulares de la compañía, sacerdotes, coadjutores ó legos, ocupándose todas en temporalidades con inclusion de sus bienes, muebles y raices, efectos y rentas eclesiásticas que posean en el Reino, sin perjuicio de sus cargas y mente de sus fundadores. En 29 de junio de 1815 se dió un decreto restableciendo la extinguida compañía en algunos pueblos; y en 3 de

mayo de 1816 otro ampliando el restablecimiento á todos los demás que la habian tenido, hasta que en 4 de julio de 1835 se declaró de nuevo extinguida por la Reina Gobernadora, aplicando sus bienes al crédito público.—V. MONASTERIOS Y CONVENTOS.

COMPARECENCIA. El acto de comparecer ante una autoridad ó juez en virtud de un derecho que asiste ó en cumplimiento de alguna orden ó mandato.

La ley de Enjuiciamiento civil habla, en varios artículos, de *comparecencias* para juicios verbales, para los de desahucio, para los actos de conciliacion y de una manera mas genérica para todos los juicios; pero no es nuestro ánimo tratar aquí del orden de estas comparecencias, de las formalidades que en ellas han de observarse y de todo lo demás que es relativo á ellas. Nuestro propósito, es solamente indicar ya que no dilucidar esta importante cuestion:

¿Tiene obligacion de comparecer ante la autoridad gubernativa, ó ante un juez la persona á quien se cite para este objeto?

Necesariamente tenemos que hacer distincion entre la autoridad judicial y la autoridad administrativa, entre los asuntos penales y los civiles, entre las partes y los testigo etc. etc. No olvidarse que un llamamiento forzoso ante la autoridad puede ser la infraccion notoria del art. 7.º de la Constitucion que censigna el principio de que ningun español puede ser separado de su domicilio sino en los casos y en la forma que las leyes prescriben y que el abuso puede estar comprendido en la sancion del artículo 300 del Código penal.

En materia penal.—Es evidente que toda persona *de cualquier clase, fuero y condicion que sea*, está obligada á comparecer ante el juez que conozca de una causa criminal si se le llama á declarar como testigo. No hay excusa, no hay excepcion, como no sea la de imposibilidad que deberá justificarse. Así, terminantemente, lo establece el decreto de las Cortes de 11 de setiembre de 1820 restablecido por otro de 30 de agosto de 1836,

y así lo repiten los arts. 75 y 76 de la ley de Orden público de 20 de marzo de 1867.

Pero, si cuando el juez que cita es de otro Juzgado ¿hay la misma obligacion de comparecer que cuando se trata del juez de nuestro domicilio? ¿No podrán decir los testigos citados que no pueden prestarse á hacer un viaje, largo tal vez, que trae gastos incomodidades y perturbacion en la familia, por mas que estén dispuestos á declarar ante el juez de su domicilio? No tienen este objeto los exhortos, suplicatorios y despachos de que hablan la ley citada de 11 de setiembre de 1820 y los arts. 18 al 20 del reglamento provisional?

Cuando no se trata de testigos sino de acusados, con doble motivo es obligatoria la comparecencia, pudiendo en su caso decretarse la prision.

En materia civil.—En los juicios civiles no se obliga á las partes por regla general á que comparezcan ante el juez, ni por sí ni por procurador, y constando estar hecho en forma el emplazamiento etc. se procede adelante en rebeldia, en la forma que previenen los arts. 32, 232, 252, 669, 961, 1039, 1173 y otros, principalmente los comprendidos en el título «*de los juicios en rebeldia*» que son el 1171 al 1205.

Pero la ley establece que todo litigante está obligado á declarar bajo juramento en cualquier estado del juicio etc. (artículos 292, 232 y 253) y para este efecto hay precision de comparecer ante el juez, bajo la pena, si no lo hiciere de ser tenido por confeso, procediéndose como dicen los arts. 293 al 302.

La persona citada para un acto de conciliacion tiene tambien obligacion de comparecer en el dia y hora señalados, y no compareciendo ni manifestando causa justa para no comparecer debe dar el juez por terminado el acto condenándole en las costas y en una multa de seis á 60 reales que hará efectivos el juez de paz.

Si alguna de las partes intenta valerse de testigos para sus pruebas y no comparecen espontáneamente, ¿podrá el juez compelerlos como en los juicios criminales? Lo regular es que los testigos se

presenten sin excitacion del juez; pero si no lo hacen, es indudable en nuestro concepto, que al juez á petición de parte debe acordar la cita para que comparezcan. Supongamos que á pesar de la cita no comparecen todavía ¿podrá el juez apercibirles ó conminarles á que lo hagan si no tienen motivo de excusa? ¿Podrá en su caso imponerles alguna corrección? ¿Será extensiva á este caso la jurisdicción disciplinaria de que habla el artículo 42 de la ley de Enjuiciamiento civil? Considerado desapasionada y friamente este asunto, es indudable que cuando una persona citada en forma atenta para que comparezca ante un juez á declarar, como testigo en asunto civil, no comparece, comete una desatención, una falta de consideración y respeto á la autoridad de aquel; y si no se califica así á la primera cita, no podrá menos de serlo á la segunda, con conminación ó sin ella. ¿Qué hacer en este caso? Quedará desairada la autoridad judicial? ¿Podrá usar de la jurisdicción disciplinaria del artículo 42? ¿Será por lo menos una falta comprendida en el núm. 3.º del art. 494 del Código penal? No sabemos que la jurisprudencia tenga resuelto satisfactoriamente este punto, y entre tanto creemos que en el caso indicado, sin empeñarse el juez en hacer comparecer á un testigo, como podría aun á viva fuerza en asunto criminal y mas tratándose de orden público (1), lo que podrá hacer es á la segunda cita, constando así, imponerle la corrección de que habla el art. 42 de la ley, ó conminarle por lo menos, si no concurre, con pasar certificación ó testimonio al juez competente para conocer de la falta. Que descuelle siempre en el juez mucha prudencia; que guarde la consideración debida á las personas segun su clase, categoría, sexo etc. que; pase por alto tambien las simples omisiones y doblemente en asuntos de leve cuantía; que tome en cuenta las excusas que se aleguen; pero que no se diga, como lo hemos oído, que el juez carece de la conveniente corrección disciplinaria, en ca-

so de desobediencia marcada, con daño y desprestigio de la autoridad que ejerce.

Comparecencias ante la autoridad gubernativa. Rara vez la autoridad gubernativa, principalmente la superior de la provincia, hace llamamientos ante su autoridad, como no sea á funcionarios dependientes de la misma. Lo que acostumbra hacer y es mas propio de sus funciones es convocatorias ó convocatorias para tratar alguun asunto de interés, y todo el que es citado recibe un honor ó una distinción á que debe corresponder asistiendo. Pero con motivo de orden público, suelen hacerse llamamientos y conminaciones á particulares, y claro es que la debida obediencia exige no faltar, y la autoridad tiene el medio de hacerse obedecer. La ley sin embargo ha prevenido el caso que llegó á ser frecuente y ocasión de escándalos, de arrancar de su domicilio á los ciudadanos, y mantenerlos fuera de él en los días de elecciones, y estableció una pena para el funcionario que así abuse en el art. 7.º de la ley de 22 de junio de 1864.—V. DELITOS ELECTORALES: FALTAS.

COMPENSACION. La extinción, pago ó descuento que se hace de una deuda con otra entre dos personas que reúnen la cualidad de acreedores y deudores recíprocamente y por su propio derecho. Para que tenga lugar en derecho la compensación es necesario: 1.º que las dos deudas sean líquidas y consistan en una cantidad de dinero, ó en cosas fungibles de la misma especie y aun de la misma calidad.

No pueden retenerse á pretexto de compensación las cosas depositadas, ni las dadas en comodato, ni los alimentos que se deben. Tampoco puede nadie tomar por si cosas de otro para hacerse pago, ni á calidad de prenda, no mediando el consentimiento del dueño.—La compensación no debe confundirse con la retención ni con la mútua petición.

COMPENSACIONES ADMINISTRATIVAS. La justicia exige que el Estado admita la compensación de sus créditos con los que contra él tienen los particulares, si

(1) Art. 76 citado de la ley de 20 de marzo de 1867.

no de una manera absoluta al menos con sujecion á ciertas reglas equitativas que debe fijar previamente el legislador para de este modo conseguir, evitando todo género de abusos, que la Hacienda pública realice sus haberes atrasados de impuestos, contribuciones etc. y para extinguir á la vez obligaciones imposibles de pagar y que hoy subsistirían formando parte de la Deuda pública.

La compilacion que hacemos, ya á la letra ya en relacion, segun su importancia de actualidad de la multitud de disposiciones que se han dado sobre compensaciones, pondrá al corriente á nuestros lectores del estado de tan interesante ramo de la Administracion.

R. D. de 21 abril de 1848.

(Hac.) Se dispuso por este Real decreto se condenase á los Ayuntamientos y contribuyentes particulares el 70 por 100 de sus débitos por toda clase de contribuciones, rentas ó arbitrios hasta fin de diciembre de 1843, siempre que el 30 por 100 le satisficieran en metálico antes del 1.º de julio de 1848. (21 de abril de 1848. *CL. t. 43, página 486.*)

R. O. de 26 abril de 1848.

(Hac.) Se dictaron prevenciones para llevar á efecto el Real decreto anterior relativo al pago de atrasos de contribuciones é impuestos. (26 abril de 1848. *CL. t. 43, página 497.*)

R. O. de 4-mayo de 1848.

(Hac.) Hace extensivos los efectos del R. D. de 21 de abril á los deudores que lo sean el ramo de fincas del Estado y á las suprimidas comunidades religiosas. (4 mayo de 1848. *CL. t. 44, p. 15.*)

R. D. de 23 junio de 1848.

Prorogó hasta 31 de agosto el plazo marcado por el R. D. de 21 de abril para satisfacer el 30 por 100 á metálico de todos los débitos á favor de la Hacienda. (23 junio de 1848. *CL. t. 44, p. 158.*)

R. O. de 11 diciembre de 1848.

Compensacion de medias anatas y gracias al sacar.

(Hac.) «La Reina, con presencia del expediente instruido acerca de la compensacion de las medias anatas de mercedes con sueldos no satisfechos de época corriente, que se halla suspendida á consecuencia de lo

dispuesto en R. O. de 13 de enero último, se ha servido resolver se lleve á efecto la expresada compensacion, haciéndola extensiva á los débitos procedentes de gracias al sacar y dispensas de ley.—De Real orden etc. —Madrid 11 de diciembre de 1848.» (*CL. t. 45, p. 405.*)

R. O. de 24 setiembre de 1849.

Débitos de los pueblos con créditos de la guerra civil. (Hac.) «.....La Reina ha tenido á bien resolver:

1.º Que sean baja desde luego en las cuentas de valores los débitos que por contribuciones suprimidas tengan los pueblos en suspenso para compensar con igual cantidad de los créditos procedentes de indemnizacion de daños y perjuicios sufridos durante la guerra civil.....

2.º Que de la misma manera se den de baja en dichas cuentas los débitos de las nuevas contribuciones de los años desde 1845 á fin del año actual, repectivos á los pueblos contenidos en la adjunta nota, cuyos débitos están aplazados por Reales órdenes especiales.....» (24 setiembre de 1849. *CL. t. 48, p. 86.*)

R. O. de 29 diciembre de 1849.

Confirma las de 19 de julio y 24 de setiembre del mismo año, sobre compensacion de débitos por contribuciones y créditos por indemnizacion de daños. (29 diciembre de 1849. *CL. t. 48, p. 688.*)

R. O. de 22 enero de 1850.

Compensacion de alcances con sueldos.

(Hac.) «La Reina, enterada del expediente instruido con motivo de la instancia de D. Ramon Laguna, en la que como heredero de D. Narciso Torrecilla, tesorero que fué de la provincia de Salamanca, solicita se compensen con sueldos devengados por este último desde el año de 1824 al de 1830 la cantidad de 11,011 rs. 20 mrs., que se le reclaman por reparos puestos por el Tribunal mayor de Cuentas á la del mismo tesorero, comprensiva desde 1.º de enero hasta 11 de febrero del citado año de 1824 ha tenido á bien resolver S. M., de conformidad con lo manifestado por el Consejo Real, que tenga efecto la compensacion con sueldos devengados por Torrecilla en la expresada época del año de 1824 al de 1830, de la expresada cantidad de 11,011 rs. 20 mrs. que se reclama á sus herederos, en atencion á que si bien los sueldos con que ha de hacerse fueron devengados en la expresada época, corresponde tambien al mismo año de 1824 la

cuenta por cuyos reparos se exige el reintegro; siendo la voluntad de S. M. que esta resolución se entienda aplicable á todos los casos de igual naturaleza siempre que resulte probada la inculpabilidad de los que hubieren contraído los alcances.—De Real órden etc.—Madrid 22 de enero de 1850.» (*CL. t. 49, p. 79.*)

R. D. de 10 mayo de 1851.

Se compensen los débitos de contribuciones con créditos por servicios del material.

(Hac.) «Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Se admitirá la compensación de los débitos á favor de la Hacienda pública procedentes de las contribuciones, rentas, ramos y demás conceptos hasta fin de 1849, con los créditos que constituyen la Deuda del Tesoro por servicios del material desde 1.º de mayo de 1828 hasta fin del referido año de 1849.

Art. 2.º Se declaran compensables también los créditos de la Deuda del personal devengada en la misma época, con los débitos que contra sí y en favor del Tesoro tengan los propios acreedores y se hubieren contraído en dicho período.

Art. 3.º El Gobierno dará cuenta á las Cortes de esta disposicion en la inmediata legislatura.—Dado en Palacio á 10 de mayo de 1851.» (*CL. t. 53, p. 127.*)

Art. 10 ley de 3 agosto de 1851.

«Se declara que son compensables los créditos hasta fin de 1849, de que trata esta ley (*deuda del Tesoro*) con los débitos que de la misma época resulten á favor del Tesoro.....»—V. esta ley en **DEUDA DEL TESORO**.

Art. 7.º R. D. 18 diciembre de 1851.

«Se declaran compensables desde ahora los créditos del personal con los débitos de todas clases que hasta fin de 1849 resulten á favor del Tesoro...»—V. **DEUDA DEL TESORO**.

R. O. de 1.º octubre de 1851.

La Comision central es la que declara si deben hacerse las compensaciones.

(Hac.) «.....La Reina (Q. D. G.) se ha dignado determinar:

1.º - Que la Comision central de liquidacion y cobranza de débitos hasta fin de 1849 sea la que declare si deben ó no hacerse las compensaciones que se soliciten de los derechos del Tesoro con los créditos á su cargo, pertenecientes unos y otros á la época anterior á 1.º de enero de 1850.

2.º Que la referida Comision dé conocimiento á la Direccion general del Tesoro de las compensaciones que acuerde, expresan-

do el nombre de las personas á cuyo favor se hayan hecho las declaraciones, el ramo en que deban tener lugar aquellas y el importe del descubierto de los deudores.

3.º Que la Direccion del Tesoro, previo el conocimiento de los créditos de los interesados, comunique las órdenes oportunas al Gobernador de la provincia donde radiquen los créditos que van á pagarse, á fin de que tengan efecto las compensaciones bajo las formalidades prevenidas en la R. I. de 25 de enero de 1850 (p. 60) y demás posteriores disposiciones.

V 4.º Que en los estados mensuales que se presentan al Ministerio, se indique por nota el importe de las compensaciones que se efectúen en cada mes.—De Real órden etc.—Madrid 1.º de octubre de 1851.» (*CL. t. 54, p. 211.*)

Circular de 30 abril de 1852.

Esta circular de la Direccion general de contabilidad de la Hacienda establece reglas para la formalizacion de las compensaciones de débitos á favor del Estado hasta fin de 1849, con créditos del personal hasta fin de 1851. (30 abril de 1852. *CL. t. 55, p. 669.*)

R. O. de 1.º junio de 1852.

Compensacion con rentas de comunidades religiosas.

(Hac.) «.....S. M..... se ha servido resolver:

1.º Que las compensaciones de los débitos á favor del Tesoro, procedentes de las rentas de los bienes de comunidades religiosas y demás corporaciones, continúen verificándose bajo las disposiciones establecidas en el art. 7.º del R. D. de 18 de diciembre de 1851.

2.º Que las Administraciones de contribuciones directas, estadística y fincas del Estado en las provincias, lleven cuenta de las que se formalicen por razon de los débitos que se hayan pasado al clero, y que el importe á que asciendan en fin del año, se deduzca del cargo que se haya imputado al mismo en la respectiva provincia.

3.º Que esa Comision central, como encargada de la declaracion de la procedencia ó improcedencia de las compensaciones, dé conocimiento de las que acuerde á la Direccion de contabilidad del culto y clero para que esta lo haga saber á las respectivas diócesis, á fin de que puedan también deducirlas de los cargos que se le hayan imputado.

V 4.º Que la misma Comision pase igual conocimiento á la Direccion general de contribuciones directas, estadística y fincas del Estado, para comprobante de la cuenta ge-

neral que ha de servir de base á la liquidacion que en fin de año se practicará por este concepto.—De Real orden etc.—Madrid 1.º de junio de 1852.» (CL. t. 56, p. 112.)

R. O. de 3 junio de 1852.

Débitos de alcances de empleados: arriendos y contratos: segundos contribuyentes.

(Hac.) La Reina se ha servido resolver:

1.º Que continúen las compensaciones de los débitos de todas clases á favor del Tesoro hasta fin de 1849, que se hallen en primeros contribuyentes, con los créditos procedentes de la Deuda del personal hasta fin de 1851, al tenor de la ley de 3 de agosto y R. D. de 18 de diciembre últimos.

2.º Que no procede la compensacion con los débitos de alcances de empleados y recaudadores de fondos públicos que lo hayan sido por cuenta de la Administracion, por ser, como responsables directos reputados segundos contribuyentes, declarándose no obstante comprendidos en los beneficios de dicha compensacion á sus herederos, fiadores y demás personas á quien en su lugar alcance responsabilidad subsidiaria.

3.º Que si en las compensaciones que se verifiquen con haberes de individuos que devengan, ocurriese la desaprobacion de alguna partida que constituya su crédito hasta fin de 1851 despues de estar compensada, los interesados reintegren al Tesoro con sus devengos sucesivos la suma desechada por resultado de las cuentas del personal.

4.º Que en las que se hagan con créditos de haberes caducados, se retenga una cantidad proporcional del mismo crédito para responder á las resultas de la liquidacion, aplicándose al reintegro el todo ó parte de la suma retenida, si hubiese mérito para ello, ó convertida en títulos de la Deuda se entregue á los interesados á quienes se les retuvo.

5.º Y finalmente, que en cuanto á las compensaciones con débitos que emanen de arriendos y contratos, se esté á lo que se resuelva en vista del expediente que sobre este particular se está instruyendo.—Re Real orden, etc.—Madrid 3 de junio de 1852.—(CL. t. 56, p. 131.)

R. O. de 16 junio de 1852.

Trasferencias para compensaciones.

(Hac.) «La Reina (Q. D. G.) enterada de la duda propuesta por ese Ministerio (de Gracia y Justicia) sobre si las compensaciones de los débitos procedentes del ramo de Cruzada contraídos por alcances, han de verificarse con créditos del personal, devengados

por el propio individuo que á la vez sea deudor, ó si á este se le han de admitir los expedidos á favor de otros y que adquiera por compra ó negociacion; S. M. se ha servido resolver, que debiendo convertirse en su dia los créditos del personal en títulos al portador sin interés con arreglo al art. 3.º del Real decreto de 18 de diciembre último, y declarados por el 7.º compensables desde su fecha sin la limitacion contenida en el art. 2.º del de 10 de mayo del año anterior, son trasferibles los referidos créditos para los efectos de las compensaciones, con los débitos de todas clases á favor del Tesoro hasta fin de 1849.—De Real orden, etc.—Madrid 16 de junio de 1852.» (CL. t. 56, p. 171.)

R. O. de 28 julio de 1852.

Idem con débitos procedentes de arriendos.

(Hac.) «..... S. M. se ha servido resolver:

1.º Que las compensaciones de los débitos procedentes de arriendos de impuestos y rentas públicas, y de contratos con el Gobierno hasta 31 de diciembre de 1849, tengan lugar con los créditos de la deuda del material del Tesoro hasta igual fecha, y con la del personal hasta 31 de diciembre de 1851, prévia la competente liquidacion, cuando se reunan en un mismo interesado las dos circunstancias de deudor y acreedor directo, y no por trasferencia.

Y 2.º Que los arrendatarios y contratis-tas que se encuentren en este caso, deberán optar por la compensacion ó conversion de sus respectivos créditos dentro del im-provable plazo de un mes, contado desde el dia en que se les reclame el pago de los débitos que contra ellos resulten.—De Real órden, etc.—San Ildefonso 28 de julio de 1852.» (CL. t. 56, p. 384.)

R. O. de 31 enero de 1853.

Débitos del 20 por 100 de propios con créditos atrasados del Tesoro.

(Hac.) «He dado cuenta á la Reina (que Dios guarde) del expediente promovido por esa Comision central de atrasos, acerca de si deben ó no considerarse comprendidos en los beneficios de la compensacion con créditos atrasados del Tesoro hasta fin de 1851, los débitos que emanen del 20 por 100 de propios, causados hasta el 31 de diciembre de 1849, y S. M., en vista de lo expuesto por las Direcciones generales del Tesoro público y de lo Contencioso, oido el parecer de las Secciones de Hacienda y de Gracia y Justicia del Consejo Real, y de conformidad con lo propuesto por las mismas, se ha servido re-

solver que no existe razon alguna para negar el beneficio de la compensacion á las deudas procedentes del impuesto del 20 por 100 de propios hasta fin de 1849, siempre que conste justificado en los expedientes que deben instruirse, que los descubiertos no dimanen de malversacion por parte de los encargados de la administracion y cobranza de los productos de los referidos bienes, cuya justificacion ha de hacerse indispensablemente documental, con referencia á las cuentas anuales de los Ayuntamientos, presupuestos aprobados y facultades concedidas para gastos por las autoridades competentes; siendo además estas justificaciones examinadas y aprobadas por el respectivo Consejo provincial.—De Real orden, etc.—Madrid 31 de enero de 1853.—(CL. t. 58, p. 126.)

R. O. de 28 febrero de 1853.

Reglas para los expedientes de compensacion.

(HAC.) S. M. ha tenido á bien mandar..... que en todos los expedientes sobre compensaciones que se hallen pendientes de resolucion, y con cuantos se promuevan en lo sucesivo, se proceda exigiendo los requisitos y condiciones que determinan las reglas siguientes:

1.^a En los expedientes de compensacion que se instruyan á virtud de las solicitudes que se presenten deberá hacerse constar: 1.^o La procedencia del débito: 2.^o La cantidad á que ascienda, el año ó años á que corresponda y que pertenece á la cuota del Tesoro con exclusion de toda clase de recargos y partícipes: 3.^o La oficina donde radique: 4.^o La autorizacion legal del que suscriba la solicitud en que se pida la compensacion, no siendo el mismo deudor: 5.^o La conformidad del acreedor en ceder el todo ó parte de sus créditos para la compensacion: 6.^o El concepto por que es acreedor: 7.^o La provincia y oficina interventora donde radique su cuenta: 8.^o El importe del crédito que en el todo ó parte se destine para la compensacion, y la época ó épocas á que corresponde; y 9.^o Las responsabilidades á que están afectos dichos créditos, por obligaciones contraídas por los mismos interesados.

2.^a En los expedientes que se promuevan para compensar débitos que emanen de las contribuciones é impuestos cuya recaudacion corra á cargo de los Ayuntamientos, además de hacerse constar todas las circunstancias de que trata la regla anterior, se acreditará con certificaciones de los inspectores primeros visadas por los respectivos administradores de provincia, y con referencia á repartimientos, libros cobratorios,

matrículas y demás que corresponda: 1.^o Que la cantidad que se pretende compensar se halla en primeros contribuyentes, diciéndose quiénes sean estos: 2.^o Que la adquisicion de los créditos destinados á la compensacion, se ha de verificar con el conocimiento é intervencion de la administracion de provincia, acompañándose á la solicitud certificaciones en que así conste, y expresiva del tanto por ciento á que se hayan adquirido aquellos; y 3.^o que luego que se comuniquen para su ejecucion la orden de compensacion, la misma oficina de provincia disponga se publique en el *Boletín oficial* de la provincia el beneficio que han reportado los contribuyentes á resultas de la compensacion, expresándose los nombres de ellos.

3.^a En los expedientes que asimismo se promuevan para compensar débitos que procedan de contribuciones é impuestos, cuya cobranza corra á cargo de recaudadores especiales, sin perjuicio de hacerse constar las mismas particularidades contenidas en la regla primera, se acreditará tambien y en la forma ya prevenida: 1.^o Que la cantidad que se solicita compensar se halla en primeros contribuyentes: 2.^o Que la adquisicion de los créditos que se destinan á la compensacion, se ha verificado bajo la inmediata intervencion del administrador de la provincia, acompañando á la instancia certificacion que lo exprese, así como el tanto por ciento á que se hayan adquirido aquellos; y 3.^o Que luego que se comuniquen para su ejecucion la orden de compensacion, el mismo administrador haga se publique en el *Boletín oficial* de la provincia el beneficio que haya reportado cada contribuyente á consecuencia de la compensacion.

4.^a Las compensaciones se acordarán en concepto de provisionales, y no producirán asientos en los libros, hasta que expedidos los títulos en equivalencia de los haberes ofrecidos en compensacion, se entreguen en las cajas del Tesoro, despues de inutilizados, conforme á lo dispuesto para casos iguales en la R. O. de 27 de noviembre de 1836 y y otras posteriores.

5.^a Acordada provisionalmente una compensacion, se suspenderá el apremio contra los deudores del Estado, á quienes se haya concedido con aquel carácter.

6.^a Las oficinas encargadas de las liquidaciones de haberes personales, y las que lo están de su examen y aprobacion, verificarán sin demora las operaciones que á cada una correspondan en cuanto á los créditos que les conste hallarse admitidos á compensacion.

Y 7.ª La Comisión de liquidación y cobranza de atrasos y contribuciones ejercerá la mayor vigilancia para que se observe lo dispuesto en las anteriores reglas 5.ª y 6.ª, facilitándose á las oficinas el conocimiento que deben tener de las compensaciones que se acordaren, para que pueda cada una de aquellas proceder á lo que respectivamente la incumba.—De Real orden, etc.—Madrid 28 de febrero de 1853. (CL. t. 58, p. 223.)

R. O. de 14 marzo de 1853.

Débitos de lanzas y medias anatas con créditos del personal.

(Hac.) Extracto.—Dispone que para la mas pronta extincion de los débitos que por los suprimidos impuestos de lanzas y medias anatas resultan á los títulos de Castilla hasta fin de 1846, se les admitan en compensacion de créditos de la Deuda del personal, á la par que las certificaciones de partícipes de diezmos. 14 marzo 1853. (CL. t. 58, p. 256.)

R. O. de 13 junio de 1853.

(Hac.) Extracto.—Se manda que en lo sucesivo se remitan por las Direcciones generales respectivas al Tribunal de cuentas, con el objeto de que falle lo oportuno, los expedientes en que los empleados alcanzados ya directa ó subsidiariamente soliciten compensacion. (CL. t. 59, p. 193.)

R. O. de 18 junio de 1853

Débitos de los Ayuntamientos por el 5 por 100 de arbitrios: otros idem no trasferidos

(Hac.) «..... Con motivo de una consulta..... acerca de si deben ó no ser compensables con créditos atrasados del personal los débitos hasta fin de 1849 que resulten á favor de la Hacienda y contra los Ayuntamientos por el 5 por 100 de arbitrios municipales..... teniendo presente lo conveniente que es hacer desaparecer de las cuentas de rentas públicas los débitos que vienen figurando por contribuciones extinguidas y corrientes, S. M. se ha servido resolver, de conformidad con el parecer de la Junta de Directores y sin que por ello se relaje el espíritu de las Reales órdenes de 3 de junio y 28 de julio del año próximo pasado, que tanto á los deudores segundos contribuyentes por el mencionado ramo, como á todos los demás que lo sean por otros conceptos, se admita, previas las justificaciones oportunas, la compensacion de sus débitos con los créditos que tengan contra el Tesoro, procedentes de la Deuda del material y del personal, en virtud de un derecho propio y primitivo, y de ningun

modo que le hayan adquirido de otra persona por efecto de transferencia, cesion, herencia ó por cualquier otro título.—De Real orden, etc.—Madrid 18 de junio de 1853.» (CL. t. 59, p. 219.)

R. O. de 31 enero de 1854.

Herederes, fiadores de deudores por responsabilidad subsidiaria.

(Hac.) Enterada la Reina (Q. D. G.) de la propuesta elevada por V. S. acerca de que los herederos, fiadores y demás á quienes alcance responsabilidad subsidiaria en los débitos hasta fin de 1849 procedentes de arriendos de impuestos y rentas públicas con el Gobierno, se les permita compensar sus descubiertos con créditos de la Deuda del material del Tesoro hasta igual fecha y con los del personal hasta fin de 1851, S. M. conformándose con el parecer emitido por el Consejo Real se ha dignado resolver, que las expresadas compensaciones tengan lugar cuando se reunan de un mismo interesado las circunstancias de deudor y acreedor directo al Tesoro público, y no por transferencia, cesion ó venta; con cuya restriccion se halle concedido este beneficio á los primeros responsables de los indicados arriendos por la R. O. de 28 de julio de 1852, pues aquellos en su calidad de tales subsidiarios siguieron á estos en toda la que tenian por los citados descubiertos.—De R. O. etc.—Madrid 31 de enero de 1854.» (CL. t. 61, p. 144.)

R. O. de 8 febrero de 1854.

Reglas para la compensacion de débitos por suministros.

(Hac.) He dado cuenta á la Reina (que Dios guarde) de la consulta elevada por V. I. á consecuencia de otra del administrador principal de Hacienda pública de la provincia de Cuenca, para aclarar las dudas ocurridas en la instruccion de los expedientes de compensacion de débitos que se hallaban cubiertos, sin formalizar con cartas de pago ó recibos por suministros, cuyos documentos no son admisibles en pago de ellos, segun dispone la R. O. de 10 de marzo último (1); y S. M., atendiendo á que estos descubiertos no pueden considerarse habidos por malversacion, puesto que liquidados los suministros y obtenidas por los pueblos las cartas de pago, tales documentos, previamente compulsados, son un comprobante de la inversion forzosa que dieron los Ayunta-

(1) Ni en la Coleccion legislativa ni en el Boletín de Hacienda hemos hallado la R. O. de 10 de marzo que se cita.

mientos á los fondos recaudados de los primeros contribuyentes, se ha dignado resolver:

1.º Que en los expedientes de compensacion de los débitos de que se trata, sin perjuicio de llenarse los requisitos exigidos por las disposiciones vigentes, se consigne por medio de un certificado del inspector primero de Hacienda pública, visado por el administrador, la procedencia del adeudo, y se incluya copia certificada de las cartas de pago de suministros, expedidas por las oficinas militares, previa la indicada compulsa.

2.º Que en el caso de que los Ayuntamientos no hayan obtenido las cartas de pago equivalentes á los suministros, se acompañe igualmente un certificado de la Administracion en que se haga constar el origen y circunstancias de los débitos cuya compensacion se pretenda, uniéndose además las contestaciones de los Ayuntamientos en que afirmen no haber obtenido las cartas de pago citadas.—De Real orden etc.—Madrid 8 de febrero de 1854. (CL. t. 61, p. 167.)

R. O. de 1.º diciembre de 1854.

Reglas para los débitos atrasados con haberes del personal.

(Hac.) «.....S. M..... se ha servido mandar:

1.º Que las compensaciones acordadas en concepto de provisionales, hasta la expedicion de los títulos de la Deuda del personal, á consecuencia del art. 4.º de la Real orden de 28 de febrero de 1853, se formalicen definitivamente rebajando su importe de las liquidaciones respectivas de los cedentes y de los mandatos expedidos ya para la emision de los títulos equivalentes al saldo de dichas liquidaciones.

2.º Que se practiquen las operaciones de contabilidad necesarias para que desaparezcan de las cuentas de rentas publicas los débitos compensados, y obtengan las cartas de pago de solvencia los interesados, teniendo presente para la ejecucion de dichas operaciones las reglas 13, 14 y 15 de la Real orden de 25 de enero último, y en el concepto de que han de fundarse en certificaciones que se expedirán exclusivamente por la Junta de reconocimiento y liquidacion de la Deuda atrasada del Tesoro, por las cuales se acredite que queda hecha la baja en la liquidacion del interesado que hizo la cesion del crédito para efectuar la compensacion.

3.º Que las compensaciones acordadas, ó que acuerden las Direcciones generales de los ramos respectivos, en uso de sus atri-

buciones, con crédito de acreedores cuyas liquidaciones existan en las Comisiones subalternas de las provincias, tengan el carácter de provisionales y no causen efecto alguno en las cuentas hasta tanto que dichas liquidaciones sean aprobadas por la Junta de reconocimiento y la misma expida la certificacion en que han de fundarse las operaciones, limitándose dichas Comisiones á rebajar desde luego en las liquidaciones que practiquen la cantidad compensada, expresando con claridad la fecha de la concesion, procedencia del débito y demás pormenores.

4.º Que en las liquidaciones que obren ya en la referida Junta sin haber llegado el caso de pasar á la Direccion de la Deuda los mandatos para la emision de los títulos, se verifique la deduccion del crédito compensable, avisando á la dependencia liquidadora para que haga en el antecedente la anotacion debida. Los mandatos se expedirán en este caso por el liquido que resulte á favor del interesado.

5.º Que respecto de los créditos procedentes de liquidaciones aprobadas por la Junta y cuyos mandatos hayan sido remitidos á la Direccion de la Deuda, la misma Junta comunique á esta la orden de compensacion para que anote en el mandato la baja de la suma compensable, y despues de verificado expida y remita á la expresada Junta certificacion que lo acredite.

6.º Que la Junta de reconocimiento y liquidacion de la Deuda atrasada del Tesoro expida certificaciones que acrediten las bajas hechas en las liquidaciones por los créditos compensables, á saber: de las que practiquen las Comisiones de las provincias tan luego como apruebe las liquidaciones; de las que verifique la Junta antes de expedir el mandato para la emision de los títulos, y de las que se hagan por la Direccion de la Deuda en los mandatos existentes en ella, luego que la misma Junta reciba de la propia Direccion el certificado que acredite la baja.

7.º Que la Junta remita directamente las certificaciones expresadas á las administraciones donde radique el débito que se compensa para la formalizacion de las operaciones en los términos que quedan indicados.

8.º Que las Direcciones generales donde existen los papeles de la suprimida Comision central de liquidacion y cobranza de atrasos formen y remitan á la citada Junta relaciones expresivas de las compensaciones acordadas por dicha Comision para que se compruebe si han hecho las bajas correspondientes en las liquidaciones, y adopte en caso de omi-

sion las disposiciones convenientes para subsanar el perjuicio irrogado ó que pueda irrogarse á la Hacienda.—De Real orden etc.—Madrid 1.º de diciembre de 1854. (CL. t. 63, pág. 318.)

Circ. de 20 enero de 1855.

Trámites de los expedientes de compensacion.

(DIR. GEN. DE CONTRIBUCIONES.) Con objeto de uniformar la marcha de los expedientes de compensaciones, la Direccion general de contribuciones dicta las prevenciones siguientes:

«1.ª Los expedientes se encabezarán con la instancia del interesado ó Ayuntamiento que le promueva, dirigida á esta Direccion, y suscrita en el primer caso por el mismo deudor ó persona autorizada en forma legal, y en el segundo al menos por el Alcalde-presidente y por el secretario; si la municipalidad tuviese al efecto representante podrá suscribirse por este, uniéndose á la solicitud el poder que acredite esta circunstancia.

2.ª Cada uno de los documentos de créditos que se aplique á la compensacion se presentará extendido en papel del sello 4.º y expresará, *por letra*, la cantidad exacta que cede, á qué persona ó corporacion, para qué objeto, en qué oficina de intervencion radica la cuenta de sus haberes, y bajo qué concepto los devengó. En el caso de que el poseedor del crédito no autorice la cesion, lo hará otra persona legalmente facultada.

3.ª Esa Administracion pedirá á las oficinas liquidadoras las noticias oportunas que justifiquen el importe de los saldos, la persona á cuyo favor aparezcan, y las obligaciones que contra ellos resulten. Cerciorada la Administracion de la legitimidad de las cesiones, formará factura de ellas, y ajustará la suma de sus totales al del débito compensable, cuidando de que si algun resto sobrase, expresen los tenedores ser su voluntad dejarlo á favor del Tesoro público.

4.ª Cuando la cesion sea para compensar débitos cuya administracion ó cobranza hubiese estado en la época de que emanen á cargo de los Ayuntamientos ó recaudadores especiales, se hará bajo la intervencion de esa dependencia, y por la misma se certificará esta circunstancia y el tanto por ciento á que se hayan adquirido los créditos, cuidando muy particularmente no se omita este último extremo, que ha de acreditar despues el beneficio que reporten los deudores primeros contribuyentes por la compensacion de su débito, á cuyo efecto se insertará en el *Boletín oficial* de la provincia, como previe-

ne el párr. 3.º de la regla segunda de la citada R. O. de 28 de febrero de 1853.

5.ª Se expedirá y acompañará por esa Administracion una certificacion bien expresiva del importe á que ascienda el débito, respectivo solo á la cuota del Tesoro, el concepto de que proceda, y el año ó años á que corresponda, como previene la regla 1.ª de la referida R. O. de 28 de febrero.

6.ª Si la compensacion la solicitasen recaudadores ó Ayuntamientos se consignará además en dicha certificacion con la referencia que marca la misma R. O. de 28 de febrero, que el débito se halla en primeros contribuyentes, expresándose quiénes sean estos.

7.ª Si los descubiertos resultasen de no haberse formalizado las cartas de pago por suministros con que aquellos estuviesen satisfechos interinamente, se hará la debida expresion en la propia certificacion, acompañando las copias de las cartas ó recibos de suministros, y en su defecto las contestaciones de los Ayuntamientos que no las hubiesen obtenido, segun encarga la R. O. de 8 de febrero próximo pasado.

Y 8.ª Instruidos los expedientes en la forma indicada, los remitirá V. S. á la Direccion para la resolucion que proceda, emitiendo al mismo tiempo su dictámen, y cuando se acuerde por la misma la expresada compensacion, se devolverán los documentos de cesion de créditos, cuyo recibo acusará V. S., á fin de que obtenida que sea la certificacion de quedar hechas las bajas en los saldos de los respectivos acreedores cedentes que ha de expedir con arreglo á lo dispuesto en la prevencion segunda de la R. O. de 1.º de diciembre último la Junta de reconocimiento, hoy la Direccion general de la Deuda pública, se formalice definitivamente dicha compensacion segun indica la referida prevencion segunda, teniendo efecto su data en la cuenta de rentas públicas en los términos que marcan las reglas 13, 14 y 15 de la R. O. de 25 de enero del año último.

Esa Administracion queda en el preciso deber de invitar á los Ayuntamientos y particulares deudores para que aprovechen el beneficio de la compensacion, procediendo al apremio de los morosos ó que no quieran utilizar aquel por cuantos medios le facilitan las instrucciones, á fin de conseguir la realizacion de los crecidos descubiertos que vienen figurando en las cuentas de rentas públicas por los ramos que le están encomendados.—Dios, etc.—Madrid 20 de enero de 1855.» (CL. t. 64, p. 51.)

Ley de 31 julio de 1855.

Esta ley que se hallará inserta en DEUDA DEL TESORO, amplió lo dispuesto en el artículo 2.º de la de 3 de agosto de 1851, y declaró compensables los títulos procedentes de los créditos del personal con los débitos de todas clases que hasta fin de 1850 resulten á favor del Tesoro, y admisibles en las compensaciones los documentos transferibles que los representen mientras no se expidieran los títulos al portador.

R. O. de 26 marzo de 1856.

Condonaciones con el 30 por 100: compensaciones.

(HAC.) Con el fin de uniformar la legislación de condonaciones y compensaciones, es la voluntad de S. M. se manifieste á V. S. que toda clase de débitos que por contribuciones extinguidas y corrientes resulten á favor del Tesoro hasta fin de 1850, pueden ser condonados con el pago del 30 por 100 en metálico en la misma forma que dichos débitos pueden ser compensados con arreglo á las disposiciones que rigen en la materia.—De Real orden, etc.—Madrid 26 de marzo de 1856. (*CL. t. 67, p. 419.*)

Circ. de 10 junio de 1856.

Expedientes.—Contabilidad.

(DIR. GEN. DE CONTAB. DE LA H.) «Esta Direccion, con el objeto de evitar dudas á las oficinas, ha acordado hacer las siguientes prevenciones:

1.ª Que al mismo tiempo que las Administraciones den de baja en la cuenta de rentas públicas el débito compensable en el concepto de que proceda, se contraiga en la misma cuenta en la seccion de «papel procedente de débitos y compensaciones,» en la llave de débitos compensados con atrasos de la Deuda del personal y renglon que corresponda.

2.ª Que los títulos de dicha deuda que se reciban en compensacion, ingresen en virtud de cargarme, causando el consiguiente cargo en la cuenta de la Tesorería en el lugar destinado al papel, y la data equivalente en la de rentas públicas.

3.ª Que mediante libramiento de abono á la Tesorería, que expedirá á la Contaduría de la provincia, se daten los títulos con cargo á la misma cuenta de papel, y por remesa de los títulos á la Tesorería de la Deuda, á la cual se remitirán taladrados en solicitud de la equivalente carga de pago, como se hace con el papel de la Deuda.

4.ª Que en el lugar que está destinado en la cuenta de gastos públicos á las com-

pensaciones, y en las columnas respectivamente de contraído y pagado, se figure el importe de los títulos admitidos por la compensacion y remesados á la Deuda.

Del recibo de esta circular se servirá V. dar aviso.—Dios, etc.—Madrid 10 de junio de 1856. (*CL. t. 68, p. 411.*)

R. D. de 4 marzo de 1857.

Aprueba los presupuestos para 1857, y dice así su art. 15. La facultad de compensar débitos con créditos atrasados, acordada por las leyes de 3 de agosto y de 31 de julio de 1855, se limitará á los créditos del Estado que obren en primeros contribuyentes.»

Ley de 22 mayo de 1859.

Exclusiones del beneficio de la compensacion.

Es la ley de presupuestos del Estado para 1859, y dice así su

Art. 8.º Se excluyen del *beneficio de la compensacion*, concedido por las leyes de 3 de agosto de 1851 y 31 de julio de 1855:

1.º Los compradores de bienes nacionales y efectos del Estado.

2.º Los deudores de cantidades recibidas indebidamente de las arcas públicas, no procediendo de haberes personales.

Y 3.º Los segundos contribuyentes que hayan incurrido en responsabilidad criminal, ó que habiendo contraído la civil, no acrediten debidamente que procede de causas ajenas á su voluntad.

Serán compensables, sin embargo, estos débitos en el solo caso de que los deudores posean créditos de la Deuda del personal ó material del Tesoro, adquiridos por derecho propio ó directo.

No se considerarán como segundos contribuyentes los fiadores no culpables ni los responsables subsidiarios, pero antes de concederse á los primeros la compensacion, deberá preceder la exclusion de bienes y declaracion de insolvencia de los deudores principales.

A los contratistas del Tesoro por anticipo de fondos ú otros servicios se les admitirá, en compensacion de sus débitos, billetes de la Deuda del material por su valor nominal en la cantidad que represente el saldo que hayan recibido en esta clase de deudas.

Las compensaciones acordadas por sentencias definitivas del Tribunal de Cuentas del Reino despues de 31 de julio de 1855, fecha de la ley que amplió la facultad de compensar, y que no estuviesen aun ejecutadas, se formalizarán desde luego al tenor de lo dispuesto en las mismas sentencias. Los expedientes de compensaciones solicitadas den-

tro de dicho período, que están pendientes de resolución, se resolverán con arreglo á lo dispuesto en la presente ley.

R. O. de 12 setiembre de 1864.

Declarando compensables los débitos de los pósitos por contingentes con los títulos de la deuda del material que reciban por sus acciones del Banco y dividendos.

(Hac.) «Ilmo. Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del expediente promovido á consecuencia de consulta de la Junta de la Deuda pública, sobre que la compensacion de los débitos que tengan los pueblos por el contingente de pósitos y otro cualquiera concepto, hasta fin de 1850, se lleve á efecto con los créditos que les resulten por el capital y dividendos de las acciones del Banco español de San Fernando, que pertenecieron á los mismos, y que, en virtud de lo dispuesto en la ley de 9 de noviembre de 1837, pasaron á ser propiedad del Estado con calidad de reintegro:

Y visto cuanto resulta, y lo informado por las Direcciones generales del Tesoro y de Contabilidad de Hacienda pública:

Considerando que, por acuerdo de 15 de setiembre de 1862, se declararon compensables los expresados débitos con los títulos de la deuda del material, equivalentes á los dividendos de las acciones del citado Banco, que poseian los pósitos y tomó el Tesoro:

Considerando que la ley de 31 de julio de 1855, al tratar de la liquidacion de la Deuda del personal, amplió la compensacion de estos créditos con los débitos contraídos hasta 1850, y que si bien nada se dijo en ella de la del material, no por eso puede creerse que ha de considerarse á esta de peor condicion cuando reúne circunstancias mas ventajosas:

Considerando que de admitir dicha deuda del material resultará un notable beneficio para el Tesoro:

Considerando que la Ley de presupuestos de 22 de mayo de 1859 hace de igual condicion á ambas deudas para las compensaciones cuando, al excluir de este derecho á los segundos contribuyentes, dice que serán compensables sus créditos sin embargo, en el solo caso de que los deudores posean créditos del personal ó material por derecho propio ó directo:

S. M., oído el dictámen de la Seccion de Hacienda del Consejo de Estado, y de conformidad con lo propuesto por esa Direccion general, se ha servido confirmar el citado acuerdo de 15 de setiembre de 1862, decla-

rando compensables los débitos que hasta fin de 1850 tengan los pueblos por el contingente de pósitos, con los títulos de la deuda del material que deban percibir por los dividendos de las acciones de que se trata.—De Real orden lo comunico á V. S. á los efectos consiguientes.» (*Bol. of. de Guadalajara*, núm. 40).

Queda, pues, inserta la legislacion sobre compensaciones, debiendo únicamente advertir que por el art. 16 de la ley de 29 de mayo de 1868 se declaran compensables los créditos que resulten respectivamente á favor del Estado ó de la Real casa en la liquidacion de las cuentas y cuestiones que está encargada de saldar y dirimir la Comision creada por la ley de 12 de mayo de 1865.

COMPETENCIA. Equivalente á jurisdiccion, poder, autoridad y atribuciones. En este sentido se dice competencia de los Tribunales, competencia de la Administracion, competencia de los Jueces de paz, competencia del Tribunal Supremo de Justicia, competencia de los Consejos provinciales etc.—En contrario sentido, la voz competencia se usa tambien figurada ó elípticamente en la acepcion de *contienda* ó *cuestion*, sobreentendiéndose bastante, que las competencias en este sentido son *cuestiones* ó *contienidas de competencia*.

COMPETENCIA DE LA ADMINISTRACION ACTIVA.—V. ADMINISTRACION PÚBLICA. CENTRAL, PROVINCIAL Y MUNICIPAL: CONSEJOS Y los demás artículos que allí se citan.

COMPETENCIA DE LOS CONSEJOS PROVINCIALES Y DEL ESTADO.—V. CONSEJOS PROVINCIALES: CONSEJO DE ESTADO Y CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO.

COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES. A los Tribunales y Juzgados pertenece exclusivamente la potestad de aplicar las leyes en los juicios, civiles y criminales, sin que puedan ejercer otras funciones que las de juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado.—V. JURISDICCION: JUSTICIA: JUICIO: JUZGADOS Y TRIBUNALES.

COMPETENCIA (Cuestiones de.) Las contiendas de competencia positiva ó negativa de jurisdiccion y atribuciones, pueden tener lugar ó entre la autoridad administrativa con los Tribunales, ó los

Tribunales entre sí, ya los de una misma jurisdicción, el de un distrito, partido ó territorio con el de otro, ya los de jurisdicciones distintas.

COMPETENCIAS ENTRE LA ADMINISTRACION Y LOS TRIBUNALES. Ya hemos dicho en otro lugar, en ADMINISTRACION PÚBLICA, que por bien aparentemente definidas que estén las atribuciones respectivas de la Administracion y de los Tribunales, no siempre es fácil distinguir los límites en una y otra; y aun es frecuente que se confundan, aconteciendo entonces, ó que cada una de ambas autoridades se crea competente, ó que las dos se declaren incompetentes. En el primer caso resulta una competencia *positiva*, y en el segundo competencia *negativa*, y en ambos casos corresponde al Rey su decision conforme á las reglas establecidas. Estas reglas se determinaron primeramente en el R. D. de 6 de junio de 1844, pero solo provisionalmente ó hasta que se realizase la creacion de un alto Cuerpo consultivo á quien cometer el conocimiento de estos asuntos. Vino luego la creacion del Consejo Real por la ley de 6 de julio de 1845, y siendo insuficientes las reglas del citado decreto de 1844, se dictaron otras mas generales y con el carácter de permanentes por R. D. de 4 de junio de 1847, cuyas reglas son las vigentes en el día, aunque estén refundidas en el reglamento para la ejecucion de la ley de gobierno y administracion de las provincias de 25 de setiembre de 1863. En el artículo GOBIERNO y ADMINISTRACION DE LA PROVINCIAS han de consultarse por lo tanto; pero esto no nos dispensa de indicar aquí los artículos concordantes, sin perjuicio de hacerlo allí de nuevo, á fin de que la jurisprudencia establecida sobre cada una de dichas reglas, pueda tener hoy la debida aplicacion.

R. D. de 4 junio de 1847.

Competencias entre las autoridades judiciales y administrativas: Reglas para dirimir las.

(GRAC. Y JUST.) Permitiendo ya el estado de nuestra Administracion establecer reglas

generales y permanentes para sustanciar y dirimir las competencias de jurisdicción y atribuciones entre las autoridades judiciales y administrativas, y habiendo oído al Tribunal Supremo de Justicia, al Consejo Real y al de Ministros, he venido en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º (Es, á la letra, el art. 52 del reglamento para la ejecucion de la ley de gobierno y administracion de las provincias.)

Art. 2.º (Es el art. 53 del citado reglamento.)

Art. 3.º (Es el 54 de id.)

Art. 4.º (Es el 55 de id.)

Art. 5.º (Es el 56 de id.)

Art. 6.º (Es el 57 de id.)

Art. 7.º (Es el 58 de id.)

Art. 8.º (Es el 59 de id.)

Art. 9.º (Es el 60 de id.)

Art. 10.º (Es el 61 de id.)

Art. 11.º (Es el 62 de id.)

Art. 12.º (Es el 63 de id.)

Art. 13.º (Es el 64 de id.)

Art. 14.º (Es el 65 de id.)

Art. 15.º (Es el 66 de id., sin otra diferencia que en vez de remitir las actuaciones al Ministro de la Gobernacion, dice el art. 66 que se remitan al Presidente del Consejo de Ministros.)

Art. 16.º (Es el art. 67 de id.)

Art. 17.º (Es el art. 68 de id.)

Art. 18.º (Es el art. 69 de id., con la diferencia indicada respecto del art. 15.)

Art. 19.º (Es el art. 71 con la misma diferencia indicada respecto del artículo anterior y del 15. Se intercala tambien en el reglamento otra regla del art. 70, para el caso de que el Ministerio respectivo esté conforme con la decision consultada, como veremos en su lugar.)

Art. 20.º (Es el art. 72 con la diferencia que hemos visto respecto de los arts. 15, 18 y 19.)

Art. 21.º (Es el art. 73 de id.)

Inútil seria que insertásemos aquí el decreto indicado, si todas sus reglas se encuentran textualmente trascritas en los artículos atendidos del reglamento; consúltense en su lugar y allí, al pié de cada artículo, daremos á conocer la jurisprudencia establecida por las decisiones del Consejo Real y de Estado, que deben consultar cuidadosamente los Gobernadores de provincia lo mismo que los jueces de 1.ª instancia y promotores fiscales. Así se evitarán recuerdos como el que se contiene en la siguiente circu-

lar de la Fiscalía del Tribunal Supremo de justicia. Dice así:

FISCALIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA.—*Circular.*—«Ha llamado mi atención que en el trascurso de pocos días y por tres distintos jueces de primera instancia se hayan elevado á este Supremo Tribunal autos de competencia sustentados con Gobernadores de provincia sobre el conocimiento de ciertos litigios.

Tan irregular proceder en un punto de sustanciación de los mas conocidos y usuales revela que los jueces, sin apercibirse siquiera de las frecuentes decisiones del Consejo de Estado que publica la *Gaceta*, solo tienen presente el tit. II de la Ley de Enjuiciamiento civil; y no bastantemente advertidos por los promotores fiscales, ni reflexionan que dicha ley trata únicamente de las competencias entre jueces ó Tribunales, ni recuerdan la de 25 de setiembre de 1863 y reglamento de la misma fecha para el gobierno y administracion de las provincias, cuyos arts. 52 y siguientes les trazan la conducta que deben observar en tales casos.

Para remediar este mal, que distrae y entorpece la marcha de las competencias, desprestigiando á la vez á los encargados de la administracion de justicia, he creído de mi deber advertirlo á todos los funcionarios del ministerio público, esperando que los promotores; bajo la celosa inspeccion de los señores fiscales, sus jefes inmediatos, vigilarán sobre la debida sustanciación y curso de las competencias, á fin de que no se confundan las que decide S. M. á consulta del Consejo de Estado con las que corresponden al Tribunal Supremo de Justicia.—Dios guarde á V..... muchos años.—Madrid 7 de febrero de 1867.—Antonio Corzo.—Señores fiscales de S. M. en las Reales Audiencias y promotores fiscales de los Juzgados de primera instancia del Reino. (*Gaceta* 9 febrero.)

COMPETENCIAS ENTRE JUECES Ó TRIBUNALES. Siendo en materia civil se sustancian y determinan con entera sujecion á lo dispuesto en el tit. II (artículos 82 al 119) de la Ley de Enjuiciamiento civil que puede verse en ENJUICIAMIENTO CIVIL.

Las que tienen lugar entre las mismas autoridades judiciales en materia penal se deciden con sujecion al decreto de las Cortes de 19 de abril de 1813 restablecido por otro de 30 de agosto de 1836. Hé aquí estos decretos.

Decreto CCLIII de 19 abril de 1813.

Instruccion para dirimir las competencias de jurisdiccion en toda la Monarquia.

«Las Cortes generales.... decretan que se guarde y cumpla la siguiente instruccion:

Artículo 1.º Corresponde al Supremo Tribunal de Justicia dirimir todas las competencias de las Audiencias entre sí en todo el territorio español, y las de las Audiencias con los Tribunales especiales que existan en la Península é Islas adyacentes segun se dispone en el art. 261 de la Constitucion.

2.º El mismo Supremo Tribunal dirimirá las que se ofrecieren en la Península é Islas adyacentes entre los jueces ordinarios de primera instancia y los Tribunales especiales que no estén sujetos á la jurisdiccion de las Audiencias, con arreglo á lo prevenido en el art. 34, cap. II de la.... ley de 9 de octubre.

3.º Asimismo decidirá las que se promovieren en la Península é Islas adyacentes entre los Tribunales especiales de distintos territorios, ó que aunque sean de uno mismo ejerzan diversa especie de jurisdiccion, ó no tengan entrambos un mismo Tribunal Superior que pueda decidir.

4.º Conocerá tambien dicho Supremo Tribunal de las que ocurran en la Península é Islas adyacentes entre una Audiencia y un juez ordinario de distinto territorio, y entre jueces ordinarios de territorios diferentes.

5.º Pertenece á las Audiencias de ambos hemisferios dirimir las competencias entre todos los jueces subalternos de sus respectivos territorios, segun lo prevenido en el artículo 265 de la Constitucion.

6.º Son jueces subalternos de las Audiencias, no solo los ordinarios sino tambien los de los Tribunales especiales creados ó que se crearen para conocer en primera instancia de determinados negocios, con las apelaciones á las mismas Audiencias.

7.º Las competencias que se promuevan en la Península é Islas adyacentes entre los Tribunales de Guerra y Marina, serán decididas por el superior especial de Guerra y Marina; á excepcion de las que ocurran entre comandantes de matrículas de un mismo departamento, que dirimirá su Capitan general.

8.º En Ultramar las que ocurran entre los jueces subalternos de las Audiencias y los Tribunales y Juzgados especiales, ó entre estos y las Audiencias, se decidirán por la mas inmediata segun el art. 13, cap. I de la ley de 9 de octubre.

9.º La Audiencia territorial decidirá en Ultramar las que se promovieren entre los

Tribunales especiales de su territorio, aunque no sean subalternos de la misma, cuando entramos no tuvieran un mismo superior, pues teniéndole, deberá este decidirlos.

10. Las que se ofrecieren en Ultramar entre los Juzgados especiales de distintos territorios, ó entre los jueces ordinarios de territorios diferentes, serán decididas por la Audiencia mas inmediata á la provincia del que las promoviere.

11. El juez ó Juzgado que solicite la inhibicion de otro, pasará oficio á este, manifestando las razones en que se funde, y anunciando la competencia, si no cede: contestará el intimado dando las suyas, y aceptándola en su caso: si el primero no se satisface, lo dirá al segundo, y ambos remitirán por el primer correo á la autoridad superior competente los autos que cada uno haya formado.

12. Cada juez, al remitir los autos, expondrá al Tribunal las razones en que se funde, y este decidirá la competencia en el preciso término de ocho días.

Lo tendrá entendido la Regencia del Reino, y dispondrá su cumplimiento, haciéndolo imprimir, publicar y circular.—Dado en Cádiz á 19 de abril de 1813. (*C. de decretos de las Cortes. t. 4.º, p. 54.*)

R. O. de 30 marzo de 1827.

Epoca para proponer la inhibitoria ó la declinatoria de jurisdiccion en lo criminal.

Extracto.—Con motivo de expediente promovido por la Sala del crimen de la Audiencia de Aragon, á consecuencia de haber tenido que mandar suspender la ejecucion de la pena de muerte del reo Manuel Higuera, por la formal competencia y reclamacion introducida por el Capitan general de aquella provincia poco antes de sacar para el patibulo á dicho reo, acordó el Consejo de Sres. Ministros proponer á S. M., entre otras cosas, que se separase desde luego de su destino al auditor para que no vuelva á comprometer la autoridad del Capitan general con reclamaciones infundadas, previniéndose á este obre en lo sucesivo con mas pulso, y dignándose mandar al propio tiempo que no sirva la reclamacion de fuero, si no se hiciere desde el principio de la causa.

R. O. de 30 marzo 14 abril de 1831.

«La Sala del crimen de la Real Audiencia de Aragon, deseando alejar toda demora en la administracion de justicia, y atendiendo á que el Rey nuestro Señor, á motivo de competencia suscitada por el Capitan general, pidiendo la persona del reo Manuel Higue-

ras, puesto ya en capilla, tuvo á bien resolver en 30 de marzo de 1827, de conformidad con el Consejo de señores Ministros, que la reclamacion de fuero no sirviese, á no hacerla al principio de la causa; elevó en 3 de diciembre último la consulta, que halló oportuna, á fin de que se dignase declarar: si el insinuado principio debia entenderse desde que se toma la declaracion al reo, y se le da conocer el juez, ó desde la contestacion á la acusacion fiscal; y enterado S. M. de dicho recurso, y conformándose con lo expuesto por el Consejo en su consulta de 14 del corriente ha venido en declarar que el principio de la causa que se determina en su soberana disposicion, para la reclamacion del fuero, debe entenderse desde la contestacion á la acusacion fiscal; bien sea para que los procesados soliciten la inhibicion, ó para que los jueces reclamen el conocimiento y promuevan cualquiera competencia, y que pasado dicho tiempo no se admita ni una ni otra» (1).

R. D. de 30 agosto de 1836.

..... Vengo en mandar que se guarden, cumplan y ejecuten el decreto de las Cortes de 19 de abril de 1813, que contiene la instruccion para dirimir las competencias de jurisdiccion en toda la Monarquia....

R. O. de 14 abril de 1849.

«He dado cuenta á la Reina del conflicto ocurrido entre la Audiencia territorial de Valencia y el Capitan general de la misma ciudad, con motivo de la reclamacion hecha por esta autoridad de una causa criminal formada ante el Juzgado de primera instancia de Jativa, por muerte violenta dada á un malhechor, llamado Bautista Bonet, fundándose en el bando que publicó en 28 de setiembre último, al declarar en estado de sitio el distrito de su mando, en cuyo art. 2.º, si bien ordenó que las autoridades civiles continuaran en el ejercicio de sus funciones, aunque con dependencia de la militar en lo que se refiere á tranquilidad pública y persecucion de sus perturbadores, se reservó además entender en los asuntos que reclamasen su particular atencion. Para adoptar en asunto de tanta gravedad como importancia una resolucion conveniente, tuvo á bien S. M. oír el dictámen del Tribunal Supremo de Justicia, el cual al evacuarlo expuso entre otras cosas: Que sin embargo de corresponder á la clase de delito comun, sin tener conexion inme-

(1) Esta Real orden y la anterior la tomamos de la Biblioteca legislativa del Sr. Zuñiga; t. 1.º, p. 507.

diata y directa con el orden público, el que ha motivado la formación de la causa reclamada por la referida autoridad militar, bajo cuya concepto es ajeno de su competencia, no existiendo una disposición general en la materia, se hallan limitadas las facultades de las Audiencias en este caso y otros de igual naturaleza, mientras no se adopte la expresada disposición, á exponer á la autoridad militar lo que convenga para sacarla de su equivocación, y recurrir, siendo esto ineficaz al Gobierno para la oportuna providencia. Enterada la Reina, y teniendo presente que en el art. 1.º, tít. III, tratado 7.º de las ordenanzas del ejército, que es el que regula las atribuciones de los Capitanes generales en estado de sitio, se concede á estos facultad para promulgar los bandos que crean conducir al mejor servicio, los cuales serán la ley preferente en los casos que explicasen, y comprenderán las penas que impusieren á todos los que declarasen en ellos; S. M., con acuerdo del Consejo de Ministros, se ha dignado resolver, que en casos como el presente, y según lo informado por el Tribunal Supremo, se limiten las Audiencias á exponer á la autoridad militar lo que proceda, á fin de que desista de su reclamación, y recurrir á S. M., siendo esto ineficaz, para que adopte la resolución oportuna.—De Real orden etc.—Madrid 14 de abril de 1849.—Arrazola. (CL. t. 46, pág. 342.)—V. ORDEN PÚBLICO.

R. O. de 4 julio de 1849.

Dispone el art. 9.º que en ningún caso deben de proceder los jueces inferiores, ni de denunciar los promotores fiscales por la duda de que el conocimiento puede corresponder á otro juez ó autoridad, á lo cual no puede oponerse en su día el haber asegurado á los reos y el cuerpo del delito por una prevención oportuna en el procedimiento.

R. O. de 25 marzo de 1840.

....Se ha dignado S. M. mandar que se encargue á todos los Capitanes generales y demás autoridades á quienes corresponda la estricta y puntual observancia de la ley de 19 de abril de 1813 y Real decreto de su restablecimiento.....

R. O. de 17 enero de 1857.

Se mandó que en lo sucesivo toda resolución ó fallo que dicte el Tribunal Supremo de Justicia sobre competencias en materia civil ó criminal, cualquiera que sea la fecha en que hubiese sido instaurado el negocio sobre que aquella cuestión verse, se funde por la Sala que lo dicte, y se publique en la

Gaceta de Madrid y se inserte en la *Colección legislativa*. Es lo mismo que dispone el art. 112 de la Ley de Enjuiciamiento civil.

Sentencia de 15 de setiembre de 1863.

No puede dictarse válidamente providencia en un asunto, después de anunciado el requerimiento de inhibición.—Competencia entre el Juez de 1.ª instancia de Palacio de Madrid y el de la Capitanía general de Castilla la Nueva, acerca del conocimiento de una causa formada con motivo de la muerte (presunto suicidio) del soldado Modesto Castro. El juez ordinario había reclamado que se le entregaran el cadáver y las diligencias, y como el de Guerra acordó que se archivase la sumaria militar, surgió esta competencia que se decide á favor del primero.

«Considerando que si bien las jurisdicciones ordinaria y militar pudieron instruir diligencias para averiguar la causa y las circunstancias de la muerte del soldado Modesto Castro, la primera porque los jueces ordinarios siempre tienen en su favor la presunción de competentes, y la segunda porque gozaba el Modesto de fuero de Guerra, cuando murió, es menos incuestionable que no pudo el juez militar proveer el auto mandando archivar la sumaria, porque dió aquella providencia después que por el ordinario se le había anunciado en forma la competencia.» (Sent. de 1863, núm. 180.)

Sentencia de 1.º de junio de 1859.

La declinatoria lo mismo que la inhibitoria pueden tener lugar antes de ser contestada la acusación.—Se decide á favor de la jurisdicción ordinaria la competencia entre el Juzgado de 1.ª instancia del distrito de San Beltrán de Barcelona y el de la Capitanía general de Cataluña, acerca del conocimiento de la causa formada por la comisión militar contra Rafael Fernandez, sobre estafa.

«Considerando que el procesado Rafael Fernandez hizo uso de la declinatoria ante la jurisdicción militar al abrirse de nuevo la causa contra el mismo, y en el acto de notificarle que nombrara defensor, habiendo manifestado las razones en que fundaba la excepción, y pidiendo que se suspendiera todo

procedimiento, hasta que por las autoridades competentes se resolviese sobre este punto:

»Considerando que desestimada la declinatoria por el Capitan general, en vez de conformarse con esta resolucion el procesado, dirigió instancia á la misma autoridad con el objeto ya expresado, habiendo insistido en su protesta al hacérsele saber el acuerdo del Capitan general conforme con el anterior:

»Considerando que al propio tiempo usó del medio legal de la inhibitoria, solicitando el amparo de la jurisdiccion ordinaria, en exposicion dirigida con este fin á la Audiencia de Barcelona:

»Considerando que con arreglo á las terminantes disposiciones, que contienen las Rs. Ords. de 30 de marzo de 1827, y 30 de marzo de 1831, circulada esta en 14 de abril del mismo año, procede la reclamacion del fuero por los interesados, si tuviese lugar antes de ser contestada la acusacion fiscal en primera instancia.» (CL. t. 80, decision núm. 41.)

Por otra sentencia de 5 de diciembre de 1853, se decidió á favor del Juzgado de primera instancia de Aguilar la competencia con el de la Capitanía general de Andalucía, acerca del conocimiento de la causa formada por este sobre heridas, en cuanto al paisano Francisco Aragon Moreno.

«Considerando que por no estar contestada la acusacion en el presente caso, pudo, segun la R. O. de 30 de marzo de 1831, reclamar su fuero, como lo hizo el expresado Francisco Aragon Moreno, y no puede en consecuencia suponerse prorogada tácitamente por el mismo la jurisdiccion militar.»

Sentencia de 18 de agosto de 1863.

No há lugar á decidir las competencias promovidas despues de contestada la acusacion fiscal.—Competencia entre el Juzgado de la Capitanía general de Castilla la Nueva y la Sala primera de la Audiencia de Madrid, acerca del conocimiento de una causa formada contra Angel Sacristan, soldado del batallon provincial de Guadalajara por atribuirle desacato al Alcalde de Centenera. Instruida la causa por la jurisdiccion ordinaria y hallándose ya el fallo del inferior en consulta á la Audiencia territorial se originó esta competencia.

El Juzgado militar exponia en defen-

sa de su jurisdiccion que no existia desacato, y la Audiencia se negó á inhibirse exponiendo que la causa se sigue por atentado y desacato contra la autoridad pública legítimamente constituida y en el ejercicio de sus funciones, y que hasta determinarse por sentencia ejecutoria la inocencia ó culpabilidad del procesado debe seguirse este procedimiento por la jurisdiccion ordinaria, porque aquellos delitos causan desafuero, segun las leyes del Reino.

El Tribunal Supremo, sin llegar á apreciar los fundamentos respectivamente expuestos para sostener esta competencia, declara que no há lugar á decidirla en los términos siguientes:

«Considerando que cuando el Juzgado de la Capitanía general de Castilla la Nueva entabló esta competencia, el Juez de primera instancia de Guadalajara habia ya pronunciado sentencia y remitido los autos en consulta á la Audiencia del territorio:

»Y considerando que, con arreglo á la R. O. de 30 de marzo de 1831, circulada en 14 de abril del mismo, no pueden promoverse ni admitirse reclamaciones de fuero ni denuncias de competencias en causas criminales una vez contestada la acusacion fiscal en primera instancia;

»Fallamos que debemos declarar y declaramos que no há lugar á decidir por *extemporánea la contienda* suscitada por dicho Juzgado militar etc.» (Gac. 23 agosto.)

La anterior decision es terminante, y en el fondo la misma que recayó y por los mismos fundamentos, en otra competencia suscitada entre el Juzgado de la Capitanía general de Castilla la Nueva y la Sala tercera de la Audiencia de Madrid, acerca del conocimiento de causa formada en el Juzgado de Talavera contra el soldado Sebastian Moro decidida en 4 de noviembre de 1853.

Sentencia de 21 de abril de 1864.

Pueden promoverse competencias en los sumarios ó antes de llegar al trámite de la defensa.—Por el Juzgado de primera instancia de Villafranca, se suscito competencia al de igual clase de Grandas de Salime, para que se abstuviese de la continuacion del sumario que en causa criminal formaba por sustraccion de ga-

nado vacuno de ciertos vecinos de Taladrí, etc.

Y se fundaba dicho juez requirente:

1.º En que el suceso que la motivó tuvo lugar en su territorio. 2.º En que las personas que le ejecutaron estaban sujetas á su jurisdicción por razón de su domicilio. Y 3.º En que en su partido se hallaban las cabezas de ganado que se decían sustraídas, y que serían en su caso el cuerpo del delito.

El de Grandas de Salime se negó á inhibirse alegando que no pueden promoverse competencias á instancia de parte en asuntos criminales, cuando estos son puramente inquisitivos para averiguar si existe ó no hecho punible, sin dirigirse los procedimientos contra persona determinada: que tampoco se pueden suscitar de oficio ó por excitación fiscal cuando el requirente no tiene formadas diligencias sobre el mismo hecho, y aun ultimado el sumario, en conformidad á la R. O. de 4 de julio de 1849: que el juez de Villafranca había reconocido su jurisdicción al cumplimentar los dos primeros exhortos; y por último, que la sustracción de los ganados tuvo lugar en términos de su partido, según se desprendía de la causa: El Tribunal Supremo decidió este conflicto á favor del juez de Villafranca:

«Considerando que la R. O. de 30 de marzo, circulada en 14 de abril de 1831, no expresa que antes de llegar al trámite de la defensa no se admitan competencias, en cuyo período de las actuaciones, desde el momento en que está descubierta la verdad de los hechos y parece que se hallan asegurados sus autores, como sucede en el caso actual no hay inconveniente razonable en que se pueda declinar la jurisdicción incompetente del juez, y reclamarle que someta el conocimiento del asunto al que tiene para ello verdadera jurisdicción:

Considerando que el juez de primera instancia de Villafranca del Bierzo promovió la competencia, mediante exposición del Alcalde pedáneo y vecinos del pueblo de Chano en que le excitaron á proponer la inhibición, debiendo por consiguiente entenderse que la competencia no se ha suscitado de oficio ni á excitación fiscal, sino de la parte interesada en que no se vulnerase su fuero:

Considerando que por haber proveído dicho juez el cumplimiento de los exhortos no reconoció la jurisdicción del requirente en lo relativo al hecho de autos, ni menos radicó el procedimiento en el Juzgado de Grandas de Salime, porque lo hizo con la calidad de sin perjuicio:

Considerando que en 17 de octubre de 1853 y 23 de agosto de 1858 este Tribunal Supremo resolvió que hay que recurrir al fuero del domicilio del reo, de que no se duda, cuando es dudoso el fuero preferente del lugar del delito:

Y considerando que los dos jueces sostienen su competencia por razón de estar en término de su respectivo partido el lugar en que se ejecutó la aprehensión del ganado vacuno, como cada uno de ellos ha podido defenderla en virtud del resultado de sus propias diligencias, al paso que es indubable que el domicilio de los aprehensores está situado en el partido judicial de Villafranca del Bierzo. Fallamos, etc. (*Gaceta del 24.*)

Sentencia de 2 de junio de 1863.

En el mismo sentido se decide por este fallo otra competencia estableciendo que el requerimiento de inhibición, recibido cuando la causa está en poder del defensor del reo para evacuar el traslado de la acusación fiscal, se halla hecho en tiempo oportuno. (*Comp. 2 junio de 1865.*)

Sentencia de 6 de abril de 1867.

Cuestión sobre quién ha de reclamar un informe de Academia.—Competencia negativa entre el Juzgado de la Lonja de la ciudad de Palma y el de la Comandancia general de artillería de las Islas Baleares, sobre cuál de ellos ha de reclamar el dictámen de la Academia médico-quirúrgica relativo á la responsabilidad en que hayan podido incurrir los facultativos civiles que declararon hábil para el servicio de las armas al quinto Juan Estéban Pascual, cuya inutilidad fué reconocida y declarada después de haber sido entregado en caja.

Como el expediente que dicho Juzgado militar remitió al de primera instancia para proceder contra los facultativos carecía de dicho dictámen, se suscitó la competencia negativa sobre quién había de reclamarle, y se decide por sentencia de 6 de abril en los términos siguientes:

«Considerando que las cuestiones de competencia de jurisdicción únicamente pueden tener lugar, cuando entre los jueces contendientes existan fundados motivos de controversia acerca del conocimiento de alguna causa ó negocio.

Considerando que en el caso actual no hay cuestión alguna respecto del conocimiento de la causa incoada en el Juzgado ordinario de Palma con motivo del tanto de culpa contra ciertos facultativos, que por el Juzgado de artillería de aquella plaza le fué remitido, sino solo sobre cuál de estos Juzgados ha de reclamar de la Academia médico-quirúrgica de la provincia el informe, que para tales casos prescribe el art. 14 del reglamento de 10 de febrero de 1855.

Considerando que esta cuestión no puede ser objeto de una contienda jurisdiccional, pues aun cuando el Juzgado de artillería haya omitido dar á la sumaria por él formada y sobreseida toda la ilustración que el mismo artículo requiere, esto no obsta para que el juez de primera instancia reclame por sí mismo, y no por conducto de aquel, así el referido informe como todos los demás datos, que para la debida instrucción de la citada causa sean necesarios;

Declaramos mal formada esta competencia y mandamos que se devuelvan á cada Juzgado sus respectivas actuaciones; para que se archiven nuevamente las del de artillería y para que el de primera instancia del distrito de la Lonja de la ciudad de Palma sustancie y determine las suyas con arreglo á derecho.» (*Gac.* 10 abril).

Sentencia de 1.º de octubre de 1867.

Las competencias solo proceden y pueden promoverse para determinar la jurisdicción y resolver cuál haya de ser el Juez que deba conocer del asunto. No hay cuestión de competencia cuando la contienda versa únicamente sobre prelación para hacer efectivas las responsabilidades pecuniarias impuestas á un penado.—Así se establece por este fallo, decidiendo la competencia entre el Juzgado de Guerra de la Capitanía general de Galicia y el Juez de primera instancia de Verín, acerca de la preferencia al pago de costas con bienes embargados á Ramon Lozano de resulta de causas distintas que se le han seguido respectivamente por dichos Juzgados. Cada uno de dichos Juzgados alegaba como funda-

mento de su competencia el derecho preferente al pago de sus costas, por haber decretado antes el embargo ó por haberse anotado en el registro; pero el Tribunal Supremo declara mal formada la competencia y que no há lugar á decidir sobre ella, consignando como fundamento la doctrina que hemos indicado.

Aunque ninguna duda debe haber sobre que la instrucción de 19 de abril de 1813 está vigente para las competencias que ocurran en las causas criminales, conviene tener presente que así lo tiene también reconocido el Tribunal Supremo de Justicia con posterioridad á la Ley de Enjuiciamiento civil, en una competencia sobre asunto penal entre los Juzgados de primera instancia de Cáceres y el de Palacio de Madrid, la cual termina con este encargo.

«Dígame al juez de primera instancia de dicho distrito que en lo sucesivo, al remitir para la decisión de una competencia las diligencias que hubiere formado, no omita el acompañar á ellas la exposición razonada que previene la instrucción de 19 de abril de 1813.»—**V. FUERO;** en JUSTICIA la facultad 5.ª del art. 58 del R. P., y facultad 13 del art. 90, y el art. 78 de las ordenanzas de las Audiencias; en CÓDIGO PENAL, el artículo 309, que establece pena para el empleado público que legalmente requerido de inhibición continuare decidiendo antes que se decida la contienda y en ORDEN PÚBLICO el artículo 67 de la ley de 20 de marzo de 1867, que prohíbe en la causas de esta clase contiendas y competencias.

CÓMPLICE. COMPLICIDAD. Define la complicidad en los delitos y faltas el artículo 13 del Código penal, y deben tenerse presentes además de dicho artículo, el 11, el 63, 65, 66 y 501, que establecen la responsabilidad de los cómplices.

COMPRA-VENTA. Contrato en que uno de los contrayentes se obliga á entregar una cosa, y el otro á pagar por ella en dinero su precio ó estimación.

I. Todo contrato de compra-venta

queda perfecto y obligatorio por el simple consentimiento de las partes y se consuma con la entrega de la cosa objeto de la venta y del precio convenido; pero si la venta es de inmuebles y no se ha otorgado escritura pública, tienen las partes el derecho reciproco de pedir su otorgamiento (1).

El precio debe ser cierto; pero basta que lo sea por relacion con otra cosa ó dicho de un tercero, segun lo dispuesto en las leyes 9.^a y 10, tit. V, Part. V; y debe ser asimismo justo, de manera que no resulte grande engaño para ninguno de los contrayentes. Si hay engaño y excede de la mitad del precio se dice que hay *lesion enorme*, y que hay *lesion enormísima* cuando es mucho mayor aquel, estando en todo caso obligados las contrayentes á reintegrarse del exceso en el mas ó en el menos precio, y rescindiéndose sino el contrato.—Véase ACCIONES RESCISORIAS Y RESOLUTORIAS. LESSION: RESTITUCION IN INTEGRUM.

II. Pueden comprar y vender todos los que tienen capacidad para obligarse segun puede verse en el artículo CONTRATOS, y los que además no tienen prohibicion legal (2). Está prohibido á los clérigos comprar y vender por vía de negociacion (*ley 46, tit. VI, Part. 1.^a*), á los magistrados y jueces comprar fincas en el territorio de su jurisdiccion, ú otras cosas que se vendan por su orden en almoneda pública (*leyes 4.^a, tit. XIV, lib. 5.^o y 3.^o, tit. XI, lib. 7.^o Novísima Recopilacion*), á los albaceas, tutores y caradores los bienes que administran etc. (*ley 4.^a, tit. V, Part. 5.^a*)

III. Pactos y condiciones. En las ventas pueden ponerse las condiciones que los contrayentes estimen, siendo conformes á las leyes y buenas costum-

bres; pero los pactos mas frecuentes y peculiares de estos contratos son:

El de *retro vendendo*, que consiste en estipular que volviendo el vendedor el precio recibido haya de recobrar la cosa.

Este pacto no debe confundirse con el llamado *comisorio* prohibido por la ley 12, tit. XIII, Part. 5.^a que tiene lugar en el préstamo con prenda ó hipoteca, y que consiste en la convencion de que no pagando el deudor al tiempo estipulado se quede el acreedor con la cosa empeñada en pago de su crédito. El pacto de retroventa consiste en la reserva que hace el vendedor de poder rescatar la cosa vendida dentro del plazo establecido. Son, pues, muy diferentes estos dos pactos aunque pueden confundirse, no fijándose en su distinta naturaleza. (*T. S. sentencia de 3 marzo de 1866.*)

El de la *ley comisorio*: tiene lugar cuando el pago del precio no es al contado, y consiste en estipular que no pagándole hasta cierto dia se deshaga la venta. No confundirle con el comisorio de que acabamos de hablar.

El de *adicion ó señalamiento de dia*: consiste en la condicion de que si dentro del tiempo que se señala hubiere otra persona que dé al vendedor ó sus herederos mayor precio, y el comprador no la quisiere por el tanto, pueda dejarse sin efecto la venta primera. Pactos son estos que tienen un objeto muy laudable y que algunas veces pueden ser muy convenientes en las ventas.—Véase ACCIONES RESCISORIAS.

IV. *Obligaciones y acciones que nacen de este contrato.* Obligacion del comprador es pagar el precio en la forma estipulada, con lo que adquiere el dominio de la cosa con sus perjuicios y mejoras desde que quedó perfecta la venta.

El vendedor debe entregar la cosa con los frutos, aumentos y mejoras que hubiere tenido desde el dia de la compra y con los accesorios destinados para el uso perpétuo de ella, sobre cuyo particular deben procurar ser muy explícitos los contrayentes.—V. ACCESION, nota de la pág. 94.

(1) En Aragon, segun su Fuero, se requiere la escritura pública para la perfeccion de la venta, y faltando, pueden los contrayentes separarse del contrato pagando cinco sueldos.

(2) Siendo capaces las personas para contratar, estando la cosa vendida en el comercio y circulacion y siendo cierto el precio es válido y eficaz el contrato con arreglo á lo que prescriben las leyes 6.^a y 9.^a, tit. V de la Partida 5.^a (*T. S. sentencia de 18 de febrero de 1863.*)

V. Además de las acciones de que hemos hecho indicacion y que son consiguientes, para que se pague el precio, ó se entregue la cosa comprada (1) ó se cumplan las condiciones ó pactos, nacen de este contrato otras muy importantes, como la llamada de eviccion y la redhibitoria y *quanti minoris*.

VI. La *eviccion y saneamiento* consiste en que el vendedor salga en caso de moverse pleito á la defensa de la cosa, previo requerimiento ó *citacion de eviccion* que segun las leyes 32 y 36, título V, Partida 5.^a, debe hacerse á instancia del comprador tan luego como se le moviere pleito, ó á lo mas tarde antes de la publicacion de probanzas, perdiendo en otro caso su derecho al saneamiento. Hecha la citacion en forma, el saneamiento ha de consistir en su caso, no solo en la devolucion del precio entregado por la cosa sino tambien en el abono de los daños y perjuicios con tal motivo sufridos. Pero no se extiende el saneamiento ó indemnizacion á las mejoras que hubiere hecho el comprador; pues estas, segun la ley 41, tit. XXVIII, Partida 3.^a, son en todo caso de cargo del dueño de la cosa quien está obligado á abonarlas al que compró ó ganó de buena fé heredades ajenas, é hizo en ellas de nuevo alguna cosa como torre ó casa ú otro edificio, ó plantó árboles ó puso majuelos etc.; porque habiendo tenido buena fé para ganar la cosa y labrado en ella así como en lo suyo, justo es que cobre lo que gastó de esta manera.—V. MEJORAS Y DETERIORES EN LA COSA POSEIDA.

Cuando se celebra un contrato de compra-venta de diferentes bienes por un precio alzado y no á razon de tanto la medida ó número, la falta de alguna parte de ellos no da derecho al comprador á la indemnizacion de los que hallase de menos, no mediando perjuicio ó le-

sion en mas de la mitad del justo precio. (*Sentencia de 8 de abril de 1863.*)

VII. La accion *redhibitoria* y *quanti minoris* ó del cuanto menos son dos acciones distintas que reconocen un mismo fundamento. Con arreglo á la ley 65, tit. V, Partida 5.^a el comprador de un caballo, mulo ú otro animal cualquiera tiene accion para devolvérsele al vendedor y recobrar su precio, si tuviere alguna enfermedad ó tacha, porque valiese menos, con los daños y menoscabos, la cual puede ejercitar dentro de los seis meses contados desde que supiere la tacha. Esta accion se llama *redhibitoria*. Dentro de dichos seis meses y otros seis mas, el mismo comprador puede, conformándose con la compra, compeler al vendedor á que le reintegre todo el exso de precio que dió por la cosa, atendida la tacha ó vicio que tuviere, en cuyo caso la accion se llama del cuanto menos ó *quanti minoris*. Estas acciones son eficaces, bien sea que el vendedor sepa el defecto ó vicio de que adolece la cosa y no la diga paladinamente, como lo quiere la ley 66 del mismo título, ó bien que lo ignore. Lo principal que en todo caso interesa al que ejercite estas acciones, es acreditar si el defecto ó vicio existia al tiempo de verificarse la venta, porque si lo hubiere sobrevenido con posterioridad no será responsable el vendedor. (*Tribunal Supremo sentencia de 28 de marzo de 1863.*)

VIII. Si la cosa vendida es raiz como casa, ó torre, ó heredad, no parece estar comprendida en la ley citada, aunque Escriche y en general los expositores no hacen distincion. Sin embargo, segun la ley 63 del mismo tit. V, puede el comprador deshacer la venta de casa ó torre cuando se encubre que esta debe servidumbre ó es tributaria, estando obligado el vendedor á devolver el precio con los daños é menoscabos; y lo mismo cuando la cosa vendida es campo ó prado que supiere que criaba malas yerbas. Esta ley no señala tiempo para ejercitar la accion, pero los autores le limitan á los seis meses ó un año como si se tratara de venta de bestias.

(1) No cumpliendo el vendedor con la entrega de la cosa vendida en el plazo señalado, cualquiera que sea la diferencia que sufra el precio es en culpa del vendedor por razon de la tardanza, segun la ley 27, tit. V, Partida 5.^a (*Sentencia de 18 de febrero de 1863*)

Jurisprudencia.

Además de la doctrina ya expuesta y apoyada en parte en algunos fallos del Tribunal Supremo, hé aquí otros varios que establecen doctrina general é importante.

Sent. de 11 diciembre de 1863.

I. *Sin necesidad de escritura pública, este contrato queda perfecto y obligatorio por el simple consentimiento de las partes en la cosa y en el precio.* Doña Josefa Lopez entabló demanda contra D. José Prado, en el Juzgado de Ortigueira, con la pretension de que se le condenase á que la entregara una casa nombrada de Revoleda en la villa de Cedeira, con las rentas producidas y debidas producir desde hacia catorce años, alegando que dicha casa la pertenecía por justos y legítimos títulos. El demandado contestó solicitando se le absolviera libremente de la demanda, exponiendo al efecto que la habia adquirido de la doña Josefa, con licencia é intervencion de su marido, como resultaba de la escritura privada de 2 de marzo de 1843, de que se tomó razon en la Contaduría de hipotecas, despues de satisfecho el medio por 100 del derecho hipotecario; que por consiguiente el contrato fué válido, é improcedente la accion reivindicatoria que contra él se habia intentado, asistiéndole además el título de la prescripcion segun la ley.

Sustanciada por sus trámites se dictó sentencia, que confirmó la Sala tercera de la Audiencia de la Coruña, absolviendo de la demanda á Prado, contra la que interpuso recurso de casacion la parte actora por considerar infringidas:

1.º La ley 14, tit. XM, lib. X de la Nov. Rec., mediante á admitirse como fundamento de la sentencia la escritura simple de 2 de marzo de 1843, siendo así que los contratos de compra-venta deben celebrarse por escritura pública ante escribano. 2.º La doctrina y jurisprudencia de que «el instrumento privado vale tan solo como prueba articulada, y necesita probarse con el reconocimiento y confesion de la parte á

quien perjudica, ó con las declaraciones de los testigos, instrumentales,» lo cual no habia tenido lugar en este caso. Y 3.º La ley 32, tit. XVI, Part. 3.ª, por cuanto el juez habia librado su juicio sobre el testimonio de un solo testigo, fundando su conviccion en declaraciones de otros, que solo deponian haber oido de público el otorgamiento de la venta.

El Tribunal Supremo desestimó el recurso en esta forma:

«Considerando que el contrato de compra-venta, como esencialmente consensual, queda perfecto y obligatorio por el simple consentimiento de los contrayentes en la cosa y en el precio, requisitos que han tenido lugar en el de que se trata en estos autos, sin que varien la naturaleza del mismo las disposiciones de la ley 14, tit. XII, lib. X de la Nov. Recop., establecidas con el objeto de asegurar la cobranza de los impuestos fiscales sobre las ventas, cambios y enajenaciones de bienes raices, la cual por lo tanto no ha sido infringida:

Considerando que la Sala sentenciadora, no solo ha apreciado la declaracion de uno de los testigos que firmaron el documento privado de venta y las de los otros que deponen de oidas sino todos los demás datos del proceso, entre ellos el reconocimiento de la misma recurrente que convino en desocupar la casa en cuestion como propia del demandado, y en satisfacer la cantidad que por razon de alquileres de ella la reclamaba, y que por consiguiente al absolverle de la demanda no ha infringido la ley 32, tit. XVI, Part. 3.ª, en lo que no se halla modificada por la de Enjuiciamiento civil, como tampoco la doctrina y jurisprudencia que se citan en apoyo del recurso:

Fallamos que debemos delarar y declaramos no haber lugar al interpuesto por Doña Josefa Lopez, etc. (Gac. de 15 de id.)

II. Igual doctrina se establece en otra sent. de 11 de abril de 1864, declarando haber lugar á un recurso de injusticia notoria, cuyos tres primeros considerandos dicen así textualmente:

«Considerando que el contrato de compra-venta queda perfecto y es obligatorio desde que los contrayentes convienen en la cosa y en el precio, y que por consecuencia tienen aquellos el derecho reciproco de pedir que se lleve á efecto y reduzca á escritura pública:

Considerando que en el presente caso, no solo hubo el expresado consentimiento, sino que los vendedores recibieron del comprador 160.000 rs. en señal y parte de pago del precio total, y que cuando esto se verifica, ninguno de los contrayentes puede dejar de cumplir lo pactado ni deshacer la venta segun expresamente ordena la ley 7.^a, tít. V de la Part. 5.^a:

Considerando que celebrado así el contrato, es ineludible su cumplimiento, conforme á lo que prescribe la ley 1.^a, tít. I, lib. X de de la Nov. Recop.»

Sent. de 8 febrero de 1867.

III. *Cuando se establece como base esencial del contrato de compra-venta la condicion de que tenga efecto por escritura pública, hasta que su otorgamiento se verifica no queda perfecto ni existe obligacion civil exigible.* Recurso de casacion interpuesto por Juan Fernandez y Antonio Delgado, contra sentencia de la Sala tercera de dicha Audiencia, dictada en pleito con los herederos de don José Vargas Machuca. Versaba este sobre cumplimiento de un contrato de venta de leñas, que celebraron los recurrentes con un dependiente de Vargas, por medio de un documento simple, en el que entre otras condiciones se fijó la de que para entregar el primer plazo se habia de otorgar escritura pública, y que su extension se haria con consentimiento de Vargas, á quien su dependiente dijo, tenia dada noticia, y de quien esperaba en aquel dia contestacion para las condiciones de la escritura. Como Vargas, y por su muerte sus herederos, se opusieron á la demanda alegando que no habia contrato perfecto por faltar el consentimiento y la escritura pública estipulada, recayó sentencia absolutoria en primera y segunda instancia, y contra esta se interpuso el recurso de casacion citando como infringidas:

1.^o La ley 1.^a, tít. I, libro X de la Novísima Recopilacion:

2.^o La sentencia de este Supremo Tribunal de 11 de diciembre de 1863, segun la cual el contrato de compra-venta, como esencialmente consensual, que-

da perfecto con el consentimiento de las partes en la cosa y en el precio:

Y 3.^o Las leyes 13 y 35, tít. XI, Partida 5.^a, relativas al abono de daños y perjuicios cuando se falta al cumplimiento de un contrato perfecto, y la sentencia de este Supremo Tribunal de 18 de marzo de 1863:

El Tribunal Supremo, Sala primera, Seccion segunda, declara no haber lugar al recurso, por sentencia de 8 de febrero.

«Considerando que segun la doctrina consignada en la ley 6.^a, tít. V, Part. 5.^a, si se establece como base esencial del contrato de compra-venta la condicion de que tenga efecto por escritura pública, hasta que su otorgamiento se verifica, no queda perfecto dicho contrato:

Considerando que estipulada en el caso de que se trata dicha condicion esencial, con la de obtener para el otorgamiento de la escritura el consentimiento previo del dueño de las leñas que eran objeto de la venta, que no tuvo á bien conceder, el contrato no llegó á su perfeccion; y es por lo tanto inaplicable la jurisprudencia que, estableciendo el supuesto contrario, invocan como infringida los recurrentes:

Considerando que por no haber existido contrato perfecto y consumado, ni por consiguiente obligacion civil exigible, es inoportuna la cita de la ley 1.^a, tít. I, lib. X de la Nov. Rec.

Y considerando, por último, que por idéntica razon no ha podido infringir la ejecutoria las demás leyes y jurisprudencia invocadas por los recurrentes, que son relativas al abono de daños y perjuicios, cuando se falta al cumplimiento de un contrato perfecto y acabado.» (*Gac. 13 de febrero.*)

Sentencia de 17 de marzo de 1864.

IV. *Cuando el comprador ha recibido una finca con la expresion de que conviene en ella tal como se encuentre, no tiene derecho á indemnizacion por los defectos exteriores y cognoscibles de la misma. Las acciones rehibitoria y cuanti-minoris prescriben al medio año, ó un año respectivamente.*— Demanda entablada por D. Rafael Palomera, contra D. Florentino María del Ribero, sobre abono del importe de unas obras. En 1857 compró el demandante á este una casa, insertándose en la escri-

tura una certificacion expedida por el arquitecto constructor de la misma, circunstanciada de la índole de los materiales empleados en su edificacion; pero resultó en 1859 que al derribar el vecino la inmediata á aquella fué advertido en la medianería lo engañoso de tal certificado y mas que todo la inminente ruina que ofrecia. Examinada por arquitectos, uno por parte del comprador y dos nombrados de oficio, declararon que desmerecia la casa por la inferioridad de los materiales invertidos en ella en la suma de 24.983 rs. cuya cantidad seria lo que costasen las obras necesarias para asegurarla. Hechas por Palomera puso la cuenta de gastos y daños por valor de 32.910 reales y como se hubiese negado el vendedor á abonarlos, promovió aquel demanda fundada en el engaño manifiesto de que habia sido victima, y en que las acciones *redhibitoria quanti-minoris* y eviccion eran aplicables por existir demérito en la finca vendida, y que por consiguiente procedia el reintegro. El demandado se opuso á ella, diciendo que el juicio pericial debió haberse hecho durante el período de prueba, que las acciones alegadas estaban prescritas, que la eviccion no era aplicable, y por último que el dolo presumible en él era preciso probarle. El juez dictó sentencia que confirmó la Sala 3.^a de la Audiencia de esta córte absolviendo al demandado. Contra ella interpuso Palomera el recurso, alegando como infringidas las leyes 16, tit. XXII, Partida 3.^a; 14, 38, 57, 64, 65, tit. V, Partida 5.^a; la 35, tit. XI, Partida 5.^a; la 2.^a, tit. XXXIII, Partida 7.^a; 36, tit. XXXIV, Partida 7.^a; la 1.^a, tit. I, lib. X de la Nov. Recop.; los artículos 247 y 248 del Código de comercio, y los principios de derecho, sancionados por la jurisprudencia de que á nadie es lícito engañar á otro: que las leyes favorecen al engañado; que el engaño solo es imputable al que le comete; y que no se excusa ni justifica, ni el engañado pierde su derecho, porque haya confiado y creído de buena fé al engañador.

Y el Tribunal Supremo le desestimó declarando no haber lugar á él:

«Considerando que si bien es válida la venta de casa ó de otro edificio destruido ó deteriorado en su menor parte, ignorándolo ambos contrayentes, pero rebajándose de su precio lo que vale de menos, segun la ley 14, tit. V, Partida 5.^a, no tiene sin embargo lugar esta indemnizacion con arreglo á la misma ley, cuando se establece en el contrato el pacto expreso de que la venta se verifica en el estado en que la finca se encuentre y fuese aceptado este pacto por el comprador:

Considerando que por mas que en la escritura de 17 de diciembre de 1857 se hubiere insertado la certificacion pericial de 1822, relativa á la descripcion mas ó menos detallada de la casa, objeto de este pleito, y de sus paredes medianeras, comprobacion que por otra parte pudo verificar el comprador para cerciorarse de las condiciones de su fábrica; tal manifestacion ajena hasta cierto punto al vendedor, que tambien la habia adquirido bajo aquel supuesto, no induce engaño por su parte, ni tiene la fuerza que se pretende por el recurrente para desvirtuar el pacto que aceptó de adquirir la citada finca en el ser y estado en que á la sazón se encontraba.

Considerando en tal supuesto que la expresada ley y las demás en que se apoya el recurso, suponiendo que ha mediado engaño en el contrato referido, no han sido infringidas por la ejecutoria:

Y considerando que siendo esta, absoluta de la demanda, ha resuelto todas las cuestiones que han sido objeto del pleito, y guardando con aquella entera conformidad, no ha infringido tampoco la ley 16, tit. XXII, Partida 3.^a» (*Gac. del 23.*)

Sent. de 28 de marzo de 1863.

V. *Rescision por lesion enormísima: el contrato es la ley en la materia.*

D. Pedro de la Morena, dueño de la mitad de una tierra labrantía de caber toda de cuatro fanegas, poco mas ó menos, sita en las afueras de Madrid, á la puerta de Bilbao, vendió por escritura de 25 de mayo de 1856 á D. Juan Feito Gayo la cuarta parte de ella, en precio de 10,500 rs. haciéndole y á los suyos gracia y donacion, con insinuacion y demás firmezas legales del exceso del valor que pudiera tener, con renuncia de los cuatro años de la rescision; pero quedando dicho vendedor libre de responsabilidad á las resultas de ciertos autos

seguidos sobre la finca, y de la eviccion y saneamiento, lo cual aceptó el comprador; y ambos contrayentes se obligaron en forma á su cumplimiento.

Promovido pleito por Morena en 1859, pidiendo la nulidad de la venta ó la rescision en su caso por lesion enormísima, por suponer que el terreno se habia enajenado por la vigésima parte de su valor, atendiendo al incremento que iba tomando Madrid por aquel punto; y seguido por sus trámites con pruebas de testigos y periciales, dictó sentencia la Sala tercera de la Audiencia de esta corte en 31 de junio de 1861, declarando rescindido é ineficaz el contrato.

Se interpuso por Feito recurso de casacion, citando como infringidas las leyes de que se hace mérito en el fallo del Tribunal Supremo, pero fué desestimado en los términos siguientes:

«Considerando que por la escritura de 25 de mayo de 1556 fué vendida la cuarta parte de un terreno labrantío de cuatro fanegas, cuya situacion y linderos se especifican, sin que el texto claro y expícito de aquella permita la menor duda de que sobre la cosa vendida, tal como se califica, recayó la voluntad y unánime consentimiento de las partes contratantes.

»Considerando que el destino, uso ó aprovechamiento de la cosa vendida corresponde libre y exclusivamente al comprador, no mediando pacto en contrario, como así bien los resultados ventajosos ó perjudiciales, sin que esto afecte en nada al precio convenido al tiempo de la venta, y que el vendedor no ignoraba la creciente estimacion de tales terrenos por su inmediacion al recinto de Madrid, destinándolos á solares para edificar, lo cual pasaba á su vista como público y notorio, y suministra una prueba evidente el hecho de haber vendido en 10.500 rs. lo que no valia mas de 2.300 como terreno labrantío:

»Considerando que cuando se verificó el contrato la pertenencia del terreno de cuatro fanegas, de que formaba parte la porcion vendida, se hallaba pendiente de litigio promovido contra el vendedor, y por tanto sus derechos no eran ciertos, y tomaba sobre sí el comprador el riesgo de los resultados, exponiéndose á perder el precio satisfecho sin adquirir la cosa comprada; y que con presencia y conocimiento de todas estas causas se convino en el precio y se concertaron los

demás pactos contenidos en la referida escritura:

»Considerando, por último, que segun lo expuesto en los precedentes fundamentos, el vendedor no padeció engaño en la estimacion y precio de la cosa que vendia, sin que por otra parte hubiese términos hábiles para su apreciacion, por el estado litigioso de aquella cuando se verificó la venta, la sentencia de 1.º de junio de 1861, que declara procedente la rescision por lesion enorme, infringe la ley 3.ª, tít. I, lib. X de la Novísima Recopilacion, y la regla 25, tít. XXXIV de la Partida 7.ª, y es contraria á la doctrina consignada en la sentencia de este Supremo Tribunal de 31 de diciembre de 1857, en cuanto por inexacto fundamento, cual es el de suponer vendido por piés y para edificar el terreno que lo fué como labrantío, se ha violado la ley de la materia, que es el contrato consignado en la referida escritura de 25 de mayo de 1856, alegadas en el recurso:

Fallamos que debemos declarar y declaramos haber lugar al interpuesto por D. Juan Feito Gayo, y en su consecuencia, casamos y anulamos la citada sentencia pronunciada en 1.º de junio de 1861 por la Sala tercera de la Audiencia de esta corte.»

Es doctrina establecida en otros fallos por el Tribunal Supremo que debidamente acreditado un contrato es ineludible su cumplimiento segun la ley 1.ª, tít. I, lib. X de la Nov. Rec. cuando no se le haya objetado ningun vicio ni defecto. (*Sent. de 21 de setiembre de 1859, publicada en la Gac. del 23 de id.*) Y que versando un litigio sobre la verdadera inteligencia de un contrato, la violacion de este como ley en la materia es motivo de casacion. (*Sent. de 31 diciembre 1857.*)

Sentencia de 28 de mayo de 1867.

VI. *En los contratos... se ha de atender á la voluntad ó intencion de las partes.* Cuestion sobre si la venta de una finca se hizo por razon de su extension ó por precio alzado como cuerpo cierto.—Recurso de casacion interpuesto por don Aureliano Beruete en pleito que el mismo promovió contra D. José García Sancho sobre cumplimiento de un contrato de venta de una posesion titulada do Párraces, contra sentencia de la Sala segunda de dicha Audiencia, absolutoria de la demanda y declaratoria de la nuli-

dad de la venta. Bernete pretendia que el contrato se habia hecho por la medida ó cabida de 6242 fanegas que debia entregarle ó rebajarle del precio sino las tenia, y Sancho que se habia hecho por un precio dado sin atender á la cabida; estando uno y otro conformes en la nulidad si no se accedia á sus respectivas reclamaciones. Citó el recurrente como infringidas varias leyes y doctrinas de jurisprudencia; pero el Tribunal Supremo, Sala 1.^a, Seccion 2.^a, declara no haber lugar al recurso por sentencia de 28 de mayo.

«Considerando que en los contratos consensuales y de buena fé, como es el de compra y venta, ha de atenderse ante todo, segun doctrina admitida por la jurisprudencia, á la voluntad ó intencion expresamente demostrada por las partes, para conocer y fijar la amplitud y limites de las obligaciones que respectivamente quisieron contraer:

Considerando que la venta de la finca, de que en este pleito se trata, no se ha justificado, segun la apreciacion del conjunto de pruebas de ambas partes, hecha por la Sala juzgadora en uso de sus facultades, que hubiese sido estipulada por precio alzado como cuerpo cierto, prescindiendo de su mayor ó menor extension; y si por el contrario que el comprador exigió nota expresiva de la cabida y calidad de los diversos terrenos, que comprende aquella heredad, formalizando en su virtud sus proposiciones; y no habiendo sido aceptadas, devolvió dicha nota al comprador por quien le fué restituida al reanudar las negociaciones para venir á un acuerdo comun; demostrando estos hechos y demás acreditados, á juicio de la misma Sala, que dicha nota sirvió de base al expresado contrato:

Considerando que no aceptada por el demandante la oferta que en el escrito de contestacion a la demanda le hizo el demandado, y habiendo pedido expresamente que no accediéndose á su primera solicitud, se declarase la nulidad de la venta, á cuya última pretension se adhirió dicho demandado, quedó así fijada por voluntad de las partes la cuestion litigiosa:

Considerando por tanto que la ejecutoria al calificar la obligacion del comprador como aparece haber sido por el mismo contraida, no ha infringido la ley del contrato, ni violado la ley 1.^a, tít. I, lib. X de la Novísima Recopilacion, invocadas en primer lugar por el recurrente, y habiendo el mismo deducido

peticion expresa de que en el caso de ser desestimada su demanda en lo principal se declarase la nulidad de la venta, no ha podido, segun doctrina admitida por la jurisprudencia, utilizar esta declaracion para fundar en ella el recurso:

Considerando además que no han sido quebrantadas por la ejecutoria las leyes que declaran que de perfecto el contrato de compra y venta por el consentimiento ó conformidad de las partes en la cosa y en el precio, sin hacerla depender del otorgamiento de la escritura pública, porque sobre este particular no ha versado el debate, y que son igualmente inaplicables á este pleito las demás leyes y doctrinas que haciendo supuesto de la cuestion invoca tambien el recurrente.

Y considerando, por último, que tampoco pueden tener aplicacion á este pleito las doctrinas que este Supremo Tribunal ha consignado en varias sentencias que cita el recurrente porque no hay identidad de casos, siendo muy diversas las circunstancias que en aquellos concurren.» (Gac. 4 junio.)

VII. Por otra sentencia de 29 abril de 1867 declara el Tribunal Supremo, Sala 1.^a, Seccion 1.^a, no haber lugar al recurso de casacion interpuesto por don Mariano Pallisé en pleito con D. Luis y D. Magin Jordana y Borrás, como herederos de Doña Rosa Borrás, su madre, sobre indemnizacion de perjuicios, consignando la doctrina de que á la venta de una finca hecha á tanto por medida, no es aplicable la ley 45 *Digestorum De evictionibus*, que declara el derecho del comprador de un finca vendida con limites señalados á que le eviccionen el vendedor de lo que pierda dentro de los mismos, aun quedándole la medida expresa en el contrato.

Sent. de 2 de octubre de 1867.

VIII. Segun la ley 63, tít. XV, P. 5.^a, el comprador de una cosa puede pedir la rescision del contrato cuando el vendedor calló la servidumbre ó carga que tenia, estando este obligado á devolverle el precio y los daños y perjuicios. Declara el Tribunal Supremo, Sala 1.^a, Seccion 2.^a haber lugar al recurso de casacion y casa y anula la sentencia dictada por la Sala 2.^a de dicha Audiencia, en pleito promovido por D. Juan Arana á D. Ramon Maria San Juan, sobre

cumplimiento de un contrato de venta de una casa, á que se opuso San Juan alegando que él la compró libre y resultaba gravada con un censo. En los escritos de réplica y dúplica se cruzaron indicaciones por parte del vendedor que el redimiría el censo, y por parte del comprador de que dándosele luego redimido y cargando con las costas del pleito, aceptaría el contrato, pero sin desistir á pesar de esto ni uno ni otro de sus pretensiones.

Seguido el pleito por sus trámites, la Sala referida condenó al demandado á llevar á efecto el contrato en los términos convenidos de haber de darle redimido al censo el vendedor etc. Pero interpuesto el recurso de casacion citando como infringida la ley 63, tít. V, Partida 5.^a y otras, le estima el Tribunal Supremo como dejamos dicho en los términos siguientes:

«Considerando que en el contrato de compra-venta el vendedor está obligado á manifestar al comprador los vicios ó defectos de la cosa vendida, y las cargas ó gravámenes que sobre sí tenga, porque no siendo visibles ó notorios y encubriéndolos le induciría en error, faltando en este caso la buena fé y la libre voluntad y verdadero consentimiento de los contrayentes, que son los principios constitutivos y esenciales del contrato:

Considerando que de conformidad con ellos la ley 63, tít. V, Part. 5.^a impone como pena de su descuido ó mala fé al que vende casa ó torre sobre la que pese un gravámen que afecte á la propiedad ó menoscabe el pleno dominio, que no cumpliendo con el deber expresado, pueda el comprador pedir la rescision del contrato con el abono de daños y perjuicios:

Considerando que siendo esta la genuina y verdadera inteligencia de la mencionada ley, como se desprende de su literal contexto y de su espíritu, y lo ha declarado tambien este Supremo Tribunal, no puede dudarse que la cuestion promovida y sostenida en este pleito, aceptados los hechos reconocidos como ciertos en él, está comprendida en sus disposiciones, y que el demandado pudo legalmente fundar en ellas la excepcion que propuso en su escrito de contestacion á la demanda:

Y considerando por todo lo expuesto que la sentencia ha infringido la ley 63, tít. V de

la Part. 5.^a citada en el recurso en tal concepto y la doctrina y jurisprudencia admitida por los Tribunales que igualmente se citan, de que la sentencia ha de ser conforme con la demanda, y recaer sobre lo alegado y probado;

Fallamos que debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso de casacion interpuesto por D. Ramon María San Juan, y en su consecuencia casamos y anulamos la sentencia que en 29 de enero último dictó la Sala 2.^a de la Real Audiencia de Sevilla.»
V. CONTRATOS.

COMPROMISO.—V. JUICIO ARBITRAL, JUICIO DE AMIGABLES COMPONEDORES.

COMPULSA. Copia, trasunto ó traslado de alguna escritura, instrumento ó autos sacado judicialmente y cotejado con su original. Cuando se presentan en juicio documentos públicos, sacados sin citacion, tiene lugar á instancia de parte el cotejo con su original. Para llevarlos de nuevo en el término de prueba se requiere mandamiento compulsorio. (Artículos 281 Ley de Enjuiciamiento civil y disp. 8.^a, art. 51 del Reg. prov.)

Cuando sea necesario practicar compulsas ó cotejos en oficinas del Estado, téngase en cuenta la R. O. de 30 de mayo de 1852 inserta en el artículo ARCHIVOS DE HACIENDA, t. 1.^o, pág. 473.

COMUNERO.—V. CONDOMINIO.

COMUNES.—V. APROVECHAMIENTOS: BIENES: MONTES: PASTOS: PROPIOS.

COMUNICACIONES OFICIALES. Tienen este carácter los oficios y demás correspondencia que se verifica entre autoridades sobre asuntos propios del servicio. Los Alcaldes de una misma provincia pueden comunicarse de oficio entre sí directamente; mas para entenderse con los de otras provincias, tienen que practicarlo por conducto de sus respectivos Gobernadores (párrafo 12, art. 74 de la ley.) Además deberán tener presente que no pueden usar papel continuo en dichas comunicaciones ni en documento alguno de la Administracion, sino el de hilo y de marca regular equivalente á la del sellado.

Hé aquí lo dispuesto sobre este asunto:

R. O. de 15 junio de 1846.

(GUERRA.) Que las dependencias del Mi-

nisterio de la Guerra usen en lo sucesivo en sus comunicaciones oficiales de un membrete impreso que manifieste la autoridad ó corporacion que escribe; con lo cual desaparecerá la caprichosa variedad de timbres que se ven en las comunicaciones diariamente.

R. O. de 5 julio de 1846.

(GOB.) Se resuelve que mientras el papel llamado continuo no reciba las mejoras que reclama su actual fabricacion no se emplee en documentos públicos y oficiales y en la correspondencia del Ministerio de la Gobernacion.

R. O. de 9 diciembre de 1851.

Comunicaciones de los contratistas de obras públicas.

(HAC.) «..... Sobre si los contratistas de obras públicas han de dirigirse de oficio en las comunicaciones que tengan necesidad de pasar para cumplimiento y buen servicio de sus contratas, ó han de usar del papel del sello 4.º..... se ha servido S. M. declarar, que los contratistas de todos los ramos de la Administracion pública están en el caso de entenderse de oficio con las autoridades y oficinas de que dependan, en todo lo que tenga relacion con los servicios que se hallan á su cargo, excepto cuando hagan reclamaciones al Gobierno contra las resoluciones ó disposiciones de sus jefes.—De Real orden, etc.—Madrid 9 de diciembre de 1851.» (CL. t. 54, p. 517.)

R. O. 31 diciembre de 1851.

Se extiendan en papel corto de media margen.

(PRES. DEL C. DE M.) «La Reina (que Dios guarde) se ha servido mandar que todas las comunicaciones que en lo sucesivo se dirijan por los Ministerios á las autoridades, corporaciones y personas particulares dentro y fuera de la corte, y por las mismas autoridades y corporaciones de unas á otras, y á cualquiera de los Ministerios, se extiendan en papel corto y á media margen, salvo aquellas en que por su naturaleza, y con arreglo á las disposiciones vigentes, debe usarse del sellado. Madrid 31 de diciembre de 1851.» (CL. t. 54, p. 708.)

Jurisprudencia.

No há lugar á presumir injuria en las palabras que las autoridades empleen en las comunicaciones oficiales, por ser ellas secretas por naturaleza.—Así en caso de autorizacion lo establece el Con-

sejo de Estado, denegándola (*decision de 21 de marzo de 1864*). Consideraudo:

«Que las comunicaciones oficiales que median entre las autoridades ó funcionarios públicos son por su naturaleza reservadas, y que por lo tanto no há lugar generalmente á presumir en ellas el delito de injuria, aunque su contenido se haga público indebidamente:

Que las palabras mas ó menos inconvenientes consignadas en el informe dirigido al Gobernador de la provincia por el director del lazareto no constituyen el delito de injuria, porque habiendo sido estampadas en un documento oficial, no puede decirse que este tratase de desconceptuar ni ofender la autoridad de la Comandancia de marina, toda vez que el director del lazareto no hizo público dicho documento.»

Otra resolucion idéntica y en idénticos términos recayó en otro expediente sobre autorizacion, por R. O. de 6 de febrero de 1862 confirmando la negativa para procesar á un investigador de propiedades y derechos del Estado, por el contenido de un oficio dirigido al Alcalde, que este hizo público sin necesidad. (*Gac. 23 febrero de 1862*). Y en el mismo sentido pueden consultarse la de 21 de marzo y 25 de octubre de 1859, 18 de junio de 1862 y 21 de abril de 1864.

CONCEJO. En lo antiguo *conceillo* ó *concello*. Aunque generalmente esta voz significa el Ayuntamiento de algun pueblo, ó lugar que no sea villa, ó ciudad, compuesto de Alcalde, Regidores, Procurador y vecinos, en varias partes del Reino, como en Asturias, y otras provincias se entiende tambien por el mismo distrito y jurisdiccion, compuesta de varias feligresias ó parroquias, las cuales acuden al pueblo mas principal ó capital suya. (Dicc. de Cornejo).—V. ALCALDES Y AYUNTAMIENTOS.

CONCEJO DE LA MESTA. Corporacion de ganaderos que tenia por objeto atender á la conservacion y fomento de la ganaderia de todas especies del Reino.—V. CAÑADAS: GANADERIA: MESTA.

CONCILIACION. (ACTOS DE) Véanse sobre este asunto los arts. 21 al 30 del reglamento provisional con sus notas, y los arts. 13, 14, 18, 19, y 201 al 220 de la Ley de Enjuiciamiento civil. En los

negocios contencioso-administrativos no es necesario intentar el juicio de conciliación. R. O. de 31 de enero de 1847.

—V. DEMANDAS CONTRA EL ESTADO.

CONCORDATOS. Se llama Concordato el tratado ó convenio que hace el Papa con algun Príncipe ó Gobierno sobre puntos de disciplina eclesiástica.

«La historia de los Concordatos, dice un escritor, seria la historia de las disputas y discordias habidas entre el sacerdocio y el imperio, porque así como no habría transacciones privadas, si no hubiere cuestiones entre los intereses particulares, tampoco hubiera habido necesidad de concordias entre los Papas y los Príncipes si no hubiere habido desavenencias entre ellos, y si cada uno hubiera permanecido dentro de los límites de sus verdaderas atribuciones.»

Entre nosotros son notables los Concordatos celebrados en 1737 entre Felipe V y Clemente XII y en 1753 entre Fernando VI y Benedicto XIV, y mas notable todavía el último que, en virtud de la ley de 8 de mayo de 1849, se celebró en 16 de marzo de 1851, ratificándose despues en 1.º y 26 de abril, y publicándose como ley del Estado en 17 de octubre del mismo. Hé aquí el texto de los referidos concordatos, inclusa la concordia Fachenetti de 1640, y el Convenio de 4 de abril de 1850, con mas las disposiciones dictadas para la ejecucion de los mismos.

Concordia Fachenetti.

Dáse este nombre á la Concordia que se tomó por el Rey Felipe IV con el Nuncio D. César Fachenetti aprobando las Ordenanzas de la Nunciatura decretadas en 8 de octubre de 1640. Las negociaciones para esta Concordia se debieron á la iniciativa de D. Juan Chumacero, y tuvo por objeto este arreglo la reformation de los abusos del Tribunal de la Nunciatura. Los 22 primeros capítulos de esta Concordia se incluyen en la ley 2.ª, tit. IV, lib. II de la Nov. Recop., y los siguientes 23 al 35 contienen el arancel de derechos de los ministros y oficiales del Nuncio.

En el memorial que presentaron al Papa D. Juan Chumacenc y D. Fray Domingo Pimentel, hicieron resaltar los abusos del Tribunal de la Nunciatura, cuya reforma pretendian. «Los derechos, que en él se llevan, decian, en uno de sus capitulos, así por los ministros como por los jueces delegados se arreglan omnímodamente por la voluntad de cada uno. Pasan las propinas de 200 y 300 ducados, y no solo en lo definitivo sino muchas veces en lo interlocutorio. En el precio no se atiende á la dificultad de la causa y grandeza del pleito... Se ha introducido tanta diferencia de artículos y autos, que ni hay vida que alcance al fin de un pleito, ni hacienda que lo costee. Antes de haber contestádose las demandas en lo principal preceden tantas instancias sobre manutenciones, recusaciones y otra diversidad de puntos, que cada una importa mas en tiempo y cantidad que un gran pleito en los Tribunales seculares. A ninguno que pide buleto se le niega... No se recibe la moneda usual sino plata doble y oro. Los salarios que se señalan á los jueces, alguaciles y receptores que despachan son en tan grande exceso que sola una salida puede ser condenacion cabal de delitos muy graves.

Concordato de 1737

ENTRE SU MAJESTAD CATÓLICA DON FELIPE V Y
EL PAPA CLEMENTE XII.

«Deseando la majestad católica de Felipe V Rey de las Españas dar providencia para la quietud y bien público de sus reinos, con la solicitud de algun reglamento oportuno sobre ciertos capitulos concernientes á sus iglesias y eclesiásticos; y queriendo no solo terminar por medio de una firme é indisoluble Concordia con la Santa Sede las acaecidas diferencias que al presente ocurren, sino tambien quitar cualquiera materia y ocasion que pueda en adelante ser origen de nuevos disturbios y disensiones, hizo presentar á la Santidad de N. M. S. P. Clemente XII que reina felizmente, un resumen de varias proposiciones que formó el Sr. D. José Rodrigo Villapando, marqués de la Compuesta, su Ministro, en el tiempo del pontificado de su antecesor Clemente XI de San. Mem. y se comunicó entonces al Pontífice referido, suplicando á

Su Santidad que providenciase benignamente con su autoridad apostólica al tenor de las instancias y demandas que en el resúmen insinuado iban expuestas; y no deseando menos Su Santidad cooperar al bien de aquel Reino, y especialmente á la quietud y tranquilidad del clero, para que libre de todas molestias y embarazos pueda mas fácilmente dedicarse al culto divino y aplicarse á la salud y cuidado de las almas que tiene á su cargo: extendiendo con especialidad su anhelo á dar á S. M. nuevas pruebas de su paternal afecto y de su constante deseo de mantenerle una sincera, perfecta y perpétua correspondencia y union, despues de haber oido el parecer de algunos señores Cardenales sobre las dichas proposiciones, se mostró propenso y dispuesto á conceder todo aquello que pudiese ser concedido, dejando á salvo la inmunidad y libertad eclesiástica, la autoridad y jurisdiccion de la Silla Apostólica y sin perjuicio de las mismas iglesias. En consecuencia de sus recíprocos deseos, Su Santidad y S. M. C. respectivamente nos deputaron y concedieron las facultades necesarias á Nos los infrascriptos, para que unidos confiriésemos, tratásemos y concluyésemos el mencionado negocio, como consta por las plenipotencias que respectivamente se nos dieron y se insertarán á la letra al fin del presente tratado; y finalmente despues de examinados y controvertidos maduramente todos los dichos asuntos. acordamos los siguientes artículos:

Artículo I. Su Majestad Católica para hacer á todos manifiesta la perfecta union que quiere tener con Su Santidad y con la Sede Apostólica, y cuan de razon es su ansia de conservar sus derechos á la Iglesia mandará que se restablezca plenamente el comercio con la Santa Sede: que se dé como antes ejecucion á las Bulas apostólicas y matrimoniales: que el Nuncio destinado por Su Santidad, el Tribunal de la Nunciatura y sus ministros se reintegren sin alguna disminucion (aun levisima) en los honores, facultades, jurisdicciones y prerogativas que por lo pasado gozaban: y en conclusion, que en cualquier materia que toque á la autoridad de la Santa Silla, como á la jurisdiccion é inmunidad eclesiástica, se deba observar y practicar todo lo que se observaba y practicaba antes de estas últimas diferencias: exceptuando solamente aquello en que se hiciere alguna mutacion ó disposicion en el presente *Concordato*, por órden á lo cual se observará lo que en él se ha establecido y dispuesto, removiendo y abrogando cualquiera novedad que se haya introducido, sin embargo de cualesquiera órdenes y decretos contrarios

expedidos en lo pasado por S. M. ó sus Ministros.

Art. II. Para mantener la quietud y tranquilidad pública é impedir que con la esperanza del asilo se cometan algunos mas graves delitos que puedan ocasionar mayores disturbios, dará Su Santidad en cartas circulares á los Obispos las órdenes necesarias para establecer que la inmunidad local no sufra en adelante á los salteadores ó asesinos de caminos, aun en el caso de un solo y simple insulto, con tal que en aquel acto mismo se siga muerte ó mutilacion de miembros en la persona del insultado. Igualmente ordenará que el crimen de lesa majestad, que por las constituciones apostólicas está excluido del beneficio del asilo, comprenda tambien á aquellos que maquinaren ó trazaren conspiraciones dirigidas á privar á S. M. de sus dominios en el todo ó en parte. Y finalmente, para impedir en cuanto sea posible la frecuencia de los homicidios, extenderá Su Santidad con otras letras circulares á los reinos de España la disposicion de la Bula que comienza: *In supremo justitiæ solio*, publicada últimamente para el estado eclesiástico (1).

Art. III. Habiéndose en algunas partes introducido la práctica de que los reos aprehendidos fuera del lugar sagrado, aleguen inmunidad, y pretendan ser restituidos á la iglesia por el título de haber sido extraídos de ella, ó de lugares inmunes en cualquiera tiempo, huyendo de este modo el castigo debido á sus delitos, cuya práctica se llama comunmente con el nombre de *iglesias frias*; declara Su Santidad que en estos casos no gocen de inmunidad los reos y expedirá á los Obispos de España letras circulares sobre este asunto para que en su conformidad publiquen los edictos.

Art. IV. Porque S. M. particularmente ha insistido en que se providencie sobre el desórden que nace del refugio que buscan los delinquentes en las ermitas é iglesias rurales y que les da ocasion y facilidad de cometer otros delitos impunemente; se mandará igualmente á los Obispos por letras cir-

(1) Por el Breve de Clemente XIV de 12 de setiembre de 1772, mandado cumplir por Carlos III (ley 5.^a, tit. IV, lib. I, Nov. Recop.) se ordenó á los Prelados que con la mayor prontitud y á lo mas dentro de un año señalasen en cada lugar sujeto á su jurisdiccion una ó á lo mas dos iglesias ó lugares sagrados, segun su poblacion en las cuales se guardase solamente la inmunidad y asilo; segun la forma de los sagrados cánones y constituciones apostólicas y no en otra de las demás...

culares, que no gocen de inmunidad las dichas iglesias rurales y ermitas en que el Santísimo Sacramento no se conserva, ó en cuya casa contigua no habita un sacerdote para su custodia, con tal que en ellas no se celebre con frecuencia el sacrificio de la misa.

Art. V. Para que no crezca con exceso y sin alguna necesidad el número de los que son promovidos á las órdenes sagradas, y la disciplina eclesiástica se mantenga con vigor por orden á los inferiores clérigos, encargará Su Santidad estrechamente con Breve especial á los Obispos la observancia del Concilio de Trento y precisamente sobre lo contenido de la sess. 21, cap. 2, y la sess. 23, cap. 6 de *Reform.*, bajo las penas que por los sagrados cánones, por el Concilio mismo y por constituciones apostólicas están establecidas, y á efecto de impedir los fraudes que hacen algunos en la constitucion de los patrimonios, ordenará Su Santidad que el patrimonio sagrado no exceda en lo venidero la suma de 60 escudos de Roma en cada un año.

Demás de esto, porque se hizo instancia por parte de S. M. C., para que se provea de remedio á los fraudes y colusiones que hacen muchas veces los eclesiásticos no solo en las constituciones de los referidos patrimonios, sino tambien fuera de dicho caso, fingiendo enajenaciones, donaciones y contratos, á fin de eximir injustamente á los verdaderos dueños de los bienes, bajo de este falso color de contribuir á los derechos reales, que segun su estado y condicion están obligados á pagar; proveerá S. S. á estos inconvenientes con Breve dirigido al Nuncio apostólico que se deba publicar en todos los Obispados, estableciendo penas canónicas y espirituales con excomunion *ipso facto incurrenda*, reservada al mismo Nuncio y á sus sucesores, contra aquellos que hicieron los fraudes y contratos colusivos arriba expresados ó cooperaren á ellos.

Art. VI. La costumbre de erigir beneficios eclesiásticos que hayan de durar por limitado tiempo, queda abolida del todo, y Su Santidad expedirá letras circulares á los Obispos de España si fuere necesario, mandándoles que no permitan en adelante semejantes erecciones de beneficios *ad tempus*; debiendo estos ser instituidos con aquella perpetuidad que ordenan los cánones sagrados y los que están erigidos de otra manera no gocen de exencion alguna.

Art. VII. Habiendo S. M. hecho representar que sus vasallos legos están imposibilitados de subvenir con sus propios bienes y haciendas á todas las cargas necesarias para ocurrir á las urgencias de la Monarquía, y

habiendo suplicado á Su Santidad que el indulto en cuya virtud contribuyen los eclesiásticos á los 19 millones y medio impuestos sobre las cuatro especies de carne, vinagre, aceite y vino, se entienda tambien á los cuatro millones y medio que se cobran de las mismas especies por cuenta del nuevo impuesto de los 8000 soldados. Su Santidad hasta tanto que sepa con distincion si los cuatro millones y medio de ducados de moneda de España que pagan los seglares, como arriba se dijo, por cuenta del nuevo impuesto, y por el tributo de los 8000 soldados, se exigen ó en seis años ó en uno, y hasta tener una plena y especifica informacion de la cantidad y cualidad de las otras cargas á que los eclesiásticos están sujetos, no puede acordar la gracia que se ha pedido; dejando sin embargo suspenso este artículo hasta que se liquiden dichos impuestos, y se reconozca si es conveniente gravar á los eclesiásticos mas de lo que al presente están gravados. Su Santidad, por dar á S. M. entre tanto una nueva prueba del deseo que tiene de complacerle en cuanto sea posible, le concederá un indulto por solos cinco años, en virtud del cual paguen los eclesiásticos el ya dicho nuevo impuesto y el tributo de los 8000 soldados, sobre las cuatro mencionadas especies de vinagre, carne, aceite y vino, en la misma forma que pagan los 19 millones y medio; pero con tal que los dichos cuatro millones y medio se paguen distribuidos en seis años, y que la parte en que deben contribuir los eclesiásticos, no exceda la suma de 150.000 ducados ánuos de moneda de España. Reservándose entre tanto Su Santidad el hacer las diligencias y tomar las informaciones ya insinuadas antes de dar otra disposicion sobre la sujeta materia; con expresa declaracion de que, en caso que Su Santidad ó sus sucesores no vengán en prorogar esta gracia, concedida por los cinco años, á mas tiempo no se pueda jamás decir, ni inferir de esto, que se ha contravenido al presente *Concordato*.

Art. VIII. Por la misma razon de los gravísimos impuestos con que están gravados los bienes de los legos y de la incapacidad de sobrellevarlos á que se reducirían con el discurso del tiempo, si aumentándose los bienes que adquieren los eclesiásticos por herencias, donaciones, compras ú otros títulos, se disminuyese la cantidad de aquellos en que hoy tienen los seglares dominio y están con el gravámen de los tributos régios; ha pedido á Su Santidad el Rey Católico se sirva ordenar que todos los bienes que los eclesiásticos han adquirido desde el principio de su reinado, ó que en adelante adquirieren

con cualquier título, están sujetos á aquellas mismas cargas, á que lo están los bienes de los legos. Por tanto, habiendo considerado Su Santidad la cantidad y cualidad de dichas cargas y la imposibilidad de soportarlas, á que los legos se reducirían, si por órden á los bienes futuros no se tomase alguna providencia; no pudiendo convenir en gravar á todos los eclesiásticos como se suplica, condescenderá solamente en que todos aquellos bienes que por cualquier título adquiriesen cualquiera iglesia, lugar pío ó comunidad eclesiástica, y por esto cayeren en mano muerta, queden perpétuamente sujetos desde el día en que se firmare la presente Concordia, á todos los impuestos y tributos régios, que los legos pagan, á excepcion de los bienes de primera fundacion; y con la condición de que estos mismos bienes que hubieren de adquirir en lo futuro, queden libres de aquellos impuestos que por concesiones apostólicas pagan los eclesiásticos, y que no puedan los Tribunales seculares obligarlos á satisfacerlos, sino que esto lo deban ejecutar los Obispos.

Art. IX. Siendo la mente del Santo Concilio de Trento que los que reciben la primera tonsura tengan vocacion al estado eclesiástico, y que los Obispos despues de un maduro exámen, la dén á aquellos solamente de quienes probablemente esperen que entren en el órden clerical con el fin de servir á la Iglesia y de encaminarse á las órdenes mayores; Su Santidad por órden á los clérigos que no fueren beneficiados y á los que no tienen capellanías ó beneficios que excedan la tercera parte de la cóngrua tasada por el Sínodo para el patrimonio eclesiástico, los cuales habiendo cumplido la edad que los sagrados cánones han dispuesto, no fueren promovidos por su culpa ó negligencia á los órdenes sacros, concederá que los Obispos precediendo las advertencias necesarias les señalen para pasar á las órdenes mayores un término fijo que no exceda de un año; y que si pasado este tiempo no fueren promovidos por culpa ó negligencia de los mismos interesados, que en tal caso no gocen exencion alguna de los impuestos públicos (1).

Art. X. No debiéndose usar de las censuras, sino es *in subsidium*, conforme á la disposicion de los sagrados cánones y al tenor de lo que está mandado por el santo

Concilio de Trento, en la sess. 25 de Regul. cap. III, se encargará á los Ordinarios que observen la dicha disposicion conciliar y canónica, y no solo que las usen con toda la moderacion debida, sino tambien que se abstengan de fulminarlas siempre que con los remedios ordinarios de la ejecucion real ó personal se pueda ocurrir á las necesidades de imponerlas, y que solamente se valgan de ellas cuando no se pueda proceder á alguna de dichas ejecuciones contra los reos, y estos se mostraren contumaces en obedecer los decretos de los jueces eclesiásticos.

Art. XI. Suponiéndose que en las órdenes regulares hay algunos abusos y desórdenes dignos de corregirse, deputará Su Santidad á los metropolitanos con las facultades necesarias y convenientes para visitar los monasterios y casas regulares, y con instruccion de remitir los autos de la visita, á fin de obtener la aprobacion apostólica, sin perjuicio de la jurisdiccion del Nuncio apostólico, que entre tanto y aun mientras durare la visita, quedará en su vigor en todo, segun la forma de sus facultades y del derecho; y estableciendo á los visitadores término fijo para que la deban concluir dentro del espacio de tres años.

Art. XII. La disposicion del sagrado Concilio de Trento concerniente á las causas de primera instancia, se hará observar exactamente, y en cuanto á las causas en grado de apelacion, que son mas relevantes como las beneficiales, que pasan del valor de 24 ducados de oro de Cámara, las jurisdiccionales, matrimoniales, decimales de patronato y otras de esta especie, se conocerá de ellas en Roma y se cometerán á jueces *in partibus* las que sean de menor importancia.

Art. XIII. El concurso á todas las iglesias parroquiales, aun vacantes *justa decretum, et in Roma*, se hará *in partibus* en la forma ya establecida, y los Obispos tendrán la facultad de nombrar á la persona mas digna cuando vacare la parroquia en los meses reservados al Papa. En las demás vacantes, aunque sean por resultas de las ya provistas, los Ordinarios remitirán los nombres de los que fueren aprobados, con distincion de las aprobaciones en primero, segundo y tercer grado, y con individuacion de los requisitos de los opositores al concurso.

Art. XIV. En consideracion del presente

(1) Antes de este Concordato los bienes eclesiásticos estaban exentos de todos los pechos y tributos. Por el del presente artículo se sujetaron al pago las adquisiciones sucesivas; pero siguiendo tocándose todavia grandes inconvenientes por Breve de Su Santidad de 15

de abril de 1817 se mandaron comprender en el pago de la contribucion del Reino todos los bienes del estado eclesiástico secular y regular en cualquier tiempo habidos ó adquiridos y poseidos. Hoy con la desamortizacion han cesado mas por completo las dificultades.

Concordato, y en atencion tambien á que regularmente no son pingües las parroquias de España; vendrá Su Santidad en no imponer pensiones sobre ellas; á reserva de las que se hubieren de cargar á favor de los que las resignan, en caso de que con testimonios de los Obispos se juzgue conveniente y útil la renuncia, como tambien en caso de concordia entre dos litigantes sobre la parroquia misma.

Art. XV. En cuanto á la reserva de pensiones sobre los demás beneficios, se observará aquello mismo que hasta estas últimas diferencias se ha practicado, pero no se harán pagar renovatorias en lo venidero por las prebendas y beneficios que se hubieren de conferir en lo futuro, quedando intactas las renovaciones futuras, que cedieren en favor de aquellas personas particulares que por la dataría han tenido ya las pensiones.

Art. XVI. Para evitar los inconvenientes que resultan de la incertidumbre de las rentas de los beneficios y de la variedad con que los mismos provistos expresan su valor; se conviene en que se forme un estado de los réditos ciertos é inciertos de todas las prebendas y beneficios, aunque sean de patronato; y que este se haga por medio de los Obispos y Ministros que por parte de la Santa Sede habrá de destinar el Nuncio, exceptuando empero las iglesias y beneficios consistoriales tasados en los libros de Cámara, en los cuales no se innovará cosa alguna; pero mientras este estado no se formare se observará la costumbre. Luego que la nueva tasacion esté hecha, antes de ponerla en ejecucion, se deberá establecer el modo como se ha de practicar, sin que la Dataría, Cancelaría ni los provistos, queden perjudicados, tanto por lo que mira á la imposicion de las pensiones, como por lo que mira al costo de las Bulas y paga de las medias anatas; y entre tanto se observará del mismo modo lo que hasta ahora ha sido de estilo.

Art. XVII. Así en las iglesias catedrales como en las colegiadas no se concederán las coadjutorías sin letras testimoniales de los Obispos, que atesten ser los coadjutores idóneos á conseguir en ellas canonicatos; y en cuanto á las causas de la necesidad y utilidad de la Iglesia, se deberá presentar testimonio del mismo Ordinario ó de los cabildos; sin cuya circunstancia no se concederán dichas coadjutorías. Llegando empero la ocasion de conceder alguna, no se le impondrán en adelante á favor del propietario pensiones ú otras cargas; ni á su instancia en favor de otra tercera persona.

Art. XVIII. Su Santidad ordenará á los

Nuncios apostólicos que nunca concedan dimisorias.

Art. XIX. Siendo una de las facultades del Nuncio apostólico conferir los beneficios que no excedan de 24 ducados de Cámara; y resultando muchas veces entre los provistos controversias sobre si la relacion del valor es verdadera ó falsa; se ocurrirá á este inconveniente, con la providencia de la nueva tasa que se dijo arriba, en la cual estará determinado y especificado el valor de cualquiera beneficio. Pero hasta tanto que dicha tasa se haya efectuado, ordenará Su Santidad á su Nuncio, que no proceda á la colacion de beneficio alguno, sin haber tenido antes el proceso que sobre su valor se hubiese formado ante el Obispo del lugar en donde está erigido: en cuyo proceso se hará por testimonio la prueba de los frutos ciertos é inciertos del beneficio.

Art. XX. Las causas que el Nuncio apostólico suele delegar á otros que á los jueces de su Audiencia y se llaman jueces *in curia*, nunca se delegarán sino es á los jueces nombrados por los Sinodos, ó á personas que tengan dignidad en las iglesias catedrales.

Art. XXI. Por lo que mira á la instancia que se ha hecho sobre que las costas y espórtulas en los juicios del Tribunal de la Nunciatura, se reduzcan al arancel que en los Tribunales Reales se practican y no se excedan; siendo necesario tomar otras informaciones para verificar el exceso que se sienta de las tasas de la Nunciatura, y juzgar si hay necesidad de moderarlas, se ha convenido en que se dará providencia luego que lleguen á Roma las instrucciones que se tienen pedidas.

Art. XXII. Acerca de los expolios y nombramiento de sus colectores se observará la costumbre; y en cuanto á los frutos de las iglesias vacantes, así como los Sumos Pontífices, y particularmente la Santidad de Nuestro M. S. Padre que hoy reina felizmente, no han dejado de aplicar siempre para uso y servicio de las mismas iglesias en buena parte; así tambien ordenará Su Santidad que en lo porvenir se asigne la tercera parte para servicio de las iglesias y pobres; pero desfalando las pensiones que de ellas hubieren de pagarse.

Art. XXIII. Para terminar amigablemente la controversia de los patronatos de la misma manera que se han terminado las otras como Su Santidad desea; despues que se haya puesto en ejecucion el presente ajustamiento, se deputarán personas por Su Santidad y por S. M., para reconocer las razones que asisten á ambas partes; y entre tan-

to se suspenderá en España pasar adelante en este asunto; y los beneficios vacantes ó que vacaren, sobre que pueda recaer la disputa del patronato, se deberán proveer por S. S., ó en sus meses por los respectivos Ordinarios, sin impedir la posesion á los provistos.

Art. XXIV. Todas las demás cosas que se pidieron y expresaron en el resumen referido formado por el Sr. Marqués de la Compueta, D. José Rodrigo Villalpando, y que se exhibió á Su Santidad, como arriba se dijo, en los cuales no se ha convenido en el presente tratado, continuarán observándose en lo futuro del modo que se observaron y practicaron en lo antiguo, sin que jamás se puedan controvertir de nuevo. Y para que nunca se pueda dudar de la identidad del dicho resumen, se harán dos ejemplares, uno de los cuales quedará á Su Santidad, y otro se enviará á S. M., firmados ambos por Nos los infrascritos.

Art. XXV. Si no se ajustaren al mismo tiempo los negocios pendientes entre la Santa Sede y la corte de Nápoles, promete Su Majestad cooperar con eficacia á que se expidan y concluyan feliz y cuidadosamente, pero cuando esto no pudiese conseguirse, antes si por esto (lo que Su Santidad espera que no suceda) en algun tiempo se aumentaren las discordias y sinsabores; promete S. M., que jamás contravendrá por esta causa á la presente Concordia, ni dejará de perseverar en la buena armonía establecida ya con la Santa Sede apostólica.

Art. XXVI. Su Santidad y S. M. Católica aprobarán y ratificarán el tratado presente; y de las letras de ratificacion se hará respectivamente la consignacion y canje en el término de dos meses ó antes si fuere posible.

En fé de lo cual, Nos los infrascritos, en virtud de las respectivas plenipotencias antes expresadas de Su Santidad y S. M. Católica hemos firmado el presente *Concordato* y sellado con nuestro propio sello.

En el Palacio apostólico del Quirinal en el día 26 de setiembre de 1737.—(L. S.) G. Cardenal Firrao.—(L. S.) T. Cardenal Aquaviva.

Sigue la ratificacion que fué hecha por el Rey Felipe V en 18 de octubre de 1737, y por el Papa Clemente XII en 12 de noviembre inmediato.

Concordato de 1753

ENTRE SU MAJESTAD CATÓLICA FERNANDO VI
Y EL PAPA BENEDICTO XIV.

«Habiéndose tenido siempre la Santidad de nuestro Beatísimo Padre Benedicto Papa XIV, que felizmente rige la iglesia, un vivo deseo

de mantener toda la mas sincera y cordial correspondencia entre la Santa Sede, y las Naciones, Príncipes y Reyes católicos, no ha dejado de dar continuamente señales segurísimas y bien particulares de esta su viva voluntad hácia la esclarecida, devota y piadosa nacion española, y hácia los Monarcas de las Españas, Reyes católicos por título y sólida religion, y siempre afectos á la Sede apostólica y al Vicario de Jesucristo en la tierra.

Por tanto, habiéndose tenido presente que en el último *Concordato*, estipulado el día 18 de octubre de 1737, entre Clemente Papa XII, de santa memoria, y el Rey Felipe V de gloriosa memoria, se habia convenido en que se deputasen por el Papa y el Rey personas que reconociesen amigablemente las razones de una y otra parte sobre la antigua controversia del pretendido Real Patronato universal que quedó indecisa; no omitió Su Santidad, desde los primeros pasos de su pontificado, hacer sus instancias con los dos, al presente difuntos, Cardenales Belluga y Aquaviva, á fin de que obtuviesen de la corte de España la deputation de personas con quienes se pudiese tratar el punto indeciso; y sucesivamente, para facilitar su exámen, no dejó Su Santidad de unir, en un escrito suyo que entregó á los expresados dos Cardenales, todo aquello que creyó conducente á las intenciones y derechos de la Santa Sede.

Pero habiéndose reconocido por la práctica, que no era este el camino de llegar al deseado fin, y que por los escritos y respuestas se estaba tan lejos de allanar las disputas, que antes bien se multiplicaban, suscitándose controversias que se creian olvidadas, en tanto extremo que se hubiera podido temer un infeliz rompimiento, pernicioso y fatal á una y otra parte; y habiendo tenido pruebas seguras de la piadosa propension del ánimo del Rey Fernando VI, que felizmente reina, á un equitativo y justo temperamento sobre las diferencias promovidas y que se iban siempre aumentando, á lo que igualmente se hallaba propenso con pleno corazon el deseo de su beatitud, ha creído Su Santidad que no se debia malograr una ocasion tan favorable para establecer una Concordia, que se expresa en los capítulos siguientes, los cuales se pondrán despues en forma auténtica y serán firmados por los procuradores y plenipotenciarios de ambas partes en el modo que se acostumbra hacer en semejantes Convenciones.

Habiendo expuesto la Majestad del Rey Fernando VI, á la Santidad de nuestro Beatísimo Padre, la necesidad que hay en las Españas de reformar en algunos puntos la

disciplina del clero secular y regular; promete Su Santidad, que propuestos los capítulos sobre que se debiere tomar la providencia necesaria, no se dejará de ejecutar así, segun lo establecido en los sagrados cánones, en las constituciones apostólicas, y en el santo Concilio de Trento y si esto sucediese, como lo desea sumamente en tiempo de su Pontificado, promete y se obliga, no obstante la multitud de otros negocios que le oprimen, y sin embargo, tambien de su edad muy avanzada, á interponer para el feliz éxito toda aquella fatiga personal, que *in Minoribus*, tantos años há, interpuso en tiempo de sus predecesores en las resoluciones de las materias establecidas en la Bula *Apostolici Ministerii*, en la fundacion de la universidad de Cervera, en el establecimiento de la insigne Colegiata de San Ildefonso, y en otros importantes negocios pertenecientes á los reinos de las Españas.

No habiendo habido controversia sobre la pertenencia á los Reyes Católicos de las Españas del Real patronato, ó sea nómina á los Arzobispados, Obispados, monasterios y beneficios consistoriales, es á saber: escritos y tasados en los libros de Cámara, cuando vacan en los reinos de las Españas, hallándose apoyado su derecho en Bulas y privilegios apostólicos, y en otros títulos alegados por ellos; y no habiendo habido tampoco controversia sobre las nóminas de los Reyes Católicos á los Arzobispados, Obispados y beneficios que vacan en los reinos de Granada y de las Indias, ni tampoco sobre la nómina de algunos otros beneficios: se declara deber quedar la Real Corona en su pacífica posesion de nombrar en el caso de las vacantes, como lo ha estado hasta aquí; y se conviene en que los nominados á los Arzobispados, Obispados, monasterios y beneficios consistoriales, deban tambien en lo futuro continuar la expedicion de sus respectivas Bulas en Roma, en el mismo modo y forma practicada hasta aquí sin innovacion alguna.

Pero habiendo sido graves las controversias sobre la nómina de los beneficios residenciales y simples que se hallan en los reinos de las Españas, exceptuados, como se ha dicho, los que están en los reinos de Granada y de las Indias; y habiendo pretendido los Reyes Católicos el derecho de la nómina, en virtud del patronato universal, y no habiendo dejado de exponer la Santa Sede las razones que creian militaban por la libertad de los mismos beneficios y su colacion en los meses apostólicos y casos de las reservas, y así respectivamente por la de los Ordinarios

en sus meses; despues de una larga disputa se ha abrazado finalmente de comun consentimiento, el temperamento siguiente.

La Santidad de nuestro beatísimo padre Benedicto Papa XIV reserva á su privativa libre colacion, á sus sucesores y á la Sede apostólica perpétuamente cincuenta y dos beneficios, cuyos títulos serán expresados inmediatamente, para que así Su Santidad como sus sucesores tengan el arbitrio de poder proveer y premiar á los eclesiásticos españoles (1), que por probidad é integridad de costumbres, ó por insigne literatura, ó por servicios hechos á la Santa Sede, se hicieren beneméritos; y la colacion de estos cincuenta y dos beneficios deberá ser siempre privativa de la Santa Sede en cualquier mes y en cualquier modo que vagen, aun por resulta Real, y tambien aunque alguno de ellos se hallase tocar al Real patronato de la Corona, y aunque estuviesen sitos en la diócesis donde algun Cardenal tuviese cualquiera ámplio indulto de conferir, no debiendo en manera alguna ser este atendido en perjuicio de la Santa Sede: y las Bulas de estos cincuenta y dos beneficios deberán expedirse siempre en Roma, pagándose los acostumbrados emolumentos debidos á la Dataria y Cancelaría apostólica, segun los presentes estados; y todo esto sin imposicion alguna de pension, y sin exaccion de cédulas bancarias, como tambien se dirá abajo. Los nombres de los cincuenta y dos beneficios son los siguientes:

En la catedral de Avila, el arcedianato de Arévalo.—En la de Orense el arcedianato de Bubal.—En la de Barcelona, el priorato, antes secular, ahora regular de la colegiata de Santa Ana.—En la de Búrgos, la maestrescolía y el arcedianato de Palenzuela.—En la de Calahorra, el arcedianato de Nájera y la Tesorería.—En la de Cartagena, la maestrescolía; y en su diócesis, el beneficio simple de Albacete.—En la catedral de Zaragoza, el arciprestazgo de Daroca y el arciprestazgo de Belchite.—En la de Ciudad-Rodrigo, la maestrescolía.—En la de Santiago, el arcedianato de la Reina; el arcedianato de Santa Tesia y la Tesorería.—En la de Cuenca, el arcedianato de Alarcon y la Tesorería.—En la de Córdoba, el arcedianato de Castro; y en su diócesis, el beneficio simple de Pelalcázar, y en el préstamo de Castro y Espejo.—En

(1) De manera que en ningun caso pueden obtener beneficio eclesiástico, en España, los extranjeros. Así lo prueba el Sr. Mayans y Siscar en sus Observaciones sobre el Concordato (Observ. 3.^a) citando infinitos casos de terminantes disposiciones en este sentido y peticiones de nuestras Córtes. V. BENEFICIO.

la de Tortosa; la sacristía y la hospitalaria.—En la de Gerona, el arcedianato de Ampurdan.—En la de Jaen, el arcedianato de Baeza; y en su obispado, el beneficio simple de Arjonilla.—En la de Lérida, la preceptoría.—En la de Sevilla, el arcedianato de Jerez; y en su diócesis, el beneficio simple de la Puebla de Guzman, y el préstamo de la iglesia de Santa Cruz de Ecija (1).—En la de Mallorca, la preceptoría; y la prepositura de San Antonio y Santo Antonio Vienense.—*Nullius*, en el reino de Toledo, el beneficio simple de Santa María de la ciudad de Alcalá la Real (2).—En el Obispado de Orihuela, el beneficio simple de Santa María de Elche.—En la catedral de Huesca, la chantría.—En la de Oviedo, la chantría.—En la de Osma, la maestrescología, y la abadía de San Bartolomé.—En la de Pamplona, la hospitalaria, antes regular, ahora encomienda, y la preceptoría general de Olite.—En la de Plasencia, el arcedianato de Medellín y el arcedianato de Trujillo.—En la de Salamanca, el arcedianato de Monleon.—En la de Sigüenza la Tesorería y la abadía de Santa Coloma.—En la de Tarragona, el priorato.—En la de Tarazona, la tesorería.—En la de Toledo, la tesorería; y en su diócesis, el beneficio simple de Vallecas.—En la diócesis de Tuy, el beneficio simple de San Martín del Rosal.—En la catedral de Valencia, la sacristía mayor.—En la de Urgel, el arcedianato de Andorra.—En la de Zamora, el arcedianato de Toro.

Para arreglar bien despues las colaciones, presentaciones, nóminas é instituciones de los beneficios que vacaren en adelante en los dichos reinos de las España, se conviene:

En primer lugar. Que los Arzobispos, Obispos y coladores inferiores deben continuar en lo venidero en proveer los beneficios que proveían por lo pasado siempre que vaguen en sus meses ordinarios de marzo, junio, setiembre y diciembre aunque se halle vacante la Silla apostólica; y tambien que en los mismos meses y en el mismo modo prosigan en presentar los patronos eclesiásticos los beneficios de su patronato, exclusas las

alternativas de meses en las colaciones que antecederamente se daban y que no se concederán jamás en adelante.

Segundo. Que las prebendas de oficio que actualmente se proveen por oposicion y concurso abierto, se confieran y se expidan en lo venidero en el propio modo y con las mismas circunstancias que se han practicado hasta aquí, sin la menor innovacion en cosa alguna, ni que tampoco se innove nada en órden á los beneficios de patronato laical de particulares.

Tercero. Que no solo las parroquias y beneficios curados se confieran en lo futuro como se han conferido en lo pasado, por oposicion y concurso cuando vaguen en los meses ordinarios, sino tambien cuando vaguen en los meses y casos de las reservas, aunque la presentacion fuese de pertenencia Real; debiéndose; en todos estos casos presentar al Ordinario el que el patrono tuviese por mas digno entre los tres que hubieren sido aprobados por idóneos por los examinadores sinodales *ad curam animarum*.

Cuarto. Que habiéndose ya dicho arriba que deba quedar ileso á los patronos eclesiásticos el derecho de presentar á los beneficios de sus patronatos en los cuatro meses ordinarios, y habiéndose acostumbrado hasta ahora que algunos cabildos, rectores, abades y cofradías erigidas con autoridad eclesiástica, recurran á la Santa Sede para que las elecciones hechas por ellos sean confirmadas con Bula apostólica, no se entienda innovada cosa alguna en este caso, sino que todo quede en el pié en que ha estado hasta aquí.

Quinto. Salva siempre la reserva de los cincuenta y dos beneficios, hecha á la libre colacion de la Santa Sede, y salvas siempre las declaraciones poco antes expresadas; Su Santidad para concluir amigablemente todo lo restante de la gran controversia sobre el patronato universal, acuerda á la Majestad del Rey católico y á los Reyes sus sucesores perpétuamente, el derecho universal de nombrar y presentar indistintamente en todas las iglesias metropolitanas, catedrales, colegiatas y diócesis de los reinos de las Españas que actualmente posee, á las dignidades mayores *post pontificalem* y otras en catedrales y dignidades principales, y otras en colegiatas, canonicatos, porciones, prebendas, abadías, prioratos, encomiendas, parroquias, personatos, patrimoniales, oficios y beneficios eclesiásticos, seculares y regulares, *cum cura, etc. sine cura* de cualquier naturaleza que sean, que al presente existen y que en adelante se fundasen, si los fundadores no

(1) En lugar de este préstamo de Santa Cruz de Ecija que antes del Concordato estaba unido perpétuamente á la iglesia colegial de Lerma se subrogó y reservó en el año de 1757 á la libre y perpétua colacion de la Santa Sede uno de los tres beneficios simples servidores de la iglesia de Santa María de la ciudad de Alcalá la Real.

(2) Es uno de los tres beneficios que hay en esta iglesia.

se reservasen en sí y en sus sucesores el derecho de presentar en los dominios y reinos de las Españas que actualmente posee el Rey católico, con toda la generalidad con que se hallan comprendidos en los meses apostólicos y casos de las reservas generales y especiales; y del mismo modo tambien en el caso de vacar los beneficios en los meses ordinarios, cuando vacan las Sillas arzobispales y obispales, ó por cualquier otro título.

Y á mayor abundamiento en el derecho que tenia la Santa Sede por razon de las reservas, de conferir en los reinos de las Españas los beneficios, ó por sí ó por medio de la Dataría, Cancelaría apostólica, Nuncios de España é indultarios, subroga á la Majestad del Rey católico y Reyes sus sucesores, dándoles el derecho universal de presentar á dichos beneficios en los reinos de las Españas, que actualmente posee, con facultad de usarle en el mismo modo que usa y ejerce lo restante del patronato perteneciente á su Real Corona; no debiéndose en lo futuro conceder á ningun Nuncio apostólico en España ni á ningun Cardenal ú Obispo en España, indulto de conceder beneficios en los meses apostólicos, sin el expreso permiso de S. M. ó de sus sucesores.

Sexto. Para que en lo venidero proceda todo con el debido sistema, y en cuanto sea posible se mantenga ilesa la autoridad de los Obispos, se conviene en que todos los que se presentaren y nombraren por S. M. Católica y sus sucesores á los beneficios arriba dichos, aunque vacaren por resulta de provisiones Reales, deban de recibir indistintamente las instituciones y colaciones canónicas de sus respectivos Ordinarios sin expedicion alguna de Bulas apostólicas, exceptuada la confirmación de las elecciones que arriba quedan expresadas, y exceptuados los casos en que los presentados y nombrados, ó por defecto de edad ó por cualquiera otro impedimento canónico, tuvieren necesidad de alguna dispensa ó gracia apostólica, ó de cualquiera otra cosa superior á la autoridad ordinaria de los Obispos; debiéndose en todos estos casos y otros semejantes, recurrir siempre en lo futuro á la Santa Sede, como se ha hecho en lo pasado para obtener la gracia ó dispensacion; pagando á la Dataría y Cancelaría apostólica los emolumentos acostumbrados, sin imposicion de pensiones ó exaccion de cédulas bancarias, como tambien se dirá en adelante.

Sétimo. Que para el mismo fin de mantener ilesa la autoridad ordinaria de los Obispos, se conviene y se declara que por la cesion y subrogacion en los referidos derechos de nó-

mina, presentacion y patronato no se entienda conferida al Rey católico ni á sus sucesores jurisdiccion alguna eclesiástica sobre las iglesias comprendidas en los expresados derechos, ni tampoco sobre las personas que presentare y nombrare para las dichas iglesias y beneficios: debiendo así estas como las otras á quienes fueren conferidos por la Santa Sede los cincuenta y dos beneficios reservados, quedar sujetas á sus respectivos Ordinarios, sin poder pretender exencion de su jurisdiccion y salva siempre la suprema autoridad que el Pontífice romano, como pastor de la Iglesia universal tiene sobre todas las iglesias y personas eclesiásticas; y salvas siempre las Reales prerogativas que competen á la Corona en consecuencia de la Real proteccion, especialmente sobre las iglesias del Real patronato.

Octavo. Habiendo considerado S. M. Católica que quedando la Dataría y Cancelaría apostólica por razon del patronato y derechos cedidos á S. M. y á sus sucesores sin las utilidades de las expediciones y anatas, seria grave el menoscabo del Erario pontificio; se obliga á hacer consignar en Roma á título de compensacion por una sola vez á disposicion de Su Santidad, un capital de 310,000 escudos romanos, que á razon de un 3 por 100 producirá anualmente 9,300 escudos de la misma moneda, en cuya cantidad se ha regulado el producto de todos los derechos arriba dichos.

Habiéndose originado en los tiempos pasados alguna controversia sobre algunas provisiones hechas por la Santa Sede en las catedrales de Palencia y Mondoñedo; la Majestad del Rey católico conviene en que los provistos entren en posesion despues de la ratificacion del presente Concordato. Y habiéndose tambien suscitado nuevamente con motivo de la pretension del Real patronato universal, la antigua disputa de la imposicion de pensiones y exaccion de cédulas bancarias; así como la Santidad de nuestro beatísimo padre para cortar de una vez las contiendas que de cuando en cuando se suscitaban, se habia manifestado pronto y resuelto á abolir el uso de dichas pensiones y cédulas bancarias con el único sentimiento de que faltando el producto de ellas, se hallaria contra su deseo en la necesidad de sujetar al Erario pontificio á nuevas cargas, respecto de que el producto de estas cédulas bancarias se empleaba, por la mayor parte en los salarios y gratificaciones de los ministros que sirven á la Santa Sede en los negocios pertenecientes al gobierno universal de la Iglesia.

Así tambien la Majestad del Rey católico, no menos por su heredada devoción á la Santa Sede, que por el afecto particular con que mira la sagrada persona de su beatitud, se ha allanado á dar por una sola vez un socorro que cuando no en el todo, á lo menos en parte alivie el Erario pontificio de los gastos que está obligado á hacer para la manutencion de los expresados ministros; y así se obliga á hacer entregar en Roma 600.000 escudos romanos que al 3 por 100 producen anualmente 18.000 escudos de la misma moneda; con lo cual queda abolido el uso de imponer en adelante pensiones y exigir cédulas bancarias, no solo en el caso de la colacion de los cincuenta y dos beneficios reservados á la Santa Sede, en el de las confirmaciones arriba expresadas de algunas elecciones, en el de recurso á la Santa Sede para obtener alguna dispensacion concerniente á la colacion de los beneficios, sino tambien en cualquiera otro caso; de tal manera que queda para siempre extinguido en lo venidero el uso de la imposicion de las pensiones y de la exaccion de las cédulas bancarias, pero sin perjuicio de las ya impuestas hasta el tiempo presente.

Habia tambien otro punto de disputa, no ya en órden al derecho de la Cámara apostólica y Nunciatura de España sobre los expolios y frutos de las iglesias obispaes vacantes en los reinos de las Españas, sino sobre el uso, ejercicio y dependencias de dicho derecho; de modo que era necesario llegar sobre esto á alguna concordia ó composicion. Para allanar tambien estas continuas diferencias, la Santidad de nuestro beatísimo padre, derogando, anulando y dejando sin efecto alguno todas las precedentes Constituciones apostólicas, y todas las Concordias y Convenciones que se han hecho hasta aqui entre la reverenda Cámara apostólica, Obispos, cabildos y diocesanos, y cualquiera otra cosa que sea en contrario aplicar desde el dia de la ratificacion de este Concordato todos los expolios y frutos de las iglesias vacantes, exigidos y no exigidos, á los usos píos que prescriben los sagrados cánones: prometiendo que no concederá en adelante por ningun motivo á persona alguna eclesiástica, aunque sea digna de especial ó especialísima mencion, la facultad de testar de los frutos y expolios de sus iglesias obispaes, aun para usos píos; pero salvas las ya concedidas que deberán tener su efecto; concediendo á la Majestad del Rey católico y á sus sucesores el elegir en adelante los ecónomos y colectores, pero con tal que sean personas eclesiásticas con todas las facul-

tades oportunas y necesarias para que bajo de la Real proteccion sean fielmente administrados y fielmente empleados por ellos los sobredichos efectos en los expresados usos.

Y S. M. en obsequio de la Santa Sede se obliga á hacer depositar en Roma por una sola vez á disposicion de Su Santidad un capital de 233.333 escudos romanos, que impuestos al 3 por 100, produce anualmente 7.000 escudos de la propia moneda; y además de esto acuerda S. M. que se señalen en Madrid á disposicion de Su Santidad sobre el producto de la Cruzada 5.000 escudos anuales para la manutencion y subsistencia de los Nuncios apostólicos, y todo esto en consideracion de la compensacion del producto que pierde el erario pontificio en la referida eccision de los expolios y frutos de las iglesias vacantes, y de la obligacion de no conceder en adelante facultades de testar.

Su Santidad en fé de Sumo Pontífice y Su Majestad en palabra de Rey católico prometen recíprocamente por sí mismos y en nombre de sus sucesores la firmeza inalterable y subsistencia perpétua de todos y cada uno de los artículos precedentes, queriendo y declarando que ni la Santa Sede ni los Reyes católicos hayan de pretender respectivamente mas de lo que se haya comprendido y expresado en dichos capítulos, y que se haya de tener por irrito y de ningun valor ni efecto, cuanto se hiciere en cualquiera tiempo contra todos ó alguno de los mismos artículos.

Para la validacion y observancia de cuanto se ha convenido, se firmará este *Concordato* en la forma acostumbrada, y tendrá todo su entero efecto y cumplimiento, luego que se entregaren los capitales de recompensa que van expresados, y despues que se hiciere la ratificacion.

En fé de lo cual, Nos los infrascritos en virtud de las facultades respectivas de Su Santidad, y de S. M. Católica, hemos firmado el presente *Concordato* y sellado con nuestro propio sello.—En el Palacio Apostólico de Quirinal hoy 11 de enero de 1753.—(L. S.) S. Cardenal Valenti.—(L. S.) Manuel Ventura Figueroa.

Concluido y firmado en Roma el anterior Concordato el dia 11 de enero de 1753, fué ratificado por el Rey Fernando VI en 31 de enero del mismo año y por Su Santidad Benedicto XIV en 20 de febrero.

Concordato de 1851.

Leyes de 8 mayo de 1849 y 17 oct. de 1851.

(GRAC. Y JUST.) Doña Isabel II. etc.

Art. 1.º Se autoriza al Gobierno para que con acuerdo de la Santa Sede, en todo aquello que fuere necesario ó conveniente, verifique el arreglo general del clero, y procure la solución de los cuestiones eclesiásticas pendientes, conciliando las necesidades de la Iglesia y del Estado.

Sin perjuicio de cuanto sea oportuno para conseguir el fin propuesto, y de que el Gobierno obre con la libertad que corresponde en las negociaciones con la Santa Sede en el arreglo general indicado, tendrá presente las siguientes bases:

1.ª Establecer una circunscripción de diócesis que se acomode, en cuanto sea posible, á la mayor utilidad y conveniencia de la Iglesia y del Estado, procurando la armonía correspondiente en el número de las Iglesias metropolitanas y sufragáneas.

2.ª Organizar con uniformidad, en cuanto sea dable, el clero catedral, colegial y parroquial, prescribiendo los requisitos de aptitud é idoneidad, así como las reglas de residencia é incompatibilidad de beneficios.

3.ª Establecer convenientemente la enseñanza é instruccion del clero, y la organización de seminarios, casas é institutos de misiones, de ejercicios y correccion de eclesiásticos, y dotar de un clero ilustrado y de condiciones especiales á las posesiones de Ultramar y demás establecimientos que sostiene la nacion fuera de España.

4.ª Regularizar el ejercicio de la jurisdiccion eclesiástica, robusteciendo la ordinaria de los Arzobispos y Obispos, suprimiendo las privilegiadas que no tengan objeto, y resolviendo lo que sea conveniente sobre las demás particulares exentas.

5.ª Resolver de una manera definitiva lo que convenga respecto de los institutos de religiosas, procurando que las casas que se conserven añadan á la vida contemplativa ejercicios de enseñanza ó de caridad.

Art. 2.º El Gobierno dará cuenta á las Cortes del uso que hiciere de esta autorización.

Por tanto mandamos á todos los Tribunales, justicias, jefes, gobernadores y demás autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes.—

Dado en Aranjuez á 8 de mayo de 1849.—
(CL. t. 47, p. 34.)

(GRAC. Y JUST.) Doña Isabel II, etc., sabed: Que en uso de la facultad concedida á mi Gobierno por la ley de 8 de mayo de 1849, para proceder de acuerdo con la Santa Sede, al arreglo general del clero y á la terminación de las cuestiones eclesiásticas, vengo en mandar se publique y observe como ley del Estado el Concordato celebrado con la Santa Sede en 16 de marzo, y ratificado en 1.º y 23 de abril del corriente año, cuyo literal contexto es como sigue:

CONCORDATO

celebrado entre Su Santidad el Sumo Pontífice Pío IX y S. M. C. doña Isabel II, Reina de las Españas.

«En el nombre de la santísima é individua Trinidad.

Deseando vivamente Su Santidad el Sumo Pontífice Pío IX proveer al bien de la religion y á la utilidad de la Iglesia de España con la solicitud pastoral con que atiende á todos los fieles católicos, y con especial benevolencia á la inclita y devota nacion española; y poseida del mismo deseo S. M. la Reina Católica doña Isabel II, por la piedad y sincera adhesion á la Sede apostólica, heredadas de sus antecesores, han determinado celebrar un solemne Concordato, en el cual se arreglen todos los negocios eclesiásticos de una manera estable y canónica.

A este fin Su Santidad el Sumo Pontífice ha tenido á bien nombrar por su plenipotenciario al Excmo. Sr. D. Juan Brunelli, Arzobispo de Tesalónica, prelado doméstico de Su Santidad, asistente al Solio pontificio y Nuncio apostólico en los reinos de España, con facultades de legado *à latere*; y S. M. la Reina Católica al Excmo. Sr. D. Manuel Bertran de Lís, caballero gran cruz de la Real y distinguida órden española de Carlos III, de la de San Mauricio y San Lázaro de Cerdeña, y de la de Francisco I de Nápoles, diputado á Cortes y su Ministro de Estado, quienes despues de entregadas mutuamente sus respectivas plenipotencias, y reconocida la autenticidad de ellas, han convenido en lo siguiente:

Art. 1.º La religion católica, apostólica, romana, que con exclusion de cualquier otro culto continúa siendo la única de la nacion española, se conservará siempre en los dominios de S. M. Católica, con todos los de-

rechos y prerogativas de que debe gozar segun la ley de Dios y lo dispuesto por los sagrados cánones.

Art. 2.º En su consecuencia la instruccion en las universidades, colegios, seminarios y escuelas públicas ó privadas de cualquiera clase, será en todo conforme á la doctrina de la misma religion católica; y á este fin no se pondrá impedimento alguno á los Obispos y demás prelados diocesanos encargados por su ministerio de velar sobre la pureza de la doctrina de la fé, y de las costumbres, y sobre la educacion religiosa de la juventud en el ejercicio de este cargo, aun en las escuelas públicas.

Art. 3.º Tampoco se pondrá impedimento alguno á dichos prelados ni á los demás sagrados ministros en el ejercicio de sus funciones, ni los molestará nadie bajo ningun pretexto en cuanto se refiera al cumplimiento de los deberes de su cargo; antes bien cuidarán todas las autoridades del Reino de guardarles y de que se les guarde el respeto y consideracion debidos, segun los divinos preceptos, y de que no se haga cosa alguna que pueda causarles desdoro ó menosprecio. S. M. y su Real Gobierno dispensarán asimismo su poderoso patrocinio y apoyo á los Obispos en los casos que le pidan, principalmente cuando hayan de oponerse á la malignidad de los hombres que intenten pervertir los ánimos de los fieles y corromper sus costumbres, ó cuando hubiere de impedirse la publicacion, introduccion ó circulacion de libros malos y nocivos.

Art. 4.º En todas las demás cosas que pertenecen al derecho y ejercicio de la autoridad eclesiástica y al ministerio de las órdenes sagradas, los Obispos y el clero dependiente de ellos gozarán de la plena libertad que establecen los sagrados cánones.

Art. 5.º En atencion á las poderosas razones de necesidad y conveniencia que así lo persuaden, para la mayor comodidad y utilidad espiritual de los fieles, se hará una nueva division y circunscripcion de diócesis en toda la Península é Islas adyacentes. Y al efecto se conservarán las actuales Sillas metropolitanas de Toledo, Burgos, Granada, Santiago, Sevilla, Tarragona, Valencia y Zaragoza, y se elevará á esta clase la sufragánea de Valladolid.

Asimismo se conservarán las diócesis sufragáneas de Almería, Astorga, Ávila, Badajoz, Barcelona, Cádiz, Calahorra, Canarias, Cartagena, Córdoba, Coria, Cuenca, Gerona, Guadix, Huesca, Jaen, Jaca, Leon, Lérida, Lugo, Málaga, Mallorca, Menorca, Mondoñedo, Orense, Orihuela, Osma, Oviedo, Pa-

lencia, Pamplona, Plasencia, Salamanca, Santander, Segorbe, Segovia, Sigüenza, Tarazona, Teruel, Tortosa, Tuy, Urgel, Vich y Zamora.

La diócesis de Albarracin quedará unida á la de Teruel: la de Barbastro á la de Huesca: la de Ceuta á la de Cádiz: la de Ciudad-Rodrigo á la de Salamanca: la de Ibiza á la de Mallorca: la de Solsona á la de Vich: la de Tenerife á la de Canarias; y la de Tudela á la de Pamplona.

Los prelados de las Sillas á que se reunen otra añadirán al título de Obispos de la iglesia que presiden el de aquella que se les une.

Se erigirán nuevas diócesis sufragáneas en Ciudad-Real, Madrid y Vitoria.

La Silla episcopal de Calahorra y la Calzada se trasladará á Logroño; la de Orihuela á Alicante, y la de Segorbe á Castellon de la Plana, cuando en estas ciudades se halle todo dispuesto al efecto y se estime oportuno, oídos los respectivos prelados y cabildos.

En los casos en que para el mejor servicio de alguna diócesis sea necesario un Obispo auxiliar, se proveerá á esta necesidad en la forma canónica acostumbrada.

De la misma manera se establecerán vicarios generales en los puntos en que, con motivo de la agregacion de diócesis prevenida en este artículo, ó por otra justa causa, se creyeren necesarios, oyendo á los respectivos prelados.

En Ceuta y Tenerife se establecerán desde luego Obispos auxiliares.

Art. 6.º La distribucion de las diócesis referidas, en cuanto á la dependencia de sus respectivas metropolitanas, se harán como sigue:

Serán sufragáneas de la iglesia metropolitana de Burgos las de Calahorra ó Logroño, Leon, Osma, Palencia, Santander y Vitoria.

De la de Granada, las de Almería, Cartagena ó Murcia, Guadix, Jaen y Málaga.

De la de Santiago, las de Lugo, Mondoñedo, Orense, Oviedo y Tuy.

De la de Sevilla, las de Badajoz, Cádiz, Córdoba é Islas Canarias.

De la de Tarragona, las de Barcelona, Gerona, Lérida, Tortosa, Urgel y Vich.

De la de Toledo, las de Ciudad-Real, Coria, Cuenca, Madrid, Plasencia y Sigüenza.

De la de Valencia, las de Mallorca, Menorca, Orihuela ó Alicante y Segorbe ó Castellon de la Plana.

De la de Valladolid, las de Astorga, Avila, Salamanca, Segovia y Zamora.

De la de Zaragoza, las de Huesca, Jaca, Pamplona, Tarazona y Teruel.

Art. 7.º Los nuevos límites y demarcación particular de las mencionadas diócesis se determinarán con la posible brevedad y del modo debido (*servatis servandis*) por la Santa Sede, á cuyo efecto delegará en el Nuncio apostólico en estos Reinos las facultades necesarias para llevar á cabo la expresada demarcación, entendiéndose para ello (*collatis consiliis*) con el Gobierno de S. M.

Art. 8.º Todos los RR. Obispos y sus iglesias reconocerán la dependencia canónica de los respectivos metropolitanos, y en su virtud cesarán las exenciones de los Obispos de Leon y Oviedo.

Art. 9.º Siendo por una parte necesario y urgente acudir con el oportuno remedio á los graves inconvenientes que produce en la administracion eclesiástica el territorio diseminado de las cuatro Órdenes militares de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa, y debiendo por otra parte conservarse cuidadosamente los gloriosos recuerdos de una institucion que tantos servicios ha hecho á la Iglesia y al Estado, y las prerogativas de los Reyes de España, como grandes maestros de las expresadas Órdenes por concesion apostólica, se designará en la nueva demarcacion eclesiástica un determinado número de pueblos que formen coto redondo para que ejerza en él como hasta aquí el gran maestro la jurisdiccion eclesiástica, con entero arreglo á la expresada concesion y bulas pontificias.

El nuevo territorio se titulará *Priorato de las Órdenes militares*, y el prior tendrá el carácter episcopal con título de iglesia *in partibus*.

Los pueblos que actualmente pertenecen á dichas Órdenes militares y no se incluyan en su nuevo territorio, se incorporarán á las á las diócesis respectivas.

Art. 10. Los M. RR. Arzobispos y Reverendos Obispos extenderán el ejercicio de su autoridad y jurisdiccion ordinaria á todo el territorio que en la nueva circunscripcion quede comprendido en sus respectivas diócesis; y por consiguiente los que hasta ahora por cualquier título la ejercían en distritos enclavados en otras diócesis, cesarán en ella.

Art. 11. Cesarán tambien todas las jurisdicciones privilegiadas y exentas, cualesquiera que sean su clase y denominacion, inclusa la de San Juan de Jerusalem. Sus actuales territorios se reunirán á las respectivas diócesis en la nueva demarcacion que se hará de ellas, segun el art. 7.º, salvas las exenciones siguientes:

- 1.ª La de pro-capellan mayor de S. M.
- 2.ª La castrense.
- 3.ª La de las cuatro Órdenes militares

de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa en los términos prefijados en el art. 9.º de este Concordato.

4.ª La de los prelados regulares.

5.ª La del Nuncio apostólico *pro tempore* en la iglesia y hospital de italianos de esta córte.

Se conservarán tambien las facultades especiales que corresponden á la Comisaría general de Cruzada en cosas de su cargo, en virtud del Breve de delegacion y otras disposiciones apostólicas.

Art. 12. Se suprime la Colecturía general de expolios, vacantes y anualidades, quedando por ahora unida á la Comisaría general de Cruzada la Comision para administrar los efectos vacantes, recaudar los atrasos y sustanciar y terminar los negocios pendientes.

Queda asimismo suprimido el Tribunal apostólico y Real de la gracia del Excusado.

Art. 13. El cabildo de las iglesias catedrales se compondrá del dean, que será siempre la primera silla *post pontificalem*; de cuatro dignidades, á saber: la de arcepreste, la de arcedian, la de chantre y la de maestrescuela, y además de la de tesorero en las iglesias metropolitanas; de cuatro canónigos de oficio, á saber: el magistral, el doctoral, el lectoral y el penitenciario, y del número de canónigos de gracia que se expresan en el art. 17.

Habrà además en la iglesia de Toledo otras dos dignidades con los títulos respectivos de capellan mayor de Reyes, y capellan mayor de Muzárabes; en la de Sevilla la dignidad de capellan mayor de San Fernando, en la de Granada la de capellan mayor de los Reyes Católicos, y en la de Oviedo la de abad de Covadonga.

Todos los individuos del cabildo tendrán en él igual voz y voto.

Art. 14. Los prelados podrán convocar el cabildo y presidirle cuando lo crean conveniente: del mismo modo podrán presidir los ejercicios de oposicion á prebendas.

En estos y en cualesquiera otros actos, los prelados tendrán siempre el asiento preferente, sin que obste ningun privilegio ni costumbre en contrario; y se les tributarán todos los homenajes de consideracion y respeto que se deben á su sagrado carácter y á su cualidad de cabeza de su iglesia y cabildo.

Cuando presidan tendrán voz y voto en todos los asuntos que no le sean directamente personales, y su voto además será decisivo en caso de empate.

En toda eleccion ó nombramiento de personas que corresponda al cabildo, tendrá el prelado tres, cuatro ó cinco votos, segun que

el número de los capitulares sea de diez y seis, veinte, ó mayor de veinte. En estos casos, cuando el prelado no asista al cabildo, pasará una Comisión de él á recibir sus votos.

Cuando el prelado no presida el cabildo, lo presidirá el dean.

Art. 15. Siendo los cabildos catedrales el Senado y Consejo de los M. RR. Arzobispos y RR. Obispos, serán consultados por estos para oír su dictámen, ó para obtener su consentimiento en los términos en que, atendida la variedad de los negocios y de los casos, está prevenido por el derecho canónico, y especialmente por el sagrado Concilio de Trento. Cesará, por consiguiente, desde luego, toda inmunidad, exención, privilegio, uso ó abuso, que de cualquier modo se haya introducido en las diferentes iglesias de España, en favor de los mismos cabildos, con perjuicio de la autoridad ordinaria de los prelados.

Art. 16. Además de los dignidades y canónigos que componen exclusivamente el cabildo, habrá en las iglesias catedrales beneficiados ó capellanes asistentes, con el correspondiente número de otros ministros y dependientes.

Así los dignidades y canónigos, como los beneficiados y capellanes, aunque para el mejor servicio de las respectivas catedrales se hallen divididos en presbiterales, diaconales y subdiaconales, deberán ser todos presbíteros, según lo dispuesto por Su Santidad, y los que no lo fueren al tomar posesión de sus beneficios, deberán serlo precisamente dentro del año, bajo las penas canónicas.

Art. 17. El número de capitulares y beneficiados en las iglesias metropolitanas será el siguiente:

Las iglesias de Toledo, Sevilla y Zaragoza tendrán 28 capitulares y 24 beneficiados la de Toledo, 22 la de Sevilla, y 28 la de Zaragoza.

Las de Tarragona, Valencia y Santiago, 26 capitulares, y 20 beneficiados, y las de Burgos, Granada y Valladolid 24 capitulares y 20 beneficiados.

Las iglesias sufragáneas tendrán respectivamente el número de capitulares y beneficiados que se expresa á continuación:

Las de Barcelona, Cádiz, Córdoba, Leon, Málaga y Oviedo tendrán 20 capitulares y 16 beneficiados. Las de Badajoz, Calahorra, Cartajena, Cuenca, Jaen, Lugo, Palencia, Pamplona, Salamanca y Santander, 18 capitulares y 14 beneficiados. Las de Almería, Astorga, Avila, Canarias, Ciudad-Real, Coria, Gerona, Guadix, Huesca, Jaca, Lérida,

Mallorca, Mondoñedo, Orense, Orihuela, Osma, Plasencia, Segorbe, Segovia, Sigüenza, Tarazona, Teruel, Tortosa, Tuy, Urgel, Vich, Vitoria y Zamora 16 capitulares y 12 beneficiados.

La de Madrid tendrá 20 capitulares y 20 beneficiados, y la de Menorca 12 capitulares y 10 beneficiados.

Art. 18. En subrogacion de los 52 beneficios expresados en el Concordato de 1753, se reservan á la libre provision de Su Santidad la dignidad de chantre en todas las iglesias metropolitanas y en las sufragáneas de Astorga, Avila, Badajoz, Barcelona, Cádiz, Ciudad-Real, Cuenca, Guadix, Huesca, Jaen, Lugo, Málaga, Mondoñedo, Orihuela, Oviedo, Plasencia, Salamanca, Santander, Sigüenza, Tuy, Vitoria y Zamora; y en las demás sufragáneas una canongía de las de gracia, que quedará determinada por la primera provision que haga Su Santidad. Estos beneficios se conferirán con arreglo al mismo Concordato.

La dignidad de dean se proveerá siempre por S. M. en todas las iglesias, y en cualquier tiempo y forma que vauge. Las canongías de oficio se proveerán, previa oposicion, por los prelados y cabildos. Las demás dignidades y canongías se proveerán en rigurosa alternativa por S. M. y los respectivos Arzobispos y Obispos. Los beneficiados ó capellanes asistentes, se nombrarán alternativamente por S. M. y los prelados y cabildos.

Las prebendas, canongías y beneficios expresados que resulten vacantes por resigna ó por promocion del poseedor á otro beneficio, no siendo de los reservados á Su Santidad, serán siempre y en todo caso provistos por S. M.

Asimismo lo serán los que vauen *sede vacante*, ó los que hayan dejado sin proveer los prelados á quienes correspondia proveerlo al tiempo de su muerte, traslacion ó renuncia.

Corresponderá asimismo á S. M. la primera provision de las dignidades, canongías y capellanías de las nuevas catedrales y de las que se aumenten en la nueva metropolitana de Valladolid, á excepcion de las reservadas á Su Santidad y de las canongías de oficio, que se proveerán como de ordinario.

En todo caso los nombrados para los expresados beneficios deberán recibir la institucion y colacion canónicas de sus respectivos Ordinarios.

Art. 19. En atencion á que, tanto por efecto de las pasadas vicisitudes, como por razon de las disposiciones del presente Concordato han variado notablemente las cir-

cunstancias del clero español, Su Santidad por su parte y S. M. la Reina por la suya convienen en que no se conferirá ninguna dignidad, canongía ó beneficio de los que exigen personal residencia á los que por razon de cualquier otro cargo ó comision estén obligados á residir continuamente en otra parte. Tampoco se conferirá á los que estén en posesion de algun beneficio de la clase indicada ninguno de aquellos cargos ó comisiones, á no ser que renuncien uno de dichos cargos ó beneficios, los cuales se declaran por consecuencia de todo punto incompatibles.

En la capilla Real, sin embargo, podrá haber hasta seis prebendados de las iglesias catedrales de la Península; pero en ningun caso podrán ser nombrados los que ocupan las primeras sillas, los canónigos de oficio, los que tienen cura de almas, ni dos de una misma iglesia.

Respecto de los que en la actualidad y en virtud de indultos especiales ó generales se hallen en posesion de dos ó mas de estos beneficios, cargos ó comisiones, se tomarán desde luego las disposiciones necesarias para arreglar su situacion á lo prevenido en el presente artículo, segun las necesidades de la iglesia y la variedad de los casos.

Art. 20. En sede vacante, el cabildo de la iglesia metropolitana ó sufragánea en el término marcado y con arreglo á lo que previene el sagrado Concilio de Trento, nombrará un solo vicario capitular, en cuya persona se refundirá toda la potestad ordinaria del cabildo sin reserva ó limitacion alguna por parte de él, y sin que pueda revocar el nombramiento una vez hecho ni hacer otro nuevo; quedando por consiguiente enteramente abolido todo privilegio, uso ó costumbre de administrar en cuerpo, de nombrar mas de un vicario ó cualquiera otro que bajo cualquier concepto sea contrario á los dispuesto por los sagrados cánones.

Art. 21. Además de la capilla del Real palacio, se conservarán:

1.º La de Reyes y la Muzárabe de Toledo y las de San Fernando de Sevilla y de los Reyes Católicos de Granada.

2.º Las colegiatas sitas en capitales de provincia donde no exista Silla episcopal.

3.º Las de patronato particular, cuyos patronos aseguren el exceso de gasto que ocasionará la colegiata sobre el de iglesia parroquial.

4.º Las colegiatas de Covadonga, Roncesvalles, San Isidro de Leon, Sacromonte de Granada, San Ildefonso, Alcalá de Henares y Jerez de la Frontera.

5.º Las catedrales de las Sillas episcopales que se agreguen á otras, en virtud de las disposiciones del presente Concordato, se conservarán como colegiatas.

Todas las demás colegiatas, cualquiera que sea su origen, antigüedad y fundacion, quedarán reducidas, cuando las circunstancias locales no lo impidan, á iglesias parroquiales, con el número de beneficiados que además del párroco se contemplen necesarios, tanto para el servicio parroquial, como para el decoro del culto.

La conservacion de las capillas y colegiatas expresadas deberá entenderse siempre con sujecion al prelado de la diócesis á que pertenezcan y con derogacion de toda exencion y jurisdiccion *vere* ó *quasi nullius* que limite en lo mas mínimo la nativa del Ordinario.

Las iglesias colegiatas serán siempre parroquiales, y se distinguirán con el nombre de parroquia mayor, si en el pueblo hubiese otra ú otras.

Art. 22. El cabildo de las colegiatas se compondrá de un abad presidente, que tendrá aneja la cura de almas, sin mas autoridad ó jurisdiccion que la directiva y económica de su iglesia y cabildo; de dos canónigos de oficio con los títulos de magistral y doctoral, y de ocho canónigos de gracia. Habrá además seis beneficiados ó capellanes asistentes.

Art. 23. Las reglas establecidas en los artículos anteriores, así para la provision de las prebendas y beneficios ó capellanías de las iglesias catedrales, como para el régimen de sus cabildos, se observarán puntualmente en todas sus partes respecto de las iglesias colegiatas.

Art. 24. A fin de que en todos los pueblos del Reino se atienda con el esmero debido al culto religioso y á todas las necesidades del pasto espiritual, los muy RR. Arzobispos y RR. Obispos procederán desde luego á formar un nuevo arreglo y demarcacion parroquial de sus respectivas diócesis, teniendo en cuenta la extension y naturaleza del territorio y de la poblacion y las demás circunstancias locales, oyendo á los cabildos catedrales, á los respectivos arciprestes y á los fiscales de los Tribunales eclesiásticos, y tomando por su parte todas las disposiciones necesarias, á fin de que pueda darse por concluido y ponerse en ejecucion el precitado arreglo, previo el acuerdo del Gobierno de S. M. en el menor término posible.

Art. 25. Ningun cabildo ni corporacion eclesiástica podrá tener aneja la cura de almas, y los curatos y vicarías perpétuas que antes estaban unidas *pleno jure* á alguna

corporacion, quedarán en todo sujetas al derecho comun. Los coadjutores y dependientes de las parroquias y todos los eclesiásticos destinados al servicio de ermitas, santuarios, oratorios, capillas públicas ó iglesias no parroquiales dependerán del cura propio de su respectivo territorio, y estarán subordinados á él en todo lo tocante al culto y funciones religiosas.

Art. 26. Todos los curatos, sin diferencia de pueblos, de clases, ni del tiempo en que vaquen, se proveerán en concurso abierto con arreglo á lo dispuesto por el Santo Concilio de Trento, formando los Ordinarios ternas de los opositores aprobados y dirigiéndolas á S. M. para que nombre entre los propuestos. Cesará por consiguiente el privilegio de patrimonialidad y la exclusiva ó preferencia que en algunas partes tenian los patrimoniales para la obtencion de curatos y otros beneficios.

Los curatos de patronato eclesiástico se proveerán nombrando el patrono entre los de la terna que del modo ya dicho formen los prelados, y los de patronato laical nombrando el patrono entre aquellos que acrediten haber sido aprobados en concurso abierto en la diócesis respectiva, señalándose á los que no se hallen en este caso el término de cuatro meses para que hagan constar haber sido aprobados sus ejercicios hechos en la forma indicada, salvo siempre el derecho del Ordinario de examinar al presentado por el patrono si lo estima conveniente.

Los coadjutores de las parroquias serán nombrados por los Ordinarios, previo examen sinodal.

Art. 27. Se dictarán las medidas convenientes para conseguir, en cuanto sea posible, que por el nuevo arreglo eclesiástico no queden lastimados los derechos de los actuales poseedores de cualesquiera prebendas, beneficios ó cargos que hubieren de suprimirse á consecuencia de lo que en él se determina.

Art. 28. El Gobierno de S. M. C. sin perjuicio de establecer oportunamente, previo acuerdo con la Santa Sede, y tan pronto como las circunstancias lo permitan, seminarios generales en que se dé la extension conveniente á los estudios eclesiásticos, adoptará por su parte las disposiciones oportunas para que se creen sin demora seminarios conciliares en las diócesis donde no se hallen establecidos, á fin de que en lo sucesivo no haya en los dominios españoles iglesia alguna que no tenga al menos un seminario suficiente para la instruccion del clero.

Serán admitidos en los seminarios y educados é instruidos del modo que establece el

sagrado Concilio de Trento, los jóvenes que los Arzobispos y Obispos juzguen conveniente recibir segun la necesidad ó utilidad de las diócesis; y en todo lo que pertenece al arreglo de los seminarios, á la enseñanza y á la administracion de sus bienes, se observarán los decretos del mismo Concilio de Trento.

Si de resultas de la nueva circunscripcion de diócesis quedasen en algunas dos seminarios, uno en la capital actual del Obispado, y otro en la que se le ha de unir, se conservarán ambos, mientras el Gobierno y los Prelados de comun acuerdo los consideren útiles.

Art. 29. A fin de que en toda la Península haya el número suficiente de ministros y operarios evangélicos de quienes puedan valerse los Prelados para hacer misiones en los pueblos de su diócesis, auxiliar á los párrocos, asistir á los enfermos y para otras obras de caridad y utilidad pública, el Gobierno de S. M., que se propone mejorar oportunamente los Colegios de misiones para Ultramar, tomará desde luego las disposiciones convenientes para que se establezcan donde sea necesario, oyendo previamente á los Prelados diocesanos, casas y congregaciones religiosas de San Vicente Paul, San Felipe Neri y otra orden de las aprobadas por la Santa Sede, las cuales servirán al propio tiempo de lugares de retiro para los eclesiásticos, para hacer ejercicios espirituales y para otros usos piadosos.

Art. 30. Para que haya tambien casas religiosas de mujeres, en las cuales puedan seguir su vocacion las que sean llamadas á la vida contemplativa y á la activa de la asistencia de los enfermos, enseñanza de niñas y otras obras y ocupaciones tan piadosas como útiles á los pueblos, se conservará el instituto de las hijas de la Caridad, bajo la direccion de los clérigos de San Vicente Paul, procurando el Gobierno su fomento.

Tambien se conservarán las casas de religiosas que á la vida contemplativa reunen la educacion y enseñanza de niñas ú otras obras de caridad.

Respecto á las demás órdenes, los prelados ordinarios, atendidas todas las circunstancias de sus respectivas diócesis, propondrán las casas de religiosas en que convenga la admision y profesion de novicias y los ejercicios de enseñanza ó de caridad que sea conveniente establecer en ellas.

No se procederá á la profesion de ninguna religiosa sin que se asegure antes su subsistencia en debida forma.

Art. 31. La dotacion del M. R. Arzobispo de Toledo será de 160,000 rs. anuales.

La de los de Sevilla y Valencia de 150,000.

La de los de Granada y Santiago de 140,000.

Y la de los de Búrgos, Tarragona, Valladolid y Zaragoza de 130,000.

La dotacion de los RR. Obispos de Barcelona y Madrid será de 110,000 rs.

La de los de Cádiz, Cartagena, Córdoba y Málaga de 100,000.

La de los de Almería, Avila, Badajoz, Canarias, Cuenca, Gerona, Huesca, Jaen, Leon, Lérida, Lugo, Mallorca, Orense, Oviedo, Palencia, Pamplona, Salamanca, Santander, Segovia, Teruel y Zamora de 90,000 rs.

Las de los de Astorga, Calahorra, Ciudad-Real, Coria, Guadix, Jaca, Menorca, Mondoñedo, Orihuela, Osma, Plasencia, Segorbe, Sigüenza, Tarazona, Tortosa, Tuy, Urgel, Vich y Vitoria de 80,000 rs.

La del Patriarca de las Indias, no siendo Arzobispo ú Obispo propio, de 150,000 deduciéndose en su caso de esta cantidad cualquiera otra que por via de pension eclesiástica ó en otro concepto percibiese del Estado.

Los prelados que sean Cardenales disfrutará de 20,000 rs. sobre su dotacion.

Los Obispos auxiliares de Ceuta y Tenerife y el Prior de las órdenes tendrán 40,000 reales anuales.

Estas dotaciones no sufrirán descuento alguno ni por razon del coste de las Bulas que sufragará el Gobierno, ni por los demás gastos que por estas puedan ocurrir en España.

Además los Arzobispos y Obispos, conservarán sus palacios y los jardines, huertas ó casas que en cualquiera parte de la diócesis hayan estado destinadas para su uso y recreo y no hubiesen sido enajenadas.

Queda derogada la actual legislación relativa á expolios de los Arzobispos y Obispos, y en su consecuencia podrán disponer libremente, segun les dicte su conciencia, de lo que dejaren al tiempo de su fallecimiento, sucediéndoles abintestato los herederos legítimos con la misma obligacion de conciencia: exceptuándose en uno y otro caso los ornamentos y pontificales que se considerarán como propiedad de la mitra y pasarán á sus sucesores en ella.

Art. 32. La primera silla de la iglesia catedral de Toledo tendrá de dotacion 24,000 reales: las de las demás iglesias metropolitanas 20,000: las de las iglesias sufragáneas 18,000: y las de las colegiatas 15,000.

Los dignidades y canónigos de oficio de las iglesias metropolitanas tendrán 16,000 reales: los de las sufragáneas 14,000; y los canónigos de oficio de las colegiatas 8,000.

Los demás canónigos tendrán 14,000 rea-

les en las iglesias metropolitanas; 12,000 en las sufragáneas; y 6,600 en las colegiatas.

Los beneficiados ó capellanes asistentes de las iglesias metropolitanas tendrán 8,000 reales; 6,000 los de las sufragáneas; y 3,000 los de las colegiatas.

Art. 33. La dotacion de los curas en las parroquias urbanas será de 3,000 á 10,000 reales; en las parroquias rurales el mínimum de la dotacion será de 2,200.

Los coadjutores y ecónomos tendrán de 2,000 á 4,000 rs.

Además, los curas propios, y en su caso los coadjutores, disfrutarán las casas destinadas á su habitacion y los huertos ó heredades que no se hayan enajenado, y que son conocidos con la denominacion de iglesias-rios, mansos ú otras.

Tambien disfrutarán los curas propios y sus coadjutores la parte que les corresponda en los derechos de estola y pié de altar.

Art. 34. Para sufragar los gastos del culto tendrán las iglesias metropolitanas anualmente de 90 á 140,000 rs.; las sufragáneas de 70 á 90,000; y las colegiatas de 20 á 30,000.

Para los gastos de administracion y extraordinarios de visitas tendrán de 20 á 30,000 rs. los metropolitanos, y de 16 á 20,000 los sufragáneos.

Para los gastos del culto parroquial se asignará á las iglesias respectivas una cantidad anual que no bajará de 1.000 rs., además de los emolumentos eventuales y de los derechos que por ciertas funciones estén fijados ó se fijaren para este objeto en los aranceles de las respectivas diócesis.

Art. 35. Los seminarios conciliares tendrán de 90 á 120,000 rs. anuales, segun sus circunstancias y necesidades.

El Gobierno de S. M. proveerá por los medios mas conducentes á la subsistencia de las casas y congregaciones religiosas de que habla el art. 29.

En cuanto al mantenimiento de las comunidades religiosas se observará lo dispuesto en el art. 30.

Se devolverán desde luego y sin demora á las mismas, y en su representacion á los prelados diocesanos en cuyo territorio se hallen los conventos ó se hallaban antes de las últimas vicisitudes, los bienes de su pertenencia que están en poder del Gobierno y que no han sido enajenados. Pero teniendo Su Santidad en consideracion el estado actual de estos bienes y otras particulares circunstancias, á fin de que con su producto pueda atenderse con mas igualdad á los gastos del culto y otros generales, dispone que los prela-

dos, en nombre de las comunidades religiosas, propietarias, procedan inmediatamente y sin demora á la venta de los expresados bienes por medio de subastas públicas hechas en la forma canónica y con intervencion de persona nombrada por el Gobierno de S. M. El producto de estas ventas se convertirá en inscripciones intrasferibles de la Deuda del Estado del 3 por 100, cuyo capital é intereses se distribuirán entre todos los referidos conventos en proporcion de sus necesidades y circunstancias para atender á los gastos indicados y al pago de las pensiones de las religiosas que tengan derecho á percibir las, sin perjuicio de que el Gobierno supla como hasta aquí lo que fuere necesario para el completo pago de dichas pensiones hasta el fallecimiento de las pensionadas.

Art. 36. Las dotaciones asignadas en los artículos anteriores para los gastos del culto y del clero, se entenderán sin perjuicio del aumento que se pueda hacer en ellas cuando las circunstancias lo permitan. Sin embargo, cuando por razones especiales no alcance en algun caso particular alguna de las asignaciones expresadas en el art. 34, el Gobierno de S. M. proveerá lo conveniente al efecto; del mismo modo proveerá á los gastos de las reparaciones de los templos y demás edificios consagrados al culto.

Art. 37. El importe de la renta que se devengue en la vacante de las Sillas episcopales, deducidos los emolumentos del ecónomo que se diputará por el cabildo en el acto de elegir al vicario capitular, y los gastos para los reparos precisos del palacio episcopal, se aplicará por iguales partes en beneficio del seminario conciliar y del nuevo prelado.

Asimismo de las rentas que se devenguen en las vacantes de dignidades, canongías, parroquias y beneficio de cada diócesi, deducidas las respectivas cargas, se formará un cúmulo ó fondo de reserva á disposicion del Ordinario para atender á los gastos extraordinarios é imprevistos de las iglesias y del clero, como tambien á las necesidades graves y urgentes de la diócesi. Al propio efecto ingresará igualmente en el mencionado fondo de reserva la cantidad correspondiente á la duodécima parte de su dotacion anual que satisfarán por una vez dentro del primer año los nuevamente nombrados para prebendas, curatos y otros beneficios; debiendo por tanto cesar todo otro descuento que por cualquier concepto, uso, disposicion ó privilegio se hiciese anteriormente.

Art. 38. Los fondos con que ha de atenderse á la dotacion del culto y del clero serán:

1.º El producto de los bienes devueltos al clero por la ley de 3 de abril de 1845.

2.º El producto de las limosnas de la Santa Cruzada.

3.º Los productos de las encomiendas y maestrazgos de las cuatro Ordenes militares vacantes y que vacaren.

4.º Una imposicion sobre las propiedades rústicas y urbanas y riqueza pecuaria en la cuota que sea necesario para completar la dotacion, tomando en cuenta los productos expresados en los párrafos 1.º, 2.º y 3.º, y demás rentas que en lo sucesivo de acuerdo con la Santa Sede se asignen á este objeto.

El clero recaudará esta imposicion percibiéndola en frutos, en especie ó en dinero, previo concierto que podrá celebrar con las provincias, con los pueblos, con las parroquias ó con los particulares; y en los casos necesarios será auxiliado por las autoridades públicas en la cobranza de esta imposicion, aplicando al efecto los medios establecidos para el cobro de las contribuciones.

Además se devolverán á la Iglesia desde luego, y sin demora, todos los bienes eclesiásticos no comprendidos en la expresada ley de 1845, y que todavía no hayan sido enajenados, incluso los que restan de las comunidades religiosas de varones. Pero atendidas las circunstancias actuales de unos y otros bienes, y la evidente utilidad que ha de resultar á la Iglesia, el Santo Padre dispone que su capital se convierta inmediatamente y sin demora en inscripciones intrasferibles de la Deuda del Estado del 3 por 100, observándose exactamente la forma y reglas establecidas en el art. 35 con referencia á la venta de los bienes de las religiosas.

Todos estos bienes serán imputados por su justo valor, rebajadas cualesquiera cargas para los efectos de las disposiciones contenidas en este artículo.

Art. 39. El Gobierno de S. M., salvo el derecho propio de los prelados diocesanos, dictará las disposiciones necesarias para que aquellos entre quienes se hayan distribuido los bienes de las capellanías y fundaciones piadosas, aseguren los medios de cumplir las cargas á que dichos bienes estuvieren afectos.

Iguales disposiciones adoptará para que se cumplan del mismo modo las cargas piadosas que pesaren sobre los bienes eclesiásticos que han sido enajenados con este gravamen.

El Gobierno responderá siempre y exclusivamente de las impuestas sobre los bienes que se hubieren vendido por el Estado libres de esta obligacion.

Art. 40. Se declara que todos los ex-

presados bienes y rentas pertenecen en propiedad á la Iglesia, y que en su nombre se disfrutarán y administrarán por el clero.

Los fondos de Cruzada se administrarán en cada diócesis por los prelados diocesanos, como revestidos al efecto de las facultades de la Bula para aplicarlos segun está prevenido en la última prórroga de la relativa concesión apostólica, salvas las obligaciones que pesan sobre este ramo por convenios celebrados con la Santa Sede. El modo y forma en que deberá verificarse dicha administración, se fijará de acuerdo entre el Santo Padre y S. M. Católica.

Igualmente administrarán los prelados diocesanos los fondos del indulto cuadragésimo, aplicándolos á establecimientos de beneficencia y actos de caridad en las diócesis respectivas, con arreglo á las concesiones apostólicas.

Las demás facultades apostólicas relativas á este ramo, y las atribuciones á ellas consiguientes, se ejercerán por el Arzobispo de Toledo en la extensión y forma que se determinará por la Santa Sede.

Art. 41. Además la Iglesia tendrá el derecho de adquirir por cualquier título legítimo, y su propiedad en todo lo que posea ahora ó adquiriere en adelante, será solemnemente respetada. Por consiguiente, en cuanto á las antiguas y nuevas fundaciones eclesiásticas, no podrá hacerse ninguna supresión ó union sin la intervención de la autoridad de la Santa Sede, salvas las facultades que competen á los Obispos segun el santo Concilio de Trento.

Art. 42. En este supuesto, atendida la utilidad que ha de resultar á la religion de este convenio, el Santo Padre, á instancia de S. M. Católica, y para proveer á la tranquilidad pública, decreta y declara que los que durante las pasadas circunstancias hubiesen comprado en los dominios de España bienes eclesiásticos, al tenor de las disposiciones civiles á la sazón vigentes, y estén en posesión de ellos, y los que hayan sucedido ó sucedan en sus derechos á dichos compradores, no serán molestados en ningún tiempo ni manera por Su Santidad ni por los Sumos Pontífices sus sucesores, antes bien, así ellos como su causa—habientes, disfrutarán segura y pacíficamente la propiedad de dichos bienes y sus emolumentos y productos.

Art. 43. Todo lo demás perteneciente á personas ó cosas eclesiásticas, sobre lo que no se provee en los artículos anteriores, será dirigido y administrado segun la disciplina de la Iglesia canónicamente vigente.

Art. 44. El Santo Padre y S. M. Católica

declaran quedar salvas é ilesas las Reales prerogativas de la Corona de España, en conformidad á los convenios anteriormente celebrados entre ambas potestades. Y por tanto, los referidos convenios, y en especialidad el que se celebró entre el Sumo Pontífice Benedicto XIV y el Rey Católico Fernando VI, en el año 1753, se declaran confirmados, y seguirán en su pleno vigor en todo lo que no se altere ó modifique por el presente.

Art. 45. En virtud de este Concordato se tendrán por revocadas, en cuanto á el se oponen, las leyes, órdenes, y decretos publicados hasta ahora, de cualquier modo y forma en los dominios de España, y el mismo Concordato regirá para siempre en lo sucesivo como ley del Estado en los propios dominios. Y por tanto una y otra de las partes contratantes prometen por sí y sus sucesores la fiel observancia de todos y cada uno de los artículos de que consta. Si en lo sucesivo ocurriese alguna dificultad, el Santo Padre y S. M. Católica se pondrán de acuerdo para resolverla amigablemente.

Art. 46 y último. El canje de las ratificaciones del presente Concordato se verificará en el término de dos meses, ó antes si fuere posible.

En fé de lo cual, Nos los infrascritos plenipotenciarios hemos firmado el presente Concordato, y sellándolo con nuestro propio sello en Madrid á 16 de marzo de 1851.—(Firm.) *Joannes Brunelli, Archiepiscopus Thesalonicensis.*—*Loco sigilli.*—(Firmado.)—Manuel Bertran de Lis.—Lugar del sello.

Por tanto mandamos etc.—Dado en Palacio á 17 de octubre de 1851. (*CL. t. 54, página 238.*)

Convenio de 1860.

Ley de 4 de noviembre de 1859 autorizando al Gobierno para concluir un convenio con la Santa Sede.

(GRAC. Y JUST.) Doña Isabel II, etc.

Artículo único. Se autoriza al Gobierno para concluir y ratificar un Convenio con la Santa Sede, con el objeto principalmente de commutar los bienes eclesiásticos, de cualquiera clase que sean en inscripciones intrasferibles de la Deuda consolidada del 3 por 100, y para representar por inscripciones de la misma especie el resto de la dotación del culto y clero, si así conviniese á las diócesis respectivas, conservando á la Iglesia el derecho de adquirir consignado en el art. 41 del Concordato, y sin que se impute en su dotación el importe de las rentas que pudie-

Palacio á 4 de noviembre de 1859. (CL. tomo 82, pág. 149.)

Ley de 4 de abril de 1860, mandando publicar el Concordato.

(GRAC. Y JUST.) Doña Isabel II por la gracia de Dios y la Constitución de la Monarquía española, Reina de las Españas, á todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed: que en uso de la autorizacion concedida á mi Gobierno por la ley de 4 de noviembre de 1859 para concluir y ratificar con la Santa Sede un Convenio, cuyo objeto principal fuese conmutar los bienes eclesiásticos, de cualquier clase que fueran, por inscripciones intrasferibles de la Deuda consolidada del 3 por 100, y representar por inscripciones de la misma especie el resto de la dotacion del culto y del clero, conservando á la Iglesia el derecho de adquirir consignado en el último Concordato.

Vengo en mandar se publique y observe como ley del Estado el Convenio celebrado con la Santa Sede en 25 de agosto y ratificado en 7 y 24 de noviembre del año anterior cuyo literal contesto es como sigue:

En nombre de la santísima é individua Trinidad.

El Sumo Pontífice Pio IX y S. M. Católica Doña Isabel II, Reina de España, queriendo proveer de comun acuerdo el arreglo definitivo de la dotacion del culto y clero en los dominios de S. M. en consonancia con el solemne Concordato de 16 de marzo de 1851, han nombrado respectivamente por sus plenipotenciarios:

Su Santidad al Emmo. y Reverendísimo Sr. Cardenal Santiago Antonelli, su secretario de Estado;

Y S. M. al Excmo. Sr. D. Antonio de los Rios y Rosas, su embajador extraordinario cerca de la Santa Sede, los cuales, canjeados sus plenos poderes han convenido en lo siguiente:

Artículo 1.º El Gobierno de S. M. Católica, habida consideracion á las lamentables vicisitudes por que han pasado los bienes eclesiásticos en diversas épocas, y deseando asegurar á la Iglesia perpétuamente la pacífica posesion de sus bienes y derechos, y prevenir todo motivo de que sea violado el solemne Concordato celebrado en 16 de marzo de 1851, promete á la Santa Sede que en adelante no se hará ninguna venta, conmutacion ni otra especie de enajenacion de los dichos bienes sin la necesaria autorizacion de la misma Santa Sede.

Art. 2.º Queriendo llevar definitivamente á efecto de un modo seguro, estable é in-

dependiente el plan de dotacion del culto y clero prescrito en el mismo Concordato, la Santa Sede y el Gobierno de S. M. Católica convienen en los puntos siguientes.

Art. 3.º Primeramente el Gobierno de S. M. reconoce de nuevo formalmente el libre y pleno derecho de la Iglesia para adquirir, retener y usufructuar en propiedad y sin limitacion ni reserva toda especie de bienes y valores, quedando en consecuencia derogada por este Convenio cualquiera disposicion que le sea contraria y señaladamente y en cuanto se le oponga, la ley de 1.º de mayo de 1855.

Los bienes que en virtud de este derecho adquiera y posea en adelante la Iglesia no se computarán en la dotacion que le está asignada por el Concordato.

Art. 4.º En virtud del mismo derecho, el Gobierno de S. M. reconoce á la Iglesia como propietaria absoluta de todos y cada uno de los bienes que le fueron devueltos por el Concordato. Pero habida consideracion al estado de deterioro de la mayor parte de los que aun no han sido enajenados, á su difícil administracion y á los varios, contradictorios é inexactos cómputos de su valor en renta, circunstancias todas que han hecho hasta ahora la dotacion del clero incierta y aun incóngrua, el Gobierno de S. M. ha propuesto á la Santa Sede una permutacion, dándose á los Obispos la facultad de determinar, de acuerdo con sus cabildos, el precio de los bienes de la Iglesia situados en sus respectivas diócesis, y ofreciendo aquel, en cambio de todos ellos y mediante su cesion hecha al Estado tantas inscripciones intrasferibles del papel del 3 por 100 de la Deuda pública consolidada de España, cuantas sean necesarias para cubrir el total valor de dichos bienes.

Art. 5.º La Santa Sede, deseosa de que se lleve inmediatamente á efecto una dotacion cierta, segura é independiente para el culto y para el clero, oídos los Obispos de España y reconociendo en el caso actual, y en el conjunto de todas las circunstancias, la mayor utilidad de la Iglesia, no ha encontrado dificultad en que dicha permutacion se realice en la forma siguiente:

Art. 6.º Serán eximidos de la permutacion y quedarán en propiedad á la Iglesia en cada diócesis todos los bienes enumerados en los arts. 31 y 33 del Concordato de 1851, á saber: los huertos, jardines, palacios y otros edificios que en cualquier lugar de la diócesis estén destinados al uso y esparcimiento de los Obispos. Tambien se le reservarán las casas destinadas á la habitacion de

los párrocos, con sus huertos y campos anejos, conocidos bajo las denominaciones de *Iglesarios*, *Mansos* y otras. Además retendrá la Iglesia en propiedad los edificios de los seminarios conciliares con sus anejos, y las bibliotecas y casas de corrección ó cárceles eclesiásticas, y en general todos los edificios que sirven en el día para el culto, y los que se hallan destinados al uso y habitación del clero regular de ambos sexos, así como los que en adelante se destinen á tales objetos.

Ninguno de los bienes enumerados en este artículo podrá imputarse en la dotación prescrita para el culto y clero en el Concordato.

En fin, siendo la utilidad de la Iglesia el motivo que induce á la Santa Sede á admitir la expresada permutación de valores, si en alguna diócesis estimare el Obispo que por particulares circunstancias conviene á la Iglesia retener alguna finca, sita en ella, aquella finca podrá eximirse de la permutación, imputándose el importe de su renta en la dotación del clero.

Art. 7.º Hecha por los Obispos la estimación de los bienes sujetos á la permutación, se entregarán inmediatamente á aquellos títulos ó inscripciones intrasferibles, así por el completo valor de los mismos bienes, como por el valor venal de los que han sido enajenados después del Concordato. Verificada la entrega, los Obispos, competentemente autorizados por la Sede Apostólica, harán al Estado formal cesión de todos los bienes que con arreglo á este convenio están sujetos á la permutación.

Las inscripciones se imputarán al clero como parte integrante de su dotación, y los respectivos diocesanos aplicarán sus réditos á cubrirla en el modo prescrito en el Concordato.

Art. 8.º Atendida la perentoriedad de las necesidades del clero, el Gobierno de S. M. se obliga á pagar mensualmente la renta consolidada correspondiente á cada diócesis.

Art. 9.º En el caso de que por disposición de la autoridad temporal la renta del 3 por 100 de la Deuda pública del Estado llegue á sufrir cualquiera disminución ó reducción, el Gobierno de S. M. se obliga desde ahora á dar á la Iglesia tantas inscripciones intrasferibles de la renta que sustituya á la del 3 por 100, cuantas sean necesarias para cubrir íntegramente el importe anual de la que va á emitirse en favor de la Iglesia; de modo que esta renta no se ha de disminuir ni reducir en ninguna eventualidad ni en ningún tiempo.

Art. 10. Los bienes pertenecientes á ca-

pellanías colativas y á otras semejantes fundaciones piadosas familiares, que á causa de su peculiar índole y destino y de los diferentes derechos que en ellos radican no pueden comprenderse en la permutación y cesión de que aquí se trata, serán objeto de un convenio particular celebrado entre la Santa Sede y S. M. Católica.

Art. 11. El Gobierno de S. M., confirmando lo estipulado en el art. 39 del Concordato, se obliga de nuevo á satisfacer á la Iglesia, en la forma que de comun acuerdo se convenga, por razón de las cargas impuestas, ya sobre los bienes vendidos como libres por el Estado, ya sobre los que ahora se le ceden, una cantidad alzada que guarde la posible proporción con las mismas cargas. También se compromete á cumplir por su parte en términos hábiles las obligaciones que contrajo el Estado por los párrafos 1.º y 2.º de dicho artículo.

Se instituirá una Comisión mixta con el carácter de consultiva que en el término de un año reconozca las cargas que pesan sobre los bienes mencionados en el párrafo 1.º de este artículo y proponga la cantidad alzada que en razón de ellas ha de satisfacer el Estado.

Art. 12. Los Obispos, en conformidad de lo dispuesto en el art. 35 del Concordato, distribuirán entre los conventos de monjas existentes en sus respectivas diócesis las inscripciones intrasferibles correspondientes, ya á los bienes de su propiedad que ahora se ceden al Estado, ya á los de la misma procedencia que se hubieren vendido en virtud de dicho Concordato, ó de la ley de 1.º de mayo de 1855. La renta de estas inscripciones se imputará á dichos conventos como parte de su dotación.

Art. 13. Queda en su fuerza y vigor lo dispuesto en el Concordato acerca del suplemento que ha de dar el Estado para el pago de las pensiones de los religiosos de ambos sexos, como también cuanto se prescribe en los arts. 35 y 36 del mismo acerca del mantenimiento de las casas y congregaciones religiosas que se establezcan en la Península, y acerca de la reparación de los templos y otros edificios destinados al culto. El Estado se obliga además á construir á sus expensas las iglesias que se consideren necesarias, á conceder pensiones á los pocos religiosos existentes legos exclaustrados, y á proveer á la dotación de las monjas de oficio, capellanes, sacristanes y culto de las iglesias de religiosas en cada diócesis.

Art. 14. La renta de la Santa Cruzada, que hace parte de la actual dotación, se des-

tinará exclusivamente en adelante á los gastos del culto, salvas las obligaciones que pesan sobre aquella por Convenios celebrados con la Santa Sede.

El importe anual de la misma renta se computará por el año comun del último quinquenio en una cantidad fija, que se determinará de acuerdo entre la Iglesia y el Estado.

El Estado suplirá como hasta aquí la cantidad que falte para cubrir la asignacion concedida al culto por el art. 34 del Concordato.

Art. 15. Se declara propiedad de la Iglesia la imposicion anual que para completar su dotacion se estableció en el párrafo 4.º del art. 38 del Concordato, y se repartirá y cobrará dicha imposicion en los términos allí definidos. Sin embargo, el Gobierno de S. M. se obliga á acceder á toda instancia que por motivos locales ó por cualquiera otra causa le hagan los Obispos para convertir las cuotas de imposicion correspondientes á las respectivas diócesis en inscripciones intransferibles de la referida Deuda consolidada, bajo las condiciones y en los términos definidos en los artículos 7, 8 y 9 de este Convenio.

Art. 16. A fin de conocer exactamente la cantidad á que debe ascender la mencionada imposicion, cada Obispo, de acuerdo con su cabildo, hará á la mayor brevedad un presupuesto definitivo de la dotacion de su diócesis, ateniéndose al formarlo á las prescripciones del Concordato. Y para determinar fijamente en cada caso las asignaciones respecto de las cuales se ha establecido en aquel un *máximum* y un *minimum*, podrán los Obispos, de acuerdo con el Gobierno, optar por un término medio cuando así lo exijan las necesidades de las iglesias y todas las demás circunstancias atendibles.

Art. 17. Se procederá inmediatamente á la nueva circunscripcion de parroquias, al tenor de lo conferenciado y concertado ya entre ambas potestades.

Art. 18. El Gobierno de S. M., conformándose á lo prescrito en el art. 36 del Concordato, acogerá las razonables propuestas que para aumento de asignaciones le hagan los Obispos en los casos previstos en dicho artículo, y señaladamente las relativas á seminarios.

Art. 19. El Gobierno de S. M., correspondiendo á los deseos de la Santa Sede, y queriendo dar un nuevo testimonio de su firme disposicion á promover no solo los intereses materiales, sino tambien los espirituales de la Iglesia, declara que no pondrá óbice á la celebracion de Sínodos diocesanos,

cuando los respectivos prelados estimen conveniente convocarlos.

Asímismo declara que sobre la celebracion de Sínodos provinciales y sobre otros varios puntos áridos é importantes, se propone ponerse de acuerdo con la Santa Sede, consultando al mayor bien y esplendor de la Iglesia.

Por último, declara que cooperará por su parte con toda eficacia á fin de que se lleven á efecto sin demora las disposiciones del Concordato que aun se hallan pendientes de ejecucion.

Art. 20. En vista de las ventajas que de este nuevo Convenio resultan á la Iglesia, Su Santidad, acogiendo las repetidas instancias de S. M. C., ha acordado extender, como de hecho extiende, el benigno saneamiento contenido en el art. 42 del Concordato á los bienes eclesiásticos enajenados á consecuencia de la referida ley de 1.º de mayo de 1855.

Art. 21. El presente Convenio, adicional al solemne y vigente Concordato celebrado en 16 de marzo de 1851, se guardará en España perpétuamente como ley del Estado, del mismo modo que dicho Concordato.

Art. 22. El canje de las ratificaciones del presente Convenio se verificará en el término de tres meses, ó antes si fuese posible.

En fé de lo cual los infrascritos plenipotenciarios han firmado y sellado el presente convenio con sus respectivos sellos.—Dado en Roma en dos ejemplares á 25 de agosto de 1859. —Firmado. —*Santiago, Cardenal Antonelli*. — (Lugar del sello.) — Firmado, *Antonio de los Rios y Rosas*. — (Lugar del sello.)

Por tanto mandamos etc.—Dado en Palacio á 4 de abril de 1860. (CL. t. 83, p. 267.)

Convenio de 1867.

Para el arreglo definitivo de las capellanías colativas y otras fundaciones pias de la misma índole, se firmó el 14 de junio de 1867 un Convenio entre el Gobierno español y la Santa Sede, que fué publicado como ley en 24 de junio del mismo año. Se halla inserto en CAPELLANÍAS

Apéndice.

Comprendemos en este apéndice multitud de disposiciones que se han dictado por el Gobierno para la ejecucion del Concordato de 1850 y Convenio de 1860, á parte de otras que se insertan en DESAMORTIZACION: CULTO y CLERO: ECLE-

SIÁSTICOS : IGLESIAS PARROQUIALES : etc.
Veamos:

R. D. de 25 julio de 1851.

Reglas y bases para la provision de las mitras, dignidades y prebendas.

(GRAC. Y JUST.) «Teniendo en consideracion las razones expuestas por el Ministro de Gracia y Justicia, acerca de la necesidad de fijar reglas y bases determinadas á que poder ajustarse en la provision de las mitras, dignidades y prebendas eclesiásticas, y de conformidad con lo expuesto sobre la materia por la Cámara, vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º En la clasificacion y propuesta de sugetos que han de ser presentados para las mitras, se tendrá muy presente lo dispuesto en los sagrados cánones, y en los párrafos 12, 13 y 14 de la ley 12, título XVIII, lib. I de la Nov. Rec., cuya inviolable observancia encargo muy particularmente á la Cámara y al Ministro de Gracia y Justicia.

Art. 2.º Para las primeras sillas de las iglesias metropolitanas, sufragáneas y colegiales se propondrán precisamente capitulares de la misma ó superior categoría, que además de estar adornados de las circunstancias que se expresan en la regla 1.ª, art. 18, ley 12, tít. XVIII, lib. I de la Nov. Rec., ya citada, tengan tambien el grado de doctor ó licenciado en teología ó jurisprudencia, y hayan servido cuatro años dignidad ó prebenda de oficio ú ocho canonicatos de gracia.

Art. 3.º Para el arcedianato titular se propondrá al canónigo de gracia mas antiguo de cualquiera de las iglesias de la misma ó superior clase, con tal que tenga grado mayor en teología ó derecho y seis años de residencia.

Art. 4.º Igualmente se propondrá para la dignidad de maestrescuela, prebendados de oficio de las respectivas iglesias que hayan servido su prebenda por espacio de cuatro años al menos.

Art. 5.º Para las demás dignidades de las iglesias metropolitanas serán propuestos:

1.º Canónigos de las mismas dignidades de las sufragáneas, ó abades de las colegiatas que hayan servido su prebenda, cuatro años las dignidades, abades y canónigos de oficio, y seis los de gracia, ú ocho no teniendo grado mayor.

2.º Canónigos de las iglesias sufragáneas que teniendo grado mayor hayan residido su prebenda ocho años ó diez á falta de dicho requisito.

3.º Párrocos que al grado mayor añadan

doce años de servicio en el ministerio parroquial, de los cuales durante dos han de haber regido parroquias de término, ó cuatro de ascenso. A los que no tengan grado mayor se exigirán quince años de párroco.

4.º Los jueces metropolitanos, los provisorios y vicarios generales que con la correspondiente Real cédula auxiliaria hayan desempeñado estos cargos y sus fiscalías por doce años.

5.º Los fiscales de los mismos Tribunales eclesiásticos que lo hayan sido por quince años.

6.º y último. Los catedráticos de teología y jurisprudencia en las universidades y seminarios centrales por doce años.

Art. 6.º Para dichas dignidades de las iglesias sufragáneas deberán proponerse canónigos de las mismas iglesias que cuenten una cuarta parte menos del tiempo de residencia exigida en los párrafos 1.º y 2.º del artículo precedente: los sugetos de que tratan los otros párrafos del mismo artículo deduciéndose en su respectivo caso una cuarta parte del tiempo de servicio allí indicado.

Art. 7.º Para la propuesta de los canonicatos vacantes en iglesias metropolitanas, se formarán las categorías siguientes:

1.º Los dignidades de iglesias sufragáneas que cuenten dos terceras partes del tiempo de residencia que para cada caso se prefiija en el párrafo 1.º del art. 5.º, y los canónigos de las mismas iglesias sufragáneas adornados de los requisitos indicados en el párrafo 1.º del artículo anterior.

2.º Los párrocos en quienes concurren las cualidades que se expresan en el párrafo 3.º del mismo artículo 5.º con rebaja de una cuarta parte del tiempo de servicio.

3.º Las personas designadas en los demás párrafos del propio artículo con igual rebaja de la cuarta parte del tiempo de servicio que respectivamente se exige. De seis canongías vacantes de todas las iglesias, una se conferirá á cada una de las precedentes categorías proponiéndose para las restantes indistintamente de entre todas ellas, ó á sugetos que careciendo de dichos requisitos hayan prestado servicios importantes en utilidad de la Iglesia ó del Estado, cuyos servicios deberán ser clasificados previamente tales por la Cámara en expediente particular, oyendo al diocesano ó diocesanos á quienes corresponda, pero en todo caso se dará la debida preferencia á los párrocos.

Art. 8.º Las reglas contenidas en el artículo anterior se aplicarán igualmente á las canongías que vaquen en las iglesias sufragáneas, entendiéndose la parte primera del

párrafo 1.º con los canónigos de oficio, y la segunda con los de gracia de las colegiadas, rebajándose el tiempo de servicio ó residencia á los sujetos comprendidos en las otras categorías una tercera parte, en lugar de la cuarta que allí se fija. Además de lo dispuesto en el párrafo anterior, concurrirán también para las propuestas que no estén sujetas á determinada categoría:

1.º Los beneficiados ó capellanes asistentes de las iglesias metropolitanas con seis años de residencia cuando tengan al menos el grado de bachiller en ciencias eclesiásticas ú ocho á falta de este grado.

2.º Los rectores y catedráticos de teología en los seminarios conciliares ó de filosofía de los centrales que con grado mayor académico en dichas ciencias eclesiásticas hayan servido en propiedad por espacio de seis años, ó de ocho en defecto de dicho grado, debiendo tener en todo caso el de bachiller.

3.º Los párrocos de ascenso que cuenten respectivamente este mismo tiempo de servicio, con tal que al menos dos de ellos lo sean en parroquias de ascenso.

4.º Los párrocos de entrada que en cada caso cuenten una mitad mas del tiempo prefijado en el párrafo precedente.

5.º Los alumnos pensionistas á expensas de sus propias familias, de los seminarios centrales que tomen el grado mayor en ciencias eclesiásticas y hayan obtenido constantemente buena nota, entre ellas, tres al menos de sobresalientes.

Art. 9.º Para las propuestas de canongías de gracia de las colegiadas se formarán listas que contengan las cinco categorías de que habla el párrafo segundo del artículo anterior, reduciéndose á una mitad del tiempo de servicio y á dos las notas de sobresaliente que se exige á los alumnos pensionistas de los seminarios centrales, y comprendiéndose en la primera categoría, con las circunstancias allí expresadas, los beneficiados ó capellanes asistentes de las sufragáneas, y en la segunda á los catedráticos de filosofía de los seminarios conciliares.

Art. 10.º De nueve canongías vacantes en las iglesias colegiales, se conferirá una á los comprendidos en las primeras categorías, otra á los de la segunda, otra á los de la tercera, y otra á los de la cuarta y quinta, las cuales para los efectos formarán una sola, siendo libre la propuesta para las demás vacantes entre los comprendidos en todas las expresadas categorías, con la excepción contenida en el último párrafo del art. 7.º

Art. 11.º Para obtener las plazas de be-

neficiado ó capellan asistente de las iglesias metropolitanas, se exigirán alguno de los requisitos siguientes:

1.º Haber sido asistente en iglesia sufragánea cuatro años siendo bachiller en ciencias eclesiásticas, ó seis á falta de esta circunstancia.

2.º Haber sido cura propio en curato urbano por el mismo período respectivamente.

3.º Haber desempeñado en propiedad cátedra de filosofía en seminario conciliar tres años, teniendo grado mayor, ó cinco con solo el de bachiller, ó bien dos, ó cuatro respectivamente si la cátedra fuere de teología, ó haber sido alumno pensionado en seminario central ó conciliar á sus propias expensas, y recibido grado de bachiller en ciencias eclesiásticas, obteniendo buena nota en todos los exámenes públicos anuales.

Art. 12. Las mismas reglas se observarán para las propuestas de vacantes de la misma clase en iglesia sufragánea, reduciendo á dos tercios el tiempo de servicio, y comprendiéndose además á los párrocos de iglesia rural, y los coadjutores que tengan respectivamente cuatro ó seis años de servicio efectivo.

Art. 13. Una plaza de nueve vacantes se dará precisamente á cada categoría, tanto en las iglesias metropolitanas como en las sufragáneas, debiendo proponerse indistintamente para las piezas restantes sujetos de cualquiera categoría, ó asistentes de las colegiales que por sus circunstancias sean acreedores á recompensa.

Art. 14. Los que sirvieren economato por cuatro años efectivos, los coadjutores que cuenten respectivamente tres ó cuatro años de servicio, y los alumnos de los seminarios conciliares que tengan grado de bachiller en filosofía, ó hayan sacado constantemente, durante su carrera, buena nota en los exámenes públicos anuales, podrán ser propuestos para beneficiados ó capellanes asistentes de las iglesias colegiales.

Art. 15. En igualdad de circunstancias disfrutará preferencia:

1.º Los que tengan grado superior académico, y el que cuente alguno de ellos, al que carezca de todos.

2.º Los que por razón de salud ú otra justa causa soliciten traslación á pieza de igual categoría.

3.º Los que en su respectiva categoría y clase cuenten mas tiempo de servicio.

4.º Los que soliciten pieza de inferior categoría á la que obtengan.

Art. 16. Para los efectos del presente de-

creto, los capellanes castrenses que hayan obtenido sus cargos en concurso, tendrán la consideración de curas propios, y únicamente el concepto de ecónomos los que carezcan de aquella circunstancia.

Art. 17. A fin de poder llevar á cabo lo mas pronto posible el Concordato sin perjudicar derechos adquiridos, y conciliando tambien en lo posible los intereses individuales con los del Estado en su caso, segun su espíritu y tendencia, se observarán las siguientes disposiciones transitorias, para el solo efecto de que sirvan de regla en las propuestas:

1.^a Se considerará grado mayor académico el título de lector que hubieren obtenido en su orden los exclaustros y secularizados.

2.^a La enseñanza dada por estos en el concepto expresado, se reputará como tenida en seminario conciliar, y asimismo se contarán á los exclaustros y secularizados como tiempo de servicio efectivo en el ministerio parroquial, los años que hubieren servido en su día los curatos de su respectiva orden.

3.^a Los exclaustros y secularizados que habiendo recibido grado mayor en universidad del Reino, hayan desempeñado en los mismos establecimientos cátedras pertenecientes á su orden, serán tenidos como catedráticos propietarios de universidad.

4.^a El tiempo que los mismos sujetos hayan servido parroquias en economato por no estar debidamente autorizados para obtener curatos, previo concurso de oposicion, se considerará servido en concepto de cura propio.

5.^a A los lectores de filosofía que hayan desempeñado cátedras de esta facultad en institutos de segunda enseñanza del Reino, se les abonará para su clasificación el tiempo que las hubieren desempeñado.

6.^a Los prelados, vicarios generales ó provinciales, y los abades mitrados con título de lector en teología, se considerarán en la categoría de dignidades de iglesia metropolitana, pudiendo ser propuestos por lo tanto para prebendas de esta clase ó de las inferiores, excepto las primeras sillas, segun sus cualidades y merecimientos personales.

7.^a Los prelados locales con el mismo título de lector que despues de la exclaustro ó secularización hayan servido en economato seis años, parroquias de cualquiera clase, ó anteriormente en curatos de su orden, se considerarán comprendidos en la cuarta categoría del art. 10.

8.^a Los abades mitrados de las colegia-

tas que no tienen carácter episcopal, los presidentes y dignidades de las mismas iglesias, los vicarios y cualesquiera otros que ejerzan jurisdicción *vere nullius*, y los capellanes mayores de las capillas Reales, tendrán la categoría de la prebenda á que en el Concordato se asigna una cantidad igual, cuando menos, á la que correspondió á sus beneficios en el quinquenio de 1829 á 1833.

9.^a Los racioneros de las iglesias metropolitanas que en el indicado quinquenio disfrutaron una renta igual al menos á la que se señala por el Concordato á los canónigos de las mismas iglesias, ó que á pesar de no haber gozado aquella renta hayan servido por mas de 16 años en prebendas y curatos, tendrán opción á canongías de iglesias metropolitanas.

10. Los mismos prebendados que no tengan los expresados requisitos, los medio-racioneros de las propias iglesias metropolitanas, los racioneros y medio-racioneros de las sufragáneas, los canónigos de colegiatas y capellanes de Reales capillas en quienes concurra relativamente alguna de las dos circunstancias que se expresan en el artículo anterior, y los dignidades de colegiatas que estén comprendidos en el art. 8.^o, tendrán opción á canonicato de iglesia sufragánea; pero solo á plaza de asistente de metropolitana ó canongía de colegiata aquellos en quienes no concurra ninguna de dichas dos circunstancias, y los racioneros y medio-racioneros de las mismas iglesias colegiales.

11. Los beneficiados ó capellanes de las iglesias metropolitanas, catedrales y colegiales se comprenderán entre los asistentes de la respectiva iglesia, cualquiera que hubiere sido la renta de dicho quinquenio y el tiempo de servicio del interesado.

12. Los poseedores de beneficios fundados en las iglesias parroquiales que real y efectivamente han tenido aneja la cura de almas, se considerarán como curas propios de la categoría inferior inmediata á la del curato. Los que no estén comprendidos en la disposición anterior y los poseedores de capellanías colativas serán considerados solamente como coadjutores. Unos y otros serán atendidos en la provision de asistentes de iglesia sufragánea ó colegiata segun sus servicios y circunstancias.

Art. 18. A fin de no perjudicar derechos adquiridos, respetando además en cuanto sea posible hasta las esperanzas legítimas, segun el espíritu del Concordato, se propondrá exclusivamente, mientras los haya idóneos para las prebendas y beneficios de la respectiva clase de las iglesias metropolita-

nas, sufragáneas y colegiales, los actuales poseedores de las dignidades que se supriman y los demás sujetos comprendidos en las reglas transitorias 8.ª y siguientes del artículo 17; pero colocados estos, las piezas que en cada clase resulten todavía vacantes, se proveerán con entera sujeción á las disposiciones y opción que por este decreto se concede á las diversas clases y carreras, dando entre todas ellas la debida preferencia á los párrocos respecto de las piezas que no correspondan á categoría determinada.

Art. 19. Se dirigirá á los M. RR. Arzobispos y RR. Obispos y cabildos metropolitanos, sufragáneos y colegiales cédula de ruego y encargo, excitándoles á fin de que en las provisiones que les correspondan elijan sujetos adornados de las circunstancias y requisitos que por este decreto se exigen, y observen lo dispuesto en el artículo anterior.

Art. 20. Con el propio objeto se excitará también á los patronos de las iglesias que se conserven á virtud de lo dispuesto en el párrafo 3.º del art. 21 del Concordato.—Dado en Palacio á 25 de julio de 1851. (CL. t. 53, página 495.)

R. D. de 17 octubre de 1851.

(GRAC. Y JUST.) Se mandan publicar en la forma ordinaria, sin perjuicio de las regalías, derechos y facultades de la Corona, las letras apostólicas expedidas en 5 de setiembre del mismo año en que se confirma el Concordato. (CL. t. 54, p. 291.)

R. D. de 17 octubre de 1851.

Que se ejecuten ciertas disposiciones referentes á los diocesanos, catedrales etc.

(GRAC. Y JUST.) «Conformándome etc., y á fin de evitar todo motivo de duda, vengo en declarar y disponer lo siguiente:

Artículo 1.º Con arreglo á lo dispuesto en la bula de Su Santidad de 5 de setiembre último, continuarán los actuales Arzobispos, Obispos y territorios exentos hasta que se determinen y tengan cumplido efecto los nuevos límites y demarcación particular de cada diócesis; pero cesarán desde luego las exenciones de los obispos de Leon y Oviedo, los cuales dependerán en adelante de su respectivo metropolitano, á saber: del de Burgos el primero, y del de Santiago el segundo, con arreglo á lo mandado en los artículos 6.º y 8.º del Concordato.

Art. 2.º También continuarán las iglesias metropolitanas, catedrales y colegiales sin alteración hasta que se organicen con arreglo al Concordato las que deban continuarse, y se reduzcan las demás en la forma

debida á la clase correspondiente, según el mismo Concordato.

Art. 3.º Sin embargo, los M. RR. Arzobispos y RR. Obispos entrarán desde luego en el pleno ejercicio de las funciones y prerrogativas que se les confiere por los arts. 14 y 15 del Concordato, aun aquellos cuyas Sillas se agregan á otras.

Art. 4.º El Ministro de Gracia y Justicia dispondrá lo conveniente para la ejecución de este decreto.—Dado en Palacio á 17 de octubre de 1851. (CL. t. 54, p. 305.)

R. D. de 21 octubre de 1851.

Tribunal de expolios, etc.

(GRAC. Y JUST.) Con motivo de haber sido suprimida por el art. 12 del Concordato la Colecturía general de expolios, vacantes y anualidades y el Tribunal apostólico y Real de la gracia del Excusado, se manda que cesen en sus funciones los ministros de dicho Tribunal, pasando los que posean prebendas ó beneficios á sus respectivas iglesias, y que los negocios judiciales pendientes se continuasen con arreglo á derecho por el M. R. Cardenal Arzobispo de Toledo. (CL. tomo 54, p. 357.)

R. D. de 14 noviembre de 1851.

Residencia de los eclesiásticos: Que no se obtengan cargos incompatibles.

(GRAC. Y JUST.) «Teniendo en consideración lo prevenido en los sagrados cánones, leyes del Reino, y en el art. 19 del Concordato..... vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Los eclesiásticos que obtengan dignidad, canongía, ó beneficio que exijan personal residencia y que por razón de cualquier otro cargo ó comisión están obligados á residir en otra parte, se restituirán á sus iglesias en el preciso término de dos meses, contados desde la fecha del presente decreto para los que estén en la Península y cuatro los que se hallen en el extranjero; á no ser que renuncien sus beneficios, con tal que no sean estos títulos de ordenación.»

Siguen otros cinco artículos en que se dictan disposiciones para evitar que se obtengan en lo sucesivo cargos incompatibles, obligando á los prebendados y beneficiados que obtengan algún otro cargo ó comisión, á que opten entre uno ú otro, siempre en un término de dos meses, ó de cuatro si estuviesen en el extranjero, entendiéndose renunciada la prebenda ó beneficio desde el momento en que empiecen á ejercer el nuevo en-

cargo, en cuyo caso procederá el Ordinario á hacer la declaracion de vacante.

R. O. de 16 noviembre de 1851.

Es sobre que no se proceda á ejecutar Bulas, Breves, etc. sin que se llenen los requisitos prevenidos en las leyes de la Novísima Recopilacion. Se halla inserta en BULAS, y véase tambien el artículo EXEQUATUR.

R. D. de 21 noviembre de 1851.

Es sobre nombramiento de arciprestes y se halla inserta en ARCIPRESTAZGO.

R. D. de 21 noviembre de 1851.

Es sobre clasificacion de las parroquias y se inserta en CURA PÁRROCO.

Otro R. D. de 21 noviembre de 1851.

Arreglo del personal de las catedrales, colegiatas, etc.

Artículo 1.º Se arreglarán y completará conforme á lo dispuesto en el último Concordato, sin esperar á que se realice la nueva division de diócesis, que deberá verificarse en la forma convenida lo mas pronto posible, el personal de las iglesias metropolitanas y sufragáneas que conserva el mismo Concordato.

Art. 2.º El personal de la iglesia catedral de Valladolid será el que le señala el Concordato en concepto de metropolitana; pero no será ni titulará tal, esto no obstante, hasta que se erija canónicamente.

Art. 3.º Tambien se organizarán desde luego en cuanto sea dable, conforme al Concordato, las iglesias catedrales que deben quedar reducidas á colegiatas.

Art. 4.º Asimismo se organizarán en la manera que el Concordato previene las colegiatas que han de subsistir con arreglo al artículo 24 del mismo.

Art. 5.º Se procederá al arreglo prevenido en los artículos anteriores por el orden siguiente:

- 1.º Iglesias metropolitanas.
- 2.º Sufragáneas que se conservan.
- 3.º Colegiatas de capital de provincia.
- 4.º Iglesias sufragáneas que han de reducirse á colegiata.
- 5.º Las demás iglesias colegiales.

Art. 6.º La iglesia magistral de Alcalá de Henares y la Colegiata de Sacromonte de Granada se organizarán con toda preferencia, y sus prebendas se proveeran por oposicion en la forma que se determinará por una disposicion especial.

Art. 7.º Los sugetos que sean nombrados para estas prebendas se obligaran á dar

la enseñanza en la facultad ó ciencia á que hubieren hecho los ejercicios de oposicion, con arreglo á lo que en la forma correspondiente se determine en su dia.

Art. 8.º En los nombramientos para piezas de todas clases de las colegiatas de Alicante y Logroño se pondrá cláusula, en cuya virtud queden sujetos los agraciados á trasladarse á Orihuela y Calahorra para componer sus iglesias colegiales, cuando á consecuencia de lo prevenido en el Concordato hayan de trasladarse estas Sillas episcopales con sus cabildos catedrales á dichas capitales de Alicante y Logroño. Los que sean nombrados para piezas de la colegiata de Victoria no adquirirán derecho á las de la misma denominacion cuando esta iglesia se arregle en concepto de catedral, erigida que sea canónicamente la Silla episcopal.

Art. 9.º Los M. RR. Arzobispo de Toledo, Sevilla y Granada, oyendo previamente á sus respectivos cabildos, me propondrán á la mayor brevedad posible lo que estimen oportuno, á fin de organizar las capillas que se enumeran en el párrafo 4.º del art. 24 del Concordato de la manera mas conveniente, sin perjudicar al esplendor con que debe continuar dándose el culto divino en las mismas capillás; en la inteligencia de que el dignidad de capellan mayor ha de ser su jefe inmediato, estando por consiguiente á sus órdenes los capellanes; pero sin formar cuerpo independiente de la iglesia metropolitana, procurando se utilicen en cuanto sea posible para el servicio del culto en esta y en la capilla los ministros y dependientes de la misma iglesia metropolitana, y que lo presten tambien en ella los capellanes particulares de cada capilla.

Art. 10.º El Ministro de Gracia y Justicia dará las disposiciones convenientes para la ejecucion del presente decreto, y al intento me propondrá sin dilacion los medios convenientes de realizar prontamente el arreglo del personal de las iglesias.—Dado en Palacio á 21 de noviembre de 1851. (*CL. t. 54, p. 443.*)

Otro R. D. de 21 noviembre de 1851.

Sobre organizacion de las iglesias catedrales y colegiatas: condicion en que deben quedar los dignidades, canónigos y demás eclesiásticos.

Artículo 1.º Los dignidades y canónigos jubilados con arreglo á los estatutos de la iglesia respectiva gozarán de todos los derechos, consideraciones y dotacion que, segun los mismos estatutos, les correspondan, pero no serán contados en el número de capitu-

lares para fijar el de vacantes en la respectiva clase.

Art. 2.º En las iglesias en que la dignidad de dean no sea la primera silla *post pontificalem*, el actual poseedor de esta última prebenda pasará al deanato, aunque la presidencia del cabildo no estuviere aneja á su dignidad. El dean será nombrado para otra dignidad de la misma iglesia ó de otra de igual clase.

Art. 3.º Los dignidades cuyos títulos no conserva el Concordato pasarán por el orden de sus respectivas sillas á ocupar las dignidades vacantes que continúan ó establece de nuevo el mismo Concordato.

Art. 4.º El orden de sillas y de procedencia entre los dignidades de cada iglesia será el siguiente: arcipreste, arcediano, chantre, maestrescuela, tesorero, capellan mayor de la Real capilla, de la Muzárabe en la de Toledo, de los Reyes Católicos en la de Granada, de San Fernando en la de Sevilla, y la de abad de Covadonga en la sufragánea de Oviedo.

Art. 5.º Los deanes ó primeras sillas de las iglesias catedrales, reducidas á colegiales por el Concordato, que no quieran pasar á otras en su clase respectiva, continuarán en las primeras con su título y dotacion actual, si esta fuere superior á la que establece el Concordato para los abades de las iglesias colegiales.

Art. 6.º En caso de no estar vacante alguna de las chantrías reservadas á Su Santidad, continuará en ella su actual poseedor, y se proveerá por la Santa Sede luego que vacare por cualquier causa canónica, inclusa la promocion ó traslacion.

Art. 7.º Si en las iglesias en que se reserva canongía á la provision de Su Santidad hubiere alguna dignidad provista por la Santa Sede, continuará su actual poseedor con el mismo título y silla que hoy ocupa, aunque sea de las no conservadas, pero se considerará como canónigo para fijar el número de capitulares.

Art. 8.º El Ministro de Gracia y Justicia pasará al M. R. Nuncio de Su Santidad nota expresiva de los sugetos comprendidos en los casos de los artículos precedentes y de los demás eclesiásticos que en la actualidad obtienen prebendas ó beneficios de la provision de la Santa Sede con arreglo al Concordato de 1753, á fin de que pueda proveer Su Santidad desde luego las prebendas actualmente reservadas que resulten vacantes.

Art. 9.º Los dignidades de títulos no conservados que no opten á otra prebenda, conservarán sus sillas y actual denominacion

en la misma iglesia; pero serán contados únicamente como canónigos para el solo efecto de arreglar el personal de capitulares en conformidad al Concordato, debiendo tener por consiguiente igual voz y voto que los demás canónigos, aunque por los estatutos no le hubieren tenido hasta aquí. De la misma manera los racioneros y medio racioneros que no sean promovidos continuarán en la misma iglesia con los derechos y dotacion de que actualmente disfrutan; pero dejarán de proveerse tantas plazas de beneficiados ó capellanes asistentes cuantos sean los de aquella clase que continúen en sus actuales prebendas.

Art. 10. Los dignidades á quienes se confiera otra prebenda de la misma clase y categoría con el fin de arreglar el personal de las iglesias á lo que el Concordato previene, no satisfarán la mesada de que trata el art. 37 del Concordato, ni tampoco se les causará gasto de ninguna otra especie, expidiéndose todo de oficio. Por lo tanto los Ordinarios conferirán la colacion y canónica institucion, y se pondrá en posesion á estos sugetos con solo la Real orden de nombramiento que comunicará á los diocesanos el Ministro de Gracia y Justicia.

Art. 11. Los canónigos de oficio de las iglesias catedrales que han de quedar reducidas á colegiatas, serán colocados con preferencia en dignidades de iglesia de igual clase á la en que actualmente sirven.

Art. 12. Serán atendidos tambien con preferencia los provistos por los prelados diocesanos, y en su caso, por los cabildos que no han podido entrar en posesion de las prebendas, á virtud de las disposiciones que suspendieron su provision.

Art. 13. Las dignidades, canongías y beneficios de la iglesia catedral de Mallorca se proveerán en la misma forma que las demás del Reino, y por lo tanto podrán ser nombrados los que tengan las cualidades personales que para cada clase se requieren, aunque no sean naturales de dicha diócesi. Los naturales de ella podrán á su vez obtener de la misma manera prebendas y beneficios en todas las iglesias del Reino.

Art. 14. En las iglesias colegiales se observará tambien respecto de los canónigos que por su edad y circunstancias no quieran pasar á otras iglesias de esta misma clase lo dispuesto en el art. 5.º para los dignidades.

Art. 15. Se proveerán desde luego en la forma que previene el Concordato las canongías de oficio, vacantes actualmente en las iglesias metropolitanas y catedrales que

conservan este concepto. Las vacantes que ocurran en adelante se proveerán sin necesidad de obtener previamente mi Real licencia para ello; pero los diocesanos darán cuenta de la vacante, y remitirán en su día al Ministro de Gracia y Justicia dos ejemplares del edicto convocatorio. Estos edictos se expedirán á nombre del Prelado y de su cabildo, firmando aquel y el presidente y secretario del último, remitiéndose á todas las diócesis para su publicacion en ellas.

Art. 16. En el caso de que el llamamiento de tantas oposiciones á la vez hiciese poco numerosa la concurrencia de opositores, los M. RR. Arzobispos, R. Obispos y Gobernadores eclesiásticos teniendo en consideracion el mejor servicio de la iglesia y las circunstancias de cada una, determinarán, oyendo previamente á los cabildos, lo que á su juicio sea mas conveniente, ya general, ya limitadamente en vista del número de firmantes que resulte para cada canongía de oficio, consultándose caso necesario, y dándose siempre conocimiento de lo que determinaren.

Art. 17. Se declara corresponder á los patronos de las colegiatas que se conserven, en conformidad á lo que dispone el párrafo 3.º del art. 24 del Concordato, el derecho de presentar en el tiempo y forma prevenido por derecho para las piezas eclesiásticas de toda clase de las mismas iglesias en los términos que anteriormente le tuvieron.

Art. 18. Los capellanes ó beneficiados de las iglesias catedrales y colegiales nombrados por patronos particulares, y sostenidos con bienes de la fundacion que están actualmente en posesion, continuarán como hasta aquí sin hacerse novedad alguna. Cuando hecho el arreglo de una iglesia, el número de los actuales capellanes ó beneficiados asistentes sea todavía superior al designado en el Concordato, continuarán todos hasta que se reduzca; pero percibirán la dotacion individual que hoy disfrutan sin derecho á la superior que el mismo Concordato señala, hasta que el importe total de la nómina de los eclesiásticos de esta clase quede limitado á la cantidad que costaria la misma clase segun el Concordato, cuya cantidad ha de satisfacerse en todo caso y distribuirse sueldo á libra entre los interesados.

Art. 19. Los actuales músicos de toda clase, que sean eclesiásticos, se comprenderán entre los capellanes ó beneficiados de las iglesias metropolitanas, catedrales, y colegiales, sin perjuicio de conservar cualquiera otra condicion superior que pueda corres-

ponder á alguno de ellos. El número de plazas de cada clase que ha de haber en lo sucesivo se fijará oyendo al diocesano y al cabildo, y las vacantes se proveerán, previa oposicion alternativamente, por mi, por los prelados y cabildos.

Art. 20. Los que ejerzan la cura de almas en dichas iglesias, cualquiera que sea su título, denominacion ó concepto, se considerarán comprendidos en el clero parroquial, y no entre los beneficiados de las iglesias para el efecto de arreglar el personal de las mismas iglesias, aunque hayan figurado hasta aquí en las nóminas del clero general diocesano, entendiéndose todo sin perjuicio del carácter, consideraciones y derechos de los actuales poseedores.

Art. 21. Los eclesiásticos que sirvan plazas de sacristan ú otros cargos análogos, los otros ministros y dependientes, aunque sean eclesiásticos, no se comprenderán entre los capellanes ó beneficiados, debiendo figurar sus dotaciones en el presupuesto para gastos del culto.

Art. 22. Verificado el primer arreglo del personal de cada iglesia, la alternativa que establece el Concordato para la provision de prebendas principiará por el turno de la Corona y seguirá el del prelado diocesano.

Art. 23. A fin de quitar todo motivo de duda acerca de la inteligencia de la última parte del párrafo 2.º, art. 18 del Concordato, relativa á la provision de los beneficios ó capellanías de las iglesias metropolitanas, catedrales y colegiales se declara pertenecer aquella á mi Real Corona, á los prelados diocesanos con sus cabildos por rigurosa alternativa entre sí, luego que tenga cumplido efecto el primer arreglo del personal de cada iglesia, siguiéndose en los turnos el orden que se establece en el artículo precedente. Para la provision de los beneficios que correspondan al Prelado con su cabildo turnarán estos entre sí principiando por el primero.

Art. 24. Los diocesanos me notificarán, por medio del Consejo de la Cámara, las personas que ellos, sus cabildos y los patronos particulares nombren para toda clase de beneficios y cargos de las respectivas iglesias.

Art. 25. El Ministro de Gracia y Justicia dictará las disposiciones convenientes para la ejecucion del presente decreto.—Dado en Palacio á 21 de noviembre de 1851. (*CL. t. 54, p. 444.*)

R. D. de 29 noviembre de 1851.

Dotaciones de prelados, canónigos, curas, etc.
(GRAC. Y JUST.) «Para que tenga cum-

lido efecto lo dispuesto en los arts. 31, 32 y 33 del Concordato recientemente celebrado con la Santa Sede, conformándose, etc., vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º A contar desde el día 17 de octubre de este año, fecha de la ley relativa á la publicacion y ejecucion del Concordato, los prelados diocesanos, cuyas sillas conservan, percibirán la dotacion que bajo todos conceptos les corresponda, segun el mismo Concordato: los demás prelados continuarán percibiendo la asignacion que disfrutaban en la actualidad.

Art. 2.º Desde la misma fecha se satisfará tambien, por cuenta del presupuesto eclesiástico, al M. R. Patriarca de las Indias la dotacion que determina el Concordato, dejando de percibir por consiguiente la pension que disfruta y el sueldo que como vicario general castrense le corresponde.

Art. 3.º Los dignidades, canónigos y beneficiados de las iglesias metropolitanas, sufragáneas y colegiales, percibirán la dotacion que respectivamente les corresponda segun el Concordato, desde el día en que el personal de cada iglesia quede constituido con arreglo á lo que el mismo Concordato dispone, debiendo disfrutar en el ínterin los poseedores de toda clase de beneficios de dichas iglesias, la dotacion que actualmente tiene asignada cada pieza.

Art. 4.º Hasta que tenga cumplido efecto en cada diócesis el plan parroquial que en cumplimiento á lo dispuesto en el Concordato debe formarse, no se hará novedad en las dotaciones que en el día están consignadas al clero parroquial urbano, al rural de primera clase y al benefical de todas ellas.

Art. 5.º De la misma manera los vicarios ó tenientes perpétuos y los curas propios en parroquias rurales de segunda clase, cuya renta en el quinquenio de 1829 á 1833, inclusa la parte correspondiente al disfrute de los huertos ó heredades conocidos con la denominacion de iglesarios, mansos ú otras, no excedió de 2,000 rs., percibirán 2,200, mínimo que para esta clase señala el artículo 33 del Concordato desde el día en que empieza á regir en la iglesia catedral de cada diócesis lo dispuesto en la primera parte del art. 3.º del presente decreto, sin perjuicio de disfrutar además con arreglo al párrafo 3.º de dicho art. 33 del Concordato los expresados huertos ó heredades, y de que se aumente convenientemente aquella asignacion, si estos hubiesen sido enajenados, computándose el valor de ellos en renta. Los ecónomos en las mismas iglesias percibirán 2,000 reales, mínimo que en dicho art. 33 se se-

ñala á esta clase. El máximo para los ecónomos de las demás parroquias se reducirá al de 4,000 rs. que señala el propio art. 33 del Concordato.

Art. 6.º Lo dispuesto en el párrafo 2.º, art. 37 del Concordato, se practicará respecto de las piezas que vagen en las iglesias catedrales y colegiales desde el día en que el personal de cada una de ellas quede arreglado en conformidad á lo que el mismo Concordato previene.

Art. 7.º Se aplicará desde luego al fondo de reserva establecido en dicho art. 37 la parte líquida de la dotacion de los curatos, tenencias y vicarías perpétuas que hayan vacado ó vacaren desde la publicacion del Concordato como ley del Estado.

Art. 8.º A todos los que desde la misma fecha hayan tomado ó tomen la colacion y canónica institucion de prebendas, curatos y otros beneficios, se descontará una mesada de su respectiva dotacion anual para el fondo de reserva en los términos que previene el citado art. 37 del Concordato.

Art. 9.º Las Reales cédulas de presentacion para prebendas y beneficios que se expidan por la Cancillería del Ministerio de Gracia y Justicia, no causarán en adelante á los interesados otros gastos mas que los de papel sellado y los llamados de expedicion, sello y toma de razon.

Art. 10. Se recomendarán muy eficazmente á los diocesanos, que destinen del fondo de reserva para la reparacion extraordinaria de templos, la mayor cantidad posible, sin perjuicio de que el Gobierno contribuya convenientemente por su parte con arreglo al final del art. 36 del Concordato, y en este último caso los mismos diocesanos instruirán previamente los oportunos expedientes, y obtendrán la Real aprobacion en los casos que proceda con arreglo al R. D. de 19 de setiembre último.

Art. 11. Debiendo estar los fondos de reserva á disposicion de los Ordinarios para atender á los gastos extraordinarios é imprevisos de las iglesias y del clero, tocará á los mismos Ordinarios expedir los libramientos ú orden de pago con expresion del objeto á que se destine, á fin de que sirvan á los administradores para justificar debidamente sus cuentas.

Art. 12. Los administradores llevarán cuenta separada del fondo de reserva y la rendirán á los diocesanos. Estos, despues de examinadas y aprobadas por ellos las cuentas, dispondrán su remision á la Direccion de contabilidad del culto y clero para su conocimiento.

Art. 13. Los actuales presupuestos de los seminarios conciliares y los referentes á los gastos de la administración diocesana del culto catedral, colegial y parroquial continuarán rigiendo hasta la fecha de la Real orden en que se fije la cantidad que corresponda á cada establecimiento, prelado ó iglesia con arreglo á lo dispuesto en los arts. 34 y 35 del Concordato.

Art. 14. El Ministro de Gracia y Justicia dictará las disposiciones convenientes para la ejecución del presente decreto.—Dado en Palacio á 29 de noviembre de 1851.» (CL. tomo 54, p. 480).

R. O. de 14 diciembre de 1851.

Sobre comunidades religiosas.

(GRAC. Y JUST.) «Habiéndose formado ya, á virtud de lo dispuesto en la Real orden circular de 14 de junio último, un considerable número de expedientes para poner en ejecución en su letra y espíritu el art. 30 del Concordato, relativo á las comunidades de religiosas, S. M. la Reina (Q. D. G.) se ha servido mandar:

1.º Que se sometan desde luego á su Real aprobación las propuestas de los diocesanos, existentes ya en el Ministerio de mi cargo, y que de las demás se le dé cuenta á medida que se reciban los expedientes en la propia secretaría del despacho, y se hallen en estado de resolución definitiva.

2.º Que la resolución que recaiga en cada expediente se publique en la *Gaceta*, expresando el número máximo de religiosas que ha de tener cada comunidad, y los ejercicios de enseñanza ó caridad que se establezcan en las casas á que se refiere el párrafo 3.º del citado artículo del Concordato.

3.º Que publicada en la *Gaceta* la Real resolución, dicten los diocesanos las disposiciones convenientes para que tengan cumplido efecto los ejercicios expresados de enseñanza y caridad, á cuyo fin les auxiliarán en cuanto fuere necesario los Gobernadores de las provincias.

4.º Que desde la misma fecha se admitan novicias, y se dé la profesión á las que hubieren cumplido el noviciado en la respectiva comunidad hasta completar el máximo establecido, todo con entera sujeción á los estatutos y regla de cada casa, y observándose estrictamente lo que para asegurar la subsistencia de las religiosas dispone el párrafo último del mismo art. 30 del Concordato.

5.º Que remitan los diocesanos en los primeros quince días de enero y julio de cada año á esta Secretaría del despacho nota nominal y circunstanciada de las novicias que

en el semestre anterior hubieren sido admitidas en cada comunidad y de las profesas en el propio período, con expresión de la cantidad y calidad del dote.

6.º Que los diocesanos, tomando las noticias y datos convenientes acerca de las necesidades de cada casa que no esté en posesión de sus bienes, propongan la cantidad que deba señalarse con el carácter de perpetuidad para atender la misma comunidad á los gastos del culto y otros generales, con arreglo á lo dispuesto en el art. 35 del Concordato, continuando en el interin la consignación que para dichos objetos disfrutaban en la actualidad.—Lo que de Real orden etc.—Madrid 14 de diciembre de 1851.» (CL. tomo 54, p. 535).

R. O. de 16 diciembre de 1851.

Presupuestos de las iglesias: Gastos de culto etc.

(GRAC. Y JUST.) «..... Deseando vivamente S. M. la Reina hacer la designación con entero conocimiento de las necesidades de cada iglesia..... se ha servido mandar que, consultando V. á su cabildo, forme á la mayor brevedad y remita á este Ministerio el presupuesto detallado para esa iglesia con arreglo á lo que corresponde por el Concordato, en inteligencia de que además de los gastos que por su propia índole pertenecen esencialmente al culto ha de comprender también en su caso: 1.º Los inherentes al cabildo; 2.º La dotación de los Ministros y demás sirvientes del mismo cabildo ó iglesia, que no deban figurar en el presupuesto del personal entre los capitulares ni capellanes ó beneficiados asistentes; 3.º La cantidad conveniente para la conservación y reparación ordinaria del templo y sus anexidades; 4.º La designada al lavatorio de pobres el Jueves Santo, y de la consagración y conducción de óleos.

Es también la voluntad de S. M. me manifieste V. al propio tiempo si existen algunas memorias administradas por el cabildo, ó fundaciones de esta clase en poder de particulares, y unas y otras destinadas en todo ó en parte á la celebración de festividades en la iglesia catedral, producto y distribución de sus fondos, y si estos entran actualmente en la masa común para cubrir las cargas del presupuesto de esa diócesis.

Por último, me encarga S. M. prevenga á V. que en el caso de existir razones especiales para aplicar la excepción prevista por el art. 36 del Concordato, las manifieste V. con la debida extensión y justificación, á fin de que en su vista pueda determinar la Reina lo que estime mas conveniente.

Para que pueda S. M. señalar tambien con arreglo al art. 34 del Concordato la cantidad conveniente que pueda abonarse á V. para gastos de administracion diocesana y extraordinarios de visita, me manifestará V. lo que sobre el particular se le ofrezca y parezca, teniendo entendido que en dichos gastos han de comprenderse los ordinarios de conservacion del palacio ó palacios que correspondan á la mitra: igualmente manifestará V. al propio tiempo, si en la Secretaria de Cámara y en la santa visita se exigen ó no derechos, remitiendo en su caso nota expresiva de ellos, con un cálculo aproximado de su rendimiento anual. Con el mismo fin me remitirá V. tambien copia del arancel de los derechos que por todos conceptos se exijan en los Tribunales eclesiásticos y Vicarías foráneas de cada diócesi. Lo que de Real órden etc.—Madrid 16 de diciembre de 1851. (CL. t. 54, p. 549.)

R. O. de 17 diciembre de 1851.

(GRAC. Y JUST.) «..... Los M. RR. Arzobispos, RR. Obispos y vicarios capitulares, sede vacante, remitirán anualmente en el mes de enero al Ministerio de Gracia y Justicia una nota específica y determinada de los eclesiásticos que en sus respectivas diócesis consideren dignos por sus virtudes y méritos de ser promovidos á prelacias, dignidades, canonicatos y beneficios, con arreglo al decreto de 25 de julio último. (CL. tomo 54, p. 554.)

R. O. de 24 diciembre de 1851.

Sobre exclaustacion de religiosas.

(GRAC. Y JUST.) Extracto. — Habiéndose solicitado aclaracion sobre si se hallan ó no vigentes los arts. 12 y 13 de la ley de 29 de julio de 1837, se resuelve «se prevenga al R. Obispo de Jaen, y se comuniqué tambien por circular á todos los demás diocesanos de la Península é islas adyacentes, que desde la publicacion de la ley de 17 de octubre último, comprensiva del Concordato celebrado en este año con Su Santidad, y en virtud de los arts. 43 y 45 del mismo, se hallan derogadas las disposiciones de los arts. 12 y 13 de la citada ley de 29 de julio de 1837; y que por tanto la exclaustacion de las religiosas profesas no puede hacerse sino en la forma canónica legal que siempre ha reconocido la Iglesia. (CL. t. 54, p. 694.)

R. O. de 30 enero de 1852.

Es sobre provision de curatos, en cuya palabra se inserta.

Tomo III.

R. D. de 27 febrero de 1852.

Inspeccion de escuelas.

(GRAC. Y JUST.) Dispone teniendo en cuenta los arts. 2.º y 3.º del Concordato que los prelados diocesanos tengan cada uno en su respectiva diócesi la superior direccion é inspeccion en la enseñanza de niñas que se dé en los conventos de religiosas, sin perjuicio de la inspeccion que corresponda al Gobierno, y de resolver lo que estime oportuno y procedente. (CL. t. 55, p. 245.)

R. D. de 23 marzo de 1852.

Visitas de escuelas por los prelados y arciprestes.

(GRAC. Y JUST.) Mandando, para que tenga efecto el art. 2.º del Concordato que se dirijan Reales cédulas de ruego y encargo á los diocesanos para que al visitar sus diócesis lo hagan á las escuelas de instruccion primaria, noticiando al Gobierno las faltas ó defectos que notaren, si los hubiere á su juicio, sin tomar resolucion alguna por su parte: y concediendo igual derecho en sus partidos á los arciprestes quienes pondrán en conocimiento de su prelado ordinario las observaciones que estimen conducentes. (CL. t. 55, p. 524.)

R. D. de 28 marzo de 1852.

Descuento de mesada: prohibicion de otros.

(GRAC. Y JUST.) Teniendo en cuenta los arts. 18 y 37 del Concordato, se mandan cesar las llamadas pruebas de estatutos y que no se exija á los nombrados para prebendas, canongias y beneficios mas descuento que el de la mesada que previene dicho art. 37, cesando la exaccion de derechos, agasajos y cualquiera otro gasto. (CL. t. 55, p. 542.)

R. D. de 16 abril de 1852.

Por este decreto se crean en la iglesia metropolitana de Zaragoza cuatro prebendas mas sobre las que habia determinado el Concordato.

R. D. de 30 abril de 1852.

Declarando derogada la ley de capellanías; se halla en CAPELLANÍAS.

Otro R. D. de 30 abril de 1852.

Personal de las iglesias: dotacion....

(GRAC. Y JUST.) «Considerando conveniente fijar con alguna antelacion el dia en que el personal de las iglesias metropolitanas, sufragáneas y colegiales deba considerarse definitivamente arreglado á lo que acerca del particular ordenan el Concordato y otras disposiciones dictadas para su debida ejecucion, de comun acuerdo de ambas po-

testades, y conformándome con lo que me ha propuesto el Ministro de Gracia y Justicia, vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Se considerará constituido y terminado definitivamente el primer arreglo del personal de todas clases de las iglesias metropolitanas, inclusa la de Valladolid, aunque no tome el título de tal hasta que tenga efecto la erección canónica, el día 1.º de julio próximo.

Art. 2.º De la mism manera se fija el día 1.º de octubre de este año para las iglesias sufragáneas, tanto las que conservan como las que, según el Concordato, pierden esta consideración, y para las colegiatas que deben subsistir.

Art. 3.º A contar de dichas épocas se satisfará á los poseedores de las piezas eclesiásticas la dotación que consigna el Concordato, siempre que esta sea superior á la que actualmente esté señalada á dichas piezas por las disposiciones vigentes, la cual continuarán percibiendo, caso de exceder estas dotaciones á las primeras.

Art. 4.º Las colegiatas que no conserva el Concordato, se considerarán reducidas á parroquias mayores, con arreglo al mismo Concordato, desde el día en que se estime constituido el personal de la iglesia metropolitana ó sufragánea, á cuyo territorio corresponda la colegiata, ó en el que este enclavada si fuese *nullius*.

Art. 5.º Sin embargo, conforme á mi R. D. de 17 de octubre último, continuarán ejerciendo la jurisdicción exenta los encargados de ella actualmente hasta que tenga efecto la nueva división de diócesis.

Art. 6.º Hasta esta misma época no se hará tampoco novedad respecto de las facultades y derechos que corresponden á los cabildos catedrales que se reducen á colegiatas, no obstante que el número y dotación de sus capitulares y beneficiados sean los que señala el Concordato para las iglesias de esta última clase.

Art. 7.º Desde el 1.º de julio y octubre respectivamente percibirán los párrocos de parroquias rurales y los ecónomos de todas clases la dotación que respectivamente les corresponda, con arreglo á lo dispuesto en mi R. D. de 21 de noviembre último; pero continuarán percibiendo su dotación actual los párrocos de las iglesias rurales, cuya clasificación no esté hecha aun, á condición de descontárseles lo que hubiesen percibido de mas en las mesadas que se les hayan de satisfacer luego que la clasificación tenga efecto, señalando el diocesano, según las circunstancias de cada caso, la parte alicuota que

estime conveniente se deduzca en cada mesada.

Art. 8.º Todas las vacantes que ocurran desde las épocas expresadas, aunque sea por renuncia ó no haberse posesionado en tiempo los nombrados por mí, en el primer arreglo general del personal, se proveerán en la forma prevenida por el Concordato y en la declaración contenida en mi R. D. de 21 de noviembre último; llevándose turno separado de las dignidades y de las canongías.

Art. 9.º El Ministro de Gracia y Justicia dará las órdenes convenientes para la ejecución del presente decreto. Dado en Aranjuez á 30 de abril de 1852. (CL. t. 55, p. 658.)

R. D. de 30 abril de 1852.

Ordenes sagradas: patrimonios etc.

(GRAC. Y JUST.) «Teniendo presente lo dispuesto en los arts. 4.º, 43 y 45 del último Concordato... de acuerdo con el M. R. Nuncio apostólico en esta corte, vengo en declarar lo siguiente:

Artículo 1.º Los diocesanos quedan en plena libertad para promover á las sagradas órdenes, á título de patrimonio, á las personas que lo soliciten y acrediten los requisitos que exigen los sagrados cánones, y en su conformidad las siguientes reglas.

Art. 2.º La renta anual en que deba consistir dicho patrimonio será la que pretijan las respectivas sinodales, no bajando de cien ducados en ninguna diócesis.

Art. 3.º Se constituirá la expresada renta en censos, fincas ó efectos públicos de la Deuda consolidada.

Art. 4.º En los expedientes respectivos se acreditará la pertenencia de los bienes, y que dicha renta no perjudica á la legítima de los hijos del que constituye el patrimonio.

Art. 5.º El que intente ordenarse á título de patrimonio, justificará en el mismo expediente estar matriculado en cualquiera de las asignaturas de la carrera eclesiástica en universidad ó en seminario, en clase de alumno interno ó externo, y tener la edad y calidades prescritas por los sagrados cánones.

Art. 6.º A todo el que se ordene á título de patrimonio, se le abscribirá precisamente á una parroquia para prestar servicio en ella, bajo la dependencia del párroco, y se obligará además el interesado á prestar su auxilio en donde el diocesano lo estime conveniente, por exigirlo así la necesidad ó el bien de la Iglesia.

Art. 7.º El Ministro de Gracia y Justicia comunicará las órdenes correspondientes para su cumplimiento.—Dado en Aranjuez á 30 de abril de 1852. (CL. t. 55, p. 657.)

R. O. de 30 abril de 1852.

Es sobre nombramiento de coadjutores *ad nutum* por hallarse imposibilitado el párroco. Se halla en CURA PÁRROCO.

R. D. de 14 mayo de 1852.

Posesion de prebendas etc.

(GRAC. Y JUST.) Habiendo mediado contestaciones entre el R. Obispo de Segovia y su cabildo catedral acerca de la forma con que despues de la publicacion del nuevo Concordato debe darse la posesion á los sugetos nombrados por S. M. para las prebendas de la misma iglesia se manda por este decreto lo siguiente:

«Artículo 1.º Los nombrados por mí para prebendas y beneficios de todas clases, presentarán á los Ordinarios dentro del término prefijado mis Reales cédulas, que al intento se les expiden por la Cancillería del Ministerio de Gracia y Justicia.

Art. 2.º En vista de estas cédulas y en cumplimiento de lo que en las mismas se expresa, instruirán los Ordinarios el correspondiente expediente, y expedirán el título de colacion y canónica institucion, mandando dar la posesion á quien corresponda.

Art. 3.º El nombrado para alguna prebenda presentará al cabildo el título de colacion y mandamiento de posesion que libraré el diocesano, y el cabildo procederá en su consecuencia á dar al interesado lisa y llanamente, sin exigirle otro juramento mas que el de cumplir las obligaciones anejas á su oficio en lo que no se oponga al Concordato, la posesion corporal de la prebenda.»—Dado en Aranjuez á 14 de mayo de 1852. (*CL. tomo 56, p. 33.*)

R. O. de 16 mayo de 1852

Número de beneficios anejos á oficios ó cargos.

(GRAC. Y JUST.) S. M. se ha servido, de acuerdo con el M. R. Nuncio apostólico convenir y declarar lo siguiente:

Artículo 1.º En cada una de las iglesias metropolitanas habrá seis beneficios anejos á los oficios de tenor, contra-alto, sochantre, salmista, organista y maestro de capilla. En las sufragáneas serán cuatro, siendo la designacion de oficios á voluntad de los preladados. En las colegiadas solo habrá beneficiado, sochantre y organista.

Art. 2.º Si atendidas las particulares circunstancias se estimare necesario aumentar este número para el mejor servicio y mayor esplendor del culto en alguna iglesia, se consignará sobre el respectivo presupuesto de gastos del culto, la dotacion que cada uno

ha de disfrutar, teniendo presente esta circunstancia al fijar aquel.

Art. 3.º De la misma manera figurarán en el propio presupuesto las dotaciones de cualquiera otra clase de ministros y dependientes de las iglesias y cabildos no comprendidos en el presupuesto del personal.

Art. 4.º Las piezas de que trata el artículo 1.º, y las de la misma ó análoga clase que se aumenten á virtud de lo dispuesto en el art. 2.º, se proveerán previa oposicion, verificándose esta en el modo y forma que determinen los preladados oyendo á los cabildos.

Art. 5.º Los beneficios destinados á los cargos ú oficios de que trata el art. 1.º se proveerán con arreglo al Concordato y disposiciones vigentes, tocando exclusivamente á los M. RR. Arzobispos y Rdos. Obispos y cabildos en conformidad á lo dispuesto en el párrafo 4.º del art. 14 del Concordato, el nombramiento de los demás de esta clase y de otros ministros y dependientes, cuyas dotaciones se consignan en el presupuesto de gastos del culto.

Art. 6.º Hecha la oposicion para proveer los beneficios de real presentacion, remitirán los diocesanos al Ministerio de mi cargo, nota de los opositores y la censura de los jueces, indicando los sugetos que merezcan ser preferidos, atendidas todas las circunstancias á fin de que S. M. pueda nombrar de entre los aprobados á quien estime mas conveniente. Lo que de Real orden etc.—Real sitio de Aranjuez 16 de mayo de 1852. (*CL. t. 56, pág. 67.*)

R. D. de 21 mayo de 1852.

Es sobre el art. 28 del Concordato acerca del régimen y enseñanza de los seminarios. V. SEMINARIOS.

R. O. de 21 junio de 1852.

Es sobre curatos de patronato laical. Se halla en CURA PÁRROCO.

R. Céd. de 11 julio de 1852.

Encargando se determinen las atribuciones etc. de los beneficiados.

La Reina. Muy reverendos en Cristo padres Arzobispos, reverendos Obispos y vicarios capitulares *sede vacante* de las iglesias de esta Monarquía. Ya sabeis que por el último Concordato celebrado entre la Santa Sede y mi Corona, además de los dignidades y canónigos, que componen exclusivamente el cabildo de cada iglesia, ha de haber en todas las catedrales y colegiadas el número de beneficiados ó capellanes asistentes que á cada cual señala el mismo Concordato: que

todos han de ser presbíteros ú ordenarse de tales precisamente dentro del año de la toma de posesion de sus beneficios, bajo las penas canónicas, segun lo dispuesto por Su Santidad, aunque para el mejor servicio de las respectivas iglesias se hallen divididos en presbiterales, diaconales y subdiaconales; y que por varios mis decretos he empezado ya á hacer uso del derecho de presentacion á dichos beneficios en casos pertenecientes á mi Corona, con arreglo al Concordato y á otro mi decreto librado de acuerdo con el M. R. Nuncio de Su Santidad en esta córte en 25 de julio, inserto en cédula de 31 de diciembre próximos anteriores, para la primera provision de ellos y de las demas piezas eclesiásticas. Y ahora sabed: que siendo tan urgente la necesidad de continuarla hasta completar en todas las iglesias el respectivo número de beneficiados ó capellanes, que por el Concordato se conceptuó preciso para su planta, y que en ninguna falte el proporcionado al servicio de los sagrados ministerios y esplendor del culto; debiendo considerarse definitivamente terminado el primer arreglo del personal de todas clases de las iglesias metropolitanas desde el día primero del mes de la fecha, y de las sufragáneas y colegiatas desde el 1.º de octubre de este año, conforme á otro mi decreto de 30 de abril del mismo; y habiéndose sustituido en todas ellas la clase de beneneficiados á la de racioneros y medio racioneros, sin estar declaradas aun cuales hayan de ser en lo sucesivo sus funciones y obligaciones, las consideraciones que deban tener y traje que hayan de usar; di órden comunicada con fecha en Aranjuez á 21 de junio último, mandando expedir la presente mi cédula, por la cual os ruego y encargo que oyendo á los cabildos de las iglesias respectivas, determinéis y establezcáis por ahora las atribuciones, obligaciones, consideraciones y traje que en cada una correspondan á los nuevos beneficiados ó capellanes asistentes; bien entendido, que si estos por una parte no deben confundirse ni equipararse á los ministros inferiores, por otra no pueden considerarse de *Corpore Capituli*, segun el Concordato: todo sin perjuicio de lo que en su dia se acuerde sobre este punto en los estatutos de cada iglesia, por cuanto conviene sea una misma en todas la situacion de los beneficiados ó capellanes asistentes, siguiendo el espíritu uniforme del Concordato, á diferencia de los antiguos racioneros y medio racioneros, que no la tenían igual en todas ellas.

Y del recibo de la presente y de lo que en su consecuencia determináreis, me dareis

aviso á manos del infrascrito mi Ministro de Gracia y Justicia: en lo que me servireis. Fecha en San Ildefonso á 11 de julio de 1852. (CL. t. 56, p. 312.)

R. O. de 21 julio de 1852.

Turnos para la provision de prebendas.

(GRAC. Y JUST.) «Estando declarado por el R. D. de 30 de abril último que el personal de las iglesias metropolitanas se entendiese definitivamente constituido y organizadas aquellas en la forma prevenida en el Concordato, desde el día 1.º del corriente, la Reina (Q. D. G.) se ha dignado mandar que para la provision de las prebendas vacantes desde dicha fecha se observen los turnos prevenidos en el art. 17 de dicho Concordato, y que en las correspondientes al de la Corona se proceda en la forma dispuesta en el R. D. de 25 de julio de 1851.

Asimismo se ha dignado prevenir S. M. que, al dar cuenta de toda vacante, los prelados expresen á quién corresponde por aquella vez el turno, indicando tambien en los beneficios, si es de los de oficio, para proceder en este caso á su provision, conforme á lo dispuesto en el R. D. de 16 de mayo último.—De Real órden etc.—San Ildefonso 21 de julio de 1852.» (CL. t. 56, pág. 374.)

R. Céd. de 31 julio de 1852.

Se reforman los estatutos de las iglesias...

Se encargó por ella á los M. RR. Arzobispos y RR. Obispos, que procedieran á la reforma de los estatutos de sus metropolitanas, catedrales ó colegiatas, ó á la formacion de otros nuevos, donde no los hubiere aprobados ó fuere difícil reformarlos, oyendo á los cabildos, instituyendo el expediente en toda forma canónica, dictando en él auto de aprobacion que juzgasen mas conveniente, y remitiendolo por último en el plazo de seis meses al Ministerio de Gracia y Justicia. (CL. t. 56, p. 399.)

R. O. de 27 setiembre de 1852.

(GRAC. Y JUST.) Declarando «que las pastorales, edictos y cualesquiera otros escritos que los prelados publiquen en el ejercicio de su ministerio episcopal, no están sujetos á la demanda particular de calumnia é injuria, pudiendo los que se sientan agraviados acudir respetuosamente al Gobierno de S. M. por conducto del Ministerio de Gracia y Justicia. (CL. t. 57, p. 495.)

R. O. de 18 octubre de 1852.

Colegiatas que continuarán como parroquias; coadjutores, etc.

(GRAC. Y JUST.) «.....S. M. la Reina, conformándose con lo que de acuerdo con el M. R. Nuncio apostólico, he tenido la honra de proponerle, se ha servido disponer lo siguiente:

1.º Los Ordinarios, tomando los datos y noticias correspondientes, decidirán si existen ó no impedimentos locales para que las iglesias de las colegiatas, que dejan de existir como tales, continúen en concepto de parroquias, si ya lo fueren, ó se erijan de nuevo en otro caso, sin perjuicio de lo que en el respectivo plan benefical se determine definitivamente.

2.º Si no procediere la continuacion ó ereccion de la parroquia, se limitarán los Ordinarios exclusivamente á dictar las medidas oportunas á fin de que se dé el culto conveniente, hasta tanto que en el plan benefical se decida canónicamente lo que corresponda, utilizando los diocesanos, en lo posible, los eclesiásticos aptos de la misma iglesia que no hayan tenido colocacion en el arreglo de las catedrales y colegiatas, y respetando los derechos adquiridos.

3.º Caso de continuar la parroquia, permanecerá al frente de ella el párroco que tuviere el cargo, conservando sus actuales consideraciones. Los demás eclesiásticos existentes todavía en las mismas iglesias por no haber tenido colocacion, desempeñarán, gozando sus actuales consideraciones, las funciones que respectivamente ejercen hoy. Estando vacante el cargo de párroco, haya ó no el número de coadjutores y beneficiados que se determina en la regla quinta, se nombrarán económicos, poniéndose en noticia del Gobierno los nombramientos que hicieren los Ordinarios, al efecto de comprenderlos en el presupuesto.

4.º Todos los eclesiásticos á quienes se refieren las dos disposiciones últimas, disfrutarán la dotacion que hoy les está señalada. Los curas ecónomos existentes, ó que se nombren á virtud de lo dispuesto en la regla anterior, disfrutarán 2.000 rs. en las parroquias rurales de segunda clase; 2.500 en las de primera; 3.000 en las urbanas de entrada y primer ascenso; 3.500 en las de segundo ascenso, y 4.000 en las de término; pero si fuere menor la dotacion señalada en el día, gozarán solamente este haber los ecónomos que se nombren. Para los ecónomos de los beneficios serán 2.000 rs. el mínimo, y el máximo los 3.000 que el Concordato se-

ñala para los beneficiados de las colegiatas.

5.º El número de coadjutores no excederá de uno, por cada 800 almas. Los beneficiados no excederán tampoco del número que para las colegiatas designa el art. 22 del Concordato.

6.º Los ministros inferiores y los dependientes que tenían consignada su dotacion sobre gastos del culto continuarán percibiendo aquella misma dotacion hasta que fallezcan ó obtengan otra colocacion: pero estarán obligados á prestar en la parroquia igual servicio que en la colegiata, si procediese.

7.º La consignacion actual que para gastos del culto corresponda á la colegiata se reducirá á dos terceras partes á lo mas cuando la iglesia haya de subsistir en adelante como parroquia. En otro caso el diocesano señalará la cantidad indispensable para que se atienda á los gastos de dicha clase, hasta tanto que en el plan parroquial se decida definitivamente la suerte de la iglesia.

8.º Los actuales presidentes de los cabildos colegiales, con la persona que designe el diocesano del territorio á que pertenezca ó en que esté enclavada la colegiata, formarán inventario de los vasos sagrados, de los efectos de toda clase, y de las propiedades que correspondan á la colegiata, expresando el producto en renta, y las cargas civiles y eclesiásticas que pesen sobre los bienes.

9.º El producto de dichos bienes se aplicará preferentemente al pago de las dotaciones del clero y gastos del culto de la parroquia, pasando el sobrante á la masa comun para atender á las obligaciones eclesiásticas de la respectiva diócesis, de lo que se dará conocimiento al diocesano.

10. Se reservarán á la parroquia los vasos sagrados, ornamentos y efectos que en ella puedan ser útiles, disponiéndose en su día por los Ordinarios lo conveniente al intento.

11. Las cargas eclesiásticas de misas, aniversarios y festividades, fundadas en las colegiatas, se cumplirán cuanto sea posible en las parroquias á que las mismas iglesias queden reducidas, disponiendo en todo caso los diocesanos lo que acerca de este particular proceda con arreglo á los cánones.—Lo que de Real órden, etc.—Madrid 18 de octubre de 1852. (*CL. t. 57, p. 296.*)

R. D. de 5 noviembre de 1852.

A quién corresponde la colacion é institucion canónicas de dignidades y canongias.

(GRAC. Y JUST.) «Habiendo pretendido algunos cabildos catedrales intervenir en la colacion é institucion canónicas de las ca-

canonías de oficio, y en la de los beneficios que les corresponde proveer en su turno....; vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Pertenece exclusivamente á los Ordinarios en sus respectivas diócesis dar la colacion é institucion canónicas de todas las dignidades, canonías de oficio y de gracia, y beneficios de metropolitanas, sufragáneas y colegiatas, parroquiales, coadjutorales y demás, sea cualquiera la persona ó corporacion á quien corresponde la eleccion, presentacion ó nombramiento y la forma en que se haga.

Art. 2.º Se exceptúan las dignidades y canonías reservadas á Su Santidad, y conferidas en forma graciosa, respecto de las cuales solo compete al Ordinario expedir el mandamiento de *immittendo in possessionem*.—Dado en Palacio á 5 de noviembre de 1852.» (CL. t. 57, p. 433.)

R. D. de 5 noviembre de 1852.

Computacion de votos concedidos á los prelados por el art. 14 del Concordato.

Artículo único. El número de votos que por el párrafo 4.º, art. 14 del Concordato, se concede á los prelados en toda eleccion ó nombramiento de personas que corresponda á los cabildos, ha de computarse por el de capitulares asignados á cada iglesia y no por el que haya existentes ó concurran al acto de la votacion.—Dado en Palacio á 5 de noviembre de 1852. (CL. t. 57, p. 434.)

R. O. de 8 febrero de 1853.

Residencia canónica.

(GRAC. Y JUST.) «Por R. D. de 14 de noviembre y circular de 24 de diciembre de 1851, se dispuso que los eclesiásticos poseedores de dignidades, canonías ó beneficios residenciales, y que por razon de cualquier otro cargo ó comision estuviesen obligados á permanecer en distinto punto se restituyesen á sus iglesias dentro del término señalado al efecto; y aunque estas disposiciones deben tener aplicacion con mayor fundamento al clero parroquial, es lo cierto que no se ha hecho así porque la mayor parte de los administradores diocesanos se han limitado al tenor escrito de dicho Real decreto. En su virtud la Reina (Q. D. G.) oido el dictámen de la Real Cámara eclesiástica, se ha dignado hacer extensivas al clero parroquial las medidas contenidas en el expresado Real decreto y circular, mandando al propio tiempo que V.... remita á este Ministerio nota de los párrocos que por comision ó con licencia se hallen ausentes de sus respectivas parroquias.»—De Real orden etc.—

Madrid 8 de febrero de 1853. (CL. t. 58, p. 159.)

R. D. de 23 abril de 1853.

Asignaciones del clero catedral, parroquial, etc.

(GRAC. Y JUST.) «Siendo necesario fijar reglas para la mejor distribucion del presupuesto del clero con arreglo al nuevo Concordato, y teniendo presente que el estado actual es de transicion, en el que se ha propuesto el Gobierno de S. M., de acuerdo con el espíritu de aquel documento, no lastimar derechos adquiridos, planteando las nuevas disposiciones con la circunspeccion y prudencia que su gravedad requiere; se ha servido S. M. adoptar las bases siguientes, que regirán en lo presente y hasta que por completo se lleve á debido efecto y vigor en todas sus partes el citado Concordato.

Artículo 1.º El clero catedral percibirá las asignaciones del Concordato ó las que marcan en sus respectivos casos las Reales órdenes vigentes ó disposiciones de arreglo del personal de sus respectivas iglesias, conforme á lo dispuesto en los Rs. Ds. de 29 de noviembre de 1851 y 30 de abril del 52. No se abonarán, sin embargo, para el fondo de reserva, sino las vacantes causadas realmente despues de la respectiva época en que se declararon constituidas dichas iglesias, á saber: desde 1.º de julio de 1852 en las metropolitanas y 1.º de octubre siguiente en las sufragáneas.

Art. 2.º Las catedrales y colegiatas subsistentes, que por dificultades nacidas de su constitucion especial no hayan sido arregladas en su personal á lo que previene el Concordato, seguirán como hasta el dia, no entrando cantidad alguna en el fondo de reserva por razon de las vacantes que haya.

Art. 3.º Las diócesis que por el Concordato se suprimen, se considerarán existentes para el efecto de abonarles lo relativo á gastos de administracion diocesana y seminarios, donde los haya, hasta que canónicamente se supriman y queden agregadas adonde corresponda; mas en cuanto al personal y gastos del culto, se considerarán como colegiatas segun lo prevenido en el R. D. de 21 de noviembre de 1851.

Art. 4.º El clero de las colegiatas suprimidas, que no ha podido tener colocacion en el arreglo general de las catedrales y colegiatas subsistentes, seguirá cobrando sus haberes con agregacion á las parroquias mayores á que dichas colegiatas se reducen, teniendo presente que muchos de estos se hallan agregados al presupuesto benefical de las catedrales en cuyo territorio están en-

clavadas, para descargarlo del presupuesto general.

Art. 5.º Para el culto de esa catedral, reparacion ordinaria del templo, lavatorio de de pobres en Semana Santa, consagracion y y conduccion de óleos, se señalan por ahora..... reales vellon.

Art. 6.º Para el culto y reparacion de las capillas reales y colegiatas existentes en la demarcacion de esa diócesis, se consignan las dotaciones expresadas al márgen.

Art. 7.º Para fijar por ahora el culto de las colegiatas, abadías y capillas suprimidas por el Concordato, se tendrá presente lo dispuesto en la R. O. de 18 de octubre último, proponiendo V. en su consecuencia lo que estime conveniente, teniendo en cuenta las circunstancias de cada una y procurando hacer todas las economías compatibles con tan sagrada atencion.

Art. 8.º Continuará rigiendo hasta la nueva circunscripcion de diócesis, ó mientras otra cosa no se disponga, el presupuesto aprobado en años anteriores para seminarios conciliares, sus bibliotecas y las públicas episcopales; como tambien los de gastos de administracion diocesana y extraordinarios de visita, comprendiéndose en este capítulo los de reparos ordinarios de palacios, salvas las alteraciones que figuran al márgen á que se atenderá esa administracion de rentas eclesiásticas para los pagos.

Art. 9.º Para gastos de administracion de rentas eclesiásticas se consigna la misma cantidad que viene presupuestada en años anteriores ó que esté aprobada por reales órdenes.

Art. 10. Los párrocos, vicarios perpétuos independientes y beneficiados propios en parroquias urbanas y rurales de primera clase, continuarán percibiendo las dotaciones al efecto señaladas en la ley de 17 de julio de 1838 y Rs. Órds. de 26 de mayo y 7 de octubre de 1845, en conformidad al artículo 4.º del R. D. de 29 de noviembre de 1851.

Art. 11. Los párrocos en curatos rurales de segunda clase percibirán las dotaciones que les correspondan, segun el R. D. de 29 de noviembre de 1851 y 30 de abril de 1852.

Art. 12. Los ecónomos de curatos percibirán las cantidades siguientes:

Ecónomos en parroquias urbanas de término.	4.000
Idem idem de segundo ascenso.	3.500
Idem idem de primer ascenso.	3.000
Idem idem de entrada y de vicarías perpétuas independientes.	

Idem de rurales de primera clase. 2.500
Idem idem de segunda. 2.000

Art. 13. El máximo para ecónomos de beneficios, coadjutores en matriz y tenientes en anejos, será 2,000 rs.; pero en el caso de que estos tengan ó deban mantener menor dotacion, segun lo dispuesto en R. O. de 11 de mayo de 1847 y otras disposiciones, continuarán percibiéndola.

Art. 14. Las disposiciones de los artículos anteriores empezarán á tener efecto desde 1.º de enero de este año.

Art. 15. El presupuesto del culto parroquial será el mismo que viene aprobado en años anteriores.—De Real orden lo digo á V. para los efectos correspondientes, y que las noticias á que se refieren los modelos adjuntos se evacúen y remitan á la mayor brevedad posible á este Ministerio, con estricta sujecion á los mismos, para formalizar el presupuesto general y reunir otros datos que tambien son necesarios y urgentes.—Dios etc.—Madrid 23 de abril de 1853.» (*CL. t. 58, p. 341.*)

R. O. de 16 junio de 1853.

Sobre memoriales ó solicitudes....

Dispone que las solicitudes que los eclesiásticos de cualquiera categoría ó dignidad dirijan al Ministerio, lo hagan por conducto de sus respectivos diocesanos, quienes al darlas curso informarán si es ó no procedente la pretension, ajustándose para ello á las disposiciones del Concordato y demás que rijan. Esto no se entiende con las solicitudes á prebendas vacantes. (*CL. t. 59, p. 205.*)

R. D. de 10 setiembre de 1853.

Modifica el de 25 de julio de 1851 sobre provision de piezas eclesiásticas.

(GRAC. Y JUST.) «.....Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Hasta 1.º de enero de 1855, siempre que anunciadas las vacantes de prebendas por el término acostumbrado, no se presenten por lo menos tres aspirantes que cuenten en el servicio que ha de preceder el número de años exigido en el R. D. de 25 de julio de 1851, podrá mi Real Consejo de la Cámara calificar y clasificar á los demás aspirantes á aquella vacante que reunan las demás circunstancias, y el Ministro de Gracia y Justicia proponer para mi Real nombramiento á los clasificados, como si no les faltase la circunstancia del tiempo del servicio.

Art. 2.º La Cámara no dará curso á solicitud alguna de traslacion, de que habla dicho mi Real decreto, sin que el que la soli-

cita se halle ya posesionado, y residendo la prebenda ó beneficio que le da la preferencia, y sin que se remita la solicitud por conducto del diocesano, quien informará de las causas canónicas que autoricen la traslacion.

Art. 3.º En el caso de que, previos estos requisitos, se hiciere la propuesta de traslacion y recayese á ella mi Real aprobacion, podrá á la vez mi Ministro de Gracia y Justicia, con el fin de que no pierda turno la categoria á que aquella provision corresponde, proponerme para mi nombramiento en la pieza que resulte vacante á consecuencia de la traslacion, uno de los calificados por la Cámara para aquella á que haya de pasar el traslado, siempre que el propuesto tenga las circunstancias que para la que por resulta se haya de proveer exige mi Real decreto.

Art. 4.º Asimismo y con el propio fin de que no sean perjudicadas en sus respectivos turnos las categorías que en dicho mi Real decreto de 25 de julio de 1851 están dispuestos, cuando en virtud de la preferencia que declara el art. 18 de dicho Real decreto se ha provisto alguno de los en él contenidos, no se dará por consumido el turno de la categoría á que aquella vacante ó á provision correspondan, debiendo volver á ser llamada para la inmediata vacante ó hacerle la provision en los clasificados de ella si hubiese mediado un corto intervalo de tiempo.—Dado en San Ildefonso á 10 de setiembre de 1853.» (CL. t. 60, p. 66.)

R. O. de 3 enero de 1854.

Dicta reglas para la demarcacion y arreglo parroquial.—V. CURA PÁRROCO.

R. O. de 19 agosto de 1854.

Sobre censura de escritos.

Encargando á los RR. Obispos que para certificar y censurar los escritos en que se ataquen el dogma ó la moral cristiana, procedan en la forma prescrita en las leyes recopiladas conforme con la bula de Benedicto XIV *Sollicita et provida*, oyendo la explicacion del autor antes de condenar su obra, escrito ó impreso y absteniéndose de publicar la condenacion y prohibicion hasta que S. M. preste su consentimiento. (CL. tomo 62, p. 276.)

R. D. de 1.º abril de 1855.

Órdenes sagradas.

Artículo 1.º Por ahora, y hasta que se verifique el arreglo general del clero parroquial, no se conferirán órdenes sagradas.

Art. 2.º Se exceptúa de lo dispuesto en el artículo anterior á los que hayan obteni-

do ó obtengan prebendas ó beneficios eclesiásticos con arreglo á las disposiciones vigentes y á los que hayan ascendido ya al subdiaconado, que podrán ser promovidos á las demás órdenes.—Dado en Aranjuez á 1.º de abril de 1855.

En el preámbulo de este decreto se dice que si el clero ha de ser tan virtuoso como su sagrada mision exige, y ha de prestar útilmente sus servicios á la Iglesia y al Estado, es necesario que su número no exceda de las verdaderas necesidades, y que cada uno de sus individuos tenga marcado su oficio en la organizacion eclesiástica; que de este modo podrá atenderse con regularidad á su decorosa subsistencia, que no se perjudicará al Estado distrayendo de las artes y oficios á personas que pueden serles útiles, y que no se verá con mengua de la religion y de sus ministros, sacerdotes sin instruccion, sin cóngrua y que por necesidad ó por recurso se ocupen de cosas ajenas á su sagrado ministerio.

R. O. de 28 abril de 1855.

Se declara «que toda clase de beneficios con *cura animarum* ó sin ella, y aunque sean de patronato particular, eclesiástico, laical, ó misto, se hallan comprendidos en la Real resolucion de 3 de setiembre de 1854» por la que se mandó suspender la provision de los curatos vacantes. (CL. t. 64, p. 455.)

R. O. de 2 mayo de 1855.

Dispone que sean colocados los eclesiásticos procedentes de colegiatas suprimidas, con recomendacion á los Prelados para que tenga efecto. (CL. t. 65, p. 12.)

R. O. de 8 mayo de 1855.

Jubilaciones....

Se piden informes á los diocesanos para establecer reglas fijas por las cuales puedan resolverse las exposiciones de los prebendados que soliciten su jubilacion, por imposibilidad fisica, expresando los años de servicio que deberán acreditarse, la parte de asignacion que deberá concederse y los casos en que la jubilacion deberá ó no causar vacante. (CL. t. 65, p. 23.)

R. O. de 24 mayo de 1855.

Iglesias, beneficios, cargas, etc., de patronato particular.

(GRAC. Y JUST.) Se dispone que los Obis-

pos remitan al Ministerio un estado demostrativo de las iglesias, beneficios, cargas y demás atenciones eclesiásticas que en sus respectivas diócesis correspondan á patronatos particulares con expresion:

1.^o «De los que existiendo en el año de 1833 se han extinguido de hecho ó refundiéndose en el patronato universal de S. M., y causas que lo han motivado.

2.^o De aquellos cuyos patronos continúan ejerciendo los derechos de tales, con distincion de los que satisfacen las rentas, dotaciones ó consignaciones de su respectivo patronato y de los que no cumplen con sus cargas, expresándose las causas en que lo funden ó se les atribuya.

3.^o De los que se dotaron con bienes estables que se entregaron á las mismas iglesias al tiempo de la creccion, ó por concordias posteriores; manifestando en cuáles de estos han recuperado sus bienes los patronos por cláusulas de reversion ú otras.

4.^o Y finalmente, de los que perteneciendo á capellanías colativas no consisten solo en beneficios de tales capellanes, sino en otros oficios ó cargos parroquiales ó colegiales, con las demás noticias que V. considere útiles, á fin de que puedan apreciarse y conocerse las alteraciones y modificaciones que el patronato de la Corona haya podido sufrir por consecuencia de las vicisitudes experimentadas desde 1833.»—De Real orden etc.—Madrid 24 de mayo de 1855. (*CL. t. 65, p. 124.*)

R. O. de 31 mayo de 1855.

Sobre títulos de los prebendados.

(GRAC. Y JUST.) «Habiéndose suscitado algunas dudas respecto á si los prebendados que pasan á otras iglesias por ascenso ó traslacion, deben sacar nuevo título y sufrir otro descuento en su asignacion. S. M. la Reina (Q. D. G.), conformándose con el parecer de la Cámara del Real patronato, Direccion de Contabilidad y Cancillería de este Ministerio, se ha servido resolver lo siguiente:

1.^o Los prebendados que pasen de unas iglesias á otras por traslacion á beneficio igual en categoría y asignacion, no deben sufrir descuento alguno, ni sacar nuevo título para tomar la posesion y canónica institucion.

2.^o Cuando la traslacion sea por ascenso en la dignidad, y lo mismo si esto se verifica en la misma iglesia, deben obtener nuevo título; pero no sufrirán descuento alguno si la nueva prebenda es de igual asignacion.

3.^o Si el ascenso es á prebenda de mayor dotacion, deben sacar nuevo título y sufrir el descuento de una mensualidad, pero

solo por la diferencia que resulte entre la antigua y nueva asignacion.

4.^o Si el que ha de ser trasladado no hubiere concluido de satisfacer el descuento correspondiente á su anterior prebenda, continuará sufriendolo en la diócesis á que pase, hasta su completo pago.»—De Real orden, etc.—Madrid 31 de mayo de 1855. (*CL. t. 65, p. 161.*)

R. O. de 6 agosto de 1855.

Mandando remitir al Ministerio de Gracia y Justicia estados comprensivos del número, clase y situacion de los eclesiásticos que haya en cada diócesis y en cada pueblo, á cuyo efecto se remiten los modelos convenientes.

R. O. de 20 setiembre de 1855.

Prohibiendo la publicacion de exposiciones de los obispos, etc.

(GRAC. Y JUST.) Ha llamado la atencion del Gobierno el abuso que se está cometiendo en la publicacion, por medio de la prensa, de las exposiciones que los M. RR. Arzobispos y RR. Obispos, vicarios capitulares *sede vacante*, y otras autoridades y corporaciones eclesiásticas, han elevado á la Reina, á las Cortes y al Gobierno.... S. M. la Reina, de acuerdo con lo propuesto por la Cámara del Real patronato, se ha servido mandar que no se permita la impresion ni publicacion de las referidas exposiciones, sin que sus autores obtengan antes la debida Real autorizacion, que en tal caso se insertará literalmente á la cabeza del impreso.—De Real orden, etc.—Madrid 20 de setiembre de 1855.—Sr. Gobernador civil de....

R. O. de 16 octubre de 1855.

Sobre toma de posesion por los prebendados. etc.

(GRAC. Y JUST.) Ha llamado la atencion del Gobierno el abuso que se observa en algunas iglesias, en que los prebendados nombrados toman posesion por apoderado, y no van á residir dentro de los términos que les están marcados, sin que para ello obtengan la debida autorizacion, fundada en causas justas y legítimamente probadas, así como tambien sucede que otros dejan de residir sus prebendas del mismo modo y fuera del tiempo de *rede* ó *recessit* que les corresponde segun los estatutos. Semejante abandono, tan perjudicial á la Iglesia y gravoso á los demás prebendados, no puede tolerarse por mas tiempo; y para remediarlo, S. M. la Reina (Q. D. G.), conformándose con lo propuesto por la Cámara del Real patronato, se ha servido mandar lo siguiente:

1.^o Todo el que sea nombrado para dig

nidad, canongía ó beneficio de iglesia catedral ó colegial, podrá, como hasta aquí, donde los estatutos lo permitan, tomar posesion por medio de apoderado; pero con la precisa obligacion de empezar su residencia dentro de dos meses, á contar desde la fecha del Real título que á su favor se haya expedido.

2.º Ningun prebendado podrá ausentarse de su iglesia fuera del tiempo de *rede ó recessit* que le concedan los respectivos estatutos.

3.º Los eclesiásticos comprendidos en los dos artículos anteriores, podrán ser dispensados de este deber por justas causas, con la autorizacion del Gobierno y de sus respectivos prelados.

4.º Los M. RR. Arzobispos, RR. Obispos y vicarios capitulares, *sede vacante*, cuidarán del exacto cumplimiento de cuanto queda ordenado, instruyendo inmediatamente los oportunos expedientes canónicos, de lo cual y de su terminacion darán el oportuno aviso á este Ministerio.

5.º Los Gobernadores civiles cuidarán por su parte de que no residan en sus respectivas provincias los eclesiásticos ausentes de sus iglesias, sin la competente autorizacion, dando el oportuno aviso á este Ministerio y al prelado respectivo.—De Real orden etc.—Madrid 16 de octubre de 1855. (CL. t. 66, p. 237.)

R. D. de 13 octubre de 1856.

Anulando las disposiciones que se opongan al Concordato.

(PRESID. DEL C. DE M.) «Atendidas las razones que me ha expuesto mi Consejo de Ministros, he venido en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Quedan sin efecto todas las disposiciones, de cualquiera clase que sean, que de algun modo deroguen, alteren ó varien lo convenido en el Concordato celebrado con la Santa Sede en 16 de marzo de 1851.—Dado en Palacio á 13 de octubre de 1856.» (CL. t. 70, p. 77.)

R. D. de 15 octubre de 1856.

Ordenes sagradas.

(GRAC. Y JUST.) Atendiendo á las razones que me ha expuesto el Ministro de Gracia y Justicia, de acuerdo con mi Consejo de Ministros vengo en decretar lo siguiente:—Quedan sin efecto el R. D. de 1.º de abril de 1855 y las demás disposiciones generales ó parciales referentes á la suspension provisional de conferir ordenes sagradas; y expeditas las facultades ordinarias y canónicas de los prelados diocesanos con sujecion en

su ejercicio á las reglas establecidas en el Concordato celebrado con la Santa Sede en 16 de marzo de 1851 y á las providencias dictadas para su aplicacion y cumplimiento.—Dado en Palacio á 15 de octubre de 1856. (CL. t. 70, p. 87.)

R. D. de 24 octubre de 1856.

Se ordena la creacion en el Ministerio de Gracia y Justicia de un negociado de estadística general del clero que comprenderá las calificaciones de aptitud, capacidad, celo y costumbres de todos los eclesiásticos de cada diócesis, y la clasificacion que los respectivos Ordinarios hagan por los merecimientos de aquellos, para las dignidades, prebendas, beneficios y cargos de la Iglesia. (CL. t. 70, p. 156.)

Por el Concordato de 17 de octubre de 1851 se devolvió al episcopado el pleno ejercicio de su autoridad, extinguiendo los privilegios ó costumbres que de cualquiera manera le amengubaban; y como no obstante los términos explícitos de su art. 15, y del 3.º del Real decreto de la misma fecha se suscitaban todavía dudas y dificultades, para resolverlas se dictó el siguiente Real decreto de 6 de diciembre de 1861.

R. D. de 6 diciembre de 1861.

(GRAC. Y JUST.) «De conformidad con lo propuesto por mi Ministro de Gracia y Justicia, de acuerdo con el M. R. Nuncio apostólico,

Vengo en decretar lo que sigue:

Artículo 1.º En observancia de lo dispuesto en el art. 15 del último Concordato, y de lo ya declarado al tiempo de su promulgacion en el art. 3.º de mi decreto de 17 de octubre de 1851, los M. RR. Arzobispos y RR. Obispos usarán del pleno ejercicio de su autoridad ordinaria, que desde entonces les corresponde en sus iglesias catedrales, así respecto de cosas como de las personas de los capitulares, sin que les sirvan de embarazo los privilegios, usos y costumbres vigentes hasta la promulgacion referida, ni aun el juramento prestado por los mismos capitulares á las constituciones de sus cabildos.

Art. 2.º En ningun punto de los de visita ni correccion canónica tolerarán derechos ya caducados, y señaladamente el de los adjuntos.—Dado en Palacio á 6 de diciembre de 1861.» (CL. t. 86, p. 550.)

R. O. de 30 junio de 1863.

Corresponde á S. M. la provision de la dignidad de dean en las catedrales, y de abad en las colegiatas.

(GRAC. Y JUST.) «Ilmo. Sr.: He dado cuenta á S. M. de la comunicacion de 30 del mes próximo pasado en que V. I. participa á este Ministerio el fallecimiento de D. Pedro Ceron de Zaballuru, abad de la colegiata de Logroño, y la provision que V. I. ha hecho de esta vacante por estimarla comprendida entre las prebendas que deben proveerse en rigurosa alternativa de S. M. y los respectivos Arzobispos y Obispos.

Considerando que el art. 23 del Concordato celebrado en 1851 dispone que las reglas establecidas para la provision de las prebendas de las iglesias catedrales se observen en todas sus partes respecto de las iglesias colegiatas.

Que por una de aquellas reglas, consignada en el art. 18, la dignidad de dean se ha de proveer siempre por S. M. en todas las iglesias y en cualquier tiempo y forma que vague;

Que segun los arts. 14, 22 y 32, el abad de las colegiatas es, como el dean, presidente del cabildo en ausencia del prelado y primera silla en su Iglesia apareciendo bajo este aspecto equiparadas en los referidos artículos ambas piezas eclesiásticas, por lo cual su provision debe ajustarse á la misma regla:

Que de consiguiente, el Concordato de 1851 no altera ni modifica en esta parte el convenio de 1753, en virtud del que, subrogada la Corona al Santo Padre en todos los casos generales y especiales de reservas, ha ejercido constantemente el derecho de proveer las primeras sillas de todas las colegiatas del Reino que no eran de patronato particular:

Que por las razones expuestas en la Real cédula de ruego y encargo á los M. RR. Arzobispos y RR. Obispos de 31 de diciembre de 1851, publicada oficialmente en aquella época, se asentó como cosa cierta, sin contradiccion alguna del representante de Su Santidad, que correspondia por siempre á la Corona la provision de la dignidad de dean en todas las iglesias metropolitanas y catedrales, é igualmente la de abad en todas las colegiatas, excepto las de patronato particular, en cualquier tiempo y forma que vacare:

La Reina (Q. D. G.), de acuerdo con el M. R. Nuncio de Su Santidad, ha tenido á bien resolver que la abadía se proveerá siempre por S. M. en todas las iglesias colegiatas, excepto las de patronato particular, en cual-

quier tiempo y forma que vague.—De Real orden, etc.—Madrid 30 de junio de 1863.—Monares.» Sr..... (CL. t. 89, pág. 549.)

R. D. de 15 febrero de 1867.

Es sobre arreglo del clero parroquial y se inserta en CURA PÁRROCO.

R. D. de 27 junio de 1867.

En Sede vacante corresponden á S. M. todas las provisiones de piezas eclesiásticas.—Es exclusiva de la Corona la presentacion de los abades.

(GRAC. Y JUST.) «Habiéndose suscitado dudas acerca de la inteligencia y aplicacion de varias disposiciones del último Concordato sobre provision de piezas eclesiásticas en las iglesias metropolitanas, sufragáneas y colegiales, conformándome con lo que en su razon, de acuerdo con el M. R. Nuncio apostólico y el parecer del Consejo de Ministros, me ha propuesto el de Gracia y Justicia,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º La alternativa establecida entre mi Real Corona y los M. RR. Arzobispos y RR. Obispos queda interrumpida en la Sede vacante en cuyo tiempo todas las provisiones me corresponden, continuando la alternativa en el nuevo Pontificado, segun el estado en que habia quedado el dia en que terminó el anterior.

Art. 2.º Se entiende por promocion el tránsito de una pieza inferior á otra de superior categoria ó consideracion canónica.

Art. 3.º Corresponde exclusivamente á mi Real Corona la presentacion de los abades, presidentes de los cabildos de las iglesias colegiales y curas propios á la vez de sus parroquias, prévio concurso especial y propuesta en terna del diocesano.

Art. 4.º El concurso de oposicion se convocará por el mismo diocesano con término al menos de 30 dias, y se celebrará en la capital de la diócesis, haciéndose los ejercicios en el modo y forma que se practica para las prebendas de oficio de la iglesia catedral, con asistencia de cinco examinadores sinodales, designados por el Ordinario.

Art. 5.º Serán requisitos indispensables:

1.º Tener grado mayor en teología ó cánones.

2.º Ser ó haber sido canónigo en iglesia catedral, de oficio en colegiata, ó cura párroco por espacio de ocho años, de los cuales dos al menos en parroquia de ascenso.

Art. 6.º El diocesano remitirá al Ministerio de Gracia y Justicia su propuesta en la forma que se practica en la provision de curatos.

Art. 7.º Las disposiciones precedentes se aplicarán única y exclusivamente en las vacantes que ocurran en las actuales colegiatas; y en las catedrales que por el Concordato se unen á otras Sillas, luego que esto tenga efecto.

Art. 8.º El Ministro de Gracia y Justicia dispondrá lo necesario para su cumplimiento.—Dado en Palacio á 27 de junio de 1867.—Está rubricado de la Real mano.—El Ministro de Gracia y Justicia, Lorenzo Arrazola.» (CL. t. 97, p. 1252.)

R. D. de 22 agosto de 1867.

Acordando la distribucion de las iglesias sufragáneas entre las Sillas metropolitanas.

(GRAC. Y JUST.) «Teniendo en consideracion la conveniencia y necesidad para la mas pronta y mejor expedicion de los negocios pertenecientes segun los sagrados cánones á la autoridad metropolitana de los M. RR. Arzobispos, de llevar á efecto respecto de las iglesias sufragáneas actualmente existentes lo dispuesto en el art. 6.º del Concordato de 1851, ejecutado ya en parte, si bien no haya podido efectuarse todavía la ereccion de algunas iglesias nuevamente creadas, ni verificarse tampoco la union de otras, medidas ambas dependientes de la circunscripcion ordenada por el art. 7.º del mismo Concordato, y en las cuales se ocupa actualmente mi Gobierno; y en vista de otras poderosas razones que me ha hecho presentes el Ministro de Gracia y Justicia, conformándome con lo propuesto por el mismo, de acuerdo con el M. R. Nuncio de Su Santidad.

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo. 1.º Lo dispuesto en el art. 6.º del Concordato, referente á la distribucion de las iglesias sufragáneas entre las Sillas metropolitanas, se llevará á efecto desde 1.º de octubre próximo respecto de las actualmente existentes.

En su consecuencia, pertenecerán en adelante:

A la iglesia *Metropolitana de Toledo* las sufragáneas de Coria, Cuenca, Plasencia, y Sigüenza.

A la *de Burgos*, las de Calahorra, Leon, Osma, Palencia, Santander y Vitoria.

A la *de Granada* las de Almería, Cartagena y Murcia, Guadix, Jaen y Málaga.

A la *de Santiago* las de Lugo, Mondoñedo, Orense, Oviedo y Tuy.

A la *de Sevilla* las de Badajoz, Cádiz, Ceuta, que el Concordato une á la anterior; Córdoba, la de Canarias y la de Tenerife, que se une á la precedente.

A la *de Tarragona* las de Barcelona, Gerona, Lerida, Tortosa, Urgel, Vich y la de Solsona que se une á esta.

A la *de Valencia* las de Mallorca, Ibiza, que se une á la anterior; Menorca, Orihuela y Segorbe.

A la *de Valladolid* las de Astorga, Ávila, Salamanca con la de Ciudad-Rodrigo, Segovia y Zamora.

A la *de Zaragoza*, las de Huesca con la de Barbastro, que se le une: Jaca, Pamplona, Tudela, que ha de unirse á la anterior, Tarragona y Teruel con la de Albarracin, que se unirá á esta.

Art. 2.º Los negocios procedentes de las iglesias sufragáneas que han de cambiar de metrópoli continuarán hasta su terminacion y fallo donde actualmente radican, remitiéndose desde 1.º de octubre los nuevos recursos al metropolitano á quien corresponda su conocimiento.

Art. 3.º En los archivos metropolitanos se conservarán los papeles procedentes de sufragáneas que dejen de pertenecer á la misma metrópoli, mientras no fueren debidamente reclamados.

Art. 4.º Los respectivos metropolitanos se pondrán de acuerdo en cuanto crean conducente para la mas fácil y expedita ejecucion de las anteriores disposiciones. Si para ello ocurrieren dificultades, mi Ministro de Gracia y Justicia, previo acuerdo en su caso con el M. R. Nuncio de Su Santidad, me propondrá lo que en su razon procediere.

Art. 5.º El Ministro de Gracia y Justicia dispondrá lo necesario para el cumplimiento del presente decreto.—Dado en San Ildefonso á 22 de agosto de 1867.—Está rubricado de la Real mano.—El Ministro de Gracia y Justicia, Joaquin de Roncali.» (CL. t. 98, pág. 306.)

R. O. de 24 agosto de 1867.

Los datos y noticias para la ejecucion del Concordato se pidan á los metropolitanos.

(GRAC. Y JUST.) «Desde que, en circunstancias bien azarosas, se dignó S. M. la Reina (Q. D. G.) constituir el gabinete presidido por el Sr. Duque de Valencia; al que tengo la honra de pertenecer, se ocupó mi digno antecesor en el despacho de los negocios eclesiásticos, con el firme propósito, secundando así las elevadas miras de S. M., de procurar la completa y leal ejecucion del Concordato de 1851, y del Convenio adicional de 25 de agosto de 1859, como asimismo de las Concordias ajustadas con el M. R. Nuncio de Su Santidad para llevar á cabo muchos de los acuerdos contenidos en aque-

Los solemnes tratados. Bien conocidas son del episcopado las importantes disposiciones adoptadas desde entonces, así en casos particulares como en virtud de medidas generales concertadas previamente con el representante de la Santa Sede; debiendo citarse entre las mas capitales, porque ponen muy de manifiesto el sistema que en materias de tal gravedad se proponia seguir el actual Gabinete, las referentes al arreglo parroquial, á las capellanías colativas y fundaciones piadosas, y por último el R. D. de 27 de junio de este año, declarando, entre otras cosas, la inteligencia práctica de la palabra *promoción*, que se usa en el art. 18 del Concordato, y de la cual se deduce necesariamente que toda vacante producida por un nombramiento de la Corona, que no sea la consecuencia del tránsito de una pieza inferior á otra de superior categoría ó consideracion canónica, ha de reputarse causada por mera traslacion, quedando sujeta, por consiguiente, á la alternativa establecida entre la Corona y el prelado.

Llamado despues, por la bondad de S. M., al Ministerio de Gracia y Justicia, he dado á conocer desde el primer momento y de la manera mas explicita y terminante mi decidido propósito de seguir sin levantar mano la marcha y sistema que ya se habian trazado, á fin de completar gradual y progresivamente, con acuerdo del M. R. Nuncio de Su Santidad, la franca ejecucion del Concordato en todas sus partes; siendo á la verdad muchos los puntos interesantes que todavia se hallan pendientes y han de ser examinados con meditacion á fin de consolidar mas y mas la concordia entre el sacerdocio y el Imperio.

En medio de otras muy graves y perentorias atenciones, he procurado tener frecuentes conferencias con el representante de la Santa Sede, siendo el objeto de ellas determinar con precision el estado en que se encuentra actualmente la ejecucion del Concordato; fijar metódicamente los puntos que necesitan aclararse ó ampliarse por medio de disposiciones secundarias ó resoluciones en armonía con la mente y espíritu del mismo Concordato, y establecer, por último, el orden que ha de observarse para plantear y resolver en su dia las cuestiones pendientes en la actualidad, teniendo muy en cuenta su misma importancia y naturaleza.

Para obtener este resultado, nada conviene tanto como reunir los datos y noticias congruentes al objeto, y conocer sobre determinados puntos al ilustrado parecer de los prelados, tan entendidos en estas materias

como interesados á la vez en el buen régimen de la Iglesia. En esta atencion, y considerando que en lugar de oír á cada prelado en particular, especialmente sobre ciertos puntos, es mas preferible que los de cada provincia eclesiástica emitan su opinion colectiva. S. M. se ha servido resolver que en los casos de que se trata se pidan á los metropolitanos por este Ministerio, de acuerdo con el M. R. Nuncio Apostólico, los datos y noticias conducentes, proponiéndoles la serie de preguntas ó cuestiones que convengan esclarecer, á fin de que reuniendo á sus sufragáneos en conferencia privada ó poniéndose de acuerdo con ellos del modo y forma que les parezca mas conveniente y oportuno, puedan evacuar el correspondiente informe, en que de una manera clara y precisa se consigne la opinion de todos los prelados en cada metrópoli acerca de los puntos que hubiesen sido objeto de la consulta. Y de orden de Su Majestad etc.—San Ildefonso 24 de agosto de 1867.—El marqués de Roncali.—Señor.....» (*CL. t. 98, p. 308.*)

R. D. de 2 setiembre de 1867.

Prestando Real asenso para que se ponga en ejecucion el nuevo arreglo y demarcacion parroquial de la diócesis de Segovia.

(GRAC. Y JUST.) «Tomando en consideracion lo propuesto por mi Ministro de Gracia y Justicia, oído el Consejo de Estado, y de acuerdo con el Consejo de Ministros,

Vengo en decretar:

Artículo 1.º Conforme á lo dispuesto en el art. 24 del Concordato de 16 de marzo de 1851,

Vengo en prestar mi Real asenso para que se ponga en ejecucion el nuevo arreglo y demarcacion parroquial formados para la diócesis de Segovia por auto definitivo del R. Obispo de 1.º de agosto del presente año.

Art. 2.º En su consecuencia se expedirá la correspondiente Real cédula auxiliatoria con arreglo al modelo que á propuesta del Ministro de Gracia y Justicia tengo aprobado y las demás cláusulas procedentes.

Art. 3.º El presente decreto y la parte necesaria á juicio del R. Obispo de mi Real cédula auxiliatoria de que trata el artículo anterior, se publicarán en el *Boletín oficial* de la provincia en que estén situadas las respectivas parroquias y en el *eclesiástico* de aquella diócesis.

Art. 4.º En adelante, y hasta tanto que tenga efecto la dotacion definitiva con arreglo á lo dispuesto en el art. 36 del Concordato, se formará el presupuesto de dicha diócesis segun las reglas transitorias consi-

nadas en el art. 28 y demás disposiciones de mi R. D. de 15 de febrero de este año, dado con intervencion del M. R. Nuncio Apostólico.

Art. 5.º El Ministro de Gracia y Justicia dispondrá lo conveniente para la ejecucion del presente decreto.—Dado en el Real Sitio de San Ildefonso á 2 de setiembre de 1867.—Está rubricado de la Real mano.—El Ministro de Gracia y Justicia, Joaquin de Roncali.» (CL. t. 98, pág. 326.)

Hemos comprendido en este artículo los Concordatos de 1737, 1753 y 1851; la Concordia *Fachenetti*, así llamada por haberla ajustado el Nuncio César Fachenetti y el Gobierno español; el Convenio de 1860, que tuvo por objeto la conmutacion de los bienes eclesiásticos por inscripciones intrasferibles de la Deuda consolidada del 3 por 100, y además las importantes disposiciones publicadas por el Gobierno para la ejecucion del último Concordato. Otras será preciso consultar en sus respectivos artículos, como las relativas al arreglo parroquial en CURA PÁRROCO; las que tienen por objeto el arreglo de las capellanías y otras fundaciones piadosas, incluso el Convenio con la Santa Sede firmado en 1867, en CAPELLANÍA; y otras mas en BENEFICIO, CULTO Y CLERO, DESAMORTIZACION, ECLESIASTICOS, IGLESIAS, MONASTERIOS, etc.

La insercion del Concordato de 1753 nos ha parecido muy conveniente, por ser importantes los puntos que en el se resuelven, y porque á parte de ciertas concesiones que se hicieron, es uno de los tratados mas beneficiosos y de que reportó mas ventajas la monarquía española (1).

Menos útil creimos la insercion del Concordato de 1737; pero lo hemos incluido tambien, mas que por la importancia que hoy tiene, por el deseo de facilitar con el estudio de su texto el de los demás que le han sucedido. No queremos, sin embargo, privar á nues-

tros lectores del juicio que formó de este Concordato un ilustre escritor del siglo pasado.

Dijo el Sr. Mayans y Siscar, en sus justamente apreciadas *Observaciones legales sobre el Concordato celebrado en 1753* (observ. 2.ª), que en el de 1737 se contravino en muchos artículos á las costumbres, Concilios y leyes de esta Monarquía, «por cuya causa, añade, los mas sábios letrados desde luego le tuvieron por nulo,» creyendo que esta fué la causa que tuvo el Consejo de Castilla para no haber dado á dicho Concordato otro curso, si no haber mandado pasarle al exámen de los fiscales, sin haberle enviado á las Chancillerías, Audiencias y jueces ordinarios del Reino, con provisiones circulares, como lo hubiera y debiera haber hecho, si desde luego no hubiera previsto el Consejo los gravísimos inconvenientes que habia, de ponerse en ejecucion un Concordato contrario á las loables costumbres, Concilios, leyes ó intereses de España. Lo mismo repitió en la 7.ª observacion, añadiendo en la 8.ª que lo que ofreció la corte romana á la de España, no lo cumplió; que expresamente contravino al Concordato de 1737; que no reformó los abusos, y antes se propuso confirmarlos, como sucedió respecto de los expolios y de las dispensaciones pedidas por dinero, etc., etc. (1).

Esto, y la gran cuestion del patronato que quedaba pendiente ó en cierto modo mal decidida, juntamente con la opinion de los hombres mas ilustres del país, que se habian manifestado celosos defensores de las regalías de la Coro-

(1) Así lo reconoce el Sr. Mayans y Siscar, y así lo consignan tambien el ilustre historiador contemporáneo Sr. Lafuente, y el eminente canonista Sr. Aguirre nuestro maestro y amigo.

(1) El Sr. Aguirre, cuya opinion es en todo para nosotros tan respetable y mas en materias canónicas, dice á propósito del juicio del Sr. Mayans sobre el Concordato de 1737, que sin dejar de conceder que la Corte de España se consideró defraudada por no haberse cumplido sus deseos, no puede asegurarse la nulidad del Concordato, ya porque, si no fué publicado solemnemente, fué ratificado por ambas partes y se circulo por un decreto, ya tambien porque existen varias leyes que comprenden algunos de sus artículos.... (*Curso de disciplina eclesiástica, general y particular de España*: 2.ª edicion, 1858.)

na (1), hubo de crear la necesidad del nuevo Concordato firmado en 1753, á que se prestó mas benignamente el Papa Benedicto XIV, como ya dejamos dicho.

En cuanto al Concordato de 1851, como que vino á dar solucion á las cuestiones eclesiásticas pendientes, su importancia no puede ser por nadie desconocida, ya se le encomie, ya se le combata en el terreno de si fué mas ó menos conveniente en su forma ó en alguna de sus disposiciones. El objeto de este Concordato, segun se expresa bien claramente en la ley de 8 de mayo de 1849, fué procurar la solucion de las cuestiones eclesiásticas pendientes, inclusa la importantísima de la desamortizacion; establecer nueva circunscripcion de diócesis; organizar con uniformidad el clero catedral, colegial y parroquial, prescribiendo los requisitos de aptitud é idoneidad, residencia é incompatibilidad de beneficios; establecer la enseñanza del clero y la organizacion de seminarios y *casas é institutos de misiones, de ejercicios y correccion de eclesiásticos*; regularizar el ejercicio en la jurisdiccion eclesiástica suprimiendo las privilegiadas; y resolver, por último, de una manera definitiva, lo relativo á los institutos de religiosas.

Acaso no sean para algunos muy conciliables ciertas disposiciones del novísimo Concordato con las bases de la ley de autorizacion, otorgada al Gobierno para celebrarle; pero de todos modos es siempre de incontestable importancia el estudio de todas las referidas disposiciones, como lo son igualmente las que despues se han dictado para su ejecucion.

He aquí, pues, en la imposibilidad de detenernos mas, un cuadro indicador de los asuntos de que son objeto los importantes documentos contenidos en este artículo.

(1) Véase REGALÍAS DE LA CORONA Y REGALISTAS Y ULTRAMONTANOS, en donde indicamos las diferencias de estas escuelas y damos noticia de los mas celosos defensores de una y otra. Allí indicamos tambien algo sobre el célebre Memorial de Chumacero y la famosa *Respuesta ó Pedimento* fiscal de los Cincuenta y cinco párrafos del célebre fiscal D. Melchor de Macanaz.

Abad de Covadonga: art. 13 del Concordato.—De las colegiatas art. 22 del Conc. y 17 del R. D. de 25 julio 1851 (1) y R. D. 30 junio 1863 y 27 junio 1867.

Aranceles de juicios: art. 21 del Conc. de 1737.

Arciprestes: art. 13 del Conc.—V. ARCI-
PRESTES.

Arcediano: art. 13 del Conc.; y 3.º 25 julio 1851.

Asilo: arts. 2.º á 4.º del Conc. de 1737.

Beneficiados y beneficios de las catedrales y colegiatas: su número, oficios, atribuciones, etc.: arts. 16, 17, 18 y 22 del Concordato; id. 11 y 12 de 25 julio 1851; 16 mayo 1852; 11 julio id.; id. 12 y 13 enero 1854; 24 mayo 1855.—Consúltense tambien los arts. 6.º, 19 y otros del Conc. de 1737, y el 1.º y 2.º del de 1753.

Bienes eclesiásticos: sobre su desamortizacion, permuta, nueva adquisicion, etc.: artículos 35, 38, 39, 40, 41 y 42 del Concordato; id. 1.º al 7.º y 20 del Convenio 4 abril 1860.—V. DESAMORTIZACION.—Id. del Concordato de 1737, arts. 5.º, 7.º y 8.º

Cabildos de las catedrales: lo que son, su presidencia; atribuciones, etc.; arts. 13 al 17 y 20 del Conc.—Id. de las colegiatas: arts. 22 y 23 del Conc.

Canongias y canónigos: provision, etc.: artículos 13, 16, 17, 18 y 19 del Conc.; y demás que se citan en Dignidades y prebendas.

Capellan mayor de Reyes: capilla de id.: artículos 13 y 21 del Conc.; id. 9.º 21 noviembre 1851.—Id. mayor muzárabe de Toledo: arts. 13 y 21 del Conc.; id. 9.º de 21 noviembre 1851.—Id. de San Fernando de Sevilla: art. 13 del Conc.—Id. de los Reyes Católicos de Granada; art. 13 del Conc.

Capellanias y fundaciones piadosas: art. 39 del Conc.; id. 10 del Conv. de 4 abril 1860.—Id. Conv. de 1867.

Cargas eclesiásticas en colegiatas: 18 octubre 1852, art. 11.

Casas y congregaciones de San Vicente de Paul y San Felipe Neri, etc.: arts. 29 y 35 del Conc.—Id. religiosas de mujeres, artículos 30 y 35 del Conc.; id. 14 diciembre 1851.—Id. de los párrocos, y huertos y jardines: art. 6.º del Conv. de 4 abril 1860.

Catedrales: (arreglo del personal de) 21 noviembre 1851 y 30 abril 1852.

Cédulas bancarias; su abolicion: Conc. de 1753, art. 8.º

(1) Cuando decimos solamente Concordato sin expresar cuál, entiéndase el de 1851.

- Censuras* (Sobre uso de); Conc. de 1737, art. 10.
- Coadjutores*; Conc. de 1737, art. XVII.—Id. de parroquia; Conc. art. 26 y R. O. de 18 de octubre de 1852, arts. 3.º y 5.º—V. *CURA PÁRROCO*.
- Colacion* canónica; Conc. art. 18; R. D. 5 de noviembre de 1852.—Véase también el art. 6.º del Conc. de 1753.
- Colegiatas*: las que se conservan y las que no etc.: arts. 21 al 23 del Conc.; id. 4.º y siguientes de 30 abril 1852; p. 162; 18 octubre 1852; arts. 2.º, 4.º y otros de 23 abril 1853; art. 8.º de 3 enero 1854.
- Colegios* de misiones para Ultramar: art. 29 del Conc.
- Concordato* de 1737; inserto en la p. 258.—Id. de 1753; inserto en la p. 263.—Id. de 1851; inserto en la p. 268.
- Concordia* Fachenetti; p. 258.
- Convenio* de 1860; p. 276.—Id. de 1867, sobre capellanías; p. 279.
- Contribuciones*. Conc. de 1737, arts. 7.º y 8.º
- Culto*.—V. Presupuestos, en este cuadro.
- Curas*: Curatos; Conc. arts. 24 al 27 y las disposiciones insertas en *CURA PÁRROCO*.—Consúltense igualmente los arts. 13 y 14 del Concordato de 1737 y el 3.º y 5.º del de 1753.
- Cruzada* (fondos de). Carga para la manutención y subsistencia del Nuncio. Conc. de 1753 al fin.
- Dataria* y Cancelaria apostólica, etc. Compensación á Roma, Conc. de 1753, art. 8.º
- Deanes*: arts. 13 y 18 del Conc.: R. D. de 25 julio 1851; 21 noviembre id.; 30 junio de 1863.
- Dignidades y prebendas* eclesiásticas: reglas para su provision etc., etc.: arts. 13, 16, 17 y 18 del Conc.; 25 julio 1851; 21 noviembre id.; 17 diciembre id.; art. 8.º de 30 abril 1852; 14 mayo, 21 junio y 5 noviembre id.
- Diócesis*; su division etc.: base 1.ª ley de 8 mayo 1849; arts. 5.º al 8.º del Conc.; 17 octubre 1851; 23 abril 1853; arts. 17 del Conv. de 4 abril 1860; R. D. de 22 agosto 1867.
- Doctoral*: art. 13 del Conc.
- Dotacion* del culto y clero; prelados; deanes; dignidades; canónigos; beneficiados; curas; ecónomos; coadjutores, etc.: arts. 31 al 38 del Conc.; id. 2.º al 4.º del Conv. de 4 abril de 1860, y demás que se vé en el artículo *CULTO Y CLERO*.
- Eclesiásticos* en general: su adscripcion á las parroquias; art. 9.º de la R. C. de 3 enero 1854; 6 agosto 1855.
- Ecónomos*: su dotacion etc.: 29 noviembre 1851; art. 3.º de 18 octubre 1852; y 23 abril 1853.
- Escuelas*: Inspeccion de los prelados y arciprestes en ellas: art. 2.º del Conc., 27 febrero y 23 marzo 1852.
- Estadística* general del clero: 24 octubre 1856.
- Estatutos* de las iglesias (su reforma): 31 julio 1852.
- Exclaustracion* de religiosas: 24 diciembre 1851.
- Excusado* (tribunal del), art. 12 del Conc.
- Expolios, vacantes y anualidades* (Colecturía de); arts. 12 y 31 del Conc., 21 octubre 1851.—Id. Conc. de 1737 art. XXII; idem Concilio de 1753.
- Fondo* de reserva: 29 noviembre 1851; artículos 7.º al 12.
- Gerarquía* eclesiástica, art. 13 y siguientes del Conc.; 25 julio y 21 noviembre 1851.
- Iglesiaríos*, mansos, etc. (campos reservados á las iglesias): art. 6.º del Conv. 4 abril 1860.
- Iglesias* (reparacion de): art. 36 del Concordato, 29 noviembre 1851, art. 10; Convenio 4 abril 1860, art. 13.
- Iglesias frias*: Conc. 1737, art. 3.º
- Incompatibilidad* de cargos eclesiásticos: art. 19 del Conc.; 14 noviembre 1851.
- Instruccion* pública: art. 2.º del Conc.; 27 febrero y 23 marzo 1852.
- Jubilaciones* de párrocos: 30 abril 1852, de prebendados, 8 mayo 1855.
- Jueces in curia*: que no se les deleguen causas; Conc. de 1737, art. 20.
- Jurisdiccion eclesiástica*: base 4.ª, ley 8 mayo 1849; arts. 3.º, 4.º, 10, 11 y 21 del Conc.—Id. 7.º del de 1753, y 12 del de 1737.
- Lectoral*: art. 13 del Conc.
- Mesada*: descuento de la de los nombrados para prebendas, curatos, etc.; art. 37 del Conc.; 21 noviembre 1851, art. 10.—Idem 29 noviembre, arts. 6.º al 8.º; 28 marzo 1852.
- Maestrescuela*: art. 13 del Conc.—Id. 5.º de 25 julio 1851.
- Magistral*: art. 13 del Conc.
- Nuncio*: que no se les conceda indulto de conferir beneficios; Concordato 1753, artículo 5.º
- Obispos y Arzobispos*: arts. 8.º, 14 y 15 del Conc. y los demás citados en Cabildos, Diócesis, Jurisdiccion, etc.—Id. R. D. de 6 diciembre 1861
- Ordenes militares* (territorios y jurisdiccion de las): arts. 9 y 11 del Conc.—Id. 6.º R. C. de 3 enero 1854.
- Ordenes sagradas* (á titulo de patrimonio): 30

abril 1852.—Id. suspension y alzamiento: 1.º abril 1855 y 5 octubre 1856.

Parroquias (arreglo y demarcacion de): artículo 24 del Conc.

Pastorales, edictos, etc.; su carácter; 27 setiembre 1852; sobre censura de escritos: 19 agosto 1854.

Patrimonios (órdenes sagradas á título de): 30 abril 1852.

Patronato de la Corona: Conc. de 1737, art. XXIII Id. de 1753 en donde se decide sobre este importante asunto.

Patronos eclesiásticos: Conc. 1753; arts. 1.º 4.º y otros, de las colegiadas (derecho de presentacion): art. 17, 21 noviembre 1851.

Penitenciario: art. 13 del Conc.

Pensiones sobre parroquias: Conc. 1737, artículos 14 y 15.

Prebendados: (títulos, residencia, etc.); 31 mayo 1853; 16 octubre.—Id. de oficio; Conc. de 1753, art. 2.º—V. CANÓNICOS: DIGNIDADES.

Presupuestos del culto ó iglesias: 29 noviembre 1851, art. 13; 16 diciembre 1851; 23 abril 1853; art. 16 del Conv. 4 abril 1860.

Provisiones en sede vacante: R. D. de 27 junio 1867.

Racioneros y medio racioneros: reglas 9.ª y 10 del art. 17, R. D. de 25 julio 1851; R. C. de 11 julio 1852.

Religion de España: Conc., art. 1.º

Residencia canónica: art. 19 Conc.; 14 noviembre 1851; 8 febrero 1853; 16 octubre 1855.

Seminarios: arts. 28 y 35 del Conc.—Idem 8.º de 23 abril 1853.

Sínodos provinciales (celebracion de): artículo 19 Conv. de 4 abril 1860.

Solicitudes de eclesiásticos al Gobierno: 16 junio 1853 y 20 setiembre 55.

Vacantes de las Sillas, dignidades, parroquias, etc.: (rentas de) art. 37 del Concordato; art. 10 de 21 noviembre 1851.

Vicarios capitulares (su nombramiento en sede vacante): art. 20 del Conc.

Visitas de diócesis: (gastos de) art. 34 del Concordato; 16 diciembre 1851.

Muchas de las palabras contenidas en el anterior repertorio son objeto de artículos especiales de esta obra y pueden consultarse en su lugar respectivo.

CONCORDIA. Transaccion, ajuste ó convenio entre corporaciones que litigan sobre algun punto dudoso: Escritura debidamente autorizada en que se contiene lo tratado y convenido. Las transacciones que se hacen entre dos ó

mas pueblos poniendo término á los pleitos ó cuestiones que haya entre ellos, sobre pastos, lindes, aguas etc., son las únicas á que se ha dado el nombre de Concordia etc.—V. TRANSACCIONES.

A la Administracion compete la proteccion de los derechos de mancomunidad de pastos, fundados en antigua Concordia y en la constante posesion; pero cuando la cuestion verse sobre legalidad ó subsistencia de los títulos en que se funden los derechos, toca su conocimiento á los Tribunales de justicia. Así lo establece el Consejo de Estado en la siguiente

R. D.-S. de 24 de marzo de 1866.

Pleito seguido en el Consejo de Estado por el Ayuntamiento de Hornillos contra los de Munilla y Zarzosa, sobre aprovechamiento comun de los pastos y montes de algunos términos de sus jurisdicciones. Se regian respecto á esto dichos pueblos, por ciertas Concordias de los siglos XV, XVII y XVIII, hasta que en 1835, el Ayuntamiento de Hornillos pidió su anulacion por incompatibilidad con las nuevas ordenanzas de montes. El Gobernador de Logroño mandó en 2 de abril del mismo año, que aquellos pueblos procediesen á nueva Concordia dentro del término de 15 dias, lo que no se hizo, y el Gobernador resolvió en providencias de 23 de octubre y 16 de noviembre de 1860, de conformidad con el Consejo provincial, que se respetaran las antiguas Concordias en todo lo que no se hubiese alterado por la nueva legislacion de montes. El Ayuntamiento de Hornillos, propuso demanda ante el Consejo provincial de Logroño para que se dejaran sin efecto estas últimas providencias; impugnaron la demanda las villas de Munilla y Zarzosa, y el Consejo, por su sentencia definitiva, desestimó la pretension de Hornillos, y declaró subsistentes las citadas providencias, salvo los derechos de los Ayuntamientos y dueños particulares. El Ayuntamiento de Hornillos apeló, y por R. D.-S. de 24 de marzo, á consulta del Consejo de Estado, se con-

firma la sentencia del Consejo provincial de Logroño:

«Considerando que es un supuesto del pleito, reconocido como tal por las partes contendientes, que desde que se otorgaron aquellas Concordias, los vecinos de ambos pueblos han venido aprovechándose mancomunadamente de los pastos y leñas de los montes que fueron objeto del contrato, hasta el año de 1835, en que el pueblo demandante, á pretexto de que por virtud de las nuevas disposiciones sobre el ramo de montes no podia sostenerse por mas tiempo el comun aprovechamiento, compareció ante el Gobernador de la provincia reclamando la caducidad de las preeitadas Concordias:

Considerando que si bien por razon de la materia y en fuerza de la constante posesion en que los dos pueblos estaban de aprovechar las yerbas y leñas de los mencionados montes, es indudable la competencia de la Administracion para conocer de este asunto en cuanto no afecte á la legalidad de los títulos en que los pueblos apoyen sus respectivos derechos, no le es dado sin embargo conocer y juzgar sobre este último extremo, sin traspasar la línea divisoria que la separa de la jurisdiccion de los Tribunales ordinarios:

Y considerando que tanto las providencias dictadas por el Gobernador civil de Logroño en 23 de octubre y 16 de noviembre de 1860, como la sentencia apelada que las confirmó, están en perfecta armonía con los principios expuestos; y todas ellas reservan á las partes el derecho que por las Concordias y ejecutorias adquirieron y sean compatibles con las nuevas disposiciones, para que lo deduzcan y ventilen ante quien corresponda.» (*Gac.* 25 abril.)

CONCUBINA. CONCUBINATO. Se llama concubina la manceba ó mujer que vive y cohabita con un hombre como si fuera su marido. Concubinato, es por consiguiente, la comunicacion ó trato del hombre con su concubina.—V. AMANCEBAMIENTO y en CÓDIGO PENAL el artículo 362.

CONCURSO DE ACREEDORES. Juicio que promueve un deudor para que se haga pago á los acreedores, ó por alguno de estos con el propio fin de realizar sus credits. Trata de los concursos de acreedores el tit. XI de la Ley de Enjuiciamiento civil (arts. 505 á 635). Hay concurso voluntario, y necesario.

Concurso voluntario es el pretendido por el mismo deudor, que al solicitarlo deberá presentar relacion firmada de todos sus bienes, un estado de las deudas y una memoria en que se consignent las causas que hayan motivado su presentacion en concurso (*Art.* 506).

Puede el deudor solicitar *quita* y espera ó cualquiera de las dos cosas, en cuyo caso el juez manda convocar inmediatamente á junta de acreedores que se celebra en la forma prevenida en los arts. 507 y siguientes tomando el acuerdo que crean conveniente; el cual puede ser impugnado como en ellos se dice.

No pidiéndose simplemente sino la formacion del concurso, se acomodará la sustanciacion á las reglas establecidas para el concurso necesario.

Concurso necesario. Este solo puede decretarse á instancia de parte legitima con tal que haya dos ó mas ejecuciones pendientes contra el deudor, y que no se hayan encontrado en todas ó en alguna de ellas bienes libres de otra responsabilidad, conocidamente bastantes á cubrir la cantidad que se reclame. El juez, que será cualquiera de los que estén conociendo de las ejecuciones, art. 522, declarará el concurso y dictará las providencias necesarias para el embargo y depósito de todos los bienes del deudor, la ocupacion de sus libros y papeles y la retencion de la correspondencia, llevándose á efecto la administracion del concurso y la tramitacion de los autos conforme á los arts. 523 y siguientes.

Hay varias clases de acreedores, y segun la distinta naturaleza de los créditos así es el orden de su preferencia en caso de concurso.

El orden es el siguiente:

1.^o *Acreedores de dominio*, que son los que piden cosa suya propia que estaba en poder del deudor, sin poder confundirse con otra, como un caballo que le dió en comodato, ó en depósito etc. Cuando la cosa es fungible, esto es, de las que se consumen con el primer uso, entonces el acreedor de dominio no tiene prelacion como tal.

2.^o *Acreedores hipotecarios.* Segun

la ley hipotecaria, el acreedor que primero inscribe su crédito hipotecario es preferido á todos para que se haga pago con la cosa hipotecada, surtiendo su efecto la inscripcion aun contra los acreedores singularmente privilegiados por la legislacion comun (*Art. 24 y siguientes ley hipotecaria*). En los créditos hipotecarios tiene lugar de lleno el axioma «*qui prior est tempore, potior est jure*» es decir, que es primero á cobrar el que antes tiene constituida la hipoteca, y si hay dos ó mas inscripciones de una misma fecha relativas á una misma finca, se atiende á la hora de la presentacion en el registro. (*Art. 26.*)

Han desaparecido, pues, los privilegios de la Hacienda y los de las mujeres casadas, y las de los créditos refaccionarios etc. etc. respecto á la hipoteca ó al crédito hipotecario inscripto, debiendo atenernos á la regla que dejamos establecida.

3.º *Acreedores singularmente privilegiados*, ó que lo son por razon del entierro y funeral proporcionado á la fortuna y circunstancias del finado, ó por la ordenacion de la última voluntad y formacion del inventario y demás diligencias judiciales de la testamentaria ó abintestato, ó por gastos de la última enfermedad del finado.

4.º *Acreedores por trabajo personal y por alimentos.*

5.º *Acreedores con hipoteca legal privilegiada segun la antigua legislacion* (1).

6.º *Acreedores con hipoteca legal no privilegiada.*

7.º *Escriturarios*, ó que acreditan su crédito por escritura pública.

8.º *Quirografarios*, ó que acreditan sus créditos por documento privado, siendo preferidos en su caso los que están extendidos en papel sellado.

Este es el orden establecido por nuestras leyes que viene á reconocer tambien

(1) No está en este caso la escritura de dote solamente confesada por el marido, ó destituida de la prueba de entrega la cual no goza prelación sobre otros créditos aunque sean meramente personales y quirografarios. (*Sentencia de 27 de junio de 1864.*)

sin ser este su objeto, el art. 592 de la Ley de Enjuiciamiento civil. En todos los referidos créditos, menos en los quirografarios, tiene lugar el axioma antes indicado de que son respectivamente preferidos dentro de cada clase los créditos mas antiguos.—V. ACREEDOR: ACREEDORES: HIPOTECA.

CONCURSOS PUBLICOS.—V. ADMINISTRACION: EXPOSICIONES PÚBLICAS.

CONCUSION. Exaccion fraudulenta de impuestos, derechos etc.

CONDE. Este nombre lo mismo que el de *Duque* y *Marqués* son títulos de honor y de dignidad, sin cargo alguno público. Antiguamente, dice un historiador, los duques tenian el gobierno de las provincias y la administracion principal de la justicia. Ordinariamente tenian consigo condes á los cuales llamaban ellos en latin *comites*, ó como quien dijera asociados ó compañeros, por causa que estos eran asignados á los duques para ser como adjuntos suyos en administrar la justicia; pero en ausencia de los duques obtenian muchas veces la autoridad de mandar las tropas y las provincias en que se hallaban establecidos. La funcion de los *marqueses* y su empleo era gobernar las fronteras las cuales se llamaban *marcas*, de donde provino el que los que tenian el gobierno de ellas fuesen apellidados *Marchis* y despues *marqueses*.—V. GRANDEZAS DE ESPAÑA: TÍTULOS DEL REINO.

CONDECORACIONES. Distintivos de honor que se conceden para premiar el mérito ó el valor cívico ó militar, como cruces, placas, etc.

En R. O. de 9 de julio de 1853 se previno que en ningún caso se expidan duplicados de los diplomas de condecoraciones, y que los interesados puedan en su caso reclamar certificado de la toma de razon de las oficinas correspondientes. Y en otra de 18 de julio de 1860, resolviendo una consulta «sobre el modo en que deberán colocarse las condecoraciones en el pecho y el tamaño en que deberán usarse,» se mandó observar las reglas siguientes.

1.ª No se podrán usar condecoraciones

de mayor tamaño que el presijado á las mismas, cuando respectivamente fueron creadas.

2.^o Se llevarán las referidas condecoraciones con un pasador de oro que embeba las cintas correspondientes, las que no guardarán mas distancia entre sí que la precisa para fijar un ligero filete ó bisel que las divida, quedando unidas á los pasadores con una pequeña anilla, sin que cuelgue ó sobresalga cinta alguna.

3.^a Cuando hubiere necesidad de colocarlas en dos órdenes se pondrá el 1.^o á la altura del primer boton de la levita ó casaca, y el 2.^o á la del 3.^o, colocándose en una distancia intermedia en el caso de que pudieran llevarse en un solo orden é inmediatamente por bajo de ellas, las placas que correspondan á ciertas condecoraciones.» V. CRUCES: INSIGNIAS: ORDENES DE CABALLERÍA, ETC.

CONDENA. Pena impuesta por sentencia ejecutoriada. Sobre cumplimiento de condenas y penas en que incurren los que las quebranten, véase el Código penal, arts. 89 á 114, 124, 506 y las notas que contienen estos artículos.

CONDESTABLE. En lo antiguo el que obtenia y desempeñaba la primera dignidad en la milicia. Hoy es el encargado de las municiones y pertrechos de artilleria en los buques de guerra.

Por R. O. de 25 de setiembre de 1845 se estableció una escuela de condestables en el departamento de Cádiz, y en otra de 9 de marzo de 1858 se aprobó el reglamento de dicha escuela.

CONDICIONES. Las condiciones pueden tener lugar en los contratos y en los testamentos; en unos y otros para modificar ó extender, ó dar ó dejar sin efecto la obligacion ó la institucion. Las condiciones son ó suspensivas ó resolutorias, y unas y otras ó potestativas, ó casuales ó mistas.

Condiciones suspensivas son las que suspenden el cumplimiento de la obligacion, institucion ó legado hasta que se verifique ó no un acontecimiento futuro ó incierto.

Condiciones resolutorias son las que al cumplirse producen la resolucion de la obligacion ó institucion, ó sea su revocacion ó invalidacion, reponiendo las cosas en el estado que tenian antes del otorgamiento. Estas condiciones se so-

brentienden en los contratos bilaterales, para el caso de que uno de los contrayentes no cumpliere su obligacion; pues entonces tendrá el otro la eleccion de compelerle al cumplimiento de la misma, ó de pedir su rescision ó resolucion con el resarcimiento de daños y perjuicios. Téngase presente que la resolucion no puede tener lugar en perjuicio de tercero que tenga inscrito su derecho conforme hemos dicho en ACCIONES RESCISORIAS Y RESOLUTORIAS.

Condiciones potestativas son las que dependen puramente de la voluntad de las personas á quienes se imponen, y si no se cumplen no tiene efecto la institucion, ó el legado ó el contrato. Sin embargo, cuando el heredero ó legatario han querido, pero no han podido cumplir la condicion por un acontecimiento que no se pudo precaver ni evitar valdrá la institucion ó el legado (ley 14, tit. IV, Partida 6.^a) y lo mismo el contrato (1). Las condiciones deben ser posibles, honestas y conformes al derecho, á la moral y á las buenas costumbres, y no siéndolo se tienen por no puestas en los testamentos (2) é invalidan ó anulan los contratos ley 3.^a, tit. IV, Partida 6.^a.)

Condiciones casuales son las que dependen enteramente del acaso. Estassuspenden así los actos entre vivos como las disposiciones testamentarias; de modo que ni las promesas, ni la institucion, ni el legado condicionales tienen efecto hasta el cumplimiento de la con-

(1) Cuando el cumplimiento de la condicion de un contrato no depende de la voluntad del obligado sino de la de un tercero á quien no puede compeler de modo alguno, si el obligado hace cuanto está de su parte para cumplir la obligacion, es valido el contrato, y la sentencia que así lo estima no infringe la ley 1.^a, tit. I, lib. 10 de la Nov. Recop., ni la 12, titulo XI, Partida 5.^a (T. S. sentencia de 19 de noviembre de 1866).—La condicion indicada no es de las reputadas imposibles en la ley 17, titulo XI, Partida 5.^a

(2) La condicion exigida por un testador de haber de casarse su heredero con persona de familia determinada debe reputarse por no puesta, por ser contraria en general á las buenas costumbres y á la libertad del matrimonio. (T. S. sentencias de 20 de enero de 1866 y 15 de julio de 1848.)

dicion, (ley 14, tít. XI, Part. 5.^a y 8.^a, tít. IV, Part. 6.^a) cuya falta los anula. Cumplida la condicion, la obligacion ó institucion se consideran puras; y sus efectos, en suspenso hasta entonces, se retrotraen al momento en que se hubieran cumplido á no mediar la condicion. Es mas; en los contratos la obligacion condicional se trasmite á los herederos; pero en los testamentos se extingue en el heredero ó legatario cuando mueren pendiente la condicion de la sustitucion ó legado.

En conclusion las condiciones que se imponen en las cláusulas testamentarias, lo mismo que las que se estipulen en los contratos, siendo posibles, conformes á derecho y honestas, ó lo que es igual, no siendo contrarias á las leyes y á las buenas costumbres, deben cumplirse. Pero de ellas debemos decir lo mismo que de los contratos y actos en que se contienen, asi en cuanto á su interpretacion si no están claras, como respecto de su justificacion en juicio, ó de la justificacion de su cumplimiento, ó de que este es imposible, para los efectos que en derecho procedan.—V. CONTRATOS: OBLIGACIONES: OBRAS PÚBLICAS.

CONDOMINIO. El dominio de alguna cosa que pertenece en comun á dos ó mas personas. Condóminos, ó comuneros ó condueños son pues los que tienen la participacion en la cosa indivisa. Cualquiera de los que poseen una herencia en comun está obligado á consentir en la particion si algun condómino lo pide, lo cual ha establecido la ley para evitar las discordias que nacen con frecuencia de la indivision, y porque teniendo cada uno lo suyo separadamente, lo alia y aprovecha mejor. (*Leyes 1.^a y 2.^a, tít. XV, Part. 6.^a*) (1).

Si la cosa no es partible como un caballo, un reloj, un molino, ó no es fácilmente partible, sin gran menoscabo, cada dueño tendrá el derecho de pedir

que el otro ó cualquiera de los otros compre ó venda, y si entre los condóminos hay mas de uno que la quiera se saca á pública subasta entre ellos y se adjudica á quien mas ofrezca, pudiendo acordar ellos ó el juez en caso de pleito la admision de postores extraños, ateniéndose en este caso á lo prevenido en la ley 10, tít. XV, Part. 6.^a que establece el «*poderio que ha el juez ante quien vienen á pleito los herederos en razon de la particion.*» Fuera del caso indicado «*fuerza nin premia non debe ser fecha á ninguno de vender lo suyo, nin otro de comprar si non quisiere*» como dice la ley 3.^a, tít. V, Part. 5.^a, la cual hace asimismo excepcion de cuando entre dos tienen un siervo y uno quiere darle la libertad que podrá ser el otro apremiado ó venderle.

La indivision de la cosa no priva á todos ó á cada uno de sus dueños de la facultad de enajenarla, sobre cuyo punto y otros está terminante la ley 55, título V, Partida 5.^a que dice: «*Dos omes ó mas habiendo alguna cosa comunamente de so uno decimos que cualquier dellos puede vender la su parte, maguer la cosa non sea partida, et puede la vender á cualquier de aquellos que han parte en ella ó á otro extraño; pero si alguno de los que han parte en la cosa quisiese dar tanto por aquella parte que quieren vender como el extraño, ese la debe haber ante quel extraño. Et la vendida del extraño se debe entender que puede ser fecha ante que sean entrados en pleito de la partir, ca si pleito fuese ya comenzado en juicio para partirla, entonces non la podrie vender á extraño fasta que partida fuese, fueras ende con otorgamiento de los otros aparceros.*» Entiéndase, sin embargo, que esta ley solo autoriza á los condueños á vender su parte, la que sea, y como le pertenezca; no una parte fija y determinada que el vendedor señale á su arbitrio, tal vez en perjuicio de los condóminos (*T. S. sentencia de 13 octubre de 1866.*)

(1) Respecto de los montes comunes ténganse presentes los arts. 6.^o y 7.^o, 15 y 18 de las ordenanzas (V. MONTES) y respecto á *pastos públicos* en general la R. O. de 18 de mayo de 1838.

Para que la finca indivisa no se perjudique por culpa de los condueños es-

tablece la ley 26, tít. XXXII, Partida 3.^a que si alguno de los aparceros la manda labrar é reparar de lo suyo en su nombre y el de sus compañeros, haciéndose-lo saber primeramente, quedan obligados los otros cada uno por su parte á reintegrarle los gastos que hizo á pro de la cosa comun, y que si dentro de los cuatro meses siguientes al dia en que se acabó la lavor y le fué demandado el pago no le verifican pierdan las partes que tengan y quedan libres y quitas á aquel que hizo la reparacion.

Mas entiéndase que ha de preceder el aviso, sin el que no se presume buena fé, y el condeño que hace la obra pierde en este caso las misiones (los gastos) que hubiera hecho quedando la obra para todos, como así lo tiene establecido tambien la jurisprudencia del Tribunal Supremo en la siguiente

Sentencia de 14 de mayo de 1867.

AUDIENCIA DE VALLADOLID. Recurso de casacion interpuesto por D. Juan Mariano Aparicio contra sentencia de la Sala 1.^a en pleito promovido por D. Juan Arias Giron, por sí y como cesionario de D. José Continho, sobre pago de mavedis con motivo de obras innecesarias y ejecutadas por Aparicio en unas fincas que llevaba en propiedad en union con los anteriores, pidiendo se le condenase á la pérdida de dichas mejoras, abonándoles el saldo resultante de la cuenta que acompañaban, con mas 5.940 reales importe de la renta vencida en aquel año. Impugnada la demanda por Aparicio, pretendiendo, que se declarara bueno y procedente el cargo de la cuenta por él formada, así como tambien el mayor valor que la finca tenia por haber practicado dichas mejoras, y reconocidas estas por peritos, dictó sentencia el juez que confirmó la referida Sala, condenando á Aparicio á satisfacer á los demandantes la cantidad de 63.638 rs. y 30 cénts., importe de dicho saldo, con mas el de las rentas vencidas.

Aparicio para fundar el recurso de casacion cita como infringidas muchas leyes de que se hace mérito en los considerandos; pero el Tribunal Supremo,

Sala 1.^a, Seccion 2.^a por sentencia de 14 de mayo declara no haber lugar al recurso:

«Considerando que, el principio de derecho de que la mala fé no se supone no se quebranta cuando la ley la da por existente, haciendo ó dejando de hacer lo que ella previene:

Considerando que, segun lo dispuesto en la 26, tít. XXXII de la Partida 3.^a, el que hace obras en la cosa comun á mala fé, no haciéndolo saber á sus compañeros, incurre en la responsabilidad de perder las misiones que hubiera hecho, y debe quedar lo obrado así para todos los condóminos:

Considerando, con relacion á este pleito, que no se infringe la referida ley, cuando por no haberse probado á juicio de la Sala sentenciadora que se hubiera dado el prévio aviso para hacer obras en la finca comun, se impone la responsabilidad designada en la misma, no dando lugar al abono de las misiones que se hicieron en el caso actual sin la expresada é imprescindible formalidad:

Considerando que las leyes 26 y 28, título XII de la Partida 5.^a, relativas al agente oficioso ó administrador voluntario, así como las 41 y 42, tít. XXVIII de la Partida 3.^a, que lo son á cómo deben cobrarse las des-pensas hechas en las cosas compradas de buena fé en el caso de restitucion, ó en las que se tuviesen de mala fé; la 11, tít. XV; 16, tít. X, y 29, tít. XII de la Partida 5.^a, que se refieren á los que enajenan las cosas maliciosamente y en fraude de sus acreedores, á las des-pensas y deudas que alguno de los compañeros hiciere en pro de la compañía, y á los que recabdan cosas ajenas con mala intencion, no son aplicables á los actos del aparcerero que hace obras en la finca comun sin prévio aviso, como se comprende con la lectura de sus epígrafes y literal contexto; no habiendo podido por tanto ser infringidas por la sentencia cuya casacion se pretende:

Considerando que la ley 10, tít. XXXIII de la Partida 7.^a, y las de su referencia, así como el cánón jurídico de *Peritis in arte credendum*, no se han infringido; la primera porque se limita, relativamente al asunto litigioso, á definir las des-pensas necesarias, útiles y voluntarias; las otras, que son sin duda las precitadas, por no tener aplicacion al caso actual, segun queda consignado; y el expresado cánón porque, determinando la ley que no se abonen des-pensas en este caso, tampoco ha apreciado la Sala que las hubiera necesarias:

Considerando que, no existiendo en el título XXXIII de la Partida 7.^a mas que 12 leyes, no ha podido ser infringida la 13; y que la regla de derecho de que ninguno debe enriquecerse tortíceramente con daño de otro, que es la 17 de las contenidas en el subsiguiente tít. XXXIV, á la que seguramente se alude, no puede tener aplicacion á un litigante que no obra mal usando de su derecho:

Considerando que la ley 21, tít. XIV de la Partida 5.^a, que hace compensables las deudas líquidas, no puede ser infringida cuando los créditos con que debiera verificarse la compensacion no se han declarado de abono, por mas que se hayan apreciado y tasado á instancia de quien lo reclamaba, pues falta el supuesto de la misma ley:

Y considerando, por último, que los artículos 256 y 333 de la de Enjuiciamiento civil, que ordenan cómo deben fijarse los puntos de hecho y de derecho, objeto del pleito, y la forma en que han de dictarse las sentencias, no pueden invocarse para sostener el recurso de casacion en cuanto á lo esencial del pleito, por referirse á la forma del mismo, segun repetidamente lo tiene declarado este Tribunal.» (*Gac.* 17 mayo).

—V. ADMINISTRADOR DE PARTICULARES: RETRACTO etc.

CONDONACION. El perdon ó remision de una deuda. La condonacion para que surta efecto ha de hacerse por palabras ó hechos que la manifiesten claramente y sin género de duda.

No puede entenderse condonacion ó remision de deuda, la declaracion que hace el acreedor en documento de que no podrá exigírsela judicialmente al deudor, por considerarle en aquel acto insolvente, y que deja á su voluntad el que bajo su buena fé la venga satisfaciendo cuando le sea posible. La duda que puede ofrecer este contrato está bien resuelta, conforme á la regla 1.^a, de la ley 2.^a, tít. XXXIII, Part. 7.^a; habiendo condenado al deudor á pagar en los plazos que señalasen peritos, teniendo en cuenta las utilidades que podia reportar aquel con un establecimiento industrial de su propiedad. (*Sent. del T. S. de 15 de junio de 1866.*)—V. COMPENSACIONES ADMINISTRATIVAS.

CONDUCCION DE PRESOS Y PENADOS.

Desde el establecimiento de la Guardia civil se ha encargado tan benemérito

Cuerpo de la conduccion de presos, evitándose á los pueblos tan penoso servicio. Hé aquí las disposiciones que sobre este asunto se deben tener presentes.

R. O. de 26 agosto de 1849.

Prohibe la conduccion por tránsitos de justicia en justicia; excepcion, etc.

(Gov.) «Para prevenir las fugas de los presos y penados al tiempo de ser trasladados de un punto á otro, asegurando la conduccion, conciliando el servicio público de este ramo con las demás atenciones que rodean á la Guardia civil, y haciendo efectiva la responsabilidad de las evasiones contra quien corresponda, la Reina (Q. D. G.) se ha servido mandar lo siguiente:

1.^o Se prohibe la conduccion de presos y penados por tránsito de justicia en justicia con escolta de paisanos armados.

2.^o Se exceptúan las conducciones de los encausados por delitos leves, en los casos que determinen las respectivas autoridades judiciales.

3.^o Con arreglo á las leyes y sin contemplacion alguna, se exigirá la responsabilidad á los Alcaldes ó conductores por toda falta en el servicio señalado en la excepcion del párrafo anterior.

4.^o Las conducciones de presos y penados se harán por regla general por la Guardia civil, bajo la responsabilidad del jefe que la mande.

5.^o A falta de la Guardia civil y cuando esta fuerza se halle completamente ocupada en otros servicios preferentes, se encargará de dichas conducciones con igual responsabilidad cualquiera otra fuerza organizada que dependa inmediatamente de este Ministerio.

6.^o En último término se recurrirá á las autoridades militares para que faciliten la correspondiente escolta del ejército.

Y 7.^o Que si las conducciones se han de verificar á largas distancias ó fuera de la provincia, cuiden las autoridades civiles de la seguridad de los presos poniéndose de acuerdo con las militares, combinando el modo de relevar la fuerza siempre que sea posible y se considere conveniente.—De Real orden, etc.—Madrid 26 de agosto de 1849.» Comunicada á la inspeccion general de la Guardia civil en 20 de setiembre. (*CL. t. 47, p. 669.*)

R. O. de 26 junio de 1852.

Escoltas del ejército.

(GUERRA.) «....Conformándose S. M. con el parecer de la Seccion de Guerra del Con-

sejo Real.... se ha servido resolver que, siempre que la conduccion de presos rematados, ó de otra especie exija una escolta mayor de una pareja (de la Guardia civil) y que por esta razon la autoridad civil pidiese á la militar la cooperacion de la fuerza del ejército, se disponga este servicio por las autoridades superiores militares.—De Real orden, etc.—Madrid 26 de junio de 1852.» (CL. t. 56, p. 252.)

Circ. de 20 setiembre de 1855.

Por esta circular recuerda la inspeccion general de la Guardia civil el exacto cumplimiento de lo mandado en el reglamento del Cuerpo sobre conduccion de presos.

No hacemos mérito de algunas otras disposiciones anteriores al reglamento vigente de la Guardia civil, por hallarse embebidas en el art. 29 de dicho reglamento que insertamos en el artículo GUARDIA CIVIL.

CONDUCTORES DE LA CORRESPONDENCIA.—V. CORREOS.

CONFESION. CONFESOR. La *confesion* sacramental en secreto es de precepto divino, no así la pública que se hacia en los primitivos tiempos, en los que la caridad de los fieles solo los dejaba ver en los penitentes humillados el triunfo de sus virtudes y los efectos de la gracia. *Confesor* es el sacerdote que tiene el poder de oír los pecados de los fieles y absolverlos de ellos.

Se exige en los confesores como una de las cualidades mas indispensables el secreto. Santo Tomás dice que deben guardarle despreciando todas las amenazas y penas, que pueden en su caso negar un hecho contra la verdad, aunque sea con juramento, y aunque puedan resultar grandes males del secreto. Un confesor no debe decir, tampoco, que ha negado la absolucion á su penitente.

V. ABSOLUCION SACRAMENTAL: ADMINISTRACION DE SACRAMENTOS: CEMENTERIOS Y SEPULTURAS: CURA PÁRROCO: TESTAMENTO.

CONFESION CON CARGOS. Se ha abolido en las causas criminales por el Real decreto de 26 de mayo de 1834, inserto en el Apéndice al Código penal, página 210 de este tomo. El decreto citado se ha declarado aplicable, por R. O. de 3 de julio de 1854 á las causas criminales

sobre delitos comunes de que conocen los Juzgados de Hacienda.—V. CONTRABANDO: JURISDICCION DE HACIENDA.

CONFESION JUDICIAL. Medio de prueba de que puede hacerse uso en juicio con arreglo á los arts. 279, 292 á 301 de la Ley de Enjuiciamiento civil.

Es un principio de derecho que *confessus pro judicato habetur*, mas para que la confesion hecha en juicio tenga el valor de prueba perfecta y acabada que dan á la *conoscencia* las leyes 1.^a, 2.^a y 4.^a del tit. XIII, Partida 3.^a se requiere que sea explicita y concreta ó absoluta, ó que *sea dicha en cierto sobre cosa ó cuantia ó fecho para tener daño á aquel que la face et pro á su contendor.* (*Sentencias del T. S. de 13 febrero de 1867, 13 noviembre de 1866, 23 de diciembre de 1865 y otras.*)

Lo que expone un litigante en sus escritos no puede tener la fuerza de la *conoscencia*. (*Sents. de 24 de febrero y 20 de junio de 1865 y otras.*)

La ley quiere que se declare ó sea tenido por confeso el que se resista á comparecer á declarar, conminado por segunda vez (arts. 292, 293 y 297 ley de Enjuiciamiento civil,) pero esta declaracion es apelable segun el art. 299 y no tiene por tanto valor hasta que quede firme y surta sus efectos con arreglo á la ley. (*Sent. de 9 de diciembre de 1864.*)

—V. CITACION: COMPARECENCIA: ENJUICIAMIENTO CIVIL.

CONFINADOS CUMPLIDOS. Por Real orden de 2 de diciembre de 1852, se mandó contra lo dispuesto en otra de 23 de junio de 1848 que á los confinados cumplidos se les entreguen las respectivas licencias además del correspondiente pasaporte, con arreglo á lo dispuesto en el art. 310 de la Ordenanza general de presidios.—V. PENADOS: PRESIDIOS.

CONFINAMIENTO. (PENA.) Véanse los arts. 24, 26, 28, 58, 107 y 108 del Código penal.

CONFISCACION. Pena, con razon calificada de injusta, bárbara y antipolítica que consistia en apoderarse el Fisco de todos los bienes del reo condenado á ella, sin considerar que venian á sufrirla

tambien los inocentes hijos y herederos del culpable. Ha sido abolida por el artículo 10 de la Constitucion de 1837, igual al 10 de la de 1845, y aun sin esto no figura en el catálogo de las que establece el Código penal vigente.

CONFITEROS Y LICORISTAS. Sobre las sustancias que pueden emplear en la coloracion de dulces y licores, y las que son dañosas á la salud, remitimos á nuestros lectores al artículo ABASTOS, y tambien al núm. 9, art. 486 del Código penal.

CONGREGACIONES RELIGIOSAS.—V. CONCORDATOS: MONASTERIOS.

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. Uno de los dos Cuerpos colegisladores ó en quienes, á la vez que en el Rey, reside la potestad de hacer las leyes.—V. CONSTITUCION Y DIPUTADOS Á CÓRTEES, en cuyos artículos se hallará todo lo concerniente á la organizacion de este Cuerpo colegislador y á la celebracion y facultades de las Córtes. Ahora solamente diremos que por decreto de las Córtes ó ley de 10 de noviembre de 1837 se mandó inscribir en el salon del Congreso, en letras de oro, los nombres ilustres de *Riego*.—*Empeñanado*.—*Manzanares*.—*Millar*.—*Mariana Pineda*.—*Torrijos*.

CÓNGRUA. Llámase cóngrua, ó *portio congrua*, la renta eclesiástica señalada por el Sínodo para la manutencion del que se ha de ordenar *in sacris*.—V. BENEFICIO: CAPELLANÍA: CONCORDATOS.

CONJUNCION. Es un modo de adquirir el dominio, como hemos dicho en ACESION.

CONMINACION. El apercibimiento judicial que se hace á una persona para que le pare perjuicio, si hace ó deja de hacer alguna cosa.

CONMISTION.—V. ACCESION.

CONOCIMIENTO. En el comercio marítimo es el instrumento ó resguardo que contiene la indicacion de las mercaderías, que el cargador ha entregado á bordo de la nave para su transporte. Se aplica tambien á los trasportes terrestres. La seguridad que adquiere el que paga una letra de cambio por medio de una persona conocida, que le garantice

que el portador de aquella es persona legítima.

CONOSCENCIA.—V. CONFESION JUDICIAL.

CONSAGRACION. La ceremonia que hace una cosa sagrada.

CONSANGUÍNEO. CONSANGUINIDAD.—V. PARENTESCO.

CONSEJO DE MINISTROS.—V. MINISTROS DE LA CORONA.

CONSEJO DE INSTRUCCION PÚBLICA. Se reconoce su existencia por la ley de instruccion pública de 9 de setiembre de 1857, y al efecto se publicó en 24 de diciembre del mismo año un reglamento que determinó su organizacion y atribuciones.—V. INSTRUCCION PÚBLICA, INSTRUCCION PRIMARIA.

CONSEJO DE SANIDAD.—V. SANIDAD.

CONSEJOS DE GUERRA.—V. JURISDICCION DE GUERRA.

CONSEJO DE AGRICULTURA. Hoy se llama Consejo de agricultura industria y comercio y hemos tratado de él en el artículo AGRICULTURA..... (Consejo de) tomo 1.º pág. 205.

CONSEJOS. Se han conocido con este nombre diversos Cuerpos auxiliares de la Administracion pública, y que á mas de consultivos reunian muchos de ellos ciertas atribuciones judiciales. Hoy no se conoce mas que un Consejo supremo, el de Estado. Los demás todos fueron suprimidos en 24 de marzo de 1834. Reseñaremos primero dichos Consejos, y concluiremos por ver los términos de la supresion.

Consejo de Castilla. Fundólo el Santo Rey D. Fernando en el año 1245. Carlos V le dió nueva forma en 1526; su hijo Felipe II hizo otro reglamento en 1586, y despues, en los reinados de Felipe III y de Felipe V, se completó la reforma. Estaba dividido en cinco Salas: una conocia de todos los negocios y expedientes de jurisdiccion eclesiástica, tutelas de grandes, temporalidades, etc.: otra en los recursos de injusticia notoria de las Chancillerías y Audiencias: otra, ó la de mil y quinientas, conocia en los pleitos de tenutas de estados y mayorazgos: otra conocia en todo lo relativo á la retencion de Bulas y Breves

apostólicos. Y últimamente, *otra* llamada de provincia, conocía de todos los pleitos civiles apelados, de los autos interlocutorios y sentencias dadas por los Alcaldes de corte. En la Sala primera se celebraba el *Consejo pleno* con todos los Ministros para deliberar sobre algunos negocios que remitía el Rey sobre publicación de paz, promulgación de pragmáticas, exámen de los Breves apostólicos, etc. Se ha conocido con el nombre de *Consejo Real* ó *Consejo Supremo de Castilla*.

Consejo de Estado. Llamado antiguamente *Consejo del Rey*. Tiene este Consejo la misma antigüedad que la Corona, porque desde el principio los Reyes consultaban los negocios graves del Reino con los Príncipes y magnates que asistían en su Palacio y corte, y los acompañaban á todas partes. Hoy subsiste este Consejo con la organización y atribuciones que establece la ley de 17 de agosto de 1860, según vamos á ver.

Consejo de la Cámara. Fué establecido en 1518 por Carlos V y su madre doña Juana. Felipe II le aplicó el conocimiento de todas las materias pertenecientes al Patronato.—V. CÁMARA ECLESIÁSTICA.

Consejo Supremo de Hacienda. Le estableció Felipe II, cometiéndole la dirección de la Hacienda y el fallo de los negocios contenciosos de ella. La calificación de *Supremo* no se le dió á este Consejo hasta el año 1802, en que fueron igualados sus Ministros en sueldos y honores á los del Consejo de Castilla é Indias.

Consejo Supremo de la Guerra. Conocía privativamente de todos los negocios relativos á Guerra y Marina, ofensa y defensa, tropas, fábricas de armas, etc.

Consejo de las Ordenes. Fué instituido por los Reyes Católicos, y conocía de los negocios religiosos de las cuatro órdenes militares.—V. TRIBUNAL DE LAS ÓRDENES.

Consejo de Indias. Fué creado por D. Fernando el Católico, y su jurisdicción se extendía á todo lo relativo á mar

y tierra de nuestras provincias de Ultramar. En 30 de setiembre de 1851 se creó un *Consejo* denominado de *Ultramar*; pero también fué suprimido, como lo había sido el de Indias, por Real decreto de 21 de setiembre de 1853, encomendándose sus atribuciones al Consejo Real, hoy al de Estado.

Consejo de Aragon. Fué instituido por los Reyes Católicos en 1494 y conocía de los negocios tocantes á la corona de Aragon, Valencia, Principado de Cataluña, Mallorca, Menorca é Ibiza. Fué abolido por Felipe V derogando los fueros de Aragon, y mandando se atemperasen á las leyes de Castilla, y al uso, práctica y forma de gobierno que se ha tenido y tiene en ella y en sus tribunales.—V. FUEROS PROVINCIALES.

Supresion de Consejos. Los términos con que está concebida la supresion de los Consejos de que queda hecho mérito, son los siguientes:

Rs. Ds. de 24 marzo de 1834.

Suprimiendo los Consejos de Castilla, Indias, de Guerra, y de Hacienda.....

(FOM.) «Mis benéficas miras en favor del buen régimen de la Monarquía no pudieran producir los bienes que de ella deben esperarse, ni caminar con desembarazo mi Gobierno por la senda de las mejoras y adelantos, mientras subsista en pie la viciosa organización que en la actualidad tienen los Cuerpos principales del Estado. Hasta las mismas reformas que se están planteando, y de que tantas esperanzas se promete ya la nación, no llegarían á madurez, y aun tal vez muchas de ellas se convertirían en perjudiciales, si al mismo tiempo no se cuidase de establecer la necesaria armonía y correspondencia entre las diferentes partes del sistema administrativo.

Muchas son las causas que han producido en él tanta confusión y desarreglo, pero pocas de mayor trascendencia y de influjo más pernicioso que la mezcla de atribuciones judiciales y administrativas en los mismos cuerpos y autoridades; resultando muchas veces de este vicioso origen que mientras más providencias se han dictado para promover los varios ramos de la pública felicidad mayores han sido las trabas que se han opuesto á su acrecentamiento y desarrollo.

Si un plan acorde y sencillo, en que estén eslabonadas con la conexión necesaria

todas las autoridades administrativas, de tal manera que correspondan las unas con las otras, libres de obstáculos extraños que entorpezcan su accion y movimiento, no es humanamente posible que se establezca aquel orden y concierto que es de la exencia misma de un Gobierno bien constituido.

Con el propósito y deseo de conseguir un fin tan importante, y despues de haber oido al Consejo de Gobierno y al de Ministros, he venido en expedir, en nombre de mi muy cara y augusta hija, los Reales decretos siguientes:

Decreto 1.º

Por este decreto se declaró en suspenso el Consejo de Estado, durante la menor edad de la Reina Doña Isabel II, mediante á estar en ejercicio el Consejo de Gobierno establecido por Fernando VII en su testamento.

Decreto 2.º

Art. 1.º Quedan suprimidos los actuales Consejos de Castilla y de Indias.

Art. 2.º En su lugar instituyo un Tribunal Supremo de España é Indias.

Decreto 3.º

Art. 1.º Queda suprimido el Consejo Supremo de la Guerra.

Art. 2.º En su lugar instituyo un Tribunal Supremo de Guerra y Marina y extranjería.

Decreto 4.º

Art. 1.º Queda suprimido el actual Consejo Supremo de Hacienda.

Art. 2.º En su lugar instituyo un Tribunal Supremo de Hacienda. (Hoy el Tribunal de Cuentas.)

Decreto 5.º

Por este decreto se mandó al secretario del despacho de Gracia y Justicia proponer á la posible brevedad la nueva planta y organizacion del Consejo de las Ordenes.

Decreto 6.º

Y últimamente por el decreto 6.º se instituyó un *Consejo Real de España é Indias*, de nuevo establecido en 6 de julio de 1845, y que hoy se llama *Consejo de Estado* segun dejamos dicho en su lugar.

—V. CONSEJO DE ESTADO: JUSTICIA: JUZGADOS Y TRIBUNALES.: TRIBUNAL DE CUENTAS.

CONSEJO DE ESTADO. Cuerpo supremo consultivo del Gobierno en los asuntos de Gobernacion y Administracion del

Estado, y en los contencioso-administrativos de la Península y Ultramar. Precede á todos los Cuerpos del Estado despues del Consejo de Ministros (1).

Llamábase Consejo Real por la ley de 6 de julio de 1845, pero se le varió el nombre por R. D. de 14 de julio de 1858 y despues mas solemnemente por la ley de 17 de agosto de 1860.

Esta ley que vamos á insertar íntegra, dispone en su título I todo lo relativo á la organizacion del Consejo. Se compone este de los Ministros de la Corona, de un *Presidente* y de 32 consejeros. Tiene el Consejo tratamiento impersonal (art. 1.º) y los consejeros el de excelencia. Su sueldo es 60.000 rs. y 120.000 el Presidente. En los arts. 4.º y siguientes se determinan la edad y demás requisitos para ser nombrado consejero, la forma del nombramiento y separacion (art. 9.º) la incompatibilidad de este cargo con cualquiera otro en sociedades industriales ó mercantiles (art. 8.º), el juramento que deben prestar, la presidencia de las Secciones (arts. 20 á 23) etc. etc.

El Consejo se divide en seis Secciones que se determinan en el art. 15.

La manera de conocer en los negocios es, segun los casos, ó en Consejo *pleno* concurriendo lo menos 17 consejeros (arts. 13, 14 y 18); ó en *Sala de lo Contencioso* que se compone de la Seccion de este nombre, de dos consejeros de la Seccion respectiva, y de otro de cada una de las Secciones, (arts. 13, 15 á 19 y 22); ó últimamente conoce en Secciones, conforme á los arts. 13, 15 á 17 y 22.

El Consejo tiene además su *fiscal de lo Contencioso* y su *Secretario general* cuyo nombramiento, separacion, sueldo, requisitos etc. se determinan en los artículos 25 y siguientes, así como la dotacion de oficiales y aspirantes y las circunstancias etc. que deben reunir.

Basta á nuestro objeto esta ligera idea

(1) Art. 1.º Ley de 17 de agosto de 1860. En cuanto á la precedencia ya estaba declarado por R. O. de 3 de enero de 1858 que en los actos y ceremonias públicas á donde asista oficialmente preceda á todas las demás Corporaciones del Estado, ya del órden administrativo ya del judicial.—V. PRESIDENCIA Y PRECEDENCIAS.

de la organizacion del Consejo determinada como ya hemos indicado en el título I de la ley de 1860, que con los reglamentos vigentes, aunque anteriores á la misma, y las disposiciones dictadas despues insertamos integramente. A saber:

Ley de 6 julio de 1845.

Segun ya hemos indicado en las líneas de entrada á este artículo, esta ley ha sido derogada por la de 17 de agosto de 1860, por cuya razon no la insertamos. Por la ley de 1845 era otra muy distinta la organizacion del Consejo Real de lo que es hoy la del Consejo de Estado.

Ley de 17 agosto de 1860.

Organizacion del Consejo de Estado: Atribuciones:
Modo de proceder.

(PRES. DEL C. DE M.) Doña Isabel II, etc.: á todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed: que las Córtes han decretado y Nos sancionado lo siguiente:

TÍTULO I.

DE LA ORGANIZACION DEL CONSEJO DE ESTADO.

Artículo 1.º El Consejo de Estado es el Cuerpo supremo consultivo del Gobierno en los asuntos de Gobernacion y Administracion, y en los contencioso-administrativos de la Península y Ultramar. Precede á todos los Cuerpos del Estado despues del Consejo de Ministros, y es impersonal su tratamiento.

Art. 2.º El Consejo de Estado se compondrá de los Ministros de la Corona, de un presidente y de 32 consejeros.

Art. 3.º El sueldo del Presidente será de 120.000 rs. anuales, y de 60.000 el de los demás consejeros.

Todos tendrán el tratamiento de excelencia.

Art. 4.º Para ser nombrado consejero de Estado se requiere ser español y haber cumplido la edad de 35 años.

Art. 5.º Veinticuatro nombramientos de consejeros habrán de recaer en personas que estén ó hayan estado comprendidas en una de las clases siguientes:

Presidente de alguno de los Cuerpos colegisladores.

Ministro de la Corona.

Arzobispo ú Obispo.

Capitan general de ejército ó armada.

Vice-presidente del Consejo Real.

Embajador.

Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, del de Guerra y Marina, ó del de Cuentas.

Art. 6.º Tambien podrán ser nombrados consejeros, en las 24 plazas á que se refiere el artículo anterior, los que hayan ejercido durante dos años en propiedad alguno de los empleos ó cargos siguientes:

Teniente general de ejército ó armada.

Consejero Real ordinario ó de Estado.

Ministro ó fiscal de alguno de los tribunales expresados en el artículo anterior.

Ministro plenipotenciario con mision á una córte extranjera.

Fiscal del Consejo de Estado ó del antiguo Real.

Auditor de número ó fiscal del Tribunal de la Rota.

Decano, Ministro ó fiscal del Tribunal de las Ordenes militares.

Regente de la Audiencia de la Habana.

Ministro ó fiscal del Tribunal Supremo contencioso-administrativo.

Para computar estos dos años se tomará en cuenta el tiempo que el nombrado haya servido en los diferentes empleos ó cargos comprendidos en este artículo.

Art. 7.º Ocho plazas de consejeros de Estado podrán proveerse en personas que, aun cuando no se hallen comprendidas en las clases de empleos ó cargos enumerados en los artículos anteriores, se hayan distinguido notablemente por su capacidad y servicios.

Art. 8.º Los consejeros de Estado, el secretario general y el fiscal no podrán ejercer ningun cargo en sociedades industriales ó mercantiles.

Art. 9.º Los consejeros de Estado serán nombrados por el Rey á propuesta del Consejo de Ministros, y en decretos especiales refrendados por su Presidente. En ellos se expresarán las calidades que den opcion al elegido para ser consejero, y la Seccion del Consejo á que ha de quedar adscrito.

Para su separacion se observarán las mismas formalidades.

Los Reales decretos de nombramiento y separacion se publicarán en la *Gaceta de Madrid*.

Art. 10. El Consejo, antes de dar posesion al nombrado, examinará si su nombramiento se halla arreglado á lo prescrito por esta ley; y si esto ofreciese alguna duda, la elevará al Gobierno, suspendiendo la posesion hasta que resuelva lo que estime conveniente.

Art. 11. Los consejeros, antes de tomar posesion, jurarán ser fieles á la Reina; ha-

berse fiel y lealmente en el desempeño de su cargo; procurar el bien de la nacion, y consultar con arreglo á la Constitucion y á las leyes en los negocios que le sean encomendados.

Art. 12. Siempre que el Gobierno lo estime conveniente, podrá autorizar para que asista al Consejo con voto un comisario que sea jefe superior de la administracion civil ó militar.

Art. 13. El Consejo de Estado conocerá de los negocios de su competencia en Consejo pleno, en Sala de lo contencioso y en Secciones.

Art. 14. El Consejo pleno no podrá deliberar sin la concurrencia de 17 consejeros, y en todos los casos sin la mayoría de la Seccion que haya preparado el dictámen.

Art. 15. Las Secciones serán seis, correspondiendo á cada una de ellas el número de consejeros letrados que sigue:

A la de Estado y Gracia y Justicia, tres.

A la de Guerra y Marina, uno.

A la de Hacienda, uno.

A la de Gobernacion y Fomento, dos.

A la de Ultramar, dos.

En la de lo Contencioso, todos serán letrados.

En la Seccion de Ultramar habrá siempre dos consejeros que hayan servido en aquellas posesiones.

Art. 16. Cada Seccion tendrá un presidente nombrado en la forma que expresa el art. 9.º

Art. 17. El Gobierno, oyendo al Presidente del Consejo de Estado, designará al principio del año por Reales decretos el número de consejeros de que haya de componerse cada Seccion, y aquella á que haya de corresponder cada consejero; designacion que podrá variar en lo sucesivo en la misma forma, segun lo exijan las necesidades del servicio.

Art. 18. El Consejo pleno se constituirá en Sala de lo contencioso para la resolucion final de los negocios contencioso-administrativos sobre que haya informado tambien en pleno, ó de los que se lleven á él por recurso de revision. Para que haya acuerdo en el Consejo así constituido, se necesita la asistencia de 17 consejeros.

Art. 19. Para la resolucion final de los demás negocios contencioso-administrativos, formarán la Sala de lo contencioso la Seccion de este nombre, dos consejeros de la Seccion que entiende especialmente en los asuntos del Ministerio á que corresponda la reclamacion, y otro de cada una de las demás Secciones.

No podrá haber acuerdo sin la asistencia de nueve consejeros.

Art. 20. Cuando no asista al Consejo pleno el Presidente, le reemplazará el Presidente de Seccion mas antiguo; y en el caso de ser dos ó mas de igual antigüedad el mas anciano. En su defecto el consejero mas antiguo, y entre iguales el de mas edad.

Art. 21. La Sala de lo contencioso será presidida por el Presidente del Consejo, si asistiere; en su defecto por el Presidente de la Seccion de lo contencioso; á falta de este por el presidente mas antiguo de Seccion que asista; y en caso de antigüedad igual, por el de mayor edad, entrando en defecto de los presidentes de Seccion los consejeros por el mismo orden.

Art. 22. Las Secciones, á falta de su presidente, serán presididas por el consejero mas antiguo, y en caso de igual antigüedad por el mas anciano.

Art. 23. Siempre que asistan los Ministros presidirá el Consejo de Estado el Presidente, y en su defecto el Ministro á quien corresponda por el orden de los respectivos Ministerios.

Lo mismo se hará cuando los Ministros asistan á la Sala de lo contencioso ó á las Secciones.

Art. 24. El Gobierno podrá destinar temporalmente á algunos consejeros, cuyo número nunca pasará de cuatro, con retencion de sus plazas, al mando del ejército ó armada, ó misiones diplomáticas extraordinarias, ó comisiones régias para inspeccionar algun ramo de la Administracion pública en la Península ó Ultramar.

Art. 25. Habrá un fiscal de lo contencioso y un secretario general del Consejo. Su nombramiento y separacion se harán por Reales decretos refrendados por el Presidente del Consejo de Ministros, y disfrutarán el sueldo de 50,000 rs.

Art. 26. Para ser nombrado fiscal ó secretario del Consejo de Estado se necesita ser letrado; haber cumplido 30 años de edad, y estar además en uno de los casos siguientes:

Haber sido fiscal del Consejo de Estado, del Real ó del Tribunal Contencioso-administrativo.

Haber sido secretario del Consejo de Estado.

Haber desempeñado en propiedad por dos años el cargo de secretario del Tribunal Contencioso-administrativo.

Haber sido por tres años fiscal de Audiencia, ó teniente fiscal, ó abogado fiscal del Consejo de Estado, del Real ó del Tribunal

Contencioso-administrativo, ó mayor de Sección de aquellos cuerpos ó catedrático de término de la facultad de Administración ó de Derecho.

Haber pertenecido al Colegio de abogados de Madrid, pagando en tal concepto una cuota de las dos mayores por espacio de cuatro años.

Haber pertenecido á un Colegio de abogados en poblacion en que haya Audiencia, pagando por espacio de cuatro años la cuota maxima de contribucion.

Sin perjuicio de la libre eleccion que dentro de estas aptitudes le corresponde, el Gobierno, antes de nombrar secretario, oirá siempre al Presidente del Consejo de Estado, que informará acerca de los que, habiendo sido mayores ó abogados fiscales el tiempo exigido por este artículo, considere mas aptos para desempeñar el cargo de que se trata.

Art. 27. Para la computacion del tiempo de que trata el artículo anterior, se estará á lo que previene el párrafo último del art. 6.º de esta ley.

Art. 28. El Consejo tendrá para el despacho de los negocios el número de oficiales y aspirantes que determinen los reglamentos, no excediendo de 40.

Unos y otros serán nombrados por la Presidencia del Consejo de Ministros, y sus nombramientos se publicarán en la *Gaceta de Madrid*.

Art. 29. En cada Sección habrá un oficial mayor, exceptuando la de Gobernacion y Fomento que tendrá dos.

El mas antiguo de los mayores tendrá 35,000 rs., y los demás 30,000

Art. 30. Los oficiales serán primeros, segundos y terceros; los primeros tendrán 20,000 rs. de sueldo; los segundos 16,000, y los terceros 12,000.

Art. 31. Los aspirantes tendrán la gratificación de 6,000 rs. anuales.

Art. 32. Las dos terceras partes de las plazas de oficiales mayores, se proveerán por antigüedad rigurosa entre los que lo sean primeros, y la otra tercera parte recaerá en empleados de otras dependencias que tengan por lo menos 10 años de servicio y hayan disfrutado por dos años un sueldo igual al asignado á las plazas de oficiales primeros del Consejo.

Art. 33. Las dos terceras partes de las plazas de oficiales primeros, se proveerán por rigurosa antigüedad entre los oficiales segundos, y la otra tercera parte del modo que queda prescrito en el artículo anterior, pero con solo ocho años de servicio, y habiendo disfrutado por dos el sueldo asignado á los oficiales segundos.

Art. 34. Las dos terceras partes de oficiales segundos se proveerán por rigurosa antigüedad en los oficiales terceros, y la otra tercera parte del modo que queda prescrito en el art. 32, pero con solo seis años de servicio, y habiendo disfrutado por dos el sueldo igual al de los oficiales terceros.

Art. 35. Las plazas de oficiales terceros se proveerán en los aspirantes por rigurosa antigüedad.

Art. 36. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos que anteceden, el reglamento del Consejo señalará el número de oficiales ó auxiliares extraños á las condiciones de esta ley que haya de haber en la Sección de Guerra y Marina.

Art. 37. Los aspirantes habrán de ser licenciados en derecho civil, canónico ó administrativo, é ingresarán en la carrera por oposicion rigurosa.

Art. 38. A las órdenes del fiscal de lo contencioso habrá dos tenientes fiscales que serán letrados. El mas antiguo tendrá el sueldo de 32,000 rs., y el mas moderno el de 26,000.

Su nombramiento será por la Presidencia del Consejo de Ministros, previa propuesta en terna del Presidente del Consejo de Estado despues de oír al fiscal.

Art. 39. El fiscal representará y defenderá por escrito y de palabra á la Administración en los negocios contenciosos; y aun cuando no fuere parte en ellos, será oído siempre que lo determinen las leyes ó reglamentos, ó lo estime la Sala ó la Sección de lo contencioso.

Art. 40. El Gobierno podrá, sin embargo de lo dispuesto en el artículo anterior, nombrar, si lo creyere conveniente, un comisario que desempeñe en determinado negocio las funciones de fiscal.

Art. 41. El secretario general tendrá á su cargo todo lo concerniente al Consejo pleno y á su organizacion; distribuirá los trabajos; deberá manifestar los antecedentes que puedan convenir para la resolucion del punto que se discuta, y llevará la correspondencia. Será además secretario de la Sala y Sección de lo contencioso.

Art. 42. Los oficiales mayores permanecerán asignados á la Sección que el Gobierno determine. Tendrán facultad de asistir al pleno, pero solo podrán usar en él de la palabra cuando se traten los asuntos instruidos por su respectiva Sección y se lo permita el Presidente del Consejo.

Los oficiales y aspirantes serán distribuidos por el Presidente del Consejo de Estado entre sus diferentes Secciones, segun con-

venga al mejor despacho de los negocios.

El reglamento del Consejo señalará sus obligaciones.

Art. 43. Los oficiales y aspirantes y los tenientes fiscales del Consejo solo podrán ser separados de sus cargos por la presidencia del Consejo de Ministros, en la misma forma que establecen para su nombramiento los arts. 28 y 38, y despues de oír al Presidente del Consejo de Estado, y al fiscal en su caso.

Art. 44. No se conferirán honores de Consejero de Estado.

TITULO II.

DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DE ESTADO.

Art. 45. El Consejo de Estado será oído necesariamente y en pleno:

1.º Sobre los reglamentos é instrucciones generales para la aplicacion de las leyes y cualquiera alteracion que en ellos haya de hacerse.

2.º Sobre el pase y retencion de las Bulas, breves y rescriptos pontificios, y de las preces para obtenerlos.

3.º Sobre todos los asuntos concernientes al Real patronato de España é Indias, y sobre los recursos de proteccion y fuerza, á excepcion de los consignados en la Ley de Enjuiciamiento civil, como propios de los Tribunales.

4.º Sobre la inteligencia y cumplimiento de los Concordatos celebrados con la Santa Sede.

5.º Sobre las mercedes de grandezas y títulos, á no estar acordadas en Consejo de Ministros.

6.º Sobre la ratificacion de los tratados de comercio y navegacion.

7.º Sobre los indultos generales.

8.º Sobre la validez de las presas marítimas.

9.º Sobre la competencia positiva ó negativa de jurisdiccion y atribuciones entre las autoridades judiciales y administrativas, y sobre los conflictos que se susciten entre los Ministerios, autoridades y agentes de la Administracion.

10. Sobre los recursos de abuso de poder ó de incompetencia, que eleven al Gobierno las autoridades del órden judicial contra las resoluciones administrativas.

11. Sobre la autorizacion que con arreglo á las leyes deba el Gobierno conceder para encausar á las autoridades y funcionarios superiores administrativos por abusos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

12. Sobre suplementos de crédito, créditos

extraordinarios, ó trasfendencia de créditos cuando no se hallen reunidas las Córtes.

13. Sobre cualquiera innovacion en las leyes, ordenanzas y reglamentos generales de las provincias de Ultramar.

14. Sobre la provision de las plazas de magistrados y jueces y presentacion de los beneficios eclesiásticos del patronato Real, segun determinen la ley de organizacion judicial ú otras disposiciones.

Art. 46. El Consejo constituido en Sala de lo Contencioso, del modo que se establece en los arts. 18 y 19 de esta ley, será oído en única instancia sobre la resolucion final de los asuntos de la Administracion central, cuando pasen á ser contenciosos, y señaladamente en los que siguen:

1.º Respecto, al cumplimiento, inteligencia, rescision y efectos de los remates y contratos celebrados directamente por el Gobierno, ó por las Direcciones generales de los diferentes ramos de la Administracion civil ó militar del Estado, para toda especie de servicios y obras públicas.

2.º Respecto á las reclamaciones á que den lugar las resoluciones particulares de los Ministros de la Corona en los negocios de la Península y Ultramar.

3.º Respecto á los recursos de reposicion, aclaracion y revision de las providencias y resoluciones del mismo Consejo.

Art. 47. Tambien será oído el Consejo sobre la resolucion final en toda última instancia de los negocios contencioso-administrativos, y señaladamente en los recursos de apelacion, nulidad ó queja.

Contra cualquiera resolucion del Gobierno acerca de los derechos de las clases pasivas civiles.

Contra los fallos de los Consejos de provincia.

Contra los fallos del Tribunal de Cuentas del Reino y de los de Ultramar en los recursos de casacion de que tratan las leyes especiales de estos Cuerpos.

Art. 48. El Consejo será oído en Secciones:

1.º Sobre los indultos particulares que no sean acordados en Consejo de Ministros.

2.º Sobre la naturalizacion de extranjeros.

3.º Sobre autorizacion para litigar que deba ser otorgada por el Gobierno.

4.º Sobre las autorizaciones que deba el Gobierno conceder para encausar por abusos cometidos en el ejercicio de sus cargos á los empleados públicos no comprendidos en la atribucion 11 del art. 45.

5.º Sobre la admision ó denegacion de

la vía contenciosa contra las resoluciones de los Ministros de la Corona ó de los directores generales de los diferentes ramos de la administración civil ó militar que causen estado.

El Gobierno podrá consultar al Consejo en pleno sobre todos los asuntos enumerados en este artículo, y acerca de cualesquiera otros de los que se hallan atribuidos en esta ley á las Secciones.

Art. 49. Será también oído el Consejo en pleno, en Sala de lo contencioso ó en Secciones, sobre todos los demás asuntos que prescriban las leyes ó disposiciones generales ó que estuvieren atribuidos anteriormente al Consejo Real ó al Tribunal contencioso-administrativo.

Art. 50. El Consejo podrá ser oído en pleno ó en Secciones cuando el Gobierno lo estime conveniente:

1.º Sobre los proyectos de ley que hayan de presentarse á las Cortes.

2.º Sobre los tratados con las potencias extranjeras.

3.º Sobre los Concordatos que hayan de celebrarse con la Santa Sede.

4.º Sobre cualquiera punto grave que ocurra en el gobierno y administración del Estado.

Art. 51. Cada Sección instruirá los expedientes relativos á los negocios que procedan del Ministerio ó Ministerios cuyo nombre lleve, y acordará los informes que sobre ellos hubiere de dar el Gobierno.

Instruirá asimismo los expedientes que hayan de informarse en pleno, formulando el proyecto de consulta.

Art. 52. Sin embargo de lo dispuesto en el artículo que antecede, despacharán la Sección de Estado y Gracia y Justicia los negocios correspondientes á indultos generales y particulares, autorizaciones para litigar, competencias de jurisdicción, recursos de abusos de poder ó de incompetencias elevadas por las autoridades judiciales contra la Administración, y autorizaciones para encausar á empleados públicos.

La de Ultramar, todos los relativos á aquellas provincias y á su régimen especial.

La de lo contencioso, los relativos á si procede ó no la vía contenciosa en las demandas contra las resoluciones del Gobierno ó de las Direcciones generales.

Art. 53. No podrán reunirse mas de dos Secciones, á no ser por disposición del Gobierno, para instruir los expedientes y preparar el dictámen que sobre ellos haya de evacuar el Consejo en pleno.

Art. 54. Las sesiones del Consejo serán secretas. Exceptúanse las vistas en los nego-

cios contencioso-administrativos, que serán siempre públicas.

Art. 55. Los informes del Consejo, de la Sala de lo contencioso ó de las Secciones no podrán publicarse sin autorización expresa del Gobierno. Exceptúase el caso en que las leyes determinen lo contrario.

TITULO III.

DEL MODO DE PROCEDER EL CONSEJO EN LOS NEGOCIOS CONTENCIOSOS Y GUBERNATIVOS.

Art. 56. El que se sintiere agraviado en sus derechos por alguna resolución del Gobierno ó de las Direcciones generales que cause estado, podrá reclamar contra ella en la vía contenciosa, proponiendo su demanda ante el Consejo de Estado.

Art. 57. Cuando la Sección de lo contencioso considere que procede la vía contenciosa, remitirá al Ministerio á que corresponda el negocio su dictámen con copia autorizada de la demanda.

Si considerase que necesita mayor examen, y que la procedencia ó improcedencia de la vía contenciosa debe ser objeto de discusión, comunicará la demanda al fiscal por vía de instrucción, señalando día para la vista en la Sala de lo contencioso, y citando á las partes. La Sala, oída la discusión oral, formulará la consulta correspondiente.

Celebrada la vista, se remitirá al Gobierno el dictámen del modo expuesto anteriormente.

Art. 58. La Real orden en que se conceda ó niegue la vía contenciosa se expedirá por el Ministerio á que se haya elevado la consulta.

Art. 59. Cuando el Gobierno no se conformase con la consulta afirmativa del Consejo, publicará en la *Gaceta de Madrid* su resolución motivada, por medio de decreto acordado en Consejo de Ministros y rubricado por su Presidente. Esto lo hará en el término de un mes, contado desde que el Gobierno hubiere recibido la consulta del Consejo de Estado, que se insertará en el Real decreto.

Art. 60. Cuando consultada la procedencia de la vía contenciosa, el Gobierno no comuniqué al Consejo su resolución dentro del mismo término de un mes fijado en el artículo anterior, se entenderá concedida la autorización.

Art. 61. Cuando la Sección de lo contencioso, al declarar concluida la discusión escrita, crea conveniente que en la vista se trate algún punto que no lo haya sido antes en

el pleito, lo pondrá en conocimiento de las partes al citarlas para la vista.

Art. 62. Conformándose el Gobierno con el proyecto de sentencia consultado por el Consejo de Estado, lo aprobará por un Real decreto refrendado por el presidente del Consejo de Ministros. La sentencia se publicará en la *Gaceta de Madrid* dentro del término de un mes, contado desde la fecha en que hubiere recibido el proyecto.

Art. 63. No conformándose el Gobierno con el proyecto de sentencia, publicará la que estime justa, en la *Gaceta de Madrid* dentro del término señalado en el artículo anterior, y en el Real decreto expedido en la misma forma. Con este Real decreto, que debe ser motivado y acordado en Consejo de Ministros, se publicará la consulta del Consejo.

Art. 64. Si trascurrido dicho plazo no hubiere publicado el Gobierno decreto alguno, el Consejo de Estado dispondrá que se haga saber á las partes el proyecto consultado.

Art. 65. En los Reales decretos y órdenes que el Gobierno expidiere conformándose con el dictámen del Consejo de Estado reunido en pleno ó en Secciones, se expresará esta circunstancia, y cuando no se conformare, se usará la fórmula: «Oído el Consejo pleno, ú oído el Consejo en Sección de...»

Art. 66. El Gobierno comunicará al Consejo de Estado las resoluciones que recayeren sobre sus consultas ó informes, á los quince días á mas tardar de haberlas mandado ejecutar.

Art. 67. El negocio sobre el cual hubiere dado su parecer el Consejo en pleno no podrá remitirse á informe de ningún Cuerpo ni oficinas del Estado. En los despachados por las Secciones, solo podrá ser oído el Consejo en pleno.

Art. 68. Cuando alguna de las Secciones creyere conveniente oír á consejeros de las otras ó á cualquiera de los jefes de la Administración pública, profesor ú otro funcionario, ó particular de especiales conocimientos ó experiencia, podrá invitarlos por medio del presidente del Consejo en el primer caso, y en los demás por medio del Presidente del Consejo de Ministros.

Art. 69. Las Secciones podrán pedir por conducto de la Secretaría general los antecedentes que estimen necesarios para la instrucción de los expedientes.

Art. 70. Los procedimientos en los negocios contenciosos de la Administración serán objeto de ley.

Art. 71. El Gobierno, oído el Consejo de Estado, formará el reglamento sobre el régimen interior y orden de proceder del Consejo

de Estado en los negocios gubernativos. Este reglamento podrá alterarse en lo sucesivo despues de oír tambien al Consejo de Estado, y por Real decreto propuesto en Consejo de Ministros y refrendado por su presidente.

Disposiciones transitorias.

Art. 72. Mientras no se publiquen la ley y reglamento de que tratan los artículos 70 y 71 de esta ley: observará el Consejo de Estado, en cuanto no se opongan á lo que en ella se prescribe, los reglamentos y disposiciones por los cuales se rigió el extinguido Consejo Real y se rige actualmente el de Estado.

Art. 73. El Gobierno queda autorizado, mientras no se publique la ley de procedimientos en los negocios contenciosos de la Administración, segun se previene en el artículo 70 de esta ley, á hacer, despues de oír al Consejo de Estado, las variaciones convenientes.—Por tanto mandamos etc.—En San Ildefonso á 17 de agosto de 1860.—Yo la Reina.—El Presidente del Consejo de Ministros, Leopoldo O'Donnell.

R. D. de 30 diciembre de 1846.

Aprobando el Reg. del Consejo Real, hoy de Estado.

(Gob.) «En atencion á las razones que me ha hecho presentes el Ministro de la Gobernacion de la Península, y vista la necesidad de dictar reglas ciertas y conocidas para la sustanciacion de los negocios contenciosos que se ventilan en el Consejo Real, vengo en aprobar interinamente el adjunto reglamento sobre el modo de proceder dicho Consejo en los negocios contenciosos de la Administración, hasta que sometido á nuevo exámen pueda aprobarse definitivamente en cumplimiento de lo mandado en el art. 17 del Real decreto de 22 de setiembre de 1845, y de las disposiciones de la ley de 6 de julio del mismo año á que se refiere.»—Dado en Palacio á 30 de diciembre de 1846.

Reglamento sobre el modo de conocer el Consejo Real en los negocios contenciosos de la Administración (1).

TITULO I.

DE LA COMPETENCIA Y RÉGIMEN DEL CONSEJO REAL EN LOS NEGOCIOS CONTENCIOSOS DE LA ADMINISTRACION.

CAPITULO PRIMERO.

De las atribuciones del Consejo Real, y de su Seccion de lo contencioso en los negocios de esta clase.

Artículo 1.º Corresponde al Consejo Real

(1) Con posterioridad á este reglamento se han dictado y deben tenerse como parte del

conocer en primera y única instancia.

1.º De las demandas contenciosas sobre el cumplimiento, inteligencia, rescision y efectos de los remates y contratos celebrados directamente por el Gobierno ó por las Direcciones generales de los diferentes ramos de la Administracion (1).

2.º De las demandas contenciosas á que den lugar las resoluciones de los Ministros de S. M. cuando el Gobierno acuerde previamente someter al conocimiento del Consejo las reclamaciones de las partes.

3.º De los recursos de reposicion, aclaracion y revision de sus providencias y resoluciones.

Art. 2.º Compete igualmente al Consejo conocer en apelacion y nulidad de las resoluciones de los Consejos provinciales, y de las de cualquiera otra autoridad que entienda en primera instancia en negocios contencioso-administrativos.

Art. 3.º La Seccion de lo contencioso preparará las resoluciones finales del Consejo, dictando al efecto las providencias de actuacion que conviniere.

CAPITULO II.

Del vice-presidente del Consejo.

Art. 4.º El vice-presidente del Consejo hará el señalamiento de los negocios que deban verse en pleno; recibirá las excusas de asistencia de los consejeros; tendrá á su cargo la policía de los estrados; llevará en ellos la palabra, de la que nadie podrá usar sin su permiso, y autorizará todos los acuerdos y providencias que se dicten.

Art. 5.º El vice-presidente oirá las quejas que le dieren los interesados sobre retardacion de sus expedientes ú otros abusos que merezcan particular providencia; tomará la que estuviere en sus atribuciones, y promoverá las que respectivamente correspondan al Consejo y á la Seccion.

Art. 6.º En defecto del vice-presidente del Consejo hará sus veces el de la Seccion de lo contencioso, y en defecto de este los de las demás Secciones por el orden de su precedencia.

mismo los Rs. Ds. de 21 de mayo de 1853 y 20 de junio de 1858, que con la ley de 16 de agosto y R. D. de 19 de octubre modifican algunas disposiciones.

(1) Queda en este párrafo suprimida la palabra «civil» con que concluía por haberse mandado así por R. O. de 17 de julio de 1849, con el objeto, segun se dijo, de evitar dudas y complicaciones en su inteligencia.

CAPITULO III.

Del vice-presidente de la Seccion de lo contencioso.

Art. 7.º El vice-presidente de la Seccion de lo contencioso desempeñará respecto á ella las atribuciones que en orden al Consejo quedan declaradas á favor del que le presida.

Art. 8.º Además dictará en la seccion las providencias de mera sustanciacion que no hayan de motivarse.

Art. 9.º En defecto del vice-presidente harán sus veces por el orden de su precedencia los demás vocales de la Seccion.

CAPITULO IV.

Del ponente.

Art. 10. En cada negocio habrá un consejero ponente, nombrado por el vice-presidente de la Seccion.

Art. 11. El ponente hará de relator ante el Consejo siempre que lo tenga por conveniente, y además cuando lo exija la gravedad del negocio á juicio del vice-presidente de la Seccion. Propondrá asimismo el ponente á esta las providencias que deban fundarse y los puntos de hecho y de derecho sobre que hayan de recaer las decisiones, y extenderá todas las providencias motivadas y la resolución final del Consejo.

Art. 12. Cuando el ponente se separe del dictámen que ha de someterse al Consejo, el vice-presidente de la Seccion nombrará otro de sus individuos para que sostenga la discusion en Consejo pleno.

Art. 13. El ponente podrá elegir un auxiliar para que le ayude en el desempeño de su cargo.

CAPITULO V.

Del fiscal y de los abogados fiscales.

Art. 14. El fiscal representará y defenderá por escrito y de palabra á la Administracion y á las corporaciones que estuvieren bajo su especial inspeccion y tutela, cuando no litiguen con ella ó entre sí mismas.

El Gobierno podrá, sin embargo, cuando lo estime conveniente designar un consejero extraordinario ú otro comisionado de su confianza que desempeñe dicho encargo en determinados negocios.

Art. 15. Los abogados fiscales serán los auxiliares del fiscal en el despacho de su oficio, y trabajarán á sus órdenes y bajo su direccion.

Art. 16. En defecto del fiscal hará sus ve-

ces el abogado fiscal que el vice-presidente designe.

Art. 17. Aun cuando el ministerio fiscal no defienda á una de la partes, podrá ser oído si la Sección de lo contencioso lo estima conveniente.

Art. 18. El fiscal tendrá el mismo tratamiento y categoría que el secretario general del Consejo. Los abogados fiscales tendrán el de los auxiliares de mayor categoría.

CAPITULO VI.

Del secretario.

Art. 19. Será secretario de la Sección de lo contencioso el que lo fuere del Consejo.

Desempeñará en la Sección y el Consejo las atribuciones que están declaradas á los secretarios de los Consejos provinciales por el art. 6.º del reglamento de 1.º de octubre de 1845, excepto las de relator.

Art. 20. El Secretario llevará un libro de registro de entrada y salida de los negocios; otro de las providencias de la Sección y votos particulares á que las mismas hayan dado lugar; otro de las resoluciones definitivas del Consejo, y los demás que la Sección ó el Consejo prescribieren.

En los libros de providencias y resoluciones se guardará lo prevenido por las leyes acerca de los protocolos ó registros de las escrituras públicas.

El que presida la Sección rubricará todas las hojas de estos libros, firmando en la primera una nota en donde exprese el número de hojas de que consten.

Art. 21. El secretario dará cuenta de los negocios por el orden riguroso de entrada, si el vice-presidente de la Sección no acordare otra cosa.

Art. 22. En defecto del secretario hará sus veces el auxiliar que nombre el vice-presidente de la Sección.

Art. 23. El secretario tendrá por escrito y de palabra el tratamiento de señoría.

CAPITULO VII.

De los auxiliares.

Art. 24. Los auxiliares ayudarán al ponente y al Secretario en el desempeño de sus respectivos cargos, en los términos en que lo disponga el vice-presidente de la Sección y ejercerán además el oficio de relator cuando no lo desempeñe el ponente.

Art. 25. Los negocios se distribuirán entre los auxiliares de la Sección por riguroso turno de entrada.

Sin embargo, el vice-presidente podrá al-

terar el turno cuando lo estime conveniente.

Art. 26. El ponente que desempeñe el cargo de relator hará relacion desde su asiento.

Cuando desempeñe aquel cargo un auxiliar, tomará asiento en la Sección ó en el Consejo pleno al lado del secretario.

CAPITULO VIII.

De los abogados del Consejo.

Art. 27. En los asuntos contenciosos, las partes contrarias á la Administracion estarán representadas y serán defendidas por abogados del Consejo.

Son abogados del Consejo todos los incorporados en el colegio de Madrid que tengan abierto su bufete.

Art. 28. La Sección podrá permitir que las partes actúen y se defiendan por sí mismas en los negocios donde no creyere necesario el ministerio de los abogados.

CAPITULO IX.

De los ujieres.

Art. 29. Para el despacho de los negocios contenciosos habrá por ahora cuatro ujieres.

Estos desempeñarán en la Sección y el Consejo las atribuciones expresadas en el artículo 9.º del reglamento de los Consejos provinciales de 1.º de octubre de 1845.

Art. 30. Los ujieres serán nombrados por el Ministerio de la Gobernacion.

Art. 31. El vice-presidente del Consejo y el de la Sección de lo contencioso podrán suspender por tres meses á lo mas á los ujieres, y proponer con justa causa su destitucion.

CAPITULO X.

De las recusaciones de los vocales del Consejo.

Art. 32. Los vocales del Consejo podrán ser recusados por las causas expresadas en el art. 13 del reglamento de 1.º de octubre de 1845, ú otras equivalentes, á juicio del Consejo.

Art. 33. Cuando los hechos en que se funde la recusacion sean anteriores al pleito, no podrán proponerla los litigantes despues de haber contestado á la demanda, ó deducido excepcion dilatoria, ó de haberse mejorado la apelacion ó recurso de nulidad, salvo si los hechos vinieren posteriormente á su noticia, en cuyo caso deberán hacerlo luego que la tuvieren.

No podrá proponerse la recusacion en ningun caso cuando hubiere empezado á verse el proceso en Consejo pleno.

Art. 34. El litigante que faltare á la verdad, suponiendo no haber llegado á su noticia la causa de recusacion en tiempo hábil, será corregido con multa que no exceda de 6.000 rs.

Art. 35. La recusacion se propondrá por escrito y se comunicará por medio de oficio al recusado, el cual responderá en la misma forma.

Art. 36. Si no se diere el consejero por recusado, la Seccion recibirá á prueba la recusacion, si lo estimare necesario, y propondrá al Consejo la providencia que crea justa.

Art. 37. El recusado no podrá asistir á la vista ni á la votacion del incidente de recusacion.

Admitida esta, el recusado se abstendrá de conocer en el negocio.

CAPITULO XI.

De las audiencias públicas y policia de los estrados.

Art. 38. Los consejeros, auxiliares, empleados y abogados del Consejo asistirán á las audiencias publicas en traje de ceremonia.

Art. 39. Los ujieres usarán el mismo traje de ceremonia que los porteros de estrados del Supremo Tribunal de Justicia.

Art. 40. Los abogados se presentarán con el traje propio de su profesion.

Art. 41. Con arreglo á lo dispuesto en el art 9.º de la ley de 6 de julio de 1845, no asistirán á la deliberacion y fallo de los asuntos contenciosos los consejeros extraordinarios.

Los consejeros ocuparán sus asientos por el orden de antigüedad de sus respectivos nombramientos. En igualdad de fechas de estos, obtendrá la preferencia el consejero de mas edad.

Tambien asistirán todos los auxiliares del Consejo ocupando asientos inferiores y colocándose por el orden de su clase, antigüedad y edad.

Art. 42. El fiscal y los abogados fiscales, cuando asistan á estrados, ocuparán á la derecha un asiento separado con bufete por delante.

Art. 43. En los estrados de la Seccion y del Consejo, los concurrentes estarán descubiertos y guardarán silencio y compostura, obedeciendo con puntualidad las disposiciones que para mantener el orden dictare el que presida.

Art. 44. El que osare interrumpir la

vista del proceso ú otro acto oficial de la Seccion ó Consejo, dando señales de aprobacion ó desaprobacion, ó perturbando de cualquier otro modo el orden, será llamado á él por el que presida, y expulsado si no obedeciere á la primera intimacion.

En caso de resistir ó de agravar con demostraciones irreverentes su desacato, será arrestado y corregido en el acto con prision que no exceda de cinco dias, ó con multa que no pase de 200 reales.

Art. 45. Si el perturbador ó perturbadores se propasaren á amenazar ó ultrajar á los vocales ó subalternos del Consejo en el acto de ejercer sus oficios, la correccion de que habla el artículo anterior podrá aumentarse segun las circunstancias, á un mes de prision y 1,000 rs. de multa.

Art. 46. Llegando el desacato á constituir un atentado que merezca pena mayor, serán arrestados los delinquentes y puestos con la sumaria del exceso á disposicion del Juzgado ó Tribunal competente.

CAPITULO XII.

De los informes anuales relativos al despacho de los negocios contenciosos.

Art. 47. En 1.º de marzo de cada año remitirá la Seccion al Ministerio de la Gobernacion un estado de los negocios fenecidos en el curso del año próximo anterior, y de los que habiéndose empezado en él ó antes quedaren pendientes.

Art. 48. Respecto á los pendientes y fenecidos, se expresará si se instruyeron en rebeldía ó por recurso de aclaracion, revision, apelacion ó nulidad.

Art. 49. Además de las noticias que ha de comprender el estado referido, la seccion, al remitirle, dará cuenta de los abusos que hubiere notado en la actuacion de la justicia administrativa, con las observaciones que le hubiere sugerido la experiencia para corregir dichos abusos y perfeccionar el procedimiento.

El fiscal añadirá á las de la Seccion sus propias observaciones.

TITULO II.

DEL ORDEN DE PROCEDER ANTE EL CONSEJO EN PRIMERA Y ÚNICA INSTANCIA.

CAPITULO PRIMERO.

De la demanda.

Art. 50. En los negocios que se entablen á instancia de la Administracion, se incoará el procedimiento con una memoria que

presentará al Consejo el fiscal á virtud de orden é instrucciones del respectivo Ministro de la Corona.

Art. 51. Las demandas contra la Administracion se remitirán por el vice-presidente del Consejo al Ministerio de donde dimana la resolucion que las produjere (1).

Art. 52. Si en vista de la demanda estimare desde luego, el Ministro de la Corona que procede la vía contenciosa, remitirá el expediente al Consejo para el curso correspondiente.

Si el Ministro de la Corona no lo estimare así desde luego, oirá gubernativamente al Consejo sobre esta cuestion prévia, y la resolverá en vista de la consulta sin ulterior recurso.

En todo caso la resolucion del Ministro ha de dictarse dentro de un mes, cortado desde la fecha de la remision de la demanda á la respectiva Secretaría (2).

Art. 53. Las demandas y memorias se extenderán con claridad y precision, refiriendo sencillamente los hechos que las motiven y la pretension que se deduzca.

Art. 54. Antes de fijarse la pretension, se extenderá por párrafos numerados un resumen de los puntos de hecho y de derecho en que se funde.

Art. 55. Con toda demanda y memoria se producirá copia simple, íntegra y literal de las escrituras y documentos que sirvan de apovo á la solicitud.

Si la escritura ó documentos excedieren de veinticinco pliegos, bastará que el original, si no tuviere matriz, se ponga de manifiesto en la Secretaría del Consejo, ó si la tuviere, se entregue bajo recibo á la parte contendiente.

Art. 56. Las escrituras posteriores á la demanda, ó cuya noticia hubiere llegado posteriormente al actor las producirá este desde luego, ú ofrecerá entregarlas ó exhibirlas en los términos y con la distincion expresados en el artículo precedente.

El que hubiere maliciosamente retrasado su presentacion, incurrirá en multa.

Art. 57. En ninguna demanda ni escrito se prestará juramento alguno.

Art. 58. Toda demanda de particulares deberá estar firmada por un abogado del colegio de Madrid, prévio el correspondiente poder, ó por los mismos interesados.

Art. 59. La demanda que se dirija con-

tra particular ó corporacion, se entregará á un ujier para que haga el emplazamiento.

Cuando se dirija contra la Administracion la demanda, devuelta que sea esta por el Ministro de la Corona al vice-presidente del Consejo para el curso correspondiente, se entregará á un ujier para que emplace al fiscal.

Art. 60. El defensor, tutor, albacea, heredero, administrador y cualquiera otro que comparezca en juicio como parte en representacion ajena, firmará la demanda y justificará documentalmente la personalidad que se atribuya.

A ninguna solicitud que carezca de este requisito se dará curso, pena de nulidad.

Art. 61. Sobre ninguna demanda podrá proveerse sin citacion del demandado: salvo las providencias interinas que se dieren en los casos permitidos por derecho.

Art. 62. Las demandas se harán saber á las partes por diligencia de ujier.

CAPITULO II.

De las diligencias de ujier.

SECCION PRIMERA.

De las diligencias de notificacion y citacion en general.

Art. 63. Toda diligencia de notificacion ó citacion que se practique fuera de los estrados de la Seccion ó del Consejo, se hará por un ujier del mismo.

Art. 64. Toda diligencia de citacion y notificacion por medio de ujier se extenderá: En una cédula original para la parte que la promueva.

En una ó tantas copias del original como fueren las partes que hayan de ser citadas ó notificadas.

Art. 65. En el original y copia de toda cédula se hará constar:

Su fecha, el nombre, apellido, profesion, domicilio ó residencia del actor y del citado ó notificado, y cualquiera otra circunstancia que facilite el conocimiento exacto de ellos y sea notoria.

En lugar en que se deje la copia, la persona á quien se lea y entregue, y la forma de esta.

El nombre, apellido y firma del ujier que la autorice.

Art. 66. La cédula expresará además la casa que la parte á cuya solicitud se haya expedido, eligiere para que en ella se le comuniquen las notificaciones y traslados.

Toda comunicacion ulterior concerniente á la parte habrá de hacerse en la casa elegi-

(1) V. el R. D. de 21 de mayo de 1853 en su lugar correspondiente de este mismo artículo.

(2) V. tambien en su lugar la R. O. de 11 noviembre de 1851, y la citada en la nota anterior.

da, y en su defecto al promotor fiscal mas antiguo de Madrid.

Art. 67. Copia de la cédula será leida y entregada en propia mano á la persona á quien concierna, ó á las personas que se expresarán en los artículos siguientes.

Art. 68. Si la persona citada no estuviere en casa, se leerá y dejará la cédula á uno de sus parientes, familiares ó domésticos, con encargo de que se la entreguen.

Si el ujier no hallare pariente ni criado á quien dejarla, entregará la cédula á un vecino, y en defecto de vecino, al promotor fiscal.

Art. 69. Cuando la notificacion ó citacion hubiere de hacerse á una persona ausente de Madrid, se le comunicará por medio de despacho al juez del pueblo de su domicilio.

Quando la notificacion ó citacion hubiere de hacerse en los dominios españoles de Indias, se dirigirá el despacho por conducto del Ministerio de Ultramar, y por el de Estado si la persona que ha de ser citada se hallare en pais extranjero.

Art. 70. Si la parte á quien se dirija la notificacion ó citacion no tuviere domicilio fijo ó se ignorase su paradero, se insertará la cédula en la *Gaceta oficial* y en el *Boletín* de la provincia donde se sepa que residia últimamente.

Art. 71. El promotor fiscal dará aviso sin demora á los interesados, cuyo paradero sepa, de las cédulas que para ellos hubiere recibido.

Además llevará un registro donde sentará en resúmen las cédulas, expresando la fecha en que las hubiere recibido y despachado.

Art. 72. Ninguna cédula será entregada en dias feriados sin habilitacion de la Seccion de lo contencioso.

El auto de la habilitacion se insertará en la cédula original y en sus copias.

Art. 73. No podrá entregarse ninguna cédula antes de salir ni despues de ponerse el sol.

Art. 74. Ningun ujier podrá autorizar cédula alguna ni diligencia en la cual tengan interés ellos, sus mujeres legitimas ó sus parientes consanguíneos ó afines hasta el cuarto grado inclusive.

Art. 75. Será nula toda cédula en que se falte á lo dispuesto en los artículos 64, 65, 66, 67, 70, 72, 73 y 74.

SECCION SEGUNDA.

De las diligencias de emplazamientos en particular.

Art. 76. En las diligencias de emplazamiento se observarán las formalidades pre-

venidas respecto á las de simple notificacion ó citacion, y asimismo las siguientes:

Art. 77. La cédula de emplazamiento contendrá, so pena de nulidad:

1.º El nombre del Consejo.

2.º El dia de audiencia pública señalado por este reglamento ó por el Tribunal, para que los litigantes comparezcan en persona ó por medio de abogados.

3.º Copia literal de la demanda.

4.º Copia ó oferta de entregar ó poner de manifiesto los documentos ó escrituras en que se funde la demanda, con arreglo á lo prevenido en el art. 55.

De los documentos y escrituras se entregará tan solo una copia, aunque los emplazados sean mas de uno, si lo fueren marido y mujer, ó personas que tengan un interés comun en el negocio.

En la cédula original firmará el recibo de los documentos la persona á quien se entreguen, y si no supiere, un testigo á su ruego.

Art. 78. El término del emplazamiento será el de nueve dias, y uno mas por cada cinco leguas de distancia.

La Seccion, sin embargo, al señalar dicho término, tendrá en cuenta el estado de las comunicaciones.

Art. 79. Los Ayuntamientos de los pueblos serán emplazados en la persona de los Alcaldes; y por regla general el emplazamiento se entenderá con el jefe económico de cualquier establecimiento público, cuando sea demandado alguno de esta clase.

Art. 80. En representacion de las compañías industriales ó corporaciones de otra especie, serán emplazados sus jefes ó directores.

CAPITULO III.

De la comparecencia de las partes en virtud del emplazamiento.

Art. 81. El dia penúltimo del emplazamiento, el actor presentará la cédula original en la Secretaría del Consejo.

Art. 82. Por el orden de las fechas de presentacion de las cédulas se despacharán los procesos, si no dispusiere otra cosa el vice-presidente de la Seccion.

Art. 83. En el dia señalado en la cédula del emplazamiento comparecerán las partes ante la Seccion por sí ó por medio de abogado, con arreglo á lo prevenido en los artículos 27 y 28.

Art. 84. La parte que no hubiere señalado domicilio para las notificaciones y traslados, lo verificará á mas tardar el dia del emplazamiento.

Art. 85. Todas las notificaciones hasta la ejecucion de la sentencia inclusive, que hayan de hacerse á las partes fuera de estrados, se practicarán por cédula en la casa elegida, á no ser que la parte hubiere designado otra casa, ó que haya trascurrido mas de un año desde el pronunciamiento de la sentencia.

En tales casos, y en el de no haberse elegido casa, se harán las notificaciones con arreglo á lo dispuesto en el artículo anterior.

CAPITULO IV.

De las excepciones dilatorias.

Art. 86. Las excepciones dilatorias son las siguientes:

1.^a Falta de personalidad en el actor por carecer de las cualidades necesarias para pedir en juicio, ó por no acreditar el carácter ó representacion con que reclama.

2.^a Falta de personalidad en el abogado defensor por insuficiencia ó ilegalidad del poder.

3.^a Incompetencia del Consejo.

4.^a Litispendencia.

Art. 87. Si el actor fuere extranjero, el demandado podrá excusarse de contestar la demanda, mientras aquel no dé fianza de pagar las costas y los gastos, y perjuicios que ocasione el proceso, ó no deposite la suma equivalente.

Art. 88. En el término del emplazamiento propondrá el demandado de una vez todas las excepciones dilatorias, comunicándolas al actor por traslado en la forma determinada por el art. 77.

Las que propusiere despues no podrán suspender el curso de la demanda.

Dentro de seis dias deberá contestar el actor al escrito en que se proponga el artículo de no contestar, y pasados, proveerá la Seccion lo que fuere de justicia.

CAPITULO V.

De la discusion escrita.

Art. 89. El demandado contestará á la demanda dentro de veinte dias, contados desde el siguiente al del emplazamiento, si no hubiere propuesto dilatorias, ó desde el siguiente al de la notificacion de la providencia en que se hubieren desestimado dichas excepciones.

Art. 90. En el caso del artículo anterior, la Seccion, si estimare necesario que el actor replique, y que el demandado contrareplique, podrá concederles sucesivamente el término de diez dias para este efecto.

Art. 91. La parte que intente apoyar su pretension en hechos, los articulará con precision; y la contraria, á quien perjudiquen, los confesará ó negará llanamente.

El silencio ó las respuestas evasivas podrán estimarse como confesion de los hechos á que se refieren.

Art. 92. Dichos escritos comprenderán:

1.^o Los fundamentos y alegaciones de las partes de una manera sumaria por párrafos numerados.

2.^o Las pretensiones respectivas.

Art. 93. Los abogados de las partes y de la Administracion, se comunicarán entre sí copia de dichos escritos autorizada con su firma.

La entrega se hará constar por medio de recibo, extendido al pié de los originales.

En el recibo se expresará el término del traslado ó comunicacion.

Art. 94. Concluida que sea la discusion escrita, los litigantes exhibirán en la Secretaria los escritos originales y los documentos justificativos de su intencion, los cuales se entregarán á los funcionarios que hayan de hacer el informe, y la relacion del proceso para que se instruyan y preparen.

Art. 95. Terminada la discusion escrita, se señalará dia para la vista, haciéndose saber por cédula.

Art. 96. Despues de contestada la demanda no podrá variarse, salvo si el actor desiste de ella.

CAPITULO VI.

De la vista de los procesos ante el Consejo pleno.

Art. 97. Los procesos se verán á puerta abierta, salvo si la publicidad pudiere acusar escándalo; aun en este caso no podrán verse á puerta cerrada si no lo acordare el Consejo, oyendo en voz al fiscal.

Art. 98. En los informes no podrá hacerse mérito de documentos, de los cuales no se hubieren entregado copias á las partes, ú ofreciéndose entregar ó exhibir con arreglo á los arts. 55 y 56.

Art. 99. En la vista informará una vez el actor y otra el demandado, salvo si el que presidiere estimare necesario que repliquen mutuamente.

Art. 100. Si una de las partes hubiere demorado con malicia la presentacion en la Secretaria de los escritos y documentos con arreglo al artículo 94, el Consejo podrá fallar el proceso en vista solo de los de su adversario.

CAPITULO VII.

De la actuacion en rebeldia.

Art. 101. No compareciendo un litigante en virtud del emplazamiento, ó no contestando á la demanda en el término señalado, el proceso será sentenciado en rebeldia, si la acusare su adversario.

La rebeldia podrá acusarse por escrito, que se producirá en la Secretaría del Consejo, ó de palabra, que extenderá por diligencia el secretario y firmará el acusante.

Art. 102. Acusada la rebeldia el actor obtendrá lo que pidiere en su demanda en cuanto no fuere injusta.

Art. 103. Si el contumaz fuere el actor, el demandado será absuelto de la demanda.

Art. 104. Para mejor proveer en rebeldia, el Consejo podrá mandar practicar de oficio la prueba que estime conveniente, con tal que no sea la de testigos.

Art. 105. No se declarará la rebeldia contra el demandado y se mandará emplazar de nuevo, en el caso de que hubiere sido nula la cédula de emplazamiento.

Art. 106. Si por fuerza mayor y notoria alguna de las partes no pudiere comparecer en el término del emplazamiento, el Consejo suspenderá la declaracion de la rebeldia y podrá ordenar que el litigante sea nuevamente emplazado.

Art. 107. Cuando fundándose la demanda en un mismo título, y teniendo un mismo objeto contra diferentes personas, las unas incurran en rebeldia y las otras no, el Consejo si no estimare conveniente fallar desde luego en rebeldia, podrá suspender su decision hasta pronunciar la definitiva respecto á todos los demandados.

Art. 108. La sentencia dictada en rebeldia, además de notificarse por cédula se fijará en la tabla de anuncios del Consejo, y se insertará en la *Gaceta oficial*.

La insercion se acreditará poniendo en el proceso un ejemplar de la *Gaceta*.

La fijacion se acreditará por diligencia del secretario.

Art. 109. Al contumaz declarado no se prestará audiencia ni se admitirá recurso alguno, salvo el de rescision.

Art. 110. La parte condenada en rebeldia podrá solicitar la rescision de la sentencia dentro de quince dias contados desde el siguiente al de su notificacion.

Art. 111. Si el condenado en rebeldia estuviere ausente, el Consejo podrá señalarle en la sentencia un plazo mas largo para que pueda solicitar su rescision.

Art. 112. Aunque sean pasados dichos

plazos, el condenado en rebeldia podrá á juicio del Consejo solicitar la rescision acreditando que no ha podido tener noticia de la demanda ni sentencia, ó solicitar la misma rescision por ausencia, enfermedad grave ó otro accidente semejante.

Art. 113. En el caso del artículo anterior no se admitirá el recurso que entable el condenado, si, estando este presente, le dedujere despues de pasados los quince dias posteriores al de haber cesado el impedimento, ó haber llegado á su noticia la demanda, la sentencia ó alguna diligencia de su ejecucion; ó si estando ausente dedujere el recurso despues de pasado el término preciso para hacerlo segun las distancias.

Art. 114. Tampoco se admitirá el recurso un año despues de haber tenido cumplido efecto la sentencia en rebeldia, en el caso de que esta no se haya notificado.

Art. 115. El recurso de rescision se comunicará, so pena de nulidad, por cédula de emplazamiento.

En la cédula se señalará para comparecer el término de seis dias, ó la audiencia inmediata al último de estos.

Art. 116. El recurso de rescision deducido en la forma prescrita y plazos señalados, suspenderá la ejecucion de la sentencia en rebeldia, á menos que el Consejo al dictarla no hubiere ordenado su ejecucion sin perjuicio de la rescision, y previa fianza ó sin ella.

Art. 117. En el caso del art. 112, no se suspenderá la ejecucion de la sentencia si el Consejo no lo mandare al admitir el recurso de rescision.

Art. 118. Si se rescindiere la sentencia, continuará la actuacion desde el punto en que se hallaba antes del incidente de rebeldia.

Art. 119. El Consejo podrá mandar que se guarde, ó rescindir en todo ó en parte su primera sentencia dictada en rebeldia. Al márgen de la minuta de la sentencia en rebeldia se hará mencion de la que recayere en virtud del recurso de rescision.

Art. 120. En el caso del art. 107, la sentencia que recayere sobre el recurso de rescision, aprovechará á las partes condenadas en juicio contradictorio: 1.º Si la sentencia descansare en fundamentos comunes, pero desconocidos á dichas partes, ó cuya prueba haya dependido de los contumaces. 2.º Si la condena fuere indivisible.

Art. 121. La parte que por segunda vez fuere condenada en rebeldia, no podrá entablar el recurso de rescision en el mismo negocio.

CAPITULO VIII.

De las actuaciones de prueba en general.

Art. 122. En los negocios en que el punto litigioso no pueda ser fallado desde luego en definitiva, la Sección á propuesta del ponente podrá ordenar á petición de parte ó para mejor proveer.

Que las partes ó una de ellas juren posiciones;

Que se practique informacion de testigos, reconocimiento de peritos, inspeccion ocular, cotejo de documentos;

Y cualquiera otra diligencia probatoria que sea conducente al descubrimiento de la verdad.

Art. 123. La Sección podrá delegar en los jueces de partido ó en uno de sus vocales ó auxiliares las diligencias probatorias que se hubieren de practicar en Madrid: para las que se hubieren de ejecutar fuera comisionará á los respectivos jueces ó Alcaldes, segun lo estime.

En el caso de este artículo los jueces delegados guardarán en la probanza las disposiciones de este reglamento concernientes á ella.

Art. 124. En toda providencia sobre prueba se señalará el dia en que la diligencia deba evacuarse ante la Sección ó darse cuenta de ella.

Art. 125. Las diligencias de prueba se harán saber á las partes en la forma ordinaria prescrita por este reglamento.

Art. 126. Si la providencia se dictare en rebeldía, el contumaz podrá solicitar su rescision en la forma y términos prescritos en el capítulo precedente.

Art. 127. Las diferentes actuaciones de prueba se practicarán en Audiencia pública, salvo los actos que deban ejecutarse fuera de los estrados para evitar escándalo.

Art. 128. Las partes podrán ver las actuaciones de prueba en la Secretaría.

Art. 129. Concluida la prueba, se procederá á la vista del negocio sin nuevos escritos ni alegatos.

CAPITULO IX.

De las posiciones.

Art. 130. Despues de contestada la demanda y antes de verse el pleito en definitiva, podrá cada parte pedir que su adversario responda con juramento ó sin él á posiciones concernientes al punto litigioso.

Antes de contestar á la demanda podrá pe-

dirlo cada parte si las posiciones condujeren á cerciorarse de la capacidad de su adversario para comparecer en juicio, ó del carácter ó representacion con que haya de litigar.

Art. 131. No podrán exigirse nuevas posiciones sobre hechos que hayan sido una vez objeto de ellas.

Art. 132. El que hubiere de ser interrogado, será citado para el acto por cédula con un dia de intervalo, y bajo apercibimiento de que se le podrá estimar confeso sino asistiéndole justo motivo, dejare de comparecerá declarar.

En caso de urgencia podrá reducirse á horas el término señalado.

Art. 133. La parte que no quisiere consignar en escrito las posiciones, reservándose manifestarlas en el acto del interrogatorio, podrá hacerlo, pidiendo únicamente que la contraria sea citada al efecto.

En el dia señalado para evacuar las posiciones, el interesado las manifestará á la Sección, y esta las mandará extender, é interrogará sobre ellas si fueren pertinentes y admisibles.

Art. 134. El que presida examinará á la parte sobre cada hecho y sobre todas las circunstancias que sean conducentes á la averiguacion de la verdad.

Cada parte responderá por sí misma de palabra, sin valerse de ningun borrador de respuesta, á presencia de la contraria, si asistiere. Si esta no asistiere, se celebrará careo entre ellas.

Los consejeros, con la venia del que presida, podrán hacer además á las partes las nuevas preguntas que estimen oportunas.

Art. 135. Las partes podrán hacerse recíprocamente las preguntas y observaciones que juzguen convenientes con permiso y por medio del que presida; pero sin atravesar la palabra ni interrumpirse.

Art. 136. El secretario leerá su declaracion á la parte, preguntándola si persiste en ella ó tiene algo que añadir ó variar.

Si añadiere ó variare algo á lo dicho, se extenderá á continuacion, expresando en todo caso la circunstancia, cuando ocurriere, de haber rehusado ó no podido firmar.

Art. 137. Si no asistiéndole justo motivo no compareciere la parte á declarar, ó compareciendo rehusare responder, ó respondiere de una manera evasiva ó ambigua, el Consejo podrá estimarla confesa.

Art. 138. Si una parte alegare achaque ó enfermedad grave que la impida comparecer, el Consejo podrá comisionar á un consejero ó auxiliar que le reciba declaracion en su casa ante el secretario, á presencia ó lue-

ra de la presencia de la otra parte, segun lo aconsejaren las circunstancias.

Art. 139. Si el comisionado, al trasladarse á la casa de la parte, averiguare que ha podido comparecer, diferirá el interrogatorio á la próxima audiencia pública, y en ella será condenada la que alegare falso impedimento para no comparecer, en una multa que no podrá exceder de 1,000 rs. vn.

Art. 140. Si la parte no residiere en Madrid, se librará despacho con los insertos necesarios, fijando término para la devolución del interrogatorio evacuado.

Art. 141. No se pedirán posiciones al fiscal ó quien hiciere sus veces en representacion del Estado. En su lugar la parte contraria á la Administracion propondrá por escrito las preguntas que quiera hacer. Los empleados de la Administracion á quienes conciernan los hechos, evacuarán las preguntas por vía de informe y por conducto de la persona que represente al Estado.

CAPITULO X.

De la prueba de testigos.

Art. 142. La providencia en que se admita la informacion testifical, expresará los hechos sobre que deba esta recaer, los cuales serán precisos y conducentes.

Art. 143. Tres dias antes del señalado para la informacion se pondrá de manifiesto en la Secretaría una lista expresiva de los nombres, profesion y domicilio de los testigos presentados por las partes.

Cada una de estas partes podrá oponerse á que sea examinado el testigo que no estuviere incluido ó claramente designado en la lista respectiva.

Art. 144. Los testigos que rehusen presentarse voluntariamente á declarar, serán citados por cédula con dos dias al menos de anticipacion al señalado para su exámen en audiencia pública.

Serán citados á instancia de la parte que los presente, y en virtud del auto en que se admita la informacion, sin que pueda dejárseles copia de este ni de interrogatorio alguno.

Art. 145. La Seccion podrá proveer:

1.º Que el testigo inobediente sea conducido á su presencia por la fuerza pública.

2.º Que esté arrestado hasta el dia señalado para recibírsele su declaracion, si no pudiere tomársele desde luego.

Art. 146. No se impondrán estas penas:

1.º Si la cédula de citacion fuere nula.

2.º Si la cédula no contuviere la cita de las disposiciones penales referidas.

3.º Si el testigo hubiere sido citado con intervalo de tiempo menor que el prescrito en el art. 144.

4.º Si estuviere legítimamente impedido para comparecer.

Art. 147. No podrán ser examinados como testigos los ascendientes, descendientes, hermanos, tíos y sobrinos por consanguinidad ó afinidad de una de las partes.

Tampoco podrá serlo su conjunta persona, aunque esté divorciado de ella.

Art. 148. Las demás personas serán examinadas como testigos, sin perjuicio de que las partes puedan proponer acerca de ellas, y el Consejo calificar segun reglas de sana crítica, las circunstancias conducentes á corroborar ó disminuir la fuerza probatoria de sus declaraciones.

Art. 149. El dia señalado para el exámen leerá el secretario el auto de prueba en audiencia pública fuera de la presencia de los testigos.

Las partes darán sumariamente sobre los hechos expresados en el auto las explicaciones que parezcan necesarias.

Art. 150. Los testigos serán examinados separada y sucesivamente por el órden en que vinieren sentados en las listas que les correspondan, empezando por los del actor ó los de la parte que sustente los hechos controvertidos.

Art. 151. El testigo será primeramente interrogado:

Por su nombre, apellido, edad, estado, profesion y domicilio.

Si es pariente por consanguinidad ó afinidad, y en qué grado de algunas de las partes litigantes.

Si es criado suyo doméstico.

Si es acreedor ó deudor suyo.

Si tiene alguna otra relacion con alguna de ellas.

Art. 152. Antes de declarar prestará el testigo juramento en la forma acostumbrada.

Art. 153. Los testigos menores de diez y seis años cumplidos podrán ser examinados sin juramento.

Art. 154. Las disposiciones de los artículos 134, 135 y 136 se observarán en el exámen de los testigos.

Art. 155. La parte que interrumpiere al testigo en su declaracion, podrá ser condenada en multa que no exceda de 200 reales de vellón.

En caso de reincidencia incurrirá en doble multa, y podrá ser expulsada de los estrados.

Art. 156. Cada testigo, despues que evacue su declaracion, permanecerá en los es-

trados hasta que se concluya la informacion, si la Seccion no dispusiere otra cosa.

Art. 157. Los testigos cuyas declaraciones parezcan contradictorias podrán ser caereados entre sí.

Art. 158. Si el testigo reclamare alguna indemnizacion pecuniaria por su asistencia al juicio, la Seccion determinará la que fuere justa, tomando en cuenta el estado y profesion del testigo y el tiempo que dure la informacion.

La providencia del pago de la indemnizacion será ejecutiva contra la parte á cuya instancia hubiere sido el testigo citado.

Art. 159. Si la formacion ofreciere indicios graves de falso testimonio ó de soborno de los testigos, la Seccion mandará prender acto continuo á los presuntos reos, y los pondrá á disposicion del juez competente remitiéndole el tanto de culpa.

Art. 160. Si los testigos citados no pudiesen ser examinados el dia señalado para ello, lo serán en los siguientes sin necesidad de nueva citacion.

Art. 161. A peticion de cualquiera de las partes que pretenda producir nuevos testigos, podrá prorogarse el término de prueba.

Nunca podrá concederse mas de una próroga á cada una de las partes.

Art. 162. En los asuntos en que haya urgencia, podrán abreviarse los términos señalados en los arts. 143 y 144.

Tambien podrán ser examinados los testigos el mismo dia en que se provea la informacion.

Los testigos que se hallen en peligro de muerte ó á punto de ausentarse á país extranjero ó ultramarino, podrán ser examinados aun antes de proponerse la demanda, y sin citacion contraria, si hubiese peligro en la demora.

Art. 163. Si la inspeccion del lugar contribuyere á la claridad del testimonio, podrán ser examinados los testigos en dicho lugar.

Art. 164. Si un testigo no pudiese asistir en persona á los estrados por hallarse enfermo, la Seccion podrá comisionar á uno ó mas de sus vocales ó auxiliares para que asistidos del secretario se trasladen á la casa del testigo, y allí le reciban su declaracion á presencia de las partes ó fuera de ella, segun las circunstancias.

Art. 165. Cuando la parte solicite el examen de un testigo residente fuera de Madrid, se librará con citacion de la contraria despacho al juez del domicilio de aquel, señalando un término dentro del cual deba desenvolverse diligenciado.

Art. 166. En el caso del artículo anterior, y al tiempo de proveerse el auto de remision del exhorto, las partes podrán designar personas domiciliadas en la residencia del juez requerido que las representen en las actuaciones que ante el mismo hayan de practicarse.

CAPITULO XI.

De la prueba de peritos.

Art. 167. Cuando el Consejo ó la Seccion ordenaren algun reconocimiento facultativo, designarán el objeto sobre el cual deba recaer.

Art. 168. Dentro de las veinticuatro horas posteriores á la notificacion de la providencia relativa al reconocimiento, las partes, de comun acuerdo, nombrarán uno ó tres peritos para que le practiquen, y no haciéndolo, la Seccion ó el Consejo respectivamente los designará en el mismo número, limitándose á uno si se tratare de un objeto de poco valor.

Art. 169. Los peritos podrán ser recusados por causas posteriores á su nombramiento.

Tambien podrán serlo por causa anterior cuando hubieren sido nombrados de oficio.

En el último caso no se admitirá la recusacion, si no se propusiere dentro del término de tres dias siguientes al del nombramiento.

Art. 170. Los peritos podrán ser recusados por las mismas causas que los consejeros con citacion de audiencia de las partes.

Art. 171. Los peritos serán citados en la misma forma que para los testigos prescribe el art. 144.

Si no comparecieren ó rehusaren dar su dictámen incurrirán en las mismas penas, salvo la de arresto.

Su indemnizacion se determinará en la propia forma.

Art. 172. Si el objeto del reconocimiento facultativo fuere de tal naturaleza que los peritos puedan dar su dictámen despues de aquel, serán examinados acto continuo en Audiencia pública cada uno de ellos por separado, en el orden que determine la Seccion y en la forma prescrita respecto á los testigos.

Art. 173. Si el reconocimiento decretado exigiere la inspeccion ocular del sitio ó algun otro examen previo, la Seccion hará prestar de antemano á los peritos juramento de llenar bien y fielmente su encargo.

Tambien señalará el dia en que hayan de dar su dictámen, determinando si lo han de hacer de palabra ó por escrito.

Art. 174. Si la Seccion determinare que den su dictámen de palabra, serán examinados los peritos en la forma prevenida por el art. 151.

Art. 175. Si se proveyere que den su dictámen por escrito, los peritos le extenderán despues de haber conferenciado entre sí.

El dictámen comprenderá su juicio motivado, y en caso de discordia el de cada uno de los peritos.

El dictámen será extendido por uno de los peritos y firmado por todos ellos.

El perito que disintiere del dictámen de la mayoría, podrá extender el suyo de su puño y letra.

Art. 176. Si todos los peritos no supiesen escribir, ó si ninguno de ellos pudiesen redactar el dictámen, se comisionará para que lo escriba, y si necesario fuere, para que ayude á los peritos en la redaccion á uno de los auxiliares del Consejo ó á otra persona que se estime conveniente.

En este caso el dictámen será firmado por el que le hubiere escrito, y por los peritos que supieren.

El secretario extenderá por diligencia la entrega del dictámen, anotando en este el dia.

Art. 177. La diligencia será firmada por el actuario, y el que le haya entregado el dictámen, si supiere.

Art. 178. En la Audiencia pública señalada para ver el dictámen de los peritos, le leerá el secretario.

La Seccion podrá proveer que comparezcan los peritos á dar las explicaciones conducentes al esclarecimiento del dictámen.

Art. 179. Si la Seccion ó el Consejo en su caso, no se creyere suficientemente ilustrada con el primer reconocimiento y dictámen pericial, podrá proveer que se practique otro por los primeros peritos ó por otros.

CAPITULO XII.

De la inspeccion ocular.

Art. 180. Cuando se hubiere acordado la inspeccion ocular de algun sitio, podrá examinarse este de la manera prescrita por los capítulos precedentes respecto á las partes, á los testigos y á los peritos.

CAPITULO XIII.

De la comprobacion de los documentos y escrituras no reconocidos ó argüidos de falsos.

Art. 181. Tendrá lugar la comprobacion de documentos y escrituras siempre que las presentadas sean útiles para la decision del

negocio, y se encuentren en los casos siguientes:

1.º Si una de las partes sostiene que la escritura producida es falsa.

2.º Si tratándose de un documento privado, la parte á quien se atribuya, negare su letra y firma.

3.º Si una de las partes no reconociere como escrito ó firmado de puño de su causante ó de un tercero, el documento privado que á uno de estos se atribuya.

Art. 182. En los casos del artículo anterior la Seccion mandará comparecer á las partes en persona á los estrados el dia que determine.

De la comparecencia solo se dispensará á la parte que no pueda asistir por ausencia ó impedimento grave, en cuyo caso deberá representarla un apoderado especial.

Art. 183. El dia señalado, la Seccion intimará á la parte que hubiere presentado el documento argüido de falso, que declare si está en ánimo de servirse de él.

Art. 184. Si la parte incurriere en rebeldía, rehusare responder ó declarare que no trata de servirse del documento argüido, será este desechado del proceso.

Art. 185. Si la parte declarare que piensa servirse del documento, la Seccion mandará á la contraria que declare si persiste en sostener que el documento es falso, ó en no reconocerle por suyo, ó no estimarle de aquel á quien le atribuya la contraria.

Art. 186. Si esta parte incurriere en rebeldía, rehusare responder ó no persistiere en su primera declaracion, el documento presentado se admitirá como auténtico, y se estimará por reconocida su letra y firma.

Art. 187. Si la parte persistiere en la declaracion, la Seccion ordenará que explique los fundamentos que le inducen para argüir de falso el documento ó no reconocerlo por auténtico.

Si la parte arguyere de falso el documento, será interpelada para que declare qué clase de falsedad es la que atribuye al documento.

Art. 188. En el caso del artículo anterior, el documento se entregará inmediatamente al secretario para que se custodie, reconociéndole antes la Seccion, y haciéndole constar por diligencia el estado material en que se encuentre, las enmiendas, entregonaduras y raspados que en él se advirtieren, y rubricando todas sus hojas el ponente.

Tambien las rubricarán las partes ó sus apoderados, y si no pudieren ó no quisieren, se hará constar así por diligencia que firmará el secretario.

Art. 189. La Seccion mandará por un auto preparatorio:

1.º Que las partes produzcan los documentos y articulen los hechos conducentes para probar la autenticidad ó falsedad del impugnado.

2.º Que señalen las escrituras ó documentos que puedan servir para el cotejo.

Si del documento impugnado existiere protocolo ó registro, la Seccion podrá disponer, si lo estimare preciso, que sea traída la matriz, quedando copia literal y fehaciente de ella, la cual hará sus veces y tendrá la misma fuerza mientras no se devuelva, concluido que sea el cotejo, y archive de nuevo la original.

Art. 190. Las partes, antes del día señalado, se comunicarán respectivamente los documentos que piensen producir, y los hechos que traten de alegar.

Art. 191. El depositario del original ó matriz, cuya presentacion se hubiere proveído, será citado ó apremiado á hacerlo en la forma prevenida respecto á los testigos en los arts. 144 y 145.

Art. 192. Luego que venga la matriz, se procederá en la forma prescrita por el artículo 188.

Sin embargo, la Seccion podrá dejar la matriz en poder de su depositario, imponiéndole la obligacion de producirla en las audiencias sucesivas.

Art. 193. El día señalado por el auto preparatorio, si los documentos producidos fueren concluyentes en favor ó en contra de la autenticidad del impugnado, la Seccion proveerá en seguida admitiéndole ó desechándole del proceso.

Art. 194. En el caso contrario, por un segundo auto preparatorio la Seccion decretará la comprobacion del documento por medio del cotejo con otro ú otros indubitados.

En el mismo auto señalará los documentos indubitados que deban servir para el cotejo, disponiendo que sean traídos al efecto.

Tambien recibirá informacion de testigos sobre los hechos pertinentes articulados por las partes.

Art. 195. Se admitirán como auténticos ó fehacientes para el cotejo los documentos y escrituras que de comun acuerdo señalaran las partes.

Art. 196. Si las partes no estuvieren acordes en la designacion, no se tendrán como indubitados para el cotejo mas que los siguientes:

Los documentos auténticos.

Los privados reconocidos por las partes.

El impugnado en la parte en que no hubiere sido argüido de falso.

Art. 197. En defecto ó insuficiencia de documentos de cotejo, la parte á quien se atribuya lo escrito en el impugnado ó la firma que le autorice, podrá ser requerida á que forme un cuerpo de escritura que en el acto le dictará el ponente.

Si la parte se negare á formar el cuerpo de escritura, se le podrá estimar confesa en el reconocimiento del documento impugnado.

Art. 198. En defecto de los medios de comprobacion expresados en los dos artículos que preceden, podrá emplearse cualquiera otro que sea bastante para calificar de indubitado el que sirva para el cotejo.

Art. 199. Respecto á los documentos de cotejo y sus depositarios, se procederá con arreglo á los artículos 191 y 192.

Art. 200. La seccion por sí misma hará la comprobacion por medio del cotejo despues de haber oido las observaciones de las partes.

Art. 201. Sin embargo, el Consejo podrá siempre que lo estime conveniente, consultar el dictámen de peritos, observando lo dispuesto en el art. 167.

Los peritos en este caso serán nombrados de oficio, con arreglo en cuanto á su número á lo prevenido en el art. 168, y examinados verbalmente en la forma prescrita para los testigos.

Art. 202. La prueba testifical de los hechos se practicará con arreglo al capítulo X.

Art. 203. Si de las diligencias de comprobacion resultaren indicios acerca de los autores ó cómplices de la falsedad, y estos vivieren y fuere indispensable la decision previa del expediente criminal para fallar el proceso civil, se suspenderá el curso de este hasta la terminacion de aquel.

En todo caso se pasará al juez competente el tanto de culpa que resulte de las declaraciones sobre falsedad.

CAPITULO XIV.

De las providencias interlocutorias y de las resoluciones definitivas.

Art. 204. Las providencias interlocutorias serán dictadas por la Seccion de lo contencioso á los siete días de tener estado el proceso, y el Consejo pronunciará su resolucioin definitiva dentro de quince días contados desde el siguiente al de hallarse concluso. (Ver art. 11 R. D. 20 junio 1858.)

Art. 205. El Consejo motivará todas sus resoluciones definitivas, y la Seccion las pro-

videncias interlocutorias por las cuales conceda ó deniegue reposición de otra.

Art. 206. No será válida ninguna providencia de la Sección ni resolución definitiva del Consejo que no haya sido dictada respectivamente por tres vocales ó quince ordinarios por lo menos (1).

Art. 207. En falta de vocales ordinarios se asociará la Sección de lo contencioso el número suficiente de consejeros de la Sección de Gracia y Justicia, principiando por el mas moderno.

Art. 208. El consejero que no asista á la vista pública ante el Consejo, no tomará parte en la deliberación y votación del negocio.

Tampoco votará el consejero que habiendo asistido á la vista no esté presente al tiempo de deliberar y votar el Consejo, á no estar enfermo ó tener otro impedimento legítimo, y no quedar el número competente de consejeros para votar con arreglo al art. 206.

Art. 209. El consejero que por enfermedad ú otro legítimo impedimento tuviere que dar su voto por escrito, le remitirá motivado al que presida, el cual despues de leerle á presencia de los vocales, dispondrá que se transcriba literalmente en el libro correspondiente, á continuación de la resolución de la mayoría, si fuere contrario á ella, y en otro caso que se anote el nombre del consejero en el número de los votantes.

Art. 210. Cuando empezado á ver un negocio, ó visto ya y no votado, enfermarse ó de otro modo se inhabilitare alguno de los vocales concurrentes, no se suspenderá la vista ó determinación, si quedare el número suficiente.

Art. 211. Si el número de votantes no fuere suficiente, ni pudiere el impedido asistir á la votación, se procederá á nueva vista ó votación en su caso, citando á los que hubieren faltado á la vista anterior.

Art. 212. La votación, una vez comenzada, no podrá interrumpirse si no mediare impedimento insuperable.

Art. 213. Si el proceso estuviere en estado de ser decidido definitivamente en unos puntos y en otros no, podrá el Consejo fallarle definitivamente en cuanto á los primeros, ó no fallarle hasta que lo estuviere respecto á los unos y á los otros, como mejor lo estime, segun las circunstancias del caso.

Art. 214. Para dictar su fallo, comenzará el Consejo por asentar á propuesta de la Sección de lo contencioso las cuestiones de hecho y de derecho pendientes de su decisión.

Se votará por separado cada una de ellas. No se pasará á las cuestiones de derecho sino despues de haberse resuelto las de hecho.

Art. 215. El consejero de la Sección de lo contencioso que disienta de la mayoría acerca de la resolución definitiva ó puntos de derecho que deban proponerse al Consejo, podrá presentar su voto particular al mismo.

Art. 216. En toda providencia interlocutoria y resolución definitiva motivadas, se expresará:

1.º El nombre, apellido, profesión, domicilio y cualquiera otra circunstancia que facilite el conocimiento de las partes, el carácter con que estas litiguen y los nombres de sus abogados defensores.

2.º Las pretensiones respectivas.

3.º Las cuestiones de hecho y de derecho que el Consejo hubiere presupuesto.

4.º Lo acordado en consecuencia por el Consejo.

Art. 217. Las decisiones definitivas del Consejo se extenderán en forma de Reales decretos.

En la misma forma y guardando además lo prescrito en el artículo anterior, se extenderán en su parte declarativa y resolutive los votos particulares de los consejeros que usen del derecho de hacerlos.

Estos votos acompañarán á la decisión definitiva al elevarse esta en consulta al Gobierno.

Art. 218. A los que no hayan litigado en el proceso ó sus causa-habientes, no se franqueará sin previo decreto de la Sección certificación de las providencias y resoluciones que en él hubieren recaído.

Art. 219. El secretario expresará por diligencia la parte á quien diere la certificación al pié de esta y al de la minuta original de la resolución.

A la misma parte no podrá darse segunda certificación, sino en virtud de providencia acordada con citación de las partes.

Art. 220. La notificación de las providencias interlocutorias y resoluciones definitivas se hará por cédula de ujier, la cual contendrá, pena de nulidad, copia literal de la providencia ó del Real decreto en su caso.

Art. 221. El Consejo Real observará lo dispuesto en los arts. 47, 48, 51, y el párrafo 1.º del 53 del reglamento de los Consejos provinciales de 1.º de octubre de 1845.

Art. 222. El Real decreto será refrendado por el Ministro de la Gobernación de la Península.

Art. 223. Cuando S. M. no tuviere á bien conformarse con la resolución del Consejo,

(1) Ver arts. 48 y 49 ley ya inserta.

dictará en Consejo de Ministros el Real decreto motivado que estime justo.

CAPITULO XV.

De la reposicion de las providencias interlocutorias.

Art. 224. Dentro de tres dias contados desde la notificacion de una providencia, la parte á quien perjudique, podrá solicitar su reposicion ante el Consejo ó la Seccion respectivamente.

Art. 225. La reposicion se decidirá con cédula previa de emplazamiento y un solo traslado.

Art. 226. De la providencia confirmatoria ó revocatoria no podrá pedirse reposicion.

CAPITULO XVI.

Del recurso de aclaracion y revision de las resoluciones definitivas.

SECCION PRIMERA.

De la aclaracion de las resoluciones.

Art. 227. Tendrá lugar el recurso de aclaracion de las definitivas cuando la parte dispositiva de ellas fuere ambigua ú oscura en sus cláusulas.

SECCION SEGUNDA.

De la revision de las resoluciones.

Art. 228. Habrá lugar á la revision de una definitiva.

1.º Si hubiere contrariedad en sus disposiciones.

2.º Si hubiere recaído sobre cosas no pedidas.

3.º Si en ella se hubiere omitido proveer sobre alguno de los capitulos de la demanda.

4.º Si se hubiere dictado por menor número de consejeros de los que para su validez requiere este reglamento.

Art. 229. Habrá lugar á la revision cuando el Consejo hubiere dictado resoluciones contrarias entre sí, respecto á los mismos litigantes, sobre el propio objeto y en fuerza de idénticos fundamentos.

Art. 230. Habrá lugar á la revision de la definitiva que se hubiere dictado en virtud de confesiones y allanamientos hechos sin poder ó autorizacion suficientes por los defensores de las partes en estrados ó por escrito, si las expresadas confesiones ó allanamientos fueren contradichos por los interesados y demostrada su falsedad.

Art. 231. Habrá lugar á la revision de una definitiva:

1.º Si despues de pronunciada se recobraren documentos decisivos detenidos por fuerza mayor ó por obra de la parte en cuyo favor se hubiere dictado.

2.º Si hubiere recaído en virtud de documentos que al tiempo de dictarse ignoraba una de las partes haber sido reconocidos y declarados falsos, ó cuya falsedad se reconociere ó declarare despues.

3.º Si habiéndose dictado la definitiva en virtud de prueba testifical ó de posiciones, uno ó muchos testigos, ó la parte jurante fueren condenados como falsarios en sus declaraciones.

4.º Si la definitiva se hubiere ganado en virtud de cualquiera otra sorpresa ó maquinacion fraudulenta.

Art. 232. Habrá lugar á la revision de las definitivas dictadas en perjuicio de menores de edad ó entredichos de administrar sus bienes, cuando sus tutores ó curadores se hubieren descuidado en presentar á su favor documentos decisivos.

Art. 233. Los acreedores ó los que traigan causa de ellos, podrán impugnar por el recurso de revision las definitivas que se hubieren dictado contra su deudor ó contra su causante en fuerza de colusion fraudulenta ó atentado contra sus derechos.

Art. 234. No se impondrá recurso de revision por error material que se hubiere cometido en la definitiva en cuanto á los nombres, calidades y pretensiones de las partes, ó por simple error de cálculo en su parte dispositiva. Sin embargo, se pedirá por escrito la rectificacion del error, y en el caso de que hubiere lugar á ella, se extenderá al márgen ó á continuacion de la minuta de la sentencia.

SECCION TERCERA.

De los términos para interponer los recursos de aclaracion y revision.

Art. 235. El término señalado para interponer los recursos de aclaracion será de cinco dias, y para los de revision de dos meses contados:

1.º Desde la notificacion de la definitiva en los casos de los arts. 227 y 228.

2.º Desde la notificacion de la última definitiva en el caso del art. 229.

Art. 236. En los casos previstos por el artículo 231, el término para recurrir por vía de revision será el de dos meses contados desde el dia en que se descubrieren los documentos nuevos ó el fraude, ó desde el dia

del reconocimiento ó declaracion de la falsedad.

Art. 237. En los casos previstos por el artículo 232, el término para recurrir por vía de revision se prorogará en favor de los menores y entredichos de administrar sus bienes hasta dos meses contados desde la notificacion de la definitiva hecha saber despues de haber cesado la menor edad ó interdiccion.

En defecto de esta notificacion, se prorogará dicho término por todo el tiempo que dure la accion rescisoria.

Art. 238. En el caso del art. 233 los acreedores ó sus causa-habientes deducirán la demanda de revision á los dos meses contados desde el día en que hubieren adquirido noticia judicial de la definitiva.

Art. 239. En ningun caso podrá interponerse el recurso de revision cuando hubiere prescrito la accion, ó la resolucion ejecutoria que lo motive.

SECCION CUARTA.

De la forma y trámites de los recursos de aclaracion y revision.

Art. 240. La demanda sobre aclaracion y revision se introducirá por cédula de emplazamiento, pena de nulidad.

Art. 241. Cuando la demanda de revision se fundare en confesiones ó allanamientos impugnados como falsos, el defensor que los hubiere hecho será encausado por el juez competente.

Al efecto se le pasará á este un tanto de la sentencia en que se cancele la anterior dictada sobre falsos motivos.

Art. 242. Las demandas sobre aclaracion y revision se instruirán por los mismos trámites que cualquiera otra demanda.

Art. 243. Las demandas de aclaracion y revision no suspenderán la ejecucion de la sentencia que las motive.

Sin embargo, podrá el Consejo en vista de las circunstancias del caso, sobreseer en la ejecucion, exigiendo fianza del demandado ó de la parte que activare la ejecucion.

SECCION QUINTA.

De las definitivas dictadas en virtud de los recursos de aclaracion y revision.

Art. 244. Si el Consejo estimare procedente la aclaracion, admitirá el recurso y declarará la duda ú oscuridad que ofrezca la definitiva, sin variar en el fondo sus disposiciones.

Art. 245. El Consejo si estimare proce-

dente la revision, admitirá el recurso, y rescindirá en todo ó en parte la sentencia impugnada, segun que los fundamentos del recurso se refieran á la totalidad, ó tan solo á alguno de los capítulos de la sentencia.

Art. 246. En la misma definitiva de revision proveerá el Consejo sobre el fondo de la cuestion controvertida que haya sido objeto de la resolucion rescindida.

Art. 247. Cuando el Consejo admita el recurso de revision por la contrariedad de dos definitivas, rescindirá la última en fecha y mandará llevar á efecto la primera.

Art. 248. El secretario extenderá á continuacion de la minuta de la resolucion primitiva la de aclaracion ó revision que sobre ella recayere.

Art. 249. Nunca tendrá lugar el recurso de aclaracion:

1.º Contra una definitiva sobre la cual se hubiere ya interpuesto una vez este recurso.

2.º Contra la definitiva misma de aclaracion y revision.

3.º Contra la definitiva que en el caso de revision hubiere recaido de nuevo acerca del fondo de la cuestion ventilada.

Art. 250. Las decisiones de los recursos de que trata este capítulo se tomarán en la forma prevenida para las resoluciones finales en los negocios de que conoce el Consejo.

CAPITULO XVII.

Del recurso de apelacion de las sentencias de los Consejos provinciales.

Art. 251. En el término señalado por el art. 69 del reglamento de los Consejos provinciales de 1.º de octubre de 1845, la parte que se sintiere agraviada interpondrá el recurso de apelacion por escrito ante el Consejo respectivo, y se hará saber al apelado por cédula de ujier.

Art. 252. Dentro de tres meses si la alzada se interpusiere en Canarias, y de dos si en la Peninsula é Islas adyacentes, contados desde el trascurso de los diez dias concedidos para interponerla, el apelante mejorará el recurso, deduciendo ante el Consejo Real la demanda de agravios por medio de uno de sus abogados, apoderado debidamente, ó en su caso por el representante de la Administracion y de las Corporaciones que están bajo su tutela.

Con la demanda presentará el apelante:

1.º Certificacion de haber interpuesto el recurso y haberse notificado al apelado en tiempo y forma.

2.º Certificacion, sacada con citacion, de

la sentencia apelada, y de la probanza sobre que esta hubiere recaído (1).

Art. 253. En el término prescrito por el artículo anterior se presentará ante el Consejo el abogado del apelado con poder bastante para representarle en juicio.

Art. 254. Si el apelante no mejorare el recurso en el término señalado, se declarará desierta la apelacion, y la sentencia consentida á la primer rebeldía que le acuse el apelado (1).

Art. 255. Si el apelado no compareciere por medio de abogado en el término del artículo 252 y en la forma allí determinada, se seguirá la instancia en rebeldía.

Art. 256. Si en primera instancia no se hubiere proveído la ejecucion interina de la definitiva, la Seccion, á solicitud del apelado, podrá acordarla desde el primer día en que se le diere cuenta del negocio.

Art. 257. A instancia del apelante podrá la Seccion, desde el primer día en que se le diere cuenta del recurso, y atendiendo á sus circunstancias:

Prohibir ó suspender en todo ó en parte la ejecucion interina decretada por el inferior.

Mandar que preste fianza el apelado á quien el inferior no hubiere impuesto obligacion de otorgarla.

Art. 258. En la instancia de apelacion se observará lo dispuesto en los capítulos precedentes con las modificaciones que siguen.

Art. 259. No se admitirá en la instancia de apelacion ninguna pretension ni excepcion nueva, salvo aquellas que no se hayan podido proponer en la primera instancia.

(1) Sobre este artículo y el 254 ver el artículo 5.º del R. D. de 20 de junio de 1858, y en CONSEJOS PROVINCIALES, la jurisprudencia, casos XII y XXV. No basta mostrarse parte; es necesario, además, para evitar el fallo en rebeldía, mejorar la apelacion ó proponer la demanda de agravios en el plazo señalado, pues no haciéndolo á la primera rebeldía se declara desierto el recurso sin mas trámites. (Sentencias de 10 de marzo de 1848, núm. 2; de 14 de junio de id. núm. 14; de 18 de octubre de id. núm. 36).

Otro caso práctico. Puede suceder que se muestre parte el apelante al espirar el término, en cuyo caso debe cuidar mucho de utilizar el tiempo que le resta del mismo; pues si le deja pasar y se le acusa la rebeldía se declara desierta la apelacion. (Sentencia de 5 de julio de 1848, núm. 19). Id. 25 nov. de 1867.

Cuando se desiste expresamente de la apelacion interpuesta, se está en el caso del art. 254. Casos prácticos: Sentencias de 29 de enero de 1851, núm. 3, y de 20 de noviembre de 1850, núm. 23.

Art. 260. La Seccion, ó el Consejo en su caso, para mejor proveer, podrá ordenar se practiquen de nuevo ante ella las diligencias probatorias de primera instancia que estimare viciosas ó insuficientes.

Tambien podrá ordenar cualquiera otra clase de actuacion ó prueba que no se hubiere practicado ante el inferior.

Art. 261. El Consejo confirmará ó revocará en todo ó en parte la sentencia apelada, proveyendo de nuevo sobre los puntos en que la revocare.

Art. 262. Si la apelacion no hubiere recaído mas que sobre algun incidente, el Consejo proveerá tan solo acerca de él, reservando al inferior la decision de lo principal.

Art. 263. Sin embargo, en el caso del artículo anterior, el Consejo, si revocare el fallo del inferior, podrá decidir sobre lo principal cuando lo pidieren todas las partes.

Art. 264. El Consejo no podrá fallar sobre ninguno de los capítulos de la demanda que no se hubieren propuesto á la decision del inferior, salvo si se tratare.

De compensacion por causa posterior á la definitiva de primera instancia.

De intereses y cualesquiera otras prestaciones accesorias vencidas despues de la definitiva.

De daños y perjuicios causados desde su pronunciamiento.

Art. 265. El secretario del Consejo remitirá al del inferior certificacion del Real decreto que contenga la resolucion final en la segunda instancia, dentro de la semana en que se publique en el Consejo.

El secretario del inferior pondrá sin demora la certificacion con la minuta de la definitiva en primera instancia, extendiendo al pie ó al margen de ella la nota oportuna.

Art. 266. Los recursos de aclaracion y revision contra las definitivas dictadas en apelacion, tendrán lugar en los mismos casos, término y forma que los deducidos contra las resoluciones finales de los negocios contencioso-administrativos que principian y terminan en el Consejo.

CAPITULO XVIII.

Del recurso de nulidad contra las definitivas de los Consejos provinciales.

Art. 267. El procedimiento del recurso de nulidad se arreglará á lo dispuesto acerca del de apelacion.

Art. 268. Si el recurso procediere en los casos previstos por los párrafos 2.º y 3.º, art. 73 del reglamento de los Consejos provinciales, el Consejo fallará luego el proceso

en definitiva, y lo devolverá para su ejecución al Consejo respectivo.

Si procediere en el caso previsto por el párrafo 1.º del citado artículo, el Consejo dispondrá que se haga saber á las partes que acudan dónde y cómo vieren convenirles (1).

En los casos de los párrafos 4.º, 5.º, 6.º y 7.º del mismo artículo, el Consejo, si procediere, repondrá el proceso al ser y estado que tenia antes de causarse la nulidad, y le devolverá al inferior que le hubiere formado; para que le continúe y sustancie con arreglo á las leyes.

TITULO III.

DISPOSICIONES GENERALES.

Art. 269. Los plazos señalados por dias se entenderán de dias útiles, y no comprenderán el de su fecha ni el de su vencimiento (2).

Art. 270. Todo plazo que concluyere en domingo ú otro dia de fiesta legal, se prorogará al siguiente dia.

Art. 271. Los plazos señalados por este reglamento no podrán coartarse ni extenderse por el Consejo fuera de los casos en que se le reserva expresamente la facultad de hacerlo.

Art. 272. El trascurso de un término señalado por este reglamento para el ejercicio de algun derecho, traerá consigo la pérdida de este derecho.

Art. 273. Sin embargo, se suspenderá

(1) Esta declaracion procede, segun el referido párrafo 1.º del art. 73 del reglamento de los Consejos provinciales, cuando el asunto no fuere de la competencia de la jurisdiccion administrativa. Son muchas las nulidades que ya tiene declaradas el Consejo Real por virtud de lo dispuesto en este párrafo, y para evitarlas debe estudiarse cuidadosamente toda la materia administrativa y de actos administrativos. En el artículo *Acreedores contra Ayuntamientos*, tomo 1.º, pág. 138 y siguientes, se hallan comprendidas cinco sentencias en que refleja perfectamente la doctrina del párrafo á que se refiere esta nota. En el artículo *Actos Administrativos* se hallan tambien otras, y en sus respectivos lugares de este DICCIONARIO se insertarán las demas.—V. AGUAS. DESAMORTIZACION.—DESLINDES.—MONTES ETC.

(2) Al disponer este artículo, que no se cuentan los dias feriados ó inútiles en los plazos señalados por dias, resuelve indirecta, pero virtualmente que esta regla no es aplicable á los términos que se cuentan por meses, de los cuales nunca se descuentan ni aun los dias festivos. (R. D.-S. de 10 de abril de 1867 declarando improcedente el recurso de revision como interpuesto fuera de los dos meses que señala el artículo 235 del mismo reglamento.—Id: R. D.-S. de 15 de abril de 1867.) Véase tambien la jurisprudencia del artículo CONSEJOS PROVINCIALES.

dicho término por la muerte de la parte interesada.

No volverá á correr contra sus herederos sino desde el vencimiento del concedido para hacer inventario ó deliberar.

Art. 274. Los plazos dejados al arbitrio del Consejo serán del tiempo absolutamente necesario para que se ejecute el acto.

No se prorogarán sin justa causa.

Art. 275. Será condenada á satisfacer daños y perjuicios:

1.º La parte que solicitare señalamiento de término en virtud de falsos motivos.

2.º La que para asegurar su demanda ó defensa recurriere á falsas alegaciones y negativas, ó imputaciones calumniosas ó cualquiera otro de los medios reprobados que sugiere la mala fé.

3.º La que sin legítimo fundamento dedujere recursos de interpretacion, revision, nulidad ó apelacion de una definitiva que no fuere susceptible de ellos.

4.º Aquella cuya apelacion se estimare temeraria en todo otro caso.

5.º La que en virtud de sentencia ó actos cancelados á consecuencia de pago ú otro modo legítimo de extinguirse las obligaciones hubiere conseguido que se proceda contra la persona ó bienes de su adversario.

6.º La que con desprecio de las providencias del Consejo infringiere la prohibicion que se le haya impuesto, ó no restituyere los bienes que detentare.

Art. 276. Las multas que impusiere el Consejo no podrán exceder de 10,000 rs.,

Art. 277. La condena de daños y perjuicios comprenderá la indemnizacion completa de los causados.

Art. 278. En caso de concurrencia contra los bienes de la parte condenada entre la multa y la indemnizacion de daños, será esta pagada con preferencia.

Art. 279. Sin perjuicio de las penas que van declaradas, si los escritos producidos en el proceso contuvieren imputaciones calumniosas ó injuriosas, el Consejo podrá proveer que estas se tachen, quedando siempre salva la accion de injurias, si procediere.

Art. 280. Serán condenados á pagar daños y perjuicios y en multa los actuarios y ujieres que hubieren practicado una diligencia nula.

Art. 281. Los actuarios, defensores y ujieres que infringieren las disposiciones de este reglamento, ó no se conformaren con ellas, podrán ser condenados por cada contravencion, aunque esta no cause nulidad, en 500 rs. ó en 1,000 si reincidieren en el curso de un mismo año.

Art. 282. Las penas referidas se impondrán con audiencia de aquel á quien se aplicaren, previo depósito de la multa, si en ella consistieren.

Aprobado por S. M. por Real decreto de esta fecha.—Madrid 30 de diciembre de 1846.» (CL. t. 39, p. 315.)

R. D. de 19 octubre de 1860.

Adiciones al reglamento anterior.

(PRES. DEL C. DE M.) Conformándome con lo propuesto por el Consejo de Ministros, y oído el Consejo de Estado,

Vengo en aprobar las siguientes adiciones al reglamento sobre el modo de proceder en los negocios contenciosos de la Administracion.

CAPITULO UNICO.

De la Sala contenciosa y de las demandas contra las resoluciones del Gobierno ó de las Direcciones generales.

SECCION PRIMERA.

De la organizacion y procedimientos de la Sala contenciosa.

Artículo 1.º Para la formacion de la Sala contenciosa del modo que dispone el art. 19 de la ley de 17 de agosto último se abrirá un turno en las Secciones de Estado y Gracia y Justicia, Hacienda, Guerra y Marina, Gobernacion y Fomento, y Ultramar.

Este turno será de tres consejeros por cada una de dichas Secciones, empezando por el presidente y los que le sigan por antigüedad, y así sucesivamente.

Cada turno durará dos meses; y en el caso de imposibilidad de constituir Sala, serán llamados para formarla los consejeros del inmediato; pero no estarán por esto relevados de la asistencia cuando les llegue su turno.

Los consejeros de turno de cada Seccion alternarán ó se suplirán por dias de asistencia. Cuando en la vista y deliberacion de un negocio se invierten dos ó mas dias se entiende una la asistencia para los efectos de este artículo.

Art. 2.º Aun en el caso del número mínimo que establece el art. 19 de la ley de 17 de agosto último, para que haya acuerdo en la Sala de lo contencioso, deberán hallarse siempre presentes tres consejeros de la Seccion de lo contencioso, y los dos de la del Ministerio á que corresponda la reclamacion.

Art. 3.º El número de los que constituyan la Sala de lo contencioso será siempre impar, y si no lo fuere se retirará el mas moderno que no sea de la Seccion de lo con-

tencioso, ni de la del Ministerio á que corresponda la reclamacion.

Formará acuerdo la mayoría de votos.

Art. 4.º Luego que el Gobierno acuse el recibo de la consulta ó informe sobre el fallo de un pleito ó sobre la admision de una demanda, se hará saber á las partes dicho recibo y su fecha.

Art. 5.º Solo á instancia de parte podrá procederse á lo que previenen los arts. 60 y 64 de la ley de 17 de agosto último.

La declaracion de que es llegado el caso de cualquiera de estos dos artículos corresponde al Consejo pleno, á la Sala contenciosa, ó á la Seccion de lo contencioso, segun que respectivamente hubieren consultado ó informado sobre el asunto. Contra esta declaracion no podrá intentarse recurso alguno.

Art. 6.º Son aplicables á la Sala contenciosa las disposiciones vigentes sobre el modo de proceder el Consejo en los negocios contenciosos de la Administracion, en cuanto no se opongan á las de este capítulo y á la ley de 17 de agosto último.

SECCION SEGUNDA.

De las demandas contra las resoluciones del Gobierno ó de las Direcciones generales.

Art. 7.º Las demandas contra las resoluciones del Gobierno ó de las Direcciones generales, que por las disposiciones vigentes deben presentarse ante el Consejo de Estado, se entregarán en la Secretaría general del mismo los dias y horas hábiles.

El secretario pondrá al pie de cada demanda la nota de su presentacion, y facilitará al interesado que lo pidiere documento bastante para acreditarla.

Art. 8.º La Secretaría general unirá desde luego á cada demanda los antecedentes del asunto que obren en el Consejo, y lo pasará todo á la Seccion de lo contencioso.

El ponente nombrado con arreglo al artículo 10 del reglamento vigente informará á la Seccion de la demanda, proponiendo la resolucion que estime conveniente.

Art. 9.º La comunicacion al fiscal de lo contencioso y la citacion para la vista pública, en el caso del art. 57 de la ley de 17 de agosto último, se harán saber administrativamente á dicho fiscal; y al que represente la parte demandante ó demandada.

Art. 10. En estas vistas se observará lo prevenido para las de la Seccion y del Consejo en el reglamento vigente.

Art. 11. La Seccion elevará su dictámen al Gobierno dentro del plazo señalado para

las sentencias interlocutorias. En todo lo demás será gubernativo este procedimiento.

Art. 12. La decision que dictare mi Gobierno con presencia de este dictámen sobre la admision de la demanda será irrevocable.

Disposiciones transitorias.

El primer turno que se estableza con arreglo en el art. 1.º de este capítulo durará hasta fin del presente año.—Dado en Palacio á 19 de octubre de 1860. (CL. t. 84, p. 298.)

R. D. de 22 setiembre de 1845.

Por este decreto se completó la organizacion dada al Consejo Real por la ley de 6 de julio de 1845 y se determinaron varios puntos que se habian omitido en aquella; pero publicada la ley de 17 de agosto de 1860 hay que estar á ella así sobre la organizacion como sobre las atribuciones del Consejo de Estado. Las disposiciones de dicho decreto se hallan además refundidas en la ley.

Ley de 20 febrero de 1850.

Es la ley que fija las bases de la contabilidad general, provincial y municipal. (V. HACIENDA PUBLICA), cuyo art. 10 atribuye á los Consejos provinciales y al Real en su caso, las contiendas sobre incidencias de subastas de bienes nacionales y fincas del Estado que ocurran entre el Estado y los particulares, cuando no puedan terminarse gubernativamente con mútuo asentimiento. En la importante R. O. de 20 de setiembre de 1852 que se inserta en el lugar correspondiente de este artículo, veremos ya perfectamente deslindada esta materia.

R. D. de 11 noviembre de 1851.

Aclaracion al art. 52 del reglamento del Consejo Real.

«La inteligencia y aplicacion práctica del art. 52 del reglamento del Consejo Real, aprobado por mi R. D. de 30 de diciembre de 1846, ha ofrecido dudas que es preciso aclarar para evitar conflictos á la Administracion. La segunda parte del artículo expresado carece de la necesaria aplicacion, pues imponiéndose en él la obligacion al Ministro de la Corona de oír previamente al Consejo cuando no estimare desde luego procedente la vía contenciosa, nada establece para los casos en que, sin negarse de un modo absoluto, se aplaza únicamente para cuando en el expediente gubernativo haya sido resuelta definitivamente la solicitud que sea objeto de la demanda. Esta omision, sea cual fuere la interpretacion que se dé al artículo, puede

producir entorpecimientos, y causar perturbacion de atribuciones que deben prevenirse; y para ello de acuerdo con lo expuesto por el Consejo de Ministros, vengo en declarar como regla general y de inmediata aplicacion para lo sucesivo, que cuando por el Ministerio respectivo á quien correspondá proponerme la resolucion acerca de la procedencia de la vía contenciosa no se estimase esta desde luego afirmativamente, se oiga siempre el parecer del Consejo Real sobre esta cuestion previa, segun y para los efectos que en dicho art. 52 se expresan; entendiéndose de este modo aclarada la segunda parte del referido artículo.» (CL. t. 54, pág. 427.)

R. D. de 21 mayo de 1853.

Casos en que precede el recurso contencioso-administrativo contra las resoluciones del Ministro de Hacienda y de las Direcciones; plazos etc.—Y sobre los arts. 51 y 52 del Reglamento del C. R. (1).

«Señora: La creacion del Consejo Real y la jurisdiccion que se le confirió para conocer en primera y única instancia de las demandas contenciosas contra las resoluciones de los Ministros de la Corona, y sobre el cumplimiento, inteligencia, rescision y efectos de los remates y contratos celebrados por el Ministerio ó las Direcciones generales de los diferentes ramos de la Administracion civil, exigian que el Gobierno de V. M. dictase las disposiciones oportunas para poner en armonía el curso y terminacion de estos expedientes con la nueva garantia que se dió al Estado y á los particulares en la creacion de los Tribunales contencioso-administrativos.

El R. D. de 21 de setiembre de 1852, y el último arreglo de la jurisdiccion y de los Tribunales de la Hacienda pública, hicieron mas apremiante aquella necesidad respecto de este ramo, pues si la concesion del recurso no fuese acompañada de aquellas disposiciones, se convertiría las mas veces en un trámite inútil, no sería prenda de seguridad para el Estado, ni contribuiría á simplificar la marcha de la administracion activa.

Corresponde, pues, á estos principios y al sistema de reformas que se ha propuesto el Ministro que suscribe, establecer que tengan un término las resoluciones gubernativas que pueden ser impugnadas por la vía contenciosa: sin esta disposicion los expedientes se eternizan, se desautoriza la Administracion con resoluciones contradictorias, y la Hacienda sale siempre perjudicada por el interés

(1) Las disposiciones de este decreto son aplicables á todos los Ministerios, segun el artículo 14 del de 20 de junio de 1858.

privado, activo y vigilante, espía la ocasion que le es mas favorable, y logra obtener con su importunidad lo que tal vez no obtendria de la justicia.

Ya se consideren las resoluciones de los Ministros como decisiones en primera instancia, ya como concesiones de una parte sobre derechos controvertidos, es indispensable darles estabilidad y firmeza, consignando en un Real decreto el principio de buena administracion de que las providencias administrativas que producen derechos y causan estado, solo pueden ser revocadas por la via contenciosa, deducida ante los Tribunales y en la forma que disponen las leyes.

Pero semejante declaracion no puede hacerse sin conservar á los Ministros las atribuciones que les son propias, guardando el órden jerárquico establecido en la organizacion administrativa del Estado. La forma en que se redactó el núm. 1.º del art. 1.º del reglamento de 30 de diciembre de 1846 pudo al principio ofrecer alguna duda acerca de si procedia recurrir á la via contenciosa, contra las decisiones de los directores de la Administracion civil; pero la jurisprudencia, interpretando este artículo de una manera conforme á la buena doctrina, admitió solo el recurso cuando las decisiones de los directores causan estado en virtud de algun reglamento especial, y le negó en todos los demás casos, porque aquellos funcionarios son mas bien agentes que autoridades administrativas, y al Ministro responsable, como jefe inmediato corresponde la facultad de confirmar ó revocar sus acuerdos, siempre que por excepcion no tengan carácter de definitivos.

No es menos conveniente para poner término á los expedientes y dar estabilidad y firmeza á los derechos creados por resoluciones administrativas, señalar un plazo para reclamar contra ellas por la via contenciosa.

Desde el momento en que se hace saber una resolucion á un particular, conoce este si le perjudica ó no en los derechos que tiene adquiridos; y los recursos que el nuevo sistema administrativo concede para comprobar la justicia de sus resoluciones, no deben convertirse en medio de decepcion ó en pretexto para retrasar la resolucion definitiva de los expedientes y obtener una decision favorable, si por el trascurso del tiempo y las variaciones de las oficinas llegasen á desaparecer algun dia los fundamentos que se oponian á ella.

Seis meses, contados desde el dia en que se haga saber la providencia en la forma administrativa, y para los asuntos hoy fenecidos desde la publicacion del decreto que tie-

ne la honra de presentar á V. M. el Ministro que suscribe, parecen un plazo suficiente para que los particulares decidan si les conviene hacer uso del recurso contencioso; y si dejan pasar todo este tiempo sin haberlo hecho, justo es tambien que la providencia quede irrevocablemente ejecutoriada, porque los intereses de la Hacienda pública no deben estar siempre expuestos al incierto resultado de nuevas demandas.

Este plazo no puede, sin embargo, contarse para el Estado desde el momento en que la providencia se dicta. La autoridad que la acuerda pocas veces pedirá su revocacion por la via contenciosa, aunque sea perjudicial al Fisco, y ninguna seguridad prestaría al Estado aquel recurso, porque los seis meses pasarian siempre sin haber hecho uso de él.

Las condiciones no son iguales en ambos casos; y una vez que el plazo principia á contarse para los particulares desde que se les hace saber la providencia, porque desde entonces conocen si los perjudica en sus derechos, debe por analogia establecerse para la Hacienda que los seis meses se cuenten desde que tiene legalmente el mismo conocimiento; esto es, desde el dia en que la Administracion activa entiende que una providencia anterior ha causado perjuicio, y ordena se provoque su revocacion por la via contenciosa.

Mas adelante, cuando la Administracion funcione con la rapidez que debe esperarse de su actual organizacion, y hayan terminado la multitud de expedientes envejecidos que existen en las oficinas, quizá será posible igualar al Estado con los particulares; pero hoy no podria hacerse sin grave peligro, sin exponer á la Hacienda pública á perder derechos tan considerables como justos.

No cree tampoco el Ministro que suscribe que es oportuno uniformar por ahora, con los plazos establecidos en el decreto que tiene la honra de presentar á V. M., los que señalan las leyes y reglamentos existentes para recurrir por la via contenciosa contra las decisiones de la Administracion en los asuntos especiales á que se refieren, como los de partícipes legos de diezmos, acreedores del Estado, clases pasivas etc. Algunos de estos plazos están determinados por una ley, y esta sola consideracion hacer ver la imposibilidad de alterarlos por Real decreto mientras la ley exista.

Así solo añadirá á las disposiciones expresadas otras dos que, aunque á primera vista parezcan de poca importancia, contribuirán muy poderosamente á acelerar el curso de

las demandas contenciosas, y á que el Gobierno pueda declarar en el término señalado, si procede su admision.

Los que se creen con derecho á interponer una demanda contra las providencias de los Ministros, la presentan ante el Consejo Real, y el vice-presidente de esta corporacion la remite al Ministro de donde dimana la providencia para que decida si procede ó no la via contenciosa: en el primer caso devuelve el expediente al Consejo Real para el curso que corresponda; pero si duda de la procedencia del recurso debe oir al Consejo sobre esta cuestion previa, y en vista de su informe resolver en el término de un mes lo que tenga por conveniente.

Si fuera posible hacerlo en tan corto plazo, no ofrecería tantos inconvenientes este sistema; pero con sus lentos trámites se ha invertido alguna vez mas de un año en declarar si procede ó no la via contenciosa.

Cuando el Gobierno la deniega por no haberse apurado aun la gubernativa, y confirma en esta la providencia, objeto del recurso, necesitan los litigantes presentar nueva demanda, que sigue los mismos trámites que la primera, y pasa otro tanto tiempo sin que puedan defender sus derechos por medio de una discusion mas amplia.

El recurso contencioso se convierte entonces en vana sombra, que ninguna defensa presta al Estado ni á los particulares; y para impedir resultados tan contrarios al espíritu de la ley, deberá disponerse que cuando aquella corporacion remita una demanda al Gobierno, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 51 del reglamento de 30 de diciembre de 1846, informe sobre su propia competencia para conocer de ella.

En su vista declarará desde luego el Ministro de Hacienda si procede ó no la via contenciosa: si procede devolverá el expediente al Consejo Real para la instruccion sucesiva: si no la estima, porque no pueda intentarse la via contenciosa contra la resolucion impugnada, lo declarará así sin ulterior recurso; y si la desestimacion fuese por no haber terminado la gubernativa, el interés de los particulares y de la Hacienda á quien tanto importa la pronta resolucion de estas cuestiones, aconsejan que el Ministro decida lo que proceda sobre la cuestion principal y sobre la admision definitiva del recurso, sin necesidad de nueva demanda.

Tales son, señora, las disposiciones que el Ministro que suscribe tiene la honra de proponer á V. M., y que contribuirán sin duda á acelerar la marcha de la Administracion y á dar mayores garantías á los intereses crea-

dos por ella, si V. M. se digna aprobar el adjunto proyecto de decreto en que van consignadas.—Madrid 24 de mayo de 1853.—Señora.—A L. R. P. de V. M. —Manuel Bermudez de Castro.

REAL DECRETO.

Atendiendo á las consideraciones que me ha expuesto el Ministro de Hacienda, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º En los negocios en que se versen recíprocas obligaciones de la Hacienda y de los particulares, causarán estado las resoluciones que en mi nombre adopte el Ministro de Hacienda, y sean revocables por la via contenciosa, á que podrán recurrir contra ellas, tanto el Gobierno como los particulares, si creyesen perjudicados sus derechos.

Art. 2.º Las resoluciones de los directores generales que dependen del Ministerio de Hacienda, podrán revocarse por la via Administrativa, y no darán lugar á la contenciosa sino cuando tengan carácter de definitivas y causen estado, con arreglo á lo dispuesto en las leyes y reglamentos vigentes.

Art. 3.º El recurso contencioso, de que tratan los dos artículos anteriores, deberá intentarse en el plazo improrogable de seis meses, contados desde el dia en que se haya hecho saber, en la forma administrativa, á los interesados la providencia que motiva el recurso. Respecto de los negocios que se hallan hoy fenecidos, se contará el mismo plazo desde la fecha en que ha de empezar á regir el presente Real decreto. Solo correrá para el Estado, en todos los casos, desde el dia en que la Administracion activa entienda que una providencia anterior causó algun perjuicio, y ordene que se provoque su revocacion por la via contenciosa.

Art. 4.º Las disposiciones que contiene el artículo anterior no alteran los plazos que señalan las leyes y reglamentos publicados hasta esta fecha para deducir los recursos contenciosos en los asuntos á que se refieren.

Art. 5.º Cuando el vice-presidente del Consejo Real remita al Ministro de Hacienda, en cumplimiento del art. 51 del reglamento de 30 de diciembre de 1846, alguna demanda contenciosa contra la Administracion, acompañará á ella el informe á que se refiere el párrafo segundo del art. 52 del mismo reglamento.

Art. 6.º Si el Ministro de Hacienda estimare que procede la via contenciosa, remiti-

rá el expediente al Consejo Real para el curso que corresponda. Si creyere que no procede la demanda, porque la resolución contra que se interpone no puede ser impugnada por la vía contenciosa, lo declarará así sin ulterior recurso. Si no la admitiese por no hallarse aun terminada la vía gubernativa, llamará á sí el expediente y resolverá lo que proceda sobre la cuestión principal, y respecto de la admision definitiva del recurso contencioso. (CL. t. 59, p. 93).

R. D. de 21 de noviembre de 1857.

Atribuyendo al Consejo Real los asuntos de que conocia la Cámara del Real patronato

Art. 1.º Se suprime la Cámara del Real patronato, creada por mi Real decreto de 17 de octubre de 1854.

Art. 2.º El conocimiento de los asuntos en que entendia la citada Cámara corresponderá al Consejo Real, conforme á su ley orgánica y al R. D. de 22 de setiembre de 1845 hasta que una nueva ley determine sobre el particular lo mas conveniente.—Dado en Palacio á 21 de noviembre de 1857 (1). (CL. t. 74, pág. 163.)

(1) Los asuntos en que entendia la Cámara del Real patronato, que hoy se atribuyen al Consejo Real, están determinados en el art. 7.º del R. D. de 2 de mayo de 1851, por el que se estableció un Consejo de negocios eclesiásticos con el título de *Cámara eclesiástica*, y por los arts. 5.º al 10 del R. D. de 17 de octubre de 1854 en que se mandó cesar dicha Cámara, y se la reemplazó con otro Consejo denominado *Cámara del Real patronato*. Dicen así estas disposiciones:

Art. 7.º del R. D. de 2 mayo 1851. «Será oída precisamente la Cámara en los expedientes de provision de curatos y beneficios curados que por oposicion y á propuesta de los diocesanos corresponde á la Corona; en las permutas y resignas; en los planes beneficiales y sobre expedicion de cédulas auxilatorias á favor de los nombrados por los prelados ó cabildos, sede vacante, para cargo de la judicatura eclesiástica (a); en todos los conflictos y encuentros entre las autoridades eclesiásticas y del órden administrativo civil, y en general sobre todo lo que pueda afectar las buenas relaciones y concordia entre la Iglesia y el Estado.» (CL. t. 51, página 12.)

Arts. 5.º al 10 del R. D. 17 octubre 1851 por el que se creó la Cámara del Real patronato.

Art. 5.º Las atribuciones de esta Cámara serán todas consultivas, y en cuanto al Patronato Real las mismas que las leyes recopiladas declararon á la Cámara antigua de Castilla, excep-

(a) Véase en el artículo *Jurisdiccion eclesiástica* el R. D. de 8 junio de 1835 sobre nombramiento de provisores.

R. D. de 7 agosto de 1854.

Por este decreto se creó en sustitucion del Consejo Real un Tribunal contencioso-administrativo; pero por otro de 16 de octubre de 1856 se restableció el Consejo Real.

R. D. de 23 mayo de 1858.

Se aprueba el Reglamento para el régimen interior del Consejo Real.

«Tomando en consideracion las razones que me ha expuesto el Ministro de la Gobernacion, de acuerdo con mi Consejo de Ministros, vengo en aprobar el nuevo Reglamento para el régimen interior del Consejo Real que me ha presentado, y en el cual se introducen las modificaciones y reformas que ha indicado la experiencia como necesarias ó convenientes.—Dado en Aranjuez á 23 de mayo de 1858.»

Reglamento para el régimen interior del Consejo Real, publicado por R. D. de 23 de mayo de 1858.

CAPITULO PRIMERO.

Del Consejo pleno y de sus sesiones.

Artículo 1.º El Consejo pleno se com-

tuadas las judiciales que por la ley están asignadas al Tribunal Supremo de Justicia,

Art. 6.º Por ahora y hasta que las leyes lo aprueben ó determinen otra cosa, la Cámara del Patronato examinará las bulas, breves y demás despachos pontificios que se presenten al pase, y consultará su concesion ó retencion segun procediese. Del mismo modo entenderá y consultará acerca de las vénias que se soliciten, y de las preces que se presenten para obtener bulas y breves de Roma.

Art. 7.º Conocerá interina y provisionalmente, hasta que las Córtes resuelvan en este punto lo conveniente, de los negocios contencioso-administrativos que surjan de los de Patronato Real, y de cualesquiera de las demás atribuciones que le van designadas; guardando la forma consultiva con que lo hacia ultimamente el Consejo Real con arreglo á la ley y reglamento de su creacion y organizacion.

Art. 8.º Consultará la misma Cámara del Real Patronato en los negocios que á este fin se le pasen por el Ministerio de Gracia y Justicia en negocios eclesiásticos.

Art. 9.º La Cámara del Patronato Real, verificada su instalacion, formará y remitirá á mi Real aprobacion el reglamento oportuno para su régimen y gobierno.

Art. 10.º La Cámara del Real Patronato se reunirá en tres dias de la semana, que fijará en su reglamento, y celebrará sus sesiones en el local que hoy está destinado á la Cámara eclesiástica, y en horas compatibles con el desempeño de los cargos de los vocales que estén en servicio activo. (CL. t. 63, p. 185.)

pone de los Ministros, secretarios de Estado y del Despacho, y de los consejeros ordinarios y extraordinarios.

Art. 2.º Para que el Consejo pleno pueda celebrar sesion han de estar presentes un número de consejeros ordinarios y extraordinarios, igual por lo menos á la mitad mas uno de los que forman la primera de estas dos clases.

Art. 3.º La asistencia de los consejeros extraordinarios no es, como la de ordinarios, obligatoria, sino durante las vacaciones, y en el caso de exigirla el servicio ú ordenarlo el Gobierno.

Art. 4.º El Consejo pleno celebrará sesion todos los miércoles, sin perjuicio de las extraordinarias que el Gobierno prescriba, ó que hagan indispensables, á juicio del presidente, el número ó la urgencia de los negocios.

Art. 5.º La duracion ordinaria de las sesiones será de tres horas, pero podrá prolongarse al prudente arbitrio del presidente en los casos particulares en que el servicio lo requiera.

Art. 6.º La hora de las sesiones se fijará por el Consejo en la primera sesion del mes de abril para los seis meses hasta fin de setiembre, y en la primera de octubre para los seis meses siguientes.

Art. 7.º Los consejeros ordinarios que no puedan asistir puntualmente á la hora que se señale lo avisarán con tiempo al presidente.

Lo mismo deberán hacer los consejeros extraordinarios en el caso excepcional prescrito en el art. 3.º

Art. 8.º Los consejeros ocuparán sus asientos por el orden riguroso de antigüedad. Esta antigüedad se estimará por la fecha del nombramiento de consejero. En igualdad de fechas, obtendrá la preferencia el de mas edad. Cuando un consejero deje de serlo y vuelva posteriormente á ejercer este cargo, se contará su antigüedad desde la fecha de su primer nombramiento, siempre que por consecuencia de él haya servido dos años la plaza de consejero.

Art. 9.º Luego que el presidente abra la sesion leerá el secretario general el acta de la anterior, que deberá siempre contener los nombres de los consejeros que hayan concurrido á ella y los de los que se hubiesen excusado; y aprobada ó rectificada en su caso publicará las excusas que el presidente hubiere recibido, dará cuenta de las Reales órdenes comunicadas al Consejo, y leerá el estado de los negocios distribuidos entre las Secciones desde la última sesion.

CAPITULO II.

De la forma de las deliberaciones y consultas del Consejo pleno.

Art. 10. Todos los asuntos que hayan de ser objeto de las deliberaciones del Consejo pleno se someterán previamente al exámen de la Seccion respectiva ó de una Comision especial en su caso, y no podrá abrirse discusion si no sobre el dictámen que estas dieren.

Art. 11. Los consejeros podrán tambien pedir que el dictámen quede sobre la mesa, debiendo en tal caso darse cuenta de él con preferencia en la sesion ordinaria inmediata, ó en la extraordinaria que á este fin se señale si hay urgencia.

Art. 12. Si no pide la palabra en contra ningun consejero, se pondrá desde luego el dictámen á votacion, la cual en este caso se hará levantándose los que aprueben y permaneciendo sentados los que desaprobren.

Art. 13. Pedida en contra la palabra por algun consejero, se abrirá la discusion sobre el dictámen, y se hará uso en ella de la palabra por el orden con que se haya pedido, alternando los defensores y los impugnadores, y empezando por estos el turno.

Art. 14. Ningun consejero podrá hablar mas de una vez en pró ó en contra, pero siendo uno solo el que haya pedido la palabra en contra, se le permitirá que hable dos veces.

Se exceptúan los individuos de la Seccion ó Comision cuyo dictámen se discuta, que podrán, consumiendo turno, usar de la palabra cuantas veces lo juzguen conveniente, y tambien los ministros, que podrán hacer otro tanto sin consumir turno.

Art. 15. Despues de haber hecho uso de la palabra solo se permitirá á los consejeros rectificar equivocaciones ó contestar á alguna alusion personal, sin volver de ningun modo á entrar en el fondo de la cuestion.

Art. 16. En ningun negocio podrán hablar mas de tres consejeros en pró y tres en contra; y al concluir el último de los que hayan obtenido la palabra, declarará cerrada la discusion el presidente, á no ser que el Consejo acuerde que continúe.

Art. 17. Cuando se pidiere por dos ó mas consejeros á un tiempo la palabra en un mismo sentido, se dará antelacion en el uso de ella al de mayor edad.

Siendo uno de estos consejeros individuo de la Seccion ó Comision cuyo dictámen se discuta, será antepuesto á todos los demás.

Lo será igualmente, aun en el caso de ha-

ber pedido la palabra despues que los otros, si ya no quedase mas que un turno.

Art. 18. La palabra concedida á un consejero podrá renunciarse y tambien cederse á otro que la tenga pedida.

Art. 19. En todos los negocios en que haya discusion deberá la votacion ser nominal, diciendo los consejeros por el orden de asientos *si ó no*, segun que aprueben ó desaprueben.

Art. 20. Antes de procederse á la votacion podrá la Seccion ó Comision retirar su dictámen, y en tal caso se aplazará la resolucion para cuando de nuevo lo presente.

Art. 21. Los acuerdos del Consejo se harán á pluralidad absoluta de votos, y el del presidente en caso de empate será decisivo.

Art. 22. La discusion de dictámenes que tengan diferentes artículos se dividirá en dos partes:

- 1.^a Sobre la totalidad.
- 2.^a Sobre los artículos.

Art. 23. Terminada la discusion sobre la totalidad, se preguntará si se toma en consideracion, y en la afirmativa se pasará á la discusion por artículos.

Cuando el dictámen no tenga artículos, despues de terminada la discusion si algun consejero lo pide, se hará la pregunta de si se discutirá por párrafos ó partes.

Art. 24. Si durante la discusion se hicieren enmiendas ó adiciones, se discutirán y votarán despues.

Art. 25. Las adiciones y enmiendas se propondrán antes de cerrarse la discusion.

Art. 26. Cuando un dictámen fuere desechado se hará la pregunta de si volverá á la Seccion. Si se acuerda que no, el presidente nombrará una Comision para que redacte la consulta conforme á las opiniones de la mayoría.

Art. 27. Los consejeros podrán pedir que su voto quede consignado en el acta cuando sea contrario al acuerdo del Consejo.

Art. 28. Cuando haya habido discusion podrán los consejeros que hubiesen impugnado el dictámen aprobado por el Consejo formar voto particular antes que se levante la sesion, y adherirse á este voto, en la misma ó en la inmediata, los demás consejeros que en la votacion hayan formado la minoría.

El voto particular para que se le dé curso debe presentarse motivado en la sesion ordinaria próxima á la del acuerdo del Consejo, ó en la extraordinaria que se señale, habiendo urgencia, y ha de firmarse por su autor y los consejeros que se adhieran á él, pudiendo estos retirar su adhesion antes de suscribirla.

Art. 29. Del voto particular se dará cuenta en la misma sesion en que se presente, y se mandará pasar á la Seccion ó Comision que hubiese dado el dictámen á que se refiera, á fin de que para la sesion próxima ordinaria, ó extraordinaria en su caso, extienda la refutacion que juzgue conveniente, ó indique, si la creyese innecesaria, las razones en que funde este concepto.

Art. 30. Las consultas del Consejo se elevarán firmadas por el vice-presidente y el secretario general, con expresion al márgen de los consejeros que hubiesen concurrido á la votacion, é insertándose en el cuerpo de ellas el dictámen aprobado segun lo hubiese sido, y el voto ó votos particulares con lo manifestado por la Seccion ó Comision respectiva acerca de los mismos.

CAPITULO III.

De las secciones.

Art. 31. Es aplicable á las Secciones lo prescrito en los dos anteriores capítulos en lo que no se oponga á las disposiciones especiales del presente.

Art. 32. Las Secciones celebrarán sesion el martes y viernes de cada semana, sin perjuicio de las extraordinarias que á juicio del vice-presidente respectivo sean indispensables.

No podrán asistir á las Secciones consejeros extraordinarios en número que exceda al de los vocales ordinarios de la misma en la proporcion establecida en el art. 8.^o de la ley orgánica del Consejo.

Art. 33. Para que las Secciones celebren sesion bastará que concurren dos de sus individuos de la clase de ordinarios.

Los acuerdos en que ambos estuviesen conformes se tendrán por firmes; si faltare esta conformidad en algun negocio, se volverá á dar cuenta de él con preferencia en la primera sesion, compuesta de mayor número de consejeros.

Art. 34. Cuando alguna de las Secciones creyese conveniente oír en conferencia á consejeros de las otras, ó á cualquiera de los jefes de la Administracion pública, profesor ú otro funcionario ó particular de especiales conocimientos ó experiencia, podrá invitarles á sus sesiones, poniéndolo en noticia del vice-presidente del Consejo en el primer caso, y del Ministro del ramo en los demás.

Tambien las Secciones podrán pedir por conducto de la Secretaria general los antecedentes que estimen necesarios para la instruccion de los expedientes.

Art. 35. En las discusiones se concederá

la palabra á todos los consejeros que la pidan, y podrán estos usar de ella dos veces en cada negocio.

Art. 36. Cuando se discuta un proyecto de dictámen ó informe propuesto por alguno de los consejeros de la Sección, se permitirá este la contestación y la contra-réplica respecto á cada uno de los que le impugnen, y en el uso de la palabra será preferido á todos los demás que la pidan en pró.

Art. 37. Los consejeros no podrán formar voto particular en las Secciones respecto á los proyectos de dictámen que las mismas aprueben, y si solo reservarse el derecho de impugnarlos ó votar contra ellos en el Consejo pleno.

En los dictámenes que se remitan á la Secretaría general se expresará si fueron aprobados por unanimidad ó mayoría de la respectiva Sección.

Art. 38. Tendrán lugar relativamente á los informes los votos particulares; y su refutación, cuando la Sección la estime oportuna, se encargará siempre por la presidencia á uno de los consejeros que hayan formado la mayoría de votación.

CAPITULO IV.

De la reunion de las Secciones.

Art. 39. No podrán reunirse dos ó mas Secciones sino en los casos en que expresamente lo ordenare el Gobierno, ó en los que el presente reglamento ó las leyes y disposiciones especiales lo determinen.

Art. 40. Las autorizaciones para procesar á los Gobernadores de provincia y á los empleados, ó corporaciones dependientes de su autoridad, se despacharán, conforme á lo prescrito en el art. 3.º del R. D. de 29 de abril de 1857, por el Consejo pleno ó por las Secciones reunidas de Gobernación y de Gracia y Justicia, segun los casos. Hará las veces de secretario un oficial ó auxiliar del Ministerio de la Gobernación con el carácter de agregado, de que habla el párrafo 2.º del artículo 77 de este reglamento.

Art. 41. Cuando se hubiere ordenado la reunion de las Secciones y la instructora estuviese preparada para deliberar, remitirá esta al auxiliar ó auxiliares el extracto y el expediente para que se enteren, sin lo cual no se podrá citar para su reunion.

Art. 42. Para celebrar sesiones las Secciones reunidas han de concurrir dos individuos de la clase de consejeros ordinarios á lo menos de cada una de ellas.

Art. 43. El vice-presidente del Consejo cuando concorra á una Sección, ó á varias

reunidas, tendrá la presidencia de las mismas, y en su defecto, el vice-presidente mas antiguo de cada una de ellas.

En concurrencia de vice-presidentes titulares y accidentales tendrán siempre antelación aquellos.

Art. 44. Las Secciones reunidas se tendrán por una sola para las votaciones, á no ser que una de ellas disienta de la otra, ó de las otras, por unanimidad, en cuyo caso, prescindiendo de los votos individuales, se considerará siempre que hay discordia.

Art. 45. Cuando en las Secciones reunidas resultase discordia se someterán á la deliberación del Consejo pleno los respectivos dictámenes para que resuelva y consulte lo que estime mas acertado, aun cuando el negocio se haya remitido solo á informes de dichas Secciones.

El dictámen que tenga mayor número de votos á su favor deberá en el caso de este artículo discutirse con preferencia en el Consejo.

CAPITULO V.

Del Consejo pleno y de las Secciones en tiempo de vacacion.

Art. 46. Todos los años vacará el Consejo 40 dias, contados desde el dia 15 de julio.

Art. 47. Durante las vacaciones permanecerán dos consejeros en la Sección de lo contencioso y uno de los ordinarios en cada una de las demás designados anualmente por turno, que empezará por los de mayor edad.

Art. 48. Constituido el Consejo con los ocho consejeros ordinarios presentes y los extraordinarios en número suficiente para completar el de la ley, solo celebrará sesión en pleno y en Secciones para el despacho de los negocios urgentes.

Art. 49. En las Secciones donde se reúna suficiente número de consejeros por concurrir uno ó mas de los extraordinarios, se despacharán los negocios en la forma prescrita en el capítulo III.

Art. 50. Cuando solo asista á las Secciones el consejero ordinario de turno dará las providencias de instrucción que se requieran, y dictará además en el concepto de vice-presidente las de inspección que estime oportunas, para que los trabajos preparatorios del despacho no sufran entorpecimiento.

Art. 51. En caso de urgencia el consejero de turno de las Secciones mandará citar, con la cualidad de precisa asistencia á los extraordinarios respectivos, y en la

sesion que se celebre solo se tratará del negocio ó negocios urgentes que la hayan motivado.

Art. 52. El consejero de turno de la Seccion de Estado y Gracia y Justicia, si fuese letrado y en su defecto el de menor edad de las otras que sea letrado, concurrirá á las sesiones ordinarias de la Seccion de lo contencioso para el despacho de sustanciacion.

CAPITULO VI.

Del Presidente del Consejo.

Art. 53. Corresponde al Presidente del Consejo:

1.º Abrir y levantar las sesiones á la hora señalada, y mantener el orden en ellas.

2.º Mandar celebrar sesiones extraordinarias en su caso.

3.º Nombrar en Consejo pleno Comisiones especiales en negocios que no pueda ó no deba instruir, ó despachar una Seccion determinada.

4.º Abrir, dirigir y cerrar las discusiones.

5.º Conceder la palabra en ellas á los consejeros.

6.º Llamarlos al orden ó á la cuestion segun los casos.

7.º Recibir á los consejeros, fiscal y secretario general el juramento en el acto de tomar posesion en el Consejo pleno.

CAPITULO VII.

Del vice-presidente del Consejo.

Art. 54. Además de las funciones atribuidas en el capítulo anterior al Presidente del Consejo, corresponde á su vice-presidente:

1.º Señalar, oyendo al secretario general, los asuntos de que se haya de dar cuenta al Consejo pleno, verificándolo siempre por el orden de fechas de los dictámenes de las Secciones, salvo la preferencia que el Gobierno hubiese encargado se dé á alguno de ellos.

2.º Autorizar con su firma la correspondencia, de cualquiera clase que sea, con los Ministros de S. M. en lo perteneciente al Consejo pleno.

3.º Vigilar sobre la disciplina de las dependencias del Consejo y sobre la policía del edificio en que se hallen colocadas.

4.º Activar, bajo su responsabilidad, el despacho de los negocios en Consejo pleno y en cada una de las Secciones, y ejercer sobre estas en consecuencia la mas ámplia inspeccion.

5.º Elevar al Gobierno su propuesta para las plazas de porteros.

6.º Elevar al Gobierno con su informe las solicitudes de los auxiliares, empleados y dependientes del Consejo, que deberán hacerlas por su conducto.

7.º Dar cuenta al Gobierno de las vacantes que en el Consejo ocurran, manifestándole la carrera y especiales conocimientos de los que deban ser nombrados, segun lo requiera el mejor despacho de los negocios del Consejo y de la Seccion á que deban ser destinados.

Art. 55. En las vacantes y en ausencias y enfermedades del vice-presidente, ejercerá todas sus funciones como accidental, el mas antiguo de los vice-presidentes titulares de Seccion.

CAPITULO VIII.

De los presidentes de las Secciones.

Art. 56. Los presidentes de las Secciones ejercerán, cada uno en la suya, las funciones atribuidas al Presidente del Consejo en el art. 53, párrafos primero, segundo, cuarto, quinto y sexto.

Art. 57. Además de las funciones señaladas en el anterior artículo, corresponde á los presidentes de Seccion:

1.º Encargar el despacho de negocios graves á algunos de los consejeros.

2.º Encomendarlo igualmente al auxiliar mayor respecto de los negocios en que lo estime conveniente.

CAPITULO IX.

De los vice-presidentes de las Secciones.

Art. 58. Los vice-presidentes de Seccion ejercerán en la suya respectiva las funciones de los presidentes, y será además de su especial incumbencia:

1.º Autorizar con su firma la correspondencia con el Ministro del ramo respectivo en los negocios que por él se remitan de Real orden á informe de la Seccion.

2.º Vigilar sobre la observancia del reglamento de ella.

3.º Activar bajo su responsabilidad el despacho de los negocios encomendados á la misma.

4.º Elevar con su informe, al vice-presidente del Consejo, las solicitudes de los auxiliares y dependientes de la Seccion.

Art. 59. En defecto de los vice-presidentes de las Secciones, le sustituirán los respectivos consejeros ordinarios de las mismas por el orden riguroso de antigüedad.

CAPITULO X.

Del secretario general.

Art. 60. Corresponde al secretario general, además de lo prescrito en los artículos anteriores.

1.º Distribuir sin el menor retardo entre las secciones los expedientes que se remitan por el Gobierno á informe de las mismas ó consulta del Consejo, determinando siempre la Seccion por el Ministerio de donde inmediatamente proceda cada negocio, y reservando á resolución del Consejo las dudas que se le ofrezcan sobre el particular.

2.º Extender el acta de las sesiones del Consejo pleno.

3.º Autorizar con su firma la correspondencia relativa al mismo Consejo en los casos en que no se requiera la del vice-presidente.

4.º Elevar su propuesta al Gobierno en las vacantes de las plazas de escribientes.

5.º Distribuir de la manera que estime conveniente entre los auxiliares destinados á la Secretaría los trabajos que exija el buen desempeño de sus funciones.

6.º Vigilar la asistencia de los auxiliares y el orden de las dependencias del Consejo, cuidando particularmente de que no se extraigan expedientes ni documentos fuera de sus oficinas á no ser en los casos que el vice-presidente se lo permita.

Art. 61. El secretario general además de dos libros de actas, el uno para las no reservadas, y el otro para las que lo sean á juicio del Consejo, llevará los siguientes:

1.º Dos para copiar literalmente las consultas con la misma distincion de reservadas ó no reservadas.

2.º Un libro de registros para las Reales órdenes, y uno ó dos para los expedientes que el Gobierno remita á consulta del Consejo ó informe de las Secciones, anotando en ellos la fecha de su recibo, el dia en que pasen á las Secciones, el en que por estas se devuelvan despachados y cuando vinieren á consulta del Consejo pleno, el de la sesion en que de ellos se dé cuenta y el folio del libro copiador donde se extienda la consulta.

3.º Otro libro, en fin, para hacer constar la asistencia de los auxiliares, las de los agregados á la Secretaría general, la del Archivero y oficiales del Archivo y dependientes del Consejo que estén bajo sus inmediatas órdenes.

Art. 62. El secretario general designará un auxiliar de su Secretaría para dar audiencia un dia de cada semana á los interesados

y enterarles del estado de sus negocios, no debiendo manifestarles el dictámen de la Seccion ni la resolucion del Consejo.

Art. 63. Aprobados los dictámenes de las Secciones por el Consejo, y copiados en el libro de consultas, los devolverá el secretario general á la Seccion respectiva certificada en ellos la aprobacion, y notadas al margen y autorizadas con su rúbrica las modificaciones que por acuerdo del Consejo se hayan hecho.

Art. 64. No podrá ejercer el cargo de secretario general el que no reuna las circunstancias siguientes:

1.ª Ser mayor de 30 años.

2.ª Ser letrado.

3.ª Haber desempeñado dos años por lo menos el cargo de auxiliar del Consejo ó servido seis años cargo público, cuyo sueldo no baje de 30.000 rs.

Art. 65. En defecto del secretario general harán sus veces los auxiliares mayores que sean letrados, por el orden de antigüedad de sus nombramientos.

Art. 66. El secretario general no podrá ser separado de su cargo sino en virtud de Real decreto refrendado por el presidente del Consejo de Ministros y oyéndose previamente al vice-presidente del Consejo Real.

CAPITULO XI.

De los auxiliares del Consejo.

SECCION PRIMERA.

De los auxiliares mayores.

Art. 67. El auxiliar mayor de cada Seccion será el jefe inmediato de los auxiliares y demás empleados que estén al servicio de la Seccion.

Art. 68. El auxiliar mayor despachará por sí los negocios que le encarguen el presidente ó vice-presidente de la Seccion, y distribuirá los demás por el método que acuerde la Seccion, por turno ó por negociados entre los auxiliares, sus subordinados.

Art. 69. El auxiliar mayor llevará un libro general de actas y otro particular de actas reservadas. En el primero bará copiar por su orden, y autorizará con su firma, las que no exijan especial reserva, á juicio de la Seccion, luego que por la misma sean aprobadas: en el segundo extenderá de mano propia, con igual autorizacion, las que la Seccion apruebe y estime deberse reservar, poniendo en el otro libro la correspondiente nota remisiva. Unos y otros serán rubricados por el vice-presidente y firmados por el auxiliar mayor.

Art. 70. Además de los dos libros que el anterior artículo prescribe, llevará el auxiliar mayor un libro de registro para anotar la fecha del recibo de los expedientes del Consejo pleno; el día en que se dé cuenta á la Sección y se encargue del despacho de los mismos; el nombre del encargado, y la fecha de su devolución por este, y de la resolución de aquella; otro libro copiador de informes y dictámenes, y los demás que la Sección estimare conveniente.

Art. 71. Los auxiliares mayores firmarán la correspondencia de la Sección que deba dirigirse al secretario general.

Art. 72. Al fin de cada mes remitirán al secretario general los auxiliares mayores un estado de los negocios pendientes en su Sección, con separación de los remitidos á consulta y de los que lo hayan sido á informe, expresándose en los de ambas clases la fecha de su recibo en la Sección, su estado actual, el nombre del encargado de su despacho y además la fecha del encargo, sino estuviese aun evacuado.

Al vice-presidente de la Sección dará un duplicado de este estado el auxiliar mayor.

Art. 73. Los expedientes del Consejo se tendrán por fenecidos cuando se participe oficialmente al mismo la resolución de S. M.; y comunicada á la Sección respectiva la Real orden expedida al efecto, dará cuenta á aquella el auxiliar mayor en la sesión inmediata, y por su acuerdo remitirá al archivo el expediente con la Real orden cuando ya no se necesite.

Igual remesa hará el auxiliar mayor de los informes originales aprobados por la Sección, y autorizará la aprobación con su firma luego que se hayan comunicado al Gobierno por conducto de la Secretaría general y copiado en el libro de informes.

Art. 74. En las vacantes y en ausencias y enfermedades del auxiliar mayor hará sus veces en cada Sección el mas antiguo de primera clase, dando el vice-presidente de la Sección noticia al del Consejo para los efectos oportunos.

SECCION SEGUNDA.

De los auxiliares de primera y segunda clase.

Art. 75. Los auxiliares de primera y segunda clase del Consejo despacharán los negocios de su incumbencia bajo la inspección inmediata del mayor respectivo.

Art. 76. Para el despacho de los negocios formarán extracto del expediente, y pondrán su dictamen cuando se les encargue por el vice-presidente.

Art. 77. Los auxiliares expondrán de viva voz las observaciones convenientes en apoyo del dictamen que hubiesen redactado, contestando á las que se hicieren contra él, previa la venia del vice-presidente.

SECCION TERCERA.

Del nombramiento, ascenso y separacion de los auxiliares del Consejo.

Art. 78. Para llenar en el nombramiento de auxiliares la condicion que exige el artículo 10 de la ley orgánica del Consejo Real, se fijará el número de plazas de auxiliares letrados, debiendo ser de esta clase las dos terceras partes, cuando menos de la totalidad de las del Consejo y la otra tercera de licenciados en Administracion ó empleados que reunan las circunstancias que expresa este reglamento.

Habrán además en clase de agregados en las Secciones que fuere necesario, empleados de las diferentes carreras civiles y militares, los cuales disfrutará el sueldo de su empleo y las ventajas que correspondan á los demás de su clase que estuvieren en activo servicio.

El número de agregados no podrá exceder del que señale el Gobierno, oyendo el dictamen del Consejo pleno.

Art. 79. Habrá 40 auxiliares de aspirantes sin sueldo, siete de ellos letrados ó simplemente licenciados en Administracion. Los dos mas antiguos disfrutará la gratificación señalada ó que en adelante se les señale.

Los aspirantes desempeñarán su cargo en las Secciones á que el vice-presidente los destine en la forma que determinan los artículos 74, 75 y 76 para los auxiliares de primera y segunda clase.

Art. 80. Para ser nombrado aspirante se requiere:

- 1.º La edad de 21 años cumplidos.
- 2.º Instrucción suficiente en el derecho comun ó administrativo, comprobada por examen de una Comision del Consejo.
- 3.º El título de licenciado en Jurisprudencia ó Administracion cuando haya de proveerse una de las siete plazas determinadas en el artículo anterior.
- 4.º Buena conducta.

Art. 81. Las plazas vacantes de auxiliares de segunda clase recaerán únicamente en aspirantes por rigurosa antigüedad siempre que lleven dos años en el ejercicio de su cargo.

Art. 82. Las plazas de auxiliares de primera clase recaerán en auxiliares de segun-

da á propuesta del vice-presidente, oyendo la Comision de vice-presidentes de las Secciones.

Tambien se podrá nombrar á propuesta del Consejo, para las vacantes de auxiliares de primera clase á los agregados que se hubieren distinguido por su actitud y laboriosidad, siempre que disfruten en su carrera un sueldo mayor de 12,000 rs. y hayan desempeñado dos años plazas de agregados.

Art. 83. Las plazas de auxiliares mayores recaerán únicamente en auxiliares de primera clase, á propuesta del vice-presidente y en la forma que establece el artículo anterior.

Art. 84. Los auxiliares no podrán ser separados de su cargo sin oírse previamente al vice-presidente del Consejo.

SECCION CUARTA.

Del exámen de los aspirantes.

Art. 85. La Comision de exámen se compondrá de un consejero ordinario por Seccion, y se nombrará por el vice-presidente al principio de cada año para que funcione hasta el siguiente.

La Comision estará presidida por el vice-presidente del Consejo.

Art. 86. Todo aspirante presentará en la Secretaría general los documentos que acrediten su actitud, con arreglo al artículo 80.

Art. 87. El exámen constará de dos ejercicios, uno teórico y otro práctico, que empezarán por este último.

Art. 88. Para que el aspirante pueda prepararse al ejercicio práctico se le dará un expediente, á fin de que haga su extracto y extienda al pié la nota correspondiente en el término que le señale la Comision, y que no podrá exceder de 24 horas, las cuales habrá de pasar sin comunicacion alguna en el local que se le destine al efecto en el edificio que ocupe el Consejo.

El expediente con el extracto y nota los entregará cerrados en la Secretaría general del Consejo.

Art. 89. El dia y hora que se le señale leerá el examinando el extracto y la nota que hubiese formado; la Comision de exámen discutirá el asunto en su presencia y con arreglo al dictámen de esta extenderá la consulta, el informe ó el proyecto de sentencia que exija la naturaleza del negocio que se ventile, volviendo para ello á encerrarse tambien sin comunicacion alguna por el tiempo que se prescriba en el local anteriormente prefijado.

Art. 90. El ejercicio teórico consistirá en preguntas, y durará á lo menos media hora, sin que pueda exceder de una.

Art. 91. La Comision designará con anticipacion los individuos de su seno que han de preguntar necesariamente, sin perjuicio de que los demás puedan dirigir al examinando las preguntas que juzguen convenientes.

Art. 92. Concluidos los dos ejercicios teórico y práctico, la Comision de exámen extenderá su censura motivada acerca de uno y otro, la cual se elevará al Ministerio de la Gobernacion.

Art. 93. El examinado cuyos actos fuesen reprobados no podrá presentarse de nuevo á exámen.

CAPITULO XII.

Del archivero del Consejo.

Art. 94. El archivero del Consejo custodiará los expedientes fenecidos que los auxiliares mayores le remitan, y en su colocacion guardará el método que, á propuesta suya, establezca el secretario general, debiendo servir de base á este método la separacion de los expedientes por Secciones, y la de los expedientes de consulta é informe dentro de cada una de ellas.

Art. 95. El archivero será el jefe inmediato de los oficiales de esta dependencia, y hará sus veces el mas antiguo de ellos en ausencias, enfermedades y vacantes.

CAPITULO XIII.

De la asistencia diaria del secretario general, de los auxiliares y de los empleados y dependientes del Consejo.

Art. 96. El secretario general y los auxiliares mayores asistirán diariamente á sus respectivos despachos para ocuparse en los negocios de su incumbencia por espacio de seis horas, que señalará, segun la estacion, el vice-presidente del Consejo.

Art. 97. Los auxiliares de primera y segunda clase, los aspirantes, el archivero y oficiales del Archivo se reunirán diariamente, durante las mismas horas que el secretario general y los auxiliares mayores y con igual objeto, en el local que por Secciones se les destine.

Art. 98. Los escribientes lo verificarán media hora antes de las seis que se designan en los anteriores artículos y emplearán además de estas todo el tiempo que exijan sus trabajos á juicio del secretario general ó respectivo auxiliar mayor, sin que su asigna-

cion á la Secretaría general ó alguna Seccion les dispense de tomar en los trabajos de las otras aquella parte que reclame el servicio.

Art. 99. Los porteros y mozos de oficio del Consejo concurrirán tambien con media hora de anticipacion, y permanecerán en sus puestos hasta que se cierren las oficinas, cumpliendo mientras se estén abiertas, y antes y despues, las órdenes que les den relativas al servicio el vice-presidente del Consejo, los de las Secciones, el secretario general ó los auxiliares mayores respectivos.

Art. 100. De los abusos que se cometan contra lo prevenido en este capitulo en la Secretaría general ó en las Secciones, serán respectivamente responsables el secretario general y los auxiliares mayores, si no dan en tiempo noticia de ellos al vice-presidente del Consejo ó al de la Seccion que deban corregirlos.

CAPITULO XIV.

De la correccion disciplinaria de faltas y abusos.

Art. 101. La inspeccion general que corresponde al vice-presidente del Consejo sobre todos los auxiliares, empleados y dependientes del mismo y la particular que compete á cada uno de los vice-presidentes de Seccion sobre los auxiliares y dependientes de las suyas, se extiende hasta la facultad de corregir, en la forma y dentro de los límites que en los artículos siguientes se prefijan las faltas y abusos de dichos auxiliares, empleados y dependientes respectivos.

Art. 102. El vice-presidente del Consejo en la esfera general de su inspeccion, y cada uno de los demás vice-presidentes en la suya particular, podrán amonestar, reprender y apercibir á los auxiliares, empleados y dependientes respectivos que incurran en falta ó cometan abuso.

Art. 103. En el caso de reincidencia de un empleado ó dependiente, y en el de merecer desde luego la falta ó abuso en que incurra una demostracion mas severa que las que permite el artículo anterior, la impondrá por sí el vice-presidente del Consejo, pudiendo aplicar hasta un mes de suspension, dando cuenta de esta correccion y sus motivos al Gobierno.

Art. 104. La reincidencia de los auxiliares en falta ó abuso leve ó la falta ó abuso de los mismos que deban considerarse mas ó menos graves se juzgarán y corregirán hasta con un mes de suspension, por el Consejo de disciplina que á este fin formarán los vice-

presidentes de Seccion titulares ó accidentales, bajo la presidencia del del Consejo.

Art. 105. Para que el Consejo de disciplina que establece el artículo anterior pueda deliberar han de concurrir, además del vicepresidente del Consejo, la mayor parte de los vice-presidentes de las Secciones, y ha de autorizar las deliberaciones, como secretario el general del Consejo.

Art. 106. El Consejo de disciplina oirá siempre al auxiliar denunciado, permitiéndole, si lo pidiese, que exponga por escrito lo que estime oportuno á su defensa.

Art. 107. La mayoría absoluta de votos del Consejo de disciplina formará resolucion irrevocable. A falta de esta mayoría deberá prevalecer el voto absolutorio, y en su defecto el mas benigno entre los que condenen.

Art. 108. El Consejo de disciplina si á su juicio no bastase la suspension de un mes para corregir suficientemente el abuso ó falta del auxiliar, someterá su calificacion al exámen del Consejo pleno. Mereciendo su aprobacion, propondrá este al Gobierno lo que crea justo.

En el caso contrario devolverá el expediente al Consejo de disciplina para que imponga al auxiliar el máximo de correccion que esté en sus atribuciones.

Art. 109. En todos los casos en que el Consejo de disciplina suspenda á un auxiliar conforme á lo prescrito en los artículos anteriores, deberá su presidente dar cuenta desde luego al Gobierno, manifestando el motivo ó motivos de esta correccion.

CAPITULO XV.

Disposiciones generales.

Art. 110. De los consejeros ordinarios serán letrados por lo menos cuatro de la Seccion de Estado y Gracia y Justicia.

Dos de las de Ultramar y Gobernacion y Fomento.

Uno de las demás, salvo la de lo contencioso, en la cual lo serán todos, incluso los auxiliares.

Art. 111. El Gobierno oirá previamente al vice-presidente del Consejo antes de trasladar á los consejeros y auxiliares de una á otra seccion.

Interinamente y mientras resuelva el Gobierno, podrá el vice-presidente del Consejo, cuando lo exija el servicio, trasladar de una Seccion á otra oyéndolas previamente, á los consejeros y auxiliares.

Art. 112. Las Reales órdenes que recayesen en los recursos sobre quintas, oído le Consejo en pleno ó en secciones, y que re-

suelvan sobre la interpretacion de los artículos de la ley se publicarán en la *Gaceta* oficial.

Art. 113. El negocio sobre el cual hubiere dado su parecer el Consejo en pleno, no podrá remitirse fuera de la secretaría del despacho, por la cual hubiese de resolverse, á informe de ningun cuerpo ni oficina del Estado.

Art. 114. El Gobierno comunicará al Consejo las resoluciones que recayeren sobre sus consultas é informes al mes de haberse mandado llevar á efecto, é incurrirá en responsabilidad el empleado que aparezca culpable de la dilacion. En negocios de poca importancia y en los que S. M. se conformare con el dictámen del Consejo se comunicarán las resoluciones por medio de índice.

Lo dispuesto en este artículo no tendrá lugar en los casos en que el Gobierno ordene expresamente que no se comuniquen las resoluciones referidas.

Art. 115. El 1.º de marzo de cada año remitirá el Consejo al Ministerio de la Gobernacion para que se publique en la *Gaceta*, un estado de los negocios gubernativos y contenciosos fenecidos en el curso del año anterior y de los que quedaren pendientes, con expresion de los despachados en pleno ó por las Secciones separadas ó reunidas con otras.

Art. 116. Con el estado prescripto en el artículo anterior podrá el Consejo elevar al Gobierno las observaciones que le sugiera su celo y experiencia acerca de las mejoras que convenga hacer en su organizacion y régimen interior.

Tambien propondrá los aspirantes que deban cesar en el desempeño de su cargo.

En todo caso y tiempo deberá el Consejo hacer presente al Gobierno las infracciones de este reglamento que advirtiere en las órdenes que se le comuniquen.

Art. 117. No podrá corregirse ni variarse este reglamento sin previa audiencia del Consejo.

Art. 118. Queda derogado el reglamento de 27 de julio de 1848 y demás disposiciones que se opongan á lo prescrito en el presente.

Disposicion transitoria.

Art. 119. Los auxiliares aspirantes que se hallen hoy en ejercicio, ó que hayan sido aprobados para su admision por el Consejo, continuarán en el desempeño de sus funciones, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 79 y en el párrafo segundo del art. 116.

—Aranjuez 23 de mayo de 1858.—Posada Herrera. (CL. t. 76, p. 283.)

R. D. de 20 junio de 1858.

Reformando algunas disposiciones del Reglamento de 30 de diciembre de 1846 sobre el modo de proceder el Consejo Real en los asuntos contenciosos.

(Gob.) En virtud de las razones que me ha expuesto mi Ministro de la Gobernacion, oido el Consejo Real sobre la conveniencia de reformar en alguna de sus disposiciones el reglamento de 30 de diciembre de 1846 para proceder dicho cuerpo en los negocios contenciosos de la Administracion, y de acuerdo con el parecer del Consejo de Ministros, vengo en decretar lo siguiente:

1.º Se tendrá por abandonado todo pleito cuyo curso desde la publicacion del presente Real decreto en adelante se detenga durante un año por culpa de las partes interesadas. En este caso declarará el Consejo caducada la demanda y consentida la órden gubernativa que hubiese motivado el pleito (1).

2.º En los pleitos detenidos por el tiempo señalado en el artículo anterior y cuya detencion haya comenzado antes de la publicacion de este Real decreto fijará el Consejo un plazo prudencial, atendiendo á las circunstancias de cada asunto. Si durante este plazo no promoviesen el curso de un pleito detenido cualquiera de las partes, se entenderá que ambas desisten de sus respectivas pretensiones, y el Consejo declarará igualmente caducada la demanda.

3.º Las reglas anteriores no son aplicables á los pleitos en que uno ó mas particulares litiguen con la Administracion.

4.º Se guardará lo dispuesto por el artículo 273 del reglamento, solo cuando el heredero aproveche por todo el tiempo que la ley le concede el beneficio de deliberar. En otro caso, la supension de los términos por muerte de alguna de las partes será de 30 dias, contados desde que el heredero, expresa ó tácitamente, hubiese aceptado la herencia, á no ser que desde la aceptacion faltasen menos de 30 dias para concluir el tiempo por el que la ley concede el expresado beneficio.

5.º Admitida la apelacion por un Consejo provincial, este remitirá siempre los autos originales al Consejo Real, quedándose con el testimonio necesario para llevar á efecto

(1) ¿Será esta regla extensiva tambien á los Consejos provinciales? Es indudable que si, atendido á lo dispuesto en el art. 13 de este mismo Real decreto.

la sentencia, si no hubiere acordado expresamente suspender la ejecucion (1).

6.º Cuando el Consejo provincial no admita una apelacion, podrá la parte interesada recurrir en queja ante el Consejo Real. Interpuesto en forma este recurso, la Seccion de lo contencioso mandará al Consejo provincial que informe con justificacion, y en vista de todo confirmará ó revocará la providencia del inferior.

7.º El demandado podrá contestar á la demanda en el mismo escrito en que proponga excepcion dilatoria, ó en escrito separado, siempre que los presente dentro del término de 20 dias que señala el reglamento.

Las excepciones dilatorias no interrumpirán el curso ordinario de la demanda interin no recaiga providencia favorable á alguna de ellas.

8.º En los negocios de primera y única instancia ante el Consejo se reservará al pleno la consulta sobre cualquiera excepcion de incompetencia.

9.º La misma regla se guardará en segunda instancia cuando se funde la declinatoria en el supuesto de que el asunto corresponde á la jurisdiccion ordinaria ó á cualquier otra jurisdiccion especial.

Quando la declinatoria se funde en que el negocio corresponde á la Administracion activa ó en cualquier otro motivo que no sea el anteriormente expresado fallará la Seccion lo que estime justo.

10. La Seccion de lo contencioso fallará tambien sin ulterior recurso, estimando ó desestimando las excepciones de litis pendencia y de falta de personalidad.

11. El término para dictar ó consultar sentencia definitiva empezará á correr desde el dia en que acabe la vista del pleito (2).

12. En los Reales decretos que se expidan para cada pleito se expresarán los nombres de los consejeros que hubieren tomado parte en la consulta elevada al Gobierno.

13. Los Consejos provinciales en todos

(1) Nos parece bien que los autos se remitan originales al Consejo de Estado, pero no se dice, y poco costaba haberlo hecho, que ya no es necesario que el apelante presente las certificaciones de que habla el art. 252 del reglamento del Consejo Real. Sin embargo, aunque no se dice expresamente, debe así sobreentenderse por lo dispuesto en el art. 15 de este Real decreto. La remesa de los autos debe hacerse dentro del plazo de 15 dias, segun dispone el art. 1.º del R. D. de 31 de octubre de 1864 inserto en CONSEJOS PROVINCIALES.

(2) Modifica el art. 204 segun el cual, los 15 dias debian contarse desde el siguiente al de hallarse concluso el proceso.

los casos no comprendidos en su reglamento de 1.º de octubre de 1845, observarán:

Primero. El reglamento del Consejo Real con las disposiciones posteriores que le suplen ó modifican.

Segundo. El derecho comun.

14. Serán obligatorios para todos los Ministerios y aplicables á las resoluciones de los mismos las disposiciones dictadas respecto del de Hacienda en mi R. D. de 21 de mayo de 1853.

15. El reglamento de 30 de diciembre de 1846 se entenderá derogado en lo que no esté conforme con el presente decreto.—Dado en Aranjuez á 20 de junio de 1858. (*Coleccion legislativa t. 76, p. 365.*)

R. D. de 19 octubre de 1860.

Se halla inserto en la pág. 339 á continuacion del reglamento de 30 diciembre de 1846.

R. D. de 20 setiembre de 1863.

Tenientes fiscales del Consejo.

(PRES. DEL C. DE M.) Artículo único. El cargo de teniente fiscal del Consejo de Estado será incompatible con el ejercicio de la abogacía.—Dado en Palacio á 20 de setiembre de 1863. (*Gaceta 21 id.*)

R. D. de 22 febrero de 1865.

Trajes de los consejeros, fiscal y secretario en las vistas públicas.

«En atencion á lo expuesto por el Consejo de Estado en su consulta de 18 de enero último sobre el traje con que los consejeros, fiscal y secretario deberian concurrir á las audiencias públicas, y acerca de la conveniencia de reformar lo dispuesto anteriormente sobre esta materia de conformidad con lo propuesto en la referida consulta, y de acuerdo con el parecer de mi Consejo de Ministros, vengo en dejar sin efecto el artículo 3.º de mi Real decreto de 4 de mayo de 1863, y mandar que se entienda sustituido con el siguiente: Los consejeros, fiscal y secretario usarán en las vistas de pleitos toga y birrete con arreglo al modelo aprobado en esta misma fecha.—Dado en Palacio á 22 de febrero de 1865. (*CL. t. 93, p. 181.*)

R. D. de 3 agosto de 1866.

Los presidentes firman la correspondencia....

(PRES. DEL C. DE M.) Atendiendo á las razones que me ha expuesto mi Consejo de Ministros, vengo en mandar que los presidentes de los Consejos y Tribunales Supremos sean los que firmen y reciban la correspondencia de los expresados Ministros, como corresponde á la consideracion y deferencia que

merecen, por ser jefes superiores de sus respectivos ramos.—Dado en San Ildefonso á 3 agosto de 1866. (*Gaceta 7 de agosto.*)

Además de las disposiciones insertas, consúltense en el artículo que sigue otras varias disposiciones, y principalmente los casos de jurisprudencia, y la parte doctrinal y fórmulas con que termina. De manera que el artículo **CONSEJOS PROVINCIALES**, es como continuacion y conclusion del presente.

CONSEJOS PROVINCIALES. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Se llama Consejo provincial á la Corporacion establecida en cada una de las 49 provincias de España é Islas adyacentes, en virtud de la ley de 2 de abril de 1845, y hoy de la de 25 de setiembre de 1863, reformada en 21 de octubre de 1866, para el gobierno y administracion de las provincias, con el doble carácter de Cuerpo consultivo del Gobernador civil, y de Tribunal de primera instancia para la decision de los asuntos contencioso-administrativos que ocurran.

En los artículos **ACCION ADMINISTRATIVA, ACTOS ADMINISTRATIVOS, ADMINISTRACION**, hemos anticipado algunas ideas sobre lo contencioso-administrativo, y habiendo reunido ya en el artículo anterior las leyes y reglamentos por que se rige el Consejo de Estado, nos proponemos aquí, en primer término, tratar de los Consejos provinciales compilando tambien las leyes, decretos y Reales órdenes que establecen sobre su organizacion y competencia, presentando á continuacion casos de jurisprudencia que deciden algun punto dudoso sobre el modo de proceder así en el Consejo de Estado como en los provinciales, y concluyendo con unas breves indicaciones sobre los asuntos que corresponden á la jurisdiccion administrativa en general y los que son propios de los Tribunales y un formulario para los mas principales escritos, diligencias y actuaciones del procedimiento contencioso-administrativo; trabajo que hicimos para la primera edicion y que, aunque se aparta algo de nuestro plan, no nos parece conveniente omitir hoy.

La organizacion de los Consejos provinciales por la ley de 1863 reformada, es análoga á la que les dió la de 2 de abril de 1845. Por esta, era sin embargo presidente el Jefe político ó Gobernador, y hoy lo es un Consejero nombrado por el Gobierno, novedad que ya introdujo respecto del Consejo de Estado la ley de 1860, y que nos parece acertada y conveniente. Esto no obsta para que el Gobernador sea el que presida el Consejo, siempre que lo tenga por conveniente, (art. 66 ley) como está dispuesto respecto de los Ministros en el Consejo de Estado.

Todo lo relativo á la organizacion de los Consejos provinciales se encuentra en el tit. IV capitulos I, II, y III de la ley de 1866 (arts. 62 á 75) y en igual título del reglamento de la misma fecha.

Sus atribuciones son, segun hemos indicado, ó puramente consultivas ó jurisdiccionales.

Como cuerpos consultivos deben ser oídos por los Gobernadores, siempre que las leyes, Reales decretos, órdenes y reglamentos lo prescriban, y á mas cuando los Gobernadores, lo crean conveniente. (Ley arts. 62, 76 al 80, 85 á 88, y 151 á 154 reg.)

Como Tribunales contencioso-administrativos conocen de los negocios contenciosos de la Administracion, oyendo y fallando las cuestiones de este órden que se susciten con motivo de las providencias dictadas por los Gobernadores en la aplicacion de las leyes, ordenanzas, reglamentos y disposiciones administrativas.

Hé aquí, pues, la legislacion sobre Consejos provinciales.

Ley de 2 abril de 1845.

Esta ley estableció los Consejos provinciales arreglando su organizacion y atribuciones. Contiene tres títulos: el 1.º, trata de la organizacion de los Consejos provinciales, y estableció que en cada capital de provincia hubiese uno compuesto del Jefe político (hoy Gobernador) y de tres á cinco vocales nombrados por el Rey, dos al menos letrados. El Jefe político presidía y habia además un vicepresidente nombrado de entre los vocales. Estableció tambien plazas de consejeros su-

pernumerarios.—El tít. II estableció las atribuciones de los Consejos, y el III y IV lo relativo á sus sesiones, procedimiento y apelacion. Ha sido derogada por la de 25 de setiembre de 1863 para el gobierno y administracion de las provincias.

Ley de 25 de setiembre de 1863, reformada en 24 de octubre de 1866.

Esta ley de gobierno y administracion de las provincias, ha derogado la de 2 de abril de 1845, estableciendo nuevas disposiciones orgánicas de los Consejos provinciales y fijando sus atribuciones.

Segun el art. 3.º, cuya insercion literal se hallará en GOBIERNO Y ADMINISTRACION DE LAS PROVINCIAS, en todas estas habrá un Consejo provincial, cuyo nombramiento segun su primitiva redaccion, se hacia por el Gobierno á propuesta de las Diputaciones provinciales, y segun la reforma de 1866 se hacen sin esta propuesta por el Rey.

El tít. IV de dicha ley está exclusivamente dedicado á los Consejos provinciales. Habla de su organizacion, de las cualidades necesarias para ser Consejero provincial y de su nombramiento, de la gratificacion y derechos de los consejeros, y gastos de los Consejos, y de las atribuciones de estos Cuerpos, sesiones y procedimiento en los asuntos contenciosos. Dice así textualmente.

TITULO IV.

DE LOS CONSEJOS PROVINCIALES.

CAPITULO PRIMERO.

De la organizacion de los Consejos provinciales.

Art. 62. El Consejo provincial conocerá de los negocios contencioso-administrativos, é informará al Gobernador sobre los demás asuntos de la Administracion que determinen las leyes y reglamentos, ó acerca de los que la misma autoridad le pida su dictámen.

Art. 63. El Consejo provincial se compondrá de tres consejeros en las provincias que no lleguen á 300.000 almas, y en las demás de cinco. Se reserva al Gobierno la facultad de reducir este número á tres en el último caso, y aumentarlo á cinco en el anterior, cuando lo estime conveniente. El Consejo provincial tendrá un secretario licen-

ciado en leyes ó en administracion, ó abogado, que será nombrado por el Gobierno y cobrará su sueldo de fondos provinciales. Este sueldo será de 1.200 escudos anuales en las provincias de primera clase, 1.000 en las de segunda y tercera, y 1.400 en Madrid (1).

Art. 64. Cuando el Gobernador lo considere oportuno, ó el Consejo lo reclame por exigirlo así la índole especial de los negocios, podrán asistir tambien á las sesiones, pero sin voto, el secretario del Gobierno, los jefes de Hacienda pública, el de la Seccion de Fomento, los ingenieros de caminos, minas y montes y el arquitecto provincial.

Art. 65. Para reemplazar á los consejeros en ausencias, enfermedades, recusaciones y separaciones, el Gobierno podrá nombrar, un número de consejeros supernumerarios igual al de los efectivos. Los supernumerarios tendrán facultad de asistir á las sesiones, pero sin voz ni voto, excepto cuando entren en ejercicio.

Art. 66. Un consejero nombrado por el Gobierno ejercerá las funciones de presidente. El Gobernador de la provincia presidirá, sin embargo, el Consejo siempre que lo tenga por conveniente.

A falta de presidente, desempeñará sus funciones el consejero mas antiguo por el orden de nombramientos, y si estos fuesen de la misma fecha, el de mas edad.

Art. 67. Los Consejos provinciales tendrán además del secretario el número de empleados subalternos que el reglamento determine.

Art. 68. Los Consejos provinciales tendrán tratamiento impersonal, y los consejeros, mientras lo sean, el de señoría.

CAPITULO II.

De las cualidades necesarias para ser consejero provincial, y de su nombramiento.

Art. 69. Para ser consejero provincial de número ó supernumerario se necesita ser español, tener 30 años de edad, y alguna de las siguientes circunstancias:

1.º Pagar en la provincia 80 escudos de contribucion territorial desde 1.º de enero del año anterior al de su nombramiento.

Para computar la contribucion se considerarán como bienes propios los expresados en el párrafo último del art. 23 de esta ley.

2.º Ser abogado con cuatro años de es-

(1) Con el asterisco que precede á algunos artículos, indicamos que sufrieron reforma en 1866.

tudio abierto y pagar en este concepto desde 1.º de enero del año anterior una cantidad superior á la cuota media que se satisfaga en el colegio á que corresponda, ó 40 escudos por contribucion territorial. Para el cómputo de esta se considerarán como bienes propios los expresados en el párrafo y artículo antedichos.

3.ª Haber servido cuatro años en la carrera judicial ó fiscal.

4.ª Haber servido cuatro años en la carrera administrativa con título de licenciado en leyes ó administracion, disfrutando por el mismo tiempo 1.200 escudos á lo menos de sueldo.

5.ª Haber servido seis años cualquiera cargo de la Administracion pública con el sueldo mínimo de 1.600 escudos, ó haber desempeñado la plaza de secretario de un Consejo de provincia por el mismo tiempo.

6.ª Haber servido, previa oposicion, la plaza de aspirante del Consejo de Estado durante seis años.

7.ª Haber ejercido el cargo de consejero provincial numerario por tiempo de dos años.

8.ª Haber desempeñado el cargo de diputado provincial.

Art. 70. La mayoría de los consejeros provinciales efectivos y la de supernumerarios se compondrá precisamente de letrados.

Art. 71. El cargo de consejero provincial es incompatible con cualquiera otro empleo público en activo servicio.

Art. 72. Los consejeros provinciales no podrán ser elegidos individuos de Ayuntamiento ni Diputados á Cortes en la provincia donde ejercen su cargo.

Art. 73. No pueden ser consejeros provinciales:

1.º Los arrendatarios de arbitrios provinciales ó municipales y sus fiadores.

2.º Los contratistas de obras públicas, provinciales ó municipales y sus fiadores.

3.º Los deudores á fondos del Estado, provinciales ó municipales, como segundos contribuyentes.

4.º Los recaudadores de las contribuciones generales del Estado.

5.º Los incapacitados legalmente para servir destinos públicos.

CAPITULO III.

Gratificación y derechos de los consejeros, y gastos de los Consejos provinciales.

Art. 74. Los consejeros provinciales de número gozarán una gratificación de 1,600

escudos anuales en Madrid, y de 1.200 en las demás provincias.

Los servicios que presten en estos cargos les serán de abono para cesantía ó jubilacion en sus respectivas carreras.

Los supernumerarios cobrarán la mitad de la gratificación señalada á los de número, cuando sustituyeren á alguno de estos, y solamente mientras dure la sustitucion.

Esta cantidad se rebajará de la gratificación de los propietarios á quienes sustituyan.

Art. 75. (Antes 76) (1) La gratificación de los consejeros, los sueldos de los demás empleados, y cuantos gastos ocasionen estas corporaciones, se satisfarán de los fondos provinciales.

CAPITULO IV.

Atribuciones de los Consejos provinciales.

Art. 76. (Antes 77.) Los Consejos provinciales serán siempre consultados:

1.º Sobre la concesion ó negativa de la autorizacion para procesar á los empleados y corporaciones de la administracion de la provincia.

2.º Sobre las providencias declarando la competencia ó incompetencia en los conflictos de jurisdiccion y atribuciones entre la Administracion y los Tribunales.

3.º Sobre las autorizaciones que soliciten los Ayuntamientos para adquirir ó enajenar bienes muebles ó inmuebles, redimir censos, levantar empréstitos, hacer transacciones de cualquiera clase, aceptar donaciones ó legados que se hicieren al comun ó á algun establecimiento municipal, y entablar ó sostener litigios en nombre del Municipio.

4.º Sobre nulidad de las reuniones y de los acuerdos de los Ayuntamientos.

5.º Sobre validez ó nulidad de las elecciones municipales, y sobre la aptitud legal para ejercer los cargos de individuos de Ayuntamiento.

6.º Sobre la aprobacion de los presupuestos municipales que excedan de 10.000 escudos.

7.º Sobre la imposicion de servidumbres temporales que exijan las obras públicas, provinciales ó municipales.

8.º Sobre la necesidad de ocupar temporalmente las fincas, ó aprovechar los materiales contiguos á una obra de utilidad pública,

(1) Suprimido en la reforma un artículo, los sucesivos toman respectivamente un número mas alto. El 75 era antes 76 etc. Para evitar complicaciones en la consulta, añadimos al artículo actual el número que antes tenía.

cuando los propietarios no se conformen con el parecer del ingeniero.

9.º Sobre la declaracion de utilidad pública, de una obra, y expropiaciones forzosas á que diere lugar.

10. Sobre conceder ó negar autorizacion para nuevos riegos, y demás obras que la necesiten en el cáuce ó margen de los rios.

11. Sobre el establecimiento de fábricas, talleres ú oficios insalubres y peligrosos, en los casos que determinen los reglamentos.

12. Sobre los negocios para los cuales sea legalmente necesario el voto ó informe de la Diputacion provincial, siempre que por la urgencia ó naturaleza del asunto no pueda esperarse á la reunion de esta, debiendo asistir en tales casos los diputados provinciales que se hallen en la capital. La Diputacion en su primera reunion acordará lo que estime para que recaiga en el expediente la resolucion definitiva.

13. Sobre todos aquellos asuntos en que por leyes anteriores deban ser oidas las Diputaciones provinciales no hallándose confirmado este requisito en la presente ley.

14. En todos los demás casos que determinen las leyes y reglamentos.

Art. 77. (Antes 78.) Los Consejos informarán además sobre todos los negocios en que el Gobernador les consulte.

Art. 78. (Antes 79.) Los consejeros que emitan su dictámen en negocios gubernativos, pueden, si llegan estos á hacerse contenciosos, conocer y fallar como vocales del Tribunal.

Art. 79. (Antes 80.) Los Consejos provinciales decidirán sobre las reclamaciones interpuestas ante ellos, con arreglo á lo que se previene en la ley de reemplazo del ejército.

Art. 80. (Antes 81.) Corresponde á los Consejos provinciales la aprobacion definitiva de las cuentas municipales cuyos presupuestos hayan sido aprobados por el Gobernador de la provincia.

Los Consejos deberán dar terminados los expedientes de cuentas en el término de un año, contado desde el dia en que se presenten en su Secretaría.

El Tribunal de Cuentas del Reino conocerá de las apelaciones que se interpongan de los fallos de los Consejos sobre las cuentas municipales.

Art. 81. (Antes 82.) Los Consejos actuarán además como Tribunales contencioso-administrativos. En tal concepto oirán y fallarán las cuestiones de este órden que se susciten con motivo de las providencias dictadas por los Gobernadores en la aplicacion

de las leyes, ordenanzas, reglamentos y disposiciones administrativas.

Art. 82. (Antes 83.) En virtud de lo dispuesto en el artículo anterior, los Consejos provinciales oirán y fallarán cuando pasen á ser contenciosas las cuestiones relativas.

1.º Al uso y distribucion de los bienes y aprovechamientos provinciales y comunales.

2.º Al repartimiento y exaccion individual de toda especie de cargas generales, provinciales ó municipales.

3.º A la cuota con que corresponda contribuir á cada pueblo para los caminos en cuya construccion ó conservacion se haya declarado interesados á dos ó mas.

4.º A la reparacion de los daños que causen las empresas de explotacion en los caminos á que se refiere el párrafo anterior.

5.º A las intrusiones y usurpaciones en los caminos y vías públicas y servidumbres pecuarias de todas clases.

6.º Al resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por las obras públicas.

7.º Al deslinde de los términos correspondientes á pueblos y Ayuntamientos, cuando estas cuestiones procedan de una disposicion administrativa.

8.º Al curso, navegacion y flote de los rios y canales, obras hechas en sus cáuces y márgenes, y primera distribucion de sus aguas para riegos y otros usos.

9.º A la insalubridad, peligro ó incomodidad de las fábricas, talleres, máquinas ú oficios, y su remocion á otros puntos.

10. A la caducidad de las pertenencias de minas, escoriales y terreros.

11. A la demolicion y reparacion de edificios ruinosos, alineacion y altura de los que se construyan de nuevo, cuando la ley ó los reglamentos del ramo declaren procedente la via contenciosa.

12. A la inclusion ó exclusion en las listas de electores y elegibles para Ayuntamientos y sindicatos de riego.

13. A los agravios en la formacion definitiva del registro estadístico de fincas.

14. A la represion de las contravenciones á los reglamentos de caminos, navegacion y riego, construccion urbana ó rural, policia de tránsito, caza y pesca, montes y plantíos.

Art. 83. (Antes 84.) Se atribuyen por último al conocimiento y fallo de los Consejos provinciales, llegado el caso del artículo anterior, las cuestiones relativas:

1.º Al cumplimiento, inteligencia, rescision y efectos de los contratos y remates celebrados con la Administracion provincial para toda especie de servicios y obras públi-

cas del Estado, provinciales y municipales.

2.º Al deslinde y amojonamiento de los montes que pertenecen al Estado, á los pueblos ó á los establecimientos públicos, reservando las demás cuestiones de derecho civil á los tribunales competentes.

3.º A la validez, inteligencia y cumplimiento de los arriendos y ventas celebradas por la Administracion provincial de propiedades y derechos del Estado y actos posteriores que de aquellos se deriven, hasta que el comprador ó adjudicatario sea puesto definitivamente en posesion de dichos bienes.

4.º A la indemnizacion, legitimidad de los títulos y liquidacion de los créditos de los partícipes legos en diezmos, con arreglo á lo que previene la ley de 20 marzo de 1846.

Art. 84. (Antes 85.) Los Consejos provinciales no podrán determinar por via de regla general, y se limitaran sus facultades á decidir en las cuestiones particulares sometidas á su fallo.

Art. 85. (Antes 86.) Tampoco podrán apoyar ni elevar peticion alguna, de cualquier especie que sea, al Gobierno ni á las Córtes, ni publicar sus acuerdos sin permiso del Gobernador de la provincia ó del Gobierno.

CAPITULO V.

De las sesiones y del procedimiento en asuntos gubernativos.

Art. 86. (Antes 87.) Los Consejos provinciales celebrarán las sesiones que sean precisas para el despacho de los negocios.

Art. 87. (Antes 88.) Los Consejos provinciales celebrarán sus sesiones á puerta cerrada, salvo los casos en que las leyes determinen lo contrario.

Art. 88. (Antes 89.) Para que los Consejos puedan tomar acuerdo en lo consultivo y en los negocios cuya decision les corresponde, estarán presentes tres consejeros, entre ellos por lo menos uno letrado. En caso de empate, el voto del presidente será decisivo.

CAPITULO VI.

Del procedimiento en asuntos contenciosos.

Art. 89. (Antes 90.) Cuando el Consejo actúe como Tribunal, será pública la vista del pleito, y se oirán las defensas de las partes. Las deliberaciones serán secretas. Los acuerdos se tomarán por mayoría absoluta de votos.

Art. 90. (Antes 91.) No podrá entablarse ninguna demanda ante los Consejos pro-

vinciales sin que el Gobernador hubiere dictado providencia en el asunto que se ventile, salvo cuando otra cosa determine una ley especial.

Art. 91. (Antes 92.) Representarán en estos juicios:

A la Hacienda el promotor fiscal de la misma.

A los demás ramos de la Administracion central, el letrado á quien el Gobernador señale en cada caso.

A la provincia, el diputado que la Diputacion haya elegido con arreglo al art. 37, ó el letrado á quien dé su poder.

A los Ayuntamientos, un letrado de su nombramiento.

Art. 92. (Antes 93.) Las demandas se presentarán ante el Consejo provincial en el término improrogable de 30 dias, que empezarán á contarse, respecto de las de particulares y corporaciones, desde el día siguiente al de la notificacion administrativa de la providencia reclamable; y respecto de la Administracion, dentro de un año, contado desde la fecha de la comunicacion al interesado.

El Consejo provincial en vista de la demanda consultará al Gobernador si procede ó no la vía contenciosa, acompañando con su informe, copia de la demanda misma.

Art. 93. (Antes 94.) El Gobernador dentro de tercero día resolverá lo que estime conveniente, comunicándolo al Consejo. Si la resolucion fuere que no procede la vía contenciosa, y el demandante no se conformare, podrá recurrir al Ministro del ramo respectivo, que decidirá, oído el Consejo de Estado, sin que en el caso de estimarse la procedencia de la demanda, deje de ser competente el Consejo provincial.

Art. 94. (Antes 95.) Los fallos de los Consejos provinciales serán siempre motivados.

Para la decision final de los negocios contenciosos se requiere precisamente la asistencia de tres consejeros, uno de ellos letrado.

Art. 95. (Antes 96.) La ejecucion de los fallos corresponde á los agentes de la Administracion; pero si hubiere de procederse por remate ó venta de bienes, su ejecucion y la decision de las cuestiones que sobrevengan corresponde á los Tribunales ordinarios, fuera de los casos expresados en las leyes y reglamentos para la cobranza de las contribuciones.

Art. 96. (Antes 97.) Los Consejos provinciales no podrán reformar ninguno de sus fallos; pero sí interpretarlos á peticion de parte cuando se susciten dudas sobre su in-

teligencia, con sujecion á los reglamentos.

Art. 97. (Antes 98.) De los fallos de los Consejos provinciales, á excepcion de los que recaigan en las cuentas municipales, se apelará para ante el Consejo de Estado, y ante el mismo se interpondrán los recursos de nulidad que procedan.

Las apelaciones no serán admisibles en litigios cuyo interés, pudiendo sujetarse á una apreciación material, no llegue á 200 escudos.»

Reglamento de 25 de setiembre de 1863, reformado en 22 de octubre de 1866.

En la misma fecha que la ley para el gobierno y administracion de las provincias se publicó tambien el reglamento para su ejecucion que se reformó por R. D. de 22 de octubre de 1866. Su título IV está tambien dedicado á los Consejos provinciales y dice así textualmente:

TITULO IV.

DE LOS CONSEJOS PROVINCIALES.

CAPITULO PRIMERO.

De la organizacion de los Consejos provinciales.

Art. 146 (Antes 145). Cuando las Diputaciones provinciales crean que debe reducirse á tres el número de consejeros en las provincias que lleguen á 300.000 almas, ó aumentarse á cinco en las de menor vecindario, lo propondrán al Gobierno en una exposicion razonada que dirigirán por conducto del Gobernador. Este, dentro de los ocho dias siguientes, dará curso á la propuesta exponiendo su parecer, remitiendo los datos que considere necesarios y poniéndolo en noticia de la Diputacion.

*Art. 147 (Antes 146). Siempre que ocurran vacantes de consejeros provinciales, los Gobernadores lo pondrán en conocimiento del Gobierno para los efectos oportunos (1).

Art. 148 (Antes 147). Los consejeros provinciales fijarán en las capitales su residencia tan luego como fueren nombrados, y no podrán desempeñar su cargo sin prestar antes juramento en manos del Gobernador

(1) Segun la redaccion primitiva de este artículo en armonía con el sistema que presidia en la ley se ponia en conocimiento de las Diputaciones para la propuesta, que ya no existe, por haber sido reformado tambien el art. 53 de la ley.

con arreglo á la fórmula establecida en el art. 132 de este reglamento.

Art. 149 (Antes 148). Los consejeros provinciales no podrán ausentarse de la capital sin licencia expresa del Gobernador, el cual podrá concederla por solo el término de 15 dias.

Cuando para restablecer su salud ó atender á sus asuntos particulares tengan los consejeros provinciales que ausentarse de la provincia ó por mas de 15 dias de la capital, solicitarán Real licencia por conducto del Gobernador, quien remitirá las instancias con su informe al Ministerio de la Gobernacion para la resolucion que corresponda.

Los consejeros supernumerarios que no estén en ejercicio necesitarán permiso del Gobernador para ausentarse de la provincia. Cuando salgan del punto de su residencia para otro que se halle en la misma provincia, lo pondrán en conocimiento de aquella autoridad.

CAPITULO II.

Gratificaciones de los consejeros y gastos de los Consejos provinciales.

*Art. 150 (Antes 149). Las Diputaciones provinciales fijarán de acuerdo con el Gobernador la cantidad anual que ha de designarse para atender á los gastos de material de las Secretarias de las mismas Corporaciones y de los Consejos. Dicha cantidad, y la del importe de los sueldos de los funcionarios que cobran de fondos provinciales, se incluirán todos los años en el presupuesto provincial.

CAPITULO III.

Atribuciones de los Consejos provinciales.

Art. 151 (Antes 150). Lo prevenido en el art. 76 de la ley es preceptivo. Por tanto, los Consejos provinciales serán *necesariamente* oídos sobre todas las materias mencionadas en el mismo artículo.

Art. 152 (Antes 151). Los Gobernadores cuidarán de que los expedientes que se pasen á informe de los Consejos provinciales, ya en virtud de lo dispuesto en el art. 76 de la ley para el gobierno y administracion de las provincias, ya en cumplimiento de cualquiera otra disposicion, y ya meramente porque juzguen oportuno consultar á estos cuerpos, vayan debidamente instruidos con arreglo á las leyes y reglamentos que rijan sobre la materia á que se refieran.

Art. 153 (Antes 152). Cuando los Consejos provinciales observaren que en los expe-

dientes que se les remiten á informe faltan documentos, ó se ha omitido alguna formalidad ó trámite de los establecidos por las leyes ó reglamentos que rijan sobre la materia á que aquellos se refieran, ó juzguen necesario que se ilustren estos con nuevos datos, antecedentes ó informes, lo harán presente á los Gobernadores para que acuerden lo que corresponda.

Art. 154 (Antes 153). Los Consejos provinciales citarán en sus informes las leyes, disposiciones y precedentes en que funden la opinión que emitan, así como las razones que la abonen, resumiendo siempre aquella con claridad y precision en una ó mas conclusiones.

CAPITULO IV.

De las sesiones y del procedimiento en asuntos gubernativos.

Art. 155 (Antes 154). Los Consejos provinciales celebrarán sus sesiones en el mismo edificio en que se halle situado el Gobierno de la provincia, siempre que sea posible.

Art. 156 (Antes 155). Los Consejos podrán dar sus dictámenes verbalmente cuando la naturaleza del negocio lo permita, y se halle presente el Gobernador de la provincia. En tal caso, luego que se concluya la discusion, se tomará en el registro, que se llevará al efecto, una breve razon de lo acordado, rubricando acto continuo los consejeros que hayan concurrido al acuerdo, y pudiendo salvar su voto el que hubiere disentido de la mayoría.

Art. 157 (Antes 156). Para discutir los informes que deban dar los Consejos provinciales por escrito, seguirán el orden establecido en los artículos del 138 al 143 de este reglamento.

Art. 158 (Antes 157). Las sesiones darán principio por la lectura del acta de la anterior, y una vez aprobada esta, se copiará inmediatamente en el libro destinado al efecto, autorizándose con la firma del presidente y del secretario.

CAPITULO V.

Del procedimiento en asuntos contenciosos.

Art. 159. (Antes 158.) Mientras no se publique la ley de que habla el art. 70 de la promulgada en 17 de agosto de 1860, procederán los Consejos provinciales en los negocios contenciosos de la Administracion segun lo dispuesto en la relativa al gobierno de

las provincias y en el reglamento aprobado por el R. D. de 1.º de octubre de 1845.

CAPITULO VI.

De los secretarios de las Diputaciones y Consejos provinciales.

*Art. 160. (Antes 159.) Los secretarios de las Diputaciones provinciales serán los superiores inmediatos de los empleados adscritos al servicio de estos cuerpos y extenderán las actas de sus sesiones.

*Art. 161. Las Diputaciones acordarán la forma en que su secretario ha de entender en los trabajos de las mismas.

*Art. 162. Cuidará el secretario de la Diputacion, de extender las actas de las sesiones, y autorizarlas competentemente.

*Art. 163. El secretario del Consejo provincial, bajo su responsabilidad, tendrá á su cargo la exacta observancia de las instrucciones que para el despacho de los negocios se le comuniquen, y extenderá las actas de las sesiones del Consejo, haciendo que una vez aprobadas se copien en los libros correspondientes, autorizados en forma.

*Art. 164. Estenderá tambien por sí mismo el secretario del Consejo los acuerdos que tome esta corporacion.

Art. 165. (Antes 164.) Los secretarios rendirán mensualmente cuenta justificada de la consignacion para gastos de Secretaría y material. Estas cuentas serán autorizadas por el Presidente del Consejo provincial.

Art. 166. (Antes 165.) Cuando por cualquier causa no pudiese ejercer sus funciones el secretario, le sustituirá el empleado de mas categoría de los que se hallen al inmediato servicio de la Diputacion y Consejos provinciales.

CAPITULO VII.

Disposicion transitoria.

Art. 167. (Antes 166.) Para los efectos del art. 92 de la ley sobre el Gobierno y Administracion de las provincias, empezarán á contarse los plazos de las providencias administrativas notificadas con anterioridad á la promulgacion de la misma, desde la fecha en que se publique el presente reglamento.—Madrid 22 de octubre de 1866.—Gonzalez Bravo.

R. D. de 1.º octubre de 1845.

Aprobando el reglamento de Consejos provinciales para los negocios contenciosos.

(Gob.) «Atendiendo á las razones que me ha hecho presente el Ministro de la Go-

bernacion de la Península y conforme á lo dispuesto en el art. 15 de la ley de 2 de abril de este año, he venido en aprobar el adjunto reglamento sobre el modo de proceder los Consejos provinciales en los negocios contenciosos de la Administracion.»—
Dado en Palacio á 1.º de octubre de 1845.

Reglamento sobre el modo de proceder los Consejos provinciales como tribunales administrativos, ó sea en los negocios contenciosos de la Administracion.

TITULO PRIMERO.

DE LA ORGANIZACION DE LOS CONSEJOS PROVINCIALES COMO TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS, Y DE SU RÉGIMEN INTERIOR.

CAPITULO PRIMERO.

De la planta de los Consejos.

Artículo 1.º Para que puedan tomar acuerdo los Consejos provinciales en negocios contencioso-administrativos, se requiere la asistencia de tres vocales, de los cuales el uno ha de ser precisamente letrado. En este número se contará el Jefe político, cuando asista (1).

Art. 2.º Para cada negocio elegirá el Consejo por mayoría absoluta de votos un consejero ponente.

Será de su incumbencia proponer á la deliberacion del Consejo los puntos de hecho y de derecho sobre que deban recaer los fallos, y redactar las providencias motivadas que el Consejo dictare.

El que haya sido nombrado ponente para el despacho de un negocio, podrá serlo consecutivamente para otro, y no se podrá excusar sino mediando impedimento bastante á juicio del Consejo.

Art. 3.º Los Consejos tendrán el tratamiento impersonal.

Los consejeros ocuparán sus asientos por el orden de antigüedad de sus respectivos nombramientos.

En igualdad de fechas de estos, obtendrá la precedencia el consejero de mas edad.

Los consejeros supernumerarios se sentarán despues de los propietarios, guardando entre si el mismo orden que estos.

Art. 4.º Cuando falte algun consejero propietario, designará el Jefe político, entre los supernumerarios, el que haya de sustituirle.

Art. 5.º Hará por ahora de secretario de cada Consejo un oficial del respectivo Gobier-

no político. Le nombrará el Jefe político, procurando que sea letrado (1).

Art. 6.º Será de la incumbencia del secretario en lo contencioso:

Dar cuenta de los escritos de la Administracion y de las otras partes litigantes:

Autorizar las providencias, sentencias y despachos y exhortos del Consejo, y las copias que hubieren de franquearse:

Custodiar los expedientes y desempeñar las funciones de relator y cuantas obligaciones se le impongan por este reglamento ó en lo sucesivo se le impusieren.

Art. 7.º Los secretarios de los Consejos no llevarán por ahora derechos á las partes. Estas satisfarán solamente el importe del papel sellado y los demás gastos indispensables que se hicieren á su instancia.

Art. 8.º En los Consejos provinciales no será obligatorio el ministerio de abogados ni procuradores.

Art. 9.º En cada Consejo habrá dos ujieres. Será de la incumbencia de estos en lo contencioso:

Hacer los emplazamientos, citaciones, notificaciones, embargos y demás diligencias que se practicaren de orden del Consejo fuera de la Audiencia y de la Secretaría:

Asistir á las Audiencias y hacer guardar en ellas el orden y compostura debidos:

Y asistir al presidente ó vice-presidente para cumplir las órdenes que estos les dieren, relativas al despacho y servicio del Consejo.

Art. 10. Los ujieres serán nombrados y destituidos por el Jefe político, dando cuenta al Ministerio de la Gobernacion de la Península.

Para destituir á los ujieres ha de intervenir justa causa.

Art. 11. Tendrán los ujieres el sueldo que les señale el Gobierno en consideracion á la categoría y circunstancias de cada provincia. Los sueldos de los ujieres se incluirán en el presupuesto provincial.

Art. 12. Los ujieres no llevarán por ahora derechos á las partes; pero si alguna vez salieren de la capital para evacuar diligencias judiciales, se les abonarán las dietas que el Jefe político, oído el Consejo provincial, haya fijado previamente.

CAPITULO II.

De las recusaciones.

Art. 13. El Jefe político no podrá ser recusado.

(1) Véase el art. 1.º de la R. O. de 25 de setiembre de 1863.

(1) Véase, hoy, el art. 47 de la ley y el 2.º de la R. O. de 15 de setiembre de 1863.

El vice-presidente y los demás vocales del Consejo solo podrán ser recusados en los casos siguientes:

1.º Si fueren parientes por consanguinidad ó afinidad hasta el cuarto grado civil inclusive de alguno de los litigantes.

2.º Si al tiempo de la recusacion ó dentro de los tres años precedentes siguieren ó hubieren seguido causa criminal con alguna de las partes, su cónyuge ó sus consanguíneos ó afines en línea recta.

3.º Si al tiempo de la recusacion ó dentro de los seis meses precedentes siguieren ó hubieren seguido pleito civil con alguna de las personas mencionadas en el párrafo anterior con tal que el pleito haya empezado antes de aquel en que se proponga la recusacion.

4.º Si fueren tutores, curadores ó defensores de cualquiera de las partes, ó administraren un establecimiento ó compañía que sea parte en el litigio.

Art. 14. Cuando los hechos en que se funde la recusacion sean anteriores al pleito, no podrán proponerla los litigantes después de haber contestado la demanda ó deducido excepcion dilatoria, salvo si aquellos vinieren posteriormente á su noticia, en cuyo caso deberán hacerlo luego que la tengan.

Art. 15. La recusacion se propondrá por escrito, que firmará el recusante ó su apoderado.

El escrito se comunicará al recusado, el cual responderá por escrito ó de palabra ante el Consejo.

Art. 16. El Consejo recibirá á prueba la recusacion, si lo estimase necesario.

Oido el recusado ó evacuada la prueba, el Consejo fallará inmediatamente sin ulterior recurso.

El recusado no podrá asistir á la vista ni votacion del incidente de recusacion.

Admitida esta, se abstendrá el recusado de conocer en el negocio.

CAPITULO III.

Del presidente y vice-presidente.

Art. 17. El Jefe político será el presidente nato del Consejo cuando este actúe en lo contencioso.

El vice-presidente nombrado por el Gobierno presidirá siempre que el Jefe político no asista.

A falta de vice-presidente titular el Jefe político nombrará un vice-presidente interino de entre los vocales del Consejo.

Cuando el Jefe político asista, el primer

asiento á la derecha de este será el del vice-presidente (1).

Art. 18. El Gobierno interior de cada Consejo, estará á cargo de su presidente, y en su caso de su vice-presidente, los cuales harán guardar el orden debido cuidando de que todos llenen cumplidamente sus deberes.

Art. 19. El Jefe político recibirá y despachará la correspondencia del Consejo firmando las contestaciones que no se comuniquen por Secretaría, y autorizará todos los despachos del Consejo.

Tambien decretará las providencias interinas que por urgentes deban dictarse sin demora, poniéndolo á la mayor brevedad en conocimiento del Consejo.

Art. 20. El que presida rubricará los asientos del libro de asistencia, en el cual anotará diariamente el secretario los nombres de los consejeros que asistan:

Llevará la palabra en el Consejo, sin que nadie pueda usarla sin su permiso:

Y publicará las sentencias definitivas, autorizando el secretario la publicacion.

TITULO II.

DEL PROCEDIMIENTO.

CAPITULO I.

De la discusion escrita.

Art. 21. En los negocios que se entablen á instancia de la Administracion, se incoará el procedimiento con un escrito ó memoria documentada que el Jefe político mandará pasar al Consejo.

Art. 22. En los negocios que se entablen á instancia de particulares ó corporaciones se incoará el procedimiento con la demanda documentada del particular ó corporacion (2).

Art. 23. El particular ó el representante de la corporacion, á cuyo nombre se produzca la demanda, la firmará de su puño, si pudiese, y la entregará personalmente ó por

(1) Ver el art. 66 de la ley y el 4.º de la R. O. de 25 de setiembre de 1863, que lo modifican.

(2) Ver el art. 5.º Real orden citada.

No es necesario intentar el juicio de conciliacion en los asuntos de que conocen los Consejos provinciales.—Estos como Tribunales deben vacar en los dias feriados, salvo en los casos de urgencia á juicio de los mismos Consejos ó de los Gobernadores. (R. O. de 1.º de enero de 1847 t. 40, p. 4 de la CL.) V. CONCILIACION. DIAS FERIADOS.

medio de su apoderado en la Secretaría del Gobierno político (a).

Art. 24. Si en vista de la demanda decidiere el Jefe político que el asunto que la motiva es de su exclusiva competencia, le resolverá gubernativamente por sí, y comunicará su resolución al demandante.

Cuando este insista en que el asunto no es de la competencia del Jefe político, sino de la del Consejo provincial, podrá recurrir al Ministerio de la Gobernación de la Península por el que, oído el Consejo Real, se decidirá lo conveniente (b).

Art. 25. Si el Jefe político estimare el asunto de la competencia del Consejo provincial, mandará que se dé cuenta á este de la demanda por la Secretaría del mismo Consejo (b).

Art. 26. El nombramiento de apoderado podrá hacerse en las actuaciones por diligencia que autorice el secretario del Consejo ante testigos.

Art. 27. El término mayor que se señalará en el despacho ó cédula de emplazamiento para contestar la demanda, será de nueve días y uno mas por cada cinco leguas de distancia de la capital de la provincia al lugar del domicilio del demandado. Al señalar este término se tendrá en cuenta el estado de las comunicaciones.

Cuando la demanda se dirija contra la Administración, (c) se mandará pasar al Jefe político, el cual la devolverá al Consejo con la debida contestación á la mayor brevedad posible, sin que en ningún caso pueda dilatarlo por mas de 30 días.

Art. 28. Los emplazamientos dirigidos á particulares se harán en cédulas ó despachos que contengan literalmente la demanda ó memoria y una relación expresiva de los documentos presentados con ella.

Art. 29. El término para contestar al escrito en que se proponga excepción dilatoria ó cualquiera otra pretensión incidente de la principal, ó para evacuar cualquier traslado, será á lo mas de seis días, y á lo menos de dos.

Art. 30. En la demanda y contestación y

(a) Téngase presente el art. 93 de la ley y el 6.º de la R. O. de 25 de setiembre de 1863, en cuanto le modifican.

(b) Los arts. 24 y 25 están modificados por el 93 y 94 de la ley.

(c) Entiéndase de la Administración civil en general, excluida la municipal, cuyos representantes son los Alcaldes con arreglo á lo dispuesto en la ley de Ayuntamientos. *Sent. 17 de noviembre de 1847.* Hoy, véase el art. 94, ley de 25 set. 1863 inserto en la pág. 358.

en los demás escritos mencionados en el artículo anterior, antes de fijarse la pretensión, se extenderá por párrafos numerados un resumen de los puntos de hecho y de derecho que sustente el que produzca el escrito.

Art. 31. El actor, al deducir la demanda, y el demandado, al contestarla, declararán la casa-habitación que eligieren para que en ella se les hagan las citaciones y notificaciones. Cuando alguna de las partes no eligiere casa, y mientras no la elija las notificaciones que le conciernan, se harán en extrados.

Art. 32. De toda notificación que hagan los ujieres, extenderán una cédula original; y además una copia para cada una de las partes.

En la casa elegida entregarán la copia á la parte en su persona, si se hallase en ella, y en su defecto al dueño de la casa, individuos de la familia y criados, por el orden que aquí se expresa.

La persona á quien se entregue la copia firmará si pudiere, y si no un testigo á su ruego, la cédula original, que se unirá en seguida al expediente.

Las cédulas contendrán literalmente la providencia notificada.

Las notificaciones en que no se guarde la forma prescrita en este artículo, serán nulas.

Art. 33. No se admitirán como dilatorias mas excepciones que la incompetencia del Consejo y la falta de personalidad en el demandante, ya por carecer de las cualidades necesarias para comparecer en juicio, ya por no acreditar debidamente el carácter ó representación con que reclama.

Art. 34. Las excepciones dilatorias se propondrán y sustanciarán todas al mismo tiempo.

Art. 35. Las excepciones no comprendidas en el art. 33 no podrán suspender ni impedir el curso del juicio.

Art. 36. Sobre las excepciones dilatorias solo se admitirá un escrito de cada parte; sobre el fondo de la demanda podrán presentarse dos.

Art. 37. En los negocios en que sea parte la Administración, las memorias presentadas á su nombre irán autorizadas por el Jefe político, ó por el encargado de la dependencia administrativa á que corresponda la cuestión, con el V.º B.º del mismo Jefe político (1).

Art. 38. Terminada la discusión por escrito, se pasarán las actuaciones al consejero ponente, y á propuesta suya decidirá el Con-

(1) Véase la nota anterior, cuyo contenido es aplicable á la disposición de este artículo.

sejo si se ha de señalar día para la vista pública ó se ha de recibir prueba, determinando en este caso la que haya de hacerse y el término que se ha de conceder á las partes para verificarlo. Este término no podrá en ningún caso pasar de 30 días.

Art. 39. Las diligencias de prueba que se practicaren fuera de Audiencia, se barán ante el vice-presidente, á excepcion del caso en que el Consejo estime conveniente asistir á algun reconocimiento ó vista ocular.

Tambien podrá el Consejo delegar las expresadas diligencias á los jueces de primera instancia y Alcaldes de los pueblos.

Art. 40. Los expedientes no se entregarán nunca á los particulares; pero estarán de manifiesto en la Secretaría del Consejo para que las partes saquen los apuntes y copias que les convengan.

CAPITULO II.

De la vis'a del proceso.

Art. 41. Evacuada la prueba ó terminada la discusion escrita, se señalará día para la vista.

Art. 42. La vista de los pleitos será á puerta abierta, fuera de los casos en que la publicidad pueda dar ocasion á que se perturbe el orden.

No podrá verse ningun pleito á puerta cerrada, sin que así lo acuerde el Consejo (1).

Art. 43. La vista comenzará haciendo el secretario relacion del expediente. Las partes ó sus defensores expondrán en seguida verbalmente lo que crean conducente á su defensa.

Art. 44. El Jefe político, cuando lo estime conveniente, podrá nombrar un defensor que sostenga los derechos de la Administracion, ó autorizar para que le nombren á las corporaciones ó funcionarios administrativos, sobre cuyos actos verse la controversia (2).

Art. 45. Terminada la vista podrá el Consejo cuando lo estime necesario para mejor proveer, pedir informes ó mandar practicar cualquiera diligencia de prueba que no sea la de testigos.

CAPITULO III.

De las sentencias.

Art. 46. Terminada la vista, y en su caso

las diligencias que para mejor proveer se hubieren decretado, procederá el Consejo á la mayor brevedad posible, á la decision definitiva del litigio.

En todo caso dictará el Consejo la sentencia dentro de siete dias á mas tardar, contados desde el siguiente á aquel en que se hubiere concluido para definitiva.

Art. 47. Los Consejos no podrán abstenerse de fallar en ningun negocio á título de ser oscuras ó incompletas las leyes ó disposiciones legales, ó de no haber estas previsto el caso sobre el cual deba recaer el fallo.

Art. 48. La votacion del fallo se hará á puerta cerrada.

El ponente someterá á la deliberacion del Consejo los puntos de hecho y de derecho sobre que deba recaer el fallo, y se votará sucesivamente por su orden y en último lugar la decision.

Votará primero el ponente y despues los demás consejeros por el orden inverso de su procedencia: el presidente votará el último.

Cuando hubiere discusion, el presidente hará un sucinto resumen de ella antes de procederse á la votacion.

Art. 49. Los consejos motivarán todas las providencias definitivas y las interlocutorias que á su juicio lo requieran.

Las providencias se motivarán exponiendo clara y concisamente los puntos de hecho y de derecho, y los principios ó disposiciones legales que les sean aplicables.

Art. 50. Ninguno de los votantes podrá negarse á firmar lo acordado por la mayoría, aunque él haya disentido de esta, pero podrá salvar su voto dentro de las 24 horas de haberle dado, motivándole y firmándole en el libro que al efecto custodiará el secretario.

Art. 51. Al márgen de la sentencia anotará el secretario los nombres de los consejeros que asistieren á la vista y dictáren aquella.

El presidente y secretario firmarán la sentencia dentro de las 24 horas de haberse dictado.

Art. 52. En toda votacion á que asista el Jefe político, tendrá voto decisivo en caso de empate.

Art. 53. Si al votar la sentencia discordaren los consejeros, y no resultare mayoría, se verá el negocio por mas consejeros, y se votará de nuevo por los primeros y por los segundos.

(1) Hoy siempre pública segun el art. 89 de la ley.

(2) Consúltese la R. O de 24 de setiembre de 1858 y la ley de 25 de setiembre de 1863, artículo 91, así como la Real orden de la mis-

ma fecha, art. 9, respecto á la representacion de la Hacienda y de los demás ramos de la Administracion.

En este caso el Consejo se asociará el número de consejeros propietarios, y á falta de ellos, el de supernumerarios que se necesitare, llamándolos por el orden de su precedencia.

CAPITULO IV.

De la actuacion en rebeldia.

Art. 54. Cuando alguna de las partes debidamente emplazada ó citada no acudiere á exponer sus defensas, el Consejo, á instancia de los demás interesados, decidirá el asunto en rebeldia.

La instancia por parte de la administracion se entiende hecha desde el momento en que el secretario expone al Consejo haber pasado el término señalado, y lo certifica en las actuaciones.

Art. 55. La rebeldia podrá acusarse por escrito ó de palabra: en este último caso el secretario extenderá la oportuna diligencia, que firmarán las partes interesadas.

Acusada que sea la rebeldia, el Consejo procederá á fallar el pleito.

Art. 56. Para mejor proveer en rebeldia, podrá el Consejo mandar practicar de oficio la prueba que estime conveniente, con tal que no sea la de testigos.

Art. 57. La sentencia dictada en rebeldia, además de notificarse por cédula ó despacho cuando sea posible, se fijará en la sala del Consejo, y se insertará en el *Boletín oficial* de la provincia.

La insercion se acreditará poniendo en el expediente un ejemplar del *Boletín* y la fijacion por diligencia del secretario.

Art. 58. Contra la sentencia dada en rebeldia habrá el recurso de rescision ante el Consejo que la hubiere dictado. Antes de decidirse sobre la rescision de la sentencia, no se podrá interponer apelacion ni otro recurso alguno.

Art. 59. La rescision de la sentencia dada en rebeldia podrá solicitarse dentro de 15 dias, contados desde el siguiente al de su publicacion.

Si la parte contumaz estuviere ausente de la provincia, podrá el Consejo señalarle en la sentencia un plazo mas largo para que pueda solicitar la rescision.

Art. 60. El recurso de rescision no suspenderá la ejecucion de la sentencia dictada en rebeldia, á menos que el Consejo al dictarla haya ordenado lo contrario. Sin embargo, la ejecucion de la sentencia se entenderá siempre sin perjuicio de la rescision que pudiera intentarse, y se llevará á efecto,

previa la oportuna fianza, siempre que el Consejo creyere oportuno exigirla.

Art. 61. Admitido el recurso de rescision se oirán al reclamante sus defensas, y se le concederá para exponerlas y justificarlas la mitad á lo sumo del término ordinario.

Art. 62. La parte que por segunda vez fuere condenada en rebeldia, no podrá entablar el recurso de rescision en el mismo negocio.

CAPITULO V.

De los recursos contra las sentencias definitivas (1).

SECCION PRIMERA.

Del recurso de la interpretacion.

Art. 63. Tendrá lugar el recurso de interpretacion contra la sentencia, cuando la parte dispositiva de esta fuere contradictoria, ambigua ú oscura en sus cláusulas.

Art. 64. El término para interponer el recurso de interpretacion será de cinco dias, contados desde la notificacion de la sentencia.

Art. 65. El recurso de interpretacion no suspenderá la ejecucion de la sentencia que lo motive.

Sin embargo, el Consejo podrá, si lo reclamaren las circunstancias, sobreseer en la ejecucion de la sentencia ó de parte de ella hasta la debida aclaracion.

Art. 66. Si el Consejo, oidas las partes, estimare procedente la interpretacion, admitirá el recurso y dirimirá la contradiccion, ambigüedad ú oscuridad que ofrezca la sentencia, dentro de tercero dia.

Art. 67. No tendrá lugar el recurso de interpretacion respecto de la sentencia una vez interpretada, ni respecto de la providencia de interpretacion.

SECCION SEGUNDA.

Del recurso de apelacion.

Art. 68. Conforme á lo dispuesto en el art. 19 de la ley de organizacion de los Consejos provinciales, solo podrá apelarse de las sentencias dictadas en primera instancia por dichos Consejos cuando el interés del litigio ó valor de la demanda, pudiendo sujetarse a

(1) *Caso práctico:* No son admisibles otros recursos que los expresamente comprendidos en este capitulo, y por lo tanto no procede tampoco el de beneficio de restitucion *in integrum*, concedido en su caso por derecho comun á los Consejos. (*Sent. de 3 de enero de 1849, núm 3*).

una apreciacion material, llegue á 2,000 reales (1).

Art. 69. La apelacion se interpondrá necesariamente dentro de diez dias, contados desde la fecha de la notificacion de la sentencia.

Art. 70. La apelacion se interpondrá para ante el Consejo Real, salvo el caso previsto en el art. 109 de la Ley de Ayuntamientos (2).

La parte que no apele, podrá adherirse á la apelacion hasta el dia de la vista exclusiva.

Art. 71. El recurso de apelacion no suspenderá la ejecucion de la sentencia, salvo si en esta se hubiere mandado lo contrario.

Art. 72. No podrá apelarse de las providencias interlocutorias: las nulidades y agravios que con ellas se causaren se ventilarán y decidirán en el Consejo Real con los recursos de nulidad y apelacion que se interpongan de las sentencias definitivas.

SECCION TERCERA.

Del recurso de nulidad para ante el Consejo Real.

Art. 73. El recurso de nulidad contra las sentencias definitivas dictadas por los Consejos provinciales, solo tendrá lugar en los casos siguientes:

1.º Cuando el asunto no fuere de la competencia de la jurisdiccion administrativa.

2.º Cuando no hubiere dictado la sentencia el número de consejeros necesario.

3.º Cuando la sentencia fuere contraria en su tenor al texto expreso de las leyes, Rs. Ds. y órdenes vigentes.

4.º Cuando alguna de las partes careciere de poder bastante ó de capacidad para litigar.

5.º Cuando alguna de las partes no hubiere sido emplazada en tiempo y forma.

6.º Cuando no se hubiere citado á alguna de las partes para prueba ó sentencia.

(1) Conforme con el art. 97 de la ley y véase el 10 de la R. O. de 25 de setiembre de 1863.

(2) *Negocios de cuentas.* El Consejo Real se ha declarado incompetente para conocer de una apelacion interpuesta en un pleito seguido en primera instancia ante el Consejo provincial de Barcelona, sobre liquidacion de cuentas de los productos de una memoria pia, con vista de este artículo, del 109 de la ley municipal que en él se cita, del 93, del párrafo 8.º del 74 de la misma, y de la de beneficencia; porque en el mismo caso que las cuentas de los Ayuntamientos están las de los establecimientos municipales de beneficencia como lo es la obra pia de que se trataba. (*Sent. núm. 16 de 23 mayo 1849.*)—Véase tambien el art. 80 de la ley.

7.º Cuando se hubiere denegado la prueba necesaria para dictar sentencia (1).

Art. 74. Para que proceda el recurso de nulidad en los casos prescritos en los párrafos 4.º, 5.º, 6.º y 7.º del artículo anterior, ha de haberse reclamado en primera instancia, en tiempo y forma, contra la nulidad.

Art. 75. En negocios de mayor cuantía no podrá intentarse el recurso de nulidad por separado del recurso de apelacion.

En todo caso el recurso de nulidad se interpondrá dentro del mismo término y en la misma forma que el recurso de apelacion.

Art. 76. Incumbe al Jefe político interponer contra las sentencias gravosas á la Administracion los recursos establecidos en este capítulo.

Disposicion general.

Art. 77. En todos los casos é incidentes no previstos por este reglamento y por la ley de 2 de abril del presente año, los Consejos se atemperarán á la legislacion y jurisprudencia comunes, en cuanto su aplicacion sea compatible con el rápido curso de las cuestiones contencioso-administrativas, y con la letra y espíritu de dicha ley y reglamento.—Aprobado por S. M. por Real decreto de esta fecha.—Madrid 1.º de octubre de 1845. (*CL. t. 35, p. 333.*)

Apéndice.

Hasta aquí dejamos insertas las leyes orgánicas y de atribuciones de los *Consejos provinciales* y del *Consejo Real* con

(1) *Caso práctico.* Litigando el Ayuntamiento de Pamplona sobre recomposicion de la plaza de toros construida en virtud de contrata sin llenarse, segun alegaba, las condiciones de la misma por cuyo motivo se desplomo, solicitó el analisis quimico de las calidades del mortero con objeto de hacer ver que no tenia las condiciones estipuladas. Desestimada esta prueba y fundada luego en ello la nulidad, se declaró haber lugar á esta por considerar dicha prueba necesaria para dictar sentencia justa. (*Sent. de 24 de octubre 1849, núm. 29.*) *Otro caso práctico:* Tan calificados pueden ser los motivos de nulidad que, al declararla, sea necesario hacer alguna demostracion al Consejo provincial. Reclamaba un particular la liquidacion y pago de suministros contra un pueblo ó merindad: el Jefe político pasó las actuaciones al Consejo provincial y sin esperar á la comparecencia del demandante, sin citacion del demandado, de plano y sin pruebas señaló dia para la vista y falló. El Consejo Real, á donde se llevó el negocio en reclamacion de nulidad, no pudo menos de estimarla y condenó en costas á los consejeros. (*Sent. de 30 abril 1849, núm. 11.*)

los reglamentos sobre el modo de conocer aquellos y este como Tribunales contenciosos de la Administracion. Ahora continuaremos con las disposiciones aclaratorias á dichas leyes ó que conviene tener presentes para su mejor inteligencia y aplicacion, siquiera en algunas nos limitemos á meras indicaciones por corresponder su insercion íntegra á otros artículos de esta obra.—Son, pues, las siguientes:

R. D. de 10 octubre de 1845.

Cuestiones sobre perjuicios de las obras públicas.

Es la instruccion para promover y ejecutar obras públicas, la cual en el art. 31 determina que se resuelvan gubernativamente las diferencias que se susciten sobre indemnizaciones y resarcimiento de daños y perjuicios causados por esta clase de obras, y que no habiendo conformidad y haciéndose contenciosos estos asuntos conozcan de ellos los Consejos provinciales, segun sus atribuciones.—V. OBRAS PÚBLICAS.

Ley de 20 marzo de 1846.

Cuestiones contenciosas sobre diezmos.

Es sobre indemnizacion á los partícipes legos de diezmos, cuyos títulos se califican por el Gobierno, y se dispone que en caso de que los interesados no se conformaren con la calificacion etc. *podran intentar la via judicial ante los Consejos de provincia, con apelacion al Consejo Real.* La accion de la Hacienda pública en estos juicios se ejercerá ante los Consejos por los fiscales de Hacienda y ante el Consejo Real por el fiscal del mismo, segun se dispone por Reales órdenes de 28 de mayo de 1846 y 20 del mismo mes de 1849.—V. DIEZMOS.

R. D. de 23 setiembre de 1846.

Negocios contencioso-administrativos de los ramos de caminos y correos.

«Tomando en consideracion lo que me ha hecho presente el Ministro de la Gobernacion de la Península, oído el Consejo Real, sobre el conocimiento de los negocios contencioso-administrativos peculiares de los ramos de Correos y Caminos, he venido en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º En virtud de las disposiciones contenidas en la ley de 2 de abril de 1845, se considerará como privativo de los Consejos provinciales por ella creados el conocimiento de todos los negocios de naturaleza civil, correspondientes á la administra-

cion de los ramos de Correos, Caminos, Canales y Puertos, cuando segun sus instrucciones respectivas hayan de pasar de la clase de gubernativos á la de contenciosos con inclusion de los casos de expropiacion forzosa por causa de obras públicas con arreglo á lo prevenido en la instruccion de 10 de octubre último relativa á estas.

Art. 2.º Se exceptúan del artículo anterior los litigios sobre dominios ó propiedad que la administracion de dichos ramos tuviese que sostener y los casos en que la misma hubiere de proceder por remate y venta de bienes contra sus deudores. De unos y otros negocios continuarán conociendo los Tribunales ordinarios, ó los especiales á que segun las leyes correspondan por su naturaleza.

Art. 3.º En cuanto á las cuestiones contenciosas á que pueden dar lugar los contratos de cualquiera especie celebrados para el servicio de los mismos ramos por la Administracion con los particulares, su conocimiento tocará á los Consejos provinciales con apelacion para ante el Real, siempre que se tratase de contrataciones celebradas por la Administracion provincial ó municipal para servicios limitados á sus respectivos distritos; pero si la contienda nace de un contrato que hubiesen celebrado por sí el Gobierno ó las respectivas Direcciones generales, conocerá de ellas directamente el Consejo Real.

Art. 4.º En la parte criminal de la jurisdiccion peculiar de dichos ramos, se distinguirá lo puramente correccional de lo penal propiamente dicho, remitiendo á los Tribunales ordinarios ó especiales á que segun las leyes correspondan, tan solo los negocios sobre casos de alzamiento de caudales, de destruccion violenta de obras públicas; de violacion de secreto y seguro de la correspondencia, de falsificacion de sellos, de contrabando y de cualquier otro delito ó infraccion de las reglas y ordenanzas administrativas á que este señalada pena corporal.

Art. 5.º Todas las faltas cometidas por empleados, dependientes, empresarios y contratistas de los mismos ramos, serán corregidas por los respectivos jefes de la Administracion, siempre que se trate de penas establecidas por las ordenanzas y reglamentos, ó de responsabilidad convencional.

Art. 6.º y último. Las infracciones de las reglas y ordenanzas de dichos ramos cometidas por particulares, serán corregidas con sujecion á las mismas ordenanzas por la autoridad civil, oyendo á los jefes locales respectivos.» (*CL. t. 38, p. 382.*)

R. O. de 24 noviembre de 1846.

Se resuelve una consulta sobre conocimiento ó competencia de los Tribunales contencioso-administrativos en pleitos pendientes ante los civiles.

«Remitido á informe del Consejo Real en Secciones reunidas de Gracia y Justicia y Gobernacion, un expediente promovido por el director del hospicio de Badajoz que el Jefe político de la provincia dirigió en consulta á este Ministerio con fecha 3 de noviembre de 1845, sobre que el Consejo de la misma provincia conozca de un pleito que se sigue en la Audiencia del territorio entre dicho director y el arrendatario de la dehesa titulada *Millares de pié de hierro*, han dado aquellas su dictámen en 28 de setiembre último del modo siguiente:

Las Secciones de Gracia y Justicia y Gobernacion han examinado el expediente que por R. O. de 26 de julio se sirvió V. E. remitirles á informe, promovido por el director del hospicio de Badajoz, con el objeto de que el Consejo provincial avoque el conocimiento de un pleito que está siguiendo en la Audiencia territorial con el arrendatario de la dehesa llamada *Millares de pié de hierro*, sobre abono de perjuicios.

Del exámen resulta: que en 10 de enero de 1842 el director de hospicio del Badajoz arrendó á D. Benito Lagarza la expresada dehesa. Que en 1843 el arrendatario acudió al Juzgado de primera instancia reclamando el abono de los perjuicios que se le habian irrogado por la segregacion de una porcion de pastos en rozas y rescalvados, acotados unos por sus dueños y enajenados otros á censo enfiteático por el Ayuntamiento de dicha ciudad. Que publicada la ley de organizacion y atribuciones de los Consejos provinciales, y creados estos, acudió el director del hospicio en 14 de octubre de 1845 al de Badajoz pidiendo avocase el conocimiento del pleito que seguia en la Audiencia territorial con el arrendatario de la dehesa. Que en 24 de dicho mes y año el Consejo provincial, aunque convencido de que el asunto en cuestion era de los comprendidos en el pár. 3.º, art. 8.º de la ley de Consejos provinciales, acordó se consultase al Gobierno si debia ó no avocar el conocimiento por dudar si pueden conocer los Tribunales contencioso-administrativos de aquellos en que haya recaído una sentencia definitiva de la jurisdiccion ordinaria; y por último, resulta que el Jefe político al remitir el expediente al Ministerio de la Gobernacion en su comunicacion de 3 de noviembre último, solicita se resuelva: 1.º Si debe ó no el Consejo provincial avocar

el conocimiento del pleito que sigue en la Audiencia el director del hospicio con D. Benito Lagarza: 2.º Si los Tribunales contencioso-administrativos deben conocer de los asuntos que hallándose comprendidos en los arts. 8.º y 9.º de la Ley de Consejos provinciales, estaban incoados en los Tribunales ordinarios antes de la creacion de dichos Cuerpos.

Considerando que el arrendamiento hecho por el director del hospicio á D. Benito Lagarza no es un contrato celebrado con la Administracion para el servicio ni obra pública, y por consiguiente que no se halla comprendido en el art. 8.º, pár. 3.º de la ley de 2 de abril, como supone el Consejo provincial de Badajoz.

Considerando que las leyes deben tener toda su fuerza y vigor desde el mismo dia de su publicacion.

Considerando que los Consejos provinciales son en su clase Tribunales de primera instancia, de cuyas providencias se admite apelacion ante el Consejo Real: las Secciones opinan:

1.º Que el conocimiento del pleito que sigue el director del hospicio con el arrendatario de la dehesa llamada *Millares de pié de hierro*, corresponde á los Tribunales ordinarios.

2.º Que los negocios incoados en los Tribunales ordinarios, cuyo conocimiento crea el Jefe político ser propio de la Administracion, deben ser reclamados por el mismo en los términos que previene el R. D. de 6 de junio de 1844 (1).

3.º Que cuando no se haya dictado sentencia definitiva por el Juzgado de primera instancia en los negocios contencioso-administrativos con anterioridad á la ley orgánica de los Consejos provinciales, toca á estos el conocimiento; y corresponderá al Consejo Real si fallados en primera instancia antes de dicha ley están pendientes ante las Audiencias en grado de apelacion ó súplica.

Y habiéndose dignado S. M. la Reina aprobar el parecer de las referidas Secciones, lo traslado á V. S. de Real órden para que el contenido de los puntos 2.º y 3.º le sirva de conocimiento en los casos que ocurran.—Madrid 24 de octubre de 1846.» (CL. t. 39, página 156.)

R. O. de 1.º enero de 1847.

Sobre conciliacion y dias feriados en los negocios contencioso-administrativos.

(Véase en la nota al art. 22 del Reglamento de 1.º octubre, pag. 362.)

(1) V. COMPETENCIAS DE JURISDICCION.

R. O. de 24 octubre de 1847.

Litigios con la Administracion.

(GOB.) Se previene á los Gobernadores den cuenta al Ministerio de la Gobernacion de todos los litigios que la Administracion siga en los Consejos provinciales «y muy principalmente de las sentencias que en ellos recaigan y su fecha, y del auto en que se admita la apelacion, si una de las partes la interpone para ante el Consejo Real.» (CL. t. 42, pág. 258.)

R. O. de 5 febrero de 1848.

Prevenciones á los Gobernadores sobre asuntos contenciosos.

(GOB.) Se previene á los Gobernadores: 1.º «Que cuando la Administracion sea en los negocios contenciosos la parte apelada lo pongan en conocimiento del Ministerio de la Gobernacion, dentro de tercero dia, despues de notificado el auto en que se haya admitido la apelacion á la parte contraria, acompañando copia literal de este auto y de la sentencia. 2.º Que cuando dejen de apelar de una sentencia que sea contraria en todo ó en parte á lo solicitado por la Administracion en el litigio lo participen igualmente al mismo Ministerio exponiendo las razones que para proceder así hayan tenido. Y 3.º Que remitan cada seis meses un estado de los negocios contenciosos pendientes ante el Consejo provincial respectivo, expresando el que tengan y en el que se hallaban al finalizar el semestre próximo anterior, é individualizando por medio de la correspondiente nota de los fenecidos despues.» (CL. t. 43, pág. 73.)

R. O. de 17 marzo de 1848.

Sobre los Consejeros supernumerarios.

(GOB.) Se dispone por esta Real orden «que los consejeros supernumerarios puedan presenciar de los negocios contenciosos sometidos á la liberacion de los consejeros provinciales» por considerar que el espíritu de la ley al disponer que los supernumerarios asistan á los actos del Consejo, es para que se enteren de los casos que ocurran, del curso que se dá á los negocios, de la legislacion vigente de cada uno de ellos, y del espíritu que predomina en las discusiones y decisiones.»

R. O. de 22 noviembre de 1848.

Se declara que corresponde á los Tribunales civiles y no á los Consejos provinciales el conocimiento de todas las cuestiones contenciosas que dimanen de *privilegios de invencion*. (Véase esta palabra.)

TOMO III.

R. O. de 25 enero de 1849.

Cuestiones sobre bienes nacionales.

(GOB.) «Con motivo de un expediente instruido en el Ministerio de Hacienda, se dignó acordar S. M. la Reina (Q. D. G.) por R. O. de 14 de junio último, de conformidad con el parecer del Consejo Real en pleno, entre otras cosas, «que se declare contencioso-administrativo y de la competencia de los Consejos provinciales y el Real en su caso, todo lo relativo á la validez ó nulidad de las ventas de bienes nacionales, á la interpretacion de sus cláusulas, á la designacion de la cosa enajenada, y declaracion de la persona á quien se vendió y á la ejecucion del contrato.—De Real orden etc. (1) (CL. t. 46, pág. 89.)

Ley de 11 abril de 1849.

Cuestiones sobre denuncias de minas, ó caducidad de concesiones ó adjudicacion de demasías, etc.

La ley de minería de 11 de abril de 1849 y el reglamento para su ejecucion de 31 de julio del mismo año, atribuyen expresamente á los Consejos provinciales y al Real en su caso, las reclamaciones contenciosas sobre abandono de minas, caducidad de concesiones, adjudicacion de demasías, etc., etc. Hoy véanse los arts. 86 á 93 de la *nueva ley de 6 de julio de 1859* y su reglamento, en el artículo MINAS.

Ley de 28 abril de 1849.

Cuestiones sobre subvencion de los pueblos para caminos vecinales, ó sobre direccion de los mismos.

Es sobre construccion y mejora de caminos vecinales y atribuye (art. 8.º) á los Consejos provinciales, el conocimiento de los recursos que se promuevan contra las providencias de los Gobernadores de provincia sobre designacion de la parte con que ha de contribuir cada uno de los pueblos interesados en un camino vecinal si no se hallaren conformes en este particular, ó aun cuando lo estuvieren, si se alterase despues la direccion del camino, conforme lo dispuesto en esta ley con lo prevenido en los arts. 5.º y 17 del R. D. de 7 de abril de 1848.—V. CAMINOS VECINALES.

R. O. de 17 junio de 1850.

Representacion de la Administracion económica ante los Consejos provinciales.

Se resuelve por el Ministerio de Hacienda, oido el parecer de la Direccion general de lo

(1) V. el art. 1.º de la R. O. de 20 de setiembre de 1852.

contencioso, que la defensa de los intereses de la Hacienda en los asuntos judiciales, cualquiera que sea el Tribunal en que radiquen, está encomendada á los administradores bajo la direccion del fiscal de rentas en la primera instancia, y que consiguientemente no ofrece duda que el mismo fiscal debe representar á la Administracion económica ante los Consejos provinciales. (CL. t. 50, p. 269.)

Ley de 25 agosto de 1851.

Cuestiones sobre alcances en cuentas.

Se da por esta ley nueva organizacion al Tribunal de Cuentas, y confirmando lo dispuesto en el art. 109 de la Ley municipal se atribuye á dicho Tribunal, por el párrafo 6.º del art. 16, *el conocimiento de los recursos de apelacion* que de los fallos de los Consejos provinciales interpusieren los depositarios de los Ayuntamientos y los administradores de fondos de beneficencia, en los alcances de cuentas que resultaren contra ellos.—Véase TRIBUNAL DE CUENTAS.

R. D. de 20 setiembre de 1851.

Se previene que los Tribunales no admitan demandas contra la Hacienda sin que preceda reclamacion en la vía gubernativa.—Véase DEMANDAS CONTRA EL ESTADO.

R. D. de 27 febrero de 1852.

Cuestiones sobre inteligencia, rescision, etc. de contratos para servicios públicos.

Se establecen por él las reglas para la celebracion de toda clase de contratos sobre servicios públicos, y en el art. 12 se dispone que «ningun contrato celebrado con la Administracion podrá someterse á juicio arbitral, resolviéndose cuantas cuestiones puedan suscitarse sobre su cumplimiento, inteligencia, rescision y efectos por la vía contencioso-administrativa que señalen las leyes vigentes.—V. CONTRATOS SOBRE SERVICIOS, Y OBRAS PÚBLICAS.

R. D. de 20 junio de 1852.

Cuestiones y negocios judiciales de la Hacienda.

Versa este decreto sobre el conocimiento de los negocios judiciales de Hacienda, y se insertará literalmente en su lugar (V. CONTRABANDO Y DEFRAUDACION), bastando aquí indicar que por el art. 1.º «se suprimen los Juzgados de las Subdelegaciones de rentas de la Península é islas adyacentes,» mandándose que «los negocios pendientes pasarán por su seguimiento y terminacion con arreglo á las leyes, respectivamente, á los Consejos de provincia, ó á los jueces de primera instancia á quienes corresponda, segun fuere su ca-

rácter de contencioso-administrativos ó judiciales, á cuyo fin se expedirán por el Ministerio de Hacienda las instrucciones convenientes.

En efecto, se han establecido algunas reglas para deslindar lo contencioso civil de Hacienda de lo contencioso administrativo, como se vé en la siguiente :

R. O. de 20 setiembre de 1852.

Negocios de Hacienda que corresponden á los Tribunales de justicia, y los que á los Tribunales administrativos: Arriendos y subastas de B. N. art. 1.º—Tercerías, art. 2.º—Cuestiones sobre contribuciones, arts. 3.º y 4.º—Remates ó ventas de bienes, artículo 5.º

(HAC.) «En el artículo 1.º del Real decreto de 20 de junio último sobre jurisdiccion de Hacienda se dispone que los negocios pendientes en las suprimidas Subdelegaciones de Rentas pasen para su continuacion á los Consejos de provincia ó á los jueces de primera instancia, respectivamente, segun fuere su carácter contencioso administrativo ó judicial. No determina el decreto cuáles sean los de cada una de estas clases, refiriéndose para discernirlos á las disposiciones vigentes; mas como éstas, por haberse dictado sucesivamente y en leyes diversas, pueden ofrecer dudas, se ordena en dicho artículo, para prevenirlas ó resolverlas, que por este Ministerio de mi cargo se expidan las instrucciones convenientes.

La propiedad está puesta por las leyes bajo el amparo de los Tribunales inamovibles, y no pueden corresponder por lo tanto las cuestiones que origine á los administrativos, que son por su índole amovibles y mas dependientes del poder ejecutivo.

Segun este principio, los Tribunales comunes y no los administrativos deben conocer de las demandas sobre bienes y fincas del Estado, y sobre los contratos relativos á su disfrute. Sin embargo, por razones políticas de importancia ha modificado ese principio la Ley de contabilidad de la Hacienda pública de 20 de febrero de 1850, declarando en su artículo 10 que corresponde al órden administrativo la venta y administracion de los bienes nacionales, y disponiendo en tal virtud que las contiendas que ocurrieren sobre incidencias de subastas ó de arrendamientos de bienes nacionales entre el Estado y los particulares que con él contratasen, se ventilen ante los Consejos provinciales, y el Real en su caso. De consiguiente corresponden á lo contencioso administrativo los negocios y demandas que versen sobre la validez, inteligencia y cumplimiento de las subastas y arrendamientos de bienes naciona-

les, y actos que deriven de ellas, hasta que el comprador ó adjudicatario de la finca sea puesto en pacífica posesion de ella. Mas las acciones de dominio ó cualesquiera otras que se funden en títulos anteriores ó posteriores independientes de la subasta ó arrendamiento, serán siempre de la competencia de los Tribunales ordinarios.

Por el mismo principio de garantía de la propiedad que la coloca bajo la proteccion de jueces inamovibles, se dispuso en el artículo 17 de la ley orgánica de los Consejos que estos no entendiesen en la ejecucion de sus propias sentencias cuando se hubiere al efecto de proceder por remate ó venta de bienes; pues la ejecucion de este, y la decision de las cuestiones que sobrevengan, corresponde á los Tribunales ordinarios. Entre las cuestiones sobrevinientes á que alude este artículo, se comprenden las demandas sobre tercerías de dominio ó de preferencia.

De conformidad con esta doctrina, la ley orgánica del Tribunal de Cuentas de 25 de agosto de 1851 en su art. 21 reservó el conocimiento de las tercerías á los Tribunales de justicia.

Esta misma ley orgánica del Tribunal de Cuentas ha limitado el principio establecido por la de los Consejos de que corresponde privativamente á los Tribunales inamovibles el remate y venta de bienes, sometiendo á aquellos el conocimiento de los expedientes de reintegro, por apremio, de los alcances y desfalcos contra los responsables por el manejo de los caudales públicos.

La duda mas grave que puede suscitarse con ocasion del R. D. citado de 20 de junio último, nace del tenor del párrafo 2.º del artículo 8.º de la ley orgánica de Consejos provinciales, pues sin embargo de corresponder inconcusamente á lo contencioso-administrativo las cuestiones que versen sobre agravios en el repartimiento y exaccion individual de los impuestos públicos directos cuando pasan á ser contenciosas, ese párrafo, al mismo tiempo que declara de esta clase las relativas á las cargas y derramas municipales y provinciales de toda especie, inhibe á los Consejos del conocimiento de las tocantes á las contribuciones generales, y hasta de las respectivas á las cargas municipales y provinciales, cuya cobranza vaya unida á ellas.

Esta excepcion que presenta el citado párrafo provino de que, estando recien planteado el nuevo sistema tributario, no se quiso debilitar la accion fiscal disminuyendo la jurisdiccion de las antiguas Subdelegaciones de Rentas, y se hubo de reservar para mas adelante la cuestion que acaba de resolverse

con la supresion de esos Juzgados, cuya organizacion y atribuciones, como fundadas en las antiguas instituciones administrativas y políticas, son incompatibles con las actuales. Pero ya previó el caso la misma ley orgánica, y por eso declaró por punto general en el párrafo 9.º del mismo art. 8.º, que entenderian los Consejos en todo lo contencioso de los diferentes ramos de la Administracion, para los cuales no estableciesen las leyes Juzgados especiales, y en todo aquello á que en lo sucesivo se extendiese la jurisdiccion de tales corporaciones, cuyo caso ha llegado respecto de lo contencioso-administrativo de la Hacienda pública.

Mas los deberes de la Administracion son de muy distinta naturaleza en la recaudacion de las contribuciones directas; esto es, de las que se imponen directamente á las personas en razon de su propiedad, industria ú otro concepto; y en la de las indirectas, ó sea de las que se exigen de las personas con ocasion del uso que hacen de las cosas.

En las primeras necesita la Administracion tomar las disposiciones precisas para no violar el principio de justicia distributiva que exige la proporcionalidad entre el impuesto y las fortunas privadas; disposiciones que tienen por objeto el repartimiento mas equitativo de las cargas públicas.

En las segundas no ha menester de semejantes actos preparatorios á la ejecucion de las leyes que las establecen. Sus atribuciones están reducidas á darlas un inmediato cumplimiento.

Para hacer efectivas las directas corresponde á la Administracion activa, además de la determinacion y clasificacion de la riqueza imponible, el repartimiento y exaccion individuales, y las facultades indispensables para conseguir tales fines, porque sin ellas no llegarían á veces á realizarse. En este concepto, la imposicion y exaccion de multas, los apremios y los embargos en los casos prevenidos por la ley, son otros tantos medios de que dispone para llenar sus deberes de servicio público, y en los cuales nunca podrá ser embarazada su accion.

Al repartir y cobrar estos impuestos puede suceder que se infieran agravios á los particulares, promoviéndose cuestiones entre ellos y la Administracion activa por reclamaciones dirigidas á que se les alivie ó exima de las cuotas que les fueron asignadas, ó se les repare los agravios que les hubiere ocasionado una exaccion no atemperada á las leyes.

Estas cuestiones, que de modo alguno detendrán la marcha de la Administracion ac-

tiva, serán decididas por la Administración contenciosa, esto es, por los Consejos provinciales, y el Real en su caso, que son los Tribunales competentes desde la extincion de las Subdelegaciones de Rentas.

En efecto, á tales Tribunales corresponde entender de las cuestiones contencioso-administrativas y las de que se trata lo son: primero, porque las promueve un acto de la Administración: segundo, porque este acto se pretende que ataca un derecho preexistente, cual es el del contribuyente, á que se le aplique la justicia distributiva; y tercero, porque no pertenecen á ninguna otra clase de derecho.

Si se suscitare alguna contencion de carácter civil ó penal, esto es, que versara sobre cualquiera de las que origina el derecho de propiedad, ó sobre la aplicacion de penas á delitos ó faltas previstas por el Código penal, no es necesario advertir que serán siempre de la incumbencia exclusiva de los Tribunales de justicia.

Para hacer efectivas las contribuciones indirectas, comprendidas las de aduanas, corresponde tambien á la Administración activa la inmediata aplicacion de la ley, y por tanto su exaccion y la imposicion de recargos ó multas en calidad de medios coercitivos de accion que facilitan el ejercicio de sus funciones.

Pero las reclamaciones de los particulares á que dé lugar la exaccion de estos impuestos, nunca podrán tener el carácter de contencioso-administrativas.

En efecto, semejantes reclamaciones no pueden ser motivadas por actos administrativos propiamente dichos, porque en punto á contribuciones indirectas no hay formacion de padrones: no se verifican repartimientos: el impuesto se dirige desde luego al producto: la Administración es simplemente en su cobranza el brazo de la ley.

No habiendo, pues, actos de la Administración propiamente dichos contra los que reclamar, las cuestiones no pueden versar sino acerca de la interpretacion de la ley, ó acerca de las contravenciones de que esta haya sido objeto.

En ambos casos, pues, el rigor de los principios someteria estas cuestiones á los Tribunales civiles, porque verdaderamente, ó vienen á resolverse en cuestiones de propiedad, ó en conocimiento de delitos y aplicacion de penas. Pero las circunstancias especiales del pais y la actual organizacion de los Tribunales darian motivo á que el rigor científico ocasionase tal vez males de monta que deben evitarse con prudencia.

Así que las reclamaciones de los particulares de carácter contencioso acerca de la aplicacion de las leyes que regulan los impuestos indirectos, se deciden y deberán seguir decidiéndose por la Administración activa. Tales son las que versan sobre aplicacion del arancel ó de la instruccion de aduanas, que son decididas por la Direccion general, quedando siempre de garantía á los particulares el recurso ante el Ministro de Hacienda.

En todo caso cuando mediaren delitos ó faltas previstos por el Código penal, el asunto pertenece á los Tribunales civiles, previa la autorizacion de la Administración, necesaria para encausar á los empleados que han delinquido en el desempeño de sus funciones.

En atencion, pues, á todo lo anteriormente expuesto, la Reina (Q. D. G.) de conformidad con lo expuesto por la Junta de directores generales de Hacienda, se ha dignado mandar que en la aplicacion del art. 1.º del R. D. de 20 de junio último se tengan presentes y observen las reglas siguientes:

Artículo 1.º Corresponden al conocimiento de los Consejos provinciales, y del Real en su caso, las cuestiones contenciosas relativas á la validez, inteligencia y cumplimiento de los arriendos y subastas de los bienes nacionales y actos posesorios que de ellas se deriven, hasta que el comprador ó adjudicatario sea puesto en posesion pacífica de ellos; y al de los Juzgados y Tribunales de justicia competentes las que versen sobre el dominio de los mismos bienes, y cualesquiera otros derechos que se funden en títulos anteriores y posteriores á la subasta, ó sean independientes de ella.

Art. 2.º Toca privativamente á los Juzgados y Tribunales civiles el conocimiento de las demandas de terceraía sobre dominio ó prelación, aunque recaigan sobre expedientes administrativos.

Art. 3.º Se amplía el conocimiento de los Consejos provinciales, y del Real en su caso, cuando pasen á ser contenciosas, á las reclamaciones de los contribuyentes relativas al repartimiento y exaccion individual de las contribuciones directas del Estado.

De consiguiente, respecto de la territorial deberán entender de las reclamaciones de particulares por exceso de la cuota que les fuere impuesta en los repartimientos, ó sea de agravio comparativo con relacion á los demás contribuyentes, pero en ningun caso á las que versaren sobre apreciacion de la riqueza imponible.

En cuanto al subsidio industrial y comer-

cial, serán de su competencia las reclamaciones individuales que se hagan dentro del plazo prefijado, contra las decisiones de la Administración local, ya relativamente al repartimiento ó exacción, ya á la imposición de multas en los casos de fraude ú ocultación (1).

Tocante al derecho de hipotecas, deberán los mismos Consejos conocer de las reclamaciones de los interesados contra la Administración por las multas que se les hayan exigido (2).

En todos los casos la recaudación de toda cuota asignada se llevará á efecto, sin perjuicio de las resoluciones definitivas que recaigan.

Art. 4.º La Administración activa seguirá entendiendo, como hasta ahora, de las cuestiones sobre la aplicación de las leyes que regulan los impuestos indirectos.

Art. 5.º Sin embargo de lo dispuesto en la segunda parte del art. 17 de la ley orgánica de los Consejos provinciales, los Juzgados y Tribunales del fuero común no pueden entender en el remate y subasta de los bienes que se enajenen para hacer efectivo el reintegro de las contribuciones del Estado, ó de las cargas municipales ó provinciales cuya cobranza vaya unida á ellos.»—De Real orden etc. (CL. t. 57, pág. 181.)

R. D. de 27 julio de 1853.

Cuestiones sobre expropiación forzosa.

Véase el artículo EXPROPIACIÓN FORZOSA, en que se contiene este Real decreto ó reglamento para la ejecución de la ley de 17 de julio de 1836. Los arts. 25, 26 y 27 conceden de una manera expresa el recurso contencioso-administrativo contra la decisión gubernativa que se adopte sobre la expropiación faltando á la ley ó al reglamento indicados, ó á lo prevenido sobre tasación, ó perjudicando derechos en la ocupación temporal de terrenos y en el aprovechamiento de materiales.

R. O. de 6 diciembre de 1853.

Multas hipotecarias.

(HACIENDA.) Se señala el plazo de doce días para deducir la alzada ó reclamaciones contenciosas ante los Consejos provinciales contra la aplicación de las multas hipotecarias.—V. IMPUESTO HIPOTECARIO.

(1) Véase en su lugar la R. O. de 4 de junio de 1854 que limita á 12 días el término para reclamar contra las multas.

(2) Véase también la R. O. de 6 de diciembre de 1853 sobre lo mismo que la nota anterior.

R. O. de 4 junio de 1854.

Multas por subsidio industrial.

(HAC.) Se previene entre otras cosas que las multas que se impongan por defraudación de la contribución industrial se notifiquen á los interesados haciéndolo constar en el expediente á fin de que desde la notificación se cuente el término de doce días que se concede para la alzada ó reclamación contenciosa ante el Consejo provincial, á la cual debe acompañar certificación de haber depositado en Tesorería el importe de las multas ó de haber afianzado su pago á satisfacción del administrador, pues sin este requisito no es admisible. Y que los Consejos procedan en estos asuntos con celo y actividad oyendo á los fiscales de Hacienda como está mandado. (CL. t. 62, p. 119).—V. CONTRIBUCIÓN INDUSTRIAL.

Rs. Ds. de 7 agosto de 1854.

Se suprimieron los Consejos provinciales y se atribuyó interinamente á las Diputaciones provinciales la jurisdicción contenciosa en primera instancia.—Para la segunda instancia se creó un *Tribunal contencioso-administrativo*, en sustitución del Consejo Real (CL. t. 62, págs. 209 y 211).

Rs. Ords. de 14 enero y 1.º febrero de 1856.

(Extracto.) Por la primera de dichas Rs. Ords. se acordó la creación de ocho plazas de abogados agentes especiales para representar á las partes en los negocios contenciosos de la Administración, y por la segunda se dejó sin efecto. (CL. t. 67, páginas 34 y 173.)

R. D. de 16 octubre de 1856.

(Extracto.) Se establece la legislación administrativa de 1845 y con ella los Consejos provinciales y el Consejo Real.

R. O. de 24 setiembre de 1858.

(GOB.) «La Reina (Q. D. G.) se ha servido resolver, oído el Consejo de Estado, y como aclaración al art. 44 del reglamento de 1.º de octubre de 1845, acerca del modo de proceder los Consejos provinciales:

1.º Que los pleitos que versen sobre asuntos en que esté inmediatamente interesada la Administración central, los Gobernadores encarguen su defensa á los fiscales de Hacienda y donde no los hubiere á los promotores fiscales de los Juzgados.

2.º Que cuando únicamente estén interesadas corporaciones administrativas provinciales ó municipales, se nombren los defen-

sores en sus litigios administrativos por los Gobernadores en el primer caso, y por los Ayuntamientos debidamente autorizados en el segundo abonándose los honorarios de los fondos pertenecientes á la respectiva corporacion.—De Real orden etc. (*Bol. of. de Soria, núm. 124.*)

R. D. de 20 junio de 1858.

Observ. del reglamento del Consejo Real y del derecho común en los Consejos provinciales.

Este decreto inserto en CONSEJO DE ESTADO dispone en su art. 43, que en los casos no comprendidos en el reglamento de los Consejos provinciales, observen estos cuerpos el del Consejo de Estado con las disposiciones posteriores y el derecho común. Consúltase también el art. 5.º y el R. D. de 31 de octubre de 1864.

R. O. de 25 setiembre de 1863.

Modificaciones en el reglamento sobre el modo de proceder en lo contencioso los Consejos provinciales.

(Gov.) «Aunque por el estudio que V. S. debe hacer de la ley para el gobierno y administración de las provincias, promulgada en esta fecha, echará de ver desde luego que en ella se modifican algunos artículos del reglamento sobre el modo de proceder los Consejos provinciales en los negocios contenciosos de la Administración, aprobado por R. D. de 1.º de octubre de 1845, todavía, considerando la Reina (Q. D. G.) lo importante de la materia, y de conformidad con el parecer del Consejo de Estado, se ha servido mandar que V. S. y ese Consejo provincial, sin perder de vista lo prevenido en los artículos 94, 96 y 97 de la misma ley, tenga presente:

1.º Que el art. 1.º del expresado reglamento está modificado por el 95 de la ley, en cuanto el último exige que para la decisión final de los negocios contenciosos asistan *precisamente tres consejeros*.

2.º Que debiendo ser secretario del Consejo el mismo de la Diputación provincial, con arreglo al art. 47 de aquella ley, no ha de desempeñar las funciones de tal secretario un oficial del Gobierno de la provincia, según disponía el art. 5.º del referido reglamento.

3.º Que el art. 10 de este se halla reformado por los números 4.º y 5.º del artículo 55 de la misma ley, en los cuales se dispone que los empleados que se mencionan sean nombrados y separados, ó meramente propuestos por las Diputaciones provinciales; pero que subsiste la prevención de que para

destituir á los ujieres ha de intervenir causa justa.

4.º Que cuando el Gobernador de la provincia no asista al Consejo, deberá presidirlo el consejero nombrado por el Gobierno, según lo dispuesto en el art. 66 de la ley: que á falta de Presidente, desempeñará sus funciones el mas antiguo por el orden de nombramiento; y si estos fuesen de la misma fecha, el de mas edad, considerándose en esto reformado el art. 17 del reglamento.

5.º Que las funciones atribuidas en el artículo 19 de este al Gobernador de la provincia, serán desempeñados por el consejero designado para presidir cuando aquel no asista.

6.º Que las demandas de la Administración, de los particulares ó de las corporaciones han de presentarse dentro de los plazos improrrogables señalados en el art. 93 de la ley, en la Secretaría del Consejo provincial en días y horas hábiles, debiendo el secretario poner al pié de las mismas demandas la nota de su presentación, y facilitar al interesado que lo pidiera documento bastante para acreditarlo, quedando en esto reformado el art. 23 del reglamento.

7.º Que los arts. 24 y 25 del mismo reglamento están modificados por los 93 y 94 de la ley; porque con arreglo á estos, el Consejo provincial en vista de la demanda, debe consultar al Gobernador si procede ó no la vía contenciosa, acompañando copia de la demanda misma, y aquella autoridad ha de resolver dentro de tercero día, cumpliéndose lo demás que prescribe el referido art. 94.

8.º Que el art. 42 del reglamento está igualmente reformado por el art. 90 de la ley, en cuanto este manda que la vista del pleito sea pública, sin establecer excepcion alguna, aunque las deliberaciones han de ser secretas.

9.º Que la Hacienda, los demás ramos de la Administración central, la provincia y los Ayuntamientos han de ser representados en estos juicios en la forma que prescribe el art. 92 de la ley que modifica el 44 del reglamento.

10. Que las apelaciones para ante el Consejo de Estado de los fallos de los Consejos provinciales, á excepcion de los que recaigan en las cuentas municipales, no serán admisibles en litigio, cuyo interés no llegue á 2,000 rs., en virtud de lo mandado en el artículo 98 de la ley, y no ya á consecuencia de la disposición que se cita en el art. 68 del reglamento de 1.º de octubre de 1845.

11. Que de las apelaciones que se interpongan de los fallos de los Consejos pro-

vinciales sobre las cuentas municipales, conocerá el Tribunal de Cuentas del Reino, en virtud, no solo de lo dispuesto en el art. 109 de la ley de Ayuntamientos á que se refiere el 70 del mismo reglamento, sino tambien de lo que se prescribe en el 84 de la relativa al gobierno y administracion de las provincias.

12. Finalmente, que la cita de la ley de 2 de abril de 1845 que se hace en el art. 77 del reglamento, ha de entenderse en lo sucesivo que se refiere á la promulgada en esta fecha.—De Real órden etc.—Madrid 25 de setiembre de 1863.—Vaamonde.—Sr. Gobernador de la provincia de.... (*CL. t. 90. p. 381.*)

Inst. de 1.º julio de 1864.

Es la que rije para la administracion y recaudacion de la contribucion de consumos. El art. 229 señala 15 dias para apelar ante los Consejos de las resoluciones de la Administracion en las cuestiones sobre cuotas individuales.—V. CONTRIBUCION DE CONSUMOS.

R. D. de 31 octubre de 1864.

Ampliando algunas disposiciones de otro de 20 de junio de 1858.

(PRES. DEL C. DE M.) Teniendo en consideracion las razones que me ha expuesto el Presidente de mi Consejo de Ministros, de acuerdo con el mismo Consejo, y de conformidad con lo consultado por el de Estado en pleno, sobre la conveniencia de ampliar algunas de las disposiciones contenidas en el Real decreto de 20 de junio de 1858, relativas á los procedimientos en los negocios contenciosos de la Administracion,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Los autos á que se refiere el art. 5.º del citado Real decreto deberán ser puestos en el correo dentro del plazo de 15 dias en la Península é islas adyacentes, á contar desde el dia en que principia á correr el término para la mejora.

Art. 2.º La responsabilidad de los daños y perjuicios que de resultas de la inobservancia de lo dispuesto en el artículo anterior puedan originarse al Estado ó las corporaciones que se hallan bajo su inspeccion y tutela, recaerá sobre el secretario del Consejo provincial.

Art. 3.º Los secretarios de los Consejos provinciales deberán además dar aviso directamente y por medio de oficio separado al fiscal de lo contencioso del Consejo de Estado de la remesa de autos el mismo dia en que se verifique.—Dado en Palacio á 31 de octubre de 1864.—Está rubricado de la Real ma-

no.—El Presidente del Consejo de Ministros Ramon María Narvaez. (*CL. t. 92. p. 603.*)

R. O. de 16 enero de 1866.

Declarando que las providencias de los Gobernadores que reconozcan derechos solo son revocables por la via contenciosa. Alineaciones etc.

(GOB.) El Ministro de la Gobernacion dice al Gobernador de Gerona en Real órden de esta fecha lo que sigue:

«Remitido á informe de la Seccion de Gobernacion y Fomento del Consejo de Estado el expediente instruido sobre derribo y reconstruccion de un muro ruinoso de la casa que en la calle de Munt de la villa de Palamós posee D. Jáime Vilar, ha emitido el dictámen siguiente:

«Excmo. Sr.: Esta Seccion ha examinado en virtud de R. O. de 26 de marzo último el expediente instruido sobre derribo y reedificacion de una pared de la casa que en la calle de Munt de la villa de Palamós posee D. Jáime Vilar.

Resulta del expediente que habiendo ordenado el Ayuntamiento del pueblo la demolicion de la citada pared por hallarse en estado de ruina y ofrecer inminente peligro á los transeuntes, no se conformó Vilar con esta providencia, lo cual se puso en conocimiento del Gobernador; y reconocida la pared de nuevo por el arquitecto provincial, opinó en 24 de setiembre de 1864 que debia demolerse á pesar de las obras de reparacion que estaba haciendo el propietario. Añadió el arquitecto que la resistencia de este era hija, sin duda, de suponer que si demolia la pared le obligaria el Ayuntamiento á remeterla para ensanchar la calle, que es muy estrecha en aquel sitio. Como el interesado solicitara en 27 de setiembre que se le permitiese reforzar la pared en los términos que habia propuesto un maestro alarife de la poblacion, el arquitecto provincial informó de nuevo en 10 de octubre que si bien seria de desear se demoliesen los puntos que designaba de la fachada de la calle de Munt, y aun parte de la de la calle de Molins, podria sin embargo quedar asegurada la finca solo con la reparacion que se solicitaba. Autorizada en efecto esta por el Gobernador de Gerona en 12 de octubre, el Ayuntamiento le hizo varias observaciones encaminadas á probar la conveniencia de ensanchar la calle de Munt, que por aquella parte no tiene mas que 15 palmos y tres cuartas, é impide el tránsito de carruajes; y como ni aun así obtuviera la revocacion de la mencionada providencia, la corporacion municipal en 4 de enero de 1865 acordó instruir el oportuno expediente de

expropiación forzosa por causa de utilidad pública para ensanchar la calle, caso de que no produjera efecto alguno el recurso de alzada que elevaba al propio tiempo al Ministerio de la Gobernación.

La Sección se ha enterado de estos antecedentes, que prueban una vez más la falta de conocimiento que existe del nuevo aspecto dado á las cuestiones de policía urbana por la ley de 25 de setiembre de 1863, falta que ya ha indicado á V. E. con motivo de los expedientes análogos de Barcelona que en 16 de noviembre próximo pasado devolvió informados á ese Ministerio.

Al declarar sus arts. 12 y 14 no revocables las providencias de los Gobernadores que reconozcan derechos, y al atribuir su conocimiento á los Consejos provinciales en vía contenciosa por los arts. 83 y 84, concedió á las corporaciones y á los particulares que se hallen en estos casos una garantía mucho más sólida y estimable que el recurso de alzada establecido en la R. O. de 15 de setiembre de 1859 (1).

Así, pues, el Ayuntamiento de Palamós, que indudablemente obraba en el círculo de las atribuciones que le concede la R. O. de 9 de febrero de 1863, oponiéndose á que una pared ruinosa se reedifique sin entrar en la nueva alineación de la calle, ha podido, sin recurrir á los onerosos y complicados trámites de la ley de 17 de julio de 1836, obtener la revocación de la providencia gubernativa de 12 de octubre de 1864, que considera perjudicial á los intereses de la población.

En este concepto, la Sección opina que debe devolverse este expediente al Gobernador de Gerona para que el Ayuntamiento de Palamós, si lo estima oportuno, use del derecho que le concede el art. 83 de la mencionada ley de 25 de setiembre; y sería de desear al mismo tiempo que por el Ministerio del digno cargo de V. E. se diese toda la publicidad posible á las observaciones que deja la Sección indicadas sobre ese mismo derecho última y solemnemente concedido á los que por providencias gubernativas crean lastimados sus intereses en cuestiones de esta índole y otras muchas análogas.»

Y habiéndose dignado S. M. la Reina (que Dios guarde) resolver de conformidad con lo consultado por la referida Sección de dicho alto cuerpo, de Real orden lo comunico á V. S. para su inteligencia y efectos consiguientes. Lo que del propio acuerdo, co-

municado por el expresado Sr. Ministro, trasmito á V. S. para los fines oportunos.—Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 16 de enero de 1866.—El Subsecretario, Estanislao Suarez Inclan. (*CL. t. 95, p. 24*).

R. O. de 9 febrero de 1867.

Declarando, con inserción de dos dictámenes de la Sección de lo contencioso, y del Consejo de Estado en pleno, cuándo procede la vía contenciosa contra las providencias que dicten los Gobernadores sobre materias de *policía urbana*, y sobre las demás á que se refieren los arts. 83 y 84 de la ley para el gobierno y administración de las provincias.

(Gov.) «El Sr. Ministro de la Gobernación dice con esta fecha al Gobernador de la provincia de Orense lo que sigue:

«Remitido á informe del Consejo de Estado en pleno el expediente promovido á consecuencia de queja entablada por D. José Resvié, vecino de Parderrubias, con motivo de haberse declarado improcedente la vía contencioso-administrativa contra una providencia gubernativa confirmatoria del acuerdo del Ayuntamiento de Merca, sobre derribo de un balcon construido en casa del recurrente, ha emitido dicho alto Cuerpo el siguiente dictamen;

Excmo. Sr.: Con R. O. de 20 de marzo de 1866 se remitió á informe del Consejo en pleno el adjunto expediente promovido á consecuencia de queja entablada por D. José Resvié, vecino de Parderrubias, Orense, con motivo de haberse declarado improcedente la vía contencioso-administrativa contra una providencia gubernativa confirmatoria del acuerdo del Ayuntamiento de Merca, sobre derribo de un balcon construido en casa del recurrente, con perjuicio de los vecinos é infracción de las Ordenanzas de policía urbana.

De los antecedentes resulta:

Que el párroco de Santa Eulalia de Parderrubias, denunció al Ayuntamiento el gran estorbo que ocasionaba para las procesiones y demás servicios públicos un balcon perteneciente á una casa de la propiedad de Resvié; y en efecto, instruido expediente, de que resultó que el balcon afectaba las reglas de policía urbana, acordó se recortara con sujeción á las medidas determinadas sobre el particular; acuerdo que fué confirmado por el Gobernador de la provincia, mediante á haberse acreditado que el balcon estaba construido sobre terreno comunal, y sin la competente autorización.

Notificada esta providencia al interesado, presentó demanda ante el Consejo provincial, la cual se declaró improcedente, fundándose el Gobernador en que las cuestiones de policía urbana, de cuya naturaleza era la presente,

(1) Debe ser la de 13 de setiembre de 1859, inserta en el artículo *POLICIA URBANA*.

no estaban expresamente contenidas en la ley de 2 de abril de 1845 como susceptibles de vía contenciosa, ni tampoco se indicaba en la petición de Resvié disposición alguna legislativa contra la cual se hubiere dictado la providencia de 7 de diciembre de 1862.

Hecha saber esta providencia al interesado, pidió su reposición, en cuanto por ella se denegaba la demanda interpuesta, entablando, caso de no estimarse así, el recurso de alzada ante la superioridad.

Elevado el expediente y pasado á la Sección de lo contencioso, teniendo presente:

1.º El art. 74, párrafo 5.º de la Ley de Ayuntamientos de 8 de enero de 1845, que encarga al Alcalde el cuidado de todo lo relativo á la policía urbana y rural, conforme á los reglamentos y ordenanzas municipales.

2.º El art. 81, párrafo 4.º de la misma ley, en que se faculta á los Ayuntamientos para deliberar sobre la formación y alineación de las calles, pasadizos y plazas, cuyos acuerdos son ejecutorios respecto de tales puntos.

3.º El R. D. de 17 de agosto de 1857 que organizó la Junta consultiva de policía urbana y edificios públicos.

4.º La R. O. de 3 de setiembre de 1859, según la cual, en el caso de que los particulares manifiesten oposición á los acuerdos de los Ayuntamientos sobre policía urbana, elevarán los Gobernadores con su informe los expedientes al Gobierno, para que proponga la resolución conveniente oyendo al Consejo de Estado ó á la Real Academia.

5.º La R. O. de 3 de febrero de 1863, dictando las reglas que ha de observar la Administración respecto á la construcción y reformas de edificios particulares.

6.º El art. 83 de la ley de Gobiernos de provincia de 25 de setiembre de 1863, según el cual los Consejos provinciales oirán y fallarán las cuestiones relativas á la demolición y reparación de edificios ruinosos, alineación y altura de los que se construyan de nuevo, cuando la ley ó los reglamentos del ramo declaren la vía contenciosa ó se trate de la represión de las contravenciones á los reglamentos de caminos, y otros que enumera y

Considerando que no podían ser materia de un litigio las cuestiones relativas á policía urbana y ornato público, porque el criterio de la utilidad y conveniencia pública, por el cual deben resolverse estas cuestiones, solo puede ser apreciado prudencialmente por la Administración activa: que con arreglo á dicha ley, solo procede la vía contenciosa en materia de construcciones, cuando así lo declare la ley ó reglamento, ó se trate de la re-

presión de las contravenciones á los mismos, fué de parecer debía negarse la vía contencioso-administrativa que se había intentado, sin perjuicio de la reclamación gubernativa que el interesado podía ejercitar ante el Gobierno de S. M., si viere convenirle.

Elevado al Ministerio este informe, se devolvió el expediente al Consejo manifestándose en la Real orden al principio citada, y después de hacerse cargo de las disposiciones legales contenidas en dicho informe, que en los recursos elevados al Ministerio por los propietarios de Barcelona y otros puntos contra las providencias de los Gobiernos, confirmatorias de los acuerdos de los municipios sobre derribo de las obras ejecutadas en sus prédios, se dispuso que con sujeción á la ley de 25 de setiembre de 1863 las citadas providencias causaron estado en la vía gubernativa, pudiendo los interesados hacer uso de su derecho ante el Consejo provincial, si lo estimasen oportuno, cuya doctrina no puede menos de tener aplicación al caso presente por tratarse de una infracción igual, y sobre todo, de intrusiones en la vía pública: que si, en virtud de esta doctrina sancionada por diferentes disposiciones, se niega á Resvié el derecho de alzarse contra la providencia del Gobernador en la vía gubernativa, y si de conformidad con lo que ahora se propone se le cierra también la vía contenciosa, quedaria privado de todo recurso, no obstante que la ley no puede menos de concederle facultad para utilizar uno de los dos referidos; por lo tanto, y para que pueda resolverse este asunto y los demás que ocurran con un criterio fijo, tuvo á bien disponer S. M. se remitiese este expediente, para que el Consejo en pleno emitiese su dictamen, tanto con relación al caso presente, como respecto de la interpretación y aplicación de la ley, fijando cuando dejan de causar Estado en la vía gubernativa las providencias de los Gobernadores, y cuando por el contrario pasan á ser contenciosas para que puedan juzgarlas los Consejos provinciales.

Cumpliendo, pues, el Consejo con lo ordenado por S. M., para á hacerse cargo de los puntos sobre los cuales ha de emitir su dictamen.

Respecto del primer extremo ó sea el relativo á la reclamación producida por don José Resvié, dirá el Consejo que considera tan acertadas las apreciaciones que en su dictamen consigna la Sección de lo Contencioso, que ellas por sí resuelven la duda á que debe su origen este expediente.

Para que hubiera procedido la vía conten-

ciosa contra la providencia del Gobernador, de que se alzó D. José Resvié, vecino de Parderrubias, provincia de Orense, era preciso que en las disposiciones citadas por la Sección de lo Contencioso á la sazón vigentes, se hubiese atribuido al conocimiento y fallo de los Consejos provinciales, al de la cuestión que motiva esta consulta, ó que la ley ó el reglamento sobre construcciones lo tuviese previamente declarado, ó se tratase de la represión de las contravenciones á los mismos, fuera de cuyos casos es improcedente la vía contenciosa; y como en aquellas disposiciones no se establece, ni existe ley ó reglamento que hagan la referida declaración, ni tampoco tuvo por objeto la medida del Gobernador reprimir contravenciones á disposición alguna de la índole de que se trata, es evidente que no procede dicho recurso; quedando al interesado expedito su derecho para acudir al Gobierno en demanda del que crea le asiste, según lo propuso terminantemente la Sección de lo Contencioso en su citado informe de 20 de febrero del año próximo pasado.

Respecto del segundo extremo que se consulta, explanará el Consejo la doctrina consignada en la ley como la mejor explicación que á la misma puede dar.

El art. 14 de la ley para el gobierno y administración de las provincias de 25 de setiembre de 1863, conforme en esta parte con el reformado por R. D. de 21 de octubre del año último, establece que las providencias que recaigan sobre materias que puedan ser objeto de la vía contencioso-administrativa ante los Consejos provinciales, solo serán reclamables ante estos.

Cuales sean esas materias objeto de la vía contencioso-administrativa, lo dice bien claro la misma ley en su art. 83, advirtiendo en el caso 11.º de dicho artículo, que tratándose de la demolición y reparación de edificios ruinosos, alineación y altura de los que se contruyan de nuevo, es indispensable, para que proceda el recurso contencioso, que la ley ó los reglamentos del ramo lo declaren así; por manera que para los demás casos de que trata dicho artículo, la vía contenciosa es procedente; para los de que habla el párrafo undécimo, que es precisamente el caso concreto comprendido en este expediente, es necesario que la ley ó reglamento del ramo lo tengan declarado.

Hay además otras materias que son objeto de la vía contencioso-administrativa, las cuales se hallan expresa y terminantemente consignadas en la ley y en varias disposiciones, en las cuales se atribuye á los Consejos pro-

vinciales, ó á este cuerpo, el conocimiento y fallo de las cuestiones á que las mismas se contraen; pero es preciso para ello que se haya agotado la vía gubernativa, así con la providencia del Gobernador, que causó estado, como con la del Gobierno, en su caso.

En conclusión, opina el Consejo:

1.º Que en la reclamación producida por D. José Resvié, vecino de Parderrubias, no procede la vía contencioso-administrativa según lo propuso la Sección de lo Contencioso de este Consejo: pero si le queda á salvo su derecho para alzarse por la vía gubernativa si viere convenirle.

2.º Que en las providencias que dicten los Gobernadores sobre las materias á que se refieren los arts. 83 y 84 de la ley para el gobierno y administración de las provincias, luego que causen estado procede la vía contenciosa, así como en los demás que esté declarada su procedencia por las leyes ó reglamentos.

Y habiéndose dignado S. M. conformarse con la referida consulta, de su orden la transcribo á V. S. para su conocimiento y efectos oportunos.»

Lo que del propio acuerdo, comunicado por dicho Sr. Ministro, traslado á V... para los fines que procedan en los casos de la misma especie.—Dios guarde á V... muchos años.—Madrid 9 de febrero de 1867.—El Subsecretario, Juan Valero y Soto.—Sr. Gobernador de la provincia de.... (CL. t. 97, p. 237.)

Jurisprudencia.

Además de los puntos decididos por la jurisprudencia de que hemos hecho mérito por notas en este artículo y en CONSEJO DE ESTADO, hé aquí otros que ilustran mucho tan importante asunto.

I. Multas por defraudación de la contribución industrial. Es improrogable y no se deducen los feriados el término de doce días para la vía contenciosa.

El art. 45 del R. D. de 20 de octubre de 1852, señala para acudir ante los Consejos provinciales en reclamación de los acuerdos de los Gobernadores, imponiendo multas por defraudación de la contribución industrial, el término de *doce días* contados desde la notificación á los interesados; cuyo plazo se declaró improrogable por R. O. de 4 de junio de 1854. Esto supuesto no es admisible por tardía, después de dicho plazo, la reclamación contenciosa, y así lo tiene repe-

tidamente establecido en varias sentencias la jurisprudencia del Consejo de Estado, en las cuales se declara además que *los doce dias son continuos sin deducir los feriados*. Hé aqui literalmente los considerandos de las tres sentencias.

Sentencia de 29 diciembre de 1862.

Confirma el Consejo de Estado la del Consejo provincial de Zaragoza que declaró no haber lugar á admitir la reclamacion contenciosa interpuesta por don Pedro Martin Rubio, vecino de Daroca, contra la providencia del Gobernador de Zaragoza que le condenó al pago de cierta multa como defraudador de la contribucion de subsidio:

«Considerando que notificado á Rubio el acuerdo del Gobernador de la provincia de Zaragoza el dia 20 de enero de este año, no presentó su reclamacion hasta el 4 de febrero, habiendo dejado trascurrir por consiguiente mas de los doce dias señalados, en los cuales se cuentan y deben incluirse los feriados, ya por el tenor de las disposiciones mencionadas ya tambien porque los términos señalados para el procedimiento contencioso no pueden confundirse con los que las leyes y reglamentos fijan para hacer las reclamaciones con que debe principiar.» (*Gac. 25 enero.*)

Sentencia de 1.º enero de 1863.

Confirma tambien la del Consejo provincial de Zaragoza que acordó no haber lugar á admitir la reclamacion que dedujo D. Juan Lopez, vecino de Daroca, contra una providencia del Gobernador, que le condenó á que fuese inscrito en matricula como especulador de vinos, y pagase una multa por la defraudacion á la Hacienda:

«Considerando que señalados por el artículo 43 del R. D. de 20 de octubre de 1852 doce dias para acudir á la vía contenciosa contra las resoluciones de los Gobernadores, solo podrian dejar de estimarse continuos cuando alguna disposicion legal aplicable al caso determinase lo contrario:

»Considerando que los artículos de los reglamentos de procedimiento contencioso, que excluyen de los términos y plazos los dias festivos, solo pueden tener relacion con el procedimiento mismo, que no empieza hasta que los Consejos provinciales asumen

la jurisdiccion, lo cual no puede verificarse antes de la presentacion de la demanda, y por lo mismo dichos artículos son inaplicables á un término que ha de contarse hasta ella:

»Considerando que á la fecha de la presentacion del escrito reclamando contra la resolucion gubernativa habian trascurrido con exceso los doce dias señalados para que puedan ser admitidos dichos recursos.» (*Gaceta 4 febrero.*)

Sentencia de 1.º enero de 1863.

Confirma igualmente la del referido Consejo de Zaragoza, que acordó no admitir la reclamacion deducida por D. Antonio Blasco, vecino de Daroca, contra la providencia del Gobernador que le habia condenado al pago de la cuota, y multa como defraudador de la contribucion del subsidio:

«Considerando que no hay disposicion alguna que declare deberse entender dias útiles los doce que dá de término mi Real decreto citado de 20 de octubre de 1852 para recurrir á la vía contencioso-administrativa contra las multas que imponen los Gobernadores por defraudacion de la contribucion del subsidio, y que por lo mismo es improcedente la deducccion de dias feriados que pretende el apelante, y justa la desestimacion de su demanda por tardia, acordada en el fallo apelado del Consejo provincial.» (*Gac. 5 febrero.*)

Otros casos análogos pudiéramos citar, pero son harto terminantes los tres indicados. Diremos si, respecto de la jurisprudencia que establecen, que no nos parece prudente, lamentándonos de la tirantez con que el Consejo de Estado interpreta las disposiciones citadas y las de los reglamentos de 1.º de octubre de 1845 y 30 de diciembre de 1846, bajo el supuesto de que no se trata de un término judicial, y sí del plazo establecido como improrogable para acudir á la vía contenciosa. Comprenderiamos esta tirantez respecto del plazo de *seis meses* señalado para intentar la vía contenciosa contra las resoluciones del Gobierno ó de las Direcciones generales; pero no se explica satisfactoriamente, tratándose del de *doce dias*, cuando lejos de haber disposicion terminante en que apoyar esta doctrina, está en oposicion con la con-

signada en los arts. 269 y 270 del citado reglamento de 1846, según los cuales los plazos deben entenderse de *días útiles*, no comprendiendo el de la fecha ni el de su vencimiento.

Advertiremos también y debe tenerse muy presente que los Gobernadores no pueden por sí reformar las providencias que dicten sobre el asunto, y que sobre ser inútil por lo tanto acudir de nuevo á reclamaciones gubernativas, perjudica para lo contencioso si con aquel motivo se deja pasar el tan perentorio y fatal término de los doce días, como lo tiene también declarado el Consejo de Estado, en sentencia de 26 de febrero de 1862, revocando la del Consejo provincial de la Coruña.

Sentencia de 5 abril de 1863.

II. *Desde cuándo corre para la Administración y para los particulares el término para proponer recurso contencioso-administrativo contra las Reales resoluciones.*—Con vista del art. 3.º del R. D. de 21 de mayo de 1853, en que se dispone que el recurso contencioso contra las resoluciones reales y demás de que tratan los arts. 1.º y 2.º del mismo, deberá intentarse en el plazo improrogable de seis meses contados desde el día en que se haga saber á los interesados en la forma administrativa la providencia que motiva el recurso, y que para el Estado solo correrá desde el día en que la Administración activa entienda que una providencia causó algún perjuicio, y ordene que se provoque su revocación por la vía contenciosa, *se declara improcedente la demanda propuesta por el fiscal del Consejo de Estado*, pidiendo que se dejase sin efecto una R. O. de 13 de junio de 1854 por la que se mandó proceder al pago de una suma reclamada por D. Manuel Pascual Vela, *por haberse interpuesto fuera del término improrogable de la ley*. Hé aquí los dos únicos considerandos:

«Considerando que, según lo terminantemente dispuesto en el citado Real decreto, el plazo para intentar el recurso contencioso contra la mencionada R. O. de 13 de junio de 1854 principió á correr para el Estado

desde el 18 de enero de 1855, porque entendiéndose el perjuicio evidente que aquella resolución causaba, remitió la Administración con aquella fecha á mi fiscal del Tribunal Supremo contencioso-administrativo el expediente en que se había dictado, y le ordenó que propusiera el recurso correspondiente, con arreglo á los arts. 1.º y 3.º de dicho Real decreto á fin de obtener su revocación; y que la demanda no se ha presentado hasta el 23 de mayo de 1860 en obediencia de la sobredicha Real orden de 24 de febrero del mismo año, por la cual se repitió á mi fiscal del Consejo de Estado el encargo que antes se había hecho al del Tribunal Supremo contencioso-administrativo:

»Y considerando que no se ha alegado hecho alguno que legalmente pudiera impedir el lapso del plazo fatal, puesto que á este fin no puede tenerse en cuenta el que mi fiscal del Tribunal Supremo contencioso-administrativo en 10 de setiembre de 1855, ó sea después de transcurrido el término de la ley, acudiera al Ministerio de Hacienda manifestando hallarse pronto á presentar la memoria de que habla el art. 50 del reglamento del Consejo tan luego como recibiera la orden á que este artículo se refiere, y que ya había recibido.» (*Gac. 15 mayo.*)

Además del R. D. de 21 de mayo de 1853, debe tenerse presente sobre este asunto el 14 del de 20 de junio de 1858, y también la doctrina consignada en el R. D.-S. de 7 de febrero de 1862, según la que quedan firmes é irrevocables las resoluciones ministeriales notificadas, ó de que se dan por entendidas las partes, cuando no se acude contra ellas á la vía contenciosa dentro del término expresado, sin que pueda obstar á esto otra nueva instancia en la vía gubernativa, pues aunque recaiga nueva Real orden, el término se cuenta desde la primera si lo determinado en ella es consecuencia de lo dispuesto en la anterior.

Sentencia de 19 junio de 1863.

III. *Las resoluciones gubernativas contenidas en Reales órdenes causan estado, y solo son reformables por la vía contenciosa.*—Pleito entre D. Juan Saiz de Arroyal y la Administración general sobre revocación de una Real orden referente al abono de unos recibos de su-

ministros. Dejando sin efecto por la sentencia varias Reales órdenes dictadas en el asunto con posterioridad al 20 de junio de 1858, y mandando se esté á lo resuelto en otras anteriores de 25 de octubre de 1844, 5 de junio de 1846 y 6 de mayo de 1852, se establece la doctrina que dejamos consignada en el epígrafe en su único considerando que literalmente dice:

«Considerando que desde el 20 de junio de 1858, en que se amplió á todos los Ministerios lo dispuesto con respecto al de Hacienda en el R. D. de 24 de mayo de 1853, solo pudieron reformarse por la vía contenciosa las resoluciones gubernativas que contienen las Rs. Ords. de 25 de octubre de 1844, 5 de junio de 1846 y 6 de mayo de 1852 que causaron estado.» (*Real decreto-sentencia de 19 de junio de 1863.—Gac. 25 julio.*)

Esta es tambien la doctrina contenida en el caso núm. II, siendo ambos fallos muy importantes para el juriconsulto, á fin de evitar instancias siempre costosas y dilatorias, y de poder sostener en otros la fuerza de las resoluciones gubernativas que solo son reformables por la vía contenciosa.

Sentencia de 4 abril de 1862.

IV. *Limitacion de recursos.* En los negocios cuyo conocimiento corresponde al Consejo de Estado no son procedentes mas recursos que los establecidos en su ley y reglamento, y entre ellos no se encuentra el de restitution *in integrum*, tratándose de términos fatales que no consiente tampoco la Ley de Enjuiciamiento civil. Así se establece en la sentencia citada.

Sentencia de 10 mayo de 1863.

V. *No son apelables los autos interlocutorios, y cuáles son estos.* Declarando desierta la apelacion interpuesta contra un fallo del Consejo provincial de Cádiz en pleito sobre reforma de destino practicado en ciertos terrenos, establece el Consejo de Estado con vista del art. 72 del reglamento de los Consejos provinciales la siguiente doctrina:

«Que la jurisprudencia del Consejo, apo-

yada en lo dispuesto en los arts. 33 y 35 del mismo reglamento, ha calificado constantemente como interlocutorias las providencias que no impiden ni suspenden el curso del juicio principal, como sucede en el auto dictado por el Consejo provincial de Cádiz en 5 de agosto último:

«Que por lo mismo no debió admitirse la apelacion que de él se interpuso:

«Y que no habiéndose presentado el apelante á mejorar el recurso, dando lugar á que se le acusara la rebeldia ha quedado firme aquel auto.» (*Gac. 3 junio.*)

Sentencia de 18 marzo de 1864.

VI. *Segun el art. 101 del reglamento de lo contencioso de 30 de diciembre de 1846, no compareciendo un litigante en virtud de emplazamiento, ó no contestando á la demanda en el término señalado, será sentenciado el proceso en rebeldia si la acusase su adversario; siendo absuelto el demandado, si el contumaz fuese el actor, en virtud de lo dispuesto en el 103 del mismo.*—La anterior resolucio n ha recaído en el recurso ante el Consejo de Estado entablado por doña Maria de la Concepcion Berger y Rivero, viuda de D. Francisco Gonzalez Mendez, director que fué de la seccion de primera clase del Cuerpo de telégrafos contra la Administracion general del Estado.

Iguales resoluciones han recaído en otras muchas sentencias entre otras en las de 2 de enero y 25 de febrero de 1864, 29 de diciembre de 1863 etc. insertas en las Gacetas de 7 y 9 de marzo 12 y 13 de abril de 1864.

Sentencia de 6 noviembre de 1863.

VII. *El término para mejorar la apelacion de una sentencia es el de dos meses, contados desde el trascurso de los 10 dias que hay para interponerla (artículos 252 y 254 del reg.); y no haciéndolo dentro de él, acusada una rebeldia, se declara desierta la apelacion y consentida la sentencia apelada.*—Interpuesta demanda ante el Consejo provincial de Navarra por D. Manuel Orive contra la empresa del ferro-carril de Zaragoza á Alsásua; con la pretension de que condenase á esta á que le abonase los daños

y perjuicios que le habia ocasionado en su fábrica é industria con la ocupacion de parte de ella y estado inservible en que quedaba el resto, entregándole por tal concepto la cantidad de 4.840 duros con deducción de lo que tenia recibido, y sustanciados por sus trámites, se dictó sentencia por dicho Consejo; declarándose incompetente para fallar, é inhibiéndose de su conocimiento, reservando á las partes su derecho etc. Pedida reposicion de ella por Orive, y negada, se interpuso apelacion que fué admitida, y acusada rebeldía por la empresa, que estimó la Seccion de lo contencioso del Consejo de Estado en 23 de junio último, este confirmó la sentencia del provincial con vista del art. 232 del reglamento de 30 de diciembre de 1846, que fija dos meses para mejorar la apelacion, contados desde los 10 dias concedidos para interponerla, y el 254 del mismo, que si no se mejorase el recurso en dicho término, se declarará desierta la apelacion y la sentencia consentida á la primera rebeldía que le acuse el apelado.

«Considerando que admitida la apelacion en 10 de abril último y notificada la providencia en el mismo dia á la parte que la interpuso, no se mejoró aquel recurso, ni se ha hecho ninguna otra gestion en los términos señalados, dándose lugar á que se acusara la rebeldía y se tuviera por acusada en 23 de junio:

Conformándome con lo consultado por la Sala de lo contencioso del Consejo de Estado etc., vengo en declarar desierta la apelacion interpuesta á nombre de D. Manuel Orive, y firme y ejecutoria la sentencia del Consejo provincial de Navarra de 31 de marzo de este año.» (*Gac. 13 diciembre.*)

Son infinitas las resoluciones dictadas en este mismo sentido, y citaremos entre ellas las de 19 de noviembre y 3 de diciembre de 1863 (*Gacetas* 23 y 25 diciembre) 4 de abril de 1864 (*Gaceta* 3 junio); 22, 26 de febrero, 5 de abril, 18 de junio, 21 y 26 de setiembre de 1865 25 de enero de 1867 y otras de que hacemos mérito en la nota de la pág. 337.

Pero hay mas. Si cuando el apelante no mejora la apelacion en el término de dos meses (en la Península) procede á

la primera rebeldía declarar aquella desierta y consentida la sentencia, no subsistiendo ya la apelacion es tambien *insostenible la adhesion* de la otra parte, careciendo de jurisdiccion el Consejo para entrar en el exámen del pleito y para averiguar la competencia con que obró el Consejo provincial y la legalidad del procedimiento. Tal es la doctrina que se consigna en el R. D.-S. de 21 de junio de 1866, dictado en pleito seguido en primera instancia ante el Consejo provincial de Palencia, entre D. Ignacio Linazasoro y el Ayuntamiento de la Viz de Ojeda sobre arrendamiento de un molino y pago de sus rentas. (*Gac. 14 setiembre.*) Véase tambien el caso XXV y la advertencia que en él hacemos que consideramos importante.

Sentencia de 13 de marzo de 1863.

VIII. *No pueden combatirse ante la Administracion contenciosa las medidas de policia sobre la altura de un edificio.* Habiendo sido autorizado D. B. Mata por el Ayuntamiento de Madrid, para reedificar una casa con sujecion á las reglas consignadas por el arquitecto, y entre ellas que podia considerarse para altura de toda ella la de 72 pies, se acudió á dicho Ayuntamiento por D. D. Argumosa, pidiendo la reduccion de dicha altura que Mata daba á su casa. El Ayuntamiento; oyendo á la Academia de Nobles Artes de San Fernando, desestimó la solicitud, y despues de varias incidencias se remitió el expediente al Ministerio de la Gobernacion, que por Real orden de 3 de diciembre de 1857, de conformidad con el dictámen de la Junta consultiva de policia urbana y de edificios públicos, declaró que las reclamaciones de Argumosa no podian tener acogida en la vía administrativa; que tampoco podian producir resultado en la forma adoptada si se consideraban encaminadas á una declaracion de responsabilidad, y que el recurrente podia insistir en unas y otras con el derecho que le asistiera por medios distintos de los hasta entonces adoptados.

Propuso Argumosa demanda ante el Consejo provincial de Madrid, con la

pretensión de que se declarase ilegal y abusiva la altura dada á la casa de don Baltasar Mata, calle de San Juan, números 2, 4 y 6, y se obligase al referido Mata á que redujese y rebajase la elevación dada á la misma, ó en otro caso se le condenase á indemnizar á Argumosa de los perjuicios que segun tasacion pericial hubiese recibido la casa de su propiedad.

El Consejo provincial, apartándose de lo pretendido por el demandado y defensor de la Administracion nombrado por el Gobernador, dictó auto definitivo en 28 de diciembre de 1860, *declarándose incompetente para el conocimiento y decision de esta demanda*; y apelado, se confirma por el de Estado el fallo inhibitorio estableciendo el único considerando, la siguiente doctrina:

«Que ejecutada una obra, como la que es objeto de este pleito, con sujecion á las condiciones de la licencia para ella otorgada por la Administracion activa, no puede combatirse ante la contenciosa, quedando solo al tercero ó terceros que puedan resultar perjudicados por ella la reclamacion de estos perjuicios contra el dueño ante los tribunales competentes de justicia como cosa de interés puramente privado. (Gac. 30 abril.) (V. tambien el número X.)

Sentencia de 24 marzo de 1866.

IX. *En los pleitos de mayor cuantía, ó de cuantía inapreciable, no puede admitirse ni sustanciarse el recurso de nulidad, si no se ha interpuesto conjuntamente, ó á la par, el de apelacion.*—El presbitero D. José Jove, cura párroco de Santa Maria de Bayo, acudió en agosto de 1864 al Gobernador de Oviedo, solicitando se le concediera el arrendamiento que siempre tuvieron sus antecesores de la tierra llamada de Las Traviesas, en la cual se habia intrusado D. Ramon Martinez desde el fallecimiento del último arrendador. El Gobernador, previo informe que pidió á la Administracion principal de propiedades y derechos del Estado, y á pesar de la oposicion de Martinez, accedió á la peticion de Jove en providencia de 24 de noviembre de 1864. Notificado Martinez presentó una

despues de otra diferentes exposiciones al Gobernador, sin otro resultado que el de que el Gobernador sostuviera su providencia por otra de 6 de marzo de 1865; y en 3 de abril acudió de nuevo Martinez, pidiendo al Gobernador la remision de los antecedentes al Consejo provincial, para que este decidiera en juicio contencioso-administrativo, como decidió en efecto, seguido el pleito por todos sus trámites, declarando sin efecto la interposicion de la demanda por no haberse presentado en tiempo, Martinez interpuso recurso de nulidad, y admitido, á consulta del Consejo de Estado, y en vista del art. 75 del reglamento de Consejos provinciales, declara no haber lugar al recurso.

«Considerando que la importancia de este negocio es inapreciable por tratarse en él del derecho preferente al arriendo de ciertas tierras, y que en tal concepto debe calificarse de mayor cuantía:

Considerando que en los pleitos de esta clase no puede ejercitarse el recurso de nulidad, sin que á la vez se interponga tambien el de apelacion, segun lo prescrito en el artículo 75 del reglamento de los Consejos provinciales:

Y considerando, por consecuencia, que por el hecho de haberse prescindido de tan terminante disposicion utilizando únicamente el recurso de nulidad, no debió este admitirse por el Consejo provincial, ni puede tampoco progresar.» (Gac. 29 abril.)

Sentencia de 24 marzo de 1866.

X. *Las demandas ante los Consejos provinciales deben proponerse en el término improrogable de 30 dias desde que se hizo la notificacion administrativa de la providencia que cause estado; y no debe dejarse pasar ni aun á pretexto de reclamar de nuevo en la vía gubernativa.*—Pleito seguido en el Consejo de Estado por D. Bartolomé Bosch y Pazzi con el Ayuntamiento de Sarriá, sobre revocacion de un acuerdo de dicho Ayuntamiento. Bosch, poseia en el pueblo de San Vicente de Sarriá y su calle de Barcelona, una casa esquina á la de la Cruz, y en esta, otra casa enfrente de aquella con la que se comunicaba por debajo de la calle por una cueva subterránea, y

el Ayuntamiento le mandó destruir y rellenar la cueva. Bosch reclamó de esta providencia al Gobernador de Barcelona, el cual la confirmó en 2 de octubre de 1863, siendo notificado el interesado en 11 del mismo mes. Bosch acudió de nuevo al Gobernador pidiendo se le permitiera justificar su derecho, y como en 11 de diciembre resolvió aquella autoridad mantener lo dispuesto en 2 de octubre, propuso en 8 de enero su demanda ante el Consejo provincial, á la que se opuso el Ayuntamiento pidiendo la absolución de la demanda, y así se estimó por la definitiva. El demandante apeló, y con audiencia del fiscal de S. M. en nombre del Ayuntamiento que pretendió la confirmación de la sentencia, el Consejo de Estado por la suya de 24 de marzo, la confirma en su parte resolutive (1):

«Considerando que la resolución gubernativa de 11 de diciembre, contra la cual se entabló la demanda, estuvo reducida á confirmar la de 2 de octubre, que quedó ejecutoriada por no haberse interpuesto contra ella el recurso legal en tiempo:

Considerando, por lo mismo, que la citada resolución gubernativa de 11 de diciembre no podría ser revocada ó confirmada sin que lo fuese la anterior de 2 de octubre, para lo cual no hay términos hábiles, porque, como queda expuesto, está legalmente consentida (2).» (Gac. 25 abril.)

Sentencia de 13 abril de 1866.

XI. Las medidas de policía urbana cuando no quebrantan ordenanza, ni reglamento establecido, ni ofenden un derecho perfecto, son irreclamables en la vía contenciosa; teniendo expedito su derecho el ofendido para usar de él

(1) No resulta de los vistos y considerandos de este Real decreto-sentencia que se exceptuase por el Ayuntamiento en primera instancia ni por el Fiscal de S. M. en el Consejo de Estado, lo que ha servido de fundamento al fallo, y creemos que debiera establecerse respecto de este particular la misma jurisprudencia que rige en los asuntos civiles: *que el fallo se arregle á lo que ha sido objeto de discusion en el pleito.*

(2) Ni en los vistos ni en los considerandos se cita el art. 93 de la ley de 25 de setiembre de 1863 en que sin duda alguna se funda esta doctrina.

ante el superior correspondiente.—Pleito seguido en el Consejo de Estado por Doña María Grau con el Ayuntamiento de Plá de Cabra, provincia de Tarragona, sobre revocación de una sentencia del Consejo provincial, recaída á su reclamación de apertura de una calle que hubo junto á una casa de su propiedad. Esta calle empezaba en la Mayor y salía afuera del pueblo; en ella no tenían puerta mas que la expresada Grau y el vecino de la otra esquina: su salida se tapió para seguridad del pueblo durante la guerra civil y en su entrada se colocó una puerta por el dicho vecino, que ensanchó su huerto sobre terreno de la calle cerrada. El Ayuntamiento consideró el asunto de interés privado, y que por lo mismo no era de su competencia; el Gobernador acordó este mismo; y el Consejo provincial de Tarragona, al que acudió Doña María Grau, declaró el asunto de competencia de la Administración, condenando al Ayuntamiento, que apeló; y por R. D. de 13 de abril, á consulta del Consejo de Estado, y en vista de la ley de Ayuntamientos de 8 de enero de 1845, y las de 2 de abril del mismo año, y 25 de setiembre de 1863 sobre atribuciones de los Consejos provinciales, se declara nulo todo lo actuado por incompetencia de jurisdicción:

«Considerando que el cerramiento del terreno llamado de las Voltas, con aquiescencia por muchos años del Ayuntamiento, y aun con su consentimiento por conveniencia pública segun ha manifestado, tiene el carácter de medida de policía urbana de las que están dentro de sus atribuciones, y son irreclamables en la vía contenciosa cuando no quebrantan ordenanza ni reglamento establecido, y cuando no ofenden un derecho perfecto como en el presente caso, pues Doña María Grau, segun su propia confesión, tiene una llave de la puerta que cierra dicho terreno para comunicarse con la vía pública:

Considerando, además, que el derecho de reclamar la usurpación que se supone hecha al vecindario del terreno cerrado es de la exclusiva atribución del Ayuntamiento, representado por el Alcalde; compitiendo cuando mas á Doña María Grau, como á cualquier vecino, excitar al mismo Alcalde para que reclamase contra dicha usurpación, y por su omisión ó negativa recurrir en queja al su-

perior inmediato, y en su caso al Ministro:

Considerando, en consecuencia, que la vía contenciosa fué improcedente, tanto por razón de la materia como por la persona que la entablaba.» (*Gac.* 25 mayo.)

Decision de 26 abril de 1866.

XII. *No es procedente el curso de las demandas presentadas fuera de tiempo.*

—Real orden dictada de conformidad con lo consultado por la Sección de lo contencioso del Consejo de Estado, declarando improcedente una demanda presentada ante el mismo Consejo por don Isidro Autran, pidiendo la revocación de una Real orden sobre su clasificación ó jubilación.

«Considerando que por no versar la reclamación actual sobre asunto en que esté señalado un término especial para acudir á la vía contenciosa, debe sujetarse á la regla general en la materia que establece el artículo 3.º del R. D. de 21 de mayo de 1853; y que desde la fecha en que fué instruido el interesado de la Real orden contra la que recurre ha trascurrido con mucho exceso el plazo concedido por el citado art. 3.º para reclamar en la vía contenciosa contra una resolución del Gobierno.» (*Gac.* 17 mayo.)

Sentencia de 16 agosto de 1866.

XIII. *La licencia para demandar de injuria ó calumnia por hechos imputados en juicio es puramente discrecional sin ulterior recurso; y en tal concepto deben limitarse á concederla ó negarla sencillamente y sin fundarse en consideraciones que agraven la imputación.*

—D. Antonio Luis Cirilo Lacambre, médico-cirujano, de nación francés, en un recurso contencioso-administrativo sobre rebaja de la cuota de la contribución industrial, solicitó para querrellarse de injuria y calumnia la licencia que previene el art. 390 del Código penal, mediante haber expresado la sindicatura del gremio, en un escrito, que no se tenía gran confianza en el título con que Lacambre ejercía la profesión. En su fallo definitivo, el Consejo provincial, después de revocar la providencia gubernativa que dió ocasión al pleito, declaró no haber lugar á la licencia por el motivo que se expresa en uno de sus consi-

derandos de que Lacambre no había cumplido con la presentación del título facultativo, acordada en el auto para mejor proveer, ni presentado prueba alguna que aclarase la razón de las alteraciones y multiplicidad de nombres con que aparecía matriculado, quedando por tanto sin desvanecer las dudas que durante el curso de los autos se manifestaron acerca de los expresados título y nombres.

Interpuesta apelación por parte de Lacambre contra la precitada sentencia, en cuanto por ella se denegó la licencia para la querrela criminal, recae sentencia, á consulta del Consejo de Estado en estos términos:

«Considerando que la facultad concedida á los jueces y Tribunales para otorgar ó no licencia para demandar de injuria ó calumnia por hechos imputados en juicio, es puramente discrecional, y como tal, de la exclusiva competencia del juez ó Tribunal que entienda en el asunto, sin ulterior recurso:

Considerando que por esta razón el Consejo provincial de Valencia ha debido limitarse á concederla ó negarla sencillamente, sin fundarse en consideraciones que diesen peso á la aseveración que el apelante estimó calumniosa, porque esto equivale á confirmarla con su autoridad, sin jurisdicción para ello, y sin la defensa que en tal caso debiera ser permitida al que se cree ofendido, por medio del correspondiente juicio;

Conformándose con lo consultado por la Sala de lo Contencioso del Consejo de Estado etc., vengo en resolver que se tengan como no escritas las razones en que el Consejo provincial de Valencia se fundó para negar á D. Antonio Luis Lacambre la licencia para demandar de calumnia, y que no há lugar á proveer acerca de la parte resolutive á que se ha contraído la apelación.» (*Gac.* 2 octubre.)

Sentencia de 11 enero de 1867.

XIV. *Término para la reclamación contenciosa.*—El término de 30 días que prescribe el art. 33 de la ley de 25 de setiembre de 1863 para acudir á la vía contenciosa contra las providencias de los Gobernadores, debe contarse respecto de los particulares y corporaciones desde el día siguiente al de la notificación administrativa de la providencia reclamable; y según la jurisprudencia

del Consejo de Estado, cuando la demanda ha sido propuesta fuera de término, como que habia prescrito la accion para acudir á la via contenciosa, esta cuestion debe tratarse y resolverse en cualquier estado del litigio, y por mas que las partes no la hayan agitado oportunamente. (R. D.-S. de 11 de enero de 1867, declarando nulo todo lo actuado por el Consejo provincial de Barcelona y dejando en su fuerza y vigor la providencia gubernativa sobre demolicion de la fachada de una casa que D. Francisco Piella habia edificado sin permiso del municipio.)

Sentencia de 14 enero de 1867.

XV. *Recursos en cuestiones sobre expropiacion.*—Contra las providencias de los Gobernadores de provincia dictadas en cuestiones que se suscitaren sobre el valor mayor ó menor de los bienes sometidos á la expropiacion se da el recurso de alzada ante el Ministro del ramo como superior inmediato de la Administracion activa, y de ninguna manera la via contenciosa ante el Consejo de la provincia que solo procederá en dicho caso contra la providencia del Ministro ante el Consejo de Estado segun la ley de 17 de julio de 1836 y reglamento de 27 de julio de 1853. (R. D.-S. de 14 de enero de 1867 declarando nulo y de ningun valor todo lo actuado ante el Consejo provincial de Lérida en pleito sobre revocacion de una providencia del Gobernador de 22 de enero de 1865 que aprobó la tasacion de ciertos terrenos expropiados por causa de utilidad pública.)

Sentencia de 7 febrero de 1867.

XVI. *Mas sobre expropiaciones: Peritos.*—Cuando nombrando perito en discordia para la tasacion de fincas objeto de la expropiacion, ni las partes le recusan, ni alegan despues en la via gubernativa agravios por error en las apreciaciones, no es procedente la reclamacion en la via contenciosa. (R. D.-S. de 7 de febrero de 1867 dictado con vista del art. 7 de la ley de 17 de julio de 1836 y 9.º del R. D. de 27 de julio de

1853, absolviendo á la Administracion de la demanda propuesta á nombre de la compañía del ferro-carril de Tudela á Bilbao.)

Sentencia de 30 julio de 1867.

XVII. *Lo que significa la absolucion de la demanda.*—La sentencia que expresa y únicamente contiene la *absolucion de la demanda* no es posible que ofrezca contrariedad ú oposicion en sus términos; ni que omita decidir sobre nada de lo que se haya pedido en aquella; porque la absolucion lo comprende todo, cuando es explícita y sin reserva, sin que decida sobre lo que no se haya pedido, porque la sentencia no puede en tal caso hacerse extensiva á otros puntos ó extremos que los que la demanda contiene. (R. D.-S. de 30 de julio de 1867, desestimando un recurso de revision con vista del art. 228 del reglamento de lo contencioso.)

Sentencia de 16 enero de 1867.

XVIII. *Ejecucion de fallos de los Tribunales contencioso-administrativos.*—A la Administracion activa compete la ejecucion de los fallos dictados por los Tribunales contencioso-administrativos, con arreglo al art. 17 de la ley de 2 de abril de 1845 y al 96 de la de 25 de setiembre de 1863, y es nulo todo lo que con dicho objeto se actúe ante los Consejos provinciales. (R. D.-S. de 16 de enero de 1867 declarando nulo lo actuado ante el Consejo provincial de Badajoz para la ejecucion de un Real decreto-sentencia sobre pago de cantidades procedentes del contrato de construccion de una Casa Consistorial.

Sentencia de 25 enero de 1867.

XIX. *Las Reales órdenes solo son revocables por la via contenciosa.*—Cuando por una Real orden se resuelven y determinan obligaciones reciprocas entre el Estado y un particular, aquella resolucion causa estado y no puede revocarse sino por la via contenciosa, conforme al art. 1.º del Real decreto de 21 de mayo de 1853 extensivo á todos los Ministerios segun el de 20 de junio de

1858. (R. D. S. de 25 de enero de 1867, dejando sin efecto una Real orden impugnada por el fiscal del Consejo como contraria á otra anterior en que se establecia cierta responsabilidad á cargo de un contratista por falta de cumplimiento del contrato.)

Sentencia de 25 junio de 1865.

XX. *Via gubernativa.*—No puede recaer resolucion en la via contenciosa sobre pretensiones que no han sido examinadas ni decididas en la gubernativa. (R. D.-S. de 25 de junio de 1865.)

Sentencia de 30 junio de 1867.

XXI. *Cuestiones en segunda instancia.*—Negada por el Consejo provincial la admision del recurso de nulidad interpuesto por la parte y no habiendo reclamado oportunamente contra esta negativa, no es posible tomarlo en consideracion en la segunda instancia. (Real decreto-sentencia de 30 de junio de 1867 en pleito entre la compañía del ferro-carril del Norte y D. Pablo Cayetano Gippire.)

No puede ser objeto de resolucion en la segunda instancia la parte de sentencia sobre que no recae la mejora de apelacion ni es del interés de los litigantes. (R. D.-S. de 21 de mayo de 1865 en pleito promovido por vecinos de Valderrobles.)

Sentencia de 14 enero de 1867.

XXII. *Las cuestiones jurisdiccionales se pueden debatir en cualquier trámite.*—Segun la jurisprudencia del Consejo de Estado, las cuestiones que afectan á la jurisdiccion deben tratarse y resolverse con preferencia, sea cualquiera el estado del pleito, y por mas que no las hubiesen iniciado los interesados. (R. D.-S. de 14 de enero de 1867, declarando nulo lo actuado en pleito sobre mas ó menos valor de lo expropiado por causa de utilidad pública.

Cuando un Consejo provincial conoce que es incompetente puede declarar esta incompetencia sin excitacion de parte y sin mas trámites. (R. D.-S. de 30 de noviembre de 1864.

Sentencia de 21 de mayo de 1866.

XXIII. *Cuando se dejan pasar los dos meses que contados desde la notificacion concede el art. 1.º del R. D. de 28 de diciembre de 1849, para reclamar por la via contenciosa contra las resoluciones del Ministerio de Hacienda en vista de las clasificaciones hechas por la Junta de clases pasivas, no es admisible la demanda.*—Esta es la doctrina que se consigna en este fallo absolviendo á la Administracion de una demanda de D. Pedro Ceballos sobre abono de haberes atrasados, la cual debe tenerse muy en cuenta; pues no rige aquí ni en otros casos especiales el término de los seis meses que señalan por regla general para estas reclamaciones el R. D. de 21 de mayo de 1853 y el art. 14 del de 20 de junio de 1858.

Sentencia de 1.º agosto de 1866.

XXIV. *Las providencias que lejos de concretarse á resolver un expediente tienen el carácter de medidas generales, no son reclamables por la via contenciosa. Cuestion sobre expropiacion forzosa: ensanche de las poblaciones.*—Demanda en el Consejo de Estado á nombre del Ayuntamiento de Barcelona, solicitando la revocacion de una Real orden comunicada á dicho Ayuntamiento por la que dejando sin efecto ciertas reglas de indemnizacion á los dueños de terrenos expropiados para el ensanche de la poblacion, se reintegró á D. Manuel Giber en la posesion de los que se le habian ocupado con dicho motivo interin no se cumpliera con todos los requisitos que la ley ordenaba y tuviera lugar una indemnizacion previa y cumplida. Oida la Seccion de lo contencioso se declara que no es admisible la demanda con vista del R. D. de 17 de julio de 1836 y el reglamento para su ejecucion de 27 del mismo mes y año de 1853, del art. 56 de la ley orgánica del Consejo de Estado de 17 de agosto de 1860 y de la ley de 29 de junio de 1864 en que se dictan las reglas que han de observarse para el ensanche de las poblaciones:

«Considerando que las providencias del Gobernador de Barcelona, derogadas por R. O. de 7 de noviembre de 1864, por su carácter y trascendencia de medidas generales no podían ser objeto de la vía contenciosa, ni reclamables ante otra autoridad que la superior jerárquica en el orden gubernativo; y que limitada la resolución de esta á dejarlas sin efecto y á recomendar la observancia de las leyes, no es procedente tampoco el recurso establecido para cuando se ofende un derecho privado ó se infringe un reglamento.» (*Gac. 19 de agosto.*)

Sentencia de 25 noviembre de 1867.

XXV. *Aunque el apelante se muestre parte ante el Consejo de Estado, si en el escrito no ha pedido al menos la revocacion de la sentencia apelada y pasados los dos meses prevenidos por el art. 252 del reglamento de lo contencioso, se le acusa la rebeldia, sin haber alegado de agravios, debe declararse desierto el recurso.*—Se declara desierto el recurso de apelacion interpuesto por el Ayuntamiento de Bejar, vistos los arts. 252 y 254 del reglamento de 30 de diciembre 1846, y se establece la doctrina del epígrafe en los términos siguientes:

«Considerando que el escrito en que el representante del Ayuntamiento de Bejar se muestra parte ante el Consejo de Estado no puede estimarse como demanda de agravios, porque para merecer esta calificacion, segun la jurisprudencia establecida, es menester al menos que se pida la revocacion de la sentencia impugnada, lo cual no se realiza en aquel escrito:

Considerando bajo tal concepto que desde el dia 6 de marzo último, en que se notificó dicha sentencia, hasta el dia 22 de mayo, en que por segunda vez la parte de D. Isidro Crego acusó la rebeldia al Ayuntamiento, no mejoró letrado de esta corporacion el recurso deducido, y que acusada la rebeldia por el apelado es inevitable declarar desierta la apelacion:

Conformándome con lo consultado por la Sala de lo Contencioso del Consejo de Estado, etc. Vengo en declarar desierto el recurso de apelacion intentado por el Ayuntamiento de Béjar, y consentida y pasada en autoridad de cosa juzgada la sentencia que en estos autos pronunció el Consejo provincial de Salamanca.» (*Gac. 21 enero.*)

A fin de que por involuntario tras-

curso de los dos meses no sean estériles los gastos y sacrificios de los interesados en estos litigios, aconsejaremos á los letrados de provincias que enteren á sus clientes cuando apelen, de lo que dispone el art. 252 del reglamento de lo contencioso, para que no dilaten el dar instrucciones. Los letrados de Madrid, á su vez, para evitar el inconveniente ocurrido en el pleito indicado arriba, convendrá cuando cuenten con pocos dias para mejorar la apelacion y teman los efectos de la acusacion de rebeldia, que al personarse, en vez de concretarse á pedir que se pongan de manifiesto los autos, soliciten desde luego la revocacion del fallo apelado ó lo que sea procedente, alegando aunque sea muy brevemente los agravios inferidos por el referido fallo.

Contencioso-Administrativo.

En el artículo ACTOS ADMINISTRATIVOS, hemos dicho que sin acto administrativo no es procedente en ningun caso la accion contencioso-administrativa, y que es además preciso que el acto vulnere un derecho preesistente. De esta doctrina apoyada en decisiones ó fallos del Consejo Real y de Estado se deduce con toda claridad que la *Administracion contenciosa es el poder ó jurisdiccion que se ejerce por los tribunales administrativos oyendo y decidiendo las cuestiones que nacen de las providencias ó resoluciones tomadas por la Administracion activa en materias de su competencia, cuando ofenden derechos particulares.*

I. Fundamento de la jurisdiccion contencioso-administrativa.

Macarel, discuriendo sobre la jurisdiccion contencioso-administrativa, dice que la decision de las contestaciones administrativas pertenece á la Administracion, porque la autoridad judicial no podria apereibir ó apreciar con exactitud las razones de estado y de interés público que pueden con frecuencia dominar en tales negocios: que la justicia administrativa necesita cierta latitud en la instruccion y mas rapidez en la ac-

cion y en la ejecucion, lo cual no podría conseguirse sin una jurisdiccion especial que solo puede colocarse en el seno de la misma Administracion, que conociendo mejor los motivos porque han obrado sus agentes y las causas que han determinado sus actos se encuentran en disposicion de poner en balanza el interés público y el privado y de hacer que prevalezcan en caso de necesidad la equidad y el interés social que en definitiva es el interés de todos; y de aquí deduce que es indispensable reconocer en la Administracion el derecho de resolver sobre los litigios á que pueden dar lugar los actos que ella ejecuta en su cualidad de autoridad pública.

Ya sabemos lo que es Administracion contenciosa, y cuáles son, segun Macarel, los fundamentos de esta jurisdiccion. Tambien conocemos las leyes orgánicas de los Consejos provinciales y del Real, los reglamentos sobre el modo de proceder en los negocios contenciosos de la Administracion, varias disposiciones aclaratorias y algunas muy importantes que es necesario consultar para comprender mejor la índole de la jurisdiccion contenciosa y los negocios que son de su competencia.

No descenderemos ahora á extensas explicaciones que ni entran en nuestro plan, ni caben dentro de los estrechos límites de esta obra, ni las hace necesarias el esmero con que recopilamos la parte legislativa de cada artículo. Seria entonces interminable el DICCIONARIO y su notoria utilidad desaparecia entre el inmenso fárrago de indigestas repeticiones é inútiles comentarios sobre lo que es precepto claro y terminante de las leyes. Bástenos, pues, ayudar á su estudio y facilitar su aplicacion por medio de simples indicaciones, que en este artículo reduciremos á hacer conocer la organizacion de los Consejos, las diferencias entre los asuntos judiciales y los contencioso-administrativos y el procedimiento que es propio de estos.

II. Negocios que corresponden á la Administracion: Administracion activa: Idem contenciosa.

Llámanse negocios administrativos los

que pertenecen á alguno de los ramos de la Administracion pública. Estos no pueden promoverse en virtud de accion civil, ni lo que en ellos se trata ó controvierte es sobre propiedad ó dominio.

Los negocios administrativos unas veces son exclusivos de la Administracion activa y otras pueden dar lugar á reclamacion contenciosa, segun vamos á ver.

Por regla general todos los actos de la Administracion activa dan lugar á reclamacion contenciosa cuando recaen en expedientes particulares y ofenden algun *derecho* privado; no cuando son medidas generales que tienen por objeto la observancia de las leyes constitutivas y orgánicas, ó la seguridad pública, ó el fomento de algun ramo colectivo; ni las cuestiones sobre la aplicacion de las leyes que regulan los impuestos indirectos. Es de todos modos indispensable, segun hemos dicho en el artículo ACTOS ADMINISTRATIVOS, que el acto de la Administracion, para que pueda elevarse á la esfera contenciosa irroque algun perjuicio, y no precisamente al interés privado sino á *derechos privados preexistentes* (1).

(1) Habiendo prohibido el Gobernador de Barcelona á unos fabricantes de aguardiente que arrojasen las heces desde sus fabricas á la riera pública, se produjo por los referidos fabricantes demanda contenciosa para que se les permitiese continuar vertiendo las heces como venian haciéndolo durante muchos años. Fallada favorablemente por el Consejo provincial, y apelada por la Administracion civil, el Consejo Real vino en su sentencia á declarar la nulidad de lo actuado por incompetencia de la jurisdiccion contencioso-administrativa, fundándose: 1.º en que segun los arts. 74 y 80 de la ley de Ayuntamientos, 4.º de la de Gobiernos de provincia, y 8.º de la de Consejos provinciales, corresponde á la Administracion activa dictar providencias ejecutorias sobre todo lo relativo á la policia urbana y rural, á la salubridad pública y al disfrute de aprovechamientos comunes *en donde no haya un régimen especial autorizado competentemente; con arreglo al cual se hubieran creado derechos* que pudieran ser perjudicados; y 2.º en que las reclamaciones contra las providencias de la Administracion activa sobre estas materias de su exclusiva competencia no pueden convertirse en cuestiones contenciosas, ni están por consiguiente sujetas al conocimiento y fallo de la jurisdiccion contencioso-administrativa (*Sent. de 22 setiembre de 1851.*)

Y de aquí se deduce también la razón de la competencia; porque si los pleitos contencioso-administrativos suponen necesariamente materia administrativa, y como fundamento el acto administrativo que perjudique algún derecho preexistente, á la jurisdicción contencioso-administrativa y no á la de los Tribunales es á quien exclusivamente compete el conocimiento de las reclamaciones contenciosas que contra dichos actos se intenten. Esta regla, única general que nos es dado establecer sobre competencia, no es de todo punto exacta (1); pero es la mas aproximada á la verdad, pues que se funda en la independencia reciproca de la Administración y de los tribunales, y está en armonía con la definición que hemos dado de la Administración contenciosa; y con la razón y fundamento de esta misma jurisdicción especial que tan combatida ha sido en el terreno de las teorías (2).

Hé aquí ahora determinados por la ley misma los asuntos que corresponden á la jurisdicción contencioso-administrativa, con separación de los que son propios de los Consejos provinciales, y los que corresponden al de Estado.

III. Asuntos contencioso-administrativos de la competencia de los Consejos provinciales.

Los Consejos provinciales, además de sus atribuciones puramente consultivas de que hablan los arts. 76 al 80 de

la ley de 25 de setiembre de 1863, actúan también como tribunales contencioso-administrativos, y en tal concepto están llamados á oír y fallar las cuestiones de este orden que se susciten con motivo de las providencias dictadas por los Gobernadores en la aplicación de las leyes, ordenanzas, reglamentos y disposiciones administrativas. Pero es necesario tener presente que no en todos los casos procede la reclamación contenciosa, y que cuando procede esta, no es admisible la gubernativa ante el superior jerárquico, según lo establece el artículo 14 de la citada ley.

Las cuestiones de que están llamados á conocer los Consejos provinciales, cuando lleguen á ser contenciosas, es decir, cuando el Gobernador ha dictado providencia contra la que se reclama, son relativas precisamente.

1.º Al uso y distribución de los bienes y aprovechamientos provinciales y comunales. (Art. 82, párrafo 1.º) Entiéndase que han de versar las cuestiones sobre posesión actual, ó uso ó distribución, no sobre propiedad, pues estas no están comprendidas ni en la letra ni en el espíritu de la ley, y son de la competencia de los Tribunales (1).

2.º Al repartimiento y exacción individual de toda especie de cargas generales, provinciales ó municipales. (Artículo 82..... 2.º) Entiéndase de las contribuciones directas: *en la territorial* las cuestiones sobre agravio en la cuota, comparada con las de los demás contribuyentes, de ningún modo sobre apreciación de la riqueza: *en la industrial* las cuestiones sobre repartimiento y exacción, ó sobre imposición de multas en los casos de fraude ú ocultación; y en lo tocante *al derecho de hipotecas* las reclamaciones de los interesados contra la Administración por las multas que se les hayan exigido. (Art. 3.º R. O. de 20

(1) Ni puede serlo. La Administración activa es fundamento de la contenciosa, y queda en pie la dificultad para cuando ofrezca dudas la línea divisoria entre lo que es de la competencia de los Tribunales y lo que es de la Administración activa en un asunto determinado ó en varios. — V. COMPETENCIAS. GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LAS PROVINCIAS.

(2) Nosotros mismos nos mostramos poco partidarios de la jurisdicción contencioso-administrativa en un artículo de nuestra *Revista de los Tribunales y de la Administración* inserto en el número de 8 de enero de 1850, y en algunos otros lugares de la misma. Hoy, por grande que sea el respeto que profesamos á la opinión de hombres eminentes, no debemos tampoco ocultar que nuestras convicciones son las mismas que en 1850. Sin embargo, observamos que se va abriendo ya paso la opinión en sentido de reforma, ya que no de abolición completa.

(1) Así lo ha declarado también el Consejo Real en varias sentencias, pudiendo, entre otras consultarse la de 1.º de agosto de 1847, núm. 4; la del 9 de abril de 1848, núm. 3; la de 14 de junio del mismo año, núm. 12; y la de 16 de marzo, 23 de mayo y 7 de diciembre de 1849, núms. 8, 15 y 34.

setiembre de 1852, y su importante preámbulo; y Rs. Ords. de 6 diciembre de 1853 y de 4 junio de 1854) En la de consumos las reclamaciones contra los reparos individuales. (Art. 229, Inst. de 1.º julio de 1864.)

3.º A la cuota con que corresponda contribuir á cada pueblo para los caminos, en cuya construccion ó conservacion se haya declarado interesados á dos ó mas. (Id. 3.º, art. 82 citado)

4.º A la reparacion de los daños que causen las empresas de explotacion en los caminos á que se refiere el párrafo anterior. (Id. 4.º)

5.º A las intrusiones y usurpaciones en los caminos y vías públicas y servidumbres pecuarias de todas clases. (Id. 5.º)

6.º Al resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por las obras públicas. (Id. 6.º y R. D. de 10 octubre de 1845.)

7.º Al deslinde de los términos correspondientes á pueblos y Ayuntamientos, cuando estas cuestiones procedan de una disposicion administrativa, (Id. 7.º)

8.º Al curso, navegacion y flote de los rios y canales, obras hechas en sus cáuces y márgenes, y primera distribucion de sus aguas para riegos y otros usos. (Id. 8.º)

9.º A la insalubridad, peligro ó incomodidad de las fábricas, talleres, máquinas ú oficios, y su remocion á otros puntos. (Id. 9.º)

10. A la caducidad de las pertenencias de minas, escoriales y terreros. (Id. 10.)

11. A la demolicion y reparacion de edificios ruinosos, alineacion y altura de los que se construyan de nuevo, cuando la ley ó los reglamentos del ramo declaren procedente la via contenciosa. (Id. 11.) (1.)

12. A la inclusion ó exclusion en las listas de electores y elegibles para Ayuntamientos y sindicatos de riego. (Id. 12.)

13. A los agravios en la formacion definitiva del registro estadístico de fincas. (Id. 13.)

14. A la represion de las contravenciones á los reglamentos de caminos, navegacion y riego, construccion urbana ó rural, policia de tránsito, caza y pesca, montes y plantios. (Id. 14.)

15. Al cumplimiento, inteligencia, rescision y efectos de los contratos y reales celebrados con la Administracion provincial para toda especie de servicios y obras públicas del Estado, provinciales y municipales. (Art. 83.)

16. Al deslinde y amojonamiento de los montes que pertenecen al Estado, á los pueblos ó á los establecimientos públicos, reservando las demás cuestiones de derecho civil á los Tribunales competentes. (Art. 83.)

17. A la validez, inteligencia y cumplimiento de los arriendos y ventas celebradas por la Administracion provincial de propiedades y derechos del Estado y actos posteriores que de aquellos se deriven, hasta que el comprador ó adjudicatario sea puesto definitivamente en posesion de dichos bienes. (Art. 83 y R. O. de 20 setiembre de 1852.)

18. Y últimamente, las relativas á la indemnizacion, legitimidad de los títulos y liquidacion de los créditos de los partícipes legos de diezmos, con arreglo á lo que previene la ley de 20 de marzo de 1846. (Art. 83.)

Las demandas ante los Consejos, ya hemos dicho en ACCION ADMINISTRATIVA, que han de interponerse y presentarse precisamente en las Secretarías de los mismos Cuerpos, dentro de 30 dias contados desde el siguiente á la notificacion de la providencia administrativa del Gobernador si por ley ó disposicion especial no se señala otro término. Los Consejos ante todo examinan si procede ó no la via contenciosa, é informan en uno ú otro sentido al Gobernador cuya autoridad debe resolver lo que considere conveniente dentro de tercero dia. Si la resolucion fuere que no procede la via contenciosa, el demandante podrá recurrir al Ministro del ramo respec-

(1) Véase la R. O. de 9 de febrero de 1867, dictada en aclaracion de este artículo.

tivo que decidirá, oído el Consejo de Estado.

IV. Asuntos contencioso-administrativos de la competencia del Consejo de Estado.

El Consejo de Estado no es calificado como Tribunal, ni por la ley de su organización, ni por el reglamento de 30 de diciembre de 1846 que determina el modo de conocer en los negocios contenciosos de su competencia; y es sin duda porque, considerado en todo como Cuerpo consultivo, no se dá fuerza de sentencia á sus consultas en lo contencioso, mientras no son aprobadas por Real decreto, segun lo dispuesto en los arts. 62 y 63 de la ley de 17 de agosto de 1860 y el 223 del reglamento. Aparte de esta observacion, es lo cierto que el Consejo de Estado conoce en lo contencioso-administrativo con sujecion á formas jurídicas ó como Tribunal de primera y única instancia, ó como Tribunal de apelacion. Veamos:

Primera y única instancia ante el Consejo de Estado. El Consejo de Estado es oído, ó conoce en única instancia, en los asuntos de la Administracion central cuando pasan á ser contenciosos, y señaladamente:

1.º Respecto al cumplimiento, inteligencia, rescision y efectos de los remates y contratos celebrados directamente por el Gobierno ó por las Direcciones generales de los diferentes ramos de la Administracion civil ó militar del Estado para toda especie de servicios y obras públicas.

2.º Respecto á las reclamaciones á que den lugar las resoluciones particulares de los Ministros de la Corona ó de las Direcciones generales cuando causen estado, en los negocios de la Península y Ultramar (*Arts. 46 y 56 ley citada*).

Del mismo modo que hemos dicho respecto de los Consejos provinciales, el de Estado, segun lo que de los números 1.º y 2.º se desprende, está llamado á conocer en las cuestiones sobre contratos para el servicio de correos, caminos y puertos (1) en las que ocurran

sobre bienes nacionales (1) en las de minas, en las de contribuciones (2) y en general en todos los negocios en que se versen reciprocas obligaciones de la Hacienda y de los particulares, siendo revocables por la via contenciosa (3). Sin embargo hay la notable diferencia de que los Consejos provinciales son llamados á conocer en la primera instancia de las cuestiones contenciosas á que den lugar los actos administrativos de la autoridad civil provincial, con apelacion al de Estado, y este, en esfera mas elevada, conoce de las reclamaciones á que den motivo los actos de la Administracion central, ó sea del Gobierno y de las Direcciones generales cuando causen estado.

Una advertencia importante debemos hacer aquí, y es que el recurso contencioso contra las resoluciones de los Ministros de la Corona y de las Direcciones generales cuando causen estado deberá interponerse dentro del improrogable término de seis meses contados desde el día en que se haya hecho saber, en la forma administrativa á los interesados, la providencia que motiva el recurso. (*Art. 3.º, R. D. de 21 mayo de 1853 y 14 del de 20 junio de 1858*)

Como Tribunal de apelacion, conoce el Consejo de Estado, en apelacion y nulidad de las resoluciones de los Consejos provinciales, y de las de cualquiera otra autoridad que entienda en primera instancia en negocios contencioso-administrativos. Téngase presente que la apelacion no procede siempre, sino cuando el interés del litigio ó valor de la demanda pudiendo sujetarse á una apreciacion material llegue á 2,000 reales, segun luego veremos. Tambien es del caso indicar que segun la ley de Ayuntamientos (art. 109) y la de 25 de agosto de 1851 las apelaciones que se interpongan de los fallos de los Consejos provinciales en negocios de cuentas cor-

(1) Ley de 20 de febrero de 1850, y Reales órdenes de 25 de enero de 1849 y 20 de setiembre de 1852.

(2) Ley de 11 de abril de 1859.

(3) R. O. de 21 de mayo de 1853.

(1) R. D. de 23 de setiembre de 1846.

responden al Tribunal de este nombre y no al Consejo de Estado.

Tales son, pues, los asuntos contenciosos de la competencia de los Consejos provinciales y del de Estado, como Tribunales administrativos. Vamos ahora á presentar algunos casos negativos de la indicada competencia como un medio de aclarar mas esta importantísima materia. Veamos:

V. Negocios reservados á los Tribunales de justicia.

Es necesario no confundir los asuntos administrativos con los judiciales, ni tampoco los que son exclusivos de la Administración activa con los de la misma naturaleza que pueden elevarse á la esfera contenciosa. No hay establecidas reglas fijas que marquen la línea divisoria de cada jurisdicción, y para deslindar su respectiva competencia es necesario en cada caso recurrir al exámen de la naturaleza de cada negocio y de sus distintos caracteres, lo cual requiere mucho cuidado para no exponerse á equivocaciones que tan caras suelen pagar los intereses particulares.

Los negocios que están reservados á los Tribunales de justicia son, pues, todos aquellos de naturaleza civil que se fundan en títulos privados, cuyas controversias tienen lugar entre particulares y que versan sobre objetos ajenos al interés colectivo: tambien las que versan sobre dominio ó propiedad aunque por otra parte sean de naturaleza administrativa y tengan lugar entre Corporaciones administrativas.

Aparte de haberse reconocido implícitamente esta doctrina en las leyes orgánicas de los Consejos provinciales y del de Estado, se ha consignado tambien explícitamente respecto al procedimiento por remate y venta de bienes para ejecutar las sentencias y de las cuestiones que sobrevengan.

Además se ha declarado de una manera expresa la competencia de los Tribunales de justicia.

1.º Respecto á las cuestiones sobre bienes nacionales, cuando versen sobre el dominio de los mismos bienes, y

sobre cualesquiera otros derechos que se funden en títulos anteriores y posteriores á la subasta ó sean independientes de ella, correspondiendo solo á los Consejos provinciales, y al Real en su caso, los que sean relativos á la validez, inteligencia y cumplimiento de los arriendos y subastas y actos posesorios de ellas, hasta poner al comprador ó adjudicatario en posesion pacífica de dichos bienes. (*Art. 1.º, R. O. de 20 setiembre de 1852 y su preámbulo.*)

2.º En las cuestiones sobre dominio ó propiedad que la Administración de los ramos de Correos, Caminos, Canales y Puertos tuviese que sostener, y sobre procedimiento por remate y venta de bienes contra sus deudores. (*Art. 2.º, R. D. de 23 setiembre de 1846.*)

3.º En las demandas de tercería sobre dominio ó prelación, aunque recaigan sobre expedientes administrativos. (*Art. 2.º, R. O. de 20 setiembre de 1852, y 11 de la ley de 20 febrero de 1850.*)

4.º En las contestaciones ó pleitos que dimanen de privilegios de invención. (*R. O. de 22 noviembre 1848.*)

5.º En las cuestiones de interés particular que se susciten entre los individuos de una clase encabezada para la contribucion de consumos. (*Art. 184, Inst. del ramo de 1.º julio de 1864.*)

6.º En las cuestiones sobre validez de las enajenaciones hechas por los Ayuntamientos, cuando se fundan en causas intrínsecas distintas é independientes de la formalidad de la aprobación superior correspondiente, sin que dicha formalidad pueda ser un obstáculo á la nulidad, toda vez que mas que un acto de gobierno lo es de tutela. (*Doctrina fundada en la sentencia del C. R. de 22 setiembre de 1847.*)

Como se vé no son reglas las que dejamos establecidas en los seis números anteriores, son solo casos especiales que contribuyen á deslindar la competencia. Nunca sin embargo podrán evitarse las contiendas de jurisdicción, pero á este inconveniente atiende la ley segun vemos en el artículo **COMPETENCIAS DE JU-**

RESIDUACION, y en GOBIERNO Y ADMINISTRACION DE LAS PROVINCIAS.

VI. Procedimiento contencioso-administrativo.

Hay que considerar en el procedimiento contencioso-administrativo:

La imparcialidad del Tribunal llamado á conocer en el negocio y en este supuesto la recusacion como medio de conseguirla.

La personalidad de las partes que litigan y de sus auxiliares en su caso.

Los plazos y términos en general.

La tramitacion de la primera instancia ante el Consejo provincial.

La de los recursos que se dan contra sus providencias, ya ante los mismos Consejos, ya ante el de Estado.

La de los negocios de que conoce el Consejo de Estado en primera y única instancia.

Las fórmulas.

Recusacion.

Parece un defecto de la ley el no haber dispuesto expresamente que los consejeros que tengan interés en un negocio deban abstenerse en él; pero si esto no se ha hecho porque no se ha creído necesario, se ha concedido á las partes de una manera expresa el derecho de recusacion; respecto de los consejeros de Estado en el art. 32 al 37 del reglamento de 30 de diciembre de 1846, y respecto de los provinciales en los artículos 13 al 16 del de 1.º de octubre de 1845, en donde se expresan los motivos, el tiempo y la forma de proponerla.

En cuanto á los ujieres nada se dice en el capítulo de recusacion, respecto de los de los Consejos provinciales; pero respecto de los del Consejo Real se les prohíbe bajo pena de nulidad y sus efectos autorizar cédula alguna ni diligencia en la cual tengan interés ellos, sus mujeres legítimas ó sus parientes consanguíneos ó afines hasta el cuarto grado inclusive. (Art. 74 y 75.)

Personalidad de las partes que litigan.

En todo pleito y lo mismo en los contencioso-administrativos son necesarias

por lo menos dos personas ó dos representaciones, ya sean ambas ó alguna de ellas particulares; ya compañías industriales ú otras corporaciones semejantes; ya Ayuntamientos, ó provincias ó establecimientos públicos; ó ya sea la misma Administracion civil demandante ó demandada. En todos los casos es necesario evitar la nulidad que es consiguiente si falta la personalidad, ya en la parte por carecer de las cualidades necesarias para comparecer en juicio, ya en el apoderado si le tuviere, por no acreditar debidamente la representacion ó por ser insuficiente ó ilegal el poder. (Arts. 33 y 73, pár. 4.º del *Reg. de Consejos provinciales*, 86 del *de Estado* y 91 de la *ley de 25 de setiembre de 1863*.)

Esta última disposicion del art. 91 de la ley, dice quien ha de representar ante los Consejos provinciales, á la Hacienda pública, á los demás ramos de la Administracion central, á la provincia y á los Ayuntamientos.

Ante el Consejo de Estado deben comparecer las partes ó por medio de uno de los abogados del Consejo, que son todos los del Colegio de Madrid que tengan abierto su bufete, dándole poder al efecto, (arts. 27, 58, 83, 252, 253 y 255); ó por sí mismas, cuando la Seccion de lo contencioso crea que pueden defenderse sin necesidad del ministerio de los abogados. (Arts. 28 y 58.)

Plazos y términos en general.

El reglamento de los Consejos provinciales nada establece sobre el modo de contar los términos ó plazos, asunto que es de mucha importancia por los perjuicios que su trascurso puede traer á los derechos de los que litigan. Deben por lo mismo tenerse presentes las disposiciones generales sobre enjuiciamiento; y segun ellas no se cuentan los dias en que no pueden tener lugar actuaciones judiciales, ni el de la fecha. (Arts. 25 y 26, *Ley de E. C.*, y 269 y 270 del *Reg. del C. R.*) Este reglamento quiere que tampoco se cuente el dia del vencimiento del plazo; y á él nos parece que deben atenerse los Consejos provinciales,

teniendo además en cuenta que ningun emplazamiento ni notificación ni otra actuacion alguna, puede practicarse en domingos ó dias festivos, ni antes de la salida del sol, ni despues de puesto. (*Art. 10 Ley de E. C. y 72 y 73 del Reg. del C. R.*)—V. DIAS Y HORAS HÁBILES.

Tramitacion de la primera instancia ante los Consejos provinciales.

Ya dejamos dicho en el párrafo 3.º, pág. 300, lo que son asuntos administrativos y cuándo dan lugar á reclamacion contenciosa, especificando uno por uno los que la ley ha determinado como de la competencia de los Consejos provinciales. La tramitacion de estos pleitos que solo vamos á indicar muy ligeramente, es la siguiente:

Demanda: Es el escrito en que se produce la reclamacion contenciosa, supuesto ya el expediente gubernativo ó el acto de la Administracion que haya vulnerado el derecho que es objeto de la reclamacion. (*Arts. 21 al 25, 30 y 51 del reglamento.* Se presenta en la Secretaría del Consejo provincial, dentro de los plazos señalados en el art. 92 (antes 93) de la ley de 25 de setiembre de 1863, que, segun se expresa en el art. 6.º de la Real orden de la misma fecha, reforma el art. 17 del reglamento.—El Consejo provincial con vista de la demanda consulta al Gobernador si procede ó no la via contenciosa, si está ó no en tiempo etc. etc. y el Gobernador dentro de tercero dia resuelve lo que estima conveniente comunicándolo al Consejo. Hay recurso al Ministro del ramo. (*Arts. 94 y 95 de la ley.*)

Emplazamiento: Trámite muy esencial que debe practicarse en tiempo y forma. (*Arts. 28, 32 y pár. 5.º del 73 Reglamento.*)

Contestacion á la demanda: Es la iniciacion de la defensa del demandado ya proponiendo las excepciones dilatorias del art. 33, ya cualesquiera otras. (*Arts. 27, 30, 31 y 33 al 37.*) Cuando la Administracion es la demandada su contestacion se llama memoria.

Escritos de réplica y dúplica: Solo proceden, en su caso, si las excepciones

propuestas no son dilatorias. (*Art. 36.*)

Decimos en su caso, pues, segun el espíritu del citado art. 36, tampoco se deben conceder traslados para estos escritos, cualquiera que sea la excepcion que se proponga cuando el Consejo no los considere necesarios.

Pruebas: Cuando se consideran necesarias se recibe el pleito á prueba previa citacion de las partes. (*Arts. 38, 39, pár. 6.º y 7.º del 73 con su nota, y 74.*) No dice el reglamento cuáles son admisibles, pero atendido el art. 77 creemos que lo son las posiciones, los testigos, los peritos, la inspeccion ocular, la comprobacion de documentos y cualquiera otra que sea conducente, del mismo modo que en los juicios civiles y ante el Consejo de Estado por los arts. 130 al 203 de su reglamento.

Vista pública: Trámite necesario. La ley quiere que las mismas partes ó sus defensores puedan exponer verbalmente lo que crean conducente á su derecho. (*Arts. 41 al 45, Reg. y 89 de la ley.*)

Auto de conclusion: Con citacion de las partes para definitiva. (*Art. 73, párrafo 6.º.*)

Y sentencia: Esta debe ser motivada, dictarse dentro de los siete dias desde la conclusion para definitiva, por el número de consejeros necesario y en la forma que se halla establecida. (*Arts. 1.º, 46 al 53 y pár. 2.º del 73 del Reg. y 94 de la ley.*)

Actuacion en rebeldia: Está determinada en los arts. 54 al 62, y tiene lugar siempre que citada ó emplazada una parte no concurre á exponer sus defensas en el término que la ley ó la providencia del Consejo determine en cada caso. En el momento en que es acusada la rebeldia se procede á fallar el pleito, salvo que para mejor proveer se considere precisa alguna prueba. Se notifica, sin embargo, la sentencia que recaiga (art. 57). Se admite ante el mismo Consejo el recurso de rescision. (*Arts. 54 al 62.*)

Ejecucion de las sentencias: Siempre es de la competencia de la Administracion por medio de sus agentes, no ha-

biendo que proceder por remate y venta de bienes, en cuyo caso se remitirá la ejecucion y la decision de las cuestiones que sobrevengan á los Tribunales ordinarios. (Art. 17). Pero esto debe entenderse sin perjuicio de las facultades de la Administracion económica de entender exclusivamente en el remate y subasta de los bienes que se enajenan para hacer efectivo el reintegro de las contribuciones del Estado ó de las cargas municipales ó provinciales. (Art. 5.º de la R. O. de 20 de setiembre de 1852).

Recursos contra providencias de los Consejos provinciales.

Se dan contra las providencias de los Consejos provinciales diferentes recursos: unos ante los mismos Consejos y otros ante el Consejo de Estado.

ANTE LOS MISMOS CONSEJOS.

Deben proponerse ante los Consejos provinciales y los mismos Consejos deciden los recursos siguientes:

La rescision: En el caso de haberse dictado sentencia en rebeldía. (Arts. 58 al 62).

La interpretacion: En el caso de haber contradiccion, ambigüedad ú oscuridad en sus cláusulas. (Art. 63 al 67).

La reposicion de interlocutorias: Este recurso no se halla expresamente comprendido en el reglamento, pero le creo procedente, por lo mismo que no se concede el de apelacion de interlocutorias art. 72, y porque de otro modo no podria subsanarse en tiempo una nulidad, ni prepararse para en su caso como lo exigen el mismo art. 72 y el 74. Tambien me fundo en el 77, y en el 224 al 226 del reglamento del Consejo Real. La reposicion tratándose de definitivas es de todo punto improcedente. (Art. 18).

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO.

Deben proponerse ante los Consejos provinciales, pero se remiten á la resolucion del de Estado, los recursos siguientes:

La apelacion: Solo se conoce en negocios cuya entidad exceda de 2.000 reales, arts. 97 de la ley y 68 al 72 del reglamento. Su tramitacion se determi-

na en los arts. 251 al 266 del reglamento del Consejo de Estado.

La apelacion y nulidad conjuntamente: Arts. 75, 73 y 74 Reg. y 267 y 268 idem del Consejo de Estado.

La nulidad solamente. En los negocios en que por su entidad no procede la apelacion. (Arts. 68, 73, 74 y 75.)

Primera y única instancia ante el Consejo de Estado.

Dejamos indicados en la pág. 392 los asuntos contencioso-administrativos que son de la competencia del Consejo de Estado y sobre su sustanciacion no debemos detenernos estando perfectamente determinados los trámites en los arts. 50 al 251 del reglamento de 30 de diciembre de 1846, á donde remitimos á nuestros lectores.

Fórmulas.

Comprendemos en esta seccion, las fórmulas mas importantes del procedimiento contencioso-administrativo, y además las hemos anotado para que satisfagan mas cumplidamente á su objeto. Las fórmulas, si no indispensables, son útiles muchas veces hasta á las personas mas experimentadas en los negocios, ya porque evitan omisiones y olvidos de cláusulas convenientes, ya porque la redaccion de un simple escrito ó de una breve diligencia que en aparicion es fácil suele ofrecer en la práctica dificultades que exigen tiempo y trabajo.

(Certificacion de acuerdo de Ayuntamiento para litigar.)

D. N. Secretario del Ayuntamiento Constitucional de Villanueva en la provincia de.....

CERTIFICO: Que segun consta en el libro de actas de dicha corporacion correspondiente á este año de la fecha, al fólío tantos hay un acuerdo tomado por unanimidad en sesion ordinaria (ó extraordinaria) de tal dia con asistencia de los Señores Concejales D. N., N. y N. y el Señor Alcalde presidente, el cual copiado á la letra dice así:

«Se dió cuenta de un oficio del Señor Gobernador de la provincia comunicando la resolucion que ha dictado en el expediente de arriendo de los pastos de Pinosilla que ha arbitrado el Ayuntamien-

to de Quintano sin anuencia de este, y como dicha resolucion sea contraria al uso y aprovechamiento de que goza este pueblo en el referido monte, el Ayuntamiento enterado de todos los antecedentes de este asunto, y previa una detenida deliberacion acordó autorizar al Alcalde para que entable y sostenga cuantas reclamaciones sean necesarias llevándolas al Consejo provincial y si es necesario á los demás Tribunales que sean competentes (ó bien acordó que se entablen y sostengan ante el Consejo provincial en la esfera contenciosa las reclamaciones que han mediado en la gubernativa) hasta obtener sentencia favorable (1).

Y para los efectos correspondientes expido la presente certificacion, de orden verbal del Sr. Alcalde y con su V.º B.º en dicha villa á tantos etc.

Como Secretario del Ayuntamiento,
F. de T.

V.º B.º
El Alcalde,
F. de T.

Si el pleito hubiera de seguirse ante un Tribunal civil, seria necesario elevar el anterior acuerdo al Gobernador de la provincia para su aprobacion, oyendo al Consejo provincial; pero no cuando el pleito que ha de promoverse sea contra una resolucion del Gobernador, ó á consecuencia de ella, ante el Consejo provincial, como asunto contencioso-administrativo. En este caso parece no ya solo inútil, sino hasta contradictorio, solicitar la aprobacion del Gobernador, puesto que de todos modos ha de considerarse despues ú obtenida ó denegada, cuando presentada la demanda ante el mismo Gobernador la pase ó no al Consejo provincial. (*Considerando 2.º de la sentencia núm. 13 de 17 de noviembre de 1847*)

Fórmula de demanda.

Al Consejo provincial.

D. Juan Vega, abogado, vecino de esta, en nombre del Ayuntamiento de Villabuena en esta provincia de quien presento poder otorgado por el Alcalde de la mis-

ma villa, competentemente autorizado para litigar, como mejor proceda digo: Que el Ayuntamiento de Quintano tambien de esta provincia, prescindiendo de la mancomunidad de toda clase de aprovechamientos que Villabuena tiene en el monte llamado Pinosilla situado en jurisdiccion de Quintano, ha procedido al arriendo de los pastos del mismo en virtud de acuerdo que ha obtenido la aprobacion del señor Gobernador de la provincia; pero sin haber contado con el beneplácito y asentimiento del Alcalde y Ayuntamiento de Villabuena, como era en todo caso justo y necesario para no perjudicarse en la posesion del indicado aprovechamiento. La corporacion á quien represento, luego que llegó á su noticia el propósito del Ayuntamiento de Quintano, tomó acuerdo en sesion de *tal dia*, despues de una madura deliberacion, para reclamar como reclamó directamente del mismo, contra semejante medida; pero no obstante la atenta comunicacion que á este efecto le fué dirigida por el Alcalde mi representado (documento núm. . .), ni siquiera mereció para el Ayuntamiento de Quintano los honores de la contestacion. Visto esto elevó mi parte la reclamacion conveniente al señor Gobernador de la provincia, pero habia dictado ya la providencia de aprobacion, y consideraciones del momento que se dejan comprender debieron inclinarle á no hacer novedad en el asunto. Este ha quedado íntegro á la resolucion del Consejo provincial, y el Ayuntamiento de Villabuena no puede menos de llevar la cuestion á la esfera contenciosa, seguro de que ha de justificar su oposicion al arrendamiento de los pastos del monte de Pinosilla, en cuya posesion está mi representado, y cuyo uso no puede impedirse sin vulnerar su indisputable derecho, que por cierto no se funda solo en la mera posesion, sino que tiene tambien en su apoyo una concordia con el pueblo demandado, que de una manera terminante é inequívoca reconoce dicha mancomunidad en el monte objeto de la contienda, diciendo que. . . (aquí se pone lo sustancial de cuanto se refiera á la cuestion.) Es pues evidente que desde que dicha concordia se celebró en el año de 1671, no ha sufrido hasta hoy la menor interrupcion en el indicado goce, lo cual se justifica perfectamente con los dos oficios que debidamente presento, uno de tal fecha y otro de tal otra, dirigidos al Ayuntamien-

(1) Arts. 76, párrafo 40, y 83, párrafo 12 de la Ley municipal.

to de Villabuena por el de Quintano, en los cuales explícitamente se dá por sn-puesta la mancomunidad de pastos, cuando su objeto era convenir en el señalamiento de cierta parte del monte para los ganados atacados de la viruela, y aun sin estos documentos, se justificará si es necesario no solo con testigos á su tiempo, sino con la compulsa de actas municipales del mismo Ayuntamiento de Quintano, que no deben ser para él recusables.

Siendo, pues, sumamente fácil la cuestion que es objeto de esta demanda, podremos reducir todos los hechos y el derecho á los siguientes:

Puntos de hecho.

1.º Los pastos y demás aprovechamientos del monte titulado Pinosilla en la jurisdiccion de Quintano vienen disfrutándose en mancomunidad y sin contradiccion de ninguna clase entre dicho pueblo y Villabuena desde la concordia de 1771.

2.º Siempre que ha sido necesario interrumpir el aprovechamiento con motivo de destinar algun cuartel del monte á talar, ó por señalamiento de alguna parte del mismo para el ganado atacado de viruela, se ha hecho de acuerdo entre ambos pueblos, segun se acredita por los oficios que se presentan, los cuales corroboran los capítulos tal y tal de la concordia que se citan en el fondo de esta demanda.

3.º Al hacer recientemente el Ayuntamiento de Quintano el arrendamiento de los pastos del monte, bajo el supuesto de necesitar arbitrarlos para atender á los gastos de su presupuesto municipal no se ha contado con el Ayuntamiento de Villabuena, y esto perjudica á su libre uso y aprovechamiento que no puede de ningun modo impedirsele por las siguientes razones:

Son fundamentos de derecho.

1.º Que segun la ley de 8 de junio de 1813 disposiciones 2.ª y 3.ª de la Real órden de 17 d mayo de 1838, y Real órden de 8 de enero de 1841 deben mantenerse las mancomunidades de pastos públicos que existen entre dos ó mas pueblos, tales como hayan existido de antiguo, sin perjuicio de que el pueblo que pretende el usufructo privativo de su término municipal use de su derecho en Tribunal competente.

Y 2.º Que el arrendamiento hecho de los pastos de la mancomunidad ataca la

posesion y á la mancomunidad misma, vulnerando un derecho que la ley quiere que se respete y causando notorios perjuicios al pueblo despojado de la posesion de los aprovechamientos que le corresponden. Por tanto

Suplico al Consejo que habiendo por presentado el poder, la certificacion del acuerdo del Ayuntamiento para sostener este litigio, la concordia y los oficios citados, y llamando á los autos el expediente gubernativo instruido en el Gobierno de provincia, se sirva declarar que quede sin efecto el arrendamiento de los pastos mancomunales del monte Pinosilla hecho por el Ayuntamiento de Quintano sin acuerdo ni intervencion del de Villabuena, mandando que se reponga la mancomunidad, amparando á este último pueblo en la posesion, uso y aprovechamiento de los referidos pastos, sin perjuicio de que si Quintano se cree con algun derecho le deduzcan ante el tribunal y en el juicio competentes; todo con las costas y gastos que se originen en el pleito y con motivo del pleito hasta su terminacion; por ser así justicia que pido conforme á derecho.

Madrid etc.

La firma del letrado defensor.

Otro sí: Para los efectos de oír citaciones y notificaciones mi domicilio es en esta corte, calle de..... núm..... cuarto.....

Firma del apoderado.

La anterior demanda se presenta en la Secretaría del Consejo provincial y debe ponerse nota de presentacion y aun darse á la parte el resguardo conveniente. El Consejo consulta al Gobernador sobre su admision y en su caso como dejamos dicho la denegacion es apelable para ante el Ministro del ramo.

(Auto para emplazamiento.)

Sres. **Auto.** Traslado al Ayuntamiento de..... por el término de..... y Orea. para emplazarle librese despacho Pardo. cometido al juez de paz del mismo pueblo. Se nombra consejero ponente al vocal D... Proveido por los señores del márgen hoy tantos.

El Presidente.

El Secretario.

(Cédula para emplazamiento.)

Diego Pita, ujier del Consejo provincial

de Madrid, certifico: Que en la demanda presentada en tal día ante el referido Consejo á instancia de D. Juan Vega, abogado del Colegio de esta corte como apoderado del Ayuntamiento de Villabuena, cuyo domicilio es calle de..... núm..... pretendiendo se deje sin efecto el arrendamiento hecho por el de Quintano de los pastos del monte Pinosilla en la jurisdicción del último ha recaído la providencia siguiente:

(Se inserta á la letra.)

Y para los efectos del art. 32 del reglamento de primero de octubre de etc. firmo el presente hoy tantos etc.

El Secretario.

A continuacion de la cédula anterior que luego se une á los autos se pone la diligencia de notificación al demandante ó sea á su apoderado y se hace constar el emplazamiento al demandado si se le ha hecho por ujer por residir en la capital. Si el emplazamiento se hace por despacho en este es donde se hace constar haber tenido lugar por el funcionario que le haya autorizado.

Notificación. En Madrid á.... de.... de.... yo el infrascrito ujer he hecho saber el contenido de la presente cédula á D. Juan Vega como apoderado del Ayuntamiento de Villabuena, en su propia casa, y le he entregado además copia literal de la misma. Quedó enterado y firma de que certifico.

Firma del notificado.

Idem del ujer.

Emplazamiento (1). Seguidamente yo el ujer infrascrito pasé á casa de.... y haciéndole saber el contenido de la presente cédula le entregué otra que contiene la demanda literal con la providencia que ha recaído y relacion de todos los documentos presentados por el demandante; quedó enterado, se dió por citado y emplazado y firma conmigo de que certifico.

Firma del demandado.

Firma del ujer.

(Despacho para emplazamiento.)

Don José Cid, presidente del Consejo provincial de Madrid.

Al señor Juez de paz de Quintano (ó de primera instancia, ó Alcalde segun los casos y circunstancias) ó á cualquiera de ellos á quien sea presentado este despacho para su cumplimiento, hago saber: Que en este tribunal se ha presentado demanda por D. Juan Vega á nombre del Ayuntamiento de Villabuena cuyo tenor con el de la providencia que ha recaído es el siguiente:

Demanda. (Se copia íntegra.)

Providencia que ha recaído. (Se copia íntegra expresando los vocales que la firman y el secretario.)

Y para que tenga lugar el emplazamiento acordado en la anterior providencia exhorto y requiero á V. á que tan luego como le sea presentado este despacho se sirva mandar se guarde y cumpla y que en su virtud por escribano ó notario público, si le hubiere en el pueblo, ó en su defecto por el secretario de ese Juzgado se practique el emplazamiento á la corporacion municipal de ese pueblo en la persona del Alcalde, entregándole en el acto una copia literal de la demanda y de la providencia y haciéndolo todo constar á continuacion de este despacho que me será devuelto, por el mismo conducto para unirle á los autos de su razon.

Dado en Madrid á.... de.... de....

Firma del Gobernador.

El Secretario del Consejo.

La firma.

Este despacho se entrega á la parte interesada en su cumplimiento ó su apoderado, y poniéndole en mano del escribano del pueblo da cuenta al juez de paz (ó á quien vaya dirigido) y se cumple en estos términos.

(Auto de cumplimiento.)

Auto.—Guárdese y cumpla lo que se dispone en el anterior despacho, practicándose el emplazamiento y demás diligencias por secretario de este Juzgado mediante no haber escribano en el pueblo. Lo mandó y firmó el Sr.... F.... primer Juez de paz de esta villa de Quintano sin perjuicio de la jurisdicción que ejerce, hoy tantos etc.

Firma del Juez de paz.

Idem del secretario.

(1) Claro es que esta diligencia de emplazamiento se entiende cuando el emplazado reside en la misma capital de provincia, pues en otro caso se hace por despacho.

(Cumplimiento por el secretario de un juez de paz. Modo de notificar á un Alcalde como tal.)

Notificacion y emplazamiento.—En la villa de Quintano á tantos etc., yo el secretario del Juzgado de paz de esta villa en cumplimiento de cuanto se ordena en la anterior providencia y despacho á que se refiere, previo atento recado al señor Alcalde y en la hora que este señor se sirvió señalarme, me constituí en su casa-habitacion, y habiéndome mandado entrar dicho señor, le hice presente el objeto del presente despacho, leyéndosele íntegramente y dejándole copia literal del mismo. Dicho señor se dió por notificado y emplazado en nombre del Ayuntamiento, y firmó conmigo y puso el sello de la Alcaldía en prueba de quedar enterado y de haber recibido las copias, de que certifico.

La firma del notificado.

Como secretario del Juzgado de paz,
F. de T.

Auto.—Devuélvase este despacho por el mismo conducto al señor presidente del Consejo provincial. Lo mandó etc.

Firma del juez de paz.

Idem del secretario.

El demandante cuida de recoger el anterior despacho cumplimentado y le presentará en la Secretaría del Consejo, bien desde luego, ó esperando á que pase el término del emplazamiento, en cuyo caso es ya de todo punto indispensable la presentacion; y á la vez si no ha comparecido el demandado puede acusarle la rebeldía.

(Fórmula de la contestacion.)

El Alcalde luego que le haya sido notificado el emplazamiento, debe sin perder un instante dar cuenta al Ayuntamiento, no esperando á la sesion ordinaria si no ha de celebrarse en el mismo dia. Dicha Corporacion acordará lo que mas conveniente considere á su derecho; pero deberá tener en cuenta que es necesario en este asunto proceder con actividad, pues si se deja pasar el término y le es acusada la rebeldía se falla el pleito sin su audiencia.

Acordada por el Ayuntamiento la de-

fensa se saca un certificado del acuerdo, y el Alcalde ó por sí ó por medio de apoderado se muestra parte. Claro es que aquí no hay necesidad de acudir al Gobernador para que apruebe el acuerdo, como en los demás casos lo exige el art. 81 de la ley de 8 de enero de 1845, pues desde luego la admision de la demanda por el Consejo y el auto de traslado llevan ya consigo la autorizacion para litigar del mismo modo y con mas razon todavia, que hemos dicho respecto del caso en que el Ayuntamiento sea demandante. Hé aquí la fórmula del escrito de contestacion.

Al Consejo provincial.

D. Angel Asís, abogado del Colegio de esta córte, en nombre del Alcalde y Ayuntamiento Constitucional de.... con poder que en debida forma presento del mismo, contestando á la demanda propuesta por el Alcalde de Villabuena sobre.... ante el Consejo provincial de.... digo: Que etc. (se expone lo que se crea del caso y antes de la pretension se resúmen como para la demanda los puntos de hecho y de derecho.) Por tanto.

Al Consejo suplico que habiendo por presentado el poder (se especifican los demás documentos que se presenten) se sirva desestimar la demanda del Ayuntamiento de Villabuena y condenarle á silencio etc., por ser así arreglado á justicia que pido.

Madrid á tantos etc.

El apoderado.

Se hace señalamiento de domicilio por un otrosí.

Suponiendo que el Consejo considere necesario dar conocimiento al actor de las excepciones del demandado, para fijar bien la cuestion, se hará por medio del siguiente

Sres. **Auto.**—Traslado á la parte de-
Presidente. mandante por el término de seis
Orea. dias (es el máximo segun el ar-
Pardo. tículo 29). Proveido por los señores del margen en sesion de hoy tantos etc.

El Presidente.

Firma del Secretario.

Para notificar toda providencia deben los ujieres cumplir siempre lo ordenado

en el art. 32 del reglamento, extendiendo una cédula para unir á los autos con las firmas que acrediten las notificaciones, y otra cédula además para entregar á cada parte, como en los modelos anteriores.

(Fórmula del escrito de réplica.)

D. Juan Vega en nombre del Ayuntamiento de Villabuena en el pleito con el de Quintano, sobre que se deje sin efecto el arrendamiento de los pastos comunes del monte titulado Pinosilla en la jurisdicción del último, evacuando el traslado que se me ha conferido del escrito de contestacion, digo: Que nada de cuanto se alega por el demandado es conducente para desvirtuar las poderosas razones en que se apoya la demanda, y el Consejo se ha de servir por lo mismo proveer como en la misma tiene solicitado mi parte, atendidas las consideraciones siguientes:

(Se exponen por orden; y despues modificando, adicionando ó reproduciendo los puntos de hecho y de derecho consignados en la demanda, se concluye así):

Por tanto sin hacer novedad en los puntos de hecho y de derecho que consigné en la demanda, solo añadiré:

En cuanto á los hechos:

(Se dice lo que se crea conveniente, numerando los puntos.)

En cuanto al derecho:

(Tambien se enumeran los puntos que se adicionan.)

En cuya atencion.

Al Consejo suplico se sirva haber por evacuado el traslado; y á su tiempo determinar en conformidad á lo pretendido en el escrito de demanda, por las razones expuestas en la misma y en este escrito, por ser justicia que pido etc.

Madrid etc.

Si por considerarlo necesario el Consejo, se diere un nuevo traslado al demandado, la nueva contestacion ó *dúplica* se formula en términos análogos á la réplica.

Cuando el Consejo crea que debe terminar la discusion escrita, ya con la contestacion, ya con la réplica, y en todo caso, con la contra-réplica debe mandar que pasen las actuaciones al conse-

jero ponente para los efectos del art. 38. En esta forma.

(Fórmula de providencias sobre pruebas.)

Sres. **Auto.**—Pasen estos autos al señor consejero ponente con arreglo al art. 38 del reglamento de 1.º de octubre de 1845. Proveido por los señores del márgen en sesion de hoy tantos, etc.

El Presidente.

El Secretario.

Se notifica; y además debe poner nota el secretario de haber pasado los autos al consejero ponente con expresion del día.

El ponente teniendo en cuenta las indicaciones de las partes sobre pruebas y el estado de la cuestion, propondrá ó el señalamiento de dia para la vista, ó que se reciba el pleito á prueba, determinando la que haya de hacerse y el término, no excediendo de 30 dias. Tener en cuenta el caso práctico de la nota al art. 73, página 336. El ponente no hace otra cosa que proponer: el Consejo luego acuerda. Hé aquí el auto de prueba.

Sres. **Auto.**—Siendo importante para Presidente. la mas acertada resolucion de la Orea. cuestion que se litiga conocer, 1.º Puerto. tal cosa, y 2.º tal otra, y teniendo en cuenta la discordancia de las partes sobre ambos extremos, se recibe este pleito á prueba por el término de tantos dias, dentro de los cuales practicarán las partes las informaciones que les convengan precisamente sobre dichos extremos. Proveido por los señores del márgen hoy tantos etc.

Las firmas de los consejeros.

La del secretario.

Formulamos motivada la anterior providencia porque ordinariamente debe serlo conforme á la regla general del artículo 49 del Reglamento.

Notificada á las partes la providencia de prueba, deben no descuidarse cuando á ellas les toque el articular las que crean conveniente á su derecho, lo cual debe hacerse por un breve escrito en estos términos:

(*Fórmula de escrito articulando prueba.*)

Al Consejo provincial:

D. Angel Asís en nombre del Ayuntamiento de Quintano en el pleito promovido por el de Villabuena sobre..... ante el Consejo..... digo: Que por auto de ayer se ha recibido este pleito á prueba por tantos dias; y para practicar la informacion de testigos que á mi parte interesa, propongo que los que para el efecto sean presentados declaren, dando razon de sus dichos, al tenor de los particulares siguientes:

1.º Por las generales de la ley (*Artículo 151 del Reg. del C. R.*)

2.º Si saben tal cosa.

3.º Si han visto constantemente y sin contradiccion tal otra etc.

Al Consejo suplico se sirva admitirme la informacion al tenor de los anteriores artículos por ser conforme á justicia.

Otro sí, digo: Que los testigos de que intenta valerse mi parte son los siguientes:

1.º D. Pedro Gimenez, vecino de Villabuena, profesor de cirugía.

2.º D. Ventura Gil, de la misma vecindad, propietario.

3.º D. Gerónimo Perez, vecino de Quintano, cura párroco.

4.º D. Eustaquio San Martin, comisario de montes, cesante, residente en esta capital, calle del Prado núm. 1, cuarto 3.º

Y al efecto de que sean examinados todos ellos á tenor del anterior interrogatorio (ó tales por el segundo artículo, y tales otros por el tercero, cuarto, etc.)

Suplico al Consejo se sirva librar el correspondiente despacho delegando la práctica de la informacion al señor juez de primera instancia del partido de..... (ó al de paz de.....) por ser tambien conforme á justicia.

Madrid etc.

(*Fórmula de otrosíes, ó de escritos pidiendo alguna prueba.*)

(*Pidiendo reconocimiento pericial.*)

..... digo: Que conviene al derecho de mi parte acreditar, de una manera que no deje lugar á dudas, la importancia de los daños y perjuicios que le irroga tal cosa (ó su verdadero valor, ó precio, etc.) y al efecto.

Suplico al Consejo se sirva estimar el reconocimiento pericial, mandando que de comun acuerdo se nombre un perito

por ambas partes (ó dos ó tres, segun la importancia del reconocimiento por ser así justicia que pido, etc.)

(*Pidiendo inspeccion ocular.*)

..... digo: Que para que el Consejo pueda conocer mas á fondo la cuestion que se ventila y la verdad de los hechos que se controvierten, los cuales se comprenden mejor sobre el terreno,

Suplico al Consejo se sirva acordar que con previa citacion de las partes se practique un reconocimiento ó inspeccion ocular de..... poniéndose por el secretario diligencia expresiva de las observaciones que se hubieren hecho, por ser así justicia que pido etc.

(*Presentando posiciones en cualquier estado del pleito.*)

..... digo: Que estando contestada la demanda (1) conviene al derecho de mi parte y al esclarecimiento de los hechos que N..... declare bajo juramento (ó sin él) con palabras claras y terminantes de confieso ó niego, sobre los puntos que me reservo exponer en el acto del interrogatorio, ó bien sobre los puntos siguientes:

1.º Como es cierto que.....

2.º Como tambien lo es etc.....

Suplico al Consejo se sirva estimarlo mandando que se lleve á efecto de la manera indicada y bajo la protesta de estar solo á lo favorable por ser justicia que pido etc.

(*Pidiendo mandamiento compulsorio.*)

..... digo: Que conviene al derecho de mi parte y al esclarecimiento de la verdad que se traiga á los autos testimonio de tal documento que debe obrar en el protocolo de tal Escribanía (ó en tal libro de tal Secretaría etc.), y á fin de que tengan efecto,

Suplico al Consejo se sirva estimar, así despachando mandamiento compulsorio para que tenga efecto con citacion contraria, pues así es justicia etc.

(*Fórmula de providencia de admision de prueba.*)

Sres. Auto.—Se admite el interrogatorio así como la lista de testigos que presenta la parte de N. en su anterior escrito: Comparezcan pré-

(1) Ténganse presentes sobre posiciones los arts. 130 al 141 del reglamento del C. R.

via citacion y bajo la pena de la ley los testigos 4.º etc., etc., examíneselos al tenor del indicado interrogatorio. Respecto de los testigos tal y tal, librese exhorto (ó despacho) al señor juez de primera instancia (ó de paz,) de..... conforme en todo con el otrosí, etc. etc. Se señala para el exámen de los testigos tal dia á tal hora en la Sala Audiencia del Consejo, prévia citacion de las partes. Proveido por los señores del márgen en sesion de hoy, tantos etc.

Las firmas.

Idem del Secretario.

Citacion á las partes. Ya sabemos la fórmula.

(Fórmula de cédulas para la citacion de testigos.)

En rigor no es necesario citarlos; la parte interesada en su exámen les avisará amistosamente. No obstante, si los testigos no quisieran comparecer ó no comparecieran voluntariamente lo hará presente la parte, ya en el dia señalado para su exámen acusándoles su falta de asistencia, aunque informándose antes si es producida por algun impedimento legitimo; ó ya antes de dicho dia, por escrito ó por comparecencia que firmará, si dejasen entender su resistencia. El Consejo deberá mandar en estos casos que se les cite por ujier con los apercibimientos necesarios que pueden ser los del art. 145 del reglamento del Consejo Real, pero no se les dejará copia del auto en que se admitió la informacion ni de interrogatorio alguno (1). (Art. 144 del reglamento) (2). Hé aquí para en su caso la fórmula:

Madrid á tantos etc.

En virtud de providencia del Consejo provincial dictada en el pleito entre..... yo el infrascrito ujier del mismo Con-

sejo he notificado y citado en su persona á D. que vive en la calle de. núm. cuarto. para que comparezca el dia tantos á tal hora (dos dias por lo menos de anticipacion) en la Audiencia del Consejo á prestar una declaracion, prevenido que de no comparecer podrá ser conducido á la presencia del Consejo por la fuerza pública, y será considerado para todos los demás efectos como desobediente. Quedó enterado, le entregué copia literal de esta cédula, y en prueba de todo firma conmigo de que certifico.

La firma del testigo ó de testigo á ruego.

Idem del ujier.

(Fórmula de una acta de prueba.)

Acta de prueba de los testigos presentados por parte de D..... en el pleito que sigue con..... ante este Consejo provincial sobre.....

En la villa de Madrid á tantos etc., prévia citacion de las partes, y hallándose presentes ambas ó sus apoderados en la Sala Audiencia del Consejo provincial ante el S. D. N. vice-presidente del mismo, para practicar la prueba de testigos que está acordada, se dió principio á tal hora á la lectura del auto de prueba. Despues fueron compareciendo y declarando uno por uno los testigos siguientes:

Primer testigo, D. Eustaquio San Martin. Despues de haber prestado juramento en forma fué preguntado por los arts. 1.º y 4.º del interrogatorio y dijo sobre el primero:

Llamarse como queda dicho, ser de tal edad, de estado casado, cesante del cargo de comisario de montes de esta provincia y habitante en la calle de..... que no es pariente, ni acreedor ni deudor, ni tiene amistad estrecha con ninguna de las partes.

Sobre el 4.º dijo que etc..... Habiéndole leído esta declaracion dijo afirmarse en su contenido por ser la verdad y la firmó con el señor vice-presidente del Consejo y conmigo el secretario de que certifico.

Las firmas.

Segundo testigo, D. Ecequiel Gil. Seguidamente compareció otro testigo para la misma prueba, que dijo llamarse Don Ecequiel Gil de tal edad, clérigo, habitante en la calle de..... y examinado por las preguntas 1.ª, 2.ª, 3.ª, 4.ª, etc. del in-

(1) Véase lo que dejamos dicho en el artículo COMPARECENCIA, y consúltese el citado art. 145 del reglamento del Consejo de Estado que confirma la doctrina allí expuesta.

(2) El Reglamento del Consejo de Estado es mas terminante que el de los Consejos provinciales, y yo creo que en todo lo que este haya omitido y pueda ser aplicable, aquel debe recurrir á él antes que á las reglas del Enjuiciamiento civil.

terrogatorio declaró, previo juramento en forma lo siguiente:

1.^a Que no es pariente, ni acreedor, ni deudor ni tiene intimidad ni interés por ninguna de las partes.

2.^a Que etc. (se expresa lo que declare.)

Y habiéndole leído esta declaración se afirmó en su contenido y la firma con él etc.

Las firmas.

Las partes podrán hacer á los testigos las preguntas y observaciones que juzguen convenientes con permiso y por medio del que presida, observándose además todo lo que disponen los artículos 134, 135, 136 y 142 al 166 del reglamento del Consejo de Estado.

(Fórmula de auto de señalamiento de día para la vista.)

Sres.
Presidente. **Auto.**—Se señala para la vista pública de este pleito el día.... á
Orea. tal hora en la Sala de Audiencia
Pardo. del Consejo citándose á las partes.
Proveido por etc.

El Presidente.

El Secretario.

En la vista se observará lo dispuesto en los arts. 41 al 45 del reglamento de los Consejos provinciales y 97 al 100 del Real. El secretario extiende diligencia de su resultado en esta forma.

Visto este pleito ante el Consejo compuesto de los señores presidente, Pardo y Orea, con asistencia de ambas partes, ó de sus apoderados (si asistieren abogados como tales ó con el carácter á la vez de apoderados se expresará). Duró la vista desde tal á tal hora.

Media firma del Secretario.

Diligencias para mejor proveer. Puede decretarlas de oficio el Consejo cuando lo considere necesario.

Conclusion para definitiva. El artículo 73 en su párrafo 6.^o hace de todo punto necesaria la providencia de conclusion y su notificación á las partes. Nosotros creemos que es un trámite inútil y que debiera suprimirse. Sin que el Consejo lo diga saben bien las partes que con la vista del pleito está concluso

para definitiva, salvo que se decreta alguna diligencia para mejor proveer, en cuyo caso ha de notificárseles. La providencia de conclusion está reducida á decir. *«Por conclusos para definitiva. Proveido etc. en la forma que las demás. Esta providencia se notifica.»*

(Fórmula de sentencia.)

Sres.
Presidente. En el pleito que ha pendido y
Ruiz. pende ante el Consejo provincial
Orea. de Madrid entre partes, de la una
Pardo. el Alcalde y Ayuntamiento de Vi-
Gil. llabuena, demandante, representa-
do por D.... y de la otra el Alcalde y Ayuntamiento de Quintano, demandado, representado por.... sobre que se deje sin efecto el arrendamiento hecho por el último de los pastos del monte Pinosilla que pertenecen á la mancomunidad de ambos y se reponga la mancomunidad amparando á los vecinos de Villabuena en la posesion, uso y aprovechamiento de los referidos pastos, sin perjuicio de que si Quintano se cree con algun derecho le deduzca ante el Tribunal y en el juicio competentes.

Vistos los fundamentos de hecho de la demanda de Villabuena al fólío..... que son: 1.^o La posesion constante y sin contradiccion de ninguna clase hasta hoy en la mancomunidad de pastos del monte Pinosilla, desde la Concordia de tal año que se ha traído á los autos y obra al fólío..... 2.^o El contenido de tal y tal capítulo de esta misma Concordia en los cuales se reconoció etc., etc. Y 3.^o Los oficios y contestaciones de los fólíos.... que mediaron entre los pueblos que litigan en tal año sobre señalar parte del monte de la cuestion para el pasto del ganado enfermo de la viruela.

Vista la prueba de testigos practicada por el pueblo demandante.

Vista al fólío.... la contestacion del demandado y sus fundamentos de hecho que son tal y tal (se enumeran.)

Vista la ley de 8 de junio de 1813 y las Reales órdenes de 11 de febrero de 1836, 17 de mayo de 1838 y 8 de enero de 1841. (Se citarán todas las alegadas por las partes, bien para apoyar en ellas el fallo, ó para rebatirlas con algun considerando.)

Considerando que el Ayuntamiento del pueblo de Villabuena ha acreditado plenamente la posesion en que está de la mancomunidad de los pastos de Pinosi-

lla, así por los testigos de su prueba como por los oficios que mediaron en tal año tratando de ponerse de acuerdo sobre señalamiento de terreno para el ganado lanar enfermo, y por la Concordia de tal año que prueba la legitimidad de esta posesion.

Considerando que con el arrendamiento de pastos verificado por el Ayuntamiento de Quintano sin anuencia ni consentimiento de Villabuena ha sido perjudicado este pueblo en el uso de aquellos.

Considerando que si en tal año se arrendaron tambien los pastos de Pinosilla fué mediando acuerdo entre los dos pueblos que gozan de la mancomunidad y dedicando sus productos al fondo municipal de los mismos.

Considerando que la ley de 8 de junio de 1843 al sancionar el libre ejercicio de los derechos de propiedad solo derogó ciertos privilegios que lo impedían, respetando al mismo tiempo los derechos preexistentes que no tenían este carácter.

Considerando por último que el arriendo hecho por Quintana altera el aprovechamiento comun que los vecinos de dicho pueblo y los de Villabuena hacian de los pastos del monte Pinosilla y que esta alteracion es contraria á lo expresamente dispuesto en las Reales órdenes citadas de 17 de mayo de 1838 y 8 de enero de 1841.

El Consejo, definitivamente juzgando declara de ningun valor ni efecto el arrendamiento de los pastos del monte Pinosilla, reponiendo la mancomunidad al estado que tenia antes de que se verificase dicho arrendamiento. Y en cuanto á las costas se condena etc..... Así por esta sentencia lo proveyeron, mandaron y firmaron los señores del margen en Madrid á tantos etc.....

Se notifica, y no obstante la apelacion que puede interponerse, se lleva inmediatamente á efecto, á no ser que en la misma sentencia se exprese lo contrario. (Art. 71 Reg.)

(Fórmula de apelacion.)

..... digo: Que en tal fecha se me ha hecho saber la sentencia definitiva dictada por el Consejo en tal dia declarando tal cosa, y absolviendo á.... de la demanda; y siendo dicha sentencia perjudicial al derecho de mi parte, apelo de ella para ante el Consejo de Estado (en negocios de cuentas para ante el Tribunal de

Cuentas segun los arts. 109, Ley municipal, y 70 Reg. 1.º octubre.)

Suplico al Consejo se sirva admitirme la apelacion y mandar que con citacion y emplazamiento de las partes se remita original el expediente á la superioridad. Madrid etc.

El Consejo atiende á si el recurso se ha interpuesto dentro del término, lo cual constará por diligencia del secretario (art. 70 Reg.) y á si por la entidad del negocio es admisible (art. 68); y siéndolo dictará providencia en estos términos.

Sres. **Auto.** Se admite la apelacion Presidente. que interpone la parte de.... y con Pardo. arreglo al R. D. de 20 de junio de Ruiz. 1858, remítase original el expediente al Consejo de Estado, citando y emplazando á las partes, quedando copia de aquel en lo que baste para la ejecucion del fallo. Proveido etc.

Se notifica y emplaza á las partes para que comparezcan ante el Consejo Real á usar de su derecho.

(Fórmula del recurso de nulidad.)

Cuando sea necesario proponer el recurso de nulidad se hará por medio de apelacion, pero fundándola en alguno de los casos del art. 73 del reglamento de los Consejos provinciales. Cuando se propongan los dos recursos á la vez, apelacion y nulidad, se expresará con claridad esta circunstancia.

Cuando la cuantía no llegue á 2,000 reales, pudiendo sujetarse á apreciacion material, solo procede en su caso el recurso de nulidad.

(Recusacion).

Al Consejo provincial de...

... digo: Que el Sr. D. ... uno de los vocales propietarios del Consejo se halla comprendido en el caso tantos del artículo 13 del reglamento de 1.º de octubre de 1845, mediante tal cosa sobre lo cual ofrezco en su caso la debida justificacion; y protestando no ser mi ánimo ofender en lo mas mínimo la rectitud é imparcialidad de dicho señor, usando del derecho que la ley me concede, le recuso:

Suplico al Consejo se sirva acordar que el referido consejero se abstenga

de conocer en este litigio, por ser así justicia.

Si el recusado al darse cuenta de este escrito estuviere presente y no prefiere contestar por escrito puede hacer en el acto la manifestacion que exige el artículo 15 del reglamento, la cual se hará constar por diligencia que suscribirá con el secretario del Consejo. La providencia se concibe en estos términos: *Se há (ó no se há) por recusado al vocal D. . .* Siendo necesario se recibe á prueba el incidente. (Arts. 15 y 16, Reg. de 1.º de octubre.)

(Acusando rebeldia.)

...digo: Que en tal fecha se notificó á D.... en toda forma tal providencia, (ó se le emplazó para tal cosa) señalándole tal término y habiendo pasado con exceso sin presentarse á contestar (ó á lo que sea) le acuso la rebeldia.

Suplico al Consejo se sirva haberla por acusada y decidir este asunto sin mas trámites, conforme al art. 54 del reglamento de 1.º de octubre de 1845, por ser así justicia.

Debe cuidarse mucho en este caso de ver si se han hecho *debidamente* las citaciones y emplazamientos. (Arts. 54 al 62 Reg.)

(Recurso de rescision.)

Al Consejo provincial de...

...digo: Que en tal dia se me ha notificado la sentencia pronunciada por el Consejo provincial en el pleito seguido ante el mismo, á instancia de... y en rebeldia contra mí, por haberme impedido defenderme una dolorosa pérdida que acabo de experimentar en la familia (ó por lo que sea). Y como en dicha sentencia se me condena á... con perjuicio notable del derecho que me asiste contra las infundadas pretensiones de N.... estoy en el caso de solicitar su rescision por los fundamentos de hecho y de derecho que paso á exponer.

Puntos de hecho (se exponen).

Puntos de derecho (se exponen).

Suplico al Consejo que habiendo por presentados tal y tal documento, se sirva admitirme el recurso de rescision que en toda forma propongo contra dicha sentencia, y declarándola rescindida absolverme de la demanda con imposicion

de costas á N. por la notoria mala fé con que ha procedido, por ser así justicia.

El Consejo dará traslado á la otra parte, y siendo necesaria alguna prueba se propondrá y decretará en la forma ordinaria, pero señalando términos mas breves. La sentencia deberá motivarse declarando *haber ó no haber lugar á la rescision*, y además en el primer caso lo que proceda sobre el fondo. Contra esta sentencia pueden intentarse los recursos ordinarios. (Arts. 58 al 62 Reg.)

(Reposicion de providencias. Protestas de nulidad para los efectos del artículo 74 del Reg.)

Al Consejo provincial de...

...digo: Que se me ha notificado la providencia del Consejo de tal fecha por la cual sin recibir el pleito á prueba se ha señalado dia para la vista. Y como la naturaleza de la cuestion debatida exige que se ponga en claro por medio de un reconocimiento pericial si realmente el contratista de la obra ha cumplido ó no con las condiciones de la contrata en cuanto á la calidad del mortero empleado en su construccion, á cuya falta se atribuye en parte su inminente ruina, se hace de todo punto necesario que se reciba prueba sobre este extremo, como al derecho de mi parte interesa. Por tanto,

Suplico al Consejo se sirva reponer por contrario imperio, ó como mas haya lugar dicha providencia, mandando que quede en suspenso el señalamiento de la vista hasta que se practique el indicado reconocimiento pericial; pues en otro caso y para el de serme contrario el fallo definitivo, protexto desde luego de nulidad, á los efectos del art. 73, párrafo 7.º y 74 del reglamento de 1.º de octubre de 1845. Es justicia que pido.

Se da traslado y con lo que exponga la parte y proponga el ponente se dicta providencia motivándola. Hé aquí la fórmula en su caso.

Sres.	Auto. Considerando que en la
Presidente.	cuestion que se debate no influye
Ruiz.	el resultado, cualquiera que sea,
Pardo.	del reconocimiento pericial que se
Orea.	pretende:—Considerando etc. El
	Consejo declara que no há lugar (ó bien
	atendidos los fundamentos que expon-
	gan). El Consejo deja sin efecto (ó en sus-

penso) el señalamiento de la vista, y para mejor proveer manda que se practique el reconocimiento pericial, á cuyo efecto comparezcan las partes ante el secretario del Consejo, y de comun acuerdo nombren unos ó tres peritos, bajo apercibimiento que de no hacerlo se nombrarán por el Consejo etc.... Proveído etc. (*Artículos 167 al 178 del Reg. de 30 de diciembre de 1846.*)

(*Mejora de apelacion ante el Consejo de Estado*) (1).

Al Consejo de Estado.

D. Abogado del ilustre Colegio de esta córte en representacion de. cuyo poder debidamente presento en el pleito con. sobre. mejorando la apelacion que mi parte tiene interpuesta de la setencia definitiva pronunciada por el Consejo provincial de. por la que se declaró *tal cosa* y absolvió á. digo: Que el Consejo se ha de servir revocar dicha sentencia como injusta y contraria á los resultados de los autos, declarando *tal cosa* (ó declarando nula y de ningun valor ni efecto dicha sentencia por no haber sido competente el Consejo provincial para conocer en este asunto etc.; pues así procede por las consideraciones siguientes: (*Se alega y se resumen los puntos de hecho y de derecho como en la demanda etc., arts. 30 y 258 del Reglamento.*)

Dedúcese pues de todo lo dicho que el Consejo provincial de. olvidándose de las terminantes prescripciones de las leyes citadas, y apreciando en poco las importantes consideraciones que deo expuestas ha inferido un agravio con la sentencia apelada: y para enmendarle.

Suplico al Consejo se sirva revocar la indicada sentencia y declarar tal cosa, pues así procede en justicia.

Madrid tantos etc.

Firma del letrado.

(*Mostrándose parte en el Consejo de Estado el litigante apelado.*)

Al Consejo de Estado.

D. Abogado etc. digo: Que por parte del Ayuntamiento de A. se me ha conferido poder que en debida forma presento para que le defienda en el pleito

que le ha promovido el Ayuntamiento de N. sobre.... cuyo pleito ha venido al Consejo en apelacion interpuesta por el referido Ayuntamiento de la sentencia del Consejo provincial de. por la que se declara tal cosa. Y á fin de que pueda tener lugar su defensa.

Suplico al Consejo se sirva haber por presentado el poder y tenerme por parte en el pleito, mandando que los emplazamientos y notificaciones se entiendan conmigo, en mi domicilio que es calle de. núm. cuarto. Madrid tantos etc.

Firma del letrado.

No creemos necesario añadir mas fórmulas, por considerar las que dejamos insertas bastantes para nuestro objeto.

CONSEJO Y CONSENTIMIENTO PATERNO.

—V. MATRIMONIO.

CONSERVACION DE FINCAS DEL COMUN.

—V. DESLINDE: PROPIOS.

CONSOLIDACION DE LA DEUDA.—Véase DEUDA.

CONSPIRACION. La conspiracion para cometer el delito se halla penada expresamente en nuestro Código penal, artículos 4.º y 62 del mismo.

Los delitos vulgarmente denominados de *conspiracion*, para los cuales se dió la ley de 17-26 de abril de 1821, son los hoy penados en los arts. 139, 167 al 188, 196 y 304 del Código. Considerábamnos nosotros por lo mismo derogada dicha ley, aunque no así la de 17-25 de abril sobre procedimiento que se inserta en ORDEN PÚBLICO con importantes notas que la ilustran.

CONSTITUCION POLITICA. Forma ó sistema de gobierno de un Estado. La Constitucion política de una nacion debe comprender dos puntos muy principales, la declaracion de los derechos y deberes de los ciudadanos, y el señalamiento y deslinde de los poderes públicos. «La ley natural, dice un escritor, base necesaria de un Gobierno justo, de una Constitucion durable, concede á todos los hombres libertad personal, libertad de pensar, hablar, escribir y publicar las propias ideas, propiedad y libertad de industria, igualdad en fin de derechos conciliada con la obediencia y

(1) Es muy importante recordar aquí la nota al art. 252 del reglamento de 1846 pág. 336 y los casos VIII y XXV comprendidos en la Jurisprudencia, con la advertencia que allí hacemos.

el respeto á las autoridades con toda clase de dominio legítimo y con toda clase de opiniones..... Tales derechos, añade, preceden y están mas altos que cualquier Gobierno y debe toda Constitucion reconocerlos.»

En cuanto á España, dice, ninguna otra nacion ha aventajado á la nuestra en carácter altivo é independiente y quizá no haya ejemplo de otra alguna que mas celo y perseverancia mostrase en el mantenimiento de sus fueros y libertades

Las Cortes de Cádiz lo reconocieron tambien así y dijeron en el extenso, magnífico y erudito discurso que precedió á la Constitucion que formaron; que todo el contenido de ella se halla consignado del modo mas auténtico y solemne en los diferentes cuerpos de la legislacion española, que lo mismo tenían ya dispuesto las leyes fundamentales de Aragon, de Navarra y de Castilla en todo lo concerniente á la libertad é independencia de la Nacion, á los fueros y obligaciones de los ciudadanos, á la dignidad y autoridad del Rey y de los Tribunales, al establecimiento y uso de la fuerza armada y al método económico y administrativo de las provincias.

Creemos, pues, deber incluir en esta obra la referida Constitucion de 1812, con su referido preámbulo, y además tambien el Estatuto Real, la Constitucion de 1845 y la vigente (1).

CONSTITUCION DE 1812.

Este célebre Código que el distinguido historiador Sr. Lafuente llama con justicia «admirable en las circunstancias en que fué elaborado, venerable y respetado siempre, al través de los defectos propios de aquellas mismas circunstancias, monumento de gloria para España, y fundamento y base de los que despues han regido y del que rige al presente en esta Nacion» es con su discurso preliminar como sigue:

(1) No hacemos mérito de la Constitucion de Bayona con cuyo nombre es conocida la que la graciosa voluntad de Napoleon nos otorgó en Bayona (Francia) en 1808. Se discutió y apro-

Discurso preliminar

leído en las Cortes al presentar el proyecto de Constitucion la comision nombrada al efecto.

SEÑOR:

I. La comision encargada por las Cortes de extender un proyecto de Constitucion para la Nacion española, llena de timidez y desconfianza presenta á V. M. el fruto de su trabajo. Ardua y grave le habia parecido desde el principio la empresa; mas todavia estaba reservado para sus sesiones tocar todas las dificultades, cuya magnitud ha estado en poco no la hubiese desalentado, y hecho desconfiar de poder llevar al cabo la obra. Si ella no correspondiese á los deseos de V. M. ni llenase la expectacion pública, á lo menos la comision habrá cumplido con el precepto que las Cortes le impusieron, el que no tanto debe entenderse que era dirigido á que presentase una obra perfecta, cuanto que señalase el camino que la sabiduría del Congreso podria seguir en la discusion para llegar al término tan deseado por la Nacion entera. Nada ofrece la comision en su proyecto que no se halle consignado del modo mas auténtico y solemne en los diferentes cuerpos de la legislacion española, si no que se mire como nuevo el método con que ha distribuido las materias, ordenándolas y clasificándolas para que formasen un sistema de ley fundamental y constitutiva, en el que estuviese contenido con enlace, armonía y concordancia cuanto tienen dispuesto las leyes fundamentales de Aragon, de Navarra y de Castilla en todo lo concerniente á la libertad é independencia de la Nacion, á los fueros y obligaciones de los ciudadanos, á la dignidad y autoridad del Rey y de los Tribunales, al establecimiento y uso de la fuerza armada, y al método económico y administrativo de las provincias. Estos puntos capitales van ordenados sin el aparato científico que usan los autores clásicos en las obras de política, ó tratados de derecho público, que la comision creyó debia evitar por no ser necesario, cuando no fuese impropio, en el breve, claro y sencillo texto de la ley constitutiva de una Monarquía. Pero al mismo tiempo no ha podido menos de adoptar el método que le pareció mas análogo al estado presente de la Nacion, en que el adelantamiento de la ciencia del Gobierno ha intro-

bó por un llamado Congreso de españoles, y no llegó á regir ni un solo dia. Esta Constitucion establecia la prévia censura para la imprenta y prohibia la publicidad de las sesiones.

ducido en Europa un sistema desconocido en los tiempos en que se publicaron los diferentes cuerpos de nuestra legislacion; sistema del que ya no es posible prescindir absolutamente, así como no lo hicieron nuestros antiguos colegisladores, que aplicaron á los reinos de otras partes lo que juzgaron útil y provechoso.

II. La comision, señor, hubiera deseado que la urgencia con que se ha dedicado á su trabajo, la noble impaciencia del público por verle concluido, y la falta de auxilios literarios en que se ha hallado, le hubiesen permitido dar á esta obra la última mano que necesitaba para captar la benevolencia del Congreso y la buena voluntad de la Nacion, presentando en esta introduccion todos los comprobantes que en nuestros Códigos demuestran haberse conocido y usado en España cuanto comprende el presente proyecto. Este trabajo, aunque impropio y difícil, hubiera justificado á la comision de la nota de novadora en el concepto de aquellos que poco versados en la historia y legislacion antigua de España, creerán tal vez tomado de naciones extrañas, ó introducido por el prurito de la reforma, todo lo que no ha estado en uso de algunos siglos á esta parte, ó lo que se oponga al sistema de gobierno adoptado entre nosotros despues de la guerra de sucesion. La comision recuerda con dolor, el velo que ha cubierto en los últimos reinados la importante historia de nuestras Cortes; su conocimiento estaba casi reservado á los sabios y literatos, que la estudiaban mas por espíritu de erudicion que con ningun fin político. Y si el Gobierno no habia prohibido abiertamente su lectura, el ningun cuidado que tomó para proporcionar al público ediciones completas y acomodadas de los cuadernos de Cortes, y el ahinco con que se prohibia cualquiera escrito que recordase á la Nacion sus antiguos fueros y libertades, sin exceptuar las nuevas ediciones de algunos cuerpos del derecho, de donde se arrancaron con escándolo universal leyes benéficas y liberales, causaron un olvido casi general de nuestra verdadera Constitucion, hasta el punto de mirar con ceño y desconfianza á los que se manifestaban adictos á las antiguas de Aragon y de Castilla. La lectura de tan preciosos monumentos habria familiarizado á la Nacion con las ideas de verdadera libertad política y civil, tan sostenida, tan defendida, tan reclamada por nuestros mayores en las innumerables enérgicas peticiones en Cortes de los procuradores del Reino, en las cuales se pedian con el vigor y entereza de hombres libres la reforma de abusos,

la mejora y derogacion de leyes perjudiciales, y la reparacion de agravios. Hubiera contribuido igualmente á convencer á los españoles, que su deseo de poner freno á la disipacion y prodigalidad del Gobierno, de mejorar las leyes y las instituciones ha sido el constante objeto de las reclamaciones de los pueblos, del anhelo de sus procuradores, sin que se pueda señalar un solo decreto de los expedidos hasta el día por V. M. que no sea de la naturaleza de las peticiones presentadas en Cortes; algunas de las cuales todavía se extendian á pedir con firmeza y resolucion la reforma ó supresion de muchas cosas que V. M. ha respetado.

III. Aunque la lectura de los historiadores aragoneses, que tanto se aventajan á los de Castilla, nada deja que desear al que quiera instruirse de la admirable Constitucion de aquel Reino; todavía las actas de Cortes de ambas coronas ofrecen á los españoles ejemplos vivos de que nuestros mayores tenian grandeza y elevacion en sus miras, firmeza y dignidad en sus conferencias y reuniones, espíritu de verdadera libertad é independencia, amor al orden y á la justicia, discernimiento exquisito para no confundir jamás en sus peticiones y reclamaciones los intereses de la Nacion con los de los Cuerpos ó particulares. La funesta política del anterior reinado habia sabido desterrar de tal modo el gusto y aficion hácia nuestras antiguas instituciones, comprendidas en los Cuerpos de la jurisprudencia española, descritas, explicadas y comentadas por los escritores nacionales á tal punto, que no puede atribuirse sino á un plan, seguido por el Gobierno, la lamentable ignorancia de nuestras cosas, que se advierte entre no pocos que tachan de forastero y miran como peligroso y subversivo lo que no es mas que la narracion sencilla de hechos históricos referidos por los Blancas, los Zuritas, los Angleiras, los Marianas, y tantos otros profundos y graves autores que por incidencia ó de propósito tratan con solidez y magisterio de nuestros antiguos fueros, de nuestras leyes, de nuestros usos y costumbres. Para comprobar esta asercion, la comision no necesita mas que indicar lo que disponia el Fuero Juzgo sobre los derechos de la Nacion, del Rey y de los ciudadanos; acerca de las obligaciones recíprocas entre todos de guardar las leyes: sobre la manera de formarlas y ejecutarlas, etc. La soberanía de la Nacion está reconocida y proclamada del modo mas auténtico y solemne en las leyes fundamentales de este Código. En ellas se dispone que la Corona es electiva; que nadie puede aspirar al Reino

sin ser elegido; que el Rey debe ser nombrado por los Obispos, magnates y el pueblo, explican igualmente las calidades que deben concurrir en el elegido; dicen que el Rey debe tener un derecho con su pueblo; mandan expresamente que las leyes se hagan por los que representen á la Nacion, juntamente con el Rey; que el Monarca y todos los súbditos, sin distincion de clase y dignidad, guarden las leyes; que el Rey no tome, por fuerza de nadie, cosa alguna; y si lo hiciere, que se la restituya. ¿Quién á vista de tan solemnes, tan claras, tan terminantes disposiciones podrá resistirse todavía á reconocer como principio innegable que la autoridad soberana está originaria y esencialmente radicada en la Nacion? ¿Cómo sin este derecho hubieran podido nunca nuestros mayores elegir sus Reyes, imponerles leyes y obligaciones, y exigir de ellos su observancia? Y si esto es de una notoriedad y autenticidad incontrastable, ¿no era preciso que para sostener lo contrario se señalase la época en que la Nacion se habia despojado á sí misma de un derecho tan inherente, tan esencial á su existencia política? ¿No era preciso exhibir las escrituras y auténticos documentos en que constase el desprendimiento y enajenacion de su libertad? Mas por mucho que se busque, se inquiera, se arguya y se cavile, no se hallará otra cosa que testimonios irrefragables de haber continuado en ser electiva la Corona, así en Aragon como en Castilla, aun despues de haber comenzado la restauracion. En Castilla no existia ley fundamental que arreglase con claridad y precision la sucesion al Trono antes del siglo XII, como se ve por los disturbios á que dieron lugar frecuentemente las disputas entre los hijos de los Reyes de Leon y de Castilla; y la costumbre de asociar al Gobierno, y dar á reconocer en las Córtes por heredero en vida del Rey al Príncipe ó pariente designado para sucederle, provenia de la falta de leyes que arreglasen este punto tan grave y trascendental al bienestar de la Nacion. Esta jamás pudo echar de sí la memoria de haber sido electiva la Corona en su origen; prueba clara de ello es, entre otros hechos, el notable suceso de Cataluña en el año de 1462, en que los estados de aquel Principado, despues de haberse resistido á D. Juan el II de Aragon, le depusieron solemnemente del Trono. En Castilla se ejecutó lo mismo en el de 1465 con Enrique IV, á causa de su mal Gobierno y administracion: en el de 1406 se trató en las Córtes de Toledo, con ocasion de la menor edad de D. Juan el II, de traspasar á su tio, el Infante D. Fernando, la Corona,

fundándose los procuradores en la facultad que tenia la Nacion para elegir el Rey, segun el pro comun del Reino; y por último, la notable solemnidad que todavía se observa por la que aun hoy día jura el Reino al Príncipe de Asturias en vida de su padre, para corroborar mas y mas con este acto las leyes de la sucesion hereditaria.

IV. No es menos notable el cuidado y vigilancia con que se guardaron en Aragon y Castilla los fueros y leyes que protegian las libertades de la Nacion en el esencialísimo punto de hacer las leyes. Lo dispuesto por el Código godo, eso mismo se restableció en ambos Reinos luego que comenzaron á rescatarse de la dominacion de los árabes. Los congresos nacionales de los godos renacieron en las Córtes generales de Aragon, de Navarra y de Castilla, en que el Rey, los prelados, magnates y el pueblo hacian las leyes, otorgaban pedidos y contribuciones, y trataban de todos los asuntos graves que ocurrian: aunque en el modo y forma de reunirse, de deliberar y de proclamar las primeras, habia diferencia entre estos estados. Aragon fué en todas sus instituciones mas libre que Castilla. El Rey, en aquel Reino, no podia resistir abiertamente las peticiones de las Córtes, que pasaban á ser leyes si el Reino insistia. La fórmula de que se usaba para su publicacion es bien notable, y quita toda duda por la claridad y precision de las palabras en que estaba concebida. Decia así: *El Rey, de voluntad de las Córtes, estatuece y ordena*: No sucedia así en Castilla, donde su autoridad y el influjo de los Ministros, por falta de las leyes claras, carecia de limitaciones bien determinadas para todos los casos. Pero á pesar de esta imperfeccion, la Constitucion de Castilla es admirable y digna de todo respeto y veneracion. Por ella se le prohibia al Rey partir el señorío: no podia tomar á nadie su propiedad: no podia prenderse á ningun ciudadano dando fiador: por fuero antiguo de España, la sentencia dada contra uno por mandado del Rey, era nula: el Rey no podia tomar de los pueblos contribuciones, tributos ni pedidos sin el otorgamiento de la Nacion junta en Córtes, con la singularidad que estas no los decretaban hasta haber obtenido competente indemnizacion de los agravios deducidos en ellas; en lo cual la Nacion se habia manifestado siempre tan celosa y sentida, que mas de una vez expresó el resentimiento que le causaba la repulsa con actos de violencia y enfurecimiento, como sucedió en los desastrosos movimientos de Segovia y demás ciudades de Castilla despues de las Córtes de la Coruña, en que se

concedieron al Emperador Carlos V los subsidios que habia pedido, antes de haber satisfecho á las quejas que le presentaron los procuradores del Reino. Mas nada de esto es comparable á lo que disponia la Constitucion de Aragon para asegurar los fueros y libertades de la Nacion y de los ciudadanos.

V. A mas de los limites indicados de la autoridad Real en Castilla, en Aragon se miraba la frecuente convocacion de Córtes como el medio mas eficaz de asegurar el respeto y observancia de las leyes. En 1283, en el reinado de Pedro III, llamado el Grande, se estableció: *Que el señor Rey haga cort general de aragoneses en cada un año una vegada*. La paz y la guerra la declaraban las Córtes á propuesta del Rey. Con este derecho, que se habia reservado el Reino, se ponía un nuevo freno á la autoridad Real, para que con pretexto de una guerra voluntaria ó siniestramente provocada, no se oprimiese á la Nacion, y se la privase de su libertad. Las contribuciones eran, igualmente que en Castilla, otorgadas libremente por la Nacion reunida en Córtes, en donde se tomaba cuenta de su inversion, y se pedia residencia á todos los funcionarios públicos del desempeño de sus cargos. Además de la reunion periódica y frecuente de las Córtes, tenian los aragoneses el privilegio de la union; institucion tan singular, que ninguna otra Nacion conocida ofrece ejemplo de esta naturaleza. Su objeto era oponerse abiertamente á la usurpacion que hacia el Rey ó sus Ministros de los fueros ó libertades del Reino, hasta poderle destronar y elegir otro en su lugar *encara que sea pagano*, como dice el secretario Antonio Perez en sus *Relaciones*. Su modo de proceder estaba determinado por reglas fijas. Su autoridad se extendia hasta expedir mandatos y exigir de los Reyes la satisfaccion de los agravios cometidos contra el Reino, como sucedió con Alfonso III de Aragon. Pero esta asociacion formidable á la ambicion de los Ministros y de los Reyes pereció por la fuerza de las armas á manos de Pedro IV, llamado el del Puñal, quien en el año de 1348 consiguió que las Córtes la disolviesen. Abolido este privilegio, todavía quedó el Justicia, cuya autoridad servia de salvaguardia á la libertad civil y seguridad personal de los ciudadanos. Su inmenso poder; la proteccion que le dispensaban las leyes para asegurar su independencia en el desempeño de sus augustas funciones; el privilegio de la manifestacion ejercitado ante él para facilitar á los reos el medio de defenderse contra el poder de los Ministros; el derecho de capitanear á los arago-

neses, aunque fuese contra el mismo Rey ó su sucesor, si introducian en el Reino tropas extranjeras, constituian la parte principal de su extensa autoridad, que no menos que la de la union acabó para siempre en la desgraciada dispersion que tuvieron los aragoneses, mandados por el último Justicia D. Juan de Lanuza, al acercarse los soldados castellanos, enviados contra fuero por Felipe II, á sujetar á Zaragoza: á esto se juntaban diferentes leyes y fueros que protegian la libertad de los aragoneses, como el de no poderseles dar tormento, cuando al mismo tiempo en Castilla y en toda la Europa estaba en toda su fuerza el uso de esta prueba bárbara y cruel.

VI. La Constitucion de Navarra, como viva y en ejercicio, no puede menos de llamar grandemente la atencion del Congreso. Ella ofrece un testimonio irrefragable contra los que se obstinan en creer extraño lo que se observa hoy en una de las mas felices y envidiables provincias del Reino; provincia en donde cuando el resto de la Nacion no ofrecia mas que un teatro uniforme en que se cumplia sin contradiccion la voluntad del Gobierno, hallaba este un antemural insuperable en que iban á estrellarse sus órdenes y providencias, siempre que eran contra ley ó procomunal del Reino. Todo lo dicho respecto de la Constitucion de Aragon, exceptuando el Justicia, y los privilegios de la union y manifestacion, eso mismo se observaba antes en Navarra. En el dia todavía el Reino junta Córtes, que habiendo sido antes como en Aragon anuales, se han reducido á una vez cada tres años, quedando en el intermedio una diputacion. Las Córtes tienen aun grande autoridad. Ninguna ley puede establecerse sin que ellas la consientan libremente, para lo cual deliberan sin la asistencia del virey: y si convienen en el proyecto, que en Navarra se llama *pedimento de ley*, el Rey le aprueba ó le desecha. Aun en el primer caso las Córtes todavía examinan de nuevo la ley en su forma original ya sancionada; la resisten si la hallan contraria ó perjudicial al objeto de su proposicion, haciendo réplicas sobre ella hasta convenirse el Rey con el Reino. Mas este al cabo puede absolutamente resistir su promulgacion é insercion en los cuadernos de sus leyes, si no la juzga conforme á sus intereses. En las contribuciones observan igual escrupulosidad. La *ley del servicio* ha de pasar por los mismos trámites que las demás para ser aprobada, y ningun impuesto para todo el Reino tiene fuerza en Navarra hasta haberse obtenido otorgamiento de las Cór-

tes, que para conservar mas cabal y absoluta su autoridad en esta parte, llaman á toda contribucion *donativo voluntario*. Las cédulas, pragmáticas, etc., no pueden ponerse en ejecucion hasta haber obtenido de las Cortes ó de la Diputacion, si están separadas, el permiso ó sobrecarta, para lo cual se sigue un expediente de trámites bien conocidos. La Diputacion ejerce tambien una autoridad muy extensa. Su principal objeto es velar que se guarde la Constitucion y se observen las leyes, oponerse al cumplimiento de todas las cédulas y órdenes Reales que ofenden á aquellas; pedir contra fuero en todas las providencias del Gobierno, que sean contrarias á los derechos y libertades de Navarra, y entender en todo lo perteneciente á lo económico y político de lo interior del Reino. La autoridad judicial es tambien en Navarra muy independiente del poder del Gobierno. En el Consejo de Navarra se finalizan todas las causas, así civiles como criminales, entre cualesquiera personas, por privilegiadas que sean, sin que vayan á los Tribunales supremos de la corte los pleitos ni en apelacion, ni aun por el recurso de injusticia notoria. Las provincias Vascongadas gozan igualmente de infinitos fueros y libertades, que por tan conocidos no es necesario hacer de ellos mencion especial.

VII. A vista de esta sencilla narracion, la comision no duda que el Congreso oirá con benignidad el proyecto de ley fundamental que presenta, y alguna de las principales razones que la han determinado á adoptar el plan y sistema con que está dispuesto. Todas las leyes, fueros y privilegios que comprende la breve exposicion que acaba de hacer, andan dispersos y mezclados entre una multitud de otras leyes puramente civiles y reglamentarias en la inmensa coleccion de los cuerpos del derecho, que forman la jurisprudencia española. La promulgacion de estos Códigos, la fuerza y autoridad de cada uno, las vicisitudes que ha padecido su observancia, ha sido todo tan vario, tan desigual, tan contradictorio, que era forzoso entresacar con gran cuidado y diligencia las leyes puramente fundamentales y constitutivas de la Monarquía de entre la prodigiosa multitud de otras leyes de muy diferente naturaleza, de espíritu diverso y aun contrario á la índole de aquellas. Este trabajo no le ha descuidado la comision; al contrario, aunque incompleto, le ha tenido á la vista preparado ya de antemano por otra comision nombrada al intento por la Junta central. Pero, señor, todo él en este punto, aunque desempeñado con mucha prolijidad é inteligencia, está re-

ducido á la nomenclatura de las leyes, que mejor pueden llamarse fundamentales, contenidas en el Fuero Juzgo, las Partidas, Fuero Viejo, Fuero Real, Ordenamiento de Alcalá, Ordenamiento Real y Nueva Recopilacion. El espíritu de libertad política y civil que brilla en la mayor parte de ellas, se halla á las veces sofocado con el de la mas extraordinaria inconsecuencia y aun contradiccion, hasta contener algunas disposiciones enteramente incompatibles con el génio, índole y templanza de una Monarquía moderada. Sirva, señor, de ejemplo la ley XII, tit. I, Partida I, en que se dice: *Emperador ó Rey puede facer leyes sobre las gentes de su señorio é otro ninguno non ha poder de las facer en lo temporal, fueras ende si las ficiese con otorgamiento de ellos. El las que de otra manera son fechas, non han nombre nin fuerza de leyes, nin deben valer en ningún tiempo*. Otras pudieran citarse; pero además de que seria molestar sin utilidad la atencion de las Cortes, la razon mas principal de la comision consiste en que la Constitucion de la Monarquía española debe ser un sistema completo y bien ordenado, cuyas partes guarden entre sí el mas perfecto enlace y armonía. Su textura, señor, por decirlo así, ha de ser de una misma mano, su forma y colocacion ejecutada por un mismo artífice. ¿Cómo, pues, seria posible que la simple ordenacion textual de leyes promulgadas en épocas diferentes, distantes las unas de las otras muchos siglos, hechas con diversos fines, en circunstancias opuestas entre sí, y ninguna parecida á la situacion en que en el día se halla el Reino, llenasen aquel grande y magnífico objeto? Cuando la comision dice que en su proyecto no hay nada nuevo, dice una verdad incontrastable, porque realmente no lo hay en la sustancia. Los españoles fueron en tiempo de los godos una Nacion libre é independiente, formando un mismo y único imperio; los españoles despues de la restauracion, aunque fueron tambien libres, estuvieron divididos en diferentes estados, en que fueron mas ó menos independientes, segun las circunstancias en que se hallaron al constituirse reinos separados; los españoles nuevamente reunidos bajo de una misma Monarquía, todavia fueron libres por algun tiempo; pero la reunion de Aragon y de Castilla fué seguida muy en breve de la pérdida de la libertad, y el yugo se fué agravando de tal modo, que últimamente habiamos perdido, doloroso es decirlo, hasta la idea de nuestra dignidad; si se exceptúan las felices Provincias Vascongadas y el Reino de Navarra, que presentando á cada paso en sus

venerables fueros una terrible protesta y reclamacion contra las usurpaciones del Gobierno, y una reconvencion irresistible al resto de la España por su deshonoroso sufrimiento, excitaba de continuo los temores de la corte, que acaso se hubiera arrojado á tranquilizarlos con el mortal golpe que amagó á su libertad mas de una vez en los últimos años del anterior reinado, á no haber sobrevenido la revolucion. Ahora bien, señor, en todas estas épocas se hicieron leyes, que se llaman por los jurisconsultos fundamentales. Ellas forman nuestra actual Constitucion y nuestros Códigos; ¿cómo es posible esperar que ordenadas y aproximadas, de cualquier modo que se quiera, puedan ofrecer á la Nacion las breves, claras y sencillas tablas de la ley política de una Monarquía moderada? No, señor, la comision ni lo esperaba, ni cree que este sea el juicio de ningun español sensato. Convencida por tanto del objeto de su grave encargo, de la opinion general de la Nacion, del interés común de los pueblos, procuró penetrarse profundamente, no del tenor de las citadas leyes, sino de su índole y espíritu; no de las que últimamente habian igualado á casi todas las provincias en el yugo y degradacion, sino de las que todavía quedaban vivas en algunas de ellas, y las que habian protegido en todas, en tiempos mas felices, la religion, la libertad, la felicidad y bienestar de los españoles; y extrayendo, por decirlo así, de su doctrina los principios inmutables de la sana política, ordenó su proyecto nacional y antiguo en la substancia, nuevo solamente en el orden y método de su disposicion.

VIII. Hecho cargo el Congreso de estas razones, pasa la comision á exponer brevemente los fundamentos de su obra. Para darle toda la claridad y exactitud que requiere la ley fundamental de un Estado, ha dividido la Constitucion en cuatro partes, que comprenden: Primera. Lo que corresponde á la Nacion, como soberana é independiente, bajo cuyo principio se reserva la autoridad legislativa. Segunda. Lo que pertenece al Rey, como participante de la misma autoridad, y depositario de la potestad ejecutiva en toda su extension. Tercera. La autoridad judicial delegada á los jueces y Tribunales. Y cuarta. El establecimiento, uso y conservacion de la fuerza armada, y el orden económico y administrativo de las rentas y de las provincias. Esta sencilla clasificacion está señalada por la naturaleza misma de la sociedad, que es imposible desconocer, aunque sea en los Gobiernos mas despóticos, porque al cabo los hombres se han de diri-

gir por reglas fijas y sabidas de todos, y su formacion ha de ser un acto diferente de la ejecucion de lo que ellas disponen. Las diferencias ó altercados que puedan originarse entre los hombres, se han de transigir por las mismas reglas ó por otras semejantes, y la aplicacion de estas á aquellos no puede estar comprendida en ninguno de los dos primeros actos. Del exámen de estas tres distintas operaciones, y no de ninguna otra idea metafísica ha nacido la distribucion que han hecho los políticos de la autoridad soberana de una Nacion, dividiendo su ejercicio en potestad legislativa, ejecutiva y judicial. La experiencia de todos los siglos ha demostrado hasta la evidencia que no puede haber libertad ni seguridad, y por lo mismo justicia ni prosperidad en un estado en donde el ejercicio de toda la autoridad esté reunido en una sola mano. Su separacion es indispensable; mas los límites que se deben señalar particularmente entre la autoridad legislativa y ejecutiva para que formen un justo y estable equilibrio, son tan inciertos, que su establecimiento ha sido en todos tiempos la manzana de la discordia entre los autores mas graves de la ciencia del Gobierno, y sobre cuyo importante punto se han multiplicado al infinito los tratados y los sistemas. La comision sin anticipar el lugar oportuno de esta cuestion, no duda decir que absteniéndose de resolver este problema por principio de teoría política, ha consultado en esta parte la índole de la Constitucion antigua de España, por la que es visto que el Rey participaba en algun modo de la autoridad legislativa. La primera parte comienza declarando á la Nacion española libre y soberana no solo para que en ningun tiempo y bajo de ningun pretexto puedan suscitarse dudas, alegarse pretensiones ni otros subterfugios que comprometan su seguridad é independencia, como ha sucedido en varias épocas de nuestra historia, sino tambien para que los españoles tengan constantemente á la vista el testimonio augusto de su grandeza y dignidad, en que poder leer á un mismo tiempo el solemne catálogo de sus fueros y de sus obligaciones sin necesidad de expositores ni intérpretes. La Nacion, señor, víctima de un olvido tan funesto, y no menos desgraciada por haberse dejado despojar por los Ministros y favoritos de los Reyes de todos los derechos é instituciones que aseguraban la libertad de sus individuos, se ha visto obligada á levantarse toda ella para oponerse á la mas inaudita agresion que han visto los siglos antiguos y modernos; la que se habia preparado y comenzado á favor de

la ignorancia y oscuridad en que yacian tan santas y sencillas verdades. Napoleon, para usurpar el Trono de España intentó establecer, como principio incontrastable, que la Nacion era una propiedad de la familia Real, y bajo tan absurda suposicion arrancó en Bayona las cesiones de los Reyes padre é hijo. V. M. no tuvo otra razon para proclamar solemnemente en su augusto decreto de 24 de setiembre la soberanía nacional y declarar nulas las renunciaciones hechas en aquella ciudad de la Corona de España por falta de consentimiento libre y espontáneo de la Nacion, sino recordar á esta que una de sus primeras obligaciones debe ser en todos tiempos la resistencia á la usurpacion de su libertad é independencia. La sublime y heroica insurreccion á que ha recurrido la desventurada España para oponerse á la atroz opresion que se la preparaba, es uno de aquellos dolorosos y arriesgados remedios á que no puede acudir con frecuencia sin aventurar la misma existencia política que por su medio se intenta conservar. Por tanto la experiencia acredita, y aconseja la prudencia, que no se pierda jamás de vista cuanto conviene á la salud y bien estar de la Nacion, no dejarla caer en el fatal olvido de sus derechos, del cual han tomado origen los males que la han conducido á las puertas de la muerte.

IX. La clara, sencilla, pero solemne declaracion de lo que la corresponde como Nacion libre y soberana, presentando á cada paso á los que tengan la dicha de dirigirla bajo los auspicios del Sr. D. Fernando VII y sus legítimos sucesores los derechos de la Nacion española, les indicará con toda claridad de qué modo han de usar de la autoridad que la Constitucion y el Monarca confien á su cuidado. En el ejercicio del respectivo ministerio que cada funcionario desempeña, no podrá desentenderse de tener fija la vista en la inmutable regla de una declaracion tan augusta, en donde ha de leer sus tremendas é inviolables obligaciones; los españoles de todas clases, de todas edades y de todas condiciones sabrán lo que son y lo que es preciso que sean para ser honrados y respetados de los propios y de los extraños. No es menos importante expresar las obligaciones de los españoles para con la Nacion, pues que esta debe conservarles por medio de leyes justas y equitativas todos los derechos políticos y civiles que les corresponden como individuos de ella. Así van señaladas con individualidad aquellas obligaciones de que no puede dispensarse ningun español sin romper el vínculo que le une al Estado. Como

toro de los principales fines de la Constitucion es conservar la integridad del territorio de España, se han especificado los reinos y provincias que componen su imperio en la ambos hemisferios, conservando por ahora la misma nomenclatura y division que ha existido hasta aquí. La comision bien hubiera deseado hacer mas cómodo y proporcionado repartimiento de todo el territorio español en ambos mundos, así para facilitar la administracion de justicia, la distribucion y cobro de las contribuciones, la comunicacion interior de las provincias unas con otras, como para acelerar y simplificar las órdenes y providencias del Gobierno, promover y fomentar la unidad de todos los españoles, cualquiera que sea el reino ó provincia á que puedan pertenecer. Mas esta grande obra exige para su perfeccion un cúmulo prodigioso de conocimientos científicos, datos, noticias y documentos, que la comision ni tenia ni podía facilitar en las circunstancias en que se halla el Reino. Así ha creido debía dejarse para las Cortes sucesivas el desempeño de este tan difícil como importante trabajo.

X. La declaracion solemne y auténtica de que la religion católica, apostólica, romana es y será siempre la religion de la Nacion española, con exclusion de cualquiera otra, ha debido ocupar en la ley fundamental del Estado un lugar preeminente, cual corresponde á la grandeza y sublimidad del objeto.

XI. En seguida se proclama igualmente, que el Gobierno de España es una Monarquía hereditaria, moderada por la ley fundamental, sin que en las limitaciones que la modifican pueda hacerse ninguna alteracion, sino en los casos y por los medios que señala la misma Constitucion. La comision ha mirado como esencialísimo todo lo concerniente á las limitaciones de la autoridad del Rey, arreglando este punto con toda circunspeccion, así para que pueda ejercerla con la dignidad, grandeza y desembarazo que corresponde al Monarca de la esclarecida Nacion española, como para que no vuelvan á introducirse al favor de la oscuridad y ambigüedad de las leyes las funestas alteraciones que tanto han desfigurado y hecho variar la índole de la Monarquía con grave daño de los intereses de la Nacion y de los derechos de Rey. Así se han señalado con escrupulosidad reglas fijas, claras y sencillas que determinan con toda exactitud y precision la autoridad que tienen las Cortes de hacer leyes de acuerdo con el Rey; la que ejerce el Rey para ejecutarlas y hacerlas respetar, y la que se delega á los jueces y Tribunales para la decision de todos los pleitos

y causas con arreglo á las leyes del Reino.

XII. Las circunstancias que han de concurrir en todo el que quiera ser considerado como ciudadano español han debido merecer atencion muy principal. Como individuo de la Nacion se hace partícipe de sus privilegios, y solo bajo seguridades bien calificadas pueden ser admitidos en una asociacion política los que así como son llamados á formarla, lo son tambien á conservarla y defenderla. La naturalizacion de los extranjeros en el Reino ha ocupado igualmente la atencion de la comision. El aumento de la poblacion, el fomento de la agricultura, de las artes y del comercio, de que tanto necesita la Nacion despues de una guerra asoladora; la facilidad con que las leyes del Reino han favorecido en todos tiempos su admision, la autorizaba ha abrir la puerta á su venida y establecimiento. Así lo ha hecho; pero al mismo tiempo ha limitado en ellos el ejercicio de los derechos políticos y civiles; ya porque los extranjeros no tanto son atraídos á establecerse en un pais por la ambicion de los empleos y cargos públicos, como por el irresistible aliciente de hacer honradamente su fortuna bajo el amparo y proteccion de leyes humanas y liberales; ya porque la Nacion, víctima en el dia en mucha parte del fatal pacto de familia, no debia confiar al capricho ó al favor del Gobierno la dispensacion de la mayor gracia que puede concederse en un Estado, y la que no debe extenderse jamás hasta confundir lo que solo pueden dar la naturaleza y la educacion. El inmenso número de originarios de África establecidos en los paises de Ultramar, sus diferentes condiciones, el estado de civilizacion y cultura en que la mayor parte de ellos se halla en el dia, han exigido mucho cuidado y diligencia para no agravar su actual situacion, ni comprometer por otro lado el interés y seguridad de aquellas vastas provincias. Consultando con mucha madurez los intereses recíprocos del Estado en general y de los individuos en particular, se ha dejado abierta la puerta á la virtud, al mérito y á la aplicacion para que los originarios de África vayan entrando oportunamente en el goce de los derechos de ciudad.

XIII. La apreciable calidad de ciudadano español no solo debe conseguirse con el nacimiento ó naturalizacion en el Reino, debe conservarse en conocida utilidad y provecho de la Nacion, y por eso se señalan los casos en que puede perderse ó suspenderse, para que así los españoles sean cuidadosos y diligentes en no desprenderse de lo que para ellos debe ser tan envidiable.

XIV. La comision, señor, al llegar al im-

portante punto de la representacion en Córtes, se ha detenido á meditar esta materia con toda reflexion y prolijidad: y así no puede menos de extenderse en explicar las razones que ha tenido para hacer lo que con poco acuerdo y por falta de suficiente examen se creerá tal vez por alguno innovacion. Tal es la representacion sin brazos ó estamentos. Es indudable que en España antes de la irrupcion sarracena y despues de la restauracion, los Congresos de la Nacion se componian ya de tres, ya de cuatro, y aun de dos brazos, en que se dividia la universalidad de los españoles. Pero, señor, este punto, que realmente es de hecho, es el que menos importaba apurar en la materia. Las reglas, los principios que se observaban para la clasificacion y método de eleccion de diputados, es lo que convenia averiguar. Mas por mucho que se indague y se registre, no se hallarán sino pruebas de que la asistencia de los brazos á las Córtes de la Nacion era puramente una costumbre de incierto origen, que no estaba sujeta á regla alguna fija y conocida. Los brazos variaban así en las clases, como en el número de individuos que los componian, no solo en los tres reinos, sino dentro de unos mismos en épocas diferentes. La lectura de los historiadores, de los cuadernos de Córtes, y otros monumentos de la antigüedad, dispensa á la comision de la narracion de hechos que lo comprueban. En cuanto al origen de los brazos solo indicará, que el que le parece mas verosímil, es el sistema feudal, que aunque muy suavizado, trajo á España los derechos señoriales, como es notorio. Los magnates, y los prelados dueños de tierras con jurisdiccion omnimoda, con autoridad de levantar en ellas huestes y contribuciones para acudir al Rey con el servicio de la guerra, claro está que no podian menos de asistir á los Congresos nacionales, en donde se habian de ventilar negocios graves. y que podian con mucha facilidad perjudicar á sus intereses y privilegios. Iban á ellos no por eleccion ni en representacion de ninguna clase: sino como defensores de sus fueros, y partes directa y personalmente interesadas en su conservacion. Así es que no hay un solo vestigio en la historia que indique siquiera, que los grandes y prelados eran elegidos para ir á las Córtes. O asistian por derecho personal, ó llamados por el Rey: y muchos de ellos las mas veces, como en Castilla, mas bien en calidad de consejeros que á deliberar. Jamás usaron del nombre de procuradores, porque la Nacion no les daba ningunos poderes. No hallando por lo mis-

mo la comision ninguna regla ni principio conoció que seguir en este punto, se arrojó al querer aplicar al estado presente del Reino una costumbre varia é irregular en todas las coronas de España; pues no teniendo ya en el dia los grandes, títulos, prelados etc., derechos ni privilegios exclusivos que los pongan fuera de la comunidad de sus conciudadanos, ni les dé intereses diferentes que los del pro comunal de la Nacion, faltaba la causa que en juicio de aquella dió origen á los brazos. La desigualdad con que la nobleza está distribuida en España, es un obstáculo insuperable para los Estamentos; pues si los grandes por su calidad, por ser menos en número, y vivir de ordinario en la corte, no ofrecen dificultad para su clasificacion en las elecciones, los títulos y demás nobles no titulados que la hacian impracticable, por mucha diligencia que se pudiese para arreglar su número y circunstancias respectivas de cada clase; ¿qué principio se habia de adoptar por base? El número de cada una de las clases; su riqueza ó antigüedad; la abundancia ó escasez de nobles en unas y otras provincias, ó ¿qué otra regla seria capaz de desentrañar tan complicado sistema como la jerarquía de los nobles en España? Y en los prelados ya que los de la Península pudiesen asistir sin abandonar por mucho tiempo sus diócesis, ¿los de Ultramar habian de dejarlas viudas por años enteros, y exponerlas á las funestas consecuencias de una larga peregrinacion? ¿Y sobre todo los grandes y los prelados habian de entrar tambien á componer el censo total para nombrar representantes, y poder ser elegidos entre ellos, ó excluidos de la diputacion popular, y circunscritos á las dos clases ó brazos? ¿Los nobles y los eclesiásticos en el segundo caso ya representados en sus respectivas clases, habian de entrar además en las de las universidades, y poder ser procuradores por el estado general? ¿Qué confusio-
 sion, señor, qué inmenso piélago de dificultades fácil de surcar con la palabra y la reflexion, pero muy á propósito para anegarse en él cualquiera que quisiese poner orden y arreglo en medio del conflicto de opiniones y de intereses tan encontrados! Jamás se habria presentado teoría política mas absurda que intentar remover estos obstáculos adoptando el método de señalar número fijo á los dos brazos, excluyendo de ellos la eleccion, como en el sentir de algunos se ha creido conveniente. El ejemplo de Inglaterra seria una verdadera innovacion incompatible con la índole misma de los brazos en las antiguas Cortes de España. En aquel Reino no hay en

rigor mas que una sola clase de nobleza, que son los Lores. Todo Par del Reino es por el mismo hecho miembro de la Cámara alta, sin que para ello sea elegido ni llamado: no representa sino á su persona. Los obispos, como Lores espirituales, son igualmente todos, á excepcion de uno, individuos natos del Parlamento, sin necesidad de eleccion ni convocacion; y si se cree que representan al Cuerpo eclesiástico, tambien los clérigos están excluidos de la Cámara de los comunes. Pero, señor, la razon mas poderosa, la que ha tenido para la comision una fuerza irresistible es, que los brazos, que las Cámaras, ó cualquiera otra separacion de los diputados en Estamentos, provocaria la mas espantosa desunion, fomentaria los intereses de cuerpos, excitaria celos y rivalidades, que si en Inglaterra no son hoy dia perjudiciales, es porque la Constitucion de aquel país está fundada sobre esa base desde el origen de la Monarquía por reglas fijas y conocidas desde muchos siglos; porque la costumbre y el espíritu público no lo repugnan; y en fin, señor, porque la esperiencia ha hecho útil y aun venerable en Inglaterra una institucion, que en España tendria que luchar contra todos los inconvenientes de una verdadera novedad. Tales, señor, fueron las principales razones porque la comision ha llamado á los españoles á representar á la Nacion sin distincion de clases ni estados. Los nobles y los eclesiásticos de todas las jerarquías pueden ser elegidos en igualdad de derechos con todos los ciudadanos; pero en el hecho serán siempre preferidos. Los primeros por el influjo que en toda sociedad tienen los honores, las distinciones y la riqueza; y los segundos porque á estas circunstancias unen la santidad y sabiduría tan propias de su ministerio.

XV. El método que habia sancionado la Junta central para las elecciones de los actuales diputados en Cortes, no pareció adaptable en todos sus principios á la representacion ulterior, que debe tener el Reino por la Constitucion. Así como se han suprimido los brazos por incompatibles con un buen sistema de elecciones, ó sea representativo, por la misma razon se ha omitido dar diputados á las ciudades de voto en cortes: pues habiendo sido estas la verdadera representacion nacional, quedan hoy incorporados en la masa general de la poblacion, única base que se ha tomado para en adelante. Por las mismas, y aun otras bien obvias razones, se han suprimido igualmente los diputados de Juntas. Tambien se han hecho algunas otras variaciones en el método general de eleccion

en las provincias, para evitar los inconvenientes que la experiencia ha manifestado resultar del reglamento de la Junta central. Las dos innovaciones mas principales que se han hecho, son la de no requerir precisamente para ser nombrado diputado por una provincia la naturaleza material, por no privar á la Nacion de que sean elegidos muchos dignos españoles que por haber salido de sus provincias desde niños, ó hecho ausencia de muchos años, pueden ser poco ó nada conocidos en ellas. La otra es exigir para diputado la condicion de tener una renta anual proporcionada, procedente de bienes propios.

XVI. Nada arraiga mas al ciudadano y estrecha tanto los vínculos que le unen á su patria como la propiedad territorial ó la industrial afecta á la primera. Sin embargo, la comision al ver los obstáculos que impiden en el dia la libre circulacion de las propiedades territoriales, ha creido indispensable suspender el efecto de este artículo hasta que removidos los estorbos, y sueltas todas las trabas que la encadenan, puedan las Córtes sucesivas señalar con fruto la época de su observancia. Igualmente se ha elevado la base para nombrar diputados de uno por cada cincuenta mil á setenta mil. El excesivo número de representantes hace siempre demasiado lentas las deliberaciones; y sobre todo las inmensas distancias y los crecidos gastos que ocasionan los viajes largos y duraderos, obligan en sentir de la comision, á tener estas consideraciones con los españoles de Ultramar.

XVII. Cuando la comision examinó las muchas leyes que protegian en España la libertad política y civil de los ciudadanos, indagaba con escrupulosidad y diligencia las causas que podrian haberlas hecho caer en tan lastimosa y fatal inobservancia; y al paso que halló el principal origen de estos males en el progresivo decaimiento de la celebracion de Córtes no encontró remedio mas eficaz y calificado que la reunion anual de los diputados del Reino en Córtes generales. Aragon, Navarra y Castilla fueron libres esforzados y temidos sus naturales, mientras los procuradores de estos tres reinos se juntaban frecuentemente á mirar por el bien y pro comunal de sus tierras; y el incesante conato que los Reyes de estos Estados manifestaron en varias épocas de querer diferir á plazos apartados estos Congresos y aun dispensarse de su convocacion, muestra bien claro que miraron la frecuente reunion de Córtes como un verdadero obstáculo á la arbitrariedad de su gobierno y á la usurpacion que se intentaba hacer de las libertades de

los españoles. Los abusos comienzan de ordinario por pequeñas omisiones en la observancia de las leyes, que acumulándose insensiblemente, llegan á introducir costumbre; se cita esta á poco como ejemplo; y estableciéndose sobre ello doctrina, pasa al fin á fundarse y erigirse en derecho. El juntar Córtes cada año es el único medio legal de asegurarse la observancia de la Constitucion sin convulsiones, sin desacato á la autoridad, y sin recurrir á medidas violentas, que son precisas y aun inevitables cuando los males y vicios en la Administracion llegan á tomar cuerpo y envejecerse. Las ventajas que acarreará á la Nacion el estar siempre viva y vigilante por medio de sus procuradores sobre la conducta de los funcionarios públicos, compensará abundantemente el gravámen que por otro lado pudiera experimentar en la reunion anual de sus diputados; siendo igualmente el medio mas á propósito para estrechar mas y mas los vínculos de union con los españoles de Ultramar, quienes podrán con mayor facilidad promover con eficacia el adelantamiento y mejora de aquellos felices y preciosos paises. Además el triste y lamentable estado á que el Reino quedará reducido por la asoladora irrupcion en que se le ha sumergido, destruyendo en su origen todos los canales de riqueza pública, en que la religion, la educacion y todas las instituciones morales, científicas y políticas han padecido sensible menoscabo, hace indispensable que el cuidado y vigilancia del cuerpo representativo de la Nacion reanime y restituya en cuanto sea posible á su antiguo estado todo lo que haya padecido alteracion sustancial; proporcionando al mismo tiempo las mejoras y adelantamientos que puedan convenir. Tan vastos objetos no pueden confiarse nunca al cuidado del Gobierno, que ocupado principalmente en desempeñar las obligaciones propias de su instituto, miraria siempre como secundarias estas otras atenciones. Por otro lado el inmenso poder que se ha adjudicado á la autoridad Real necesita de un freno que constantemente le contenga dentro de sus límites; de cualquiera que estos sean, reducidos á la ineficacia de una ley escrita, solo opondrán siempre una débil barrera, al que tiene á su mando el ejército, el manejo de la Tesorería y la provision de empleos y gracias, sin que la autoridad de las Córtes tenga á su disposicion medios tan terribles para traspasar los límites prescritos á sus facultades debilitados ya en gran manera por la sancion del Rey.

XVIII y XIX. La renovacion de diputados, aunque en sentir de la comision debiera ser

todos los años, no ha podido conciliarse con la inmensa distancia que separa á los españoles del Nuevo-Mundo, señaladamente los que habitando hácia las costas del Mar Pacífico ó las Islas Filipinas, necesitan emprender largas navegaciones en períodos fijos é inalterables, ó atravesar montes y desiertos de considerable extension. Por eso cada diputado en Córtes durará dos años, para dar tiempo á la venida de los procuradores de Ultramar. La eleccion de diputados y apertura de las sesiones de Córtes se ha fijado por la ley para días determinados, con el fin de evitar que el influjo del Gobierno ó las malas artes de la ambicion puedan estorbar jamás con pretextos ó alargar con subterfugios la reunion del Congreso nacional. La absoluta libertad de las discusiones se ha asegurado con la inviolabilidad de los diputados por sus opiniones, el ejercicio de su cargo, y prohibiendo que el Rey y sus Ministros influyan con su presencia en las deliberaciones: limitando la asistencia del Rey á los dos actos de abrir y cerrar el solio, así para que pueda ejercitar el paternal cuidado de honrar con su palabra á sus fieles y amados súbditos, como para dar majestad y grandeza á la reunion soberana de la Nacion y de su Monarca.

XX. Las facultades de las Córtes se han expresado con individualidad, para que en ningun caso pueda haber ocasion de disputa ó competencia entre la autoridad de las Córtes y la del Rey, que no esté fácilmente disuelta con el simple recuerdo de la Constitucion. La lectura de estas facultades anuncia por sí misma cuáles hayan sido las razones en que las funda la comision. Cada una de ellas pertenece por su naturaleza de tal modo á la potestad legislativa, que las Córtes no podrian desprenderse de ellas sin comprometer muy pronto la libertad de la Nacion. La mas leve discusion en estos puntos arrojará sobre la materia un torrente de luz muy superior á la que pudiera anticipar la comision, por lo que se dispensa de molestar sobre este particular la atencion del Congreso.

XXI. Los trámites de la discusion en los proyectos de ley y materias graves van señalados con toda individualidad, para que en ningun caso ni bajo de ningun pretexto puedan ser las leyes y decretos de las Córtes obra de la sorpresa, del calor y agitacion de las pasiones, del espíritu de faccion ó parcialidad. La parte que se ha dado al Rey en la autoridad legislativa, concediéndole la sancion, tiene por objeto corregir y depurar cuanto sea posible el carácter impetuoso que necesariamente domina en un cuerpo nume-

roso que delibera sobre materias las mas veces muy propias para empeñar al mismo tiempo las virtudes y los defectos del ánimo. Con el mismo fin se ha limitado la duracion de las sesiones en cada año para que no pasando de tres meses ó de cuatro, si hubiese próroga, llenen el importante objeto de enfrenar al Gobierno con su autoridad, sin afligirle demasiado con una prolongada permanencia. Por último, la publicidad de las sesiones, al paso que proporciona á los diputados dar un testimonio público de la rectitud, firmeza y acierto de sus dictámenes, presenta á la Nacion siempre abierto el santuario de la verdad y de la sabiduría, en donde la ansiosa juventud pueda prepararse á desempeñar algun dia con utilidad el difícil cargo de procurar por el bienestar de su patria, y la respetable ancianidad hallar ocasiones de bendecir el fruto de su prudencia y de sus consejos; alejando de este modo la oscuridad y el misterio de un cuerpo deliberativo, que por su instituto no debe ocuparse en negocios de gobierno, únicos que piden reserva, á no ser en los casos que prévia deliberacion, convenga el secreto al interés público. La fórmula con que se han de publicar las leyes á nombre del Rey, está concebida en los pocos términos mas claros y precisos: por ellos se demuestra que la potestad de hacer leyes corresponde esencialmente á las Córtes, y que el acto de la sancion debe considerarse solo como un correctivo, que exige la utilidad particular de circunstancias accidentales.

XXII. Para que la ejecucion de las leyes sea rápida y pronta, y no encuentre ningun obstáculo en su comunicacion, se circularán directamente de mandato del Rey por los secretarios respectivos del despacho á todas las autoridades, á quienes corresponda su conocimiento. En el intervalo que medie entre las sesiones de las Córtes, quedará en ejercicio una diputacion de las mismas con facultades señaladas para algunos casos, cuya importancia se recomienda por sí misma sin necesidad de mas aclaracion. Como en el curso ordinario del gobierno del Reinc pueden sobrevenir acontecimientos imprevistos, que con urgencia exijan pronto remedio, mientras se hallen de vacante ó estén ya disueltas las Córtes ordinarias ha parecido necesario proveer á estos casos por medio de la reunion de Córtes extraordinarias, que no entenderán sino en el negocio para que fueron convocadas, ni menos estorbarán la eleccion de nuevos diputados ó la instalacion de las Córtes ordinarias en las épocas en que uno y otro corresponda.

XXIII. Indicadas las razones principales en que funda la comision, el modo como ha dispuesto la primera parte de la ley fundamental para la Monarquía, pasa ahora á exponer las que la han movido á arreglar la segunda, que comprende la autoridad del del Rey.

El Rey, como jefe del Gobierno y primer magistrado de la Nacion, necesita estar revestido de una autoridad verdaderamente poderosa, para que al paso que sea querido y venerado dentro de su Reino, sea respetado y temido fuera de él de las naciones amigas y enemigas. Toda la potestad ejecutiva la deposita la Nacion por medio de la Constitucion en sus manos, para que el orden y la justicia reinen en todas partes, y para que la libertad y seguridad de los ciudadanos pueda ser protegida á cada instante contra la violencia ó las malas artes de los enemigos del bien público. Este inmenso poder, de que el Monarca se halla revestido, seria inelicaz é ilusorio si su persona no estuviese á cubierto de una inmediata responsabilidad. La historia de la sociedad humana, la prudencia y la sabiduría de los hombres y escritores mas profundos ponen fuera de toda duda la necesidad de que el entendimiento humano se rinda á la experiencia, y haga el costoso sacrificio de declarar suelta de todo cargo la persona del Rey, que por tanto debe ser sagrada é inviolable en obsequio del orden público, de la tranquilidad del Estado, y de toda la posible duracion de la institucion magnífica de una Monarquía moderada. Búsquense en otra parte los medios de asegurar el fiel desempeño de la autoridad pública sin exponer á la Nacion á los riesgos de una convulsion interior, ó las espantosas resultas de la disolucion ó de la anarquía. Lo mismo que á las Cortes es indispensable señalar al Rey sus facultades como depositario de la potestad ejecutiva; las que van explicadas con la individualidad y distincion correlativas á las que se han prefijado para las Cortes. Los fundamentos en que se apoyan son del mismo modo claros y libres de toda oscuridad: se conciben mejor que se expresan; así la comision se abstendria en este punto de molestar al Congreso, sino fuera por indicar algunas de las razones que tuvo para conceder al Rey la facultad de declarar la guerra, hacer y ratificar la paz. Si España, señor, estuviera reducida á no tener en el dia con las potencias extranjerias otras relaciones que las que guardaba en Europa en tiempo de los árabes, no hubiera habido dificultad en reservar á las Cortes aquel terrible derecho. Mas la política de los Gabinetes

ha variado hoy enteramente; y toda Nacion en los puntos que corresponden á la conservacion de su seguridad exterior necesita arreglarse á lo que hacen las demás Naciones de quienes puede recelar ó temer algun daño. Si para declarar con oportunidad una guerra fuese necesario esperar á la lenta é incierta resolucion de un Congreso numeroso, la potencia agresora ó injusta tendria la mas decidida superioridad sobre la nuestra, si á favor del secreto de una negociacion conducida con habilidad, pudiese tomar por sí solo su Gobierno las medidas convenientes para declararse con ventaja. La inmensa distancia que separa nuestras provincias de ultramar las unas de las otras, y los diversos puntos de contacto que en el dia tienen con potencias respetables, hace indispensable este sacrificio en obsequio de la seguridad del Estado, el cual no es tan grande respecto á que en los tratados de alianza ofensiva de subsidios y de comercio en que pudiera perjudicarse á la Nacion, el Rey no puede proceder á formalizarlos sin consentimiento de las Cortes.

XXIV. A continuacion se determinan con la misma puntualidad las restricciones que la autoridad del Rey no pueda menos de tener, si no ha de ser un nombre vano la libertad de la Nacion. La comision, señor, ni aun en esto pretende ser original: los fueros de Aragon le ofrecieron felizmente la fórmula de las restricciones, pues hablando de ellas dicen frecuentemente *Dominus Res non potest etc.* Cuán saludable haya de ser para lo sucesivo esta claridad y precision en el texto de la ley fundamental, no hay para que anticiparlo. Sin lanzarse la comision en conjeturas risueñas, ni dejarse seducir de prestigios filosóficos, no cree aventurar su juicio si asegura con confianza que se ha acabado para siempre esa prodigiosa multitud de intérpretes y escoliadores, que ofuscando nuestras leyes, y llenando de oscuridad nuestros Códigos, produjo el lamentable conflicto, la espantosa confusion en que á un tiempo se anegaron nuestra antigua Constitucion y nuestra libertad. La fórmula del juramento que ha de prestar el Rey ante las Cortes á su advenimiento al trono, va concebida en el estilo mas grave y decoroso, que al paso que le constituye Rey, debe hacer en su ánimo una profunda impresion acerca de cuál sea la naturaleza de sus sagradas obligaciones.

XXV. La sucesion á la Corona será uno de los objetos que arreglará la sabiduría del Congreso, segun entienda que mejor conviene á los verdaderos intereses de la Nacion, haciendo para el caso los llamamientos oportunos.

tunos despues del Sr. D. Fernando VII y su legitima descendencia, cuya augusta Real persona se halla actualmente en el goce de los derechos que la Nacion ha reconocido, proclamado y jurado del modo mas auténtico y solemne.

XXVI. La mayor edad del Rey se ha fijado en los diez y ocho años cumplidos de edad, ya para que una larga minoría no allija á la Nacion con un Gobierno interino, ya porque un reinado prematuro no la exponga á los funestos resultados de la precoz adolescencia, de la inexperiencia ó veleidad de un Rey demasiado jóven. El Reino en la menor edad del Rey se gobernará por una Regencia, cuyos individuos elegirán las Córtes; y para evitar que si no estuvieren reunidas al tiempo de la muerte del Rey, quede la Nacion sin Gobierno, habrá una Regencia provisional presidida, si la hubiere, por la Reina madre. La autoridad que ejerza la Regencia nombrada por las Córtes, será igual á la del Rey, á no ser que crean oportuno limitarla. Las Córtes al ver el interés que tiene la Nacion de que el Rey sea el padre de sus pueblos, no pueden desentenderse de mirar por su crianza y educacion: por tanto debe ser de su cargo nombrar tutor, á falta de tutela testamentaria ó legitima, como asimismo vigilar la enseñanza del Rey menor.

XXVII. La Comision ha creido debia conservar al heredero de la Corona el título de Príncipe de Astúrias, como tambien el de Infantes de las Españas á solos los hijos é hijas del Rey y del Príncipe heredero, el cual deberá ser reconocido por las Córtes luego que se les anuncie su nacimiento. En sentir de la comision, esta solemnidad debe observarse mas para conservar una costumbre introducida en su origen por la necesidad, que por ninguna utilidad ó precision que haya en el dia. Igualmente ha parecido oportuno que el Príncipe de Astúrias, luego que llegue á los catorce años, jure ante las Córtes defender la religion católica, apostólica, romana, guardar la Constitucion y obedecer al Rey; ya porque en esta edad puede contraer matrimonio y ser considerado como en estado libre, ya porque el respeto, obediencia y fidelidad á la religion, á la ley y al Rey empiezan á ser desde este tiempo los vínculos que le unen mas estrechamente á la Nacion, que algun dia habrá de gobernar.

XXVIII. La falta de conveniente separacion entre los fondos que la Nacion destinaba para la decorosa manutencion del Rey, su familia y casa, y los que señalaba para el servicio público de cada año, ó para los gastos extraordinarios que ocurrían imprevistamen-

te, ha sido una de las principales causas de la espantosa confusion que ha habido siempre en la inversion de los caudales públicos. De aquí tambien la funesta opinion de haberse creido por no pocos, y aun intentando sostener como áxioma, que las rentas del Estado eran una Propiedad del Monarca y su familia. Para prevenir en lo sucesivo tamaños males, la Nacion al principio de cada reinado fijará la dotacion anual que estime conveniente asignar al Rey para mantener la grandeza y esplendor del trono, é igualmente lo que crea correspondiente á la decorosa sustentacion de su familia; evitando por este medio no solo la poco decente y airosa solicitud de hacer periódicamente á la Nacion pedidos y donativos para ayuda de criar y establecer á sus hijos, sino tambien para que en adelante no se emplee bajo pretextos de necesidades ficticias la sustancia de los pueblos en fraguarles nuevas cadenas, como de ordinario ha sucedido siempre que la Nacion ha descuidado tomar rigurosa cuenta de la buena administracion é inversion de sus contribuciones.

XXIX. Como el órgano inmediato del Rey le forman los secretario del despacho, aquí es en donde es necesario hacer efectiva la responsabilidad del Gobierno para asegurar el buen desempeño de la inmensa autoridad depositada en la sagrada persona del Rey, pues que en el hecho existe toda en las manos de los Ministros. El medio mas seguro y sencillo, el que facilita á la Nacion poderse enterar á cada instante del origen de los males que pueden manifestarse en cualquiera ramo de la Administracion, es el de obligar á los Secretarios del despacho á autorizar con su firma cualquiera orden del Rey. La benéfica intencion, que no puede menos de animar siempre sus providencias, hace inverosímil que el Monarca se aparte jamás del camino de la razon y de la justicia, y si tal vez apareciere en sus órdenes que se desvía de aquella senda, será solo por haber sido inducido á ello contra sus paternales designios por el influjo ó mal consejo de los que olvidados de lo que deben á Dios, á la patria y á sí mismos, hayan osado abusar del sagrado lugar, en que no debe oirse sino el lenguaje respetuoso de la verdad, de la prudencia y del patriotismo. De este modo las Córtes tendrán en cualquier caso un testimonio auténtico para pedir cuenta á los Ministros de la Administracion respectiva de sus ramos. Y para asegurar por otra parte el fiel desempeño de sus cargos, y protegerlos contra el resentimiento, la rivalidad y demás enemigos de la rectitud, entereza y justifica-

cion que deben constituir el carácter público de los hombres de Estado, los Ministros no podrán ser juzgados, sin que previamente resuelvan las Córtes haber lugar á la formacion de causa.

XXX. Para dar al Gobierno el carácter de estabilidad, prudencia y sistema que se requiere: para hacer que los negocios se dirijan por principios fijos y conocidos, y para proporcionar que el Estado pueda en adelante ser conducido por decirlo así, por máximas, y no por ideas aisladas de cada uno de los Secretarios del despacho, que además de poder ser equivocadas, necesariamente son variables á causa de la amovilidad á que están sujetos los Ministros, se ha planteado un Consejo de Estado, compuesto de proporcionado número de individuos. En él se habrá de refundir el conocimiento de los negocios gubernativos que andaban antes repartidos entre los Tribunales Supremos de la corte con grande menoscabo del augusto cargo de administrar la justicia, de cuyo santo ministerio no deben ser en ningun caso distraidos los magistrados: y porque tambien conviene determinar con toda escrupulosidad, y conservar enteramente separadas las facultades propias y características de la autoridad judicial. Para dar consideracion y decoro á tan señalada reunion habrá en ella algunos individuos del clero y de la nobleza, cuyo número fijo evitará que con el tiempo se introduzcan abusos perjudiciales al objeto de su instituto; é igualmente otro suficiente de naturales de Ultramar, para que de este modo se estreche mas y mas nuestra fraternal union, pueda tener el Gobierno prontos para cualquiera resolucion todas las luces y conocimientos de que necesite, y aquellos felices países el consuelo de aproximarse por este nuevo medio al centro de la autoridad y de la madre patria. Para que la moderacion, pureza y desprendimiento que deben formar el carácter público de un representante de la Nacion no peligren al tiempo de formar las listas de los individuos que se hayan de proponer al Rey para Consejeros de Estado, no podrá elegirse á ningun diputado de las Córtes, que hacen el nombramiento. La propuesta de los individuos del Consejo hecha al Rey por las Córtes tiene por objeto dar á esta institucion carácter nacional; de este modo la Nacion no verá en el Consejo un Senado temible por su origen, ni independencia: tendrá seguridad de no contar entre sus individuos personas desafectas á los intereses de la patria; y el Rey, quedando en libertad de elegir de cada tres uno, no se verá obligado á tomar consejo de súbditos

que le sean desagradables. Ultimamente, la seguridad de no poder ser removidos de su encargo sin causa justificada los individuos del Consejo de Estado, afianza la independencia de sus deliberaciones, en que tanto puede influir el temor de una separacion violenta ó poco decorosa.

XXXI. Hasta aquí quedan sentadas las bases en que reposa el suntuoso edificio de la libertad política de la nacion. Resta ahora asegurar la libertad civil de los individuos que la componen. El íntimo enlace, el recíproco apoyo que debe haber en toda la estructura de la Constitucion, exige que la libertad civil de los españoles quede no menos afianzada en la ley fundamental del Estado, que lo está ya la libertad política de los ciudadanos. La conveniencia pública, la estabilidad de las instituciones sociales, no solo pueden permitir, sino que exigen muchas veces, que se suspenda ó se disminuya el ejercicio de la libertad política de los individuos que forman una nacion. Pero la libertad civil es incompatible con ninguna restriccion que no sea dirigida á determinada persona, en virtud de un juicio intentado, y terminado segun la ley promulgada con anterioridad. Asi es que en un Estado libre puede haber personas que por circunstancias particulares no concurren mediata ó inmediatamente á la formacion de las leyes positivas; mas estas no pueden conocer diferencia ninguna de condiciones ni de clases entre los individuos de este mismo Estado. La ley ha de ser una para todos, y en su aplicacion no ha de haber acepcion de personas.

XXXII. De todas las instituciones humanas ninguna es mas sublime ni mas digna de admiracion que la que limita en los hombres la libertad natural, sujetándolos al suave yugo de la ley. A su vista todos aparecen iguales, y la imparcialidad con que se observen las reglas que prescribe, será siempre el verdadero criterio para conocer si hay ó no libertad civil en un Estado. Por lo mismo, uno de los principales objetos de la Constitucion es fijar las bases de la potestad judicial, para que la administracion de justicia sea en todos los casos efectiva, pronta é imparcial. Esto es, que en los juicios civiles el que litiga con derecho y buena fé puede estar seguro que obtendrá lo que solicita, ó que no será despojado de su propiedad, ó perjudicado en sus intereses; y en las causas criminales, convencido el delincuente, que nada podrá salvarle de la pena condigna á su delito; y el inocente, seguro de hallar en la ley todos los medios de triunfar de las artes, malicia y poder de sus enemigos.

XXXIII. La comision, señor, si no fuera por no alargar demasiado este discurso, presentaría á V. M. nuevos testimonios de la salubridad y profundidad de la antigua Constitucion de España en el esencialísimo punto de la libertad civil. Ninguna nacion de Europa puede acaso presentar leyes mas filosóficas ni liberales, leyes que protejan mejor la seguridad personal de los ciudadanos, su honor y su propiedad, si se atiende á la antigüedad de su establecimiento, que la admirable Constitucion de Aragon. La sublime institucion del Justicia mayor, y el modo de instruir el proceso criminal, serán siempre el objeto de la admiracion de los sábios, del anhelo de los hombres de bien, y del ardiente deseo de los que aman de corazon la libertad nacional. Diferentes leyes criminales de Cataluña, Navarra y Castilla son igualmente admirables por el espíritu y humanidad que respiran, por la exquisita diligencia con que hacen ver se buscaba por nuestros antiguos legisladores el modo de asegurar la recta administracion de justicia: y en las civiles brilla sobre manera el ingenio, la sagacidad y aun el espíritu de sutileza así de los legisladores, como de los comentadores y prácticos que las explicaron, introduciendo estos en el foro su doctrina á la par de las mismas leyes, que ganó en no pocos casos igual y aun mayor autoridad con grave perjuicio de la claridad y uniformidad, que debe ser el distintivo de una sabia legislacion.

XXXIV. No se detendrá la comision en referir las causas que se han opuesto á los saludables efectos de estas leyes en todos los reinos de España, porque son las mismas que destruyeron la libertad política, y de que ha indicado bastante en la primera parte de este discurso. Sin embargo, no puede menos de exponer que la falta de enlace y uniformidad de los diferentes Códigos de nuestra legislacion, que están hoy dia en observancia, demuestra hasta la evidencia la necesidad de establecer un sistema de legislacion, sin el cual son inútiles ó ineficaces las mejores leyes civiles y criminales. Como toca á la Constitucion determinar el carácter que ha de tener en una nacion el Código general de sus leyes positivas, deben establecerse en ella los principios de que han de derivarse aquellas y cualesquiera otras disposiciones, que bajo el nombre de ordenanzas ó reglamentos hayan de dirigir las transacciones públicas y privadas de los individuos de una nacion entre sí, ó las que celebren con los súbditos de otros Estados con quienes puedan entablar comunicacion. Estas reglas no solo han de servir para la formacion de

nuevas leyes, sino para dirigir á las Córtes en la derogacion ó reforma de las que sean incompatibles con el nuevo sistema planteado por la Constitucion.

XXXV. La reforma de las leyes criminales es sobre todo muy urgente; porque teniendo por objeto las acciones en que pueden interesarse inmediatamente la vida, la libertad y la buena reputacion de las personas, toda dilacion en su mejora es de la mas grave trascendencia, todo error puede acarrear daños irreparables. De aquí se sigue que el arreglo de la potestad judicial en toda la extension que comprende la administracion de justicia en lo civil y criminal exige mucha escrupulosidad y circunspeccion. No bastan leyes que arreglen los derechos entre los particulares, que castiguen los delitos y protejan la inocencia: es necesario que lo que disponen sea, segun se ha dicho, ejecutado irremisiblemente con prontitud é imparcialidad.

XXXVI. Dos grandes escollos son los que hacen peligrar la administracion de justicia, segun el órden establecido en nuestra jurisprudencia. Escollos que no es posible evitar del todo mientras las luces no se difundan, y en tanto que la libre discusion de las materias políticas no pongan á la Nacion en estado de comparar el sistema judicial de otras naciones con el que se observa en España. Los Tribunales colegiados y perpetuidad de sus jueces, y la facultad que tienen estos de calificar por sí mismos el hecho sobre que han de fallar, sujetan sin duda alguna á los que reclaman las leyes al duro trance de hallarse muchas veces á discrecion del juez ó Tribunal. La comision no entrará á examinar las razones en que se fundan los que apoyan é impugnan uno y otro sistema. Encargada por V. M. de arreglar un proyecto de Constitucion para restablecer y mejorar la antigua ley fundamental de la Monarquia, se ha abstenido de introducir una alteracion sustancial en el modo de administrar la justicia, convencida de que reformas de esta trascendencia han de ser el fruto de la meditacion, del exámen mas prolijo y detenido, único medio de preparar la opinion pública para que reciba sin violencia las grandes innovaciones. Pero al mismo tiempo la comision ha creído que la Constitucion debia dejar abierta la puerta para que las Córtes sucesivas, aprovechándose de la experiencia, del adelantamiento, que ha de ser consiguiente al progreso de las luces, puedan hacer las mejoras que estimen oportunas en el importantísimo punto de administrar la justicia.

XXXVII. La sabia distribucion que V. M.

ha hecho del ejercicio de la potestad soberana en su memorable decreto de 24 de setiembre de 1810, ha facilitado á la comision el fijar los cánones que han de arreglar en adelante el importantísimo punto de la potestad judicial. La comision, segun el plan que se ha propuesto, delega esta autoridad á los Tribunales, comprendiendo bajo este nombre no solo á los Cuerpos colegiados, sino tambien á los jueces ordinarios, que en rigor constituyen tribunal, cuando acompañados de los Ministros que las leyes señalan, ejercen el ministerio de la justicia.

XXXVIII. Para que la potestad de aplicar las leyes á los casos particulares no pueda convertirse jamás en instrumento de tiranía, se separan de tal modo las funciones de juez de cualquiera otro acto de la autoridad soberana, que nunca podrán ni las Córtes ni el Rey ejercerlas bajo ningun pretexto. Tal vez podrá convenir, en circunstancias de grande apuro, reunir por tiempo limitado la potestad legislativa y ejecutiva; pero en el momento que ambas autoridades ó alguna de ellas reasumiese la autoridad judicial, desaparecería para siempre no solo la libertad política y civil, sino hasta aquella sombra de seguridad personal, que no puede menos de establecer los mismos tiranos si quieren conservarse en sus Estados. Por eso se prohíbe expresamente que pueda separarse de los Tribunales el conocimiento de las causas, y ni las Córtes ni el Rey podrán avogarlas, ni mandar abrir nuevamente los juicios ejecutoriados. La ley sola debe señalar el remedio para subsanar los perjuicios que puedan seguirse de los fallos de los jueces. Y si el ciudadano se viese expuesto como hasta aquí á ser separado del Tribunal competente, ó á sufrir las penalidades de un litigio indefinido, perdería toda confianza, y solo vería en las leyes un lazo tendido á su docilidad, á su candor y buena fé. La observancia de las formalidades que arreglan el proceso es tan esencial, que en ellas ha de estar fundado el criterio de la verdad; y en el instante en que la autoridad soberana pudiese dispensarla en lo mas mínimo, no solo se comprometería el acierto en las sentencias, sino que la desconfianza se apoderaría del ánimo de los que pusiesen sus vidas y sus intereses en manos de los jueces ó magistrados.

XXXIX. La meditacion mas profunda apenas es bastante á explicar el origen de la sublime institucion de los jueces; y acaso el mayor sacrificio que pueden hacer los hombres está en someterse á lo que decidan sus iguales en las cosas que pueden ser mas caras y esenciales á su existencia ó conserva-

cion. Esta reflexion hace ver cuánto importa que los jueces no puedan ser distraídos en ningun caso de las augustas funciones de su ministerio. Y solo la lamentable confusion de principios á que habia venido á parar el verdadero estudio de la jurisprudencia, ó las falsas ideas de la ambicion pudieron presentar como propias de la magistratura otras ocupaciones que no fuesen puramente las de juzgar. Nuestros legisladores no desconocieron tan saludable doctrina, y por eso estaba tambien determinada por las antiguas leyes de Aragon y de Castilla la verdadera autoridad de los jueces y Tribunales. Esta es preciso que se extienda á hacer que se lleven á efecto sus decisiones para que no sean ilusorias, sin que por eso pueda influir de ningun modo en la suspension ó retardo de su ejecucion. Cualquiera facultad en esta parte introduciría en los Tribunales la mas funesta arbitrariedad. Como la libertad civil desaparece en el momento en que nace la desconfianza, es preciso apartar del ánimo de los súbditos de un Estado la idea de que el Gobierno pueda convertir la justicia en instrumento de venganza ó de persecucion: así se prohíbe que nadie pueda ser juzgado por comisiones especiales, sino por el Tribunal establecido con anterioridad por la ley.

XL. La comision no necesita detenerse á demostrar que una de las principales causas de la mala administracion de justicia entre nosotros es el fatal abuso de los fueros privilegiados introducido para ruina de la libertad civil y oprobio de nuestra antigua y sabia Constitucion. El conflicto de autoridades que llegó á establecerse en España en el último reinado, de tal modo habia anulado el imperio de las leyes, que casi parecia un sistema planteado para asegurar la impunidad de los delitos. Tal vez el estudio entero de la jurisprudencia, y el artificioso método del foro no ofrecian á los jueces y oficiales de justicia tantas dificultades como el solo punto de las competencias. ¡Qué subterfugios, qué dilaciones, qué ingeniosas arbitrariedades no presentan los fueros particulares á los litigantes temerarios: á los jueces lentos ó poco delicados, á los ministros de justicia que quieren poner á logro el caudal inmenso de su cavilosa sagacidad! La sola nomenclatura y discernimiento de los fueros privilegiados exigen un estudio particular y meditado. La justicia, señor, ha de ser efectiva; y para ello su curso ha de estar expedito. Por lo mismo la comision reduce á uno solo el fuero ó jurisdiccion ordinaria en los negocios comunes, civiles y criminales. Esta gran reforma bastará por sí sola á restablecer el respeto debi-

do á las leyes y á los Tribunales, asegurará sobremedera la recta administracion de justicia, y acabará de una vez con la monstruosa institucion de diversos Estados dentro de un mismo Estado, que tanto se opone á la unidad de sistema en la administracion á la energia del Gobierno, al buen orden y tranquilidad de la Monarquía.

XXI. La comision ha creido al mismo tiempo que no debia hacerse alteracion en el fuero de los clérigos hasta que las dos autoridades civil y eclesiástica arreglasen este punto conforme al verdadero espíritu de la disciplina de la Iglesia española, y á lo que exige el bien general del Reino; no obstante que en el Fuero Juzgo era desconocida la exencion de litigar y ser reconvenidos ó acusados los eclesiásticos en los negocios comunes, civiles y criminales ante los jueces y Tribunales ordinarios.

XLII. Del mismo modo ha creido indispensable dejar á los militares aquella parte del fuero particular que sea necesaria para conservar la disciplina y subordinacion de las tropas en el ejército y armada. Pero tambien reconoce que solo la ordenanza es capaz de arreglar este punto tan importante, de modo que se concilien el objeto de la institucion militar, y el respeto debido á las leyes y á las autoridades. El soldado es un ciudadano armado solamente para la defensa de su patria; un ciudadano, que suspendiendo la tranquila é inocente ocupacion de la vida civil, va á proteger y conservar con las armas, cuando es llamado por la ley, el orden público en lo interior, y hacer respetar la Nacion siempre que los enemigos de afuera intenten invadirla ú ofenderla.

XLIII. Como la integridad de los jueces es el requisito mas esencial para el buen desempeño de su cargo, es preciso asegurar en ellos esta virtud por cuantos medios sean imaginables. Su ánimo debe estar á cubierto de las impresiones que pueda producir hasta el remoto recelo de una separacion violenta. Y ni el desagrado del Monarca, ni el resentimiento de un Ministro han de poder alterar en lo mas mínimo la inexorable rectitud del juez ó magistrado. Para ello nada es mas á propósito que el que la duracion de su cargo dependa absolutamente de su conducta, calificada en su caso por la publicidad de un juicio. Mas la misma seguridad que adquieren los jueces en la nueva Constitucion, exige que su responsabilidad sea efectiva en todos los casos en que abusen de la tremenda autoridad que la ley les confia; y la comision no puede menos de llamar con este motivo la atencion del Congreso hácia la urgente ne-

cesidad de establecer con claridad y discernimiento por medio de leyes particulares la responsabilidad de los jueces, determinando expresamente las penas que correspondan á los delitos que puedan cometer en el ejercicio de su ministerio. Aunque la potestad judicial es una parte del ejercicio de la soberanía delegada inmediatamente por la Constitucion á los Tribunales, es necesario que el Rey como encargado de la ejecucion de las leyes en todos sus efectos, pueda velar sobre su observancia y aplicacion. El poder de que está revestido y la absoluta separacion é independencia de los jueces, al paso que forman la sublime teoría de la institucion judicial, producen el maravilloso efecto de que sean obedecidas y respetadas las decisiones de los Tribunales, y por eso sus ejecutorias y provisiones deben publicarse á nombre del Rey considerándole en este caso como el primer magistrado de la Nacion.

XLIV. La igualdad de derechos proclamada en la primera parte de la Constitucion en favor de todos los naturales originarios de la Monarquía, la uniformidad de principios adoptada por V. M. en toda la extension del vasto sistema que se ha propuesto, exigen que el Código universal de leyes positivas sea uno mismo para toda la Nacion: debiendo entenderse que los principios generales sobre que han de estar fundadas las leyes civiles y de comercio, no pueden estorbar ciertas modificaciones que habrán de requerir necesariamente la diferencia de tantos climas como comprende la inmensa extension del Imperio español y la prodigiosa variedad de sus territorios y producciones. El espíritu de liberalidad, de beneficencia y de justificacion ha de ser el principio constitutivo de las leyes españolas. La diferencia, pues, no podrá recaer en ningun caso en la parte esencial de la legislacion. Y esta máxima tan cierta y tan reconocida no podrá menos de asegurar para en adelante la uniformidad del Código universal de las Españas.

XLV. Delegada por la Constitucion á los Tribunales la potestad de aplicar las leyes, es indispensable establecer, para que haya sistema, un centro de autoridad en que vengán á reunirse todas las ramificaciones de la potestad judicial. Por lo mismo se establece en la corte un Supremo Tribunal de justicia, que constituirá este centro comun. Su principal atributo debe ser el de la inspeccion suprema sobre todos los jueces y Tribunales encargados de la administracion de justicia.

XLVI. Al paso que sus facultades no deben estorbar el libre desempeño de las funciones de aquellos, ha de estar autorizado

para vigilar la escrupulosa observancia que hagan de las leyes como tambien juzgar por sí mismo las causas que versen sobre hacer efectiva la responsabilidad de los jueces y magistrados superiores en los casos determinados por la ley. El principio que ha guiado á la comision á establecer este sistema, exige que el Tribunal Supremo de justicia conozca de los juicios y causas instauradas en las provincias en el solo caso de nulidad cometida en la tercera instancia. Su conocimiento ha de limitarse á si se han observado ó no las leyes que arreglan el proceso, debiendo abstenerse de intervenir en lo sustancial de la causa, que habrá de remitirse al Tribunal competente para que ejecute lo que haya lugar. El recurso de nulidad, y el juicio de responsabilidad que en su consecuencia puede originarse en el Tribunal Supremo de justicia, asegurarán el celo y justificacion de los Tribunales superiores de provincia, que no podrán menos de mirar con respeto una autoridad suprema, ante la cual habrán de responder de las faltas ó delitos que cometieren. La inmediacion al gobierno del Supremo Tribunal de justicia, la dignidad y circunstancias de los principales empleados, persuaden la necesidad de que entienda en las causas criminales que se promovieron contra ellos, como asimismo de la residencia de los demás empleados públicos que estuvieren sujetos á ella por las leyes, de los recursos de fuerza de los Tribunales eclesiásticos superiores de la corte, é igualmente de todo lo relativo al Real patronato siempre que sea de naturaleza contenciosa. Las demás facultades que se les señalan deben considerarse como atributo propio de un Tribunal Supremo, y centro de la autoridad judicial.

XLVII. La comision establece que todas las causas, así civiles como criminales, hayan de terminarse dentro del territorio de cada Audiencia. Con este motivo cree necesario hacer presente las razones en que funda su sistema, para que así queden justificadas las alteraciones que resulten de esta innovacion. La comision ha mirado como uno de los mayores perjuicios que pueden experimentar los individuos de una nacion, el que se les obligue á acudir á largas distancias para obtener justicia en los negocios que les ocurran así civiles como criminales. Es imponderable la desigualdad que resulta entre las personas poderosas por sus riquezas y valimiento, y las que carecen de estas ventajas, que por desgracia siempre son en mayor número, cuando es necesario apelar con recursos extraordinarios á Tribunales estable-

cidos fuera de la provincia. Otras circunstancias, que aunque de igual trascendencia no aparecen sino en el momento de interponerse los recursos extraordinarios, ni pueden ser bien conocidos sino de las personas que á su pesar, y en grave perjuicio de sus intereses tienen que renunciar á aquel remedio, aumentan grandemente aquella desventaja.

XLVIII. La celeridad en la formacion de los procesos y terminacion de ellos en todas sus instancias, la facilidad de asegurar las pruebas, de aclarar las dudas, de reponer los vicios, de deshacer las equivocaciones que hayan podido introducirse en el origen y progreso de las causas, han sido para la comision razones de mucho peso para que dejase de adoptar el único remedio que puede cortar de raiz tan graves males. La primera alteracion que resulta de este sistema es la supresion de todos los casos de corte. Si se examina con atencion el origen de este privilegio, no puede menos de hallarse que el principal motivo de su establecimiento fué muy laudable. El poderoso influjo de los señores territoriales, de las jurisdicciones exentas, y el riesgo de ser atropelladas las personas desvalidas por su edad ú otras circunstancias, siempre que tuviesen que litigar con tan terribles adversarios ante los jueces ó Alcaldes ordinarios, hizo indispensable que se las protegiese concediéndoseles el derecho de no poder ser reconvenidos sino en los Tribunales superiores. La liberalidad de los Reyes, la ambicion y vanidad de cuerpos y particulares, hizo extensivo este privilegio á los que no necesitaban de aquella proteccion.

XLIX. La nueva ley fundamental que se establece, sentando por principio la igualdad legal de los españoles, la imparcial proteccion que á todos dispensa la Constitución, y los medios que sanciona para afianzar la observancia de las leyes, hace inútil é inoportuno el privilegio de caso de corte. Las reformas ulteriores que se harán en el Código civil y criminal llevarán al cabo la importante obra de perfeccionar la legislacion, con lo cual se experimentarán todas las ventajas que presenta esta parte del proyecto.

L. Instaurándose, pues, la primera instancia de todas las causas civiles y criminales sin distincion alguna en los Juzgados ordinarios, es consiguiente que se fenezcan todas en la Audiencia de la provincia, adoptando el principio tan recomendado por nuestras leyes de que todos los juicios se den por terminados con tres sentencias. Esta disposicion altera el orden establecido por la célebre ley de Segovia en el recurso cono-

cido con el nombre de segunda suplicacion. Es bien sabido que el motivo principal por que se introdujo fué el no haberse acostumbrado antes del reinado de D. Juan el primero admitir tercera instancia de los pleitos que comenzaban ante los oidores ó en el Consejo. Pareció entonces conveniente establecer este recurso, que es peculiar de España, y el cual se interpone á la persona misma del Rey, limitándole solo á las causas cuya cuantía asciende á tres mil doblas en propiedad, y seis mil en posesion. El sistema de la comision solo altera el órden; pues suprimidos los casos de córte, puede haber lugar en su caso á este recurso en las Audiencias respectivas, en donde se puede observar todo lo prevenido por la ley de Segovia, y demás que se han promulgado despues en la materia, ó hacer en este punto las alteraciones que parezcan convenientes. Hay otro recurso extraordinario que debe quedar suprimido, tanto por el abuso que se ha hecho de él en muchas ocasiones, como porque se halla en realidad refundido en el de nulidad, que habrá de interponerse ante el Tribunal Supremo de Justicia. La comision, señor, habla del recurso de injusticia notoria, de incierto origen, y verdaderamente perjudicial en todos tiempos, por haberse llegado á admitir en muchas ocasiones en todos los casos en que se intentaba, como se ve por la consulta del Consejo Real de 8 de febrero de 1700. El auto acordado de 17 del mismo mes y año dió nueva forma á este recurso, admitiéndole en los casos en que no tuviese lugar la segunda suplicacion. El principado de Cataluña no comenzó á usarle hasta el año de 1740. En el reino de Navarra le han resistido constantemente; y á la verdad, la variedad de opiniones sobre los casos en que debe admitirse, la ineficacia del depósito que se exige de los litigantes para contener su temeridad en interponerle, demuestran hasta la evidencia que es perjudicial, y que el recurso de nulidad ideado por la comision comprende todas las ventajas que pueden apegarse, sin que esté expuesto á los inconvenientes del recurso de injusticia notoria. Leyes particulares podrán arreglar el recurso de nulidad con toda la perfeccion de que es susceptible, adaptándose en sus disposiciones á la base que sienta la Constitucion.

LI. Establecido ya que todas las causas civiles y criminales hayan de terminarse dentro del territorio de las Audiencias, es indispensable asegurar el acierto y justificacion de sus decisiones. Y así se dispone, que los jueces que hayan fallado en la segunda instancia no podrán asistir á la vista del mis-

mo pleito en la tercera. A la Constitucion solo corresponde sentar esta base. Leyes y reglamentos especiales serán los que faciliten la organizacion de los Tribunales conforme á este principio.

LII. La division del territorio de la Monarquía, indicada en el art. 12 de este proyecto, se hace cada vez mas necesaria para que pueda tener su efecto lo que dispone la Constitucion en diferentes lugares. Entre todas las razones que la reclaman, ninguna con mas urgencia que la administracion de justicia. ¿Cómo pueden esperarla los pueblos que entre el cúmulo de dificultades que opone nuestro defectuoso método de enjuiciar, se encuentran no pocas veces con el insuperable obstáculo de haber de acudir á Tribunales que distan tal vez sesenta leguas? No, señor, no espere V. M. que el primero y mas esencial ramo del servicio público pueda llegar á desempeñarse, sin que la mano poderosa de la autoridad soberana acometa la grande obra de restaurar al Reino, abrazando á un mismo tiempo el grandioso sistema de la Constitucion. Las dificultades son innumerables, las circunstancias parece que multiplican los obstáculos. Sin embargo, arédrese enhorabuena el genio mezquino y limitado de un Ministro, la timidez y apocamiento de un Gobierno débil ó indolente; mas no así la grandeza y extension de miras de un Congreso que tiene la gloria incomparable de representar á la Nacion española.

LIII. La comision omite por tan obvias las razones en que se fundan las demás facultades concedidas á los Tribunales Superiores ó Audiencias territoriales, y pasa á indicar el método que establece para las de Ultramar.

LIV. Las escandalosas dilaciones que se advierten en causas originadas ó ventiladas en los diferentes Juzgados ó Tribunales de aquellas provincias, con motivo de las apelaciones y recursos interpuestos ante los Supremos Consejos de la Córte, las intolerables vejaciones, los crecidos gastos y otros innumerables perjuicios que experimentan los naturales y habitantes de aquellas importantes provincias, preciso es que tengan ya término. La igualdad de derechos, la de proteccion y de mejoras, decretada por el Congreso, deben ya realizarse; y la administracion de justicia fundada en los filosóficos y liberales principios, consignados por V. M. en todos los decretos que tienen por objeto la felicidad de aquellos preciosos paises, comenzará desde luego á restañar las heridas que el rechazo de la revolucion de la madre pátria, unido al desórden y arbitrariedad del

anterior Gobierno, desgraciadamente han abierto en algunas provincias de la España de Ultramar:

LIV. Para estrechar mas y mas el indisoluble vínculo que debe unir las con las de la Península, se establece que las Audiencias de Ultramar, al paso que queden expeditas para el fenecimiento de las causas con inclusion del recurso de nulidad, hayan de acudir al Supremo Tribunal de justicia en los casos que convenga hacer efectiva la responsabilidad de los jueces que hubiesen faltado á la observancia de las leyes que arreglen el proceso en todo género de causas en que entendiéren. Del mismo modo remitirán periódicamente al Supremo Tribunal de justicia listas puntuales de todas las causas que ante ellas pudieren ó se hubieren fenecido, por cuyo medio se facilita la inspeccion y vigilancia sobre el fiel desempeño de sus funciones, se asegura la responsabilidad de sus magistrados, y se logra el importante efecto del respeto y subordinacion al centro de la autoridad suprema judicial.

LVI. Como la índole de nuestra antigua Constitucion se conserva casi inalterable en la sábia y popular institucion de los jueces ó Alcaldes elegidos por los pueblos, y como nada puede inspirar á estos mas confianza que el que nombren por sí mismos de entre sus iguales las personas que hayan de terminar sus diferencias, la comision ha creido debia ser muy circunspecta en el arreglo de la jurisdiccion ordinaria, depositada casi generalmente por nuestras leyes en los jueces de realengo y señorío, cuyas jurisdicciones en el dia felizmente se hallan ya incorporadas en una sola. No obstante, la necesidad de que la justicia se administre con prontitud y uniformidad, y lo difícil que es conseguirlo, en tanto que por carga concejil, y no por ministerio propio de su oficio, se vean los vecinos de los pueblos obligados á entender en todos los ramos de la Administracion de justicia, han movido á la comision á generalizar el sistema de jueces letrados para la primera instancia mientras permanezca unida en unas mismas personas la facultad de calificar el hecho y aplicar la ley. La jurisdiccion ordinaria, confiada á jueces elegidos cada año, no puede menos de producir en la finalizacion de las causas retardos, injusticias y prevaricaciones por parte de los jueces, á quienes será muy fácil eludir en cualquier caso la responsabilidad. Los negocios particulares y ocupaciones domésticas de los vecinos de los pueblos que resulten elegidos jueces ó Alcaldes, distraerán siempre su atencion en perjuicio de la adminis-

tracion de justicia; por no hablar ahora de los inconvenientes que trae á las partes el haber de acudir á asesor, tal vez muy distante ó de poca confianza.

LVII. Para plantear el método general de jueces letrados bien conoce la comision que debe preceder la division del territorio de las provincias principales entre sí. Esta operacion y la de arreglar las facultades, así de los jueces letrados como de los Alcaldes de los pueblos, no corresponde á la ley fundamental. Leyes y reglamentos especiales ordenarán todos estos puntos, y las Córtes sucesivas, mas favorecidas de las circunstancias en que puedan hallarse que lo está V. M. en las presentes, y auxiliadas por la buena voluntad y energía del Gobierno, allanarán cuantas dificultades puedan presentarse. Las demás facultades y obligaciones que se expresan, respecto de estos jueces ordinarios, se establecen en la Constitucion, no solo porque debe perfeccionarse un sistema dirigido principalmente á la pronta y recta administracion de justicia, asegurando de un modo infalible la responsabilidad de los jueces y Tribunales, sino tambien porque son los principios fundamentales en que deben estribar cualesquiera leyes ó reglamentos que convenga formar para la organizacion de estos Juzgados.

LVIII. La potestad judicial queda del todo organizada bajo los principios establecidos; pero al mismo tiempo es preciso considerar que la naturaleza de ciertos negocios, el método particular que conviene al fomento de algunos ramos de industria, juntamente con los reglamentos y ordenanzas, que mas que al derecho privado pertenecen al derecho público de las naciones, pueden exigir Tribunales especiales y de un arreglo particular. Los consulados, los asuntos de presas, y otros incidentes de mar, las Juntas ó Tribunales de minería en América, y tal vez el complicado y vicioso sistema de rentas, mientras no se reforme desde su raiz, podrán requerir una excepcion de la regla general de Tribunales. La naturaleza variable de sus negocios es la que ha de decidir si deben subsistir ó extinguirse; y esto nunca puede ser objeto de la Constitucion, sino de leyes particulares.

LIX. A la ley fundamental no solo corresponde arreglar las relaciones de los Tribunales entre sí, sino tambien fijar los principios á que deben atenerse los jueces en la administracion de justicia, tocando á las leyes positivas determinar las reglas para formalizar el proceso, y todos los demás actos propios del ejercicio de la magistratura. El derecho que tiene todo individuo de una so-

ciudad de terminar sus diferencias por medio de jueces árabitos, está fundado en el incontrastable principio de la libertad natural. Nuestra antigua Constitucion y nuestras leyes le han reconocido y conservado en medio de las vicisitudes que han padecido desde la Monarquía goda. Y el espíritu de concordia y liberalidad que hacen tan respetable la institucion de jueces árabitos, persuade cuán conveniente sea que los Alcaldes de los pueblos ejerzan el oficio de conciliadores en los asuntos civiles é injurias de menor momento, para prevenir en cuanto sea posible que los pleitos se originen ó se multipliquen sin causa suficiente. Las reglas que han de observar los Alcaldes en estos casos, se dirigen á evitar que esta precaucion no sea ilusoria. Leyes doctrinales, solo manifiestan el buen deseo del legislador; mas la obra queda incompleta si la ley no comprende dentro de sí misma el medio de asegurar su observancia.

LX. Como todas las diferencias en asuntos civiles que no pueden arreglarse por el intermedio de árabitos ó conciliadores han de llegar á ser examinadas por jueces ó Tribunales, segun el método prevenido en las leyes, es preciso fijar un término al progreso de las causas. El principio que establece que las causas civiles deben darse por fenecidas con tres sentencias de Tribunal competente, en cuya formacion no haya intervenido vicio sustancial, está fundado en razones muy filosóficas. Lo que no hayan podido recabar en tres sucesivas investigaciones jueces diferentes, guiados por determinados trámites hasta formar el suficiente criterio legal, no es de presumir que lo califiquen con mas acierto ulteriores indagaciones, y si el espíritu de desconfianza, ó mas bien de cavilacion, hallase todavía que desear despues de tres solemnes resoluciones, no sabe la comision por qué no se habria de establecer un proceder indefinido. Nuestras leyes civiles han mirado como irrevocable lo decidido por tres sentencias, y solo la arbitrariedad, el desórden y confusion á que todo habia llegado entre nosotros, pudo haber profanado doctrina tan santa y respetable.

LXI. Si la administracion de justicia en lo civil necesita que la Constitucion sienta los principios que han de ordenar los juicios civiles, ¿con cuánta mas razon no exige esto en lo criminal? La naturaleza de las causas criminales, como ha dicho ya la comision, reclama con preferencia la atencion y sabiduría del legislador. La primera diligencia con que se anuncia un juicio criminal, se dirige tal vez á privar á un ciudadano de su

libertad. La pérdida de la vida y de la reputacion le sigue muy de cerca, y la reparacion de perjuicios en caso de error ó delito de parte de los jueces no está reservada al poder humano. Vea ahora V. M. si el cuadro que ofrece entre nosotros un Código criminal, lleno de leyes promulgadas por la ferocidad y barbarie de los conquistadores del Norte, por la inquietud, depravacion y crueldad de los Emperadores romanos, y por el espíritu guerrero de invasion y caballería, que dominó por muchos años durante la irrupcion sarracena, unido al sistema de arbitrariedad y tiranía, introducido por Reyes extranjeros contra nuestros antiguos fueros y libertades, y á despecho de la integridad y firmeza de nuestros jueces y magistrados; si este cuadro, repite la comision, clama ó no por que se le sustituya otro que represente la imágen de dulzura, de liberalidad y beneficencia que corresponde á la generosidad y grandeza de la Nación española. La comision, señor, no cree ser injusta ni exajerada en lo que dice, ni menos inconsequente por lo que ha expuesto antes en su discurso. Leyes humanas, sí, muy humanas y filosóficas aparecen en nuestros Códigos para gloria de sus autores, honra y loor de la Nacion entera. Pero por desgracia tambien es muy cierto que se hallen desfiguradas y aun injuriadas por muchas otras que no han sido derogadas todavía. Su inobservancia solo es debida al espíritu del siglo y á la sabiduría y sentimientos de humanidad de nuestros magistrados, que en este caso han procurado desempeñar su ministerio desentendiéndose de lo prevenido por leyes incompatibles con la mansedumbre y religiosidad de nuestras costumbres.

LXII. Las reglas que establece la comision como principios que han de guiar á las Córtes sucesivas en la formacion y reforma del Código criminal, se recomiendan por sí mismas. No son teorías ni seductoras ilusiones de filósofos aislados ó novadores. Muchas de ellas están sacadas de las leyes criminales de Aragon y de Castilla. Otras son el fruto de la meditacion y de la experiencia, usadas no solo en los Tribunales de Grecia y Roma, sobre cuyos principios está calcada, por mas que quiera disimularse, gran parte de nuestra jurisprudencia, sino tambien por naciones felices y opulentas, que tienen como nosotros la misma forma de Gobierno monárquico moderado, amantes de sus instituciones, y poco amigas de novedades peligrosas. La necesidad de prevenir las prisiones arbitrarias, de contener el escandaloso abuso de los arrestos injustos, de las dilaciones y lar-

gas en la formacion de los procesos criminales, reclaman con urgencia una reforma radical. La publicidad de los juicios, á lo menos desde la conclusion del sumario, la efectiva responsabilidad de los jueces y demás ministros é individuos de justicia, leyes que arreglen con claridad y precision los trámites del proceso; hé aquí los principios constitutivos del sistema criminal, cuya planta ofrece la comision.

LXIII. Se abstiene de exponer todas las razones en que funda los artículos que comprende esta parte de su obra. Solo indicará algunos de los principios en que se apoyan las alteraciones que pueden llamar algun tanto la atencion. Tal será quizá lo que establece respecto de no exigir juramento al reo en la confesion de su delito. La comision se da el parabien de hallar establecida en una provincia de España la innovacion que propone. El juramento con que procura arrancarse de la boca del reo la confesion de su delito, no se exige en el principado de Cataluña. La sabiduría que supone esta costumbre, hace el elogio del legislador ó Tribunal que la introdujo, y apenas se concibe como haya dejado de generalizarse en un pais católico la religiosa práctica de redimir al reo de un conflicto, en que tiene tal vez que optar entre el patíbulo ó el perjurio.

LXIV. El intolerable y depravador abuso de privar á un reo de su propiedad, es casi simultáneo en los mas de los casos al acto del arresto; y bajo el pretexto especioso de asegurar el modo de resarcir daños y perjuicios, derechos á la Cámara del Rey, ó acaso por otros motivos mas ilegales ó injustos, se comete una vejacion, cuyo enorme peso recae, no ya sobre el arrestado sino sobre su inocente familia, que desde el momento del secuestro empieza á pagar la pena de delitos que no ha cometido. La comision tal vez creyó que debia proscribirse para siempre el embargo de bienes: mas para evitar los perjuicios que podrian seguirse de una regla demasiado general, ha preferido fijar el principio que debe seguir la ley cuando limite el secuestro á los casos y á las cantidades que sean rigurosamente justas. Por el mismo principio de no hacer trascendental al inocente la pena de los delitos de otros, se prohibe para siempre la confiscacion de bienes.

LXV. La comision deja insinuado en otra parte la conveniencia que resultaria de perfeccionar la administracion de justicia, separando las funciones que ejercen los jueces en fallar á un mismo tiempo sobre el hecho y el derecho. Mas al paso que no duda que algun

dia se establezca entre nosotros la saludable y liberal institucion de que los españoles puedan terminar sus diferencias por jueces elegidos de entre sus iguales, en quienes no tengan que temer la perpetuidad de sus destinos, el espíritu de cuerpo de Tribunales colegiados, y en fin, el nombramiento del Gobierno, cuyo influjo no puede menos de alejar la confianza por la poderosa autoridad de que está revestido, reconoce la imposibilidad de plantear por ahora el método conocido con el nombre de juicio de *jurados*. Este admirable sistema, que tantos bienes produce en Inglaterra, es poco conocido en España. Su modo de enjuiciar es del todo diferente del que se usa entre nosotros; y hacer una revolucion total en el punto mas difícil, mas trascendental y arriesgado de una legislacion, no es obra que pueda emprenderse entre los apuros y agitaciones de una convulsion política. Ni el espíritu público, ni la opinion general de la Nacion, pueden estar dispuestos en el dia para recibir sin violencia una novedad tan sustancial. La libertad de la imprenta, la libre discusion sobre materias de gobierno, la circulacion de obras y tratados de derecho público y jurisprudencia, de que hasta ahora habia carecido España, serán el verdadero y proporcionado vehículo que lleve á todas las partes del cuerpo político el alimento de la ilustracion, asimilándole al estado y robustez de todos sus miembros. Por tanto, la comision ha creido que en vez de desagradar á unos é irritar á otros con una discusion prematura ó acaso impertinente, debia dejar al progreso natural de las luces el establecimiento de un sistema, que solo puede ser útil cuando sea fruto de la demostracion y del convencimiento. Por eso deja á las Cortes sucesivas la facultad de hacer en este punto las mejoras que crean convenientes. Mas el mismo tiempo no puede menos de indicar que el método de juzgar por *jurados*, no solo no fué desconocido por nuestras antiguas leyes, como se ve por la siguiente cláusula del fuero municipal de Toledo, que dice: «Todos sus juicios dellos sean juzgados, segun el Fuero Juzgo, ante diez de sus mejores, é mas nobles, é mas sábios dellos, que sean siempre con el Alcalde de la ciudad;» sino que aun hoy dia está de cierto modo en práctica en algunas provincias del Reino. En la isla de Ibiza y Formentera el asesor nombrado por el Gobierno, no puede por sí solo sentenciar pleito alguno sin la concurrencia de dos ó mas hombres, que pueden llegar hasta el número de seis, tomados de todes estados. Esta institucion, aunque no es en rigor idéntica

tica en todos sus trámites á los *jurados* de Inglaterra, está indudablemente fundada sobre los mismos principios. Y la insaculación que en Ibiza se hace de un número proporcionado de vecinos para sacar de entre ellos los que acompañan al asesor, y los que con el título de prohombres eligen las partes para concurrir con el juez delegado en la apelación, el cual tambien ha de ser natural y vecino del país, no deja duda sobre que el origen de este método, tan liberal y justificado, viene del que se observaba en Roma antes de la tiranía de los Emperadores. El *Album Judicum*, señor, de donde tomaban los ciudadanos romanos los jueces del hecho, no puede ser desconocido de ninguno que esté medianamente versado en la jurisprudencia antigua de Roma. Por lo mismo, la comision se cree en el caso de recomendar esta admirable institucion de una provincia del Reino, para que el Congreso no desconozca un método que tal vez convendrá algun dia generalizarlo á todas las demás.

LXVI. Por último, señor, todas las leyes humanas, aunque sean dictadas con la mayor sabiduría, están sujetas á sufrir la irresistible contradiccion de circunstancias imprevistas. Roma, en medio del imperio de sus leyes y del religioso respeto á sus instituciones, acudia muchas veces al extraordinario recurso de suspender á un mismo tiempo todas las leyes de la República. La actual situacion de España hace ver que puede haber momentos en que la suspension de una ley salve el Estado, ó su observancia comprometa su misma libertad é independencia. La comision, señor, ha creido necesario que la Constitución autorice á las Cortes ordinarias para que puedan, en circunstancias de grande apuro, y cuando la seguridad del Estado lo exigiere, suspender algunas de las formalidades que deben proceder al arresto de delinquentes ó personas sospechosas, porque no de otro modo podria frustrarse una conspiracion tramada contra la libertad de la Nación. Pero al mismo tiempo cree tambien que esta suspension solo puede ser útil por tiempo limitado; y así las Cortes nunca podrán autorizar al Gobierno á que abuse de una facultad que pudiera convertirse en daño de ellas mismas, ó causar la ruina del Estado. Por esta razon, el suspender la observancia de las formalidades, no podrá pasar de un plazo señalado.

LXVII. Sentadas ya las bases de la libertad política y civil de los españoles, solo falta aplicar los principios reconocidos en las des primeras partes de la Constitución, arreglando el gobierno interior de las provincias y

de los pueblos conforme la índole de nuestros antiguos fueros municipales. En ellos se ha mantenido de algun modo el espíritu de nuestra libertad civil, á pesar de las alteraciones que han experimentado las leyes fundamentales de la Monarquía con la introduccion de dinastías extranjeras. No es fácil resolver si el haberse conservado en los pueblos los Ayuntamientos bajo formas mas ó menos populares, y en algunas provincias la reunion periódica de Juntas, como sucede en las Vascongadas, reino de Navarra y principado de Asturias, etc., procede de que el Gobierno que proscribió la celebracion de Cortes hubiese respetado el resentimiento de la Nación, ó bien creido conveniente alucinarla, dejando subsistir un simulacro de libertad que se oponia poco á la usurpacion que habia hecho de sus derechos políticos. La comision deja gustosa la resolucion de este erudito problema á los que hayan de entrar en adelante en la gloriosa carrera de escribir la historia nacional con la exactitud é imparcialidad de hombres libres, y se limita solo á presentar mejoradas nuestras instituciones municipales para que sirvan de apoyo y salvaguardia á la ley fundamental de la Monarquía. No entrará tampoco en el origen de las comunidades ó asociaciones libres de mucha parte de Europa que establecieron en la Edad media, á pesar del feudalismo, el gobierno municipal de muchas ciudades bajo forma popular. Lo que sí es indudable es que en España se siguió la misma costumbre segun iba progresando la restauracion. Los Ayuntamientos de las ciudades y pueblos de los diferentes reinos de la Península, instituidos para el gobierno económico de sus tierras, estaban fundados en el justo principio del interés de la comunidad. Pero el espíritu señorial que dominaba en todas las instituciones de aquella época destruía la naturaleza de unos establecimientos que deben reposar únicamente sobre la confianza de los pueblos en los individuos á quienes encomiendan la direccion de sus negocios. La voz significativa de Ayuntamiento explica por si misma la índole y objeto de la institucion. Por lo mismo repugnaba que se introdujesen en estas corporaciones á favor del nacimiento, de algun privilegio ó prerogativas, personas que no fuesen libremente elegidas por los que concurrían á su formacion y las autorizaban con facultades. De aquí la principal causa del poco fruto que se ha sacado de unas reuniones tan recomendables por su naturaleza y por los fines á que se dirigen.

LXVIII. La comision cree que generali-

zando los Ayuntamientos en toda la extension de la Monarquía bajo reglas fijas y uniformes, en que sirva de base principal la libre eleccion de los pueblos, se dará á esta saludable institucion toda la perfeccion que puede desearse. Su objeto es fomentar por todos los medios posibles la prosperidad nacional, sin que los reglamentos y providencias del Gobierno se mezclen en dar á la agricultura y á la industria universal el movimiento y direccion que solo toca al interés de los particulares. Los vecinos de los pueblos son las únicas personas que conocen los medios de promover sus propios intereses; y nadie mejor que ellos es capaz de adoptar medidas oportunas siempre que sea necesario el esfuerzo reunido de algunos ó muchos individuos. El discernimiento de circunstancias locales, de oportunidad, de perjuicio ó de conveniencia solo puede hallarse en los que estén inmediatamente interesados en evitar errores ó equivocaciones, y jamás se ha introducido doctrina mas fatal á la prosperidad pública, que la que reclama el estímulo de la ley ó la mano del Gobierno en las sencillas transacciones de particular á particular, en la inversion de los propios para beneficio comun de los que los cuidan, producen y poseen, y en la aplicacion de su trabajo y de su industria, objetos de utilidad puramente local, y relativa á determinados fines.

LXIX. La comision, convencida de que los Ayuntamientos podrán desempeñar debidamente las obligaciones de su instituto cuando se reúnan en ellos la probidad, el interés y las luces, no se ha detenido en destruir para siempre el obstáculo que se oponia á tan feliz combinacion, estableciendo que en adelante la eleccion de sus individuos sea libre y popular en toda la Monarquía. Este es uno de los casos en que el interés de cuerpos ó particulares debe ceder al interés público. V. M. al abolir los señoríos ha derogado virtualmente los regimientos hereditarios, los perpétuos y realengos. Su conservacion es incompatible con la naturaleza de los Ayuntamientos, y repugnante al sistema de emancipacion á que han sido elevados los pueblos desde el memorable decreto de abolicion de señoríos. Los que tengan el privilegio de ser individuos de Ayuntamientos por causa onerosa, ó por remuneracion de servicios, podrán reclamar la indemnizacion correspondiente en el modo y forma que se establezca para las incorporaciones de esta especie. Mas estos derechos, cualquiera que sea su origen ó naturaleza, no deben ser preferidos al que tiene la Nacion entera para

mejorar unos establecimientos de que dependen inmediatamente la prosperidad de sus pueblos, y cuya viciosa organizacion lo hace en el dia poco provechosos.

LXX. Establecido el principio de que los Ayuntamientos hayan de formarse en su totalidad por eleccion libre de los pueblos, las leyes arreglarán todo lo que corresponda á su régimen interior por medio de ordenanzas ó reglamentos. La comision ha creido que solo deben comprenderse en la Constitucion principios fundamentales que eviten para siempre los abusos que se habian introducido por el tiempo y la ignorancia, ó por la abierta usurpacion de los poderosos. La amovilidad de los regidores y sindicos, y la prohibicion de que los empleados puedan ser elegidos individuos de los Ayuntamientos, deben ser bases inalterables. La renovacion periódica de los primeros proporcionará que se aprovechen con mas facilidad las luces, la probidad y demás buenas calidades de los vecinos de los pueblos, al paso que evitará la preponderancia perpétua que ejercen en ellos los mas ricos y ambiciosos. La exclusion de los segundos protegerá la libertad de la eleccion y el ejercicio de las funciones de los Ayuntamientos, sin que el Gobierno deje de conservar expedita su accion en todo lo que corresponda á su autoridad por medio de Jefes políticos, pudiendo estos presidir en ellos siempre que residan en pueblos de Ayuntamiento.

LXXI. Tal ha parecido á la comision el medio de hacer útil una institucion tan antigua, tan nacional y tan análoga á nuestro carácter, á nuestros usos y costumbres. Las facultades que el proyecto concede á los Ayuntamientos son propias de su instituto. Hasta el dia han ejercido la mayor parte de ellas, y las demás son de la misma naturaleza, y tienen tambien por objeto el beneficio de los pueblos.

LXXII. Confiado el Gobierno superior de las provincias al cuidado de Jefes políticos y militares, y á la direccion de los Tribunales bajo nombre de acuerdos, sujetos unos y otros á la inspeccion de los Consejos Supremos, se daba ocasion á que la prosperidad y fomento de aquellas dependiese del impulso del Gobierno que equivocadamente se subrogaba, en lugar del interés personal, ó que se promoviesen por medios complicados y poco liberales á causa del espíritu contencioso que necesariamente habia de dominar en providencias dadas ó aprobadas por Tribunales, aun cuando procediesen como cuerpos gubernativos.

LXXIII. Separadas las funciones de los

jueces y Tribunales de todo lo que no sea administrar la justicia, segun queda establecido en el arreglo de la potestad judicial, el régimen económico de las provincias debe quedar confiado á cuerpos que estén inmediatamente interesados en la mejora y adelantamientos de los pueblos de su distrito. Cuerpos que formados periódicamente por la eleccion libre de las mismas provincias, tengan además de su confianza las luces y conocimientos locales que sean necesarios para promover su prosperidad, sin que la perpetuidad de sus individuos ó su directa dependencia del Gobierno pueda en ningun caso frustrar el conato y diligencia de los pueblos en favor de su felicidad. La comision, señor, ha procurado meditar este punto con la detencion y escrupulosidad que exige su importancia. Se ha hecho cargo de cuanto enseña la historia y la experiencia en nuestra Monarquía para establecer el justo equilibrio que debe haber entre la autoridad del Gobierno, como responsable del orden público y de la seguridad del Estado, y la libertad de que no pueda privarse á los súbditos de una Nacion de promover por sí mismos el aumento y mejora de sus bienes y propiedades.

LXXIV. El Gobierno ha de vigilar escrupulosamente la observancia de las leyes. Este debe ser su primer cuidado, mas para mantener la paz y tranquilidad de los pueblos no necesita introducirse á dirigir los intereses de los particulares con providencias y actos de buen gobierno. El funesto empeño de sujetar todas las operaciones de la vida civil á reglamentos y mandatos de autoridades, ha acarreado los mismos y aun mayores males que los que se intentaban evitar.

LXXV. La comision reconoce que nada es mas difícil que destruir errores consagrados por el tiempo y la autoridad; mas al mismo tiempo confía que el influjo de las luces y del desengaño habrán de triunfar de todas las preocupaciones. El verdadero fomento consiste en proteger la libertad individual en el ejercicio de las facultades físicas y morales de cada particular segun sus necesidades ó inclinaciones. Para ello nada mas á propósito que cuerpos establecidos segun el sistema que se presenta. Este sistema reposa en dos principios. Conservar expedita la accion del Gobierno para que pueda desempeñar todas sus obligaciones, y dejar en libertad á los individuos de la Nacion, para que el interés personal sea en todos y en cada uno de ellos el agente que dirija sus esfuerzos hácia su bienestar y adelantamiento. Conforme á ellos propone la comision que en las provincias el

Gobierno económico de ellas esté á cargo de una Diputacion compuesta de personas elegidas libremente por los pueblos de su distrito y del Jefe político y el de la Hacienda pública. Estos últimos como individuos natos de la Diputacion conservarán en ejercicio la autoridad del Rey para que no pueda ser desconocida ó poco respetada en todo lo que pertenece á sus facultades. Sin que deba recelarse que las de la Diputacion puedan nunca exceder los límites que se les prescribe, pues en caso de abuso ó resistencia á las órdenes del Gobierno, podrá este suspender á los vocales, dando parte á las Cortes para resolver lo que convenga. De esta disposicion resultará un freno recíproco, que conservará el justo equilibrio que pueda desearse.

LXXVI. Los demás vocales de la Diputacion nombrados al mismo tiempo y en la propia forma que los diputados en Cortes, se ocuparán bajo la inspeccion del Gobierno de todo lo que pueda promover la prosperidad de la provincia en general, y los intereses de sus pueblos en particular. Su periódica renovacion, y las circunstancias que han de concurrir para el nombramiento, atraerán á un centro comun las luces y los conocimientos que puedan existir entre los habitantes de las provincias respectivas.

LXXVII. Combinada la accion del Gobierno con el interés de las provincias en cada una de sus Diputaciones, no podrán menos de cesar las estorsiones y fraudes, el reparto y recaudacion de los impuestos, y el perjudicial influjo de los falsos principios y equivocadas providencias en punto de economía pública, que emanaban de autoridades que por su instituto jamás debieron ser llamadas á dirigir ni promover los intereses de los particulares.

LXXVIII. Como el cargo de vocal de las Diputaciones no puede dejar de reputarse gravoso á los que sean elegidos, y como el ejercicio continuo de sus facultades fomentaria tal vez competencias que deben evitarse, ha parecido conveniente reducir á noventa en cada año el número de sus sesiones, dejando á las Diputaciones el cuidado de distribuir las segun entiendan ser mas conveniente.

LXXIX. Las facultades de las Diputaciones son conformes en todo á la naturaleza de cuerpos puramente económicos. Su accion queda subordinada á las leyes, sin que en nada puedan entorpecer, y menos oponerse á las órdenes y providencias del Gobierno, estando este autorizado para suspender á los vocales en casos de abuso ó desobediencia.

La inspeccion que se les atribuye en algunos puntos relativos á contribuciones no tiene mas objeto que el prevenir en tiempo fraudes, estorsiones y violencias. Tampoco debe mirarse como expuesta á abusos la facultad de proponer arbitrios para objetos de utilidad comun de la provincia. La independencia de los vocales de las Dipulaciones, su arraigo y amobilidad seria bastante á precaver un daño irreparable, cual serian derramas y repartos á los pueblos en perjuicio de sus intereses. Mas en todo caso, no pasando sus propuestas de la línea de proyectos, las Córtes al examinarlos atajarán el mal en su origen.

LXXX. La distancia de las provincias de Ultramar ha obligado á la comision á guardar en este punto algunas consideraciones con aquellos países. La urgencia de obras públicas, de utilidad ó necesidad bien calificada, resiste á la dilacion que resultaria de esperar en todos los casos la aprobacion de las Córtes. Por tanto, ha parecido indispensable autorizar en tales circunstancias á aquellas Dipulaciones, para que puedan usar desde luego de los arbitrios propuestos, interviniendo para ello el expreso asenso del jefe de la provincia. Este correctivo se hace necesario para suplir el prévio consentimiento de la autoridad legislativa, y cuya falta pudiera en algunas ocasiones ser perjudicial á pueblos tan distantes.

LXXXI. Ordenado del modo que queda expuesto el ejercicio de la potestad soberana de la Nacion es preciso proceder al arreglo de una de las principales facultades de la autoridad legislativa, como que de ella depende dar vida y movimiento á la máquina del Estado. El ejercicio de esta facultad es, señor, el regulador de la potestad ejecutiva, contra cuyo abuso no puede oponerse remedio mas pronto y eficaz. Tal es el establecimiento de impuestos y contribuciones, derecho inseparable de la facultad de hacer las leyes. La Nacion no puede delegarla sino á sus representantes, á no dejar de ser libre. El usurpador mas audaz sucumbiria con sus legiones, si no arrancase de los pueblos que oprime el forzado consentimiento de imponer contribuciones á su arbitrio. Dos siglos van corridos desde que la violencia, el dolo y la adulacion se reunieron para despojar á los españoles del derecho imprescriptible de otorgar libremente á sus Reyes las contribuciones. Una revolucion espantosa los ha restituido, como por milagro, á su antigua libertad. No permita V. M. que la ignorancia, la depravacion y la vileza los sumerja de nuevo en la odiosa esclavitud con que todavía se les amenaza.

LXXXII. El esplendor y dignidad del

trono y el servicio público en todas sus partes exigen dispendios considerables, que la Nacion está obligada á pagar. Mas esta debe ser libre en determinar la cuota y la naturaleza de las contribuciones, de donde han de provenir los fondos destinados á ambos objetos. Para que esta obligacion se cumpla por parte de los pueblos, de tal modo que pueda combinarse el desempeño con el progreso de su prosperidad, y para que la Nacion tenga siempre en su mano el medio de evitar que se convierta en daño suyo lo que solo debe emplearse en promover su felicidad, y proteger su libertad é independencia, se dispone que los Córtes establecerán ó confirmarán anualmente todo género de impuestos y contribuciones. Su repartimiento se hará entre todos los españoles sin distincion ni privilegio alguno con proporcion á sus facultades, pues que todos están igualmente interesados en la conservacion del Estado.

LXXXIII. Como el Gobierno, por la naturaleza de sus facultades, puede reunir datos, noticias y conocimientos suficientes para formar idea exacta del estado de la Nacion en general y del particular de cada provincia en todo lo relativo á la agricultura, industria y comercio, debe estar autorizado no solo para presentar á las Córtes el presupuesto de gastos que crea necesarios al servicio público, así ordinario como extraordinario, sino tambien para indicar por medio de proyectos los medios que crea mas oportunos para cubrirlos.

LXXXIV. Decretadas por las Córtes las contribuciones, y cuando ocurriere la distribucion entre las provincias de las directas, su recaudacion ó inversion debe quedar á cargo del Gobierno bajo su responsabilidad. Para que esta sea efectiva en cualquiera caso, nada es mas á propósito que el que todos los fondos destinados al servicio del Estado se reunan en una sola Tesorería. Este sistema evita el desorden, facilita las operaciones, y asegura la cuenta y razon, sin cuyos requisitos no puede haber confianza. El Rey, como jefe del Estado, podrá aplicar segun lo crea conveniente al mejor servicio de la Nacion los fondos públicos puestos á su disposicion por las Córtes. Pero estas no pueden desentenderse de vigilar sobre la justa inversion de lo que verdaderamente constituye la sustancia de los pueblos. Para ello es indispensable que el tesorero mayor no haga pago alguno que no sea en virtud de decreto del Rey, refrendado por el Secretario del despacho de Hacienda, de cuyo arreglo pende quedar asegurada la responsabilidad de cualquiera malversacion. La Tesorería mayor por su parte, in-

tervenida en las cuentas generales por las Contadurías de valores y de distribucion, las presentará para su exámen á la Contaduría mayor de cuentas sin cuya formalidad no merecerán fé alguna en las Córtes. Estos establecimientos deben arreglarse con toda escrupulosidad por leyes especiales no perteneciendo á la Constitucion sino indicar sus atributos.

LXXXV. Aprobada por las Córtes la cuenta general de Tesorería mayor, en que han de comprenderse el rendimiento anual de todas las contribuciones y su inversion, se imprimirá y publicará, para que la Nacion se entere por si misma del mérito y extension de sus sacrificios, de su utilidad y necesidad. De este juicio comparativo podrá además deducir el verdadero estado de su prosperidad, su tendencia y progreso, como tambien la seguridad ó peligro en que puedan hallarse su libertad é independencia.

LXXXVI. Una de las precauciones con que debe asegurarse la pureza en la inversion de los caudales públicos, es el evitar que bajo de ningun pretexto puedan intervenir en su manejo otras manos que las de la autoridad á quienes la ley le confia. El menor abuso en esta parte acarrearía el desórden y confusion en que se ha visto sumergido el Reino por espacio de tantos años.

LXXXVIII. Los falsos principios adoptados por los economistas de los tiempos de ignorancia para facilitar á los Gobiernos medios de satisfacer su insaciable voracidad, han introducido el fatal sistema de aduanas interiores: su asistencia es incompatible con la libertad nacional, con la prosperidad de los pueblos, y con el decoro de una Constitucion. V. M. debe apresurar el momento de poner en práctica un artículo que las prohibe para siempre fuera de las fronteras y puertos de mar, ya que el vicioso sistema de rentas que existe en el dia obliga á suspender hasta su reformalos efectos de tan importante medida.

LXXXIX. Otra obligacion no menos sagrada para la Nacion que las que quedan indicadas es el pago de la deuda pública reconocida. Las Córtes penetradas de cuanto importa á la dignidad y prosperidad nacional conservando ileso el carácter de religiosidad y pureza que en todos tiempos se ha atribuido á los españoles en sus tratos y convenios, deberán dar el ejemplo de respetarlos por su parte, procurando por todos los medios que sean compatibles con la situacion del Reino la progresiva extincion de la deuda pública, sin dejar de promover y proteger todas las operaciones que puedan contribuir á inspirar

confianza, y asegurar mas y mas el crédito sobre bases sólidas y permanentes. El principio mas esencial que debe guiarlas hácia tan importante objeto, es el de poner á cubierto del influjo del Gobierno todos los establecimientos que sean relativos á la deuda pública. Su total separacion é independencia de los fondos de Tesorería general ha de estar asegurada con la inmediata proteccion de las Córtes y los destinados al pago de la deuda nacional deben ser tan religiosamente respetados, que se crean inaccesibles á la autoridad del Rey, y aun en los casos de mayor apuro. Bajo de estos principios es fácil organizar un establecimiento que sea verdaderamente nacional, que restablezca el crédito, asegure la confianza, proporcione que el Gobierno mismo halle recursos siempre que haya de acudir á préstamos ó anticipaciones.

XC. Explicados los fundamentos sobre que reposa el derecho que tienen las Córtes de otorgar anualmente las contribuciones é impuestos, y el modo de asegurar su inversion, conviene hablar de otra facultad, que tampoco una nacion libre puede delegar sino al Cuerpo de sus representantes. Tal es el levantamiento de tropas de mar y tierra para la defensa interior y exterior del Estado.

XCI. Mientras que subsista en Europa y fuera de ella el fatal sistema de ejércitos permanentes, y sea este el objeto principal del gobierno de sus Estados, y en tanto que la ambicion desapoderada de los conquistadores siga alucinando á los pueblos con la supuesta necesidad de defenderlos de los enemigos exteriores para conhonestar así sus opresores designios, preciso es que la comision introduzca en su proyecto las bases del sistema militar que debe adoptarse por la Constitucion. Se ha separado para ello de la situacion actual de la Nacion. Porque solo el entusiasmo, el ódio á la dominacion extranjera, y el característico orgullo de los indómitos españoles puede dirigir una guerra que por lo extraordinario de sus circunstancias desconoce las reglas comunmente recibidas entre las potencias mas militares. Los principios de la comision son relativos á un estado de perfecta independencia.

XCII. Como el servicio militar es una contribucion personal sobre los súbditos de un Estado, tanto mas gravosa al que la sufre cuando le sujeta á leyes mas duras, disminuyendo en parte su libertad civil, es preciso que las Córtes la otorguen por tiempo limitado, y en virtud de utilidad ó necesidad calificada. Este principio, y la sagrada obligacion que aquellas tienen de no permitir se

convierta en instrumento de opresion lo que está destinado para conservar su independencia y libertad, exigen que las Cortes fijen todos los años el número de tropas de mar y y tierra que hayan de estar en ejercicio, como tambien el modo de levantarlas que crea mas conveniente. Por igual razon es propio de las Cortes la formacion y aprobacion de ordenanzas, establecimientos y arreglo de escuelas militares, y todo lo que corresponda á la mejor organizacion, conservacion y progreso de los ejércitos y armadas que se mantengan en pié para la defensa del Estado. Y como no puede dudarse que esta interesa igualmente á todos los súbditos que componen la Nacion, ningun español podrá excusarse del servicio militar cuando sea llamado por la ley, sin faltar á una de las primeras obligaciones que le impone la patria.

XCIII. El ejército permanente debe considerarse destinado principalmente para la defensa de la patria en los casos ordinarios de guerra con los enemigos. Mas en los de invasion ó de combinacion de ejércitos numerosos para ofender á la Nacion, necesita esta un suplemento de fuerza que la haga invencible. Este recurso, verdaderamente extraordinario, solo puede hallarse en una milicia nacional bien organizada, que en caso necesario pueda oponer al enemigo una fuerza irresistible por su número y pericia militar. Una ordenanza especial podrá arreglar en cada provincia un cuerpo de milicias proporcionado á su poblacion, que haciendo compatible el servicio análogo á su institucion con las diversas ocupaciones de la vida civil, ofrezca á la Nacion el medio de asegurar su independencia si fuese amenazada por enemigos exteriores, y su libertad interior en el caso de que atentase contra ella algun ambicioso.

XCIV. Como la milicia nacional ha de ser el baluarte de nuestra libertad, seria contrario á los principios que ha seguido la comision en la formacion de este proyecto el dejar de prevenir que se convirtiese en perjuicio de ella una institucion creada para su defensa y conservacion. El Rey, como jefe del ejército permanente, no debe disponer á su arbitrio de fuerzas destinadas á contrarrestar, si por desgracia ocurriere, los fatales efectos de un mal consejo. Por lo mismo no debe estar autorizado para reunir cuerpos de milicia nacional sin otorgamiento expreso de las Cortes. En punto tan grave y trascendental toda precaucion parece poca, y el menor descuido seria fatal á la Nacion.

XCV. El Estado, no menos que de soldados que le defiendan, necesita de ciudadanos

que ilustren á la Nacion, y promuevan su felicidad con todo género de luces y conocimientos. Así que, uno de los primeros cuidados que deben ocupar á los representantes de un pueblo grande y generoso es la educacion pública. Esta ha de ser general y uniforme, ya que generales y uniformes son la religion y las leyes de la Monarquía española. Para que el carácter sea nacional, para que el espíritu público pueda dirigirse al grande objeto de formar verdaderos españoles, hombres de bien, y amantes de su patria, es preciso que no quede confiada la direccion de la enseñanza pública á manos mercenarias, á génios limitados, imbuidos de ideas falsas ó principios equivocados, que tal vez establecerian una funesta lucha de opiniones y doctrinas. Las ciencias sagradas y morales continuarán enseñándose segun los dogmas de nuestra santa religion y la disciplina de la Iglesia de España; las políticas conforme á las leyes fundamentales de la Monarquía sancionadas por la Constitucion, y las exactas y naturales habrán de seguir el progreso de los conocimientos humanos, segun el espíritu de investigacion que las dirige, y las hace útiles en su aplicacion á la felicidad de las sociedades. De esta sencilla indicacion se deduce la necesidad de formar una inspeccion suprema de instruccion pública, que con el nombre de Direccion general de estudios, pueda promover el cultivo de las ciencias, ó por mejor decir, de los conocimientos humanos en toda su extension. El impulso y la direccion han de salir de un centro comun, si es que han de lograrse los felices resultados que debe prometerse la Nacion de la reunion de las personas virtuosas é ilustradas, ocupadas exclusivamente en promover bajo la proteccion del Gobierno el sublime objeto de la instruccion pública. El poderoso influjo que esta ha de tener en la felicidad futura de la Nacion, exige que las Cortes aprueben y vigilen los planes y estatutos de enseñanza en general, y todo lo que pertenezca á la erecion y mejora de establecimientos científicos y artísticos.

XCVI. Como nada contribuye mas directamente á la ilustracion y adelantamiento general de las naciones, y á la conservacion de su independencia que la libertad de publicar todas las ideas y pensamientos que puedan ser útiles y beneficiosos á los súbditos de un Estado, la libertad de imprenta, verdadero vehiculo de las luces, debe formar parte de la ley fundamental de la Monarquía, si los españoles desean sinceramente ser libres y dichosos.

XCVII. Hasta aquí comprende la comision en su proyecto los principios elementales de la Constitucion española, dispuestos como ha parecido mas conveniente para que tengan el orden y método de que por desgracia habian carecido hasta el dia nuestras leyes fundamentales. Preciso es arreglar el modo como debe conservarse y alterarse la Constitucion, cosas ambas aunque al parecer contradictorias, inseparables en la realidad.

Las Córtes, como encargadas de la inspeccion y vigilancia de la Constitucion, deberán examinar en sus primeras sesiones si se halla ó no en observancia en todas sus partes. A este fin nada puede conspirar mejor que el que todo español pueda representar á las Córtes al Rey sobre la inobservancia ó infraccion de la ley fundamental. El libre uso de este derecho es el primero de todos en un Estado libre. Sin él no puede haber patria, y los españoles llegarían bien pronto á ser propiedad de un señor absoluto en lugar de súbditos de un Rey noble y generoso. Mas como no es dado á los hombres llegar á la perfeccion en ninguna de sus obras, como es inevitable que el influjo de las circunstancias tenga mucha parte en todas sus disposiciones, y aquellas pueden variar sensiblemente de una á otra época, es indispensable reconocer la dura necesidad de variar alguna vez lo que debiera ser inalterable. Pero al paso que la comision admite como axioma lo que lleva indicado, no puede menos de hacer algunas reflexiones acerca de materia tan grave y delicada.

XCVIII. El principal carácter de una Constitucion ha de ser la estabilidad derivada de la solidez de los principios en que reposa. La naturaleza de esta ley, las circunstancias que acompañan generalmente á toda Nacion cuando la recibe, y por lo mismo las que pueden sobrevenir en su alteracion, dan á conocer que debe ser muy circunspecta en decretar reformas en su ley fundamental. La experiencia es la única antorcha que puede guiarla sin peligro en el tenebroso espacio que media casi siempre entre el error y el acierto. La experiencia sola puede demostrar la necesidad de una reforma. Mas para calificarla bien, ¿qué dificultades no se presentan, qué consecuencias tan funestas no se prevén para la Nacion, si esta se equivoca en su juicio! La comision, señor, se ha visto en un conflicto para arreglar el último título de su obra. Por una parte la necesidad de calmar las inquietudes que haya suscitado el escandaloso abuso en variar

su Constitucion tantos Estados de Europa desde la revolucion francesa; por otra la necesidad de dejar abierta la puerta á las enmiendas y mejora de la que sancione V. M., sin introducir en ella el principio destructor de inestabilidad, exija mucha circunspeccion y detenimiento. Sin embargo, el que hasta pasados ocho años despues de puesta en ejecucion en todas sus partes, no puedan las Córtes proponer ninguna reforma, tiene su fundamento en la prudencia y en el conocimiento del corazon humano. Jamás correrá mayor riesgo la Constitucion que desde el momento en que se anuncie, hasta que planteado el sistema que establece, empiece á consolidarse disminuyendo el espíritu de aversion y repugnancia que la contradice. Los resentimientos, las venganzas, las preocupaciones los diversos intereses, y hasta el hábito y la costumbre, todo, todo se conjurará contra ella. Por lo mismo es necesario dar tiempo á que calme la agitacion de las pasiones, y se debiliten los esfuerzos de los que las resisten. De lo contrario se equivocarán fácilmente los efectos de una posicion fomentada y sostenida por los que se suponen agraviados en el nuevo arreglo, con defectos ó errores de una Constitucion, que en realidad no podrá experimentarse sino despues de restablecido el orden y la tranquilidad. Los tramites por que debe pasar la proposicion de reforma, despues de aprobada en las Córtes hasta su final otorgamiento, han parecido necesarios atendida la naturaleza y trascendencia de la ley fundamental.

XCIX. Tal es, señor, el proyecto de Constitucion para la Nacion española, que la comision presenta á la discusion del Congreso. Examínele V. M. con el espíritu de imparcialidad é indulgencia que es inseparable de su sabiduria. La comision está segura de haber comprendido en su trabajo los elementos que deben constituir la felicidad de la Nacion. Su mayor conato ha sido recoger con toda diligencia, segun lo ha expuesto ya en este discurso, de entre todas las leyes del código, y de los demás que se publicaron desde la restauracion hasta la decadencia de nuestra libertad, los principios fundamentales de una Monarquía moderada, que vagos, dispersos y destituidos de método y enlace, carecian de la coherencia necesaria para formar un sistema capaz de triunfar de las vicisitudes del tiempo y de las pasiones.

La ignorancia, el error y la malicia alzarán el grito contra este proyecto. Le calificarán de novador, de peligroso, de contrario á los intereses de la Nacion y derechos del

Rey. Mas sus esfuerzos serán inútiles, y sus impostores argumentos se desvanecerán como el humo al ver demostrado hasta la evidencia que las bases de este proyecto han sido para nuestros mayores verdades prácticas, áxiomas reconocidos y santificados por la costumbre de muchos siglos. Sí, señor, de muchos siglos, por espacio de los cuales la Nacion elegia sus Reyes, otorgaba libremente contribuciones, sancionaba leyes, levantara tropas, hacia la paz y declaraba la guerra, residenciaba á los magistrados y empleados públicos, era en fin soberana, y ejercia sus derechos sin contradiccion ni embarazo. Pues estos y no otros son los principios constitutivos del sistema que presentan la comision en su proyecto. Todo lo demás es accesorio, subordinado á máximas tan fundamentales correspondiente solo al método y orden que se debe seguir para precaver que con el tiempo vuelvan á ofuscarse verdades tan santas, tan sencillas y tan necesarias á la gloria y felicidad de la Nacion y del Rey, cuyos derechos nadie compromete mas que los que aparentan sostenerlos, oponiéndose á las saludables limitaciones que le harán siempre padre de sus pueblos, y objeto de las bendiciones de sus súbditos.

Por tanto, señor, examínele V. M., discútale, y perfecciónale; y elevado despues con su sancion á la naturaleza de ley fundamental, preséntele á la Nacion, que impaciente y ansiosa por saber su suerte futura, reclama del Congreso el premio de sus heroicos sacrificios. Dígale V. M. que en esta ley se contienen todos los elementos de su grandeza y prosperidad, y que si los generosos sentimientos de amor y lealtad á su inocente y adorado Rey la obligaron á alzar-se para vengar el ultraje cometido contra su sagrada persona, hoy mas que nunca debe redoblar sus esfuerzos para acelerar el suspirado momento de restituirle al Trono de sus mayores, que reposa majestuosamente sobre las sólidas bases de una Constitucion liberal.—Cádiz 24 de diciembre de 1811.

D. FERNANDO VII por la Gracia de Dios y la Constitucion de la Monarquía española, Rey de las Españas, y en su ausencia y cautividad la Regencia del Reino, nombrada por las Córtes generales y extraordinarias, á todos los que las presentes vieren y entendiereu, SABED: Que las mismas Córtes han decretado y sancionado la siguiente

CONSTITUCION POLITICA

DE LA

MONARQUIA ESPAÑOLA (1).

En el nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, autor y supremo legislador de la sociedad.

Las Córtes generales y extraordinarias de la Nacion española, bien convencidas, despues del mas detenido exámen y madura deliberacion, de que las antiguas leyes fundamentales de esta Monarquía, acompañadas de las oportunas providencias y precauciones, que aseguren de un modo estable y permanente su entero cumplimiento, podrán llenar debidamente el grande objeto de promover la gloria, la prosperidad y el bien de toda la Nacion, decretan la siguiente Constitucion política, para el buen gobierno y recta administracion del Estado.

TITULO PRIMERO.

DE LA NACION ESPAÑOLA Y DE LOS ESPAÑOLES.

CAP. I.—De la Nacion española.

Artículo 1.º La Nacion española es la reunion de todos los españoles de ambos hemisferios.

Art. 2.º La Nacion española es libre é independiente, y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona.

Art. 3.º La soberanía reside esencialmente en la Nacion, y por lo mismo pertenece á esta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales.

Art. 4.º La Nacion está obligada á conservar y proteger por leyes sábias y justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen.

CAP. II.—De los españoles.

Art. 5.º Son españoles

1.º Todos los hombres libres nacidos y

(1) Las Córtes de 1810 son un magnifico monumento de nuestras glorias nacionales. No pueden leerse los diarios de sus discusiones y actas sin admirar el patriotismo, la sabiduría y la prudencia de aquellos varones eminentes. Nosotros se las recomendamos á nuestros lectores, y contrayéndonos aquí á los debates que tuvieron lugar con motivo al proyecto de Constitucion les indicaremos el tomo y página en que se encuentran los de cada capítulo.

La discusion del titulo I se encuentra en los *Diarios* de agosto de 1811, tomo 8.º, páginas 7, 45 y siguientes.

avecindados en los dominios de las Españas, y los hijos de estos.

2.º Los extranjeros que hayan obtenido de las Cortes carta de naturaleza.

3.º Los que sin ella lleven diez años de vecindad, ganada segun la ley en cualquier pueblo de la Monarquía.

4.º Los libertos desde que adquieran la libertad en las Españas.

Art. 6.º El amor de la patria es una de las principales obligaciones de todos los españoles, y asimismo el ser justos y benéficos.

Art. 7.º Todo español está obligado á ser fiel á la Constitucion, obedecer las leyes y respetar las autoridades establecidas.

Art. 8.º Tambien está obligado todo español, sin distincion alguna, á contribuir en proporcion de sus haberes para los gastos del Estado.

Art. 9.º Está asimismo obligado todo español á defender la patria con las armas, cuando sea llamado por la ley.

TITULO II.

DEL TERRITORIO DE LAS ESPAÑAS, SU RELIGION Y GOBIERNO, Y DE LOS CIUDADANOS ESPAÑOLES (1).

CAP. I.—*Del territorio de las Españas.*

Art. 10. El territorio español comprende en la Península, con sus posesiones é islas adyacentes, Aragon, Asturias, Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, Cataluña, Córdoba, Extremadura, Galicia, Granada, Jaen, Leon, Molina, Murcia, Navarra, Provincias Vascongadas, Sevilla y Valencia, las islas Baleares y las Canarias con las demás posesiones de Africa. En la América septentrional Nueva España con la Nueva Galicia y península de Yucatan, Goatemala, provincias internas de Oriente, provincias internas de Occidente, isla de Cuba con las dos Floridas, la parte española de la isla de Santo Domingo, y la isla de Puerto Rico con las demás adyacentes á estas y al continente en uno y otro mar. En la América meridional la Nueva-Granana, Venezuela, el Perú, Chile, provincias del Rio de la Plata, y todas las islas adyacentes en el mar Pacífico y en el Atlántico. En el Asia, las Islas Filipinas y las que dependen de su Gobierno.

Art. 11. Se hará una division mas conveniente del territorio español por una ley constitucional, luego que las circunstancias políticas de la Nación lo permitan.

CAP. II.—*De la religion (1).*

Art. 12. La religion de la Nacion española es y será perpétuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera. La Nacion la protege por leyes sábias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquiera otra.

CAP. III.—*Del Gobierno (2).*

Art. 13. El objeto del Gobierno es la felicidad de la Nacion, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen.

Art. 14. El Gobierno de la Nacion española es una Monarquía moderada hereditaria.

Art. 15. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey.

Art. 16. La potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el Rey.

Art. 17. La potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales, reside en los Tribunales establecidos por la ley.

CAP. IV.—*De los ciudadanos españoles (3).*

Art. 18. Son ciudadanos aquellos españoles que por ambas líneas traen su origen de los dominios españoles de ambos hemisferios, y están avecindados en cualquier pueblo de los mismos dominios.

Art. 19. Es tambien ciudadano el extranjero que gozando ya de los derechos de español, obtuviere de las Cortes carta especial de ciudadano.

Art. 20. Para que el extranjero pueda obtener de las Cortes esta carta deberá estar casado con española, y haber traído ó fijado en las Españas alguna invencion ó industria apreciable, ó adquirido bienes raíces por los que pague una contribucion directa, ó estableciéndose en el comercio con un capital propio y considerable á juicio de las mismas Cortes, ó hecho servicios señalados en bien y defensa de la Nacion.

Art. 21. Son asimismo ciudadanos los hijos legítimos de los extranjeros domiciliados en las Españas, que habiendo nacido en los dominios españoles, no hayan salido nunca fuera sin licencia del Gobierno, y teniendo veintiun años cumplidos se hayan avecindado en un pueblo de los mismos dominios, ejerciendo en él alguna profesion, oficio ó industria útil.

Art. 22. A los españoles que por cualquiera línea son habidos y reputados por

(1) Las discusiones de los artículos de este título se encuentran en el tomo 8.º, págs. 411 y siguientes.

(1) Diario de discusiones, tomo 8.º, p. 419.

(2) Id. p. 425.

(3) Id. p. 434.

originarios del Africa, les queda abierta la puerta de la virtud y del merecimiento para ser ciudadanos: en su consecuencia las Cortes concederán carta de ciudadano á los que hicieren servicios calificados á la patria, ó á los que se distingan por su talento, aplicacion y conducta, con la condicion de que sean hijos de legítimo matrimonio de padres ingénuos; de que estén casados con mujer ingénua, y avecindados en los dominios de las Españas, y de que ejerzan alguna profesion, oficio ó industria útil con un capital propio.

Art. 23. Solo los que sean ciudanos podrán obtener empleos municipales, y elegir para ellos en los casos señalados por la ley.

«Art. 24. La calidad de ciudadano español se pierde:

1.º Por adquirir naturaleza en país extranjero.

2.º Por admitir empleo de otro Gobierno.

3.º Por sentencia en que se le impongan penas aflictivas ó infamantes, si no se obtiene rehabilitacion.

4.º Por haber residido cinco años consecutivos fuera del territorio español, sin comision ó licencia del Gobierno.

Art. 25. El ejercicio de los mismos derechos se suspende:

1.º En virtud de interdiccion judicial por incapacidad física ó moral.

2.º Por el estado de deudor quebrado, ó de deudor á los caudales públicos.

3.º Por estado de sirviente doméstico.

4.º Por no tener empleo, oficio ó modo de vivir conocido.

5.º Por hallarse procesado criminalmente.

6.º Desde el año de 1830 deberán saber leer y escribir los que de nuevo entren en el ejercicio de los derechos de ciudadano.

Art. 26. Solo por las causas señaladas en los dos artículos precedentes se pueden perder ó suspender los derechos de ciudadano, y no por otras.»

TITULO III.

DE LAS CORTES. (1)

CAP. I.—*Del modo de formarse las Cortes.*

Art. 27. Las Cortes son la reunion de todos los diputados que representan la Nacion, nombrados por los ciudadanos en la forma que se dirá.

(Las demás disposiciones de este capítulo establecen la base de poblacion para la eleccion de diputados y los capítulos II al V tra-

tan de las Juntas electorales de parroquia, de partido y de provincia.)

CAP. VI.—*De la celebracion de las Cortes* (2).

Art. 104. Se juntarán las Cortes todos los años en la capital del Reino, en edificio destinado á este solo objeto.

Art. 105. Cuando tuvieren por conveniente trasladarse á otro lugar podrán hacerlo con tal que sea á pueblo que no diste de la capital mas que doce leguas, y que convengan en la traslacion las dos terceras parte de los diputados presentes.

Art. 106. Las sesiones de las Cortes en cada año durarán tres meses consecutivos, dando principio el dia 1.º del mes de marzo.

Art. 107. Las Cortes podrán prorogar sus sesiones cuando mas por otro mes en solos dos casos; primero, á petition del Rey; segundo, si las Cortes lo creyeren necesario por una resolucion de las dos terceras partes de los diputados.

Art. 108. Los diputados se renovarán en su totalidad cada dos años.

Art. 109. Si la guerra ó la ocupacion de alguna parte del territorio de la Monarquía por el enemigo impidieren que se presenten á tiempo todos ó algunos de los diputados de una ó mas provincias, serán suplidos los que falten por los anteriores diputados de las respectivas provincias, sorteando entre sí hasta completar el número que les corresponda.

Art. 110. Los diputados no podrán volver á ser elegidos, sino mediando otra diputacion.

Art. 111. Al llegar los diputados á la capital se presentarán á la Diputacion permanente de Cortes, la que hará sentar sus nombres y de la provincia que los ha elegido, en un registro en la Secretaría de las mismas Cortes.

Art. 112. En el año de la renovacion de los diputados se celebrará el dia 15 de febrero á puerta abierta la primera Junta preparatoria, haciendo de presidente el que lo sea de la Diputacion permanente, y de secretarios y escrutadores los que nombre la misma Diputacion de entre los restantes individuos que la componen.

Art. 113. En esta primera Junta presentarán todos los diputados sus poderes, y se nombrarán á pluralidad de votos dos comisiones, una de cinco individuos para que examine los poderes de todos los diputados;

(1) Diario de discusiones; t. 8.º, pág. 255 y siguientes y en el 9.º

(2) Diario citado; tomo 9.º, pág. 39, y siguientes.

y otra de tres para que examine los de estos cinco individuos de la comision.

Art. 114. El día 20 del mismo febrero se celebrará tambien á puerta abierta la segunda Junta preparatoria, en la que las dos comisiones informarán sobre la legitimidad de los poderes, habiendo tenido presentes las copias de las actas de las elecciones provinciales.

Art. 115. En esta Junta y en las demás que sean necesarias hasta el día 25, se resolverán definitivamente, y á pluralidad de votos, las dudas que se susciten sobre la legitimidad de los poderes y calidades de los diputados.

Art. 116. En el año siguiente al de la renovacion de los diputados se tendrá la primera Junta preparatoria el día 20 de febrero, y hasta el 25 las que se crean necesarias para resolver, en el modo y forma que se ha expresado en los tres artículos precedentes, sobre la legitimidad de los poderes de los diputados que de nuevo se presenten.

Art. 117. En todos los años el día 25 de febrero se celebrará la última Junta preparatoria, en la que se hará por todos los diputados, poniendo la mano sobre los Santos Evangelios, el juramento siguiente: ¿Jurais defender y conservar la religion católica, apostólica, romana, sin admitir otra alguna en el Reino?—R. Sí juro.—¿Jurais guardar y hacer guardar religiosamente la Constitución política de la Monarquía española, sancionada por las Cortes generales y extraordinarias de la Nacion en el año de mil ochocientos y doce?—R. Sí juro.—¿Jurais haberos bien y fielmente en el encargo que la nacion os ha encomendado, mirando en todo por el bien y prosperidad de la misma nacion?—R. Sí juro.—Si así lo hiciéreis, Dios os lo premie; y si no, os lo demande.

Art. 118. En seguida se procederá á elegir de entre los mismos diputados, por escrutinio secreto y á pluralidad absoluta de votos, un presidente, un vice-presidente y cuatro secretarios, con lo que se tendrán por constituidas y formadas las Cortes, y la Diputacion permanente cesará en todas sus funciones.

Art. 119. Se nombrará en el mismo día una Diputacion de veintidos individuos; y dos de los secretarios, para que pase á dar parte al Rey de hallarse constituidas las Cortes, y del presidente que han elegido, á fin de que manifieste si asistirá á la apertura de las Cortes, que se celebrará el día 1.º de marzo.

Art. 120. Si el Rey se hallare fuera de la capital, se le hará esta participacion por escrito y el Rey contestará del mismo modo.

Art. 121. El Rey asistirá por sí mismo á la apertura de las Cortes; y si tuviere impedimento, la hará el presidente el día señalado, sin que por ningún motivo pueda diferirse para otro. Las mismas formalidades se observarán para el acto de cerrarse las Cortes.

Art. 122. En la Sala de las Cortes entrará el Rey sin guardia, y solo le acompañarán las personas que determine el ceremonial para el recibimiento y despedida del Rey, que se prescriba en el reglamento del gobierno interior de las Cortes.

Art. 123. El Rey hará un discurso, en el que propondrá á las Cortes lo que crea conveniente; y al que el presidente contestará en términos generales. Si no asistiere el Rey, remitirá su discurso al presidente, para que por este se lea en las Cortes.

Art. 124. Las Cortes no podrán deliberar en la presencia del Rey.

Art. 125. En los casos en que los Secretarios de despacho hagan á las Cortes algunas propuestas á nombre del Rey, asistirán á las discusiones cuando y del modo que las Cortes determinen, y hablarán en ellas; pero no podrán estar presentes á la votacion.

Art. 126. Las sesiones de las Cortes serán públicas y solo en los casos que exijan reserva podrá celebrarse sesion secreta.

Art. 127. En las discusiones de las Cortes, y en todo lo demás que pertezca á su gobierno y orden interior, se observará el reglamento que se forme por estas Cortes generales y extraordinarias, sin perjuicio de las reformas que las sucesivas tuvieren por conveniente hacer en él.

Art. 128. Los diputados serán inviolables por sus opiniones, y en ningún tiempo ni caso, ni por ninguna autoridad podrán ser reconvenidos por ellas. En las causas criminales, que contra ellos se intentaren, no podrán ser juzgados sino por el Tribunal de Cortes en el modo y forma que se prescriba en el reglamento del gobierno interior de las mismas. Durante las sesiones de las Cortes, y un mes despues, los diputados no podrán ser demandados civilmente, ni ejecutados por deudas.

Art. 129. Durante el tiempo de su diputacion, contado para este efecto desde que el nombramiento conste en la permanente de Cortes, no podrán los diputados admitir para sí, ni solicitar para otro, empleo alguno de provision del Rey, ni aun ascenso, como no sea de escala en su respectiva carrera.

Art. 130. Del mismo modo no podrán, durante el tiempo de su diputacion, y un año

despues del último acto de sus funciones, obtener para sí, ni solicitar para otro, pension ni condecoracion alguna que sea tambien de provision del Rey.

CAP. VII.—*De las facultades de las Córtes (1).*

Art. 131. Las facultades de las Córtes son:

Primera. Proponer y decretar las leyes, é interpretarlas y derogarlas en caso necesario.

Segunda. Recibir el juramento al Rey, al Príncipe de Astúrias, y á la Regencia, como se previene en sus lugares.

Tercera. Resolver cualquiera duda, de hecho ó de derecho, que ocurra en orden á la sucesion á la Corona.

Cuarta. Elegir Regencia ó Regente del Reino cuando lo previene la Constitucion, y señalar las limitaciones con que la Regencia ó el Regente han de ejercer la autoridad Real.

Quinta. Hacer el reconocimiento público del Príncipe de Astúrias.

Sexta. Nombrar tutor al Rey menor, cuando lo previene la Constitucion.

Sétima. Aprobar antes de su ratificacion los tratados de alianza ofensiva, los de subsidios, y los especiales de comercio.

Octava. Conceder ó negar la admision de tropas extranjerias en el Reino.

Novena. Decretar la creacion y supresion de plazas en los Tribunales que establece la Constitucion, é igualmente la creacion y supresion de los oficios públicos.

Décima. Fijar todos los años á propuesta del Rey las fuerzas de tierra y de mar, determinando las que se hayan de tener en pié en tiempo de paz, y su aumento en tiempo de guerra.

Undécima. Dar ordenanzas al ejército, armada, y milicia nacional en todos los ramos que los constituyen.

Duodécima. Fijar los gastos de la Administracion pública.

Décimatercia. Establecer anualmente las contribuciones é impuestos.

Decimacuarta. Tomar caudales á préstamo en casos de necesidad sobre el crédito de la Nacion.

Décimaquinta. Aprobar el repartimiento de las contribuciones entre las provincias.

Décimasexta. Examinar y aprobar las cuentas de la inversion de los caudales públicos.

Décimasétima. Establecer las aduanas y aranceles de derechos.

Décimaoctava. Disponer lo conveniente

para la administracion, conservacion y enajenacion de los bienes nacionales.

Décimanona. Determinar el valor, peso, ley, tipo y denominacion de las monedas.

Vigésima. Adoptar el sistema que se juzgue mas cómodo y justo de pesos y medidas.

Vigésimaprima. Promover y fomentar toda especie de industria, y remover los obstáculos que la entorpezcan.

Vigésimasegunda. Establecer el plan general de enseñanza pública en toda la Monarquía, y aprobar el que se forme para la educacion del Príncipe de Astúrias.

Vigésimatercia. Aprobar los reglamentos generales para la policia y sanidad del Reino.

Vigésimacuarta. Proteger la libertad política de la imprenta.

Vigésimaquinta. Hacer efectiva la responsabilidad de los Secretarios del despacho y demás empleados públicos.

Vigésimasexta. Por último, pertenece á las Córtes dar ó negar su consentimiento en todos aquellos casos y actos, para los que se previene en la Constitucion ser necesario.

CAP. VIII.—*De la formacion de las leyes, y de la sancion Real (1).*

Art. 132. Todo diputado tiene la facultad de proponer á las Córtes los proyectos de ley, haciéndolo por escrito, y exponiendo las razones en que se funde.

Art. 133. Dos dias á lo menos despues de presentado y leído el proyecto de ley, se leerá por segunda vez y las Córtes deliberarán si se admite ó no á discusion.

Art. 134. Admitido á discusion, si la gravedad del asunto requiriese á juicio de las Córtes que pase previamente á una comision, se ejecutará así.

Art. 135. Cuatro dias á lo menos despues de admitido á discusion el proyecto se leerá tercera vez, y se podrá señalar dia para abrir la discusion.

Art. 136. Llegado el dia señalado para la discusion abrazará esta el proyecto en su totalidad, y en cada uno de sus artículos.

Art. 137. Las Córtes decidirán cuando la materia está suficientemente discutida, y decidido que lo está, se resolverá si há lugar ó no á la votacion.

Art. 138. Decidido que há lugar á la votacion, se procederá á ella inmediatamente, admitiendo ó desechando en todo ó en parte el proyecto, ó variándole y modificándole segun las observaciones que se hayan hecho en la discusion.

Art. 139. La votacion se hará á plurali-

dad absoluta de votos; y para proceder á ella será necesario que se hallen presentes á lo menos la mitad y uno mas de la totalidad de los diputados que deben componer las Cortes.

Art. 140. Si las Cortes desecharen un proyecto de ley en cualquier estado de su exámen, ó resolvieren que no debe procederse á la votacion, no podrá volver á proponerse en el mismo año.

Art. 141. Si hubiere sido adoptado, se extenderá por duplicado en forma de ley, y se leerá en las Cortes: hecho lo cual, y firmados ambos originales por el presidente y dos secretarios, serán presentados inmediatamente al Rey por una diputacion.

Art. 142. El Rey tiene la sancion de las leyes.

Art. 143. Da el Rey la sancion por esta fórmula, firmada de su mano: «Publíquese como ley.»

Art. 144. Niega el Rey la sancion por esta fórmula igualmente firmada de su mano: «Vuelva á las Cortes:» acompañando al mismo tiempo una exposicion de las razones que ha tenido para negarla.

Art. 145. Tendrá el Rey treinta dias para usar de esta prerogativa: si dentro de ellos no hubiere dado ó negado la sancion, por el mismo hecho se entenderá que la ha dado, y la dará en efecto.

Art. 146. Dada ó negada la sancion por el Rey, devolverá á las Cortes uno de los dos originales con la fórmula respectiva, para darse cuenta en ellas. Este original se conservará en el Archivo de las Cortes, y el duplicado quedará en poder del Rey.

Art. 147. Si el Rey negare la sancion no se volverá á tratar del mismo asunto en las Cortes de aquel año; pero podrá hacerse en las del siguiente.

Art. 148. Si en las Cortes del siguiente año fuere de nuevo propuesto, admitido y aprobado el mismo proyecto, presentado que sea al Rey, podrá dar la sancion, ó negarla segunda vez en los términos de los arts. 143 y 144; y en el último caso, no se tratará del mismo asunto en aquel año.

Art. 149. Si de nuevo fuere por tercera vez propuesto, admitido y aprobado el mismo proyecto en las Cortes del siguiente año, por el mismo hecho se entiende que el Rey da la sancion; y presentándosele, la dará en efecto por medio de la fórmula expresada en el art. 143.

Art. 150. Si antes de que espire el término de treinta dias en que el Rey ha de dar ó negar la sancion, llegare el dia en que las Cortes han de terminar sus sesiones, el Rey le dará ó negará en los ocho primeros de las

sesiones de las siguientes Cortes: y si este término pasare sin haberla dado, por esto mismo se entenderá dada, y la dará en efecto en la forma prescrita; pero si el Rey negare la sancion, podrán estas Cortes tratar del mismo proyecto.

Art. 151. Aunque despues de haber negado el Rey la sancion á un proyecto de ley se pasen alguno ó algunos años sin que se proponga el mismo proyecto, como vuelva á suscitarse en el tiempo de la misma diputacion que le adoptó por la primera vez, ó en el de las dos diputaciones que inmediatamente la subsigan, se entenderá siempre el mismo proyecto para los efectos de la sancion del Rey, de que tratan los tres artículos precedentes, pero si en la duracion de las tres diputaciones expresadas no volviere á proponerse, aunque despues se reproduzca en los propios términos se tendrá por proyecto nuevo para los efectos indicados.

Art. 152. Si la segunda ó tercera vez que se propone el proyecto dentro del término que prefija el artículo precedente, fuere desechado por las Cortes, en cualquier tiempo que se reproduzca despues, se tendrá por nuevo proyecto.

Art. 153. Las leyes se derogan con las mismas formalidades y por los mismos trámites que se establecen.

CAP. IX. — *De la promulgacion de las leyes* (1).

Art. 154. Publicada la ley en las Cortes, se dará de ello aviso al Rey, para que se proceda inmediatamente á su promulgacion solemne.

Art. 155. El Rey para promulgar las leyes usará de la fórmula siguiente: N. (el nombre del Rey) por la gracia de Dios y por la Constitucion de la Monarquía española, Rey de las Españas, á todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed: Que las Cortes han decretado, y Nos sancionamos lo siguiente (aquí el texto literal de la ley): Por tanto mandamos á todos los Tribunales, justicias, jefes, Gobernadores y demás autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes. Tendréislo entendido para su cumplimiento, y dispondeis se imprima, publique y circule. (Va dirigida al Secretario del despacho respectivo.)

Art. 156. Todas las leyes se circularán de mandato del Rey por los respectivos Secretarios del despacho directamente á todos

(1) Diario de discusiones; t. 9.º, pág. 139.

y cada uno de los Tribunales Supremos y de las provincias, y demás jefes y autoridades superiores, que las circularán á las subalternas.

CAP. X.—*De la Diputacion permanente de Córtes (1).*

Art. 157. Antes de separarse las Córtes nombrarán una Diputacion, que se llamará Diputacion permanente de Córtes, compuesta de siete individuos de su seno, tres de las provincias de Europa, y tres de las de Ultramar, y el sétimo saldrá por suerte entre un diputado de Europa y otro de Ultramar.

Art. 158. Al mismo tiempo nombrarán las Córtes dos suplentes para esta Diputacion, uno de Europa y otro de Ultramar.

Art. 159. La Diputacion permanente durará de unas Córtes ordinarias á otras.

Art. 160. Las facultades de esta Diputacion son:

1.^a Velar sobre la observancia de la Constitucion y de las leyes, para dar cuenta á las próximas Córtes de las infracciones que haya notado.

2.^a Convocar á Córtes extraordinarias en los casos prescritos por la Constitucion.

3.^a Desempeñar las funciones que se señalan en los arts. 111 y 112.

4.^a Pasar aviso á los diputados suplentes para que concurren en lugar de los propietarios y si ocurriere el fallecimiento ó imposibilidad absoluta de propietarios; y suplentes de una provincia, comunicar las correspondientes órdenes á la misma, para que proceda á nueva eleccion.

CAP. XI.—*De las Córtes extraordinarias (2).*

Art. 161. Las Córtes extraordinarias se compondrán de los mismos diputados que forman las ordinarias durante los dos años de su diputacion.

Art. 162. La Diputacion permanente de Córtes las convocará con señalamiento de dia en los tres casos siguientes:

1.^o Cuando vacare la Corona.

2.^o Cuando el Rey se imposibilitare de cualquiera modo para el Gobierno, ó quisiere abdicar la Corona en el sucesor; estando autorizada en el primer caso la Diputacion para tomar todas las medidas que estime convenientes, á fin de asegurarse de la inhabilidad del Rey.

3.^o Cuando en circunstancias críticas y por negocios árdusos tuviere el Rey por con-

veniente que se congreguen, y lo participare así á la Diputacion permanente de Córtes.

Art. 163. Las Córtes extraordinarias no entenderán sino en el objeto para que han sido convocadas.

Art. 164. Las sesiones de las Córtes extraordinarias comenzarán y se terminarán con las mismas formalidades que las ordinarias.

Art. 165. La celebracion de las Córtes extraordinarias no estorbará la eleccion de nuevos diputados en el tiempo prescrito.

Art. 166. Si las Córtes extraordinarias no hubieren concluido sus sesiones en el dia señalado para la reunion de las ordinarias, cesará las primeras en sus funciones, y las ordinarias continuarán el negocio para que aquellas fueron convocadas.

Art. 167. La Diputacion permanente de Córtes continuará en las funciones que le están señaladas en los arts. 111 y 112, en el caso comprendido en el artículo precedente.

TITULO IV.

DEL REY.

CAP. I.—*De la inviolabilidad del Rey y de su autoridad (1).*

Art. 168. La persona del Rey es sagrada é inviolable, y no está sujeta á responsabilidad.

Art. 169. El Rey tendrá el tratamiento de Majestad Católica.

Art. 170. La potestad de hacer ejecutar las leyes reside exclusivamente en el Rey, y su autoridad se extiende á todo cuanto conduce á la conservacion del orden público en lo interior, y á la seguridad del Estado en lo exterior, conforme á la Constitucion y á las leyes.

Art. 171. Además de la prerogativa que compete al Rey de sancionar las leyes y promulgarlas, le corresponden como principales las facultades siguientes:

1.^a Expedir los decretos, reglamentos é instrucciones que crea conducentes para la ejecucion de las leyes.

2.^a Cuidar de que en todo el Reino se administre pronta y cumplidamente la justicia.

3.^a Declarar la guerra, y hacer y ratificar la paz, dando despues cuenta documentada á las Córtes.

4.^a Nombrar los magistrados de todos los Tribunales civiles y criminales, á propuesta del Consejo de Estado.

(1) Diario de discusiones, t. 9.º, p. 146.

(2) Id. pta, y 162.

(1) Diario de discusiones, t. 9.º, pág. 167.

5.^a Proveer todos los empleos civiles y militares.

6.^a Presentar para todos los Obispados, y para todas las dignidades y beneficios eclesiásticos de Real patronato, á propuesta del Consejo de Estado.

7.^a Conceder honores y distinciones de toda clase, con arreglo á las leyes.

8.^a Mandar los ejércitos y armadas, y nombrar los generales.

9.^a Disponer de la fuerza armada, distribuyéndola como mas convenga.

10. Dirigir las relaciones diplomáticas y comerciales con las demás potencias, y nombrar los Embajadores, Ministros y Cónsules.

11. Cuidar de la fabricacion de la moneda, en la que se pondrá su busto y su nombre.

12. Decretar la inversion de los fondos destinados á cada uno de los ramos de la administracion pública.

13. Indultar á los delincuentes, con arreglo á las leyes.

14. Hacer á las Córtes las propuestas de leyes ó de reformas que crea conducentes al bien de la Nacion, para que deliberen en la forma prescrita.

15. Conceder el pase, ó retener los decretos conciliares y bulas pontificias con el consentimiento de las Córtes, si contienen disposiciones generales; oyendo al Consejo de Estado, si versan sobre negocios particulares ó gubernativos, y si contienen puntos contenciosos, pasando su conocimiento y decision al Supremo Tribunal de Justicia para que resuelva con arreglo á las leyes.

16. Nombrar y separar libremente los Secretarios de Estado y del Despacho.

Art. 172. Las restricciones de la autoridad del Rey son las siguientes:

Primera. No puede el Rey impedir bajo ningun pretexto la celebracion de las Córtes en las épocas y casos señalados por la Constitucion, ni suspenderlas ni disolverlas, ni en manera alguna embarazar sus sesiones y deliberaciones. Los que le aconsejasen ó auxiliasen en cualquiera tentativa para estos actos son declarados traidores y serán perseguidos como tales.

Segunda. No puede el Rey ausentarse del Reino sin consentimiento de las Córtes; y si lo hiciere, se entiende que ha abdicado la Corona.

Tercera. No puede el Rey enajenar, ceder, renunciar ó en cualquiera manera traspasar á otro la autoridad Real, ni alguna de sus prerogativas.

Si por cualquiera causa quisiere abdicar el Trono en el inmediato sucesor, no lo

podrá hacer sin el consentimiento de las Córtes.

Cuarta. No puede el Rey enajenar, ceder ó permutar provincia, ciudad, villa ó lugar, ni parte alguna, por pequeña que sea, del territorio español.

Quinta. No puede el Rey hacer alianza ofensiva, ni tratado especial de comercio con ninguna potencia extranjera sin el consentimiento de las Córtes.

Sexta. No puede tampoco obligarse por ningun tratado á dar subsidios á ninguna potencia extranjera sin el consentimiento de las Córtes.

Sétima. No puede el Rey ceder ni enajenar los bienes nacionales sin consentimiento de las Córtes.

Octava. No puede el Rey imponer por sí directa ni indirectamente contribuciones, ni hacer pedidos bajo cualquiera nombre ó para cualquier objeto que sea, sino que siempre los han de decretar las Córtes.

Novena. No puede el Rey conceder privilegio exclusivo á personas ni corporacion alguna.

Décima. No puede el Rey tomar la propiedad de ningun particular ni corporacion, ni turbarle en la posesion, uso y aprovechamiento de ella, y si en algun caso fuere necesario para un objeto de conocida utilidad comun tomar la propiedad de un particular, no lo podrá hacer, sin que al mismo tiempo sea indemnizado, y se le dé el buen cambio á bien vista de hombres buenos.

Undécima. No puede el Rey privar á ningun individuo de su libertad, ni imponerle por sí pena alguna. El Secretario del despacho que firme la orden, y el juez que la ejecute, serán responsables á la Nacion, y castigados como reos de atentado contra la libertad individual.

Solo en el caso de que el bien y seguridad del Estado exijan el arresto de alguna persona, podrá el Rey expedir órdenes al efecto; pero con la condicion de que dentro de cuarenta y ocho horas deberá hacerla entregar á disposicion del Tribunal ó juez competente.

Duodécima. El Rey antes de contraer matrimonio dará parte á las Córtes, para obtener su consentimiento; y si no lo hiciere, entiéndase que abdica á la Corona.

Art. 173. El Rey en su advenimiento al Trono, y si fuere menor cuando entre á gobernar el Reino, prestará juramento ante las Córtes bajo la fórmula siguiente:

«N... (aquí su nombre) por la gracia de Dios y la Constitucion de la Monarquía española, Rey de las Españas; juro por Dios y

por los Santos Evangelios que defenderé y conservaré la religion católica, apostólica, romana, sin permitir otra alguna en el Reino: que guardaré y haré guardar la Constitución política y leyes de la Monarquía española, no mirando en cuanto hiciere sino al bien y provecho de ella: que no enajenaré, cederé ni desmembraré parte alguna del Reino: que no exigiré jamás cantidad alguna de frutos, dinero ni otra cosa, sino las que hubieren decretado las Cortes: que no tomaré jamás á nadie su propiedad, y que respetaré sobre todo la libertad política de la Nación, y la personal de cada individuo: y si en lo que he jurado, ó parte de ello, lo contrario hiciere, no debo ser obedecido, antes aquello en que contraviniere, sea nulo y de ningún valor. Asi Dios me ayude, y sea en mi defensa; y si no me lo demande.»

CAP. II.—*De la sucesion á la Corona* (1).

Art. 174. El Reino de las Españas es indivisible, y solo se sucederá en el Trono perpétuamente desde la promulgacion de la Constitución por el orden regular de primogenitura y representacion entre los descendientes legítimos, varones y hembras, de las líneas que se expresarán.

Art. 175. No pueden ser Reyes de las Españas sino los que sean hijos legítimos habidos en constante y legítimo matrimonio.

Art. 176. En el mismo grado y línea los varones prefieren á las hembras, y siempre el mayor al menor; pero las hembras de mejor línea ó de mejor grado en la misma línea prefieren á los varones de línea ó grado superior.

Art. 177. El hijo ó hija del primogénito del Rey, en el caso de morir su padre sin haber entrado en la sucesion del Reino, prefiere á los tios, y sucede inmediatamente al abuelo por derecho de representacion.

Art. 178. Mientras no se extingue la línea en que está radicada la sucesion, no entra la inmediata.

Art. 179. El Rey de las Españas es el Sr. D. Fernando VII de Borbon, que actualmente reina.

Art. 180. A falta del Sr. D. Fernando VII de Borbon sucederán sus descendientes legítimos, así varones como hembras: á falta de estos sucederán sus hermanos, y tios hermanos de su padre, así varones como hembras, y los descendientes legítimos de estos por el orden que queda prevenido, guardando en todos el derecho de represen-

tacion y la preferencia de las líneas anteriores á las posteriores.

Art. 181. Las Cortes deberán excluir de la sucesion aquella persona ó personas que sean incapaces para gobernar, ó hayan hecho cosa por que merezcan perder la Corona.

Art. 182. Si llegaren á extinguirse todas las líneas que aquí se señalan, las Cortes harán nuevos llamamientos, como vean, que mas importa á la Nación, siguiendo siempre el orden y reglas de suceder aquí establecidas.

Art. 183. Cuando la Corona haya de recaer inmediatamente ó haya recaído en hembra, no podrá esta elegir marido sin consentimiento de las Cortes; y si lo contrario hiciere, se entiende que abdica la Corona.

Art. 184. En el caso de que llegue á reinar una hembra, su marido no tendrá autoridad ninguna respecto del Reino, ni parte alguna en el Gobierno.

CAP. III.—*De la menor edad del Rey, y de la Regencia* (1).

Art. 185. El Rey es menor de edad hasta los diez y ocho años cumplidos.

Art. 186. Durante la menor edad del Rey será gobernado el Reino por una Regencia.

Art. 187. Lo será igualmente cuando el Rey se halle imposibilitado de ejercer su autoridad por cualquier causa física ó moral.

Art. 188. Si el impedimento del Rey pasare de dos años, y el sucesor inmediato fuere mayor de diez y ocho, las Cortes podrán nombrarle Regente del Reino en lugar de la Regencia.

Art. 189. En los casos en que vacare la Corona, siendo el Príncipe de Asturias menor de edad, hasta que se junten las Cortes extraordinarias, si no se hallaren reunidas las ordinarias, la Regencia provisional se compondrá de la Reina madre, si la hubiere, de dos diputados de la Diputacion permanente de las Cortes, los mas antiguos por orden de su eleccion en la Diputacion, y de dos consejeros del Consejo de Estado los mas antiguos, á saber: el decano y el que le siga: si no hubiere Reina madre, entrará en la Regencia el consejero de Estado tercero en antigüedad.

Art. 190. La Regencia provisional será presidida por la Reina madre, si la hubiere; y en su defecto por el individuo de la Diputacion permanente de Cortes que sea primer nombrado en ella.

Art. 191. La Regencia provisional no

(1) Diario de discusiones; t. 9.º, pág. 305.

(1) Diario de discusiones, t. 8.º, p. 306.

despachará otros negocios que los que no admitan dilacion, y no removerá ni nombrará empleados sino interinamente.

Art. 192. Reunidas las Cortes extraordinarias, nombrarán una Regencia compuesta de tres ó cinco personas.

Art. 193. Para poder ser individuo de la Regencia se requiere ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos; quedando excluidos los extranjeros, aunque tengan carta de ciudadanos.

Art. 194. La Regencia será presidida por aquel de sus individuos que las Cortes designaren; tocando á estas establecer en caso necesario, si ha de haber ó no turno en la presidencia, y en qué términos.

Art. 195. La Regencia ejercerá la autoridad del Rey en los términos que estimen las Cortes.

Art. 196. Una y otra Regencia prestarán juramento segun la fórmula prescrita en el artículo 173, añadiendo la cláusula de que serán fieles al Rey; y la Regencia permanente añadirá además, que observará las condiciones que le hubieren impuesto las Cortes para el ejercicio de su autoridad, y que cuando llegue el Rey á ser mayor, ó cese la imposibilidad, le entregará el Gobierno del Reino bajo la pena, si un momento lo dilata, de ser sus individuos habidos y castigados como traidores.

Art. 197. Todos los actos de la Regencia se publicarán en nombre del Rey.

Art. 198. Será tutor del Rey menor la persona que el Rey difunto hubiere nombrado en su testamento. Si no le hubiere nombrado, será tutora la Reina madre mientras permanezca viuda. En su defecto será nombrado el tutor por las Cortes. En el primero y tercer caso el tutor deberá ser natural del Reino.

Art. 199. La Regencia cuidará de que la educacion del Rey menor sea la mas conveniente al grande objeto de su alta dignidad, y que se desempeñe conforme al plan que aprobaren las Cortes.

Art. 200. Estas señalarán el sueldo que hayan de gozar los individuos de la Regencia.

CAP. IV.—De la familia Real, y del reconocimiento del Principe de Astúrias (1).

Art. 201. El hijo primogénito del Rey se titulará Principe de Astúrias.

Art. 202. Los demás hijos ó hijas del Rey serán y se llamarán Infantes de las Españas.

Art. 203. Así mismo serán y se llamarán Infantes de las Españas los hijos é hijas del Principe de Astúrias.

Art. 204. A estas personas precisamente estará limitada la calidad de Infante de las Españas, sin que pueda extenderse á otras.

Art. 205. Los Infantes de las Españas gozarán de las distinciones y honores que han tenido hasta aquí, y podrán ser nombrados para toda clase de destinos, exceptuados los de judicatura y la diputacion de Cortes.

Art. 206. El Principe de Astúrias no podrá salir del Reino sin consentimiento de las Cortes, y si saliere sin él, quedará por el mismo hecho excluido del llamamiento á la Corona.

Art. 207. Lo mismo se entenderá, permaneciendo fuera del Reino por mas tiempo que el prefijado en el permiso, si requerido para que vuelva, no lo verificare dentro del término que las Cortes señalen.

Art. 208. El Principe de Astúrias, los Infantes é Infantas y sus hijos y descendientes que sean súbditos del Rey, no podrán contraer matrimonio sin su consentimiento y el de las Cortes, bajo la pena de ser excluidos del llamamiento á la Corona.

Art. 209. De las partidas de nacimiento, matrimonio y muerte de todas las personas de la familia Real, se remitirá una copia auténtica á las Cortes, y en su defecto á la Diputacion permanente, para que se custodie en su Archivo.

Art. 210. El Principe de Astúrias será reconocido por las Cortes con las formalidades que prevendrá el reglamento del Gobierno interior de ellas.

Art. 211. Este reconocimiento se hará en las primeras Cortes que se celebren despues de su nacimiento.

Art. 212. El Principe de Astúrias, llegando á la edad de catorce años, prestará juramento ante las Cortes bajo la fórmula siguiente:—«N. (aquí el nombre), Principe de Astúrias juro por Dios y por los Santos Evangelios, que defenderé y conservaré la religion católica, apostólica, romana, sin permitir otra alguna en el Reino; que guardaré la Constitucion política de la Monarquía española y que seré fiel y obediente al Rey. Así Dios me ayude.»

CAP. V.—Dotacion de la familia Real (1).

Art. 213. Las Cortes señalarán al Rey la dotacion anual de su casa, que sea correspondiente á la alta dignidad de su persona.

Art. 214. Pertenecen al Rey todos los

(1) Diario de las discusiones. t. 9.º, p. 344.

(1) Diario citado, t. 9.º, p. 352.

palacios reales que han disfrutado sus predecesores, y las Cortes señalarán los terrenos que tengan por conveniente reservar para el recreo de su persona.

Art. 215. Al Príncipe de Asturias desde el dia de su nacimiento, y á los Infantes é Infantas desde que cumplan siete años de edad, se asignará por las Cortes para sus alimentos la cantidad anual correspondiente á su respectiva dignidad.

Art. 216. A las Infantas para cuando casaren señalarán las Cortes la cantidad que estimen en calidad de dote; y entregada esta cesarán los alimentos anuales.

Art. 217. A los Infantes, si casaren mientras residan en las Españas, se les continuarán los alimentos que les estén asignados; y si casaren y residieren fuera, cesarán los alimentos, y se les entregará por una vez la cantidad que las Cortes señalen.

Art. 218. Las Cortes señalarán los alimentos anuales que hayan de darse á la Reina viuda.

Art. 219. Los sueldos de los individuos de la Regencia se tomarán de la dotacion señalada á la casa del Rey.

Art. 220. La dotacion de la casa del Rey y los alimentos de su familia, de que hablan los artículos precedentes, se señalarán por las Cortes al principio de cada reinado, y no se podrán alterar durante él.

Art. 221. Todas estas asignaciones son de cuenta de la Tesorería nacional, por la que serán satisfechas al administrador que el Rey nombrare, con el cual se entenderán las acciones activas y pasivas, que por razon de intereses puedan promoverse.

CAP. VI.—*De los Secretarios de Estado y del despacho (1).*

Art. 222. Los Secretarios del despacho serán siete á saber:

El Secretario del despacho de Estado.

El Secretario del despacho de la Gobernacion del Reino para la Península é Islas adyacentes.

El Secretario del despacho de la Gobernacion del Reino para Ultramar.

El Secretario del despacho de Gracia y Justicia.

El Secretario del despacho de Hacienda.

El Secretario del despacho de Guerra.

El Secretario del despacho de Marina.

Las Cortes sucesivas harán en este sistema de Secretarías del despacho la variacion que la experiencia ó las circunstancias exijan.

Art. 223. Para ser Secretario del despa-

cho se requiere ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos, quedando excluidos los extranjeros, aunque tengan carta de ciudadanos.

Art. 224. Por un reglamento particular aprobado por las Cortes se señalarán á cada Secretaría los negocios que deban pertenecerle.

Art. 225. Todas las órdenes del Rey deberán ir firmadas por el Secretario del despacho del ramo á que el asunto corresponda.

Ningun Tribunal ni persona pública dará cumplimiento á la orden que carezca de este requisito.

Art. 226. Los Secretarios del despacho serán responsables á las Cortes de las órdenes que autoricen contra la Constitucion ó las leyes, sin que les sirva de excusa haberlo mandado el Rey.

Art. 227. Los Secretarios del despacho formarán los presupuestos anuales de los gastos de la Administracion pública, que se estime deban hacerse por su respectivo ramo, y rendirán cuentas de los que se hubieren hecho, en el modo que se expresará.

Art. 228. Para ser efectiva la responsabilidad de los Secretarios del despacho, decretarán ante todas cosas las Cortes que há lugar á la formacion de causa.

Art. 229. Dado este decreto, quedará suspenso el Secretario del despacho, y las Cortes remitirán al Tribunal Supremo de Justicia todos los documentos concernientes á la causa que haya de formarse por el mismo Tribunal, quien la sustanciará y decidirá con arreglo á las leyes.

Art. 230. Las Cortes señalarán el sueldo que deban gozar los Secretarios del despacho durante su encargo.

CAP. VII.—*Del Consejo de Estado (1).*

Art. 231. Habrá un Consejo de Estado compuesto de cuarenta individuos, que sean ciudadanos en el ejercicio de sus derechos, quedando excluidos los extranjeros, aunque tengan carta de ciudadanos.

Art. 232. Estos serán precisamente en la forma siguiente, á saber; cuatro eclesiásticos, y no mas, de conocida y probada ilustracion y merecimiento, de los cuales dos serán Obispos: cuatro grandes de España, y no mas, adornados de las virtudes, talento y conocimientos necesarios; y los restantes serán elegidos de entre los sujetos que mas se hayan distinguido por su ilustracion y conocimientos, ó por sus señalados servicios en alguno de los principales ramos de la ad-

(1) Diario citado, t. 9, p. 358.

(1) Diario citado, t. 9, p. 445.

ministracion y gobierno del Estado. Las Córtes no podrán proponer para estas plazas á ningun individuo que sea diputado de Córtes al tiempo de hacerse la eleccion. De los individuos del Consejo de Estado, doce á lo menos serán nacidos en las provincias de Ultramar.

Art. 233. Todos los consejeros de Estado serán nombrados por el Rey á propuesta de las Córtes.

Art. 234. Para la formacion de este Consejo se dispondrá en las Córtes una lista triple de todas las clases referidas en la proporcion indicada, de la cual el Rey elegirá los cuarenta individuos que han de componer el Consejo de Estado, tomando los eclesiásticos de la lista de su clase, los grandes de la suya, y así los demás.

Art. 235. Cuando ocurriere alguna vacante en el Consejo de Estado, las Córtes primeras que se celebren presentarán al Rey tres personas de la clase en que se hubiere verificado, para que elija la que le pareciere.

Art. 236. El Consejo de Estado es el único Consejo del Rey, que oirá su dictámen en los asuntos graves gubernativos, y señaladamente para dar ó negar la sancion á las leyes, declarar la guerra, y hacer los tratados.

Art. 237. Pertenecerá á este Consejo hacer al Rey la propuesta por ternas para la presentacion de todos los beneficios eclesiásticos y para la provision de las plazas de judicatura.

Art. 238. El Rey formará un reglamento para el gobierno del Consejo de Estado, oyendo previamente al mismo; y se presentará á las Córtes para su aprobacion.

Art. 239. Los consejeros de Estado no podrán ser removidos sin causa justificada ante el Tribunal Supremo de Justicia.

Art. 240. Las Córtes señalarán el sueldo que deban gozar los consejeros de Estado.

Art. 241. Los consejeros de Estado, al tomar posesion de sus plazas, harán en manos del Rey juramento de guardar la Constitucion, ser fieles al Rey, y aconsejarle lo que entendieren ser conducente al bien de la Nacion, sin mira particular ni interés privado.

TITULO V.

DE LOS TRIBUNALES Y DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN LO CIVIL Y CRIMINAL (1).

CAP. I.—De los Tribunales.

Art. 242. La potestad de aplicar las le-

yes en las causas civiles y criminales pertenece exclusivamente á los Tribunales.

Art. 243. Ni las Córtes ni el Rey podrán ejercer en ningun caso las funciones judiciales, avocar causas pendientes, ni mandar abrir los juicios fenecidos.

Art. 244. Las leyes señalarán el orden y las formalidades del proceso, que serán uniformes en todos los Tribunales; y ni las Córtes ni el Rey podrán dispensarlas.

Art. 245. Los Tribunales no podrán ejercer otras funciones que las de juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado.

Art. 246. Tampoco podrán suspender la ejecucion de las leyes, ni hacer reglamento alguno para la administracion de justicia.

Art. 247. Ningun español podrá ser juzgado en causas civiles ni criminales por ninguna comision, sino por el Tribunal competente, determinado con anterioridad por la ley.

Art. 248. En los negocios comunes, civiles y criminales no habrá mas que un solo fuero para toda clase de personas.

Art. 249. Los eclesiásticos continuarán gozando del fuero de su estado, en los términos que prescriben las leyes ó que en adelante prescribieren.

Art. 250. Los militares gozarán tambien de fuero particular, en los términos que

hoy en vigor como ley, eran en la época en que se publicó la Constitucion de una grandísima importancia é introducian en nuestra antigua jurisprudencia notabilísimas mejoras que fueron despues desenvolviéndose, por medio de muy oportunas y sabias leyes, mientras rigió la misma Constitucion desde el 19 de marzo de 1812, que se juró, hasta el famoso decreto de 4 de mayo de 1814, y desde el 9 de marzo de 1820 que se restableció hasta el 1.º de octubre de 1823 que volvió á anularse. Cuando por segunda vez se restableció en 13 de agosto de 1836, todavía tenían grande importancia sus disposiciones, y mas hasta la Constitucion de 1837 en 18 de junio de este año; pero esta importancia fué decayendo desde entonces, á pesar de la ley de 7-16 setiembre de 1837 que deja en su fuerza como leyes las del título V, porque hoy todas ó casi todas están refundidas, ya en la Constitucion de 1845, ya en el reglamento provisional, ya en las leyes establecidas de las anteriores épocas constitucionales, ya en el Código penal y en la ley para su aplicacion y en varias otras leyes y decretos, y ya, por último, en la ley de Enj. civil. Sin embargo, esta consideracion no obsta para que paguemos aquí este tributo de justicia á los legisladores de 1812 que con su patriotismo y su sabiduría, á la vez que pusieron la piedra fundamental de nuestra regeneracion política, abrieron el camino de grandes reformas en la administracion de justicia.

(1) Diario citado, tomo 10, p. 109, y siguientes.

Las disposiciones de este título que están

previene la ordenanza ó en adelante previniere.

Art. 251. Para ser nombrado magistrado ó juez se requiere haber nacido en el territorio español, y ser mayor de veinticinco años. Las demás calidades que respectivamente deban estos tener serán determinadas por las leyes.

Art. 252. Los magistrados y jueces no podrán ser depuestos de sus destinos, sean temporales ó perpétuos, sino por causa legalmente probada y sentenciada, ni suspendidos sino por acusacion legalmente intentada.

Art. 253. Si al Rey llegaren quejas contra algun magistrado, y formado expediente, parecieren fundadas, podrá, oído el Consejo de Estado, suspenderle, haciendo pasar inmediatamente el expediente al Supremo Tribunal de Justicia, para que juzgue con arreglo á las leyes.

Art. 254. Toda falta de observancia de las leyes que arreglan el proceso en lo civil y en lo criminal, hace responsables personalmente á los jueces que la cometieren.

Art. 255. El soborno, el cohecho y la prevaricacion de los magistrados y jueces producen accion popular contra los que los cometan.

Art. 256. Las Cortes señalarán á los magistrados y jueces de letras una dotacion competente.

Art. 257. La justicia se administrará en nombre del Rey, y las ejecutorias y provisiones de los Tribunales superiores se encabezarán tambien en su nombre.

Art. 258. El Código civil y criminal y el de Comercio serán unos mismos para toda la Monarquia, sin perjuicio de las variaciones que por particulares circunstancias podrán hacer las Cortes.

Art. 259. Habrá en la Corte un Tribunal, que se llamará Supremo Tribunal de Justicia.

Art. 260. Las Cortes determinarán el número de magistrados que han de componerle, y las Salas en que ha de distribuirse.

Art. 261. Toca á este Supremo Tribunal: Primero. Dirimir todas las competencias de las Audiencias entre si en todo el territorio español y las de las Audiencias con los Tribunales especiales, que existan en la Península e islas adyacentes. En Ultramar se dirimirán estas últimas segun lo determinaren las leyes.

Segundo. Juzgar á los Secretarios de Estado y del despacho, cuando las Cortes decretaren haber lugar á la formacion de causa.

Tercero. Conocer de todas las causas de

separacion y suspension de los consejeros de Estado y de los magistrados de las Audiencias.

Quarto. Conocer de las causas criminales de los Secretarios de Estado y del despacho, de los consejeros de Estado, y de los magistrados de las Audiencias, perteneciendo al Jefe político mas autorizado la instruccion del proceso para remitirlo á este Tribunal.

Quinto. Conocer de todas las causas criminales que se promovieren contra los individuos de este Supremo Tribunal. Si llegare el caso en que sea necesario hacer efectiva la responsabilidad de este Supremo Tribunal, las Cortes, previa la formalidad establecida en el art. 228, procederán á nombrar para este fin un Tribunal compuesto de nueve jueces, que serán elegidos por suerte de un número doble.

Sexto. Conocer de la residencia de todo empleado público que esté sujeto á ella por disposicion de las leyes.

Séptimo. Conocer de todos los asuntos contenciosos pertenecientes al Real patronato.

Octavo. Conocer de los recursos de fuerza de todos los Tribunales eclesiásticos superiores de la corte.

Noveno. Conocer de los recursos de nulidad, que se interpongan contra las sentencias dadas en última instancia para el preciso efecto de reponer el proceso, devolviéndolo, y hacer efectiva la responsabilidad de que trata el art. 254. Por lo relativo á Ultramar, de estos recursos se conocerá en las Audiencias en la forma que se dirá en su lugar.

Décimo. Oir las dudas de los demás Tribunales sobre la inteligencia de alguna ley, y consultar sobre ellas al Rey con los fundamentos que hubiere, para que promueva la conveniente declaracion en las Cortes.

Undécimo. Examinar las listas de las causas civiles y criminales que deben remitirle las Audiencias para promover la pronta administracion de justicia, pasar copia de ellas para el mismo efecto al Gobierno, y disponer su publicacion por medio de la imprenta.

Art. 262. Todas las causas civiles y criminales se fenecerán dentro del territorio de cada Audiencia.

Art. 263. Pertenecerá á las Audiencias conocer de todas las causas civiles de los Juzgados inferiores de su demarcacion en segunda y tercera instancia, y lo mismo de las criminales, segun lo determinen las leyes; y tambien de las causas de suspension y separacion de los jueces inferiores de su terri-

torio, en el modo que prevengan las leyes, dando cuenta al Rey.

Art. 264. Los magistrados que hubieren fallado en la segunda instancia, no podrán asistir á la vista del mismo pleito en la tercera.

Art. 265. Pertenecerá tambien á las Audiencias conocer de las competencias entre todos los jueces subalternos de su territorio.

Art. 266. Les pertenecerá asimismo conocer de los recursos de fuerza que se introduzcan de los Tribunales y autoridades eclesiásticas de su territorio.

Art. 267. Les corresponderá tambien recibir de todos los jueces subalternos de su territorio avisos puntuales de las causas que se formen por delitos y listas de las causas civiles y criminales pendientes en su Juzgado, con expresion del estado de unas y otras, á fin de promover la mas pronta administracion de justicia.

Art. 268. A las Audiencias de Ultramar les corresponderá además el conocer de los recursos de nulidad, debiendo estos interponerse, en aquellas Audiencias que tengan suficiente número para la formacion de tres Salas, en la que no haya conocido de la causa en ninguna instancia. En las Audiencias que no consten de este número de ministros, se interpondrán estos recursos de una á otra de las comprendidas en el distrito de una misma gobernacion superior, y en el caso de que en este no hubiere mas que una Audiencia, irán á la mas inmediata de otro distrito.

Art. 269. Declarada la nulidad, la Audiencia que ha conocido de ella dará cuenta con testimonio que contenga los insertos convenientes, al Supremo Tribunal de Justicia para hacer efectiva la responsabilidad de que trata el art. 254.

Art. 270. Las Audiencias remitirán cada año al Supremo Tribunal de Justicia listas exactas de las causas civiles, y cada seis meses de las criminales, así fenecidas como pendientes, con expresion del estado que estas tengan, incluyendo las que hayan recibido de los Juzgados inferiores.

Art. 271. Se determinará por leyes y reglamentos especiales el número de los magistrados de las Audiencias, que no podrán ser menos de siete, la forma de estos Tribunales, y el lugar de su residencia.

Art. 272. Cuando llegue el caso de hacerse la conveniente division del territorio español, indicada en el art. 11, se determinará con respecto á ella el número de Audiencias que han de establecerse, y se les señalará territorio.

Art. 273. Se establecerán partidos proporcionalmente iguales, y en cada cabeza de

partido habrá un juez de letras con un Juzgado correspondiente.

Art. 274. Las facultades de estos Jueces se limitarán precisamente á lo contencioso, y las leyes determinarán las que han de pertenecerles en la capital y pueblos de su partido, como tambien hasta de que cantidad podrán conocer en los negocios civiles sin apelacion.

Art. 275. En todos los pueblos se establecerán Alcaldes, y las leyes determinarán la extension de sus facultades, así en lo contencioso como en lo económico.

Art. 276. Todos los Jueces de los Tribunales inferiores deberán dar cuenta, á mas tardar dentro de tercero dia, á su respectiva Audiencia de las causas que se formen por delitos cometidos en su territorio, y despues continuarán dando cuenta de su estado en las épocas que la Audiencia les prescriba.

Art. 277. Deberán asimismo remitir á la Audiencia respectiva listas generales cada seis meses de las causas civiles y cada tres meses de las criminales, que pendieren en sus Juzgados, con excepcion de su estado.

Art. 278. Las leyes decidirán si ha de haber Tribunales especiales para conocer de determinados negocios.

Art. 279. Los magistrados y jueces al tomar posesion de sus plazas jurarán guardar la Constitucion, ser fieles al Rey, observar las leyes, y administrar imparcialmente la justicia.

CAP. II.—*De la administracion de justicia en lo civil* (1).

Art. 280. No se podrá privar á ningun español del derecho de terminar sus diferencias por medio de jueces árbitros, elegidos por ambas partes.

Art. 281. La sentencia que dieren los árbitros se ejecutará, si las partes al hacer el compromiso no se hubieren reservado el derecho de apelar.

Art. 282. El Alcalde de cada pueblo ejercerá en él el oficio de conciliador; y el que tenga que demandar por negocios civiles ó por injurias deberá presentarse á él con este objeto.

Art. 283. El Alcalde con dos hombres buenos, nombrados uno por cada parte, oirá al demandante y al demandado, se enterará de las razones en que respectivamente apoyen su intencion; y tomará, oído el dictámen de los dos asociados, la providencia que le parezca propia para el fin de terminar el litigio sin mas progreso, como se terminará en

(1) Diario citado, t. 10, p. 299.

efecto, si las partes se aquietan con esta decision extrajudicial.

Art. 284. Sin hacer constar que se ha intentado el medio de la conciliacion, no se entablará pleito ninguno.

Art. 285. En todo negocio, cualquiera que sea su cuantía, habrá á lo mas tres instancias y tres sentencias definitivas pronunciadas en ellas. Cuando la tercera instancia se interponga de dos sentencias conformes, el número de jueces que haya de decidirla, deberá de ser mayor que el que asistió á la vista de la segunda, en la forma que lo disponga la ley, á esta toca tambien determinar atendida la entidad de los negocios, y la naturaleza y calidad de los diferentes juicios, qué sentencia ha de ser la que en cada uno deba causar ejecutoria (1).

CAP. III.—*De la administracion de justicia en lo criminal* (2).

Art. 286. Las leyes arreglarán la administracion de justicia en lo criminal, de manera que el proceso sea formado con brevedad, y sin vicios; á fin de que los delitos sean prontamente castigados.

Art. 287. Ningun español podrá ser preso sin que preceda informacion sumaria del hecho, por el que merezca segun la ley ser castigado con pena corporal, y asimismo un mandamiento del juez por escrito, que se notificará en el acto mismo de la prision.

Art. 288. Toda persona deberá obedecer estos mandamientos: cualquiera resistencia será reputada delito grave.

Art. 289. Cuando hubiere resistencia ó se temiere la fuga se podrá usar de la fuerza para asegurar la persona.

Art. 290. El arrestado, antes de ser puesto en prision, será presentado al juez, siempre que no haya cosa que lo estorbe, para que le reciba declaracion, mas si esto no pudiese verificarse, se le conducirá á la cárcel en calidad de detenido, y el juez le recibirá la declaracion dentro de veinticuatro horas.

Art. 291. La declaracion del arrestado será sin juramento, que á nadie ha de tomarse en materias criminales sobre hecho propio.

Art. 292. En *fraganti* todo delincuente puede ser arrestado, y todos pueden arrestarle y conducirlo á la presencia del juez: presentado ó puesto en custodia se procederá en todo, como se previene en los dos artículos precedentes.

Art. 293. Si se resolviere que el arresta-

do se le ponga en la cárcel, ó que permanezca en ella en calidad de preso, se proveerá auto motivado, y de él se entregará copia al alcaide, para que la inserte en el libro de presos, sin cuyo requisito no admitirá el alcaide á ningun preso en calidad de tal, bajo la mas estrecha responsabilidad.

Art. 294. Solo se hará embargo de bienes cuando se proceda por delitos que lleven consigo responsabilidad pecuniaria, y en proporcion á la cantidad á que esta puede extenderse.

Art. 295. No será llevado á la cárcel el que dé fiador en los casos en que la ley no prohiba expresamente que se admita la fianza.

Art. 296. En cualquier estado de la causa que aparezca que no puede imponerse al preso pena corporal, se le pondrá en libertad dando fianza.

Art. 297. Se dispondrán las cárceles de manera que sirvan para asegurar y no molestar á los presos; así el alcaide tendrá á estos en buena custodia, y separados los que el juez mande tener en comunicacion, pero nunca en calabozos subterráneos ni mal sanos.

Art. 298. La ley determinará la frecuencia con que ha de hacerse la visita de cárceles, y no habrá preso alguno que deje de presentarse á ella bajo ningun pretexto.

Art. 299. El juez y el alcaide que faltaren á lo dispuesto en los artículos precedentes, serán castigados como reos de detencion arbitraria, la que será comprendida como delito en el Código criminal.

Art. 300. Dentro de las veinticuatro horas se manifestará al tratado como reo la causa de su prision, y el nombre de su acusador, si lo hubiere.

Art. 301. Al tomar la confesion al tratado como reo, se le leerán integramente todos los documentos y la declaraciones de los testigos, con los nombres de estos; y si por ellos no los conociere se le darán cuantas noticias pidan para veur en conocimiento de quienes son.

Art. 302. El proceso de allí en adelante será público en el modo y forma que determinen las leyes.

Art. 303. No se usará nunca del tormento ni de los apremios.

Art. 304. Tampoco se impondrá la pena de confiscacion de bienes.

Art. 305. Ninguna pena que se imponga por cualquiera delito que sea, ha de ser trascendental por término ninguno á la familia del que la sufre, sino que tendrá todo su efecto precisamente sobre el que la mereció.

Art. 306. No podrá ser allanada la casa de ningun español, sino en los casos que de-

(1) Diario citado, t. 10, p. 393, 423, 443, 451.

(2) Diario citado, t. 10, p. 345.

termine la ley para el buen orden y seguridad del Estado.

Art. 307. Si con el tiempo creyeren las Cortes que conviene haya distincion entre los jueces del hecho y del derecho, la establecerán en la forma que juzguen conducente.

Art. 308. Si en circunstancias extraordinarias la seguridad del Estado exigiese, en toda la Monarquía ó en parte de ella, la suspension de algunas de las formalidades prescritas en este capítulo para el arresto de los delinquentes, podrán las Cortes decretarla por un tiempo determinado.

TITULO VI.

DEL GOBIERNO INTERIOR DE LAS PROVINCIAS Y DE LOS PUEBLOS.

CAP. I.—De los Ayuntamientos (1).

Art. 309. Para el gobierno interior de los pueblos habrá Ayuntamientos compuestos del Alcalde ó Alcaldes, los regidores y el procurador síndico, y presididos por el Jefe político donde lo hubiere, y en su defecto por el Alcalde ó el primer nombrado entre estos, si hubiere dos.

Art. 310. Se pondrá Ayuntamiento en los pueblos que no le tengan, y en que convenga le haya, no pudiendo dejar de haberle en los que por sí ó con su comarca lleguen á mil almas, y tambien se les señalará término correspondiente.

Art. 311. Las leyes determinarán el número de individuos de cada clase de que han de componerse los Ayuntamientos de los pueblos con respecto á su vecindario.

Art. 312. Los Alcaldes, regidores y procuradores síndicos se nombrarán por eleccion en los pueblos, cesando los regidores y demás que sirvan oficios perpétuos de los Ayuntamientos, cualquiera que sea su título y denominacion.

Art. 313. Todos los años en el mes de diciembre se reunirán los ciudadanos de cada pueblo, para elegir á pluralidad de votos, con proporcion á su vecindario, determinado número de electores, que residan en el mismo pueblo y estén en el ejercicio de los derechos de ciudadano.

Art. 314. Los electores nombrarán en el mismo mes á pluralidad absoluta de votos el Alcalde ó Alcaldes, regidores y procurador ó procuradores síndicos, para que entren á ejercer sus cargos el primero de enero del siguiente año.

Art. 315. Los Alcaldes se mudarán todos los años, los regidores por mitad cada año, y lo mismo los procuradores síndicos donde haya dos: si hubiere solo uno, se mudará todos los años.

Art. 316. El que hubiera ejercido cualquiera de estos cargos no podrá volver á ser elegido para ninguno de ellos sin que pase por lo menos dos años, donde el vecindario lo permita.

Art. 317. Para ser Alcalde, regidor ó procurador síndico, además de ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos, se requiere ser mayor de veinticinco años, con cinco á lo menos de vecindad y residencia en el pueblo. Las leyes determinarán las demás calidades que han de tener estos empleados.

Art. 318. No podrá ser Alcalde, regidor ni procurador síndico ningun empleado público de nombramiento del Rey, que esté en ejercicio, no entendiéndose comprendidos en esta regla los que sirvan en las milicias nacionales.

Art. 319. Todos los empleos municipales referidos serán carga concejil, de que nadie podrá excusarse sin causa legal.

Art. 320. Habrá un Secretario en todo Ayuntamiento, elegido por este á pluralidad absoluta de votos, y dotado de los fondos del comun.

Art. 321. Estará á cargo de los Ayuntamientos:

Primero. La policía de salubridad y comodidad.

Segundo. Auxiliar al Alcalde en todo lo que pertenezca á la seguridad de las personas y bienes de los vecinos, y á la conservacion del orden público.

Tercero. La administracion é inversion de los caudales de propios y arbitrios conforme á las leyes y reglamentos, con el cargo de nombrar depositario bajo responsabilidad de los que le nombran.

Cuarto. Hacer el repartimiento y recaudacion de las contribuciones, y remitirlas á la Tesorería respectiva.

Quinto. Cuidar de todas las escuelas de primeras letras y de los demás establecimientos de educacion que se paguen de los fondos del comun.

Sexto. Cuidar de los hospitales, hospicios, casas de expósitos y demás establecimientos de beneficencia, bajo las reglas que se prescriban.

Séptimo. Cuidar de la construccion y reparacion de los caminos, calzadas, puentes y cárceles, de los montes y plantíos del comun, y de todas las obras públicas de necesidad, utilidad y ornato.

(1) Diario citado, t. 44, p. 240.

Octavo. Formar las ordenanzas municipales del pueblo, y presentarlas á las Córtes para su aprobacion por medio de la Diputacion provincial, que las acompañará con su informe.

Noveno. Promover la agricultura, la industria y el comercio segun la localidad y circunstancias de los pueblos, y cuanto les sea útil y beneficioso.

Art. 322. Si se ofrecieren obras ú otros objetos de utilidad comun, y por no ser suficientes los caudales de propios fuere necesario recurrir á arbitrios, no podrán imponerse estos, sino obteniendo por medio de la Diputacion provincial la aprobacion de las Córtes. En el caso de ser urgente la obra ú objeto á que se destinen, podrán los Ayuntamientos usar ínterinamente de ellos con el consentimiento de la misma Diputacion, mientras recae la resolucion de las Córtes. Estos arbitrios se administrarán en todo como los caudales de propios. *v. 335, 4*

Art. 323. Los Ayuntamientos desempeñarán todos estos encargos bajo la inspeccion de la Diputacion provincial, á quien rendirán cuenta justificada cada año de los caudales públicos que hayan recaudado é invertido.

CAP. II.—*Del Gobierno político de las provincias y de las Diputaciones provinciales (1).*

Art. 324. El Gobierno político de las provincias residirá en el jefe superior, nombrado por el Rey en cada una de ellas.

Art. 325. En cada provincia habrá una Diputacion llamada provincial, para promover su prosperidad, presidida por el jefe superior.

Art. 326. Se compondrá esta Diputacion del presidente, del intendente y de siete individuos elegidos en la forma que se dirá, sin perjuicio de que las Córtes en lo sucesivo varíen este número como lo crean conveniente, ó lo exijan las circunstancias, hecha que sea la nueva division de provincias de que trata el art. 11.

Art. 327. La Diputacion provincial se renovará cada dos años por mitad, saliendo la primera vez el mayor número, y la segunda el menor, y así sucesivamente.

Art. 328. La eleccion de estos individuos se hará por los electores de partido al otro dia de haber nombrado los diputados de Córtes, por el mismo orden con que estos se nombran.

Art. 329. Al mismo tiempo y en la mis-

ma forma se elegirán tres suplentes para cada Diputacion.

Art. 330. Para ser individuo de la Diputacion provincial se requiere ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos, mayor de veinticinco años, natural ó vecino de la provincia con residencia á lo menos de siete años, y que tenga lo suficiente para mantenerse con decencia: y no podrá serlo ninguno de los empleados de nombramiento del Rey, de que trata el art. 318.

Art. 331. Para que una misma persona pueda ser elegida segun vez, deberá haber pasado á lo menos el tiempo de cuatro años despues de haber cesado en sus funciones.

Art. 332. Cuando el jefe superior de la provincia no pudiese presidir la Diputacion, la presidirá el intendente, y en su defecto el vocal que fuere primer nombrado.

Art. 333. La Diputacion nombrará un secretario, dotado de los fondos públicos de la provincia.

Art. 334. Tendrá la Diputacion en cada año á lo mas noventa dias de sesiones distribuidas en las épocas que mas convenga. En la Península deberán hallarse reunidas las Diputaciones para el 1.º de marzo, y en Ultramar para el 1.º de junio.

Art. 335. Tocar á estas Diputaciones:

Primero. Intervenir y aprobar el repartimiento hecho á los pueblos de las contribuciones que hubieren cabido á la provincia.

Segundo. Velar sobre la buena inversion de los fondos públicos de los pueblos y examinar sus cuentas, para que con su visto bueno recaiga la aprobacion superior, cuidando de que en todo se observen las leyes y reglamentos.

Tercero. Cuidar de que se establezcan Ayuntamientos donde corresponda los haya conforme á lo prevenido en el art. 310.

Cuarto. Si se ofrecieren obras nuevas de utilidad comun de la provincia, ó la reparacion de las antiguas, proponer al Gobierno los arbitrios que crean mas convenientes para su ejecucion, á fin de obtener el correspondiente permiso de las Córtes. *v. 336*

En Ultramar, si la urgencia de las obras públicas no permitiese esperar la resolucion de las Córtes, podrá la Diputacion con expreso asenso del jefe de la provincia usar desde luego de los arbitrios, dando inmediatamente cuenta al Gobierno para la aprobacion de las Córtes.

Para la recaudacion de los arbitrios la Diputacion, bajo su responsabilidad, nombrará depositario, y las cuentas de la inversion, examinadas por la Diputacion, se remitirán al Gobierno para que las haga reconocer y

(1) Diario citado, t. 41, p. 236.

glosar, y finalmente las pase á las Córtes para su aprobacion.

Quinto. Promover la educacion de la juventud conforme á los planes aprobados, y fomentar la agricultura, la industria y el comercio, protegiendo á los inventores de nuevos descubrimientos en cualquiera de estos ramos.

Sexto. Dar parte al Gobierno de los abusos que noten en la administracion de las rentas públicas.

Séptimo. Formar el censo y la estadística de las provincias.

Octavo. Cuidar de que los establecimientos piadosos y de beneficencia llenen su respectivo objeto, proponiendo al Gobierno las reglas que estimen conducentes para la reforma de los abusos que observaren.

Noveno. Dar parte á las Córtes de las infracciones de la Constitucion que se noten en la provincia.

Décimo. Las Diputaciones de las provincias de Ultramar velarán sobre la economía, orden y progresos de las misiones para la conversion de los indios infieles, cuyos encargados les darán razon de sus operaciones en este ramo, para que se eviten los abusos: todo lo que las Diputaciones pondrán en noticia del Gobierno.

Art. 336. Si alguna Diputacion abusare de sus facultades, podrá el Rey suspender á los vocales que la componen, dando parte á las Córtes de esta disposicion, y de los motivos de ella para la determinacion que corresponda: durante la suspension entrarán en funciones los suplentes.

Art. 337. Todos los individuos de los Ayuntamientos y de las Diputaciones de provincia, al entrar en el ejercicio de sus funciones, prestarán juramento, aquellos en manos del Jefe político, donde le hubiere, ó en su defecto del Alcalde que fuere primer nombrado, y estos en las del Jefe superior de la provincia, de guardar la Constitucion política de la Monarquía española, observar las leyes, ser fieles al Rey y cumplir religiosamente las obligaciones de su cargo.

TITULO VII.

DE LAS CONTRIBUCIONES (1).

CAPITULO UNICO.

Art. 338. Las Córtes establecerán ó confirmarán anualmente las contribuciones, sean directas ó indirectas, generales, provinciales ó municipales, subsistiendo las antiguas has-

ta que se publique su derogacion ó la imposicion de otras.

Art. 339. Las contribuciones se repartirán entre todos los españoles con proporcion á sus facultades, sin excepcion ni privilegio alguno.

Art. 340. Las contribuciones serán proporcionadas á los gastos que se decreten por las Córtes para el servicio público en todos los ramos.

Art. 341. Para que las Córtes puedan fijar los gastos en todos los ramos del servicio público y las contribuciones que deban cubrirlos, el Secretario del despacho de Hacienda las presentará, luego que estén reunidas, el presupuesto general de los que se estimen precisos, recogiendo de cada uno de los demás Secretarios del despacho el respectivo á su ramo.

Art. 342. El mismo Secretario del despacho de Hacienda presentará con el presupuesto de gastos el plan de las contribuciones que deban imponerse para llenarlos.

Art. 343. Si al Rey pareciese gravosa ó perjudicial alguna contribucion, lo manifestará á las Córtes por el Secretario del despacho de Hacienda, presentando al mismo tiempo lo que crea mas conveniente sustituir.

Art. 344. Fijada la cuota de la contribucion directa, las Córtes aprobarán el repartimiento de ella entre las provincias, á cada una de las cuales se asignará el cupo correspondiente á su riqueza, para lo que el Secretario del despacho de Hacienda presentará tambien los presupuestos necesarios.

Art. 345. Habrá una Tesorería general para toda la Nacion, á la que tocará disponer de todos los productos de cualquiera renta destinada al servicio del Estado.

Art. 346. Habrá en cada provincia una Tesorería, en la que entrarán todos los caudales que en ella se recauden para el Erario público. Estas Tesorerías estarán en correspondencia con la general, á cuya disposicion tendrán todos sus fondos.

347. Ningun pago se admitirá en cuenta al tesorero general, si no se hiciere en virtud de decreto del Rey, refrendado por el Secretario del despacho de Hacienda, en el que se expresen el gasto á que se destina su importe, y el decreto de las Córtes con que este se autoriza.

Art. 348. Para que la Tesorería general lleve su cuenta con la pureza que corresponde, el cargo y la data deberán ser intervenidos respectivamente por las Contadurías de valores y de distribucion de la renta pública.

Art. 349. Una instruccion particular ar-

(1) Diario citado, t. 14, p. 230

...del art. 56, 2.ª R. L.
...del Pub. ...

reglará estas oficinas, de manera que sirvan para los fines de su instituto.

Art. 350. Para el exámen de todas las cuentas de caudales públicos habrá una Contaduría mayor de cuentas, que se organizará por una ley especial.

Art. 351. La cuenta de la Tesorería general, que comprenderá el rendimiento anual de todas las contribuciones y rentas, y su inversión, luego que reciba la aprobación final de las Cortes, se imprimirá, publicará y circulará á las Diputaciones de provincia y á los Ayuntamientos.

Art. 352. Del mismo modo se imprimirán publicarán y circularán las cuentas que rinda los Secretarios del despacho de los gastos hechos en sus respectivos ramos.

Art. 353. El manejo de la Hacienda pública estará siempre independiente de toda otra autoridad que aquella á la que está encomendado.

Art. 354. No habrá aduanas sino en los puertos de mar y en las fronteras, bien que esta disposicion no tendrá efecto hasta que las Cortes lo determinen.

Art. 355. La deuda pública reconocida será una de las primeras atenciones de las Cortes, y estas pondrán el mayor cuidado en que se vaya verificando su progresiva extincion, y siempre el pago de los réditos en la parte que los devengue, arreglando todo lo concerniente á la Direccion de este importante ramo, tanto respecto á arbitrios que se establecieren, los cuales se manejarán con absoluta separacion de la Tesorería general, como respecto á las oficinas de cuenta y razon.

TITULO VIII.

DE LA FUERZA MILITAR NACIONAL (1)

CAP. I.—De las tropas de continuo servicio.

Art. 356. Habrá una fuerza militar nacional permanente de tierra y de mar para la defensa exterior del Estado, y la conservacion del órden interior.

Art. 357. Las Cortes fijarán anualmente el número de tropas que fueren necesarias segun las circunstancias y el modo de levantar las que fuere mas conveniente.

Art. 358. Las Cortes fijarán asimismo anualmente el número de buques de la marina militar que han de armarse ó conservarse armados.

Art. 359. Establecerán las Cortes por medio de las respectivas ordenanzas todo lo relativo á la disciplina, órden de ascensos,

suelos, administracion y cuanto correspondá á la buena Constitucion del ejército y armada.

Art. 360. Se establecerán escuelas militares para la enseñanza é instruccion de todas las diferentes armas del ejército y armada.

Art. 361. Ningun español podrá excusarse del servicio militar, cuando y en la forma que fuere llamado por la ley.

CAP. II.—De las milicias nacionales (1).

Art. 362. Habrá en cada provincia cuerpos de milicias nacionales, compuestos de habitantes de cada una de ellas con proporcion á su poblacion y circunstancias.

Art. 363. Se arreglará por una ordenanza particular el modo de su formacion, su número y especial constitucion en todos sus ramos.

Art. 364. El servicio de estas milicias no será continuo, y solo tendrá lugar cuando las circunstancias lo requieran.

Art. 365. En caso necesario podrá el Rey disponer de esta fuerza dentro de la respectiva provincia; pero no podrá emplearla fuera de ella sin otorgamiento de las Cortes.

TITULO IX.

DE LA INSTRUCCION PÚBLICA (2).

CAPITULO UNICO.

Art. 366. En todos los pueblos de la Monarquía se establecerán escuelas de primeras letras, en las que se enseñará á los niños á leer, escribir y contar, y el catecismo de la religion católica, que comprenderá tambien una breve exposicion de las obligaciones civiles.

Art. 367. Asimismo se arreglará y creará el número competente de universidades y de otros establecimientos de instruccion, que se juzguen convenientes para la enseñanza de todas las ciencias, literatura y bellas artes.

Art. 368. El plan general de enseñanza será uniforme en todo el Reino, debiendo explicarse la Constitucion política de la Monarquía en todas las universidades y establecimientos literarios, donde se enseñen las ciencias eclesiásticas y políticas.

Art. 369. Habrá una Direccion general de estudios, compuesta de personas de conocida instruccion, á cuyo cargo estará, bajo la autoridad del Gobierno la inspeccion de la enseñanza pública.

Art. 370. Las Cortes por medio de pla-

(1) Diario citado, t. 11, p. 286.

(1) Diario citado, t. 11, p. 298.

(2) Diario citado, t. 11, p. 303.

nes y estatutos especiales arreglarán cuanto pertenezca al importante objeto de la instrucción pública.

Art. 374. Todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión ó aprobación alguna anterior á la publicación, bajo las restricciones y responsabilidad que establezcan las leyes.

TITULO X.

DE LA OBSERVANCIA DE LA CONSTITUCION Y MODO DE PROCEDER PARA HACER VARIACIONES EN ELLA.

CAPITULO UNICO (4).

Art. 372. Las Cortes en sus primeras sesiones tomarán en consideración las infracciones de la Constitución, que se les hubieren hecho presentes, para poner el conveniente remedio, y hacer efectiva la responsabilidad de los que hubieren contravenido á ella.

Art. 373. Todo español tiene derecho de representar á las Cortes ó al Rey para reclamar la observancia de la Constitución.

Art. 374. Toda persona que ejerza cargo público, civil, militar ó eclesiástico, prestará juramento al tomar posesion de su destino, de guardar la Constitución, ser fiel al Rey, y desempeñar debidamente su encargo.

Art. 375. Hasta pasados ocho años después de hallarse puesta en práctica la Constitución en todas sus partes, no se podrá proponer alteración, adición, ni reforma en ninguno de sus artículos.

Art. 376. Para hacer cualquiera alteración, adición ó reforma en la Constitución será necesario que la Diputación que haya de decretarla definitivamente, venga autorizada con poderes especiales para este objeto.

Art. 377. Cualquiera proposición de reforma en algun artículo de la Constitución deberá hacerse por escrito, y ser apoyada y firmada á lo menos por veinte diputados.

Art. 378. La proposición de reforma se leerá por tres veces, con el intervalo de seis dias de una lectura á otra, y después de la tercera se deliberará si há lugar á admitirla á discusión.

Art. 379. Admitida á discusión, se procederá en ella bajo las mismas formalidades y trámites que se prescriben para la formación de las leyes, después de las cuales se propondrá á la votación si há lugar á tratarse de nuevo en la siguiente Diputación ge-

neral, y para que así quede declarado, deberán convenir las dos terceras partes de los votos.

Art. 380. La Diputación general siguiente, previas las mismas formalidades en todas sus partes, podrá declarar en cualquiera de los dos años de sus sesiones, conviniendo en ello las dos terceras partes de votos, que há lugar al otorgamiento de poderes especiales para hacer la reforma.

Art. 381. Hecha esta declaración, se publicará y comunicará á todas las provincias, y según el tiempo en que se hubiere hecho, determinarán las Cortes si ha de ser la Diputación próximamente inmediata ó la siguiente á esta, la que ha de traer los poderes especiales.

Art. 382. Estos serán otorgados por las Juntas electorales de provincia, añadiendo á los poderes ordinarios la cláusula siguiente:

«Asímismo les otorgan poder especial para hacer en la Constitución la reforma de que trata el decreto de Cortes, cuyo tenor es el siguiente: (aquí el decreto literal.) Todo con arreglo á lo prevenido por la misma Constitución. Y se obligan á reconocer y tener por Constitucional lo que en su virtud establecieron.»

Art. 383. La reforma propuesta se discutirá de nuevo; y si fuere aprobada por las dos terceras partes de diputados pasará á ser ley Constitucional, y como tal se publicará en las Cortes.

Art. 384. Una Diputación presentará el decreto de reforma al Rey, para que le haga publicar y circular á todas las autoridades y pueblos de la Monarquía.—Cádiz diez y ocho de marzo del año de mil ochocientos y doce. *(Siguen las firmas.)*

Por tanto mandamos etc. (*Decretos de las Cortes, t. 2.º p. 98 y 165.*)

Tal es la famosa Constitución de las Cortes de Cádiz.

De ella se ha dicho que es defectuosa, que cercenaba demasiado la autoridad del Monarca, que establecía una sola Cámara popular, y que descendía á detalles que deben reservarse para leyes secundarias. No discutiremos sobre esto; pero aun concediendo que realmente tenga los defectos indicados, ¿hay obra humana que pueda llamarse perfecta? Los que se atribuyen á la obra de los legisladores de Cádiz tienen, sin embargo, harta disculpa en las circunstancias de

(4) Diario citado, t. 41, p. 305.

aquellos tiempos, y así lo reconoce el Sr. Conde de Toreno en su *Historia del levantamiento, guerra y revolucion de España* «Que precediese el establecimiento de las leyes entre nosotros á la creacion de los Reyes, dijolo ya con respecto á Aragon el historiador Gerónimo Blancas. Y si en el origen de la restauracion de la Monarquía, tiempo de oscuridad é ignorancia se cautelaron tanto nuestros mayores contra los abusos y desmanes futuros de la autoridad Real; con cuánta y mas poderosa razon no debieron mostrarse precavidos y aun umbrosos los españoles de la era actual y sus diputados! Los antiguos podian tener presentes los excesos de los Witizas y de los Rodrigues, de donde manaron para la Nacion raudales de sangre y lágrimas; pero ahora ofrecíanse además á la contemplacion moderna los muchos y funestos ejemplos de las edades posteriores y el tremendo y reciente del reinado de Carlos IV, en que hasta la independencian tocó al borde del precipicio. Por lo mismo conveniente fué poner diligencia extrema y muy atenta en procurar adoptar francas y buenas instituciones, aun en medio de una guerra desastrosa; pues la ocasion de dar la libertad, como sea presurosa, perdila una vez, con dificultad vuelve á hallarse.»

A los dos años, poco mas de publicada esta Constitucion, en 4 de mayo de 1814, fué declarada nula por el Rey don Fernando VII, quien otra vez en marzo de 1820 volvió á aceptarla, y otra vez á abolirla en octubre de 1823.

La muerte del Rey Fernando trajo consigo los sucesos políticos que son bien conocidos, y en 1834, en vez de restablecerse la Constitucion de 1812, se publicó el llamado Estatuto Real que vamos á insertar.

Antes, sin embargo, para facilitar la consulta del importantísimo discurso que precede á la Constitucion de Cádiz y de los principios consignados en esta, formaremos un índice alfabético de sus respectivos párrafos y artículos. A saber:

Alcaldes y Ayuntamientos.—Párrafos LXII á LXXII del discurso preliminar, y ar-

tículos 275, 282, 283, 309 á 323 y 337 de la Constitucion (1).

Centralizacion de fondos públicos; establecimiento de Tesorería central; LXXXV á LXXXVII, y arts. 345 y siguientes.

Cesiones de Bayona.

Ciudadanos de España; quiénes son, naturalizacion, pérdida de derechos; XII y XIII, arts. 5 á 9, 18 á 26, 247, 287.

Confiscacion; abolida: LXIV, y art. 304.

Consejo de Estado; XXX, y arts. 251 á 241.

Constitucion. Puntos capitales de nuestra antigua Constitucion: I.—Se ha conocido y usado en España cuanto dispone la de 1812, II y VII.—Soberanía nacional, III y arts. 2.^o y 3.^o—Const. de Aragon, V.—Const. de Navarra; VI.—Fundamentos de la Constitucion; division de poderes, etc. VIII y LX, y arts. 43 á 48.—Su observancia, inconveniente de las reformas; XCVII, y XCVIII, y arts. 372 á 384.

Contribuciones y rentas públicas; LXXXII, y arts. 338 á 355.—Aduanas; LXXXVII, y art. 354.

Córtes, modo de formarse; arts. 27 á 403; su celebracion 404 á 430; sus facultades, 431; formacion de las leyes y sancion Real, 432 á 433.—Id. XIV á XXII del discurso preliminar.

Deuda pública; LXXXIX y art. 353.

Diputacion permanente; XXII, y arts. 457 á 460.

Diputaciones provinciales; LXXIII á LXXXI, y 324 á 337.

Diputados; requisitos, incompatibilidades, prohibiciones; arts. 91 á 103, 128 á 130.

Fueros y libertades políticas de la Nacion; IV.

Fueros privilegiados; eclesiástico y militar; XI á XLII y arts. 248 250.

Fuerza pública; inconvenientes de los ejércitos permanentes; XC al XCH, y artículos 336 á 365.

Gobierno; poderes públicos; VIII, y artículos 13 á 17.

Infantes de España; arts. 202 á 209 y 215 á 217.

Instruccion pública; XCV, y arts. 366 á 371,

Jurado; LXV, y art. 307.

Juramento en lo penal; LXIII, y art. 291.—

Del Rey á su advenimiento al trono, artículo 173.—Del Príncipe de Asturias; artículo 212.

Justicia; en lo penal, detencion, prision, ju-

(1) Para evitar repeticiones, advertimos que las citas de numeracion romana se refieren á los párrafos del discurso preliminar, y las de números arabigos á los artículos de la Constitucion.

ramento, publicidad del proceso, abolición del tormento, inviolabilidad del domicilio etc. XXXI á LXVI, y artículos 286 á 308. En lo civil; XLIV á LX, y arts. 280 á 285. *Leyes*; su formación, sanción etc. arts. 131 á 156.—Unidad de Códigos XLIV, y art. 258. *Libertad civil*; igualdad ante la ley; XXXI y siguientes, y 286 y siguientes.—Suspensión de las garantías; LXVI, y art. 308.—De imprenta; XCVI, y art. 371. *Milicia nacional*; XCVI, y arts. 362 á 365. *Ministros*; su responsabilidad, funciones etc. XXIX, y arts. 222 á 230. *Poderes públicos*. (V. Cortes, Rey y Tribunales.) *Príncipe de Asturias*; XXVII, y 201, 206 á 211; su juramento al llegar á los 14 años, dotación etc.; arts. 242 y 245. *Prisión*; LXII, y art. 287. (V. Libertad civil.) *Regencia del Reino*; XXVI, y arts. 185 á 200. *Religion de España*; X y art. 12. *Rey*; su inviolabilidad; su autoridad, arts. 168 á 171; restricciones de su autoridad; artículo 172; su juramento al advenimiento al trono; art. 173; sucesión á la corona; artículos 174 á 185; menor edad y Regencia; 185 á 200; su dotación; arts. 213 á 220, y XXIII á XXVIII. *Soberanía nacional*. Disposiciones, juramento de Reyes y Príncipes; III y XXIII á XXVIII, y arts. 2.º y 3.º. *Territorio de las Españas*; arts. 10, 11 y 174. *Tormento*; su abolición; art. 303. *Tribunales*; su autoridad, integridad é independencia, responsabilidad etc., VIII, XXVIII y XLIII y siguientes, y art. 242 á 279.—Especiales; LVIII, y art. 278. *Tribunal Supremo de Justicia*; XLV, y artículo 259. *Veto*. (V. Leyes; Rey.)

ESTATUTO REAL.

Así se llamó á un decreto de 10 de abril de 1834 para la convocación de las Cortes generales del Reino, que era á la vez una especie de Carta constitucional. Es el siguiente:

TITULO PRIMERO.

De la convocación de las Cortes generales del Reino.

Artículo 1.º Con arreglo á lo que previenen la ley 5.ª, tit. XV, Part. 2.ª, y las leyes 1.ª y 2.ª, tit. VII, lib. 6.º de la Nueva Recopilación, S. M. la Reina Gobernadora, en nombre de su excelsa hija Doña Isa-

bel II, ha resuelto convocar las Cortes generales del Reino.

Art. 2.º Las Cortes generales se compondrán de dos Estamentos: el de próceres del Reino, y el de procuradores del Reino.

TITULO II.

Del Estamento de próceres del Reino.

Art. 3.º El Estamento de próceres del Reino se compondrá:

1.º De MM. RR. Arzobispos y reverendos Obispos.

2.º De grandes de España.

3.º De títulos de Castilla.

4.º De un número indeterminado de españoles, elevados en dignidad é ilustres por sus servicios en las varias carreras, y que sean ó hayan sido Secretarios del despacho, procuradores del Reino, consejeros de Estado, embajadores ó ministros plenipotenciarios, generales de mar ó de tierra, ó ministros de los Tribunales supremos.

5.º De los propietarios territoriales ó dueños de fábricas, manufacturas ó establecimientos mercantiles que reúnan á su mérito personal y á sus circunstancias relevantes, el poseer una renta anual de 60,000 rs., y el haber sido anteriormente procuradores del Reino.

6.º De los que en la enseñanza pública ó cultivando las ciencias ó las letras, hayan adquirido gran renombre y celebridad, con tal que disfruten una renta anual de 60,000 rs., ya provenga de bienes propios, ya de sueldo cobrado del Erario.

Art. 4.º Bastará ser Arzobispo ú Obispo electo auxiliar para poder ser elegido en clase de tal, y tomar asiento en el Estamento de próceres del Reino.

Art. 5.º Todos los grandes de España son miembros natos del Estamento de próceres del Reino; y tomarán asiento en él, con tal que reúnan las condiciones siguientes:

1.ª Tener veinticinco años cumplidos.

2.ª Estar en posesión de la grandeza y tenerla por derecho propio.

3.ª Acreditar que disfrutaban una renta anual de 200,000 rs.

4.ª No tener sujetos los bienes á ningún género de intervención.

5.ª No hallarse procesados criminalmente.

6.ª No ser súbditos de otra potencia.

Art. 6.º La dignidad de prócer del Reino es hereditaria en los grandes de España.

Art. 7.º El Rey elige y nombra los demás próceres del Reino, cuya dignidad es vitalicia.

Art. 8.º Los títulos de Castilla que fueren nombrados próceres del Reino, deberán justificar que reúnen las condiciones siguientes:

- 1.ª Ser mayores de veinticinco años.
- 2.ª Estar en posesion del título de Castilla, y tenerlo por derecho propio.
- 3.ª Disfrutar una renta anual de 80,000 reales.
- 4.ª No tener sujetos los bienes á ningun género de intervencion.
- 5.ª No hallarse procesados criminalmente.
- 6.ª No ser súbditos de otra potencia.

Art. 9.º El numero de próceres del Reino es ilimitado.

Art. 10. La dignidad de prócer del Reino se pierde únicamente por incapacidad legal, en virtud de sentencia por la que se haya impuesto pena infamatoria.

Art. 11. El reglamento determinará todo lo concerniente al régimen interior, y al modo de deliberar del Estamento de próceres del Reino.

Art. 12. El Rey elegirá de entre los próceres del Reino, cada vez que se congreguen las Cortes, á los que hayan de ejercer durante aquella reunion los cargos de presidente y vice-presidente de dicho Estamento.

TITULO III.

Del Estamento de procuradores del Reino.

Art. 13. El Estamento de procuradores del Reino se compondrá de las personas que se nombren con arreglo á la ley de elecciones.

Art. 14. Para ser procurador del Reino se requiere:

- 1.º Ser natural de estos Reinos ó hijo de padres españoles.
- 2.º Tener treinta años cumplidos.
- 3.º Estar en posesion de una renta propia anual de 12,000 rs.
- 4.º Haber nacido en la provincia que le nombre, ó haber residido en ella durante los dos últimos años, ó poseer en ella algun predio rústico ó urbano, ó capital de censo que reditúen la mitad de la renta necesaria para ser procurador del Reino.

En el caso de que un mismo individuo haya sido elegido procurador á Cortes por mas de una provincia, tendrá el derecho de optar entre las que le hubieren nombrado.

Art. 15. No podrán ser procuradores del Reino:

- 1.º Los que se hallen procesados criminalmente.

2.º Los que hayan sido condenados por un Tribunal á pena infamatoria.

3.º Los que tengan alguna incapacidad fisica, notoria y de naturaleza perpétua.

4.º Los negociantes que estén declarados en quiebra, ó que hayan suspendido sus pagos.

5.º Los propietarios que tengan intervinidos sus bienes.

6.º Los deudores á los fondos públicos, en calidad de segundos contribuyentes.

Art. 16. Los procuradores del Reino obrarán con sujecion á los poderes que se les hayan expedido al tiempo de su nombramiento, en los términos que presija la Real convocatoria.

Art. 17. La duracion de los poderes de los procuradores del Reino, será de tres años, á menos que antes de este plazo haya el Rey disuelto las Cortes.

Art. 18. Cuando se proceda á nuevas elecciones, bien sea por haber caducado los poderes, bien porque el Rey haya disuelto las Cortes, los que hayan sido últimamente procuradores del Reino podrán ser reelegidos, con tal que continúen teniendo las condiciones que para ello requieran las leyes.

TITULO IV.

De la reunion del Estamento de procuradores del Reino.

Art. 19. Los procuradores del Reino se reunirán en el pueblo designado por la Real convocatoria para celebrarse las Cortes.

Art. 20. El reglamento de las Cortes determinará la forma y reglas que hayan de observarse para la presentacion y exámen de los poderes.

Art. 21. Luego que estén aprobados los poderes de los procuradores del Reino, procederán á elegir cinco, de entre ellos mismos, para que el Rey designe los dos que han de ejercer los cargos de presidente y vice-presidente.

Art. 22. El presidente y vice-presidente del Estamento de procuradores del Reino cesarán en sus funciones cuando el Rey suspenda ó disuelva las Cortes.

Art. 23. El reglamento presijará todo lo concerniente al régimen interior y al modo de deliberar del Estamento de procuradores del Reino.

TITULO V.

Disposiciones generales.

Art. 24. Al Rey toca exclusivamente convocar, suspender y disolver las Cortes.

Art. 25. Las Córtes se reunirán, en virtud de Real convocatoria, en el pueblo y en el día que aquella señalare.

Art. 26. El Rey abrirá y cerrará las Córtes, bien en persona, ó bien autorizando para ello á los Secretarios del despacho, por un decreto especial refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros.

Art. 27. Con arreglo á la ley 5.^a, título XV, Part. 2.^a, se convocarán Córtes generales despues de la muerte del Rey, para que jure su sucesor la observancia de las leyes, y reciba de las Córtes el debido juramento de fidelidad y obediencia.

Art. 28. Igualmente se convocarán las Córtes generales del Reino, en virtud de la citada ley, cuando el Príncipe ó Princesa que haya heredado la Corona sea menor de edad.

Art. 29. En el caso expresado en el artículo precedente, los guardadores del Rey niño jurarán en las Córtes velar lealmente en custodia del Príncipe, y no violar las leyes del Estado; recibiendo de los próceres y de los procuradores del Reino el debido juramento de fidelidad y obediencia.

Art. 30. Con arreglo á la ley 2.^a, título VII, lib. VI de la Nueva Recopilación, se convocarán las Córtes del Reino cuando ocurra algun negocio árduo, cuya gravedad, á juicio del Rey, exija consultarlas.

Art. 31. Las Córtes no podrán deliberar sobre ningun asunto que no se haya sometido expresamente á su exámen en virtud de de un decreto Real.

Art. 32. Queda sin embargo expedito el derecho que siempre han ejercido las Córtes de elevar peticiones al Rey, haciéndolo del modo y forma que se prefijará en el reglamento.

Art. 33. Para la formacion de las leyes se requiere la aprobacion de uno y otro Estamento y la sancion del Rey.

Art. 34. Con arreglo á la ley 1.^a, título VII, lib. VI de la Nueva Recopilación, no se exigirán tributos ni contribuciones de ninguna clase, sin que á propuesta del Rey los hayan votado las Córtes.

Art. 35. Las contribuciones no podrán imponerse, cuando mas, sino por término de dos años; antes de cuyo plazo deberán votarse de nuevo por las Córtes.

Art. 36. Antes de votar las Córtes las contribuciones que hayan de imponerse, se les presentará por los respectivos Secretarios del despacho una exposicion, en que se manifieste el estado que tengan los varios ramos de la Administracion pública, debiendo despues el Ministro de Hacienda presentar á

las Córtes el presupuesto de gastos y de los medios de satisfacerlos.

Art. 37. El Rey suspenderá las Córtes en virtud de un decreto refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros; y en cuanto se lea aquel se separarán uno y otro Estamento, sin poder volver á reunirse ni tomar ninguna deliberacion ni acuerdo.

Art. 38. En el caso que el Rey suspendiere las Córtes, no volverán estas á reunirse sino en virtud de una nueva convocatoria.

Art. 39. El día que esta señalare para volver á reunirse las Córtes, concurrirán á ellas los mismos procuradores del Reino, á menos que ya se haya cumplido el término de los tres años que deben durar sus poderes.

Art. 40. Cuando el Rey disuelva las Córtes habrá de hacerlo en persona ó por medio de un decreto, refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros.

Art. 41. En uno y otro caso se separarán inmediatamente ambos Estamentos.

Art. 42. Anunciada de órden del Rey la disolucion de las Córtes, el Estamento de próceres del Reino no podrá volver á reunirse ni tomar resolucion ni acuerdo, hasta que en virtud de nueva convocatoria vuelvan á juntarse las Córtes.

Art. 43. Cuando de órden del Rey se disuelvan las Córtes, quedan anulados en el mismo acto los poderes de los procuradores del Reino.

Todo lo que hicieren ó determinaren despues, es nulo de derecho.

Art. 44. Si hubiesen sido disueltas las Córtes, habrán de reunirse otras antes del término de un año.

Art. 45. Siempre que se convoquen Córtes, se convocará á un mismo tiempo á uno y otro Estamento.

Art. 46. No podrá estar reunido un Estamento, sin que lo esté igualmente el otro.

Art. 47. Cada Estamento celebrará sus sesiones en recinto separado.

Art. 48. Las sesiones de uno y otro Estamento serán públicas, excepto en los casos que señalare el reglamento.

Art. 49. Así los próceres como los procuradores del Reino serán inviolables por las opiniones y votos que dieren en desempeño de su encargo.

Art. 50. El reglamento de las Córtes determinará las relaciones de uno y otro Estamento, ya recíprocamente entre sí, ya respecto del Gobierno.

Aranjuez 10 de abril de 1834.—Francisco Martínez de la Rosa.—Nicolás María Garellly.

—Antonio Remon Zarco del Valle.—José Vazquez Figueroa.—José de Imáz.—Javier de Búrgos. (CL. t. 1.º p. 327).

No satisfizo el Estatuto Real las aspiraciones legítimas de los españoles, y por Real decreto dado en San Ildefonso á 13 de agosto de 1836 se mandó publicar la *Constitucion politica del año 1812*, en el interin que reunida la Nacion en Córtes, manifestase expresamente su voluntad, ó diera otra Constitucion conforme á las necesidades de la misma; y en efecto, por R. D. de 21 de agosto del mismo año 1836, se convocó á Córtes generales con arreglo á dicha Constitucion, con el carácter de constituyentes, habiendo dado por resultado la siguiente

CONSTITUCION DE 1837.

Fué promulgada esta Constitucion en 18 de junio de 1837. En ella quisieron las Córtes Constituyentes hacer una obra aceptable á todos los partidos, y dieron en efecto una solemne prueba de su grande moderacion y prudencia, como lo reconoció en el solemne acto de la jura la misma Reina Gobernadora. Hay diferencias muy esenciales entre esta Constitucion y la de 1812, como el establecimiento de las dos Cámaras y veto absoluto de la Corona. Hé aquí textualmente la Constitucion:

DOÑA ISABEL SEGUNDA, por la gracia de Dios y la Constitucion de la Monarquía española, Reina de las Españas; y en su Real nombre, y durante su menor edad, la Reina viuda su madre Doña María Cristina de Borbon, Gobernadora del Reino; á todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed: Que las Córtes generales han decretado y sancionado, y Nos de conformidad aceptado, lo siguiente:

SIENDO LA VOLUNTAD DE LA NACION REVISAR, EN USO DE SU SOBERANÍA, LA CONSTITUCION POLITICA PROMULGADA EN CÁDIZ EL DIEZ Y NUEVE DE MARZO DE MIL OCHOCIENTOS LOCE; LAS CORTES GENERALES, CONGREGADAS Á ESTE FIN, DECRETAN Y SANCIONAN LA SIGUIENTE

CONSTITUCION

DE LA

MONARQUIA ESPAÑOLA.

TIT. I.—De los españoles.

Artículo 1.º Son españoles:

1.º Todas las personas nacidas en los dominios de España.

2.º Los hijos de padre ó madre españoles, aunque hayan nacido fuera de España.

3.º Los extranjeros que hayan obtenido carta de naturaleza.

4.º Los que sin ella hayan ganado vecindad en cualquier pueblo de la Monarquía.

La calidad de español se pierde por adquirir naturaleza en país extranjero, y por admitir empleo de otro Gobierno sin licencia del Rey.

Art. 2.º Todos los españoles pueden imprimir y publicar libremente sus ideas sin previa censura, con sujecion á las leyes.

La calificacion de los delitos de imprenta corresponde exclusivamente á los jurados.

Art. 3.º Todo español tiene derecho de dirigir peticiones por escrito á las Córtes y al Rey, como determinen las leyes.

Art. 4.º Unos mismos Códigos regirán en toda la Monarquía, y en ellos no se establecerá mas que un solo fuero para todos los españoles en los juicios comunes, civiles y criminales.

Art. 5.º Todos los españoles son admisibles á los empleos y cargos públicos, segun su mérito y capacidad.

Art. 6.º Todo español está obligado á defender la patria con las armas cuando sea llamado por la ley, y á contribuir en proporcion de sus haberes para los gastos del Estado.

Art. 7.º No puede ser detenido, ni preso, ni separado de su domicilio ningun español, ni allanada su casa, sino en los casos y en la forma que las leyes prescriban.

Art. 8.º Si la seguridad del Estado exigiere en circunstancias extraordinarias la suspension temporal en toda la Monarquía, ó en parte de ella, de lo dispuesto en el artículo anterior, se determinará por una ley.

Art. 9.º Ningun español puede ser procesado ni sentenciado sino por el juez ó Tribunal competente, en virtud de leyes anteriores al delito y en la forma que estas prescriban.

Art. 10. No se impondrá jamás la pena de confiscacion de bienes, y ningun español será privado de su propiedad sino por causa

justificada de utilidad comun, previa la correspondiente indemnizacion.

Art. 11. La Nacion se obliga á mantener el culto y los ministros de la religion católica que profesan los españoles.

TIT. II.—*De las Cortes.*

Art. 12. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey.

Art. 13. Las Cortes se componen de dos Cuerpos Colegisladores, iguales en facultades: el Senado y el Congreso de los diputados.

TIT. III.—*Del Senado.*

Art. 14. El número de los senadores será igual á las tres quintas partes de los diputados.

Art. 15. Los senadores son nombrados por el Rey á propuesta, en lista triple, de los electores que en cada provincia nombran los diputados á Cortes.

Art. 16. A cada provincia corresponde proponer un número de senadores proporcional á su poblacion; pero ninguna dejará de tener por lo menos un senador.

Art. 17. Para ser senador se requiere ser español, mayor de cuarenta años y tener los medios de subsistencia y las demás circunstancias que determine la ley electoral.

Art. 18. Todos los españoles en quienes concurren estas calidades, pueden ser propuestos para senadores por cualquier provincia de la Monarquía.

Art. 19. Cada vez que se haga eleccion general de diputados, por haber espirado el término de su encargo, ó por haber sido disuelto el Congreso, se renovará por orden de antigüedad la tercera parte de los senadores; los cuales podrán ser reelegidos.

Art. 20. Los hijos del Rey y del heredero inmediato de la Corona son senadores á la edad de veinticinco años.

TIT. IV.—*Del Congreso de los diputados.*

Art. 21. Cada provincia nombrará un diputado á lo menos por cada 50,000 almas de su poblacion.

Art. 22. Los diputados se elegirán por el método directo, y podrán ser reelegidos indefinidamente.

Art. 23. Para ser diputado se requiere ser español del estado seglar, haber cumplido veinticinco años, y tener las demás circunstancias que exija la ley electoral.

Art. 24. Todo español que tenga estas calidades, puede ser nombrado diputado por cualquiera provincia.

Art. 25. Los diputados serán elegidos por tres años.

TIT. V.—*De la celebracion y facultades de las Cortes.*

Art. 26. Las Cortes se reunen todos los años. Corresponde al Rey convocarlas, suspender y cerrar sus sesiones, y disolver el Congreso de los diputados; pero con la obligacion, en este último caso, de convocar otras Cortes, y reunir las dentro de tres meses.

Art. 27. Si el Rey dejare de reunir algun año las Cortes antes del 1.º de diciembre, se juntarán precisamente en este dia; y en el caso de que aquel mismo año concluya el encargo de los diputados, se empezarán las elecciones el primer domingo de octubre para hacer nuevos nombramientos.

Art. 28. Las Cortes se reunirán extraordinariamente luego que vacare la Corona, ó que el Rey se imposibilitare de cualquier modo para el gobierno.

Art. 29. Cada uno de los Cuerpos Colegisladores forma el respectivo reglamento para su gobierno interior, y examina la legalidad de las elecciones y las calidades de los individuos que le componen.

Art. 30. El Congreso de los diputados nombra su presidente, vice-presidente y secretarios.

Art. 31. El Rey nombra para cada legislatura de entre los mismos senadores, el presidente y vice-presidentes del Senado y este elige sus secretarios.

Art. 32. El Rey abre y cierra las Cortes, en persona ó por medio de los Ministros.

Art. 33. No podrá estar reunido uno de los Cuerpos Colegisladores sin que lo esté el otro tambien; excepto en el caso, en que el Senado juzgue á los Ministros.

Art. 34. Los Cuerpos Colegisladores no pueden deliberar juntos ni en presencia del Rey.

Art. 35. Las sesiones del Senado y del Congreso serán públicas, y solo en los casos que exijan reserva, podrá celebrarse sesion secreta.

Art. 36. El Rey y cada uno de los Cuerpos Colegisladores tienen la iniciativa de las leyes.

Art. 37. Las leyes sobre contribuciones y crédito público se presentarán primero al Congreso de los diputados, y si en el Senado sufrieren alguna alteracion que aquel no admita despues, pasará á la sancion Real lo que los diputados aprobaren definitivamente.

Art. 38. Las resoluciones en cada uno de los Cuerpos Colegisladores se toman á pluralidad absoluta de votos; pero para votar las leyes se requiere la presencia de la mitad

mas uno del número total de los individuos que le componen.

Art. 39. Si uno de los Cuerpos Colegisladores desechare algun proyecto de ley, ó le negare el Rey la sancion, no podrá volverse á proponer un proyecto de ley sobre el mismo objeto en aquella legislatura.

Art. 40. Además de la potestad legislativa que ejercen las Córtes con el Rey, les pertenecen las facultades siguientes:

1.^a Recibir al Rey, al sucesor inmediato de la Corona, y á la Regencia ó Regente del Reino, el juramento de guardar la Constitucion y las leyes.

2.^a Resolver cualquiera duda de hecho ó de derecho, que ocurra en orden á la sucesion á la Corona.

3.^a Elegir Regente ó Regencia del Reino y nombrar tutor al Rey menor, cuando lo previene la Constitucion.

4.^a Hacer efectiva la responsabilidad de los Ministros, los cuales serán acusados por el Congreso, y juzgados por el Senado.

Art. 41. Los senadores y los diputados son inviolables por sus opiniones y votos en el ejercicio de su encargo.

Art. 42. Los senadores y los diputados no podrán ser procesados ni arrestados durante las sesiones sin permiso del respectivo Cuerpo Colegislador, á no ser hallados *in fraganti*; pero en este caso, y en el de ser procesados ó arrestados cuando estuvieren cerradas las Córtes, se deberá dar cuenta lo mas pronto posible al respectivo Cuerpo para su conocimiento y resolucion.

Art. 43. Los diputados y senadores que admitan del Gobierno ó de la Casa Real pension, empleo que no sea de escala en su respectiva carrera, comision con sueldo, honores ó condecoraciones, quedan sujetos á reeleccion.

TIT. VI.—*Del Rey.*

Art. 44. La persona del Rey es sagrada é inviolable, y no está sujeta á responsabilidad. Son responsables los Ministros.

Art. 45. La potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el Rey, y su autoridad se extiende á todo cuanto conduce á la conservacion del orden público en lo interior, y á la seguridad del Estado en lo exterior, conforme á la Constitucion y á las leyes.

Art. 46. El Rey sanciona y promulga las leyes.

Art. 47. Además de las prerogativas que la Constitucion señala al Rey, le corresponde:

1.^o Expedir los decretos, reglamentos é instrucciones que sean conducentes para la ejecucion de las leyes.

2.^o Cuidar de que en todo el Reino se administre pronta y cumplidamente la justicia.

3.^o Indultar á los delincuentes con arreglo á las leyes.

4.^o Declarar la guerra y hacer y ratificar la paz, dando despues cuenta documentada á las Córtes.

5.^o Disponer de la fuerza armada, distribuyéndola como mas convenga.

6.^o Dirigir las relaciones diplomáticas y comerciales con las demás potencias.

7.^o Cuidar de la fabricacion de la moneda, en la que se pondrá su busto y nombre.

8.^o Decretar la inversion de los fondos destinados á cada uno de los ramos de la Administracion pública.

9.^o Nombrar todos los empleados públicos y conceder honores y distinciones de todas clases, con arreglo á las leyes.

10. Nombrar y separar libremente á los Ministros.

Art. 48. El Rey necesita estar autorizado por una ley especial:

1.^o Para enajenar, ceder ó permutar cualquiera parte del territorio español.

2.^o Para admitir tropas extranjeras en el Reino.

3.^o Para ratificar los tratados de alianza ofensiva, los especiales de comercio, y los que estipulen dar subsidios á alguna potencia extranjera.

4.^o Para ausentarse del Reino.

5.^o Para contraer matrimonio, y para permitir que lo contraigan las personas que sean súbditos suyos y estén llamadas por la Constitucion á suceder en el Trono.

6.^o Para abdicar la Corona en su inmediato sucesor.

Art. 49. La dotacion del Rey y de su familia se fijará por las Córtes al principio de cada reinado.

TIT. VII.—*De la sucesion de la Corona.*

Art. 50. La Reina legítima de las Españas es Doña Isabel II de Borbon.

Art. 51. La sucesion en el Trono de las Españas será, segun el orden regular, de primogenitura y representacion, prefiriendo siempre la línea anterior á las posteriores; en la misma línea el grado mas próximo al mas remoto; en el mismo grado el varon á la hembra, y en el mismo sexo la persona de mas edad á la de menos.

Art. 52. Extinguidas las líneas de los descendientes legítimos de Doña Isabel II de Borbon, sucederán, por el orden que queda establecido, su hermana y los tíos hermanos de su padre, así varones como hembras, y

sus legítimos descendientes, si no estuviesen excluidos.

Art. 53. Si llegaren á extinguirse todas las líneas que se señalan, las Cortes harán nuevos llamamientos, como mas convenga á la Nación.

Art. 54. Las Cortes deberán excluir de la sucesion aquellas personas que sean incapaces para gobernar, ó hayan hecho cosa, por que merezcan perder el derecho á la Corona.

Art. 55. Cuando reine una hembra, su marido no tendrá parte ninguna en el Gobierno del Reino.

TIT. VIII.—De la menor edad del Rey, y de la Regencia.

Art. 56. El Rey es menor de edad hasta cumplir catorce años.

Art. 57. Cuando el Rey se imposibilitare para ejercer su autoridad, ó vacare la Corona siendo de menor edad el inmediato sucesor, nombrarán las Cortes, para gobernar el Reino, una Regencia compuesta de una, tres ó cinco personas.

Art. 58. Hasta que las Cortes nombren la Regencia, será gobernado el Reino provisionalmente por el padre ó la madre del Rey; y en su defecto por el Consejo de Ministros.

Art. 59. La Regencia ejercerá toda la autoridad del Rey, en cuyo nombre se publicarán los actos del Gobierno.

Art. 60. Será tutor del Rey menor la persona que en su testamento hubiese nombrado el Rey difunto, siempre que sea español de nacimiento; si no le hubiese nombrado, será tutor el padre ó la madre mientras permanezcan viudos. En su defecto le nombrarán las Cortes; pero no podrán estar reunidos los encargos de Regente y de tutor del Rey sino en el padre ó la madre de este.

TIT. IX.—De los Ministros.

Art. 61. Todo lo que el Rey mandare ó dispusiere en el ejercicio de su autoridad, deberá ser firmado por el Ministro á quien corresponda, y ningún funcionario público dará cumplimiento á lo que carezca de este requisito.

Art. 62. Los Ministros pueden ser senadores ó diputados, y tomar parte en las discusiones de ambos Cuerpos Colegisladores; pero solo tendrán voto en aquel, á que pertenezcan.

TIT. X.—Del poder judicial.

Art. 63. A los Tribunales y Juzgados pertenece exclusivamente la potestad de aplicar

las leyes en los juicios civiles y criminales; sin que puedan ejercer otras funciones, que las de juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado.

Art. 64. Las leyes determinarán los Tribunales y Juzgados que ha de haber, la organizacion de cada uno, sus facultades, el modo de ejercerlas, y las calidades que han de tener sus individuos.

Art. 65. Los juicios en materias criminales serán públicos, en la forma que determinen las leyes.

Art. 66. Ningun magistrado ó juez podrá ser depuesto de su destino, temporal ó perpetuo, si no por sentencia ejecutoriada; ni suspendido si no por auto judicial, ó en virtud de orden del Rey cuando este, con motivos fundados, le mande juzgar por el Tribunal competente.

Art. 67. Los jueces son responsables personalmente de toda infraccion de ley que cometan.

Art. 68. La justicia se administra en nombre del Rey.

TIT. XI.—De las Diputaciones provinciales y de los Ayuntamientos.

Art. 69. En cada provincia habrá una Diputacion provincial, compuesta del número de individuos que determine la ley, nombrados por los mismos electores que los diputados á Cortes.

Art. 70. Para el gobierno interior de los pueblos habrá Ayuntamientos, nombrados por los vecinos, á quienes la ley conceda este derecho.

Art. 71. La ley determinará la organizacion y funciones de las Diputaciones provinciales y de los Ayuntamientos.

TIT. XII.—De las contribuciones.

Art. 72. Todos los años presentará el Gobierno á las Cortes el presupuesto general de los gastos del Estado para el año siguiente, y el plan de las contribuciones y medios para llenarlos; como asimismo las cuentas de la recaudacion ó inversion de los caudales públicos para su examen y aprobacion.

Art. 73. No podrá imponerse ni cobrarse ninguna contribucion ni arbitrio, que no esté autorizado por la ley de presupuestos ó otra especial.

Art. 74. Igual autorizacion se necesita para disponer de las propiedades del Estado y para tomar caudales á préstamo sobre el credito de la Nacion.

Art. 75. La deuda pública está bajo la salvaguardia especial de la Nacion.

TIT. XIII.—*De la fuerza militar nacional.*

Art. 76. Las Cortes fijarán todos los años, á propuesta del Rey, la fuerza militar permanente de mar y tierra.

Art. 77. Habrá en cada provincia cuerpos de milicia nacional, cuya organizacion y servicio se arreglará por una ley especial; y el Rey podrá en caso necesario disponer de esta fuerza dentro de la respectiva provincia; pero no podrá emplearla fuera de ella sin otorgamiento de las Cortes.

Artículos adicionales.

Artículo 1.º Las leyes determinarán la época y el modo en que se ha de establecer el juicio por jurados para toda clase de delitos.

Art. 2.º Las provincias de Ultramar serán gobernadas por leyes especiales.

Palacio de las Cortes, en Madrid, á 8 de junio de 1837.—(*Siguen las firmas de los señores diputados.*)—Real Palacio de Madrid 17 de junio de 1837.—Conforme con lo dispuesto en esta Constitucion, me adhiero á ella y la acepto en nombre de mi augusta Hija la Reina Doña Isabel II.—María Cristina, Reina Gobernadora.—(*Siguen las firmas de los señores Ministros.*)—Por tanto, mandamos, etc.

La anterior Constitucion de 1837 fué reformada y sustituida por otra promulgada en 25 de mayo de 1845. Esta, á la vez, fué anulada en 1854, con motivo de los sucesos políticos de aquel año, habiéndose convocado Cortes constituyentes y discutido y votado estas una nueva Constitucion que no llegó á promulgarse. Por Real decreto de 15 de setiembre de 1856 se restableció de nuevo la Constitucion de 1845, pero no en su integridad sino con un Acta adicional. Por otro Real decreto de 14 de octubre del mismo año, se mandó ya que solo rigiera y se observara la Ley constitucional de la Monarquía, promulgada en union y de acuerdo con las Cortes á la sazón reunidas en 23 de mayo de 1845. Despues por otra ley de 17 de julio de 1857 se reformaron los arts. 14, 15, 16, 17, 18 y

28 de la misma Constitucion, y tambien sufrió igual suerte la reforma, siendo derogada en 20 de abril de 1864 y quedando de nuevo en vigor la Constitucion de 1845. Hé aquí estos documentos.

CONSTITUCION DE 1845.

«DOÑA ISABEL II por la gracia de Dios y la Constitucion de la Monarquía española, Reina de las Españas; á todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed: Que siendo nuestra voluntad y de las Cortes del Reino regularizar y poner en consonancia con las necesidades actuales del Estado los antiguos fueros y libertades de estos Reinos, y la intervencion que sus Cortes han tenido en todos tiempos en los negocios graves de la Monarquía, modificando al efecto la Constitucion promulgada en 18 de junio de 1837, hemos venido, en union y de acuerdo con las Cortes actualmente reunidas, en decretar y sancionar la siguiente:

CONSTITUCION

DE LA

MONARQUIA ESPAÑOLA.

TITULO I.—*De los españoles.*

Artículo 1.º Son españoles:

1.º Todas las personas nacidas en los dominios de España.

2.º Los hijos de padre ó madre españoles, aunque hayan nacido fuera de España.

3.º Los extranjeros que hayan obtenido carta de naturaleza.

4.º Los que sin ella hayan ganado vecindad en cualquier pueblo de la Monarquía.

La calidad de español se pierde por adquirir naturaleza en país extranjero, y por admitir empleo de otro Gobierno sin licencia del Rey.

Una ley determinará los derechos que deberán gozar los extranjeros que obtengan carta de naturaleza ó hayan ganado vecindad.

Art. 2.º Todos los españoles pueden imprimir y publicar libremente sus ideas sin prévia censura, con sujecion á las leyes.

Art. 3.º Todo español tiene derecho de

dirigir peticiones por escrito á las Córtes y al Rey, como determinen las leyes.

Art. 4.^o Unos mismos Códigos regirán en toda la Monarquía.

Art. 5.^o Todos los españoles son admisibles á los empleos y cargos públicos, según su mérito y capacidad.

Art. 6.^o Todo español está obligado á defender la patria con las armas, cuando sea llamado por la ley, y á contribuir en proporcion de sus haberes para los gastos del Estado.

Art. 7.^o No puede ser detenido, ni preso, ni separado de su domicilio ningún español, ni allanada su casa, sino en los casos y en la forma que las leyes prescriban.

Art. 8.^o Si la seguridad del Estado exigiere en circunstancias extraordinarias la suspension temporal en toda la Monarquía ó en parte de ella, de lo dispuesto en el artículo anterior, se determinará por una ley.

Art. 9.^o Ningun español puede ser procesado ni sentenciado sino por el juez ó Tribunal competente, en virtud de leyes anteriores al delito y en la forma que estas prescriban.

Art. 10. No se impondrá jamás la pena de confiscacion de bienes, y ningun español será privado de su propiedad sino por causa justificada de utilidad comun, previa la correspondiente indemnizacion.

Art. 11. La religion de la Nacion española es la católica, apostólica, romana. El Estado se obliga á mantener el culto y sus ministros.

TIT. II.—*De las Córtes.*

Art. 12. La potestad de hacer las leyes reside en las Córtes con el Rey.

Art. 13. Las Córtes se componen de dos Cuerpos colegisladores, iguales en facultades: el Senado y el Congreso de los diputados.

TIT. III.—*Del Senado.*

Art. 14. El número de senadores es ilimitado: su nombramiento pertenece al Rey.

Art. 15. Solo podrán ser nombrados senadores los españoles que además de tener treinta años cumplidos pertenezcan á las clases siguientes:

Presidentes de algunos de los Cuerpos colegisladores.

Senadores ó diputados admitidos tres veces en las Córtes.

Ministros de la Corona.

Consejeros de Estado.

Arzobispos.

Obispos.

Grandes de España.

Capitanes generales del ejército y armada.

Tenientes generales del ejército y armada.

Embajadores.

Ministros plenipotenciarios.

Presidentes de Tribunales Supremos.

Ministros y fiscales de los mismos.

Los comprendidos en las categorías anteriores deberán además disfrutar 30.000 rs. de renta, procedentes de bienes propios, ó de sueldos de los empleos que no pueden perderse sino por causa legalmente probada, ó de jubilacion, retiro ó cesantía.

Títulos de Castilla que disfruten 60.000 rs. de renta.

Los que paguen con un año de antelacion 8.000 rs. de contribuciones directas, y hayan sido senadores ó diputados á Córtes, ó diputados provinciales, ó Alcaldes en pueblos de 30.000 almas ó presidentes de Juntas ó Tribunales de comercio.

Las condiciones necesarias para ser nombrado senador podrán variarse por una ley.

Art. 16. El nombramiento de los senadores se hará por decretos especiales, y en ellos se expresará el título en que, conforme al artículo anterior, se funde el nombramiento.

Art. 17. El cargo de senador es vitalicio.

Art. 18. Los hijos del Rey y del heredero inmediato de la Corona son senadores á la edad de veinticinco años.

Art. 19. Además de las facultades legislativas corresponde al Senado:

1.^o Juzgar á los Ministros cuando fueren acusados por el Congreso de los diputados.

2.^o Conocer de los delitos graves contra la persona ó dignidad del Rey, ó contra la seguridad del Estado, conforme á lo que establezcan las leyes.

3.^o Juzgar á los individuos de su seno en los casos y en la forma que determinen las leyes.

TIT. IV.—*Del Congreso de los diputados.*

Art. 20. El Congreso de los diputados se compondrá de los que nombren las Juntas electorales en la forma que determine la ley. Se nombrará un diputado á lo menos por cada cincuenta mil almas de la poblacion.

Art. 21. Los diputados se elegirán por el método directo, y podrán ser reelegidos indefinidamente.

Art. 22. Para ser diputado se requiere ser español, del estado seglar, haber cumplido veinticinco años, disfrutar la renta procedente de bienes raíces, ó pagar por contribuciones directas la cantidad que la ley

electoral exija, y tener las demás circunstancias que en la misma ley se prefijen.

Art. 23. Todo español que tenga estas calidades, puede ser nombrado diputado por cualquier provincia.

Art. 24. Los diputados serán elegidos por cinco años.

Art. 25. Los diputados que admitan del Gobierno ó de la Casa Real pension, empleo que no sea de escala en su respectiva carrera, comision con sueldo, honores ó condecoraciones, quedan sujetos á reeleccion.

La disposicion anterior no comprende á los diputados que fueren nombrados Ministros de la Corona.

TIT. V.—De la celebracion y facultades de las Córtes.

Art. 26. Las Córtes se reunen todos los años. Corresponde al Rey convocarlas, suspender y cerrar sus sesiones, y disolver el Congreso de los diputados; pero con la obligacion en este último caso, de convocar otras Córtes y reunir las dentro de tres meses.

Art. 27. Las Córtes serán precisamente convocadas luego que vacare la Corona, ó cuando el Rey se imposibilitare de cualquier modo para el Gobierno.

Art. 28. Cada uno de los Cuerpos Colegisladores forma el respectivo reglamento para su gobierno interior, y examina las calidades de los individuos que le componen: el Congreso decide además sobre la legalidad de las elecciones de los diputados.

Art. 29. El Congreso de los diputados nombra su presidente, vice-presidentes y secretarios.

Art. 30. El Rey nombra para cada legislatura de entre los mismos senadores, el presidente y vice-presidentes del Senado, y este elige sus secretarios.

Art. 31. El Rey abre y cierra las Córtes, en persona ó por medio de los Ministros.

Art. 32. No podrá estar reunido uno de los dos Cuerpos Colegisladores sin que tambien lo esté el otro; exceptuase el caso en que el Senado ejerza funciones judiciales.

Art. 33. Los Cuerpos Colegisladores no pueden deliberar juntos ni en presencia del Rey.

Art. 34. Las sesiones del Senado y del Congreso serán públicas, y solo en los casos en que exijan reserva, podrá celebrarse sesion secreta.

Art. 35. El Rey y cada uno de los Cuerpos Colegisladores tienen la iniciativa de las leyes.

Art. 36. Las leyes sobre contribuciones

y crédito público se presentarán primero al Congreso de los diputados.

Art. 37. Las resoluciones en cada uno de los Cuerpos Colegisladores se toman á pluralidad absoluta de votos; pero para votar las leyes se requiere la presencia de la mitad mas uno del número total de los individuos que le componen.

Art. 38. Si uno de los Cuerpos Colegisladores desechare algun proyecto de ley, ó le negare el Rey la sancion, no podrá volverse á proponer un proyecto de ley sobre el mismo objeto en aquella legislatura.

Art. 39. Además de la potestad legislativa que ejercen las Córtes con el Rey, les pertenecen las facultades siguientes:

1.^a Recibir al Rey, al sucesor inmediato á la Corona, y á la Regencia ó Regente del Reino, el juramento de guardar la Constitucion y las leyes.

2.^a Elegir Regente ó Regencia del Reino, y nombrar tutor al Rey menor, cuando lo previene la Constitucion.

3.^a Hacer efectiva la responsabilidad de los Ministros; los cuales serán acusados por el Congreso, y juzgados por el Senado.

Art. 40. Los senadores y los diputados son inviolables por sus opiniones y votos en el ejercicio de su encargo.

Art. 41. Los senadores no podrán ser procesados ni arrestados sin previa resolucion del Senado, sino cuando sean hallados *in fraganti*, ó cuando no esté reunido el Senado; pero en todo caso se dará cuenta á este Cuerpo lo mas pronto posible para que determine lo que corresponda. Tampoco podrán los diputados ser procesados ni arrestados durante las sesiones sin permiso del Congreso, á no ser hallados *in fraganti*; pero en este caso y en el de ser procesados ó arrestados cuando estuvieren cerradas las Córtes, se dará cuenta lo mas pronto posible al Congreso para su conocimiento y resolucion.

TIT. VI.—Del Rey.

Art. 42. La persona del Rey es sagrada é inviolable y no está sujeta á responsabilidad. Son responsables los Ministros.

Art. 43. La potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el Rey, y su autoridad se extiende á todo cuanto conduce á la conservacion del orden público en lo interior, y á la seguridad del Estado en lo exterior, conforme á la Constitucion y á las leyes.

Art. 44. El Rey sanciona y promulga las leyes.

Art. 45. Además de las prerogativas que la Constitucion señala al Rey, le corresponde:

1.º Expedir los decretos, reglamentos é instrucciones que sean conducentes para la ejecucion de las leyes.

2.º Cuidar de que en todo el Reino se administre pronta y cumplidamente la justicia.

3.º Indultar á los delincuentes con arreglo á las leyes.

4.º Declarar la guerra y hacer y ratificar la paz, dando despues cuenta documentada á las Córtes.

5.º Disponer de la fuerza armada, distribuyéndola como mas convenga.

6.º Dirigir las relaciones diplomáticas y comerciales con las demás potencias.

7.º Cuidar de la fabricacion de la moneda, en la que se pondrá su busto y nombre.

8.º Decretar la inversion de los fondos destinados á cada uno de los ramos de la Administracion pública.

9.º Nombrar todos los empleados públicos y conceder honores y distinciones de todas clases, con arreglo á las leyes.

10. Nombrar y separar libremente los Ministros.

Art. 46. El Rey necesita estar autorizado por una ley especial:

1.º Para enajenar, ceder ó permutar cualquiera parte del territorio español.

2.º Para admitir tropas extranjeras en el Reino.

3.º Para ratificar los tratados de alianza ofensiva, los especiales de comercio y los que estipulen dar subsidios á alguna potencia extranjera.

4.º Para abdicar la Corona en su inmediato sucesor.

Art. 47. El Rey antes de contraer matrimonio lo pondrá en conocimiento de las Córtes, á cuya aprobacion se someterán las estipulaciones y contratos matrimoniales que deban ser objeto de una ley.

Lo mismo se observará respecto del matrimonio del inmediato sucesor á la Corona.

Ni el Rey ni el inmediato sucesor pueden contraer matrimonio con persona que por la ley esté excluida de la sucesion á la Corona.

Art. 48. La dotacion del Rey y de su familia se fijará por las Córtes al principio de cada reinado.

TIT. VII.—*De la sucesion á la Corona.*

Art. 49. La Reina legítima de las Españas es Doña Isabel II de Borbon.

Art. 50. La sucesion en el Trono de las Españas será segun el orden regular de la primogenitura y representacion, prefiriendo siempre la línea anterior á las posteriores; en la misma línea el grado mas próximo al mas

remoto, en el mismo grado el varon á la hembra, y en el mismo sexo la persona de mas edad á la de menos.

Art. 51. Extinguidas las líneas de los descendientes legítimos de Doña Isabel II de Borbon, sucederán por el orden que queda establecido, su hermana y los tios hermanos de su padre, así varones como hembras, y sus legítimos descendientes, si no estuviesen excluidos.

Art. 52. Si llegaren á extinguirse todas las líneas que se señalan, se harán por una ley nuevos llamamientos, como mas convenga á la Nacion.

Art. 53. Cualquiera duda de hecho ó de derecho que ocurra en orden á la sucesion de la Corona, se resolverá por una ley.

Art. 54. Las personas que sean incapaces para gobernar, ó hayan hecho cosa por que merezcan perder el derecho á la Corona, serán excluidas de la sucesion por una ley.

Art. 55. Cuando reine una hembra, su marido no tendrá parte ninguna en el Gobierno del Reino.

TIT. VIII.—*De la menor edad del Rey y de la Regencia.*

Art. 56. El Rey es menor de edad hasta cumplir catorce años.

Art. 57. Cuando el Rey fuere menor de edad, el padre ó la madre del Rey, y en su defecto el pariente mas próximo á suceder en la Corona, segun el orden establecido en la Constitucion, entrará desde luego á ejercer la Regencia, y la ejercerá todo el tiempo de la menor edad del Rey.

Art. 58. Para que el pariente mas próximo ejerza la Regencia, necesita ser español, tener veinte años cumplidos, y no estar excluido de la sucesion de la Corona.

El padre ó la madre del Rey solo podrán ejercer la Regencia permaneciendo viudos.

Art. 59. El Regente prestará ante las Córtes el juramento de ser fiel al Rey menor y de guardar la Constitucion y las leyes.

Si las Córtes no estuvieren reunidas, el Regente las convocará inmediatamente, y entre tanto prestará el mismo juramento ante el Consejo de Ministros, prometiendo reiterarle ante las Córtes tan luego como se hallen congregadas.

Art. 60. Si no hubiere ninguna persona á quien corresponda de derecho la Regencia la nombrarán las Córtes, y se compondrá de una, tres ó cinco personas.

Hasta que se haga este nombramiento gobernará provisionalmente el Reino el Consejo de Ministros.

Art. 61. Cuando el Rey se imposibilita para ejercer su autoridad, y la imposibilidad fuere reconocida por las Cortes, ejercerá la Regencia durante el impedimento el hijo primogénito del Rey, siendo mayor de catorce años; en su defecto el consorte del Rey; y á falta de este los llamados á la Regencia.

Art. 62. El Regente, y la Regencia en su caso, ejercerá toda la autoridad del Rey, en cuyo nombre se publicarán los actos del Gobierno.

Art. 63. Será tutor del Rey menor la persona que en su testamento hubiere nombrado el Rey difunto, siempre que sea español de nacimiento; si no le hubiese nombrado, será tutor el padre ó la madre mientras permanezcan viudos. En su defecto le nombrarán las Cortes; pero no podrán estar reunidos los encargos de Regente y de tutor del Rey sino en el padre ó la madre de este.

TIT. IX.—De los Ministros.

Art. 64. Todo lo que el Rey mandare ó dispusiere en el ejercicio de su autoridad, deberá ser firmado por el Ministro á quien corresponda, y ningun funcionario público dará cumplimiento á lo que carezca de este requisito.

Art. 65. Los Ministros pueden ser senadores ó diputados, y tomar parte en las discusiones de ambos Cuerpos Colegisladores; pero solo tendrán voto en aquel á que pertenezcan.

TIT. X.—De la administracion de justicia.

Art. 66. A los Tribunales y Juzgados pertenece exclusivamente la potestad de aplicar las leyes en los juicios civiles y criminales; sin que puedan ejercer otras funciones, que las de juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado.

Art. 67. Las leyes determinarán los Tribunales y Juzgados que ha de haber, la organizacion de cada uno, sus facultades, el modo de ejercerlas, y las calidades que han de tener sus individuos.

Art. 68. Los juicios en materias criminales serán públicos, en la forma que determinen las leyes.

Art. 69. Ningun magistrado ó juez podrá ser depuesto de su destino, temporal ó perpetuo, sino por sentencia ejecutoriada; ni suspendido sino por auto judicial; ó en virtud de orden del Rey, cuando este, con motivos fundados, le mande juzgar por el Tribunal competente.

Art. 70. Los jueces son responsables personalmente de toda infraccion de ley que cometan.

Art. 71. La justicia se administra en nombre del Rey.

TIT. XI.—De las Diputaciones provinciales y de los Ayuntamientos.

Art. 72. En cada provincia habrá una Diputacion provincial, elegida en la forma que determine la ley y compuesta del número de individuos que esta señale.

Art. 73. Habrá en los pueblos Alcaldes y Ayuntamientos. Los Ayuntamientos serán nombrados por los vecinos á quienes la ley confiera este derecho.

Art. 74. La ley determinará la organizacion y atribuciones de las Diputaciones y de los Ayuntamientos, y la intervencion que hayan de tener en ambas corporaciones los delegados del Gobierno.

TIT. XII.—De las contribuciones.

Art. 75. Todos los años presentará el Gobierno á las Cortes el presupuesto general de los gastos del Estado para el año siguiente, y el plan de las contribuciones y medios para llenarlos; como asimismo las cuentas de la recaudacion é inversion de los caudales públicos para su examen y aprobacion.

Art. 76. No podrá imponerse ni cobrarse ninguna contribucion ni arbitrio que no esté autorizado por la ley de presupuestos ú otra especial.

Art. 77. Igual autorizacion se necesita para disponer de las propiedades del Estado y para tomar caudales á préstamo sobre el crédito de la Nacion.

Art. 78. La Deuda pública está bajo la salvaguardia especial de la Nacion.

TIT. XIII.—De la fuerza militar.

Art. 79. Las Cortes fijarán todos los años, á propuesta del Rey, la fuerza militar permanente de mar y tierra.

ARTÍCULO ADICIONAL.

Art. 80. Las provincias de Ultramar serán gobernadas por leyes especiales.

Por tanto mandamos á todos nuestros súbditos de cualquiera clase y condicion que sean, que hayan y guarden la presente Constitucion como ley fundamental de la Monarquía; y mandamos asimismo á todos los tribunales, justicias, jefes, gobernadores y demas autoridades, así civiles como militares y

eclesiásticas de cualquiera clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la expresada Constitucion en todas sus partes.—En Palacio á 23 de mayo 1845.»

CONSTITUCION

VOTADA POR LAS CÓRTEES CONSTITUYENTES
DE 1854.

Con motivo de los sucesos políticos que tuvieron lugar en junio y julio de 1854, se convocaron por *Real decreto de 11 de agosto* del mismo año Córtes Constituyentes. Estas Córtes discutieron y votaron una nueva Constitucion que, si bien no llegó á promulgarse solemnemente, sirvió de base y es citada por algunas leyes de aquella época (1). Es la siguiente:

TITULO PRIMERO.—*De la Nacion y de los españoles.*

Artículo 1.º Todos los poderes públicos emanan de la Nacion, en la que reside esencialmente la soberanía, y por lo mismo pertenece exclusivamente á la Nacion el derecho de establecer sus leyes fundamentales

Art. 2.º Son españoles:

1.º Todas las personas nacidas en los dominios de España.

2.º Los hijos de padre ó madre españoles aunque hayan nacido fuera de España.

3.º Los extranjeros que hayan obtenido carta de naturaleza.

4.º Los que sin ella hayan ganado vecindad en cualquier pueblo de la Monarquía.

La calidad de español se pierde por adquirir naturaleza en pais extranjero y por admitir empleos de otro Gobierno sin licencia del Rey.

Art. 3.º Todos los españoles pueden imprimir y publicar libremente sus ideas sin previa censura con sujecion á las leyes.

No se podrá secuestrar ningun impreso hasta despues de haber empezado á circular.

La calificacion de los delitos de imprenta corresponde á los jurados.

Art. 4.º Todo español tiene derecho de dirigir peticiones por escrito á las Córtes y al Rey como determinen las leyes.

(1) Es citada en el art. 25 de la ley de Ayuntamientos de 5 de julio de 1856, y en una Real orden de la misma fecha mandando proceder á la renovacion de aquellas corporaciones.

Art. 5.º Unos mismos Códigos regirán en toda la Monarquía, y en ellos no se establecerá mas que un solo fuero para todos los españoles en los juicios comunes, civiles y criminales.

Art. 6.º Todos los españoles son admisibles á los empleos y cargos públicos segun su mérito y capacidad.

Para ninguna distincion ni empleo público se requiere la calidad de nobleza.

Art. 7.º Todo español está obligado á defender la patria con las armas cuando sea llamado por la ley, y á contribuir en proporcion de sus haberes para los gastos del Estado.

Art. 8.º No puede ser detenido ni preso ni separado de su domicilio ningun español, ni allanada su casa sino en los casos y en la forma que las leyes prescriban.

Los que contravinieren á esta disposicion, como autores ó como cómplices, además de las penas que se les impongan por infraccion de la Constitucion, serán responsables de daños y perjuicios, y perderán sus empleos y todos los derechos á ellos anejos.

Art. 9.º Si la seguridad del Estado exigiere en circunstancias extraordinarias la suspension temporal de toda la Monarquía, ó en parte de ella, lo dispuesto en el artículo anterior se determinará por una ley.

Promulgada esta, el territorio á ella sujeto, se regirá durante la suspension por la ley de orden público establecida de antemano.

Pero ni en una ni en otra ley se podrá en ningun caso autorizar al Gobierno para extrañar del Reino, ni deportar, ni desterrar fuera de la Península á los españoles.

Art. 10. Ningun español puede ser procesado ni sentenciado sino por el juez ó Tribunal competente, en virtud de leyes anteriores al delito y en la forma que estas prescriban.

Art. 11. No se podrá imponer la pena capital por delitos meramente políticos.

Art. 12. Tampoco se impondrá por ningun delito la pena de confiscacion de bienes.

Art. 13. Ningun español será privado de su propiedad sino por causa justificada de utilidad comun, previa la correspondiente indemnizacion.

Art. 14. La Nacion se obliga á mantener y proteger el culto y los ministros de la religion católica que profesan los españoles.

Pero ningun español ni extranjero podrá ser perseguido por sus opiniones ó creencias religiosas, mientras no las manifieste por actos públicos contrarios á la religion.

TIT. II.—De las Córtes.

Art. 15. La potestad de hacer las leyes reside en las Córtes con el Rey.

Art. 16. Las Córtes se componen de dos Cuerpos Colegisladores iguales en facultades; el Senado y el Congreso de los diputados.

TIT. III.—Del Senado.

Art. 17. El número de senadores será igual á las tres quintas partes de los diputados.

Art. 18. Los senadores son elegidos del mismo modo y por los mismos electores que los diputados á Córtes.

Art. 19. A cada provincia corresponde nombrar un número de senadores proporcional á su poblacion, pero ninguna dejará de tener por lo menos un senador.

Art. 20. Para ser senador se requiere ser español, mayor de 40 años y hallarse en uno de los cuatro casos siguientes:

1.º Pagar con dos años de antelación 3,000 rs. de contribucion directa.

2.º Tener 30,000 rs. de renta procedentes de bienes propios.

3.º Disfrutar 30,000 rs. de sueldo de un empleo que no se pueda perder legalmente sin prévia formacion de causa.

4.º Percibir ó tener declarado derecho á percibir 30,000 rs. anuales por jubilacion, derecho ó cesantía.

Las fracciones de las cantidades expresadas en los cuatro casos anteriores, no pueden acumularse para componer el total requerido.

Art. 21. Todos los españoles que tengan estas calidades, pueden ser nombrados senadores por cualquier provincia de la Monarquía.

Art. 22. Cada vez que se haga eleccion general de diputados por haber espirado el término de su encargo, ó por haber sido disuelto el Congreso, se renovará por órden de antigüedad la cuarta parte de los senadores, los cuales podrán ser reelegidos.

Art. 23. Los hijos del Rey y del inmediato sucesor á la Corona, son senadores á la edad de 25 años.

TIT. IV.—Del Congreso de los diputados.

Art. 24. Cada provincia nombrará un diputado á lo menos por cada 50,000 almas de poblacion.

Art. 25. Los diputados serán elegidos por tres años, y podrán ser reelegidos indefinidamente.

La eleccion será directa y por provincias.

Art. 26. Para ser diputado se requiere ser español, del estado seglar, haber cumplido 25 años y tener las demás circunstancias que exija la ley electoral.

Art. 27. Todo español que tenga estas calidades puede ser nombrado diputado por cualquier provincia.

TIT. V.—De la celebracion y facultades de las Córtes.

Art. 28. Las Córtes se reunirán lo mas tarde el 1.º de noviembre todos los años. Corresponde al Rey convocarlas, suspender y cerrar sus sesiones y disolver el Congreso de los diputados, pero con la obligacion en este último caso de convocar otras Córtes y reunir las dentro de dos meses.

Art. 29. Cada año estarán reunidas las Córtes á lo menos cuatro meses consecutivos contados desde el dia en que se constituya el Congreso de los diputados.

Cuando el Rey suspenda ó disuelva las Córtes antes de cumplirse este término, las Córtes nuevamente abiertas estarán reunidas hasta completarle.

En el primer caso previsto en el párrafo anterior, la suspension de las Córtes en una ó mas veces, no podrá exceder de treinta dias.

Art. 30. Las Córtes se reunirán luego que vacare la Corona, ó que el Rey se imposibilitare de cualquier modo para el Gobierno.

Art. 31. Cada uno de los Cuerpos Colegisladores forma el respectivo reglamento para su gobierno interior, y examina la legalidad de las elecciones y las calidades de los individuos que le componen.

Art. 32. Cada uno de los Cuerpos Colegisladores nombra su presidente, vice-presidentes y secretarios.

Art. 33. El Rey abre y cierra las Córtes en persona ó por medio de los Ministros.

Art. 34. No podrá estar reunido uno de los Cuerpos Colegisladores sin que tambien lo esté el otro, excepto el caso en que el Senado ejerza funciones judiciales.

Art. 35. Los Cuerpos Colegisladores no pueden discutir juntos ni deliberar en presencia del Rey.

Art. 36. Las sesiones del Senado y del Congreso serán públicas; y solo en los casos que exija reserva, podrá celebrarse sesion secreta.

Art. 37. El Rey y cada uno de los Cuerpos Colegisladores tienen la iniciativa de las leyes.

Art. 38. Las leyes sobre contribuciones y crédito público se presentarán primero al Congreso de los diputados; y si en el Senado sufrieren alguna alteracion sin que pueda obtenerse avenencia entre los dos Cuerpos, pasará á la Sancion Real lo que aprobare el Congreso definitivamente.

Art. 39. Las resoluciones en cada uno de los Cuerpos Colegisladores se toman á pluralidad absoluta de votos; pero para votar definitivamente las leyes, se requiere la presencia de la mitad mas uno del número total de los individuos que le componen.

Art. 40. Si uno de los Cuerpos Colegisladores desechase algun proyecto de ley, ó le negare el Rey la sancion, no podrá volverse á proponer otro proyecto de ley sobre el mismo objeto en aquella legislatura.

Art. 41. Además de la potestad legislativa que ejercen las Córtes con el Rey les pertenece las facultades siguientes:

1.^o Recibir al Rey, al inmediato sucesor á la Corona y á la Regencia ó Regente del Reino, el juramento de guardar la Constitucion y las leyes.

2.^o Resolver cualquier duda de hecho ó de derecho que ocurra en orden á la sucesion á la Corona.

3.^o Elegir Regente ó Regencia del Reino, y nombrar tutor al Rey menor cuando lo previene la Constitucion.

4.^o Hacer efectiva la responsabilidad de los Ministros, los cuales serán acusados por el Congreso y juzgados por el Senado.

Art. 42. El Congreso de los diputados nombra los ministros del Tribunal de Cuentas.

No pueden ser nombrados ministros de este Tribunal los diputados, aunque con anterioridad hayan renunciado sus cargos.

El mismo Tribunal propone al Rey para su nombramiento sus contadores y dependientes.

Art. 43. Los senadores y los diputados son inviolables por sus opiniones y votos en el ejercicio de su encargo.

Art. 44. Los senadores y los diputados no podrán ser procesados ni arrestados durante las sesiones sin permiso del respectivo Cuerpo Colegislador, á no ser hallados *in fraganti*; pero en este caso, y en el de no ser procesados ó arrestados cuando estuvieren cerradas las Córtes, se dará cuenta lo mas pronto posible al respectivo Cuerpo para su conocimiento y resolucion, sin la cual no se podrá nunca dictar sentencia.

Art. 45. No podrá el Gobierno obligar á ningun senador ni diputado, cualquiera que sea la clase á que pertenezca, á aceptar nin-

guna comision ó empleo que le impida la asistencia á las Córtes.

Los senadores ó diputados empleados no necesitan de permiso del Gobierno para concurrir al Cuerpo á que pertenezcan.

Art. 46. Los diputados y senadores que admitan del Gobierno ó de la Casa Real, empleo, comision con sueldo, honores ó condecoraciones, quedan sujetos á reeleccion. Exceptuáanse de esta disposicion los que sean nombrados Ministros de la Corona.

Art. 47. Habrá una Diputacion permanente de Córtes, compuesta de cinco diputados y cuatro senadores que, cuando las Córtes no estén reunidas, velará por la observancia de la Constitucion y por la seguridad individual, y convocará las Córtes solo en los casos siguientes:

1.^o Cuando vacare la Corona.

2.^o Cuando el Rey se imposibilitare para el Gobierno.

3.^o Cuando se mande exigir alguna contribucion ó préstamo que no esté aprobado por la ley de presupuestos ú otra especial.

4.^o Cuando suspendidas en una ó mas provincias las garantías establecidas en el artículo 8.^o dejare el Rey de convocarlas.

TTT. VI.—*Del Rey.*

Art. 48. La persona del Rey es sagrada é inviolable, y no está sujeta á responsabilidad. Son responsables los Ministros.

Art. 49. La potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el Rey, y su autoridad se extiende á todo cuanto conduce á la conservacion del orden público en lo interior, y á la seguridad del Estado en lo exterior, conforme á la Constitucion y á las leyes.

Art. 50. El Rey sanciona y promulga las leyes.

Art. 51. La dotacion del Rey y de su familia se fijará por las Córtes al principio de cada reinado.

Art. 52. Además de las prerogativas que la Constitucion señala al Rey, le corresponde:

1.^o Expedir los decretos, reglamentos é instrucciones que sean conducentes para la ejecucion de las leyes.

2.^o Cuidar de que en todo el Reino se administre pronta y cumplidamente la justicia.

3.^o Declarar la guerra y hacer ratificar la paz, dando despues cuenta documentada, á las Córtes.

4.^o Disponer de la fuerza armada, distribuyéndola como mas convenga.

5.^o Dirigir las relaciones diplomáticas y comerciales con las demás potencias.

6.º Cuidar de la fabricacion de la moneda, en la que se pondrá su busto y nombre.

7.º Decretar la inversion de los fondos destinados á cada uno de los ramos de la Administracion pública.

8.º Nombrar todos los empleados públicos y conceder honores y distinciones de todas clases con arreglo á las leyes.

9.º Nombrar y separar libremente á los Ministros.

10. Indultar á los delinquentes con arreglo á las leyes, sin que pueda conceder indultos generales.

Tampoco podrá indultar á ningun Ministro, á quien se haya exigido la responsabilidad por las Córtes, sino á peticion de uno de los Cuerpos Colegisladores.

Art. 53. El Rey necesita estar autorizado por una ley especial:

1.º Para enajenar, ceder ó permutar cualquier parte del territorio español.

2.º Para admitir tropas extranjeras en el Reino.

3.º Para ratificar los tratados de alianza ofensiva, los especiales de comercio y los que estipulen dar subsidios á alguna potencia extranjera.

4.º Para conceder amnistía.

5.º Para ausentarse del Reino.

6.º Para contraer matrimonio, y para permitir que lo contraigan los que sean súbditos suyos y estén llamados por la Constitucion á suceder en el Trono.

7.º Para abdicar la Corona en su inmediato sucesor.

8.º Para enajenar en todo ó en parte los bienes del patrimonio de la Corona.

Art. 54. Habrá un Consejo de Estado, al que oirá el Rey en los casos que determinen las leyes.

TIT. VII.—De la sucesion á la Corona.

Art. 55. La Reina legítima de las Españas es Doña Isabel II de Borbon.

Art. 56. La sucesion en el Trono de las Españas será segun el orden regular de primogenitura y representacion, prefiriendo siempre la línea anterior á las posteriores; en la misma línea el grado mas próximo al mas remoto, en el mismo grado el varon á la hembra, y en el mismo sexo la persona de mas edad á la de menos.

Art. 57. Extinguidas las líneas de los descendientes legítimos de Doña Isabel II de Borbon, sucederán, por el orden que queda establecido, su hermana, y los ties, hermanos de su padre, así varones como hembras, y sus legítimos descendientes, si no estuvieren excluidos.

Art. 58. Las Córtes excluirán de la sucesion aquellas personas que sean incapaces para gobernar ó hayan hecho cosa por que merezcan perder el derecho á la Corona.

Igual facultad tendrán para excluir de la sucesion en la tutela del Rey á las personas que se hallen comprendidas en cualquiera de los dos casos anteriormente expresados.

Art. 59. Cuando reine una hembra, su marido no tendrá parte ninguna en el Gobierno del Reino.

TIT. VIII.—De la menor edad del Rey y de la Regencia.

Art. 60. El Rey es menor de edad hasta cumplir catorce años.

Art. 61. Cuando el Rey se imposibilitare para ejercer su autoridad y la imposibilidad fuere reconocida por las Córtes, ó cuando vacare la Corona siendo de menor edad el inmediato sucesor, nombrarán las Córtes para gobernar el Reino una Regencia compuesta de una, tres ó cinco personas.

Art. 62. Hasta que las Córtes nombren la Regencia, será gobernado el Reino provisionalmente por el padre ó la madre del Rey con el Consejo de Ministros que hubiere al tiempo de la vacante. En defecto del padre ó de la madre gobernará provisionalmente el Consejo de Ministros.

Art. 63. La Regencia ejercerá toda la autoridad del Rey, en cuyo nombre se publicarán los actos del Gobierno.

Art. 64. Será tutor del Rey menor la persona que en su testamento hubiere nombrado el Rey difunto, siempre que sea español de nacimiento; si no le hubiere nombrado, será tutor el padre ó la madre mientras permanezcan viudos. En su defecto le nombrarán las Córtes; pero no podrán estar reunidos los encargos de Regente y de tutor del Rey sino en el padre ó la madre de este.

TIT. IX.—De los Ministros.

Art. 65. Todo lo que el Rey mandare ó dispusiere en ejercicio de su autoridad, será firmado por el Ministro á quien corresponda, y ningun funcionario público dará cumplimiento á lo que carezca de este requisito.

Art. 66. Los Ministros pueden ser senadores ó diputados, y tomar parte en las discusiones de ambos Cuerpos Colegisladores; pero solo tendrán voto en aquel á que pertenezcan.

TIT. X.—Del poder judicial.

Art. 67. A los Tribunales y Juzgados pertenece exclusivamente la potestad de aplicar las leyes en los juicios civiles y cri-

minales, sin que puedan ejercer otras funciones que las de juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado.

Art. 68. Las leyes determinarán los Tribunales y Juzgados que ha de haber, la organización de cada uno, sus facultades, el modo de ejercerlas y las calidades que han de tener sus individuos.

Art. 69. Los juicios en materias criminales serán públicos en la forma que determinen las leyes.

Art. 70. Ningun magistrado ó juez podrá ser depuesto de su destino sino por sentencia ejecutoriada; ni suspendido sino por auto judicial, ó en virtud de orden del Rey, cuando este, con motivos fundados, le mande juzgar por el Tribunal competente.

Las bases de la ley orgánica de Tribunales determinarán los casos y la forma en que gubernativa y disciplinariamente podrán los magistrados y jueces ser trasladados, jubilados y declarados cesantes.

Art. 71. Los jueces son responsables personalmente de toda infracción de ley que cometan.

Art. 72. La justicia se administra en nombre del Rey.

Art. 73. Las leyes determinarán la época y el modo en que ha de establecerse el juicio por jurados para toda clase de delitos, y cuantas garantías sean eficaces para impedir los atentados contra la seguridad individual de los españoles.

TIT. XI.—*De las Diputaciones provinciales y de los Ayuntamientos.*

Art. 74. En cada provincia habrá una Diputación compuesta del número de individuos que determine la ley, nombrados por los mismos electores que los diputados á Cortes.

Estas corporaciones entenderán en todos los negocios de interés peculiar de las respectivas provincias, y en los municipales que determinen las leyes.

Art. 75. Para el gobierno interior de los pueblos no habrá mas que Ayuntamientos, compuestos de Alcaldes y regidores, nombrados unos y otros directa é inmediatamente por los vecinos que paguen contribución directa para los gastos generales, provinciales ó municipales en la cantidad que, conforme á la escala de población, establezca la ley.

Art. 76. La ley determinará la organización y atribuciones de las Diputaciones provinciales y de los Ayuntamientos.

Art. 77. Los Ayuntamientos formarán las listas electorales para diputados á Cortes, y

las rectificarán las Diputaciones provinciales con intervencion precisa del Gobernador civil, dentro de los términos y con arreglo á los trámites que prescriba la ley.

Los individuos de estas corporaciones y los funcionarios públicos de todas clases que cometan abusos, faltas ó delitos en la formación de las listas, ó en cualquier otro acto electoral, podrán ser acusados por acción popular, y juzgados sin necesidad de autorización del Gobierno.

Las listas electorales serán permanentes.

TIT. XII.—*De las contribuciones.*

Art. 78. El año económico empieza el día 1.º de julio.

Art. 79. Todos los años, dentro de los ocho días siguientes á la constitución del Congreso, en el período de los cuatro meses consecutivos que estarán reunidas las Cortes, al tenor de lo propuesto en el art. 29, presentará el Gobierno el presupuesto general de gastos é ingresos del Estado para el inmediato año económico, como también las cuentas de la recaudación é inversión de los fondos públicos del penúltimo año para su examen y aprobación.

Art. 80. El presupuesto será precisamente discutido y votado dentro del mencionado período de los cuatro meses.

Art. 81. No puede el Gobierno, ni las Diputaciones provinciales, ni los Ayuntamientos, ni autoridad alguna, exigir ni cobrar, ni los pueblos están obligados á pagar ninguna contribución ni arbitrio que no esté aprobado por ley expresa.

Los contribuyentes que apronten el todo ó parte de sus cuotas ilegalmente exigidas; sin ser apremiados ó ejecutados, perderán lo que hubieren entregado, quedando á beneficio del Tesoro público.

Los Ministros, corporaciones y funcionarios públicos que á esto faltaren, y los empleados que obedecieren ó transmitieren sus órdenes ó intervinieren en la exacción de cantidades no aprobadas por las Cortes, perderán sus empleos y todos los derechos á ellos anejos, además de incurrir en las penas que se les impongan como infractores de la Constitución.

Art. 82. También se necesita la autorización de una ley para disponer de las propiedades del Estado y para tomar caudales á préstamo sobre el crédito de la Nación.

Art. 83. La Deuda pública está bajo la salvaguardia especial de la Nación.

TIT. XIII.—*De la fuerza militar nacional.*

Art. 84. Las Cortes fijarán todos los

años, á propuesta del Rey, la fuerza militar de mar y tierra.

Las leyes que determinen esta fuerza se votarán antes que la de presupuestos.

Art. 85. Habrá en cada provincia cuerpos de milicia nacional, cuya organizacion y servicio se arreglará por una ley, El Rey podrá en caso necesario, disponer de esta fuerza dentro de la respectiva provincia, pero no fuera de ella sin otorgamiento de las Córtes.

TIT. XIV.—Del Gobierno de las provincias de Ultramar.

Art. 86. Las provincias de Ultramar serán gobernadas por leyes especiales.

TIT. XV.—De la reforma de la Constitucion.

Art. 87. Las Córtes con el Rey tienen la facultad de declarar que há lugar á revisar la Constitucion, designando al propio tiempo el artículo ó artículos que hayan de modificarse

Art. 88. Hecha esta declaracion, el Rey disolverá inmediatamente el Senado y el Congreso de los diputados, y en la convocatoria de las nuevas Córtes, que se han de reunir dentro de dos meses, se insertará textualmente la resolucion prescrita en el artículo anterior.

Art. 89. Las nuevas Córtes serán constituyentes única y exclusivamente para decretar la reforma.

Art. 90. Para votar estas Córtes cualquiera resolucion relativa á la reforma, se requiere la presencia en cada uno de los Cuerpos colegisladores de las dos terceras partes de los individuos que le componen.

Art. 91. Votada de comun acuerdo en los Cuerpos Colegisladores la reforma, si há lugar, el artículo ó artículos modificados hacen parte de la Constitucion; y las Córtes podrán continuar sus sesiones en calidad de ordinarias.

Art. 92. Son parte integrante de la Constitucion, considerándose para su reforma y todos sus efectos como artículos constitucionales, las bases de las leyes orgánicas siguientes: El Consejo de Estado: La ley electoral: La de relaciones entre los Cuerpos Colegisladores: La de gobierno y administracion provincial y municipal: La de organizacion de los Tribunales: La de imprenta: La de milicia nacional.

ARTÍCULO TRANSITORIO. Si para el dia 1.º de enero de 1858 no estuvieren publicados los Códigos generales, se hará una ley para que tenga efecto lo dispuesto en el art. 5.º de la Constitucion.»

Sin llegar á promulgarse la anterior Constitucion ocurrieron los nuevos sucesos políticos de 1856, que por tan recientes son barto conocidos, y el Gobierno dictó un decreto (15 de setiembre de 1856) restableciendo la Constitucion de 1845, y modificándola con el *Acta adicional* que se inserta. En el preámbulo del decreto decia el Ministerio á S. M. las razones que tenia para no optar por la Constitucion de Cádiz, las que igualmente tenia para rechazar la de 1837 y las que le inclinaban por la de 1845; pero encontrándola tambien defectos ideol para corregirlos el Acta adicional. La vida de esta fué tan escasa que un mes no habia trascurrido cuando se dejó sin efecto como vamos á verlo:

R. D. de 15 setiembre de 1856.

Se restablece la Constit. de 1845 con Acta adicional.

(PRES. DEL C. DE M.) «Tomando en consideracion las razones expuestas por mi Consejo de Ministros, vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Queda restablecida la Constitucion de la Monarquía Española, promulgada en 23 de mayo de 1845.

Art. 2.º Entre tanto que las Córtes, de acuerdo con mi autoridad, resuelven lo conveniente, quedará modificada dicha Constitucion por la siguiente Acta adicional, que se guardará y cumplirá como parte integrante de la misma Constitucion, luego que se publique este mi Real decreto.—Dado en Palacio á 15 de setiembre de 1856.—Está rubricado de la Real mano.—El presidente del Consejo de Ministros, Leopoldo O'Donnell.

Acta adicional

A LA CONSTITUCION DE LA MONARQUIA ESPAÑOLA.

Artículo 1.º La calificacion de los delitos de imprenta corresponde á los jurados, salvas las excepciones que determinen las leyes.

Art. 2.º Promulgada la ley de que trata el art. 8.º de la Constitucion, el territorio á que aquella se aplique se regirá, durante la suspension de lo prescrito en el art. 7.º de la misma Constitucion, por la ley de órden público establecido de antemano. Pero ni en una ni en otra ley se podrá autorizar al Gobierno para extrañar del Reino á los españoles, ni para deportarlos ni desterrarlos fuera de la Península.

Art. 3.º La primera creacion de senadores no podrá exceder de 140. Hecha esta, solo podrá el Rey nombrar senadores cuando estén abiertas las Córtes.

Art. 4.º La ley electoral de diputados á Córtes determinará si estos han de acreditar ó no el pago de contribucion ó la posesion de renta.

Art. 5.º Aun cuando sea de escala el empleo que admita el diputado á Córtes, quedará este sujeto á reeleccion.

Art. 6.º Durante cada año estarán reunidas las Córtes á lo menos cuatro meses, contados desde el dia en que se constituya definitivamente el Congreso.

Art. 7.º Cuando entre los dos Cuerpos Colegisladores no haya conformidad acerca de la ley anual de presupuestos, regirá en el año correspondiente la ley de presupuestos del año anterior.

Art. 8.º Sin prévia autorizacion del Congreso no se podrá dictar sentencia contra los diputados á quienes se refiere el art. 41 de la Constitucion.

Art. 9.º Además de los casos enumerados en el art. 46 de la Constitucion, el Rey necesitará estar autorizado por una ley especial:

1.º Para conceder indultos generales y amnistias.

2.º Para enajenar en todo ó en parte el patrimonio de la Corona.

Art. 10. Tambien necesitará el Rey estar autorizado por una ley especial para contraer matrimonio y para permitir que le contraigan los que sean súbditos suyos y estén llamados por la Constitucion á sucederle en la Corona.

Art. 11. Habrá un Consejo de Estado, al cual oirá el Rey en los casos que determinen las leyes.

Art. 12. La ley orgánica de Tribunales determinará los casos y la forma en que gubernativa y disciplinariamente podrá el Rey trasladar, jubilar y declarar cesantes á los Magistrados y jueces.

Art. 13. El Rey solo podrá nombrar Alcaldes en los pueblos que tengan cuarenta mil almas, y en los demás ejercerá en los nombramientos de los Alcaldes la intervencion que determine la ley.

Art. 14. Las listas electorales para diputados á Córtes serán permanentes. Las calidades de los electores se examinarán en todas las instancias en juicio público y contradictorio.

Art. 15. Dentro de los ocho dias siguientes á la apertura de la Córtes, el Gobierno presentará al Congreso las cuentas del pe-

núltimo año y el presupuesto para el año próximo venidero.

Art. 16. Las Córtes deliberarán sobre la ley á que se refiere el art. 79 de la Constitucion, antes de deliberar sobre la ley de presupuestos.

Dado en Palacio á 15 de setiembre de 1856.—Está rubricado de la Real mano.—El presidente del Consejo de Ministros, Leopoldo O'Donnell. (*CL. t. 69, p. 501.*)

R. D. de 14 de octubre de 1856.

Se deja sin efecto el Acta adicional.

«Artículo 1.º Sin perjuicio de lo que, de acuerdo con las Córtes, se determine sobre las disposiciones contenidas en el Acta adicional á que se refiere mi R. D. de 15 de setiembre último, solo regirá y se observará la Ley Constitucional de la Monarquía, promulgada en union y de acuerdo con las Córtes á la sazón reunidas en 23 de mayo de 1845.

Art. 2.º De este Real decreto y de sus antecedentes se dará oportunamente cuenta á la Córtes.—Dado en Palacio á 14 de octubre de 1856.—Está rubricado de la Real mano.—El Presidente del Consejo de Ministros, el Duque de Valencia. (*CL. t. 70 página 80.*)

Ley de 17 julio de 1857.

Reformando de nuevo la Constitucion de 1845.

(PRES. DEL C. DE M.) Doña Isabel II, por la gracia de Dios etc.: á todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed que las Córtes han decretado y Nos sancionado la siguiente reforma de los arts. 14, 15, 16, 17, 18 y 28 de la Constitucion.

Art. 14. El Senado se compondrá:

De los hijos del Rey y del sucesor inmediato de la Corona, que hayan cumplido veinticinco años.

De los Arzobispos y del Patriarca de las Indias.

De los Presidentes de los Tribunales Supremos de Justicia y de Guerra y Marina.

De los Capitanes generales del ejército y armada.

De los grandes de España por derecho propio, que no sean súbditos de otra potencia, y que acrediten tener la renta de 200.000 reales, procedentes de bienes inmuebles, ó de derechos que gocen de la misma consideracion legal.

De un número limitado de senadores nombrados por el Rey.

Art. 15. Solo podrán ser nombrados senadores los españoles que pertenezcan ó hayan pertenecido á las clases siguientes: Presidentes del Congreso de los diputados: Dipu-

tados admitidos cuatro veces en las Córtes, y que hayan ejercido la diputacion durante ocho años: Ministros de la Corona: Obispos: Grandes de España: Tenientes generales del ejército y armada, despues de dos años de nombramiento: Embajadores, despues de dos años de servicio efectivo, y Ministros plenipotenciarios, despues de cuatro: Vice-presidente del Consejo Real: Ministros y fiscales de los Tribunales Supremos y consejeros reales, despues de dos años de ejercicio: Los comprendidos en las categorías anteriores deberán además disfrutar 30.000 reales de renta, procedente de bienes propios ó de sueldos de los empleos que no puedan perderse sino por causa legalmente probada, ó de jubilacion, retiro ó cesantía: Títulos de Castilla que disfruten 100.000 rs. de renta: Los que paguen con cuatro años de antelacion 20.000 rs. de contribuciones directas y hayan sido además senadores, diputados ó diputados provinciales.

El nombramiento de los senadores se hará por decretos especiales, y en ellos se expresará siempre el título en que, conforme á lo dispuesto en este artículo, se funde el nombramiento.

Las condiciones necesarias para ser nombrado senador podrán variarse por una ley.

Art. 16. Para tomar asiento en el Senado se necesita ser español; tener treinta años cumplidos, no estar procesado criminalmente ni inhabilitado en el ejercicio de sus derechos políticos y no tener sus bienes intervenidos.

Art. 17. La dignidad de senador en los grandes de España que acrediten tener la renta y requisitos expresados en el art. 14, es hereditaria.

En todos los demás casos es vitalicia.

Art. 18. A fin de perpetuar la dignidad de senador en sus familias, los grandes de España podrán constituir vinculaciones sobre sus bienes en la forma y en la cantidad que se determinará por una ley especial.

Art. 28. Cada uno de los Cuerpos Colegisladores examina las calidades de los individuos que le componen; el Congreso decide además sobre la legalidad de las elecciones de los diputados.

Los reglamentos del Senado y del Congreso serán objeto de una ley.

Por tanto, mandamos etc.—Dado en Palacio á 17 de julio de 1857.

Ley de 20 abril de 1864.

Derogando la última reforma de 1857.

(PRES. DEL C. DE M.) «Doña Isabel II, etc.

Artículo único. Queda derogada la ley de reforma de 17 de julio de 1857, restableciéndose en su integridad la Constitucion del Estado.

Disposicion transitoria. Serán admitidos como senadores los grandes de España por derecho propio que no sean súbditos de otra potencia y que á la promulgacion de esta ley poscan la renta de 200.000 reales procedentes de bienes inmuebles ó de derechos que gocen de la misma consideracion, con tal que lo pidan en el término de un año.

En la misma forma y solicitándolo dentro del mismo plazo tendrán derecho á ser admitidos como senadores los grandes que no hayan cumplido la edad de 30 años; pero deberán probar despues de cumplirla y antes de tomar asiento en el Senado que conservan todas las cualidades anteriormente expresadas.—Por tanto: mandamos, etc.—Dado en Palacio á 20 de abril de 1864.—Yo la Reina.—El Presidente del Consejo de Ministros, Alejandro Mon.»

R. D. de 21 noviembre de 1867.

Es sobre nombramiento de Comisarios Reales.—V. CÓRTEES.

El principal carácter de una Constitucion, decian los sábios legisladores de Cádiz, es la estabilidad derivada de los principios en que reposa. La experiencia, es la única antorcha que puede guiar á una Nacion, sin peligro, en el tenebroso espacio que media entre el error y el acierto; la experiencia sola la que puede demostrar la necesidad de una reforma. Mas para calificarla bien, añadian, ¡qué dificultades no se presentan, qué consecuencias tan funestas no se prevén para la Nacion, si se equivocase en su juicio!..»

Sí nuestras parcialidades políticas hubieran tenido esto mas presente, otro bien distinto seria acaso el aspecto del pais. Pero por desgracia.... no se ha llegado todavía á encontrar la fórmula, el medio de calmar la inquietud de los partidos. A la Constitucion de 1812 sucedió la de 1837, á esta bien pronto la de 1845, y la misma de 1845 ha pasado tambien en pocos años por innumerables vicisitudes..... como acabamos de ver. —V. CÓRTEES: LEY: REY ETC.

INDICE

de los artículos contenidos en este tomo 3.º

		<u>Págs.</u>		<u>Págs.</u>
C.				
Capellan.....	3	Carros fúnebres.....	67	
Capellan de coro.....	3	Carruajes públicos.....	67	
Capellan de ejército.....	3	Carta.....	74	
Capellan de honor.....	3	Carta desaforada.....	74	
Capellan de la armada ó de ma- rina.....	3	Carta de dote.....	74	
Capellania.....	3	Carta ejecutoria.....	74	
Capilla.....	24	Carta forera.....	74	
Capilla de los reos.....	24	Carta de gracia.....	74	
Capilla Real.....	24	Carta geográfica.....	74	
Capitacion.....	24	Carta de naturaleza.....	74	
Capital.....	24	Carta orden.....	74	
Capitalizar.....	24	Carta orden de crédito.....	74	
Capitan.....	24	Carta de pago y lasto.....	74	
Capitan de fragata.....	24	Carta plomada.....	74	
Capitan de nave.....	24	Carta puebla.....	74	
Capitan de navío.....	25	Carteros.....	75	
Capitan de puerto.....	25	Cartularios.....	75	
Capitanías generales.....	25	Casacion (Recursos de).....	75	
Capitulaciones matrimoniales.....	25	Casa.....	75	
Capítulo.....	25	Casa de Ayuntamiento.....	75	
Carabineros. (Cuerpo de).....	25	Casa de contratacion de Indias....	75	
Cárcel.....	33	Casa excusada.....	75	
Cárcel de corona.....	33	Casa fuerte.....	75	
Carcelaje.....	33	Casas de beneficencia.....	75	
Cardenal.....	33	Casas de correccion.....	75	
Careo.....	33	Casas de lavado y baños para pobres.....	75	
Carga.....	34	Casas de huéspedes.....	76	
Carga de aposento.....	34	Casas de moneda.....	76	
Carga y descarga.....	34	Casas de préstamo.....	76	
Cargaréme.....	34	Casas de vacas, cabrerías.....	76	
Cargas de justicia.....	34	Casería.....	80	
Cargas piadosas.....	59	Castellania.....	80	
Cargas públicas.....	61	Castellano.....	80	
Cargas vecinales.....	61	Castigos gubernativos.....	80	
Carneraje.....	65	Castillaje ó castillería.....	80	
Carreras.....	66	Castillo.....	80	
Carrera diplomática.....	66	Castradores.....	80	
Carrera-jurídico-político-militar.....	66	Castrar, castracion. (Delito).....	80	
Carrera militar.....	67	Castrense.....	80	
Carreteras.....	67	Catastro.....	80	
Carretería.....	67	Catastro de Cataluña.....	81	
		Catedral.....	81	

	<i>Págs.</i>		<i>Págs.</i>
Cáuçe.....	81	Ciudad.....	437
Caucion.....	82	Ciudadanía.....	438
Caucion juratoria.....	82	Ciudadano.....	438
Caucion. (Pena).....	82	Clases pasivas.....	438
Causa criminal.....	82	Cláusula.....	439
Caza y pesca.....	82	Clérigo. Clero.....	439
Cédula.....	89	Coaccion.....	440
Cédula ante-diem.....	89	Coadjutor.....	440
Cédula Real (ó Real cédula).....	89	Coartada.....	440
Cédula de vecindad.....	90	Cobranza de Contribuciones....	440
Celadores.....	95	Coches.....	440
Celibato.....	95	Codicilo.....	440
Cementerios y cadáveres.....	96	Codificacion.....	441
Cena de ausencia y presencia....	128	Código.....	441
Cencerradas.....	128	Código civil.....	441
Censatario.....	128	Código de Comercio.....	442
Censo.....	128	Código militar.....	443
Censo (contrato).....	128	Código penal.....	443
Censos desamortizados.....	133	Cofradías y otras asociaciones pia-	
Censo de poblacion de Granada..	133	dosas.....	221
Censo estadístico de riqueza.....	134	Cohecho.....	224
Censo estadístico de la poblacion.	134	Colacion de beneficio.....	224
Censor.....	134	Colacion de bienes.....	224
Centímetro.....	134	Colada.....	224
Centralizacion administrativa....	134	Coleccion legislativa.....	224
Centralizacion de fondos.....	134	Colector de expolios y vacantes..	226
Cerca, cercado.....	135	Colegios de abogados.....	226
Cereales.....	135	Colegios de segunda enseñanza..	226
Ceremonial.....	135	Cólera-morbo.....	226
Cerramiento de heredades.....	135	Colmenares.....	226
Certificacion: certificado.....	135	Colonias agricolas.....	226
Certificados de conducta.....	135	Colusion.....	226
Cesante, cesantía.....	135	Collar.....	226
Cesion.....	135	Comadre.....	227
Cetro.....	136	Comanda.....	227
Ciegos.....	136	Comandante.....	227
Ciencias exactas, físicas y natu-		Comandita.....	227
rales.....	136	Comerciante.....	227
Ciencias morales y políticas....	136	Comercio.....	227
Cientos.....	136	Comercio de buhonería.....	228
Cifra.....	136	Comercio de cereales.....	229
Cilla.....	136	Comercio de objetos de comer be-	
Cinco por ciento.....	136	ber y arder.....	229
Circulacion interior de merca-		Comercio de granos.....	229
derías.....	136	Comercio de vinos.....	229
Cirujano. Cirugia.....	136	Comicio (comitium).....	229
Citacion.....	136	Comicios.....	229
Citacion de eviccion.....	137	Comisario.....	229
Citacion para declarar.....	137	Comisario testamentario.....	229
Citacion por edictos.....	137	Comisario de guerra.....	229
Citacion por pleito retardado....	137	Comisario general de Cruzada...	229

	<u>Págs.</u>		<u>Págs.</u>
Comisario de vigilancia.....	229	Conde.....	307
Comisarios reales.....	229	Condecoraciones.....	307
Comision.....	229	Condena.....	308
Comision de apremio.....	229	Condestable.....	308
Comisiones régias de agricultura..	229	Condiciones.....	308
Comision central de liquidacion..	229	Condominio.....	309
Comision de códigos.....	229	Condonacion.....	311
Comisiones investigadoras de me- merias etc.....	229	Conduccion de presos y penados.	311
Comisiones militares.....	229	Conductores de correspondencia.	312
Comiso.....	230	Confesion. Confesor.....	312
Comisorio.....	230	Confesion con cargos.....	312
Comodato.....	230	Confesion judicial.....	312
Compadre.....	230	Confinados cumplidos.....	312
Compañía.....	230	Confinamiento. (Pena).....	312
Compañía mercantil.....	230	Confiscacion.....	312
Compañía de Jesús.....	230	Confiteros y licoristas.....	313
Comparecencia.....	231	Congregaciones religiosas.....	313
Compensacion.....	232	Congreso de los diputados.....	313
Compensaciones administrativas.	232	Cóngrua.....	313
Competencia.....	241	Conjuncion.....	313
Competencia de la Administracion activa.....	241	Conminacion.....	313
Competencia de los Consejos pro- vinciales y del Estado.....	241	Connistion.....	313
Competencia de los Tribunales...	241	Conocimiento.....	313
Competencia. (Cuestiones de)....	241	Conoscencia.....	313
Competencia entre la Administra- cion y los Tribunales.....	242	Consagracion.....	313
Competencias entre jueces ó Tri- bunales.....	243	Consaguíneo. Consanguinidad...	313
Cómplice. Complicidad.....	248	Consejo de Ministros.....	313
Compra-venta.....	248	Consejo de Instruccion pública...	313
Compromiso.....	256	Consejo de sanidad.....	313
Compulsa.....	256	Consejos de guerra.....	313
Comunero.....	256	Consejo de agricultura.....	313
Comunes.....	256	Consejos.....	313
Comunicaciones oficiales.....	256	Consejo de Estado.....	315
Concejo.....	257	Consejos provinciales. Contencio- so-administrativo.....	354
Concejo de la mesta.....	257	Consejo y consentimiento paterno.	407
Conciliacion.....	257	Conservacion de fincas del comun.	407
Concordatos.....	258	Consolidacion de la deuda.....	407
Concordia.....	305	Conspiracion.....	407
Concubina. Concubinato.....	306	Constitucion politica.....	407
Concurso de acreedores.....	306	Constitucion (de 1812).....	408
Concursos públicos.....	307	Constitucion (Estatuto Real)....	458
Concusion.....	307	Constitucion (de 1837).....	461
		Constitucion (de 1845).....	465
		Constitucion (de 1856).....	470
		Constitucion (Acta adicional)....	475
		Constitucion (Reforma).....	476